

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO III (TEORÍA GENERAL DE LA INFORMACIÓN)



TESIS DOCTORAL

**La política informativa tardofranquista.
El modelo de control de la empresa privada de prensa, (1966-1975)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Luis E. Luján Fernández

Directora

Ana I. Segovia

Madrid, 2014

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Información-Departamento de Periodismo III
Planteamientos teóricos, estructurales y éticos de la comunicación de masas
Memoria para la obtención del título de doctor



La política informativa tardofranquista.
El modelo de control de la empresa privada de prensa
(1966-1975)

Luis E. Luján Fernández
Directora: Dra. Dña. Ana I. Segovia
Madrid, noviembre de 2013

A mis abuelos,
en su memoria.



El Roto

No seamos demasiado buenas personas...
utilicemos, como todos, los medios indirectos de control.

Franco al ministro de Información en 1966.
Manuel Fraga, *Memoria breve de una vida pública*

Las alambradas no cesan de darte lecciones (...)
al fin y al cabo, es por tu bien si graban en tu memoria
esa larga letanía de limitaciones, prohibiciones y directrices.
Después aparecen los perros.

Ryszard Kapuściński, *El Imperio*

ÍNDICE

Figuras, Tablas, Cuadros, Mapas y Gráficos	10
Abreviaciones.....	12
Agradecimientos.....	13
1. Introducción.....	15
1.1 Objeto y periodo de estudio: la política informativa aplicada sobre la empresa de prensa privada durante el tardofranquismo.....	17
1.2 La política informativa y la empresa periodística bajo el franquismo: estado del arte.....	22
1.3 Hipótesis y objetivos de la investigación	24
1.4 Marco Teórico y Metodología.....	26
1.5 La memoria de la investigación	36
Bloque I: Bases de la intervención tardofranquista en el sistema de prensa privada	
2. Bases institucionales del sistema de prensa privada tardofranquista	43
2.1 El aparato administrativo de prensa hasta el tardofranquismo	49
2.1.1 El periodo falangista (30 de enero de 1938 a 27 de julio de 1945)	50
2.1.2 La prensa en el Ministerio de Educación: el periodo de los acenepistas (27 de julio de 1945 a 19 de julio de 1951).....	63
2.1.3 La creación del Ministerio de Información y Turismo: el periodo de Gabriel Arias Salgado (19 de julio de 1951 a 10 de julio de 1962).....	69
2.2 El aparato administrativo de prensa durante el tardofranquismo	75
2.2.1 La etapa de Manuel Fraga Iribarne (10 de julio de 1962 a 29 de diciembre de 1969)	80
2.2.2 La etapa de los sucesores de Fraga (29 de diciembre de 1969 a 12 de diciembre de 1975).....	91
3. Bases doctrinales del sistema de prensa privada tardofranquista	101
3.1 La doctrina falangista sobre información y prensa	104
3.1.1 Principios del fascismo español sobre información y prensa.....	105
3.1.2 El Estatuto de prensa de FET de las JONS	107
3.2 La doctrina acenepista sobre información y prensa	111
3.2.1 El pensamiento de Ángel Herrera Oria.....	112
3.2.2 El pensamiento de Fernando Martín-Sánchez Juliá.....	116
3.2.3 La revista Ecclesia y los círculos de estudio de la ACN de P: el Borrador de Proyecto de Estatuto de Prensa.....	124
3.3 La doctrina de Gabriel Arias Salgado	135
3.3.1 La “teología de la información” de Arias Salgado	136
3.3.2 El anteproyecto de Ley de Bases de la Información.....	142
3.4 La doctrina oficial franquista sobre prensa	148
3.4.1 La concepción franquista de la prensa.....	148
3.4.1.1 La prensa como institución nacional al servicio del Estado.....	152
3.4.1.2 La prensa como institución social al servicio de la opinión pública.....	154
3.4.2 Noción del papel del Estado en el sistema de prensa.....	155
3.4.2.1 El control exclusivo y absoluto del Estado	156
3.4.2.2 El Estado como garante del servicio al público.....	166
4. Estructura del sistema de prensa privada tardofranquista	164
4.1 Evolución del número de diarios y de la difusión	166

4.2 La concentración del sistema de prensa	171
4.2.1 La concentración provincial.....	172
4.2.2 La concentración de la propiedad: los empresarios de prensa del tardofranquismo.....	176
4.2.3 La concentración empresarial	182
4.2.3.1 La regulación de la concentración empresarial: el marco legal	183
4.2.3.1.1 Límites legales a la diversificación empresarial.....	187
4.2.3.1.2 Trabas legales a la integración horizontal	189
4.2.3.2 La concentración empresarial durante el tardofranquismo	191
4.3 Las conexiones del sistema de prensa.....	195
4.3.1 Las conexiones con el poder político.....	197
4.3.2 Las conexiones con el poder económico.....	205
4.3.2.1 Conexiones con el poder financiero	207
4.3.2.2 Conexiones con otros sectores de la economía española.....	217

Bloque II: El modelo tardofranquista de control de la empresa periodística privada

5. La tamización del sistema de prensa privada:	
el Registro de Empresas Periodísticas	233
5.1 Fundamentos doctrinales.....	247
5.2 La autorización administrativa previa durante el tardofranquismo.....	252
5.2.1 Antecedentes de la autorización administrativa previa en el tardofranquismo (1962-1966)	256
5.2.2 La autorización administrativa para la edición de nuevos diarios (1966-1969).....	264
5.2.3 La autorización administrativa para la compra de cabeceras ya existentes (1970-1975).....	276
5.3 La inadmisión en el sistema de prensa diaria.....	280
5.3.1 La denegación de la inscripción registral	282
5.3.2 La demora de la inscripción registral.....	290
5.4 La expulsión del sistema de prensa: la cancelación registral	303
6. La regulación de la empresa periodística privada.....	323
6.1 Fundamentos doctrinales.....	326
6.2 La regulación de la propiedad	331
6.2.1 El capital extranjero en la prensa	332
6.2.2 Ausencia de límites a la concentración de la propiedad.....	343
6.2.3 Identificación de la propiedad: mecanismos legales.....	345
6.2.3.1. La inspección administrativa	346
6.2.3.2 Publicidad y nominatividad de las acciones.....	353
6.3. La regulación de los órganos de gobierno corporativo	366
6.3.1 El principio de continuidad ideológica: la Junta de Fundadores	367
6.3.2 La identificación del gobierno corporativo: mecanismos legales.....	371
6.4 El control extralegal de la propiedad y gobierno de la empresa periodística privada.....	379
6.4.1 La vigilancia administrativa de la empresa periodística privada	380
6.4.1.1 La vigilancia de la empresa por motivos ideológicos.....	387
6.4.1.2 La vigilancia de operaciones de compraventa de acciones.....	396
6.4.1.2.1 Operaciones de cambio de propiedad y gobierno corporativo vigiladas por el MIT	399
6.4.1.2.2 Guerras internas entre accionistas y directivos vigiladas por el MIT	404
6.4.2 La intervención administrativa en la propiedad y gobierno de empresas periodísticas	413

6.4.2.1 Operaciones impulsadas por la Administración.....	415
6.4.2.2 Operaciones dificultadas por la Administración	426
7. La cofinanciación y sanción de la empresa periodística privada	443
7.1 La cofinanciación estatal de la empresa periodística.....	444
7.1.1 La cofinanciación indirecta	446
7.1.1.1 Las ayudas al consumo de papel prensa	447
7.1.1.1.1 Las ayudas al consumo de papel hasta 1962: la fijación de precios políticos	449
7.1.1.1.2 Las ayudas al consumo de papel durante el tardofranquismo.....	452
7.1.1.2 Reducción de tarifas telefónicas, telegráficas y postales	459
7.1.1.3 El precio político de los despachos de la Agencia EFE	462
7.1.2 La cofinanciación directa	463
7.1.2.1 Los créditos oficiales	468
7.1.2.2 Publicidad estatal, “publicidad redaccional” y fondos de reptiles	467
7.2 La regulación publicitaria y salarial	474
7.2.1 La Publicidad comercial.....	475
7.2.2 La regulación salarial.....	479
7.2.2.1 La regulación salarial hasta los años sesenta	481
7.2.2.2 La regulación salarial durante el tardofranquismo.....	483
7.3 Las sanciones administrativas.....	485
7.3.1 Supuestos de infracción administrativa.....	487
7.3.2 Las multas.....	499
7.3.3 Las suspensiones temporales de publicaciones	506
8. Conclusiones	513
9. Bibliografía	525
10. Entrevistas.....	547
11. Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975)	549
12. Anexos	551
ANEXO I: Ley de Prensa de 1938	553
ANEXO II: Estatuto de Prensa de FET de las JONS	563
ANEXO III: Borrador de Proyecto de Estatuto de Prensa de la ACN de P.....	572
ANEXO IV: Ley 14/66, de Prensa e Imprenta.....	577
ANEXO V: Infome de la DGP de 10 de enero de 1964	584
ANEXO VI: Circular 53707 de 12 de mayo de 1967.....	587
ANEXO VII: Notas a la Ley de Prensa e Imprenta	591
ANEXO VIII: Informes sobre Prensa Catalana, S.A.....	608
ANEXO IX: Informes sobre PRISA	630
ANEXO X: Informes sobre Diario Nivel	637
ANEXO XI: Intervención de Pío Cabanillas en Comisión de Información de Cortes sobre capital extranjero en prensa	647
ANEXO XII: Intervención de Pío Cabanillas en Comisión de Información de Cortes sobre artículo 20 LPI	650
ANEXO XIII: Documentos Publicidad redaccional.....	653
ANEXO XIV: Documentos Fondos de reptiles	664
13. Executive Summary	671

Figuras, Tablas, Cuadros, Mapas y Gráficos

FIGURAS

FIGURA 1: Organigrama simplificado de la DGP en 1966	82
FIGURA 2: Estructura orgánica simplificada de la DGP en 1968.....	83
FIGURA 3: Estructura simplificada de la DGP en 1974.....	92
FIGURA 4: Empresas periodísticas ligadas al Banco Atlántico en 1967	361
FIGURA 5: Empresas periodísticas ligadas al Banco Atlántico en 1975.....	363
FIGURA 6: Organigrama del aparato de vigilancia y control de la empresa periodística en 1966	385
FIGURA 7: Organigrama del aparato de vigilancia y control de la empresa periodística en 1968	385
FIGURA 8: Organigrama del aparato de vigilancia y control de la empresa periodística en 1974	386

TABLAS

TABLA 1: Empresas de prensa, diarios privados de información general y difusión en 1967 y 1975	168
TABLA 2: Diarios de información general por provincias	173
TABLA 3: Vinculaciones de las empresas periodísticas por sectores de actividad económica en 1967	219
TABLA 4: Vinculaciones de las empresas periodísticas por sectores de actividad en 1975	221
TABLA 5: Formas jurídicas de las empresas privadas propietarias de los diarios españoles de información general	323
TABLA 6: Ayudas directas e indirectas a la prensa en 1965 y 1973 (en ptas.)	445
TABLA 7: Costes de explotación de la prensa española en 1975	448
TABLA 8: Cupos mensuales de papel y precios entre 1951 y 1957	451
TABLA 9: Cupos de papel y precios entre 1960 y 1963	451
TABLA 10: Papel primado y compensaciones (1964-1968)	453
TABLA 11: Compensaciones por consumo de papel (1969-1971)	453
TABLA 12: Criterio descendente de compensación del consumo de papel prensa	454
TABLA 13: Precio del papel prensa	455
TABLA 14: Precio de venta de los periódicos españoles y jornal mínimo	456
TABLA 15: Consumo de papel prensa en España (1961-1975).....	457
TABLA 16: Evolución de las tarifas telegráficas durante el franquismo	460
TABLA 17: Tarifas postales para prensa durante el franquismo	461
TABLA 18: Inversión publicitaria en medios de comunicación en España (en millones de pesetas)	476
TABLA 19: Salario mínimo de periodistas (ptas./mes).....	483
TABLA 20: Incrementos salariales en zona especial en relación con precios y coste de la vida	484
TABLA 21: Expedientes incoados y sancionados entre 1966 y 1975	496
TABLA 22: Expedientes incoados y sancionados por cada ministro de Información y Turismo	497
TABLA 23: Expedientes incoados y sancionados a editoras de diarios entre 1967 y 1975	497
TABLA 24: Multas a editoras de diarios en aplicación del artículo 2 de la LPI entre 1967 y 1975.....	502

CUADROS

CUADRO 1: Diarios de información general creados y cerrados durante el tardofranquismo	170
CUADRO 2: Propietarios de un 50% o más de empresas editoras de diarios en 1967.....	177
CUADRO 3: Propietarios de un 50% o más de empresas editoras de diarios en 1975.....	178
CUADRO 4: Empresas y empresarios con más de un diario de información general en 1967 y 1975	192
CUADRO 5: Consejeros de empresas periodísticas en 1967 que ejercieron como procuradores durante la dictadura	197
CUADRO 6: Consejeros de empresas periodísticas en 1975 que ejercieron como procuradores durante la dictadura	200
CUADRO 7: Empresas de prensa vinculadas al sector financiero a través consejeros en 1967 y 1975	210
CUADRO 8: Actividades con más conexiones con la prensa diaria al inicio y final del periodo.....	223
CUADRO 9: Editoras con más conexiones con la economía nacional al inicio y final del periodo a través de sus consejeros	227
CUADRO 10: Sanciones previstas por la LPI.....	500
CUADRO 11: Publicaciones suspendidas temporalmente en aplicación del artículo segundo de la LPI (1967-1975)	508

MAPAS

MAPA 1: Concentración provincial de los diarios privados durante el tardofranquismo	175
---	-----

GRÁFICOS

GRAFICO 1: Entidades financieras vinculadas a empresas de prensa en 1967 y 1975	207
GRAFICO 2: Conexiones de las empresas de prensa con sectores de la economía española en 1967 y 1975.....	223
GRÁFICO 3: Conexiones de las empresas periodísticas privadas con otras empresas en 1967 y 1975	226
GRAFICO 4: Montos pagados por las empresas de prensa diaria por infracciones del art. 2 entre 1966 y 1975.....	504

Abreviaciones

SIGLAS

ACD: Archivo del Congreso de los Diputados	EOP: Escuela Oficial de Periodismo
AC de AC de P: Archivo Central de la Asociación Católica de Propagandistas	EPECSA: Empresa Periodística Editorial Cartagena, S.A.
ACN de P: Asociación Católica Nacional de Propagandistas	FACES: Fomento de Actividades Culturales, S.A.
AFISAE: Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España	FET: Falange Española Tradicionalista
AGA: Archivo General de la Administración	FNAPE: Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España
AH EFE: Archivo Histórico de la Agencia EFE	JONS: Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
ALBI: Anteproyecto de Ley de Bases de la Información	LPI: Ley 14/66, de 18 de marzo de 1966, de Prensa e Imprenta.
BANCdP: Boletín de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas	MIT: Ministerio de Información y Turismo
BOE: Boletín Oficial del Estado	OJD: Oficina de Justificación de la Difusión
CA: Consejo de Administración	(P): Presidente
(CD): Consejero Delegado	PESA: Prensa y Ediciones, S.A.
CINISA: Corporación de Inversiones Industriales, S.A.	PRISA: Promotora de Informaciones, S.A.
CNP: Consejo Nacional de Prensa	PROGINSA: Promociones Gráficas Industriales, S.A.
DGP: Dirección General de Prensa	PUSA: Prensa Unida, S.A.
DGRJP: Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa	REP: Registro de Empresas Periodísticas
DICODI: Directorio de Consejeros y Directores	ROP: Registro Oficial de Periodistas
DYRSA: Diarios y Revistas, S.A.	(S): Secretario de Consejo de Administración
ECASA: Económico Cultural Alavesa, S.A.	SARPE: Sociedad Anónima de Periódicos y Revistas, S.A.
EDICA: La Editorial Católica, S.A.	STS: Sentencia del Tribunal Supremo
EFEDATA: Base de Datos de la Agencia EFE	TISA: Talleres de Imprenta, S.A.
	(VP): Vicepresidente

ABREVIATURAS

art.: artículo	exp.: expediente
c.: caja	leg.: legajo
cons.: considerando	r.c.j.: repertorio cronológico de jurisprudencia
c.t.: cuartilla taquigráfica	
sig.: signatura	
s.: sentencia	

Agradecimientos

La ayuda de no pocas personas ha sido fundamental para la realización de esta tesis, de cuyos posibles errores, huelga decirlo, sólo yo soy responsable.

Ante todo, quiero agradecer el trabajo de dirección realizado por Ana I. Segovia, a quien estaré siempre agradecido por su confianza y generosidad al introducirme en la investigación y docencia universitaria.

Varios profesores se tomaron la molestia de evaluar la propuesta original y de ofrecerme útiles sugerencias. Así lo hicieron Álvaro Soto Carmona, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid; Pilar Toboso, docente también de la UAM y profesora mía en la asignatura sobre franquismo de la carrera de Historia; y Dimitrina Semova, compañera del Departamento de Periodismo III de la Universidad Complutense de Madrid, quien no ha dejado de proponerme nuevos autores y de descubrirme sugerentes lecturas.

Otros profesores tuvieron la amabilidad y paciencia de examinar y corregir la tesina *Estado y sistema de prensa. El modelo franquista de constitución y control (1936-1975)*, en la que se adivinaba ya el germen de lo que ha acabado siendo esta tesis. Porfirio Barroso y Félix del Valle, ambos de la UCM, participaron en el tribunal de evaluación ante el que fue defendida en 2010. También accedió a leerla Isabel Fernández, de la Universidad Autónoma de Barcelona, a cuyos consejos y orientación debo en parte la forma final que ha acabado adoptando el trabajo.

Por supuesto, el proyecto habría sido irrealizable sin el acceso a las fuentes que me ha facilitado el personal del Archivo General de la Administración (especialmente el jefe de la sala de investigadores, Daniel Gozalbo); del Archivo del Congreso de los Diputados; y del Archivo Central de la Asociación Católica de Propagandistas (en especial su archivera, Irene Pérez).

Concha Tejedor, directora de documentación de la Agencia EFE, me permitió consultar la base central de datos EFEData y me facilitó el acceso al Archivo Histórico de la Agencia que custodia la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Allí, Tatiana Hiniesto, Javier Espuny y Jorge Batista escanearon con una minuciosidad y diligencia encomiables la infinidad de documentos relativos a los cientos de dirigentes franquistas, empresarios y directivos que pueblan estas páginas.

No quiero tampoco dejar de mencionar al personal de las Bibliotecas de Filosofía y Letras y de Derecho de la UAM; de la Biblioteca Nacional; y, sobre todo, de la

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, que con tanta paciencia han atendido en estos años mis peticiones.

Nunca podré agradecer suficientemente el esfuerzo y las horas de trabajo dedicadas al *Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975)* por Fabio Luciano; Daniele Raso, Marco Giannino, Aurelio D'auria y Massimiliano Marchetti; todos ellos coordinados por David Guiducci. Suyo es el desarrollo gráfico de la web en la que se aloja el apéndice que acompaña y completa el cuerpo de la memoria; en ella puede consultarse gran parte de la documentación que ha fundamentado la tesis, y que ha ahorrado la impresión de cientos de páginas anejas.

Naturalmente, debo en buena medida los resultados de la investigación a los dirigentes, empresarios y periodistas que accedieron a ser entrevistados entre el verano y el invierno de 2012. El encuentro con maestros del periodismo como Darío Valcárcel, Manuel Martín Ferrand o Jesús De la Serna (los dos últimos desgraciadamente fallecidos antes de poder recibir una copia del trabajo finalizado), entre otros, me ha brindado algunos de los momentos más emocionantes de estos años y ha compensado con creces el esfuerzo y las zozobras.

Por fin, no menos decisivo ha sido el apoyo de mi familia y amigos. De mi madre, padre y hermanos. Y de Cristina, por supuesto; quien más me ha sufrido y alentado. Todos se han interesado y preocupado por este trabajo. Todos me han animado, soportado y acompañado en el parto. A todos muchas gracias.

En Roma, a 20 de noviembre de 2013

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU)

1. Introducción

El poder ha tratado históricamente de garantizarse un papel central en la constitución y control de sistemas mediáticos capaces de legitimar las bases de su dominación. No parece, de hecho, sino esa pertinaz pretensión histórica la que, cristalizada en unas políticas orientadas a la configuración efectiva de sistemas de medios afines, permite entender la asimilación entre dichos sistemas y los regímenes políticos y económicos en que se inscriben.

La mayor parte de los estudios comparativos sobre sistemas mediáticos se ha sustentado sobre el siguiente postulado: los medios de comunicación tienden indefectiblemente a adoptar unos rasgos similares a los del sistema político y económico en que operan. A mediados del siglo pasado, Siebert, Peterson y Schramm fundaron su influyente y pionera *Four Theories of the Press* en la tesis de que “la prensa siempre toma la forma y coloración de las estructuras sociales y políticas dentro de las cuales actúa. Especialmente, refleja el sistema de control social por cuyo intermedio se ajustan las relaciones de individuos e instituciones” (1967: 9).

Del mismo modo, bien pudiera ser el éxito alcanzado en la aplicación de políticas orientadas al control mediático el que haya llevado a frentes académicos tan distantes como el marxista y el funcionalista a identificar la conservación y reproducción del orden social como la función histórica de los medios de comunicación. Desde esta perspectiva, los medios serían instituciones o aparatos al servicio de los poderes político y económico que actuarían con el fin de “vender” el sistema (Murdock, 2006: 15)¹. En su libro de ensayos *Historia y comunicación social*, Manuel Vázquez Montalbán ha dejado escrito:

Si hacemos un examen de cómo ha evolucionado esta relación desde el monopolio de la capacidad de comunicar de la sociedad esclavista, al sistema libre de mercado en una sociedad democrática, descubrimos que en el fondo, desde la brutalidad del soberano o del déspota decidiendo quién podía y quién no podía comunicar, hasta hoy, cuando esa decisión se ejerce por mecanismos más sofisticados, sigue habiendo

¹ Otros autores consideran por el contrario a los medios de comunicación como agentes potencialmente subversivos, cuya simple aparición genera alteraciones en el orden social. Para Dennis McQuail, por ejemplo, dada su capacidad para proporcionar nuevas perspectivas sobre el orden existente, “todos los medios de comunicación pública tienen una faceta radical al ser potencialmente subversivos para los sistemas imperantes de control social” (McQuail, 1999: 60). De la misma opinión es James Curran, para quien la aparición de nuevos canales de comunicación afecta necesariamente a la estructura de poder aumentando las tensiones dentro de dicha estructura (Curran, 2005: 88). A nuestro entender, la consideración de los medios de comunicación de masas como instituciones orientadas *per se* a la reproducción o subversión del orden resulta cuanto menos discutible. Máxime si admitimos con Montalbán (2000) que los sistemas de medios son consecuencia de los modos de producción y organización social de su tiempo y constatamos el doble papel jugado por los medios en la Historia, en unos casos como agentes de conservación y en otros de cambio social.

una gran capacidad de parte del poder para controlar quién se apropia de los códigos y qué códigos transmite [...].

La reproducción de las ideas dominantes y de la filosofía del mundo permite justificar su orden. Los medios de comunicación no sólo han sido consecuencia de modos de producción y organización social sino que han tendido a perpetuarlos (2000: 237).

Si bien la necesidad de configurar y controlar sistemas de medios capaces de neutralizar las aspiraciones de cambio se extiende a todos los regímenes políticos –incluidos los fundados en el principio de libertad de prensa (McChesney, 2007)–, resulta especialmente acuciante para aquellos que, como las dictaduras contemporáneas, arrastran graves problemas de legitimidad, tanto de origen como de ejercicio. Tal y como sostiene Elisa Chuliá,

La política de medios de comunicación de una dictadura es, en primer lugar, una política de control social y constituye, por tanto, una dimensión crítica del funcionamiento de los regímenes no democráticos. Para las dictaduras del siglo XX, la prensa escrita, la radio y la televisión han representado objetos clave de intervención política, a través de los cuales se trataba de manipular los conocimientos de la sociedad sobre los asuntos públicos y minimizar su capacidad de protesta (2001: 221).

Por supuesto, la dictadura franquista no fue una excepción. Desde su instauración misma, el régimen² encabezado por el general Franco asumió el control de los medios de comunicación y de la prensa en particular como una de las “piedras angulares” del Estado (Payne en Chuliá, *op. cit.*: 13). Ya mediante mecanismos preventivos como la censura, el monopolio formativo y las consignas, ya mediante una política más sofisticada basada en la coacción y la represión, la dictadura nunca renunció, en sus casi cuarenta años de vida, al control de una prensa a la que juzgaba responsable del

² En adelante, nos referiremos indistintamente al franquismo como dictadura o régimen. Desde la historiografía, Javier Tusell se ha aventurado a ofrecer una definición de “régimen” amplia. Para Tusell, “régimen” es el “conjunto de instituciones, pero también de protagonistas históricos y es el juego de las primeras teniendo en cuenta como actores a los segundos el que lo define” (1996: 19). Desde una perspectiva más jurídica y formal, y quizás también más precisa, “régimen” es el “conjunto sistemático de las disposiciones y relaciones establecidas en cada Estado con respecto a su ordenación constitucional, sus acciones fundamentales y generales de gobierno y las acciones políticas instrumentales o accesorias que tienen lugar en su seno” (Zafra. Cit en De Miguel, 1978: 12). En ambos casos, pues, la configuración como “régimen” resulta independiente de la naturaleza que éste adquiera; de modo que, para nuestro objeto de estudio, ha de entenderse “régimen” en tanto que armazón o estructura formal del sistema en el que se inscriben sus relaciones y actuaciones, mientras que “franquista” alude a la naturaleza que substancia dicho armazón.

“envenenamiento moral de la nación”³ que habría motivado el golpe de estado fracasado del 18 de julio de 1936 y desembocado, al cabo, en la Guerra Civil.

1.1 Objeto y periodo de estudio: la política informativa aplicada sobre la empresa de prensa privada durante el tardofranquismo

La convicción de que el modelo de control informativo podía arrojar importantes claves sobre la naturaleza y funcionamiento del régimen franquista ha animado numerosos estudios que, en las últimas décadas, han profundizado en mecanismos como la censura, las consignas o el control de la profesión periodística. Todo ello ha generado una abundante bibliografía sobre el modelo de control de medios, en la que, sin embargo, cabe constatar un cierto vacío en torno a la política aplicada sobre las empresas periodísticas privadas. Con el fin de completar la literatura relativa a este campo, presentamos en las páginas que siguen los resultados de la investigación –desarrollada en los últimos cuatro años con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación– sobre *la política específica diseñada y aplicada por el régimen franquista entre 1966 y 1975 sobre la empresa periodística privada editora de diarios de información general*. La tesis nace de la convicción de que el estudio de los mecanismos y actuaciones ejecutados sobre los propietarios y directivos de la prensa diaria española, así como sobre la vida económica y organizativa de sus empresas, resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de la política informativa franquista, objeto material en el que se inscribe nuestro objeto formal de estudio.

Por más que resulte incuestionable su carácter dictatorial, la calificación del franquismo ha suscitado en las últimas décadas un fecundo debate académico. Sin ánimo de profundizar en la cuestión, un repaso introductorio a las principales posturas mantenidas por historiadores, politólogos y sociólogos da buena cuenta de las dificultades de definición que presenta el Régimen. Unas dificultades causadas en no poca medida por tres de sus rasgos más notables: su longevidad y consiguiente evolución, su peculiaridad en el contexto de los regímenes occidentales de su tiempo, y su extraordinaria capacidad de adaptación a las circunstancias.

La larga duración de la dictadura de Franco, sus particularísimas características; los desarrollos y decrecimientos de sus formas ultraautoritarias [*sic*]; las influencias que durante el primer periodo recibió del fascismo italiano y del nazismo; la relativa ocultación ulterior de tales aspectos y el injerto en el imperialismo americano; el

³ Decreto de la Junta Técnica del Estado de 14 de enero de 1937 por el que se crea la Delegación del Estado de Prensa y Propaganda. En Archivo General de la Administración, sig. (3) 49.21 c. 65136.

nacimiento de tendencias tecnocráticas [...]; sus marchas hacia delante (desde 1966) ‘liberalizantes’; los frenazos (constantes) de los encarcelamientos y de las ejecuciones; las tentativas —aun en los últimos tiempos— de un sector de antiguos franquistas de hacer marcha atrás hacia la situación política de los años 1940; todo ello es un conjunto de fenómenos que hacen de España un tejido de hechos económicos, políticos e ideológicos muy problemáticos [...]” (Vilar, 1977: 9).

Si no todas, buena parte de las formulaciones que se han elaborado a propósito de la naturaleza del franquismo han venido a dar respuesta —ya para confirmarla, ya para refutarla— a la tesis original enunciada por Juan José Linz. Desde que en los años sesenta Linz concediera al Régimen el calificativo de “autoritario”⁴, el debate no ha cesado e incluso ha generado discusiones subsidiarias sobre cuestiones no menores, como la existencia o ausencia de una ideología propiamente franquista o la restricción de la manifestación y participación política en el seno del Régimen.

Aunque desde diferentes enfoques, en los años noventa historiadores de la talla de Juan Pablo Fusi (1985), Stanley G. Payne (1987) y Javier Tusell (1996), habían asumido a grandes rasgos la definición propuesta por Linz. La aceptación de la nueva fórmula llegaría, en cualquier caso, tras la incorporación de dos matices (Pérez Ledesma, 1994: 179-181): la división de los casi cuarenta años de dictadura en periodos coyunturales que permitieran observar su evolución y solventar el problema de aplicar definiciones estáticas a tiempos tan amplios y a regímenes tan mutables; y la incorporación de un ingrediente más a la explicación de su naturaleza: los rasgos personales del dictador que,

⁴ Para Juan José Linz, los regímenes autoritarios son “Sistemas políticos con un pluralismo político limitado; sin una ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad peculiar); carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en algunos puntos de su evolución), y en los que un líder (o si acaso un grupo reducido) ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles” (Linz, 1974: 1474). A todo ello habría que añadir tres rasgos complementarios: (a) la existencia de un partido único que, sin embargo, lejos de monopolizar el poder, se convierte en un actor más del pluralismo político limitado; esto es, en un canal más en el que intereses divergentes tratan de encontrar un acceso al poder, así como en un espacio de reclutamiento de élites dirigentes (Linz, *op. cit.*: 1494); (b) un control social atenuado (en comparación con los regímenes totalitarios) por el pluralismo político limitado. Considera Linz en este sentido que, si bien el terror policial puede ser similar al practicado por los totalitarismos en su acción contra grupos disidentes del exterior, en el interior es más permisivo con las pequeñas disidencias internas e integradas en el sistema. En lo que atañe a nuestro objeto de estudio, afirma Linz que los parecidos entre regímenes autoritarios y totalitarios, pueden ser, quizá, mayores en lo que se refiere al control de los medios de comunicación de masas, sobre todo en países en proceso de modernización, en donde las exigencias tecnológicas y de capital para el montaje de los mismos hacen que dicho control sea más fácil (*op. cit.*: 1497). A pesar de lo cual, el pluralismo limitado no dejaría de ofrecer ciertos resquicios de libertad, como, en opinión de Linz, probaría el régimen de semilibertad que disfrutó la prensa de la Iglesia católica bajo el franquismo (Linz, *ibidem*). Por último, (c) la posición privilegiada de los militares vendría explicada por su labor de mantenimiento del orden interno, función crucial dado el escaso consenso popular con que los regímenes autoritarios habrían contado para su instauración (Linz, *op. cit.*: 1499).

en último término, habrían sido determinantes en la asunción por parte del Régimen de su substancia autoritaria.

Más allá de estas precisiones, los historiadores parecieron hallar en la nueva conceptualización una oportunidad de refinar la identificación popular del franquismo con el fascismo. Una identificación que había sido sostenida hasta entonces por gran parte de la historiografía española e italiana⁵ y que argumentaba la esencia fascista del franquismo de primera hora (Fontana, 1986) y su defensa de los intereses de la clase hegemónica (Tuñón de Lara, 1977; Vilar, 1977; Tezanos, 1978)⁶.

Por fin, desde una crítica a los términos en que se había venido desarrollando el debate, un último grupo de autores ha tratado de plantear, con éxito desigual, formulaciones alternativas; desde el “fascismo frailuno” de Oltra & De Miguel (1978) hasta la “dictadura reaccionaria” de Francisco Sevillano (2003), pasando por el “despotismo moderno reaccionario” de Sevilla, Pérez & Giner (1978); la “dictadura fascistizada” de Ismael Saz (1993, 2008); la dictadura “militar y eclesiástica de tipo tradicional”, que Pérez Ledesma tomó de Manuel Azaña (1994); y la “dictadura cesarista” de Santos Juliá (2003).

Algo menos problemática resulta la definición de los otros dos conceptos centrales del objeto de estudio. Entedemos la política específica aplicada sobre la empresa de prensa privada como un pilar insoslayable de la política informativa o de comunicación, que Enrique Bustamante define como las

acciones y omisiones de las instancias estatales de todo tipo que, de acuerdo con las concepciones y legitimaciones de cada sociedad y cada tiempo histórico determinan u orientan los destinos de la creación, la producción, la difusión y el consumo de los productos culturales y comunicativos (Bustamante, 2003: 34).

Isabel Fernández (1998:16)⁷ acota aún más las modalidades de acción estatal al identificar la política informativa con el conjunto de *iniciativas legislativas y de actos administrativos* aplicados por el Estado o cualquier otra entidad en un periodo determinado. Adaptada a nuestro objeto de estudio, la política informativa quedaría

⁵ Además de la historiografía española, también parte de la escuela historiográfica italiana ha defendido la naturaleza fascista o próxima al fascismo del franquismo. Así lo han entendido, por ejemplo, historiadores como Nicola Tranfaglia, Luciano Casali o Enzo Colloti; muchos de los cuales no han hecho, en cualquier caso, sino recoger el testigo de los argumentos formulados por el clásico investigador sobre el fascismo, Gino Germani. Un breve repaso a sus teorías, se encuentra en Sevillano, 2003.

⁶ Cf con la crítica que dirige Pérez Ledesma (1994) a esta postura.

⁷ En su tesis doctoral, en la que investiga sobre la política informativa de la Unión de Centro Democrático (UCD) durante la Transición, Isabel Fernández define “política informativa” como el “conjunto de iniciativas legislativas y de actos administrativos (reparto de subvenciones a la prensa, adjudicación de emisoras radiofónicas, etc.) emprendidas por la UCD con respecto a la prensa, radio, televisión, agencias de noticias y libertades públicas en general” (Fernández, *ibídem*).

entonces definida por el conjunto de iniciativas legislativas y de actos administrativos ejecutados por el Estado franquista entre 1966 y 1975 sobre la empresa de prensa privada editora de diarios de información general.

Una definición clásica de “empresa periodística” acuñada durante el tardofranquismo entendía por tal el “conjunto organizado de trabajo redaccional y técnico, medios económicos y materiales y relaciones comerciales, para la difusión de ideas e información a través de la edición de publicaciones periódicas” (Nieto, 1967: 41; 1973: 14)⁸. Algo más escueta había sido la Ley de Prensa en 1966⁹, al identificar aquellas con las empresas que tuvieran por objeto la edición de impresos periódicos (art. 16).

De los alrededor de tres millares de empresas periodísticas registradas en España a principios de los setenta¹⁰, nuestra investigación ha centrado el foco en aquellas de titularidad privada que editaran diarios de información general; las únicas fuentes no controladas directamente por organismos estatales de que disponían los españoles para informarse diariamente sobre la vida política y los asuntos públicos del país¹¹. Esta restricción del objeto, unida a la circunscripción del periodo de estudio, nos ha permitido reducir el corpus empírico a un volumen extenso pero abarcable de en torno a siete decenas de empresas, editoras de un número similar de cabeceras diarias.

La imposibilidad, en efecto, de abarcar con la profundidad adecuada los casi cuarenta años de dictadura nos ha llevado a acotar el periodo de estudio al tardofranquismo, que consideramos iniciado en 1966 con la aprobación de la Ley de

⁸ De acuerdo con esta proposición, el objeto social de la empresa sería, no el de editar o publicar periódicos, sino el de difundir ideas o informaciones; dado que, de otra forma, no estaríamos, al decir de Nieto, sino cosificando el objeto de la empresa. La publicación, en tanto producto de la actividad empresarial, sería sólo el medio a través del cual la empresa alcanza su objetivo: la comunicación. De trasladar esto a otro tipo de empresas, la afirmación de Nieto equivaldría a identificar, por ejemplo, el objeto social de las empresas automovilísticas, no con la fabricación de coches, sino con el transporte. De forma similar parece opinar Pedro Crespo de Lara, quien ha precisado y matizado la definición de Nieto señalando que “[...] la prensa, entendida como conjunto de publicaciones periódicas, tiene como fin, efectivamente, la comunicación o difusión de información o ideas, mientras que la empresa periodística tiene por objeto y finalidad la producción de periódicos, es decir, crear el medio a través del cual y por el cual cumple la prensa su finalidad” (Crespo de Lara, 1995: 22).

⁹ De aquí en adelante nos referiremos a la Ley 14/66, de Prensa e Imprenta, indistintamente como Ley de Prensa, Ley Fraga y LPI.

¹⁰ Según las estimaciones del Ministerio de Información y Turismo, en 1971 existían en España 3.030 empresas inscritas en el Registro de Empresas Periodísticas, que editaban un total de 4.426 publicaciones de diversa periodicidad y temática. De esas empresas periodísticas, casi la mitad, el 49’90%, eran de titularidad privada (porcentaje al que habría que añadir las pertenecientes a la Iglesia y sus brazos seculares [15’67% del total] y las empresas propiedad de corporaciones [el 21’05%], en su mayor parte *Hojas Oficiales de los Lunes* editadas por las Asociaciones de la Prensa de cada localidad). El resto de empresas registradas (el 13’36%) pertenecían al Estado, entre Administraciones central y local, sindicatos y Movimiento (Cit. en Nieto, 1973: 64).

¹¹ Pues, como se sabe, tanto las informaciones difundidas por radio como, a partir de los años cincuenta, por la televisión, fueron durante toda la dictadura elaboradas por los entes estatales bajo estricto control gubernamental.

Prensa y finalizado en el invierno de 1975, tras la muerte de Franco¹². Además de ofrecer las ventajas prácticas de contar con una disponibilidad documental y con unos testimonios que los periodos precedentes no garantizaban, el estudio del tardofranquismo reviste el indudable interés de constituir la antesala de la democracia y de encerrar, por consiguiente, muchas de las claves de las políticas informativas diseñadas y aplicadas durante la Transición. Conviene no olvidar, en este sentido, que la Ley de Prensa de 1966 será el marco legal vigente durante los primeros años de democracia y que algunos de sus artículos seguirán en vigor incluso después de la aprobación de la Constitución de 1978.

La última década de la dictadura estuvo marcada por el declive irremediable del Régimen, que comienza a agonizar en 1969 y entra en su crisis definitiva desde 1973. A la fractura creciente con amplias capas de la sociedad española –incluida una parte del clero católico que, ante el estupor del propio Franco, se había ido sumando desde los sesenta a la oposición interior y exterior, formada sobre todo por trabajadores, estudiantes universitarios y los nacionalismos periféricos–, el franquismo respondió con un aumento de represión. Desde 1973, la dictadura se irá apagando al compás del declive físico del dictador, incapaz de establecer ya los delicados equilibrios entre familias que habían sustentado los gobiernos anteriores y cada vez más apoyado en el almirante Luis Carrero Blanco –nombrado jefe de Gobierno en 1973, el mismo año de su asesinato– y en las facciones más inmovilistas de la coalición.

Si bien puede aceptarse la tesis de que existía una amplia pasividad política entre la mayoría de la población española, ésta coexistía con una conflictividad social y política creciente [...] La opinión ciudadana percibió el contraste entre el aumento de los opositores a la dictadura, la mayor difusión de opiniones críticas con la situación

¹² Por lo general, la historiografía fija el inicio del tardofranquismo en el año 1969 (Tusell, 1996); si bien también hay un cierto acuerdo en la consideración de la Ley de Prensa de 1966 como uno de los hitos fundacionales del periodo. Por otra parte, existen prácticamente tantas periodizaciones como autores. Las divergencias se explican por las diferencias en los criterios adoptados para elaborar cada periodización. Así, por poner sólo los ejemplos más relevantes, la de Javier Tusell, publicada en *La dictadura de Franco* (1996), se basa en la política interior y exterior del Régimen; la de Manuel Tuñón de Lara, que aparece en *Historia de España* (1991), se basa en criterios políticos y socioeconómicos; la de Stanley G. Payne (*El régimen de Franco 1936-1975*, de 1987) y Juan Pablo Fusi (*Franco. Autoritarismo y Poder personal*, de 1985) en la política interna del Régimen; y la de Paul Preston (*La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*, de 1997) en el poder de las “familias” franquistas. Evidentemente, resulta imposible detenernos en todas las periodizaciones enunciadas desde los años setenta; Enrique Moradiellos, en cualquier caso, advierte cierta unanimidad entre los historiadores en la consideración de la existencia de al menos dos etapas en el franquismo: la primera abarcaría de 1939 a 1959 y vendría caracterizada por el estancamiento socioeconómico, la rigidez política y el aislamiento internacional; la segunda, entre 1959 y 1975, quedaría marcada, por el contrario, por el desarrollo social y económico y la apertura exterior (Moradiellos, 2000: 28). Esta división dual, sin embargo, comporta el riesgo evidente de considerar un primer franquismo retardatario en contraposición a un segundo franquismo más tolerable; consideración que no sólo está fuera de lugar, sino que olvida el auge del inmovilismo y la represión de los últimos años.

y la parálisis política del régimen franquista, producto de sus incertidumbres y de su división interna (Riquer, 2010: 685-686).

El aumento de la difusión de opiniones críticas al que se refiere Riquer vino en buena medida posibilitado por la “apertura controlada” que, en el ámbito informativo, supuso la aprobación en 1966 de la Ley de Prensa (Barrera, 1993 y 1995; v. también Tusell, 1996). A pesar de la dura aplicación de que fue objeto la Ley, la “apertura” se traduciría en una mayor permisión de los artículos políticos y en la supresión de las consignas y de la censura previa. Poco se sabe, sin embargo, de las consecuencias que tuvo en la política aplicada sobre la empresa periodística privada, estudiadas aún sólo parcialmente.

1.2 La política informativa y la empresa periodística bajo el franquismo: estado del arte

Ya fuera considerado como “autoritario” o “fascista”, ya mereciera otros epítetos, existe cierto consenso en torno a la identificación del control informativo como uno de los rasgos distintivos del franquismo. La política informativa del Régimen ha sido objeto de numerosos estudios que, desde incluso antes de que expirara Franco, han abordado la cuestión desde, sobre todo, las perspectivas historiográfica y jurídica. De los numerosos textos que ensayan una interpretación general de la cuestión, cabe destacar, junto a la obra de Elisa Chuliá (1993, 1999, 2001) y de Francisco Sevillano (2003), los artículos introductorios de Pizarroso (1989) y Timoteo (1989).

La mayor parte de autores ha focalizado sus trabajos, no obstante, en aspectos concretos de dicha política. De entre quienes han centrado su atención en la legislación de prensa, sobresale el análisis político de Javier Terrón (1981) junto a los trabajos jurídicos ya clásicos de Dueñas (1969) y Fernández Areal (1971, 1972, 1973, 1979, 2002) y las obras histórico-jurídicas de César Molinero (1971) y Enrique Gómez Reino (1976, 1977, 2007, 2009). Sobre censura y consignas no pueden dejar de consultarse las obras de Schulte (1968), Abellán (1979), Sinova (1989a), Barrera (1995a) y Curry (2006). Mientras que, de entre quienes han atendido preferentemente al modelo franquista de formación, control y depuración de periodistas, son imprescindibles Gay (1991), Ramos (1997), Humanes (1998), Barrera (1999), Videla (2005) y Espinosa (2009). Tampoco han faltado autores interesados en las sanciones y procesos judiciales seguidos contra la prensa, como Álvarez de Vignier (1966), Gómez Reino (1972), Crespo de Lara (1975, 1988), Bastida (1986) y Gayán (2000).

La política de prensa franquista acumula pues un corpus extenso –completado en las últimas décadas, por si fuera poco, por algunos trabajos que, aunque referidos al

periodo democrático, han atendido al franquismo como antecedente¹³—, aunque muy focalizado en aspectos como la legislación de prensa y el régimen de orientación, control de profesionales y censura. Así, un elemento central para entender en toda su complejidad la actuación en la materia parece haber quedado soslayado. Aunque existen varios estudios de caso sobre la intervención en algunas empresas periodísticas privadas, ningún trabajo parece haberse ocupado de sintetizar el conjunto de medidas y de mecanismos aplicados por el Régimen sobre quienes poseyeron, dirigieron y administraron las empresas de prensa diaria; esto es, sobre el modelo franquista de control de la empresa periodística privada, de sus propietarios y directivos.

Desde finales de los setenta, unos pocos autores han estudiado desde una perspectiva jurídica algunos aspectos parciales del funcionamiento bajo el franquismo de la empresa periodística española. En 1975, Javier Salas publicaba un interesante estudio sobre el régimen jurídico de inscripciones y cancelaciones registrales; tema que años después retomaría José Menéndez (1984, 1995), siempre desde el derecho administrativo. En 1978, Fernando Conesa daba a la imprenta su tesis doctoral, en la que atendía al marco jurídico general en el que las empresas de prensa habían desempeñado hasta entonces su actividad. En las décadas siguientes y desde una perspectiva más general, Pedro Crespo de Lara (1995) reuniría varios artículos y conferencias sobre la cuestión y Antonio Alférez (1986) propondría un breve recorrido por el devenir de las principales empresas españolas en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia.

La estructura del sector ha sido abordada también por algunos autores, ya brevemente (Núñez & Gutiérrez, 1996; Sevillano, 1997), ya parcialmente, al detenerse en aspectos específicos como la concentración de la prensa: Nixon (1972) y Campo Vidal (2003); el sistema de distribución (Díaz, 1996); el régimen de subvenciones y ayudas estatales: García Labrado (1968, 1975), Molinero (1971) y Tallón (1978); o la constitución, gestión y declive de la cadena de prensa estatal: Montabes (1989); Zalbidea (1995) y De las Heras (2000). De todos ellos cabe destacar, sin duda, *La Empresa Periodística en España* de Alfonso Nieto (1973), que sigue siendo hoy, cuarenta años después de su publicación, una referencia imprescindible.

Más allá de aspectos tangenciales, la mayor parte de los trabajos que han tenido por objeto central la empresa de prensa bajo el franquismo han acotado sus investigaciones a las editoras de los diarios más importantes o a las actuaciones estatales

¹³ De ellas cabe destacar, por citar sólo las más relevantes, las de Barrera (1995b, 1997) y Fernández y Santana (2000), desde una perspectiva histórica; y las de Bustamante (1982) y Zallo (1988), desde un enfoque crítico centrado en la estructura económica de las industrias culturales españolas.

más escandalosas. Sobre Prensa Española, editora de *Abc*, han escrito Iglesias (1980), Pérez Mateos (2002) y Sánchez Tabernero (2005); sobre *La Vanguardia* y sus propietarios pueden consultarse los textos de Castro (2002) y Molina (2005), así como la tesis doctoral de Anna Nogué, publicada junto a Carlos Barrera en 2006; mientras que sobre *El Correo Español-El Pueblo Vasco* escribió su tesis Alfonso Sánchez Tabernero (1988). Por fin, sobre Edica, la principal cadena de prensa privada del país, han publicado entre otros García Escudero (1984), Fernández Pombo (1996); Santaella (2008) y Cantavella & Serrano (2010).

De entre quienes se han ocupado, en cambio, de los casos más conocidos de intervención estatal en las empresas de prensa, son de consulta ineludible los trabajos de Carlos Barrera sobre el diario *Madrid* (1991a, 1991b, 1995b, 2000), en el que también han indagado en sus tesis doctorales Myriam Lafuente (2002) e Ildefonso Soriano (1991). Tampoco pueden dejar de consultarse las obras de Rosa Cal (1999) y Jorge Rodríguez Virgili (2005) a propósito de la actuación del Régimen sobre los diarios *El Alcázar* y *Nuevo Diario*, ambos editados a finales de los sesenta por Prensa y Ediciones, a la que también alude Pérez López (1994) en su estudio sobre el *Diario Regional*, ligado al mismo entramado empresarial. En otras obras pueden incluso descubrirse testimonios directos de las vicisitudes vividas por las empresas, como en la tesis doctoral de Mauro Muñiz (1995), en la que narra las circunstancias del cierre del diario *Nivel*; en el libro de Eduardo Chinarro (1978) sobre *El Correo de Andalucía*, del que también se ocupa en otro volumen Sáez Alba (1974); en las memorias de Manuel Ibáñez Escofet (1995), en las que menciona brevemente su malograda aventura del *Migdia*; y en el texto de Víctor Saura (1998) sobre la historia de *El Correo Catalán*, a la que también se refiere Huertas Clavería en su esclarecedor artículo “La mirada oculta del Régimen” (1986).

1.3 Hipótesis y objetivos de la investigación

Durante todo el franquismo compitieron en España –merced al sistema de prensa mixto instaurado por el Nuevo Estado en sus primeros años– dos tipos de empresas periodísticas diferenciadas por su titularidad: las estatales y las privadas. A principios de los años setenta, existían en el país 111 diarios de información general, de los que 42 eran de propiedad estatal y 69 de titularidad privada¹⁴.

¹⁴ *Anuario de la prensa Española*, Ministerio de Información y Turismo, tomo I, Madrid, 1970. Cit en Nieto, *op. cit.*: 67. De los datos aportados por Nieto, hemos excluido los diarios de información deportiva y de contenidos especiales (*Informe Económico*; y *Diario de diarios*). Además, hay que tener en cuenta que Nieto incluye un diario (*La Noche*) que había desaparecido en 1967 y que por tanto tampoco consideramos.

El origen de la prensa estatal –que queda por tanto fuera de nuestro objeto de estudio– remonta al proceso de incautación y nacionalización de publicaciones acometido por el Régimen a finales de los años treinta y principios de los cuarenta. El Nuevo Estado se hará entonces con más de 40 diarios de información general que acaparaban, en los años setenta, más de un cuarto de la difusión total de ejemplares estimada para España (Nieto, 1973: 99). Aunque las Administraciones central, provincial y local, así como la Organización Sindical, poseían también periódicos, el grueso se hallaba integrado en la Cadena de Prensa del Movimiento. Ésta se había constituido entre 1936 y 1940 a partir de una serie de disposiciones que no venían en realidad sino a legalizar la apropiación de talleres, maquinaria y cabeceras perpetrada *manu militari* por el ejército sublevado desde los primeros días de la Guerra Civil¹⁵.

Huelga aclarar que la existencia de un sistema mixto no puede inducir a imaginar una prensa privada libre frente a otra pública sometida al Estado¹⁶. La desconfianza que el Régimen nunca dejó de manifestar hacia la prensa escrita –recelo fundado tanto en el reconocimiento de su potencia como en el juicio sobre el papel desestabilizador que había desempeñado en la historia reciente de España–, unido al riesgo inherente a su propiedad

¹⁵ Hablamos de “prensa estatal” y no de “prensa falangista” en la medida en que, a pesar de quedar integrada desde 1939 en la órbita del Movimiento, FET de las JONS nunca logró cumplir su vieja aspiración de contar con un aparato de prensa propio y autónomo del Estado. La Cadena quedará adscrita en último término, no a un organismo autónomo del Partido, sino a la Secretaría General del Movimiento, integrada en el aparato institucional del Régimen con rango ministerial, y dirigida por figuras tan leales a Franco como el general Muñoz Grandes, José Luis Arrese o José Solís. Lejos, además, de avanzar hacia una mayor autonomía, el control de la Cadena por la Secretaría General del Movimiento no hará sino afianzarse durante los años cincuenta: tres disposiciones fijarán, en la segunda mitad de la década, la estructura organizativa de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y la posición que en ella había de ocupar su prensa. No será de hecho hasta 1970, cuando la prensa del Movimiento alcance cierta autonomía. La Cadena, sin embargo, se encontraba ya por entonces inmersa en un irrefrenable proceso de declive que acabará desembocando en su desaparición a principios de los ochenta (Zalbidea, 1995; Montabes, 1989). El Estado tratará de atajar la situación con varios planes de reforma, que no lograrán, sin embargo, resucitar una Cadena cuya crisis pronto afectaría también, tras la muerte del dictador, a su razón de ser política.

¹⁶ Hasta tal punto que algunos autores incluso han rechazado, por equívoca, esta distinción entre prensa estatal y prensa privada, dado que ambas se encontrarían al servicio del Estado. Esta ha sido la tesis defendida por Javier Terrón (1981) y Justino Sinova (1989b). Al decir de este último, no tiene sentido distinguir entre prensa estatal y no estatal, pues “toda la prensa era estatal en un sentido político”, toda vez que los periódicos editados por particulares “debían someterse a un procedimiento de estricto control político que no entendía de distinciones” (Sinova, 1989b: 262). El Estado se habría así apropiado del discurso de la prensa sin necesidad de alterar su propiedad legal ni de establecer un régimen de monopolio estatal. Con este mismo argumento, abunda sobre la cuestión Javier Terrón, para quien la “estatalización” de la prensa no se produjo bajo el franquismo “mediante la nacionalización de las empresas periodísticas, sino mediante el expediente, más sutil si se quiere, pero igualmente efectivo, del absoluto control del Estado sobre la producción ideológica que tiene a la prensa como soporte. Se tratará en definitiva de compaginar la propiedad privada de la empresa con la dirección estatal de su producto” (Terrón, 1981: 26). En definitiva, para estos autores el régimen franquista habría adoptado un modelo de control basado, no tanto en la nacionalización de la prensa, cuanto en la apropiación de su contenido y discurso, al tiempo que se mantenía la ficción de su titularidad privada.

privada, debió de empujar a la dictadura a la imposición de ciertas “cautelos” que complementarían los tan estudiados mecanismos de control de profesionales y de orientación y censura de contenidos. De ello se desprende la hipótesis principal que la investigación ha tratado de verificar, según la cual, *el Estado franquista habría diseñado e implementado, entre 1966 y 1975, un modelo específico de control de la empresa periodística privada editora de diarios de información general inscrito en la política informativa aplicada sobre la prensa española*. De confirmarse esta hipótesis, el Régimen habría pergeñado una política de prensa más compleja y amplia y con incidencia en más aspectos que el mero control de la profesión periodística y de los contenidos publicados.

La tesis doctoral se ha planteado pues con el objetivo prioritario de definir la política aplicada por el tardofranquismo sobre la empresa periodística privada editora de diarios de información general; definición que pasa por el esclarecimiento de los siguientes puntos, contemplados como objetivos específicos: (a) los principios doctrinales que fundamentaron tal política; (b) su *raison d'être* y finalidad; (c) los mecanismos e instrumentos que sirvieron a su aplicación; (d) los organismos y dirigentes de los que dependió su implementación; (e) el contexto sociopolítico y económico, y tanto interno como externo, en que fue ideada y aplicada; y (f) el impacto que tuvo sobre la estructura del sistema de prensa diaria.

1.4 Marco Teórico y Metodología

El periodo de estudio elegido y la imposibilidad de atender a la política informativa sin su adecuada contextualización en la última década de dictadura hacen de ésta una investigación evidentemente histórica, tanto en su marco disciplinar de referencia como en su metodología. Sin embargo, la consecución de los objetivos fijados y el propio objeto material de estudio nos han impuesto una aproximación multidisciplinar, que reclamaba, consecuentemente, la adopción de una metodología interdisciplinar que coherente el análisis histórico con el jurídico y el estructural. La interdisciplinariedad es, a nuestro entender, la única opción metodológica que garantiza una visión razonablemente completa de un campo tan heterogéneo y caleidoscópico como los sistemas de medios de comunicación, constituidos por un entramado de relaciones de poder al que desde luego no resultan ajenos los sistemas político y económico y en el que se inscriben, claro está, las políticas informativas que orientan y regulan su funcionamiento.

A la identificación y examen de las iniciativas y actos que conforman dichas políticas se han dirigido los análisis histórico y jurídico, completados por el estudio de

aspectos estructurales del sistema de prensa como la población de empresas y cabeceras, la concentración del sistema y el entramado de relaciones establecido entre los empresarios y directivos de prensa y los aparatos de poder económico y político del Régimen. La investigación ha seguido, en este aspecto, el camino abierto en España por Enrique Bustamante, quien en 1982 ya consideraba ineludible en cualquier observación del poder emisor, el atender a sus conexiones con los ámbitos bancario e industrial (1982: 34); a los que en nuestro estudio se incorpora el político.

Partimos, como puede apreciarse, de una concepción del sistema de prensa como resultado del entramado de fuerzas y relaciones de poder que conforman el conjunto social. Una conceptualización que afirma la presencia y actuación *simultánea* de los medios en la base material y en la superestructura (Smythe, 1983: 75), y que resulta coherente con la defendida por la economía política de la comunicación, disciplina definida precisamente por el “estudio de las relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder, que constituyen mutuamente la producción, la distribución y el consumo de los recursos”, y de modo prioritario, como es obvio, de los recursos comunicativos (Mosco, 2009: 48).

Procedente del frente cultural de la década de los treinta —y, concretamente, de la síntesis intelectual antifascista de aquel tiempo, de la que acaso el economista Robert A. Brady constituya la figura fundacional (Schiller, 2006)—, la economía política de la comunicación es una disciplina realista, inclusiva, constitutiva y crítica. De acuerdo con la epistemología planteada por Vincent Mosco, la economía política de la comunicación es realista, dado que reconoce la realidad de conceptos y de prácticas sociales, trata de apartarse de planteamientos *ideográficos* y *nomotéticos* y defiende la posibilidad de aprehender la realidad mediante la combinación de métodos teóricos y empíricos. La disciplina es *inclusiva* en tanto rechaza el esencialismo que reduce todas las prácticas sociales a una única explicación político-económica, en favor de un planteamiento que entiende los conceptos como entradas o puntos de partida a un campo social caleidoscópico. Es *constitutiva* pues reconoce las limitaciones de la determinación causal y enfoca la vida social como un conjunto de procesos mutuamente constituidos. El planteamiento es, por último, *crítico*, al entender el conocimiento como producto de la confrontación dialéctica con otros cuerpos de conocimiento (Mosco, 2006: 65-66).

Por lo demás, la economía política de la comunicación se funda en los mismos cuatro pilares sobre los que se erigió la ciencia político económica moderna y que han supuesto para varias generaciones de investigadores un horizonte de referencia tanto como un punto de encuentro; a saber: la certeza de la importancia de la Historia para el estudio del cambio social; el entendimiento de la economía política como un factor

inserto en la totalidad social; la imposibilidad de desligar la ciencia político económica de los valores y normas filosóficas y morales que le son inherentes; y la concepción de la actividad intelectual como una forma de *praxis* o acción y transformación social (Mosco, *op. cit.*).

El análisis jurídico ha tenido por objeto el estudio de las iniciativas legislativas referidas a la empresa periodística privada. La investigación parte de la premisa de que el estudio del corpus legal supone una puerta de entrada, tanto a la naturaleza que fue adoptando durante el periodo la política informativa del Régimen, cuanto al poder¹⁷ que ostentaron en aquel periodo los agentes sociales que intervinieron en su elaboración, tramitación y aprobación. Si admitimos con el teórico clásico del Estado Herman Heller (1974) que el poder político aspira, por lo general, a transformarse en derecho positivo¹⁸, hemos necesariamente de considerar la legislación como materialización o manifestación positiva de las fuerzas sociales más potentes en un campo determinado y un periodo definido; esto es: como ámbito de condensación del poder de los agentes sociales implicados en dicho campo, que lograrán transformar sus intereses y aspiraciones en norma positiva en función de su preponderancia.

Naturalmente, la posibilidad de rastrear la magnitud de la impronta de los agentes sociales sobre la legislación, nos ha impuesto una identificación previa de aquellos agentes que, con competencias e intereses en la materia, intervinieron de un modo u otro en el proceso de elaboración y tramitación del corpus legal. Ya pues en este primer

¹⁷ En esta investigación se concibe el poder como *relación social asimétrica* o “capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder” (Castells, 2009: 43).

¹⁸ En la medida en que el derecho deviene en manifestación del poder político consolidado, dada la garantía que le procuran los aparatos coercitivos del Estado. Por supuesto, para alcanzar una consolidación efectiva y adoptar la forma “técnicamente más perfecta de dominación” que supone el Derecho, el poder estatal requiere, no sólo de su transmutación en corpus legal, sino también su justificación moral. Es decir: necesita dotarse de legitimidad tanto como de legalidad: “[...] a causa de su función social, el Estado no ha de contentarse con la legalidad técnico-jurídica sino que, por necesidad de su propia subsistencia, debe también preocuparse de la justificación moral de sus normas jurídicas o convencionales positivas, es decir, buscar la legitimidad” (Heller, 1974: 261).

De este modo, el Estado se revela como uno de los ámbitos fundamentales de cristalización de las relaciones sociales y por tanto de las relaciones de poder; como un entramado de relaciones complejas que revelan el balance o correlación de fuerzas sociales en una coyuntura determinada (Jessop, 1982: 221). Lejos, pues, de ser un agente neutral (tal y como ha defendido la teoría pluralista), se configura como un terreno asimétrico, en el que varias fuerzas compiten por el traslado al ordenamiento jurídico de sus intereses y por el control de los aparatos estatales; esto es: por el poder (Jessop, 2007: 31). Esta perspectiva relacional del Estado —que, aunque heredera del estructuralismo marxista de Nicos Poulantzas, pretende superarlo— permite entender el conjunto social en general y el Estado, en particular, como un entramado de relaciones constitutivas y asimétricas en el que viene a reflejarse la desigualdad entre (y por tanto el poder de) agentes e instituciones sociales.

ámbito, el análisis jurídico se encuentra con el análisis histórico de los grupos de poder y dirigentes que gobernaron el aparato administrativo de prensa durante la dictadura. Para su estudio hemos acudido, además de a la abundante bibliográfica existente, a los fondos documentales del Archivo Histórico de la Agencia EFE (AH EFE), custodiado por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, y con la base de datos EFEData¹⁹.

Esta primera aproximación se ha completado con el análisis de las doctrinas que cada uno de los dirigentes y grupos de poder defendieron, tanto en relación a la prensa como al papel que con respecto a ella y a la empresa periodística debía de representar el Estado. El análisis de la doctrina falangista se ha basado en el articulado del *Estatuto de Prensa de FET de las JONS*, conservado en el Archivo General de la Administración (AGA, de aquí en adelante). La doctrina elaborada por Gabriel Arias Salgado, ministro de Información entre 1951 y 1962, quedó plasmada en los tres tomos de su obra *Textos de Doctrina y Política Española de la Información* (1960). Para el estudio de la doctrina sobre prensa y empresa periodística de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACN de P) hemos recurrido a sus Boletines (BANCdeP), a los números de la revista *Ecclesia*, en los que se expresaron conspicuos acenepistas, y sobre todo al *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, elaborado por el círculo madrileño de la Asociación a principios de los sesenta. Todo ello puede encontrarse en el Archivo Central que la Asociación Católica de Propagandistas mantiene en Madrid.

La identificación de los agentes y el estudio de sus doctrinas nos ha permitido dilucidar tanto su influencia durante el proceso de elaboración y tramitación de la normativa tardofranquista sobre empresa periodística como su impronta sobre el corpus positivo aprobado. Para el estudio del proceso de elaboración y tramitación de la LPI hemos manejado los informes sobre el anteproyecto elaborados en el otoño de 1964 por el Consejo Nacional de Prensa²⁰, el Instituto de Estudios Políticos y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Todos ellos –remitidos al legislador para la elaboración del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de agosto de 1965 y remitido a Cortes el 23 de septiembre– pueden consultarse en el Archivo General de la Administración y en el Archivo del Congreso de los Diputados. En este último se conservan además las enmiendas escritas presentadas por los procuradores franquistas a la Ley de Prensa, así como las más de dos mil quinientas cuartillas taquigráficas en las

¹⁹ EFEData, a la que hemos accedido desde la sede central de la Agencia EFE en Madrid, posee biografías de los representantes más importantes del Régimen; mientras que el Archivo Histórico de la Agencia EFE, gestionado por la Universidad Rey Juan Carlos I, posee recortes de publicaciones de la época de numerosos políticos y empresarios españoles.

²⁰ El informe final del pleno del Consejo Nacional de Prensa que se entregó al legislador se fundó en dos informes previos, elaborados por la Comisión Especial y por la Comisión Permanente del organismo, y también analizados.

que han quedado recogidas las discusiones mantenidas entre el 17 de enero y el 3 de febrero de 1966 por la Comisión de Información y Turismo encargada de debatir y enmendar el proyecto de Ley. Por fin, para el análisis del corpus positivo sobre prensa y empresa periodística hemos manejado las disposiciones promulgadas por el Régimen y las sentencias falladas por el Tribunal Supremo durante el periodo y compiladas en los repertorios cronológicos de legislación y jurisprudencia Westlaw y Aranzadi.

La legislación no es, como ha quedado dicho, la única componente de la política informativa, constituida antes bien por todo un conjunto de mecanismos, actuaciones y omisiones agrupados en la categoría de “actos administrativos”. A tales actos ejercidos por la Administración sobre las empresas –y entre los que no faltaron, como comprobaremos, las presiones, las amenazas, los chantajes y las usurpaciones– nos referimos en esta memoria como “mecanismos extralegales”, en tanto no previstos en el ordenamiento jurídico y no circunscritos a la mera aplicación de la Ley. A su reconocimiento y estudio se dirige un segundo tipo de indagación histórica que se ha nutrido de dos fuentes primarias: los documentos archivados en el Registro de Empresas Periodísticas y los testimonios de veinticinco protagonistas del periodo.

El Registro de Empresas Periodísticas, creado en 1958 y dependiente orgánicamente de la Dirección General de Prensa, ha constituido la fuente de acceso fundamental a las actuaciones extralegales de la Administración. En el Registro fue archivada, no sólo la información sobre la estructura accionarial y los cuadros directivos que las empresas estaban obligadas a comunicar por Ley (v. *infra*), sino un importantísimo volumen de documentación en la que quedan evidenciadas las maniobras administrativas de todo tipo a que fueron sometidas las empresas. Los documentos –en su mayor parte clasificados como reservados– se encuentran distribuidos en los más de siete decenas de expedientes correspondientes a otras tantas empresas privadas editoras de diarios de información general que conserva el AGA en su Sección de Presidencia. La totalidad de la correspondencia, informes, procedimientos y otros documentos citados se encuentran recogidos en el Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975); y los más relevantes aparecen reproducidos en el cuerpo de la memoria.

La documentación hallada en los expedientes registrales ha sido confrontada y completada con los testimonios de más de una veintena de protagonistas²¹. Se trata, en su mayor parte, de empresarios y directivos de prensa, si bien tampoco faltan directores de diarios y periodistas, e incluso exponentes del aparato franquista de gobierno de la prensa directamente implicados en el control de las empresas periodísticas, como el jefe de la inspección del Ministerio de Información, Enrique Santín Díaz, y el jefe de la

²¹ La lista completa de personas entrevistadas puede consultarse al final de la memoria.

Oficina de Enlace, el general Francisco Castrillo Mazeres. La muerte de Manuel Fraga durante la elaboración de la tesis ha privado a la investigación de un testimonio de valor inestimable. Por lo demás, aunque en algunos casos las cuatro décadas transcurridas hayan difuminado los recuerdos, casi todos los entrevistados han aportado testimonios valiosísimos para reconstruir el modo de operar de la Administración en aquel tiempo.

El estudio de los mecanismos legales y extralegales habría quedado incompleto sin el análisis del impacto que generaron sobre la estructura del sistema; estructura que, por otra parte, no dejó de condicionar la política informativa de la dictadura. Siguiendo a Nuria Almirón –quien recoge, a su vez, las ideas de otros economistas políticos de la comunicación–, hablamos de estructura para referirnos a la ordenación concreta que, durante el tardofranquismo, adoptó el conjunto dinámico del sistema de prensa privada²². La “estructura” no deja de ser pues una abstracción teórica o, en términos de Levi Strauss, un “simulacro de realidad”; un modelo explicativo o “modelo lógico que permite pensar y articular las modificaciones empíricas por las que pasa la situación que ella representa” (Katz, 1980: 206). Según Jean Piaget, toda estructura tiene tres propiedades: (a) totalidad, pues “está formada por elementos, pero estos se encuentran subordinados a leyes que caracterizan el sistema como tal; y dichas leyes (llamadas de composición) no se reducen a asociaciones acumulativas, sino que confieren al todo, como tal, propiedades de conjunto distintas a las de los elementos”; de forma que el todo es diferente y anterior a sus partes, que no pueden entenderse de forma atomizada; (b) transformación, pues son, al tiempo, “estructuradas por” y “estructurantes de” la totalidad que conforman; y (c) autorregulación, pues las transformaciones inherentes a una estructura no conducen más allá de las fronteras de dicha estructura (Piaget, cit. en Katz, *ibídem*).

Un “sistema” es, en cambio, un conjunto de elementos interrelacionados de tal modo que el “estado” de un elemento en particular depende del “estado” general del conjunto (Katz, *op. cit.*: 445); de lo que se infiere que “todo sistema se deriva de unas estructuras que a su vez están en relación” (Reig, 1998: 22). De la aplicación de estas estructuras (entendidas, insistimos, como modelo lógico y por tanto como abstracción teórica) a la realidad, resulta el sistema.

La importancia de este tercer ámbito de análisis radica en su consideración, no sólo como ordenación afectada por la política informativa, sino, también y al tiempo, como factor condicionante de dicha política. Esta inteligencia de la estructura remite al

²² En su tesis doctoral, Almirón define “estructura” como el análisis de la ordenación concreta, a cada momento dado, del conjunto dinámico que es el sistema de los medios de comunicación” (Almirón, 2006: 35).

concepto de “estructuración”, planteado por Vincent Mosco (2009) como una de las ventanas desde las que asomarse al fenómeno de la comunicación. Mosco toma el concepto de Anthony Giddens (2002: 835), quien a su vez lo desarrolla partiendo de la formulación que del mismo hiciera Carlos Marx:

La estructuración describe un proceso por el cual las estructuras se constituyen a partir de la capacidad de actuación humana, incluso cuando proporcionan el único ‘medio’ de esa constitución. La vida social se compone de la constitución mutua de la estructura y la acción (Mosco, 2009: 310).

Al hablar de “constitución mutua de estructura y acción” Mosco pretende huir de las posiciones más extremas enfrentadas en torno a este dilema clásico de la sociología. Para ello, acude a la idea de “dualidad estructural” defendida por Giddens, de acuerdo con la cual todas las acciones sociales se inscriben en una estructura determinada, pero, al tiempo, dicha estructura “presupone”, en tanto que depende de ella, la existencia de una acción humana, de modo que estructura y acción se conciben como en una continua relación en la que la primera vendría a ser continuamente construida y reconstruida por la segunda (Giddens, 2002: 835-836).

En su definición, Almirón contrapone el carácter concreto o estático de la estructura a la naturaleza dinámica del sistema. En la medida, en efecto, en que el estudio del sistema no puede ignorar el de su estructura y que, a su vez, el examen de dicha estructura implica necesariamente una visión estática de un momento puntual, hemos acotado este último análisis a los años 1967 (primer año natural completo en que la LPI estuvo en vigor) y 1975 (año de la muerte del dictador), desde la certeza de que los momentos inicial y final del tardofranquismo resultan los más adecuados para colegir las tendencias y la evolución de todo el periodo.

Del mismo modo, la imposibilidad de atender con garantías a la totalidad de elementos que componen la estructura del sistema nos ha impelido a centrar el foco en tres aspectos básicos: en la población de empresas y diarios privados de información general, así como en sus cifras de difusión; en la concentración geográfica, empresarial, y de propiedad; y en las conexiones y los intereses compartidos entre los empresarios y directivos de prensa y el poder político y económico del Régimen.

La concentración informativa constituye uno de los objetos centrales de la economía política de la comunicación, que ha tendido a examinarla como una manifestación de la extensión del poder corporativo (Herman & Chomsky, 1988; Herman & McChesney, 1997; Betting & Hall, 2003; cit. en Mosco, 2006). Entendemos la “concentración informativa” como la acumulación en una entidad, física o jurídica, de la propiedad de medios materiales en un área de difusión concreta (Nieto & Mora, 1989:

78). De las diferentes modalidades de concentración –horizontal, vertical, cruzada, etc.–, nuestra investigación ha atendido a los procesos de concentración territorial, a la acumulación de la propiedad y a la integración horizontal entre empresas.

En lo que se refiere a las conexiones entre el poder político, económico y mediático, la investigación ha tratado de examinar el grado de cooptación de los empresarios y directivos de prensa por parte de la élite política y empresarial del Régimen. Una integración en la élite del poder franquista²³ que, de confirmarse, debió de afectar necesariamente a las relaciones establecidas entre empresas y Administración y a la política informativa aplicada por ésta sobre aquellas²⁴. También éste es un ámbito de estudio clásico de la economía política de la comunicación, que ha recogido en el concepto de “espacialización” (Mosco, 2009) la extensión del poder empresarial sobre el sistema de medios, valorada a partir de índices de concentración, interconexiones empresariales, alianzas coyunturales, creación de sinergias, etc.

Junto a la literatura secundaria, cuatro han sido las fuentes básicas manejadas en el estudio de los tres aspectos estructurales: el Registro de Empresas Periodísticas; diversos anuarios financieros y de sociedades españolas; el Índice Histórico de Diputados del Archivo del Congreso; y la base de datos y Archivo Histórico de la Agencia EFE (EFEData y AH EFE).

Para el estudio de la difusión de los diarios de información general propiedad de las empresas de prensa tardofranquistas hemos optado por tomar como referencia los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) recopilados por Nieto (1973) y Nieto & Mora (1989) que, aunque limitados, resultan sin duda los más fiables. Con el fin de ofrecer unas cifras lo más exactas posibles, hemos completado estos datos con los aportados por Alfonso Nieto a partir de las aportaciones de las empresas de prensa a la Institución San Isidoro, calculadas en función de su difusión²⁵.

²³ El concepto de élite del poder remite, por supuesto, a la célebre obra de Wright Mills (1978 [1956]). Mills diferencia entre “élite del poder”, que agruparía a la coalición de dirigentes políticos, económicos y militares y “clase dirigente”, que alude al gobierno político por parte de un grupo económico (clase), excluyendo a la dirigencia política y militar (1978 [1956]: 260). Si bien la obra de Mills se centra en Estados Unidos, consideramos que la categoría de “élite del poder” puede aplicarse sin inconvenientes a la realidad de la España tardofranquista.

²⁴ Siguiendo la tesis de Schiller acerca de la estrecha vinculación entre los centros de poder político, económico y mediático, tal integración fue ya demostrada por Ana I. Segovia en el caso estadounidense (Segovia, 2001; Segovia & Quirós, 2006).

²⁵ De acuerdo con el ordenamiento franquista, las empresas de prensa debían destinar a la ISI cinco céntimos de cada ejemplar vendido el primer martes del mes. Para calcular la difusión de ese día, basta pues con multiplicar la aportación de cada diario por 0'05. Sin embargo, conviene tener presente que cinco céntimos era sólo la cantidad mínima establecida por ley, por lo que no era extraño que muchas publicaciones le destinaran montos más generosos. Además, los martes eran un día de ventas superiores a lo habitual (dada la prohibición de editar diarios los lunes, reservados a las *Hojas de los Lunes*), lo que también desvirtúa los cálculos de Nieto.

Tanto el estudio de la concentración de la propiedad como de los procesos de integración horizontal que se dieron en el conjunto del sistema se ha basado en los documentos aportados por cada una de las editoras de diarios al Registro de Empresas Periodísticas y archivados en expedientes individuales en el AGA. De acuerdo con el artículo 5.d.1 del Decreto 749/1967, de 31 de marzo (BOE de 4 de abril), que desarrolla el capítulo IV de la LPI, la solicitud de inscripción en el REP de toda persona jurídica debía incluir una “relación nominal de los accionistas, con indicación de la nacionalidad y domicilio de cada uno de ellos, y número de acciones de que son titulares [...]”. Los cambios accionariales posteriores a la inscripción debían ser también comunicados al REP, de acuerdo con los artículos 28 de la LPI y 11 y 12 del Decreto 749/1967. Este celo administrativo por conocer la propiedad de la prensa española nos ha permitido reconstruir, casi medio siglo después, la estructura accionarial que en 1967 y 1975 tenían las siete decenas de empresas de prensa presentes en el mercado en aquellos años²⁶, identificar a las treinta grandes familias, empresarios y sociedades propietarias de los diarios más leídos y descubrir, entre todos ellos, a los editores más poderosos del tardofranquismo.

Del mismo modo, también los datos aportados al REP por imperativo legal han servido de base para identificar a los directivos de las empresas privadas de prensa en 1967 y 1975; información que hemos cruzado con diferentes fuentes primarias y secundarias hasta obtener las conexiones con el mundo político y empresarial del tardofranquismo. El artículo 27.C de la LPI –desarrollado poco después por el art. 4.a del Decreto 749/1967– conminaba a las empresas que quisieran obtener la autorización administrativa para editar diarios a incluir en su solicitud de inscripción registral el nombre “de las personas a las que se encomienda la gestión y administración”. Cada cambio posterior en los órganos de gobierno había de ser también comunicado al Registro, en virtud del artículo 28 de la Ley. Como ocurriera con la estructura accionarial, el celo administrativo por identificar a los administradores y directivos de las empresas de prensa nos ha permitido reconstruir los Consejos de Administración y otros órganos de gobierno de las casi setenta empresas editoras de diarios en 1967 y 1975²⁷.

Para descubrir las vinculaciones con el ámbito político hemos cotejado los más de siete centenares de nombres de consejeros de prensa con los de quienes ejercieron como procuradores en Cortes entre 1938 y 1975, identificados en el Índice Histórico de

²⁶ V. los gráficos de propiedad de cada una de las empresas del Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975).

²⁷ La composición de todos los CA en 1967 y 1975 se encuentra recopilada en el Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975).

Diputados del Archivo del Congreso de los Diputados²⁸, en la base de datos de la Agencia EFE (EFEData) y en el Archivo Histórico de la Agencia EFE (AH EFE). De acuerdo con la Ley de Cortes de 1942 (BOE de 18 de julio), modificada por la Ley Orgánica del Estado de 1967 (BOE de 11 de enero), tenían escaño en la Cámara todos los representantes del poder político nacional, así como los más importantes de los ámbitos provincial y municipal²⁹. El cruce de ambos directorios nos ha permitido pues identificar, si bien no todas las vinculaciones políticas de los consejeros y vocales de prensa, al menos sí las más relevantes.

El estudio de la vinculación con el poder económico se ha basado, del mismo modo, en el cruce del directorio de consejeros con varias fuentes primarias y secundarias. Hemos acudido, en primer lugar, a las ediciones de 1968 (referida al año 1967) y 1976

²⁸ El Índice incluye a todos aquellos que tuvieron escaño en las Cortes españolas entre 1810 y 1977; y es posible su consulta *on line* en la página web del Congreso de los Diputados [<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip>]

²⁹ El artículo segundo de la Ley de Cortes concedía el título de procuradores a:

- a) Los miembros del Gobierno.
- b) Los Consejeros Nacionales.
- c) El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supremo de Justicia Militar, el del Tribunal de Cuentas del Reino y el del Consejo de Economía Nacional.
- d) Ciento cincuenta representantes de la Organización Sindical.
- e) Un representante de los Municipios de cada Provincia elegido por sus Ayuntamientos entre sus miembros y otro de cada uno de los Municipios de más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta y Melilla, elegidos por los respectivos Ayuntamientos entre sus miembros; un representante por cada Diputación Provincial y Mancomunidad Interinsular canaria, elegido por las Corporaciones respectivas entre sus miembros, y los representantes de las Corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias, elegidos de la misma forma.
- f) Dos representantes de la Familia por cada provincia, elegidos por quienes figuren en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas, en la forma que se establezcan por Ley.
- g) Los Rectores de las Universidades.
- h) El Presidente del Instituto de España y dos representantes elegidos entre los miembros de las Reales Academias que lo componen; el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dos representantes del mismo elegidos por sus miembros.
- i) El Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y un representante de las Asociaciones de Ingenieros que lo constituyen; dos representantes de los Colegios de Abogados; dos representantes de los Colegios Médicos. Un representante por cada uno de los siguientes Colegios: de Agentes de Cambio y Bolsa, de Arquitectos, de Economistas, de Farmacéuticos, de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras, de Licenciados y Doctores en Ciencias Químicas y Físico Químicas, de Notarios, de Procuradores de los Tribunales, de Registradores de la Propiedad, de Veterinarios y de los demás Colegios profesionales de título académico superior que en lo sucesivo se reconozcan a estos efectos, que serán elegidos por los respectivos Colegios Oficiales. Tres representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio; uno de las Cámaras de la Propiedad Urbana y otro en representación de las Asociaciones de Inquilinos, elegidos por sus Juntas u órganos representativos. Todos los elegidos por este apartado deberán ser miembros de los respectivos Colegios, Corporaciones o Asociaciones que los elijan. La composición y distribución de los Procuradores comprendidos en este apartado podrá ser variada por ley, sin que su número total sea superior a treinta.
- j) Aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a veinticinco.”

(referida al año 1975) de dos directorios de empresarios y directivos: el Directorio de Consejeros y Directores (DICODI) y el Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (AFISAE). La información proporcionada por ambos no siempre ha resultado todo lo completa y actualizada que hubiera sido deseable³⁰, por lo que ha sido cotejada con un repertorio de vinculaciones de consejeros elaborado por el propio Régimen y descubierto en el Archivo General de la Administración³¹, por las biografías de EFEData y por los documentos originales conservados en el Archivo Histórico de la Agencia EFE. Por fin, todo ello ha sido comprobado y completado con abundante literatura secundaria sobre empresarios españoles del periodo, con el fin de reducir al mínimo los inevitables errores derivados de la falta de actualización y omisiones de las fuentes primarias y secundarias.

1.5 La memoria de la investigación

La memoria de la tesis se ha articulado en dos bloques de tres capítulos cada uno introducidos por estas líneas y completados por un último capítulo de conclusiones, catorce anexos y un apéndice *on line*.

El primer bloque de la memoria ofrece una aproximación preliminar aunque imprescindible a los fundamentos de la política tardofranquista aplicada sobre la empresa periodística privada. Abre el bloque un estudio del entramado orgánico urdido por el franquismo para el gobierno administrativo de la prensa. Bajo el título, “Bases institucionales del sistema de prensa privada tardofranquista”, el capítulo segundo propone un repaso descriptivo de los órganos administrativos y de las “familias” y dirigentes que, desde sus despachos, dirigieron antes y después de la aprobación de la Ley Fraga el sistema privado de prensa.

Para el estudio de los grupos de poder que ostentaron las competencias sobre la prensa española y bajo cuya adscripción operaron la mayoría de los dirigentes, nos hemos valido de la categoría de “familias”. Su empleo, si bien no carece de problemas, ayuda a explicar los cambios de las competencias sobre prensa en función de la coyuntura exterior y de la correlación de fuerzas interna del Régimen. Por otra parte, el

³⁰ DICODI y AFISAE publicaban, por lo demás, los cargos directivos de empresas con un capital social superior a los dos millones de pesetas, por lo que algunos consejeros de prensa que compatibilizaran el cargo con pequeñas sociedades de un capital inferior escapan a nuestro estudio.

³¹ Fichas en AGA, sig. (03)049.21 cs. 71/12259 a 71/12264. Se trata de cientos de fichas individuales de los consejeros de prensa, ordenadas alfabéticamente, y en las que se hayan detallados sus cargos en otras empresas nacionales. Por desgracia, las cajas no tienen fecha de elaboración ni actualización, por lo que sólo han podido ser usadas como fuente complementaria y no principal de la investigación.

personalismo que caracterizó la dictadura franquista (Fusi, 1985; Tusell, 1996; Juliá, 2003)³² y la presencia en el retablo de dirigentes de figuras como Gabriel Arias Salgado o Manuel Fraga, cuyas personalidades desbordan cualquier adscripción familiar, aconseja no detener el estudio en la “familia” y profundizar en el perfil de cuantos dirigentes detentaron cargos de relevancia en los organismos de gobierno de la prensa³³.

Tal y como advertíamos en el marco teórico y metodológico, la identificación de los grupos de poder y dirigentes contribuye, no sólo a entender el sentido que, en cada coyuntura, adoptará la política informativa sobre la empresa periodística, sino aun a descubrir los fundamentos doctrinales que informaron su marco legal. Con este objetivo se presenta el tercer capítulo, en el que atendemos a las doctrinas enunciadas por cada una de las familias y dirigentes con competencias e intereses en el sector a propósito de la función de la prensa, de la empresa periodística y del papel que el Estado está llamado a desempeñar con respecto a ambas. El capítulo se detiene en los principios doctrinales defendidos por las tres familias y dirigentes con competencias en prensa antes de 1966, las únicas con capacidad de influencia sobre el marco legal aprobado aquel año y las únicas que formularon una doctrina acabada sobre la materia. Al estudio de las doctrinas falangista, acenepista y de Gabriel Arias Salgado le sigue una aproximación a la doctrina oficial plasmada por el Régimen en el ordenamiento. El capítulo pretende así esclarecer las bases doctrinales que informaron la normativa y actuación tardofranquista y comenzar a desvelar los grupos de poder y dirigentes más influyentes durante la elaboración y tramitación del marco legal de referencia en el periodo.

Completa esta primera parte de la memoria el análisis de la estructura del sistema de prensa privada en los momentos inicial y final del tardofranquismo. El capítulo cuarto se detiene, como ha quedado señalado, en tres aspectos críticos de dicha estructura: la evolución del número de empresas y diarios y en su difusión; la concentración de la prensa diaria privada (observada a través de tres modalidades: la concentración geográfica, la concentración de la propiedad en el seno de cada empresa y las operaciones de integración horizontal que se dieron en el conjunto del sistema); y el grado de integración de los empresarios y directivos de prensa en la élite política y empresarial del Régimen.

³² Y que determinó que el nombramiento de dirigentes estuviera, en la mayor parte de los casos, más influido por la lealtad personal al dictador de los candidatos que por su liderazgo en el seno de su “familia” de adscripción. Sobre el concepto de “familia” y su uso en esta tesis puede consultarse el capítulo segundo.

³³ Además del amplísimo fondo documental conservado en el Archivo Histórico de la Agencia EFE, nos hemos servido, para tal fin, de la propia base de datos de la Agencia (EFEData) así como, por supuesto, de la bibliografía disponible sobre los personajes.

El segundo bloque de la memoria concentra los capítulos centrales de la investigación. Su disposición se ha basado en las funciones que, de acuerdo con las teorizaciones de Enrique Bustamante y Ramón Zallo, desempeñaría el Estado con respecto a los medios de comunicación. Zallo ha considerado en este sentido tres tipos de actuaciones estatales: la de promotor (o elaborador y difusor directo de comunicación); la de cofinanciador y la de regulador (1988: 8). Muy parecidos, aunque no exentos de matices, son los tres roles del Estado propuestos por Bustamante (2003: 35)³⁴: el de “Estado-Gestor de la producción de productos culturales y comunicativos” (ya en régimen de monopolio, ya de competencia); el de “Estado-Incitador” a partir, sobre todo, de ayudas pecuniarias directas e indirectas al sector; y el de “Estado-Regulador” o árbitro encargado de la fijación de las condiciones de actuación de los agentes sociales implicados en el sistema. De la adaptación de estas dos sencillas clasificaciones a nuestro objeto de estudio resultan los tres capítulos del segundo bloque, en los que atendemos a la tamización del sistema de prensa privada, a la regulación de la propiedad y gobierno de las empresas periodísticas privadas autorizadas a editar diarios y a la intervención de la Administración sobre su economía.

Hemos denominado “tamización” del sistema de prensa a la potestad estatal de restringir la edición de diarios de información general y por tanto de acceder al sistema de prensa privado a aquellas empresas y particulares considerados adecuados por la Administración. De esta potestad discrecional se ocupa el capítulo quinto, en el que examinamos el fino tamiz político que empresas y empresarios hubieron de superar para poder ejercer la actividad periodística. El capítulo dirige su atención al principal instrumento de tamización del sistema, el Registro de Empresas Periodísticas, así como a los procedimientos y criterios de concesión de las autorizaciones previas y a las maniobras administrativas de inadmisión y expulsión del panorama español de prensa diaria. Para ello, analizamos caso a caso la tramitación que hizo la Dirección General de Prensa de las solicitudes de inscripción registral presentadas por empresas y particulares entre 1966 y 1975 (además de las presentadas entre 1962 y 1966, a modo de referencia previa), así como las dos cancelaciones registrales dictaminadas por la Administración en 1969 y 1971.

Una vez definidos los mecanismos y criterios de circunscripción del sistema, el capítulo sexto atiende a la regulación de la propiedad y gobierno de las empresas privadas autorizadas a editar prensa diaria. Partiendo de las definiciones que Zallo (1988) y Bustamante (2003) proponen en sus clasificaciones, entendemos por regulación la función estatal de ajustar el funcionamiento del sistema de prensa diaria fijando las

³⁴ Quien remite, en este punto, a la obra de J.M. Slaüm *A qui appartient la télévision?* (1989).

condiciones y normas de actuación que han de seguir los agentes sociales que en él participan; en nuestro caso, las empresas periodísticas editoras de diarios de información general.

El capítulo se detiene, en primer lugar, en la normativa tardofranquista relativa al acceso y tenencia de la propiedad de las empresas, así como a las condiciones legales referidas a su gestión y gobierno. Este primer examen legislativo se completa con el estudio del conjunto de maniobras administrativas extralegales ejercidas sobre la propiedad y gobierno de las empresas: nos detendremos en todas y cada una de las actuaciones ejecutadas entre 1966 y 1975 por el Ministerio de Información sobre accionistas y directivos, así como en su intervención y papel en todas las operaciones de cambio de propiedad y gestión que se dieron en el sistema durante el periodo. En el capítulo queda evidenciada la existencia de un aparato orgánico de vigilancia orquestado en los años sesenta por la Dirección General de Prensa dirigido a conocer y controlar las estructuras accionariales y directivas de las empresas y cuyas informaciones sirvieron de base a un sinfín de intervenciones no estrictamente sujetas a la legalidad.

Cierra el bloque el capítulo séptimo, en el que abordamos el conjunto de normas y actuaciones orientadas a intervenir en la vida económica de las empresas, bien contribuyendo a su financiación directa e indirectamente, bien interviniendo en partidas fundamentales de sus cuentas. El capítulo aborda, en primer lugar, los diferentes mecanismos estatales de financiación de la empresa periodística, así como los criterios que rigieron su concesión o denegación. En él son analizados todos los instrumentos de financiación manejados por la Administración entre 1966 y 1975: las primas y desgravaciones a la adquisición de materias primas, la reducción de tarifas telefónicas, telegráficas y postales y la fijación de precios políticos a los despachos de la Agencia EFE, la concesión de créditos oficiales, el pago por la publicación de informaciones favorables al Gobierno calificadas de “publicidad redaccional”, e incluso la existencia de montos de procedencia incierta y muy probablemente empleados como “fondos de reptiles”. Completan el trabajo, el análisis de la regulación de partidas fundamentales de ingresos y gastos, como la publicidad y los salarios, y, sobre todo, del empleo que durante el tardofranquismo hizo la Administración de las facultades coercitivas de sanción y suspensión que la LPI le concedía, y que, naturalmente, no dejaron de generar gravísimas consecuencias económicas a las empresas periodísticas privadas más díscolas.

Por último, acompañan y completan el cuerpo de la memoria, catorce anexos con documentos originales y un apéndice *on line*, disponible en la página web [<http://vps27969.ovh.net>]. Los anexos incluyen, además de las Leyes de Prensa de 1938 y 1966, un influyente informe sobre el proyecto de Ley de Prensa, base de la posterior Ley

Fraga; los documentos originales en que se ha basado el estudio de las doctrinas sobre prensa de FET de las JONS y la ACN de P³⁵; varios informes y circulares de la Dirección General de Prensa relativos al Registro de Empresas Periodísticas; algunos informes y documentos sobre empresas que, al no haber sido autorizadas a editar diarios de información general no se incluyen en el apéndice final³⁶; algunas cuartillas taquigráficas de la discusión en Cortes de la Ley de Prensa de 1966 especialmente significativas; y varios documentos relativos a la “publicidad redaccional” y a los “fondos de reptiles”.

En el Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975) quedan recogidos buena parte de los documentos y datos que han fundamentado la investigación. A través de la página web [<http://vps27969.ovh.net>] puede accederse sin dificultad a cada una las empresas privadas que editaban diarios de información general en 1967 y 1975 y encontrar detalles de (a) los diarios de su propiedad; (b) los documentos originales más relevantes hallados en su expediente registral y en los que se ha basado el estudio de las actuaciones extralegales de que fueron objeto por parte de la Administración; (c) su estructura accionarial con detalle de los porcentajes de propiedad de todos los accionistas que superaban el 2% del capital; y (d) la composición de sus órganos de gobierno, con especificación de los cargos de cada uno de sus consejeros y directivos, así como de las funciones políticas por ellos desempeñadas y de las conexiones que, en los dos años de referencia, mantuvieron con otras empresas financieras e industriales españolas.

³⁵ En el anexo II se reproduce el *Estatuto de Prensa de FET de las JONS*; y en el III, el *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, de la ACN de P.

³⁶ El anexo VIII contiene los documentos sobre Prensa Catalana; el anexo IX, los documentos sobre PRISA; y el anexo X, los documentos sobre el efímero Diario *Nivel*.

Bloque I: Bases de la intervención tardofranquista en el sistema de prensa privada

2. Bases institucionales del sistema de prensa privada tardofranquista

Cinco ministros y dos directores generales dominaron el aparato administrativo de gobierno de la prensa española durante el tardofranquismo. La mayor parte de ellos pertenecían a la órbita de influencia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACN de P) y no habían dudado en declararse “sucesores” de la política aplicada en los años sesenta por Manuel Fraga. El día de 1962 en que éste juraba su cargo como ministro de Información y Turismo, habían pasado ya casi dos décadas desde que el falangismo se viera obligado a dejar el poder de la prensa en manos de la ACN de P, en un traspaso de competencias ligado tanto al contexto exterior en el que hubo de desenvolverse la dictadura como a la correlación de fuerzas interna del Régimen. De ambos factores dependió, desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador, la atribución de los organismos estatales de gobierno de la prensa, desde cuyos despachos se orquestó e implementó el modelo de control de la empresa periodística privada que nos ocupa en la presente investigación.

Durante los casi cuarenta años de existencia de la dictadura franquista, las competencias en materia de prensa fueron asumidas por hasta siete organismos de máximo rango administrativo: la Junta de Defensa Nacional y la Junta Técnica del Estado, la Secretaría General del Estado, el Ministerio del Interior (posteriormente rebautizado como Ministerio de Gobernación), la Secretaría General del Movimiento, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Información y Turismo. A este vaivén hay que añadir, además, la variedad de direcciones generales, jefaturas, servicios, delegaciones nacionales, vicesecretarías, oficinas y subsecretarías que, dentro de los organismos anteriores, asumieron la responsabilidad directa sobre la materia.

En el primer año de la Guerra Civil, la prensa que operaba en el territorio español controlado por los sublevados se mantuvo bajo el control de la Junta de Defensa Nacional y la Junta Técnica del Estado³⁷. En enero de 1937, su dirección se traslada a la Secretaría General del Estado; y apenas un año después, con la constitución del primer gobierno presidido por el general Francisco Franco, al Ministerio del Interior. Hasta este momento, y salvo alguna excepción, los responsables directos del aparato de prensa habían sido militares. Desde enero de 1938, la prensa queda bajo el gobierno de Ramón Serrano Suñer, un joven falangista en franco ascenso y cuñado del nuevo Jefe del Estado.

³⁷ La Junta de Defensa Nacional, constituida en Burgos el 24 de julio de 1936, se autodisuelve el 29 de septiembre de ese mismo año, al tiempo que nombra al general Francisco Franco Bahamonde Jefe de Gobierno del Estado español con “todos los poderes del nuevo Estado” (Decreto 138/1936, de 29 de septiembre). Unos días después, el primero de octubre de 1936, nace la Junta Técnica del Estado.

Su control se mantendrá —encuadrado en el Ministerio de Gobernación, nacido el último día de 1938 de la fusión de Interior y Orden Público— hasta dos años después del final de la Guerra Civil. En 1941 se produce un cambio crucial: las competencias administrativas sobre la prensa pasan a depender de la Secretaría General del Movimiento —con rango ministerial desde 1939—, bajo la dirección de José Luis Arrese. El partido unificado disfrutará de su control hasta 1945, mientras en Europa y el Pacífico se dirime la II Guerra Mundial. Con el final de la guerra, y derrotadas las potencias del Eje, la prensa escapará definitivamente de la órbita del Movimiento. Desde 1945 —coincidiendo con la llegada del líder acenepista, Alberto Martín Artajo, al Ministerio de Asuntos Exteriores—, la prensa pasará a ser competencia del Ministerio de Educación Nacional, controlado por el católico José Ibáñez Martín. Los acenepistas mantendrán la responsabilidad político-administrativa sobre la prensa hasta la creación del Ministerio de Información y Turismo en julio de 1951. Bajo la dirección y control de los titulares de esta cartera —Gabriel Arias Salgado (1951-1962); Manuel Fraga Iribarne (1962-1969); Alfredo Sánchez Bella (1969-1973); Fernando de Liñán y Zofío (1973-1974); Pío Cabanillas Gallas (enero-octubre 1974); y León Herrera y Esteban (1974-1975)— quedará la prensa hasta incluso poco después de la muerte de Franco.

Para algunos autores, este vaivén orgánico no modificó la naturaleza del control político sobre la prensa. Esta es, por poner sólo un ejemplo, la opinión de Justino Sinova, para quien los cambios en el gobierno de la prensa no afectaron a la esencia de su control político. Para Sinova, pudieron variar la organización y estrategia, pero nunca la intención subyacente (Sinova, 1989a: 84). Carlos Barrera opina, en cambio, que los cambios de dirigentes y organismos, así como de los contextos interior y exterior, marcaron una política de prensa caracterizada por la incoherencia y la falta de uniformidad (Barrera, 1993: 97). En realidad ambas posturas resultan compatibles, en la medida en que, si bien los cambios en el gobierno del aparato administrativo de la prensa no dejaron de afectar al modelo de control político aplicado sobre el sector, tal modelo pareció mantener, a pesar de todo, un espíritu inalterado. En las páginas que siguen se nos irá haciendo evidente la impronta que, en el marco de un modelo autoritario de control político, dirigentes como Manuel Fraga y “familias” franquistas como la ACN de P dejaron en la actuación del Estado sobre la materia, en general, y sobre la intervención y control de la empresa periodística privada, en particular.

No pocos historiadores han atribuido la longevidad de la dictadura a su mutabilidad, fruto de una pertinaz vocación de permanencia y de una extraordinaria capacidad de adaptación a las circunstancias internas y externas (Tusell, 1996: 169; Juliá, 2003: 143). En este sentido, el aparato de gobierno de la prensa pareció constituir

un instrumento más de adaptación y supervivencia: su control administrativo fue oscilando entre unas “familias” y otras de acuerdo con dos factores. En primer lugar, motivado por la correlación de fuerzas que, en cada momento, se dio en el seno del aparato de poder del Régimen. Esto, de todos modos, no significa que la familia “dominante” (si es que puede hablarse de tal) o que más poder acumulara en cada gobierno ejerciera por ello el control del aparato de prensa (de hecho, como más adelante veremos, las responsabilidades en la materia fueron desdeñadas por algunos sobre todo a partir de los años sesenta); aunque sí puede afirmarse que dicho control se inscribe dentro del equilibrio de poder que Franco mantuvo entre las “familias”, al menos hasta la última etapa de la dictadura³⁸. En segundo lugar, osciló movido por las circunstancias exteriores, así como por la imagen que el franquismo quiso o se vio impelido a proyectar al exterior en cada momento. Por todo ello, un correcto entendimiento de las bases institucionales nos obligará a atender el contexto general —político y económico, y tanto interno como externo— en que se desenvuelve el Régimen y que propicia (y explica) dichos cambios.

Tal contexto afectó, por otra parte, no sólo al color político del gobierno de la prensa, sino a su estabilidad misma. Una primera observación del baile de competencias que se dio en el aparato administrativo permite apreciar una notable diferencia entre los primeros y últimos años de la dictadura con respecto al periodo central, que arranca en 1952 y se cierra en 1969; de modo que cabría distinguir, en lo que a estabilidad de las

³⁸ Tal y como apuntábamos en la Introducción, el empleo de la categoría “familias” para el estudio de las relaciones de poder en el seno del Régimen presenta, en efecto, no pocos problemas. El concepto remite al “pluralismo político limitado” que algunos autores, siguiendo al sociólogo Juan José Linz, han querido ver en el franquismo, en tanto régimen autoritario. Para empezar, los criterios con que han sido definidas las “familias” integrantes de la coalición franquista han adolecido de una falta de coherencia flagrante (así, por poner sólo un ejemplo, el discípulo de Linz, Amando De Miguel, propuso en 1975 una clasificación heterodoxa de las nueve familias que pugnarían por el poder en el seno del Régimen; cada una de las cuales se definiría por un rasgo diferente: los militares, por su profesión; los “primorriveristas”, por su pasado, etc.)

A ello hay que añadir que los límites entre “familias” son cuanto menos difusos y que cada dirigente franquista podía pertenecer, ya de forma oficial u oficiosa, a varias familias al tiempo, sin que ello, por otra parte, les obligara demasiado para con ellas, dado que tampoco a ellas debían su ascenso. Esto último viene explicado por el componente personalista de la dictadura de Franco; quien —desplegara o no en toda su plenitud su omnipotencia política (dado que, según parece, dejó un amplio margen de maniobra a sus ministros [Tusell, 1996: 149])—, siempre pudo componer sus gobiernos con relativa libertad: sus ministros accedían al cargo merced a la decisión personal del dictador, sin que el respaldo que pudieran obtener de sus grupos políticos de procedencia fuera determinante (Juliá, *op. cit.*: 144). Esta idea quedaría confirmada por la apreciación de que, en realidad, nunca fueron los máximos exponentes de cada familia (salvo, quizás, en un primer momento, Ramón Serrano Suñer y algo más adelante, Alberto Martín-Artajo) quienes alcanzaron la cartera ministerial. Ésta siempre les fue concedida a personajes secundarios o, cuanto menos, más templados e indefinidos en sus posiciones. Ello ha llevado a autores como Santos Juliá a concebir las “familias” como “extensas organizaciones burocráticas”, sin más importancia que la cooptación y formación de personal dirigente (Juliá, *ibidem*). Con todo, la adscripción “familiar” de los dirigentes franquistas coadyuvará al entendimiento de las bases institucionales e ideológicas del sistema de prensa.

competencias en prensa se refiere, tres periodos. (a) Desde 1936 y hasta la creación del Ministerio de Información y Turismo (MIT), la prensa había pasado por hasta seis organismos diferentes y por la dirección de cinco responsables del máximo nivel. Mayor aún es el número de sus responsables directos, entre jefes de gabinetes y oficinas, delegados nacionales, directores generales, vicesecretarios y subsecretarios. (b) Entre 1952 y 1969, en cambio, la prensa quedará integrada en el organigrama del MIT, cuya titularidad ocuparán únicamente dos ministros; y en una Dirección General de Prensa bajo el control de tan sólo cuatro dirigentes. (c) En 1969, por último, y a pesar de que el MIT mantiene sus atribuciones sobre la materia, se multiplican los cambios en los cargos: hasta 1976 ocuparán la cartera cuatro ministros; y la antigua Dirección General de Prensa —desgajada desde 1973 en una Dirección General de Coordinación Informativa y una Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa—, seis personas. De esta forma, bien puede afirmarse que, cuanta mayor estabilidad tuvo del Régimen, de mayor estabilidad gozaron las instituciones encargadas del control de la prensa; mientras que, cuanta mayor inestabilidad e incertidumbre hubo, mayor vaivén institucional y de personal dirigente se produjo.

El primer periodo, entre 1936 y 1951, corresponde a un momento fundacional del “Nuevo Estado”, en el que se fijan sus bases jurídicas y organizativas. De hecho, es en la década de los cuarenta cuando se aprueban tres de las Leyes Fundamentales del franquismo: la Ley de Cortes, en julio del 1942; el Fuero de los Españoles, en julio de 1945; y la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, en julio del 1947. Es además en estos momentos cruciales de instauración y definición cuando se producen los más graves disensos internos entre “familias”. Las pugnas abiertas entre falangistas y militares (sobre todo) y falangistas y carlistas por la primacía en el nuevo orden, sin olvidar los movimientos de los monárquicos³⁹ —luchas que llegarán incluso al enfrentamiento violento en los sucesos de Begoña de 1942⁴⁰—, obligarán a Franco a tramitar en estos años delicados encajes de equilibrios en la composición del Consejo de Ministros:

³⁹ El 19 de marzo de 1945, Don Juan de Borbón difunde el “Manifiesto de Lausana”, en el que defiende la monarquía constitucional. Dos años antes, los monárquicos había pasado a la ofensiva aprovechando el giro en el curso de la II Guerra Mundial favorable a los aliados; ofensiva sólo atenuada por el miedo a un nuevo conflicto civil. En respuesta a estos movimientos, “La táctica de Franco se basaba en su completa calma y su aire de absoluta seguridad, su negativa a reaccionar, excitarse o hacer la más mínima concesión real por una parte, al tiempo que por la otra convencia a los monárquicos nominales y a sus amigos de que era indispensable. Los monárquicos representaban sobre todo a la élite social y económica; nadie más que ellos temía un salto al vacío. El peligro de que cualquier intento serio de retirar a Franco pudiera abrir la puerta a la subversión del Estado nacionalista, al desorden interno o a otra guerra fratricida era suficiente para disuadir a casi todos antes de probar” (Payne, 1987: 342).

⁴⁰ El 16 de agosto de 1942 un grupo de falangistas arroja dos granadas de mano a la salida de misa en el Santuario de Begoña. Resultan heridos entre 30 y 117 carlistas. Seis falangistas serán llevados a consejo de guerra y uno será ejecutado. Franco se verá obligado a abrir una crisis de

El periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil [asegura Payne], coincidiendo con las tensiones de la II Guerra Mundial, fue la época de mayor disidencia de las élites nacionalistas. Estos años revelaron serias deficiencias en la nueva estructura burocrática y administrativa, junto con fuertes divergencias de criterios entre las principales familias políticas del régimen [...] Sus sucesivas reorganizaciones de gobierno entre 1939 y 1945 fueron así cruciales para consolidar su propia autoridad sobre los militares en particular y sobre el régimen en general [...] (Payne, 1987: 354).

Introduce Payne otro factor que explica la indefinición del Régimen en este primer periodo: la incertidumbre del escenario internacional ante la II Guerra Mundial y la vacilación en su postura en el conflicto. La política exterior española basculará, de 1939 a 1945, entre la neutralidad y la no beligerancia, aunque nunca dejara de mostrar sus preferencias y simpatías por el Eje totalitario (De Riquer, 2010: 79) —cuya ayuda, por cierto, había sido fundamental para la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil— hasta el punto de situarse al borde de la beligerancia tras la toma de Francia por parte de los alemanes⁴¹. Enseguida comprobaremos cómo esta posición del primer franquismo próxima al Eje no dejará de tener consecuencias en la política interior española y, en concreto, en el control institucional de la prensa, en un momento crítico de configuración sistémica.

Frente a la indefinición y construcción institucional de los primeros momentos, las décadas de los cincuenta y sesenta constituirán un momento de estabilización y consolidación (Payne, *op. cit.*: 427; *Cf.* De Riquer, 2010: 347). El Movimiento había visto reducido su poder, mientras los militares seguían siendo el principal garante del sistema, cuya política religiosa, cultural y educativa se había desarrollado desde los parámetros del nacional-catolicismo (Payne, *ibídem*). En el ámbito exterior, los cincuenta suponen la apertura del Régimen y el fin del aislamiento anterior. La aceptación de parte de la comunidad internacional quedará refrendada por la firma del Concordato con la Santa Sede, en agosto de 1953; y por los pactos económicos y militares suscritos con Estados Unidos, en septiembre de ese mismo año. Ligado a esta apertura al exterior se encuentra también la integración de la economía española —luego de un profundo cambio y del definitivo abandono del modelo autárquico— en la estructura del capitalismo internacional. En 1958, España entra en la Organización para la

gobierno y a recomponer el equilibrio entre familias, que según Santos Juliá se salda sin vencedores ni vencidos, aunque sí con un refuerzo de la autoridad de Franco como árbitro de la lucha entre familias y hábil hacedor de equilibrios (Juliá, 2003: 144).

⁴¹ “Aunque Franco [concluye Payne] mantendría después que el gobierno español siempre había sido neutral y que ‘nunca’ [...] consideró la posibilidad de entrar en la guerra al lado del Eje, las muestras de que el régimen iba en esa dirección son claras y abundantes. España fue relativamente neutral sólo durante la primera fase (1939-40) y la última (1944-45) de la guerra, cuando la victoria alemana era dudosa y después virtualmente imposible” (*op. cit.*: 351).

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el Banco de Importaciones y Exportaciones y en el Fondo Monetario Internacional. Un año después, la nueva política económica española cristaliza en el Plan de Estabilización, que viene a favorecer la concentración del capital y a fomentar las inversiones extranjeras. Ya en los sesenta, se podrán en marcha los Planes de Desarrollo, coronando así una liberalización ante la que Franco, por cierto, no dejará de mostrarse receloso. El periodo se cierra, en 1967, con la culminación del edificio institucional del Régimen que supone la aprobación, en enero, de la Ley Orgánica del Estado.

A partir de 1969, sin embargo, el franquismo entra en un declive progresivo que se tornará en crisis al menos desde 1973. Emergen en este momento las tensiones larvadas de la década anterior entre quienes pretenden garantizar la continuidad del Régimen ampliando su base social y permitiendo cierta participación política, y quienes se muestran intransigentes a cualquier cambio. El año 1969 se abre, de hecho, con la declaración del estado de excepción por la muerte del estudiante Enrique Ruano y se cierra con el estallido del escándalo Matesa, en el que afloran los conflictos íntimos entre ministros. La oposición, tanto interior como exterior (y a la que se suman algunos sectores del clero católico, ante el desconcierto del franquismo y del propio Franco), no dejará de fortalecerse durante la década de los setenta; a lo que la dictadura responderá con un consiguiente aumento de la represión. En 1975, la desbandada de los dirigentes vinculados al franquismo, deseosos de forjarse una nueva identidad política, es ya masiva, y

La opinión moderada —que en 1975 era la corriente mayoritaria en una España próspera y relativamente avanzada— tenía sus miras [puestas] más allá de Franco, en la transición monárquica, para que realizara la reforma representativa de las instituciones españolas (Payne, *op. cit.*: 637).

Todo ello se traducirá en un nuevo periodo de inestabilidad política, con numerosas crisis de gobierno y dos cambios en su jefatura, que había sido acaparada por Franco durante los treinta y siete años anteriores.

La periodización que resulta de estos cambios en el aparato administrativo de prensa no basta, con todo, para obtener un cuadro completo de las competencias en la materia. A esta división en tres etapas basada en la estabilidad institucional es preciso superponer otra basada en la adscripción “familiar” de los organismos y dirigentes. La aplicación de este criterio político permite distinguir cuatro periodos claramente diferenciados; a saber (a) Una primera etapa falangista (antecedida de un brevísimo control militar), que arranca en 1936 y se extiende hasta 1945; (b) un segundo momento de dirección acenepista entre 1945 y 1951; (c) una tercera etapa entre 1951 y 1962 en la

que Gabriel Arias Salgado —quien, como luego veremos, aunque formalmente falangista y sinceramente ultracatólico, no cabe ser encuadrado en ninguna de estas dos “familias”— asume la responsabilidad en la materia, ya por cierto desde las oficinas del MIT; y (d) una última etapa de 1962 a 1975 abierta con la toma de posesión de la cartera de Información y Turismo por Manuel Fraga, a quien sucederán ministros que mantendrán por lo general una política de continuidad, y que llega hasta poco después de la muerte del dictador.

Las tres primeras etapas quedan encuadradas en este capítulo en un macro periodo en el que nos detendremos a continuación en tanto antecedente del tiempo que verdaderamente nos ocupa: el tardofranquismo, que consideramos iniciado con la aprobación de la Ley Fraga en marzo de 1966 y finalizado con la muerte del dictador en noviembre de 1975.

2.1 El aparato administrativo de prensa hasta el tardofranquismo

Hasta la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información a principios de los sesenta, el gobierno del aparato administrativo de prensa había pasado por tres periodos claramente definidos en función del color político y grupos de adscripción de sus dirigentes. Durante la inmediata posguerra, entre enero de 1938 y julio de 1945, ostentarán su control dos grupos de falangistas con talentos y proyectos bien diferentes y encabezados, respectivamente, por Ramón Serrano Súñer y José Luis Arrese. Con el final de la II Guerra Mundial, el aparato de prensa pasará a la “familia” acenepista, mucho más “presentable” a las potencias aliadas vencedoras, en general, y a Estados Unidos, en particular, que el falangismo. Aunque el control acenepista se extenderá formalmente hasta 1952, su influencia sobre el aparato administrativo de prensa se mantendrá, como veremos, más o menos inalterada hasta el final de la dictadura. Por fin, en 1951 accede a las recién inauguradas oficinas del Ministerio de Información el franquista ultracatólico Gabriel Arias Salgado, quien acaparará las competencias durante toda la década de los cincuenta y hasta 1962.

Tres periodos y dos décadas en los que se establecerán y estabilizarán, a partir del marco legal pergeñado en 1938, dos de los pilares maestros del modelo estatal de control del sistema español de prensa privada: el control de los contenidos, basado en la censura previa y la difusión de consignas; y el control de la profesión, a través del monopolio estatal de la enseñanza del periodismo, de un registro oficial de profesionales y de la designación administrativa de los directores de las publicaciones. Los leves cambios que se irán operando en la gestión de ambos pilares nos permitirán ir

vislumbrando las diferencias entre las “familias” y dirigentes que ocuparon las competencias en materia de prensa durante el macro periodo y acceder a los estratos inferiores al aparato orgánico tardofranquista de gobierno de la prensa.

2.1.1 El periodo falangista (30 de enero de 1938 a 27 de julio de 1945)

El 30 de enero de 1938 Ramón Serrano Suñer recibía las atribuciones en materia de prensa en calidad de ministro del Interior. Se iniciaban entonces, tras un breve periodo de diecisiete meses de control militar, siete años de gobierno falangista del aparato administrativo de prensa; un tiempo no poco convulso, en el que ni un único dirigente logrará acaparar el control de la prensa española, ni quedará ésta encuadrada en un único organismo administrativo. Tal y como comprobamos, la inestabilidad del Régimen —fruto del momento fundacional, del consiguiente disenso interno y de la incertidumbre exterior ante la II Guerra Mundial— se traducirá en varios cambios en el control político-administrativo del sector. Cabe así distinguir tres fases o etapas: un primer y breve momento de control militar; la asunción de su dirección por parte de Ramón Serrano Suñer y su equipo de jóvenes falangistas desde el Ministerio del Interior y luego de Gobernación; y, finalmente, la etapa de la Vicesecretaría de Educación Popular, dependiente de la Secretaría General del Movimiento de José Luis Arrese.

Durante este primer periodo y a lo largo de estas tres etapas, cabe constatar dos tendencias fundamentales en el devenir de las competencias político administrativas en la materia: (a) fue éste, en primer lugar, un tiempo de creación y organización del aparato institucional de control del sistema de prensa: a un primer momento de proliferación de organismos le seguirán los intentos de unificar y centralizar dicho aparato institucional; (b) se constata, además, la transferencia del gobierno de dicho aparato de las manos de los militares a la de los dirigentes del partido unificado⁴²; se produce un proceso de “fascistización” o “falangización” del organigrama de la prensa que, sin embargo, gracias al contrapeso ejercido por los militares (y probablemente también por el propio Franco, v. *infra*) no logrará trasladarse del todo —o al menos no en la misma medida en

⁴² Según Juan Beneyto, en 1938 se aprecia cierta tendencia a ir concediendo los organismos de propaganda al Partido, mientras el Estado se reserva las atribuciones sobre el control de la prensa. A esta estrategia de división de competencias responden dos disposiciones básicas: (a) la Orden del Delegado de Prensa y Propaganda del Partido de 11 de agosto de 1938 por la que los servicios de las Delegaciones Provinciales falangistas de Prensa y Propaganda pasan a las Jefaturas controladas por los gobiernos civiles; y (b) la Circular de 27 de junio de 1938 del Jefe del Servicio Nacional de Propaganda por la que se establece una sola jefatura Provincial de Propaganda bajo la disciplina de Falange (Beneyto, 1944: 26). Esta división de competencias finalizaría, en todo caso, en 1941 con el traspaso total de las atribuciones en la materia a la Vicesecretaría de Educación Popular, bajo control del Partido (Beneyto, *ibídem*).

que, parece, habrían deseado los cuadros falangistas— a la normativa más importante que se alumbrará en estos años: la Ley de Prensa de 1938. Es preciso distinguir, sin embargo, dentro de este proceso de “falangización”, dos momentos muy diferentes que parecen revelar la poca disposición de Franco a otorgar todo el poder de la prensa a FET de las JONS: en una fase inicial, ésta queda encuadrada en el Ministerio de Gobernación (antes Interior) y dirigida por falangistas radicales que tratarán de aumentar el poder del Partido sobre la materia; en un segundo momento, la relación de poder se invierte: la prensa queda adscrita al Partido, pero dirigida por falangistas más dóciles a las instrucciones del Gobierno y fundamentalmente designados en base a su lealtad personal a Franco. El dictador logrará así evitar un control administrativo total de la prensa por parte de FET, si bien su poder creciente sobre la materia resulta incuestionable.

Este proceso de asunción de poder institucional en materia de prensa por parte de FET de las JONS —proceso que, aunque contrarrestado por los últimos dirigentes designados, culmina con el traspaso de las competencias a la Secretaría General del Movimiento en 1941—, viene explicado en gran medida por las circunstancias exteriores, que no dejan de condicionar la política interior del franquismo. En 1939, el nuevo Régimen ha superado las circunstancias excepcionales impuestas por la Guerra Civil; circunstancias que habían llevado, en los años anteriores, a la supeditación de todos los órdenes —incluido, por supuesto, el control de la prensa— a las necesidades militares; lo que explica la adscripción inicial de las competencias administrativas en la materia al ejército sublevado. En los años siguientes, este poder acumulado por el ejército —que, de todos modos, seguirá siendo medular para el Régimen⁴³— entrará en competencia con el ascenso del Partido, que comienza a ocupar posiciones clave, tanto en el Gobierno como en el Estado.

Se encuentra dicho Estado, a la altura de 1939, con tres cuestiones urgentísimas: en primer lugar, la necesidad de reconstrucción económica, a la que tratará de dar respuesta con una política proteccionista y autárquica —envés económico del nacionalismo político franquista—, que se revelará como poco menos que desastrosa (Martínez, 1993: 319; Barciela, 2001: 28 y *pássim*; García & Jiménez, 2003: 359-370); en segundo lugar, se

⁴³ “La posición predominante [explica Stanley G. Payne] en el nuevo Estado la tenían las Fuerzas Armadas, que habían iniciado el movimiento nacionalista y lo habían llevado a la victoria. Durante la primera fase de la posguerra, los militares jugaron un papel mucho más importante y ocuparon más altos cargos en el gobierno y el sistema administrativo que el partido único oficial” (Payne, *op. cit.*: 256). Payne contabiliza la relación de cargos ministeriales hasta 1945 en 45’09% para los militares y 37’9% para los falangistas. Estas cifras deben ser de todos modos aceptadas con cautela, dado que muchos falangistas lo eran sólo formalmente y muchos militares también tenían el carnet del Partido. Borja de Riquer, quien corrobora las cifras de Payne, subraya que la importancia de los militares se mantuvo en los gobiernos posteriores, de 1945 a 1957, en los que coparon el 43% de los cargos, frente al 27% de los falangistas y el 29% de los católicos (De Riquer, 2010: 25).

verá obligado a organizar y reforzar el poder político del Estado recién instaurado, lo que motivará, entre otras actuaciones, la aprobación de las Leyes de Administración Central del Estado (de enero de 1938), de Responsabilidad Política (de febrero de 1938), de refuerzo del poder del Jefe del Estado (en agosto de 1939) y de Seguridad del Estado (de marzo de 1941). La propia la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 también puede ser interpretada en esta clave de necesidad de consolidación política del nuevo Estado.

El tercer problema, y el que acaso más trascendencia tuvo en la política interna, procede del exterior: en 1939 estalla la II Guerra Mundial, en la que la posición de España variará entre la neutralidad y la no beligerancia. Por supuesto, esta vacilación no dejará de afectar a los movimientos políticos del interior del país. El desarrollo de la guerra condicionará la orientación política de los primeros gobiernos franquistas y llevará a España a aproximarse, al menos hasta octubre de 1943, a la Italia fascista y a la Alemania nazi, antiguos aliados de los sublevados durante la Guerra Civil. Existe consenso entre los historiadores en la admisión de la importancia del partido unificado durante los años en que la victoria del Eje pareció inevitable en Europa. Santos Juliá, por ejemplo, denomina a este tiempo “la hora de los fascistas” y subraya el poder creciente que en los gabinetes de Gobierno y en el Estado en general va adquiriendo FET de las JONS:

Sólida posición en el gobierno [describe], propietaria de un amplio aparato de prensa y propaganda, gestora de delegaciones y comisarías sin cuento, dueña de la Organización Sindical, con una extensa implantación entre mujeres, jóvenes y adolescentes, con decenas de miles de consejeros locales, miles de jefaturas locales y provinciales, con el Instituto de Estudios Políticos y enjambres de intelectuales afanados en elaborar la teoría del caudillo fundido con el pueblo en el destino imperial de la nación, fueron éstos los momentos de mayor entusiasmo fascista, en las altas como en las bajas esferas de Falange (Juliá, 2003: 140-141).

Stanley G. Payne, por su parte, califica de “semifascista” a este primer periodo, y denomina “La fase alemana” a los años que van de 1940 a 1942. Unos meses antes, el 8 de agosto de 1939, Franco había sentado las bases de este periodo “alemán” al nombrar a cinco ministros falangistas, entre camisas viejas y camisas nuevas, para el nuevo Gobierno (mientras que en el anterior gabinete sólo había dos); además de conceder a la Secretaría General del Movimiento el rango ministerial. El acercamiento al fascismo y el consiguiente apogeo del poder de FET de las JONS se alcanzará en torno al verano de 1940, tras la caída de París en poder del ejército alemán. Finalmente, sin embargo, la suerte de Falange, intrínsecamente ligada al éxito del Eje en la Guerra, acabará por decaer hacia 1943, cuando España vuelva a su posición inicial de estricta neutralidad en la contienda e inicie sus movimientos de acercamiento a los futuros vencedores. Tanto el

contexto exterior, marcado por la suerte del Eje en la Segunda Guerra Mundial, como el peso correlativo que fue adoptando FET de las JONS en el aparato de poder político del Régimen recién instaurado, determinaron el baile de competencias al que fue sometido el aparato administrativo de control de la prensa española.

La formación del primer Gobierno presidido por Francisco Franco, en enero de 1938, supone, como hemos explicado, la unificación —al menos oficiosa, en la figura de Ramón Serrano Suñer—, de los organismos de prensa estatal y del Partido, que seguirán, de todos modos, funcionando formalmente de modo independiente. Pero sobre todo supone el final de la etapa de control militar de la prensa: las competencias en esta materia pasan desde entonces al Ministerio del Interior⁴⁴, controlado por el cuñado falangista del dictador. Este traspaso de las competencias del ejército al partido unificado —que no dejará, por supuesto, de suscitar las quejas de los militares (Chuliá, 2001: 36)— se enmarca dentro de un proceso generalizado de aumento de poder por parte de FET de las JONS. No conviene, a pesar de todo, exagerar la importancia del Partido dentro de este primer Gobierno, toda vez que el Ejecutivo contará también con varios militares, al frente de carteras muy relevantes en un tiempo que, conviene no olvidarlo, se encuentra aún marcado por la Guerra Civil⁴⁵. Así se expresa a propósito de este primer Gobierno el propio Serrano Suñer:

Hay que decir con claridad que nunca, ni entonces ni después, fuera el Gobierno una emanación del Partido, salvo de un modo formal, pues si es cierto que todos los elementos ministrables pertenecían nominal y forzosamente al Partido, ello era cosa muy distinta a proceder de él. El criterio que presidía la formación del Gobierno pretendía que se cumplieran estos requisitos: competencia personal, representatividad variada (de modo que todas las tendencias integradas en el Movimiento se sintieran satisfechas) y fidelidad al mando (Serrano Suñer, 1977: 255).

Con todo, resulta ya evidente el poder alcanzado en este primer Gabinete por FET de las JONS y, en particular, por Ramón Serrano Suñer; poder que no dejará de aumentar y que acabará desembocando, en diciembre de 1938, en la asunción por parte de éste de la titularidad de la nueva cartera de Gobernación, que integraba los antiguos ministerios de Interior y Orden Público⁴⁶. Dentro de Gobernación se encuadra la

⁴⁴ El traspaso de competencias queda registrado en la Ley de 30 de enero de 1938, de la Administración central del Estado (BOE de 31 de enero).

⁴⁵ El Conde de Jordana será el titular de Asuntos Exteriores; el general Fidel Dávila Arrondo ocupará la cartera de Defensa Nacional; el general Martínez Anido ocupará Orden Público; y José Antonio Suances será ministro de Industria y Comercio.

⁴⁶ Según cuenta Ramón Serrano Suñer en sus memorias, había sido suya la idea inicial de desgajar el Ministerio de Gobernación en dos: uno de Interior (que quedará bajo su dirección) y otro de Orden Público (que asumirá Martínez Anido hasta su muerte) (Serrano Suñer, 1977: 260).

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda⁴⁷ (que posteriormente cambiará su denominación por la de Subsecretaría de Prensa y Propaganda), que comprende a su vez los Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda (convertidos más adelante en Direcciones Generales)⁴⁸. Queda así configurado un organigrama jerarquizado, con una forma piramidal muy similar, según la opinión de Jesús Timoteo, a la del Ministerio de Propaganda nazi de Joseph Goebbels (Timoteo, 1989: 223).

Este primer aparato institucional de prensa y propaganda será ocupado por filofascistas, pues, “tanto Serrano Suñer como Giménez Arnau, como Ridruejo, como Tovar, responsables directos del organigrama y de la doctrina en que tal organigrama se fundamenta, eran, en su momento, rendidos admiradores de Mussolini y Goebbels” (Timoteo, *op. cit.*: 222). Ramón Serrano Suñer —quien, según relata en sus memorias, presta especial atención a la prensa durante esta etapa (*op. cit.*: 132)— reunirá efectivamente, al frente del aparato de prensa, un equipo formado eminentemente por jóvenes falangistas, algunos de ellos incluso procedentes de la Delegación del Partido: José María Alfaro será el primer subsecretario de Prensa y Propaganda; José Antonio Giménez-Arnau asume la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa; mientras que Dionisio Ridruejo ocupa la Jefatura de Propaganda y Antonio Tovar, ascendido al cargo de subsecretario en diciembre de 1940, se encarga de momento de la radiodifusión.

Casado con la hermana de la esposa de Franco, Ramón Serrano Suñer (1901-2003) era un abogado del Estado procedente de las filas de la CEDA; para la que había ejercido como diputado por Zaragoza en 1933. Amigo de José Antonio Primo de Rivera, ya desde las filas falangistas será uno de los principales artífices de la unificación con el carlismo, así como uno de los arquitectos fundamentales del edificio jurídico y político del Régimen nacido como consecuencia del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil (Equipo Mundo, 1970: 23)⁴⁹. Al frente de la prensa, nombrará a

⁴⁷ Ley de 31 de diciembre de 1938 por la que se modifica la anterior Ley de 30 de enero de la Administración Central del Estado.

⁴⁸ Dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, se crea —Orden de 15 de julio de 1939 (BOE de 30 de julio)—, además, una Sección de Censura, encargada de completar la actuación de los Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda. Esta nueva sección viene a dar un paso más en el proceso de unificación de los organismos censores.

⁴⁹ Tras licenciarse en Derecho en 1923 con premio extraordinario por la Universidad de Madrid, Serrano Suñer había ingresado en el cuerpo de abogados del Estado y ampliado sus estudios en Roma y Bolonia. Durante el periodo republicano entabló amistad con José Antonio Primo de Rivera y con José María Gil Robles. Fue también entonces, durante su etapa como diputado de la CEDA por Zaragoza, cuando conocería a Francisco Franco, director entonces de la Academia General Militar. En 1937 y tras huir de Madrid, accede al territorio controlado por los sublevados y recibe el encargo de Franco de organizar el nuevo Estado desde los despachos del Ministerio del Interior, del que toma posesión en enero de 1938. El 9 de agosto de 1939 es elegido presidente de la Junta Política del Movimiento surgido de la unificación de falangistas y carlistas que él mismo había impulsado.

su amigo, José Antonio Giménez-Arnau (1912-1985), responsable de la redacción de la Ley de Prensa de 1938⁵⁰. Giménez-Arnau, quien, como vimos, había estado ya al frente de la Delegación de Prensa del Partido, sumaba a su experiencia como jurista y diplomático la actividad periodística. Según Sinova, era “un escritor santanderino con experiencia periodística, pues había fundado y dirigido el diario *Unidad* de San Sebastián y [...] había sido jefe de prensa de [el sucesor de José Antonio Primo de Rivera en la Jefatura Nacional de Falange] Manuel Hedilla” (Sinova, *op. cit.*: 95).⁵¹ José Antonio Giménez-Arnau será sustituido al frente de la prensa poco después por su hermano, Enrique Giménez Arnau, y éste más adelante, en 1939, por Jesús Ercilla.

Esta “falangización” del organigrama institucional no se traducirá, de momento, en una “falangización” correlativa del sistema de prensa. El Gobierno, y más concretamente los militares que lo componen, se encargará de aminorar el carácter fascista que este equipo, y fundamentalmente Giménez-Arnau con la colaboración de Juan Beneyto, tratará de imprimir al sistema a través de, sobre todo, la Ley de Prensa de 1938. La Ley dedica los primeros artículos a fijar las competencias institucionales sobre la materia: en el artículo primero establece que “corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica. En este sentido compete al *Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa* la facultad ordenadora de la misma [el subrayado es nuestro]”⁵². Se articula, además, el aparato centralizado de control de la prensa a través de la creación de organismos provinciales “afectos” a su respectivo gobernador civil y dependientes del Servicio Nacional (art. 4). Serán precisamente los responsables de estos organismos provinciales, nombrados por cierto por el ministro (art.

Germanófilo convencido, el auge político de Serrano Suñer corrió paralelo a la suerte del Eje en la II Guerra Mundial. El 16 de octubre de 1940, Franco nombra a su cuñado ministro de Asuntos Exteriores, cargo en el que se mantendría hasta septiembre de 1942, momento desde el cual abandona la primera línea de la política española e inicia un tímido acercamiento a posturas monárquicas.

Biografía en EFEData, Base de datos de la Agencia EFE.

⁵⁰ Giménez Arnau reconoce en sus memorias haber sido uno de los autores de la Ley de Prensa de 1938, al confesar haber sentido alivio al ver publicada la Ley de Prensa de 1966, pues, “la *responsabilidad de haber escrito una Ley* [se refiere a la de 1938, por supuesto] para un estado de guerra, que se seguía aplicando en un estado de paz es un tanto incómoda [el subrayado es nuestro]” (Giménez Arnau, 1978: 98).

⁵¹ De acuerdo con la biografía de EFEData, Giménez Arnau era licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctorado por la Universidad de Bolonia. En 1936 había ingresado en el Cuerpo de Técnicos Comerciales. Tras combatir en la Guerra, se trasladaría como enviado de la Agencia EFE (en cuya fundación había intervenido) a Roma, Berlín y Rumanía. A su vuelta a España ingresaría en la carrera diplomática, que compatibilizaría desde entonces con la literatura. Biografía en EFEData, Base de Datos de la Agencia EFE.

⁵² Ley de 22 de abril de 1936, de Prensa (BOE de 23 de abril). Véase original firmado por Francisco Franco en Anexo I.

7), los encargados de ejercer la censura en cada provincia, siguiendo las instrucciones tanto del órgano central como de los gobernadores civiles (art. 6)⁵³.

Hemos subrayado la fórmula empleada en la Ley para la atribución de las competencias ministeriales en materia de prensa; éstas corresponden, literalmente, no al ministro del Interior, sino al “Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa”. La cuestión no es menor, toda vez que en el proyecto de ley que Serrano Suñer había llevado poco antes al Consejo de Ministros sí figuraba la atribución explícita al Ministerio del Interior. Es, pues, este primer Consejo de Ministros el responsable de la modificación que experimenta la fórmula: los ministros habían propuesto que las competencias correspondieran al “Ministerio del Departamento en que radica el Servicio Nacional de Prensa”⁵⁴, propuesta algo más enrevesada, pero esencialmente similar a la que finalmente aparece en la Ley. El cambio sugiere la posibilidad, nada remota, de un futuro cambio de las competencias de prensa del Ministerio del Interior a otro ministerio; o, cuanto menos, la conciencia de los ministros de que dichas competencias no serían asumidas de forma permanente por Interior.

A esta “provisionalidad” que subyace en la Ley acerca de las competencias políticas y administrativas atribuidas en materia de prensa, hay que añadir otro rasgo más que dimana de su articulado: la “estatalización” de dichas competencias en detrimento del Partido unificado. Durante el proceso de elaboración del proyecto de ley, se produjeron presiones para incrementar las facultades de FET de las JONS en materia de prensa; presiones que, sin embargo, no surtieron el efecto esperado. Un documento sin fecha ni firma, pero casi con toda seguridad obra de un miembro del Gobierno (pues se encuentra dentro de un corpus de documentos elaborados en su totalidad por miembros de este primer gabinete) denota un intento explícito por conceder mayor poder al Partido en el control de la prensa. Se propone en él la siguiente redacción para el artículo primero (V. anexo VII):

Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control [sic] de la institución nacional de la prensa periódica por medio del Gobierno *y del Partido* y, en este sentido, compete al Ministerio del Interior *y al Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de*

⁵³ Además de ello, los organismos provinciales se encargan también del cuidado de los duplicados del Registro Oficial de Periodistas, de ejercer de enlaces con los organismos nacionales en relación con los directores de las publicaciones, de informar a la Delegación Nacional de prensa del estado de la prensa en su jurisdicción y de archivar las publicaciones para documentar su actividad (Beneyto, 1944: 29).

⁵⁴ Las enmiendas que el Consejo de Ministros incorpora a la Ley presentada por Serrano Suñer se encuentran en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136

FET la facultad ordenadora de la misma, incluso regulando el número y extensión de las publicaciones de ésta índole [los subrayados son nuestros]⁵⁵.

De forma correlativa, también se exige que sean los delegados provinciales del Partido quienes ejerzan, junto a los gobernadores civiles, la censura y control de la prensa. Se trata, pues, como vemos, de un intento por igualar los organismos del Estado y del Partido, que han de actuar de modo conjunto y coordinado. Esta propuesta, sin embargo, no se recoge finalmente en la Ley, lo que viene a corroborar la idea de que, a pesar de los análisis que se han realizado a cuenta de la “fascistización” que supone esta Ley y del poder de FET de las JONS en su composición, lo cierto es que dicho poder, si bien resulta evidente e insoslayable, no dejó de verse atenuado por el primer Gobierno de Franco; de modo que la Ley de Prensa de 1938 supone más una “estatalización” del control de la prensa que una “falangización” del mismo. Dada la correlación de fuerzas o “familias” presente en el primer ejecutivo franquista, esta disminución del poder del Partido en favor del Estado, no puede ser sino resultado de la acción de los militares (sin excluir al propio Franco), recelosos ante el aumento de poder de FET de las JONS en todos los ámbitos y en, particular, en el de la prensa.

Tal y como enseguida comprobaremos, impulsado por los vientos que vienen de Europa, FET de las JONS no dejará, sin embargo, de asumir cada vez más poder en materia de prensa, dentro de un proceso de “falangización” irresistible que, si bien no cristaliza aún en la Ley de 1938, se había iniciado ya con la asunción de competencias por parte de Serrano Suñer, y que culminará con el traspaso de la materia, de Interior a la Secretaría General del Movimiento. De inspiración falangista serán, pues, algunos de los más importantes pilares del control franquista de la prensa española que se levantan en estos años, como el Registro Oficial de Periodistas (ROP)⁵⁶ y la Escuela Oficial de

⁵⁵ Documento en AGA sig. (3)49.21 c. 65136. Este mismo documento pedía, como más adelante veremos, un régimen especial para los órganos de prensa de FET de las JONS: se demanda, para la prensa propiedad del Partido, la abrogación del apartado 13.d referido a la incautación de periódicos.

⁵⁶ El artículo 15 de la Ley de Prensa de 1938 crea el Registro Oficial de Periodistas (ROP), como instrumento fundamental de conocimiento y depuración de los integrantes de la profesión. Inspirado en los *albi professionali* fascistas y los *berufslisten* alemanes (Chuliá, 2001: 53), el ROP encuentra su antecedente en el tribunal de admisión y permanencia de la Asociación de la Prensa de Madrid, organizado en la Orden de 7 de diciembre de 1937 (BOE de 9 de diciembre) con el fin de purgar la asociación. El artículo 16 de la Ley de 1938 especifica, en su párrafo primero, que “Figurarán en él [en el ROP] los que en la actualidad y habitualmente se dedican a la confección literaria del periódico desde hace más de un año, mediante retribución. También tendrán derecho a ser inscritos en el Registro Oficial de Periodistas los que, hallándose en la actualidad sin empleo, se dedicasen en la fecha de iniciación del Movimiento a los trabajos periodísticos en las condiciones señaladas”. Por otro lado, la disposición transitoria de la Ley obligaba a los periodistas presentes en territorio leal a la República a solicitar al Servicio Nacional de Prensa su inscripción; mientras que no podían figurar en el registro algunos corresponsales ni los “colaboradores” de los periódicos. Esto último será modificado en la Orden de 2 de abril de 1939 (BOE de 3 de abril), en virtud de la cual pueden inscribirse en el ROP colaboradores, taquígrafos

Periodismo (EOP)⁵⁷ (que, junto al sindicato vertical y los tribunales especiales, tratarían de controlar el acceso y ejercicio de la profesión) o el marco legislativo dirigido a

y fotógrafos, a cada uno de los cuales corresponderá una sección específica. El proceso de regulación del funcionamiento y de la inscripción en el registro se completaría esa misma primavera mediante la Orden de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo). La disposición obligaba a los periodistas que se encontraran en zona sublevada desde el 31 de diciembre de 1938 a realizar una declaración jurada, en la que se incluía la comunicación pormenorizada de su historial político. La cantidad de solicitudes de inscripción que se recibirían desde entonces obligaría al Ministerio de Gobernación a cerrar temporalmente el registro el 20 de noviembre de 1939 (Orden de 27 de octubre [BOE de 5 de noviembre] confirmada el 27 de octubre de 1940 [BOE de 30 de octubre]). El ROP no será reabierto hasta 1942, tras el traspaso de las competencias a la Secretaría General del Movimiento. Gabriel Arias Salgado, al frente del nuevo equipo de falangistas con competencias en prensa, impondrá entonces dos nuevas medidas para el control de la profesión: su sindicación forzosa y la reapertura del ROP. Desde 1941, los periodistas quedan integrados en el Sindicato Nacional de Prensa, Papel y Artes Gráficas, sindicato vertical del que pasaban a depender las asociaciones de prensa. Dos años después, desde la Vicesecretaría de Educación Popular trataría de impulsarse un sindicato exclusivo para periodistas, la Unión Española de Periodistas, cuya finalidad era, de acuerdo con la Orden de creación de 18 de marzo de 1943 (BOE de 21 de marzo), “la corporación de los periodistas españoles”. La Unión resultaría, sin embargo, un fracaso, pues nunca llegaría a funcionar en la práctica (Molinero, 1971: 231). La reapertura después de tres años del ROP respondía, por su parte, a dos objetivos: la reordenación de los inscritos y la revisión de los periodistas admitidos por el equipo anterior, que, desde Gobernación y encabezado por Ramón Serrano Suñer, había puesto en marcha el registro (Chuliá, *op. cit.*: 55). Tanto los nuevos inscritos como los ya admitidos habrían, además, de prestar el siguiente juramento: “Juro ante Dios, por España y su Caudillo, servir a la unidad, a la grandeza y a la libertad de la Patria con fidelidad íntegra y total a los principios del Estado nacionalsindicalista, sin permitir jamás que la falsedad, la insidia o la ambición tuerzan mi pluma en la labor diaria” (Cit. en Chuliá, *op. cit.*: 55).

En total, y a pesar del cierre del ROP entre 1939 y 1942, unos 1.800 periodistas serán inscritos en el registro, mientras que más de dos mil serán rechazados. Para obtener un cuadro más aproximado de la depuración de periodistas de estos primeros años es preciso tener en cuenta, no obstante, que muchos de ellos no tratarían siquiera de acceder al ROP, dada la confesión del historial político que implicaba. La mayor parte de quienes accedieron al registro durante sus primeros años de funcionamiento eran periodistas en activo antes de 1938 (1.792: el 84%). Sólo el 14% (307) había salido de las aulas de la Escuela Oficial de Periodismo, creada en 1941; mientras que otro 2% (33 personas) había obtenido la inscripción por designación directa de Franco (Chuliá, 2001: 58).

⁵⁷ La apertura de un centro de formación estatal para periodistas había sido prevista ya en la Ley de Prensa de 1938, en la que, sin embargo, se había eludido regular la cuestión, muy probablemente debido a la falta de consenso en torno al modo en que tales estudios habían de impartirse. Por un lado, Ramón Serrano Suñer abogaba por la creación de una Sección de Periodismo dentro de las facultades universitarias de Letras. Así lo había aclarado en la Orden de 24 de agosto de 1940 (BOE de 13 de septiembre), que organizaba los primeros cursillos anuales para periodistas; cursillos que serían, por cierto, la única forma de acceder al ROP tras su cierre en noviembre de 1939. Contra esta opinión se alzaba buena parte de FET de las JONS, que había abogado en su Estatuto de Prensa de 1937 por una institución específica para la formación de periodistas, la llamada Universidad Nacional-Sindicalista, gobernada por supuesto por el Partido. Ésta será, finalmente, la opción que se impondrá en 1941, poco después del traspaso de las competencias de prensa a la Secretaría General del Movimiento: la Orden de 17 de noviembre de 1941 (BOE de 19 de noviembre) crea la Escuela Oficial de Periodismo. El Partido lograba así, no sólo imponer su opción frente a la postura de Serrano Suñer, sino controlar, a través de la Delegación Nacional de Prensa de la que dependía directamente, la Escuela, para cuya admisión era además condición indispensable la militancia en FET (art. 9). Si el ROP había sido, pues, fruto de la iniciativa del equipo de Serrano Suñer, la EOP lo sería de Gabriel Arias Salgado y, sobre todo, de Juan Aparicio: ambos se encargarían, tras la asunción de las competencias sobre la prensa en 1941, de proseguir con la depuración de la profesión mediante la revisión y reapertura del registro y, sobre todo, de entregar al Partido el monopolio en la formación de periodistas.

legalizar la censura de prensa, que se había inaugurado apenas diez días después del golpe de Estado con el mismo Bando Oficial que declaraba el Estado de Guerra⁵⁸.

En 1941, en plena “hora de los fascistas”, en términos de Santos Juliá (*loc. cit.* 2.2.1), el partido unificado y único se hace con el control del aparato institucional de prensa. Este traspaso viene a culminar el proceso de “falangización” del organigrama del aparato institucional de prensa que, como constatábamos, se había iniciado en 1938; si bien no se había trasladado aún del todo a la Ley de aquel año.

El 20 de mayo de 1941, una Ley regula el emplazamiento de los servicios estatales de prensa y propaganda dentro del partido unificado, bajo la dirección de José Luis Arrese. En el preámbulo, la Ley deja claro el espíritu que anima el traspaso de competencias. La prensa es considerada un órgano más de difusión de la doctrina política franquista que, en aquellos años, no se encuentra muy alejada, como hemos visto, del fascismo foráneo:

No estimándose todavía conveniente [reza la Ley] su formal constitución en un Ministerio independiente, es oportuna su inserción en los órganos elaboradores de la doctrina política del Estado, por lo que se organizará dentro del Partido[FET de las

⁵⁸ El Bando de 28 de julio de 1936 (BOE de 30 de julio) tras declarar el estado de guerra imponía, en su artículo séptimo, “la previa censura de los ejemplares de todo impreso o documento destinado a la publicidad”. La medida quedaría ratificada por la Orden de 23 de diciembre de ese mismo año (BOE de 24 de diciembre), por la que pasaba a considerarse ilícita la “producción” de prensa “socialista, comunista, libertaria y, en general, disolvente”.

A pesar de esta apresurada regulación, la implantación de la censura previa no adquiriría rango de ley hasta el 22 de abril de 1938. El artículo segundo de la Ley de Prensa —en el que se concretan las funciones de “organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica” que se arrogara el Estado en el artículo primero— concede al Estado, en su apartado quinto, el ejercicio de la censura “mientras no se disponga su supresión”; lo que sugiere una imposición de carácter meramente temporal. Dicha función censora queda organizada en dos ámbitos territoriales: en el nacional, se le encomienda al Servicio Nacional de Prensa (luego convertido en Dirección General), adscrito al ministerio correspondiente (art. 4); en el ámbito provincial, al jefe del Servicio de Prensa de cada provincia, a quien incumbe: “Ejercer la censura mientras ésta subsista, de acuerdo con las orientaciones que se le dicten por el Servicio Nacional de Prensa o, en su caso, por el Gobernador Civil de la provincia, cuando éstas se refieran a materia local o provincial (art. 6.a). Como es evidente, esta descentralización de la labor censora no busca sino aumentar su eficacia, llevando el Estado a “sus centinelas cerca de los periódicos” (Sinova, *op. cit.*: 65): “En el seno de las delegaciones [provinciales] [expone Molinero] funcionaba un gabinete de censura de la prensa diaria y periódica, compuesto por un equipo de censores a través del cual se trasladan y hacen cumplir cuantas normas emanaban del órgano central. Las delegaciones mantenían un estrecho contacto diario con las distintas direcciones generales del departamento, así como con los Directores de los diarios para el cumplimiento de las normas administrativas de censura [...] Existen además ciertas delegaciones locales del Ministerio, que sin estar reguladas por ninguna disposición legal [...] están adscritas a las delegaciones provinciales” (Molinero, 1971: 306-307).

A pesar de estos esfuerzos por constituir un aparato descentralizado y eficaz, la función censora no quedará monopolizada por el ministerio con las competencias sobre la prensa: por un lado, en virtud de la Ley de 1938, la censura de los asuntos militares se le encomienda a la autoridad militar (art. 6.a); por otro, la información internacional será censurada por el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta la llegada de Manuel Fraga al MIT.

El traspaso de las competencias de prensa de Gobernación a la Secretaría General del Movimiento marcará los últimos cuatro años de esta primera etapa constitutiva.

JONS] mediante la creación de una Vicesecretaría que se llamará de Educación Popular⁵⁹.

En cumplimiento de ello, el artículo primero de la Ley fija la transferencia de “todos los servicios y organismos que, en materias de prensa y propaganda y sus respectivas competencias, dependían de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de Gobernación”⁶⁰ a esta recién creada Vicesecretaría de Educación Popular. Unos meses después, una Orden emitida por la Secretaría General del Movimiento⁶¹, organiza la Vicesecretaría en cuatro delegaciones (art. 1): una Delegación Nacional de Prensa, que asume competencias en materias de prensa nacional y extranjera, así como en todo lo relativo a información y censura (art. 3); y otras de Propaganda; Cinematografía y Teatro; y Radiodifusión.

La Orden, además, supone la consecución del proyecto ensayado por el equipo de falangistas y abortado por el Consejo de Ministros en 1938 de dotar al Partido de potestad censora: desde octubre de 1941, los gobernadores civiles y jefes de los antiguos servicios provinciales de prensa dejan de ocuparse de la censura de periódicos, que queda a cargo de los jefes provinciales de FET de las JONS. De este modo, en 1941, coincidiendo con el apogeo del Eje en Europa y del Movimiento en España, los falangistas lograban hacerse al fin con las competencias censoras, que venían reclamando desde 1937. Por si fuera poco —acaso acuciados ante la inminencia de una crisis ministerial y de la pérdida del gobierno de la prensa (Chuliá, *op. cit.*: 47)—, el primero de mayo de 1941, aprueban una Orden (BOE de 4 de mayo) por la que la prensa del Movimiento queda exenta de la censura estatal. La decisión será revocada por otra Orden apenas ocho días después (BOE de 10 de mayo), si bien los falangistas podrán mantener, tras el cambio de Gobierno, las competencias sobre prensa y censura⁶². Lo que

⁵⁹ Ley de 20 de mayo de 1941, de Jefatura del Estado (BOE de 22 de mayo). Esta ley se inscribe dentro de un conjunto de disposiciones que vienen a revisar y a modificar la Ley de 30 de enero de 1938, de organización de la Administración Central del Estado.

El nombre, por cierto, que adopta la Vicesecretaría no es casual: responde a la idea, defendida en estos años por el falangismo, de una prensa educativa o adoctrinadora antes que informativa. Así se expresa Juan Beneyto en 1944: “La vieja tesis [liberal] de la prensa como órgano independiente de información puede considerarse caducada, porque realmente no existe una prensa puramente informativa. Por de pronto, el periódico, dada su influencia, no informa, sino que educa al informar” (Beneyto, 1944: 24).

⁶⁰ Ley de 20 de mayo de 1941 (BOE de 22 de mayo).

⁶¹ Orden de 10 de octubre de 1941 (BOE de 15 de octubre).

⁶² Orden de 1 de mayo de 1941 (B.O.E de 4 de mayo). El artículo primero de la Orden reza: “La prensa del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, bien sea económicamente propiedad de la misma, bien intervenida políticamente, queda exenta de la censura de las Jefaturas de Prensa [...]”. Desde su entrada en vigor, la responsabilidad sobre la prensa falangista queda encomendada a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Partido.

Bien distinta será la situación de algunos órganos de expresión de la Iglesia, que sí lograrán eludir la censura estatal desde 1944. Poco antes del traspaso de las competencias de prensa a Educación,

no habían logrado Serrano Suñer⁶³ y su equipo parecen lograrlo los ejércitos del Eje con sus victorias en Europa, África y el Pacífico.

La causa profunda que motiva el traspaso de las competencias sobre la prensa al Partido se encuentra, pues, como ha quedado explicado, en la aproximación generalizada al fascismo que el Régimen ensaya en estos años. Sin embargo, la causa próxima o superficial que detona el cambio es bien distinta. El 5 de mayo de 1941 —antes, pues, de que se produjera el traspaso de competencias, y cuando aún la prensa estaba controlada por Gobernación— Franco designa al coronel Valentín Galarza, de convicciones antifalangistas, como Ministro de Gobernación. El nombramiento supone para los falangistas la pérdida de las competencias que en materia de prensa venían acaparando desde 1938. En este contexto, el día 8 de mayo, el diario madrileño *Arriba*, órgano de expresión del falangismo, publica un artículo anónimo⁶⁴ titulado “Puntos sobre las íes: el hombre y el currinche”, en el que se ataca directamente a Galarza. El incidente se acabará saldando con una crisis de gobierno: por un lado, son destituidos Antonio Tovar, quien se encontraba al frente de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, y Dionisio Ridruejo, jefe del Servicio de Propaganda. Además, una nueva Orden revoca la exención de censura a la prensa del Movimiento⁶⁵. Con todo, el Partido, lejos de perder el envite, logra recuperar el control de la prensa como compensación por el auge de los

controlada por los católicos, la Vicesecretaría de Educación Popular difunde una Circular fechada el 25 de marzo (BOE de 7 de abril de 1944) por la que se exime de censura a las publicaciones litúrgicas, literarias (escritas antes del 1800), musicales (escritas antes del 1900) y técnicas. Se acababa así, al menos en una mínima parte, con un férreo control censor a cuya imposición y desempeño no había sido ajena la Iglesia, pero que había llegado a alcanzar a los mensajes papales: “Pese a que miembros de la Iglesia católica participaron en la organización de la censura, y de hecho su intervención en la fijación de algunos principios de censura fue decisiva en algunas etapas del Régimen, los textos emitidos por la jerarquía eclesiástica española y por el mismo Papa no se libraron de la persecución” (Sinova, *op. cit.*: 81). La Circular permitió eludir la censura a publicaciones como *Ecclesia*, que se revelaría durante la década siguiente como un órgano de presión crucial a favor de una nueva ley que atenuara el control sobre el sistema; a pesar de ello, las publicaciones periódicas de información general propiedad de la Iglesia seguirían sometidas a la censura del mismo modo que el resto de la prensa privada y, al menos formalmente, también que la prensa estatal. La situación —consagrada por el marco legal fijado en estos años— se mantendría hasta 1966, a pesar de que, como ha podido advertirse en la Ley de 1938, las medidas censoras se presentarían como provisionales; y a pesar, sobre todo, de los intentos de suavización de la censura protagonizados por los católicos a mediados de los años cuarenta.

⁶³ Serrano Suñer, de todos modos, tratará desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de reservarse ciertas competencias sobre prensa: trata de hacerse con el control de las informaciones relativas a política internacional. En un primer momento, José Luis Arrese logra que Franco frene la maniobra de Suñer. La victoria de Arrese será, de hecho, uno de las causas de la salida de Suñer de Exteriores y de la política en general, en 1942 (Chuliá, 2001: 50). Este traspaso de las competencias censoras a Exteriores se logrará, sin embargo, poco después, lo que será fuente de conflictos con el Ministerio de Información y Turismo hasta los años sesenta, cuando Exteriores renuncia a estas atribuciones (Chuliá, 2001: 50; 112).

⁶⁴ Parece ser que el autor del artículo es en realidad Dionisio Ridruejo, lo que explicaría también su destitución al frente del Servicio de Propaganda.

⁶⁵ Orden de 9 de mayo de 1941 (BOE, 10 de mayo) por la que queda sin efecto la Orden del 1 de mayo de 1941.

militares en el nuevo Gobierno formado el 20 de mayo de 1941 (auténtico motivo de fondo del artículo publicado en *Arriba*). El paso de la prensa de Gobernación al Movimiento debe ser, pues, también interpretado como una actuación coyuntural de Franco para restablecer el equilibrio de poder entre las facciones del Régimen; y en concreto entre militares y falangistas. Lo que, de todos modos, no invalida el análisis anterior, de acuerdo con el cual la maniobra ha de ser enmarcada dentro del proceso general de auge del poder falangista motivado por las circunstancias internacionales.

Su desenlace [concluye Payne] no consiguió aliviar todas las tensiones entre los militares y los falangistas, pero reveló la creciente habilidad de Franco para contrarrestar la influencia de cada grupo con la del otro. Junto con una serie de nombramientos secundarios, esta reorganización logró satisfacer las demandas mínimas de los militares al mismo tiempo que aplacaba a sus rivales falangistas (Payne, *op. cit.*: 302).

Esa supuesta habilidad de Franco para compensar poderes no se limita, de todos modos, a la confección de equilibrios entre “familias” con presencia en el Gobierno: el dictador logrará contrarrestar también los nuevos poderes sobre la prensa adquiridos por el Partido mediante esos “nombramientos secundarios” a los que se refería Payne. Buena parte de ellos, efectivamente, afectarán muy especialmente al aparato institucional de prensa, encuadrado ahora bajo la dirección de José Luis Arrese, ministro secretario General del Movimiento, y cuya designación responde sin duda a una operación de Franco dirigida a apaciguar a los camisas viejas del Partido ante la llegada de Galarza al Gobierno⁶⁶. El propio Arrese era un camisa vieja y un seguidor acérrimo de José Antonio Primo de Rivera, además de, a juicio del Equipo Mundo,

Un falangista sincero y honesto que, aún reconociéndose enemigo declarado del sistema capitalista, procuró desterrar de la dialéctica falangista la palabra ‘revolución’. Otra de las características de su actuación pública es la inquebrantable lealtad a Franco (1970: 142).

Esa inquebrantable lealtad, verdadera clave de su nombramiento dada la labor de aquietamiento que se le encomienda, lo mantendrá en el cargo hasta julio de 1945; posteriormente volverá a ocupar la Secretaría General del Movimiento entre 1956 y 1957, cuando asumirá la cartera de Vivienda.

Bajo la dirección de Arrese, el tándem Tovar-Ridruejo será sustituido al frente del aparato de prensa por el formado por Gabriel Arias Salgado y Juan Aparicio, quienes “si bien eran falangistas se mostraron más dóciles y fieles al Gobierno, evitando las estridencias radicales de sus predecesores” (Barrera, 1993: 100; 1995a: 58):

⁶⁶ De hecho, José Luis Arrese había presentado su dimisión poco antes como gobernador civil de Málaga como protesta por el nombramiento de Galarza al frente de Gobernación.

Se trataba, en suma [revela Javier Terrón] de asegurar la fidelidad de aquella [de la prensa] recurriendo al expediente de sustituir dos personas potencialmente conflictivas, por otras de probada sumisión al Estado y a su cabeza visible, Franco (Terrón, 1981: 52).

Franco, pues, en una maniobra típica, concedía el poder de la prensa al Partido, pero colocaba en su dirección a individuos dóciles, más apegados a su figura que a la ortodoxia falangista. Sobre el perfil de Gabriel Arias Salgado, nuevo vicesecretario de Educación Popular, tendremos oportunidad de detenernos cuando abordemos su etapa como ministro de Información y Turismo. Juan Aparicio, nombrado delegado Nacional de Prensa, tampoco carecía de credenciales tras los que ocultar su docilidad: camisa vieja como Arrese, procedía de las JONS, en las que había sido un estrecho colaborador de Ramiro Ledesma Ramos y de las que había llegado a ser su primer secretario nacional; además de ostentar el carnet número siete de fundador de Falange⁶⁷ (Pizarroso, *op. cit.*: 237). Aparicio contaba además con experiencia en el campo de la prensa: había sido secretario de la revista jonsista *La conquista del Estado*, además de fundador y director del semanario falangista *El Español* y de haber ejercido como profesor de redacción de la católica Escuela de Periodismo de El Debate (Sinova, 1989a: 104).

El poder de este equipo de falangistas leales a Franco se extenderá hasta 1945, cuando el contexto internacional y las necesidades propagandísticas del régimen impongan un giro en la política interior y en el gobierno de la prensa.

2.1.2 La prensa en el Ministerio de Educación: el periodo de los acenepistas (27 de julio de 1945 a 19 de julio de 1951)

El 27 de julio de 1945, nueve días después de la última crisis ministerial, un Decreto-ley emitido por la Presidencia del Gobierno suprime la Vicesecretaría de Educación Popular y transfiere todas sus competencias a una recién creada Subsecretaría homónima, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, feudo de la “familia” católica desde los primeros años del Régimen⁶⁸. Ni la supresión de la Vicesecretaría del Movimiento, ni el traspaso de las competencias sobre prensa al Ministerio de Educación y, por extensión, a los acenepistas, merece mayor explicación en la disposición que la de

⁶⁷ Sus credenciales fascistas no acababan ahí: cuenta Justino Sinova que había sido Aparicio el inventor de los lemas “España, Una, Grande y Libre” y “Por la Patria, el Pan y la Justicia”, además de haber sido el responsable de la adopción del yugo y las flechas como emblema del fascismo español (Sinova, 1989a: 104).

⁶⁸ El primer ministro de Educación había sido Pedro Sáinz Rodríguez, un monárquico alfonsino; apenas un año después, sin embargo, la llegada del acenepista José Ibáñez Martín inaugurará el control católico de Educación, que se extenderá al menos hasta 1956, cuando el tradicionalista Jesús Rubio sustituya a Joaquín Ruiz Giménez tras los desórdenes universitarios de aquel año.

considerar “superadas las circunstancias que aconsejaron”, en 1941, aquella cesión de la prensa al Partido⁶⁹.

Por supuesto, tal y como hemos advertido, el cambio implicaba mucho más que un mero traspaso de competencias entre organismos. Desde el segundo Gobierno de Franco, formado en agosto de 1939, porta la cartera de Educación el acenepista José Ibáñez Martín. Existe cierta discrepancia en torno a las afinidades ideológicas iniciales del ministro: según el Equipo Mundo, procede de Acción Católica y de la CEDA (Equipo Mundo, *op. cit.*: 91), es decir, del pensamiento católico y tradicional español (García Jiménez, 1980: 82); para Justino Sinova, sin embargo, su peripecia ideológica parte más bien del fascismo, hasta el punto de que Laín Entralgo lo clasificaba como “cedo-falangista” (Sinova, 1989a: 115). Sea como fuere, lo cierto es que a la altura de 1945 — cuando recibe, parece que con no demasiado entusiasmo (Sinova, *ibídem*), las competencias sobre prensa—, José Ibáñez Martín es ya un destacado miembro de la “familia” católica, además de “un pragmático de la política educativa y el verdadero basamento de la política cultural franquista” (García Jiménez, *ibídem*).

El traspaso de la prensa a manos acenepistas no se completará, sin embargo, hasta medio año después, cuando, en enero de 1946, Ibáñez nombre, en sustitución de la pareja Arias-Aparicio, a Luis Ortiz Muñoz como nuevo subsecretario de Educación Popular y a Tomás Cerro Corrochano como director General de Prensa. Ambos son hombres de confianza del recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y miembros de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. Luis Ortiz, de hecho —aunque era titular de una cátedra de latín y había desempeñado cargos ligados a la enseñanza—, procede de *El Debate*, el periódico de la ACN de P defenestrado por el franquismo; al igual que Tomás Cerro Corrochano, quien había ejercido como secretario de redacción del periódico y profesor de su escuela de periodismo (Tusell, 1984: 189; Sinova, 1989a: 115)⁷⁰.

Estas designaciones llevan a término la maniobra política puesta en práctica por Alberto Martín Artajo poco antes. Letrado del Consejo de Estado, Alberto Martín Artajo es, en 1945, uno de los más destacados líderes del propagandismo católico español. Desde joven había militado en Acción Católica (la cual llegará a presidir) y se había declarado seguidor del cardenal Herrera Oria, fundador, precisamente, del diario *El*

⁶⁹ Decreto-ley de 27 de julio de 1954 (BOE de 28 de julio). A finales de ese año, una Ley de Jefatura del Estado de 31 de diciembre de 1945 (BOE de 5 de enero de 1946), eleva a rango de Ley el Decreto-ley anterior.

⁷⁰ Otros tres periodistas completarán el equipo: Quintín Pérez Liébana será nombrado jefe de la Sección de Información y Censura, mientras que Juan Servet recalará en la Sección de Prensa Extranjera. Ambos ejercerán su labor junto al experimentado Juan Beneyto, (Sinova, *op. cit.*: 116), quien en 1957 accederá durante un breve periodo a la Dirección General de Prensa.

Debate, en el que Martín Artajo ejerció también como redactor durante la II República (Equipo Mundo, *op. cit.*: 189). El 20 de julio de 1945, Franco lo llama a ocupar la cartera de Exteriores; cargo que sólo aceptará aconsejado por el cardenal primado de España, Pla y Deniel. Desde Exteriores, Martín Artajo tratará de impulsar el proyecto político del sector que Javier Tusell denomina “colaboracionista”⁷¹; proyecto que pasa por la restauración de un orden representativo sin lesionar por ello la autoridad lograda tras la Guerra Civil (Tusell, 1984: 85). Aboga Martín Artajo por una cierta renovación de la estructura política del Régimen “en el sentido de identificarse con las pautas políticas que el desenlace de la Segunda Guerra Mundial imponía” (Tusell, *ibídem*). Este programa —que tratará de implementarse a partir de la consigna de participar en el poder franquista dictada en 1945 por Fernando Martín-Sánchez Juliá, a la sazón presidente de la ACN de P (v. 3.2.2)— había comenzado a perfilarse en enero de 1943. Los acenepistas habían iniciado entonces a desarrollar los tres puntos fundamentales llamados a guiar su actuación política; a saber, (a) el ataque frontal al totalitarismo y a Falange; (b) la defensa de la democracia cristiana orgánica y del corporativismo como forma básica de estructuración del Estado; y (c) la reinstauración de una monarquía de corte tradicional (Montero, 1993: 583-591)⁷². Estos principios se desarrollarán y precisarán en 1944 y 1945; y acabarán cristalizando en las demandas concretas de desaparición de Falange, de aumento de la libertad de prensa, de superación de las divisiones de la Guerra Civil, de libertad de asociación sindical y universitaria, y de apoyo a la monarquía tradicional (Montero, 1991: 918).

En la consecución de este programa político, la prensa no dejaba de jugar un papel central. Una carta enviada el 13 de agosto de 1945 (apenas un mes después del traslado de las competencias del Partido a los católicos) por la Dirección General de Prensa al ministro de Educación demuestra la impaciencia del organismo por impulsar una nueva normativa sobre la materia. La carta comenzaba subrayando la vocación de

⁷¹ En *La dictadura de Franco* (1996), Javier Tusell define así al sector “colaboracionista”: “Este grupo acudía al poder con el bagaje de un cierto corporativismo (‘democracia orgánica’) [...] su postura puede más bien ser definida como de un peculiar y relativo ‘aperturismo’ consistente en una ‘liberalización’ de la prensa, en una institucionalización monárquica del régimen y en una consideración de que la unicidad de sindicatos y de Partido no era aceptable; en suma, se puede decir que este grupo católico colaboracionista propiciaba una cierta democracia controlada y acabó, ya en los años sesenta y setenta, identificándose con una transición pacífica del régimen hacia fórmulas idénticas a las europeas” (Tusell, 1996: 187).

⁷² Estos principios del programa político propagandista se encontraban, a su vez, influidos por el mensaje radiofónico emitido por Pío XII el día de Navidad de 1942. En él, había defendido el Papa cinco puntos esenciales que habían de orientar el actuar político del catolicismo: el respeto a la persona; a su carácter social y familiar; la dignidad del trabajo; la profunda renovación del orden jurídico; y el organizar un Estado al servicio de la sociedad (Montero, *op. cit.*: 582).

provisionalidad con que se había elaborado la Ley de 1938 y las “lagunas” que ello había generado:

En el ejercicio de las funciones que le competen, esta Dirección General de Prensa ha hallado con frecuencia que su carácter de provisionalidad [de la Ley de Prensa de 1938] dejaba lagunas importantes, que han tenido que resolverse en la práctica mediante el uso de facultades discrecionales acomodadas al espíritu de lo dispuesto en la mencionada Ley, que no contiene en su reglamentación la solución a muchos de los casos que podrían darse en la práctica⁷³.

A continuación, la Dirección General emplazaba al Ministerio a iniciar los trabajos de elaboración de una nueva ley de prensa que sustituyera a la de 1938, así como la reglamentación necesaria para su aplicación. Para tal fin, instaba al Ministerio a convocar, para el mes de septiembre de 1945, una asamblea de directores de los principales diarios y agencias españolas⁷⁴; a ellos les quedaba encomendada la elaboración de un anteproyecto de ley que sirviera de base al texto definitivo. No deja de llamar la atención la urgencia de la Dirección General, aún controlada por Tovar y su viejo equipo de la Vicesecretaría de Educación Popular, y el apremio con que reclama al Ministerio el inicio del trabajo legislativo. Finalmente, aunque los cambios en el organigrama se acometerán en enero de 1946, el ministerio no impulsará la nueva ley; de hecho, lejos de impulsar un cambio substancial en el sistema, la actuación del equipo acenepista sobre la prensa estuvo más bien marcada por el fracaso y el continuismo con respecto a tiempos anteriores:

Poco lograron [juzga Carlos Barrera] [...] Ortiz y Cerro pese al apoyo de [Alberto] Martín Artajo. Ni consiguieron suavizar la censura de prensa, ni desarrollar legislativamente el artículo 12 del Fuero de los Españoles referente a la teórica libertad de expresión, ni hacer reaparecer *El Debate*⁷⁵, ni tampoco expulsar de la dirección de *Ya* al director impuesto Juan José Pradera (Barrera, 1995a: 58).

El giro con respecto a la política falangista se redujo a un tímido intento de desactivación de los mecanismos de control de la profesión periodística y de atenuación de la censura previa. Ambas actuaciones, si bien fracasadas, han de entenderse, en cualquier caso, inscritas en una doble estrategia, de confrontación directa con el Partido y de recuperación de su histórico centro de formación, la clausurada Escuela de Periodismo de *El Debate*. Desde 1945, el equipo acenepista emprenderá una serie de medidas dirigidas a minar los instrumentos de control de la profesión creados por sus predecesores

⁷³ Carta en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁷⁴ La Dirección General de Prensa llega incluso a elaborar una lista con los directores que habrían de formar la asamblea. Son un total de treinta directores.

⁷⁵ *El Debate* había sido el órgano de expresión tradicional de la ACN de P, adquirido por la asociación en 1911 y cerrado en 1939, al día siguiente de la entrada de las tropas franquistas en Madrid.

falangistas, y que acabarán *de facto* con el monopolio estatal en la formación de periodistas y sentarán las bases para el reconocimiento legal a la Iglesia a abrir sus propios centros formativos, en 1960⁷⁶. Por otro lado, el 23 de marzo de 1946, el equipo acenepista promulga una Orden (BOE de 26 de marzo) cuyo artículo primero dispone una cierta atenuación de la censura. La medida queda justificada por el final de la II Guerra Mundial y, sobre todo, por la provisionalidad que la propia Ley de 1938 atribuía a la censura, contemplada entonces como un instrumento excepcional a cuya imposición había obligado la Guerra Civil:

Quizás [se arguye en el preámbulo de la disposición] no haya llegado aún el momento de prescindir totalmente de la Censura, pero sí de iniciar una serie de medidas, dejando a salvo la moderación en el lenguaje y en el respeto debido a los principios fundamentales del Estado español, permitan a los periódicos una mayor amplitud de movimientos y sirvan, al mismo tiempo, de indispensable experiencia previa para las disposiciones ulteriores⁷⁷.

A pesar de que la Orden entrará formalmente en vigor, su aplicación pareció guiarse por el viejo principio castellano del “acatar pero no cumplir”, de modo que acabó por

⁷⁶ Para empezar, la asignatura de Política Nacional-Sindicalista desaparece del plan de estudios, al tiempo que se introduce el estudio de la lengua inglesa, y el idioma alemán es sustituido por el francés. Pero, por otro lado, no se convoca en 1946 el examen oficial de ingreso en la EOP (Chuliá, *op. cit.*: 59). Todo ello acabará por reflejarse en el ROP, en el que las inscripciones no dejarán de decaer hasta 1948, año en que no se registra ningún alta. El declive provocado de ambas instituciones obligará a la Administración a adoptar dos medidas: primero, mantener los cursillos intensivos de dos a cuatro meses hasta 1951 (cursillos que acabarán por constituir la principal vía de acceso al ROP desde la EOP); segundo, la admisión extraordinaria en el ROP de periodistas que no hubieran pasado por la Escuela: la Orden de 27 de mayo de 1949 (BOE de 29 de mayo) decretaba un suero de amnistía temporal para aquellos profesionales que hubieran ejercido el periodismo durante al menos tres años sin haber cumplido el periodo formativo ni estar inscritos en el ROP. Esto demuestra, como es obvio, que existían periodistas en las redacciones españolas no registrados y que escapaban, por tanto, al conocimiento y vigilancia estatal. De forma paralela, desde 1947, la ACN de P comienza a impartir cursos de verano de periodismo —dirigidos por Fernando Martín-Sánchez Juliá, director entonces de la Asociación— en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Será este el primero de una serie de ensayos organizados durante la década siguiente y que acabarán desembocando en el reconocimiento legal de 1960. El sistema de control de la profesión diseñado por los falangistas en 1938 y 1941 parecía, pues, derrumbarse a finales de los años cuarenta. “La voluntad del Nuevo Estado [relata Chuliá] de crear una nueva vanguardia profesional quedó menoscabada por dos circunstancias. Por una parte, los casi dos millares de redactores ‘históricos’ a los que no se conocían muestras de oposición al Alzamiento Nacional encarnaban el vínculo con ese pasado periodístico con el que se ambicionaba romper. Por otra parte, la nueva situación internacional a partir de 1945 había aconsejado prescindir o diluir la importancia de los instrumentos más evidentes de regimentación de la clase periodística, de forma que esas rígidas estructuras institucionales orientadas hacia la homogeneización de la profesión se habían ablandado en la práctica” (Chuliá, *op. cit.*: 60-61).

⁷⁷ Plantean, pues, los propagandistas la laxitud en la aplicación de la censura como un paso previo (casi de carácter experimental) a esas “disposiciones ulteriores”; es decir, a la aprobación de un nuevo marco legal para la prensa. Que la DGP había solicitado por carta al Ministerio. No deja de resultar llamativo que, como veremos más adelante, casi veinte años después, Manuel Fraga siga idéntica estrategia —de “ir quitando presión, desde la misma renovada manera de ejercer la tijera” (Fraga, 1980: 38)— para la aprobación de su Ley.

resultar del todo ineficaz. El 28 de marzo, las delegaciones provinciales de prensa informaban a los directores de periódicos de que la Orden sólo entraría en vigor tras la aprobación de unas nuevas normas de censura que nunca verían la luz (Sevillano, 2003: 73); mientras tanto, aumentaban las consignas y advertencias a las publicaciones (Sinova, *op. cit.*: 118). Desactivada la Orden de 23 de marzo, la censura mantuvo el mismo rigor que la había caracterizado durante los años de control falangista: la maniobra de los propagandistas católicos fracasaría (Sinova, *op. cit.*: 80; 118; Barrera, *op. cit.*: 58), en la misma medida que sus proyectos de elaboración de un nuevo texto legal.

Javier Tusell atribuye el fracaso del programa católico en materia de prensa a la llegada, en 1946, de Don Juan de Borbón a Estoril (Portugal) y a la reacción indignada de Franco (Tusell, 1984: 191-192). En efecto, el equipo católico renunció aquel año al control de los cupos de papel y de la prensa estatal (que tornará desde febrero de 1946 al Movimiento). Ni la atenuación de la censura, ni la supresión de las consignas se logran tampoco.

En un plazo muy corto, por tanto, la modificación del sistema de prensa quedó reducida a la nada en el terreno legal. Hubo tan sólo una pública expresión de buen deseo [...] y una cierta labor de desaparición de los rasgos más evidentemente totalitarios de la situación de la prensa o de evidentes corruptelas (Tusell, *ibídem*).

El fracaso acenepista se ve agravado en la medida en que la reforma de la prensa había sido considerada como una de las piedras de toque de su proyecto político. Martín Artajo no sólo había insistido en la necesidad de un cambio en la (obsoleta, según su parecer) política de prensa desde sus primeras conversaciones con Franco (Tusell, *op. cit.*: 188); sino que incluso había llegado a supeditar la aceptación de la cartera de Exteriores al traspaso de dichas competencias al Ministerio de Educación, controlado por la “familia” acenepista (Chuliá, *op. cit.*: 51).

La transferencia de competencias en materia de prensa —que se hará finalmente efectiva apenas diez días después de su toma de posesión— ha de entenderse, por tanto, como fruto de la presión de Martín Artajo; además de, naturalmente, aquellas “circunstancias” que, según el Decreto-ley de 27 de julio, habían aconsejado la cesión de la prensa al Partido. En julio de 1945, tras la derrota definitiva del Eje, Franco se ve en la necesidad de establecer un nuevo equilibrio de poderes basado en unos aliados más aceptables para las potencias capitalistas vencedoras en la Guerra. Se abre en este momento el periodo de acercamiento a los regímenes occidentales, en un intento de conjurar el aislamiento internacional al que se ve sometido el franquismo⁷⁸; lo que, de

⁷⁸ En 1946, después de calificar al régimen de “fascista” la ONU presionará a favor de la retirada de embajadores de Madrid, lo que efectivamente se acabará produciendo.

todos modos, no se logrará hasta las firmas del Concordato y de los acuerdos con Estados Unidos en 1953 (éxitos para el Régimen de los que, por cierto, Alberto Martín Artajo será uno de los principales artífices). Para congraciarse con Washington, el Vaticano y Londres, el franquismo, además de realizar un esfuerzo por acentuar su identidad católica, manifestará una insólita preocupación por garantizar algunos de los derechos civiles básicos de los españoles: fruto de ello es la promulgación, el 17 de julio de 1945 (un día antes de la remodelación del Gobierno), del Fuero de los Españoles⁷⁹, remedo franquista de constitución. A ello hay que añadir, por último, el intento de legitimación que supondrá la reafirmación de la naturaleza monárquica del país: de ahí la promulgación de la Ley de Sucesión de 1947, por la que España es titulada como reino.

La incorporación, pues, de los acenepistas a nuevas e importantes responsabilidades de gobierno, y fundamentalmente a Asuntos Exteriores —en lo que Santos Juliá (2003: 146) denomina la “apoteosis católica”—, obedece a este “lavado de cara” que el franquismo se ve obligado a proyectar al exterior. Es, naturalmente, en este contexto en el que hay que entender el cambio de poder en la prensa: el traspaso de las competencias político administrativas de los falangistas a los acenepistas viene motivada, una vez más, por el imperativo del franquismo de adaptarse a las circunstancias exteriores o, según Justino Sinova (1989a: 113), de acercarse “al sol que más calienta”. El dominio de la ACN de P sobre la prensa durará sin más cambios de dirigentes hasta 1951, cuando Franco la asiente definitivamente en un organismo ministerial *ad hoc* y recupere para su dirección a dos viejos y leales servidores: Gabriel Arias Salgado y Juan Aparicio.

2.1.3 La creación del Ministerio de Información y Turismo: el periodo de Gabriel Arias Salgado (19 de julio de 1951 a 10 de julio de 1962)

El 19 de julio de 1951, Franco crea el Ministerio de Información y Turismo, en el que quedará integrada la prensa —así como todos los servicios dependientes hasta entonces de la Subsecretaría de Educación Popular⁸⁰— hasta el final del Régimen. Tras años de avatares institucionales, el aparato de prensa encuentra al fin acomodo en un organismo definitivo. La amalgama de atribuciones que acogerá el nuevo Ministerio —y que puede ya advertirse en su propio nombre— queda fijada en febrero de 1952, cuando

⁷⁹ En el siguiente capítulo nos detendremos algo más en esta Ley Fundamental del Régimen y, en concreto, en su artículo 12, referido a la libertad de expresión. Según Stanley G. Payne, el Fuero de los Españoles, al que se opusieron José Luis Arrese y otros falangistas, fue elaborado por el Instituto de Estudios Políticos, dirigido por el antiguo fascista convertido al propagandismo católico, Fernando María Castiella, sucesor en 1957 de Alberto Martín Artajo al frente de Exteriores. Según relata Payne, es el propio Castiella el principal artífice de la inclusión del artículo 12 (Payne, 1987: 362-363).

⁸⁰ Art. 1 del Decreto-ley de 19 de julio de 1951 (BOE de 24 de febrero), de Jefatura del Estado por el que se crea el Ministerio de Información y Turismo.

el MIT se defina como “órgano de la Administración a través del cual el Estado regula las actividades de Prensa, Propaganda, Radiodifusión, Cinematografía, Teatro y Turismo”⁸¹ con el apoyo de una red de delegaciones provinciales⁸².

La creación del organismo ministerial parece evidenciar varias pretensiones del Régimen con respecto a la prensa: supone, en primer lugar, un intento obvio de estabilizar, tras años de vaivenes administrativos, el gobierno de su aparato institucional. Estos esfuerzos parecen dimanar, por lo demás, de una cierta revalorización de la importancia de la prensa; en este sentido, la creación de un organismo *ad hoc* con rango ministerial no puede ser interpretada sino como un reconocimiento de la importancia que la información en general —ya sea ésta difundida a través de la prensa, ya a través de otros medios— había ido adquiriendo para el Régimen. Esta estabilización de las competencias pasa, además, por la centralización de las potestades coercitivas sobre la materia en el nuevo organismo: a partir de agosto de 1952 se acaba con la confusión que el baile institucional había generado en torno a las competencias sancionadoras en materias de prensa e imprenta. Desde entonces, e independientemente de la cuantía de la sanción, “se autoriza al Ministerio de Información y Turismo para refundir los preceptos sancionadores en materias de prensa, Publicaciones”, etc.⁸³

Este reconocimiento de la importancia de la información en general y de la prensa en particular —reconocimiento del que, como decimos, se derivan los esfuerzos por estabilizar su armazón institucional—, parece confirmarse por la maniobra de Franco de ejercer un control gubernamental más directo sobre la prensa a través de un organismo creado *ex novo* (y, por tanto, libre aún de control “familiar”) y cedido a personas de probada lealtad y obediencia. Franco, con la complicidad de Luis Carrero Blanco, sustrae

⁸¹ Art. 1 del Decreto de 15 de febrero de 1952 (BOE de 24 de febrero) por el que se organiza el MIT.

⁸² Art. 6, *ibídem*

⁸³ Decreto de 4 de agosto de 1952 (BOE de 10 de septiembre). Hasta entonces las funciones sancionadoras en materia de prensa habían estado fundamentalmente en poder del Ministerio de Gobernación, de acuerdo con la Ley de Prensa de 1938; las Órdenes de 29 de abril y de 15 de octubre de 1938 (sobre sanciones a impresos y grabados); así como la Ley de 7 de octubre de 1939 (que declara subsistentes las facultades de imposición de multas a las autoridades civiles decretadas en el Decreto-ley de 16 de febrero de 1937), y de 2 de noviembre de 1939. Posteriormente, una Orden de 22 de octubre de 1952 descentraliza en cierto modo las competencias al delegar en los directores generales las multas de hasta 10.000 pesetas y en los delegados provinciales las multas de hasta 5.000 pesetas (art. 7). Esto cambia en el Decreto 16/1962 de 18 de enero (BOE de 26 de enero). En él se divide en dos las competencias según la cuantía:

- Las superiores a 25.000 pesetas quedan bajo competencia del MIT (art. 1).
- Las que oscilan entre 10.000 y 25.000 pesetas quedan bajo competencia del subsecretario de cada departamento (prensa, cine...) (art. 1).
- Las que van de 5.001 a 10.000 pesetas competen a los directores generales (art. 2).
- Hasta 5.000 pesetas competen a los delegados provinciales de cada departamento (art. 2).

la prensa de las manos de los acenepistas (Chuliá, *op. cit.*: 96)⁸⁴, para cedérsela a dirigentes de su absoluta confianza. Carlos Barrera abunda en esta opinión, de acuerdo con la cual, la creación del ministerio

[...] realzó la importancia que para el régimen franquista tenía el control sobre la información como medio de adoctrinamiento político-ideológico y de defensa frente a las amenazas e injerencias provenientes del exterior. La nueva cartera se confió a un hombre curtido en estas lides y caracterizado por su ortodoxia doctrinal y política y por su inquebrantable lealtad a Franco: nos referimos a Gabriel Arias Salgado, que inmediatamente nombró a su fiel amigo Juan Aparicio como director general de prensa (Barrera, 1993: 101).

De Juan Aparicio ya trazamos un breve perfil durante su etapa al frente de la Delegación Nacional de Prensa de la Vicesecretaría de Educación Popular (v. 2.1.1). Aparicio —quien, como entonces constatamos, pasaba por ser poco menos que un cordero franquista disfrazado de león falangista— desempeñará esta segunda etapa como director General de Prensa hasta 1957, cuando será sustituido por Juan Beneyto. Conviene recordar, en este punto, que Beneyto había sido, además de uno de los intelectuales orgánicos del Régimen, uno de los más próximos colaboradores de José Antonio Giménez-Arnau (con quien parece haber elaborado, como vimos, la Ley de 1938) en la Jefatura Nacional de Prensa, bajo las órdenes de Serrano Suñer. Según Elisa Chuliá, Juan Beneyto, decepcionado ante el fracaso en la promoción de una nueva ley de prensa, seguirá una política en la Dirección General encaminada a lograr su propia destitución (Chuliá, *op. cit.*: 109). Ésta se hará efectiva apenas un año después de su nombramiento, en 1958, cuando Arias Salgado ofrezca el cargo a Adolfo Muñoz Alonso, quien “pasaba por ‘falangista acérrimo’ y ‘devoto admirador de Franco’” (Chuliá, *ibídem*).

Así describe Alejandro Pizarroso al nuevo ministro de Información, Gabriel Arias Salgado (1904-1962):

De índole clerical y bobalicona [describe Alejandro Pizarroso al ministro], patológicamente obsesionado por un estrecho concepto de la moral, llegó a afirmar cuando ya era ministro de Información y Turismo, que su doctrina era una ‘teología

⁸⁴ Así lo explica Elisa Chuliá: “Dando pruebas de su escasa disposición a dejar este asunto en manos de la familia política más próxima a la Iglesia, Franco y el subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, aprovecharon la crisis de Gobierno en julio de 1951 para crear un nuevo Ministerio responsable de la gestión de la prensa y retirar las competencias en esta materia de la órbita de los católicos” (Chuliá, *op. cit.*: 96).

Luis Carrero Blanco, por cierto, ya había dado muestras de querer ejercer un control más directo sobre la prensa en detrimento de los propagandistas. Durante la etapa anterior, Carrero habría tratado de asumir también, desde Presidencia de Gobierno, ciertas atribuciones en la materia: proponía en concreto la creación de una Oficina de Información encargada de la labor propagandística. La maniobra, sin embargo, fracasó (Chuliá, *op. cit.*: 52).

de la información'. Hombre del Movimiento de todos modos, su característica principal era su ciega fidelidad al dictador [...] (Pizarroso, 1989: 237).

La descripción no se encuentra muy alejada de la que dibuja su sucesor en el cargo, Manuel Fraga Iribarne. Para Fraga, Arias Salgado era “un hombre de bien, pero limitado; creía de verdad en su concepto muy rigorista de la moral pública. Más grave era su idea del monopolio cuasi teológico de la verdad política” (Fraga, 1980: 34). En el siguiente capítulo abordaremos la doctrina o “teología de la información” que elaborará y tratará de imponer el ministro sobre el sistema de prensa; una “teología” cuyos fundamentos remontan a los estudios escolásticos que Arias había realizado en un centro eclesiástico; así como a la aparente, y sin embargo frustrada, vocación de profesor de escolástica que manifiesta:

Frente a la corriente cultural neopositivista, que se abre paso entre los jóvenes universitarios [explica Jesús García Jiménez], la construcción teórica de Arias Salgado desdena todo fundamento empírico. Construye desde arriba, desde la atalaya de su fe, que siempre pareció tan ingenua como sincera (García Jiménez, 1980: 202).

¿Cabe pues encuadrar a Arias Salgado en la “familia” católica? Desde luego su catolicismo será tan sincero e íntegro como integrista; a pesar de lo cual nunca defenderá los intereses acenepistas al modo de un Martín-Artajo. De hecho, el ministro se enzarzará en una viva polémica con el cardenal Herrera Oria a cuenta de la naturaleza que había de adoptar, merced a la intervención estatal, el sistema de prensa. ¿Hay que considerar entonces a Arias Salgado un falangista? El ministro era, efectivamente, lo que puede denominarse un “hombre del Movimiento”, que había ejercido como gobernador civil y jefe provincial de FET de las JONS en Salamanca (AHAEFE); y sin embargo, sus tesis se encuentran más alejadas aún del falangismo o el carlismo que del catolicismo propagandista. Lo cierto es que la dificultad de encuadrar a Arias dentro de una “familia” franquista contiene, en realidad, la clave de su nombramiento: el ministro es, ante todo, un leal y sincero franquista, en el sentido más literal del término; y es su lealtad al dictador, por encima de cualquier afinidad ideológica o “familiar”, la que motiva su nombramiento y su permanencia en el cargo. Hasta tal punto que, ante cualquier murmuración sobre el ministro, Franco apelará imperturbable a su fidelidad: así se expresaba, por ejemplo, el dictador el 7 de julio de 1962 —no sin un notable cinismo, pues habla sólo tres días antes de la crisis ministerial que se llevará por delante a Arias Salgado—, en una conversación con su primo y asistente personal Francisco Franco Salgado-Araujo (familiar, por cierto, de Arias Salgado):

Ahora el actual gobierno es bastante bueno, hay ministros muy competentes. Al de Información y Turismo le atacan mucho sus compañeros de gobierno, dicen que no da bastante información y que el público la busca en las radios rojas. Yo opino como

él y considero que ni la radio ni la prensa deben apresurarse a contar lo que ocurre [...] Reconozco que Arias Salgado no es un hombre enérgico, y por exceso de bondad no exige demasiado cumplimiento a sus subordinados; *pero es persona muy leal y yo le quiero bien* [el subrayado es nuestro] (Franco Salgado-Araujo, 1977: 343-344).

Es pues en estas coordenadas en las que hay que ubicar su actuación al frente del MIT, caracterizada *grosso modo* por la reactivación de los mecanismos de control de los periodistas españoles y por la delegación del ejercicio de la censura a los directores de las publicaciones, quienes no debían su nombramiento, por lo demás, sino al propio ministro⁸⁵. Bajo el ministerio de Arias se fortalecerán las asociaciones de la prensa⁸⁶, se regulará el ROP y revisarán los carnets expedidos por la anterior Administración⁸⁷ y se impulsará de nuevo la Escuela Oficial de Periodismo, que perderá, sin embargo, el monopolio formativo en favor de la ACN de P y el Opus Dei⁸⁸. Por otra parte, Arias

⁸⁵ Las publicaciones españolas hubieron de padecer la designación administrativa de sus directores al menos hasta principios de los años sesenta. El nombramiento permitía, o cuanto menos facilitaba, otras intervenciones estatales sobre la profesión y, sobre todo, los contenidos: (a) reforzaba, para empezar, el control administrativo del oficio periodístico, dado que el director había también de estar inscrito en el ROP y ser por tanto periodista profesional; (b) garantizaba, además, el acatamiento de las consignas; (c) permitía la delegación de la censura que se produjo, sobre todo en provincias, a partir de los años cincuenta; y (d) facilitaba el descargo de responsabilidades exigibles por el Estado ante infracciones y contenidos inconvenientes. Todo ello explica el celo del Estado por controlar el puesto de director; celo que lo llevaría a designar, al menos hasta los cincuenta, incluso a directores enfrentados con los propietarios de las publicaciones a su cargo. A partir de los años cincuenta y hasta 1966, la Administración cambiará de estrategia y, sin dejar de supervisar y controlar los nombramientos, realizará notables esfuerzos por consensuarlos con las empresas periodísticas. A partir de 1966 y durante el tardofranquismo, el Estado renuncia formalmente a la designación de directores, si bien se reservará dos resortes cruciales de control: la necesidad de poseer el carnet de periodista y de estar inscrito en el ROP (art. 35 de la LPI) (trámite que dependía de la Administración), y la exigencia de responsabilidades por los contenidos de los diarios a su cargo (arts. 39.1 y 65.2 de la LPI); responsabilidad que acarreaba duras sanciones administrativas que llegaban, en caso de recibir tres en un año, a la inhabilitación permanente para el cargo (art. 69.a.1-3 de la LPI).

⁸⁶ Las asociaciones de la prensa, integradas en el sindicato vertical y con unas juntas directivas dominadas por la Administración, se verán en cierto modo reforzadas a partir de 1955. Ese año, la Orden de 11 de mayo (BOE de 30 de mayo) creaba unos Tribunales de Honor bajo su control. Las normas reglamentarias de esta nueva jurisdicción, encargada de juzgar y sancionar los “actos deshonorables” cometidos por periodistas, quedarían fijadas durante el III Congreso Nacional de Prensa celebrado en Valencia en diciembre de aquel mismo año. Los Tribunales de Honor podían incluso llegar a apartar al periodista definitivamente de la profesión (art. 5) mediante resolución, por si fuera poco, inapelable (art. 21).

⁸⁷ Mediante la Orden de 20 de septiembre de 1951 (BOE del 24 de septiembre).

⁸⁸ Arias Salgado y Juan Aparicio tratarán de reactivar la institución a través de varias medidas: la Orden de 7 de marzo de 1953 (BOE de 27 de marzo) regula su plan de estudios, además de fijar las normas de funcionamiento, los órganos directivos y el personal docente de la Escuela. En este último ámbito, Juan Aparicio —cuya condición de director General de Prensa le confería también el cargo de director de la Escuela— contratará como profesores a algunos intelectuales franquistas con el fin de prestigiar la institución (Chuliá, *op. cit.*: 115).

A pesar de todo, la EOP perderá el monopolio de la formación en 1960. Durante toda la década anterior, el propagandismo católico no había cejado en el intento por recuperar sus viejas instituciones de enseñanza periodística. A los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo se le unirán, en 1952, unos cursos de periodismo impartidos por Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León XIII; y, en 1959, la creación de una Escuela de Periodismo en Valencia

instaurará un régimen inédito de censura delegada a los directores de publicaciones, con dos beneficios evidentes para el MIT (Chuliá, *op. cit.*: 128):

Por una parte, suponía la liberación de una pesada carga administrativa y evitaba problemas de coordinación entre los organismos de censura centrales y los provinciales; por otra, significaba aparentemente un relajamiento de la tutela del Estado sobre la prensa que sólo podía repercutir de manera favorable sobre la imagen del régimen.

Dos factores explican la implantación de esta “censura delegada”: primero, la insuficiencia de recursos administrativos para la aplicación de la censura en provincias (Sinova, *op. cit.*: 78); y, sobre todo, el creciente rechazo que ésta despertaba entre los periodistas españoles; es decir: el declive de la censura, que había comenzado a vislumbrarse durante la etapa anterior y que acabaría por desembocar en su abrogación a mediados de los sesenta⁸⁹.

Tanto la elección de Arias Salgado como de sus subordinados en la Dirección General de Prensa vienen a confirmar la pretensión del Régimen de asegurarse un control gubernamental más directo sobre la materia; pretensión que encaja dentro de la maniobra política que motiva la crisis de gobierno de 1951, en la que Franco promueve un refuerzo de la administración interna (Payne, *op. cit.*: 430). El movimiento responde a una fase de consolidación y estabilización —casi podría afirmarse que incluso de placidez— del franquismo. Por un lado, FET de las JONS, si bien nunca será desarticulada, no deja de perder peso dentro del Ejecutivo y del aparato de poder del

ligada a Acción Católica. Por otro lado, en 1958, tras la llegada al Gobierno de algunos de sus miembros, el Opus Dei abrió en Navarra un Instituto de Periodismo (Chuliá, *op. cit.*: 116). Todos estos ensayos católicos habían ido madurando al calor del Concordato firmado el 27 de agosto de 1953 (BOE de 19 de octubre), por el cual el Estado español reconocía a la Iglesia el derecho de dirigir centros de enseñanza. Junto al Concordato (éxito, según comprobamos en el capítulo anterior, del propagandista Alberto Martín Artajo), la ruptura de facto del monopolio formativo había ya allanado el camino, por la vía de los hechos consumados, para la ruptura *de iure*. Ésta sobrevendrá en 1960, con el Decreto 1784, de 7 de septiembre (BOE de 24 de septiembre), por el que, en desarrollo del artículo 31 del Concordato, “El Estado reconoce a la Jerarquía eclesiástica española, representada en la Conferencia de reverendísimos Metropolitanos españoles, el derecho a crear su Escuela de Periodismo” (art. 1); que comenzaría a funcionar ese mismo año. La evidente pérdida de poder que ello suponía para la Administración ha de ser, de cualquier modo, matizada por dos hechos: primero, la ruptura del monopolio estatal de la formación periodística únicamente se realizaría a favor de la Iglesia, a través de la ACN de P y del Opus Dei. La posibilidad de abrir centros de enseñanza del oficio nunca se extendería a particulares o instituciones privadas. Por otro lado, la Administración seguía reservándose la exclusividad de la expedición de títulos, de modo que los alumnos que decidieran realizar su formación en los centros católicos, habrían de revalidar sus estudios ante un tribunal de la EOP, lo que no dejaría de soliviantar, por cierto, a la Iglesia.

⁸⁹ Elisa Chuliá infiere este declive a partir de la correspondencia mantenida durante los cincuenta entre el MIT y algunos directores de publicaciones (y, en especial, Torcuato Luca de Tena): “La censura [concluye Chuliá] se había convertido en objeto de frecuentes protestas ante la Administración. Una vez superada la etapa más crítica del régimen, la prolongación de estos controles preventivos sobre los mensajes resultaba difícil de aceptar para los directivos de las empresas periodísticas” (*op. cit.*: 129).

Régimen en general (Payne, *op. cit.*: 445). Por otro, el acenepismo, que asiste a la desposesión de su poder formal (aunque no de su influencia) sobre el aparato institucional de prensa, queda contentado con la firma, en 1953, de un Concordato logrado en gran parte por Alberto Martín Artajo. Hasta 1956, tras los enfrentamientos en la Universidad de Madrid entre falangistas disidentes, universitarios opositores y policía, el Régimen no volverá a afrontar una crisis grave. Franco responderá entonces, en 1957, tratando de consolidar su poder a través de la formación de un Gobierno más fuerte, en el que, a pesar de la incorporación de los tecnócratas, Arias Salgado mantendrá la cartera de Información y Turismo. Su caída no se producirá, según todo parece indicar muy a pesar de Franco⁹⁰, hasta 1962: la excesiva burocratización que impone en el Ministerio, la rigidez en la aplicación de la censura durante su mandato, la polémica mantenida con Ángel Herrera Oria, y su mala salud, motivan un cese detonado por la torpeza (fruto en realidad de un excesivo celo o rigorismo franquista) con que el ministro trató el llamado “contubernio de Munich”⁹¹. Los nuevos aires de reforma imponían un cambio al frente de la información y la prensa.

2.2 El aparato administrativo de prensa durante el tardofranquismo

Un análisis formal de la titularidad de la cartera de Información permite distinguir, en el último periodo de gobierno franquista del aparato de prensa, hasta cinco etapas: una primera dirigida por Manuel Fraga Iribarne hasta su destitución en 1969; una segunda etapa con Alfredo Sánchez Bella en el MIT, que se abre en 1969 y llega hasta 1973; a la que siguen dos breves periodos, entre julio de 1973 y enero de 1974, cuando ocupa la cartera Fernando Liñán y Zofío, y de enero a octubre de 1974, cuando le sucede Pío Cabanillas Gallas. Por fin, cierra el periodo en octubre de 1974 León Herrera

⁹⁰ Así se excusa Francisco Franco ante su primo Franco Salgado-Araujo por la destitución de Gabriel Arias Salgado: “Arias Salgado fue un buen ministro, pero bastante débil. Es muy culto y yo le aprecio muchísimo y le estoy muy agradecido por lo mucho que trabajó y por la lealtad que siempre ha tenido para mí y para el régimen al que servía” (Franco Salgado-Araujo, *op. cit.*: 349).

⁹¹ Entre el 5 y el 8 de julio de 1962 se habían reunido en la ciudad alemana de Munich parte de la oposición interior y exterior al Régimen. Así explica las causas de la destitución Stanley G. Payne: “Arias Salgado estaba mal de salud y se había convertido en el blanco de las críticas, procedentes incluso de dentro mismo del régimen, por la rigidez de la censura y la severidad de gran parte de la prensa del régimen [...] Los jerarcas de la Iglesia llevaban también varios años exigiendo mayor libertad y flexibilidad de información y esto había llevado al ultracatólico ministro de Información a enzarzarse en una embarazosa polémica con el obispo de Málaga, Herrera Oria. Finalmente, el ministro había tratado con torpeza el asunto de Munich, llevando a cabo una desproporcionada campaña propagandística contra los participantes que resultó contraproducente, aumentó el rechazo de la opinión pública extranjera e involucró incluso a don Juan, que había apoyado el régimen durante todo el proceso. Con todo ello Arias consiguió ganarse la enemistad simultánea de los liberales europeos, los monárquicos y la jerarquía eclesiástica, y Franco, aunque a desgana, lo destituyó” (Payne, *op. cit.*: 523).

Esteban al convertirse en el último ministro de Información de la dictadura. Cinco etapas que, de atender a la evolución efectiva de la política de prensa antes que a los cambios formales de titularidad del Ministerio, bien pueden agruparse en dos, con la cesura en 1966. Hasta la aprobación de la Ley de Prensa en marzo de ese año, el ministerio de Fraga se caracterizará por una apertura paulatina y controlada del ejercicio de la censura. Desde 1966 y hasta el final del franquismo —con la excepción de un breve paréntesis en 1974, cuando asuma la dirección del MIT Pío Cabanillas Gallas—, la política informativa y, en particular, de prensa, quedará marcada, en cambio, por una clara involución. Durante la última década de la dictadura, tanto Fraga como sus sucesores se verán impelidos a aplicar con dureza la Ley de Prensa: en algunos casos la involución vendrá motivada por el intento de preservar la Ley; en otros, responderá a las convicciones personales de los ministros. En todos los casos, la involución se inscribe en un contexto político marcado por el auge de las facciones “inmovilistas” y la crisis de un Régimen que agoniza al ritmo en que lo hace su dictador.

De los cinco ministros antes mencionados, al menos tres —Manuel Fraga Iribarne, Alfredo Sánchez Bella y Pío Cabanillas Gallas— pertenecieron en uno u otro momento, según el estudio de Sáez Alba (1974), al círculo madrileño de la ACN de P, dos de cuyos miembros —Manuel Jiménez Quílez y Alejandro Fernández Sordo— coparon además, durante todo el periodo, la Dirección General de Prensa⁹². La Asociación Católica Nacional de Propagandistas mantuvo así, al menos sobre el organigrama ministerial, su influencia sobre la prensa española. Huelga explicar que ello no implica que mantuvieran sus dirigentes una política y gestión común o idéntica, no sólo porque resulte difícil paragonar el talante de un Sánchez Bella con el de un Cabanillas, sino sobre todo en la medida en que, en los sesenta y los setenta, la correlación de fuerzas internas en el seno del Régimen parecía dirimirse más en torno al eje aperturismo-inmovilismo que en el enfrentamiento directo entre las viejas “familias” franquistas. Conviene tener presente, no obstante, que fueron sobre todo acenepistas —y en algunos casos concretos, como el de Jiménez Quílez, estrechamente vinculados a La Editorial Católica, la principal cadena de prensa privada del país— quienes gestionaron el aparato tardofranquista de control de

⁹² En el listado de personalidades franquistas ligadas a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Sáez Alba incluye a Manuel Fraga como miembro del círculo madrileño en los años cuarenta; años en que, siempre según Sáez, Fraga se habría servido de la Asociación “para su promoción académica y política” (1974: 301). Tanto Alfredo Sánchez Bella —inscrito en 1935, para acercarse después, en 1939, al Opus Dei— (1974: 318), como Andrés Reguera Guajardo (*op. cit.*: 315), Manuel Jiménez Quílez (*op. cit.*: 307) y Alejandro Fernández Sordo (*op. cit.*: 301) habrían pertenecido también al círculo acenepista madrileño. Aunque Sáez no especifica a qué círculo estaba inscrito, también Pío Cabanillas Gallas (ministro en 1974) habría estado ligado a la ACN de P (*op. cit.* 296).

la empresa periodística y quienes aplicaron, desde 1966, una Ley inspirada en buena medida en los principios defendidos por el círculo madrileño de la Asociación (v. 3).

Tal aplicación de la Ley de Prensa supuso, en lo que al control de los contenidos publicados se refiere, lo que bien puede considerarse un cambio de paradigma: de un modelo en el que venían a conjugarse mecanismos reactivos y, sobre todo, preventivos (como las consignas, la designación ministerial de los directores de las publicaciones y la censura previa), parece pasarse a un modelo eminentemente represivo, basado en el secuestro de publicaciones, en la persecución administrativa y penal y en la imposición de sanciones (cuya capacidad coactiva no dejaba, de todos modos, de implicar un evidente carácter preventivo)⁹³.

El artículo tercero de la Ley de Prensa acaba, para empezar, con treinta años de censura previa. Tal y como ocurriría poco tiempo después con las consignas, durante los años cincuenta se había acentuado el agotamiento de la censura, un mecanismo de control preventivo que había sido concebido y presentado como medida excepcional para tiempos de guerra y que, tras el intento de atenuación acenepista de los cuarenta, había evolucionado hacia un régimen de “censura delegada” durante el mandato de Gabriel Arias Salgado. Su rechazo creciente entre la profesión (Chuliá, 2001: 129) tuvo como consecuencia una merma de autoridad y por tanto de eficacia administrativa en su aplicación. Es en este contexto de declive en el que hay que situar su suavización a partir de 1962 y su supresión definitiva en 1966; sin olvidar la estrategia de Fraga de atenuación paulatina con el fin de crear un clima favorable a la aprobación de su nueva ley. En ella, el artículo tercero establece: “La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes”. Prueba del asenso que despertaba la medida son las pocas modificaciones que experimentó el artículo desde su redacción original incluida en el anteproyecto. Únicamente cabe reseñar una objeción substancial, planteada por Fernando Martín-Sánchez en abril de 1964 y asumida por el Consejo Nacional de Prensa. Proponía el acenepista sustituir la enunciación negativa del artículo por otra positiva similar a la siguiente: “Sólo en los casos de excepción expresamente previstos en las Leyes, la Administración podrá aplicar la censura previa o imponer la consulta voluntaria”. Argumentaba Martín-Sánchez que “el sentido negativo del [ante] proyecto

⁹³ En la segunda parte de la investigación comprobaremos, en todo caso, que tal cambio de modelo afectó únicamente al control tardofranquista de los contenidos de la prensa, que no era, como veremos, sino un resorte más de un modelo más amplio de control del sector. Como demostraremos en el segundo bloque, el Régimen orquestó e implementó, entre 1966 y 1975, un mecanismo de control de la empresa periodística privada y de sus accionistas y directivos más o menos eficaz, pero preventivo en cualquier caso y dirigido a garantizar que sólo aquellos empresarios y directivos aceptados por la Administración pudieran editar prensa en España

de Ley envuelve una condenación implícita de todo lo hecho hasta ahora en la materia. Parece, por lo menos, poco generoso” (Enmienda particular al anteproyecto presentada por Martín-Sánchez el 8 de abril de 1964. En AGA sig. [3] 49.21 c. 65136). La propuesta no será escuchada por el legislador, que mantendrá en el proyecto la enunciación negativa original; lo que provocará el siguiente comentario del influyente y conservador autor de la nota archivada junto a los informes sobre el proyecto de ley (autor que, en este caso, no será atendido por el legislador ni por los procuradores en Cortes):

La declaración es tan tajante y concreta que no es fácil encontrar superación en la legislación extranjera. No es un mero enunciado del principio de la libertad, sino una expresa y concreta prohibición a la Administración de que lo coarte sin una causa excepcional proclamada por la ley. Creo que ni las Cortes de Cádiz han ido tan lejos” (“Notas a la Ley de Prensa e Imprenta”. En AGA sig. [3] 49.21 c. 65137).

A pesar de la observación, esta supuesta “liberalidad” del artículo tercero se veía atenuada por el artículo cuarto, que introducía la posibilidad de consulta voluntaria de contenidos susceptibles de sanción⁹⁴ y por la censura *ex post* que permite el secuestro administrativo de publicaciones⁹⁵, posibilitado a su vez por la obligación de depósito previo de ejemplares media hora antes de su publicación previsto en el artículo 12. La

⁹⁴“La Administración [establece el artículo cuarto] podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de impresos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La respuesta aprobatoria o el silencio de la Administración eximirán de responsabilidad ante la misma por la difusión del impreso sometido a consulta”.

El artículo sería objeto de dos enmiendas y modificaciones durante el proceso de elaboración y tramitación: (a) en primer lugar, trataría de fijarse un plazo para la respuesta administrativa (el CNP propondría, por ejemplo, un plazo de tres horas), que finalmente no se incluirá en la Ley. (b) En segundo lugar, se eliminará la posibilidad contemplada en el anteproyecto de que la consulta voluntaria fuera planteada por el autor de la información.

⁹⁵ “Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de la prensa o Imprenta y sin perjuicio de la obligación de la denuncia en el acto a las autoridades competentes, dando cuenta simultáneamente al Ministerio Fiscal, podrá, con carácter previo a las medidas judiciales que establece el título V del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial, del impreso o publicación delictivos, donde quiera que estos se hallaren, así como de sus moldes para evitar la difusión. La autoridad judicial, tan pronto como reciba la denuncia, adoptará la resolución que proceda respecto del secuestro del impreso o publicación, y sus moldes” (art. 64 de la LPI).

En el párrafo primero, el artículo remitía a los “trámites que establecen las leyes de procedimiento” para exigir responsabilidades penales y civiles. A pesar de que la Ley de Prensa se refiere al secuestro administrativo como una medida “con carácter previo” a las establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en realidad va mucho más allá, pues llega a modificarlas y a modificar por tanto estos trámites. Alude la LPI, sin nombrarlos, a los artículos 816 y 819 del Título V del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; el primero de ellos, el artículo 816, queda modificado, pues el secuestro ya no corresponde *exclusivamente* al juez al instruir el sumario, sino a la administración, cuya actuación queda, eso sí, supeditada a la ulterior decisión judicial. Esta intervención judicial, aunque dirigida únicamente a confirmar o revocar el secuestro decidido previamente por la administración, no deja de constituir una garantía inédita hasta entonces; una garantía que, sin embargo, no aparecía contemplada en el anteproyecto de ley, en cuyo artículo 72 se diseñaba un secuestro administrativo de urgencia sin intervención judicial alguna.

redacción definitiva del artículo 12 será fruto de una negociación mantenida durante la tarde del 19 de enero por nueve personas: los miembros de la ponencia; un representante de la “familia” acenepista, Alberto Martín Artajo; el representante de la Administración, Pío Cabanillas; y tres responsables de diarios, Mariano Rioja (de *Edica*), Torcuato Luca de Tena (de *Abc*) y Emilio Romero (del diario *Pueblo*) (c.t. 81/5 de 20 de enero. En ACD). Según Pío Cabanillas, el depósito previo tenía como objetivo, no un restablecimiento encubierto de la censura previa, sino que la Administración fuera el “primer lector” del periódico (c.t. 75 a 75/2 de 19 de enero. En ACD). Sin embargo, el incumplimiento del depósito previo en los plazos fijados no era considerado únicamente una infracción administrativa, sino también un delito castigado con pena de arresto mayor, ya que, de acuerdo con el artículo 13, los impresos no depositados son considerados “clandestinos”. La severidad de la medida revela la verdadera razón de ser del depósito: facilitar el conocimiento previo del contenido de las publicaciones para, dado el caso, poder ordenar su secuestro.

Por otra parte, desde los sesenta y hasta el final de la dictadura se producirá un declive del control estatal de la profesión periodística, marcado por tres notas esenciales: la desvinculación de los estudios oficiales de periodismo de la DGP y el intento de “academización” hasta su desembarco en la universidad en 1970; la conversión del Registro Oficial en un mero índice de profesionales (Chuliá, *op. cit.*: 189); y la aprobación, en 1964, del Estatuto de la Profesión Periodística, por el que se creaba un Jurado de Ética Profesional encargado de juzgar infracciones deontológicas⁹⁶. A este declive del control estatal de la profesión y a la implementación del nuevo paradigma eminentemente represivo de control de contenidos, le acompañará el modelo —objeto de análisis en el segundo bloque— de control de la empresa periodística privada, de su estructura de propiedad y cuadros directivos, que se ejecuta entre 1966 y 1975.

⁹⁶ El Jurado de Ética Profesional quedaría regulado por Orden de 3 de noviembre de 1964 (BOE de 11 de noviembre); se trataba de una nueva jurisdicción encargada de juzgar infracciones deontológicas, así como incumplimientos de las normas de incompatibilidad del desempeño del oficio. Del mismo modo que los Tribunales de Honor, el Jurado de Ética Profesional tenía capacidad para inhabilitar definitivamente a los periodistas para el ejercicio de la profesión (art. 34 de Orden de 3 de noviembre de 1964); si bien a diferencia de aquel, las sanciones del Jurado de Ética sí eran recurribles ante otro Jurado de Apelación, creado de forma conjunta al de Ética. De hecho, la duplicación de la jurisdicción deontológica que implicaba la cohabitación del Jurado de Ética y de los Tribunales de Honor desembocaría en la supresión de estos últimos, a propuesta, al parecer, del propagandista Aquilino Morcillo, director de *Ya* (Fernández Areal, 1971: 121). De cualquier modo, la efectividad de la capacidad punitiva concedida a las asociaciones —compuestas por unas bases cada vez más próximas a la oposición al Régimen— a través de los Tribunales de Honor era más bien exigua, toda vez que “la protección corporativa inhibía las denuncias entre compañeros” (Chuliá, *op. cit.*: 118).

2.2.1 La etapa de Manuel Fraga Iribarne (10 de julio de 1962 a 29 de diciembre de 1969)

El 10 de julio de 1962, Franco llama a Manuel Fraga Iribarne a ocupar la cartera de Información y Turismo. El nombramiento abre un nuevo periodo en el gobierno del aparato institucional de la información y, en particular, de la prensa privada; un tiempo sin duda marcado por la personalidad del joven ministro, que no tarda en revelar su carácter “infatigable, proteico, sanguíneo, autoritario por anabolismo” (García Jiménez, *op. cit.*: 324); Manuel Fraga arriba atesorando un “brillantísimo ‘currículum’ académico de líder preconizado, memoria privilegiada [e] increíble fecundidad literaria, que ha utilizado siempre como razón fundante de su predominio político [...]” (*Ibídem*)⁹⁷.

Los rasgos personales del nuevo ministro no dejan de contrastar con la “debilidad” que el propio Franco achacaba a su antecesor en el cargo. Fraga constituye, efectivamente, poco menos que la antítesis de Gabriel Arias Salgado, tanto en lo personal, como sobre todo en su actuación política. Frente al inmovilismo y la rigidez censora de Arias, Fraga propugna una cierta “apertura” no exenta de paternalismo; frente al rigorismo moral católico y la “teología de la información”, impone el pragmatismo y la “secularización ideológica” (García Jiménez, *op. cit.*: 326); frente al exceso de burocratización del MIT, el nuevo ministro representa la eficacia.

Franco había justificado la destitución de Arias por la excesiva burocratización a que había sometido al Ministerio. Así se expresa, en una conversación con su primo y confidente, a propósito del ministro cesado:

Ya llevaba muchos años al frente de Información y Turismo. No me agrada lo mucho que burocratizó el ministerio, que convierte la propaganda en algo lento y mecanizado, sin alma, sin entusiasmo. Se han creado demasiadas direcciones generales, secretarios de éstas y un sinfín de personal subalterno. En fin, una máquina lenta y poco eficaz. (Franco Salgado-Araujo, *op. cit.*: 349).

El nombramiento de Manuel Fraga —exponente de lo que los publicistas del Régimen llamaron la “burocracia de la eficacia” (Payne, *op. cit.*: 524)— parece responder, pues,

⁹⁷ Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) era doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y Económicas. En 1948 obtuvo la Cátedra de Derecho Político en la Universidad de Valencia; y en 1953, la de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid. Poco antes había ganado la oposición de letrado en Cortes (1945) e ingresado en la Escuela Diplomática (1947). En 1951 inicia su trayectoria en organismos públicos nacionales como secretario general del Instituto de Cultura Hispánica. En los años cincuenta asumirá diversos cargos públicos, de entre los que destacan la Secretaría General del Consejo Nacional de Educación (1953), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación (1955) la Secretaría de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes (1958) (desde 1955 era procurador en Cortes y Consejero Nacional del Movimiento), la Dirección del Instituto de Estudios Políticos (1961); hasta su nombramiento como ministro de Información y Turismo, en 1962.

EFEData, Base de Datos de las Agencia EFE.

en primer lugar, a un intento de Franco por racionalizar el funcionamiento del ministerio e incrementar su eficacia. El propio Fraga dice adquirir, ya en su primer día al frente del MIT, la certeza de que “en aquella Casa [*sic*] funcionaban pocas cosas, y éstas más valiera que no funcionasen”; según relata, esta evaluación del estado en que se encuentra el Ministerio lo lleva tomar una clara determinación:

Tomé [asegura a posteriori, en 1980, ya en democracia] el decidido propósito de que aquello cambiara, pronto y a fondo; que la parte del Ministerio dedicada a la Información se convirtiera en un instrumento de apertura política y de promoción cultural (Fraga, 1980: 33).

La modificación orgánica más relevante que se produce en el MIT no llegará, sin embargo, hasta 1968, durante el último año de Fraga como ministro⁹⁸; el cambio se inscribe, por lo demás, dentro de una operación general de reorganización de toda la Administración, puesta en marcha en noviembre de 1967 con el fin de reducir el gasto público⁹⁹. Sí que se acometerá antes, en cambio, una reorganización en profundidad de la Dirección General de Prensa: en septiembre de 1962, apenas dos meses después de la crisis de gobierno, un Decreto viene a unificar la normativa dispersa y parcial sobre su organización¹⁰⁰. Bajo el mandato de Fraga, la DGP aún será objeto de otras dos remodelaciones relevantes, en 1965¹⁰¹ y en 1968¹⁰².

Cuando se aprueba la Ley Fraga, la Dirección General de Prensa depende orgánicamente –del mismo modo que la Secretaría Técnica y el resto de Direcciones Generales– de la Subsecretaría de Información y Turismo, dirigida por el acenepista Pío Cabanillas Gallas. De la DGP dependen, a su vez (además de la EOP, del CNP y de la Institución San Isidoro), una Subdirección General de Servicios Informativos, en cuyo Servicio de Información se encuadra la Sección de Prensa Nacional encargada de la vigilancia y reseña de los diarios españoles; y una Subdirección General de Prensa, con las Secciones de Publicaciones Periódicas, Periodistas, Prensa Nacional y Prensa Extranjera, y desde cuya Sección de Empresas Periodísticas se gestiona el Registro de

⁹⁸ Decreto de Presidencia 64/68 de 18 de enero de 1968 por el que se reorganiza el MIT (BOE de 20 de enero).

⁹⁹ Decreto de 27 de noviembre de 1967 de reorganización de la Administración pública.

¹⁰⁰ Decreto de 27 de septiembre de 1962 (BOE de 12 de octubre). En el primer artículo, define las atribuciones básicas del organismo: “Corresponde a la Dirección General de Prensa el desarrollo de las competencias atribuidas al Ministerio en relación con las publicaciones periódicas, informativas y *las profesionales* [*sic*] de la información y, en general, cuanto se refiera a la aplicación de las normas que regulen estas materias”

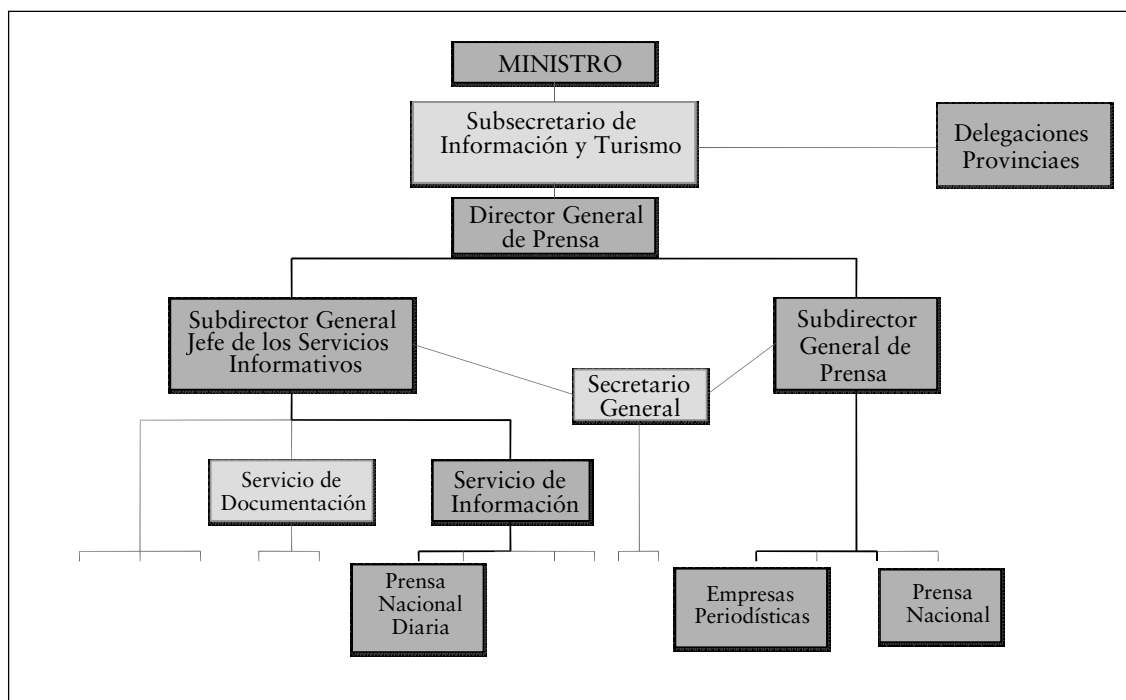
La errata subrayada será corregida y sustituida por el artículo masculino plural “los” en BOE de 24 de octubre de 1962.

¹⁰¹ Decreto del MIT 3238/65 de 28 de octubre de 1965 (BOE de 15 de noviembre).

¹⁰² Decreto del MIT 64/1968, de 18 de enero (BOE de 20 de enero). La disposición orgánica será luego modificada, si bien muy levemente, por el Decreto 836/1970, de 2 de marzo de 1970 (BOE de 3 de abril).

Empresas Periodísticas, una de las piedras angulares, como veremos, del control administrativo de la empresa periodística privada (v. bloque II).

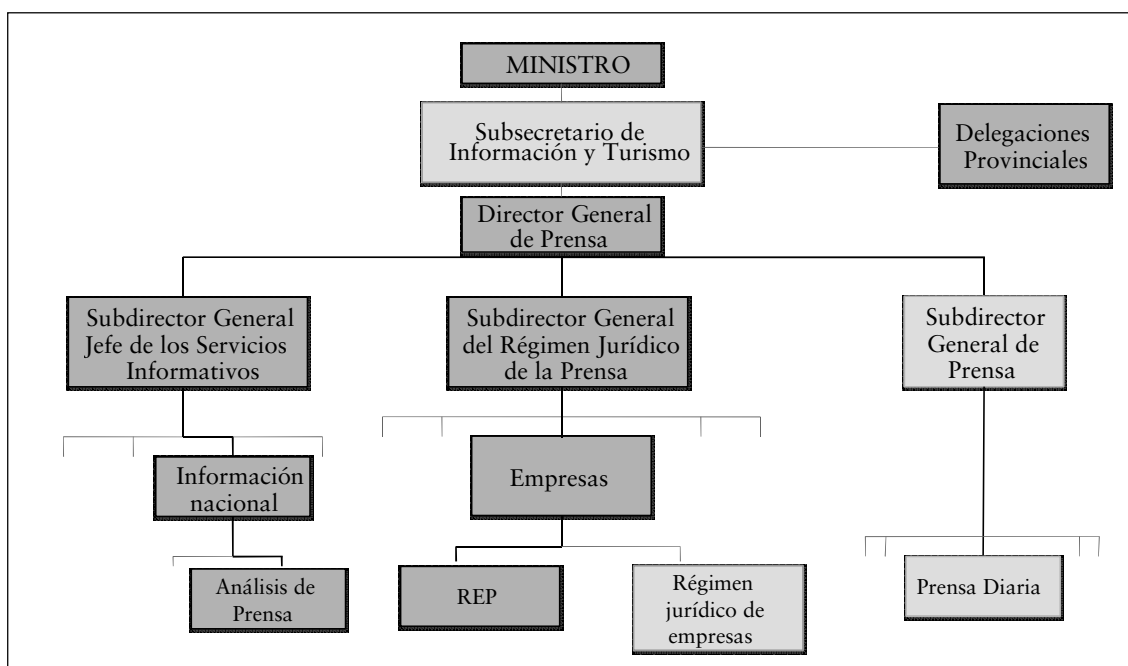
FIGURA 1: Organigrama simplificado de la DGP en 1966



Fuente: elaboración propia

En 1968 se procede a una ligera reorganización de la DGP, que, de cualquier modo, mantiene la dependencia orgánica de la Subsecretaría de Información y Turismo, regida por Cabanillas y con control directo sobre las delegaciones provinciales del MIT a través del Servicio de Delegaciones. La Dirección General de Prensa se desgaja entonces en tres Subdirecciones, todas ellas implicadas, de un modo u otro, en el control de la prensa privada. La Subdirección General de Prensa alberga –junto a las secciones de Publicaciones Periódicas no diarias, de Agencias, de Prensa Extranjera y de Asuntos Generales– la Sección de Prensa Diaria. En la Subdirección General del Régimen Jurídico de la Prensa se inscribe la Sección de Empresas, dividida en dos Negociados, el de Registro de Empresas Periodísticas y el de Régimen Jurídico de Empresas Periodísticas. Por fin, la Subdirección General de Servicios Informativos mantiene una Sección de Información Nacional con un Servicio de Análisis de Prensa.

FIGURA 2: Estructura orgánica simplificada de la DGP en 1968



Fuente: Elaboración propia

Al frente del organismo encargado de la prensa se mantiene, durante todo el mandato de Manuel Fraga, un acenepista procedente de la Editorial Católica: Manuel Jiménez Quílez (1915-2001). Tras cursar sus estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo de El Debate, Jiménez Quílez había comenzado a trabajar, en julio de 1936, en la redacción del diario *Ya*, que llegará a dirigir entre 1980 y 1981. Tras la Guerra Civil ingresa en Logos, la agencia de noticias de La Editorial Católica, desde cuya dirección pasa, en 1962, al despacho de la DGP. Jiménez Quílez volverá a dirigir Logos en 1970, tras abandonar la Dirección General de Prensa y poco antes de ser nombrado, en 1974, director General de Coordinación Informativa y, en 1975, subsecretario de Información y Turismo¹⁰³. Manuel Camacho de Ciria, será nombrado jefe de la censura de prensa. Fraga narra en sus memorias cómo éste último “se quedó pálido” al serle ofrecido el cargo (Fraga, *op. cit.*: 37). La anécdota no es baladí: revela el declive de la atracción que el gobierno de la prensa (y sobre todo la censura) venía suscitando en los dirigentes franquistas. De las pugnas de los años anteriores por acaparar resortes de poder sobre la prensa —recuérdense, en este sentido, los intentos referidos de Serrano Suñer y de Luis Carrero Blanco por adquirir potestades censoras y propagandísticas—, se

¹⁰³ Sus cargos de responsabilidad en La Editorial Católica no terminan ni mucho menos, con todo, con la dirección de Logos. En 1979 es nombrado director General de Edica, en la que también había desempeñado el cargo de adjunto al consejero de redacción; y entre 1980 y 1981 dirigirá el diario *Ya*.

EFEDData, Base de datos de la Agencia EFE y AHEFE.

había pasado a un acusado desdén por la asunción de sus competencias, cuando no, como en el caso de Camacho, a un franco rechazo. Será, de hecho, en este momento, bajo el ministerio de Fraga, cuando Exteriores restituya definitivamente sus facultades de intervención sobre la información extranjera al MIT. Para Elisa Chuliá, este menosprecio del gobierno del aparato institucional de prensa no deja de influir en la estabilización orgánica que, tal y como constatamos en un apartado anterior, se da en estos años:

Frente a los vaivenes organizativos y personales del primer periodo del régimen [asegura], en los años cincuenta la rotación de los cargos había disminuido considerablemente [...] A ello había contribuido, indudablemente, el asentamiento institucional del régimen, pero también la progresiva pérdida de interés por ejercer unas competencias que, si investían de incuestionable poder a los que las ejercían, también les ocasionaba frecuentes desabrimientos (Chuliá, *op. cit.*: 112).

Desabrimientos quizás motivados, no sólo por la mácula política que el ejercicio de la censura supondría en un tiempo de reforma y apertura (cuya venida podría aventurarse más que probable), sino, además, por las innumerables presiones que el gobierno de la prensa conllevaba. Efectivamente, según se desprende de las memorias de Fraga, los responsables del MIT y, en particular, de la Dirección General de Prensa, habrán de afrontar las presiones de periodistas y escritores, así como los ataques de la prensa internacional; pero, sobre todo, deberán soportar las coacciones y asechanzas de toda índole procedentes del Consejo de Ministros.

Con el apoyo de Jiménez Quílez, Fraga acomete, al menos durante sus primeros años, un proyecto de tímida apertura o “apertura controlada” (Barrera, 1993: 103) que culminará en 1966 con la aprobación de una nueva Ley, que se venía gestando desde 1959 y cuyo anteproyecto comienza a redactar el subsecretario del Ministerio y futuro titular del MIT, Pío Cabanillas:

Manuel Fraga trajo nuevos aires e impulsó los trabajos preparatorios de la nueva ley, con el objetivo final de lograr una apertura informativa lo más amplia posible dentro de los límites permitidos en un Estado de corte autoritario (Barrera, *ibídem*).

Esta limitación de la “apertura” resulta crucial para entender el credo político del ministro: para Manuel Fraga, la imposición de limitadas reformas sistémicas no es sino el método ineluctable para evitar la ruptura: la reforma se revela como la única vía posible para garantizar la continuidad del Régimen. Por supuesto, este principio de “reforma o ruptura”, no es sino la aplicación a la política española de la tan manida fórmula lampedusiana del “cambiar algo para que nada cambie”. Para Fraga —quien, conviene tenerlo presente, es desde 1953 catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional—, de hecho, es ésta y no otra la función pragmática esencial del Estado: ordenar los procesos de transformación social, anticipando sus efectos y controlando sus

resultados (García Jiménez, *op. cit.*: 345): “Su planteamiento pragmático [explica García] lleva a Fraga a concebir la legitimidad del sistema político en función de su propia eficacia¹⁰⁴ para racionalizar el cambio social [...]”.

Aplicado a la prensa, esta necesidad de reformas que controlen y canalicen las transformaciones sociales operadas en la sociedad española de los sesenta se traducirá en una progresiva atenuación de la censura y en la definitiva supresión de las consignas, así como en una mayor permisión de los artículos políticos. Si estas dos últimas medidas se ejecutarán de forma abrupta¹⁰⁵, la atenuación de la censura habrá de someterse, en cambio, a una aplicación paulatina. Así le expone Fraga a López Rodó sus planes de “apertura” y eliminación progresiva de la censura:

Primero, ir quitando presión, desde la misma renovada manera de ejercer la tijera, para que la gente se fuera acostumbrando; segundo, hacer una ley seria, que luego fuese muy difícil el dar marcha atrás. Este proceso tomó tres años largos, pero fue irreversible (Fraga, *op. cit.*: 38).

Y tercero, habría que añadir a la enumeración, aplicar de forma rigurosa todas las posibilidades coercitivas o represoras que ofrezca la ley, dado que, según la convicción del ministro, “[...] en todo proceso de reformas y apertura hay que ser a la vez liberal y firme en el ejercicio de la autoridad” (Fraga, *op. cit.*: 47).

De cualquier forma, todo ello se encuentra, como hemos señalado, al servicio de la continuidad del franquismo. Es así, precisamente, como hay que entender la lealtad que Fraga profesa al Régimen (e incluso la admiración que Franco le merece, según se desprende de los comentarios que de él realiza en sus memorias, publicadas cinco años después de la muerte del dictador). Lealtad sin la que, de todos modos y por más que Franco se viera impelido a ofrecer guiños reformistas, difícilmente habría sido elevado a la dignidad ministerial. Manuel Fraga no deja de ser, de hecho, un hombre del Régimen, con una trayectoria profesional dedicada casi en exclusiva al servicio público; y es precisamente dicha trayectoria de servicio a la dictadura uno de los factores determinantes que decantan su elección como ministro, en detrimento del otro candidato, mucho más experimentado, aunque con un historial menos immaculado: Manuel

¹⁰⁴ “Así [abunda Javier Terrón], a la hora de buscar los criterios legitimadores del Estado surgido de la guerra civil, los argumentos tradicionalmente utilizados tales como la exaltación de los españoles, de la Patria, la defensa de la religión, el orden, la autoridad, etc., pasan en Fraga a segundo plano para hacer de la política de realizaciones, es decir, de la legitimidad basada en el ejercicio correcto y oportuno del poder, el fundamento último del régimen” (Terrón, 1981: 169).

¹⁰⁵ Fraga afirma que, poco después de su llegada al ministerio, ordena a Manuel Jiménez Quílez acabar con las consignas: “Tuve [relata] un largo despacho con Jiménez Quílez, en el cual quedó claro que se suprimían en adelante todas las consignas a los periódicos, lo que por sí mismo cambió la naturaleza de la prensa (hasta entonces, uniforme en los comentarios políticos); y en que se abría la veda de los artículos políticos, en sentido estricto” (Fraga, *op. cit.*: 43).

Aznar¹⁰⁶. Pero, naturalmente, la designación de Fraga como ministro de Información y Turismo no responde únicamente a su “lealtad reformista” para con el Régimen. Responde, antes bien, por un lado, a la acuciante necesidad del franquismo de obtener cierta credibilidad en la escena internacional y, en concreto, en la Europa occidental; y, por otro, a la igualmente acuciante obligación de implantar ciertas reformas para evitar rupturas más traumáticas. De ambas es bien consciente Franco.

La “gran transformación” (Juliá, *op. cit.*: 175) que se produce en España en los años sesenta amenaza con agravar la divergencia entre la sociedad española y el Régimen. Hechos como el auge de la emigración y el éxodo rural, el tímido renacimiento de la clase obrera manifestado en el aumento de las huelgas y en las negociaciones de convenios colectivos, o el crecimiento constante de la oposición exterior e interior, constituyen indicios de una transformación social ante la que el franquismo no puede permanecer impasible. Buena parte de ellos vienen propiciados por el extraordinario desarrollo económico que experimenta España durante la década; más a pesar de la dictadura que gracias a ella, según el juicio de no pocos economistas (véanse, por ejemplo, Tamames, 1985: 679; y Barciela, 2001: 9-10). De acuerdo con las estimaciones del Consejo de Economía Nacional, entre 1935 y 1954, la Renta Nacional española apenas había aumentado de los 199 mil millones de pesetas a los 257 mil millones; mientras que la renta per cápita se había incrementado levemente de 8.068 a 8.943 pesetas (Tamames, 1985: 531)¹⁰⁷; es decir, que hasta 1954, el país no logra consolidar un nivel de renta per cápita superior al de la preguerra: “Sólo desde 1954 [explica Ramón Tamames], en buena medida por el impacto de la *ayuda* americana y de una serie de créditos exteriores, se inició una cierta recuperación de la RN [Renta Nacional]” (*Ibídem*). A partir de ese año, el crecimiento de la economía registra índices asombrosos:

¹⁰⁶ Preguntado por el posible nombramiento de Aznar en julio de 1962, responde Franco: “Aunque reconozco que Aznar vale mucho, por su pasado político no le considero el indicado para ese cargo [...] Sus compañeros de *El Sol* aún se recuerdan y contribuyeron mucho a derribar la monarquía, y esto no se puede olvidar. No he pensado en él para este cargo, no obstante habérmelo recomendado [Fernando María] Castiella” (Franco Salgado-Araujo, 1977: 344). Manuel Aznar —a quien, según reconoce el propio Fraga, los rumores situaban al frente del MIT (Fraga, *op. cit.*: 38)— había dirigido en los años treinta el diario republicano *El Sol*, lo que, para el franquismo, suponía una abierta colaboración con el régimen anterior que lo inhabilitaba para un cargo ministerial; aunque no le impidiera ejercer como embajador en República Dominicana y Argentina. Manuel Aznar, por lo demás, no dejó de exhibir, al menos desde mediados de los cincuenta, su ambición por la cartera de Información (Cf. Franco Salgado-Araujo, *op. cit.*: 71). Acaso como compensación, Fraga ofrecerá a Aznar la presidencia del Consejo Nacional de Prensa.

¹⁰⁷ Las magnitudes están calculadas de acuerdo con el valor de la peseta en 1953. Las Rentas Nacionales “reales”, de acuerdo con el valor de la peseta de cada año, fueron de 24 mil millones en 1935 y de 258 mil millones en 1954 (Tamames, 1985: 531).

Otra medición más reciente por decenios arroja resultados similares: según José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, la tasa media de crecimiento interanual fue, ya en la década de los 50 del 3’8%, frente al exiguo 1% de la década de los 40 (García & Jiménez, 2003: 355-357).

la Renta Nacional pasa de los 390 mil millones de pesetas corrientes en 1955 a los más de 2 billones de 1970; en ese mismo periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) experimenta un incremento anual medio de en torno al 6%, con un máximo del 11'4% de 1960 a 1961; al tiempo que la renta per cápita se duplica de las 35.692 a las 70.267 pesetas¹⁰⁸ (Tamames, *op. cit.*: 532). El despegue de la economía española se explica por al menos dos razones básicas: (a) en primer lugar, por la expansión económica europea (y sobre todo de la Europa meridional, que acorta distancias con la septentrional), que no deja de arrastrar a España:

En este sentido [apunta Carlos Barciela], resultó fundamental el papel desempeñado por una Europa que demandaba, cada vez más, productos españoles, que nos abasteció de todo tipo de bienes básicos y de tecnología, que instaló empresas en nuestro país, que absorbió los numerosos trabajadores desocupados o subempleados que había en España y que nos inundó de turistas y de divisas (Barciela, 2001: 13).

Y (b) en segundo lugar, por los cambios estructurales que se producen, desde 1959, en la política económica española y que permiten al país, precisamente, aprovecharse del crecimiento europeo. La base de estos cambios —ante los que Franco no deja de mostrar sus recelos (Payne, *op. cit.*: 486)¹⁰⁹— remonta al plan de “preestabilización” puesto en marcha en febrero de 1957, con la llegada al Gobierno de los tecnócratas del Opus Dei, Laureano López Rodó (que ocupa una secretaría técnica adscrita a Presidencia creada *ad hoc* para él), Alberto Ullastres (que ocupa la cartera de Comercio) y Mariano Navarro Rubio (que se hace con la de Hacienda)¹¹⁰. El plan contiene un conjunto de medidas encaminadas a lograr estabilidad interna, cierta flexibilización de las regulaciones y la globalización del comercio exterior (García & Jiménez, 2003: 378-379); pretenden así conjurar algunos de los males endémicos que habían afectado a la economía española

¹⁰⁸ Tanto para el PIB como para la renta per cápita, las cifras se han calculado de acuerdo con el valor de la peseta en 1970. Las cifras de acuerdo con el valor de la peseta en su año son de 14.245 pesetas en 1955 y de 70.267 en 1970 (*Ibidem*).

¹⁰⁹ Según relata Payne, Franco, quien abogaba por la aplicación de algunos reajustes más que por un cambio económico estructural, se dejará finalmente convencer por Navarro Rubio.

¹¹⁰ “Fue entonces [expone Ramón Tamames a propósito de la llegada de los hombres del Opus a los ministerios económicos en 1957] cuando desde dentro del propio Régimen se pusieron en marcha hacia el poder las fuerzas partidarias de un planteamiento más liberal en lo económico, y menos ligados en lo político a los grupos que hasta entonces habían venido controlando los resortes gubernamentales” (Tamames, 1985: 680). Para Santos Juliá, aun “siendo católicos en grado superlativo, los nuevos ministros [del Opus Dei] [...] no fueron cooptados por la jerarquía de la Iglesia, ni llegaron al gobierno para ejecutar una *política católica* como sus antecesores, sino que ascendieron por sus previas conexiones con los centros de poder y para poner en marcha una estrategia de racionalización y liberalización económica conectada con una reforma de la administración del Estado” (Juliá, *op. cit.*: 160). A ello habría que añadir dos objetivos más del proyecto del Opus Dei: avanzar en la institucionalización del Estado (lo que se logra con la Ley Orgánica del Estado, de enero de 1967) e impulsar la designación definitiva de un sucesor para la Jefatura del Estado (lo que también se logra con el nombramiento de Juan Carlos de Borbón, en julio de 1969).

hasta entonces: una renta nacional exigua y desigualmente distribuida, baja capacidad o posibilidad de ahorro de los españoles, déficit crónico de la balanza comercial, un sistema fiscal anquilosado, e inversiones públicas financiadas mediante mecanismos inflacionistas y aplicadas dentro de un modelo económico autárquico (Tamames, *op. cit.*: 680). Las medidas de preestabilización preparan el terreno para el Plan de estabilización de 1959¹¹¹, que marca el punto de inflexión entre el periodo transitorio de los cincuenta y el crecimiento y modernización de los sesenta. El Plan, que se presenta con los objetivos de alcanzar un desarrollo económico equilibrado y de aproximar la economía española a las de los países de su entorno, se desarrolla en torno a tres ejes fundamentales: la disciplina financiera, la liberalización de la inversión interna, y el fomento de la inversión extranjera¹¹² (García & Jiménez, *ibídem*).

Junto a las reformas que los cambios sociales y el desarrollo económico imponen, el nombramiento de Fraga responde también a la apremiante necesidad del franquismo de presentar al exterior una imagen de apertura. Fraga, en este sentido, se forjará un halo de reformismo que no dejará de exhibir en sus viajes al extranjero con el fin de “ganar credibilidad democrática y evolutiva para el régimen en el exterior” (García Jiménez, 1980: 325):

Se le identificaba [cuenta Stanley G. Payne a propósito del ministro] con los reformistas del Movimiento, pero había puesto gran cuidado en desvincularse de la postura antirrégimen [...] Extraordinariamente enérgico y preocupado por poner al régimen al día en las nuevas corrientes de la sociedad y la cultura, Fraga se hizo pronto popular tanto en España como en el exterior, dando la imagen de un reformador que apoyaría ulteriores reformas del sistema (Payne, *op. cit.*: 524)¹¹³.

A ello contribuirá sin duda la aplicación laxa de la censura que ejecuta Fraga hasta 1966, dentro del proceso de aclimatación a la libertad de prensa controlada que, como vimos (según su propia confesión a López Rodó), seguía el ministro. Cuando Manuel Fraga llega al Gobierno, se dan en el Consejo de Ministros dos tipos de rivalidades superpuestas (Payne, *ibídem*): por un lado, los “monarca-tecnócratas”, apoyados y en cierto modo dirigidos por Luis Carrero Blanco, rivalizan con los “regencialistas” o “monarcas tibios”, encabezados, siempre de modo oficioso, por el general Agustín

¹¹¹ Véase Decreto-ley 10/1959 de 22 de julio, de Nueva Ordenación Económica.

¹¹² Fomento de la inversión extranjera que, sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo, no afecta al sistema de prensa, protegido por el Régimen de cualquier “injerencia” foránea. Para un análisis detallado de las medidas fiscales, monetarias y comerciales del Plan, consúltense Tamames, *op. cit.*: 682-686.

¹¹³ En otro lugar, apunta Payne: “La popularidad de Fraga rivalizaba con la de López Rodó. En movimiento constante y atrayendo publicidad allá donde iba, se le asociaba a los nuevos y atractivos proyectos de la gran expansión turística, a la vez que la aprobación de la Ley de prensa le hacía parecer el foco del reformismo” (Payne, *op. cit.*: 532).

Muñoz Grandes. Por otro lado, los “reformistas” (liderados por Castiella, José Solís y el propio Fraga) se enfrentan a la facción “inmovilista” de Carrero Blanco, Camilo Alonso Vega y Jorge Vigón¹¹⁴. Resulta muy revelador de la situación española de los sesenta el hecho de que ninguna de estas posturas enfrentadas se corresponda ya con las viejas adscripciones “familiares” que habían marcado los primeros años del franquismo; sino que, antes bien, se correspondan todas ellas con los distintos posicionamientos de los ministros ante eventuales cambios en el Régimen. En este sentido, Fraga aparece alineado junto a regencialistas y, más claramente, reformistas, lo que le valdrá la enemistad (que será mutua, por otra parte) de, sobre todo, los ministros del Opus Dei¹¹⁵ y de Luis Carrero Blanco. Con respecto al Opus, cuyo aumento de poder tras la crisis de gobierno de 1965 es calificado por Fraga de “crimen perfecto” (Fraga, *op. cit.*: 142), confiesa el ministro: “Nunca sintonicé bien con aquella casa, fría y misteriosa” (Fraga, *op. cit.*: 103). Carrero Blanco, por su parte, no dejó de manifestar una clara desconfianza hacia Fraga, probablemente compartida por Franco, quien, sin embargo, siempre pareció tener una percepción más nítida y realista de los beneficios que la imagen reformista del ministro reportaba al Régimen y quien, además, “a diferencia de los ultras, se hacía menos ilusiones sobre las posibilidades de regresar al anterior estado de cosas” (Payne, *op. cit.*: 540):

Franco por su parte [corroboraba en este sentido Stanley G. Payne] miraba a Fraga con incertidumbre, temiendo que su reformismo llegase demasiado lejos, mientras que Carrero Blanco lo consideraba un peligro evidente y estaba decidido a eliminarlo (Payne, *op. cit.*: 532).

De estas pugnas políticas soterradas, será finalmente Carrero Blanco quien salga victorioso. Aunque Fraga, según sus memorias, había solicitado a Franco su cese el 17 de abril de 1966, dos días después de la aprobación en Cortes de la Ley de Prensa¹¹⁶, y una

¹¹⁴ Explica Payne que, mientras que los tecnócratas buscan más la institucionalización monárquica y despolitización del régimen que su reforma, los reformistas son más escépticos con respecto a la solución monárquica y buscan reformas que permitan al régimen sobrevivir (*op. cit.*: 525).

Cf. con las semblanzas que ofrece el propio Fraga en sus memorias sobre los ministros que componen el gabinete formado en 1962; semblanzas en las que incluye apuntes acerca de las convicciones reformistas e inmovilistas de los ministros (Fraga, *op. cit.*: 42). Serán, por otra parte, precisamente Carrero Blanco y Alonso Vega quienes más reticencias muestren ante la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Ley de Prensa de 1966 (Fraga, *op. cit.*: 144-145).

¹¹⁵ El malestar del Opus y los ataques contra Fraga se deben básicamente a que el fin de la censura previa había desatado una campaña de la prensa del Movimiento contra la política económica del Gobierno y contra la institución misma del Opus Dei (Chuliá, 2001: 173).

¹¹⁶ El hecho es verosímil: Fraga parece pretender, con su cese, no ser el responsable de una aplicación de la Ley que, como luego se confirmará, se presumía problemática, y que exigirá buenas dosis de aquella firmeza en el ejercicio de la autoridad que Fraga consideraba necesaria en todo proceso de reforma. Ante la demanda de cese, Franco responderá, sin embargo, con la célebre sentencia: “Usted es el padre de la criatura, y ahora no puede dejarla abandonada” (Fraga, *op. cit.*: 163). Parece que la misma maniobra pretendía su director general de prensa, Manuel

vez más en 1967, su caída no se producirá hasta 1969. A finales de ese año, el estallido del escándalo Matesa¹¹⁷ precipita una crisis de gobierno, dada la implicación en el fraude de los ministros de Finanzas y Comercio, Juan José Espinosa San Martín y Faustino García Moncó, ambos del Opus Dei. A pesar de negarlo en sus memorias, parece que Fraga hizo todo lo posible por airear en la prensa el escándalo, o al menos no hizo nada por ocultarlo, tal y como reclamaba parte del gabinete. La maniobra política no le saldrá, sin embargo, como parecía esperar: la salida de los dos ministros del Opus Dei obliga a Franco a un reequilibrio de poderes que arrastrará a los reformistas Solís, Castiella, y al propio Fraga, además de a Nieto Antúnez. El claro vencedor de la crisis gubernamental será, sin lugar a dudas, Luis Carrero Blanco, quien conforma un Ejecutivo dominado por hombres del Opus Dei, y que ha sido denominado elocuentemente el “gobierno monocolor”. La salida de Fraga se inscribe, pues, en un contexto político marcado por el crecimiento del poder de Carrero Blanco —quien, como hemos señalado, veía a Fraga como “un ‘liberal peligroso’ que había abierto España al marxismo y la pornografía” (Payne, *op. cit.*: 567-568)—. Hasta tal punto había crecido la influencia de Carrero en 1969, que éste no sólo tuvo ocasión de formar un gabinete afín, sino que llegó a rechazar la posibilidad de asumir la jefatura del Gobierno; rechazo que no hacía, por lo demás, sino acentuar, a los ojos del dictador, el rasgo más sobresaliente del almirante: una vez más, la lealtad incorruptible¹¹⁸.

Con la salida de Fraga y a la sombra del poder de Carrero, se abre un nuevo periodo al frente del MIT y de la prensa, gobernada en lo sucesivo por equipos más o menos próximos al ex ministro e invariablemente (auto) proclamados “continuistas” de su política.

Jiménez Quílez, quien también solicita su cese a Fraga; destitución que también le es denegada (Chuliá, *op. cit.*: 172).

¹¹⁷ El escándalo toma el nombre de la compañía de exportación Maquinaria Textil, S.A., con sede en Pamplona y sucursales en Latinoamérica. La normativa fiscal española condicionaba el acceso a créditos para la exportación a la presentación de pedidos en firme de sus productos. El escándalo económico estalla al descubrirse que Juan Vila Reyes, presidente de Matesa, había falseado pedidos a través de compañías subsidiarias para obtener créditos del Banco Central Industrial gubernamental. El escándalo político viene dado por la confabulación en el fraude de los ministros de Finanzas y Comercio.

¹¹⁸ “El éxito de Carrero Blanco [describe Payne] se debía en parte a su estricta fidelidad a la figura de Franco y a su falta de ambición personal. Era un hombre introvertido y cerrado en sí mismo, de ideas fijas e irrenunciables [...] Era predominantemente inmovilista respecto a las instituciones internas de importancia, y veía las relaciones exteriores en los mismos términos intransigentes y apocalípticos, afirmando que sería preferible que sus hijos muriesen en una guerra atómica a que sobrevivieran para ser esclavos de la Unión Soviética” (Payne, *op. cit.*: 569).

2.2.2 La etapa de los sucesores de Fraga (29 de diciembre de 1969 a 12 de diciembre de 1975)

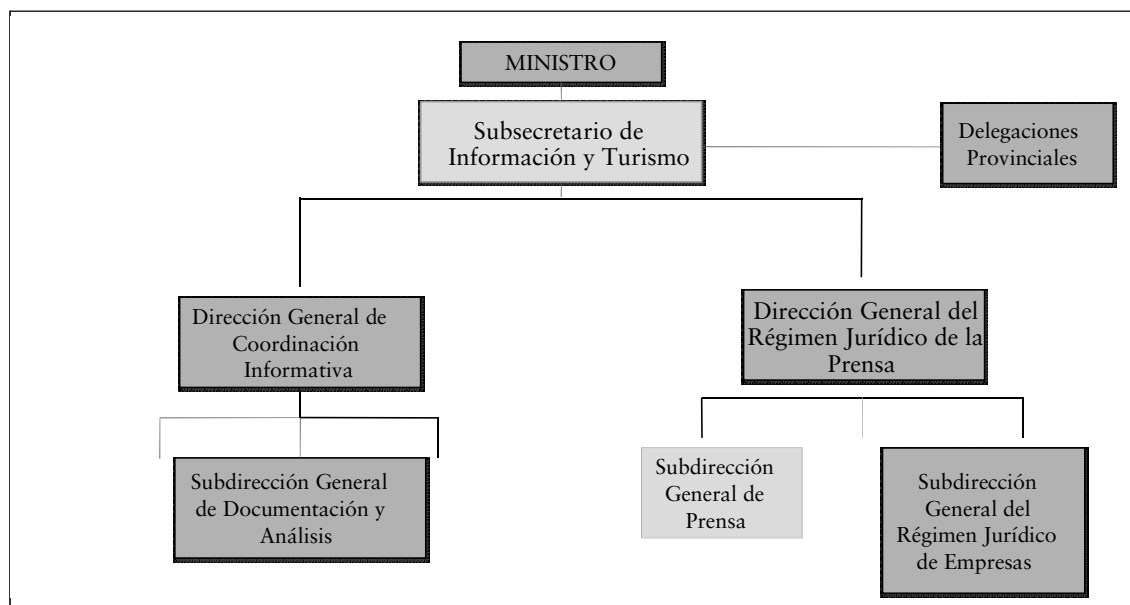
La destitución de Manuel Fraga al frente del MIT abre la última etapa del aparato orgánico de prensa tardofranquista, que queda, desde entonces, a cargo de sus “sucesores”. Si hablamos de “sucesores” no es sino para subrayar lo alargada que llegó a ser la sombra de la gestión de Fraga durante los últimos años de la dictadura. La labor de todos los ministros que aceptaron la cartera de Información y Turismo entre 1969 y 1976 estuvo efectivamente marcada por la aplicación de la Ley Fraga, probablemente en mayor medida de lo que los ministerios de Arrese, Ibáñez, Arias y Fraga lo estuvieron por la aplicación de la Ley de Serrano Suñer. Algunos de los ministros de Información y Turismo y altos cargos del Ministerio en esta etapa habían sido, además, antiguos colaboradores del ministro, y todos ellos se apresuraron a proclamar su intención de ejecutar una política esencialmente continuista de la de aquel. Enseguida veremos cómo, de todos modos, estas proclamas de adhesión a la herencia fraguiana no dejaron de verse afectadas por un hecho crucial: el auge del poder de Carrero Blanco y del “inmovilismo”, que se tradujo —a pesar del breve paréntesis del ministerio de Pío Cabanillas— en una cierta involución en la política de prensa que, por lo demás, conecta directamente con la gestión de los últimos años de Fraga.

En lo que al gobierno del aparato político administrativo de prensa se refiere, esta última etapa presenta dos hechos significativos: la división de la Dirección General de Prensa en dos organismos inéditos, y la frecuente alternancia de ministros al frente de la cartera.

Entre finales de 1973 y principios de 1974 se lleva a cabo una profunda remodelación orgánica de la Dirección General de Prensa, que acabará, de hecho, con su desaparición misma del organigrama ministerial. Un Decreto del 11 de octubre de 1973 elevaba a rango de Dirección General la hasta entonces Subdirección General del Régimen Jurídico de la Prensa, que venía ocupándose desde 1968 de la acción administrativa sobre la prensa privada española. El Decreto será ratificado y completado por otro fechado el 11 de enero de 1974 (Decreto 28/74 [BOE de 12 de enero]) por el que se reorganizan algunos departamentos del MIT. Finalmente, una Orden de 26 de febrero de 1974 (BOE de 11 de marzo) desarrolla el Decreto del 11 de enero y fija la estructura orgánica de las dos nuevas instituciones en que queda finalmente dividida la antigua Dirección General de Prensa: una Dirección General del Régimen Jurídico de la prensa, (re) creada en el art. 1.1 y bajo la que quedan encuadradas la Subdirección General de Prensa y la Subdirección General del Régimen Jurídico de Empresas (además de una Subdirección General de Prensa Extranjera); y una Dirección General de

Coordinación Informativa, creada en el art. 1.2. y de la que dependen orgánicamente una Subdirección General de Relación y Cooperación Informativa, una Subdirección General de Difusión e Información Nacional y una Subdirección General de Documentación y Análisis.

FIGURA 3: Estructura simplificada de la DGP en 1974



Fuente: Elaboración propia

Tras más de veinte años de estabilidad institucional apuntalada con leves reformas, el organismo encargado del gobierno del sistema de prensa volvía a ser objeto de una modificación substancial. Ello, naturalmente y tal y como ya señalamos, debe ser entendido dentro de un contexto de crisis e inestabilidad general del Régimen que explica también, en buena medida, la frecuencia en la alternancia de nombramientos al frente del MIT: después de casi veinte años con apenas dos ministros, en los últimos siete años del Régimen hasta cuatro personas serán designadas para dirigir el Ministerio.

A finales de 1969, Alfredo Sánchez Bella (1916-1999), por entonces embajador en Roma, accede a ocupar la cartera de Información y Turismo. Aunque en su juventud había militado en Acción Católica (donde había llegado a presidir sus juventudes y a formar parte de su Consejo Nacional) y hubiera estado ligado a la ACN de P y al Opus Dei¹¹⁹, la filiación del nuevo ministro no deja de ser difusa. Su relación con el periodismo

¹¹⁹ La relación de Sánchez Bella con el Opus Dei queda referida tanto en las biografías históricas del personaje elaboradas por la Agencia EFE y conservadas en su Archivo Histórico, como en la biografía revisada y actualizada presente en EFEData, la Base de Datos de la Agencia. Según Sáez Alba, Sánchez Bella había ingresado en el Opus Dei en 1939 para abandonarlo poco después, en

data de sus años de juventud, cuando fuera director de la revista universitaria *Libertas* (1934-1936) y *Ánimos* (1935-1936) y colaborara con los diarios valencianos *Las Provincias* y *Diario de Valencia*. Durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, Sánchez Bella había sido también locutor de radio y colaborador de *El Noticiero*, de Zaragoza, y de la Agencia acenepista Logos (1938-1939), para pasar poco después a dirigir el diario valenciano *Avance* y las emisoras Radio Valencia y Radio Mediterráneo. En los años cuarenta y cincuenta se dedicará a la docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid y a la dirección del Instituto de Cultura Hispánica, antes de iniciar su carrera diplomática¹²⁰. Ya en los años cincuenta y sesenta sería destinado a las embajadas de la República Dominicana, Colombia, Italia, Malta y Naciones Unidas. El desempeño de estas misiones diplomáticas había merecido, por cierto, los elogios de Franco, para quien Sánchez Bella había sabido “defender enérgicamente y con eficacia muy bien documentada los intereses morales de nuestra nación” (Franco Salgado-Araujo, 1977: 463; véase también, *op. cit.*: 368; 542). Con todo, su designación al frente del MIT no fue del todo sencilla. El rechazo a dirigir el sistema informativo español no había hecho sino aumentar desde que Manuel Camacho palideciera ante su nombramiento como censor. Según Elisa Chuliá, lo “escasamente apetecible que resultaba por entonces el cargo de ministro de Información” había llevado a rechazar el ministerio al también acenepista Federico Silva Muñoz e incluso, en un primer momento, al propio Sánchez Bella, quien finalmente decidiría aceptarlo (Chuliá, *op. cit.*: 176-177):

Parece, por tanto [concluye Chuliá] que hacia el final de la década de los 60 la asunción de las competencias político-administrativas sobre los medios de comunicación suscitaba un rechazo mayor que cuando todavía se aplicaba la censura previa. Y es que la titularidad del Ministerio de Información y Turismo se había convertido en blanco seguro de las críticas de los inmovilistas y los aperturistas, tanto en el seno del régimen como de la sociedad. Contentar a unos significaba provocar la animadversión de los otros. Fraga había tratado de seguir una senda equidistante entre ambos, no consiguiendo satisfacer a ninguno de ellos.

Este intento de mantener la equidistancia entre las facciones inmovilistas y aperturistas explica, en cierto modo, los dos rasgos más sobresalientes (y *aparentemente* contradictorios) de la política informativa aplicada por Sánchez Bella hasta 1973: el continuismo con respecto a la política de Fraga y, al tiempo, la involución:

1942. Años más tarde, siempre según Sáez Alba, el ministro volvería a acercarse al Opus. Según este mismo autor, en 1935 Alfredo Sánchez Bella había pertenecido también al círculo madrileño de la ACN de P (Sáez, 1974: 318).

¹²⁰ EFEDData, Base de Datos de la Agencia EFE y AHEFE.

Sánchez Bella [sentencia García Jiménez] significa en el franquismo de inicios de la década de los setenta como un cerro testigo de la verdadera dinámica involutiva del Régimen [...] Sánchez Bella vuelve sin empacho y sin escrúpulos a la España del nacionalcatolicismo, a la España de los años cuarenta y a la política informativa de Arias Salgado [...] (García Jiménez, *op. cit.*: 514).

Naturalmente, esta actitud no deja de estar condicionada por el contexto político en que accede al Ministerio. Se sienta Sánchez Bella en un Consejo de Ministros “monocolor”, compuesto básicamente por hechuras del inmovilista Luis Carrero Blanco, lo que, por supuesto, afectará notablemente al gobierno de la información y, en particular, a la dirección de la prensa, asumida oficialmente por el acenepista Alejandro Fernández Sordo.

Huérfano de periodista, Alejandro Fernández Sordo (1921-2009) llega a la DGP en 1969 desde la delegación ovetense del MIT y con una dilatada experiencia en el aparato de poder político del Régimen, en el que había estado ligado fundamentalmente a los ámbitos legal, sindical e informativo, desempeñando, entre otros, los cargos de delegado de Prensa y Propaganda del SEU, secretario del Consejo Provincial del Movimiento en Asturias, concejal del Ayuntamiento de Oviedo, y presidente del Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad. La presidencia del Sindicato de Prensa le abriría las puertas de la comisión de Cortes encargada de enmendar el proyecto de Ley de Prensa, de la que sería ponente y que, junto a Sánchez Bella, aplicará de forma rigurosa¹²¹; hasta el punto de que el ministro —quien consideraba la censura “indispensable” para evitar que, tomando el término orteguiano, “España se desvertebre” (García Jiménez, *op. cit.*: 514)— acabará por encarnar, como señala García Jiménez, esa involución general que experimenta el Régimen franquista en los años setenta; involución que, en materia de prensa, acabará desembocando en el cierre del diario *Madrid* el 25 de noviembre de 1971. El cierre de *Madrid* marca, precisamente, el hito que permite entender la conjunción durante el mandato de Sánchez Bella de los principios, *aparentemente* enfrentados, del “involucionismo” y del “continuismo”. Ello nos obliga a adentrarnos brevemente y de forma preliminar en el examen de la actuación del ministro y de su predecesor.

En su primer encuentro con la prensa, Alfredo Sánchez Bella proclama su voluntad de mantener una política informativa que continuara las líneas generales de actuación trazadas por el equipo anterior: identifica el espíritu que había de animar su gestión al

¹²¹ La carrera del acenepista no culminará en la DGP, al frente de la cual se mantendrá durante los ministerios de Sánchez Bella y Lláñan y Zofío: tras ocupar la Secretaría General de la Organización Sindical será nombrado, en enero de 1974, ministro de Relaciones Sindicales EFEDData, Base de Datos de la Agencia EFE.

frente del MIT como “*evolución en la continuidad*” [el subrayado es nuestro] (García Jiménez, *op. cit.*: 504). En efecto, según Carlos Barrera:

El mandato de Alfredo Sánchez Bella (1969-1973), sucesor de Fraga en la cartera de Información, no supuso grandes modificaciones en cuanto a las líneas fundamentales de la actitud del poder ante la prensa. La continuidad fue la nota básica [...] (Barrera, 1993: 106).

La contradicción que surge de la confrontación del inmovilismo de Sánchez Bella con la política de “apertura controlada” de Manuel Fraga se revela únicamente *aparente* si se analiza con más detenimiento el aperturismo fraguiano. Éste, como vimos, había defendido la necesidad de “firmeza en el ejercicio de la autoridad” para llevar a término todo proyecto reformista; firmeza que no dudará en aplicar a partir de 1966, con el fin de salvar su Ley. Las cifras son inequívocas: de los 1.270 expedientes que se incoaron entre 1966 y 1975, 871 acabaron en sanción: de ellos, casi un tercio se produjeron en los dos últimos años de Fraga al frente del MIT: 1968 y 1969 se revelan, por tanto, como los más duros en la represión a la prensa, con 149 y 210 expedientes sancionados, respectivamente (Barrera, 1995a: 106). Así, si la primera fase de su ministerio puede caracterizarse por la apertura paulatina de la rígida censura anterior, los últimos tres años de Fraga al frente del MIT quedarán marcados por la severa aplicación de la Ley de 1966. Apenas un mes después de la entrada en vigor de la Ley, el 23 de abril, se produce el primer secuestro de una publicación periódica por infracción de la Ley Fraga¹²²; y unos meses después, el 20 de julio, un juez del Tribunal de Orden Público ordena la incautación de los ejemplares de *Abc*, en los que Luis María Anson firma un artículo sobre la sucesión a Franco. Con todo, la actuación más contundente de Fraga se dirigirá, precisamente, contra el diario *Madrid*, que, a juicio del ministro, ponía en riesgo la reforma por jugar a la ruptura (Fraga, *op. cit.*: 215). Fraga insiste en sus memorias en su disposición a ejecutar una aplicación severa de la Ley con tal de que ésta prevalezca. Ante las presiones, por ejemplo, que sufre por parte del Gobierno en 1967 para endurecer la Ley, el ministro responde: “[...] mi decisión era firme: la ley no sería tocada, o yo me iría; estaba dispuesto a aceptar algunas sanciones, o disposiciones complementarias¹²³; pero en ningún caso la revisión de la ley, en cuanto tal” (Fraga, *op. cit.*: 190). Es este sacrificio de la liberalidad y la permisión en la aplicación de la Ley como forma de salvaguardarla, lo que explica el secuestro por dos meses del diario *Madrid* el 30 de mayo de 1968 y, ulteriormente, su cierre definitivo en 1971 Fraga no había dejado de

¹²² Se trata del número correspondiente al primero de mayo de la publicación *Juventud Obrera*, editada por la Juventud Obrera Católica (JOC), adscrita a Acción Católica.

¹²³ Estas presiones tendrán una influencia crucial en la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales, en 1968: Fraga se verá obligado a aceptar una norma que restringía considerablemente la libertad de prensa con el fin, una vez más, de salvar su Ley.

advertir a los responsables del diario Luis Valls y Antonio Fontán que prefería “aplicar la ley, antes de dejar que salte” (Fraga, *op. cit.*: 203). Así justifica Fraga su determinación:

Sé que esta decisión y la subsiguiente sanción al periódico son unas de las más discutidas de mi gestión. Sigo creyendo que fue necesaria y oportuna. Ya no cabían más ruegos; no sabíamos cómo iba a terminar lo de Francia [se refiere a las revueltas de Mayo de 1968], y mejor que perder la Ley de Prensa, era aplicarla, con todas sus consecuencias (Fraga, *op. cit.*: 223)¹²⁴.

La necesidad de salvaguardar la Ley de 1966 había llevado, pues, a Fraga a arramblar con su “aperturismo controlado” de primera hora: la supervivencia de la norma requería de una aplicación sin contemplaciones, lo que no dejaba de suponer una involución con respecto a su etapa inicial. Es en este sentido involutivo en el que hay que entender el “continuismo” o “evolución en la continuidad” (y que bien podría rebautizarse como “involución en la continuidad”) de Sánchez Bella, y que se mantendrá constante (con la excepción de Pío Cabanillas) hasta 1976: los sucesores de Fraga ejercerán una política “continuista” de la del ministro en la dura aplicación de una Ley de Prensa que, sin embargo, sobrevivirá sin modificaciones substanciales hasta después de que el dictador y el Régimen expirasen.

Por supuesto, esta involución —que retrotrae la política de prensa a los tiempos de Gabriel Arias Salgado—, no sólo se explica por la necesidad de salvar la Ley de 1966, dado el auge del poder de Luis Carrero Blanco y de los “inmovilistas”. Aparece también motivada, en un ámbito más general, por la huida hacia delante del Régimen durante sus últimos y críticos años de existencia (huida hacia delante en la que, por otro lado, se inscriben precisamente el apogeo de Carrero y del inmovilismo). El año 1969 marca, en este sentido, el inicio del fin del franquismo. El 23 de julio de 1969, Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, es designado oficialmente como sucesor del Jefe del Estado al jurar lealtad a Franco y fidelidad a los Principios del Movimiento y a las Leyes Fundamentales del Régimen¹²⁵. Ante el auge de la oposición obrera, universitaria y nacionalista (y a la que se suma, cada vez en mayor número, parte del clero católico), la dictadura plantea como única respuesta el aumento de la represión. A ello se une el descontento de buena parte de los grupos franquistas excluidos del reparto de poder auspiciado por Carrero, quien, de todos modos, “debió de comprender el error de prescindir de las que seguían siendo poderosas facciones del régimen e intentó recuperarlas al formar un nuevo gobierno, por primera vez como presidente, en junio de

¹²⁴ La actuación contra el diario *Madrid* de los ministros Fraga y Sánchez Bella es objeto de análisis en el capítulo quinto (apartado 5.4).

¹²⁵ El día 21 de julio, Juan Carlos de Borbón había sido presentado por Franco como sucesor ante el Consejo del Reino, y un día después las Cortes habían aprobado su nombramiento con 491 votos a favor, 19 votos en contra, y 9 abstenciones.

1973” (Juliá, 2003: 185). Carrero combinará entonces un reequilibrio más favorable a las viejas facciones franquistas con los criterios de lealtad al Régimen, de competencia técnica, y de tibios apoyos a una apertura moderada:

La formación del gobierno de Carrero Blanco fue considerada por la mayor parte de lo que ya era una oposición como poco más que una expresión del inmovilismo, concebida para lograr la continuación del franquismo después de Franco. De hecho, suponía un cierto grado de cambio y se disponía a considerar tímidamente la posibilidad de más reformas. No era tanto un gobierno monocolor como una administración práctica de moderados fiables pero flexibles (Payne, *op. cit.*: 614).

En este nuevo Gobierno de junio de 1973, ante el desgaste político que el cierre del diario *Madrid* había supuesto para Sánchez Bella, Carrero llama a Fernando Liñán y Zofío a ocupar la cartera de Información y Turismo. Según parece, Liñán no había sido la primera opción de Carrero, quien había pensado para el cargo en el joven director general de radiodifusión, Adolfo Suárez. Sus planes, sin embargo, se vieron frustrados por la insistencia de Franco para que Carlos Arias Navarro ocupara la cartera de Gobernación. Con el fin de que Liñán, fiel a Carrero Blanco, no quedara fuera del Gobierno, el presidente del Ejecutivo hubo de sacrificar a Suárez colocando a Liñán al frente del MIT (Chuliá, *op. cit.*: 179). Fernando Liñán, por cierto, no rehúsa en ningún momento el nombramiento: los tiempos en que la dirección del MIT resultaba incómoda parecían haber pasado: tras la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor, el ministerio se percibía ahora como el lugar idóneo desde el que impulsar una política favorable al futuro Jefe del Estado que sirviera de trampolín político en los tiempos que se avecinaban (Chuliá, *ibídem*).

“Bajo el padrinazgo de Carrero Blanco [señala la biografía de la Agencia EFE fechada en 1988 y conservada en su Archivo Histórico], Liñán [1931-2011] es nombrado ministro de Información y Turismo en junio de 1973”. Se trataba, como ha quedado explicado, de una hechura de Luis Carrero Blanco, aunque también había estado al servicio de Laureano López Rodó: licenciado en Ciencias Exactas y Económicas y diplomado en Estadística, Liñán había desarrollado su trayectoria profesional a la sombra de ambos, en la Secretaría General Técnica de Presidencia de Gobierno, en la Dirección General de Política Interior y Asistencia Social, y en la Comisaría del Plan de Desarrollo¹²⁶. Durante su etapa de siete meses como titular del MIT —en la que ocupará

¹²⁶ Según la biografía conservada en el Archivo Histórico de la Agencia EFE, Fernando Liñán había comenzado su vinculación con los tecnócratas en 1959 al entrar en la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, cargo que compatibilizaría con el de docente en la Escuela de la Administración Pública. “Siendo ya vicesecretario general de la Comisaría del Plan de Desarrollo [prosigue la biografía], Fernando Liñán accede también, en 1964, en rápida carrera política a la jefatura del Servicio Central de Planes Provinciales de la Presidencia del Gobierno [...]”

la Dirección General de Prensa, en pleno proceso de mitosis, el periodista Manuel Blanco Tobío (1919-1995)— declarará, como objetivo prioritario de su acción política, la “dignificación del hombre” (García Jiménez, *op. cit.*: 561); la cual,

Más que una esencia que funda el derecho al ejercicio práctico de las libertades consiguientes, ha sido un valor teórico, incrustado en el sistema, cuya defensa y salvaguardia han pretendido legitimar el uso y el abuso del poder político. Así fue en tiempos de Arias Salgado y así seguiría siendo en los últimos años, si exceptuamos el breve paréntesis del mandato de Pío Cabanillas, que en el conjunto de la política informativa del franquismo no es [...] sino la última tentativa fallida de libertad, devorada por la propia involución del sistema, un puente que permite la continuidad: de Liñán a Herrera (García Jiménez, *ibídem*).

Dentro pues de esta “involución en la continuidad”, que conecta directamente a Liñán con Herrera, el ministerio de Pío Cabanillas Gallas se revela como poco más que un lapso inserto en el retroceso generalizado. Notario, registrador de la propiedad y letrado de la Dirección General de Registros y del Notariado, Cabanillas (1923-1991) procedía del equipo de Manuel Fraga, para quien había elaborado los primeros borradores del proyecto de Ley de Prensa. Tras abandonar la Subsecretaría de Información y Turismo que ocupara durante el mandato de Fraga, había sido nombrado procurador en Cortes por el Consejo Nacional de Registradores y consejero del Reino por los Colegios Profesionales, antes de ser elegido, en 1971, procurador familiar por la provincia de Pontevedra¹²⁷.

Su nombramiento al frente de Información y Turismo se inscribe en la crisis de gobierno que se ve obligado a desatar Franco ante el asesinato de Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973. Accede entonces a la jefatura del Ejecutivo Carlos Arias Navarro, quien en enero del año siguiente presenta un gabinete “integrado fundamentalmente por restos de los burócratas que componían la espina dorsal del régimen” (Payne, *op. cit.*: 621). El nuevo gobierno supone la disolución definitiva del poder del Opus Dei y del Movimiento, del que sólo quedará José Utrera Molina, a cargo de la Secretaría General. Arias pretende así garantizar la pervivencia del Régimen mediante “cambios limitados que reconciliaran a la oposición moderada y, aún más importante, recuperaran a los sectores críticos y reformistas del régimen mismo, lo que permitiría reconstruir su base

Dentro de la Presidencia del Gobierno, y en el marco del Plan de Desarrollo, los cargos que acumuló Liñán fueron numerosos: Presidente adjunto de la Ponencia de Desarrollo Regional, Vicepresidente de la Comisión para el Desarrollo socio-económico de la Cuenca del Segura, Vocal de la Comisión nacional de Investigación del Espacio y de la Comisión de Telecomunicaciones de la Comisaría del Plan”. Ya en los años setenta, Fernando Liñán obtiene un escaño en Cortes por designación directa de Franco y es nombrado Consejero Nacional del Movimiento.

AHEFE.

¹²⁷ EFEData, Base de Datos de la Agencia EFE.

interna” (Payne, *op. cit.*: 622-623). La estrategia recuerda, obviamente, al principio fraguiano de la “reforma para evitar la ruptura”. De hecho, para la puesta en práctica de este principio, Arias recupera, en la dirección del aparato informativo, al antiguo equipo de Fraga, defenestrado por Carrero en 1969: Cabanillas llega al MIT y nombra subsecretario a Marcelino Oreja del grupo *Tácito*¹²⁸, mientras que Manuel Jiménez Quílez es designado director General de Coordinación Informativa y José Luis Fernández García accede a la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa.

Durante su breve periodo en el cargo, Cabanillas tratará de implementar una política aperturista en el gobierno del aparato informativo (Barrera, 1993: 106-107); ésta ha llegado a ser descrita, en términos muy elogiosos, como un intento por acabar con el despotismo ilustrado y el dirigismo estatal practicado hasta entonces (García Jiménez, 1980: 581):

No entendió Pío Cabanillas la apertura como un elemento perteneciente a la ‘táctica política’ ni como factor tempestivo del Poder [...] la apertura política es para él una exigencia de la ética cultural, en la medida en que toda acción política ha de responder a modelos éticos de interpretación crítica de la realidad.

Sea como fuere, esta apertura de Cabanillas chocará con las facciones “inmovilistas” del Régimen, con el llamado “búnker”, representado (oficiosamente, por supuesto) por José Utrera Molina y, fuera del gobierno, por el falangista José Antonio Girón de Velasco¹²⁹. Las presiones del “búnker” —alarmado ante la situación externa, marcada por una Revolución de los Claveles portuguesa que no dejará de recibir elogios en parte de la prensa española; e interna, donde el obispo de Bilbao, monseñor Antonio Añoveros, amenaza con la excomuniación— surten efecto el 29 de octubre de 1974: Arias, al parecer siguiendo una orden de Franco, cesa a Cabanillas¹³⁰ y lo sustituye por León Herrera Esteban (quien, por lo demás, también había trabajado a las órdenes de Fraga). Con esta destitución quedaba truncado “el último intento de liberalización informativa desde dentro del régimen” (Barrera, *op. cit.*: 107).

León Herrera Esteban (1922-2003) es, de este modo, nombrado ministro de Información y Turismo el 30 de octubre de 1974. Voluntario del ejército sublevado durante la Guerra Civil, Herrera había iniciado su carrera política en 1962 al frente de la

¹²⁸ El grupo *Tácito* se componía de intelectuales, en su mayor parte procedentes del régimen franquista, que en los años setenta comienzan a publicar artículos defendiendo un proceso de reformas y apertura.

¹²⁹ En abril de 1974, Girón había escrito un artículo en el diario *Arriba* que será conocido popularmente como “el gironazo”, en el que atacaba el aperturismo del ministro de Información y Turismo.

¹³⁰ Dos hechos detonan el cese: la publicación de una entrevista en *El Correo de Andalucía* a Felipe González, dirigente del clandestino Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y la exhibición sin censura de la película *La prima Angélica*, de Carlos Saura. Varios altos cargos de la administración de talante aperturista dimitirán también en solidaridad con Pío Cabanillas.

Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas del MIT durante el mandato de Fraga, para pasar en 1969 al Departamento de Correos y Telecomunicaciones, dentro del Ministerio de Gobernación, en cuya Dirección General se mantiene hasta 1974, cuando es nombrado subsecretario de Gobernación¹³¹. Definido a sí mismo como “hombre del Movimiento cien por cien y un franquista hasta la médula”, anuncia en su primera declaración ante la prensa como ministro su intención de continuar la política informativa de Fraga y Cabanillas¹³² (García Jiménez, *op. cit.*: 613-614). Sin embargo, y a pesar de que se mantuvo en el MIT hasta unos días después de la muerte de Franco, “apenas aportó nada nuevo, volviendo a la línea esencialmente continuista de los dos ministros anteriores a Cabanillas” (Barrera, *ibídem*): su nombramiento supone, en fin, la enésima derrota de una tentativa de apertura neutralizada por el sector inmovilista (García Jiménez, *ibídem*).

León Herrera Esteban será el último ministro de Información y Turismo del periodo franquista. Con el primer Gobierno de la monarquía, y bajo la presidencia de Carlos Arias, Adolfo Martín Gamero asumirá, entre enero y junio de 1976, la dirección del MIT¹³³. En el verano de 1976, tras la llegada a la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, será sustituido por Andrés Reguera Guajardo, quien, junto a un equipo formado fundamentalmente por monárquicos (entre los que se encuentran, entre otros, Sabino Fernández Campo, Rafael Ansón, Gonzalo Rodríguez del Castillo, José Luis Fernández García y Felipe Huerta Palacios), se encargará del desmantelamiento del ministerio:

Las primeras elecciones democráticas [concluye Elisa Chuliá] barrieron del escenario político español, entre otras instituciones franquistas, el Ministerio de Información y Turismo, creado veintiséis años antes. En la reorganización ministerial que acometió Suárez tras su victoria electoral, el control político sobre la prensa desaparecía como competencia gubernamental después de casi cuatro décadas de existencia ininterrumpida. Se cerraba un largo periodo a lo largo del cual la titularidad formal del ejercicio de esta competencia había suscitado sentimientos muy diversos: codiciada en un principio, malquerida después, y aceptada como un reto hacia el final (Chuliá, *op. cit.*: 183).

¹³¹ EFEData, Base de Datos de la Agencia EFE y AHEFE.

¹³² Lo cierto es que, inicialmente, Manuel Jiménez Quílez mantendrá su puesto de director general de Coordinación Informativa. Poco después será sustituido por A. Huerta Álvarez. Durante el ministerio de Herrera, desempeñarán el cargo de director general del Régimen Jurídico de la Prensa G. Rodríguez del Castillo y, más adelante, J. Mariscal de Gante.

¹³³ Bajo sus órdenes actuarán, en la Dirección General de Coordinación Informativa, Carlos Sentís; y en la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa, J. L. Fernández García.

3. Bases doctrinales del sistema de prensa privada tardofranquista

El estudio preliminar de las bases de la intervención tardofranquista sobre el sistema de prensa reclama –una vez atendido al marco orgánico en que se inscribió– un análisis de los fundamentos doctrinales en que tal intervención se inspiró y trató de legitimarse; un análisis, en fin, de las concepciones y doctrinas que, sobre la prensa y el papel que con respecto a ella había de desempeñar el Estado, elaboraron y defendieron los dirigentes y “familias” con competencias e intereses en la materia.

Al hablar de “bases doctrinales” nos referimos a las conceptualizaciones pergeñadas por dichos grupos de poder y llamadas a ejercer una doble función de fundamentación y legitimación. La doctrina opera ante todo como fundamento normativo, en la medida en que, por usar los términos del ministro de Información durante la década de los cincuenta, “Antes que la ley son los principios orientadores; antes que la ordenación estrictamente legal y positiva es la doctrina y el conocimiento completo de la realidad” (Arias, 1960: II29, III38)¹³⁴. Sin desdeñar la función de principio orientador de la aplicación de dicha normativa; pues, siempre en palabras de Gabriel Arias Salgado:

La información ha de estar amparada por la ley y sujeta como toda actividad social a norma jurídica, pero son los principios y bases doctrinales los que permitirán la recta interpretación y aplicación de las leyes en cada caso y las hará socialmente aceptables, ya que no tanto es la letra, como el *espíritu* y la finalidad de las leyes la que ha de salvar la justicia en su aplicación diaria y concreta [el subrayado es nuestro] (Arias, *op. cit.*: III200).

Permite así la doctrina aproximarse al “espíritu” –el primero, como se sabe, de los tres elementos clásicos de todo análisis normativo– que informa y subyace, como marca de agua, a la normativa y a la aplicación de la misma; y que trata, del mismo modo, de justificarlas y legitimarlas.

Con la finalidad, pues, de comenzar a vislumbrar el “espíritu” que animó la normativa e intervención estatal sobre la empresa periodística privada, el presente capítulo trata de desvelar la doctrina oficial del Régimen –u “oficializada” al informar la normativa– sobre la naturaleza y función de la prensa y sobre el papel que el Estado había de desempeñar en relación a ella; así como de desentrañar los orígenes y fuentes teóricas de las que se nutrió dicha doctrina. Ello nos permitirá, a su vez, obtener un indicador razonablemente fiable del poder que cada dirigente y “familia” tuvo en cada

¹³⁴ La cita original fue publicada en la revista *El Español*, num. 231.

momento sobre el gobierno de la prensa privada; poder valorado, en este caso, en función de la capacidad de trasladar sus concepciones doctrinales al corpus doctrinario oficial del Régimen recogido en el ordenamiento jurídico de la materia. Partimos, en este sentido, de la premisa de que la influencia que cada una de las “familias” y dirigentes tuvieron en la configuración de la doctrina oficial franquista supone un indicio revelador del poder que cada uno de dichos agentes tuvo en cada momento en el conjunto del sistema de prensa.

El análisis que proponemos se ha centrado en las doctrinas sobre prensa elaboradas por las tres “familias” o dirigentes con poder sobre el sistema durante los años anteriores a nuestro periodo de estudio: FET de las JONS, con competencias en la materia entre 1938 y 1945; la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, formalmente a cargo del aparato de prensa entre 1945 y 1951, aunque con influencia efectiva en el sector hasta el final de la dictadura; y Gabriel Arias Salgado, ministro de Información entre 1951 y 1962, cuya doctrina se asemeja en muchos aspectos a la acenepista, pero presenta suficientes peculiaridades como para merecer un estudio individualizado. El estudio de la doctrina falangista se ha basado fundamentalmente en el *Estatuto de Prensa de FET de las JONS* publicado a finales de los años treinta con el objetivo más que probable de condicionar la inminente regulación que preparaba el primer gabinete convocado en Burgos aún en plena Guerra Civil¹³⁵. La doctrina acenepista ha sido objeto de un estudio detallado a partir de las concepciones defendidas por sus dos principales líderes hasta los años cincuenta, Ángel Herrera Oria y Fernando Martín Sánchez-Juliá; así como de los diversos propagandistas que abordaron la cuestión, tanto en las páginas de la revista *Ecclesia* como en los diversos congresos y encuentros organizados por la Asociación para tratar la cuestión y presionar sobre el legislador¹³⁶. Todo ello cristalizará en una propuesta de ordenamiento jurídico –en el *Borrador de un Proyecto de Estatuto de la Prensa*– elaborada por el capítulo madrileño de la ACN de P en 1961, cuando la puesta en marcha de una nueva ley parecía inminente¹³⁷. Por último, los principios de Arias Salgado han sido extraídos de los tres tomos que compendian su obra teórica *Textos de Doctrina y Política española de la Información* (1960) así como del Anteproyecto de Ley de Bases de la Información (ALBI, de aquí en adelante), alumbrado en 1959 y llamado a

¹³⁵ *Estatuto de la Prensa de FET de las JONS*. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136. Véase Anexo II.

¹³⁶ Las ponencias pronunciadas por los líderes acenepistas en los años sesenta han podido ser examinadas gracias a su publicación en los Boletines oficiales de la ACN de P (BANCd), conservados en el Archivo Central de la AC de P, en Madrid y gentilmente cedidos para esta investigación.

¹³⁷ *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, en AC de la AC de P. Véase Anexo III.

desembocar en una regulación general del conjunto del sistema informativo español de la época¹³⁸.

Falangistas, acenepistas y Arias Salgado fueron, por otra parte, los tres únicos grupos o dirigentes que elaboraron doctrinas acabadas sobre la prensa. A pesar de que, como constatamos, también los militares habían atesorado durante parte de la Guerra Civil competencias político-administrativas en la materia, no hay ninguna evidencia de que elaboraran una doctrina específica. Lo mismo ocurre con Manuel Fraga Iribarne y sus sucesores, ninguno de los cuales desarrollará un cuerpo doctrinal tan acabado como los de FET de las JONS, la ACN de P, y Arias Salgado. Enunciarán, todo lo más, algunas nociones disgregadas, más próximas a la táctica política que a la teorización abstracta; de ellas además, como es evidente, sólo las de Fraga y Cabanillas pudieron influir de algún modo en la última gran norma reguladora del sistema de prensa, aprobada en 1966¹³⁹; obviamente, las ideas argüidas por Sánchez Bella, Fernando Liñán y León Herrera sólo pudieron condicionar de algún modo la aplicación de la Ley¹⁴⁰.

El análisis particular de las doctrinas de falangistas, acenepistas y de Arias Salgado nos permitirá comprobar, en el bloque siguiente de la investigación, en qué medida fue impregnando la doctrina de cada agente la normativa y actuación efectiva de la Administración tardofranquista sobre el sistema de prensa, en general, y sobre la empresa

¹³⁸ El Archivo General de la Administración conserva seis borradores del ALBI, en sig. (3) 49.21 c. 65136. De todos ellos, hemos centrado el análisis en el último en ser elaborado y, por tanto, el más completo y acabado.

¹³⁹ Para Fraga, la información cumple dos funciones básicas, posibilitadas en parte por los avances técnicos: la extensión de la cultura y la creación de nuevos “productos culturales” (García Jiménez, *op. cit.*: 334). Sin embargo, quizás el rasgo más destacado de su noción informativa sea el carácter instrumental que ésta reviste: tal y como vimos, el ministro concibe la información como, esencialmente, un instrumento de reforma y apertura política. Dicha apertura, implementada como vimos únicamente hasta 1966, conecta directamente con la política informativa de Pío Cabanillas; mientras que la aplicación severa de la Ley Fraga queda vinculada a la “involución en la continuidad” de Sánchez Bella, Fernando Liñán y León Herrera. La concepción que anima el aperturismo de Cabanillas es la “anticipación informativa”; esto es, la certeza de la necesidad de transparencia y apertura para evitar la aparición y difusión de informaciones paralelas, incontroladas y, en fin, deformantes.

¹⁴⁰ Alfredo Sánchez Bella fundamentará su política involutiva en lo que él denomina la “política de las cosas” (evidentemente inspirada en la “disciplina de las cosas” orteguiana) que conecta con la secularización ideológica y el tecnicismo de Fraga. Según Jesús García Jiménez, el principal problema que, para Sánchez Bella, presenta el sistema informativo es la excesiva ideologización a la que ha estado sometido; ideologización que podría incluso volver a poner al país en “riesgo de volver a los viejos partidismos, que tan nefastos resultados trajeron para la vida nacional en otros tiempos” (García Jiménez, *op. cit.*: 506). Frente a ello, exhorta Sánchez Bella a abandonar problemas abstractos y originales y a “trabajar sobre las cosas concretas”.

Las nociones sobre información y prensa expresadas por Fernando Liñán y León Herrera se reducen, por último, al concepto de “dignificación del hombre” del primero (y que ya descubrimos como poco más que una coartada para justificar el abuso de poder político), y al intento del segundo de establecer un “pacto entre caballeros” con la prensa que permitiese una mayor liberalidad en la aplicación del artículo segundo de la Ley de 1966 (García Jiménez, *op. cit.*: 616).

periodística privada, en particular. Deberemos contar entonces con una visión suficientemente clara, expuesta en el último apartado del presente capítulo, del modo en que tales doctrinas se filtraron en la concepción franquista de la prensa, oficializada en tanto que plasmada en los preámbulos, declaraciones y exposiciones de motivos de la legislación sobre la materia; así como de entender la evolución conceptual del Régimen en este ámbito, paralela y coherente, en todo caso, a la mutación política experimentada por la dictadura y evidenciada en el anterior capítulo.

3.1 La doctrina falangista sobre información y prensa

Es preciso aclarar, antes de nada, que la doctrina falangista sobre prensa no puede concebirse como un corpus inmutable, en la medida en que tampoco FET de las JONS lo fue¹⁴¹. El análisis que aquí presentamos se centra por ello, fundamentalmente, en la doctrina elaborada por el Partido en los años treinta y cuarenta. Ello se debe a varias razones: en primer lugar, son estos los años en los que el proyecto falangista pudo manifestarse de forma más libre y coherente con sus ideas fundacionales. Franco no tardará en poner en marcha una maniobra política dirigida a someter al Partido y a apaciguar a sus dirigentes de primera hora (lo que explica, como vimos, el nombramiento de José Luis Arrese al frente de la Secretaría General del Movimiento [v. 2.1.1.3]); fruto de lo cual resultará el sometimiento definitivo de Falange al Estado mediante su institucionalización y burocratización. Es además éste el momento en el que más influencia ejerció el Partido sobre la vida política española y cuando más poder acaparó sobre el aparato institucional de la prensa. Los años treinta y cuarenta son, por si fuera poco, cruciales para la configuración del sistema de prensa posterior: coinciden con el momento de elaboración, bajo la iniciativa y el control del Partido, de una Ley de Prensa que se mantendrá en vigor nada menos que veintiocho años. Por último, no es sino al finalizar la década de los treinta cuando Falange formula de forma explícita su doctrina sobre información y prensa. En febrero de 1937, tres meses ante de la unificación, el Partido celebra en Salamanca una Asamblea de Prensa y Propaganda en la que organiza

¹⁴¹ Como tampoco, naturalmente, fueron inmutables las doctrinas elaboradas por el resto de familias y dirigentes. Por supuesto, las doctrinas sobre prensa defendidas por cada una de estas “familias” y dirigentes bien pudieron experimentar variaciones a lo largo de los casi cuarenta años del régimen franquista; y ello en la medida en que tampoco estas familias y dirigentes permanecieron inmutables en sus convicciones y posicionamientos. Si bien es cierto que, para los análisis que planteamos en las páginas que siguen, hemos atendido preferentemente a los principios doctrinales manifestados por cada familia y dirigente *durante el periodo concreto en que ostentaron el gobierno de la prensa*, no lo es menos que tampoco hemos dejado de tener en cuenta principios defendidos en otras etapas en las que no contaban con competencias en la materia. Por ello, la doctrina de cada una de estas familias y dirigentes ha de verse como una *síntesis* de las posturas fundamentales mantenidas durante el conjunto del periodo.

su aparato informativo. Pero, sobre todo, ese mismo año elabora su *Estatuto de Prensa*¹⁴², documento en el que quedará plasmada su doctrina original sobre la materia.

3.1.1 Principios del fascismo español sobre información y prensa

Antes de la Guerra Civil, los ideólogos más destacados del fascismo español no habían elaborado unos principios doctrinales específicos sobre la información y la prensa. Ni de los programas jonsistas, ni de los principios falangistas, pueden extraerse referencias coherentes y acabadas sobre el periodismo y los medios de comunicación; si bien no dejan de advertir la importancia de la prensa (Martín, 1993: 565). El fascismo español reconocerá, en efecto, su papel instrumental en la empresa de conquista del Estado, lo que le llevará a impulsar órganos de expresión propios¹⁴³ del mismo modo que Joseph Goebbels hiciera con *Der Angriff* y Benito Mussolini con *Il Popolo d'Italia*. Muchas más dificultades encontrarán, en cambio, a la hora de definir los principios que habían de regir dichos órganos, así como el modo en que éstos debían funcionar (Martín, *ibídem*).

A causa de esta indefinición inicial, Ricardo Martín de la Guardia ha acudido a las proclamas de los principales ideólogos fascistas acerca de los conceptos genéricos de libertad y de libertad de expresión, para colegir de ellas postulados implícitos sobre la prensa. El fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, defiende, para empezar, la subordinación de toda idea de libertad individual a la defensa de la “unión, fortaleza y libertad de la Patria”:

¹⁴² No hay constancia en el documento original del *Estatuto de Prensa* de su fecha de elaboración. Sin embargo, se ha conservado una carta del Secretario Nacional de Prensa y Propaganda de Falange, Celestino Minguela, adjunta al Estatuto y con fecha de 31 de enero de 1938. En dicha carta, Minguela informa de que entrega el Estatuto que el Delegado Nacional de Falange “entregó hace tiempo” a Franco. Ese indeterminado “hace tiempo” sugiere que la elaboración del Estatuto debió remontarse al año anterior, 1937, o, como tarde, a los primeros días de enero de 1938. Además, en su artículo tercero, el Estatuto hace referencia a FET de las JONS (y no a FE y de las JONS), luego debió redactarse después del Decreto de unificación de abril de 1937. Esta datación aproximada contradice una de las hipótesis formuladas por Javier Terrón Montero. Según este autor, Falange no habría hecho explícita su doctrina sobre política informativa antes del final de la Guerra Civil; de modo que, en el momento en que ésta queda al fin formulada, ya no hay posibilidad de que se instaure en España un Estado fascista (Terrón, 1981: 41). Esto queda desmentido por varias razones: en primer lugar, como hemos visto, el *Estatuto de Prensa* de Falange data de 1937 o, a más tardar, de enero de 1938; pero, además, tal y como hemos constatado en el apartado anterior, el Partido mantendrá el poder sobre el aparato de prensa hasta 1945; y, al menos hasta 1941, se situará al frente del mismo un equipo dispuesto a configurar un sistema de prensa abiertamente falangista. Si no logró instaurar FET un sistema de prensa fascista no fue por falta de tiempo o posibilidades, sino muy probablemente por el contrapeso ejercido por los militares y por Franco.

¹⁴³ Aspiración que, como vimos, se mantendrá incluso durante el franquismo, dado que en 1941 los falangistas tratan sin éxito de eximir a la prensa del Movimiento de la censura estatal y de crear así unos órganos de expresión emancipados de la tutela y control del Estado.

Cada español, pues [explica Martín de la Guardia el ideario de José Antonio], tiene un cometido propio en el *Estado* como articulador de la *Nación*, cuyo objetivo es el engrandecimiento de ésta. En este sentido el corolario es claro: cuanto más fuerte es la *Nación*, más libre es la persona; y de ahí que el *servicio* sea tan claro en los presupuestos ideológicos falangistas (Martín, *op. cit.*: 567).

Servicio al Estado que, si ya constituye un deber para todos los españoles, más lo es aún para el periodista: a él le corresponde “guiar al pueblo en el empeño común de alcanzar un orden estatal armónico” (Martín, *ibídem*). Idéntica a esta idea de servicio joseantoniana es la defendida por Ramiro Ledesma Ramos, uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS) y futuro dirigente de FE tras su fusión con aquellas. En su *Discurso a las juventudes de España*, proclama Ledesma que “El servicio a España y el sacrificio por España es un valor moral superior a cualquier otro [...]”. El periodista, una vez más, participa plenamente de este sacrificio al poner su labor al servicio de la reconstrucción de la “moral nacional”:

[...] el periodista [explica Martín los argumentos de Ledesma], como propalador de la idea de moral nacional, constituye el nuevo espíritu de la profesión, *frente a la práctica periodística del viejo y caduco orden liberal, necesariamente exterminable* [el subrayado es nuestro] (Martín, *op. cit.*: 568-569).

Introduce Martín en esta última línea un nuevo argumento derivado del principio fascista de subordinación total al Estado: el rechazo consecuente de todo “servicio” prestado a cualquier otro interés que no sea el engrandecimiento del Estado; de lo que, a su vez, se desprende el rechazo generalizado en el ideario fascista del “viejo y caduco orden liberal”, en el que el periodista ejerce su labor al servicio del interés privado y no del estatal. De ello se sigue, por último, la justificación del “exterminio” al que invita Ledesma de las empresas periodísticas privadas, “al haberse convertido éstas, como servidoras a intereses ajenos de la comunidad nacional, en elementos impulsores de los desórdenes de los años republicanos, y promotores del enfrentamiento bélico de 1936” (Martín, *ibídem*). En este mismo argumento abunda Onésimo Redondo, otro de los precursores del fascismo español, quien además sí explicita los principios rectores de la actividad periodística, en 1931, en el primer número del semanario *Libertad*:

Hasta ese momento [expone Martín de la Guardia el pensamiento de Redondo], la prensa, cobijada bajo el mito liberal de la libertad de expresión, había monopolizado la información, mintiendo sobre los hechos y falseando la realidad, con la cual contribuían a favorecer las tendencias disgregadoras del cuerpo social, destruyendo los pilares sobre los que se edificaba el Estado. Los periodistas, y los grupos de interés que los apoyaban dentro de las empresas informativas, habían estado presentes en todos los grandes ‘desastres nacionales’ [...] (Martín, *ibídem*).

La agitación del liberalismo como el causante de los males de España remite directamente a la consigna jonsista, publicada en *Libertad* en febrero de 1934 y otra vez en marzo de 1935, de acabar con la libertad “francesa y masónica de hablar y escribir”.

En los tres precursores del fascismo español subyace, pues, el mismo principio general: *la prensa ha de estar al servicio absoluto y exclusivo del Estado* (en tanto que articulador de la nación):

El Nacional-Sindicalismo [escribe durante la Guerra Civil, en el diario *FE* de Sevilla, Tresgallo de Souza, seudónimo tras el que se esconde el falangista Manuel García Venero] postula un periodismo técnico y políticamente al servicio absoluto de la patria. No existirá en España otra prensa que la dirigida por el Estado Nacional-Sindicalista. El periodismo no será un negocio económico, ni un arma política contra el Estado [...] El periódico y el periodista servirán al Estado [...] a un Estado fuerte, corresponde una prensa fuerte. No puede existir fortaleza en la prensa si ésta obedece a otros móviles, político o particulares, diferentes a los que inspiran el mismo Estado (Cit en Terrón, 1981: 48; Cf. Sinova, 1989a: 16).

De este principio supremo de servicio absoluto al Estado dimana el desprecio por el orden liberal, que coloca al periodista a la orden de intereses privados y que convierte la libertad de prensa en libertinaje. Es esa “ufanía de la libertad de pensamiento” la que, según proclama el *Estatuto de Prensa* falangista, “rigió a su capricho [...] los destinos de la Patria [...] destruyendo la unidad española de la Fé [*sic*], de la Cultura, del Hombre, de los hombres y de las tierras”¹⁴⁴. Frente a él se alza, para el falangismo, la “verdadera” libertad de prensa, garantizada exclusivamente —si bien no se explica de qué modo— por el sometimiento abnegado al Estado. Así formula Xabier Echarri, director del diario *Arriba* en los años cuarenta, la aporía fascista de esta libertad “verdadera” alcanzada mediante el sometimiento:

El periodismo [asegura] tiene una función suprema que cumplir, en la cual están por añadidura, su justificación como tarea noble y ejemplar y la garantía de su verdadera libertad. Esta función no es otra que la de sabiéndose parte esencial del orden general del Estado, servir limpiamente, con obstinación y alegría, la empresa nacional [...] Cuando el periodismo sirve tan sólo a una idea y a un Estado, el periodismo además es libre, la prensa es libre, la libertad de la prensa empieza a ser algo real y verdadero que nada tiene que ver ya con el derecho a la blasfemia o a la traición, que es lo único garantizado por el liberalismo (Cit. en Martín, *op. cit.*: 578).

3.1.2 El Estatuto de prensa de FET de las JONS

¹⁴⁴ *Estatuto de la Prensa de FET de las JONS*. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136. Véase Anexo II.

Por supuesto, del principio del servicio prestado por la prensa, “con obstinación y alegría” al Estado, no se deriva únicamente el rechazo del sistema liberal; se desprenden de él, además, un conjunto de nociones que acaban por conformar un cuerpo doctrinal plenamente fascista sobre la materia. De todas ellas —que, enunciadas en el *Estatuto de la Prensa*, con claras reminiscencias nazis, serán entregadas por el Partido a Franco entre abril de 1937 y enero de 1938—, cabe destacar las cuatro siguientes:

(a) *La prensa al servicio del Estado*: Tal y como ya hemos señalado, la premisa mayor de la que se derivan el resto establece que “Toda la prensa Española se constituye en un organismo al servicio augusto de la Patria, como vehículo propulsor de su engrandecimiento imperial por la exaltación diaria de las virtudes ejemplares de la España Tradicional y Eterna” (art. 2).

(b) *La función adoctrinadora de la prensa*: es ese “servicio augusto” el que, frente a la obra destructiva del sistema liberal, garantizaría el ejercicio de la “noble” función periodística de adoctrinar a las masas:

Vuelve la prensa [proclama el *Estatuto* con la típica ampulosidad fascista] a su función noble y exacta de adoctrinar al pueblo en los nobles ideales que transforman la naturaleza humana en un venero precioso de hermandad y sacrificio: de proclamar la verdad de nuestra vida y de nuestra Historia, que es patrimonio y señorío de imperios: de guiar a las masas populares hacia la paz, la felicidad y el bien con el criterio sano de la Moral y de la Justicia, porque el mal y el error no pueden tener libertad ni derechos sobre los derechos inviolables de la libertad y de la conciencia humanas¹⁴⁵.

Esta función de adoctrinamiento se acaba concretando en seis cometidos específicos de la prensa (art. 3): (1) profesar la fe católica y alentar entre los españoles un “recio espíritu de fé [sic], y estricta conducta moral en el individuo, en la Familia, en el Sindicato, en la Milicia y en el Estado”; (2) defender la unidad “espiritual y física” de España; (3) proclamar la “Doctrina Programática del Estado Español contenida en los Veintisiete Puntos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”; (4) estimular la ciencia y la cultura; (5) llevar al pueblo la doctrina de la justicia social y la caridad cristiana; y (6) informar del “espíritu de Milicia”: austeridad y cumplimiento del deber.

(c) *El control absoluto del Estado*: en la medida en que la prensa se encuentra al servicio del Estado, “Corresponde al Estado, por medio de su Ministerio de Prensa y Propaganda las funciones rectoras y orientación y control de toda la prensa Española [...]” (art. 4). La función orientadora del Estado se lleva a cabo fundamentalmente a través de la “consigna”, que determina cada día la agenda de los temas que han ser

¹⁴⁵ *Ibídem*.

tratados, así como el modo de tratarlos¹⁴⁶. Así justifica su existencia Manuel Prados y López, jefe de la Sección de Información y Censura bajo las órdenes de José Luis Arrese, secretario General del Movimiento:

¹⁴⁶ Justino Sinova —cuya obra publicada (1989a) sigue siendo el estudio más exhaustivo acometido hasta el momento sobre la materia— ha definido las consignas como: “Órdenes del poder político, dictadas todos los días a los periódicos sobre los aspectos más variados de su labor. O bien se referían a cuestiones de fondo (temas y argumentos de los que no se podía informar o de los que había que informar obligatoriamente), o bien a aspectos de presentación de las noticias (titulación, espacio dedicado, inserción de fotos), o bien a detalles de la actividad misma de los periódicos (envío de redactores a cubrir una información, prohibición de realizar determinado tipo de fotos) (Sinova, *op. cit.*: 161-162).

Este instrumento de orientación y dirección de los contenidos periodísticos no había sido, desde luego, inventado por el franquismo, sino copiado de las *istruzioni* del fascismo italiano y de las *anweisungen* distribuidas por el Ministerio de Propaganda nazi (Chuliá, *op. cit.*: 71). El régimen nunca reguló la materia; de hecho, apenas aludió a ella de forma explícita en el preámbulo de una disposición legal de rango menor (Orden de 1 de octubre de 1938). Ni siquiera la Ley de Prensa de 1938 —pergeñada con la notable influencia de dos “familias” defensoras de las consignas, la falangista y la militar (de donde procede, por cierto, el término “consigna”)— incluía la función orientadora o directiva entre las atribuciones del Estado recogidas en el artículo segundo. Acaso pueda apreciarse una alusión velada a las consignas en el artículo 19, por el que se sancionan los “desvíos de las normas dictadas por los servicios competentes en materia de prensa”; si bien, como es obvio, no puedan reducirse dichas normas al envío de consignas.

La ausencia de regulación no impidió, sin embargo, su funcionamiento efectivo e indiscreto al menos hasta los años sesenta. Durante la etapa de la Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945), dirigida entonces por Gabriel Arias Salgado, el envío de consignas llegó incluso a formalizarse a través de unos Boletines de Información remitidos puntualmente desde el organismo a los periódicos (Sinova, *op. cit.*: 136). Las consignas se convertirían de este modo, durante los primeros veinte años del Régimen, en una “institución nunca institucionalizada” (Dueñas, 1969: 13), pero de uso habitual: “Aun cuando no existen estadísticas ni estimaciones sobre la frecuencia con la que los responsables políticos de la prensa aplicaron las consignas los relatos de periodistas entonces en ejercicio dan a entender que se trataba de un instrumento de uso cotidiano. Se transmitían a los periódicos directamente, por correo o teléfono, o bien a través de los delegados provinciales del organismo administrativo encargado del control de la prensa” (Chuliá, *ibídem*).

Todo ello al menos hasta principios de los años sesenta. Poco después de su llegada al MIT en 1962, Manuel Fraga acabaría aparentemente con ellas: así al menos lo atestigua el ministro en sus memorias, en las que relata un despacho mantenido con el director General de Prensa, Manuel Jiménez Quílez, en el que ordena su supresión (Fraga, 1980: 43). A pesar de que no cesaron las reuniones entre directores de prensa y altos cargos del MIT, ni estos dejaron de enviar instrucciones por teléfono a aquellos (Barrera, 1995a: 99-100), todo parece indicar que las consignas remitieron desde entonces. Dos son los motivos que explican su declive a partir de los años sesenta: (a) en primer lugar, el agotamiento natural de un mecanismo que había perdido buena parte de su sentido con el alejamiento del franquismo de los regímenes totalitarios europeos. Chuliá identifica dos factores de este agotamiento, uno exógeno y otro endógeno: “De un lado, la superación de la fase más crítica del régimen y su aceptación *de facto* por la comunidad internacional restaban argumentos a favor del mantenimiento de unas normas de control diseñadas teóricamente para el periodo de guerra [...] De otro, el funcionamiento del sistema de censura y consignas durante veinte años había abultado sus defectos y disfunciones, mostrando de forma descarnada su propia degeneración” (Chuliá, *op. cit.*: 135). (b) A lo que hay que añadir un segundo motivo ligado a los anteriores: el declive —consecuente con la evolución política del Régimen— de las doctrinas de las dos “familias” franquistas que con más vehemencia habían impulsado y defendido el régimen de consignas: la doctrina falangista, y la “teología de la información” de Gabriel Arias Salgado. Así como, de forma paralela, el aumento del poder e influencia de la “familia” acenepista que, como enseguida veremos, las había rechazado taxativamente.

La consigna [defiende en su libro *Ética y estética del periodismo español*] repartida simultáneamente a los periódicos los unifica, los dignifica y los orienta hacia un solo amor esforzado... La consigna es para los periódicos luz en el horizonte, señal de seguridad, guía oportuna (Cit. en Sinova, 1989: 33).

Para ejercer las funciones rectora y de control, el Estatuto propugna la creación de un cuerpo de “inspectores” provinciales de prensa dependientes del Ministerio de Prensa y Propaganda: de ellos depende el ejercicio de la censura y la aplicación de sanciones (capítulo octavo); así como la inspección y control de la gestión administrativa de la prensa (art. 22); la autorización para seguir editando los periódicos ya existentes (art. 8); el nombramiento de los directores de los periódicos¹⁴⁷ (art. 19); y la regulación de todos los aspectos formales —hasta los más insignificantes— de la publicación: promueve FET de las JONS una composición caracterizada por la “máxima sencillez tipográfica, unida a una severa y serena elegancia” (art. 10). Por último, corresponde al Estado la fijación del *númerus clausus* de periódicos para cada ciudad española de acuerdo con su población (arts. 14 y 15; y disposiciones transitorias 1ª, 3ª y 4ª)¹⁴⁸.

(d) *El control del Partido*: para todo ello cuenta, por supuesto, con la estrecha colaboración del Partido —entendido como la institución orgánica por la que “el pueblo asciende al Estado” y el Estado “infunde al pueblo las virtudes de servicio y de jerarquía en una razonada y egregia totalidad”—, el cual, bien orienta la acción estatal, bien la ejecuta. A FET de las JONS se le reservan las atribuciones de fundar en exclusiva nuevos periódicos (art. 7)¹⁴⁹; de elaborar informes para el mantenimiento de los periódicos ya existentes (art. 8); de hacerse presente en todas las ciudades españolas (art. 16)¹⁵⁰; de informar acerca de las personas susceptibles de ser nombradas directores de periódicos

¹⁴⁷ Tanto los directores como los redactores están, además, obligados a jurar fidelidad a la Patria y al Caudillo (art. 21).

¹⁴⁸ El Estatuto fija un máximo de 4 diarios matutinos y 3 vespertinos para las ciudades de más de 500.000 habitantes. Si el número de diarios en estas ciudades excede de estas cifras, se eliminan los sobrantes, dando preferencia para su pervivencia a los medios de FET de las JONS. De haberse aplicado, esto habría supuesto una reducción generalizada de la prensa nacional, dado que España contaba en 1937 con más publicaciones de las previstas por Falange para cada localidad. En estos casos, además, el Estado, no sólo cierra la publicación, sino que la expropia, al “excitar” al medio a ceder su patrimonio gratuitamente al Estado: en la disposición transitoria sexta, se establece: “Se excitará a las Empresas particulares a que cedan en beneficio del patrimonio de la Patria en la medida de sus posibilidades los derechos de propiedad de estos periódicos [se refiere a aquellos que el Estado considere que deben cesar en su publicación]”.

¹⁴⁹ Sólo la Iglesia Católica puede también editar publicaciones, pero que “atiendan, exclusivamente, al estudio y propagación de la Fé, de la Moral, de la Ciencia y Disciplinas eclesiásticas” (art. 8, *ibídem*).

¹⁵⁰ Según el Estatuto, todas las ciudades de España tienen que contar con un órgano oficial del Partido. Si no es así, se autoriza la incautación de uno de los periódicos: “Si hecha la reducción de prensa a tenor de las normas precedentes [se refiere a los artículos 14 y 15 en los que se fijan los *númerus clausus* de periódicos para cada localidad] existieran localidades donde no se publique un periódico de Falange Española Tradicionalista y de las JONS pasará automáticamente a ser órgano oficial del Movimiento uno por lo menos de los que permanezcan” (art. 16).

(art. 19); de orientar y dirigir la gestión administrativa de la prensa del Movimiento¹⁵¹ (art. 22); y de formar y expedir los títulos de periodista¹⁵² (art. 20), así como organizar y controlar su afiliación sindical (capítulo séptimo).

3.2 La doctrina acenepista sobre información y prensa

A mediados del siglo XIX, la Iglesia Católica se ve impelida a definir su posición ante el fenómeno emergente de la prensa moderna. Su postura inicial quedará marcada, por encima de cualquier otra consideración, por el miedo: la prensa liberal, erigida en uno de los fenómenos medulares del siglo, viene a socavar el monopolio de la verdad hasta entonces acaparado por la Iglesia, lo que motivará, en último término, la condena de la libertad de imprenta formulada el 15 de agosto de 1832 en la encíclica *Mirari Vos* de Gregorio XVI.

La libertad de expresión del pensamiento entendida según el modelo liberal [explica Terrón] suponía para la Iglesia Católica un grave peligro de cara al mantenimiento de su papel secular de única intérprete válida de la ‘Verdad’, inaccesible para los individuos si no era a través de su mediación. En consecuencia, la aparición del fenómeno de la comunicación masiva por el cual se posibilita el acceso al conocimiento de los acontecimientos y de las opiniones tanto religiosas como políticas suscitó inmediatamente en el seno de la Iglesia una prevención contra la divulgación de una ideología que como la liberal burguesa parecía oponerse a la concepción jerarquizada de la sociedad mantenida por aquella (Terrón, 1981: 28-29).

La Iglesia responderá poniendo en práctica una doble estrategia: en primer lugar, llamará a los gobiernos a prevenir y reprimir los posibles desmanes (anticatólicos) que la libertad de prensa pudiera generar; además, desde finales de los setenta del XIX, León XIII, recogiendo las iniciativas infructuosas de papas anteriores, impulsará la creación de órganos de expresión propios. La Iglesia no cejará desde entonces en promover la creación de una prensa propiamente católica, emancipada en lo posible del control

¹⁵¹ Para el resto de periódicos, la gestión administrativa (pero no la orientativa) le corresponde a las empresas titulares del medio, “bien entendido que estas Empresas se limitarán a sus funciones exclusivamente administrativas sin rozar por ningún caso funciones rectoras de orientación” (capítulo sexto). Este artículo revela que, a pesar del rechazo del sistema liberal de prensa, Falange concibe un sistema no monopolizado totalmente por el Partido, sino en el que tienen también cabida medios privados. Estos, de todos modos, tendrían que someterse a las directrices “orientadoras” del Partido, por lo que, aunque se inscriban en un sistema mixto (con medios estatales y pseudoestatales, y medios privados), en la práctica se trataría de un sistema casi-totalitario.

¹⁵² Para ello, Falange promueve la creación de una “Universidad Nacionalsindicalista de Prensa” (art. 20). Hasta la fundación de tal universidad, según establece la disposición transitoria 2ª, los títulos serán expedidos por Seminarios Nacionalsindicalistas de Prensa, que se celebrarán con carácter intensivo en ciclos de tres meses.

estatal (el cual, sin embargo, sí exige para el resto de publicaciones) y erigida en portavoz de la doctrina eclesial.

En España, será sobre todo uno de sus brazos seculares, la ACN de P, la que asuma el mandato papal de constituir un aparato informativo católico: en 1911, bajo la presidencia de Ángel Herrera Oria, la asociación adquiere el diario *El Debate*, fundado en abril de 1910, y desde entonces y hasta 1939 principal portavoz de los acenepistas; a él se sumará la Editorial Católica, constituida en 1912. En torno al diario y la editorial, la ACN de P construirá un grupo informativo compuesto por varias publicaciones, una agencia de noticias (Logos) y una Escuela de Periodismo, en la que se formarán o impartirán docencia algunos de los periodistas españoles más destacados del momento, así como algunos de los futuros dirigentes del aparato de información del Régimen.

Desde finales de los años treinta, con la instauración violenta del Nuevo Estado, la postura del catolicismo español con respecto a la prensa vendrá marcada por la respuesta del Régimen a estas dos demandas de la Iglesia: censura anticatólica, y órganos de expresión eclesiásticos propios y autónomos. El sistema de prensa franquista cumplirá escrupulosamente la primera, pero no la segunda: la autonomía de la prensa católica con respecto al Estado sólo se logrará, a partir del 25 de marzo de 1944, para aquellas publicaciones ligadas directamente a la jerarquía y ocupadas de asuntos meramente doctrinales. Esta situación determinará, desde los años cuarenta, tanto la posición de la “familia” acenepista ante el sistema, como la doctrina por ella elaborada.

Para obtener una visión completa de la doctrina propagandista sobre información y prensa nos detendremos en el pensamiento de dos de sus dirigentes principales, Ángel Herrera Oria y Fernando Martín-Sánchez Juliá; pensamiento que completaremos con las aportaciones de otros insignes miembros de la “familia”, con el fin de poder elaborar una síntesis de las nociones doctrinales acenepistas básicas, expresadas en buena medida en la propuesta de ordenamiento jurídico que el capítulo madrileño de la Asociación hace pública a principios de los sesenta, cuando el inicio del proceso de elaboración de una nueva ley de prensa resulta ya inminente.

3.2.1 El pensamiento de Ángel Herrera Oria

Las nociones sobre prensa propugnadas por el cardenal Ángel Herrera Oria, creador en 1908 de la ACN de P, suponen nada menos que el depósito fundacional del edificio doctrinal católico español sobre la materia. Herrera Oria, por cierto, no había permanecido ajeno a la profesión periodística: a sus actividades políticas y clericales uniría una vocación periodística satisfecha en las décadas de los diez y los veinte del

pasado siglo en la redacción de *El Debate*, del que será el primer director. Fundador, junto al sacerdote Ángel Ayala, de la ACN de P el 4 de noviembre de 1908, Herrera Oria presidirá la Asociación (entonces denominada, como actualmente, Asociación Católica de Propagandistas) desde 1909 hasta 1935, cuando le sucede Fernando Martín-Sánchez Juliá. Dos años antes, en 1933, Herrera Oria había abandonado la dirección de *El Debate* para presidir Acción Católica. En noviembre de ese mismo año, el pequeño partido político impulsado por el cardenal, Acción Nacional (nacido en 1931 y rebautizado después como Acción Popular) se coaligaba con la Derecha Regional Valenciana para formar el principal partido político de la derecha católica española, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que presidirá el gobierno republicano, junto al Partido Radical, durante el llamado “bienio negro”, entre el 19 de noviembre de 1933 y el 29 de diciembre de 1935.

El pensamiento de Ángel Herrera Oria reproduce en buena medida los argumentos y contradicciones manifestadas por la Iglesia a propósito de la función de la prensa y de la actuación consecuente que sobre ella debía ejercer el Estado. Así, para Herrera Oria, en tanto institución social y política, la prensa se erige en “instrumento al servicio del bien común”, o arma de defensa “de la comunidad social”; concepción que impide su desarrollo absolutamente libre, tal y como entiende la libertad el sistema liberal, e impone la necesaria incumbencia del Estado (lo que de todos modos tampoco justifica derivas “estatistas”). La cuestión radica, pues, en la resolución del viejo dilema católico de conjugar la libertad y autonomía a la que aspiran sus órganos de prensa, con la incuestionable potestad interventora del Estado sobre el sistema, necesaria además para, entre otras cosas, coartar la publicidad anticatólica:

El problema radica, por consiguiente [corroborra Terrón], de una parte, en asegurar la existencia de una prensa católica al tiempo que impedir la contraria a la doctrina de la Iglesia, y de otra, armonizar los intereses de aquélla con los del Estado (Terrón, *op. cit.*: 37).

Esta necesidad de armonización de los intereses católicos y estatales —a los cuales, como puede advertirse, se les concede idéntica importancia— se desarrolla y concreta en la propuesta de ordenación jurídica del sistema de prensa que, a solicitud del gobierno republicano radical-cedista, elabora Herrera Oria en 1933 (Terrón, *op. cit.*: 37-38). Cabe identificar en él cuatro principios fundamentales llamados a configurar un sistema ambiguo e inédito, a medio camino entre el intervencionismo estatal totalitario, y la libertad de prensa liberal (“Estatificación, no. Libertad de prensa, tampoco”, llega a proclamar el prelado [Herrera Oria, 2002: 18]). En primer lugar, la concepción católica de la prensa formulada enfatiza el concepto de *responsabilidad*. De ello se derivan dos

principios fundamentales que, según el cardenal, han de trasladarse al ordenamiento jurídico: (1) la obligatoriedad de identificación de los titulares de las empresas de prensa mediante acciones nominativas; así como el reconocimiento de la responsabilidad del director de la publicación sobre su contenido¹⁵³; y (2) la introducción de un requisito de solvencia y estabilidad económica para obtener el permiso de publicación: propone Herrera Oria la imposición de una barrera de entrada económica basada en la “seriedad” de la empresa y aplicada a través de la exigencia de una caución como requisito imprescindible para el inicio de la actividad periodística; así reza la segunda base propuesta:

No se autorizará la fundación de un periódico que haya de informar de la actualidad social y política sin suficientes garantías de seriedad en la empresa y en la redacción; mínimo de capital social; depósito para pago de multas o indemnizaciones; mínimo de redactores, y sueldo mínimo de redactores y corresponsales (Herrera, *ibidem*).

En segundo lugar, la concepción del tipo de actuación que ha de desarrollar el Estado sobre el sistema —actuación que se deriva en parte, como vimos, de la concepción antedicha de la prensa— le atribuye potestades ambivalentes de, al tiempo, *censura y protección*: por un lado, (3) el Estado queda facultado para prohibir el tratamiento de determinados temas y para declarar ilícito todo aquello que socave “los fundamentos religiosos, morales o jurídicos del orden social”; esto es, queda autorizado para ejercer tanto la censura previa (aunque, según Herrera Oria, no con carácter general) y, sobre todo, el secuestro de publicaciones¹⁵⁴. Para juzgar los contenidos ilícitos susceptibles de censura, propone el prelado la creación de un tribunal especial. Pero, por otro lado, (4) el Estado no ejerce únicamente funciones represivas: a él le corresponde también la labor de proteger económicamente a la empresa periodística¹⁵⁵, (en tanto que no realiza ésta, una vez más, sino un “bien común” y una defensa de la “comunidad social”) y garantizar un

¹⁵³ Así, la primera de las bases propuestas por Herrera Oria establece que “cuando el periódico pertenezca a una S.A., su capital debe estar representado por acciones nominativas. Mientras que la tercera base reza: “Será responsable de todo lo que se edite con carácter anónimo en un periódico el director del mismo, que no podrá desempeñar cargo de representación popular” (Herrera, *op. cit.*: 22-23).

¹⁵⁴ “El ministro de la Gobernación [propone Herrera en su base octava] podrá acordar por sí la recogida de ediciones donde aparezcan artículos o noticias que puedan alterar el orden público, ser perjudiciales a la moral o causar grave daño al Estado. Será exigida responsabilidad civil al ministro por los perjuicios ocasionados a la empresas” (Herrera, *ibidem*).

¹⁵⁵ Apela Herrera en su base decimosegunda a la labor estatal de “protección a la industria periodística, cuya vida económica en ningún caso podrá supeditarse a la de otra industria” (*op. cit.*: 24). La base decimocuarta, última de su propuesta reguladora, reza: “Se considerará al periódico como una institución social; pero semipública y colaboradora insustituible de un gobierno popular. La independencia económica y el bienestar de los escritores y periodistas debe ser uno de los principales capítulos de la higiene y policía moral de un Estado bien constituido” (*Ibidem*).

reparto justo de sus beneficios, “especialmente a los redactores, colaboradores y corresponsales” (Herrera, *op. cit.*: 24).

Con este tipo de regulación [concluye Terrón] se trataba, en fin, de colocar a la prensa en un ‘status’ intermedio entre lo privado y lo público a través de un sistema jurídico ‘sui generis’ desconocido en el resto del mundo y que pretende situarse a medio camino entre los sistemas totalitarios y los de democracia liberal de forma que supusiera un canal entre Estado y sociedad, colaborando con el primero a través de su función de dirección y adoctrinamiento ideológico (*Ibídem*).

Estos principios quedarán confirmados más de veinte años después cuando, en 1955, Herrera entable una polémica pública con el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado. La discusión —que se desarrollará en cualquier caso en un tono de respeto y cordialidad— enfrentará al ministro y al entonces obispo a propósito de la adecuación a los mandatos pontificios del sistema de prensa en aquel tiempo vigente; y acabará derivando en una disputa por la pertinencia de una nueva ley y de la regulación que en ella habría de darse a la censura y a las consignas. Herrera Oria refuta los argumentos de Arias Salgado a cuenta de la adecuación del sistema de prensa configurado por el Régimen a la doctrina pontificia. En este sentido, afirma —refiriéndose al discurso pronunciado por el ministro en Barcelona el 12 de diciembre de 1954, ante el segundo Consejo Nacional de Prensa— que “ni todas las ideas del discurso, ni el régimen actual de prensa y las ideas por él vertidas se acomodan al ideal ofrecido, defendido y querido por la Iglesia en esta materia”. Los argumentos del obispo —expuestos en dos cartas remitidas al ministro en enero y febrero de 1955 y publicadas en el Boletín Oficial del Obispado de Málaga¹⁵⁶— pueden resumirse en dos aspectos, ya enunciados, según él mismo reconoce, en 1933: (1) La necesidad de desarrollar, siempre dentro de límites respetuosos con el orden social, el principio de libertad de expresión (que había quedado ya consagrado en 1945 en el artículo 12 del Fuero de los Españoles¹⁵⁷); desarrollo que no puede desembocar, de todos modos, en una conceptualización liberal de la libertad de prensa, sostenida sólo por “católicos mal formados”. Y (2) La necesidad de regular la actividad “orientadora” y represiva

¹⁵⁶ Ambas cartas se encuentran recogidas en el segundo volumen de Arias Salgado, 1960. La cita anterior corresponde a la primera de las cartas, fechada en enero de 1955.

¹⁵⁷ El artículo duodécimo del Fuero de los Españoles —que, como ya adelantamos, fue obra, al parecer, del propagandista Fernando María Castiella— reza: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.

Además de esta limitación relativa a los principios fundamentales, la libertad de expresión consagrada en el artículo quedaba restringida (y prácticamente abrogada) por los artículos 33, y 35 del Fuero, que establecen: “El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España” (art. 33). Y “La vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-ley, que taxativamente determine el alcance y duración de la medida” (art. 35).

desarrollada por el Estado. Afirma sobre ello Herrera Oria que “el régimen actual [de 1955] ofrece dos puntos vulnerables, muy difíciles de conciliar con las ‘enseñanzas católicas’: la censura y las consignas. La censura, por el modo de practicarla. Las consignas, como principio”. Por consiguiente, exige la supresión de las últimas y la limitación de la primera: si bien la censura no deja de ser legítima, ha de ser ejercida también de modo legítimo, es decir, “sometida a normas jurídicas, aunque quede siempre en la aplicación un margen prudencial, ofrecido al arbitrio del Gobierno”. Propone concretamente, ante la eventual renovación del marco legal de la prensa, la restricción de la censura previa mediante un decreto-ley que delimite claramente su alcance y aplicación; y la “reorganización” de la censura *ex post* de modo que cause los menores daños posibles a las publicaciones. Mantiene, por último, Herrera Oria la propuesta de crear un tribunal especial para delitos de prensa caracterizado por el arbitrio judicial, los procedimientos sumarísimos y la aplicación de penas severas. Sus propuestas, se encuentran, pues, tal y como constatamos

Lejos de constituir una reivindicación a favor de un sistema de libertad de expresión [...] Era simplemente [...] el intento de adecuar un control lento y anquilosado a una situación más evolucionada económica y socialmente en la que una nueva ‘élite’ política más dinámica pugnaba con los elementos más reaccionarios del periodo anterior (Terrón, *op. cit.*: 135).

Sin olvidar el intento de satisfacer la vieja aspiración del catolicismo español de conjugar, de un lado, la necesidad de censura para publicaciones agresivas con un orden social identificado con el orden católico, y de otro, la pertinencia de cierta libertad de expresión, adecuada a los mandatos pontificios sobre la materia¹⁵⁸, así como de autonomía para sus publicaciones.

3.2.2 El pensamiento de Fernando Martín-Sánchez Juliá

La importancia que reviste el pensamiento de Fernando Martín-Sánchez Juliá tanto para la ACN de P como para el sistema de prensa franquista, reclama, del mismo modo que en el caso de Ángel Herrera Oria, un tratamiento específico. Martín-Sánchez

¹⁵⁸ Pío XII había realizado ya, el 19 de febrero de 1950, ante el Congreso Internacional de Prensa Católica, una crítica explícita a la censura, en tanto mordaza a la opinión pública. Entonces, en una más que probable alusión velada a la situación española, el Papa había proclamado: “La opinión pública es el patrimonio de toda sociedad normal, compuesta de hombres que, conscientes de su conducta personal y social, están íntimamente ligados con la comunidad de la que forman parte. Ella es en fin de cuentas, en todas partes, el eco natural, la resonancia común, más o menos espontánea, de los sucesos y de la situación actual en sus espíritus y en sus juicios. Allí donde no apareciera ninguna manifestación de la opinión pública; allí, sobre todo, donde hubiera que registrar su real existencia, se debería ver un vicio, una enfermedad, una irregularidad de la vida social” (Cit. en García Jiménez, *op. cit.*: 210).

sustituirá, de hecho, al cardenal Herrera Oria —con quien, por cierto, no parecía mantener las mejores relaciones, pues Martín-Sánchez llegará a acusarlo de forma velada de nepotismo (Montero, 1991: 462-463; 903)— en la presidencia de la ACN de P en 1935; cargo en el que se mantendrá hasta 1953. A pesar de que había cursado estudios de ingeniero agrónomo, tampoco Martín-Sánchez permanecerá ajeno a la profesión periodística. Antes de alcanzar la presidencia de los propagandistas, en los años veinte había ejercido como consejero de redacción de *El Debate*, y como profesor de su escuela de periodismo, cuya dirección alcanzará en 1934. Bajo su presidencia, la ACN de P quedará plenamente incorporada al entramado de poder del franquismo. Serán estos los años en que los acenepistas ocupen varios de los ministerios del Régimen y en los que, tal y como observáramos en el apartado anterior, gocen de las competencias en materia de prensa. Esta incorporación al poder franquista responde, de hecho, a una consigna directa formulada por Martín-Sánchez, quien el 24 de febrero de 1945, en una reunión de los acenepistas del Centro de Madrid celebrada en la Casa de San Pablo, exhorta a sus correligionarios a “apoyar a la autoridad y procurar el cambio para salvar a España, llevando al poder un programa concreto” (Montero, *op. cit.*: 917; v. 2.2.2). El “programa” al que se refiere Martín-Sánchez no es sino el proyecto político “colaboracionista” al que ya nos hemos referido, y que Alberto Martín Artajo tratará de implementar con un éxito relativo desde, sobre todo, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación. Esta integración en el poder franquista acabará de todos modos por minar la autoridad de Martín-Sánchez: en 1953, las discrepancias internas suscitadas por la politización y el “colaboracionismo” lo llevarán a abandonar la presidencia de la Asociación. Mantendrá, no obstante, destacados cargos dentro del Régimen, para el que se desempeñará como procurador en Cortes y como miembro de los Consejos Nacionales de Prensa, Educación y Economía.

Acaso pueda considerarse a Fernando Martín-Sánchez como una de las figuras del Régimen que, junto a Manuel Fraga y Pío Cabanillas, más influencia tuvieron en la elaboración definitiva de la Ley de Prensa de 1966; y, por tanto, en la forma que adoptó el sistema durante el tardofranquismo. Así lo reconoce el propio Manuel Fraga, quien en el verano de 1965 esbozaba este breve elogio del personaje:

Es, sin duda, uno de los personajes más importantes y originales que he conocido. Ingeniero agrónomo, brillante y conservador, con ideas económicas y eficacia empresarial, fue uno de los hombres clave de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), la gran obra del padre Ayala y de Don Ángel Herrera [...] *Me había dado muchas ideas para la Ley de prensa, y creo que siempre usó para bien*

*su indudable influencia*¹⁵⁹, aunque la leyenda la exageraba [...] [el subrayado es nuestro] (Fraga, 1980: 146).

Esas “ideas para la Ley de prensa” habían comenzado a perfilarse años antes: en 1951 y 1952, Martín-Sánchez había impulsado los primeros grupos de estudio sobre normativa de prensa; grupos que volverán a deliberar sobre la materia a finales de 1960 (véase apartado siguiente). Además, a partir de 1964, el ya ex presidente de la ACN de P participará en todas las fases de elaboración de la Ley: tanto desde su puesto en el Consejo Nacional de Prensa, como, después, desde sus cargos de procurador y ponente de la Comisión de Información y Turismo de las Cortes, tratará de modificar el anteproyecto y el proyecto de ley. En el siguiente apartado comprobaremos hasta qué punto logró trasladar al articulado de la Ley la influencia que Fraga le atribuía. Se hace preciso, antes de ello, repasar esas ideas sobre prensa a las que se refería el ministro, y que bien pueden agruparse en dos ámbitos: aquellas que versan sobre la función de la prensa y el Estado; y aquellas referidas a la noción, función y regulación de la empresa periodística.

(a) *Funciones de la prensa y pertinencia de la intervención estatal*: Fernando Martín-Sánchez Juliá manifiesta una concepción de la prensa heredera de la que formulara, años antes, el Papa Pío XI. Si para éste la prensa ejerce la labor crucial de orientar o “fabricar” la opinión pública, para aquel, “el fin de un gran periódico es informar con verdad y orientar con acierto; teniendo por módulo de este acierto el bien común”¹⁶⁰. La prensa moderna cumple, pues, dos funciones cruciales: la de dirigir u orientar, y la de servir e informar. El orden de las funciones no es casual: ante el dilema de si una prevalece sobre la otra —esto es, si la prensa viene más a dirigir a la opinión pública o a servirla como reflejo—, concluye el propagandista que “incomparablemente más importante es la misión de dirigir la opinión que la de informarla y que la de servirla” (Martín-Sánchez, 1955: 57)¹⁶¹. En cualquier caso, la consecución de ambas

¹⁵⁹ Conviene matizar este elogio de Fraga por dos motivos: el ministro realiza esta afirmación en 1965, cuando la Ley aún se encuentra en pleno proceso de modificación y ni siquiera ha llegado a Cortes. Por otra parte, Fraga realiza la semblanza en el marco de un homenaje que se le brinda a Martín-Sánchez en Santander. Con todo, no parece que Fraga exagerara en absoluto la influencia del líder acenepista.

¹⁶⁰ “La prensa es una institución social moderna que necesita su carta institucional, sustantiva, íntegra y total”. Conferencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá recogida en el Boletín de la Asociación Nacional de Propagandistas (BANCdP), num. 694, 1 de enero de 1961. En AC de la AC de P.

¹⁶¹ La obra *La prensa en el Estado Moderno*, publicada en 1955, y en la que basamos en parte nuestro análisis sobre el pensamiento de Fernando Martín-Sánchez, se compone de las conferencias impartidas por el autor en los años cincuenta; es decir: inmediatamente después de que los propagandistas perdieran las competencias sobre prensa, y en un contexto de elaboración del proyecto de Ley de Bases de la Información que, sin embargo, Arias Salgado nunca llevaría a término (véase el siguiente apartado).

labores de orientación y servicio se encuentra sujeta al requisito de la independencia del periodista ante presiones de cualquier naturaleza:

Todo, pues [expone Martín-Sánchez], gira en torno a esto, que es la raíz del problema: que el periódico informe con verdad y oriente con acierto. Para conseguirlo, todos nuestros esfuerzos deben tender, y de hecho tienden, a colocar en condiciones óptimas y evitar asechanzas al hombre-periodista y a su mecanismo de trabajo, que es el periódico, la empresa periodística, la información (*op. cit.*: 11).

En ese “evitar asechanzas” al periodista se funda por tanto la libertad de prensa. Naturalmente, las presiones a las que se refiere Martín-Sánchez no proceden únicamente del Estado. Frente a las tesis liberales, el propagandista se alinea con la postura católica, favorable a la pertinencia de cierta intervención estatal, justificada por la “importancia política nacional” (*op. cit.*: 13) que reviste la prensa; y que impide, por ello, el que ésta permanezca al margen del Estado moderno, el cual “al fin y al cabo, como garantía y ejecutor del bien común, por muy malo que sea, siempre produce más bienes que causa daños y males” (*op. cit.*: 37). Si bien no excluye la posibilidad de la censura¹⁶², el Estado es para él, ante todo, el encargado de autorizar, luego de un análisis exhaustivo de los propósitos ideológicos originales del medio, la publicación. Se refiere pues Fernando Martín-Sánchez más bien a presiones procedentes de otros ámbitos:

[...] no es sólo [aduce] el Estado el que puede coartar la libertad periodística. Libre de la coacción inconveniente del Estado, sí; pero libre también de la coacción capitalista, libre también de la pasión partidista, libre también de la influencia extranjera perniciosa, libre también de tantas y tantas asechanzas [que] cercan al periodista (Martín-Sánchez, *op. cit.*: 36).

De todas ellas, es sin duda la “coacción capitalista” la que más le preocupa. Buena parte de las propuestas e ideas formuladas por el autor tratan de plantear una regulación concreta de la actividad de la empresa periodística, en un intento por garantizar la independencia del periodista frente a ella. “Podemos exigir [comentará en varias ocasiones a este respecto] que los periodistas sean hombres dignos, pero no podemos pedir que el padre de familia periodista sea héroe todas las noches” (*op. cit.*: 17). Merece la pena detenernos en la conceptualización que postula Martín-Sánchez sobre la empresa periodística y sobre la regulación a la que, en consecuencia, ésta debe someterse.

¹⁶² De hecho, el propagandista, aunque no se ocupa demasiado de la cuestión, no deja de mostrarse receloso ante una supresión total de la censura: “La más elemental prudencia [advierte] enseña que, así como no habría inconveniente en dejar sin censura multitud de informaciones (toros, teatros, deportes, etc.), la supresión de la censura no debería hacerse sin previa acción política y legislativa que asegurara las suficientes garantías” (Martín-Sánchez, *op. cit.*: 63).

(b) *Noción, función y regulación de la empresa periodística*: para Fernando Martín-Sánchez Juliá, la empresa periodística reviste una naturaleza muy distinta a la del resto de empresas mercantiles: a diferencia de éstas, la periodística se revela como una empresa con finalidad o trascendencia ideológica¹⁶³, por lo que adquieren un estatus especial que reclama una regulación especial correlativa. Ésta debe basarse en dos principios, dirigidos a garantizar la independencia del periodista: (a') el principio de *continuidad* y (b') el principio de *transparencia y publicidad*.

(a') Fernando Martín-Sánchez Juliá muestra una honda e insistente preocupación por la posibilidad de que la ideología fundacional de una publicación pueda verse desvirtuada, modificada o aun subvertida por la entrada de capital nuevo en la empresa. Tal y como él mismo reconoce, la posibilidad no es de ningún modo remota, dadas las crecientes necesidades de capital que arrastran las empresas periodísticas españolas de los años cincuenta y sesenta. Ello hace, además, que la fundación de un periódico se revele, en 1960, al alcance exclusivo de grandes capitales, que han de adoptar la forma jurídica de Sociedad Anónima. En este sentido, se hace necesario, según el acenepista, garantizar que los objetivos ideológicos, morales o políticos con que los fundadores pusieron en marcha la empresa no se vean alterados por la entrada de nuevos capitales. La continuidad de la ideología original del periódico se presenta no sólo como una garantía para los socios fundadores, sino también para el Estado, encargado de autorizar la publicación en base a dicha ideología original:

La libertad de fundar Empresas Periodísticas [...] [argumenta Martín-Sánchez en las enmiendas que presenta al anteproyecto de Ley de Prensa en 1964] ha de llevar consigo la libertad para perpetuar el espíritu fundacional con los medios jurídicos adecuados para mantenerla¹⁶⁴.

Propone para ello la creación de un nuevo tipo de forma jurídica exclusivo para las empresas periodísticas: la nueva sociedad se compondría de dos “equipos”, no sólo nítidamente diferenciados, sino aun en cierto modo enfrentados (en tanto ambos actuarían como contrapesos recíprocos), y en cualquier caso equipotentes y en igualdad de condiciones jurídicas: el “equipo de capital” se encargaría de impedir la entrada en el

¹⁶³ En realidad, se trata de dos categorías disímiles: las empresas con “finalidad ideológica” son aquellas constituidas con el objeto prioritario de propugnar y defender una ideología y unos criterios morales y políticos determinados. Y ello aún a costa de la obtención de beneficios, que no se concibe sino como un objetivo secundario, subordinado al anterior, y cuya importancia se circunscribe a la garantía de mantenimiento de la actividad propagandista que su consecución supone. En cambio, las empresas mercantiles “con trascendencia ideológica” se constituyen con el fin primordial de obtener beneficios, si bien su objeto social no deja de tener implicaciones ideológicas intrínsecas e insoslayables.

¹⁶⁴ Enmiendas al anteproyecto de Ley de prensa e imprenta presentadas por Martín-Sánchez el 8 de abril de 1964. En AGA, sig. (3) 49.21 c. 65136. En el siguiente apartado abordaremos en profundidad estas enmiendas.

capital social de socios extraños al espíritu fundacional del medio; mientras que al “equipo de pensamiento” se le encomendaría la preservación de la ideología original. Algo más adelante, Martín-Sánchez refinará su propuesta alumbrando la institución de la Junta de Fundadores, que no es, de todos modos, sino la institucionalización de aquel “equipo de pensamiento”. Se trata de un organismo encargado de defender la ideología fundacional del medio y de ejercer de contrapeso ideológico al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas.

La legislación española contemplaba ya, en cierto modo, este derecho de continuidad ideológica, que quedaba garantizado hasta cierto punto por la disposición transitoria duodécima de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951. Esta disposición permitía a las empresas periodísticas mantener órganos de gobierno corporativos encargados de velar por la pureza ideológica del periódico, aun a costa de una merma del poder de la Junta de Accionistas y de los administradores¹⁶⁵. Para Martín-Sánchez, sin embargo, la Ley resulta insuficiente:

Con la nueva ley de Sociedades Anónimas, cuando una de éstas de fines principalmente ideológicos vaya a ampliar su capital, tendrá, naturalmente, que pedirlo al mercado, sobre todo si son grandes cifras, por acciones al portador; como la ley de Sociedades Anónimas, incurriendo en contradicción grave con otra serie de postulados políticos vigentes, es extraordinariamente democrática en materia de acciones y votos, quienes compran títulos de las acciones de las ampliaciones de capital, y hasta pueden formarse grupos preparados para adquirirlos, fácilmente darán al traste con la perseverancia ideológica de cualquier empresa constituida con fines principalmente de defensa de determinados ideales, lo mismo en el cine, que en los periódicos que en la radio (Martín-Sánchez, 1955: 45)¹⁶⁶.

(b') El segundo principio que debía informar la regulación sobre prensa es el de publicidad y transparencia; de acuerdo con el cual, la empresa periodística, en virtud de su finalidad o trascendencia ideológica, debe identificar de forma exhaustiva y publicitar a sus dueños y promotores. Una vez más, la garantía para con los lectores es, al tiempo,

¹⁶⁵ Así reza la disposición transitoria 12 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951: “Las sociedades anónimas que, teniendo por objeto exclusivo o predominante, la edición de prensa periódica, tengan establecido en sus Estatutos con un año de antelación, al menos, a la presente Ley, el funcionamiento de un órgano distinto de la Junta general y del Consejo de Administración especialmente encargado de velar por los fines ideológicos a que haya respondido la fundación de la sociedad, podrán conservar ese órgano social en la forma prevenida en sus Estatutos, aunque las facultades conferidas al mismo impliquen una merma de las que en la presente Ley se confieren a las Juntas generales y a los administradores”.

Más adelante volveremos sobre la Ley de Sociedades Anónimas y sobre esta disposición transitoria.

¹⁶⁶ Con todo, Martín-Sánchez fue, al parecer, uno de los impulsores de la disposición duodécima de la Ley de S.A. de 1951; disposición en la que se consagraba el principio de continuidad ideológica a través de un órgano de gobierno corporativo *ad hoc*.

una garantía para con el Estado, obligado a conocer la estructura de propiedad del medio:

El Estado [aduce Martín-Sánchez], como representante del bien común, debe conocer, obligando a que las Sociedades Anónimas sean por acciones nominativas, a que se publiquen quiénes son los propietarios de las mismas, los administradores de la sociedad, los directores de sus producciones, etc. Ni al Estado ni al pueblo ha de ser indiferente el origen del capital que maneja armas tan incisivas sobre la conciencia pública (Martín-Sánchez, 1955: 69-70).

Tanto el principio de continuidad —garantizado por la Junta de Fundadores— como el de transparencia y publicidad —cristalizado en la identificación de los propietarios y rectores de la empresa— encuentran una traducción nítida en las propuestas normativas formuladas por el propagandista. Más adelante nos ocuparemos de las enmiendas que Fernando Martín-Sánchez plantea al anteproyecto y al proyecto de Ley de Prensa. Unos años antes, sin embargo, en 1957 y en 1961, había ya presentado dos propuestas completas de regulación del sistema. En 1957 plantea en el Congreso Nacional de Prensa celebrado en Palma de Mallorca cuatro bases esenciales para una futura regulación (Martín-Sánchez, 1955):

(1) En la base primera se consagra el principio de publicidad para con la Administración, al obligar al fundador de la empresa —sea persona física o jurídica— a presentar una relación exhaustiva del propósito que anima la fundación, de los títulos y características de los periódicos fundados, de los fundadores, de la forma jurídica adoptada, del capital disponible, de los estatutos sociales, de la composición del Consejo de Administración y el Consejo de Redacción, de los propósitos e ideología de la empresa, y de su domicilio.

(2) La base segunda fija la potestad administrativa de admitir o negar el permiso de publicación a la empresa. Toda la información anterior debería ser depositada en el MIT y publicada en el BOE; de modo que la Administración, que se reservaría la potestad de recusar personas y exigir modificaciones, pueda dar o negar su plácet en un periodo fijado. En caso de negación, Martín-Sánchez contempla la posibilidad de recurso.

(3) La base tercera trata de ahondar aún más en el principio de transparencia, en este caso para con los lectores: obliga a la publicación a consignar sus datos fundacionales en sus tres primeros números. Además, la publicación debe informar, tanto al MIT como a sus lectores, de toda transferencia de acciones que implique al 10% o más del capital social.

(4) Por último, la base cuarta da forma al principio de continuidad, al promover la promulgación de un Estatuto de la empresa periodística¹⁶⁷ en el que se constituya *ex novo* un tipo de sociedad mercantil específico para las empresas propietarias de diarios y semanarios. Ésta sociedad deberá reunir dos características: estar compuesta por acciones nominativas (cada una de las cuales da derecho a un voto), y disponer de un Consejo de Redacción con un tercio de los votos de la Junta General de Accionistas (aunque sin derechos económicos).

Es este último punto, referido a la continuidad ideológica, el que Fernando Martín-Sánchez más afina en su nueva propuesta reguladora de 1961¹⁶⁸. En ella, el propagandista conmina a todas las empresas periodísticas a crear, en el plazo de tres años, órganos de gobierno corporativo encargados de velar por la pureza ideológica de sus medios. Para ello, propone dos vías: (1) constituir un Consejo de Fundadores integrado por accionistas y redactores “que encarnen el espíritu fundacional del periódico”; ellos nombrarían al Consejo de Administración y al Consejo de Redacción, que han de designar, con el beneplácito del ministro, al director de la publicación. El Consejo de Fundadores contaría, además, con capacidad para resolver asuntos de ampliación de capital y traspaso de acciones. (2) O bien crear un Consejo de Redacción que atesore un tercio de los votos de la Junta General de Accionistas y que desempeñe su labor junto al Consejo de Administración. En caso de desacuerdo entre ambos consejos, sería la Junta de Accionistas la encargada de resolver el contencioso.

Por supuesto, Fernando Martín-Sánchez Juliá es perfectamente consciente de las repercusiones que esta merma de poder supondría para los accionistas. La respuesta que da, en este sentido, a quienes critican la retracción de la inversión que esta regulación conllevaría resulta muy reveladora de sus intenciones:

Estoy conforme [admite] con que acaso se funden menos periódicos que los que se han fundado ahora en un régimen capitalista de sociedades anónimas, sin especial constitución, sin vigilancia y sin fiscalización; pero me parece un bien y no un mal que se funden pocos periódicos para que éstos sean buenos y merezcan ser orientadores de pueblos¹⁶⁹.

Considera Martín-Sánchez que la nueva regulación atraerá a “grandes instituciones nacionales” (las únicas que cuentan con el capital social necesario) al sistema de prensa. Se revela de este modo la verdadera intención de su modelo: sus principios de publicidad

¹⁶⁷ En ese mismo Consejo Nacional de Prensa, como veremos en el siguiente punto, Gabriel Arias Salgado, a la sazón ministro de Información y Turismo, asegura estar trabajando en la elaboración de dicho Estatuto de la Empresa que, sin embargo, nunca verá la luz.

¹⁶⁸ Conferencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá recogida en BANCdP, num. 694, 1 de enero de 1961. En AC de la AC de P.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

y, sobre todo, continuidad, se dirigen, no sólo a garantizar la transparencia y la permanencia de la ideología original del medio, sino, ante todo, a circunscribir la fundación de nuevas publicaciones a aquellas “grandes instituciones nacionales” (la Iglesia, el Movimiento, etc.) con grandes cantidades de capital disponible, no sujetas a variaciones ideológicas substanciales e integradas plenamente en el régimen franquista:

Puesto que los grandes periódicos [profetiza el autor] no pueden fundarse sin aportaciones importantes de capital [...] es probable, es racional pensar que en la sociedad futura sólo podrán poseer grandes periódicos grupos sociales de importancia económica y pública, como los sindicatos, los grupos políticos, los grupos financieros, los complejos bancarios. Y también la jerarquía católica, las congregaciones religiosas, los institutos seculares. Es decir, que sólo instituciones permanentes o duraderas que puedan mantener perdurablemente sus ideales adaptados a las circunstancias, pero inmutables en su esencia y que además dispongan de medios económicos, serán las editoras de los grandes diarios y con ellos las orientadoras del pueblo en que vivan. Todo lo estimo como un bien y un bien grande; no como un mal¹⁷⁰.

Tras el plausible principio de transparencia o publicidad, así como del de continuidad y de las propuestas normativas que de ellos dimanaban, no se esconde, pues, sino la intención subrepticia de restringir la publicación a grupos económicamente potentes e ideológica y políticamente icócuos para el Régimen.

3.2.3 La revista Ecclesia y los círculos de estudio de la ACN de P: el Borrador de Proyecto de Estatuto de Prensa

Estas nociones básicas postuladas por las figuras más influyentes de la ACN de P han de ser completadas con el pensamiento de otros propagandistas, sin duda tampoco carentes de poder, e integrados en el sistema de prensa franquista. Ellos son quienes, a partir del marco básico fijado por Ángel Herrera Oria y Fernando Martín-Sánchez Juliá, substanciaron las discusiones mantenidas por los Círculos de Estudios propagandistas a principios de los cincuenta y principios de los sesenta; discusiones que nutrieron y perfilaron la propuesta de regulación del sistema de prensa presentada por la ACN de P al Régimen en 1961, y en la que queda definida la doctrina esencial de la “familia” acenepista en materia de prensa.

Entre 1951 y 1952, el Círculo de Estudios organizado por la ACN de P madrileña albergó un ciclo de debates y conferencias titulado “Estructura ideal de una Ley de Prensa”. En él, tres disertaciones acometieron la tarea de establecer los principios

¹⁷⁰ *Ibidem*.

morales, políticos y económicos que debían informar una futura ley de prensa, cuyo proyecto, encomendado por el cardenal y primado Pla y Deniel a la Junta Nacional de Prensa Católica, había de estar listo para febrero de 1952 (Tusell, 1984: 346-347). La llegada de Arias Salgado al MIT abortará, sin embargo, cualquier posibilidad de un cambio inminente en la normativa. A pesar del fracaso del proyecto, no dejan de resultar de gran valor los documentos emanados del ciclo de conferencias católico; a cargo de Jesús Iribarren, Enrique Giménez Arnau y Mariano Rioja, respectivamente, las tres conferencias fueron publicadas por el boletín de la Asociación en agosto de 1952¹⁷¹. Tal y como luego veremos, buena parte de las nociones en ellas planteadas acabaron por trasladarse a la propuesta de ordenación jurídica del sistema de prensa presentada por la Asociación diez años después.

En primer lugar, se encargó Jesús Iribarren, director de la revista *Ecclesia*, de presentar los *principios morales* que habían de inspirar la nueva Ley de Prensa; principios que cabe resumir en estos tres: estatus especial para las publicaciones de la Iglesia, legitimidad de una censura “sensata” e ilegitimidad de las consignas. El sacerdote distingue entre principios de moral natural y principios de moral positiva. Dentro de esta última categoría, Iribarren diferencia entre aquellos principios que dimanen de la condición de súbditos de la Iglesia, y aquellos que proceden de la condición de súbditos de la autoridad civil. En tanto súbditos de la Iglesia, ésta queda facultada para publicar prensa religiosa ajena a todo control y censura, y prensa de información general sujeta a controles estatales “indirectos”. Además, queda justificada su labor censora, incluso de la prensa estatal¹⁷². En cuanto súbditos, por otra parte, de la autoridad civil o del Estado, queda éste legitimado para ejercer una censura “sensata”, justificada mediante la

¹⁷¹ BACNdP, num. 503, 1 de agosto de 1952. En AC de la AC de P. Todas las citas que se ofrecen a continuación (a excepción de las extraídas de la revista *Ecclesia*, que quedan debidamente referenciadas) corresponden a este número del boletín.

La Asociación aclara en el boletín que las ideas vertidas por los autores en las conferencias no constituyen la postura oficial de los asociados; si bien hay que matizar la aclaración teniendo en cuenta la importancia y peso de los conferenciantes en la ACN de P, la publicación de las conferencias en el boletín oficial y la influencia que todas ellas tuvieron en la elaboración de la propuesta de regulación de prensa.

¹⁷² “Los españoles [alega Iribarren] somos súbditos y estamos sujetos a la ley de dos sociedades perfectas: Iglesia y Estado. La Iglesia, abstraído su origen divino, tendría derecho, como cualquier otra persona física o moral, a publicar periódicos de índole informativa general, los cuales estarían sujetos en cuanto tales y por razón del bien común temporal, en la misma medida que deben estarlo los otros periódicos, a la autoridad civil. En realidad tiene derecho, por mandato y autoridad especial de su Fundador y en cuanto sociedad perfecta, a prensa específicamente religiosa no sujeta a control alguno del Estado; y de nuevo, por razón de las implicaciones filosóficas y religiosas de la vida intelectual, política, etc., a prensa de carácter informativo general o a publicaciones de cualquier especialidad en el campo de la cultura humana; éstas sí, sujetas ‘indirectamente’ al control estatal.

Por otra parte, a la Iglesia se ha confiado con carácter exclusivo y supraestatal la guarda de la religión verdadera y de la moral positiva divina; de donde se sigue un poder de control de la Iglesia sobre la prensa del Estado”.

paradoja de la necesaria restricción de ciertas libertades en virtud de la consecución de la auténtica libertad y la civilización¹⁷³. Por el contrario, rechaza Iribarren las consignas, fruto, según dice, de una concepción totalitaria del Estado: “No encuentro [sentencia] justificación moral al régimen de consignas obligatorias. La Ley de prensa debe establecer su ilegitimidad”.

Estos tres ejes morales sobre los que habría de gravitar la futura regulación de la prensa serán reiterados a lo largo de los años cincuenta por Jesús Iribarren desde la revista *Ecclesia*, órgano de expresión de Acción Católica exento de censura desde 1944. *Ecclesia* —fundada en 1940 a iniciativa del cardenal y primado de España Isidro Gomá, quien le había encomendado el proyecto a la Dirección Central de la Acción Católica (Montero, 1991:426)— se erigirá en una plataforma de expresión tan eficaz para la “familia” acenepista como molesta para la dictadura: desde sus páginas se insistirá en demandar al Gobierno una nueva ley de prensa que regulara y restringiera la censura y que acabara definitivamente con las consignas. Así, en mayo de 1954, Jesús Iribarren afirma en sus páginas que “la censura tiene muchos más inconvenientes que ventajas”¹⁷⁴ además de criticar el “periodismo dirigido”¹⁷⁵, pues “deja la iniciativa en manos ajenas y se considera dispensado de discurrir y juzgar, porque ya le dirán por consigna lo que tiene que comunicar u ocultar a sus abonados”. Finalmente, en este mismo artículo, sentencia: “Endeble debe ser un catolicismo y quebradiza una unidad que tiene que protegerse día por día con el guión del comentario impuesto y la orden del silencio obligatorio”. En realidad, el tono del artículo de Iribarren resulta más duro y explícito que el habitualmente empleado por *Ecclesia* en sus editoriales (probablemente escritos, por lo demás, por el propio Iribarren). Suele defenderse en éstos una concepción de la prensa —entendida como “institución social sometida al supremo imperativo del bien común”¹⁷⁶— muy poco alejada de la oficializada por Gabriel Arias Salgado. De ahí que la revista no cuestione la legitimidad de la censura —aunque reconozca sus inconvenientes y abogue por un uso de la misma limitado a “medidas de excepción” y

¹⁷³ “La legitimidad [argumenta Iribarren] de la conducta de la Iglesia en materia de restricción de la libertad de prensa hay que buscarla [...] dentro de las normas generales de un gobierno humano que restringen la libertad de sus súbditos para buscar el bien común hasta por el medio de evitar el mal particular [...] En último término, toda la civilización no es sino una restricción de las libertades para hacer posible la libertad”.

¹⁷⁴ “Reflexiones de un participante”, en *Ecclesia*, num. 670, mayo de 1954. Iribarren escribe el artículo a su regreso del IV Congreso Internacional de la Prensa Católica celebrado en París en mayo de 1954.

¹⁷⁵ Este “periodismo dirigido” al que se refiere Iribarren es una alusión evidente a la “prensa dirigida” teorizada por la doctrina falangista (Cf. Beneyto, 1944: 23-24); y una alusión velada a la “prensa orientada”, defendida en esos años, como enseguida veremos, por el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado.

¹⁷⁶ *Ecclesia*, num. 704, enero de 1955.

“siempre que no sea arbitraria”¹⁷⁷ — y defienda la existencia de sanciones y castigos severos¹⁷⁸. Las divergencias manifestadas en la publicación con la doctrina oficial se refieren más bien a tres cuestiones, más accesorias que substanciales: (a) la urgente necesidad de una nueva ley¹⁷⁹, que Arias Salgado, sin embargo (como enseguida comprobaremos), no parecía tener prisa por impulsar; (b) la permisión de la crítica a la acción del gobierno, siempre y cuando no atente contra el bien común¹⁸⁰; y (c) el rechazo taxativo de las consignas bajo cualquier circunstancia.

En otra conferencia, acometía Enrique Giménez Arnau, antiguo director General de Prensa durante el periodo falangista, la definición de los *principios políticos* que habían de informar la futura ley. Una vez más, la postura católica se sitúa, en este punto, a medio camino entre el totalitarismo y el liberalismo¹⁸¹. Tras rechazar por incompleta la Ley de 1938 (redactada, por cierto, por su hermano José Antonio, quien según el parecer de Enrique no estableció en ella garantías contra su aplicación “patológica”) y abogar por una nueva ley “realista”, fija los tres principios políticos que han de inspirarla; a saber, (a) El derecho del Estado, en tanto servidor y garante del bien común, a intervenir en el sistema de prensa; lo que le confiere potestades de control e intervención en materias técnicas, económicas¹⁸², formativas y laborales. (b) Las potestades estatales preventivas y represivas contra los delitos que se cometan por medio de la prensa; a pesar de lo cual, considera urgente Giménez Arnau la supresión de la censura previa. Y (c) la necesidad de establecer mecanismos de (auto) limitación del poder estatal, que prevengan contra la arbitrariedad en la aplicación de la ley y fijen la responsabilidad civil de la Administración.

¹⁷⁷ *Ecclesia*, *ibídem*.

¹⁷⁸ “Jamás hemos pedido libertad a secas, sino ley que prevenga y castigue abusos, pero reconociendo y tutelando los correspondientes derechos” (*Ecclesia*, num. 932, mayo de 1959). En diciembre de ese mismo año, otro editorial de la revista corrobora: “Entre libertinaje y control o consignas, cabe la Ley, que tutela derechos y castiga desafueros, ofreciendo a la sociedad una firme garantía de respeto y de servicio por parte de dos poderes a los que está sometida: el de las autoridades y el de los órganos de opinión” (*Ecclesia*, num. 963, diciembre de 1959).

¹⁷⁹ Así lo reclama *Ecclesia* en muchos de sus editoriales a lo largo de los cincuenta. En 1959 (num. 932, de mayo), por ejemplo, exclama: “Es un cambio efectivo en la situación de la prensa española lo que, con el mayor respeto y comprensión para el Poder constituido, estimamos ser sumamente conveniente para España”.

¹⁸⁰ “Si la auténtica opinión pública ha de gozar de libertad para desarrollarse, la prensa que la refleje deberá compartir idéntico derecho siempre que no atente contra el bien común, no forzosamente coincidente con el parecer del Gobierno” (*Ecclesia*, num. 704, enero de 1955).

¹⁸¹ “[...] insistiré [afirma Giménez Arnau] en que rechazar con apasionamiento (aunque sea con la mayor buena fe) todo lo que huela a totalitarismo, puede llevar a convertirnos en defensores de un liberalismo rotundamente condenado, fracasado o trasnochado como remedio para los problemas políticos contemporáneos”.

¹⁸² Entre otras cosas, “evitando que la empresa pueda estar explotada, subvencionada o dirigida por empresas antinacionales, por extranjeros o por representantes de otras potencias”.

Por último, Mariano Rioja, administrador de la Editorial Católica, se ocupa en su conferencia de enunciar los *principios económicos* básicos que debieren constar en la futura ley de prensa. Todos ellos se encuentran, en cualquier caso, subordinados a los principios políticos y morales antedichos y, sobre todo, a la premisa fundamental que ya formulara Martín-Sánchez de independencia periodística, tanto del Estado como del capital. Una vez más, se advierte esa peculiar “tercera vía”, ni totalitaria ni liberal, del acenepismo:

La economía [aduce Rioja] no es ciencia de fines, sino de medios. Por lo primero, lejos de imponer las normas fundamentales de una actuación política, ha de actuar siempre subordinada a principios morales y políticos de rango superior. Por lo segundo, aporta medios que son necesarios para la consecución práctica de los principios políticos. Así, un primer principio moral y político es el de la independencia de la prensa: independencia frente al estado, necesaria si no queremos incurrir en una concepción totalitaria, e independencia frente a las grandes concentraciones capitalistas si no queremos caer en los defectos del Estado liberal.

Mariano Rioja se muestra preocupado por tres cuestiones ligadas a la financiación de la empresa periodística: la alteración que la entrada de nuevos capitales pudiera suponer para la línea editorial del medio; las trabas del Gobierno a la obtención de capital por la empresa; y la necesidad de ésta de compensaciones por la fijación del precio político de venta de cada ejemplar. Todas ellas serán objeto de discusión durante la elaboración de la Ley Fraga.

(a) La primera de ellas coincide plenamente con la expresada por Fernando Martín-Sánchez Juliá: considera Rioja que las empresas se ven cada vez más acuciadas por la necesidad de capital dado el alza de salarios (lo que exige mayor disponibilidad de capital circulante); del precio de la maquinaria y otros asientos del capital fijo, que impide que las amortizaciones del precio primitivo sean suficientes para su renovación; y dada, en fin, la natural necesidad de desarrollo de la empresa. Para hacer frente a todo ello, ésta se ve obligada a recurrir al mercado de renta variable, y sobre todo, al mercado de renta fija, si bien el acceso a éste último se encuentra restringido por la Ley de Sociedades Anónimas, que impide que las obligaciones u otros títulos que creen o reconozcan deuda sean superiores al capital social desembolsado¹⁸³:

Dado por supuesto [deduce Rioja] que cualquier empresa periodística necesita o ha de necesitar en breve plazo, una aportación financiera muy superior a su capital actual, y teniendo también en cuenta que muchas de ellas pueden ya tener obligaciones en circulación, nos resulta que la prensa española o queda más anticuada de lo que está,

¹⁸³ Salvo que estén avalados por hipoteca, por prenda de efectos públicos o por el Estado. Véase Ley de 17 de julio de 1951, de Sociedades Anónimas (BOE de 18 de julio).

sin posibilidad alguna de mejoramiento o desarrollo, que es tanto como ir a una muerte cierta, o ha de ser apoyada con aportaciones de capital de aquellos elementos que sean afines a los ideales que defienden, sin que sea posible otro medio de financiación.

Para Rioja, sin embargo, esta última solución, consagrada en la disposición transitoria duodécima de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, es insuficiente, pues entre otras cosas, resulta efectiva únicamente para aquellas empresas que ya tuvieran constituidos los órganos de defensa ideológica con un año de antelación a la aprobación de la Ley. Frente a estas insuficiencias, propone Rioja una nueva regulación articulada en torno al principio de:

Ni prensa ultracapitalista, ni prensa limosnera: como norma general, ni limosnas ni aportaciones a fondo perdido. Quien aporte un capital debe percibir una retribución, no alta —que sería un estímulo a la especulación—, pero tampoco inferior al interés legal del dinero.

(b) El segundo problema financiero de las empresas periodísticas radica en las trabas gubernamentales. Reclama Rioja que el Estado no quede exento del pago por la inserción de las notas oficiales en las publicaciones (más allá de casos excepcionales); además de una regulación que acabe con la discriminación del Estado entre publicaciones a cuenta de dichas inserciones de publicidad oficial.

(c) En tercer lugar, aboga por el mantenimiento del sistema de “compensación” estatal para la prensa a cambio de la fijación de un precio político de venta para la publicación. Para Mariano Rioja, las subvenciones estatales a la compra de papel prensa (forma básica de compensación estatal que, como veremos, desarrolló el franquismo), necesarias para conciliar precios bajos que garanticen el acceso generalizado a la prensa y la supervivencia económica de ésta, no parecen contradecir el rechazo que antes expresaba a la “prensa limosnera”¹⁸⁴.

¹⁸⁴ “La prensa [aduce] [...] tiene una función social que cumplir, y esta función exige, dada la elasticidad de la curva de demanda de los periódicos, que el poder público se ocupe de que el precio de venta de aquéllos sea lo suficientemente bajo para que la prensa adquiriera la difusión que requiere su función referida. Puede ocurrir, y de hecho ocurre en muchos países, que por existir competencia perfecta en el mercado de prensa y trabajarse con costos bajos, el estado puede inhibirse en la fijación de los precios de los periódicos, sin que por ello éstos alcancen una cuantía que impida el cumplimiento de la función pública a que hemos aludido. Pero si el mercado es monopolístico u oligopolístico —y es, por lo general, de una de estas naturalezas el de prensa en España—, el Estado deberá fijar el precio de venta, o, al menos, determinar su límite máximo. Ahora bien: si este precio establecido por el Estado en un mercado de competencia imperfecta no se corresponde con los costos de producción o si el precio formado en una competencia perfecta es superior al que debe regir según un criterio político, el poder público deberá establecer una protección económica a la prensa, protección que, según los casos, podrá consistir en el establecimiento de una prima sobre el papel que se consuma; en exenciones tributarias, que, por cierto, fueron tradicionales en España respecto a la prensa hasta diciembre de 1940, en que fueron suprimidas, o en cualquier otro medio”.

A finales de 1960, la ACN de P celebró un segundo ciclo de conferencias titulado “Regulación jurídica de la prensa a la luz del pensamiento católico”. Las intervenciones más relevantes, que venían a completar los principios morales, políticos y económicos enunciados a principios de los cincuenta, fueron también publicadas en el BACNdP entre octubre de 1960 y enero de 1961. La importancia de los conferenciantes —buena parte de los cuales participará en la comisión de Cortes encargada de debatir y enmendar la Ley de Prensa de 1966— justifica una breve referencia a las ideas por ellos expresadas.

En primer lugar, el director del diario *Ya*, Aquilino Morcillo, tras realizar un análisis comparado de los sistemas de prensa europeos y estadounidense llegaba a la conclusión de que “el régimen de prensa está en función del régimen político, y uno y otro deben responder a la idiosincrasia nacional”¹⁸⁵. El catedrático Luis Sánchez Agesta, por su parte, abogaba en su conferencia por una apertura paulatina del régimen de prensa (apertura que recuerda a la estrategia que, como vimos, seguirá Fraga durante los primeros años de su ministerio):

[...] no habría que pensar [propone Sánchez Agesta] en un régimen de prensa, sino en diversos regímenes escalonados, que tantearan la posibilidad experimental de esa libertad [...] Es necesaria una realización evolutiva y experimental que cree progresivamente las condiciones más idóneas¹⁸⁶.

El catedrático de estética de la Universidad de Madrid y director de la Biblioteca de Autores Cristianos¹⁸⁷, José María Sánchez Muniain, realiza en su conferencia una justificación velada de la censura de toda información que, sea o no verdadera, no se dirija a la consecución del bien común. Si todo régimen jurídico de información, argumenta Sánchez Muniain, más que consagrar un derecho viene a proteger el deber de “hacer *bien* a nuestros prójimos por amor de Dios” [el subrayado es nuestro], entonces

La libertad de información sólo puede extenderse a las verdades que son noticia, es decir, a las verdades de dominio público. Y sólo caen bajo el dominio público las honestas, útiles y fruibles, aunque a veces se refieran, claro está, a hechos en sí mismos perversos. Ahora bien señores: estos atributos ‘honesto’, ‘útil’, ‘deleitable’, no pertenecen propiamente a la verdad, sino al ‘bien’. Luego la verdad sólo es lícita bajo razón de bien. Por ello, insisto, una información puede ser veraz, pero ilícita y perversa. Y el que la difunde puede ser insensato o difamador, o incluso traidor, aunque no mienta¹⁸⁸.

¹⁸⁵ BACNdP, num. 689, octubre de 1960. En AC de la AC de P.

¹⁸⁶ BANCdP, num. 691, 15 de noviembre de 1960. En AC de la AC de P.

¹⁸⁷ Editorial y catálogo de obras cristianas propiedad de la Editorial Católica y, por tanto, de la ACN de P.

¹⁸⁸ BANCdP, num. 692, 1 de diciembre de 1960. En AC de la AC de P.

Muy similar resulta el alegato a favor de una censura limitada pronunciado por el abogado y periodista José Luis Gutiérrez García en otra conferencia. Para Gutiérrez García, la censura —que, según su opinión, “no planta trigo, pero corta la cizaña”—, en tanto se revela como una de las potestades de la autoridad, queda condicionada y aun exigida por el “bien común”; de lo que se sigue la imposibilidad del Estado de renunciar a su ejercicio, pues constituye para él, de hecho, en tanto garante del bien común, una obligación. Defiende de todos modos el periodista, en la línea trazada por Sánchez Agesta, una limitación gradual de la censura acompañada a la adquisición progresiva de madurez política por parte de la ciudadanía: “Libertad vigilada [concluye] por una razonable censura limitada legislativamente, sí; libertad ahogada por una censura ilimitada en manos del Estado, no”¹⁸⁹. El argumento de la inmadurez de la población española para gozar de una prensa libre subyace también a las palabras de Jaime Guasp, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Para Guasp, la puerilidad de los españoles en materia política justifica el mantenimiento de la censura previa: “mientras en España [advierde] no exista desarrollado un auténtico sentido de la responsabilidad, habremos de aceptar, cultivar y mantener, e incluso fortificar, el sistema de censura previa en materia de prensa como en cualquier otra parte”. El catedrático, además, defiende la complementación de dicho sistema por un control a posteriori ejercido por los tribunales y no por la Administración: es lo que denomina la “judicialización” del control *ex post* del sistema de prensa, acorde a la doctrina pontificia de “poner bajo la tutela judicial cualquier clase de relaciones entre la Autoridad y el súbdito”. Con respecto al dilema de si dicha “judicialización” debe realizarse mediante tribunales ordinarios o tribunales especiales de prensa, Guasp defiende —al contrario, por cierto, de Ángel Herrera Oria— lo primero:

yo sostengo la tesis [expone] de que los tribunales especiales, por razones materiales, son fruto de una posición arcaica y jurídicamente no progresiva, y que, por consiguiente, en materia de prensa no debemos idear tribunales especiales, sino encomendar a los tribunales ordinarios los problemas que en materia de prensa se puedan presentar¹⁹⁰.

Todas estas ideas sirvieron de base en 1961 para la elaboración de un *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, en el que esbozaba la ACN de P una propuesta reguladora de la materia¹⁹¹; con él pretende configurarse un sistema orientado a

¹⁸⁹ BANCdP, num. 693, 15 de diciembre de 1960. En AC de la AC de P.

¹⁹⁰ BANCdP, num. 695, 15 de enero de 1961. En AC de la AC de P.

¹⁹¹ *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, en AC de la AC de P. Véase Anexo III. A pesar de que la ACN de P insiste en que no se trata de la postura oficial del centro propagandista de Madrid, ni de la Asociación, lo cierto es que el texto constituye una propuesta unitaria y

Concebir la prensa *como institución social al servicio de la opinión pública*; transformar el sistema de propiedad de los periódicos de modo que en todo momento pueda así, el público, como la autoridad, conocer a quién pertenecen; dar a la redacción de los diarios garantías de independencia contra cualquier intento de presión, venga de fuera o de dentro de la propia empresa; salvaguardar los fueros de la autoridad, no sólo en los casos extraordinarios en que puede imponerse la censura gubernativa por decreto, sino también estableciendo un sistema normal de previa censura para aquellas materias que en la propia ley se determinan; y, en fin, establecer un nuevo sistema de exacción de responsabilidades por vía judicial [el subrayado es nuestro]¹⁹².

Naturalmente, esta propuesta de norma reguladora de la prensa no se nutría únicamente de nociones formuladas en el ciclo de conferencias de finales de los sesenta; venía a recoger, antes bien, todo un acervo doctrinal que arrancaba en 1933 con las propuestas de Ángel Herrera Oria. Tal *corpus* doctrinal, fruto de casi treinta años de reflexión, puede sintetizarse en los siguientes puntos, cada uno de los cuales encuentra su reflejo en normas positivas propuestas por la ACN de P en su *Borrador de un Proyecto de Estatuto de la Prensa*:

(a) *La prensa se concibe como una institución social al servicio del bien común*. Por lo que es vista como un instrumento de la sociedad al servicio de la opinión pública (y no del Estado); servicio que ejerce informando con verdad (lo que incluye la crítica al Gobierno, siempre que no colisione con el bien común) y orientando con acierto. Para dar cumplimiento a estos mandatos es *condictio sine qua non* la independencia del periodista de las presiones o “asechanzas” de toda naturaleza; y, sobre todo, de aquellas procedentes del Estado y del capital. Se sitúa así la “familia” acenepista en una posición intermedia entre el totalitarismo o estatismo y el liberalismo.

En su artículo primero, el *Proyecto de Estatuto de Prensa* propagandista establece, efectivamente, como misión de la prensa:

Servir a la opinión pública mediante una doble función informativa y orientadora; actuar de portavoz de los intereses generales de la sociedad y como órgano de comunicación entre ésta y los poderes públicos; [y] estimular la acción del Poder público en orden al bien común y ejercer una función fiscalizadora de la obra de gobiernos y administración.

Mientras que en el artículo segundo fija con claridad que “en el desempeño de su misión, la prensa gozará de libertad”. Consecuentemente, se fija la responsabilidad “solidaria” del director y la empresa sobre el contenido del periódico (art. 22). Éste no podrá atentar

coherente con todas opiniones expresadas aquí por los propagandistas, incluidos Martín-Sánchez y Herrera Oria.

¹⁹² Preámbulo al *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*. En AC de la AC de P.

contra los principios fundamentales de la Ley de 17 de mayo de 1958¹⁹³; contra la Jefatura del Estado y su persona; contra la Iglesia Católica, sus dogmas y su moral, el Papa y los obispos; ni contra el Consejo del Reino, las Cortes, el Gobierno, el Ejército, la Administración de Justicia y la fuerza pública (art. 10). Por lo demás, quedan prohibidas en la prensa la apología de hechos delictivos y de instituciones o doctrinas prohibidos por las leyes, la descripción de hechos inmorales y el ataque a quienes ejercen la autoridad (a menos que quede probada la veracidad de las acusaciones) (art. 11).

(b) La prensa no es, pues, un instrumento del Estado, el cual, sin embargo, no deja de tener potestades legítimas sobre ella. *La prensa, en tanto se encuentra al servicio del bien común, no es ajena a la incumbencia del Estado, entendido como garante del bien común.* A él le corresponden, por tanto, varias atribuciones cruciales: (a') La autorización de la publicación en base a una evaluación previa de su ideología y solvencia económica (garantizada mediante la imposición de una caución); (b') el ejercicio de una censura limitada y debidamente regulada¹⁹⁴; (c') la protección económica de la empresa periodística concretada en la garantía de compensaciones económicas por la inserción de notas oficiales y por la fijación de precios políticos de venta de ejemplares¹⁹⁵; y (d') el control y la sanción judicial a través, no de los organismos gubernamentales, sino de tribunales, ya especiales, ya ordinarios. (e') Excluida de las potestades del Estado se encuentra, en cambio, la orientación ideológica o política de la publicación a través de las consignas, contempladas como una presión inadmisibles.

El juicio ideológico para conceder o no la autorización que realiza el Estado alcanza también, en el *Proyecto de Estatuto de Prensa* acenepista, a la figura del director, cuyo nombramiento puede ser recusado por el ministro de Información y Turismo “mediante escrito motivado que se funde en la falta de idoneidad del candidato a causa de su ideología [...] o de su conducta privada y pública” (art. 21). También es función del ministro garantizar la independencia de la prensa frente a presiones económicas (art. 25)¹⁹⁶. Al MIT le queda reservada además la potestad de imponer sanciones pecuniarias

¹⁹³ Se refiere a la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (BOE de 18 de mayo).

¹⁹⁴ Censura que puede alcanzar a las publicaciones de información general propiedad de la Iglesia, pero de ningún modo a las publicaciones eclesiásticas ocupadas de asuntos exclusivamente religiosos, tales como boletines diocesales y parroquiales, revistas sobre doctrina, etc.

¹⁹⁵ El artículo 16 del *Estatuto* propagandista plantea la necesidad de regular la extensión de las notas oficiales y establece el derecho de la publicación a negarse a su inserción cuando no sean de interés público (juicio que queda al arbitrio del periódico) o vayan contra la ideología del medio.

¹⁹⁶ “El ministro de Información podrá amonestar a los periódicos que realicen campañas en defensa de intereses privados, sean individuales o de grupo, contrarios, manifiestamente al bien común. Si no cesan en ellas, el ministro, previo acuerdo del Consejo de Ministros, podrá pasar el conocimiento del asunto a los tribunales.

De análogas facultades podrá usar contra los grupos de presión que, aisladamente o por medio de confabulaciones, pretendan obligar a los periódicos a actitudes, positivas o negativas, contrarias al bien común, y para reprimir la sujeción de las secciones críticas a intereses económicos que

(de hasta 10.000 pesetas) (art. 24), de secuestro de la publicación (art. 26) y de ejercicio de la censura previa, ya con carácter ordinario (arts. 13, 14 y 15), ya para contingencias extraordinarias (art. 12). Al control judicial le dedica el *Estatuto* también varios artículos: el decimoquinto establece que todas las disputas entre la prensa y el gabinete censor creado por el MIT las dirimen los tribunales; pueden estos actuar por iniciativa propia, a instancia del ministro o de diez compañeros de profesión (art. 27). Pueden imponer sanciones —siempre proporcionales a la gravedad de la infracción y a la situación económica de la empresa (art. 28)— que llegan, en los supuestos más graves, a la “destitución” y a la cancelación del nombre del registro oficial (art. 27). De ningún modo se admite la posibilidad de suspender las actividades de la empresa ni de imponerse su incautación o expropiación (art. 28). Finalmente, se opta por la creación de salas especializadas en materia de prensa dentro de las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona (art. 30); ante sus resoluciones se admite recurso de casación en vía ordinaria ante el Tribunal Supremo (art. 31).

(c) Por último, *dada la finalidad o trascendencia ideológica de su actividad, la empresa periodística presenta una naturaleza diferente a la del resto de empresas mercantiles*. Ello reclama, a su vez, una regulación específica de su actividad, que debe basarse en dos principios. El principio de publicidad o derecho del Estado y los lectores a conocer a los propietarios, administradores y empleados de la empresa. Y el principio de continuidad ideológica, llamado a satisfacer el derecho de los fundadores a mantener inalterada la ideología original de la publicación, a pesar de la entrada de capital nuevo en la empresa.

A dar cumplimiento a estos dos principios dedica el *Borrador de Estatuto de Prensa* acenepista hasta cinco artículos: en el cuarto se fija la obligación de publicar el prospecto fundacional en el BOE; además de establecer la obligatoriedad de que las acciones sean nominativas y de que la participación de capital extranjero sea minoritaria. El artículo quinto ofrece las dos posibilidades —Junta de Fundadores o Consejo de Redacción— de dotación de organismos encargados de velar por la continuidad ideológica del medio que proponía Martín-Sánchez en su propuesta legislativa. Se preceptúa, además, en el artículo sexto, la creación de un Registro Nacional de Propietarios de Periódicos, en el que ha consignarse toda variación de la composición accionarial que afecte a más del 10% del capital social. Toda esta información, además, le debe ser facilitada a los lectores (art. 7).

impidan su absoluta objetividad e independencia de juicio. Las empresas periodísticas coaccionadas por los representantes de intereses particulares podrán también poner los hechos en conocimiento de los tribunales, a cuya jurisdicción quedan aquéllos también sometidos”.

El MIT tiene, por último, derecho a conocer cómo cubren sus déficits la empresa y, en general, a realizar inspecciones bajo la condición del secreto profesional (art. 9).

3.3 La doctrina de Gabriel Arias Salgado

Gabriel Arias Salgado acomete, a su llegada en 1951 al recién creado Ministerio de Información y Turismo, la tarea de confeccionar una doctrina de la información y la prensa que sirviera de fundamento a una futura ley sobre la materia. Tal y como ha quedado explicado, el ministro entiende la doctrina como base de la ley positiva y orientación de su aplicación. En realidad, parece más bien que, tanto el nombramiento de Arias Salgado como su empresa doctrinal, no responden sino a una maniobra dirigida a ganar tiempo y a retrasar la aparición de una nueva ley de prensa que sustituyera a la norma de 1938. La entrada de Gabriel Arias Salgado al MIT —que paralizará el proyecto católico de ley impulsado por Pla y Deniel— parece suponer para el Régimen un respiro de al menos ocho años tras las presiones católicas de la segunda mitad de los cuarenta y principios de los cincuenta a favor de un nuevo marco legal; presiones que, de cualquier modo, no cesarán con la pérdida de las competencias político administrativas: tal y como acabamos de comprobar, además de los círculos de estudio de la ACN de P, la revista *Ecclesia* no dejará de llamar la atención sobre la necesidad de la pronta promulgación de una nueva ley de prensa¹⁹⁷. Toda esta labor de presión, reflexión y debate doctrinal se desarrollará, sin embargo, a partir de los años cincuenta. Se había recuperado entonces, con fuerzas renovadas, la demanda de una nueva legislación de prensa, aprovechando el impulso dado por el Papa a la cuestión en el III Congreso de la Prensa Católica celebrado en Roma. Durante el periodo anterior de gobierno de la prensa, Tomás Cerro Corrochano y Luis Ortiz habían dejado pasar la oportunidad de sentar las bases de un nuevo proyecto de ley. Es en esa carencia doctrinal —que el ministro no deja de reprochar a sus predecesores acenepistas— en la que funda Gabriel Arias Salgado su coartada para demorar al menos ocho años la elaboración de la nueva normativa:

Estamos, pues [reprocha el ministro], en lo que pudiéramos calificar de bases de partida para una recta concepción doctrinal de la información, tarea que era primordial y en la que hubiéramos agradecido a los hombres que se formaron durante varios años junto al doctor Herrera Oria, y que asumieron después responsabilidades de carácter público en materia de prensa, un saber doctrinal y legal, positivo y concreto, sobre la naturaleza de la empresa periodística, figura del director, consulta

¹⁹⁷ *Ecclesia*, num. 704, enero de 1955.

previa, orientaciones, objeto de la opinión pública, etc. (Arias Salgado, 1960: II29, III38)¹⁹⁸.

La demora en la elaboración normativa se extenderá al menos hasta 1959, cuando comienza a circular un borrador de anteproyecto de Ley de Bases de la Información, que nunca verá la luz. Más adelante nos detendremos en este anteproyecto nonato, en el que vienen a cristalizar buena parte de las concepciones doctrinales hasta ahora estudiadas (y sobre todo las de Arias Salgado). Antes, sin embargo, se hace preciso atender a las bases doctrinales o a la, según palabras del ministro, “teología de la información”, elaborada durante los años cincuenta y que influirá de modo decisivo en ese anteproyecto de Ley de Bases.

3.3.1 La “teología de la información” de Arias Salgado

Construye Gabriel Arias Salgado, “desde la atalaya de su fe” (*loc. cit.* 2.1.3) y armado con sus razonamientos escolásticos¹⁹⁹, un edificio doctrinal que explicaremos aquí a partir de tres cuestiones: su concepción de la información, de su objetivo y finalidad; el papel que concede al Estado en el sistema informativo; y la naturaleza de la regulación del sistema de información que, según el ministro, rige en España.

(a) *La prensa como institución nacional al servicio del bien común.* Es ésta la concepción fundamental que cimienta el corpus doctrinal del ministro. Para Arias, la información es parte integrante del bien común nacional. Su objetivo inmediato es contribuir a la educación popular²⁰⁰, no entendida como instrucción o transmisión de

¹⁹⁸ La doctrina del ministro quedó recogida en los tres volúmenes de *Textos de Doctrina y Política española de la Información*, publicados en 1960. El primero de los volúmenes incluye sus discursos y declaraciones; el segundo, su correspondencia; y el tercero compila una antología ordenada por materias de los textos anteriores. Con el fin de ofrecer referencias lo más exactas posible, se indicará entre paréntesis los volúmenes en que se encuentra la cita con sus páginas correspondientes, y en nota al pie el lugar en que fueron pronunciadas las palabras o publicadas por vez primera. Así por ejemplo, en esta primera cita, “II29 y III38” corresponden, respectivamente, a la página 29 del segundo volumen y a la 38 del tercero. El reproche de Arias Salgado se publicó originalmente en el semanario *El Español*, num. 231.

El semanario *El Español*, en cuyas páginas quedará plasmada la doctrina de Arias Salgado, había sido creado por iniciativa de la Vicesecretaría de Educación Popular, cuando ésta (y por tanto FET de las JONS) ostentaba las competencias en materia de prensa, a inicios de la década de los cuarenta. (Cf. Beneyto, 1944: 23).

¹⁹⁹ Y, al parecer, no sin la ayuda de algunos subordinados próximos, como Valentín Gutiérrez Durán (García Jiménez, 1980: 202).

²⁰⁰ Esta labor “educativa” de Arias Salgado parece corresponderse, aunque tras una nueva denominación eufemística, con la función “adoctrinadora” defendida por los falangistas. Incluso los teóricos de Falange habían sustituido el concepto de “adoctrinamiento” por el de “educación” a partir de los años cuarenta, lo que se había trasladado a la denominación de la Vicesecretaría adscrita al Movimiento con competencias en materia de prensa. Recuérdense, en este sentido, las palabras pronunciadas en 1944 por el entonces falangista Juan Beneyto anunciando que “la vieja tesis de la prensa como órgano independiente de la información puede considerarse caducada,

ciencia y cultura, sino como formación e información: se trata de “dar noticias, de ofrecer novedades, de poner en manos del pueblo no para que el pueblo las *aprenda*, sino para que el pueblo las enjuicie, las tenga en cuenta, las discuta y *opine* libremente sobre ellas [...]” (1960: III13). Con todo, el animar opiniones libres no es el objetivo primordial: la educación popular debe dirigirse, antes bien, a la generación de consensos que garanticen la “paz civil” u orden social:

Es obvio también que la Información y la paz civil están íntimamente relacionadas. Porque ¿qué es esa paz sino el fruto de la aquiescencia que gana en la inmensa mayoría de la población la orientación básica de un Estado y los modos de gestión y el tratamiento de los asuntos públicos? Un medio principal para ganar esta aquiescencia es la Información, tanto para oír como para hacerse oír en materias de interés público (*op. cit.*: I9, III14)²⁰¹.

Es, precisamente, ese orden social o “paz civil” el “bien común nacional” al que se refiere Arias Salgado; de modo que, si el objetivo de la información es la educación, su finalidad o misión específica es el bien común (*op. cit.*: I104²⁰², II72²⁰³; III33); entendido, por supuesto, no solamente como bien material, sino como bien moral (*op. cit.*: III32). De hecho, Arias Salgado asimila la búsqueda del bien a la búsqueda de la verdad, que sólo resulta lícita si se dirige, precisamente, a la consecución del bien. En este sentido, su tesis se asemeja a la defendida por Sánchez Muniain en su conferencia de principios de los sesenta (v. 3.2.3). Para Arias Salgado, la libertad queda sometida a la verdad, pues sólo puede haber libertad para lo bueno y verdadero:

La libertad de divulgación, pues, está también condicionada por el servicio y la sumisión a la verdad. *Toda la libertad para la verdad; ninguna libertad para el error*. Lo que aplicado al campo de la voluntad, que es la facultad humana para poder autodeterminarse, equivale a lo siguiente: la libertad es solamente para el bien. *Libertad de divulgación, por lo tanto, para lo bueno y verdadero; ninguna libertad para el error y el mal*” [los subrayados son nuestros] (*op. cit.*: I35)²⁰⁴.

(b) *El Estado como custodio supremo del bien común nacional*. De esta noción de la información se sigue la función del Estado para con ella. Éste se revela para Arias como un “bien” positivo, aunque instrumental y dirigido a alcanzar el bien común nacional:

porque realmente no existe una prensa puramente informativa. Por de pronto, el periódico, dada su influencia, no informa, sino que educa al informar” (*loc. cit.* 2.1.1.3).

²⁰¹ Discurso al primer Consejo Nacional de Prensa, en Alicante, 16 de diciembre de 1953.

²⁰² Discurso al cuarto Consejo Nacional de Prensa, Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1957.

²⁰³ Editorial del semanario *El Español*, num. 289. Arias se refiere aquí a su noción del “bien común” en el contexto de una polémica mantenida con Jesús Iribarren, director de *Ecclesia*.

²⁰⁴ Discurso al segundo Consejo Nacional de Prensa, en Barcelona, 12 de diciembre de 1954. Cf. con Arias Salgado, *op. cit.*: I13, III48.

El Estado no puede ser considerado como un mal necesario que utilitariamente nos conviene tolerar, sino como un bien positivo, aunque ciertamente de carácter instrumental. Y porque es un bien, y un bien necesario, hemos de procurar la plenitud y perfeccionamiento de su ser. Naturalmente, le afectarán muchas y muy graves obligaciones, y, por tanto, le han de ser atribuidas capacidad y facultades suficientes para promover, tutelar e impulsar [...] la *custodia y vigilancia suprema del bien común nacional* (*op. cit.*: I104, III30)²⁰⁵.

De lo que se desprende tanto la “obligación” del Estado de regular el sistema informativo, como su “derecho” a orientarlo y vigilarlo (*op. cit.*: III14). La intervención estatal reguladora queda justificada para el ministro en aras de evitar la “colonización informativa” por parte del capital extranjero y garantizar la “soberanía informativa”. Para Arias Salgado, toda materia que deja sin absorber el Estado es inmediatamente asumida por el poder financiero internacional en favor de sus intereses particulares y detrimento del bien común²⁰⁶. El peligro que, en los años cincuenta, advierte Arias Salgado para la soberanía informativa nacional lleva al ministro a propugnar la presencia exclusiva de capital español en las empresas periodísticas nacionales:

Como derivación lógica de la soberanía informativa, en el Estatuto jurídico ha de estar previsto que la autorización para editar un diario sólo podrá otorgarse a empresas constituidas con capital español y dirigidas, en la gerencia y en la ideología por españoles. En el terreno de la soberanía informativa, cualquier participación del capital extranjero, bajo la forma o procedimiento que fuere, o influencia directiva, abierta o subterráneamente ejercida por persona no española, habrá de estar automáticamente excluida por imperativo de la Ley.

[...] la información es un patrimonio nacional, parte del bien común nacional, y este bien común nacional, sólo puede ser administrado y usufructuado por y en beneficio de los españoles (*op. cit.*: I44, III18)²⁰⁷.

A este “nacionalismo informativo” une Arias Salgado la misma preocupación que enarbolara como bandera Fernando Martín-Sánchez Juliá. El ministro toma de hecho del acenepista su concepción de la empresa periodística como “empresa con trascendencia ideológica” (*op. cit.*: III233); de ahí que no pueda encuadrarse dentro de las sociedades industriales, comerciales o mercantiles, pues es al tiempo empresa intelectual, industrial y comercial (*op. cit.*: I103, III234, III238)²⁰⁸. Esta peculiar naturaleza reclama una regulación específica que permita proteger a la empresa de concentraciones de capital, de

²⁰⁵ Discurso al cuarto Consejo Nacional de Prensa, Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1957.

²⁰⁶ “Cualquier deber incumplido por el Estado [asegura en 1953 ante el primer Consejo Nacional de Prensa] o cualquier resorte sin pulsar cae en manos de las potencias financieras, para convertirlo en instrumento de poder y de acción; aun a costa, muchas veces, de los valores e intereses colectivos más sagrados” (*op. cit.*: I9, III14).

²⁰⁷ Discurso al cuarto Consejo Nacional de Prensa, en Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1957.

²⁰⁸ Discurso al cuarto Consejo Nacional de Prensa, *ibídem*.

presiones externas y, sobre todo, de la intromisión de ideas ajenas al proyecto fundacional²⁰⁹. Arias Salgado aboga por un marco legal para la empresa periodística muy similar al planteado por Martín-Sánchez Juliá.

En cambio, el ministro difiere profundamente de las ideas acenepistas en cuanto a las consecuencias que para él resultan del “derecho a orientar y vigilar” atribuido al Estado. De la orientación y vigilancia colige Arias Salgado potestades estatales en materia de control de la profesión periodística, tanto en la aceptación del director de la publicación propuesto por la empresa²¹⁰ como en la expedición de títulos profesionales²¹¹; pero, sobre todo, de censura y dirección a través de consignas. A cuenta precisamente de la censura y las consignas, se enzarzará Arias Salgado en varias polémicas públicas con Jesús Iribarren, en 1954 y 1959, y sobre todo, con el entonces obispo de Málaga (y poco después ascendido al cardenalato), Ángel Herrera Oria en 1955. Frente a la defensa de los acenepistas de una censura limitada y regulada, Arias Salgado contempla ésta, invocando a la doctrina católica, como una obligación estatal:

En una concepción católica [asegura] de la misión que incumbe al que tutela el bien común desde una tarea de gobierno, la consulta previa no es sólo una facultad, sino una obligación jurídica y moral (*op. cit.*: II32, III219)²¹².

Del mismo modo, frente al rechazo taxativo de las consignas que manifiestan los propagandistas, el ministro las justifica y defiende, al concebirlas como

orientaciones positivas —mal llamadas consignas— dimanadas de los organismos competentes en estas materias con el fin exclusivo de urgir la obligación permanente

²⁰⁹ “No cabe duda [proclama ante el cuarto Consejo Nacional de Prensa, *ibídem*] de que dentro de la pluriforme y casi ilimitada gama de publicaciones informativas, son las empresas editoras de diarios las que han de ocupar un puesto preferente en nuestras reflexiones, y en la regulación jurídica que las institucionalice, con el grado y precisión que la experiencia aconseja y nuestros tiempos reclamen, para defenderlas de la absorción del capital financiero ajeno a la empresa y de la concentración en pocas manos del enorme potencial que representan. Tratamos de defender la independencia y la libertad del empresario y de la empresa periodística; de garantizar la permanencia del equipo ideológico de fundación, apuntalar la libertad y la responsabilidad de la empresa, protegiéndola de sus enemigos y de la influencia irresponsable de los grupos de presión que, una vez acreditadas esas empresas, pueden intentar hacerse con ellas y sojuzgarlas, sencillamente, comprándolas” (*op. cit.*: II21, III238).

²¹⁰ “La orientación del periódico [escribe en *El Español* (num. 333), en el marco de su polémica con el cardenal Herrera Oria, en 1955] dentro de nuestra doctrina de la información, la realiza directamente la Empresa mediante el director que ella eligió y propuso libremente. La realiza indirectamente el Estado al aceptar al director que le propuso la Empresa” (*op. cit.*: II43, III246).

²¹¹ “Las facultades y deberes del Estado [afirma en 1957 ante el cuarto Consejo Nacional de Prensa, en Palma de Mallorca] en este campo [el de la profesión periodística] le autorizan a regular normativamente, a la luz de la doctrina católica del bien común social, el ejercicio del periodismo, de tal manera que cuantos lo ejerzan acrediten no sólo su competencia profesional y una moral básica, sino un mínimo de cualidades ciudadanas y sociales, entre las que ha de sobresalir un profundo sentido de responsabilidad hacia el bien común, del que son tanto más responsables cuanto más influyentes; y esto no sólo por la trascendencia de cuanto escriban y como escriban, de cuanto sugieran y como lo sugieran, sino por lo que silencien y cuando lo silencien” (*op. cit.*: II103, III243).

²¹² En *El Español*, num. 331, dentro de la polémica mantenida con Jesús Iribarren en 1954.

que tiene la prensa de servir el bien común por ser institución social (*op. cit.*: II31, III229)²¹³.

(c) *El régimen español de “prensa orientada”*. Gabriel Arias Salgado —quien, conviene tenerlo bien presente, elabora su doctrina en los años cincuenta— se cuidará mucho de difundir proclamas estatistas que lo identifiquen con el totalitarismo. De ahí que califique a éste, al igual que al liberalismo, de “perversión doctrinal”; al tiempo que rechaza el que en algún momento se hubiera instaurado en una España cuya confesionalidad católica lo hacía del todo inviable (*op. cit.*: I197, III113):

El Estado es totalitario cuando se constituye en la fuente única y exclusiva de derechos y deberes y cuando además, con relación a la prensa, convierte a los periodistas en funcionarios del Estado. Ni el Estado español se constituyó ni se consideró en momento alguno única y última fuente de todos los derechos de la persona, ni los periodistas son ni fueron nunca, funcionarios del Estado²¹⁴.

Pero del mismo modo que la España católica es incompatible con “cualquier grado de totalitarismo”, tampoco es favorable a forma alguna de liberalismo. Gabriel Arias Salgado se muestra contrario a dos fundamentos liberales: al principio de supremacía de la opinión pública y a su noción de libertad de prensa. Para el ministro, autoridad y opinión pública parecen mantener una relación dialéctica, aunque desigual: si bien ninguna es infalible ni impecable, la primera rige el bien común mientras que la segunda solamente colabora en su gestión. Arias considera, en este sentido, que la concesión que hace el liberalismo a la segunda del papel de juez y arbitro supremo es “una subversión de valores y un atentado a la recta razón”, pues el principio rector [esto es, la autoridad] es superior a la parte regida [la opinión pública], aunque la razón de ser del principio rector sea el servicio a la comunidad” (*op. cit.*: I71)²¹⁵. Así, la concepción de supremacía de la opinión pública argüida por el liberalismo no haría sino socavar el principio de autoridad, invitando a la opinión pública a la rebelión (*op. cit.*: I92, III69)²¹⁶. Por el

²¹³ En *El Español*, *ibídem*.

²¹⁴ En *El Español*, num. 288. Dentro de la polémica con Iribarren, director de *Ecclesia*

²¹⁵ Este principio de supremacía del órgano rector sobre el regido justifica también la sumisión de la prensa y de todo medio informativo al aparato organizado por el Estado para su control y gobierno. “En recta doctrina [argumenta Arias Salgado en Valencia el 4 de diciembre de 1955, ante el tercer Consejo Nacional de Prensa] no puede considerarse como de igual categoría la autoridad legítima y el órgano informativo, como se desprende de los principios de libertad e igual de la dialéctica del liberalismo. Esto equivaldría a considerar y estimar que en materia de bien común se hallan objetivamente en pie de igualdad el gobernante y el ciudadano, la autoridad y el súbdito, el estado y los órganos informativos; cuando la realidad es que la autoridad es directora, gestora y administradora responsable de todo bien común, y los órganos informativos son colaboradores, pero no gestores responsables del bien de la comunidad nacional. La autoridad puede dirigir, vigilar, urgir y castigar con toda la eficacia moral y práctica que envuelve el mandato legítimo, en tanto que los órganos informativos no pueden superar el plano de la noticia, la orientación y el comentario” (*op. cit.*: I66, III85-86).

²¹⁶ Discurso al tercer Consejo Nacional de Prensa, en Valencia, 4 de diciembre de 1955.

contrario, para Arias Salgado, es la autoridad la que goza en caso de discrepancia de la presunción de acierto *iuris tantum*; presunción de acierto y, en fin, supremacía, basadas, en último término, en la legitimidad de origen divina en la que, al menos en el caso español, descansa para Arias la autoridad.

Refuta, además, Arias Salgado la concepción liberal de libertad de prensa, con el argumento clásico de que no se trata sino de la libertad de los ricos para publicitar sus intereses particulares y, consecuentemente, para censurar aquellos que les son contrarios.

La libertad de prensa [acusa] no ha existido nunca dentro del liberalismo político. Existió, sí, la libertad de unos cuantos propietarios de periódicos que, amparados en su poder financiero, impusieron su censura particular, publicando lo que les agradaba o producía beneficios, omitiendo lo que les parecía, sin consideración alguna a razones de bien común o de utilidad y formación pública, porque el último fin de la empresa era el lucro privado (*op. cit.*: I45)²¹⁷.

Así, para el ministro, “liberarse del liberalismo” no es de ningún modo renunciar a la libertad, sino adquirir una libertad “más auténtica”; no enfrentada al Estado, sino liberada de grupos de presión y de la presión de los partidos (*op. cit.*: I46, III89)²¹⁸.

Parece optar, pues, Arias Salgado, como ya tratara de hacerlo el acenepismo, por una peculiar “tercera vía” ni totalitaria ni liberal (aunque desde luego no equidistante de ambos extremos²¹⁹); una “tercera vía” nacional definida como “prensa orientada”²²⁰, en la que ésta se presenta, no al servicio exclusivo del Estado (como la “prensa dirigida” que propugna el totalitarismo), ni al exclusivo de la opinión pública (como defienden los acenepistas), sino de ambos. Es este régimen de “prensa orientada” el único capaz de garantizar, para el ministro, el cumplimiento de su misión específica de servicio al bien común, mediante, precisamente, su servicio al cuerpo orgánico formado por la integración armónica de pueblo y Estado.

²¹⁷ Discurso al segundo Consejo Nacional de Prensa, en Barcelona, 12 de diciembre de 1954. Cf. Arias Salgado, *op. cit.*: I10, III195.

²¹⁸ Discurso al segundo Consejo Nacional de Prensa, *ibídem*.

²¹⁹ Por más que Arias se esfuerce por abrir esta “tercera vía” nacional entre el totalitarismo y el liberalismo, parece evidente que su doctrina no se encuentra precisamente en una posición equidistante de ambos sistemas. Las ideas de Arias Salgado parecen encontrarse, antes bien, mucho más próximas al ideario totalitario defendido por los falangistas que a las tesis liberales y, por incluir dentro de este mismo eje a los católicos, en un lugar intermedio entre la doctrina falangista y la propagandista.

²²⁰ Esta “prensa orientada” de Arias Salgado parece ser un trasunto atenuado de la “prensa dirigida” teorizada por los falangistas. En 1944, Juan Beneyto, a la sazón jefe de los Servicios Centrales de Prensa y Propaganda y aún con firmes convicciones falangistas, escribía: “venimos a colocarnos ya en la posición de afirmar que la prensa está dirigida; partimos, pues, del hecho de una prensa dirigida frente a la tesis anterior [liberal] de la prensa en régimen de libertad de expresión de pensamiento; prensa que no dejaba de estar dirigida, pero que en vez de serlo por el Estado o por las fuerzas nacionales, lo era al servicio de intereses de grupo o puramente del capital” (Beneyto, 1944: 23-24).

Entre prensa controlada y libre teóricamente y prensa estatificada, prefabricada, sujeta a un dirigismo férreo, [arguye Arias Salgado] la fórmula española es de *prensa orientada*. Prensa, no órgano del Estado ni instrumento de grupos, sino prensa “órgano de los intereses de la sociedad”, que es, como hemos enunciado repetidas veces, no pueblo frente a Estado, ni Estado como fin supremo en sí, sino esa unidad superior que resulta de la integración de pueblo y Estado en un cuerpo orgánico, políticamente bien estructurado (*op. cit.*: I22, III256)²²¹.

3.3.2 El anteproyecto de Ley de Bases de la Información

Este corpus doctrinal servirá de fundamento para la elaboración del anteproyecto de Ley de Bases de la Información (ALBI) en el que comienza a trabajar el MIT a finales de los años cincuenta. Así viene reconocido en el preámbulo de la propia Ley de Bases, en el que se afirma que no es ésta sino el “desarrollo de los principios y normas doctrinales que constituyen las bases de la misma”²²². El 18 de junio de 1959, un Decreto ministerial crea una comisión para la elaboración y el estudio de la nueva Ley, llamada a sustituir a la de 1938. En noviembre, la ponencia —integrada por José Luis Villar Palasí, Adolfo Muñoz Alonso, Valentín Gutiérrez Durán, Andrés Avelino Esteban y Fernando Martín-Sánchez Juliá— comienza a recibir propuestas de la comisión. Desde entonces, se elaborarán al menos seis borradores del anteproyecto²²³, en los que vienen a adoptar forma de bases legales (y no propiamente de normas positivas, para las cuales el ALBI remite a una enunciación ulterior) buena parte de los postulados planteados por Arias Salgado en su “teología de la información”²²⁴.

El anteproyecto pretendía nada menos que plantear un marco regulador general —susceptible, como decimos, de desarrollo ulterior mediante legislaciones específicas— que afectase a la información, cualquiera que fuese su soporte difusor; se presentaba, pues, con la intención de integrar en un mismo ordenamiento toda la normativa sobre prensa,

²²¹ Discurso al primer Consejo Nacional de Prensa, Alicante, 16 de diciembre de 1953.

²²² Anteproyecto de Ley de Bases de la Información, en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136. Todas las citas que se ofrecen de aquí en adelante han sido extraídas de dicho documento.

²²³ Al menos seis son los borradores que han quedado archivados en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136. De todos ellos, analizamos en este apartado el sexto y último borrador; el más acabado de todos. Buena parte, por cierto, de los miembros de esta comisión (Aquilino Morcillo, Fermín Yzurdiaga, Torcuato Luca de Tena, Fernando Herrero Tejedor, etc.) serán pocos años después destacados miembros de la Comisión de Información y Turismo encargada de estudiar y modificar el proyecto de Ley de Prensa aprobado en marzo de 1966.

²²⁴ Por supuesto, el ALBI no es —como el *Estatuto de Prensa* de FET de las JONS o el *Borrador del Proyecto de Estatuto de Prensa* de la ACN de P— una propuesta particular de Gabriel Arias Salgado, sino un documento legal, emanado del MIT, y por tanto en el que necesariamente han de confluir varias doctrinas y postulados de distintos grupos presentes en el sistema informativo. No puede, pues, considerarse la doctrina de Arias Salgado como la única base del ALBI; si bien sí parece evidente que se trata de una de las más determinantes.

radio, televisión, cinematografía, y en fin, todos los medios de comunicación existentes a finales de los cincuenta. La justificación de esta vocación holística se encuentra en la doctrina de Arias Salgado²²⁵:

La realidad es que, a pesar de las diferencias instrumentales y técnicas existentes entre la radio, el cine, la televisión y la prensa, el caudal informativo que discurre por todos estos vehículos difusores afecta al bien común, a la paz y al orden social y, por consiguiente, en cuanto órganos informativos, han de ser tratados dentro de un mismo ordenamiento legal²²⁶ (Arias Salgado, *op. cit.*: II27, II141; III198).

A pesar de que el proyecto morirá antes de nacer, sería un error menospreciar su importancia: el ambicioso ALBI será heredado por el equipo de Manuel Fraga y constituirá el antecedente inmediato de la Ley de Prensa de 1966, en la que encuentran desarrollo tres aspectos cruciales del proyecto de Arias Salgado: la regulación de la prensa, del libro o empresa editorial, y de la empresa periodística.

El ALBI consta de dos artículos, el primero de los cuales se compone de seis capítulos y veintisiete bases. Siguiendo el esquema analítico básico hasta ahora trazado, agruparemos todas ellas en dos grandes categorías: aquellas bases referidas a la noción y función de la información; y aquellas relativas al papel que se le concede al Estado en el sistema.

(a) *Los medios como informadores, formadores y orientadores al servicio del bien común nacional*. Esta concepción de la información queda explicitada en el primer capítulo, dedicado a los principios generales que guían el anteproyecto. En él se reafirma, en primer lugar, la libertad de expresión consagrada por el artículo 12 del Fuero de los Españoles (*loc. cit.* 3.2.1). Sin embargo, de esta libertad de expresión no se deriva una afirmación explícita de la libertad de información o de la libertad de prensa; se habla únicamente, en la primera base del anteproyecto, de la “regulación” que supone el ALBI de la libertad de expresión cuando ésta “se manifieste a través de medios técnicos de difusión”. Por si fuera poco, se insiste en el preámbulo en el rechazo de la concepción liberal, “ilusoria y frustrada”, de la libertad de información, “pues queda de hecho su uso monopolizado por quienes poseen como dueños los referidos medios técnicos”. Por el contrario, la “verdadera libertad”

²²⁵ “Cuanto se estipule y se ordene en lo fundamental, no en los procedimientos accesorios, sobre la prensa, habrá de estipularse y ordenarse para el teatro, el cine, la radio, los libros y la televisión; es decir, la información en general”. En *El Español*, num. 329.

A ello habría que añadir, además, un proyecto de Estatuto de la Empresa periodística reclamado por Martín-Sánchez y en el que Arias Salgado dice estar trabajando en 1957 (*op. cit.*: III14). Este Estatuto, sin embargo, tampoco verá nunca la luz.

²²⁶ En *El Español*, num. 552. Dentro de la polémica mantenida con *Ecclesia* en 1959 a cuenta de la Ley de Bases de la Información.

exige la difusión conveniente de cuantos valores contribuyen al desarrollo perfecto de la comunidad y de todos sus miembros, correspondiendo, por tanto, a las instituciones, entidades y órganos de la sociedad el derecho de difundir las informaciones necesarias y convenientes al bien común de la misma, así como a los particulares la posibilidad efectiva de disponer, salvadas las exigencias del expresado bien común y conforme a la oportunidad de las circunstancias, de los medios técnicos de difusión para contribuir al progreso moral, social, político y religioso de la comunidad de la que son miembros (preámbulo).

Las funciones de estos medios de difusión son, por tanto, las de informar, formar y orientar a favor siempre de la consecución del bien común nacional, principio supremo al que se subordina toda la acción informativa (base segunda). De ahí las restricciones a la libertad de publicación —idénticas a las fijadas en el artículo 33 del Fuero de los Españoles²²⁷— que establece la base decimoquinta (§ primero) (dentro del capítulo tercero):

Los órganos de difusión [reza] podrán expresar libremente sus ideas mientras no atenten a las relaciones internacionales de España, a la unidad espiritual, nacional y social de los españoles, a los principios fundamentales del Estado y a las instituciones que los representen.

Y decimoquinta bis, en la que quedan estos últimos identificados en la Jefatura del Estado y la persona que lo encarna; en las Leyes Fundamentales; en “La Iglesia Católica en sus dogmas, moral y Jerarquía”; y en las Instituciones fundamentales (Consejo del Reino, Cortes, Gobierno, Movimiento Nacional, Ejército, Administración de Justicia y la Fuerza Pública). Por otro lado, la base decimoséptima prohíbe expresamente la realización de “campanas de defensa de intereses privados, individuales o de grupo contrarios al bien común”; y reserva a la Administración la posibilidad de actuar contra “los grupos de presión que, aislada o conjuntamente, pretendan imponer a los medios informativos actitudes contrarias, por acción u omisión, al interés general de la comunidad”, así como de impedir “la vinculación de las secciones críticas a intereses económicos que impidan su objetividad e independencia”.

Para lograr esta misión específica de cumplimiento del bien común nacional, dedica el ALBI todo el capítulo segundo a regular la constitución y funcionamiento de las empresas periodísticas. Se aprecia en este punto una coincidencia, casi punto por punto, con la doctrina y normativa propuesta por el acenepismo y, en particular, por Fernando Martín-Sánchez Juliá. El ALBI desarrolla los dos grandes principios propagandistas de publicidad y conservación ideológica. Se obliga, en primer lugar, a la empresa a publicar

²²⁷ Recuérdese que el art. 12 del Fuero de los Españoles restringía la libertad de expresión al respeto a los principios fundamentales del Estado; mientras que el art. 33 la limitaba a la preservación de la “unidad espiritual, nacional y social de España” (*loc. cit.* 3.2.1).

su prospecto fundacional en el BOE; en él han de figurar fundador, Consejo de Administración, Consejo de Fundadores, Consejo de Redacción, orientación ideológica, y estatutos (base octava). Además, se plantea la creación de un Registro Oficial de Propietarios de Medios (*Ibidem*). Cuando la empresa adopte forma de sociedad, los títulos acreditativos de participaciones de capital deberán ser nominativos, intransferibles a extranjeros y conocidos sus poseedores por la Administración, que se reserva incluso el derecho de vetar su compraventa (base undécima). Por otro lado, la conservación de la ideología original del medio se logra mediante la integración de todas las empresas periodísticas en la base transitoria duodécima de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 (*loc. cit.* 3.2.2); en caso de discrepancias entre Consejo de Administración y Consejo de Redacción, decide, tal y como proponía Martín-Sánchez, la Junta de Accionistas (base octava). A todo ello se le añade el nacionalismo informativo de Arias Salgado: su principio de “soberanía informativa” encuentra formulación positiva en la restricción de la libertad de constitución de empresas periodísticas a españoles —sean personas físicas o jurídicas— residentes en España (base séptima)²²⁸; y en la prohibición de presencia de capital extranjero en los medios españoles (base undécima)²²⁹.

(b) *El Estado como director, vigilante, animador y juez del sistema informativo.* De la antedicha noción de la información y de sus funciones, así como de su regulación consiguiente, se deriva esta concepción del papel concedido al Estado en el sistema. Dicho papel se sustenta además sobre la idea del Estado enunciada en el anteproyecto como el principal garante del cumplimiento de la misión específica de los medios informativos:

[...] por ser el Estado [establece el preámbulo (apréciese la evidente similitud con la doctrina de Arias Salgado)] garante supremo del bien común nacional, ha de garantizar a la sociedad y a los particulares que dichos medios técnicos [de difusión de información] puedan cumplir y cumplan libre y rectamente la función social, que por su propia naturaleza les corresponde.

De ello se derivan funciones estatales de dirección, vigilancia, fomento, enjuiciamiento y castigo de las actuaciones realizadas en el sistema informativo; funciones que se encuentran inevitablemente condicionadas por las exigencias derivadas de la confesionalidad católica del Estado español. Esta concepción enunciada de modo general

²²⁸ Esta última apostilla rechaza, obviamente, la libertad de constitución de empresas para españoles residentes en el extranjero; acaso intentado así evitar la posibilidad de penetración subrepticia (a través de un testaferro español) de capital extranjero en el sistema informativo nacional.

²²⁹ “No obstante [reza la base undécima, pensado seguramente en el capital extranjero presente ya en algunas empresas como la Editorial Católica, editora de varios diarios], el Gobierno, por razones de bien superior, podrá autorizar la participación de capital extranjero en la cuantía y forma que en cada caso determine”.

en el preámbulo, encuentra su forma positiva en la base cuarta, según la cual “corresponde al Estado la obligación de velar por el bien común, regulando el régimen a que ha de ajustarse la creación, funcionamiento y utilización de los medios técnicos difusores [...]”.

La función estatal de *dirigir* el sistema informativo nacional queda concretada en la atribución de conceder el plácet al nombramiento del director de la publicación (y por tanto en la posibilidad también de vetar dicho nombramiento) (base decimotercera); así como en el control del acceso a la profesión periodística y de todo lo relativo a la regulación laboral. A ello dedica el anteproyecto el capítulo sexto: en él se reconoce de modo implícito la existencia de centros de formación ajenos al Estado —que desarrollarían su labor junto a los centros docentes estatales—, cuyos estudios han de ser, sin embargo, convalidados por aquel (base vigésimo quinta). Además, se contempla la creación de Tribunales de Ética Profesional (base vigésimo sexta), y se atribuye al Estado la función de defensa del periodista en posibles litigios contra su empresa (base vigésimo séptima)²³⁰. Con todo, acaso el principal instrumento de dirección con que cuenta el Estado sean las consignas, que no sólo no quedan prohibidas, sino que mantienen su institucionalización mediante la creación de un gabinete “de Información y Consulta” adscrito al MIT. Se encarga éste, según los términos del texto, de difundir “orientaciones pertinentes en relación con los problemas nacionales o internacionales” (base vigésimo cuarta).

La labor de *vigilancia* que asume el Estado se dirige a dos ámbitos del sistema: a los aspectos económicos de las empresas periodísticas y a los puramente políticos e ideológicos. Con respecto a los primeros, el Estado se reserva el derecho a conocer a los accionistas de las empresas (base undécima) y cómo cubren éstas sus déficits (base duodécima). La vigilancia político-ideológica del sistema afecta plenamente al régimen de censura. En este punto, el ALBI acaba formalmente con la censura previa como práctica ordinaria: “Queda suprimida [reza la base decimoquinta, § segundo] para la prensa en todo el territorio nacional la censura previa con carácter universal, habitual y obligatorio”. Sin embargo, el MIT se reserva la posibilidad de ejercerla en “casos urgentísimos” que no define (base decimoquinta, § tercero). Además, plantea la creación de un gabinete censor, denominado eufemísticamente como “Gabinete de Información y Consulta”, encargado de examinar, previamente a su publicación, originales que pudieran estar comprometidos en la base decimoquinta. Es este gabinete censor el

²³⁰ “La libertad de expresión no debe ser limitada por la relación de empleo, salvo en los casos en que sea manifiesta la incompatibilidad de opinión del profesional con la específica orientación del medio informativo o difusor. El ejercicio de esta libertad estará especialmente defendido por el Estado”.

encargado de difundir las consignas a las que antes hacíamos referencia. Por último, la Administración no renuncia a su potestad de intervención y secuestro de las publicaciones (base vigésimo tercera); ni a la vigilancia de la publicidad que en ellas se inserta (base decimoctava).

La labor de *urgir* al cumplimiento de la misión específica de la información queda concretada en la base sexta, que atribuye al Estado la función de arbitrar los medios para fomentar, favorecer y estimular el establecimiento y desarrollo de los instrumentos de difusión o información, y adoptará las medidas tributarias, postales de distribución, de suministro de materias primas y cuantas sean necesarias en orden a su protección funcional, económica, profesional o de cualquier índole; pudiendo declarar de interés nacional²³¹, a petición de parte interesada y previo el oportuno expediente, a las Empresas que se hagan acreedoras a ello.

Se anuncia además la creación de una “Agencia Informativa Nacional” (base decimocuarta), llamada también a cumplir el principio de soberanía informativa defendido por Arias Salgado; y se fija la obligación de las publicaciones de insertar y difundir notas y comunicaciones oficiales que “el gobierno considere oportuno divulgar”, y sin especificar contraprestación económica alguna por su publicación (base decimonovena). Por último, se permite cierta crítica a la acción de la Administración (y por tanto también, entre otras, a la del Gobierno) en la base decimosexta: “Los actos y omisiones de la Administración Pública podrán ser objeto de análisis crítico siempre que no impliquen directa o indirectamente excitación a la desobediencia, ni desprestigio de sus órganos o representantes”.

Por último, la función de juzgar y *castigar* o sancionar a los medios de difusión queda desarrollada en el penúltimo capítulo del ALBI. Ya en el preámbulo se adelanta la decisión de no crear jurisdicciones especiales para cuestiones informativas y de conceder la potestad sancionadora en la materia al Tribunal Supremo. Ello queda desarrollado en la base vigésimo segunda, en la que se concede la función de enjuiciamiento a la Sala Segunda del Supremo. Ello sin olvidar, por supuesto, la potestad ya mencionada de actuaciones administrativas que se reserva el Ministerio, tanto para el secuestro de publicaciones (ante la que se concede recurso contencioso administrativo) (base vigésimo tercera), como para prevenir actos de presión de toda naturaleza (base decimoséptima).

²³¹ Remite esta base a tres leyes de finales de los treinta y principios de los cuarenta en las quedaba regulada la política industrial del franquismo, y en las que se creaba la categoría de “industrias de interés nacional”: son la Ley de 24 de octubre de 1939 sobre Protección y Fomento de las Nuevas Industrias de Interés Nacional; la Ley de 24 de noviembre de ese mismo año; y la Ley de 25 de septiembre de 1941, por la que se creaba el Instituto Nacional de Industria (INI). En los años cincuenta, poco antes de que se presentara este ALBI, el marco de intervención estatal sobre las industrias españolas se modificó substancialmente.

3.4 La doctrina oficial franquista sobre prensa

Todas y cada una de las doctrinas expuestas contribuyeron, aunque no en la misma medida, a configurar la doctrina “oficial” del Régimen sobre la prensa y el papel del Estado. Todas influyeron de una forma u otra en el “espíritu” que informó la regulación de la materia y orientó su aplicación. Descubrir este espíritu que subyace a la intervención estatal implica necesariamente identificar las concepciones básicas que, sobre el sistema de prensa, albergó en cada momento la *mens legis* e inspiraron su actuación. Siguiendo un afán de simplificación, hemos reducido las nociones objeto de análisis a dos primordiales: (a) *la concepción manifestada por el Estado franquista de la prensa, de sus funciones y misión; y (b) la idea del papel que ha de desempeñar el Estado con respecto al sistema de prensa*. Ambas concepciones se encuentran, desde luego, intrínsecamente ligadas, de modo que la segunda dimana de la primera y la primera de la segunda; y ambas fueron coherentes, por lo general, con los equilibrios de poder y los principios fundamentales que fue adoptando la dictadura en cada periodo; de modo que, si en un primer momento, pudo ser la doctrina falangista la que más acomodo encontrara en la legislación franquista sobre prensa; desde los años cincuenta, y desde luego durante el tardofranquismo, fue sin duda la doctrina acenepista la que más influyó en la concepción y actuación del Régimen en la materia.

3.4.1 La concepción franquista de la prensa

La existencia de unas bases doctrinales franquistas inmutables sobre la prensa ha sido defendida por algunos autores, para quienes el espíritu fundamental de la intervención estatal sobre el sistema permaneció invariable durante todo el franquismo. Alejandro Pizarroso ha considerado, por ejemplo, que las Leyes de Prensa de 1938 y 1966 responden, en último término, a un mismo espíritu: “hacer de la prensa una institución al servicio de la propaganda del nuevo Estado y no una expresión de la sociedad [...]” (Pizarroso, 1989: 238). De forma similar, aunque desde una perspectiva más jurídica, Enrique Gómez-Reino parece sugerir que los rasgos del modelo autoritario de control franquista de la prensa —rasgos que, considera, son los siguientes: el papel dominante del Estado frente al individuo, la condena de las concepciones liberal y marxista de la prensa, la visión de ésta como “institución nacional” al servicio del Estado, y su puesta al servicio del Partido— son aplicables a toda la dictadura (1977: 188-189). Manuel Fernández Areal, por su parte, ha dedicado su principal obra a

descubrir la “ideología subyacente” a toda la legislación que, nada menos que desde el siglo XIX y hasta 1966, ha regulado la prensa española:

La legislación española en materia de prensa [asegura], al margen de las declaraciones programáticas sobre su libertad, ha venido respondiendo [...] a unas constantes ideológicas²³² a lo largo de un siglo y medio. Sus lógicas variantes de expresión, en función de las nuevas circunstancias sociopolíticas de cada época, han sido manifestaciones, no siempre claras, de una misma corriente subyacente (Fernández Areal, 1973: 10).

Fernández Areal identifica esta “constante ideológica”, que hundiría sus raíces en la fisiocracia y en la reacción decimonónica, con un “liberalismo moderado español”, inscrito dentro del pensamiento político reaccionario moderno, y marcado por una profunda desconfianza hacia la prensa:

En el fondo de esta ideología [...] hay una desconfianza no siempre reconocida hacia el concepto mismo de libertad de prensa, cuando no una postura de hostilidad hacia esa libertad que, sin embargo, por razones tácticas, no hay más remedio que admitir, proclamar y limitar por procedimientos diversos, en no pocas ocasiones concediendo al [poder] ejecutivo poderes que serían de atribución del judicial y que se le acaban sustrayendo a este último (Fernández Areal, *ibídem*).

Parece evidente que la tesis defendida por los tres autores acaba por incurrir en un cierto ahistoricismo: en los tres casos se acaban proyectando los rasgos específicos de un momento concreto sobre toda la dictadura. Pizarroso y Gómez Reino adoptan la concepción primigenia de la prensa como institución nacional al servicio del Estado para caracterizar todo el franquismo; mientras que Fernández Areal asume como una constante de la dictadura una ideología “liberal moderada” que quizás pudo inspirar la Ley de 1966, pero que difícilmente puede afirmarse que subyaciera a la intervención franquista de primera hora.

Otros autores, en cambio, sí han tenido en cuenta cierta evolución del franquismo en sus bases doctrinales. Así, por poner sólo dos ejemplos, Carlos Barrera ha afirmado que, si bien las dos disposiciones principales del franquismo en materia de prensa pudieron coincidir en su esencia (que identifica con la negación de la libertad de información), muestran también diferencias insoslayables (Barrera, 1995a: 13); mientras que, en una obra ya clásica, Henry Schulte habla de un movimiento pendular en la concepción y regulación histórica de la prensa española, dentro del cual las leyes de 1938

²³² Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que Areal no concede al concepto “ideología” el mismo significado que se le da en esta investigación. Fernández Areal basa su concepción en las tesis de Lowenstein, para quien la ideología es la “actitud del hombre ante la vida y ante su propia experiencia social, que propugna una determinada forma de conducta y de acción correspondiente a dicho sistema de ideas y creencias y que contribuye a su realización” (Fernández Areal, *op. cit.*: 11).

(ubicada en el polo del control absoluto) y 1966 (que Schulte sitúa en el polo opuesto) constituirían la última oscilación (Schulte, 1968). Lo cierto es que, efectivamente, cabe constatar una acusada evolución en la concepción que el franquismo manifiesta (plasmándola en sus disposiciones más importantes) sobre la prensa y sobre el papel que el Estado ha de jugar con respecto a ella. Como enseguida veremos, la prensa pasará de ser entendida como una institución nacional al servicio del Estado, a ser concebida, al menos formal y oficialmente, como una institución social, controlada por el Estado, pero al servicio de la opinión pública; lo que motivará, por supuesto, cambios substanciales en las funciones y misión a ella atribuidas.

Si bien, pues, la conceptualización de la prensa varía durante el franquismo, no parece hacerlo, en cambio —y en este sentido coincidimos con el profesor Fernández Areal— el miedo o desconfianza que el Régimen le profesa; desconfianza que no deja de implicar un reconocimiento correlativo de su potencia. El miedo a la prensa se adivina como una constante en la intervención franquista sobre la materia durante todo el periodo, de modo que variarán, entre 1936 y 1975, los procedimientos aplicados por el Estado para controlarla, pero nunca se cuestionará la legitimidad de la intervención estatal misma, dirigida a aplacar la amenaza latente de una prensa libre. Algunas de las disposiciones que ven la luz durante la Guerra Civil muestran ya con nitidez los recelos del Estado franquista. La prensa queda señalada como una de las causantes de los males nacionales que han llevado al país a la guerra; hasta el punto de llegar a considerarse su “ingobernabilidad” misma como uno de los motivos del golpe de estado fracasado del 18 de julio de 1936 (Chuliá, 2001: 33). La prensa de los años treinta y las “doctrinas disolventes” por ella difundidas habían sido, según las primeras disposiciones de los sublevados, un medio idóneo para “el cultivo de las ideas revolucionarias”²³³, además de una vía de “envenenamiento moral” de la nación²³⁴. Esta idea de la prensa como responsable de los males nacionales había sido ya expresada por el primer fascismo español de Onésimo Redondo (*loc. cit.* 3.1.1); y era básicamente compartida por las principales fuerzas de la coalición conservadora sublevada en 1936, de forma que, “si los militares estimaban que la prensa había contribuido al desprestigio del Ejército y a la relajación del vínculo nacional, la Iglesia le hacía responsable de la desmoralización de la sociedad” (Chuliá, *ibídem*). Todo ello acabará plasmándose en la Ley de Prensa de 1938, en cuyo preámbulo se afirma:

²³³ Orden de 23 de diciembre de 1936 (BOE de 24 de diciembre), por la que se establece la censura previa.

²³⁴ Decreto 180 de la Junta Técnica del Estado de 14 de enero de 1937 por el que se crea la Delegación del Estado para prensa y Propaganda. En AGA, sig. (3) 49.21 c. 65136.

Testigos quienes hoy se afanan en la empresa de devolver a España su rango de nación unida, grande y libre, de los daños que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una masa de lectores diariamente envenenada por una prensa sectaria y antinacional [...].

Es, pues, el régimen de prensa (“liberal”, para la coalición franquista) vigente en el país en los años inmediatamente anteriores a 1936, el responsable de las publicaciones “sectarias” y “antinacionales” que han llevado a España a la guerra; un régimen de prensa liberal ante el cual el Estado queda “desarmado” (Beneyto, 1944: 9) y que alimenta un recelo que el nuevo Régimen ya no dejará de manifestar. De hecho, el rechazo se seguirá proclamando al menos hasta principios de los años sesenta: aunque las alusiones explícitas a la prensa liberal desaparecen de la Ley de Prensa de 1966 (lo que ya es significativo), apenas unos años antes, en 1962, Franco había pronunciado en Valencia la siguiente diatriba:

El mito del servicio a la verdad y de la libertad de prensa ha pasado a la Historia. Cada periódico u órgano de opinión tiene su amo [...] ¿Es que deja de ser el periódico una organización influenciable por las fuerzas secretas? ¿No constituye un negocio que puede venderse al mejor postor? [...] Si la prensa fuera verdaderamente libre, sería una libertad para una exigua minoría de millonarios de cada país²³⁵.

Por supuesto, el que cuatro años después la LPI no recoja ya un ataque explícito a la prensa liberal no significa en modo alguno que hubiera superado el Estado su desconfianza. Ante la amenaza de una prensa incontrolada, no deja de reservarse el Estado ciertas “cautelos” que, para Gonzalo Dueñas, constituyen precisamente el rasgo más característico de la norma (Dueñas, 1969: 63). De la misma opinión son, por cierto, Barrera (*op. cit.*: 96) y Fernández Areal (*Ibidem*); e incluso Ramón Serrano Suñer reconoce en la Ley Fraga el mismo miedo a la prensa que había inspirado la aplicación de su Ley durante los veintiocho años anteriores: preguntado en 1966 por las analogías y diferencias entre las dos normas, responde el ex ministro que “en el espíritu de la ley nueva se mantienen cautelos que no recuerdan el espíritu dirigista con que concebimos la ley del 38, sino el espíritu defensivo y pacato con que, muchas veces, fue interpretada” (Cit. en Dueñas, *op. cit.*: 60). Por lo demás, la aplicación o “interpretación” que, desde 1968, se hará de la nueva Ley y, sobre todo, el aparato de seguimiento y control de empresarios y directivos que se pondrá en evidencia en el siguiente bloque de la investigación, dejan pocas dudas sobre el grado de desconfianza que, durante el tardofranquismo, seguía inspirando en el Régimen la prensa privada.

²³⁵ Discurso pronunciado por Franco en Valencia el 16 de julio de 1962. Un fragmento del mismo puede consultarse en Dueñas, 1969: 53.

Esta profunda desconfianza no nace, como antes apuntábamos, sino del reconocimiento de su importancia; reconocimiento que no sólo se mantendrá también durante toda la dictadura, sino que incluso irá en aumento. Prueba de ello es la creación en 1951 de un ministerio *ad hoc* para el aparato informativo, en cuyo decreto de organización se define la información como una “necesidad colectiva del más alto rango”:

La densidad [afirma el decreto orgánico], la amplitud y el particular carácter de la vida social y política contemporánea han hecho de la información en general algo tan importante y cuantioso como los medios de comunicación y transporte en el orden de la economía. Desde el punto de vista de la comunidad, la información constituye una necesidad colectiva del más alto rango [...]²³⁶.

Catorce años después, la “importancia, cada vez mayor, de los medios informativos”²³⁷, constituirá uno de los motivos argüidos por el legislador para justificar la nueva ley. Naturalmente, el franquismo tratará desde el primer momento de instrumentalizar todas las posibilidades que la prensa ofrece para la cimentación y consolidación del nuevo Régimen. De ahí las pretensiones expresadas en la Ley de 1938 —con un lenguaje, inequívocamente falangista— de “redimir” al periodismo de la “servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas”, de “levantar” a la prensa “frente al convencional y anacrónico concepto del periodismo otro más actual y exacto [...]”, y en fin de “despertar en la prensa la idea del servicio al Estado”.

3.4.1.1 La prensa como institución nacional al servicio del Estado

La intención de “despertar” en la prensa el servicio al Estado preside, en efecto, la primera conceptualización franquista de la materia. Pretende la Ley de Prensa de 1938 convertir a la prensa en una “institución nacional”; lograr que “el periódico viva en servicio permanente del interés nacional” constituyendo un nuevo periodismo basado en la “verdad” (pero en la verdad franquista, obviamente) y en la “responsabilidad” (tras la que se esconde el sometimiento al Estado):

La responsabilidad que se pide y se exige en el nuevo Estado [aclara Fernández Areal] es una responsabilidad militante, al servicio del Estado —identificado con el Gobierno— en cuanto éste es intérprete del sentir y de los intereses nacionales, definidor de los grandes principios que han de inspirar la política nacional y

²³⁶ Decreto de 15 de febrero de 1952 (BOE de 24 de febrero) por el que se organiza el Ministerio de Información Turismo.

²³⁷ Preámbulo de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta (BOE de 19 de marzo) Véase Anexo IV.

depositario de todos los poderes y de la soberanía nacional (Fernández Areal, *op. cit.*: 180).

Resulta evidente que este sometimiento de la prensa al Estado y aun la noción misma de servicio son herederas de la doctrina enunciada por el fascismo español unos años antes (v. 3.1.1). El título de “institución nacional” no es, pues, sino consecuente con la subsunción de la prensa al Estado propugnada por el fascismo; subsunción de la que se derivan, además, las dos funciones básicas que la Ley de 1938 atribuye a la prensa: (a) mediar entre el Estado y la nación, o bien “transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno”; y (b) formar “la cultura popular” y crear la “conciencia colectiva”. Mientras que la primera de estas funciones irá difuminándose al compás de la caída de esta primigenia concepción fascista de la prensa, la segunda no hará sino afianzarse con el tiempo.

Aunque la concepción de la prensa como “institución nacional” se mantendrá oficialmente durante los veintiocho años de vigencia de la primera Ley de Prensa, lo cierto es que desde los años cuarenta no vuelven a aparecer referencias a ella en las disposiciones franquistas; como tampoco se alude desde entonces a la función mediadora entre Estado y nación. Sin duda es el alejamiento del totalitarismo que experimenta el Régimen en todos los órdenes —y que en la prensa se traduce en el traspaso de las competencias del partido único a los propagandistas— lo que motiva el abandono de esta primera concepción. Sí se mantendrá, en cambio, y aun afianzará, la labor formativa o educadora de la prensa. El entendimiento de la prensa como “instrumento al servicio de la obra educativa doctrinal” (Beneyto, *op. cit.*: 12) quedará recogido en varias de las disposiciones de los años cuarenta e institucionalizado al quedar el aparato de prensa encuadrado dentro de la Vicesecretaría de Educación Popular, dependiente del Partido, y más adelante, en la Subsecretaría de Educación Popular, dentro del Ministerio de Educación. Esta función, por lo demás, había sido defendida por el fascismo español (el cual, a su vez, lo había tomado del nazismo²³⁸), pero también, si bien con matices, por la doctrina acenepista²³⁹, lo que sin duda constituye la clave de su pervivencia en el tiempo. La “formación de la cultura popular y creación de la conciencia colectiva” parecen ser,

²³⁸ Así se había expresado Adolf Hitler en su obra *Mein Kampf* a propósito de la función de la prensa y del Estado: “Viva, pues, [el Estado] muy vigilante para no dejarse engañar ni seducir por una llamada ‘libertad de prensa’, para no abandonar sus deberes y para presentar, por el contrario, a la nación el alimento saludable que la nación necesita. *Sin contemplaciones, pues, y con decisión, el Poder público ha de asegurarse este medio de educación popular y ponerlo al servicio de la nación y del mismo Estado*” (Cit. en Herrera Oria, 2002: 16).

²³⁹ Así, el *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa* elaborado por la ACN de P a principios de los años sesenta abría su preámbulo con estas palabras: “La prensa tiene una misión decisiva en la educación de la opinión pública, no para dirigirla, sino para servirla, y esto, principalmente, de tres maneras: informándola, orientándola y reflejándola”. En Archivo Central de la AC de P.

en efecto, una enunciación eufemística de la labor “adoctrinadora” calificada de “noble” por el *Estatuto de prensa de FET de las JONS* (v. 3.1.2). Pero también una fórmula inspirada en la labor de “fabricación de la opinión pública” que propugnara Pío XI y recogieran Ángel Herrera Oria y sus discípulos propagandistas. Es sin lugar a dudas la asimilación de esta función a los principios católicos, la razón de su supervivencia a la caída de la primera noción fascista de la prensa, y su traslado a la conceptualización que propondrá Gabriel Arias Salgado y, sobre todo, a la que impondrá la Ley Fraga.

3.4.1.2 La prensa como institución social al servicio de la opinión pública

Cuando en 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, la concepción fascista de la prensa como “institución nacional” hacía tiempo que había sido abandonada. Con todo, ni el acenepismo ni Gabriel Arias Salgado lograrán trasladar, durante los cuarenta y los cincuenta, sus nociones sobre la prensa a disposiciones normativas relevantes; lo que, sobre todo en el caso de los propagandistas, no quiere decir que no ejercieran su influencia posteriormente. Aunque en 1952, en el decreto orgánico que organiza el MIT, asome la idea de la prensa como “servicio público”, el concepto no tendrá mayor desarrollo. Tampoco tendrá demasiado recorrido la visión de la prensa planteada por Gabriel Arias Salgado como “servidora del bien común” (y no ya del Estado). Sí se mantendrá, en cambio, durante los cincuenta y hasta el final del Régimen, la función formativa o educativa de la prensa, llamada a “formar sanos criterios de opinión y a difundir la más auténtica conciencia de nuestra Patria y sus circunstancias, tanto en el interior como en el exterior”²⁴⁰.

La nueva gran conceptualización sobre la materia no queda fijada hasta la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta, en marzo de 1966. A pesar de que en ella no queda explícitamente expresada la noción de “institución social”, lo cierto es que las dos funciones básicas que el Estado atribuye a la prensa en la norma son bastante significativas. A ella le corresponde, de acuerdo con el preámbulo, (a) la “formación de la opinión pública” (labor que, como ha quedado expuesto, remonta a tiempos anteriores); o, en palabras de Francisco Abella Martín —presidente de la Comisión de las Cortes encargada de discutir y enmendar la norma— ante el pleno que aprueba la Ley: suministrar una información que “sirva a nuestras gentes para formar su propio juicio, para fijar su propio criterio sobre los acontecimientos cuyo conocimiento cada día se les

²⁴⁰ Decreto de 15 de febrero de 1952 (BOE de 24 de febrero) por el que se organiza el Ministerio de Información Turismo.

va a transmitir”²⁴¹. Y (b) “proporcionar a dicha opinión [pública] cauces idóneos a través de los cuales sea posible canalizar debidamente las aspiraciones de todos los grupos sociales, alrededor de los cuales gira la convivencia nacional”. *La prensa, pues, abandona definitivamente su servicio al Estado para presentarse al servicio de la opinión pública*. Ello no significa, desde luego, que el Estado se desentienda de la institución, pero sí evidencia un giro impulsado por la superación definitiva de las doctrinas falangista y de Arias Salgado (quien, recuérdese, rechazaba la supremacía liberal de la opinión pública sobre el Estado y, en general, sobre toda autoridad) y por la adopción de los postulados más liberales del acenepismo. En el discurso previo a la aprobación en Cortes de la Ley, Manuel Fraga sitúa a la prensa al servicio del público, “porque el periódico no es sólo para la empresa que lo explota, ni sólo para los profesionales que ejercen en él [...]; es sobre todo para el público al que va destinado [...]”²⁴². Esta tesis de la prensa al servicio de la opinión pública había sido sostenida desde tiempo atrás por la doctrina acenepista; mientras que la función de ejercer de cauce de expresión de los grupos sociales no deja de asimilarse a la noción católica de la prensa como portavoz de los intereses generales de la sociedad. Resulta revelador, en este sentido, recuperar el artículo primero del *Borrador de Proyecto de Estatuto de Prensa* elaborado por la ACN de P a principios de los sesenta: en él se establecía como misión de la prensa “servir a la opinión pública mediante una doble función informativa y orientadora; actuar de portavoz de los intereses generales de la sociedad y como órgano de comunicación entre ésta y los poderes públicos [...]” (*loc. cit.* 3.2.3).

En definitiva, por decirlo en pocas líneas, si la concepción de la prensa, de sus funciones y misión, que queda plasmada en la Ley de 1938 es heredera directa de las doctrinas falangistas, la concepción que recoge la Ley de 1966 se encuentra muy influida por la doctrina acenepista.

3.4.2 Noción del papel del Estado en el sistema de prensa

La noción del papel que el Estado franquista había de desempeñar con respecto al sistema de prensa aparece condicionada por, en primer lugar, la concepción misma de lo que el “Nuevo Estado” franquista había de ser; pero, ante todo, por la concepción de la prensa antedicha. Así, esta noción del papel estatal variará en la medida en que lo haga la

²⁴¹ Discurso de Francisco Abella Martín ante el pleno de las Cortes el 15 de marzo de 1966. En *Prensa e Imprenta*. Colección Textos Legales, Gabinete Jurídico Administrativo del Boletín Oficial del Estado, Madrid (España), 1974 (edic. orig. 1966).

²⁴² Discurso de Manuel Fraga Iribarne ante el pleno de las Cortes el 15 de marzo de 1966. En *Prensa e Imprenta*, *ibídem*.

noción de la prensa, de sus funciones y misión: evolucionarán, de cualquier modo, los mecanismos y el grado de intervención del Estado sobre el sistema, pero nunca la legitimidad y pertinencia de la intervención en sí; esto es, serán cuestionados y modificados los mecanismos de actuación, pero en ningún momento llegarán a cuestionarse las potestades de constitución y control estatal.

3.4.2.1 El control exclusivo y absoluto del Estado

La desconfianza que inspira la prensa motivará, efectivamente, la intervención del Estado franquista (aún en construcción) durante los primeros dos años de la Guerra Civil, cuando el aparato de prensa se encuentra aún en poder de los militares. Dos disposiciones de este periodo justifican la intervención estatal en aras de imponer un “remedio pronto y radical”, dada “la enorme gravedad del daño” causado. La Orden de 23 de diciembre de 1936 (BOE de 24 de diciembre), justifica así la imposición de la censura previa en el territorio dominado por el ejército sublevado:

Se ha vertido mucha sangre y ya es inaplazable la adopción de aquellas medidas represivas y de prevención que aseguren la estabilidad de un nuevo orden jurídico y social y que impidan además la repetición de la tragedia.

La última parte de la cita evidencia la culpabilidad que arrastra la prensa para el legislador, quien recoge la visión fascista —aunque compartida por el Ejército y la Iglesia— de aquella como uno de los principales artífices de los males que han abocado al país a la tragedia de la guerra. Al tiempo que se justifica la censura por tal culpabilidad, se fijan los dos mecanismos principales de actuación estatal: (a) “las medidas represivas y preventivas”; esto es, la censura, tanto previa como *ex post*; y (b) la propaganda, que queda justificada en el Decreto de 14 de enero de 1937 del siguiente modo:

La gran influencia que en la vida de los pueblos tiene el empleo de la propaganda, en sus variadas manifestaciones, y el envenenamiento moral a que había llegado nuestra Nación, causado por las perniciosas campañas difusoras de doctrinas disolventes, llevadas a cabo en los últimos años, y la más grave y dañosa que realizan en el extranjero agentes rusos al servicio de la revolución comunista, aconsejan reglamentar los medios de propaganda y difusión a fin de que se restablezca el imperio de la verdad, divulgando al mismo tiempo, la gran obra de reconstrucción nacional, que el nuevo Estado ha emprendido.

Tanto las medidas como, sobre todo, las justificaciones de la intervención estatal, quedarán algo más refinadas a partir de 1938, con la llegada del equipo de jóvenes falangistas encabezados por Serrano Suñer al aparato institucional de prensa. Será entonces la definición de la prensa como “institución nacional” al servicio del Estado el

definitivo argumento legitimador de una intervención poco menos que total. En tanto actúa esta “institución nacional” como mediadora entre Estado y nación, y como formadora de la cultura popular y la conciencia colectiva, “no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado”, al que le quedan por tanto encomendadas, en la Ley, las funciones de *organización, vigilancia y control* del sistema (art. 1).

El Estado viene a imponer así un control absoluto sobre la prensa con el fin de que cumpla ésta su misión “educativa”, que se revela, en realidad, como una misión del Estado mismo. De ahí la concepción eminentemente instrumental que se le confiere a la prensa: ésta no es sino un instrumento del Estado, una mera correa de transmisión encargada de educar a las masas en la doctrina y los nuevos principios rectores. Así queda evidenciado en dos órdenes emitidas durante el periodo de control falangista: en la Orden de 15 de julio de 1939 (BOE de 30 de julio), por la que se crea una Sección de Censura dentro del Ministerio de la Gobernación, se argumenta que “en distintas ocasiones ha sido expuesta la necesidad de una intervención celosa y constante del Estado en orden a la educación política y moral de los españoles [...]”, mientras que en la Orden antes mencionada de 24 de febrero de 1942 (BOE de 4 de marzo) se consideran las publicaciones periódicas como

instrumento a nuestra Educación Popular, por lo que su edición y difusión han de responder a un plan mínimo de selección y de decoro que ofrezcan al Estado, al Partido y al lector español garantías políticas y espirituales imprescindibles [el subrayado es nuestro].

Se constituye, pues, un régimen de intervención definido por Juan Beneyto (1944: 23-24), a la sazón Jefe de los Servicios Centrales de Prensa y Propaganda, como de “prensa dirigida”, no ya por el capital, sino por el Estado, que ejerce a través de ella una labor de educación o adoctrinamiento masivo. La legitimación de esta función educativa procede de la idea de infalibilidad del Estado que subyace a la Ley de 1938 y que años después será recogida por Arias Salgado (v.3.3.1):

Es una ley [aclara Fernández Areal] en la que plasman los ideales sobre el control y regulación de la prensa al servicio de un Estado que se estima cuenta con todas las garantías de acierto y de honestidad y rectitud en su línea política [...] Siendo el Estado cristiano, católico, españolísimo, defensor de los más puros ideales patrios, orientador del pueblo, definidor de las grandes verdades nacionales, lógico parece que el Estado, y sólo él, sea quien oriente la prensa a su servicio y, por tanto, en servicio del sentir nacional, que interpreta, recoge y encarna sin posibilidad de desviación o error (Fernández Areal, *op. cit.*: 178).

Esta noción de infalibilidad estatal confirma una tesis ya apuntada en el capítulo anterior: la Ley de 1938 viene a configurar un sistema “dirigido”, o bien un régimen de intervención *mucho más estatista que falangista*. La misión de educación o adoctrinamiento masivo a través de la prensa corresponde, no al Partido o al Partido con el Estado, sino exclusivamente al Estado, en tanto goza éste en exclusiva de esa presunción de acierto a la que se refiere Fernández Areal. Para Elisa Chuliá, la Ley de Serrano Suñer pretende seguir —aun sin ser una mera copia— la senda marcada por Alemania e Italia en materia de regulación y control de la prensa (Chuliá, 1993: pássim; 2001: 41-42). Esta tesis había quedado en parte sugerida por el propio Ramón Serrano Suñer, quien identificaba su norma con la dogmática totalitaria dominante en parte de Europa en los años treinta:

[...] era una ley [afirmaba en 1966 refiriéndose a la Ley de Prensa de 1938] inspirada en la dogmática que el Régimen profesaba en aquel momento; [...] [en una concepción política] también vigente, aunque con matices diferenciales importantes, en otros países de Europa y que otorgaba al Estado una misión dirigente y promotora sobre todo el orden social [...] (Cit. en Dueñas, *op. cit.*: 59).

Pero esta misión “dirigente y promotora” quedaba monopolizada por el Estado mucho más de lo que los dirigentes falangistas, y probablemente Serrano Suñer, habían pretendido. Tal y como comprobamos, FET de las JONS había propuesto en su *Estatuto de Prensa* un régimen de intervención conjunto de Estado y Partido. A este último le quedaban reservadas importantes atribuciones sobre el sistema; entre ellas, las de orientar y ejecutar buena parte de las actuaciones del Estado. Por si fuera poco, en el capítulo anterior descubrimos las presiones que, dentro del primer gabinete franquista, se dieron a favor de un mayor poder del Partido sobre la prensa. Una nota sin firma conservada junto a la Ley de Prensa llevada a Consejo de Ministros el 22 de febrero de 1938 y titulada “Modificaciones al proyecto de Ley de Prensa” proponía conceder atribuciones a FET de las JONS en la fijación del número de publicaciones permitidas y en el control provincial (v. 2.2.1.2)²⁴³. Tanto el rechazo de las propuestas formuladas por

²⁴³ En concreto, se proponía modificar tres artículos; a saber,

- El primer párrafo del artículo primero debía quedar redactado de la siguiente forma: “Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control [sic] de la institución nacional de la prensa periódica por medio del Gobierno y del Partidoy, en este sentido, compete al Ministro del Interior y al Delegado Nacional de prensa y Propaganda de FET la facultad ordenadora de la misma, incluso regulando el número y extensión de las publicaciones de esta índole.
- El artículo segundo debía redactarse así: “En cada Provincia se creará un Servicio, sometido en lo principal al Delegado Provincial de prensa de F.E.T. y de las J.O.N.S. y al Gobernador Civil, en las materias de su respectiva competencia.
- Por último, proponía incorporar al artículo vigésimo [aunque en la nota se refiera, de forma equivocada al decimotercero] lo siguiente: “A los periódicos de F.E.T y de las

FET de las JONS en su *Estatuto*, como el fracaso de las presiones ejercidas dentro del Consejo de Ministros para conceder mayor poder al Partido revelan dos rasgos muy significativos de este primer franquismo: (a) una concepción dominante del papel que ha de desempeñar el Estado con respecto a la prensa mucho más “estatista” que falangista; y (b) una correlación de fuerzas en el primer gabinete favorable a los militares, los únicos en disposición de hacer fracasar las aspiraciones falangistas y con posibilidades de imponer la antedicha concepción del papel estatal. Este dominio de los militares se confirma al observar la composición del primer Gobierno formado por Franco el 30 de enero de 1938 (Cf. Tamames, 1988: 307). En él se incluyen dos ministros inequívocamente falangistas: Ramón Serrano Suñer, ministro del Interior, y Raimundo Fernández Cuesta, titular de Agricultura y Secretario General del Movimiento (cargo aún sin rango ministerial)²⁴⁴. Frente a ellos se sientan tres ministros militares, titulares además de las carteras más importantes en tiempo de guerra, el Conde Jordana (en Asuntos Exteriores), el general Fidel Dávila Arrondo (en Defensa Nacional) y el General Martínez Anido (titular de Orden Público). A ellos habría que añadir al militar tradicionalista José Antonio Suances (en Industria y Comercio) y, sobre todo, al jefe del Gobierno y del Estado, el propio general Franco, seguramente poco dispuesto a ceder resortes de poder al Partido en su propio detrimento²⁴⁵. Todo parece indicar, por tanto, que los militares pudieron ejercer y de hecho ejercieron una influencia crucial para atenuar el poder de FET sobre el sistema de prensa en la normativa de 1938²⁴⁶. Por todo ello, cabe afirmar que, si bien la primera concepción de la prensa que subyace a la normativa franquista es

J.O.N.S. se les aplicarán las sanciones a), b) y c)”); excluyendo así la posibilidad de incautación del periódico, recogida en el apartado d).

²⁴⁴ Dados sus cargos y la composición de este primer Gobierno, Raimundo Fernández Cuesta parece ser el autor más probable de la anterior nota sin firma y por tanto de las presiones ejercidas en el Consejo de Ministros a favor de un mayor poder de FET sobre la prensa.

²⁴⁵ Completaban este primer gabinete los monárquicos Pedro Sáinz Rodríguez (ministro de Educación), Andrés Amado y Reygondaud (ministro de Hacienda), y los tradicionalistas Alfonso Peña Boeuf (en Obras Públicas), el Conde de Rodezno (en Justicia) y Pedro González Bueno (en Organización y Acción Sindical) (Cf. Tamames, *ibídem*).

²⁴⁶ Si bien no parece haber quedado constancia de documento alguno en el que se evidencie una concepción militar específica sobre la prensa, ello no quiere decir que no tuvieran un proyecto regulador de la materia. El 30 de enero de 1938, el mismo día en que se constituye el primer Gobierno franquista, el delegado del Estado para Prensa y Propaganda, el comandante Miguel Arias Paz, enviaba al marqués de Miraflores, embajador franquista en Lisboa, una carta en la que solicita documentación sobre la ley de prensa portuguesa (La legislación de prensa portuguesa remitida en contestación a la carta se encuentra en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.) Ello sugiere dos posibilidades no excluyentes (Chuliá, *op. cit.*: 40): bien que los militares elaboraban ya, o al menos tenían intención de comenzar a elaborar, una ley de prensa similar a la portuguesa; bien que, conscientes de los inminentes cambios que se avecinaban en el gobierno del aparato de prensa, pretendían guiar la labor que habrían de realizar sus sucesores. De cualquier modo, en ambos casos parece evidente que el comandante Arias Paz trata de contribuir a la constitución de un nuevo ordenamiento jurídico para la prensa, y que, en fin, los militares no habían ni mucho menos renunciado, en enero de 1938, a intervenir o influir sobre la cuestión.

de inspiración fundamentalmente falangista, la noción que, en este primer momento, mantiene el franquismo del papel que el Estado ha de desempeñar sobre el sistema es más “estatista” que falangista; y seguramente estuvo más inspirada en la idea militar de un Estado potente y monopolizador del control de la prensa, que en la falangista de un control de la prensa compartido por Estado y Partido.

3.4.2.2 El Estado como garante del servicio al público

Esta concepción totalitaria o “estatista” del papel del Estado sobre la prensa se mantiene formalmente vigente hasta 1966, aunque en la práctica había sido abandonada al menos desde 1945. En el anterior capítulo comprobamos cómo el desenlace de la II Guerra Mundial había impulsado un giro en el Régimen franquista que había llevado a los propagandistas a asumir el gobierno del aparato de prensa. Los acenepistas —quienes habían expresado en su programa político un rechazo taxativo del totalitarismo y de FET de las JONS (Montero, 1991: 918; 1993: 583-591)— parecen impulsar una primera modificación del papel del Estado sobre el sistema de prensa con la aprobación, en 1945, del Fuero de los Españoles. El Fuero —que pretendía hacer las veces de constitución y a cuya promulgación se habían opuesto José Luis Arrese y otros falangistas (v. 2.2.2)— había sido elaborado por el Instituto de Estudios Políticos, dirigido entonces por Fernando María Castiella, caído poco antes del caballo fascista y convertido al propagandismo. Castiella, mentor de Manuel Fraga Iribarne, había sido, según relata Stanley G. Payne (1987: 362-363), el responsable directo de la inclusión en el Fuero del artículo doce, que *permite* la libertad de expresión: “Todo español [establece el artículo] podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”. De él cabe inferir, pues, una nueva concepción del papel del Estado: (a) para empezar, se presenta como sujeto concesionario de la libertad de expresión, pues ésta “podrá” ser ejercida siempre que no menoscabe los principios fundamentales del Estado; es decir, la libertad de expresión no se contempla como un derecho natural que el Estado viene a reconocer, consagrar y proteger, sino a conceder y permitir. Y (b), por otro lado, se erige en agente regulador o limitador de su ejercicio, acotando los cauces dentro de los cuales puede disfrutarse. Estos se sitúan en los principios fundamentales del Estado franquista; esto es, en la aceptación de los principios rectores del Régimen, además de en las difusas lindes de la “unidad espiritual, nacional y social de España” (art. 33)²⁴⁷.

²⁴⁷ Y es que no era el respeto debido a los principios del Estado la única limitación a la libertad de expresión. Este derecho quedaba limitado, además, por el artículo treinta y tres, según el cual, “El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España”. Por si fuera poco, el Gobierno se reservaba la posibilidad de

En 1952, con la llegada de Arias Salgado al recién creado MIT, comienza a aflorar una nueva concepción del papel del Estado en el sistema de prensa. En el Decreto de organización del Ministerio²⁴⁸, se presenta el Estado como el principal garante —e imprescindible ejecutor— del servicio público que la información está llamada a cumplir, y cuya satisfacción se considera imposible sin la concurrencia del Estado, de sus recursos e instrumentos. Así, las posiciones que Estado y prensa ocupaban en 1938 se invierten, de modo que la función de intermediación ya no es ejercida por la prensa entre el Estado y la nación, sino por el Estado entre la prensa y la opinión pública.

Tanto la noción que sugiere el Fuero de los Españoles, como sobre todo la nueva concepción apuntada en los cincuenta, constituyen el antecedente inmediato de la nueva conceptualización del papel del Estado en el sistema de prensa que queda nítidamente fijada en la Ley de 1966. En su preámbulo, el Gobierno se define como (a) “fiel intérprete del pensar y del sentir del país”, y no ya como el principal educador o forjador del tal pensar y sentir, (b) como árbitro ponderador, “en la forma más equilibrada posible”, de los “diversos factores y las diversas fuerzas e intereses que en la realidad social regulada entran en juego”, y como (c) garante del “máximo desarrollo y máximo despliegue” de la libertad de expresión, “consagrada en” (y no ya concedida o permitida por) el artículo doce del Fuero de los Españoles y limitada por “las exigencias inexcusables del bien común, la paz social y de un recto orden de convivencia para todos los españoles”. Se presenta, en fin, el Estado como *intérprete* del sentir nacional, *árbitro* de los diversos intereses y *garante* de la libertad de expresión: todo ello marca, como es obvio, su intervención sobre el sistema de prensa dirigida a garantizar el servicio al público. En el discurso ante el pleno de las Cortes previo a la aprobación de la Ley, Manuel Fraga había defendido la “institucionalización de la prensa”, eufemismo tras el que se esconde la intervención estatal, en aras precisamente de garantizar tal servicio al público:

Porque el periódico no es sólo para la empresa que lo explota, ni sólo para los profesionales que ejercen en él [...]; es sobre todo para el público al que va destinado, el cual tiene derecho a una institucionalización de la prensa y asimismo a unas garantías en cuanto al uso de los medios informativos. Por eso está justificada, frente a la propaganda exterior, frente a las presiones económicas de grupos extranjeros o internacionales, políticos, ideológicos o económicos, una Ley que limite el control directo de las empresas, que limite la acción a través del monopolio de suministros,

suspender la libertad de expresión en el artículo 35: “La vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-ley, que taxativamente determine el alcance y duración de la medida”.

²⁴⁸ Decreto de 15 de febrero de 1952 (BOE de 24 de febrero), por el que se organiza el Ministerio de Información y Turismo.

que evite, hasta donde sea posible, cualquier filtración de influencia por parte del sector de la publicidad [...]²⁴⁹.

Dos cuestiones derivadas del nuevo papel del Estado quedan por resolver: primero, ¿por qué debe garantizar el Estado esta función de la prensa al servicio del público?, es decir, ¿qué peligros o amenazas impedirían, de no concurrir el Estado, la satisfacción del servicio al público?; y, en segundo lugar, ¿cómo o a través de qué mecanismos pretende ejercer el Estado su labor de garante?

La primera de las cuestiones bien puede responderse a partir del discurso de Manuel Fraga, en el que se muestra muy preocupado por las presiones políticas y económicas que pudieran afectar a la prensa (*Cf. Schulte, op. cit.: 44*): es precisamente la salvaguarda de la independencia de la prensa frente a estas presiones de grupos “políticos, ideológicos o económicos” la que justifica la intervención estatal en el sistema. Dicha intervención se situaría, por tanto, en una vía intermedia entre la inhibición liberal y el control absoluto totalitario: Fraga esboza una peculiar “tercera vía” de regulación estatal del sistema de prensa a partir del rechazo de los sistemas liberal y totalitario:

En más de una ocasión [proclama el ministro] he oído exponer a un delegado de un gran país occidental el principio de una total y absoluta libertad de expresión garantizada por la Constitución que, en el caso de ese país, quizá sea fundamentalmente una libertad de la comunidad de negocios para organizar también grandes empresas periodísticas de radio y televisión; y a continuación he oído exponer al representante de la Unión Soviética cómo esas libertades son todas ellas falsas, son solamente libertades para grupos privilegiados, y que la libertad popular solamente se alcanza, en prensa como en lo demás, cuando la máquina del Partido y el poder del Estado se apoderan de ella para ponerla al servicio de la comunidad. La verdad es que ni en una ni en otra formulación ideológica, que de hecho no corresponden a la realidad, a lo que en la práctica ocurre en uno ni en otro caso, está la solución verdadera²⁵⁰.

La solución verdadera o la “auténtica libertad de prensa efectiva y responsable” ya no procede, pues, de su sometimiento absoluto al Estado, ni siquiera de su “orientación” por el Estado, como preconizaba su antecesor al frente del MIT, Arias Salgado²⁵¹. La “auténtica libertad de prensa” surge de la conjugación de cierta libertad empresarial y de la intervención del Estado, siempre al servicio del público. Se trata, por supuesto, como

²⁴⁹ Discurso de Manuel Fraga Iribarne ante el pleno de las Cortes el 15 de marzo de 1966. En *Prensa e Imprenta*. Colección Textos Legales, Gabinete Jurídico Administrativo del Boletín Oficial del Estado, Madrid (España), 1974 (edic. orig. 1966).

²⁵⁰ *Ibidem*.

²⁵¹ Recuérdesse que Gabriel Arias Salgado también había planteado una tercera vía ni liberal ni totalitaria, y definida como “régimen de prensa orientada”. La peculiar vía de Arias no se encontraba, sin embargo, equidistante del liberalismo y del totalitarismo, sino mucho más próxima al segundo que al primero (v. 3.3.1).

acaso haya podido ya advertirse, de una “tercera vía” muy similar a la que venía postulando el acenepismo desde tiempo antes, y que acabará plasmándose, como luego veremos, en una cierta apertura aparente controlada por la acción vigilante e injerente de la Administración.

A la cuestión relativa a los mecanismos de intervención del Estado ayuda a responder Francisco Abella en su discurso ante el pleno de las Cortes el 18 de marzo de 1966: Abella considera en él que, frente a la prevención distintiva del periodo anterior, opta el nuevo marco jurídico español por la represión y la responsabilidad:

La censura previa y la consulta obligatoria, como potestades de la Administración, desaparecen [de la Ley de 1966], salvo en los casos de excepción o de guerra. El Proyecto de Ley, ante el dilema de censura o responsabilidad, opta por la segunda, pues si bien es verdad que la posibilidad de que se produzca una falta, una infracción, no debe ser causa que justifique una limitación en el ejercicio de la libertad, no lo es menos que, en razón a los supremos intereses por los que el Estado ha de velar en todo caso, se precisa de manera indispensable fijar un mecanismo que a la sociedad garantice, frente a la transgresión posible, el mantenimiento del orden jurídico establecido, y el elegido ha sido éste: la fijación y la exigencia de responsabilidad por los actos cometidos.

La fijación y exigencia de responsabilidades se traducirá en el orden práctico, en el mantenimiento de la censura *ex post*, y en las posibilidades que se reserva la Administración de imponer sanciones y de secuestrar publicaciones, sin necesidad, al menos inicialmente, de intervención judicial. Javier Terrón ha señalado que la pervivencia durante veintiocho años de una Ley tan represiva como la de Serrano Suñer,

atestigua [...] la inexistencia de una hegemonía ideológica en el ámbito de la ‘sociedad civil’ con la suficiente fuerza por sí misma como para imponerse al conjunto de la población sin el recurso directo del aparato (represivo) de Estado (Terrón, 1981: 54).

Del mismo modo, en esta misma clave cabe interpretar la persistencia a partir de 1966 de los mecanismos vigilantes y represivos del Estado: la creación de un aparato alega de vigilancia empresarial, el mantenimiento de la censura *ex post*, así como las sanciones y secuestros administrativos, o, en fin, esa “exigencia de responsabilidades” por la que opta la Ley, bien puede ser contemplada como una evidencia más del fracaso del franquismo en la labor de construcción de un consenso favorable a los principios fundamentales del Régimen; así como la confirmación de la pervivencia de los viejos recelos hacia la prensa que el “Nuevo Estado” no dejará de manifestar hasta su desarticulación en 1975.

4. Estructura del sistema de prensa privada tardofranquista

El estudio de las bases de la intervención tardofranquista sobre el sistema español de prensa privada quedaría incompleto sin un repaso introductorio a los aspectos básicos que componen su estructura. Y ello en la medida en que tales componentes fueron, no sólo factores condicionantes de dicha intervención, sino, también y al tiempo, su resultado mismo. A pesar pues de la inclusión del análisis estructural en este primer bloque de la investigación, dedicado a las bases de la intervención estatal, es preciso tener bien presente que la estructura del sistema de prensa que se pondrá en evidencia en estas páginas no sólo condicionó y fundamentó la actuación tardofranquista en la materia, sino que dimanó también de ella.

En la parte de la introducción dedicada al marco teórico y metodológico aludimos ya al concepto de “estructuración” planteado por Vincent Mosco (2009), de acuerdo con el cual, estructura y acción se constituyen e influyen mutuamente. El traslado de este presupuesto teórico a nuestro objeto de estudio nos abre las puertas a una concepción de las actuaciones de dirigentes franquistas, “familias” y grupos de poder –todas ellas inscritas en el marco institucional analizado y guiadas por las doctrinas sobre prensa antedichas– condicionada por la estructura del sistema; del mismo modo que dicha estructura quedó afectada por tales actuaciones; a una concepción, en fin, de la política informativa y la estructura sistémica como “mutuamente constituidas”.

El análisis estructural que proponemos centra el foco en tres componentes elementales del sistema de prensa tardofranquista. En primer lugar y como es obvio, en las variaciones de la población de empresas y diarios, en su propiedad y en sus índices de difusión durante el periodo. Atendemos inmediatamente después a tres modalidades de concentración de la prensa: geográfica, empresarial y de propiedad; para acabar observando, al final del capítulo, las conexiones del sistema con el poder político y económico del Régimen, con el fin de constatar su grado de integración en el aparato de poder del país.

Dada la amplitud del universo de estudio –compuesto por más de setenta empresas de prensa y otros tantos diarios– hemos acotado el análisis a los momentos inicial y final del periodo: 1967, primer año natural completo de vigencia de la LPI, y 1975, último año de la dictadura. La comparación de ambas fotos fijas en el tiempo nos permitirá dilucidar las dinámicas del periodo, los cambios más relevantes y, con ellos, las tendencias estructurales más significativas de la última década de dictadura. Todos los

datos que han sustentado el análisis se encuentran recopilados en el “Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975)” que acompaña al cuerpo central de la memoria.

Ya desde el primer aspecto analizado, relativo a la natalidad y mortalidad de publicaciones y empresas, puede apreciarse la influencia de la intervención del Régimen, que como comprobaremos, abrió el sistema a nuevos proyectos e iniciativas entre 1966 y 1969 para clausuralo desde aquel año y hasta 1975 (v. capítulo 5).

En lo que al análisis de la difusión se refiere, es preciso insistir en los problemas que presenta cualquier intento de estudio riguroso de la situación anterior a 1980. Las dificultades se deben a dos circunstancias: a la tardía aparición de un organismo fiable encargado del control de la difusión; y a los recelos que tradicionalmente han mostrado las empresas periodísticas con respecto a la publicación de estos datos, dado que de ellos dependían en gran medida sus ingresos publicitarios²⁵². A pesar de la prudencia que impone la precaridad de las fuentes, no parece desencaminado colegir que la prensa privada tardofranquista presentó una difusión más bien exigua y dominada, por lo general, por no más de cinco cabeceras de Madrid y Barcelona. Ello dibujaría un mercado de prensa más concentrado de lo que la multitud y dispersión de cabeceras pudiera inicialmente sugerir; y confirmaría la situación esbozada por R. B. Nixon en 1975²⁵³, en la que cuatro diarios (tres de ellos privados) –*La Vanguardia Española*, *Abc* de Madrid, *Pueblo* y *Ya*– acaparaban el 29% del mercado español; ocho publicaciones concentraban el 42% de la difusión; y veinte diarios alcanzaban al 55% de los lectores.

El estudio de la concentración del sistema de prensa se ha centrado, no obstante, más que en la concentración del mercado, en la concentración geográfica de empresas y cabeceras, en la acumulación de propiedad de los empresarios de prensa y en los procesos de integración horizontal entre editoras. La primera modalidad de concentración dibuja un panorama muy desigual: con vastas zonas del país sin referentes informativos (o con la prensa del Movimiento como única referencia), y otras, las más importantes política y económicamente, con cinco o más diarios privados de entre los más leídos del país.

El capital de la la mayor parte de ellos se encontraba, además, controlado por una única persona, sociedad o familia. Como veremos, en 1967 y 1975, la mitad de las empresas periodísticas editoras de información general eran propiedad en un 50% o más

²⁵² Así, en 1967, tres años después de su creación, la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) controlaba la difusión de menos de la mitad de los diarios privados de información general existentes; mientras que en 1975, su control se extendía sobre 37 de las 66 cabeceras. Con todo, hemos optado, como explicamos en la introducción, por tomar como referencia los datos de la OJD, completados por los aportados por Alfonso Nieto a partir de las aportaciones de las empresas a la Institución San Isidoro (v. Introducción).

²⁵³ R. B. Nixon (1975): “Concentration of Press Ownership”, en *Journalism Quarterly*

de una única persona física o jurídica; y treinta grandes empresarios poseían las cabeceras más influyentes.

Por lo demás, no se dieron durante el periodo grandes procesos de integración horizontal, a pesar de una legislación más que permisiva y de los frecuentes lamentos de la Administración ante la atomización del sistema. Además de detenernos en las pocas cadenas y grupos de prensa con más de un diario privado de información general, trataremos de explicar los distintos factores que frenaron la integración entre editoras.

Cierra el análisis estructural el estudio de la integración de la prensa privada en el aparato de poder político y económico del Régimen. Como explicamos en la introducción, hemos indagado en la presencia de los componentes de los órganos de gobierno de las empresas editoras de prensa –cuya composición debía ser comunicada al REP por imperativo legal– en las Cortes franquistas y en los Consejos de Administración de las principales empresas financieras e industriales del país. Las interconexiones resultantes –detalladas en el Apéndice que acompaña a la memoria– nos han permitido valorar el grado de vinculación para los años 1967 y 1975²⁵⁴ y colegir la más que notable cooptación de que fueron objeto los empresarios y directivos de prensa por en la élite del poder político financiero e industrial del tardofranquismo.

4.1 Evolución del número de diarios y de la difusión

Entre 1966 y 1975, 70 empresas periodísticas privadas editaron 72 diarios de información general, aunque no todas se mantuvieron en activo durante los nueve años del periodo. Al finalizar 1967, había en España 66 diarios privados de información general, el mismo número que en el último año de la dictadura. Sin embargo, el panorama de la prensa española fue mucho menos estable de lo que indican las cifras. Durante el tardofranquismo, el Ministerio de Información y Turismo autorizó la aparición de 8 publicaciones diarias y la reaparición de otra que había dejado de editarse durante unos meses; mientras que 6 diarios cerraron o fueron clausurados en el mismo periodo. En lo que a la difusión²⁵⁵ se refiere, las cifras se mantuvieron, por lo general,

²⁵⁴ Al contrario que en el estudio de las vinculaciones con el poder político, en el caso de las conexiones con la economía española hemos considerado como vinculaciones únicamente las de aquellos consejeros de prensa que ostentaban cargos en otras empresas durante el mismo año, ya fuera en 1967, ya en 1975. Es decir: sólo hemos considerado vinculadas a las empresas que tenían en sus consejos a la misma persona *el mismo año*.

²⁵⁵ De acuerdo con el reglamento de la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD), la “difusión” aglutina el número de ejemplares vendidos al número y por suscripción, así como aquellos distribuidos gratuitamente a personas o entidades (cit. en Nieto & Mora, 1989: 126). Se diferencia, pues, de la “tirada”, referida al total de ejemplares salidos de la imprenta y en condiciones de ser distribuidos (*Ibídem*).

bajas y estables, experimentando un leve incremento no exento de altibajos y excepciones.

A pesar de las dificultades de contabilización de la difusión a las que nos referíamos antes, podemos afirmar que, durante el tardofranquismo, ésta se mantuvo en niveles inferiores a los de los países próximos de la Europa Occidental y cercanos al umbral de 100 ejemplares por cada mil habitantes fijado por la UNESCO como el mínimo diario para un país suficientemente informado (Sevillano, 2003: 91). A finales de los sesenta, experimentó un incremento progresivo, coincidiendo con una coyuntura de bonanza económica, con la aprobación de la Ley Fraga y con la aparición o reaparición de casi una decena de diarios. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), el centenar de periódicos españoles (entre publicaciones privadas, estatales, de información general y otras temáticas) difundían, un año antes de la aprobación de la LPI, 1.748.599 ejemplares de media cada día; cifra que se incrementaría de forma sostenida en los años siguientes hasta alcanzar los 2.363.046 ejemplares/día de 1969 (Nieto, 1973: 124). La coyuntura expansiva no duraría sin embargo demasiado: a principios de los setenta vuelve a producirse un estancamiento de la difusión (Sevillano, *op. cit.*: 90), muy probablemente ligado a la crisis económica y al cierre del sistema de prensa ordenado por Alfredo Sánchez Bella y Luis Carrero Blanco (v. bloque II).

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, en 1967 sólo cuatro diarios privados de información general superaban los 100.000 ejemplares de difusión diaria²⁵⁶: eran *La Vanguardia*, de Barcelona; y los madrileños *Abc*, *Ya* y *El Alcázar* editado por Prensa y Ediciones, S.A. (PESA). Ninguna otra publicación se incorporaría en los años siguientes a este grupo, del que incluso desaparecía desde 1969 *El Alcázar*, cuyo desplome coincide con el giro ultraderechista patrocinado por su nueva empresa editora, Diarios y Revistas, S.A. (DYRSA). Otros ocho diarios difundieron durante el periodo entre 50.000 y 100.000 ejemplares: *El Correo Español*, *La Gaceta del Norte*, *El Noticiero Universal*, *Informaciones*, *La Voz de Galicia*, *El Correo Catalán*, *Abc* (de Sevilla) y *Heraldo de Aragón*. La mayor parte de la prensa española no alcanzaba, pues, los 50.000 ejemplares de difusión media diaria, e incluso muchos presentaban cifras inferiores a los 15.000 ejemplares/día.

Tres factores contribuyen a explicar estos bajos índices de difusión. En primer lugar, las graves deficiencias del sistema de distribución, agravadas por las carencias infraestructurales, las altas tasas del transporte aéreo, la ineficacia de los créditos oficiales destinados a su optimización y la negativa de los grandes diarios a la creación de

²⁵⁶ Por lo demás, sólo un diario de información general de titularidad estatal igualaba estas cifras. Se trata de *Pueblo*, que según la OJD difundía 177.494 ejemplares en 1967 (Nieto, *op. cit.*: 124) y 182.220 en 1975 (Nieto & Mora, 1989: 264).

una distribuidora estatal (v. 7.1.2.1). Menos tangible, aunque no menos importante, fue la evidente falta de libertad y de pluralismo informativo que padecía la prensa española (Sevillano, 2003: 91). La tamización del sistema a aquellas empresas y empresarios menos combativos con el Régimen no pudo sino mermar su credibilidad; sin olvidar que, en 15 de las 51 provincias españolas, ni siquiera hubo durante el tardofranquismo prensa privada, de modo que, o bien carecían sus habitantes de diarios, o bien contaban con la prensa del Movimiento como única referencia. A todo ello hay que añadir, por si fuera poco, el problema endémico de los pobres índices de lectura de la sociedad española, agravado por unas tasas de analfabetismo que no comenzarían a asimilarse a las de los países de nuestro entorno hasta los años setenta²⁵⁷.

TABLA 1:Empresas de prensa, diarios privados de información general y difusión en 1967 y 1975

Empresas periodísticas privadas	Diarios de información general	1967		1975
		ISI ²⁵⁸	OJD	OJD
Prensa Española, S.A.	<i>Abc</i> (Madrid)	194.484	204.755	187.484
Prensa Española, S.A.	<i>Abc</i> (Sevilla)	62.536	65.323	66.474
El Adelantado de Segovia, S.L.	<i>El Adelantado de Segovia</i>	3.884	-	-
Hijos de Francisco Núñez, S.R.C.	<i>El Adelanto</i>	8.441	-	-
PESA/HNSA/Diarios y Revistas, S.A.	<i>El Alcázar</i>	101.693	101.113	13.119
Prensa Aragonesa, S.A.	<i>Aragón Exprés</i>	x	x	-
Antonio Gómez Rubio	<i>Área</i>	4.864	-	-
El Comercio, S.A.	<i>El Comercio</i>	13.485	13.586	18.916
Editorial Sevillana, S.A.	<i>El Correo de Andalucía</i>	8.441	-	27.239
F. Prensa Tradicionalista, S.A.	<i>El Correo Catalán</i>	59.418	57.211	67.001
Bilbao Editorial, S.A.	<i>El Correo Español</i>	94.034	76.645	86.479
Editorial Compostela, S.A.	<i>El Correo Gallego</i>	5.029	5.447	-
Herederos de Leoncio Rodríguez González	<i>El Día</i>	13.525	-	24.071
Editorial Católica Abulense Pío XII	<i>El Diario de Ávila</i>	5.799	-	-
Antonio Carrillo Kábana/Canaria de Avisos, S.A.	<i>Diario de Avisos</i>	1.600	-	-
Barcelonesa de Publicaciones, S.A.	<i>Diario de Barcelona</i>	28.796	-	28.743
Diario de Burgos, S.A.	<i>Diario de Burgos</i>	12.236	12.358	14.658
Federico Joly y Cía. S. en C.	<i>Diario de Cádiz</i>	19.584	19.127	26.973
Ilustración, S.A.	<i>Diario Femenino-Mundo</i>	-	-	-
	<i>Diario</i>			
Hnos. D. J. y D. Fco. Verdera Ribas	<i>Diario de Ibiza</i>	2.167	-	-
Diario de León, S.A.	<i>Diario de León</i>	-	5.934	5.047
Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A.	<i>Diario de Lérida</i>	-	-	-
Editora Balear, S.A.	<i>Diario de Mallorca</i>	25.800	8.450	19.466
Editorial Cantabria, S.A.	<i>El Diario Montañés</i>	8.367	-	-
La Información, S.A.	<i>Diario de Navarra</i>	29.500	30.110	38.653
Diario Palentino-El Día de Palencia, S.L.	<i>El Diario Palentino-El Día</i>	8.154	-	-

²⁵⁷ Al inicio de la década de los sesenta, un 12'1% de los españoles era analfabeto; porcentaje que se reduciría durante la década hasta la cifra de 8'8% en 1970 (De Riquer, 2010: 837).

²⁵⁸ Dada la escasez de diarios controlados en 1967 por la OJD hemos decidido incluir a modo indicativo, para ese año, las cifras de difusión calculadas por Alfonso Nieto a partir de las donaciones realizadas por las empresas editoras a la Institución San Isidoro, una escuela-hogar para huérfanos de periodistas que recibía 0,05 pesetas por cada ejemplar vendido el primer martes de cada mes (v. apartado 1.5 de la Introducción).

	<i>de Palencia</i>			
Editorial Prensa Canaria, S.A.	<i>Diario de Las Palmas</i>	20.467	17.896	15.401
Diario de Pontevedra, S.A./Coop. Prod.	<i>Diario de Pontevedra</i>	-	-	-
Diario Pontevedra				
Diario Regional, S.A.	<i>Diario Regional</i>	8.493	-	-
Soc. Vascongada de Publicaciones, S.A.	<i>El Diario Vasco</i>	34.833	33.458	31.599
Editorial Extremadura, S.A.	<i>Extremadura</i>	-	-	-
Joaquín Ferrer y Cía, S.L.	<i>El Faro de Ceuta</i>	4.473	-	-
Faro de Vigo, S.A.	<i>El Faro de Vigo</i>	39.567	37.785	38.769
Ferrol Ediciones, S.A.	<i>Ferrol Diario</i>	x	x	-
Editorial Vizcaína, S.A.	<i>La Gaceta del Norte</i>	95.340	84.856	85.557
Heraldo de Aragón, S.A.	<i>Heraldo de Aragón</i>	64.927	61.170	62.131
Editorial Católica, S.A.	<i>Hoy</i>	10.539	11.184	22.074
Mediterranean Publishing Co., S.A.	<i>Iberian Daily Sun</i>	x	x	-
Editorial Católica, S.A.	<i>Ideal</i>	22.165	22.411	26.885
Editorial Católica, S.A.	<i>El Ideal Gallego</i>	18.155	13.693	15.619
Prensa Castellana, S.A.	<i>Informaciones</i>	22.394	-	72.145
Madrid, Diario de la Noche, S.A.	<i>Madrid</i>	60.434	60.563	x
Majorca Daily Sun, S.A.	<i>Majorca Daily Bulletin</i>	-	-	-
Editorial Menorca, S.L.	<i>Menorca</i>	2.803	-	-
Julio García Peri	<i>Nivel</i>	x	x	x
Editorial Compostela, S.A.	<i>La Noche</i>	4.945	-	x
Editorial El Norte de Castilla, S.A.	<i>El Norte de Castilla</i>	21.271	20.500	24.888
Editorial El Noticiero, S.A.	<i>El Noticiero</i>	31.823	11.948	-
M. Carreño López/ Empresa Periodística Ed. Cartagena, S.A	<i>El Noticiero de Cartagena</i>	-	-	x
Editorial Mencheta, S.A.	<i>El Noticiero Universal</i>	87.539	80.011	78.866
Nueva Rioja, S.A.	<i>Nueva Rioja</i>	16.331	-	-
PESA/Prensa Económica, S.A.	<i>Nuevo Diario</i>	14.882	-	-
Económico Cultural Alavesa, S.A.	<i>Norte Exprés</i>	5.338	-	-
Editorial Navarra, S.A.	<i>El Pensamiento Navarro</i>	13.558	-	-
Pedro García Munera	<i>Primera Página</i>	x	x	x
El Progreso, S.L.	<i>El Progreso</i>	10.069	-	10.451
Editorial Prensa Canaria, S.A.	<i>La Provincia</i>	9.185	-	27.492
Federico Doménech, S.A.	<i>Las Provincias</i>	34.497	37.325	44.657
Acción Social Católica, S.A.-La Región, S.A.	<i>La Región</i>	9.198	8.826	11.249
Editorial Gráfica Asturiana, S.A.	<i>Región</i>	19.139	-	-
Empresa Periodística España, S.A.	<i>Sol de España</i>	2.017	-	16.391
Servicio de Publicaciones, S.A.	<i>S-P Diario</i>	x	x	x
M. Real y Cía. S.L.	<i>La Tarde</i>	9.003	-	-
Diario Tele-Exprés, S.A./Barcelona Press, S.A.	<i>Tele-Exprés</i>	37.851	37.563	35.631
Última Hora, S.A.	<i>Última Hora</i>	-	-	11.382
Talleres de Imprenta, S.A.	<i>La Vanguardia Española</i>	219.754	219.208	222.685
Editorial Católica, S.A.	<i>La Verdad</i>	20.588	20.825	42.664
Pedro García Munera	<i>La Voz de Albacete</i>	7.337	-	-
La Voz de Asturias, S.A.	<i>La Voz de Asturias</i>	18.562	15.900	14.851
Jesusa López Marqués	<i>La Voz de Avilés</i>	3.500	-	-
La Voz de Galicia, S.A.	<i>La Voz de Galicia</i>	45.046	45.083	70.734
Editorial Católica, S.A.	<i>Ya</i>	142.988	131.590	168.756

Fuente: Nieto, 1973: 124; Nieto & Mora, 1989: 264-265

Entre 1966 y 1975, el mapa español de prensa diaria se vio alterado tanto por las circunstancias económicas como por la actuación de la Administración. Ocho diarios privados de información general aparecieron durante el periodo: *Aragón Exprés*; *Diario*

Femenino, *Ferrol Diario*, *Iberian Daily Sun*, *Nuevo Diario*, *Primera Página*, *S-P Diario* y *Nivel*; y otro, el *Diario de Pontevedra*, volvió a las calles después de unos meses de cierre y un cambio de editores. Por el contrario, seis diarios desaparecieron durante el tardofranquismo: la mayor parte abandonó el sistema de prensa por motivos económicos, aunque dos publicaciones (*Madrid* y *Nivel*) fueron clausuradas por la Administración²⁵⁹.

CUADRO 1: Diarios de información general creados y cerrados durante el tardofranquismo

Empresas privadas	Diarios	Autorizados	Cerrados
Prensa Aragonesa, S.A.	<i>Aragón Exprés</i>	23 de abril de 1969	
Editorial Compostela, S.A.	<i>La Noche</i>		1 de diciembre de 1967
Ilustración, S.A.	<i>Diario Femenino-Mundo Diario</i>	27 de octubre de 1967	
Diario de Pontevedra, S.A./Coop. Prod. Diario Pontevedra	<i>Diario de Pontevedra</i>	2 de abril de 1968 (reaparece)	6 de junio de 1967
Ferrol Ediciones, S.A.	<i>Ferrol Diario</i>	17 de julio de 1969	
Mediterranean Publishing Co., S.A.	<i>Iberian Daily Sun</i>	28 de enero de 1969	
Madrid, Diario de la Noche, S.A.	<i>Madrid</i>		25 de noviembre de 1971
Julio García Peri	<i>Nivel</i>	31 de diciembre de 1969	31 de diciembre de 1969
M. Carreño López/Empresa Period. Ed. Cartagena, S.A	<i>El Noticiero de Cartagena</i>		Junio de 1974
Prensa y Ediciones, S.A./Prensa Económica, S.A.	<i>Nuevo Diario</i>	8 de septiembre de 1967	
Pedro García Munera	<i>Primera Página</i>	23 de marzo de 1968	Julio de 1972
Servicio de Publicaciones, S.A.	<i>S-P Diario</i>	1967	1969

Fuente: elaboración propia

Como puede apreciarse en el cuadro, todos los diarios que aparecieron durante el tardofranquismo fueron autorizados en la década de los sesenta, durante el mandato ministerial de Manuel Fraga. A ello contribuyeron, muy probablemente, unas circunstancias económicas propicias y la aprobación de un marco legal menos restrictivo; pero, sobre todo, la política de apertura del sistema de prensa diaria aplicada por el MIT. La liberalidad en la concesión de autorizaciones administrativas que caracterizó el periodo de Fraga queda realzada al confrontarse con la actuación de su sucesor. La clausura administrativa del diario *Nivel* decretada por Alfredo Sánchez Bella el último día de 1969 supuso el primer aldabonazo de la nueva política ministerial. Desde entonces y hasta el final de la dictadura, desaparecían tres cabeceras y ninguna empresa

²⁵⁹ Las circunstancias concretas que acompañaron las fundaciones y desapariciones de los diarios quedan explicadas en los capítulos quinto y sexto de la memoria.

periodística sería autorizada a editar un nuevo diario de información general en España. La explicación de esta regresión remite, una vez más, al cambio de coyuntura económica, que empujó a la quiebra a, al menos, tres diarios; pero sobre todo al cambio de contexto político y al cierre administrativo decretado por el MIT, contrario a la entrada de nuevos “microbios” (Sánchez Bella *dixit*²⁶⁰) que pudieran afectar a un Régimen próximo al colapso.

4.2 La concentración del sistema de prensa

Alfonso Nieto y Juan Miguel Mora definen concentración informativa como

la acumulación en una entidad, física o jurídica, de la propiedad de medios materiales, o el dominio sobre relaciones comerciales —venta al número, publicidad— en un área de difusión concreta, que supone aumento del poder de informar (1989: 78).

La definición resulta útil en la medida en que recoge las tres modalidades de concentración que hemos considerado en nuestro estudio: la concentración provincial o disposición de las cabeceras privadas en el territorio nacional de acuerdo con la realidad política y económica del país; la concentración de la propiedad o acumulación del capital de las empresas editoras por una o varias personas físicas o jurídicas; y la concentración empresarial, de la que hemos estudiado fundamentalmente la formación de cadenas de prensa mediante procesos de integración horizontal entre editoras, dejando de lado la integración vertical, a la que aludiremos indirectamente en el último apartado del capítulo. De los cinco tipos principales de concentración informativa identificados por Carles Llorens (2003: 43) —empresarial, de la propiedad, de mercado, de audiencia y política— hemos centrado pues el foco en los dos primeros, y añadido una tercera modalidad geográfica. Por otra parte, las cifras de difusión de los diarios privados reseñadas en el anterior apartado indican —con todas las cautelas que impone, insistimos, la precariedad de los datos— una notable concentración del mercado de la prensa diaria, dominado por no más de cinco cabeceras que difundían la mayor parte de los números distribuidos cada día en el país.

Cada una de las modalidades de concentración ofrece un panorama diverso y complementario de la estructura de la prensa tardofranquista española. Por lo general, el país contó, durante el último periodo de la dictadura, con una prensa geográficamente dispersa y de alcance local, con numerosas provincias sin referentes informativos y el

²⁶⁰ V. bloque II

mayor número de cabeceras concentradas en las regiones políticamente más relevantes y/o económicamente más potentes: Madrid, Cataluña y Baleares. El capital de los diarios más influyentes estuvo dominado por apenas una treintena de grandes empresarios de prensa, en su mayor parte ligados al poder político del Régimen y con intereses en otros sectores de la economía española. Por lo demás, no se produjeron durante el periodo grandes procesos de integración horizontal entre editoras, de modo que el sistema siguió manteniendo la atomización de los años precedentes y siguió contando con apenas dos grandes grupos de diarios de alcance interregional: la Editorial Católica, de la ACN de P, y una cadena castellana controlada por el Banco Atlántico-Bankunión a través de un entramado de empresas.

4.2.1 La concentración provincial

Aunque el mapa de la prensa española se caracterizó, durante el tardofranquismo, por una notable dispersión y multiplicidad de pequeñas cabeceras locales, los diarios más leídos tendieron a concentrarse en las provincias más ricas del país; especialmente en las dos ciudades principales: Madrid y Barcelona, que contaban, además, con las únicas cuatro cabeceras privadas que superaban los 100.000 ejemplares diarios: *La Vanguardia Española*, en Barcelona; y *Abc*, *Ya* y *El Alcázar*, en Madrid.

Los 66 diarios privados de información general que existían en 1967 en España se repartían en 45 provincias. Más de un tercio de ellos (23 diarios) procedían, sin embargo, de cinco demarcaciones: Madrid, Barcelona y Baleares, con cinco diarios cada una; y La Coruña y Oviedo, con cuatro diarios por provincia. Sólo en Santa Cruz de Tenerife se editaban tres diarios; mientras que en 9 provincias del país se publicaban dos; en 20 existía un solo diario de información general; y otras 16 provincias carecían de prensa privada. El último año de la dictadura la situación era casi idéntica: las mismas cinco provincias acogían a 25 de los 66 diarios privados de información general: 6 se editaban en Madrid y otros tantos en Barcelona; la mayor parte de ellos se encontraban entre los más difundidos del país. En Baleares seguían editándose 5 diarios; y en La Coruña y Oviedo, 4. Con 3 diarios contaban Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, mientras que la mayoría de provincias seguía teniendo, el último año del franquismo, dos diarios (7 provincias), uno (22 provincias) o ninguno (15 provincias).

TABLA 2: Diarios de información general por provincias²⁶¹

Provincia	Diarios	Porcentaje de diarios	
		1967	1975
Álava	<i>El Pensamiento Alavés-Norte Exprés</i>	1'51%	1'51%
Albacete	<i>La Voz de Albacete</i>	1'51%	1'51%
Alicante	<i>Primera Página</i>	x	1'51%
Almería	-	-	-
Ávila	<i>Diario de Ávila</i>	1'51%	1'51%
Badajoz	<i>Hoy</i>	1'51%	1'51%
Balears	<i>Diario de Ibiza</i>	7'57%	7'57%
	<i>Diario de Mallorca</i>		
	<i>Majorca Daily Bulletin</i>		
	<i>Menorca</i>		
	<i>Última Hora</i>		
Barcelona	<i>El Correo Catalán</i>	7'57%	9'09%
	<i>Diario de Barcelona</i>		
	<i>El Noticiero Universal</i>		
	<i>Tele-Exprés</i>		
	<i>La Vanguardia</i>		
	<i>Española</i>		
Burgos	<i>Diario de Burgos</i>	1'51%	1'51%
	<i>Extremadura</i>		
Cáceres	<i>Área</i>	3'03%	3'03%
Cádiz	<i>Diario de Cádiz</i>	3'03%	3'03%
Castellón	-	-	-
Ciudad Real	-	-	-
Córdoba	-	-	-
La Coruña	<i>Ferrol Diario</i>	6'06%	6'06%
	<i>El Correo Gallego</i>		
	<i>El Ideal Gallego</i>		
	<i>La Voz de Galicia</i>		
	<i>La Noche</i>		x
Cuenca	-	-	-
Gerona	-	-	-
Granada	<i>Ideal</i>	1'51%	1'51%
Guadalajara	-	-	-
Guipúzcoa	<i>El Diario Vasco</i>	1'51%	1'51%
Huelva	-	-	-
Huesca	-	-	-
Jaén	-	-	-
León	<i>Diario de León</i>	1'51%	1'51%
Lérida	<i>Diario de Lérida</i>	1'51%	1'51%
Logroño	<i>Nueva Rioja</i>	1'51%	1'51%
Lugo	<i>El Progreso</i>	1'51%	1'51%
Madrid	<i>Iberian Daily Sun</i>	7'57%	9'09%
	<i>Nuevo Diario</i>		
	<i>Abc</i>		
	<i>El Alcázar</i>		
	<i>Informaciones</i>		
	<i>Ya</i>		

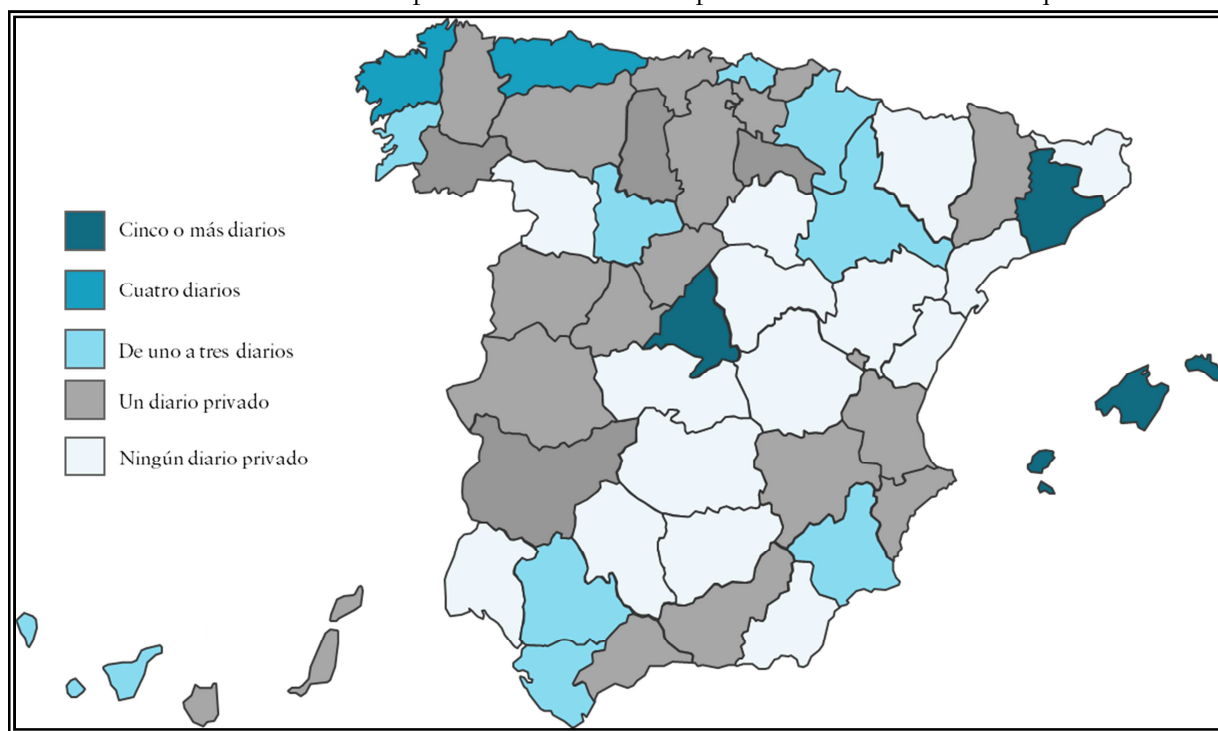
²⁶¹ En esta y en el resto de tablas de la memoria, el signo “x” significa que el diario había dejado de editarse aquel año; mientras que el guión “-” significa que no existen datos en ese año.

	<i>Madrid</i>		x
	<i>Nivel</i>	x	x
	<i>S-P Diario</i>	x	x
Málaga	<i>Sol de España</i>	1'51%	1'55%
Murcia	<i>El Noticiero de Cartagena</i>	3'03%	x
	<i>La Verdad</i>		1'51%
Navarra	<i>Diario de Navarra</i>	3'03%	3'03%
	<i>El Pensamiento Navarro</i>		
Orense	<i>La Región</i>	1'51%	1'51%
Oviedo	<i>El Comercio</i>		
	<i>Región</i>	6'06%	6'06%
	<i>La Voz de Asturias</i>		
	<i>La Voz de Avilés</i>		
Palencia	<i>El Diario Palentino-El Día de Palencia</i>	1'51%	1'51%
Las Palmas	<i>Diario de Las Palmas</i>	3'03%	3'03%
	<i>La Provincia</i>		
Pontevedra	<i>Diario de Pontevedra</i>	3'03%	3'03%
	<i>Faro de Vigo</i>		
Salamanca	<i>El Adelanto</i>	1'51%	1'51%
Santa Cruz de Tenerife	<i>El Día</i>		
	<i>La Tarde</i>	4'54%	4'54%
	<i>Diario de Avisos</i>		
Santander	<i>El Diario Montañés</i>	1'51%	1'51%
Segovia	<i>El Adelantado de Segovia</i>	1'51%	1'51%
Sevilla	<i>Abc</i>	3'03%	3'03%
	<i>El Correo de Andalucía</i>		
Soria	-	-	-
Tarragona	-	-	-
Teruel	-	-	-
Toledo	-	-	-
Valencia	<i>Las Provincias</i>	1'51%	1'51%
Valladolid	<i>Diario Regional</i>	3'03%	3'03%
	<i>El Norte de Castilla</i>		
Vizcaya	<i>El Correo Español</i>	3'03%	3'03%
	<i>La Gaceta del Norte</i>		
Zamora	-	-	-
Zaragoza	<i>Aragón Exprés</i>	x	
	<i>Heraldo de Aragón</i>	3'03%	4'54%
	<i>El Noticiero</i>		
Ceuta y Melilla	<i>El Faro de Ceuta</i>	1'51%	1'51%

Fuente: elaboración propia

Como es obvio, este mapa de la concentración provincial de la prensa española tiene correlación directa con la realidad socioeconómica del país. Así, las tres provincias con más diarios (en azul oscuro en el mapa), Baleares, Madrid y Barcelona ocupaban en 1975, respectivamente, el primer, segundo y cuarto puesto en cuanto a PIB per cápita. La tercera región más rica era el País Vasco, que sumaba, entre sus tres provincias, cuatro diarios; el mismo número que La Coruña y Oviedo (en azul en el mapa).

MAPA 1: Concentración provincial de los diarios privados durante el tardofranquismo



Fuente: elaboración propia

Del mismo modo, las provincias que carecían de diarios privados (en gris claro en el mapa) eran también las que menor PIB per cápita presentaban en 1975. Se trataba, en su mayor parte, de provincias de Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León y Aragón. En muchas de ellas únicamente se publicaba prensa estatal adscrita a la Cadena del Movimiento.

Es preciso señalar, por último, el limitado alcance de la prensa española, sin duda derivado de las deficiencias distributivas sobre las que nos detendremos más adelante (v. capítulo 7). La mayoría de los diarios tenían un radio de influencia limitado a las provincias o localidades en que radicaban su redacción e imprenta; de modo que, según las estimaciones de Alfonso Nieto, a principios de los setenta sólo *Abc* y *Pueblo* podían considerarse diarios nacionales; mientras que *La Vanguardia Española*, *Ya* y *El Correo Español-El Pueblo Vasco* tenían una difusión regional (Nieto, 1973: 256).

4.2.2 La concentración de la propiedad: los empresarios de prensa del tardofranquismo

La ausencia de límites cuantitativos a la propiedad de la prensa constituye, como veremos en el capítulo sexto, una de las notas más características de la regulación tardofranquista en materia de empresa periodística. Ni la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 ni ninguna otra disposición anterior o posterior trató de regular la concentración de la propiedad; dejando así un vacío legal que permitió el dominio del sistema por unos pocos e influyentes empresarios. La concentración, por lo demás, no dejaba de coadyuvar a la consecución de la que se acabará revelando como la finalidad fundamental (y la preocupación primordial) de la intervención administrativa en el sistema: la identificación y control de los propietarios, socios y directivos de las empresas de prensa; y ello en la medida en que, como es obvio, a la Administración le resultaba más sencillo controlar a un puñado de grandes propietarios que a miles de pequeños accionistas.

Un año después de la aprobación de la Ley Fraga, más de la mitad de las empresas periodísticas editoras de diarios de información general (33 de 60) tenían un 50% o más de su capital controlado por un único empresario, familia²⁶² o sociedad. De esas 33 empresas, 11 tenían la totalidad de su capital en poder de una única persona, sociedad o familia. En cualquier caso, para entender la magnitud real de la concentración de la propiedad hay que considerar también que un buen número de sociedades estaban dominadas por dos o tres socios de referencia con porcentajes mayoritarios, aunque inferiores al 50% del capital; y que no eran infrecuentes, como enseguida veremos, prácticas de encubrimiento y dilución de la propiedad, como la utilización de testaferros, la creación de sociedades interpuestas o el reparto de títulos entre familiares.

Antes que en los réditos económicos que pudieran generar la propiedad total o mayoritaria de un diario, las razones de esta alta concentración de la propiedad quizás debieran buscarse en las ventajas políticas que su control comportaba. En la medida en que, según señala Enrique Bustamante, la prensa fue concebida en la España tardofranquista como instrumento de poder y presión política antes que como fuente de ingresos, la concentración se consideró del mismo modo, en términos de aumento del poder político:

De esta forma, la concentración de la propiedad de los medios informativos privados, tal y como se ha venido y se continua en parte realizando, no encuentra

²⁶² Para calificar como “familiar” la propiedad de una empresa de prensa hemos considerado sólo la tenencia del capital por padres e hijos, esposos y hermanos. Esto ha dejado fuera de la categoría algunas sociedades controladas por diversas ramas de una misma familia, como en los casos de Bilbao Editorial, S.A. y Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. (controladas por diversas ramas de las familias Ibarra, Bergareche, etc.), Editorial Mencheta (de varias ramas de la familia Peris), o de Editorial Gráfica Asturiana, S.A., por poner sólo unos ejemplos.

justificación económica alguna en lo que a optimización de beneficios contables se refiere. Y remite exclusivamente en la inmensa mayoría de los casos a una búsqueda de concentración de poder, de poder informativo que cimenta, sostiene y potencia incluso a los poderes económicos y políticos dominantes (Bustamante, 1982: 21).

CUADRO 2: Propietarios de un 50% o más de empresas editoras de diarios en 1967

Propietario	Empresa periodística	Propiedad	Diario
Mariano Núñez Varadé-Alegría	Hijos de Francisco Núñez, S.R.C	100%	<i>El Adelanto</i>
Antonio Gómez Rubio	Antonio Gómez Rubio	100%	<i>Área</i>
Antonio Carrillo Kabana	Antonio Carrillo Kabana	100%	<i>Diario de Avisos</i>
Hermanos Verdera Ribas	Hermanos Verdera Ribas	100%	<i>Diario de Ibiza</i>
Josefina de Lema e hijas	Faro de Vigo, S.A.	100%	<i>El Faro de Vigo</i>
Pedro Serra Bauzá	Majorca Daily Sun, S.A.	100%	<i>Majorca Daily Bulletin</i>
FACES (Rafael Calvo Serer)	Madrid, Diario de la Noche, S.A.	100%	<i>Madrid</i>
Manuel Carreño López	Manuel Carreño López	100%	<i>El Noticiero de Cartagena</i>
Pedro García Munera	Pedro García Munera	100%	<i>La Voz de Albacete</i>
Hermanas Doménech Burriel (y esposos)	Federico Doménech, S.A.	100%	<i>Las Provincias</i>
Jesusa López Marqués	Jesusa López Marqués	100%	<i>La Voz de Avilés</i>
Joaquín Ferrer González	Joaquín Ferrer y Cía, S.L.	99'17%	<i>El Faro de Ceuta</i>
Carlos de Godó Valls	Talleres de Imprenta, S.A.	98'89%	<i>La Vanguardia Española</i>
Hermanos Joly y Díaz de Lama	Federico Joly y Cía, S. en C.	98%	<i>Diario de Cádiz</i>
Hermanos Outeriño Rodríguez	Acción Social Católica, S.A.	95'19%	<i>La Región</i>
Jaime Castell Lastortras	Tele-Exprés, S.A.	95'09%	<i>Tele-Exprés</i>
Hermanos Cano Lozano	El Adelantado de Segovia, S.L.	88'88%	<i>El Adelantado de Segovia</i>
María Victoria Fernández Latorre (y esposo)	La Voz de Galicia, S.A.	88'18%	<i>La Voz de Galicia</i>
Feliciano Barrera Fernández	Editorial Compostela, S.A.	88'19%	<i>El Correo Gallego</i>
Victor Sagi Vallmitjana	Ilustración, S.A.	85%	<i>La Noche</i>
Hermanas Monpeón de Nó	Heraldo de Aragón, S.A.	80'05%	<i>Diario Femenino</i>
Hermanas Cora Sabater	El Progreso, S.L.	80%	<i>Heraldo de Aragón</i>
Bilbao Editorial, S.A.	Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.	66'72%	<i>El Progreso</i>
Hermanos Luca de Tena García	Prensa Española, S.A.	61'65%	<i>El Diario Vasco</i>
Propaganda Católica de Santander (obispado)	Editorial Cantabria, S.A.	60'6%	<i>Abc (Madrid)</i> <i>Abc (Sevilla)</i>
Luis Zarraluqui Villalba	Empresa Periodística España, S.A.	57'29%	<i>El Diario Montañés</i>
SARPE (Ferrer Bonsoms-Banco Atlántico)	Edit. Cat. Abulense Pío XII, S.A.	76'92%	<i>Sol de España</i>
	El Diario de León, S.A.	58'07%	<i>Diario de Ávila</i>
	Diario Regional, S.A.	52'37%	<i>El Diario de León</i>
Hermanas Albarelllos Guiloche	Diario de Burgos, S.A.	53'89%	<i>Diario Regional</i>
José García Prendes Pando	El Comercio, S.A.	50%	<i>Diario de Burgos</i>
Caja de Ahorros y Préstamos de Palencia	El Diario Palentino-El Día de Palencia, S.L.	50%	<i>El Comercio</i>
Hermanos Alonso de Ojeda		50%	<i>El Diario Palentino-El Día de Palencia</i>

Hermanos Martínez Zaporta	Nueva Rioja, S.A.	50%	<i>Nueva Rioja</i>
---------------------------	-------------------	-----	--------------------

Fuente: elaboración propia a partir de datos consignados al REP por las propias empresas

En 1975 la situación era casi idéntica a la registrada al inicio del periodo en el cuadro anterior. El año de la muerte del dictador, 32 de las 60 empresas de prensa tenían el 50% o más de su capital en manos de una sola familia o de una única persona física o jurídica. Y 10 sociedades, familias o empresarios controlaban la totalidad del capital de 9 empresas periodísticas editoras de otros tantos diarios de información general.

CUADRO 3:Propietarios de un 50% o más de empresas editoras de diarios en 1975

Propietario	Empresa periodística	Propiedad	Diario
Pedro Serra Bauzá	Mediterranean Publishing Co., S.A.	100%	<i>Iberian Daily Sun</i>
	Majorca Daily Sun, S.A.	100%	<i>Majorca Daily Bulletin</i>
Pedro García Munera	Pedro García Munera	100%	<i>La Voz de Albacete</i>
Hermanas Doménech Burriel (y esposos)	Federico Doménech, S.A.	100%	<i>Las Provincias</i>
Jesusa López Marqués	Jesusa López Marqués	100%	<i>La Voz de Avilés</i>
Mariano Núñez Varadé-Alegría	Hijos de Francisco Núñez, S.R.C.	100%	<i>El Adelanto</i>
Hermanos Verdera Ribas	Hermanos Verdera Ribas	100%	<i>Diario de Ibiza</i>
Antonio Gómez Rubio	Antonio Gómez Rubio	100%	<i>Área</i>
Hermanas Amado de Lema	Faro de Vigo, S.A.	100%	<i>El Faro de Vigo</i>
Carlos de Godó Valls	Barcelona Press, S.A.	100%	<i>Tele-Exprés</i>
	Talleres de Imprenta, S.A.	98'89% ²⁶³	<i>La Vanguardia Española</i>
Alejandro Outeriño Rodríguez	La Región, S.A.	99'76%	<i>La Región</i>
Sebastián Auger Duró	Ilustración, S.A.	99'5%	<i>Mundo Diario</i>
Joaquín Ferrer González	Joaquín Ferrer y Cía, S.L.	99'17%	<i>El Faro de Ceuta</i>
Eduardo Fuentebueno Comín	Prensa Aragonesa, S.A.	90%	<i>Aragón Exprés</i>
Hermanos Cano Lozano	El Adelantado de Segovia, S.L.	88'79%	<i>El Adelantado de Segovia</i>
Feliciano Barrera Fernández	Editorial Compostela, S.A.	88'19%	<i>El Correo Gallego</i>
María Victoria Fernández Latorre (y esposo)	La Voz de Galicia, S.A.	88'18%	<i>La Voz de Galicia</i>
Propaganda Católica de Santander (obispado)	Editorial Cantabria, S.A.	87'29%	<i>El Diario Montañés</i>
Hermanas Monpeón de Nó	Heraldo de Aragón, S.A.	82'25%	<i>Heraldo de Aragón</i>
Hermanos Luca de Tena García	Prensa Española, S.A.	82%	<i>Abc</i> (Madrid) <i>Abc</i> (Sevilla)
Obispado de Coria (Cáceres)	Editorial Extremadura, S.A.	73'29%	<i>Extremadura</i>
José María de Santacreu	Barcelonesa de Publicaciones, S.A.	71'48%	<i>Diario de Barcelona</i>
Bilbao Editorial, S.A.	Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.	66'72%	<i>El Diario Vasco</i>
Hermanos Joly Höhr	Federico Joly y Cía, S. en C.	62%	<i>Diario de Cádiz</i>
Hermanas Cora Sabater	El Progreso, S.L.	60%	<i>El Progreso</i>
Enrique Botas Blanco	Ferrol Ediciones, S.A.	56'22%	<i>Ferrol Diario</i>
Hermanas Albarellos Guiloche	Diario de Burgos, S.A.	53'89%	<i>Diario de Burgos</i>

²⁶³ El resto del capital estaba en poder de sus hijos, Javier y Juan Pablo de Godó Muntañola (V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) [Talleres de Imprenta, Propiedad]).

CINISA (Ferrer Bonsoms-Banco Atlántico)	Edit. Cat. Abulense Pío XII, S.A.	51'32%	<i>Diario de Ávila</i>
	Diario de León, S.A.	52'31%	<i>Diario de León</i>
	Diario Regional, S.A.	62'29%	<i>Diario Regional</i>
Caja de Ahorros y Préstamos de Palencia Hermanos Alonso de Ojeda	El Diario Palentino-El Día de Palencia, S.L.	50%	<i>El Diario Palentino-El Día de Palencia</i>
		50%	

Fuente: elaboración propia a partir de datos consignados al REP por las propias empresas

Si se considera además que los diarios más leídos se encuentran en este grupo, puede afirmarse que una treintena de personas y familias dominaron la prensa más influyente del tardofranquismo. Por la influencia de sus diarios –valorada en función de su difusión– destacan sobre todos ellos Carlos de Godó Valls, Juan Ignacio Luca de Tena García y sus hermanas e hijos, y la familia Ybarra. Ninguno de ellos careció de contactos políticos ni de intereses en sectores clave de la economía española.

En los años sesenta y setenta, el segundo conde de Godó (1899-1987) fue propietario o accionista de referencia de tres empresas periodísticas editoras de diarios con medias de difusión por encima de los 30.000 ejemplares. De Barcelona Press, S.A. (*Tele-Expres*) poseyó la mitad del capital inicialmente y su totalidad desde 1975; a Barcelonesa de Publicaciones, S.A. (*Diario de Barcelona*), la financió con cerca del 40% del capital hasta 1974; sin olvidar, por supuesto, su 100% de Talleres de Imprenta, S.A., editora del diario más leído del país, *La Vanguardia Española*²⁶⁴. El conde de Godó fue, además, procurador en Cortes entre 1958 y 1977 (hasta 1967 en representación de la Organización Sindical y desde entonces por designación directa de Franco) y compatibilizó su labor editora con intereses en los sectores químico, textil, manufacturero, financiero y asegurador²⁶⁵.

El segundo diario privado más leído durante el tardofranquismo, el *Abc* de Madrid, estuvo controlado durante los años sesenta y setenta por los tres herederos de su

²⁶⁴ Además poseyó participaciones importantes en Empresa Periodística España, S.A. (*Sol de España*), con un 7'42% a finales de los sesenta; y en Prensa Económica, S.A. (*Nuevo Diario*), con un 5'22%. Por otro lado, también participó en editoriales como Euros y en publicaciones no diarias como *Destino*; *Historia y Vida*; *La Codorniz*, *Barrabás* y *Bocaccio* (Nogué & Barrera, 2006: 205).

²⁶⁵ Según DICODI y AFISAE, en 1967 Carlos de Godó era Presidente de Productos Pimpinela, S.A.; Gerente de Godó y Trías; Consejero/Vocal de Sociedad Catalana de Seguros a Prima Fija; Consejero/Vocal de Cerámicas Industriales Barcino, S.A.; Consejero/Vocal de Occidente, Cía Española de Seguros, S.A.; Consejero/Vocal de Odic, S.A. Sociedad de Inversión Mobiliaria; Consejero Vocal de Plásticos Múltiples, S.A.

Mientras que en 1975 era Consejero/Vocal de La Catalana, Cía de Seguros; VicePresidente de Odic, S.A. Sociedad de Inversión Mobiliaria; Consejero/Vocal de Occidente, Compañía Española de Seguros; Consejero/Vocal de Copic, S.A.; VicePresidente de Cerámicas Industriales Barcino, S.A.; Presidente del Consejo de Godó y Trías, S.A.; Consejero/Vocal de La Previsión Nacional, Cía Española de Seguros, S.A.

Todas sus conexiones con empresas se encuentran detalladas en Apéndice de Empresas periodísticas (1966-1975)

fundador, los hermanos María Pilar, Valentina y Juan Ignacio Luca de Tena García. En 1967, su propiedad conjunta alcanzaba el 61'65% de las acciones, porcentaje que se incrementaría al 85% el último año de la dictadura. El resto del capital se encontraba repartido entre multitud de accionistas minoritarios, incluyendo a otros miembros de la familia Luca de Tena. Juan Ignacio presidió además el Consejo de Prensa Española, S.A. hasta el 20 de noviembre de 1967, cuando deja la empresa en manos de sus hijos Torcuato (presidente entre 1967 y 1972) y Guillermo (al frente desde 1972). *Abc* de Madrid difundió en los últimos diez años de la dictadura cerca de 200.000 ejemplares diarios, según la OJD, que sumados a los más de 60.000 de la edición sevillana, convierten a los Luca de Tena en los empresarios de prensa más influyentes del tardofranquismo. Como ocurriera con el conde de Godó, también en este caso su labor editora se compaginó con otros intereses políticos y económicos. Tanto Juan Ignacio Luca de Tena García como su hijo Torcuato Luca de Tena Brunet tuvieron asiento en las Cortes franquistas. El primero fue Consejero Nacional del Movimiento y procurador por designación directa de Franco entre 1958 y 1961; cargo que compatibilizó con el de consejero de varias empresas de construcción y seguros²⁶⁶. Torcuato, por su parte, fue Consejero del Movimiento y procurador entre 1964 y 1977, lo que le permitió además participar, junto al conde de Godó, en la comisión de Cortes encargada de enmendar la Ley Fraga.

Junto a los Luca de Tena, otra familia destaca en el sector de la prensa tardofranquista: los Ybarra, propietarios en los setenta de cerca del 60% de los dos grandes diarios del País Vasco, *El Correo Español* y *El Diario Vasco*. Durante el periodo objeto de estudio, ambos periódicos difundieron de forma conjunta en torno a 110.000 ejemplares diarios, lo que sitúa a la familia –que tampoco carecía, como en los casos anteriores, de intereses políticos y económicos vinculados al Régimen– entre los editores más importantes del país. A la cabeza de las distintas ramas con presencia en el accionariado –entre las que destacan los Ybarra y Bergé, los Ybarra y Oriol, los Ybarra y Churrua, los Ybarra Villabaso y los Ybarra y López Doriga– se encontraba Javier de Ybarra y Bergé, propietario de entre el 28% y el 33% de Bilbao Editorial, S.A., casa editora de *El Correo Español* y matriz de Sociedad Vascongada de Publicaciones S.A., editora de *El Diario Vasco*. Javier de Ybarra presidió Bilbao Editorial desde 1969 hasta su asesinato por la banda terrorista ETA en 1977. Antes de asumir la presidencia, había sido presidente de la Diputación de Vizcaya (1947-1950) y Alcalde de Bilbao (1963-

²⁶⁶ Según el DICI, En 1967, Juan Ignacio Luca de Tena García era presidente de Alquí, S.A.; y consejero de la Sociedad General de Autores de España (SGAE); de la Compañía General de Asfaltos y Portland Aslan, S.A.; y de Occidente, Cía Española de Seguros, S.A.
V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa Española, Gobierno Corporativo).

1969), por lo que ocupó un escaño en las Cortes franquistas desde 1947 hasta 1969. Ya durante los setenta compaginaría la presidencia de la editora con el cargo de Consejero Nacional del Movimiento (1967-1971) y con vocalías en el Banco de Vizcaya, en la empresa de maquinaria Babcock & Wilcox y en la compañía hidroeléctrica Iberduero²⁶⁷.

Tras el conde de Godó, los Luca de Tena y los Ybarra, otros empresarios y familias controlaron de forma mayoritaria periódicos de alcance regional y más de 30.000 ejemplares de difusión diaria. *La Voz de Galicia* fue uno de los periódicos españoles de mayor crecimiento durante el periodo: en los últimos 8 años de la dictadura pasaría, según la OJD, de los 45.083 ejemplares diarios a los 70.734. Al frente de la empresa editora, La Voz de Galicia, S.A., se encontraban, con un 88'18% del capital, la hija del fundador, María Victoria Fernández Latorre, y su esposo Emilio Rey Romero. Cerca de 60.000 ejemplares diarios difundía también en esos años el *Heraldo de Aragón*, propiedad en más de un 80% de las hermanas Josefina y Pilar Monpeón de Nó. Otras dos parejas de hermanas compartían, del mismo modo, la propiedad de *Las Provincias* y *Faro de Vigo*, con cerca de 40.000 ejemplares de difusión diaria cada uno. Las hermanas Purificación y Guadalupe Doménech Burriel controlaban junto a sus maridos el capital de Federico Doménech, S.A., empresa editora del valenciano *Las Provincias*; mientras que las hermanas Pilar y Teresa Amado de Lema poseían, también con sus esposos, la totalidad de Faro de Vigo, S.A., editora del diario homónimo y accionista de *La Voz de Asturias*, *El Correo Gallego* y *La Noche*. En todos los casos se trataba de herederas del diario familiar sin vinculaciones directas con el poder político del Régimen ni otros intereses empresariales aparentes ajenos al periodístico.

Caso bien diferente es el de Jaime Castell Lastortras, accionista mayoritario del barcelonés *Tele-Exprés* desde su fundación en 1964, y propietario único del diario entre 1967 y 1968. Ese año se haría con la mitad del capital Carlos Godó Valls, instaurando una bicefalia que se mantendría hasta 1974, cuando el conde de Godó adquiere la totalidad de las acciones de la editora, Barcelona Press, S.A. Castell era, a finales de los sesenta y principios de los setenta, un empresario con intereses en los sectores textil, alimentario, farmacéutico, energético, cinematográfico, asegurador, inmobiliario y de la construcción, además de, por supuesto, financiero²⁶⁸. Favorecido por su cercanía a la

²⁶⁷ Todas sus conexiones con empresas se encuentran detalladas en Apéndice de Empresas periodísticas (1966-1975)

²⁶⁸ Sólo en 1967 presidía o formaba parte del CA de 20 empresas; era Vicepresidente de Hilaturas Gossypium, S.A.; CG de Textil Rebes, S.A.; CG de Productos selectos del cerdo La Piara, S.A. CG Laboratios Funk, S.A.; CG Saltos y Explotaciones del Montseny, S.A.; Presidente del Banco de Madrid; Presidente de Inversora y Fiduciaria, S.A.; Presidente de Compañía de Cinematografía y Espectáculos (CINESA); Presidente de Álvaro Soldevila, S.A.; Presidente de Algodonera del Sur, S.A.; Presidente de Urbanizaciones y Edificios, S.A.; Presidente de Banco Catalán de Desarrollo

familia Franco (Sánchez, 2005: 118), había fundado en 1954 el Banco de Madrid, al que incorporaría al consuegro y yerno del dictador, además de a destacadas figuras de la política catalana como Juan Antonio Samaranch, José María de Porcioles o Joaquín Viola Sauret (v. 5.2.1).

4.2.3 La concentración empresarial

Durante el tardofranquismo no se produjeron en España grandes procesos de integración horizontal entre empresas privadas de prensa. El sistema se mantuvo atomizado en multitud de pequeñas empresas –muchas de las cuales siguieron manteniendo la propiedad y gestión familiar– editoras de una única cabecera de alcance local o regional y exigua tirada. Sólo dos empresas del periodo pueden ser calificadas como verdaderas cadenas de prensa, ambas de influencia interprovincial y ligadas a institutos católicos: la acenepista Edica y el entramado SARPE-CINISA urdido por los banqueros opusdeístas del Banco Atlántico-Bankunión.

La prensa tardofranquista mantuvo, pues, una estructura similar a la de los años cuarenta y cincuenta aún a pesar de unas ayudas estatales a la adquisición de papel prensa propicias, como veremos en el capítulo séptimo, a las grandes empresas, pero sobre todo, a pesar de una legislación favorable o cuanto menos permisiva con la concentración. La posibilidad de que los procesos de integración horizontal degeneraran en situaciones de monopolio fue la única cortapisa considerada por el legislador en 1966. Tal y como no tardaremos en constatar, la atención del Régimen tendió a centrarse en la titularidad de las editoras más que en su concentración, que, por lo demás, tampoco había constituido hasta entonces un problema para el Régimen, ni mucho menos una amenaza a un pluralismo inexistente.

Dos fenómenos contribuyeron muy probablemente a frenar la concentración del sector. La influencia política y social que confería la propiedad de un órgano de prensa –por más reducidas que fueran su tirada y su radio de distribución–, siguió seguramente haciendo atractiva su propiedad a determinados empresarios y grupos sociales, especialmente en unos años en los que el cambio político se aventuraba más que cercano y en los que el nuevo marco legal garantizaba, a pesar de su dura aplicación desde 1968,

Consejero/Vocal de Hilandería Manresana, S.A.; Consejero/Vocal de Ecisa, Compañía Constructora, S.A.; Consejero/Vocal de Construcciones Horizontales, S.A.; Consejero/Vocal de Politur, S.A.; Consejero/Vocal de Industrial Farmacéutica de Levante, S.A.; Consejero/Vocal de US Vitamin Corporation de España, S.A.; Presidente de El Porvenir de los Hijos, S.A. Cía de Seguros y Vicepresidente de La Constancia, Cía de Seguros.
Todas sus conexiones se encuentran detalladas en Apéndice de Empresas periodísticas (1966-1975)

mayor margen de acción que la anterior legislación de 1938. Por otro lado, la tamización política del sistema de prensa otorgaba una evidente plusvalía a las empresas que hubieran superado los filtros administrativos y obtenido el plácet ministerial para operar en el sistema; una plusvalía, pues, tanto más valiosa cuanto férrea fuera la clausura y difícil de obtener fuera la autorización del MIT. En este sentido, el cierre del sistema de prensa decretado a principios de los setenta por Alfredo Sánchez Bella y mantenido en general por sus sucesores (v. capítulo 5) no pudo sino cargar de valor adicional a las empresas ya admitidas en el sistema español de prensa y actuar, por tanto, de mecanismo indirecto contra su integración.

4.2.3.1 La regulación de la concentración empresarial: el marco legal

El 20 de enero de 1966, durante el debate en Cortes del proyecto de ley de prensa, Pío Cabanillas reconocía la nula preocupación que la concentración de las empresas de prensa le generaba a la Administración. Siempre que el Ministerio pudiera tener identificados a los propietarios de las empresas, no había inconveniente alguno en la formación de “esquemas en cadena”; de modo que, según el subsecretario de Información, las sociedades que contaran con acciones nominativas y carecieran de titulares ocultos podían “formar parte de la cadena sin ningún temor”²⁶⁹. Naturalmente, este escaso interés por la concentración de las empresas periodísticas condicionó la legislación específica de la materia, que no se promulgará, por lo demás, hasta 1966. Al contrario de lo ocurriera con la regulación del capital extranjero, tal legislación específica sí se mantuvo acorde a la legislación general sobre concentración empresarial: ambas siguieron un mismo esquema basado en el fomento de la concentración siempre y cuando no desembocara en la formación de monopolios²⁷⁰.

²⁶⁹ Cuartillas taquigráficas 96/10 a 96/11 de 20 de enero de 1966. En ACD. V. Anexo XII

²⁷⁰ La legislación franquista sobre concentración empresarial trató, por un lado, de fomentarla mediante incentivos fiscales; al tiempo que, por otro, trataba de conciliar estas medidas con una normativa antimonopolio anunciada en 1959 y promulgada en 1963.

La primera norma dirigida a incentivar la concentración empresarial se aprueba en diciembre de 1957, en pleno periodo de pre-estabilización: la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el bienio 1958 y 1959 (BOE de 27 de diciembre) establece en su artículo 135: “Se autoriza al Ministerio de Hacienda para conceder, previo informe de la Organización Sindical, exención del impuesto del Timbre, Derechos reales y Emisión de valores mobiliarios a los actos de constitución de sociedades o de integración de empresas agrícolas, industriales o comerciales, cuando tales actos de concentración, sin tener carácter de monopolio, beneficien a la economía nacional”. Con ella, se abre un periodo de fomento de la concentración a través de incentivos fiscales que ya no se abandonará hasta el final de la dictadura. La Ley 41/64, de 11 de junio de 1964 (BOE de 13 de junio), por la que se reforma el sistema tributario, abunda en la cuestión al eximir a las empresas inmersas en procesos de integración del impuesto de sociedades (art. 107), así como del de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (art. 146.55). Por último, el Decreto-ley 11/67 de 26 de julio de 1967 (BOE de 27 de julio) concede a estas empresas (entre las que se

La Ley de Prensa de 1966 es la primera norma franquista que alude a los monopolios de prensa. Su artículo 5º establece:

La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos que se regulan en esta Ley, persiguiendo a través de los órganos competentes e incluso por la vía judicial, cualquier actividad contraria a aquéllos y, en especial las que a través de monopolios u otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución.

El artículo había sido objeto de tres modificaciones substanciales durante el proceso de elaboración y tramitación de la Ley²⁷¹: (a) en primer lugar, el anteproyecto contemplaba únicamente la persecución judicial como mecanismo de defensa de la competencia:

incluyen las periodísticas) exenciones de hasta el 90% del impuesto sobre rentas de capital y de la tributación por los beneficios obtenidos de la enajenación de elementos materiales del activo fijo (siempre que se destinen al menos en un 75% a la previsión para inversiones). En todas las disposiciones —que quedarán refundidas en el Decreto 2910/71 de 25 de noviembre de 1971 (BOE de 6 de diciembre)— se introduce una apostilla que supedita los beneficios concedidos a la concentración empresarial al cumplimiento de dos condiciones: que tales concentraciones sean beneficiosas para la economía española (condición que, por supuesto, no valora sino la Administración, introduciendo así un mecanismo de discrecionalidad para la concesión de las exenciones); y que no desemboquen en la constitución de monopolios de oferta.

El Estado tratará de conciliar el fomento de la concentración empresarial con una legislación antimonopolio bosquejada ya en 1959. Ese año la Jefatura del Estado emite el Decreto-ley 10/59 de 21 de julio (BOE de 22 de julio) de ordenación económica; que dictamina en su artículo tercero: “El Gobierno propondrá a las Cortes o dictará, en caso de urgencia, las oportunas disposiciones para prevenir y combatir las prácticas monopolísticas y demás actividades contrarias a la normalidad del comercio y a la flexibilidad de la economía”. La cuestión será abordada por la propia Jefatura del Estado cuatro años después en la Ley 110/63 de 20 de julio 1963 (BOE de 23 de julio), de represión de las prácticas restrictivas de la competencia. La Ley dedica parte de su amplio preámbulo a justificar su conciliación con la normativa de fomento de la concentración, necesaria según la disposición para redimensionar la empresa española de acuerdo con las nuevas necesidades económicas del país: “[Con la Ley antimonopolio] No se atenta contra la concentración económica, deseable por tantos conceptos en España, donde más del 90 por 100 de las empresas cuentan con cinco o menos empleados, debiendo el Estado favorecer los procesos de concentración que redunden en la formación de unidades de producción o distribución de dimensiones más adecuadas a las actuales necesidades económicas”.

A pesar de que la eficacia de esta norma haya sido poco menos que nula o imperceptible (Pérez Gómez, 2002: 421), acaso su principal valor resida en la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia (art. 7), organismo integrado originalmente en el Ministerio de Comercio y encargado de juzgar los casos de dominio monopolístico del mercado. Hasta entonces, ningún organismo estaba facultado para juzgar las operaciones de fusión o absorción; de acuerdo con el artículo 143 de la Ley de S.A. de 1951 (BOE de 18 de julio), bastaba con que dichas operaciones fueran aprobadas por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades implicadas.

²⁷¹ Otras modificaciones propuestas fueron, en cambio, desechadas. (a) Para empezar, ya desde el anteproyecto de ley se registran enmiendas dirigidas a introducir un párrafo adicional en el que se afirme la no discriminación del Estado en el reparto de beneficios fiscales y otro tipo de ayudas. Así, una enmienda presentada por Torcuato y Guillermo Luca de Tena pretendía arrancar el compromiso administrativo de trato igualitario para todas las empresas. Proponían que se añadiera el siguiente párrafo al artículo: “Los beneficios económicos, fiscales, postales, de distribución y, en general, de todas cuantas medidas adopte la Administración en orden a la adquisición, distribución y regulación o protección de materias primas, maquinaria, etc., necesarias para el desenvolvimiento de la empresa periodística, vendrán regidos por un estricto criterio de equidad, excluyendo cualquier medida discriminatoria a favor de una o varias empresas” (v. *Enmiendas al anteproyecto de LPI*, 4 de abril de 1964. En AGA (3) 49.21. c.

La Administración [disponía el artículo quinto del anteproyecto] *defenderá y protegerá* el ejercicio de las libertades que se regulan en esta Ley, *persiguiendo judicialmente* cualquier presión ejercida ilícitamente contra las mismas y, en especial, las que a través de monopolios u otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información [los subrayados son nuestros].

En su informe sobre el anteproyecto, el Instituto de Estudios Políticos propondrá sustituir la enunciación “persiguiendo judicialmente” por “persiguiendo, incluso judicialmente”. El cambio, que se hará finalmente efectivo, no es irrelevante: al añadir “incluso” se abriría la posibilidad de persecución administrativa contra los monopolios. Junto a esta adición, el texto legal incorpora la actuación (contemplada ya desde el proyecto de Ley) de los “órganos competentes” en materia de defensa de la competencia; esto es, del Tribunal de Defensa de la Competencia, creado apenas tres años antes. La persecución administrativa contra las prácticas monopólicas quedaba, además, contemplada en el artículo 29.4 de la LPI, por el que se introducía como supuesto de cancelación de la inscripción en el REP, la “deducción racional” por parte de la Administración de que “la publicación será utilizada para producir los resultados que trata de evitar el artículo quinto”. (b) En segundo lugar, el Estado se erige como garante de la competencia en el sector; esto es, “garantiza el ejercicio de las libertades y derechos” y no los “defiende y protege” (como rezaba el anteproyecto) ni “tutela” (como establecía el proyecto de ley). El cambio se debe a la enmienda presentada en Cortes por Antonio Chozas, quien estimaba que “la Administración no debe limitarse a una simple ‘tutela’ sino que debe llegar a una eficaz y plena ‘garantía’ del ejercicio de los derechos que en esta Ley se regulan” (Enmienda num. 111. En ACD, leg. 2312, num. 4). (c) Por último, la Ley acabará por ampliar la persecución del monopolio a las actividades de difusión y distribución de la información, de acuerdo con la propuesta planteada en las Cortes por Rafael Díaz-Llanos y Lecuona (Enmienda num. 117. En ACD, leg. 2312, num. 4).

65137). La demanda será recogida literalmente por la Comisión especial del CNP, de la que formaban parte ambos (v. *Informe de la Comisión especial del Consejo Nacional de Prensa sobre el Anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta*, fechado el 11 de junio de 1964. En AGA sig. (3)49.21 c. 65137) y, más adelante, ya durante la tramitación en Cortes, por la enmienda al anteproyecto 34 firmada por Luis Sánchez Agesta (En ACD, leg. 2312, num. 4). Ninguna, sin embargo, surtirá efecto y la no discriminación entre empresas desaparecerá del artículo 32, en el que se regulan estos beneficios y ayudas. Resulta evidente que los Luca de Tena y Sánchez Agesta aluden a la cadena de prensa estatal y al régimen de discriminación a su favor que, al parecer, venía imponiendo la Administración. (b) Tampoco quedará recogida en la Ley una enmienda de Mariano Rioja que demanda una protección específica contra la presión que, sobre la prensa, pudieran ejercer los anunciantes. (Enmienda 84. en ACD, leg. 2312, num. 4). (c) Emilio Romero demandó también sin éxito la necesidad de consulta a los “organismos representativos de la prensa” ante cualquier intervención administrativa en la materia (Enmienda 22. En ACD, leg. 2312, num. 4). (d) Por fin, Jesús Lample Operé consideraba insuficiente la potestad de persecución que se arrogaba el Estado en el artículo y proponía completarla con la de sanción (Enmienda 17. En ACD, leg. 2312, num. 4).

A pesar de las modificaciones, esta pretendida cortapisa a los monopolios en el sector de la prensa adolece de al menos tres defectos críticos. (a') Para empezar, no queda definido, ni en la Ley ni en ningún decreto posterior, qué entendía la Administración por un control monopólico en el sector. Para Fernando Conesa es precisamente esta indefinición uno de sus más graves defectos:

Quizás sea fundamental el problema de la concentración y la necesidad de resolverlo, pero ese precepto incurre en numerosos defectos: está mal redactado, no se enfrenta a fondo con el problema y es de una indeterminación tal que sólo a base de grandes esfuerzos de interpretación pueden obtenerse algunas conclusiones válidas (Conesa, *op. cit.*: 641).

(b') Esta indefinición no es, de cualquier modo, el único rasgo que merma la efectividad del artículo: tal y como se encargaría de advertir la comisión permanente del CNP, la función de garante de la libre competencia que se arrogaba el Estado resultaba irrealizable en tanto no se produjera una modificación del Código Penal. La cuestión, subrayada por el propagandista Aquilino Morcillo, será recogida por el pleno del CNP, que la trasladará al MIT²⁷². La modificación del Código Penal no llegaría hasta un año después, con la Ley de Jefatura de Estado 3/67 de 8 de abril de 1967 (BOE 11 de abril); en la que quedaría tipificado como delito, en el artículo 165.bis.a, la constitución de monopolios en el sector informativo²⁷³. (c') Por si fuera poco, no era sino el Estado el primer infractor de la Ley, al favorecer la constitución de un monopolio para la difusión de informaciones procedentes de fuera de España. De acuerdo con el controvertido artículo 49 de la LPI, la Administración se reservaba la concesión de la exclusividad de la difusión de tales noticias a “una agencia nacional”. Poco después, una Orden del MIT fechada el 1 de septiembre de 1966 (BOE de 20 de septiembre) concedía a la Agencia EFE, con participación mayoritaria del Estado, tal exclusividad²⁷⁴.

El legislador imponía, pues, con este artículo quinto, una cortapisa no carente de problemas a la constitución de monopolios en el sector de la prensa. Éste era, por lo demás, el único impedimento que contemplaba la Ley a la integración de empresas periodísticas. En ningún otro artículo se recogía límite alguno al número de publicaciones

²⁷² V. *Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta*, Comisión especial del Consejo Nacional de Prensa, 11 de junio de 1964. Y *Ponencia sobre el informe emitido por la Comisión Especial para el Estudio de la Ley de Prensa*, Comisión Permanente del Consejo Nacional de Prensa, 23 de junio de 1964. Ambos en AGA sig. (3) 49.21 c. 65137.

²⁷³ “Serán castigados [dictamina el artículo 165.bis.a.] con la pena de prisión menor los que impidieren ilegítimamente el libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de difusión de información a través de monopolios u otros medios que tiendan a deformar la opinión pública”.

²⁷⁴ “Se concede a la agencia EFE, S.A. [establece el artículo primero de la Orden], la distribución en exclusiva en todo el territorio nacional de las noticias procedentes de agencias extranjeras”. La cuestión había sido objeto de enconadas disputas tanto durante el proceso de elaboración de la LPI, como durante su tramitación en Cortes. No faltaron, en ambos casos, voces que pidieran la total supresión del artículo 49.

que una misma empresa periodística pudiera poseer o en las que pudiera participar. De ahí las palabras de Pío Cabanillas —respondiendo, por cierto, a una intervención del acenepista Martín Artajo en la que manifestaba sus dudas en torno a si la LPI no introduciría trabas a la constitución de grandes cadenas de prensa, como Edica— en las que aseguraba que la única preocupación de la Administración era conocer a los titulares de las empresas periodísticas y no el número de publicaciones que éstas pudieran acaparar o las operaciones de integración que pudieran protagonizar. Este ánimo del legislador explica, por otra parte, las tres únicas condiciones impuestas por la Administración a la expansión empresarial: la prohibición de que las empresas fueran propietarias de sociedades pertenecientes a otros sectores económicos; la extensión de la responsabilidad patrimonial de la empresa a todas sus publicaciones; y la obligación de dar a conocer a la Administración toda nueva publicación adquirida o fundada por la empresa. La primera de las condiciones afectaba a las posibilidades de diversificación de las empresas periodísticas; la segunda y tercera dificultaban posibles procesos de integración horizontal.

4.2.3.1.1 Límites legales a la diversificación empresarial

La primera condición a la expansión empresarial fijada en la LPI viene definida en los artículos 19 y 20. El artículo 19 dictaminaba que

Cuando la forma jurídica que pretenda adoptar la Empresa periodística sea la de cualquier tipo social que limite la responsabilidad de los socios, la sociedad deberá tener como *objeto social expreso* la publicación por cuenta propia de impresos periódicos, y no podrá dedicarse a otras actividades que no tengan relación directa con las de carácter informativo o editorial [el subrayado es nuestro].

Mientras que el artículo 20 prescribía que, en caso de que la empresa periodística se encontrara participada por una sociedad anónima, ésta última había de tener, entre los fines sociales recogidos en sus estatutos, la actividad periodística. Parece evidente que la pretensión del legislador era, en ambos casos, evitar que empresas de otros sectores económicos crearan órganos de prensa como instrumentos de presión. El resultado fue, sin embargo, bien distinto, dada la magnitud de la vinculación entre la prensa y otros sectores de la economía española, a la que enseguida atenderemos. Por un lado, el artículo 19 impedía a las empresas periodísticas diversificar su actividad hacia otros sectores económicos, limitando su expansión a las actividades con “relación directa” con la información; por otro, el artículo 20 no impedía que otros sectores económicos penetraran en el ámbito periodístico: para ello, bastaba con que estas entidades crearan

una sociedad anónima interpuesta, con acciones nominativas (cuya titularidad real podía sin embargo camuflarse recurriendo a testaferros) y la actividad periodística entre sus fines sociales, que controlara el accionariado (sin limitación alguna, según hemos visto) de la empresa periodística. En el capítulo sexto podremos comprobar cómo Javier Ferrer Bonsoms y el Banco Atlántico, propietarios últimos del entramado SARPE-CINISA, se valieron de esta argucia para eludir el control legal y administrativo de la dictadura (v. 6.2.3.2).

Las graves deficiencias del artículo 20 no fueron objeto de demasiada discusión durante la elaboración y tramitación de la Ley; no así el artículo 19, que impedía la diversificación de la empresa periodística más allá del sector informativo. El anteproyecto de ley hablaba, en lugar de “objeto social expreso”, de “único objeto”²⁷⁵. La expresión —que, obviamente, cerraba las puertas al desempeño de cualquier otra actividad que no fuera la edición de publicaciones periódicas— trató de ser modificada a instancia de los Luca de Tena y de varios acenepistas. En su enmienda conjunta al anteproyecto, fechada el 4 de abril de 1964, Guillermo y Torcuato Luca de Tena argumentan lo siguiente, acaso vislumbrando futuras operaciones de diversificación multimedia de Prensa Española:

Entendemos que no se puede limitar la actividad de las empresas periodísticas al único objeto de la edición de publicaciones periódicas. En principio, la empresa periodística puede abarcar, en su objeto social, todo lo relacionado, directa o indirectamente, con su industria²⁷⁶.

En los mismos términos se manifestaron en sus enmiendas individuales Mariano Rioja y Fernando Martín-Sánchez, ambos ligados, no por casualidad, a la primera cadena de prensa privada del país, propietaria además de la agencia de noticias Logos y de una editorial: ambos exigirán la sustitución de “único objeto” por “objeto principal” (lo que abriría evidentemente la posibilidad de incorporar otros objetos sociales)²⁷⁷. Esta demanda sería recogida en octubre de 1964 por el pleno del CNP, que no sólo sugerirá tal sustitución, sino que reclamará la adición del siguiente párrafo al artículo: “Las Empresas periodísticas podrán, además, realizar actividades preparatorias, complementarias o subsidiarias de su objeto principal, y en especial la propiedad y

²⁷⁵ El artículo 19 del anteproyecto estaba así redactado: “Las publicaciones relacionadas con el artículo 10 [en el que se aludía a publicaciones simples y publicaciones periódicas] sólo podrán ser editadas por Empresas que tengan por *único objeto* realizar por cuenta propia tal edición y que reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley. Dichas Empresas se denominarán ‘Empresas Periodísticas’”.

²⁷⁶ Enmiendas al anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta, 8 de abril de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

²⁷⁷ *Ibídem*.

explotación de Agencias de Información y la edición de publicaciones simples”²⁷⁸. El CNP será desoído por el legislador, lo que motivará una enmienda (num. 88. En ACD, leg. 2312, num. 4) de Mariano Rioja al proyecto de ley; en ella se insistía en la adición de un segundo párrafo al artículo en el que se incluyeran, como actividades lícitas de la empresa periodística, la impresión de textos por cuenta ajena²⁷⁹, la posesión de agencias de noticias y la edición de libros y “otros medios de comunicación social”. Todo ello quedará en cierto modo contemplado en la Ley, que recoge, al contrario que el anteproyecto, la posibilidad de desempeñar actividades con “relación directa” con las de carácter informativo o editorial, permitiendo así la expansión vertical (dado que, en este vago concepto, no era difícil justificar la inclusión de agencias de noticias, talleres de impresión, empresas de distribución, etc.) y la diversificación multimedia (pues, obviamente, también la industria editorial y la radio desempeñaban actividades con “relación directa” con la información). Queda, en cambio, prohibida la diversificación hacia otros sectores económicos ajenos al ámbito informativo.

4.2.3.1.2 Trabas legales a la integración horizontal

La segunda condición de la LPI a la expansión empresarial quedará recogida en el artículo 22, en virtud del cual,

si las Empresas periodísticas publican varios periódicos, las responsabilidades económicas en razón de esta Ley, derivadas de cualquiera de ellos, podrán hacerse efectivas sobre la totalidad del patrimonio. El pacto limitativo de esta responsabilidad será nulo.

No deja de resultar llamativo que este carácter extensivo que se le impone a la responsabilidad patrimonial de la empresa periodística no fuera sometido a demasiada discusión en ninguna de las fases de elaboración y tramitación de la Ley. El artículo será aprobado sin mayor debate por la comisión de Cortes el 20 de enero de 1966, a pesar de que prohíbe pactos limitativos de la responsabilidad patrimonial y, por tanto, supone un importante cortapisa indirecta a la integración horizontal de las empresas y, por tanto, a la constitución de cadenas de prensa.

La última traba a la expansión contemplada en la LPI se encuentra directamente ligada a la insistencia de la Administración por conocer exhaustivamente la situación de

²⁷⁸ *Dictamen del pleno del CNP al anteproyecto de LPI*, octubre de 1964. En AGA sig. (3)49.21 c. 65137

²⁷⁹ Actividad que ya venían realizando varias empresas periodísticas con el fin de rentabilizar la inversión en maquinaria; entre ellas, la Editorial Católica, en cuyos talleres se imprimía el diario *El Alcázar*. Según Rioja, impedir esto llevaría a muchos periódicos sin maquinaria propia a tener que cerrar o a realizar una inversión en maquinaria que seguramente habrían de importar.

la empresa periodística. Como veremos en el capítulo quinto, el MIT se valió del Registro de Empresas Periodísticas para obtener toda esta información, de acuerdo con la cual se autorizaban o dificultaban las transmisiones de publicaciones entre empresas (art. 23²⁸⁰), y se autorizaba o denegaba la creación de nuevas publicaciones (art. 31). Esta última potestad no encontró objeciones durante la elaboración y tramitación de la Ley; al contrario de lo que ocurrió con el artículo 23, que acabó adquiriendo un sentido diametralmente opuesto al que se le confería en el anteproyecto. El anteproyecto de la LPI prohibía expresamente la venta de publicaciones periódicas de forma individualizada: de darse una transacción en el sector, ésta había de afectar a toda la empresa periodística y, por tanto, a todas las publicaciones en su poder. Así lo prescribía el artículo 25: “Las empresas periodísticas no podrán transmitir separadamente las publicaciones debidamente inscritas que tengan derecho a editar”. Naturalmente, el artículo fue objeto de numerosos rechazos. Los dirigentes de Prensa Española, S.A., Torcuato y Guillermo Luca de Tena, lo enmendaron con el siguiente argumento: “Desde el momento en que una empresa tenga registradas a su nombre varias publicaciones, constituyen éstas parte de su patrimonio, y debe poder realizar los actos de transmisión que a sus superiores intereses convenga”²⁸¹. Con ellos coincidía Laureano Muñoz Viñarás, para quien “con el proyectado artículo se reduce a cero el valor comercial de las publicaciones que a la misma empresa no interese continuar”²⁸². De la misma opinión eran también el CNP y el Instituto de Estudios Políticos. Este último señalaba en su informe la incongruencia que suponía el que las empresas no pudieran transmitir por separado, incluso a título hereditario, sus publicaciones, y que, sin embargo, la totalidad de las mismas, en conjunto, sí fueran susceptibles de transmisión: “No es fácil [se critica en el informe] alcanzar los fundamentos en que descansa el texto del artículo”²⁸³. El CNP, por su parte, defendió también un cambio diametral del sentido del artículo, que habría de adoptar a su juicio la siguiente redacción:

Las Empresas periodísticas podrán transmitir libremente los títulos de las publicaciones debidamente inscritas que tengan derecho a editar. Para la edición de dichas publicaciones para después de una transmisión, habrán de cumplirse las normas que regulan la inscripción de las de nueva aparición.

²⁸⁰ Art. 23: “Cuando las Empresas periodísticas cedan con arreglo a derecho a otra persona los títulos de las publicaciones periódicas debidamente inscritas para las que estuvieren facultadas, el adquirente no podrá proceder a la edición de dichas publicaciones si no cumple las normas que regulan la inscripción de las de nueva aparición”.

²⁸¹ Enmiendas al anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta, 8 de abril de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

²⁸² *Ibidem*.

²⁸³ *Dictamen del Instituto de Estudios Políticos sobre el anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta*. En ACD, leg. 2312, num. 4.

El artículo 23 de la Ley adoptará finalmente una forma similar —propuesta en su enmienda por Manuel Batle Vázquez (num. 2. En ACD, leg. 2312, num. 4) y aprobada sin discusión en la comisión de Cortes—, permitiendo la transmisión individualizada de publicaciones e imponiendo como condición el cumplimiento por parte de la publicación transferida de los requisitos de inscripción en el REP de las publicaciones de nueva aparición.

4.2.3.2 La concentración empresarial durante el tardofranquismo

A pesar de estas trabas, la Ley de Prensa no impuso, como hemos apuntado, límite alguno al número de publicaciones que una misma empresa periodística pudiera acaparar o en las que pudiera participar. Tampoco los procesos de integración vertical y multimedia quedaban limitados, tras las modificaciones introducidas en el artículo 19. La única restricción legal a la concentración empresarial era, pues, la recogida en el artículo 5, en el que se proclamaba la proscripción del monopolio, pero que no dejaba de adolecer, como hemos comprobado, de graves deficiencias. Una vez más, la Administración centraba su atención en el conocimiento de los cambios que se dieran en las empresas y en la no elusión de responsabilidades por parte de sus socios y titulares; dejando a merced del mercado la modulación del poder que los agentes pudieran acaparar en el sector.

Con todo, a pesar de este espíritu permisivo con la concentración que informa la Ley (y que resulta, como hemos visto, coherente con la legislación económica implantada a partir de 1957), lo cierto es que no se producirán durante el tardofranquismo, en el sector de la prensa diaria, grandes procesos de integración, al menos de tipo horizontal. Tras la entrada en vigor de la LPI, el panorama de la prensa diaria española se caracterizó por una concentración mucho menos acusada que la que afectó al resto de países occidentales (Pinillos, 1975: 356). De hecho, el excesivo número de empresas se convertirá en un lamento constante de la Administración desde 1967. Ese año, el II Plan de Desarrollo diagnosticaba que la exigua expansión del sector de la prensa se debía, entre otros motivos, al carácter local de los diarios y a su escasa tirada, motivada, según parece sugerirse, por su elevado número (Presidencia de Gobierno, 1967: 19). Cinco años después, la situación no había variado demasiado. En 1972, la comisión de turismo e información del III Plan de Desarrollo (1972-1975) identificaba como uno de los factores “que están impidiendo un mayor perfeccionamiento de la empresa periodística”, el

número existente de empresas periodísticas que, en la mayoría de los casos, tienen un ámbito exclusivamente local, el volumen de las tiradas

y el defectuoso equipamiento [los cuales] traen como consecuencia una insuficiente rentabilidad y la dificultad para obtener medios ágiles de financiamiento que permitan su modernización (Presidencia del Gobierno, 1972: 138).

Parece evidente que la comisión de información apunta a la necesidad de una reestructuración del sector²⁸⁴ orientada a la concentración de las empresas periodísticas. Un año después del diagnóstico de la Comisaría del III Plan de Desarrollo, Alfonso Nieto constataba que seguían sin existir en España grandes cadenas de prensa diaria privada (Nieto, 1973: 88). La mayor parte de las sociedades editaba únicamente un diario (lo que no excluye que editaran también, en algunos casos, alguna otra publicación de periodicidad no diaria); y sólo ocho empresas o empresarios poseían o controlaban dos o más diarios de información general al inicio y/o final del periodo de estudio.

CUADRO 4:Empresas y empresarios con más de un diario de información general en 1967 y1975

Empresa Matriz o empresario	1967		1975	
	Diarios	Capital	Diarios	Capital
La Editorial Católica, S.A.	<i>Hoy</i>	100%	<i>Hoy</i>	100%
	<i>Ideal</i>	100%	<i>Ideal</i>	100%
	<i>Ideal Gallego</i>	100%	<i>Ideal Gallego</i>	100%
	<i>Ya</i>	100%	<i>Ya</i>	100%
	<i>El Correo de Andalucía</i>	37'70%	<i>El Correo de Andalucía</i>	21'08%
	<i>La Verdad</i>	100%	<i>La Verdad</i>	100%
SARPE-CINISA	<i>Diario de Ávila</i>	76'92%	<i>Diario de Ávila</i>	51'33%
	<i>Diario de León</i>	58'07%	<i>Diario de León</i>	52'31%
	<i>Diario Regional</i>	52'37%	<i>Diario Regional</i>	62'29%
	<i>Región</i>	10%		
	<i>Nuevo Diario</i>	9'54%		
	Empresa arrendataria de <i>El Alcázar</i>	9'54%		
Carlos de Godó Valls			<i>Sol de España</i>	14%
	<i>La Vanguardia Española</i>	98'89%	<i>La Vanguardia Española</i>	98'89%
	<i>Diario de Barcelona</i>	39'39%		
	<i>Sol de España</i>	7'42%		
Prensa Española, S.A.			<i>Tele-Exprés</i>	100%
	<i>Abc</i> (Madrid)	100%	<i>Abc</i> (Madrid)	100%
	<i>Abc</i> (Sevilla)	100%	<i>Abc</i> (Sevilla)	100%
			<i>Informaciones</i>	25%
Pedro Serra Bauzá	<i>Majorca Daily Bulletin</i>	100%	<i>Majorca Daily Bulletin</i>	100%
			<i>Iberian Daily Sun</i>	100%
			<i>Última Hora</i>	36'6%
Bilbao Editorial, S.A.	<i>El Correo Español</i>	100%	<i>El Correo Español</i>	100%
	<i>El Diario Vasco</i>	66'72%	<i>El Diario Vasco</i>	66'72%
Faro de Vigo, S.A.	<i>El Faro de Vigo</i>	100%	<i>El Faro de Vigo</i>	100%

²⁸⁴ Incluso propone la elaboración por parte de la Organización Sindical de un estudio sobre la reestructuración del sector de la prensa (Presidencia del Gobierno, *ibídem*).

	<i>La Voz de Asturias</i>	32'36%	<i>La Voz de Asturias</i>	32'36%
	<i>El Correo Gallego</i> ²⁸⁵	1'67%	<i>El Correo Gallego</i>	1'67%
	<i>La Noche</i>	1'67%		
Editorial Prensa	<i>Diario de Las Palmas</i>	100%	<i>Diario de Las Palmas</i>	100%
Canaria, S.A.	<i>La Provincia</i>	100%	<i>La Provincia</i>	100%

Fuente: elaboración propia

Las dos grandes cadenas de prensa privada del tardofranquismo estuvieron controladas, o cuanto menos vinculadas, a instituciones católicas plenamente instaladas en el aparato de poder político del Régimen. A través de la Editorial Católica, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas controló seis diarios de alcance regional, con una difusión agregada de cerca de 210.000 ejemplares/día en 1967 y de algo más de 300.000 e/d en 1975. La mayor parte correspondía al madrileño *Ya*, el tercer periódico de información general más leído del país, con una difusión de 131.590 ejemplares diarios al inicio del periodo y 168.756 el último año de la dictadura, según la OJD. La segunda cadena de prensa privada, SARPE-CINISA, controlaba o participaba a finales de los sesenta en seis diarios de información general, la mayor parte de ellos radicados en Madrid y Castilla. A pesar de su alcance local, en 1967 difundían de forma conjunta más de 150.000 ejemplares al día, de los que dos tercios correspondían a *El Alcázar*, editado por PESA y controlado por el entramado empresarial. El expolio de la cabecera y la venta de su otra publicación madrileña, *Nuevo Diario*, hizo que la influencia de la cadena mermara notablemente durante los setenta; a pesar de lo cual en 1975 seguía controlando o participando en tres diarios castellano-leoneses y en uno andaluz. Como demostraremos, SARPE-CINISA y sus participadas se encontraban dominadas por un grupo de conspicuos opusdeístas, de entre los que destacaba el banquero catalán Javier Ferrer Bonsoms (v. 6.2.3.2).

Con menos diarios, pero mayor alcance –tanto por lo que se refiere al número de ejemplares/día, como al radio geográfico de su difusión–, se encontraban los dos grandes empresarios de la prensa tardofranquista: Juan Ignacio Luca de Tena y Carlos de Godó Valls. Al frente, junto a sus hijos y hermanas, de Prensa Española, S.A., el primero difundía cada día de 1967 algo más de 270.000 ejemplares de las ediciones madrileña y sevillana de *Abc*; cantidad que se reduciría a unos 254.000 e/d al final del periodo. No muy a la zaga le iba el conde de Godó, cuyos tres periódicos difundían en 1967 unos 250.000 e/d, la mayor parte de ellos con el título de *La Vanguardia Española*. Al año

²⁸⁵ A pesar de su exigua participación, Faro de Vigo, S.A. contaba con tres consejeros (de un total de 16) en el Consejo de Editorial Compostela, S.A. (*El Correo Gallego*; *La Noche*): Javier Vázquez Sánchez Puga, Buenaventura Castro Rial y Alberto Casal Rivas. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975).

siguiente el empresario sumaría a esa cifra los casi 40.000 e/d de *Tele Exprés*; lo que le permitiría alcanzar los 260.000 ejemplares de difusión diaria en 1975.

Tras los dos grandes prohombres de la prensa tardofranquista se encontraba la familia Ybarra, propietaria de los principales diarios del País Vasco, cuya difusión diaria se elevaba, de forma conjunta, a 110.000 ejemplares en 1967 y a casi 120.000 en 1975; sin olvidar el entonces incipiente imperio periodístico del empresario balear Pedro Serra Bauzá, las dos cabeceras de Editorial Prensa Canaria, S.A. ni la expansión interregional de las hermanas Amado de Lema, propietarias de Faro de Vigo, S.A. y con participaciones en pequeñas publicaciones gallegas y asturianas.

De cualquier modo y como puede apreciarse, la situación de la concentración de la prensa española en 1966 no difiere demasiado de la registrada al final de la dictadura. Ni la coyuntura de expansión económica que, desde mediados de los cincuenta, impulsó la inversión publicitaria en la prensa, ni los planes de estabilización y liberalización puestos en marcha por el Régimen a finales de los cincuenta, animaron la concentración del sector. En 1976, el informe de Presidencia del Gobierno preparatorio del que habría sido el IV Plan de Desarrollo no podía sino seguir señalando el “excesivo número de diarios con tiradas muy cortas” como uno de los lastres de la prensa española (1976: 21). De acuerdo con Enrique Bustamante,

En buena lógica capitalista, éste podría haber sido el comienzo de una larga carrera de fusiones y absorciones, cierres de periódicos, concentración industrial en el sector. Pocos de estos fenómenos se produjeron (1982: 249).

Dos factores contribuyen a explicar por qué, a pesar de una coyuntura y normativa favorables, tal integración no se produjo durante el tardofranquismo. (a) El primero resulta evidente: la creación o participación en un órgano de prensa venía motivada, por lo general, no sólo por los réditos económicos que generaba, sino por la influencia política que confería. Probablemente la pérdida de poder político que implicaba la venta de una cabecera o empresa no compensara las ganancias económicas de la operación. La batalla librada a principios de los setenta por algunos accionistas y consejeros de Editorial Sevillana (*El Correo de Andalucía*) para evitar su integración en La Editorial Católica ilustra bien este punto (v. 6.4.1.2.2). (b) El segundo motivo resulta en cambio menos obvio y se encuentra ligado a la función estatal de tamización examinada en el capítulo quinto. Al circunscribir la Administración el acceso al sistema de prensa a través de la inscripción en el REP, el Estado estaba otorgando *de facto* un valor adicional a las empresas admitidas y encareciendo, por tanto, posibles procesos de integración. Desde 1938 y hasta principios de los sesenta, el Estado mantuvo, con muy pocas excepciones, el sistema de prensa cerrado a nuevas iniciativas, dando así

[...] a las empresas periodísticas ‘las ventajas de un monopolio tácito con todas sus consecuencias, ya que el número de periódicos era reducido, y sólo con autorización extraordinaria y especial podían salir nuevas publicaciones’²⁸⁶. En esa situación el propietario de un diario o de acciones de la sociedad mercantil titular del periódico, se encontró con una plusvalía del capital que había desembolsado. Aunque esas empresas no distribuyeran beneficios elevados, sin embargo, el valor de la propiedad fue aumentando de modo notable (Nieto, 1973: 203).

Tras unos años de tímida apertura durante el mandato de Fraga, la clausura del sistema de prensa decretada por Alfredo Sánchez Bella a principios de los setenta reprodujo la situación. La recuperación de un *númerus clausus* de publicaciones aceptadas en el sistema convirtió la autorización administrativa en un activo intangible cargado de plusvalía para las empresas inscritas en el REP²⁸⁷. La tamización del sistema de prensa funcionó, pues, como auténtica barrera, indirecta y probablemente indeseada, a la integración de cabeceras. En este como en otros casos, la Administración priorizó el control del sistema sobre su viabilidad económica.

4.3 Las conexiones del sistema de prensa

Empresas, empresarios y directivos de prensa fomaron parte de la red de relaciones de poder que gobernó la vida política y económica del país durante el último periodo de la dictadura. Aunque no por ello estuvieran menos vigiladas, las editoras de diarios aceptadas e integradas en el sistema de prensa establecieron una estrecha relación con el poder político nacional, provincial y local; y mantuvieron, a través de sus accionistas, consejeros y directivos, vínculos e intereses compartidos con empresas de prácticamente todos los sectores y ramas de actividad de la economía española.

La mitad de los periódicos privados de información general que se distribuían diariamente en el país y todos los que superaban los 100.000 ejemplares de difusión contaban, en 1966 y en 1975, con al menos un procurador en el CA de sus empresas

²⁸⁶ El entrecomillado corresponde a una cita extraída por Nieto del diario *Ya* el 24 de mayo de 1952.

²⁸⁷ Recuérdesse también que, de acuerdo con el artículo 23 de la LPI, la adquisición de una publicación por parte de una empresa (por más que ambas, empresa y publicación, estuvieran ya inscritas en el REP) estaba sujeta al cumplimiento de los mismos requisitos de inscripción que afectaban a las publicaciones de nueva aparición. La empresa adquiriente no podía editar la publicación adquirida hasta obtener su inscripción en el REP; lo que, en la práctica, implicaba que los traspasos de cabeceras estaban sujetos a la misma autorización discrecional de la Administración que la creación de publicaciones.

editoras. En la medida en que, de acuerdo con las leyes franquistas²⁸⁸, tenían asiento en Cortes todos los altos cargos políticos del Régimen, bien puede afirmarse que la mitad de los diarios privados nacionales y entre ellos los más leídos (*La Vanguardia Española*, *Abc*, *Ya* y *El Alcázar*) mantenían una conexión directa con representantes del poder político nacional, provincial y municipal. En algunos casos, la presencia de representantes políticos en los Consejos de empresas de prensa vino impuesta desde el propio Ministerio de Información y Turismo; en otros, obedeció a una maniobra de cooptación de la dictadura de los empresarios más notables e influyentes, designados procuradores directamente por Franco. Todo parece indicar, sin embargo, que en la mayoría de los casos fueron las propias empresas de prensa las que buscaron puntos de contacto con la Administración, ofreciendo cargos directivos a prohombres de la política local, provincial e incluso –las empresas más potentes– nacional. Como comprobaremos, la presencia de la política en los órganos de gobierno de las editoras no aseguraba a éstas el éxito en las gestiones con el MIT, ni mucho menos las libraba de la vigilancia administrativa; pero sí debió, sin duda alguna, de facilitar los contactos y las inevitables negociaciones en materia de nombramientos, sanciones y cuantos temas habían de tratar con la Administración.

Muy similar a la vinculación detectada con el poder político fue la establecida con la economía española. En torno a la mitad de los diarios privados de información general que se editaban en 1966 y 1975 en España –y todos los que superaban los 100.000 ejemplares de difusión diaria– tenían vinculación directa, a través de sus consejeros y directivos, con la banca, la actividad aseguradora y otras entidades financieras. Por si fuera poco, cerca del 60% de diarios –y, una vez más, todos los más leídos– tenían consejeros con cargos directivos en otras empresas, bien de prensa, bien dedicadas a otras ramas de actividad. La mayor parte de las conexiones se establecieron con sociedades dedicadas a actividades industriales como la producción de maquinaria y materiales, la actividad químico-farmacéutica, la energía y la construcción. Por supuesto, la naturaleza compleja de estas conexiones nos impide establecer una relación lineal y mecánica de influencia sobre la prensa a través de sus consejeros; pero sí desde luego confirmar la integración de la prensa privada de información general en el aparato de poder económico del país.

²⁸⁸ Como ya hemos explicado, la Ley de Cortes de 1942, modificada por la ley Orgánica del Estado de 1967, preveía que ocuparan un escaño todos los representantes de la política nacional y los más importantes de los ámbitos provincial y municipal.

4.3.1 Las conexiones con el poder político

El sistema español de prensa privada estuvo íntimamente vinculado al poder político franquista. En torno a la mitad de los diarios privados de información general que se publicaron en España en la última década de la dictadura –y todos los que superaban los 100.000 ejemplares de difusión diaria– contaban con representantes o antiguos representantes del poder político municipal, provincial o nacional en los órganos de gobierno de sus empresas editoras. Sus Consejos de Administración se poblaron de alcaldes, presidentes de Diputación, ex ministros e incluso embajadores y ministros en ejercicio, a pesar de la prohibición expresa de compatibilizar ambos cargos prevista en el art. 1.C. del Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 (BOE de 29 de mayo). Las editoras de los tres grandes diarios privados nacionales –*Abc* de Madrid, *La Vanguardia Española* y *Ya*– estuvieron presididas en esos años por empresarios con escaño en las Cortes por designación directa de Franco.

En 1967, la mitad de los diarios de información general que existían en España (33 de 66) contaban con, al menos, un procurador o antiguo procurador en Cortes en el Consejo de Administración de su empresa editora. Prensa Española, editora de *Abc* de Madrid y Sevilla, estuvo presidida durante el tardofranquismo por dos Luca de Tena con asiento en Cortes, Juan Ignacio y su hijo Torcuato. Carlos de Godó Valls, propietario y presidente de TISA, editora de *La Vanguardia Española*, gozó también de escaño entre 1958 y 1977. Del mismo modo que la mitad del CA de Edica, editora de *Ya*, que tenía en 1967 a diez procuradores en su Consejo, incluyendo al ex ministro de Exteriores Alberto Martín Artajo y al entonces ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz. *El Correo Español*, por último, contaba con tres procuradores en el CA de Bilbao Editorial. De los cinco diarios privados que superaban aquel año los 100.000 ejemplares de difusión, sólo *El Alcázar* carecía de procuradores en el Consejo de su editora, PESA, cuya persecución y expolio no tardarían en iniciarse.

CUADRO 5: Consejeros de empresas periodísticas en 1967 que ejercieron como procuradores durante la dictadura²⁸⁹

Empresa periodística	Consejero	Legislaturas y razón del nombramiento
Prensa Española, S.A. (<i>Abc</i> Madrid) (<i>Abc</i> Sevilla)	Juan Ignacio Luca de Tena (P)	1958-1961: designación directa de Franco
	Torcuato Luca de Tena (VP)	1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
	Fernando Luca de Tena Ita	1967-1977: designación directa de Franco 1943-1946: Organización Sindical

²⁸⁹ Las abreviaciones empleadas en esta y el resto de tablas significan: “(P)”: Presidente; “(VP)”: Vicepresidente; “(CD)”: Consejero delegado; y “(s)”: secretario del Consejo.

		1946-1949: designación directa de Franco
Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	Mariano Pérez de Ayala (CD) Mariano Rioja y Fernández de Mesa Miguel Maestre y Lasso de Vega	1959-1963: Alcalde de Sevilla 1965-1967: Organización sindical 1961-1965: Presidente de la Diputación de Sevilla
Bilbao Editorial, S.A. (<i>El Correo Español</i>)	Javier de Ybarra y Bergé (CD)	1946-1952: Presidente de la Diputación de Vizcaya 1958-1961: consejero Nacional del Movimiento 1964-1969: Alcalde de Bilbao
	Fernando Ybarra López Doriga	1967-1969: Presidente de la Diputación de Vizcaya 1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
	Lorenzo Hurtado de Saracho y Arregui	1959-1963: Alcalde de Bilbao
Editorial Compostela, S.A. (<i>El Correo Gallego; La Noche</i>)	Ángel Porto Anido	1970-1974: Presidente de la Diputación de La Coruña 1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
	Buenaventura Castro Rial	1943-1949: Organización Sindical
	Jesús Fontán Lobé	1958-1967: consejero Nacional del Movimiento
	José Filgueira Valverde	1958-1967: Alcalde de Pontevedra 1967-1971: representación familiar
Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A. (<i>Diario de Ávila</i>)	Ramón Hernández García (sc)	1956-1961: Presidente de la Diputación de Ávila
Barcelonesa de Publicaciones, S.A. (<i>Diario de Barcelona</i>)	Miguel Mateu Pla (P)	1943-1946: Alcalde de Barcelona 1943-1972: consejero Nacional del Movimiento
	Carlos Godó Valls (VP)	1958-1967: Organización Sindical 1967-1977: designación directa de Franco
Ilustración, S.A. (<i>Diario Femenino</i>)	Juan Gich Bech	1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
	Julio García Ibáñez	1967-1977: consejero Nacional del Movimiento
Diario de León, S.A. (<i>Diario de León</i>)	Ramón Cañas del Río (VP)	1946-1958: Presidente de la Diputación de León
Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. (<i>Diario de Lérida</i>)	Miguel Montaña Carrera	1974-1977: Alcalde de Lérida
Editorial Cantabria, S.A. (<i>El Diario Montañés</i>)	Fernando María Pereda Aparicio	1971-1977: representación familiar
Editorial Prensa Canaria, S.A. (<i>Diario de Las Palmas; La Provincia</i>)		1949-1959: Presidente de la Diputación de Las Palmas
	Matías Vega Guerra (P)	1960-1963: consejero Nacional del Movimiento

Diario Regional, S.A. (<i>Diario Regional</i>)	Juan María Roger Gallés José Luis Gutiérrez Semprún Adolfo Sánchez García	1971-1977: Organización Sindical 1957-1961: Alcalde de Valladolid 1967-1977: representación familiar
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. (<i>El Diario Vasco</i>)	José María Aguirre Gonzalo (P)	1961-1964: Organización Sindical 1964-1977: designación directa de Franco 1946-1952: Presidente de la Diputación de Vizcaya
	Javier de Ybarra y Bergé (CD)	1958-1961: consejero Nacional del Movimiento 1964-1969: Alcalde de Bilbao
	Lorenzo Hurtado de Saracho y Arregui	1959-1963: Alcalde de Bilbao
Faro de Vigo, S.A. (<i>Faro de Vigo</i>)	Buenaventura Castro Rial	1943-1949: Organización Sindical
La Editorial Vizcaína, S.A. (<i>La Gaceta del Norte</i>)	Antonio González y Martínez de Olaguibel (P)	1958-1961: Organización Sindical 1961-1967: designación directa de Franco
La Editorial Católica, S.A. (<i>Hoy, Ideal, Ideal Gallego, La Verdad, Ya</i>)	Javier Martín Artajo (P)	1961-1967: designación directa de Franco
	José Sirvent Dargent (VP)	1964-1967: designación directa de Franco
	José María Otero Navascues (VP)	1952-1958: CSIC
	Alberto Martín Artajo (CD)	1945-1957: ministro de Exteriores 1958-1977: designación directa de Franco
	Mariano Rioja (CD)	1965-1967: Organización Sindical
	Luis Coronel de Palma	1961-1971: Organización Sindical
	Juan Antonio Cremades Royo	1971-1977: representación familiar
	Mariano Pérez de Ayala	1959-1963: Alcalde de Sevilla
	Juan Sánchez Cortés y Dávila	1961-1964: designación directa de Franco 1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
	Federico Silva Muñoz	1961-1965: designación directa de Franco 1965-1970: Ministro de Obras Públicas 1971-1977: designación directa de Franco
Prensa Castellana, S.A. (<i>Informaciones</i>)	José M ^a Sánchez Ventura y Pascual (P)	1975: ministro de Justicia
El Norte de Castilla, S.A. (<i>El Norte de Castilla</i>)	Jaime Alba Delibes	1951-1952: designación directa de Franco
Editorial Noticiero, S.A. (<i>El Noticiero</i>)	Miguel Sancho Izquierdo	1943-1954: rector de la Universidad de Zaragoza
Económico Cultural Alavesa, S.A. (<i>El Pensamiento Alavés</i>)	Félix Alfaro Fournier (P)	1943-1946: Organización Sindical 1955-1961: Organización Sindical
	Lucas María de Oriol y Urquijo (VP)	1961-1964: representante de municipios provinciales 1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
	Manuel María Lejarreta Allende	1966-1972: Alcalde de Vitoria 1972-1977: Presidente de la Diputación Foral de Álava
	José María de Aresti Elorza	1964-1967: consejero Nacional del Movimiento

Editorial Navarra, S.A. (<i>El Pensamiento Navarro</i>)	Luis Arellano Dihinx (VP)	1952-1967: designación directa de Franco
Editorial Gráfica Asturiana, S.A. (<i>Región</i>)	Luis Botas Rezola	1971-1976: Cámara de Comercio
Empresa Periodística España, S.A. (<i>Sol de España</i>)	Carlos Godó Valls (VP)	1958-1967: Organización Sindical 1967-1977: designación directa de Franco
Diario Tele-Exprés, S.A. (<i>Tele-Exprés</i>)	Juan Antonio Samaranch Torelló Joaquín Viola Sauret	1967-1971: representación familiar 1973-1977: Presidente de la Diputación de Barcelona 1967-1977: representación familiar
Talleres de Imprenta, S.A. (<i>La Vanguardia</i>)	Carlos Godó Valls (P)	1958-1967: Organización Sindical 1967-1977: designación directa de Franco

Fuente: elaboración propia

La vinculación de la prensa con el poder político no varió demasiado en la última década del franquismo: si en 1967, 46 consejeros de empresas de prensa diaria tenían o habían tenido escaño en las Cortes, en 1975 eran 48 quienes compatibilizaban su cargo con el de procurador o habían ejercido este último con anterioridad. Si descendió, en cambio, de 33 a 29, el número de diarios ligados al poder político de forma directa a través de sus órganos de gobierno. Entre ellos seguían estando, con todo, los más leídos e importantes del país. Como en 1967, la empresa periodística con más procuradores en su Consejo era Edica, con 9, seguida de DYRSA (la empresa editora de la Hermandad de combatientes del Alcázar de Toledo) y ECASA, con 5 cada una; y Editorial Compostela, con 4. El cuadro resulta, una vez más, casi idéntico al del inicio del periodo, cuando Edica contaba con 10 consejeros en Cortes y ECASA y Editorial Compostela con cuatro consejeros-procuradores cada una.

CUADRO 6: Consejeros de empresas periodísticas en 1975 que ejercieron como procuradores durante la dictadura

Empresa periodística	Consejero	Legislaturas y razón del nombramiento
Prensa Española, S.A. (<i>Abc</i>)	Torcuato Luca de Tena (VP)	1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
	Nemesio Fernández Cuesta (CD)	1967-1977: designación directa de Franco
	Fernando Luca de Tena Ita	1974-1975: ministro de Comercio
Diarios y Revistas, S.A. (<i>El Alcázar</i>)	José Antonio Girón de Velasco (VP)	1943-1946: Organización Sindical
		1946-1949: designación directa de Franco
		1941-1957: ministro de Trabajo
		1957-1977: consejero Nacional del

		Movimiento
	Luis Valero Bermejo (CD)	1953-1957: consejero Nacional del Movimiento y Organización Sindical 1964-1971: consejero Nacional del Movimiento
	José Martínez Emperador	1967-1977: consejero Nacional del Movimiento
	Alberto Martín Gamero	1956-1964: consejero Nacional del Movimiento
	Antonio González Sáez	1961-1977: Organización Sindical
Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	Enrique Fernández de Bobadilla (VP)	1943-1946: Organización Sindical
	Fernando Portillo Scharfhausen	1967-1969: Presidente de la Diputación de Cádiz
Bilbao Editorial, S.A. (<i>El Correo Español</i>)	Javier de Ybarra y Bergé (P)	1946-1952: Presidente de la Diputación de Vizcaya 1958-1961: consejero Nacional del Movimiento 1964-1969: Alcalde de Bilbao
	Fernando Ybarra López Doriga	1967-1969: Presidente de la Diputación de Vizcaya 1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
Editorial Compostela, S.A. (<i>El Correo Gallego</i>)	Ángel Porto Anido	1970-1974: Presidente de la Diputación de La Coruña 1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
	Buenaventura Castro Rial	1943-1949: Organización Sindical
	Jesús Fontán Lobé	1958-1967: consejero Nacional del Movimiento
	José Filgueira Valverde	1958-1967: Alcalde de Pontevedra 1967-1971: representación familiar
Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A. (<i>Diario de Ávila</i>)	Ramón Hernández García (s)	1956-1961: Presidente de la Diputación de Ávila
	Gonzalo Grande Aparicio	1958 (febrero-noviembre): Alcalde de Ávila
Ilustración, S.A. (<i>Mundo Diario</i>)	Juan Gich Bech	1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
	Fabián Estapé Rodríguez	1969-1970: Rector de la Universidad de Barcelona 1974-1976: Rector de la Universidad de Barcelona
Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. (<i>Diario de Lérida</i>)	Miguel Montaña Carrera	1974-1977: Alcalde de Lérida
Editorial Prensa Canaria, S.A. (<i>Diario de Las Palmas; La Provincia</i>)	Matías Vega Guerra (P)	1949-1959: Presidente de la Diputación de Las Palmas 1960-1963: consejero Nacional del Movimiento

Editorial Extremadura, S.A. (<i>Extremadura</i>)	Luis Ordoñez Claros (CD)	1955-1960: Alcalde de Cáceres
Faro de Vigo, S.A. (<i>Faro de Vigo</i>)	Buenaventura Castro Rial	1943-1949: Organización Sindical
Ferrol Ediciones, S.A. (<i>Ferrol Diario</i>)	Rogelio Cenalmor Ramos	1963-1974: Alcalde de El Ferrol
La Editorial Vizcaína, S.A. (<i>La Gaceta del Norte</i>)	Antonio González y Martínez de Olaguibel (P)	1958-1961: Organización Sindical 1961-1967: designación directa de Franco
	Javier Martín Artajo (VP)	1961-1967: designación directa de Franco
	Alberto Martín Artajo (CD)	1945-1957: ministro de Exteriores 1958-1977: designación directa de Franco
	Mariano Rioja (CD)	1965-1967: Organización Sindical
	Luis Coronel de Palma	1961-1971: Organización Sindical
	Juan Antonio Cremades Royo	1971-1977: representación familiar
	Juan Sánchez Cortés y Dávila	1961-1964: designación directa de Franco 1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
		1961-1965: designación directa de Franco 1965-1970: Ministro de Obras Públicas 1971-1977: designación directa de Franco
	Federico Silva Muñoz	1967-1971: representación familiar
	Narciso de Carreras Guiteras	1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
Prensa Castellana, S.A. (<i>Informaciones</i>)	José María Alfaro Polanco	1943-1957: designación directa de Franco
	Bernabé Peris Gimeno	1974-1977: Organización Sindical
Editorial Noticiero, S.A. (<i>El Noticiero</i>)	Miguel Sancho Izquierdo	1943-1954: rector de la Universidad de Zaragoza
Nueva Rioja, S.A. (<i>Nueva Rioja</i>)	Carlos Bonet Hernando (P)	1967-1977: representación familiar
	Félix Alfaro Fournier (P)	1943-1946: Organización Sindical
	Lucas María de Oriol y Urquijo (VP)	1955-1961: Organización Sindical 1961-1964: representante de municipios provinciales
		1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
	Manuel María Lejarreta Allende	1966-1972: Alcalde de Vitoria 1972-1977: Presidente de la Diputación Foral de Álava
		1964-1967: consejero Nacional del Movimiento
Económico Cultural Alavesa, S.A. (<i>El Pensamiento Alavés</i>)	José María de Aresti Elorza	1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
	José María Rabanera Ortiz de Zúñiga	1971-1977: consejero Nacional del Movimiento
La Región, S.A. (<i>La Región</i>)	Eulogio Gómez Franqueira	1967-1977: representación familiar
Empresa Periodística España, S.A. (<i>Sol de España</i>)	Manuel Atencia García (VP1º)	1967-1971: Alcalde de Málaga
	Francisco García Grana	1958-1964: Alcalde de Málaga

Barcelona Press, S.A. (<i>Tele-Exprés</i>)	Carlos Godó Valls (VP)	1958-1967: Organización Sindical 1967-1977: designación directa de Franco
Talleres de Imprenta, S.A. (<i>La Vanguardia</i>)	Carlos Godó Valls (P)	1958-1967: Organización Sindical 1967-1977: designación directa de Franco

Fuente: elaboración propia

La mayor parte de los directivos de prensa privada con escaño en las Cortes franquistas eran consejeros Nacionales del Movimiento y/o representantes de la sección patronal de la Organización Sindical. Destaca, asimismo, la alta representación del poder municipal y provincial franquista. En 1967, siete alcaldes y ex alcaldes –y entre ellos, los de ciudades como Barcelona, Bilbao o Sevilla– y seis presidentes o ex presidentes de Diputación –de provincias de la importancia política y económica de Sevilla, Vizcaya, La Coruña o Barcelona, entre otras– eran consejeros de empresas de prensa diaria²⁹⁰. Esta imbricación con el poder político municipal y provincial no se redujo durante el tardofranquismo: el último año de la dictadura, ocho consejeros de empresas privadas de prensa eran o habían sido alcaldes y siete eran o habían sido presidentes de la Diputación Provincial en que se imprimía su diario.

La alta política del Régimen tampoco carecía, desde luego, de representantes en el sistema de prensa. En 1967 y 1975, cinco consejeros de empresas privadas de prensa pertenecían o habían pertenecido a gobiernos franquistas en calidad de ministros. Dos de ellos, Alberto Martín Artajo (en Exteriores entre 1945 y 1957) y Federico Silva Muñoz (ministro de Obras Públicas entre 1965 y 1970), acudían al CA de Edica; Nemesio Fernández Cuesta (ministro de Comercio de 1974 a 1975) participaba en el Consejo de Prensa Española, S.A; el falangista José Antonio Girón de Velasco (en Trabajo desde 1941 hasta 1957) ocupaba al final de la dictadura la vicepresidencia de DYRSA; y José María Sánchez Ventura, ministro de Justicia en 1975, había presidido años antes Prensa Castellana, S.A.

Tampoco faltaron, desde luego, quienes siguieron el camino inverso y obtuvieron escaño por su importancia en el sector de la prensa. Hasta trece consejeros en 1967 y nueve en 1975 fueron designados procuradores de forma directa por Franco. La mayor parte de ellos ostentaban la presidencia, vicepresidencia o la consejería delegada de las

²⁹⁰ Además, otros consejeros serían nombrados con posterioridad alcaldes y Presidentes de Diputación. Miguel Montaña Carrera, consejero de Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. sería nombrado alcalde de Vitoria en 1974. También con posterioridad a 1967 serían nombrados Presidentes de las Diputaciones Provinciales de La Coruña, Álava y Barcelona respectivamente Ángel Porto Anido (consejero en 1967 de Editorial Compostela, S.A.), Manuel María Lejarreta Allende (consejero ese año de Económico Cultural Alavesa, S.A.) y Juan Antonio Samaranch Torelló (Diario Tele-Exprés, S.A.).

principales empresas de prensa privada del país. El presidente y vicepresidente durante el tardofranquismo de Prensa Española, Juan Ignacio y Torcuato Luca de Tena, además del consejero Fernando Luca de Tena Ita, fueron, en al menos una legislatura²⁹¹, procuradores por designación directa del Jefe del Estado. Del mismo modo accedió a las Cortes entre 1967 y 1977 Carlos de Godó Valls, presidente en esos años de Talleres de Imprenta, además de vicepresidente de Barcelonesa de Publicaciones, de Empresa Periodística España y de Barcelona Press. Edica contó en los dos años de referencia con cinco consejeros designados procuradores por Franco durante al menos una legislatura: Javier Martín Artajo (presidente de la editora en 1967 y vicepresidente en 1975), José Sirvent (vicepresidente en 1967), Alberto Martín Artajo (consejero delegado de la sociedad durante todo el periodo), Juan Sánchez Cortés y Federico Silva Muñoz. Otros procuradores designados por Franco que compatibilizaron el cargo con el gobierno de empresas de prensa en 1967 y 1975 fueron el banquero José María Aguirre Gonzalo, presidente en 1967 de Sociedad Vascongada de Publicaciones; Antonio González y Martínez de Olaguibel, presidente durante el periodo de Editorial Vizcaína; el embajador Jaime Alba Delibes, consejero de El Norte de Castilla; Luis Arellano Dihinx, presidente en 1967 de Editorial Navarra; y José María Alfaro Polanco, consejero desde principios de los setenta de Prensa Castellana.

Otros directivos de prensa fueron elegidos procuradores en Cortes por representación familiar, o bien designados en razón de otros cargos. En 1967, cuatro consejeros de prensa eran procuradores por el tercio familiar: José Filgueira Valverde (Editorial Compostela), Adolfo Sánchez García (Diario Regional), Juan Antonio Samaranch y Joaquín Viola Sauret (Diario Tele-Exprés)²⁹². Mientras que, en 1975, eran cinco los directivos con escaño en Cortes en representación de las familias españolas: José Filgueira Valverde (Editorial Compostela), Juan Antonio Cremades Royo y Narciso de Carreras Guiteras (Edica), Carlos Bonet Hernando (Nueva Rioja) y Eulogio Gómez Franqueira (La Región). Por último, tres consejeros en 1967 y dos en 1975 eran o habían sido procuradores natos en razón de sus cargos en otras corporaciones. En 1967, el físico José María Otero Navascues, director del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1952 y 1958, era vicepresidente de Edica; Miguel Sáncho Izquierdo, rector de la Universidad de Zaragoza de 1943 a 1954, era consejero de Editorial Noticiero; y Luis Botas Rezola, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, era consejero de Editorial Gráfica Asturiana. Ocho años después, Miguel Sáncho Izquierdo se mantenía

²⁹¹ Dado que, en otras legislaturas, pudieron ocupar el escaño en razón de otros cargos.

²⁹² Además, otras dos personas que en 1967 participaban en los CA de empresas de prensa serían elegidos en los setenta representantes del tercio familiar en Cortes: Juan Antonio Cremades Royo, de Edica; y Fernando María Pereda Aparicio, de Editorial Cantabria.

en el Consejo de Editorial Noticiero; y Fabián Estapé Rodríguez, rector de la Universidad de Barcelona en dos etapas, entre 1969 y 1970 y entre 1974 y 1976, era consejero de Ilustración, dominada ya entonces por Sebastián Auger.

El caso de José María Alfaro Polanco demuestra que, en algunos casos, la presencia de políticos franquistas en los órganos de gobierno de las empresas de prensa podía venir impuesta por las altas instancias del Régimen²⁹³. En otros casos, el camino parecía ser el inverso: era el propio Régimen el que cooptaba –por lo general mediante la designación directa de Franco– a los dirigentes de las principales empresas privadas de prensa. Todo apunta, sin embargo, a que en la mayor parte de los casos eran las propias editoras las que ofrecían la consejería a los procuradores. Por supuesto, los contactos políticos con la clase política franquista no aseguraban a las empresas, ni quedar exentas de la vigilancia administrativa, ni mucho menos el éxito en las gestiones con el MIT. Tal y como veremos, procuradores como Luis Arellano Dihinx, Jaime Alba Delibes, Miguel Montaña Carrera y Fernando Portillo Scharfhausen, entre otros, fueron investigados por el Ministerio; y empresarios con asiento en Cortes y la influencia política de Juan Ignacio y Torcuato Luca de Tena no lograron, a finales de los sesenta, la autorización ministerial para convertir *Blanco y Negro* en diario vespertino. Con todo, un dato resulta del todo elocuente de las ventajas que no dejaban de comportar estas conexiones: de las ocho empresas editoras de diarios con procuradores designados por Franco en sus órganos de gobierno, sólo Sociedad Vascongada de Publicaciones, Edica y El Norte de Castilla fueron sancionadas administrativamente por infracción del artículo segundo de la LPI; y en todos los casos se trató de sanciones leves de no más de 50.000 pesetas. Los diarios editados por Prensa Española, Talleres de Imprenta, Editorial Vizcaína, Prensa Castellana y Editorial Navarra no fueron nunca sancionados por motivos políticos durante el tardofranquismo.

4.3.2 Las conexiones con el poder económico

Si estrechos fueron los legámenes con el poder político, no menor fue, desde luego, la vinculación de la prensa privada tardofranquista con otros sectores de la economía española. Como ya adelantáramos, en torno a la mitad de los diarios privados de información general que se editaban en 1967 y 1975 en España estaban ligados, a través

²⁹³ Según han relatado en sendas entrevistas personales Jesús de la Serna y Pedro Crespo de Lara, el MIT impuso en 1972 la presencia de José María Alfaro Polanco –uno de los fundadores de Falange y director de *Arriba* en los años cuarenta– en el Consejo de Administración de Prensa Castellana, S.A. Testimonios recabados en entrevistas personales mantenidas los días 30 de octubre de 2012, con Jesús de la Serna, y 26 de noviembre de 2012, con Pedro Crespo de Lara (v. 6.4.1.1).

de sus consejeros y directivos, a otras sociedades mercantiles dedicadas a las más variadas actividades. Este grado de vinculación se incrementa, además, a medida que aumenta el tamaño de las editoras, hasta el punto de que todas las empresas propietarias de periódicos con más de 100.000 ejemplares de difusión diaria tenían a alguno de sus consejeros y directivos sentado en los órganos de gobierno corporativo de otras empresas.

El sector de la economía española más ligado a la prensa tradofranquista fue, sin duda, el financiero. Entidades y fondos de inversión, banca pública, cajas de ahorros y, sobre todo, banca privada, tuvieron una más que notable presencia en los Consejos de Administración de las empresas de prensa tardofranquista. De hecho, sólo una actividad tan amplia como la producción manufacturera de maquinaria y materiales se acercó a la magnitud de la relación entre finanzas y prensa. En todo caso, nada desdeñables fueron tampoco los índices de relación establecidos con la construcción, la actividad químico-farmacéutica y el sector energético.

Como ya advertimos, el análisis de las vinculaciones a través de consejeros se ha basado fundamentalmente en los datos recogidos en las ediciones de 1968 (referido a 1967) y 1976 (referido a 1975) del Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (AFISAE) y, sobre todo, del Directorio de Consejeros y Directores (DICODI) cuya fiabilidad no siempre puede darse por descontada. A pesar de su cotejo con las fichas individuales sobre consejeros de prensa elaboradas por la propia Administración²⁹⁴, con las biografías y documentos de EFEData y del Archivo Histórico de la Agencia EFE y con bibliografía secundaria, algunos errores y carencias de actualización detectadas en las fuentes aconsejan tomar sus datos como meramente indicativos. No obstante, el cotejo de las cinco fuentes y su compleción con literatura sobre empresas y empresarios nos ha permitido obtener unos datos que, si bien no pueden considerarse como definitivos, ofrecen, creemos, un panorama razonablemente fidedigno de la estructura de la prensa privada española en el tardofranquismo y demuestran de modo suficientemente claro y fiable la magnitud de su integración en la economía del país en aquellos años.

²⁹⁴ Fichas en AGA, sig. (03)049.21 cs. 71/12259 a 71/12264.

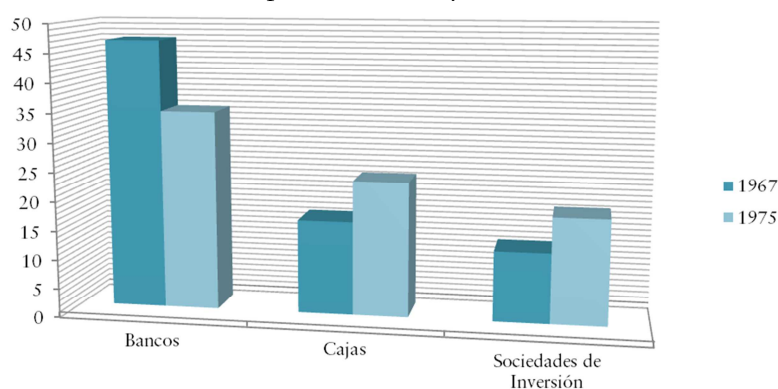
4.3.2.1 Conexiones con el poder financiero

Durante el tardofranquismo, la prensa diaria española estuvo estrechamente ligada al sistema financiero²⁹⁵. Considerando únicamente bancos, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y sociedades de inversión, en 1967 prensa y finanzas mantenían, a través de los CA de las empresas de cada sector, 77 conexiones, una menos que en 1975. Si se añade la actividad aseguradora, las vinculaciones ascienden a 111 para el inicio del periodo y 105 para el último año de la dictadura²⁹⁶. Ningun otro sector de la economía española se acercó siquiera a estas magnitudes de vinculación con la prensa.

En 1967, 24 empresas editoras de 31 diarios de información general (casi la mitad de los existentes entonces) tenían a al menos uno de sus consejeros o vocales sentado ese año en el CA de un banco, caja o sociedad de inversión. Al final del periodo, la situación había cambiado poco: 22 empresas editoras de 30 diarios compartían al menos un consejero con el sector financiero. Como ocurriera con las vinculaciones políticas, entre los diarios ligados a las finanzas se encontraban, además, todas las cabeceras privadas que superaban los 100.000 ejemplares de difusión diaria: *La Vanguardia*, *Abc*, *Ya* y *El Alcázar* (en 1967).

El tipo de entidad más ligada a la prensa era sin duda la banca privada comercial; si bien el sector tampoco careció de vínculos con la banca industrial y con la banca pública. Por lo general, las conexiones con la banca tendieron a descender durante el tardofranquismo a favor de las Cajas de Ahorro, gracias en gran

GRAFICO 1: Entidades financieras vinculadas a empresas de prensa en 1967 y 1975



²⁹⁵ Por “sistema financiero” entendemos, siguiendo a Ramón Tamames, “la estructura y funcionamiento del conjunto de instituciones a través de las cuales se crea el dinero y se canalizan disponibilidades de fondos desde el ahorro hasta el crédito y la inversión (...)” (Tamames, 1985: 574). El concepto fue al parecer consagrado a finales de los cincuenta por el Banco de España en sus “Informes Económicos”. Hemos considerado como instituciones pertenecientes al poder financiero la banca privada, comercial e industrial, la banca pública, las Entidades Oficiales de Crédito (esto es: el Banco Hipotecario, el Banco Exterior, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Agrícola y Crédito Social Pesquero) y las cajas de ahorros, así como otras sociedades de inversión. Queda fuera, pues, el sector asegurador, cuya vinculación con la prensa tardofranquista será, no obstante, analizada en el siguiente apartado.

²⁹⁶ Cada conexión equivale a la participación de un consejero de prensa en el CA de otra empresa. Las cifras aquí reseñadas suponen, pues, que todos los consejeros de empresas de prensa privada ostentaban, de acuerdo con los datos de DICODI, AFISAE, el MIT y otras fuentes secundarias, 111 cargos en Consejos de Administración de entidades financieras en 1967 y 105 en 1975.

medida a la relativa liberalización de las inversiones de éstas últimas decretada desde principios de los sesenta²⁹⁷. En 1967, prensa y banca mantenían 47 vínculos a través de consejeros y directivos; cifra que se reduciría a 35 en 1975. Para entonces, las conexiones con las Cajas se habían incrementado desde las 17 totales de 1967 hasta las 24 del año de la muerte del dictador; de modo similar a las conexiones con otras sociedades de inversión, que crecieron durante el periodo desde los 13 vínculos detectados en 1967 a los 19 de 1975.

Por supuesto, este grado de vinculación no fue ajeno a la actuación de la Administración tardofranquista, que desde los años sesenta venía impulsando el desembarco del sector financiero en la actividad industrial del país. La Reforma bancaria de 1962²⁹⁸ había tratado —con no demasiado éxito, de cualquier modo— de imponer la especialización de la banca española, hasta entonces mixta, en bancos de depósitos y bancos industriales, llamados a convertirse en el motor financiero del auge industrial de los sesenta. El resultado de la reforma fue en cambio la creación, por parte de la gran banca española, de filiales industriales nacidas como “apéndices de los antiguos bancos mixtos” (Tamames, 1985: 590) y que sin duda contribuyeron a la aceleración de la penetración del sector en la prensa escrita que, según Enrique Bustamante, se produjo en España desde los años sesenta (1982: 250), y que a finales de la década Juan Muñoz calificaba ya de “muy considerable” (cit. en Bustamante, 1982: 37).

Tal influencia se vio alterada sólo muy levemente por la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos bancarios. En el verano de 1968, la Ley 31/1968, de 27 de julio (BOE de 29 de julio) —desarrollada al año siguiente por el Decreto 702/1969, de 26 de abril (BOE de 29 de abril)— prohibía la presencia simultánea de consejeros y directivos bancarios en más de cuatro Consejos de Administración de sociedades no financieras (cifra que se elevaba a ocho en algunos supuestos especiales). Muy pocos directivos de prensa hubieron de abandonar, sin embargo, sus cargos, a juzgar por las pocas comunicaciones conservadas en el REP de bajas o suspensiones de consejeros por incompatibilidad bancaria. En marzo de 1970, Bilbao Editorial, S.A. comunicaba al REP que los consejeros Luis María de Ybarra y Oriol, Pedro J. Galíndez y Vallejo, Lorenzo Hurtado de Saracho y Arregui y Juan de Aguirre y Achútegui causaban baja temporal del

²⁹⁷ En 1962, la Ley 2/1962, de 14 de abril, fijaba el porcentaje de inversión que las Cajas debían dedicar a empresas públicas del 65% al 45%. El porcentaje descendería aún más en 1973; lo que dejaba un mayor margen a las inversiones en empresas privadas.

²⁹⁸ V. Ley 2/1962, de 14 de abril (BOE de 16 de abril), sobre Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca. Y Decreto-Ley 53/1962, de 29 de noviembre (BOE de 30 de noviembre), sobre bancos industriales y de negocios.

órgano de gobierno en razón de su presencia en consejos financieros²⁹⁹. Por el mismo motivo habían tenido que suspender en 1969 su presencia en el CA de la participada Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. los consejeros José María Aguirre Gonzalo (quien compatibilizaba la presidencia de la editora con la vicepresidencia del Banesto) y Lorenzo Hurtado de Saracho³⁰⁰. Otras bajas relevantes fueron las de Pablo Negre Carrió en Ilustración, S.A.³⁰¹; José Sirvent Dargent en Edica³⁰²; Luis Valls Taberner, en Madrid, Diario de la Noche, S.A.³⁰³; y el futuro ministro de Información, Fernando Liñán y Zofío, en Prensa Económica, S.A.³⁰⁴. Todos ellos debieron suspender sus funciones directivas en las empresas editoras; lo que, naturalmente, no obsta a que pudieran mantener su influencia a través de sustitutos de confianza u otros subterfugios.

²⁹⁹ Comunicación oficial al REP en AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)001.001 c. 68, exp. 591.

³⁰⁰ Comunicación oficial al REP en AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)001.001 c. 67, exp. 590.

³⁰¹ REP, AGA (09)001.001 c. 160, exp. 1329.

³⁰² REP, AGA (09)001.001 cs. 76 y 77, exp. 663.

³⁰³ REP, AGA (09)001.001 cs. 116 a 122, exp. 1015.

³⁰⁴ REP, AGA (09)001.001 c. 126, exp. 1039.

CUADRO 7: Empresas de prensa vinculadas al sector financiero a través consejeros en 1967 y 1975

Empresa Periodística	1967		1975	
	Consejero	Entidad	Consejero	Entidad
Prensa Española, S.A.	Juan Antonio Gamazo Abarca	Inversiones Arnús-Gari, S.A. (P) Banco Español de Crédito Banco de España Banco de Crédito Industrial	Juan Carlos Guerra Zunzunegui	General Mercantil, S.A.
Prensa y Ediciones, S.A.	Pablo Bofill de Quadras	ESFINA (P) Banco Atlántico (CD) Bankuni6n Fondo de Inversiones Mobiliarias (CD)	x	x
Diarios y Revistas, S.A.	x	x	Luis Valero Bermejo Luis Benítez de Lugo	Banco Exterior de Espa1a Banca L3pez Quesada
Editorial Sevillana, S.A.	Miguel Maestre y Lasso de Vega	Caja Ahorros San Fernando de Sevilla (P)	Fernando Portillo Scharfhausen Pedro Luis Serrera Contreras	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz (P) Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla (s)
Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A.	-	-	José Riba Ortínez (P) Jordi Pujol Soley José María Vilaseca Marcet José María Santacreu Margenet	Banco de Barcelona Banca Catalana Banco Industrial de Catalu1a Caja de Ahorros Sagrada Familia Banco de Huesca (P)
Bilbao Editorial, S.A.	Pedro J. Galíndez Vallejo (P)	Banco de Vizcaya (VP)	Javier de Ybarra y Bergé (P)	Banco de Vizcaya
	Emilio Ybarra Churruca	Banco de Bilbao	Emilio Ybarra Churruca	Banco de Bilbao Banco Industrial de Bilbao
	Fernando Ybarra L3pez Doriga	Banif Inverbanif	Fernando Ybarra L3pez Doriga	Instituto de Crédito Oficial Banco de Vizcaya
	Lorenzo Hurtado de	Banco de Bilbao		

	Saracho y Arregui	Banco de La Coruña		
	Lorenzo Vilallonga Lacave	Hispanofrancesa de Cooperación Técnica y Financiera		
	Juan de Aguirre Achútegui	Banco de Bilbao		
Editorial Compostela, S.A.	Juan Sáenz Díez García (VP)	Banco Simeón (P)	Luis Sánchez Harguindey (P)	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santiago (VP)
		García de Olalla, Sáez, Díez y Cía	Juan Sáenz Díez García (VP)	Banco Siméon (P)
	Buenaventura Castro Rial	Banco de España		Federación Financiera (P)
		Banco de Vigo	Constantino Lobo Montero	Inpisa-Dos, Inversión Mobiliaria
				Inpisa-Tres, Inversión Mobiliaria
				Valmorensa, Inversión Mobiliaria
Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A.	Enrique Aboin Martín (VP)	Caja Central de Ahorros y Préstamos de Ávila (P)	Enrique Aboin Martín (VP)	Caja Central de Ahorros y Préstamos de Ávila (P)
			Ramón Hernández García (s)	Caja Central de Ahorros y Préstamos de Ávila (Director Gerente)
Barcelonesa de Publicaciones, S.A.	Miguel Mateu Pla (P)	Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares (P)	José María Santacreu Margenet (P)	Banco de Huesca (P)
		Banco de España	Juan Echevarría Puig (VP)	Banco Industrial de Comercio
		Banco Hispano Americano	Sebastián Salvadó Plandiura	Banco Rural y Mediterráneo
	Carlos Godó Valls (VP)	Banco Mercantil de Tarragona	Ramón Garriga Pons (s)	Banco de Huesca
	Enrique del Castillo Yurrita	Odic, Sociedad de Inversión Mobiliaria		
		Crédito y Docks de Barcelona		
Ilustración, S.A.			Fabián Estapé Rodríguez	Banco Garriga Nogués
	x	x	Juan Gich Bech de Careda	Banco Condal
			Esteban Negra Valls	Banco Peninsular (P)
				Banco Industrial del Mediterráneo
Diario de León, S.A.	Luis Corral Feliu	Banco Industrial de León (P)	-	-
Editorial Cantabria,	José María Jado Canales (P)	Banco de Santander	-	-

S.A.				
El Diario Palentino- El Día de Palencia, S.L.	Manuel Grande Covián Félix Pastor Seco	Caja Central de Ahorros y Préstamos de Palencia (Director Gerente) Caja Central de Ahorros y Préstamos de Palencia (VP)	Manuel Grande Covián	Caja Central de Ahorros y Préstamos de Palencia (Director Gerente)
Editorial Prensa Canaria, S.A.	Matías Vega Guerra (P)	Banco de Canarias (P) Banco de Crédito Agrícola Banco Vitalicio de España	Matías Vega Guerra Graciliano Morales Ramos (VP)	Banco Vitalicio de España Sucursal Banco de España Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria
Diario Regional, S.A.	Juan María Roger Gallés Luis Martínez Velasco	Caja de Ahorros Sagrada Familia Capitalizadora Clavijo	-	-
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.	José María Aguirre Gonzalo (P) Lorenzo Hurtado de Saracho Emilio Ybarra Churruca	Banco Guipuzcoano (P) Banesto (VP) Bandesco (VP) Banco de Bilbao Banco de La Coruña Banco de Bilbao (Director General)	-	-
Editorial Extremadura, S.A.	-	-	Fernando Vega Bermejo (P) Luis Ordoñez Claros (CD) Abilio Rodríguez Rosillo Rafael Hergueta García de Guadiana José Canal Rosado	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres (Director Gerente) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres (VP) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres (s)
Faro de Vigo, S.A.	Buenaventura Castro Rial	Banco de España Banco de Vigo		

Ferrol Ediciones, S.A.	x	x	José Mera Pena	Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Ferrol del Caudillo (P)
Editorial Vizcaína, S.A.	-	-	Adolfo de Careaga Fontecha	Gesnorte (Director General)
La Editorial Católica, S.A.	Alberto Martín Artajo (CD)	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Banco Exterior de España	Alberto Martín Artajo	Banco Exterior de España
	Luis Coronel de Palma	Confederación Española de Cajas de Ahorro (Director) Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro	Luis Coronel de Palma	Banco de España (Gobernador)
	Juan Antonio Cremades Royo	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja	Juan Antonio Cremades Royo	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja
	Federico Silva Muñoz	Caja de Emisiones con Garantía de Anualidades Debidadas por el Estado	Landelino Lavilla Alsina	Cartera de Títulos (s) Bandesco (vs)
			Narciso de Carreras Guiteras	Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (VP1º) Sefisa, Financiaciones
			Juan de Herrera Fernández	Banco Español de Crédito Bandesco
			Juan Sánchez Cortés y Dávila	Financiera SEAT Consejo España (filial de Banque Nationale de París)
			Marcelino Oreja Federico Silva Muñoz	Instituto de Crédito Oficial Banesto (Administrador)
Prensa Castellana, S.A.	José María Sánchez Ventura y Pascual (P) José Mangas Miguel	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (s) Montserrat	-	-

Editorial El Norte de Castilla, S.A.	Emilio Gómez Orbaneja	Banco Urquijo (Director) Banco de Crédito Industrial Valores Mobiliarios, Vamosa	Emilio Gómez Orbaneja	Banco Urquijo
	Alejandro Fernández de Araoz	Banco de España Banco Internacional de Comercio (CD)	Alejandro Fernández de Araoz	Banco Internacional de Comercio (P)
Editorial Noticiero, S.A.	Miguel Sancho Izquierdo	Cooperativa Central de Crédito y Ahorro de Zaragoza Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja	Miguel Sancho Izquierdo	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja
			Emilio Parra Gasque	Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza
Editorial Mencheta, S.A.	-	-	Esteban Bassols Montserrat	Cafisa Cataluña (P) Cafisa/2 Inversión Múltiple (VP)
			Juan Vives Rodríguez de Hinojosa	Banco Condal
			Antonio M ^a Pugés Cambra	Banco de Crédito e Inversiones
Nueva Rioja, S.A.	-	-	Antolín Ezquerro Martínez	Caja Provincial de Ahorros de Logroño
Económico Cultural Alavesa, S.A.	Félix Alfaro Fournier (P)	Banco de Vitoria Banco de España en Vitoria	Félix Alfaro Fournier (P)	Banco de Vitoria Banco de España en Vitoria
	Vicente Botella Altube	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria	Vicente Botella Altube	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria (Director gerente)
	José María de Aresti Elorza	Caja Provincial de Ahorros de Álava (Director gerente)	José María de Aresti Elorza	Caja Provincial de Ahorros de Álava (Director gerente)
Editorial Gráfica Asturiana, S.A.	-	-	Manuel María Lejarreta Allende	Caja Provincial de Ahorros de Álava (P)
			Julio Sela Figaredo	Inversión en Valores y Títulos
Empresa Periodística España,	Carlos Godó Valls (VP)	Odic, Sociedad de Inversión Mobiliaria	-	-

S.A.				
Diario Tele-Exprés, S.A./Barcelona Press, S.A.	Jaime Castells Lastortras	Banco de Madrid (P)	Carlos Godó Valls	Odic, Sociedad de Inversión Mobiliaria Copic
		Inversora y Fiduciaria (P)		
	Juan Antonio Samaranch	Banco Catalán de Desarrollo (P)	Esteban Molist Pol	Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona
		Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona Banco de Madrid Banco Catalán de Desarrollo		
	Joaquín Viola Sauret (s)	Banco Catalán de Desarrollo (VP1º y CD) Banco de Madrid		
Talleres de Imprenta, S.A.	Carlos Godó Valls (P)	Odic, Sociedad de Inversión Mobiliaria	Carlos Godó Valls (P)	Odic, Sociedad de Inversión Mobiliaria Copic
La Voz de Asturias, S.A.	José Tartiere de las Alas Pumariño (P) José Mª de Abando y Bengoa (VP)	Banco Asturiano de Industria y Comercio (P) Financiera de Créditos Industriales y Comerciales	Elías Masaveu	Financiera Interprovincial
La Voz de Galicia, S.A.	Manuel Iglesias Corral (s)	Banco del Noroeste (Secretario General)	Manuel Sánchez Marín Felipe Ruiz de Velasco y de Castro	Banco Industrial del Sur Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (P)

Fuente: elaboración propia

Como puede apreciarse en el cuadro, por lo general fue la prensa vasca y catalana la más vinculada al poder financiero tardofranquista. Con la excepción de Edica, todas las editoras con cuatro o más consejeros ligados al poder financiero se ubicaban esos dos territorios. En 1967, la empresa con más vínculos era Bilbao Editorial, S.A., ligada a través de seis de sus directivos al Banco de Bilbao, al Banco de Vizcaya, a Banif, al Banco de La Coruña y a la Sociedad Hispanofrancesa de Cooperación Técnica y Financiera. Con las mismas entidades se encontraba relacionada, como es obvio, su filial, la Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., cuyo presidente era, por si fuera poco, el entonces vicepresidente de Banesto, José María Aguirre Gonzalo, uno de los banqueros más poderosos del Régimen. Edica estaba estrechamente ligada a las Cajas de Ahorros a través de cuatro consejeros, incluido el Director de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro, Luis Coronel de Palma. Con tres consejeros ligados a la banca cada una de ellas se hallaban Diario Tele-Exprés, S.A., cuyo máximo accionista y presidente, Jaime Castells, era propietario del Banco de Madrid y de su filial industrial, el Banco Catalán de Desarrollo; Económico Cultural Alavesa, S.A., relacionada con el Banco de Vitoria, la filial vitoriana del Banco de España, la Caja de Ahorros de Vitoria y la Caja provincial de Álava; y Barcelonesa de Publicaciones, S.A., cuyo presidente, Miguel Mateu Pla, presidía además la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares y ejercía vocalías en el Banco de España, el Banco Hispano Americano y el Banco Mercantil de Tarragona.

El último año de la dictadura, la Editorial Católica superaba al resto de editoras en vínculos: nueve de sus veintiséis consejeros se sentaban además en Consejos de entidades financieras de la importancia del Banco de España y Banesto. Con cinco consejeros contaban Editorial Extremadura, S.A., propiedad de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres; y con cuatro Barcelonesa de Publicaciones, S.A., cuyo presidente, José María de Santacreu, presidía además el Banco de Huesca. Con tres consejeros en el sector financiero se encontraban Bilbao Editorial, S.A., aún relacionada con el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya; Ilustración, S.A., ligada al Banco Garriga Nogués, al Banco Condal, al Banco Peninsular y al Banco Industrial del Mediterráneo; Económico Cultural Alavesa, S.A., que mantenía sus vínculos con las Cajas de Ahorros de su región; y Editorial Compostela, S.A. y Editorial Mencheta, S.A., ambas ligadas sobre todo a sociedades de inversión.

Como veremos enseguida, sólo una categoría tan amplia como la producción de maquinaria y materiales de la industria manufacturera se acercó durante el periodo a las cifras de vinculación con la prensa del sistema financiero.

4.3.2.2 Conexiones con otros sectores de la economía española

La magnitud de la conexión con el sistema financiero se inscribe en un marco general caracterizado por un altísimo grado de vinculación de la prensa privada española con el conjunto de la economía nacional. En 1967, al menos 31 empresas editoras de 38 diarios (el 57'57% del total de diarios privados de información general existentes entonces) tenían en sus órganos de gobierno a consejeros o vocales con cargos análogos en otras empresas³⁰⁵. Nueve años después, las cifras habían cambiado poco: el año de la muerte del dictador, al menos 35 empresas editoras de 40 diarios privados de información general (el 60'61% del total) se encontraban ligadas a través de sus consejeros o vocales a otras sociedades. Los sectores y ramas de actividad a las que estaba ligada la prensa privada tampoco variaron demasiado: los vínculos se establecieron al inicio y final del periodo, fundamentalmente, con empresas del sector manufacturero dedicadas a la producción de maquinaria y materiales y a la actividad químico farmacéutica; aunque también se han detectado importantes vínculos con el sector de la energía, asegurador y, especialmente en los años setenta, de la construcción³⁰⁶.

A pesar de que el número de cabeceras con conexiones fuera similar al inicio y final del periodo (e incluso se incrementara levemente en 1975) la cantidad total de vinculaciones detectadas descendió casi una quinta parte en esos años, de las 486 identificadas para 1967 a las 372 de 1975. Acaso una probable desinversión en el sector de la prensa motivada por la crisis económica que comenzaba a afectar en aquellos años a la economía española explique este acentuado descenso; por más que sea necesario insistir en el carácter meramente orientativo de los datos totales de vinculación y la necesidad de extremar la prudencia en su uso como base para cualquier hipótesis explicativa. Por otra parte, los datos evidencian un aumento notable de las interconexiones entre empresas privadas de prensa. En 1967 existían al menos 47 interconexiones entre consejeros o vocales de empresas editoras de diarios de información general, cifra que se elevaría ocho años después a 75. Este aumento de la interconexión no estuvo ligada, sin embargo, tal como ya constatamos, a un aumento significativo de la concentración empresarial en el sector. El resultado fue que en 1975 las propias empresas de prensa eran ya las sociedades de la economía española más vinculadas con otras editoras de diarios. Hasta 19 editoras de prensa privada —tres más

³⁰⁵ Excluidas las del sector financiero, y que quedan por tanto fuera de este apartado

³⁰⁶ La clasificación de cada una de las empresas conectadas con editoras de diarios en sectores y ramas de actividad se ha basado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), actualizada en enero de 2009 por el Real Decreto 475/2007.

que al inicio del periodo— tenían en 1975 vínculos con empresas de su mismo sector y, por consiguiente, intereses conectados y encontrados.

TABLA 3: Vinculaciones de las empresas periodísticas por sectores de actividad económica en 1967

	Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca	Extractiva		Manufacturera											Información y Comunicación									
		Minería	Petróleo, Madera y otros	Alimentación y bebidas	Textil	Papel e Imprenta	Químico y Farmacéutico	Metalurgia	Maquinaria y materiales	Automovilístico, Naval, Aeronáutico	Energía	Construcción	Comercio	Transporte, correos y almacenamiento	Hostelería	Editorial	Prensa	Cinematografía y otros	Seguros	Inmobiliaria	Profesional, científica. técnica	Defensa	Entretenimiento	Servicios auxiliares y Otras
Acción Social Católica																								-
Antonio Carrillo Kabana																								-
Antonio Gómez Rubio																								-
Barcelonesa de Publicaciones			1		1		7	1	9	2	4					2		3			1			31
Bilbao Editorial	3	9		2	1	2	9	6	11	5	2		3			7		4	1				1	66
C. P. Diario Pontevedra																								-
Diario de Burgos																								-
Diario de León						1							1			5								7
Diario Palentino-El Día de Palencia																								-
Diario Regional	3		1	2	3	2	1			1	1					3		1						18
Tele-Exprés				1	8	1	3		4		1	4	1		2		1	7						33
Económico Cultural Alavesa	1	2						3	4		3		3	3	2				1					22
Editora Balear					1				1				1											3
Editorial Cantabria							1		2		2		1	4					1					11
Editorial Católica Abulense Pío XII				1												2								3
Editorial Católica				2	1	1	2	3	7	3	7	1	1	2		3	3	2	2		1			41
Editorial Compostela	1					1		1	1		1	3	1		1	3		4					1	18
Editorial El Norte de Castilla	1			6	1		1		3		2			1		4		1	1					21
Editorial El Noticiero									1		1					1				1				4
Editorial Extremadura																								-
Editorial Gráfica Asturiana		6					1			1														8
Editorial Mencheta					5		2		2				2	1										12
Editorial Menorca																								-
Editorial Navarra				3					2		4	1												10
Editorial Prensa Canaria	1												1											2
Editorial Sevillana	1						1									3								5
Editorial Vizcaína		1		1		1	3		2				1						1					10
El Adelantado de Segovia																								-
El Comercio																								-
Empresa Periodística España	3			1	5		4		6			2	2	2		3		3				1		32
F. Prensa Tradicionalista				1		3			1	1			1	1										8
Faro de Vigo	1							1								3		4						9
Federico Doménech																								-

Bloque I-Estructura del sistema de prensa privada tardofranquista

Federico Joly y Cía.																									-
Heraldo de Aragón																									-
Herederos de Leoncio Rodríguez																									-
Hijos de Francisco Núñez																									-
El Progreso																									-
Juan y Fco. Verdura Ribas																									-
Ilustración									1		1								1	2					5
Jesusa López Marqués																									-
Joaquín Ferrer y Cía																									-
La Información																									-
La Voz de Asturias		1					2		1	2	1		1	3			1			1			1		14
M. Carreño López																									-
M. Real y Cía.																									-
Madrid, Diario de la Noche																									-
Majorca Daily Sun																									-
Mediterranean Publishing Co.																									-
Nueva Rioja																									-
Pedro García Munera																									-
Prensa Castellana	1																1			1	2				5
Prensa Española	2			1			1		4			5		3			1	3	2	1				1	24
Prensa y Ediciones					1				1					1											3
Publicaciones Católicas Ilerdenses																									-
Servicio de Publicaciones			1	1					4				1	1	1										9
Sociedad Vascongada de Publicaciones		2			1	3	3		1	2	3	2		3			7								27
Talleres de Imprenta					1		1		2								2		2						8
Última Hora																									-
Voz de Galicia	2								5	1		1	3	1					1	3					17
Total	20	21	3	22	29	15	42	15	74	19	32	21	14	33	4	8	47	8	34	13	5	2	3	2	486

Fuente: elaboración propia

TABLA 4: Vinculaciones de las empresas periodísticas por sectores de actividad en 1975

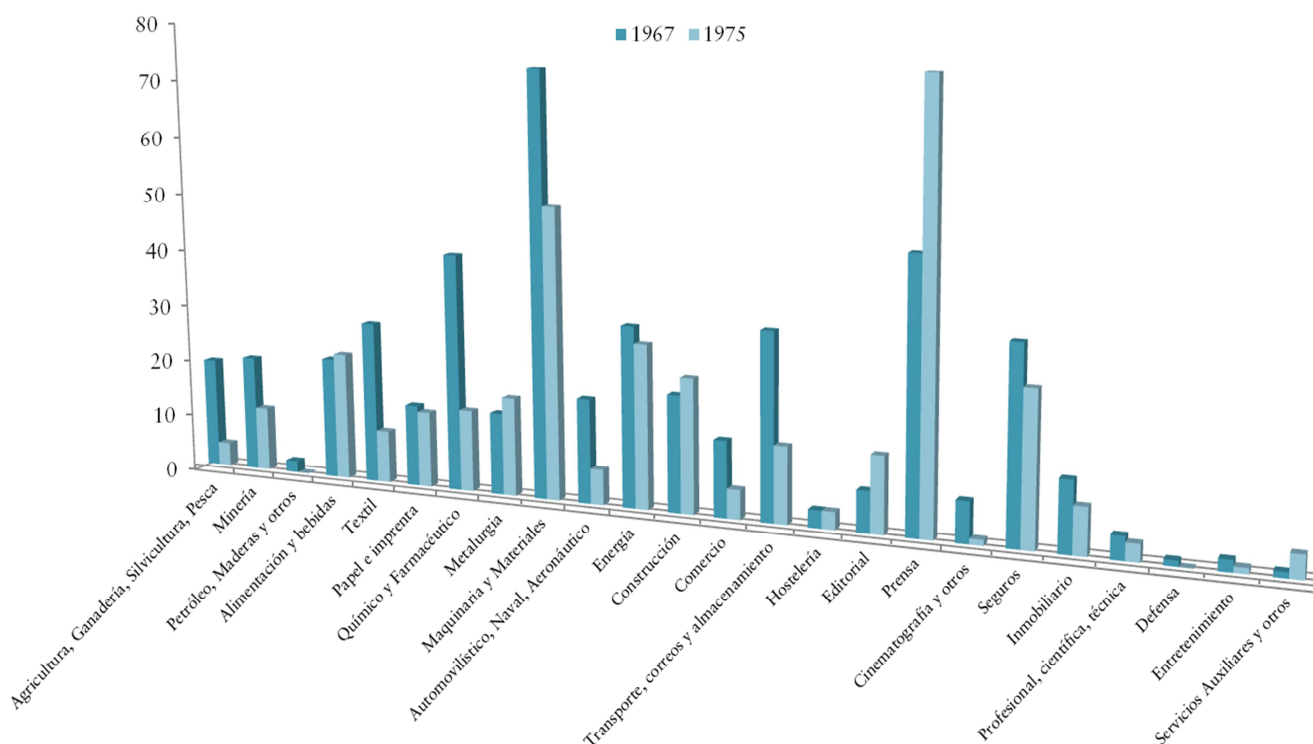
		Extractiva		Manufacturera														Información y Comunicación							
	Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca	Minería	Petróleo, Maderas y otros	Alimentación y bebidas	Textil	Papel e Imprenta	Químico y Farmacéutico	Metalurgia	Maquinaria y materiales	Automovilístico, Naval, Aeronáutico	Energía	Construcción	Comercio	Transporte, correos y almacenamiento	Hostelería	Editorial	Prensa	Cinematografía y otros	Seguros	Inmobiliaria	Profesional, científica. técnica	Defensa	Entretenimiento	Servicios Auxiliares y otras	Total
La Región	1																								1
Canaria de Avisos																									-
Antonio Gómez Rubio																									-
Barcelonesa de Publicaciones				1	2	1			1	2			1	1	1		1			1					12
Bilbao Editorial	1	2				1		3	8		1						5		4						25
C. P. Diario Pontevedra																									-
Diario de Burgos																									-
Diario de León						1											8								9
Diario Palentino-El Día de Palencia																									-
Diario Regional						2			1	1							8								12
Barcelona Press				2	1				2					1			10		3		1				20
Diarios y Revistas								1		1	2	1													5
Económico Cultural Alavesa	1	1		1			1	6	4		2		1	3	3	5	2		1	1			1		33
Editora Balear											2		1												3
Editorial Cantabria,																									-
Editorial Católica Abulense Pío XII				1		1											6								8
Editorial Católica	1			3			7	2	9	3	11	9	1	1					3	4	1	1		1	57
Editorial Compostela								1	1			2					3		4					1	12
Editorial El Norte de Castilla				4	1		2		3		1					5			1	1					18
Editorial El Noticiero				2					1		2						4		1		1		1	1	13
Editorial Extremadura																									-
Editorial Gráfica Asturiana		7									2									1					10
Editorial Mencheta				1	1	3	1				1	1													8
Editorial Menorca																									-
Editorial Navarra																									-
Editorial Prensa Canaria									1					1											2
Editorial Sevillana	1			4					1			2	1												9
Editorial Vizcaína		1							1																2
El Adelantado de Segovia																									-
El Comercio																									-
Empresa Periodística España				1													4								5
F. Prensa Tradicionalista					4	1			1			2							1						9
Faro de Vigo								1									3		3						7
Federico Doménech																									-

Bloque I-Estructura del sistema de prensa privada tardofranquista

Federico Joly y Cía.																									-
Ferrol Ediciones			1						1					6											8
Heraldo de Aragón																									-
Herederos de Leoncio Rodríguez																									-
Hijos de Francisco Núñez																									-
El Progreso																									-
Juan y Fco. Verdura Ribas																									-
Ilustración					2	1				1					4		2						1		11
Jesusa López Marqués																									-
Joaquín Ferrer y Cía																									-
La Información																									-
La Voz de Asturias								1	4																5
M. Real y Cía.																									-
Majorca Daily Sun																	2								2
Mediterranean Publishing Co.																	3								3
Nueva Rioja				1																					1
Pedro García Munera																									-
Prensa Aragonesa																									-
Prensa Castellana				2								3													5
Prensa Económica									3		2	1					1								7
Prensa Española									1			3					1						1		6
Publicaciones Católicas Ilerdenses																									-
Sociedad Vascongada de Publicaciones						2	1	3	3		1						5		1	1					17
Talleres de Imprenta				1					1								6		3						11
Última Hora																	3								3
Voz de Galicia		1					2		4		1	1		1				2		1					13
Total	5	12	1	23	10	14	15	18	51	7	29	24	6	14	4	14	75	2	27	9	4	1	2	5	372

Fuente: elaboración propia

GRAFICO 2: Conexiones de las empresas de prensa con sectores de la economía española en 1967 y 1975



Fuente: elaboración propia

En 1967, al menos 22 empresas de prensa tenían a alguno de sus consejeros o vocales sentado en los órganos de gobierno de sociedades dedicadas a la producción de maquinaria y materiales; cifra que en 1975 se había reducido levemente a 20. Entre las editoras más ligadas a la actividad se encontraba Bilbao Editorial, vinculada a la Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox y a otras empresas metalúrgicas. Edica, Prensa Española, Sociedad Vascongada de Publicaciones, La Voz de Asturias y La Voz de Galicia estuvieron también especialmente relacionadas con esta rama de actividad del sector manufacturero.

CUADRO 8: Actividades con más conexiones con la prensa diaria al inicio y final del periodo

1967	1975
Producción de maquinaria y materiales	Prensa
Prensa	Producción de maquinaria y materiales
Químico/Farmacéutico	Energía
Seguros	Seguros

Las empresas de energía también mantuvieron una conexión creciente con la prensa privada española durante el periodo. Tanto en 1967 como en 1975, 13 editoras compartían consejeros con empresas energéticas. La mayor vinculación la tuvo sin duda la Editorial Católica, ligada sobre todo a la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa), a Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A. y a la Cía Arrendataria de Monopolio de Petroleos, S.A. (Campsa), entre otras. También fuertemente vinculada a la energía estaban, al inicio del periodo, Barcelonesa de Publicaciones y Editorial Navarra. El presidente de la primera, Miguel Mateu, era al tiempo consejero de Energía e Industrias Aragonesas, S.A. y de Catalana de Gas y Electricidad, S.A.; mientras que el consejero Enrique del Castillo Yurrita presidía la Compañía Comercial Distribuidora S.A. y la Comercial Petrolífera, S.A. Por otro lado, el vicepresidente y hombre fuerte de Editorial Navarra, Luis Arellano Dihinx, era a finales de los sesenta vocal de Fuerzas Eléctricas de Navarra, S.A., de El Irati, S.A. (donde coincidía con el también consejero de Editorial Navarra, Javier Agudo Olaso) y de S.A. Electra Recajo.

Las compañías de seguros también mantuvieron una importante vinculación con la prensa, indisociable por supuesto del peso que, como comprobamos en el anterior apartado, tuvo el mundo financiero en su conjunto en el sector. Al menos 12 editoras de diarios de información general tenían en 1967 y 1975 a alguno de sus consejeros o vocales en el CA de una compañía aseguradora. La empresa con más vinculaciones al inicio del periodo era Tele Exprés, editora del diario barcelonés homónimo: en 1967 la mitad de sus ocho consejeros tenían asiento en los órganos de gobierno de La Constancia, Cía Anónima de Seguros; y de El Porvenir de los Hijos, S.A, que presidía Jaime Castell Lastortras, motor financiero del proyecto *Tele-Exprés*. Bilbao Editorial, Editorial Compostela y Faro de Vigo seguían en 1967 a Tele Exprés en grado de vinculación con el sector asegurador, al estar ligadas a la Cía Española de Reaseguros, S.A.; a La Unión y El Fénix, Cía de Seguros Reunidos, S.A.; a El Hércules Hispano, S.A. de Seguros; y a Galicia, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros. En 1975 cambiarían los actores, pero no la magnitud de los vínculos entre ambos sectores. Bilbao Editorial y Editorial Compostela siguieron siendo de las empresas más ligadas al sector, seguidas de Barcelona Press (la antigua Tele Exprés rebautizada tras la entrada en la estructura de capital del conde de Godó en 1968), la Editorial Católica; Faro de Vigo; y Talleres de Imprenta.

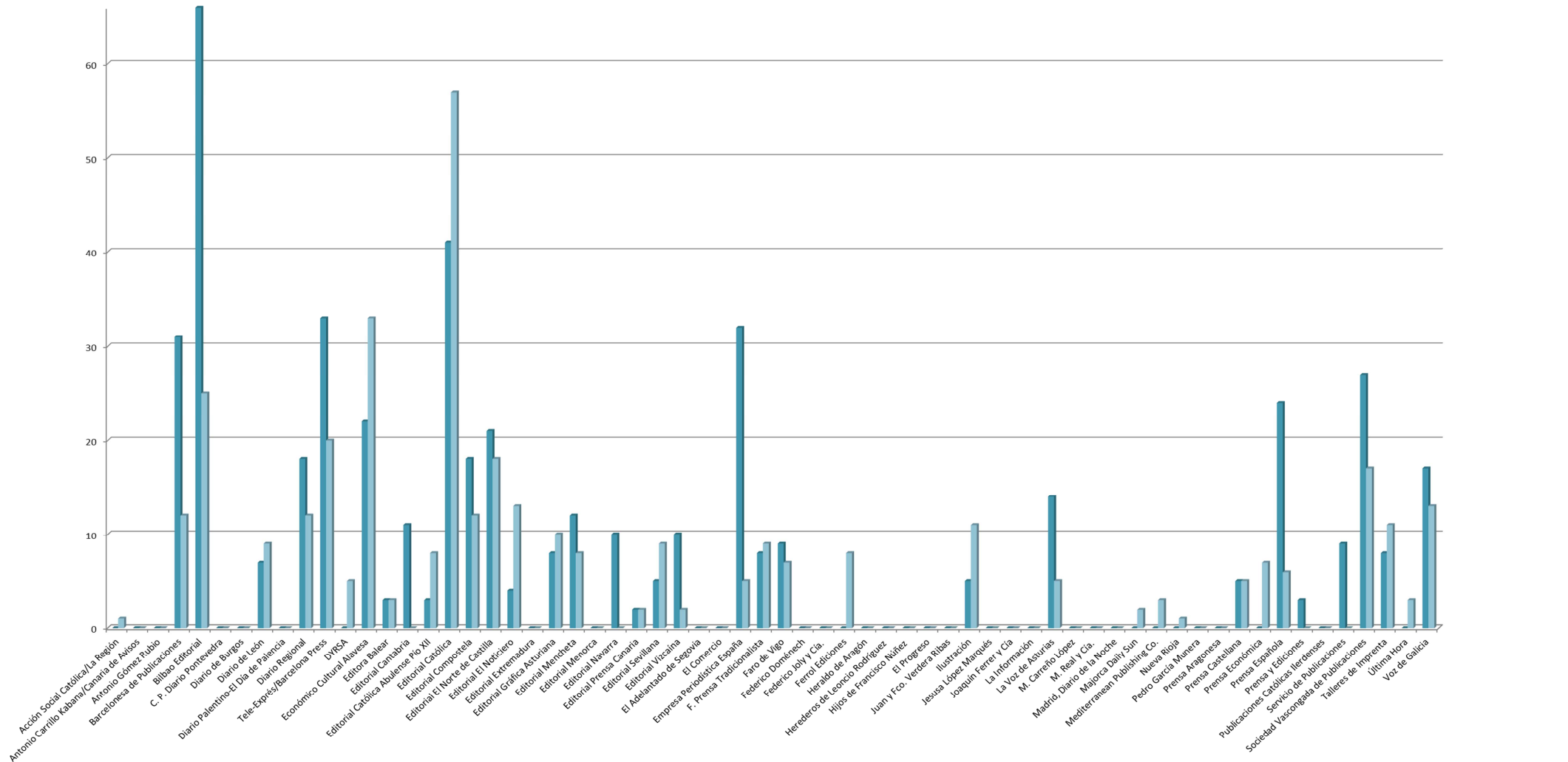
A finales de los sesenta, otro sector de la economía española destacaba por su relación con la prensa: el sector químico-farmacéutico, ligado a 16 editoras privadas de prensa, sobre todo a Barcelonesa de Publicaciones y a Bilbao Editorial. Miguel Mateu

Pla, presidente en 1967 de la primera, presidía a su vez aquel año la Sociedad Española del Oxígeno, S.A. y vicepresidía la Unión Española del Ácido Acético, además de participar en los consejos de otras tres empresas del sector; mientras que el conde de Godó, vicepresidente de la editora, ocupaba al tiempo la vicepresidencia de Productos Pimpinela, S.A. El presidente en 1967 de Bilbao Editorial, Pedro J. Galíndez Vallejo, compatibilizaba en 1967 el cargo con, entre muchos otros, la vicepresidencia de Industrias Químicas Textiles, S.A. y la vocalía de Dow-Unquinesa, S.A, en cuyo consejo también participaba otro de los consejeros de la empresa periodística, Lorenzo Vilallonga Lacave. Otro de los accionistas y consejeros de la editora de *El Correo Español*, Lorenzo Hurtado de Saracho y Arregui, era a finales de los sesenta consejero de Nitratos de Castilla, S.A. y vocal de la Unión Resinera Española, S.A., donde coincidía con el también consejero de Bilbao Editorial, Juan de Aguirre y Achútegui, vocal a su vez de Industrias Químicas de Luchana, S.A. y de Electrolítica Española, S.A., en cuyo CA también se sentaba Enrique de Areilza y Churruca, consejero asimismo de Bilbao Editorial. En los años setenta, disminuyó la relación con la prensa del sector químico-farmacéutico, que sólo mantuvo vínculos importantes con la Editorial Católica, en cuyo consejo se sentaban Luis Coronel de Palma (vocal de IBYS, Instituto de Biología y Sueroterapia, S.A.), Juan de Herrera Fernández (vocal de Sociedad Española del Oxígeno, S.A.) y sobre todo Narciso de Carreras Guiteras (presidente de Laboratorios Unisol, S.A. y de Productos Neosan, S.A., y consejero de Industrias del Acetato de Celulosa, S.A., Unión Española del Ácido Acético, S.A. y Sociedad Anónima Cros, S.A.).

La construcción tuvo también, ya desde los años sesenta, un peso extraordinario en los Consejos de las empresas de prensa. Diez editoras en 1967 y nueve en 1975 contaban con algún consejero o vocal con cargos análogos en empresas constructoras. Prensa Española y Tele Exprés eran las más ligadas al sector al inicio del periodo. La primera estaba estrechamente vinculada a Alquín, S.A., la sociedad constructora de los Luca de Tena; mientras que Tele Exprés mantenía relaciones con las constructoras a través de su financiero, Jaime Castell, presidente de Urbanizaciones y Edificios, S.A. y consejero de Ecisa, Compañía Constructora, S.A.; Construcciones Horizontales, S.A. y Politur, S.A. En 1975, en cambio, era la Editorial Católica la empresa de prensa más conectada con la construcción, a través de Luis Coronel de Palma, vocal de la Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas, S.A.; de Antonio Durán Tovar, consejero delegado de Dragados y Construcciones, S.A. (además de ser consejero de Obras Metálicas Electro Soldadas); y de Marcelino Oreja Aguirre, vocal de Agromán, Empresa Constructora, S.A.

El repaso de las ramas de actividad y sectores más ligados a la prensa tradofranquista permite ya vislumbrar cuáles eran las empresas de prensa más conectadas con otras sociedades de la economía española.

GRÁFICO 3: Conexiones de las empresas periodísticas privadas con otras empresas en 1967 y 1975



Aunque la naturaleza e implicación de las conexiones resulte lo suficientemente compleja como para poder afirmar que las editoras más influyentes del país eran a su vez las más interconectadas, lo cierto es que las empresas cuyos consejeros compartían más intereses con otras sociedades eran las editoras de los diarios más leídos, y todas aquellas, con la excepción de TISA (editora de *La Vanguardia Española*), que imprimían diarios privados de información general con más de 100.000 ejemplares de difusión diaria. Por lo demás, como ya ocurriera con las sociedades de prensa más ligadas al sector financiero, la mayor parte se ubicaban en la región industrial y económicamente más potente, el Norte y Noreste del país. Sólo Edica, Empresa Periodística España, Prensa Española y El Norte de Castilla tenían su sede fuera de Cataluña y el País Vasco.

CUADRO 9: Editoras con más conexiones con la economía nacional al inicio y final del periodo a través de sus consejeros

1967	1975
Bilbao Editorial	Editorial Católica
Editorial Católica	Económico Cultural Alavesa
Tele Expres	Bilbao Editorial
Empresa Periodística España	Barcelona Press
Sociedad Vascongada de Publicaciones	El Norte de Castilla
Prensa Española	Sociedad Vascongada de Publicaciones

Fuente: elaboración propia

Bilbao Editorial, S.A., editora de *El Correo Español*, se encontraba gobernada en 1967 por un CA con intereses en empresas de hasta quince ramas de actividad diferentes; ocho en 1975. Las mayores vinculaciones las mantenía con empresas dedicadas a la producción de maquinaria y materiales, con sociedades mineras y metalúrgicas, con empresas químico-farmacéuticas, con la industria naval y con compañías aseguradoras. Su participada, la Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., editora de *El Diario Vasco*, tenía a su vez conexiones con diez ramas de actividad en 1967 y ocho en 1975, fundamentalmente en la actividad minera, en la producción de papel e imprenta, en la químico-farmacéutica, energética y de transportes y correos.

En 1967 los consejeros de la Editorial Católica mantenían vínculos con empresas de dieciséis ramas de actividad económica, sólo una más que en 1975. Las actividades más ligadas a la cadena de la ACN de P eran, al inicio del periodo, la producción de maquinaria y materiales y la energía; a ambas se les añadirían, en la primera mitad de los setenta, la construcción, la actividad inmobiliaria, y el sector químico-farmacéutico.

Tele Exprés mantenía conexiones en 1967 con empresas de 11 ramas de actividad diferentes; cuatro más de las que en 1975 mantendría su sucesora Barcelona Press. Los vínculos más importantes se establecieron con el sector textil y asegurador, así como con la construcción y la manufactura de maquinaria y materiales; a todos ellos se añadiría desde 1968 la prensa, tras la entrada ese año en el capital de Carlos de Godó Valls, propietario de *La Vanguardia Española* y con participaciones en otras empresas del sector.

Completaban el cuadro de la empresas más ligadas a otras actividades en 1967 Prensa Española y Empresa Periodística España. La familia Luca de Tena y otros consejeros de la primera tenían intereses en la construcción (Alquin, S.A.), en la manufactura de maquinaria y materiales (sobre todo en la Compañía General de Asfaltos y Portland Aslan), en la producción cinematográfica (Sevilla Films, S.A., presidida por Fernando Luca de Tena y Cía Industrial Film Español, S.A.) y en el sector asegurador (Occidente, Cía Española de Seguros, S.A.). Las conexiones de Empresa Periodística España se establecían fundamentalmente, en cambio, con el sector primario (sobre todo con Algodonera de Levante, S.A. y con la General Agrícola Industrial, S.A. a las que estaba vinculado el presidente, Luis Zarraluqui Villalba); con el sector textil (Compañía Española Productora de Algodón Nacional, S.A. y Algodonera Andaluza, S.A., también ligadas a Zarraluqui; y Godó y Trías, S.A., del conde de Godó) y con la manufactura de maquinaria y materiales, con la que mantenían vínculos el vicepresidente, Carlos de Godó y los consejeros Rodolfo Bacharach Hess e Ismael Barrera de Juan.

En los años setenta, otras dos empresas se incorporarían al grupo de las más vinculadas, a través de sus consejeros, a otras sociedades de la economía nacional: El Norte de Castilla, editora del diario homónimo y sobre todo Económico Cultura Alavesa, propietaria de *Norte Exprés*. La primera mantenía vínculos en 1975 con ocho ramas de actividad de la economía nacional; especialmente importantes con la producción y comercialización de alimentación y bebidas (el presidente, Alejandro Royo Villanova era al tiempo director Administrativo de la Sociedad General Azucarera de España y de la Unión Alcohólica de España, que vicepresidía el también consejero Alejandro Fernández de Araoz), la producción de maquinaria y materiales (Emilio Gómez de Orbaneja compaginaba la vicepresidencia de la editora con la de la SKF Española, S.A.) y la actividad editorial a través de la editorial Miñón, S.A., presidida por el consejero José Antonio Rubio Sacristán. Económico Cultural Alavesa, por su parte, mantenía el último año de la dictadura vínculos con quince ramas de actividad; en especial con la metalurgia (a través del consejero Pedro Luis Aguirre Echevarría, presidente y consejero delegado de Forjas Alavesas, S.A. [en cuyo CA participaban otros tres consejeros de ECASA],

consejero delegado de Polvos Metálicos, S.A. y vocal de la Unión de Empresas y Entidades Siderúrgicas), la producción de maquinaria y materiales (Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox, S.A. y Sierras Alavesas, S.A.) y la actividad editorial de Heraclio Fournier, S.A. y de Editorial Magisterio Español, S.A. presididas por Félix Alfaro Fournier, presidente al tiempo de ECASA.

Bloque II: El modelo tardofranquista de control de la empresa periodística privada

5. La tamización del sistema de prensa privada: el Registro de Empresas Periodísticas

El franquismo desechó, ya desde sus inicios, la posibilidad de establecer un régimen de monopolio estatal sobre la prensa. Junto a la Cadena de Prensa del Movimiento subsistió una prensa privada, configurándose un régimen mixto que impelía al Estado a asumir nuevas “cautelos”. A ellas responde la función estatal de “organización” de la prensa que contempla la Ley de 1938. Por supuesto, la “organización” no era sino un eufemismo de la potestad estatal de fijar el número de publicaciones periódicas que podían tener cabida en el sistema (art. 2); o, en otros términos, de la potestad de *tamizar* el sistema de prensa en función del criterio de la Administración. El Estado franquista mantuvo esta facultad circumscripтора sometida a una absoluta discrecionalidad administrativa hasta 1966, y a una discrecionalidad limitada, desde aquel año y hasta 1975. Pero nunca renunció a controlar quién podía y quién no podía editar prensa diaria en España.

De la importancia que, desde 1938, confirió el Régimen a esta función de tamización da cuenta el que aparezca como la primera de las atribuciones estatales establecidas por la Ley de Prensa de 1938 en su artículo primero. La Administración asume entonces la función de circunscribir el sistema, estableciendo un primer filtrado discrecional de las empresas periodísticas que podían editar diarios, mediante dos mecanismos que, aunque con variaciones, ya no se abandonarían hasta 1975: la necesidad de una autorización administrativa para poder desempeñar la actividad periodística; y la posibilidad coactiva y nada remota de que la Administración cerrara publicaciones, sin intervención judicial ni, hasta 1966, protección jurídica alguna para las empresas afectadas. Ambos actos garantizaban al Régimen el control de la entrada y salida del sistema de prensa y, en definitiva, la circunscripción de éste a aquellos agentes privados que obtuvieran el pláacet administrativo.

El modelo tardofranquista de tamización de la prensa tiene, pues, su origen remoto en los primeros años del franquismo, aunque no comenzará a adoptar sus rasgos definitivos hasta la etapa ministerial de Gabriel Arias Salgado. La gran cesura se produce en 1958, cuando se modifica el proceder administrativo anterior al alumbrarse el que será, hasta el final del franquismo, el principal instrumento político de cribado del sistema: el Registro de Empresas Periodísticas³⁰⁷. El REP nace aquel año y se consolida en

³⁰⁷ A pesar de la evidente naturaleza política del REP, los pocos autores que se han detenido en sus principios y funcionamiento (Salas, 1975; Menéndez, 1995), lo han hecho desde una óptica eminentemente jurídica. Así, José Menéndez ha descrito el REP como “Una oficina pública, dirigida por funcionarios en la que, mediante asientos, sometidos al control de la Secretaría de Estado para la Información [por Dirección General de Prensa, entre 1966 y 1973; y Dirección

1966 como un registro administrativo³⁰⁸ dirigido a posibilitar el control policial de las empresas periodísticas privadas. La publicidad de los datos registrales que ofrece a terceros —y que queda garantizada mediante el acceso público a sus libros establecido en el artículo 18 del Decreto 749/1966, de 31 de marzo (BOE de 4 de abril)— no es sino una función secundaria y subsidiaria de su finalidad policíaca primordial, explicada así por la jurisprudencia:

El Registro de Empresas Periodísticas establecido en la Dirección General de Prensa [...] tiene como *finalidad preferente* la de proporcionar a la Administración pública los datos necesarios para el ejercicio de su *función de policía* de la información configurada [en la LPI] [...] mediante un haz de potestades administrativas [...] [el subrayado es nuestro] (STS de 9 de junio de 1972, r.c.j. Aranzadi, 2618/72).

El REP se configura, en efecto, como un registro policíaco³⁰⁹ orientado a la provisión de información a la Administración: se concibe, constituye y consolida como un *instrumento político dirigido a posibilitar a la Administración la circunscripción y el control del sistema de prensa*. De ahí que quien se encargue de la calificación registral —esto es: de la valoración de los datos aportados por la empresa al Registro— sea la Dirección General de Prensa (y desde 1973, la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa), y no un registrador independiente, como sería preceptivo en un registro técnico-jurídico (Menéndez, 1995: 1522). A la DGP se le concede, durante la tramitación del expediente de inscripción, la posibilidad de exigir o practicar cuantas comprobaciones estime pertinentes, según el artículo 6 del Decreto 749/1966. Concluida la tramitación, el director general eleva propuesta razonada de resolución al ministro, quien puede aceptarla o no (arts. 8 y 9 del Decreto 749/1966). La Administración empleará estas atribuciones para convertir el REP en la puerta de entrada y salida del sistema de prensa, y la inscripción registral, en su llave. Así lo demuestran los

General del Régimen Jurídico de la Prensa, entre 1973 y 1975] se lleva a efecto la publicidad de la constitución, modificaciones y demás circunstancias de las empresas periodísticas y de los medios periódicos que publican” (Menéndez, 1995: 1506).

³⁰⁸ Dentro de la tradicional distinción entre “registros jurídicos”, orientados a ofrecer seguridad jurídica y protección a los registrados, y “registros administrativos”, destinados a facilitar ciertas funciones de la Administración, el REP se encuadra en esta última categoría (Salas, 1975: 24-25). Así lo afirma también la STS de 9 de junio de 1972 (r.c.j. Aranzadi, 2618/72).

³⁰⁹ Hay que entender el término “policíaco” en su sentido jurídico. Así, cabe distinguir dos tipos de registros administrativos, los policíacos y los de fomento. Mientras que estos últimos tratan de estimular la iniciativa individual, los policíacos pretenden controlar (y por tanto en cierto modo limitar) la actividad privada (Menéndez, 1995: 1499-1500).

Según la opinión de Rafael Entrena Cuesta, la de policía es la función tradicional ejercida por la Administración con respecto a la prensa, por más que durante la segunda mitad del XX se viera completada por las funciones de fomento y de servicio público. “Tradicionalmente [afirma] [...] la actividad desarrollada por la Administración respecto de la Prensa ha tenido carácter policial, en el sentido de que se ejercitaba a través de medidas limitadoras del derecho a la libertad de expresión del pensamiento, encaminadas a mantener y restaurar el orden público” (Entrena, 1963: 466)

procedimientos seguidos por la DGP para la tramitación de los expedientes de inscripción de las empresas periodísticas. Según hemos constatado, los datos que éstas habían de aportar por Ley al Registro sirvieron de base para profusas pesquisas policiales, cuyas conclusiones sustentaron en muchos casos, junto al parecer de los gobernadores civiles y delegados provinciales del MIT, la admisión o no de la empresa en el sistema. La DGP orquestó para ello, durante el periodo de Manuel Jiménez Quílez³¹⁰, un aparato de vigilancia que implicaba a las Delegaciones Provinciales y a los propios Servicios de Información de la DGP y que permitió al organismo conocer en profundidad los antecedentes políticos de promotores, accionistas y directivos, así como el espíritu político que animaba sus iniciativas. Tales informaciones fundamentaron en gran medida la concesión o denegación de la inscripción registral, cuya resolución vino siempre motivada, fuera en uno u otro sentido, por una evaluación del Ministerio basada en razones estrictamente políticas. La Administración, como veremos, sólo concedió la inscripción registral a aquellas empresas que contaban con apoyos y garantes políticos y que eran estratégicamente interesantes o cuanto menos políticamente inocuas. Aquellos otros proyectos que, en cambio, resultaran políticamente inconvenientes, arriesgados o siquiera inciertos, fueron rechazados, bien mediante la denegación oficiosa de la inscripción, bien mediante la demora de la tramitación del expediente. Por lo demás, el MIT siempre se reservó la facultad legal de cancelar o anular las inscripciones, lo que le permitió expulsar del sistema de prensa a aquellas empresas que, aun habiendo sido previamente admitidas, acabaran por mostrarse excesivamente díscolas o problemáticas. De este modo, mediante el control del acceso y salida del sistema de prensa privada a través del REP, la Administración se aseguraba el filtrado efectivo del mismo.

El origen del REP se remonta a unos años antes de la aprobación de la Ley Fraga. El MIT de Arias Salgado se dota de este instrumento político de control mediante la Orden de 10 de enero de 1958 (BOE de 13 de febrero) (art. 4)³¹¹. La Administración se presenta en la disposición como garante del cumplimiento de los “fines sociales perseguidos” a través de la prensa, de modo que:

[...] se hace necesario [se aduce en el preámbulo] garantizar que los fines sociales perseguidos no se vulneren, y ello aconseja la conveniencia de conocer el auténtico destino de los cupos de papel a través de la exacta documentación de la titularidad real, tanto orgánica como económica, de las Empresas beneficiarias.

³¹⁰ Así lo reconocería por otra parte el director general de Prensa, Alejandro Fernández Sordo, en un encuentro personal con el periodista Mauro Muñiz el 3 de enero de 1970. “Aquí hay un aparato de vigilancia muy bien montado... por Quílez”, diría Fernández (Muñiz, 2005: 115).

³¹¹ Esta disposición sería derogada por la Orden de Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963 (BOE de 6 de abril); a excepción, precisamente, de los artículos 4 y 5 referidos al REP, que se mantendrán en vigor hasta 1966.

El ministerio justifica la creación del REP en la necesidad de obtener información para la distribución de los cupos de papel prensa entre las empresas. Desde 1951, el Estado venía fijando unos cupos de papel prensa a precios políticos, a los que podían tener acceso las empresas periodísticas que lo solicitasen (v. 7.1). Con la aparición del REP, esa ayuda indirecta, imprescindible para la prensa, quedaba restringida a las empresas que se avinieran a facilitar a la Administración los datos necesarios para el ejercicio de su función policial. De acuerdo con la Orden de 10 de enero de 1958, para tener acceso a los cupos de papel a precios rebajados, las empresas periodísticas debían dar a conocer a sus socios y directivos, así como sus estatutos sociales. Para las empresas constituidas como Sociedades Anónimas, la disposición exigía la identificación de los accionistas (cuyas acciones habían de ser nominativas) y miembros del Consejo de Administración (art. 5). Además, el MIT obligaba a la empresa a informar de todo cambio en su titularidad y accionariado (art. 7) y eximía del cumplimiento de la Orden a aquellas empresas que editaran cinco o más periódicos diarios (disposición transitoria); esto es: a la Cadena de Prensa del Movimiento³¹². Todos estos requisitos quedarían confirmados y desarrollados pocos meses después, mediante la Orden del MIT de 4 de octubre de 1958 (BOE de 21 de octubre)³¹³. La Orden regula el funcionamiento del REP, integrado en la Dirección General de Prensa y en el que, según se ratifica en el artículo primero, “deberán inscribirse todas aquellas [empresas periodísticas] que deseen acogerse a los beneficios de cupos de papel protegidos”. La Administración reclama los datos sobre titularidad y dirección de la empresa (art. 3) para resolver una inscripción que, por supuesto, se reserva la potestad de denegar (art. 6)³¹⁴.

El Registro de Empresas Periodísticas no se consolidará como instrumento político de tamización y control del sistema de prensa hasta 1966, con la aprobación de la LPI, que le dedicará todo un capítulo de seis artículos (capítulo IV: artículos 26 a 32). En el artículo 26, la norma dictamina que

³¹² Esta disposición transitoria (ratificada meses después en la disposición final de la Orden de 4 de octubre de 1958) se refiere, en efecto, a la Cadena de Prensa del Movimiento, la única que en 1958 poseía cinco o más diarios (Edica, la otra gran cadena de prensa, poseía en 1958 sólo cuatro diarios.) La disposición transitoria remitía a una legislación específica para este caso que, sin embargo, nunca llegó a ver la luz.

Finalmente, quedaría derogada por la Orden de 15 de marzo de 1963 (BOE de 6 de abril); por lo que desde entonces todas las empresas periodísticas deberían inscribirse en el REP para acceder a las ayudas por consumo de papel prensa.

³¹³ Derogada por la LPI de 1966.

³¹⁴ La denegación de la inscripción en el Registro quedaba así formulada en la Orden: “Admitida la documentación, la Dirección General [de Prensa] resolverá sobre la inscripción o no de la Empresa [...]”

Las Empresas periodísticas habrán de inscribirse, antes de dar comienzo al ejercicio de sus actividades, en un registro de carácter público, que se llevará en el Ministerio de Información y Turismo, y que se denominará ‘Registro de Empresas Periodísticas’. La LPI prescribía la obligatoriedad de la inscripción de las empresas periodísticas en el REP, imponiendo un requisito previo e ineludible para el desempeño de la actividad periodística. Venía así a limitar la libertad de constitución de empresas que había proclamado en el preámbulo como uno de sus pilares y *concedido* apenas unos artículos antes³¹⁵:

Conforme a lo dispuesto en esta Ley [establecía el art. 16], toda persona natural de nacionalidad española y residente en España que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrá libremente constituir o participar en Empresas que tengan por objeto la edición de impresos periódicos. Iguales derechos tendrán las personas jurídicas de nacionalidad española y con domicilio en España. Dichas empresas se denominarán ‘Empresas periodísticas’.

La interpretación de ambos artículos ha inspirado dos tesis enfrentadas a propósito del carácter constitutivo o no que para la empresa periodística tiene la inscripción en el REP y, en definitiva, de la concepción de la empresa periodística que manifiesta el legislador. Alfonso Nieto considera que la constitución de empresas de tipo periodístico —y, por tanto, la consideración de una empresa como periodística— se encuentra sujeta al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, incluidos los exigidos para la inscripción en el REP (Nieto, 1973: 47). Para Nieto, la inscripción es un requisito de carácter constitutivo: únicamente son consideradas periodísticas las empresas inscritas. Varios juristas difieren de esta interpretación. Fernando Conesa opina que, para la consideración de una empresa como periodística, la Ley exige únicamente el cumplimiento de los requisitos de constitución (fijados en el artículo 16) y no los de inscripción (contenidos en el artículo 26):

Los requisitos de constitución [...] hacen referencia a la nacionalidad y residencia españolas de las personas físicas o jurídicas titulares de las publicaciones, objeto

³¹⁵ El hecho de que esta libertad sea “concedida” y no “reconocida” por el Estado sugiere, según Fernando Conesa, una concepción de la prensa presente en la *mens legis* en el momento de elaborar la Ley ajena al derecho a la información y más acorde con los principios que rigieron la materia en el siglo XIX. Así lo explica Conesa: “Cuando se adopta la perspectiva del derecho a la información [...] la constitución de empresas con el objeto de informar por medio de publicaciones periódicas, es un derecho directamente derivado de la facultad de difundir informaciones que a todo hombre corresponde, con ese planteamiento, las leyes no crean los derechos y facultades de la persona, sino que los reconocen. Pero como nuestra Ley de Prensa desconoce el derecho a la información [...] no reconoce un derecho, sino que lo concede. El legislador parece situarse en los esquemas del siglo XIX: concibe la información no como el objeto de un derecho de la persona, sino como el objeto de una libertad que el Estado puede conceder con amplitud si actúa con criterios liberales, o que, por el contrario, puede recortar a su antojo si actúa con otro tipo de criterios [...] Nuestra ley de prensa no *reconoce* el derecho a constituir empresas periodísticas, sino que lo *concede*” (Conesa, 1978: 513).

social específico, administración colegiada, etc. Pero no hacen referencia a la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas, puesto que, como señala el artículo 16 [por 26], dicha inscripción es necesaria para ‘dar comienzo al ejercicio de sus actividades’, y no, por tanto, para constituir empresas periodísticas (Conesa, 1978: 503-504).

Del mismo parecer es Javier Salas, para quien la inscripción registral tiene el efecto de regularizar jurídicamente la actividad típica de la empresa, pero no el de constituir su personalidad jurídica (Salas, 1975: 47-48).

Lo cierto es que un repaso a la concepción original con que fue creado el REP, así como al corpus legal que fija su funcionamiento en 1966, confirma la interpretación de Conesa y Salas. El artículo 27.2 de la LPI exige a las empresas, cuando adopten la forma jurídica de sociedad, consignar en la solicitud de inscripción, entre otros datos

[...] copia autorizada de la escritura pública de constitución y de los acuerdos sociales relativos a nombramientos de Administradores y Gestores y *certificación de los asientos registrales respectivos* [el subrayado es nuestro]³¹⁶.

Al reclamar dichos asientos registrales, la Administración está reconociendo, como señala Menéndez (1975: 1537), la existencia de un registro anterior, cuya inscripción sí es constitutiva de la personalidad jurídica de la sociedad: el Registro Mercantil. Por lo demás, el artículo cuarto de la Orden de 10 de enero de 1958 (BOE de 13 de febrero), por la que se creaba el REP, y el artículo primero de la Orden de 4 de octubre de 1958 (BOE de 22 de octubre), por la que se regulaba su funcionamiento, prescriben la necesidad de inscripción únicamente para “todas aquellas [empresas periodísticas] que deseen acogerse a los beneficios de cupos de papel protegidos”. Ambas órdenes sugieren que el Estado no dejaba de contemplar la posibilidad de que existieran empresas periodísticas que, aunque constituidas como tales, no ejercieran dicha actividad, o incluso la ejercieran sin acogerse a los cupos de papel de precio rebajado. Desde su origen, la inscripción en el REP había sido concebida como un requisito —ni siquiera legalmente imprescindible, por más difícil que fuera, en la práctica, editar diarios sin acogerse a los cupos protegidos— para el desempeño de la actividad periodística, pero no para la constitución de las empresas ni para la calificación de éstas como periodísticas.

La consideración equivocada del carácter constitutivo de la inscripción parece asentarse en la obligatoriedad que le confiere la LPI. En efecto, el registro de 1958 se limitaba a incluir a aquellas empresas que quisieran acogerse a los cupos de papel protegidos; mientras que en 1966 la inscripción pasa a ser obligatoria para todas aquellas

³¹⁶ Véase también el art. 5.º del Decreto 749/1966, de 31 de marzo (BOE de 4 de abril).

empresas periodísticas que quieran editar publicaciones periódicas. Para Salas y Menéndez esto supone un cambio en el sentido de la intervención estatal,

Porque si en las disposiciones de 1958 el sistema de inscripciones y el consiguiente control de la Administración era la contrapartida a los beneficios que de aquella recibían las Empresas —lo que es común, como se sabe, a todo sistema subvencional—, y, por tanto, el ingreso en el mismo era voluntario para aquéllas, en la LP de 1966, la inscripción va a ser *condictio sine qua non* para ejercer la actividad empresarial periodística o editorial (Salas, *op. cit.*: 52)³¹⁷.

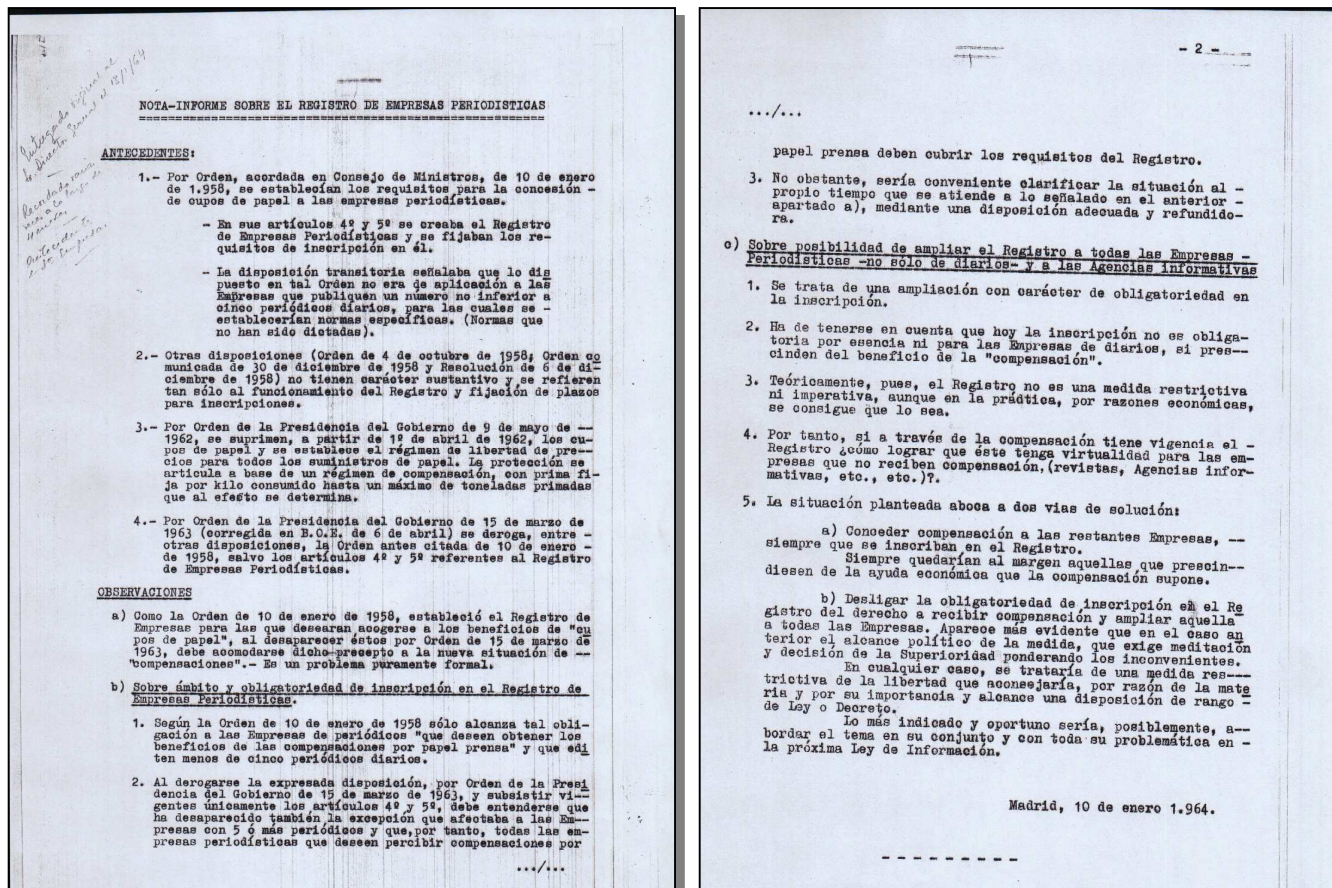
Es preciso hacer notar, no obstante, que esta variación del sentido de la intervención resulta, aunque cierta, más formal que real. Como veremos en el capítulo séptimo, dada la estructura de ingresos y gastos y el precio político de venta de los diarios, a principios de los sesenta, a una empresa periodística le resultaba casi inviable económicamente permanecer al margen de los cupos de papel protegidos; por más que legalmente pudiera hacerlo. Aunque formalmente voluntaria, la inscripción en el REP fue, también entre 1958 y 1966, obligatoria en la práctica. Lo corrobora una “nota-informe sobre el Registro de Empresas Periodísticas” hallado entre la correspondencia mantenida por la Dirección General de Prensa entre 1963 y 1976. El informe, datado en Madrid el 10 de enero de 1964 y sin firma —aunque probablemente sea obra, bien del entonces jefe del REP, Luis Ayerbe³¹⁸; bien de la asesoría jurídica de la DGP—, fue entregado al Director General de Prensa el 13 de enero (según anotación manuscrita). En la segunda página, se incluyen observaciones como la siguiente:

Ha de tenerse en cuenta que hoy la inscripción no es obligatoria por esencia [...] Teóricamente, pues, el Registro no es una medida restrictiva ni imperativa, *aunque en la práctica, por razones económicas, se consigue que lo sea*³¹⁹ [el subrayado es nuestro].

³¹⁷ Conviene señalar, en cualquier caso, que, a pesar de su obligatoriedad, la LPI también vincula la inscripción en el REP a la obtención de beneficios económicos. El artículo 32, titulado “Beneficios”, establece que “Una vez inscrita en el Registro la Empresa periodística participará de los beneficios de carácter tributario, económico, postal, de distribución, comunicación y cuantos otros análogos se otorguen [...]”.

³¹⁸ Ayerbe será jefe del REP entre el 8 de enero de 1959 y el 21 de marzo de 1970, cuando el Decreto 836/1970, de 21 de marzo designa a Álvaro Galán Fernández como su sucesor. Con motivo del cambio de gobierno y la llegada del nuevo equipo al MIT, Ayerbe había enviado ya otro informe al Director General de Prensa el 23 de julio de 1962 explicando el funcionamiento del Registro.

³¹⁹ “Nota-Informe sobre el Registro de Empresas Periodísticas”, Madrid, 10 de enero de 1964. En AGA (03)49. 21 c. 65.071. V. Anexo V.



La Administración se ve empujada a este cambio en el sentido formal de la intervención —de una inscripción aparentemente voluntaria a otra obligatoria— debido a la modificación del régimen de ayudas a la prensa que se da en 1962. Tras su llegada al MIT, Manuel Fraga liberalizará el precio del papel prensa y sustituirá los cupos con precios políticos por primas directas a las empresas en función de su consumo de papel nacional (v. 7.1.1.1). La eliminación de los cupos protegidos dictaminada por la Orden de 9 de mayo de 1962 (BOE de 10 de mayo) hacía necesaria la acomodación del REP al nuevo régimen de ayudas. A ello alude el informe de 10 de enero de 1964: todo parece indicar que la Dirección General de Prensa se está planteando ya, al menos desde principios de 1964, un cambio en la voluntariedad y extensión de la inscripción registral. Es muy significativa, en este sentido, la última de las soluciones que el autor del informe propone al director General de Prensa; a saber:

Desligar la obligatoriedad de inscripción en el Registro del derecho a recibir compensación y ampliar aquella a todas las Empresas. Aparece más evidente que en el caso anterior el alcance político de la medida, que exige meditación y decisión de la Superioridad ponderando los inconvenientes.

En cualquier caso, se trataría de una medida restrictiva de la libertad que aconsejaría, por razón de la materia y por su importancia y alcance una disposición de rango de Ley o Decreto.

Lo más indicado y oportuno sería, posiblemente, abordar el tema en su conjunto y con toda su problemática en la próxima Ley de Información.

Será precisamente ésta, como sabemos, la solución que adopte el legislador en 1966; aún a costa de, como advierte el informe, hacer más evidente la verdadera finalidad política de tamización y control policial del REP.

A pesar de todo, no faltaron autores dispuestos a presentar el REP como un ente meramente técnico y la LPI como el final del régimen de tamización anterior. El responsable del aparato censor bajo el ministerio de Fraga, Manuel Camacho de Ciria, ha afirmado que la LPI de 1966 supone el fin del trámite de autorización previa para la prensa. Camacho de Ciria considera que, con la Ley, desaparece la vieja atribución del Estado de fijar el número y extensión de las publicaciones a través de la autorización administrativa (Camacho, 1968: 14-15). Todo lo expuesto hasta ahora —por no mencionar la aplicación que tendrá la Ley y a la que enseguida atenderemos— demuestran lo contrario. Tanto por su obligatoriedad para el desempeño de la actividad periodística, como por su carácter habilitador del inicio de dicha actividad, la inscripción en el REP se revela como una auténtica autorización administrativa para la edición de prensa diaria³²⁰; como un nuevo procedimiento de concesión de licencias de edición —acaso más sofisticado, pero no menos efectivo— llamado a preservar la capacidad administrativa de tamizar el sistema.

Se muestra así el Registro de Empresas Periodísticas como una versión moderna y más perfeccionada, más casuística, del sistema de la autorización previa u *octroi*. De ahí que exista cierta antinomia, si no literal sí conceptual, entre el artículo 16 de la Ley de Prensa, que consagra la libertad de constitución de estas empresas, y los artículos 26 y siguientes, que regulan el Registro de Empresas Periodísticas, con un enfoque predominantemente intervencionista (Menéndez, *op. cit.*: 1542).

Con todo, la Ley supone un indudable avance con respecto a la situación anterior, en la medida en que viene a tipificar el procedimiento de concesión de dicha autorización. La Ley de Prensa de 1938 había dejado sin regular el procedimiento para cursar y obtener la autorización administrativa previa, imprescindible para concurrir al sistema de prensa. Mientras que a la designación del director y a la profesión periodística —es decir, al acceso a la profesión— le dedicaba la norma hasta diez artículos³²¹, la autorización de nuevas publicaciones no merecía ninguno. Naturalmente, la omisión de

³²⁰ Así lo considera también el catedrático de derecho administrativo Manuel Clavero Arévalo, para quien “Los actos de inscripción son necesarios para realizar la correspondiente actividad y desde un punto de vista jurídico deben calificarse, en general, como autorizaciones [...]” (Clavero, 1967: 273).

³²¹ Del octavo al decimoséptimo. En ellos se detalla, además, el proceso para la obtención de la autorización, a través del Registro Oficial de Periodistas, para acceder a la profesión.

un procedimiento normalizado para la obtención del plácet administrativo abría la puerta a la arbitrariedad y la discrecionalidad más absoluta en la concesión de autorizaciones; discrecionalidad que se mantendría sin cortapisa alguna durante al menos veinte años, en tanto ninguna disposición de rango inferior vendría a subsanar el vacío legal hasta 1958³²².

El capítulo IV de la LPI —desarrollado poco después por el Decreto 749/1966, de 31 de marzo (BOE de 4 de abril)— viene a tipificar definitivamente el procedimiento de tramitación de la autorización administrativa previa. La normalización del acceso al sistema de prensa supone, desde luego, una notable atenuación de la discrecionalidad administrativa en la materia; si bien no implica, como enseguida demostraremos, su eliminación completa. La mejora con respecto a 1938 viene dada tanto por la enumeración de los documentos necesarios para obtener la inscripción registral, como,

³²² Dado que los criterios de concesión de autorizaciones administrativas para la prensa diaria permanecieron ignotos hasta 1958, hay que acudir a la tramitación de las autorizaciones de revistas para hacerse una idea del proceder de la Administración en esta materia. Para las publicaciones periódicas no diarias sí hay dos disposiciones de 1940 y 1942 referidas a la cuestión. El 21 de febrero de 1940, una Orden circular de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda (BOE de 5 de marzo) designa a la Dirección General de Prensa como el organismo encargado de conceder o denegar la autorización administrativa. Ésta quedaba además ligada a la disponibilidad de papel prensa (en un antecedente evidente del mecanismo empleado en 1958). Dos años después, con el aparato institucional de prensa bajo control ya de la Secretaría General del Movimiento, una Orden de la Vicesecretaría de Educación Popular de 24 de febrero (BOE de 4 de marzo de 1942) ampliaba la anterior disposición de 1940. Tras definir a las revistas como “instrumento a nuestra Educación Popular”, y argumentar que “su edición y difusión han de responder a un plan mínimo de selección y de decoro que ofrezcan al Estado, al Partido y al lector español garantías políticas y espirituales imprescindibles”, clasificaba las publicaciones no diarias en tres grupos (art. 2): (a) publicaciones “Oficiales” editadas por organismos estatales, provinciales o municipales; (b) publicaciones de FET de las JONS; y (c) publicaciones “particulares” (dentro de las cuales distinguía entre aquellas que se editaban antes del 18 de julio de 1936 y aquellas editadas posteriormente). De acuerdo con la Orden, la potestad para autorizar la publicación de revistas queda reservada en exclusiva a la Vicesecretaría de Educación Popular, de la que también dependían las asignaciones de los cupos de papel (art. 11); todo ello afecta también, por cierto, a las publicaciones del Partido: “A partir de la fecha de publicación de esta Orden [establece el artículo 3] ningún organismo oficial del Partido y ninguna empresa privada o particular podrán ordenar la impresión y venta de ninguna publicación de las incluidas en el artículo primero de esta Orden [esto es, revistas, folletos, impresos, anuarios y otras publicaciones periódicas]”.

Las condiciones que impone la Vicesecretaría de Educación Popular para conceder la autorización son: (1) demostrar que su tirada y línea editorial se encuentran “en consonancia con el prestigio de las publicaciones españolas” (art. 4); (2) para las revistas de titularidad privada, acompañar la solicitud de licencia de dos informes favorables elaborados por las delegaciones provinciales del Partido (art. 7): un “informe político-social de la persona o entidad que firme la solicitud”; y otro “informe político-social de cada una de las personas que figuren en la solicitud” (Para las publicaciones religiosas, además de estos dos informes, debía adjuntarse también a la solicitud un tercer informe elaborado por las autoridades eclesíásticas, según el art. 15); y (3) la obligación del director de la publicación de estar registrado en el Registro Oficial de Periodistas también bajo control de la Delegación Nacional de Prensa y por tanto de la Vicesecretaría de Educación Popular. Es evidente que los tres requisitos apuntan a un criterio de admisión eminentemente ideológico, si bien la ambigüedad de condiciones como el “prestigio” no deja de abrir un amplísimo margen a la arbitrariedad de la Vicesecretaría para conceder o no la autorización.

sobre todo, por la fijación de una relación cerrada de causas de denegación y cancelación de las inscripciones. El artículo 27 de la Ley enumera los datos que han de consignarse en la solicitud de inscripción. Esta enumeración, así como la fórmula empleada en la Ley (“La inscripción se practicará [...]”), permite hablar de un *derecho subjetivo* de las empresas periodísticas a obtener la inscripción registral, siempre que cumplan con los requisitos y aporten los datos que se les reclaman (v. Salas, *op. cit.*: 46; Menéndez, *op. cit.*: 1511-1512). Por otro lado, aunque no se admita la inscripción como norma general y la denegación como una salvedad³²³, el artículo 29 fija al menos un *númerus clausus* de causas denegatorias y anulatorias de la inscripción. Según la opinión de algunos juristas (Clavero, 1967: 273; Salas, *op. cit.*: 44; Menéndez, *op. cit.*: 1525), el establecimiento de estos requisitos implica un cambio esencial en la concesión o no de la autorización previa: supone el paso de una decisión gubernativa *discrecional* a una decisión *reglada*, “dado que el Ministerio de Información sólo puede constatar o comprobar si falta algún requisito legal, dato, etc., para poder denegar una inscripción” (Salas, *ibidem*). Otros, en cambio, opinan que, a pesar de todo, la autorización sigue quedando “a la discreción de la Administración” (Fernández Areal, 1973: 254). En realidad, ambas opiniones tienen razón al tiempo. Aunque, en efecto, los artículos 27 y 29 de la LPI convierten la autorización en una decisión formalmente reglada, la Administración mantendrá en la práctica un alto grado de discrecionalidad en sus decisiones, como enseguida demostraremos al examinar la tramitación efectiva que se hizo de los expedientes de inscripción. A ello contribuirá la indeterminación del cuarto supuesto de cancelación del artículo 29 —esto es: la “deducción racional” de la Administración de que la publicación será utilizada para “deformar la opinión pública o impedir la libre información, difusión o distribución”— y, sobre todo, el ingente volumen de documentación que la Ley exige a las empresas periodísticas; mucho mayor, por cierto, que el demandado en 1958. De acuerdo con el artículo 27 de la LPI, la solicitud de inscripción debe incluir los siguientes datos³²⁴:

³²³ Lo que se deduce de la fórmula adoptada finalmente por el texto en el artículo 29: “No procederá la primera y sucesiva inscripción [...]”. Durante el proceso de elaboración de la Ley, hemos detectado un intento del Consejo Nacional de Prensa de convertir la inscripción en norma y la denegación en salvedad. El 11 de junio de 1964, una Comisión especial del Consejo Nacional de Prensa emitía un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta (En AGA sig. (3)49.21 c. 65137). En él, proponía que el encabezamiento “No procederá la primera y sucesiva inscripción” fuese sustituido por la fórmula “Procederá la primera o sucesiva inscripción salvo en los siguientes casos”. Es decir, proponía establecer las causas denegatorias de la inscripción como salvedades de la norma general, que sería la inscripción. A pesar de que el pleno del CNP aprobó la propuesta de la comisión especial y la incluyó en el dictamen remitido al Gobierno, éste no aceptó la propuesta.

³²⁴ Además de todo ello, tal y como hemos señalado algo más arriba, el párrafo segundo del art. 27 obliga a consignar, cuando la forma jurídica adoptada sea la de sociedad, copia autorizada de

- a) Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio de la persona, natural o jurídica, titular de la Empresa.
- b) Estatutos de la sociedad y Reglamento, si lo hubiere.
- c) Nombre del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración.
- d) Descripción del patrimonio de la Empresa y, en su caso, capital social suscrito y desembolsado.
- e) Líneas generales del plan financiero y medios para su realización.
- f) Descripción de la finalidad de las publicaciones y principios que las inspiren.
- g) Publicación o publicaciones que pretende editar, con mención expresa respecto a cada una de las mismas de:
 - a') El título, objeto y periodicidad.
 - b') El lugar y fecha de aparición.
 - c') Las características de formato, las técnicas de impresión y el número previsto de páginas.
 - d') Indicación de si va a aceptar o no publicidad y, en caso afirmativo, reseña de la forma de identificación de la misma, para su deslinde con la función informativa³²⁵.
 - e') El precio previsto de venta por ejemplar, que figurará en la publicación.
 - f') El número aproximado de tirada, cuya comprobación se ajustará al régimen establecido por el Estatuto de la Publicidad.
 - g') La imprenta en que vaya a efectuarse la impresión, especificando el nombre y domicilio de la misma, y el nombre del Director o del Gerente en el momento de la solicitud.
 - h') El nombre y circunstancias personales del Director y del Subdirector o sustituto interino, en su caso, haciendo constar su conformidad expresa con la designación.
 - i') La plantilla de redactores fijos.

A todo ello hay que añadir la obligación de notificar, en el plazo de un mes, cada modificación en los datos de inscripción (art. 28.1); e incluso de hacer constar su no modificación, en caso de no haberse producido cambio alguno, al finalizar cada semestre natural (art. 28.3).

la escritura pública de constitución y de los acuerdos sociales relativos a nombramientos de Administradores y Gestores y certificación de los asientos registrales respectivos.

³²⁵ En el anteproyecto de ley, este apartado referido a la publicidad obligaba a consignar “el porcentaje máximo del espacio [de la publicación] que podrá dedicarse a publicidad”. El CNP propuso en su dictamen que se eliminara esta información (En AGA sig. (3)49.21 c. 65137). Finalmente, la Ley optará por modificar la información requerida, aunque no por eliminarla. Esta es, por cierto, la única modificación substancial que experimenta el artículo durante el proceso de elaboración y tramitación de la Ley.

De no comunicar estos cambios o de hacerlo fuera del plazo previsto, la Administración podía optar por dos posibilidades: sancionar administrativamente a la empresa, en aplicación del art. 28.2; o cancelar la inscripción, en aplicación del art. 29.2 y 29.3³²⁶. Es decir: la Ley concedía a la Administración la posibilidad de aplicar una mera sanción administrativa o de expulsar a la empresa del sistema de prensa en función únicamente de su arbitrio. Por si fuera poco, el Decreto 749/1966 ampliaba aún más la documentación requerida para iniciar el trámite de inscripción, dificultando más si cabe el cumplimiento escrupuloso por parte de las empresas periodísticas³²⁷. La cantidad de

³²⁶ Como veremos en el apartado 5.4, el precepto de cancelación por irregularidades en los datos de inscripción fue, en efecto, empleado por la Administración para la cancelación de la inscripción de varias revistas y del diario *Madrid*.

³²⁷ El artículo 4 del Decreto 749/1966 enumera los documentos necesarios en caso de ser el solicitante una persona natural. Junto al nombre, edad, nacionalidad y domicilio del titular de la empresa, se reclama:

“a) Declaración jurada de que el solicitante se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

b) Declaración comprensiva de los nombres y apellidos, nacionalidad y domicilio del fundador o fundadores y, en su caso, de las personas que desempeñan los cargos o funciones de administración y gestión.

c) Descripción del patrimonio de la Empresa.

d) Exposición de las líneas generales del plan financiero y medios para su realización.

e) Declaración de la publicación o publicaciones que pretende editar, con expresión, para cada una de ellas, de los siguientes extremos:

1º Título de la publicación, aportando certificación del Registro de la Propiedad Industrial acreditativo de su inscripción en el mismo a nombre del solicitante.

2º Determinación del objeto, finalidad y principios que inspiran la publicación, con expresión de los temas a que se concretará el contenido de la misma si no se trata de una publicación de información general.

4º Lugar en que ha de aparecer la publicación y fechas o días de la semana en que se pondrá a la venta.

5º Características de formato, técnicas de impresión y número previsto de páginas.

6º Indicación de si va a aceptar o no publicidad y, en caso afirmativo, reseña de la forma de identificación de la misma para su deslinde con la función informativa.

7º Precio previsto de venta por ejemplar que figurará en la publicación.

8º El número aproximado de tirada, cuya comprobación se ajustará al régimen establecido en el Estatuto de Publicidad.

9º La Imprenta en que vaya a efectuarse la impresión, especificando el nombre y domicilio de la misma y el nombre del Director o del Gerente en el momento de la solicitud.

10º El nombre y circunstancias personales y profesionales del Director y del Subdirector o sustituto interino, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prensa e Imprenta y en el Estatuto de la profesión periodística, acreditando su conformidad expresa con la designación y acompañando la copia del contrato civil de prestación de servicios suscrito con el mismo

11º La plantilla de redactores fijos de la publicación.

El artículo 5º fijaba, en cambio los documentos que debían aportar las personas jurídicas. Junto al nombre o razón social, nacionalidad y domicilio de la persona jurídica titular de la empresa, se reclama:

“a) Copia autorizada de los Estatutos sociales y del Reglamento, si lo hubiere. Cuando la forma jurídica adoptada sea la de Sociedad, se presentará además copia autorizada de la escritura pública de constitución, con certificación del correspondiente asiento registral.

b) Certificación acreditativa de los nombres y apellidos, nacionalidad y domicilio del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración, acreditando que se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Cuando la forma jurídica adoptada sea la de Sociedad se presentará copia autorizada de los acuerdos sociales relativos a

documentos exigidos y la exhaustividad reclamada en la aportación de datos, hacían que las omisiones de las empresas no fueran infrecuentes; lo que no dejaba de minar el derecho subjetivo a la inscripción a que hacíamos antes referencia. Así, tal y como reconoce Javier Salas

Por muy reglada que sea la actividad de la Administración en relación con las empresas periodísticas y editoriales, es tan elevado el número de requisitos y, sobre todo, el número de datos que éstas han de aportar a aquella, que no es difícil que las empresas citadas incurran en ciertas irregularidades, al menos temporalmente (Salas, *op. cit.*: 91).

Irregularidades que, naturalmente, abrían la puerta a la actuación discrecional de la Administración, bien para pasarlas por alto en ciertos casos, bien para denegar o cancelar inscripciones en otros, bien para, según veremos, demorar *sine díe* la tramitación del expediente, reclamando constantemente nuevos documentos.

Ante la denegación o cancelación de inscripciones, la LPI admite recurso de alzada ante el Consejo de Ministros y, por vez primera vez en el franquismo, la posibilidad de presentar recurso contencioso-administrativo. Esta inédita garantía jurídica es, sin lugar a dudas, uno de los principales avances de la Ley (v. 8.3), aunque no responda sino a la naturaleza política del REP (Menéndez, *op. cit.*: 1508), cuyas decisiones de concesión, denegación o cancelación de autorizaciones tienen un fundamento más político que técnico. Prueba de ello son los casos concretos que expondremos en este capítulo. Atenderemos, con el fin de comprender la naturaleza política del registro y de desentrañar su función de tamización y control del sistema de prensa, a las solicitudes de inscripción de nuevas empresas de prensa diaria que fueron admitidas entre 1966 y 1975; así como a aquellas otras solicitudes cuya inscripción fue demorada, denegada o

nombramiento de Administradores y Gestores, composición de los órganos de administración y gestión, con certificación de los correspondientes asientos registrales.

c) Declaración de los elementos que constituyen el patrimonio de la Empresa.

d) Certificación fehaciente, en su caso, del capital social suscrito y del desembolsado, en el que se contenga:

1º Relación nominal de los accionistas, con indicación de la nacionalidad y domicilio de cada uno de ellos, y número de acciones de que son titulares, con expresión concreta, en su caso, del porcentaje de participación de españoles no residentes en España, a efectos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2º, de la Ley de Prensa e Imprenta.

2º Copia autorizada o testimonio notarial de las escrituras de constitución de las Sociedades que sean titulares de acciones de la Sociedad cuya inscripción se solicita, a efectos de acreditar que las acciones de aquéllas son nominativas e intransferibles a extranjeros y que la actividad periodística figura estatutariamente entre las que forman parte de sus fines sociales y relación nominal de los accionistas de dichas Sociedades, con indicación de la nacionalidad y domicilio de cada una de ellos y número de acciones de que son titulares.

e) Exposición de las líneas generales del plan financiero y medio para su realización.

f) Descripción de la finalidad de la publicación o publicaciones que pretenden editar y principios que las inspiren, con expresión, para cada una de ellas, de los extremos contenidos en los números 1º a 11 del apartado e) del artículo 4º de este Decreto”

cancelada. Antes de ello se hace necesario, no obstante, detenernos un instante en los fundamentos doctrinales que inspiraron el modelo tardofranquista de tamización de la prensa española a través del REP.

5.1 Fundamentos doctrinales

La tamización del sistema de prensa encontró fundamentación en todas y cada una de las doctrinas que, sobre la prensa, elaboraron las familias franquistas con competencias y aspiraciones en la materia (v. capítulo 3). Todas ellas defendieron y trataron de legitimar la potestad estatal de circunscribir el panorama periodístico español en función del arbitrio de la Administración; aunque discreparon en algunos de los procedimientos específicos para ello. Por lo general, se mostraron de acuerdo en la pertinencia del trámite de autorización administrativa previa para la edición de prensa diaria y disintieron en lo que a la facultad estatal de expulsar empresas del sistema se refiere. Ante el disenso, el legislador acabó optando, al reservar a la Administración en el art. 29 la facultad de cancelar inscripciones, por la postura más intervencionista, postulada por Arias y el falangismo. Por lo demás, si bien la autorización administrativa fue defendida por todas las familias, el principal instrumento para llevarla a cabo, el Registro de Empresas Periodísticas, es de paternidad exclusivamente acenepista. El REP, creado en 1958 y consolidado en 1966, se inspira inequívocamente en el Registro de Propietarios de Periódicos ideado por el influyente Fernando Martín-Sánchez Juliá, presidente de la ACN de P entre 1935 y 1953.

Sin duda el consenso doctrinal en torno a la potestad estatal de tamizar el sistema de prensa contribuyó a blindar esta atribución en torno a una coartada legitimadora que coadyuvó de forma decisiva a su preservación durante todo el tardofranquismo. La tamización había sido considerada por los falangistas como una de las potestades primordiales del Estado. A ella se referían con la función “rectora” recogida en el artículo cuarto del *Estatuto de la Prensa de FET de las JONS*; y que acabaría por trasladarse al artículo primero de la Ley de Prensa de 1938 con el eufemismo de la “organización” del sistema. Tal “organización” no deja de asimilarse también a la obligación de “regular” el sistema informativo que la doctrina de Gabriel Arias Salgado le imponía al Estado en tanto custodio supremo del bien común. La “regulación” a la que alude Arias en su “teología de la información” encontrará acomodo poco después en el anteproyecto de Ley de Bases de la Información (que, aunque como hemos advertido, no se encuentra marcado exclusivamente por la doctrina Arias, sí parece encontrar en ella su influencia más decisiva). La base cuarta del ALBI imponía al Estado la

“obligación de velar por el bien común, *regulando* el régimen a que ha de ajustarse la creación, funcionamiento y utilización de los medios técnicos difusores” (*loc. cit.* 3.3.2) [el subrayado es nuestro]. La ACN de P, por su parte, no aludirá de forma explícita —ni siquiera con los eufemismos habituales manejados por Arias y FET— a la tamización del sistema de prensa. Sin embargo, sí propondrá ciertos procedimientos de circunscripción —además de idear su instrumento principal: el REP—, que no dejan lugar a dudas acerca de su postura en la materia.

Las doctrinas elaboradas por falangistas, acenepistas y por Arias Salgado no sólo se mostraron de acuerdo en la legitimidad de la tamización administrativa del sistema de prensa, sino que coincidieron también en el principal acto administrativo llamado a hacerla efectiva: la autorización administrativa previa. No así en lo que respecta a la expulsión del sistema: las doctrinas de falangistas y de Arias Salgado la defendieron³²⁸, mientras que la elaborada por el acenepismo —cuyos intereses empresariales conviene tener bien presentes— se opuso³²⁹. Ante la discordancia doctrinal, el legislador optó, como hemos apuntado, por la postura más intervencionista, reservando a la Administración la facultad de cancelar las inscripciones en el Registro de Empresas Periodísticas.

³²⁸ La potestad de cerrar publicaciones quedaba implícitamente establecida en el artículo octavo del *Estatuto de Prensa de FET de las JONS*. Dado que se encomienda en él a la administración la facultad de decidir sobre la permanencia de periódicos ya existentes, se contempla también, obviamente, la posibilidad de denegarla. Además, la cancelación de publicaciones queda recogida al tener que fijar el Estado un cupo de publicaciones mucho menor del entonces existente; debido a ello, la disposición transitoria primera ordena: “En el plazo de tres meses, desde la publicación del presente Estatuto el Ministerio de Prensa y Propaganda formará la lista de los periódicos que deben permanecer en su publicación y de los que cesan en ella”; mientras que la disposición transitoria quinta regula la adquisición del material de las publicaciones clausuradas; y la sexta reza: “Se excitará a las Empresas particulares a que cedan en beneficio del patrimonio de la Patria en la medida de sus posibilidades los derechos de propiedad de estos periódicos como un tributo a la reconstrucción nacional”.

³²⁹ A pesar de que Ángel Herrera Oria sí había mostrado partidario en los años treinta del cierre administrativo de empresas y publicaciones, los propagandistas católicos rechazarán, en su propuesta reguladora, esta posibilidad. Herrera, en efecto, reconoce al Estado la facultad de clausurar —o de ejecutar una “suspensión indefinida”, en términos del cardenal— publicaciones. El cierre, en todo caso, contemplado como la sanción máxima imponible, sólo podía decretarse “después de dos sentencias de suspensión temporal dictadas en un mismo año por campañas francamente subversivas”; y ante ella admitía la posibilidad de apelación ante el Tribunal Supremo (base 11 § 2) (Herrera, 2002: 24). Años después, los propagandistas rechazarán, sin embargo, el cierre de publicaciones y empresas; y, con él, toda posibilidad de expulsión del sistema. Así, en el artículo 28 de su *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa* determinan que “En ningún caso se podrán suspender las actividades de las empresas a título de sanción ni imponerse su incautación o expropiación”. En el apartado 7.3, referido a las sanciones administrativas, constataremos la lucha que mantendrán en Cortes los propagandistas para eliminar la suspensión de empresas periodísticas de las sanciones contempladas por el proyecto de ley de prensa. Los propagandistas lograrán, de hecho, eliminar esta sanción de una Ley que, sin embargo, según hemos comprobado, había abierto ya una “puerta trasera” a la cancelación empresarial al aprobar sin discusión el artículo 29.

FET de las JONS defenderá el régimen de autorizaciones administrativas previas a través de dos procedimientos concretos incluidos en su *Estatuto de Prensa*. (a) En primer lugar, mediante la fijación de un *númerus clausus* de publicaciones para cada provincia en función de su población. La propuesta no tuvo cabida en la Ley de Prensa de 1938 ni en ninguna otra disposición de rango inferior, aunque, en la práctica, el mapa de la prensa española permaneció estancado en torno a los cien diarios hasta la llegada de Fraga al MIT a principios de los años sesenta³³⁰. No se ha realizado aún el estudio de las autorizaciones administrativas concedidas y denegadas durante las dos décadas anteriores a nuestro periodo de estudio, pero el bajo índice de natalidad de la prensa diaria española durante los cuarenta y cincuenta parece apuntar a un severo régimen de concesión de autorizaciones. Por supuesto, hay que tener también presente una más que probable ausencia de iniciativa empresarial derivada de la delicada coyuntura económica que atravesaba el país en estos años; falta de iniciativa a la que, de cualquier modo y de haberse dado, tampoco habría sido ajeno el control absoluto de la prensa implantado por el nuevo Régimen. (b) Además del *númerus clausus*, el *Estatuto* de FET exigía, para seguir editando diarios, una autorización administrativa expedida por el Ministerio de Prensa y Propaganda tras consulta al Partido:

Para reanudar la publicación de periódicos que existían con anterioridad a la promulgación del presente Estatuto [determina el artículo octavo], las empresas que acrediten su propiedad legítima deberán solicitarla del Ministerio de Prensa y Propaganda, quien resolverá [sic], en cada caso, oído [sic] el informe de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.; quedando sujetos dichos periódicos a todo lo preceptuado en el ESTATUTO DE PRENSA ESPAÑOLA [sic].

La autorización era válida solamente para los diarios ya existentes, dado que la fundación de nuevos órganos de prensa quedaba reservada en exclusiva al Partido (art. 7). Si bien esta medida tampoco se trasladó al ordenamiento jurídico, en la práctica la mayor parte de la prensa nacida tras la Guerra Civil y hasta 1962 será de propiedad y filiación falangista.

Gabriel Arias Salgado y los acenepistas defenderán, al igual que FET, la legitimidad del trámite de autorización administrativa. Para el ministro de Información y Turismo, la garantía estatal de soberanía informativa implicaba un régimen de autorizaciones administrativas restringido a empresas con capital español y orientado ideológicamente

³³⁰ No así el de la prensa no diaria. En la década de los cincuenta, las publicaciones no diarias aumentaron en torno al 70%: de las cerca de 1.300 publicaciones de 1949 se pasó a unas 2.300 en 1960. La llegada de Manuel Fraga al MIT aceleró aún más este crecimiento: desde su llegada al ministerio en 1962 y hasta 1965, habían sido autorizadas 1.123 publicaciones nuevas y 8 periódicos diarios (Chuliá, 2001:194).

por españoles. En un discurso pronunciado en Palma de Mallorca el 12 de mayo de 1957, Arias aclaraba que

Como derivación lógica de la soberanía informativa en el Estatuto jurídico ha de estar previsto que *la autorización para editar un diario sólo podrá otorgarse* a empresas constituidas con capital español y dirigidas, en la gerencia y en la ideología por españoles (1960: I44, III18; *loc. cit.*: 3.3.1) [las cursivas son nuestras].

Tampoco la ACN de P se mostrará dispuesta a renunciar a este mecanismo de tamización del sistema de prensa. En 1933, Ángel Herrera Oria había planteado la imposición de una barrera de entrada al sistema a partir de una evaluación de la “seriedad” y solvencia económica de la empresa periodística; evaluación en base a la cual el Estado concedía o denegaba la autorización para fundar periódicos (Herrera, 2002: 22; *loc. cit.* 3.2.1)³³¹. Herrera admitía, pues, la facultad estatal de restringir el acceso al panorama periodístico, si bien en base a un criterio de circunscripción eminentemente económico. Treinta años después, la ACN de P se mostrará incluso más conservadora e intervencionista que su propio fundador. Al criterio económico de admisión en el sistema planteado por Herrera le añadirán los propagandistas un filtro ideológico, al propugnar la evaluación administrativa del “ideario de la futura publicación”. El artículo cuarto de su *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa* determina que

La persona individual o jurídica que desee fundar un periódico de información general, presentará en el ministerio de Información una solicitud para que se autorice y se publique en el Boletín Oficial del Estado su proyecto fundacional.

En el proyecto fundacional figurarán, necesariamente, el nombre del fundador o fundadores, los de las personas que formen el primer Consejo de Administración y el de Redacción, el ideario de la futura publicación, los estatutos de la nueva entidad periodística y la fianza que depositará proporcional al importe del capital.

El personal directivo de las empresas y de los periódicos será de nacionalidad española. La participación de capital extranjero será minoritaria. Cuando se trate de sociedades, las acciones serán nominativas.

Si fuese denegada la petición, lo será en resolución razonada. Si en el plazo de un mes no se hubiera resuelto se entenderá que queda autorizada.

Contra la resolución denegatoria cabrán los recursos de reposición y de alzada ante el Consejo de Ministros, y contra la resolución de éste, el recurso ante los Tribunales³³².

Como puede apreciarse en los dos últimos párrafos, aunque la ACN de P establezca el silencio administrativo como autorización implícita y la posibilidad de recursos ante el Gobierno y los tribunales, sólo reclama a la Administración, en caso de denegación de la

³³¹ Base segunda de su proyecto regulador presentado en octubre de 1933, en la conferencia pronunciada en la VII Semana Social de España.

³³² *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*. En Archivo Central de la AC de P.

solicitud, “resolución razonada”. Ello, unido a la ausencia de una relación explícita de causas denegatorias, habría concedido a la Administración un margen de discrecionalidad en sus decisiones mayor incluso del que acabará gozando desde 1966. A pesar, pues, de los problemas y carencias que plantea el artículo 29 —por no hablar aún de la aberración jurídica que supone la mezcla de supuestos de denegación y cancelación, en la que nos detendremos más adelante— y de la preservación en la práctica de la discrecionalidad administrativa, la mera existencia en la Ley de una relación de causas denegatorias y anulatorias implica un avance ni siquiera contemplado en los fundamentos doctrinales en los que se inspirará el legislador.

Como sabemos, desde la aprobación de la Ley Fraga, el trámite de autorización previa se ejercerá en España a través del Registro de Empresas Periodísticas, cuya creación remite también a la doctrina acenepista. El REP es, de hecho, heredero directo del Registro de Propietarios de Periódicos propuesto durante los años cincuenta por Fernando Martín-Sánchez Juliá y recogido por la ACN de P en el artículo sexto de su *Borrador de Proyecto de Estatuto de Prensa*³³³. A finales de los cincuenta, Gabriel Arias Salgado —cuyas ideas sobre regulación de la empresa periodística siguen casi punto por punto la doctrina de Fernando Martín-Sánchez—, había ya trasladado la idea del Registro de Propietarios al ordenamiento jurídico mediante la creación del REP; e incluso había intentado elevarlo a rango de Ley, al incluir la creación de un Registro de Propietarios de Medios en la base octava del anteproyecto de Ley de Bases de la Información. Tanto este nonato Registro de Propietarios de Medios como el REP que acabará por instituir la LPI en 1966 se inspiran inequívocamente en el registro pergeñado por Fernando Martín-Sánchez Juliá en la década anterior.

Martín-Sánchez concebía su Registro de Propietarios de Periódicos como el instrumento político de circunscripción del sistema que luego será el REP; como la piedra de toque de un sofisticado, intervencionista y ultraconservador modelo de tamización del panorama periodístico basado en la discriminación indirecta de las empresas a través de la implementación de los principios de transparencia, publicidad y continuidad ideológica. Aunque presentados como plausibles garantías a los lectores, tales principios no eran en realidad, según vimos, sino garantías para el Estado (v. 3.2.2). Tras ellos se escondía, como llegó a reconocer el propio Martín-Sánchez, la intención de restringir el

³³³ El artículo octavo rezaba: “En el Registro Nacional de Propietarios de Periódicos constarán los nombres de las personas que ocupen todos los cargos citados en los anteriores artículos [se refiere a los fundadores, consejeros y miembros del Consejo de Redacción que obliga a identificar el artículo quinto]. Las variaciones en estos nombramientos, así como las de accionistas, serán comunicadas al Registro al cabo de de cada año, o antes, por lo que a los accionistas se refiere, si aquéllas supusieran más del 10 por 100 del capital social”. *Borrador de un Proyecto de Estatuto de la Prensa*. En Archivo Central de la AC de P.

mapa de la prensa española a las “grandes instituciones nacionales” (*loc. cit.* 3.2.2). El registro de Martín-Sánchez constituía, en este sentido, el instrumento político llamado a garantizar la potestad administrativa —establecida en la base segunda de su propuesta reguladora del sistema— de admitir o negar la edición de prensa a las empresas periodísticas propiedad de tales grupos. Consideraba, en cualquier caso, que la autorización debía ser expedida por el Estado “con la máxima publicidad y las máximas garantías” (Martín-Sánchez, 1955: 46), dado que, en tanto supremo hacedor del bien común, “[...] lo que hace el Estado no es conceder administrativamente un derecho que le es propio, sino autorizar legalmente el ejercicio, en orden al bien común, de un derecho de la sociedad” (Martín-Sánchez, *op. cit.*: 19). Según su planteamiento, la consecución de ese bien común restringía la autorización a aquellas empresas periodísticas con principios ideológicos, estatutos sociales, estructura accionarial y órganos corporativos conocidos y admitidos por la Administración, que se reservaba además la facultad de recusar a accionistas y directivos y de exigir cuantas modificaciones estimase pertinentes. El Registro de Propietarios de Periódicos se revelaba así —junto a otros órganos de gobierno corporativo que garantizaran la preservación de la ideología original del medio— como el instrumento político de intervención clave para mantener el sistema de prensa en poder de las fuerzas vivas del Régimen. En las páginas que siguen comprobaremos hasta qué punto siguió la Administración, a través del Registro de Empresas Periodísticas, el camino trazado por Fernando Martín-Sánchez.

5.2 La autorización administrativa previa durante el tardofranquismo

La inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas fue, entre 1966 y 1975, la principal puerta de entrada al sistema de prensa español. Una puerta que la Administración tardofranquista permitió franquear sólo a aquellas empresas periodísticas que, de acuerdo con su arbitrio, no resultaran políticamente inconvenientes. Dentro de este conjunto de empresas autorizadas se hace preciso distinguir, de cualquier modo y en lo que al trámite de inscripción en el REP se refiere, entre aquellas que venían editando diarios antes de 1966 y aquellas otras admitidas en el sistema tras la aprobación de la LPI. Las primeras obtuvieron, siempre que no hubieran modificado sus estructuras accionariales ni cuadros directivos, una autorización casi automática de su solicitud. No así las segundas que, bien no estaban presentes en el sistema de prensa diaria antes de 1966 y resultaban por tanto desconocidas para la Administración, bien quisieron editar diarios de información general inéditos en el panorama español. En ambos casos hubieron de hacer frente a un trámite de admisión en el sistema que incluía contactos,

gestiones y negociaciones con el MIT, indagaciones policiales sobre sus accionistas y directivos e incluso, en algunos casos, cambios estatutarios y de línea editorial.

Ninguna de las cincuenta y cinco empresas periodísticas que venía editando prensa diaria de información general antes de 1966 hubo de afrontar, como decimos, estos problemas. No hemos hallado, en los expedientes de primera inscripción de estas empresas, informes, inspecciones o pesquisas especiales sobre sus propietarios, directivos y medios financieros³³⁴. Ninguna de ellas vio denegada su solicitud de inscripción; y las demoras en las tramitaciones se debieron, cuando se dieron, a la tardanza propia del trámite administrativo y no a maniobras dilatorias realizadas ex profeso por la Administración.

De acuerdo con la disposición transitoria primera de la LPI, las empresas periodísticas que vinieran editando prensa antes de la entrada en vigor de la Ley, tenían un año de plazo para inscribirse en el REP. Durante el periodo de tramitación del expediente —que se iniciaba a instancia de la empresa y comprendía un periodo de dos meses de información pública, tras su inserción en el BOE (arts. 3 y 7 del Decreto 749/1966)— se mantenían en vigor los permisos de edición anteriores. En cualquier caso, aunque pasado el plazo previsto, la empresa no se hubiera aún inscrito en el REP, la Administración consintió en que siguiera editando su/s diario/s, siempre que hubiera enviado ya al Ministerio los documentos de solicitud. Así lo indicaba la circular 53.707 enviada por la DGP a las delegaciones provinciales del MIT en 1967 con instrucciones acerca de las empresas periodísticas cuya inscripción se encontrara, más de un año después de la entrada en vigor de la LPI, aún sin resolver³³⁵. La circular consideraba cuatro supuestos: (a) las publicaciones de empresas periodísticas ya inscritas debían ser admitidas a depósito previo y, por tanto, podían publicarse sin problema alguno; (b) las empresas autorizadas con anterioridad a la Ley y que hubieran iniciado el trámite, podían seguir editando sus diarios si se mantenía el mismo titular; y habían de aguardar a la autorización administrativa si éste había cambiado; (c) las empresas no autorizadas

³³⁴ Sólo en un caso hemos hallado problemas con la titularidad de la empresa, que no obstaculizaron, de todos modos, su inscripción en el REP. Se trata de la empresa Herederos de Leoncio Rodríguez González, editora del diario tinerfeño *El Día*. Junto a su expediente de inscripción se encuentran archivados dos informes jurídicos sobre la titularidad del diario. En el primero, fechado el 1 de junio de 1966, el Jefe de la Sección de Publicaciones Periódicas de la DGP establece la capacidad legal de la Dirección General en torno a la titularidad del diario. Todo apunta a que la DGP había sondeado la posibilidad de devolver *El Día* a la Jefatura Provincial del Movimiento de Santa Cruz de Tenerife, que en 1939 había llegado a un acuerdo con Leoncio Rodríguez para la edición conjunta del diario. El acuerdo, sin embargo, había sido rescindido en 1958 por el Jefe Provincial del Movimiento, por lo que la DGP verá imposibilitada su maniobra. V. Exp. 456, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 52.

³³⁵ Circular nº 53.707 de la DGP, 12 de mayo de 1967. En AGA sig. (03)49.21 c. 65.036. V. Anexo VI.

antes de 1966 y que hubieran iniciado los trámites de inscripción no podían editar prensa hasta obtener el plácet administrativo; y (d) las empresas no admitidas antes de 1966 y que no hubieran iniciado el trámite no podían editar diarios hasta solicitar y obtener la inscripción en el registro. Es decir: la DGP establecía una discriminación taxativa entre empresas periodísticas con permiso de edición anterior a 1966 y empresas periodísticas nuevas o con un nuevo titular: las primeras podían seguir editando sus diarios aun sin estar inscritas en el plazo previsto; para las segundas, en cambio, era indispensable la inscripción para poder iniciar su actividad

La diligencia mostrada por la Administración en la tramitación de las inscripciones de las empresas admitidas en el sistema antes de 1966 se explica, sin duda, por la labor de circunscripción llevada a cabo en las décadas anteriores y, desde 1958, en el marco orgánico del Registro de Empresas Periodísticas. Desde 1958, la Administración se había asegurado el control policial de las empresas periodísticas mediante la obligación efectiva (aunque no formal) de inscribirse en el REP y, por tanto, de identificar a sus propietarios y directivos. El MIT se encontraba, pues, en 1966 ante un sistema ya tamizado, lo que le permitirá expedir las autorizaciones, en caso de no haberse producido cambios en las empresas solicitantes, sin mayores pesquisas. Muy diferente será —como puede apreciarse en la circular 53.707— la actitud con respecto a las empresas periodísticas que quisieron acceder al sistema de prensa diaria a partir de 1966.

Durante el tardofranquismo, el Ministerio de Información y Turismo permitió la aparición de siete nuevos diarios de información general y autorizó el acceso al sistema de prensa diaria de información general a diez nuevas empresas periodísticas³³⁶. La mayor parte de ellas obtuvo el plácet administrativo entre 1966 y 1969, durante el ministerio de Manuel Fraga. Desde aquel año y hasta el final del Régimen, la puerta del REP quedó cerrada a nuevas publicaciones; de modo que, ante la clausura del sistema de prensa, los empresarios con aspiraciones en el sector se vieron obligados a seguir dos

³³⁶ Las empresas y diarios de nueva aparición en el sistema de prensa diaria de información general fueron Prensa Aragonesa, S.A. (*Aragón Exprés*); Ferrol Ediciones, S.A. (*Ferrol Diario*); Mediterranean Publishing Company, S.A. (*Iberian Daily Sun*); Ilustración, S.A. (*Diario Femenino*); y Servicio de Publicaciones, S.A. (*S-P Diario*). Además, Pedro García Munera y Prensa y Ediciones, S.A. (PESA), dos empresas con autorizaciones para editar diarios anteriores a 1966, comenzaron a publicar dos nuevas cabeceras: *Primera Página* y *Nuevo Diario*, respectivamente. Y cinco nuevas empresas se hicieron cargo de diarios ya existentes (Editora Balear, S.A., el *Diario de Mallorca*; Diarios y Revistas, S.A., *El Alcázar*; Canaria de Avisos, S.A., el *Diario de Avisos*; y Prensa Económica, S.A., *Nuevo Diario*, que adquirió en 1970; y Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra, el *Diario de Pontevedra*). Nótese que siempre que hablamos de “nuevas empresas” nos referimos a empresas de nueva aparición en el *sistema de prensa diaria de información general*, dado que algunas de ellas ya venían editando otro tipo de publicaciones no diarias. En total, pues, siete nuevas publicaciones autorizadas y diez nuevas empresas presentes en el sistema de prensa diaria. Sobre las circunstancias de inscripción de todas ellas nos detendremos en los apartados 5.2.2 y 5.2.3.

estrategias de entrada que, desde luego, tampoco pasaron inadvertidas a la Administración: la adquisición de mayorías accionariales en empresas periodísticas ya inscritas³³⁷; y la compra de cabeceras presentes en el mapa de la prensa diaria. Estas serán las tres únicas vías —plácet administrativo para la edición de un nuevo diario; mayoría accionarial en empresas ya inscritas; y compra de cabeceras— de acceso al sistema de prensa durante el tardofranquismo. Empresas y empresarios se encontrarán en todas ellas frente a una Administración dispuesta a preservar a toda costa su capacidad circunscriptora.

Las siete nuevas autorizaciones administrativas aprobadas entre 1966 y 1970 se inscriben dentro del proceso de “apertura controlada” iniciado por Manuel Fraga en 1962 (Barrera, 1993: 103) y atenuado desde 1966 (v. 2.2.1). Durante la primera etapa de su ministerio, entre 1962 y 1966, Fraga había autorizado la aparición de otras seis nuevas cabeceras editadas por otras tantas empresas periodísticas. El balance que arrojan sus siete años al frente del MIT, con trece nuevos diarios admitidos y dieciséis nuevas empresas periodísticas, se revela aún más extraordinario si se compara con el bajísimo índice de natalidad de la prensa durante las décadas anteriores y con la natalidad nula del lustro posterior. Como ya apuntáramos en el apartado precedente, la escasez de diarios fundados durante los cuarenta y cincuenta no puede desvincularse de la crítica coyuntura económica que atravesaba entonces el país; del mismo modo, tampoco la aparición de órganos de prensa en los sesenta es ajena al auge económico de la década. Sin embargo, en ningún caso la coyuntura económica explica por sí sola la variación en la población de diarios. Tanto en los cuarenta y cincuenta, como en los sesenta y setenta, la variable política resultó decisiva, en la medida en que fue eminentemente político el criterio manejado por la Administración para la apertura o clausura del sistema de prensa diaria; y en la medida, sobre todo, en que políticos —y no técnicos o económicos— fueron los factores que permitieron a las empresas periodísticas acceder al sistema en los años de mayor permisión y apertura.

Cuatro factores jugaron, en este sentido, un papel determinante en la concesión de las autorizaciones administrativas durante el tardofranquismo; a saber: (a) los intereses estratégicos del Régimen, que algunas empresas periodísticas admitidas prometían favorecer al editar diarios en zonas conflictivas, como Gibraltar o Marruecos, o con potencialidad turística, como Baleares. (b) La proximidad de los promotores, accionistas o directivos de las empresas al aparato de poder político y económico franquista. Según comprobaremos, los accionariados y órganos de gobierno corporativo de las empresas

³³⁷ De esta forma de acceso al sistema de prensa nos ocuparemos en el capítulo siguiente, en la medida en que se trata de un cambio de propiedad y, por tanto, de una modificación de las circunstancias de inscripción de la empresa periodística ya admitida en el sistema.

periodísticas solicitantes se poblaron de consejeros nacionales o provinciales del Movimiento, alcaldes, procuradores en Cortes o banqueros e industriales cercanos al Régimen. (c) El parecer favorable de los delegados del MIT en las provincias en que iba a publicarse el diario. A instancia de la DGP, los delegados valoraban, desde la posición privilegiada que les procuraba su proximidad a las empresas solicitantes, aspectos como los antecedentes políticos de accionistas y directivos, filiación ideológica, conducta moral pública y privada, consideración social, etc. Y (d) por último y ligado a lo anterior, la inexistencia de antecedentes “político-sociales” desfavorables de los promotores, accionistas y directivos en los archivos policiales, consultados por la DGP vía Gobernación Civil o Delegación Provincial, antes de conceder la autorización preceptiva. Cuatro factores, pues, que evidencian la primacía —por encima de las necesidades informativas de las provincias o de la viabilidad económica de las empresas— de un criterio de admisión en el sistema eminentemente político y que revelan, por tanto, la naturaleza política del REP, en el que sólo encontraron cabida, durante el tardofranquismo, empresas periodísticas políticamente inocuas o afectas al Régimen.

Aunque estos factores políticos de admisión se mantendrán durante todo el tardofranquismo, la actitud de la Administración con respecto a la apertura o clausura del sistema experimentó una variación substancial a partir de 1969. Cabe diferenciar, por tanto, dos momentos nítidamente diferenciados: los años 1966 a 1969, cuando, animadas por una coyuntura económica favorable, un nuevo marco legal y la “apertura controlada” de Fraga, siete empresas lograrán la autorización para editar un nuevo diario de información general y otras tres nuevas empresas se harán cargo de diarios ya existentes; y el periodo 1970-1975, marcado por el involucionismo (v. 2.2.2), en el que sólo dos empresas nuevas accederán al sistema de prensa diaria y, en ambos casos, mediante la adquisición de cabeceras ya existentes. Junto a estos dos periodos del tardofranquismo, se hace necesario atender también a los años 1962 a 1966, que nos permitirán entender, a modo de antecedente, el procedimiento de autorización administrativa en el momento inmediatamente anterior a la aprobación de la LPI.

5.2.1 Antecedentes de la autorización administrativa previa en el tardofranquismo (1962-1966)

Las seis empresas periodísticas que obtuvieron el plácet administrativo para editar diarios de información general entre 1962 y 1966 hubieron de pasar por un tortuoso y severo proceso que llegaba a dilatarse varios años. La tramitación de la solicitud de acceso al sistema no se hallaba normalizada y, si bien se iniciaba con la cumplimentación de una instancia oficial, no arrancaba realmente hasta el comienzo de las gestiones

personales y directas con el Ministerio. Según los testimonios recabados de empresarios de la época, los contactos con Manuel Jiménez Quílez, Pío Cabanillas y, sobre todo, Manuel Fraga (que incluían encuentros, entrevistas, correspondencia, etc.) fueron imprescindibles, y los viajes a Madrid, frecuentes. Los intereses políticos del Régimen en Gibraltar y Marruecos influyeron en la concesión de algunas autorizaciones, como demuestran los casos de Antonio Gómez Rubio y de Empresa Periodística España, S.A. En al menos otros dos casos —los de Diario Tele-Expres, S.A. e Ilustración, S.A.—, la proximidad al ministro y a la familia Franco de los promotores resultó también, al parecer, determinante. Además de apoyo político, para obtener la autorización los empresarios debían contar en muchos casos con un informe favorable del delegado provincial de Información y Turismo, según se desprende de la documentación hallada en el expediente de Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. Estos documentos demuestran la existencia de instrucciones enviadas por la Dirección General de Prensa a las Delegaciones Provinciales reclamando informes policiales sobre, entre otras cosas, los “antecedentes político-sociales” de los promotores. Por lo demás, todas las empresas autorizadas entre 1962 y 1966 pretendían editar diarios con características comunes: se trataba en todos los casos de pequeñas publicaciones, ubicadas en zonas periféricas, con un radio de difusión local o regional y con tiradas presumiblemente bajas, que en 1967 y a excepción de *Tele Expres*, no superaban los diez mil ejemplares.

En su primer año al frente del MIT, Manuel Fraga autorizó a tres nuevas empresas periodísticas la edición de otros tantos diarios de información general. El primero en obtener el plácet fue Antonio Gómez Rubio, titular y propietario único de la empresa individual homónima³³⁸. El 17 de marzo de 1962, Gómez Rubio —dedicado profesionalmente a la “actividad comercial de Agencia de Publicidad”, según el documento de constitución expedido por el Registrador de la Propiedad de Cádiz³³⁹— comenzaba a imprimir en forma de diario *Área. Diario del campo de Gibraltar*, una modesta cabecera local³⁴⁰ que venía distribuyéndose bisemanalmente en la Línea de la Concepción (Cádiz). Según el testimonio de su hijo, José Antonio Gómez Amado, Antonio Gómez Rubio logró la autorización de Fraga tras “numerosísimas gestiones”

³³⁸ Expediente 444, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno sig. (09).9.1.1 c. 51

³³⁹ La actividad publicitaria será declarada incompatible con la periodística muy poco tiempo después. Así lo prescribirá el art. 12 del Estatuto de la Publicidad de 1964 (Ley 61/64, de 11 de junio [BOE de 15 de junio] y el art. 10 del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967 (Decreto 744/67, de 13 de abril [BOE de 15 de abril]). Gómez Rubio, no obstante, mantendrá la titularidad de la empresa hasta más allá de 1975, aunque en 1974 se le denegará la inscripción en el registro de publicidad de su agencia Publinter por incompatibilidad con la propiedad del diario *Área*.

³⁴⁰ En el expediente de inscripción en el REP, Gómez Rubio declaraba una exigua tirada de 7.000 ejemplares para 1967, cifra que, sin embargo, Alfonso Nieto reduce para ese mismo año a 4.869 (Nieto, 1973: 124).

(incluyendo viajes a Madrid y cartas y entrevistas personales con el ministro) y gracias, en buena medida, al interés del Régimen por contar con un órgano de prensa en el campo de Gibraltar, dado el contencioso con el Reino Unido por el Peñón³⁴¹. Todo apunta a que las entrevistas en el MIT y las gestiones personales con Manuel Fraga fueron frecuentes e imprescindibles en todas las autorizaciones concedidas por éste, tanto antes como después de la aprobación de la LPI.

El primero de diciembre de ese mismo año, 1962, aparecía en Galicia el *Diario de Pontevedra*, editado por la sociedad Diario de Pontevedra, S.A.³⁴² La iniciativa corría a cargo de un empresario de la radio gallega: Eugenio González de Haz, propietario de Radio Vigo, quien se hacía con el 55'25% de Diario de Pontevedra, S.A. tras comprar la cabecera a Enrique Paredes Estévez³⁴³. A González de Haz le acompañarían en el proyecto fundacional su hijo, Eugenio González de Haz Vizcaíno (si bien su presencia fue, según él mismo nos apuntaba en entrevista, poco menos que testimonial), y José Hermida Vidal, propietario de Radio Pontevedra. Lastrada por la fuerte competencia de *Faro de Vigo*, por tiradas tendentes a la baja³⁴⁴ y por un déficit de más de 11 millones de pesetas, la empresa acabará suspendiendo la edición del diario y presentando un expediente de crisis en 1967. *Diario de Pontevedra* no reaparecerá hasta el 2 de abril de 1968, casi diez meses después de su suspensión, editado por una cooperativa de trabajadores en la que nos detendremos en el próximo epígrafe.

Antes de que finalizara el año, el MIT autorizaría aún una nueva publicación: el *Majorca Daily Bulletin*³⁴⁵, publicado en inglés desde el 31 de diciembre de 1962 por el editor y periodista Pedro Serra Bauzá³⁴⁶. Dirigido a la población de habla inglesa

³⁴¹ Testimonio de José Antonio Gómez Amado, hijo de Antonio Gómez Rubio y gestor del diario, en entrevista telefónica mantenida el 23 de agosto de 2012.

³⁴² Exp. 1456, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno sig. (09).9.1.1 c. 171.

La autorización a Diario de Pontevedra, S.A. remitida por la Delegación Provincial de Pontevedra puede verse en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra, Documentos e Informes). El Documento ha sido cedido por Eugenio González de Haz Vizcaíno.

³⁴³ Eugenio González de Haz Vizcaíno relata que su padre compró la cabecera *Diario de Pontevedra*, que se había editado algunos años antes, a Paredes Estévez, quien se haría, a cambio, con un porcentaje del capital y un puesto en el CA de Diario de Pontevedra, S.A. Según recuerda González de Haz Vizcaíno, su padre logró la autorización del MIT sin demasiados problemas. Por lo demás, González de Haz ya poseía, según su hijo, un trisemanario deportivo: *Meta. Antena de Galicia*.

Testimonio de Eugenio González de Haz Vizcaíno, fundador, accionista y consejero de Diario de Pontevedra, S.A., en entrevistas telefónicas mantenidas los 27 y 29 de agosto de 2012.

³⁴⁴ Según Alfonso Nieto, el *Diario de Pontevedra* tenía una tirada de 5.230 ejemplares en 1964; 4.782 en 1965; y 4.320 en 1966.

³⁴⁵ Exp. 2730, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 271

³⁴⁶ Hasta 1962, Pedro Serra Bauzá (1928-) se había dedicado a la actividad periodística y editorial. En 1947 había iniciado su carrera periodística en el diario *Baleares*. Seis años después, en 1953, fundaría la editorial Atlante, en la que se publicarían novelas, obras de teatro y libros de

residente en Mallorca, el pequeño *Majorca Daily Bulletin*³⁴⁷ será el primer diario de lo que, con el tiempo, se convertirá en el Grupo Serra, el mayor grupo de prensa de las islas Baleares. En este caso, las gestiones con el Ministerio no fueron complicadas: informado por Miguel Morell Moya, contacto suyo en el MIT, de que el cambio de Gobierno podía suponer una buena oportunidad para editar un diario, Pedro Serra Bauzá solicitó y obtuvo (en apenas tres días, además, según relata el propio Serra) audiencia con el nuevo ministro de Información y Turismo. Según el editor, Fraga se quedó “muy asombrado” y le respondió inmediatamente que empezara tan pronto como pudiera. No hicieron falta muchas más gestiones, e incluso el Ministerio apremió a Serra para que sacara adelante cuanto antes el *Majorca Daily Bulletin*. Para Serra, estas facilidades de la Administración se debieron al interés estratégico del Régimen por potenciar el turismo inglés en Baleares³⁴⁸.

También a finales de 1962 aparecía en el mapa periodístico español la sociedad Empresa Periodística España, S.A.³⁴⁹, heredera de la Editora Marroquí, S.A. y de Diario España, S.A. constituidas años antes para editar en Tángier el diario *España*³⁵⁰. Tras la sociedad se encontraba el periodista y abogado Luis Zarraluqui Villalba³⁵¹, quien se había hecho con la mayoría accionarial de Diario España, S.A. a mediados de los

arte. *Majorca Daily Bulletin* sería su primera incursión en la prensa diaria de información general, aunque no la última, según veremos en el próximo subapartado.

Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE.

³⁴⁷ Nieto Tamargo no ofrece datos sobre la tirada del diario, pero el *Estudio sobre los Medios de Comunicación de Masas en España*, publicado por el Instituto de la Opinión Pública en 1964, habla de 4.500 ejemplares de tirada aquel año, basándose en la información de la Secretaría Técnica del MIT.

³⁴⁸ Testimonio de Pedro Serra Bauzá en entrevista telefónica mantenida el 6 de septiembre de 2012.

³⁴⁹ Exp. 1049, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 128

³⁵⁰ Según han escrito Anna Nogué y Carlos Barrera, el diario *España* había sido una iniciativa de Gregorio Corrochano y de los hermanos Julio y Luis Zarraluqui Villalba. *España*, según los autores, “tuvo la particularidad de su anglofilia” y acabó convirtiéndose, citan a Antonio Burgos, en “refugio de muchos periodistas republicanos que habían salido de estampía de Madrid o de las cárceles franquistas” (Nogué & Barrera, 2006: 207).

³⁵¹ Luis Zarraluqui Villalba controlaría la empresa hasta 1970 junto a su hermano y su hijo. Tras la ampliación de capital del 22 de noviembre de 1966, entre los tres acapararían el 42’49% del capital, a mucha distancia del segundo mayor accionista y vicepresidente, Carlos de Godó Valls (5’34%). Además, Luis Zarraluqui ocuparía la presidencia del Consejo de Administración hasta el 13 de mayo de 1970; mientras que su hijo Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga ocuparía la secretaría, y su hermano, Julio Zarraluqui Villalba, una de las vocalías.

Luis Zarraluqui Villalba (1897-1978) había sido redactor de diarios como *El Parlamentario*, *Heraldo de Madrid*, *Las Noticias*, y *El Noticiero Universal*, entre otros. También dirigió *Riqueza y Tributación* antes de abandonar temporalmente el periodismo y dedicarse a la abogacía. Ya en los años sesenta fundó varias revistas y dirigió *Riqueza* y *Revista Política, Parlamentaria y Financiera*, además de impulsar *Sol de España* e integrarse entre 1957 y 1967 en el Consejo de Administración de Prensa Castellana, S.A. (editora de *Informaciones*).

Biografía extraída de EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE.

cincuenta. Según relata su hijo, Luis Zarraluqui Sánchez Eznarriaga³⁵² (quien participó, además, en el proyecto fundacional de Empresa Periodística España, S.A. como accionista y secretario del consejo), la independencia marroquí y la pérdida por parte de Tánger del estatus de ciudad internacional habían motivado la salida de la ciudad de numerosos españoles, con la consiguiente bajada de ventas del diario *España*. Zarraluqui Villalba ofreció entonces al MIT hacerse cargo del diario *África* de Tetuán, también en dificultades, así como mantener el tiempo que fuera posible el diario *España* en Tánger, ambos de interés estratégico para el Régimen. La resistencia de Zarraluqui Villalba en Marruecos le permitió, según Zarraluqui Sánchez, contar con una buena baza negociadora ante el MIT a la hora de fundar —de “repatriar”, según el término empleado por Zarraluqui Sánchez— un nuevo diario en la península. Tras numerosas gestiones personales con Manuel Fraga y con Pío Cabanillas, Luis Zarraluqui Villalba lograba en 1965 la autorización del MIT para sacar adelante en Marbella (Málaga) el diario *Sol de España*³⁵³ que, según las estimaciones de Nieto (1973: 124), tiraba en 1967 apenas 2.017 ejemplares.

Poco antes había surgido en Barcelona un nuevo diario: *Tele-Exprés*. La empresa editora se había constituido el 10 de enero de 1964 con el nombre de Diario Télex, S.A.; denominación que cambiaría en diciembre de aquel mismo año por Diario Tele-Exprés, S.A.³⁵⁴ La sociedad nació fruto de la iniciativa de Ignacio Agustí Peypoch, escritor y periodista ligado a la revista *Destino*, y del entonces gerente de la Agencia EFE, Carlos Sentís Anfruns³⁵⁵. Ambos recurrieron, para la financiación del proyecto, al banquero Jaime Castell Lastortras³⁵⁶, quien suscribiría el 39% del capital inicial. Castell

³⁵² Testimonio de Luis Zarraluqui Sánchez Eznarriaga (hijo de Luis Zarraluqui Villalba y accionista y secretario del CA de Empresa Periodística España, S.A. entre 1965 y 1970), en entrevista telefónica realizada el 28 de agosto de 2012.

³⁵³ A principios de los años setenta, la empresa trataría de trasladarse a Córdoba, lo que motivaría un informe reservado con fecha de 13 de abril de 1973. En el informe se señala que quienes están gestionando el traslado, Bartolomé Vargas y Juan Kindelán, así como el entonces consejero delegado de la empresa, Claudio Gallardo, “son afines al Opus Dei, aunque no se sabe en qué grado”. Parece que se está alertando a la DGP de la expansión de un diario con vínculos con el Opus Dei.

Informe reservado sobre diario *Sol de España*, en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Empresa Periodística España, documentos e informes).

³⁵⁴ Exp. 48, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno sig. (09)9.1.1 c. 5.

³⁵⁵ Carlos Sentís Anfruns (1911-2011) sería nombrado por Manuel Fraga presidente de la Agencia EFE apenas un año después, en 1965. Antes, había sido corresponsal del diario *La Vanguardia* y de *ABC*, de Madrid. En el campo de la política franquista, había desempeñado el cargo de secretario personal del ministro sin cartera Rafael Sánchez Mazas.

Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE. Y en y Archivo Histórico de la Agencia EFE (AHEFE), Universidad Juan Carlos I de Madrid. Más información sobre sus vínculos empresariales en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Barcelona Press, Gobierno Corporativo).

³⁵⁶ Según relata Mariano Sánchez Soler (2005: 117-120), Jaime Castell Lastortras había entrado en el sistema financiero español en los años cincuenta con la compra de la pequeña Banca Suñer y

incorporaría a la empresa a varios de sus hombres de confianza en el Banco de Madrid y el Banco Catalán de Desarrollo, algunos de los cuales acabarían asumiendo además el poder político en la Barcelona de los setenta: Juan Antonio Samaranch³⁵⁷ (quien ocuparía una vocalía del consejo y se haría con un 4% del capital); Ramón Capdevila Zavala (también vocal del CA y propietario de un 2% de la empresa); y Joaquín Viola Sauret³⁵⁸ (secretario del CA y accionista con un 2% del capital). Completaban el CA, los promotores Carlos Sentís e Ignacio Agustí Peypoch (presidente y vicepresidente, respectivamente, y con un 7% del capital el primero y un 9'4% el segundo), el propio Jaime Castell Lastortras, Carmelo San Nicolás Francia (consejero delegado y accionista con un 2% del capital) y Juan Casablanco Bertrán, cuñado de Carlos Sentís y propietario junto a su hermana (esposa de Sentís) de un 8% de la empresa. El Consejo reunía, pues, a destacados exponentes del mundo periodístico y financiero catalán, además de a dos futuros hombres fuertes de la política municipal barcelonesa. Ello, unido a la cercanía de Carlos Sentís a Manuel Fraga (Nogué & Barrera, 2006: 112), y de Castell Lastortras a la familia Franco, debieron de allanar, sin duda, el camino para obtener la autorización administrativa.

de la pequeña sucursal madrileña del Banco de Medina, al que denominaría Banco de Madrid. Su ascenso en el mundo financiero se habría debido, a juicio de Sánchez Soler, a su cercanía con la familia Franco: Castell nombraría a José María Martínez Ortega, suegro de Franco, presidente del banco; y al yerno del dictador, José María Martínez Bordiú, secretario del CA. La expansión del pequeño Banco de Madrid vino propiciada por la Ley de Bases de Ordenación Bancaria de 1962: sería entonces cuando Castell fundaría la Banca Catalana de Desarrollo. A su CA pertenecerían en los sesenta Juan Antonio Samaranch, Joaquín Viola Sauret y Ramón Capdevila Zavala.

Jaime Castell Lastortras se haría con la práctica totalidad de la empresa (el 95'09% del capital) en 1967, justo antes de la integración de Diario Tele-Exprés, S.A. en el Grupo Godó mediante la creación de Barcelona Press, S.A.

³⁵⁷ Juan Antonio Samaranch Torrelló (1920-2010) accedía al CA de Diario Tele Exprés, S.A dos años después de abandonar su cargo como concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona; y apenas dos años antes de ser nombrado Delegado Nacional de Educación Física y Deportes y miembro del Comité Olímpico Internacional. Su carrera política con mayúsculas no empezaría, sin embargo, hasta 1967, cuando será designado procurador en Cortes en calidad de Consejero Nacional del Movimiento. Ya en los setenta alcanzará la presidencia de la Diputación de Barcelona.

EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE; y AHEFE. Para una información más completa sobre su trayectoria política y vinculaciones empresariales, consúltase el Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Barcelona Press, Gobierno Corporativo).

Juan Antonio Samaranch, casado con la sobrina de la primera mujer de Carlos de Godó Valls, habría sido el promotor de la entrada del Conde de Godó en el diario en 1968 (Nogué & Barrera, 2006: 132). Ese año se constituirá Barcelona Press, S.A. como empresa editora de *Tele-Exprés* participada en un 50% por Godó, en un 49'5% por Jaime Castell y en un 0'5% por la empresa Diario Tele-Exprés, S.A. (representada por Luis Franquesa Graner).

³⁵⁸ Joaquín Viola Sauret (1913-1978) comenzaría su carrera política sólo tres años después de la fundación de Diario Tele-Exprés, S.A.: en 1967 sería designado procurador en Cortes en representación del tercio familiar por la provincia de Lérida. Ya en 1975 sería nombrado alcalde de Barcelona, cargo en el que se mantendría, sin embargo, sólo un año.

Biografía en AHEFE. Véase también el Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Barcelona Press, Gobierno Corporativo).

En ninguno de los casos anteriores hemos hallado, en los expedientes de inscripción en el REP iniciados a partir de 1966, rastros de informes personales realizados a fundadores, propietarios y directivos antes de conceder la autorización administrativa. Caso muy diferente es el de la última de las empresas autorizada por el Ministerio antes de la aprobación de la LPI: Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A.³⁵⁹, cuyos trámites de admisión llevados a cabo entre 1963 y 1965 sí quedaron archivados, por alguna razón, junto a su expediente de inscripción en el REP de 1967. El caso de Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. permite entender mejor cómo funcionaba el procedimiento de autorización de diarios antes de 1966.

El proyecto de edición del *Diario de Lérida*, se había iniciado el 12 de agosto de 1963 con una carta del Obispo de aquella diócesis a Manuel Fraga. El director general de prensa, Manuel Jiménez Quílez, respondería el 20 de agosto conminando al Obispo a cumplimentar el “modelo oficial de instancia” preceptivo para publicaciones semanales o de periodicidad más frecuente³⁶⁰. Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. no se constituiría hasta dos años después, con un capital social de 3 millones de pesetas distribuido entre numerosos accionistas minoritarios y en el que sólo Juan Fernández Coll alcanzaba el 10% del capital³⁶¹. Presidía el CA original Emilio Reimat Montull, al que acompañaba como vicepresidente Luis Alonso de Olarte³⁶². Ambos serían objeto de investigación policial a instancias de la Dirección General de Prensa.

El 6 de abril de 1964, el Delegado Provincial de Lérida, José Antonio Tarragó Pleyán, remitía un escrito a la Sección de Publicaciones Diarias de la Dirección General de Prensa, en el que informaba de la solicitud formulada por Alonso de Olarte y Reimat Montull de editar el *Diario de Lérida*. Tras dar cuenta del “espíritu orientador” católico de la empresa, Tarragó Pleyán trazaba un breve perfil personal y profesional de Luis Alonso de Olarte, Emilio Reimat Montull y Salvador Gené Giribert (propuesto como director del diario), a quienes avalaba con su “absoluta garantía personal”. Completaban el informe nueve puntos con una breve historia del devenir de la prensa leridana, así como de la situación del único diario presente hasta ese momento en la provincia: *La Mañana*, perteneciente a la Cadena de Prensa del Movimiento. El delegado provincial se mostraba, en fin, muy favorable a la solicitud, en la que, según subrayaba,

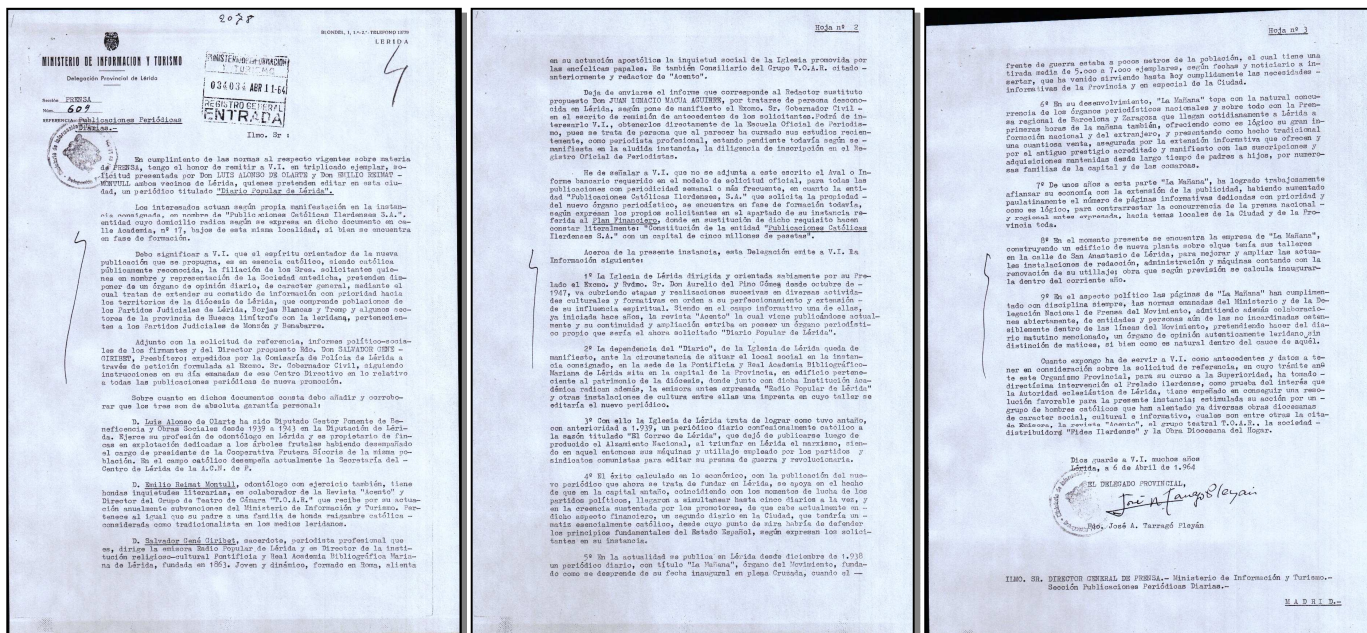
³⁵⁹ Exp. 1702, REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 190

³⁶⁰ Carta del director general de prensa al Obispo de Lérida, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 190 exp. 1702. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Publicaciones Católicas Ilerdenses, documentos e informes).

³⁶¹ Otros accionistas minoritarios eran Emilio Reimat Montull (7'5%); Radio Popular de Lérida (7'5%); Salvador Gené Giribert (6'17%); Jaime Pujol Sisó (5%); y José Siré Pérez (5%).

³⁶² Completaban este primer CA, el secretario Enrique Castells Grané; y los vocales Ramón Anadol Pintó, Emilio Reimat Mola, Manuel Agustí Plovins, José Barahona Canela, Miguel Montaña Carrera, José Siré Pérez y Jaime Pujol Sisó.

[...] ha tomado directísima intervención el Prelado llerdense, como prueba del interés que la Autoridad eclesiástica de Lérida, tiene empeñado en conseguir una resolución favorable para la presente instancia; estimulada su acción por un grupo de hombres católicos que han alentado ya diversas obras diocesanas de carácter social, cultural e informativo [...]³⁶³.



Junto a su escrito, el delegado provincial adjuntaba cuatro informes “político-sociales” sobre Reimat Montull, Alonso de Olarte, Giribert Gener y Juan Ignacio Macua Aguirre (designado redactor sustituto) con referencias a sus antecedentes políticos, “conducta moral, pública y privada”, “consideración social”, “situación económica” y “antecedentes familiares”. Las cuatro fichas están firmadas por el Comisario Jefe Provincial en Lérida con fecha de 2 de abril de 1964, y llevan membrete de la Secretaría General del Gobierno Civil de Lérida y sello de la

GOBIERNO CIVIL DE LÉRIDA
SECRETARÍA GENERAL

Apellidos **ALONSO DE OLARTE**

Nombre **Luis**

Nacido en **Lérida** provincia de **la**

el día **2** de **febrero** de **1900**

hijo de **Wenceslao** y de **Silveria**

estado **viudo** profesión **odontólogo**

vecino de **Lérida**

con domicilio en **Av. Caudillo** n.º **6**

Antecedentes políticos-sociales

Buenos, simpatizante del G.M.N.

Conducta moral, pública y privada

Buena en todos los aspectos.

³⁶³ El informe puede verse también en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Publicaciones Católicas Ilerdenses, Documentos e Informes)

Comisaría de Policía de Lérida (Dirección General de Seguridad)³⁶⁴.

Tal y como Tarragó Pleyán señalaba en el cuarto párrafo de su escrito a la DGP, los informes sobre los promotores habían sido realizados por la Comisaría de Policía de Lérida a instancia del gobernador Civil,

[...] siguiendo instrucciones en su día emanadas de ese Centro Directivo [se refiere a la Dirección General de Prensa] en lo relativo a todas las publicaciones periódicas de nueva promoción [el subrayado es nuestro].

Esta última apostilla desmiente que las pesquisas sobre los promotores de Publicaciones Católicas Ilerdenses, S.A. fueran una excepción; y apunta a la existencia de instrucciones remitidas por la DGP a las Delegaciones Provinciales en las que se instaba a indagar, vía gobernador civil y policía, en los antecedentes políticos de los promotores de nuevas publicaciones diarias. Los informes policiales debían ser remitidos por las Delegaciones Provinciales a la DGP y todo apunta a que constituían, junto al informe del delegado provincial, una de las bases fundamentales que motivaban la concesión o denegación de la autorización administrativa previa. Lejos de desaparecer tras la aprobación de la LPI y la consolidación del REP como instrumento de tamización, este proceder indagatorio se mantendrá durante todo el tardofranquismo.

Consideración social

Muy buena. Pertenece a varias Sociades religiosas.

Situación económica Buena.

Antecedentes familiares Buenos en todos los órdenes.

Observaciones Ninguna.

Lérida, 2 de Abril de 1964.
El Comisario Jefe Provincial

Manzanillo

Mod. n.º 1. MANAGANILLO/64

5.2.2 La autorización administrativa para la edición de nuevos diarios (1966-1969)

La Dirección General de Prensa recabará, en efecto, informes policiales sobre los promotores de, al menos, dos de las empresas periodísticas que solicitaron y obtuvieron la inscripción en el REP para editar un diario entre 1966 y 1969: Editora Balear, S.A. y Prensa Aragonesa, S.A. La DGP siguió basándose pues, tras la aprobación de la LPI, en informes policiales, así como en el parecer de las Delegaciones Provinciales, para la concesión de los plácet administrativos a *al menos* dos de las empresas solicitantes. Con todo, a pesar de que hayamos constatado la existencia de indagaciones en dos casos, la

³⁶⁴ Incluimos, como muestra el informe referido a Luis Alonso de Olarte. El resto de informes personales pueden consultarse en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Publicaciones Católicas Ilerdenses, Documentos e Informes).

ausencia de informes “político-sociales” archivados en los expedientes de las otras ocho empresas periodísticas admitidas en el sistema entre 1966 y 1969, nos impide considerar las pesquisas policiales como un trámite generalizado en el proceso de inscripción en el REP. Naturalmente, la ausencia de evidencia no puede tomarse como evidencia de su ausencia; aunque nos impide afirmar, a falta de otras pruebas, que la existencia de informes “político-sociales” favorables fuera un requisito *sine qua non* para la concesión de las autorizaciones. El que ocho empresas no tengan archivados en sus expedientes informes policiales sobre sus promotores, accionistas y directivos, puede deberse, por lo demás, a causas bien diversas: (a) pudiera deberse, en primer lugar, a que la petición de informes policiales por parte de la DGP fuera aleatoria o, en cualquier caso, excepcional. No parece, sin embargo, que así fuera: ninguna de las dos empresas periodísticas indagadas revestía, ni por tirada ni por influencia, especial importancia dentro del panorama periodístico español, ni sus promotores resultaban en principio singularmente peligrosos para el Régimen. (b) Algo más probable pudiera parecer la suposición de que la Administración solicitase las pesquisas sólo en los casos en que careciera de referencias sobre promotores y empresas. Esta hipótesis se sustentaría en el hecho de que las empresas periodísticas en cuyo expediente de inscripción no se han hallado informes eran ya conocidas en 1966, de una forma u otra, por la Administración. Sin embargo, existen tres excepciones que ponen en cuestión esta posibilidad: Prensa Aragonesa, S.A. era conocida por la Administración antes de 1966 —al editar un semanario deportivo cuya autorización obtuvo en 1951—, lo que no evitó a sus accionistas y directivos, la familia Fuembuena, una investigación policial sobre su filiación y actividad política; por el contrario, tanto la Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra, como Mediterranean Publishing Company, S.A. eran del todo desconocidas para la DGP antes de obtener la inscripción registral, a pesar de lo cual no hemos hallado rastros de indagaciones sobre sus promotores. La inexistencia de pesquisas en ambos casos se hace aún más extraña si se considera que Mediterranean Publishing Co. era en realidad propiedad de un estadounidense (lo que contravenía el artículo 17 de la LPI), que había logrado la inscripción mediante testaferros; y que la Cooperativa constituía un tipo de sociedad inédito en el panorama español; por no mencionar que estaba formada por treinta y tres obreros, cuya filiación política se aventuraba a priori, cuanto menos, más problemática que la de, por poner un ejemplo, la familia Fuembuena. (c) Más verosímil parece, desde luego, que las pesquisas realizadas sobre la mayor parte de las empresas no fueran archivadas en (o fueran eliminadas de) los expedientes de inscripción. Lo que constituiría entonces una excepción sería, no la existencia misma de los informes policiales, sino su archivado en el expediente de la empresa. Ninguno de los promotores

entrevistados fue consciente de estar siendo investigado, pero hay que tener presente que se trataban, al fin y al cabo, de informes en su mayor parte reservados, archivados en un registro de carácter público (art. 18 del Decreto 749/1966) al que, durante un plazo de dos meses, cualquier interesado podía acceder para examinar cuantos datos o documentos quisiera conocer (art. 7 del Decreto 749/1966).

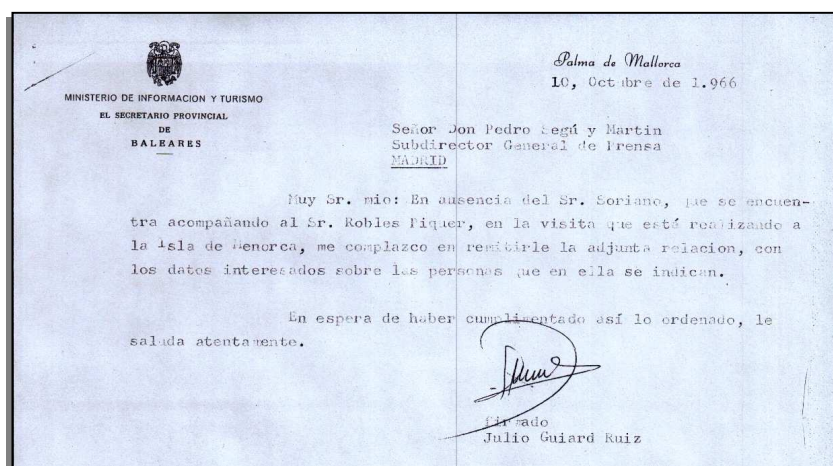
Sea como fuere, la existencia misma de informes “político sociales” en dos de los expedientes evidencia la consideración de la filiación política de los promotores de empresas periodísticas como uno de los criterios de concesión de las autorizaciones administrativas; lo que demuestra, a su vez, el carácter instrumental que, para la Administración, revestía la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas. Así lo atestigua también la tramitación de las autorizaciones de Prensa y Ediciones, S.A., para cuya concesión la empresa hubo de modificar su cuadro directivo y rebajar el tono crítico de otra de sus publicaciones; y de Editora Balear, S.A., cuya inscripción quedó postergada hasta tanto la empresa no accediera a un cambio en sus estatutos societarios dirigido a ceder el control ideológico del diario al obispado de Mallorca.

Editora Balear, S.A. se constituía el 30 de mayo de 1966 con el objetivo de editar el *Diario de Mallorca*, fundado en 1953 por la Mitra Diocesana de la isla. Desde su misma fundación, el obispado había cedido la cabecera a Editorial Mallorquina, S.A. por un periodo de diez años, pasado el cual la sociedad se disolvía dejando el testigo a Editora Balear, S.A. Fundan la nueva sociedad Francisco Salvá Planas, Armando Esteban Fabra, Bartolomé Sastre Palmer, Antonio Buades Fiol, Tomás Darder Hevia, Antonio Juan Pastor, Antonio Alemany Dezcallar, Francisco Moll Marqués, Rafael Llabrés Fuster, Juan Frau Tomás (entonces teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Palma de Mallorca) y Antonio Sabater Mut. Cada uno de ellos se hará, hasta julio de 1966³⁶⁵, con el 9'091% del capital y un puesto en el CA.

El 25 de agosto de 1966, el presidente del Consejo, Francisco Salvá, iniciaba los trámites para la inscripción de Editora Balear, S.A. en el REP³⁶⁶, lo que motivó la demanda por parte del Subdirector General de Prensa, Pedro Segú y Martín, al delegado provincial del MIT en Baleares, de información sobre los solicitantes. La respuesta llegaría firmada por el secretario provincial, Julio Guiard Ruiz (ante la ausencia del delegado, en viaje por Menorca), el 10 de octubre.

³⁶⁵ En julio de 1966 se produce una ampliación de capital hasta 6 millones de pesetas. La estructura accionarial se modifica entonces a favor de Francisco Salvá Planas, que acumula el 16'06% del capital. Armando Esteban Fabra poseerá el 8'32%; y el resto de fundadores ven reducida su participación al 8'22%. La Mitra Diocesana de Mallorca, representada por el obispo, Rafael Álvarez Lara, mantendrá un simbólico 1'67% del capital.

³⁶⁶ Exp. 147 en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 15.



Guiard remitía a la subdirección un informe con la “conducta y moralidad”, antecedentes políticos y filiación ideológica de los once fundadores, accionistas y

directivos de la empresa. En todos los casos salvo en uno, el informe resultaba favorable: en su mayor parte carecían de antecedentes políticos (casos de Esteban Fabra, Sastre Palmer, Buades Fiol, Pastor, Darder Hevia, Llabres Fuster); e incluso cuatro eran calificados como adictos al Régimen o a FET de las JONS (casos de Salvá Planas, Alemany Dezcallar, Sabater Mut y Frau Tomás). Sólo el caso del filólogo Francisco de Borja Moll Marqués planteó algún problema, dado que era “conocido por sus tendencias separatistas” (subrayado en el informe original); aunque no consta archivada ninguna actuación o presión del MIT para expulsarlo del accionariado, en el que se mantendrá hasta 1972.

El resultado favorable de las pesquisas “político-sociales” no garantizará, sin embargo, una tramitación de la autorización administrativa exenta de complicaciones. Poco después de la recepción del informe, el MIT paralizaría la inscripción de la empresa en el REP a instancias del propio obispo de Mallorca, temeroso de perder su influjo sobre la publicación. Una “Nota sobre DIARIO DE MALLORCA” de 27 de enero de 1967 sin firma ni membrete, explica la cuestión³⁶⁷: En entrevista personal con el Sr. Obispo de Mallorca, el día 5 de noviembre de 1966, [se informa] éste expresó su temor de que los derechos de la Mitra no quedasen perfectamente garantizados en la escritura de constitución de la sociedad que iba a continuar la edición del periódico. Señaló que éste debía servir a los intereses de la Iglesia en Mallorca y que era preciso asegurar la fórmula para que así fuese [...] e interesó que en tanto no se procediese a modificar la escritura de constitución de referencia, se dejase en suspenso la tramitación para inscribir la empresa.

³⁶⁷ “Nota sobre DIARIO DE MALLORCA”, de 27 de enero de 1967, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 15, exp. 147. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editora Balear, Documentos e informes).

Así se hará: Manuel Jiménez Quílez no firmará la inscripción de Editora Balear, S.A. en el REP hasta el 19 de abril de 1967, siete días después de que se modificaran los estatutos de la sociedad, concediendo amplios poderes al obispado (entre ellos, los de nombrar al director del diario y a un “censor eclesiástico” que garantizara la ortodoxia de la publicación³⁶⁸). La maniobra de la Administración en connivencia con el obispado deja bien claro el carácter instrumental de la inscripción en el REP, manejada poco menos que como arma de chantaje político a las empresas periodísticas, que veían postergada su inscripción en tanto no se plegaran a las condiciones de la DGP.

Algo menos problemática resultará la tramitación de la autorización de Prensa Aragonesa, S.A.³⁶⁹, cuyos fundadores serán también, no obstante, objeto de indagaciones policiales. Eduardo Fuembuena

Francisco SALVA PLANAS, abogado, casado, hijo de Antonio y Apolonia, natural y vecino de Palma, con domicilio en la plaza Santa Eulalia, número 8, carece de antecedentes políticos, estando conceptuado como simpatizante con el Régimen actual. Su conducta moral, tanto pública como privada, es buena.

Armando ESTEBAN FABRA, nacido el 3-3-1941 en Barcelona, casado, ingeniero textil, hijo de Armando y Beatriz, domiciliado en esta Capital, calle Blanquerna, 46, es persona de buena conducta y moralidad, careciendo de toda clase de antecedentes políticos. Por su cargo en Bordados Mallorca, S.A. realiza frecuentes viajes al extranjero.

Bartolomé SASTRE PALMER, nacido el 9-2-1927 en Palma, casado, empleado, hijo de Nicolás y Juana Ana, con domicilio en la calle ó camino vecinal de La Vileta, 201, es persona de buena conducta y moralidad, careciendo de antecedentes políticos.

Antonio BUADES FIOL, nacido el 23-9-1923 en Palma, casado, Gerente Buades S.A., hijo de Antonio y Antonia, domiciliado en la calle Sol, número 17, es persona de buena conducta, tanto pública como privada, careciendo de antecedentes políticos.

Antonio JUAN PASTOR, nacido el 9-6-1923 en Palma, hotelero, hijo de José y Josefa, domiciliado en el Hotel Majórica, carece de antecedentes políticos y observa buena conducta en los distintos aspectos.

Tomás DARDER HEVIA, nacido el 26-9-1904 en Palma, casado, comercio, hijo de Bartolomé y Margarita, con domicilio en la calle Tomás Darder, número 5, es persona de buena conducta moral, pública y privada, careciendo de antecedentes políticos.

Antonio ALEMANY DEZCALLAR, nacido el 18-6-1939 en Palma, casado, hijo de José y Mercedes, con domicilio en la Plaza de San Francisco, 13-1ª, de buena conducta y moralidad, estando conceptuado en el aspecto político como adicto a la Causa Nacional.

Francisco de Borja MOLL MARQUES, nacido el 28-10-1937 en Palma, soltero, Licenciado en Filosofía y Letras, hijo de Francisco y Francisca, domiciliado en la Plaza de España, 86-3ª, observa buena conducta moral, tanto pública como pri-

vada, destacado filólogo, autor de diversas publicaciones en mallorquín y conocido por sus tendencias separatistas.

Rafael LLANES FUSTER, nacido el 15-2-1924 en Palma, casado, arquitecto, hijo de Rafael y María, domiciliado en la calle Calvo Sotelo, 400, es persona de buena conducta, tanto pública como privada, careciendo de antecedentes políticos.

Antonio SABATER MITJ, nacido el 18-5-1901 en Palma, casado, periodista, hijo de José y Margarita, domiciliado en la calle Miramar, 7-2ª, es persona de buena conducta moral, pública y privada; afiliado a la C.E.D.A. antes del C.N.V. y durante éste a Falange. Es Director del Diario de Mallorca.

Juan FRAU TOMAS, nacido el 18-12-1915 en Palma, casado, industrial, hijo de Juan y de Catalina, domiciliado en la calle Palafres, 4, es persona de buena conducta, tanto en el aspecto público como en el privado. Director de la “Compañía Fran S. A.”, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de ésta. Afiliado a F.N.V. de las J.O.N.S.

Palma Mallorca 10 de Octubre de 1.966

³⁶⁸ Así lo dispone el art. 25A de los nuevos estatutos de Editora Balear, S.A. aprobados el 12 de abril de 1967. Estos prevén, además, la constitución de una Junta de Fundadores vinculada a la Mitra Diocesana. En caso de causar baja alguno de los fundadores, la Junta de Fundadores será sustituida por una Junta de Gobierno presidida por el obispo, quien podrá nombrar cada nuevo miembro que se incorpore en sustitución de algún cesante.

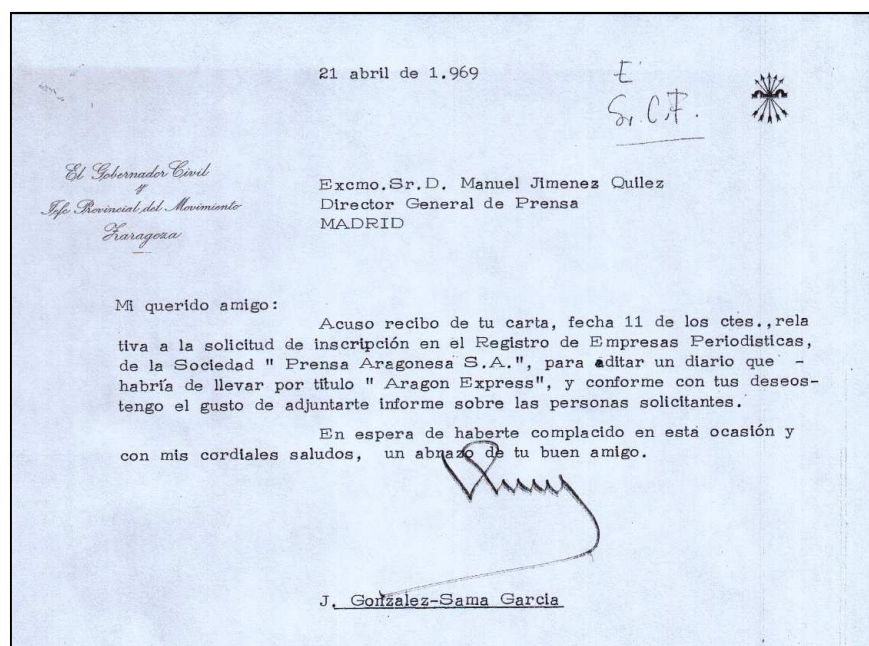
³⁶⁹ Exp. 2868, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 282.

Comín fundaba la empresa familiar³⁷⁰ Prensa Aragonesa, S.A. el 13 de enero de 1967 con el fin de editar el vespertino de información general *Aragón Exprés*. Fuembuena no debía de ser desconocido para la Administración: además de haber trabajado como redactor del *Heraldo de Aragón* (y por tanto de estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas con carné número 957), venía editando, desde 1951, el semanario *Zaragoza Deportiva*. A pesar de todo, el 11 de abril de 1969, Manuel Jiménez Quílez solicita por carta información sobre Fuembuena y su familia al gobernador civil de Zaragoza, a quien pregunta su parecer sobre la autorización:

Por tratarse de una publicación diaria [argumenta el director general de prensa], cuya importancia e incidencia en la opinión pública de Zaragoza y su provincia, no creo necesario recordarte, te agradecería me enviases tu opinión y parecer acerca de la conveniencia de que por este Departamento, se otorgue el “plácet” a la solicitud formulada por dicha empresa³⁷¹.

El gobernador Civil y jefe Provincial del Movimiento en Zaragoza, José González-Sama García, responde el 21 de abril con un informe de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza fechado el día 19 de ese mismo mes sobre los solicitantes, la familia Fuembuena. De Eduardo Fuembuena señala el informe que

[...] está
considerado
como de buena
conducta en
todos los
aspectos, sin
que le sean
conocidas
actividades de
carácter
político-social,
contrarias al
Régimen [...]
Carece de
antecedentes

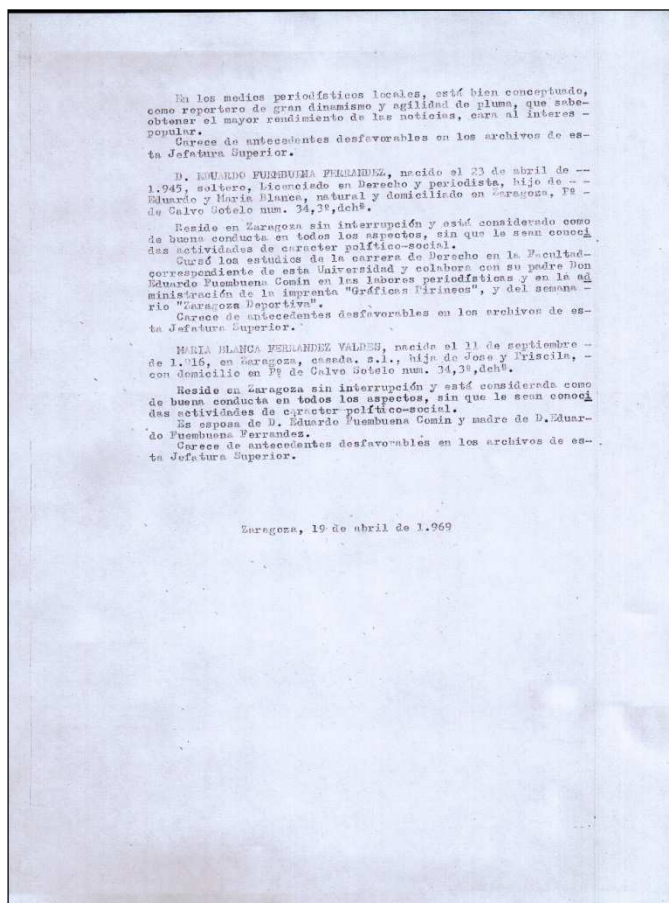
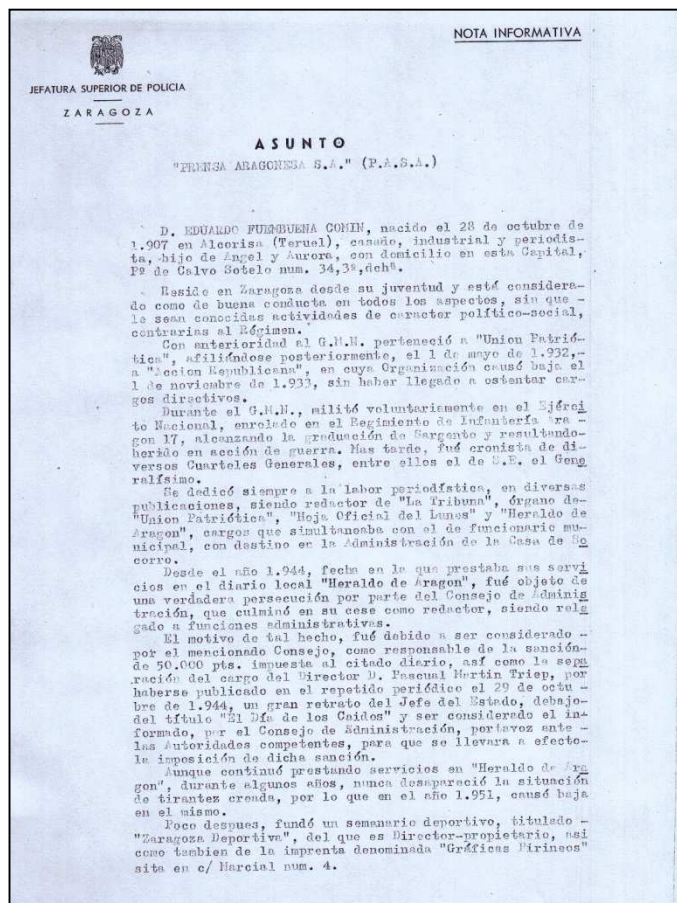


³⁷⁰ Tanto el accionariado como el gobierno corporativo de la empresa estaban en poder de Eduardo Fuembuena Comín; de su esposa, María Blanca Ferrández Valdés; y de su hijo, Eduardo Fuembuena Ferrández. El 9 de diciembre de 1969 entraría en el accionariado Dionisio Cruz Gascón, con un 20% del capital, que vendería a Eduardo Fuembuena Comín el 7 de octubre de 1971.

³⁷¹ Carta de Manuel Jiménez Quílez a José González Sama García, Madrid a 11 de abril de 1969, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 282, exp. 2868. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa Aragonesa, Documentos e informes).

desfavorables en los archivos de esta Jefatura Superior [de Policía].

Idéntica calificación merecían su esposa, María Blanca Ferrández Valdés; y el hijo de ambos, Eduardo Fuembuena Fernández, quien nunca fue consciente, según nos ha asegurado, de haber sido investigado³⁷². La inscripción en el REP se firmaría el 23 de abril de 1969, apenas dos días después del informe favorable de González-Sama, lo que de nuevo apunta a la importancia del parecer de las autoridades provinciales en la concesión de los plácet.



Entre 1966 y 1969, la DGP autorizó la edición de diarios de información general a otras ocho empresas periodísticas, en cuyos expedientes de inscripción no hemos hallado averiguaciones policiales similares a las anteriores. En todos los casos salvo en dos (Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra y Mediterranean Publishing Company, S.A.), las empresas no eran desconocidas para el MIT, bien porque éste había incentivado de un modo u otro su creación (Diarios y Revistas, S.A.), bien porque se trataba de sociedades controladas por otras empresas inscritas (Ferrol Ediciones, S.A.), bien porque editaban ya, antes de obtener el plácet para el diario, otras publicaciones de distinta

³⁷² Testimonio de Eduardo Fuembuena Fernández en entrevista personal mantenida el 12 de septiembre de 2012.

periodicidad (Prensa y Ediciones, S.A.; Ilustración, S.A.; Pedro García Munera; y Servicio de Publicaciones, S.A.).

La Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra³⁷³ —un tipo de sociedad hasta entonces inédito en el panorama de la prensa diaria bajo el franquismo— tomará las riendas del *Diario de Pontevedra* tras el expediente de crisis presentado por Diario de Pontevedra, S.A. en junio de 1967. Componían la cooperativa, presidida por Pedro Antonio Rivas Fontenla³⁷⁴, treinta y tres trabajadores de los sesenta empleados del diario. A finales de 1967, el Ministerio de Trabajo aceptaba su inscripción en el Registro de Cooperativas y, a principios de 1968, obtenían del Fondo Nacional de Protección al Trabajo treinta y tres créditos de 100.000 ptas. cada uno para la compra de maquinaria, utillaje, etc. Junto a este préstamo de más de tres millones, completaban el capital inicial 165.000 ptas. aportadas por los socios y 300.000 ptas. de subvenciones, que permitieron a *Diario de Pontevedra* reanudar su publicación el 2 de abril de 1968. No hemos hallado informe alguno archivado en el REP sobre los miembros de la Cooperativa o sobre su Junta Rectora; ni su presidente es consciente, según nos ha hecho saber, de haber sido nunca investigado. En los cinco meses transcurridos durante la tramitación de la inscripción —desde la primera reunión de la Cooperativa, en septiembre de 1967, hasta su admisión en el REP, el 26 de febrero de 1968— se sucedieron, cuenta Pedro Antonio Rivas, varios viajes a Madrid y numerosas gestiones con el MIT. Según Rivas, la iniciativa obtuvo el plácet administrativo gracias al apoyo político de Pedro Rial López, de la Organización Sindical, y, sobre todo, de Pío Cabanillas Gallas, también pontevedrés y a quien el presidente de la Cooperativa logró acceder gracias a un amigo común³⁷⁵.

Bastantes más complicaciones presentó la concesión de la autorización a Mediterranean Publishing Company, S.A.³⁷⁶, constituida en junio de 1968 por los hermanos Miguel y José Luis Ortiz Cañavate y Puig Mauri, y por Ramón Ortiz Fernández Urrutia³⁷⁷, para la edición de un diario de información general en lengua inglesa. A pesar de que la inscripción en el REP se realizará con una presteza inusitada,

³⁷³ La Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra comparte expediente registral con Diario de Pontevedra, S.A.: expediente número 1456, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 171.

³⁷⁴ Completaban la Junta Rectora original el secretario, Evaristo Pérez Estevez; el tesorero, Fernando Soto Quiroga Crespo; y los vocales Ramón Marín Rodríguez y Juan Antonio Pérez Tomás.

³⁷⁵ Testimonio de Pedro Antonio Rivas Fontenla, presidente de la Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra desde 1968 hasta los años noventa, en entrevista telefónica mantenida el 31 de agosto de 2012.

³⁷⁶ Exp. 2730, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 271

³⁷⁷ Cada uno de los tres accionistas se repartía un tercio del capital social inicial de 3 millones de pesetas. Miguel Ortiz Cañavate ocupaba, además, la presidencia del CA; Ramón Ortiz Fernández ocupaba la vicepresidencia; y José Luis Ortiz Cañavate, el puesto de consejero y secretario.

ésta no se le comunicará a la empresa hasta muchos meses después. El día 12 de julio de 1968, la Mediterranean Publishing Co., S.A. inicia los trámites de inscripción en el Registro. Aunque el documento oficial de inscripción firmado por Jiménez Quílez está datado apenas ocho días después, el 20 de julio³⁷⁸, la empresa no podrá comenzar a editar el *Iberian Daily Sun* hasta principios de 1969. Durante aquellos meses, el abogado y representante de la compañía, Ramón Ortiz Fernández Urrutia, se dirigirá insistentemente al MIT, quejándose de la dilación y solicitando la autorización para publicar al menos un número cero. La demora se debió a dos circunstancias: la presentación de una oposición formal a la inscripción (la única que hemos hallado, por cierto, en todos los expedientes de empresas periodísticas editoras de prensa diaria de información general durante el tardofranquismo), y ciertos indicios de que tras la empresa se encontraba en realidad un promotor extranjero, lo que contravenía el artículo 17 de la LPI. El 6 de agosto de 1968 —durante el periodo de información pública abierto con la publicación de la solicitud en el BOE— el MIT recibía una oposición formal a la inscripción en el REP³⁷⁹ presentada por Lucila Martínez Álvarez, quien había denunciado previamente a la empresa por incumplimiento de un contrato de compraventa de la cabecera *Spanish Daily News*. Tras consultar a la asesoría jurídica —que el 7 de septiembre emite dictamen contrario a la paralización del expediente—, la DGP contestará a Martínez Álvarez que no había lugar a la suspensión de la tramitación. Por si fuera poco, el MIT recibía ese mismo verano una carta anónima en la que se avisaba de que Mediterranean era en realidad propiedad del estadounidense André del Amo. La denuncia motivó una inspección de la empresa en diciembre de ese año, de modo que la autorización quedó postergada. De acuerdo con los testimonios de Pedro Serra Bauzá y de Ramón Ortiz³⁸⁰, la acusación era cierta: Mediterranean Publishing Co., S.A. era propiedad de un extranjero, lo que no impidió su inscripción en el REP en enero de 1969

³⁷⁸ Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Mediterranean Publishing Co., S.A., Documentos e informes).

³⁷⁹ Un documento archivado en el expediente de Prensa y Ediciones, S.A. explica el supuesto de oposición a una inscripción presentada durante el plazo de información pública. Dice el documento:

“La oposición a la resolución de un expediente significa una petición de denegación de inscripción y, por tanto, deberá estar fundada en cualquiera de los casos estrictamente establecidos en el artículo 29 de la Ley de Prensa e Imprenta.

En este caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración puede disponer la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas [comprobaciones] juzgue pertinentes”.

Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa y Ediciones, S.A., Documentos e Informes).

³⁸⁰ En sendas conversaciones telefónicas mantenidas los días 6 y 7 de septiembre (con Pedro Serra) y 7 de septiembre (con Ramón Ortiz y con su esposa).

(sobre este caso nos extenderemos en el capítulo siguiente, en el apartado referido al capital extranjero [v. 6.2.1]).

Ninguna de las otras seis empresas periodísticas autorizadas a editar diarios entre 1966 y 1969 eran desconocidas para la Administración. No lo era, desde luego, la Hermandad de Nuestra Señora de Santa María del Alcázar, asociación que reunía a los sublevados atrincherados en El Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil y promotora de Diarios y Revistas, S.A. DYRSA se constituía el 19 de octubre de 1968 para hacerse cargo de *El Alcázar*, recién expoliado por el MIT a instancias de la Hermandad, a Prensa y Ediciones, S.A. (PESA). Sobre el *affaire* de *El Alcázar* y el papel que en él jugaron la Hermandad, PESA, DYRSA y, sobre todo, la Administración, nos detendremos en el capítulo siguiente (v. 6.4.2.1). Tampoco desconocía el MIT a los propietarios de Ferrol Ediciones, S.A.³⁸¹ inscrita en el REP el 6 de mayo de 1969 para editar un periódico diario en Ferrol (La Coruña). Ferrol Ediciones, S.A. estaba controlada por Acción Social Católica, S.A. (que poseía el 50'75% del capital), editora desde 1910 del diario orensano *La Región*. Tras la compra de una nueva rotativa de impresión en *offset* para *La Región*, Agustín Outeriño Rodríguez, propietario de Acción Social Católica, S.A., habría decidido fundar *Ferrol Diario* para dar salida a su vieja maquinaria (Valladares, 1993: 403). Por lo demás, el proyecto fundacional del diario ferrolano venía avalado ante la Administración por la presencia, tanto en el accionariado como en el CA, de tres militares y del entonces alcalde de Ferrol y Procurador en Cortes, Rogelio Cenalmor Ramos³⁸².

El resto de empresas periodísticas que obtuvieron el plácet administrativo para imprimir un nuevo diario de información general venían editando, antes de 1966, otras publicaciones, por lo que se encontraban ya asentadas en el mapa periodístico español. La primera de ellas que obtuvo el plácet, el 8 de abril de 1967, fue Servicio de Publicaciones, S.A.³⁸³, editora desde 1957 de la revista semanal *SP*, de orientación falangista y financiada por la Banca Coca (Sánchez Soler, 2005: 147). En el momento de su inscripción, Servicio de Publicaciones, S.A. estaba presidida por el falangista Rodrigo

³⁸¹ Exp. 2942, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 289.

³⁸² Rogelio Cenalmor Ramos poseía un 5'47% del capital y un puesto de consejero. Completaban el accionariado y CA el empresario Enrique Botas Blanco, los médicos José Rey Romalde y Juan A. Carreño, los comerciantes Jesús Paz Rodríguez y Mariano Vega Quintián, el empresario Rodolfo Lamas Pradas, y los militares Constantino Lobo Franco, José Agulló y José Mera (V. Lezcano, 1993: 15, 133). Todos ellos poseían, al igual que Cenalmor, un 5'47% del capital, excepto Agulló y Mera, quienes controlaban de forma conjunta, un 5'45%. Presidía el CA Enrique Botas Blanco, quien se haría con la mayoría accionarial de Acción Social Católica, S.A. en 1971, y ejercía como consejero delegado el también consejero delegado de Acción Social Católica, José Luis Outeriño Rodríguez.

³⁸³ Exp. 920, en REP, AGA, sig. (09)9.1.1 c. 104

Royo Masiá, quien poseía el 64'37% del capital³⁸⁴. Cuatro meses después, el 12 de agosto de 1967, el MIT autorizaba a Ilustración, S.A.³⁸⁵ la edición de *Diario Femenino*. La empresa, propiedad en un 85% del publicista Victor Sagi Vallmitjana³⁸⁶ (quien controlaba, además, otro 5% a través de su hijo, Victor Sagi Montplet), venía publicando el mensual *Ilustración Femenina* desde 1965, además del *Programa Oficial del Fútbol Club Barcelona*³⁸⁷. Aunque, al decir de Victor Sagi Montplet³⁸⁸, la tramitación de la inscripción fue “muy complicada” (e incluyó, por supuesto, numerosas entrevistas y gestiones en Madrid), dos circunstancias facilitaron la obtención de la autorización: por un lado, el contenido de *Diario Femenino* –orientado en principio a las mujeres, a pesar de que acabó siendo un diario de información general (Balsebre, 2011: 389)– fue considerado por la Administración menos peligroso políticamente, según relata Victor Sagi Montplet; pero, sobre todo, resultaron decisivos los vínculos de la empresa con el poder político franquista. Ilustración, S.A. no sólo contaba en su accionariado y CA con la presencia del consejero Nacional del Movimiento y procurador en Cortes, Julio García Ibáñez³⁸⁹, sino que el propio Victor Sagi Vallmitjana mantenía una buena amistad con Pío Cabanillas y con Manuel Fraga. Fue precisamente Pío Cabanillas –quien había ejercido como secretario general de la sociedad Red de Publicidad Exterior, S.A., de la que Sagi Vallmitjana era uno de los fundadores y propietarios– quien puso en contacto al empresario con Fraga para la elaboración del Estatuto de la Publicidad de 1964. Victor Sagi Vallmitjana acabaría formando parte de la Comisión Técnica encargada de la

³⁸⁴ El resto de accionistas y miembro del CA en 1967 se encuentran en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Servicio de Publicaciones, Propiedad y Gobierno Corporativo)

³⁸⁵ Exp. 1329, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 160.

³⁸⁶ Victor Sagi Vallmitjana era, en 1967, presidente de la agencia publicitaria Distribuidora Española de Publicidad, S.A. Información biográfica en AH EFE; véase también Balsebre, 2011. La concesión de la autorización para editar *Diario Femenino* a Victor Sagi contravenía el art. 12 del Estatuto de la Publicidad de 1964 (Ley 61/64, de 11 de junio [BOE de 15 de junio], así como el art. 10 del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967 (Decreto 744/67, de 13 de abril [BOE de 15 de abril]) (v. 7) que prescribían la incompatibilidad entre los sectores periodístico y publicitario. Según Victor Sagi Montplet, la cuestión no suscitó, sin embargo, ningún problema en el MIT. Recuérdese, en cualquier caso, que Victor Sagi Vallmitjana había sido uno de los redactores del anteproyecto del Estatuto (v. *infra*).

³⁸⁷ No en vano, Ilustración, S.A. contaba en 1967 en su accionariado y CA con el entonces secretario general y gerente del Fútbol Club Barcelona, Juan Gich Bech de Careda. (Biografía en EFEDATA y AH EFE), que era, además, el “hombre de Juan Antonio Samaranch” (Balsebre, 2011: 379), entonces Delegado Nacional de Educación Física y Deportes y Procurador en Cortes. Según relata Victor Sagi Montplet, su padre estaba muy vinculado al Fútbol Club Barcelona, del que poseía la gestión exclusiva de la publicidad en su estadio. Por lo demás, según Sagi Montplet, su padre y Gich Bech mantenían una buena amistad.

³⁸⁸ Testimonio de Victor Sagi Montplet (hijo de Victor Sagi Vallmitjana y accionista de Ilustración, S.A.) en entrevista telefónica mantenida el 31 de agosto de 2012.

³⁸⁹ V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Ilustración, S.A., Gobierno Corporativo). García Ibáñez era propietario de la Agencia Cid de Publicidad y amigo de Sagi Vallmitjana, según cuenta su hijo, Sagi Montplet en entrevista telefónica concedida el 31 de agosto.

redacción del texto y asumiendo personalmente, junto con Fraga, la redacción del borrador original (Balsebre, *op. cit.*: 33).

La colaboración de Victor Sagi Vallmitjana con Manuel Fraga en la redacción del anteproyecto del Estatuto de Publicidad fue el inicio de una buena amistad entre ambos, que se prolongaría durante muchos años, pero sin ninguna servidumbre política (Balsebre, *op. cit.*: 42).

Una amistad que, aunque sin servidumbres según Balsebre, sin duda debió facilitar la tramitación de la inscripción de Ilustración, S.A. en el REP. Finalmente, la última de las inscripciones concedidas por Fraga durante su ministerio recaería sobre Pedro García Munera³⁹⁰, fundador y administrador único de *La Voz de Albacete* desde 1953. En enero de 1968, García Munera obtendría el plácet del MIT para editar un pequeño diario en Alicante: *Primera Página*, que, tras años de bajas tiradas, acabaría desapareciendo en julio de 1972³⁹¹.

Nota informativa sobre la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas de "Prensa y Ediciones, S.A.", editora de "EL ALCAZAR", como titular de "NUEVO DIARIO" (en proyecto).

Prescindiendo de los problemas creados por la titularidad de "EL ALCAZAR", se estima:

- 1.- La inscripción de dicha Empresa como editora de "NUEVO DIARIO", no sólo se ajusta a los preceptos de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, sino que resulta trámite indispensable para la publicación de dicho diario, de acuerdo con lo establecido en el artº. 26 de dicha Ley.
- 2.- El hecho de que se juzgue improcedente considerar a dicha Sociedad como editora de "EL ALCAZAR" no supone obstáculo legal que impida su inscripción como editora del diario que se propone editar.
- 3.- Sólo es posible denegar la inscripción de una Empresa en el mencionado Registro en los casos en que concurra alguno de los supuestos expresamente contemplados en el artículo 29 del citado precepto legal.
- 4.- En el presente caso no parece, en principio, existir ninguno de dichos motivos.

Unos meses antes, a finales de agosto de 1967, el MIT había concedido su penúltimo visto bueno para la edición de un nuevo periódico de información general: *Nuevo Diario*. La autorización revestía mucha más importancia que las anteriores, tanto por la potencialidad de la publicación (que se distribuiría en Madrid con una tirada de en torno a 26.000 ejemplares en su primer año [Nieto, 1973: 124]), como por la identidad de la empresa solicitante: Prensa y

³⁹⁰ Exp. 761, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 87.

³⁹¹ Aunque Pedro García Munera recuerda haber realizado numerosos viajes a Madrid con el fin de obtener el plácet administrativo, no recuerda las "condiciones" que le impuso la Administración para lograr la inscripción. Tampoco es consciente de haber sido objeto de investigación policial alguna. Testimonio de Pedro García Munera en entrevista telefónica realizada el 31 de agosto de 2012.

Ediciones, S.A. (PESA), editora de *El Alcázar*³⁹². PESA venía padeciendo desde un año antes el hostigamiento del MIT a propósito de la línea crítica con la gestión de Fraga adoptada por *El Alcázar*; hostigamiento que se acabaría saldando, como veremos en el siguiente capítulo (v. 6.4.2.1), con la enajenación administrativa de sus derechos de edición de *El Alcázar* y con la ruina efectiva de la empresa. Es en este contexto de enfrentamiento con la Administración en el que hay que entender la “Nota informativa”, sin fecha, firma ni membrete, hallada en el expediente de inscripción de *Nuevo Diario*.

Resulta obvio que la Administración había sondeado —probablemente a su servicio de asesoría jurídica— la posibilidad de denegar la inscripción a PESA para la edición del proyectado *Nuevo Diario*. Más allá de que el informe considere que la solicitud de PESA no contravenía ninguno de los supuestos del art. 29 de la LPI, si la empresa logró finalmente la autorización del MIT no fue sino gracias, al parecer, a la paz pactada con Fraga en la primavera de 1967 (Rodríguez, 2005: 350). Con el fin de lograr la autorización para editar *Nuevo Diario*, PESA habría cedido en dos aspectos: habría moderado la línea de *El Alcázar* y habría sustituido a su consejero delegado, José Luis Olaizola, por el abogado Carlos Merino Luengo (Rodríguez, *ibídem*). Del mismo modo que ocurriera con Editora Balear, S.A., el caso de PESA y *Nuevo Diario* revelan la instrumentalización que, durante el tardofranquismo, hizo la Administración de la inscripción en el REP, manejada como arma de presión política sobre las empresas periodísticas que, de no plegarse a las exigencias del Ministerio, podían ver demorada o denegada su solicitud.

5.2.3 La autorización administrativa para la compra de cabeceras ya existentes (1970-1975)

En 1970 las puertas del sistema de prensa español quedaron cerradas a nuevas publicaciones diarias de información general. Desde la salida de Manuel Fraga del MIT en adelante, ninguna empresa periodística sería ya autorizada por la Administración a editar un nuevo diario. Las dos únicas que lograron inscribirse en el REP vinieron a sustituir a otras empresas en la edición de diarios ya existentes. El Régimen, desde luego, no había dejado sin regular esta vía de entrada al sistema: el artículo 23 de la LPI equiparaba, en este sentido, las condiciones de autorización de compra de cabeceras a las de fundación de una nueva publicación:

Cuando las empresas periodísticas cedan, con arreglo a Derecho, a otra persona los títulos de las publicaciones periódicas debidamente inscritas para las que estuvieren facultadas, el adquiriente no podrá proceder a la edición de dichas

³⁹² Exp. 1201, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 145

publicaciones si no cumple las normas que regulan la inscripción de las de nueva aparición.

De ahí que sólo dos empresas integradas en el aparato político y económico franquista obtuvieran el plácet para la compra de diarios ya existentes: Prensa Económica, S.A., sucesora de PESA en la publicación de *Nuevo Diario*; y Canaria de Avisos, S.A., que tomaba el testigo de Antonio Carrillo Kabana en *Diario de Avisos*. Ambas sociedades contaban, en su accionariado y órganos de gobierno corporativo, con hombres afectos al Régimen y cercanos al poder político, lo que no evitó, al menos en uno de los casos, la preceptiva investigación policial sobre sus accionistas y directivos.

El 17 de noviembre de 1970, Prensa Económica, S.A. compraba *Nuevo Diario* a Prensa y Ediciones, S.A., muy debilitada económicamente tras el despojo de *El Alcázar* y muy vulnerable, por tanto, a las presiones políticas (en la operación de *El Alcázar* nos detendremos, como hemos ya señalado, más adelante). Al ver enajenados sus derechos sobre *El Alcázar*, PESA había quedado privada “de su principal fuente de recursos financieros, dado que andaba en pérdidas, y a merced de las presiones del poder” (Nogué & Barrera, 2006: 205). El nuevo gobierno —formado el 29 de octubre de 1969 y dominado por Luis Carrero Blanco y el sector tecnócrata de Laureano López Rodó— maniobró para silenciar la actitud crítica —aunque nunca fuera de los cauces tolerados por el Régimen, como es obvio— que venía manteniendo *Nuevo Diario* (Alfárez, 1986: 89).

El nuevo Gobierno [explica Rodríguez Virgili refiriéndose al Gabinete monocolor formado a finales de 1969] tampoco quería que PESA recuperase *El Alcázar* y que se alzase otra voz crítica en la prensa como la de *Nuevo Diario*. Por eso presionó con dureza a los accionistas de PESA para que renunciasen a *El Alcázar* y vendiesen *Nuevo Diario* a Prensa Económica, una sociedad de clara tendencia gubernamental (Rodríguez, 2005: 453).

Prensa Económica, S.A. era, en efecto, una empresa periodística próxima políticamente al ministro del Plan de Desarrollo, Laureano López Rodó, y controlada financieramente por la familia Oriol. Se había constituido en pleno periodo desarrollista, el 16 de diciembre de 1964 —para la publicación de las revistas *Desarrollo* y *Momento*—, con un capital de cuatro millones de pesetas repartido entre numerosos e ilustres accionistas, incluidos nueve ministros franquistas³⁹³. En el momento de la compra de

³⁹³ Ninguno de los accionistas originales de la empresa superaba las 100 acciones (es decir: el 2'5% del capital). Entre otros muchos, figuraban en su accionariado personalidades como Joaquín Garrigues Walker, Iñigo de Oriol e Ybarra, Rafael Ruiz Gallardón, Jaime Urquijo Chacón, Fabián Estapé Rodríguez, Nemesio Fernández Cuesta, José Antonio García de Vinuesa, Fernando Liñán y Zofío, Casimiro Molins Ribot, Alberto Monreal Luque, Francisco Queipo de Llano, Emilio Sánchez Pintado, Salvador Díez Lacave, Marcelino Oreja Aguirre, Alejandro Fernández de Araoz,

Nuevo Diario, dominaban la estructura accionarial y el Consejo de Administración Iñigo Oriol e Ybarra³⁹⁴, presidente del consejo con el 18'11% de las acciones; Carlos Godó Valls³⁹⁵, con un 10% del capital y representado en el consejo por Francisco Marzal; y el cuñado de López Rodó, el banquero Casimiro Molins Ribot³⁹⁶, vicepresidente del Consejo y propietario de un 8% de la empresa³⁹⁷.

En definitiva, Prensa Económica, S.A. aglutinaba una muestra clara del *establishment* político, económico y financiero de la época, que convirtió el crítico e inconformista *Nuevo Diario* en una empresa progubernamental (Nogué & Barrera, *op. cit.*: 205).

No es de extrañar, por tanto, que la empresa no encontrara problema alguno para obtener del MIT de Sánchez Bella la autorización administrativa necesaria para editar *Nuevo Diario*; autorización que sería firmada por el director general de prensa el 23 de noviembre de 1970, apenas seis días después de la compra de la cabecera³⁹⁸. Con la operación, el Gobierno tecnócrata se aseguraba contar con una voz dócil o, según los términos empleados por el *Diario de Barcelona*, con un “portavoz oficioso de Presidencia del Gobierno y más tarde del Ministerio de Asuntos Exteriores, en cualquier caso, ligado íntimamente al señor [Laureano] López Rodó”³⁹⁹.

Mayores cautelas mostró la Administración en la concesión del plázet a Canaria de Avisos, S.A.⁴⁰⁰ constituida en 1973 por un grupo de empresarios agropecuarios de la isla para hacerse cargo de la edición de *Diario de Avisos*, hasta entonces en poder de Antonio

Miguel de Oriol e Ybarra, Juan Ignacio de Urquijo y Eulate, Alfonso Osorio García, Ignacio Gómez Acevo y Duque de Estrada, Fernando Ybarra y López Doriga, Juan Lladó Fernández Urrutia, Javier Benjumea Puigcerver, Álvaro Domecq Díez, etc.

³⁹⁴ Iñigo de Oriol e Ybarra (1935-2011) era en 1970 Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y, en virtud de dicho cargo, Procurador en Cortes franquistas. En 1970 era además miembro de Hidroeléctrica Española (donde desde 1959 había desempeñado los cargos de asesor jurídico, relaciones públicas y director general de relaciones externas).

Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE.

³⁹⁵ Carlos Godó Valls era propietario de Talleres de Imprenta, S.A., empresa editora de *La Vanguardia*. Según Anna Nogué y Carlos Barrera, el Conde de Godó habría participado en Prensa Económica, S.A. por “motivos de amistad personal y afinidad política con López Rodó” (Nogué & Barrera, *op. cit.*: 205).

³⁹⁶ Casimiro Molins Ribot ocupaba en 1970 la presidencia del Banco Atlántico.

³⁹⁷ El resto de accionistas principales en noviembre de 1970 eran el banquero José María Aguirre Gonzalo y su hijo, José María Aguirre González, con el 2'5% del capital cada uno; Manuel Grau Villa, con el 5%; José María Oriol y Urquijo, con otro 5%; Antonio María Oriol y Díaz de Bustamante, con idéntico porcentaje; Andrés Ribera Rovira, con el 3'37% del capital; y Rafael Ruiz Gallardón, con el 2'87%. Completaba, por otro lado, el Consejo de Administración, Francisco Ferriz Caturla, como consejero delegado; José Juan Cebrián García, como consejero secretario; e Ignacio Gómez Acevo y Jaime Urquijo Chacón, como vocales.

³⁹⁸ Exp. 1039, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 126

³⁹⁹ Información sin firma publicada por el *Diario de Barcelona* el 3 de abril de 1974. La nota fue publicada a propósito de un viaje de López Rodó a Barcelona en busca de financiación para una ampliación de capital de Prensa Económica, S.A.

⁴⁰⁰ Exp. 4189, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 407

Carrillo Kabana. Antes de aceptar su inscripción en el REP, el entonces director general de prensa, Alejandro Fernández Sordo, solicitó referencias al consejero nacional del Movimiento, José Naranjo Hermosilla, y al delegado provincial de Información y Turismo en Santa Cruz de Tenerife. El 16 de abril de 1973, Naranjo Hermosilla enviaba una carta a Fernández Sordo con los informes “político-sociales” requeridos.

Conforme indicaste cuando hablamos del asunto en el Consejo Nacional [comenta Naranjo], adjunto te envío la Relación que hoy he recibido de las personas que han de constituir la Sociedad Anónima a la que se aportará o cederá el Diario de Avisos [...]

Según te dije, la persona más calificada del grupo es PEDRO MODESTO CAMPOS RODRÍGUEZ [...] Es hombre del Movimiento de quien podrá confirmarte informe y referencias el Ministro de Agricultura, Tomás Allende, de quien ha sido desde hace años, y sigue siendo colaborador y buen amigo⁴⁰¹.

Naranjo Hermosilla advierte al director general de prensa de que los interesados —de quienes adjunta un breve informe sobre su ocupación⁴⁰²— se encontrarían la semana siguiente en Madrid y que desearían entrevistarse con él. Todo indica que se muestra favorable a la iniciativa; del mismo modo que el delegado provincial del MIT, quien el 8 de septiembre de 1973 responde a una solicitud previa de la DGP⁴⁰³ enviando su parecer sobre el proyecto, al que adjunta informe de la Dirección General de Seguridad sobre los accionistas⁴⁰⁴. Según constata el delegado provincial,

[...] se carece de antecedentes desfavorables respecto de los integrantes de dicha sociedad y Director del referido diario, siendo personas de buena conducta moral pública y privada. Por otra parte y como puede observarse de la hoja de datos que asimismo se remite, se trata de personas vinculadas a los sectores agrícolas y

⁴⁰¹ Carta de Naranjo Hermosilla a Fernández Sordo, 16 de abril de 1973. En REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 407, exp. 4189. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Antonio Carrillo Kabana-Canaria de Avisos, Documentos e informes).

⁴⁰² Los informes se refieren al presidente de Canaria de Avisos, S.A., José Antonio Fumero Peña, residente de la C.O.S.A.; a su secretario, José Capón Casañas; y al consejero y excombatiente de la División Azul, Jaime Darius Díaz. Además de a los accionistas Luis Cortes Belda, presidente de Hoteles Anthurium, S.A.; Ignacio Rivero Mesa, presidente de Graneros de Tenerife, S.A.; Manuel Rodríguez López, director general de UTECO Tenerife; Zenón Masacreño Alemán, presidente del sindicato provincial de Ganadería; Elías Bacallado Hernández, alcalde de El Rosario y consejero provincial del Movimiento; Eduardo Curbelo Fariña, jefe local del Movimiento en Arafo; Pedro Modesto Campos, procurador en Cortes por representación familiar y presidente de la Caja Rural Provincial; Ildefonso Salazar y del Royo; y Antonio Carrillo Kabana, ex vicepresidente del cabildo insular de la Palma.

⁴⁰³ La DGP había solicitado el informe del delegado provincial mediante escrito número 60847, de 11 de junio de 1973.

⁴⁰⁴ Este informe de la policía tampoco planteará objeción alguna sobre los promotores de Canaria de Avisos, S.A.: “Todos ellos [dice la policía] son personas de buena conducta moral pública y privada. Careciendo de antecedentes desfavorables en los diversos Archivos de esta Delegación, tanto comunes como político-sociales. Estando bien considerados en los ambientes sociales en los que se desenvuelven”.

ganaderos de esta provincia, presentando un matiz de tipo conservador exento, conforme se señaló en nuestro anterior informe de posiciones políticas extremistas.

En consecuencia, esta Delegación informa positivamente la inscripción de la citada Sociedad en el Registro de Empresas Periodísticas como editora del expresado diario.

No obstante, V.I. resolverá [el subrayado es nuestro]⁴⁰⁵.

El expediente de Canaria de Avisos, S.A. demuestra que las indagaciones policiales seguían constituyendo, en 1973, un procedimiento administrativo más —y probablemente uno no poco determinante— en la tramitación de la inscripción en el REP; y que tanto el parecer del delegado provincial, como la inexistencia de antecedentes “político-sociales” desfavorables entre los accionistas y directivos, seguían siendo, dos años antes del final de la dictadura, decisivos para obtener la autorización administrativa que abría las puertas del sistema de prensa diaria.

5.3 La inadmisión en el sistema de prensa diaria

La clausura del sistema de prensa impuesta por la Administración tardofranquista desde 1970, imposibilitó la aparición de dos nuevos diarios, llamados a renovar años después, durante la Transición, el panorama periodístico español. Poco antes, a finales de los sesenta, el MIT de Manuel Fraga había paralizado el nacimiento de otros tres diarios de información general. En los cinco casos, la Administración impidió el acceso de las publicaciones al sistema de prensa por motivos estrictamente políticos, vinculados, ya a las luchas intestinas entre grupos de poder franquistas, ya al temor del Régimen a corrientes políticas situadas extramuros del sistema. La existencia de apoyos y garantes que avalaran las iniciativas siguió siendo importante, pero resultó insuficiente ante los inconvenientes políticos que implicaban los proyectos finalmente denegados.

Ni Prensa Española, S.A., ni Prensa y Ediciones, S.A. (PESA) presentaron al MIT propuestas de diarios rupturistas. Se trataba, en ambos casos, de empresas bien conocidas por la Administración —pues ya editaban o habían editado dos diarios cada una: *Abc* de Madrid y *Abc* de Sevilla, la primera; y *El Alcázar* y *Nuevo Diario*, la segunda— e integradas en el aparato de poder político y económico de la España franquista⁴⁰⁶. Si el Ministerio les denegó el permiso para editar nuevos diarios a finales de los sesenta, no fue, pues, porque vinieran a desestabilizar el Régimen mismo, sino porque

⁴⁰⁵ Informe del delegado provincial en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 407, exp. 4189. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Antonio Carrillo Kabana-Canaria de Avisos, Documentos e informes)

⁴⁰⁶ Sobre las conexiones de ambas empresas con otros sectores de la economía española y con la Administración, pueden consultarse sus gobiernos corporativos en el Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975)

podían contribuir a alterar la correlación de fuerzas existente en el bloque de poder. Tras examinar los proyectos presentados, el MIT concluyó que ambas empresas pretendían publicar diarios más o menos alineados con el sector tecnócrata del Gobierno; un grupo de poder en franco ascenso desde 1957, vinculado al Opus Dei y enfrentado al grupo reformista de Manuel Fraga. Todo apunta a que fue, por tanto, la rivalidad política interna entre facciones del régimen lo que determinó la denegación de ambas inscripciones.

Las otras tres denegaciones, en cambio, sí parecieron deberse al temor de la Administración a dar entrada en el sistema de prensa a diarios potencialmente desestabilizadores. El Ministerio advirtió la presencia, tras las empresas solicitantes, de corrientes políticas inadmisibles para el inmovilismo tardofranquista. En el caso de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA), las pesquisas policiales dibujaron un proyecto animado por el liberalismo, el monarquismo juanista y el reformismo. En los del nonato *Migdia* y Prensa Catalana, S.A. se detectó la presencia del nacionalismo catalán o, en el lenguaje de la época, del “catalanismo”. Salvo en el caso de *Migdia* —denegado en los años sesenta, debido también en parte a la falta de apoyos y garantes políticos— las propuestas de nuevos diarios irrumpieron en la escena periodística española en un momento crítico para el franquismo, en plena huida hacia adelante inmovilista. Sin duda el temor a la proximidad del cambio contribuyó a la clausura del sistema de prensa impuesta por el MIT desde 1970 y enunciada elocuentemente por Alfredo Sánchez Bella con las siguientes palabras: “Estamos en un cambio de régimen y esto es como un quirófano en el que no pueden entrar microbios”⁴⁰⁷.

La Administración tardofranquista aplicó, en consecuencia, dos mecanismos de profilaxis, esto es, dos formas diferentes de denegación de la inscripción en el REP: una informal y oficiosa basada en la comunicación verbal de la oposición administrativa a los diarios; y otra subrepticia mediante la demora de la tramitación de los expedientes. La primera fue empleada por Manuel Fraga con Prensa Española, PESA y Manuel Ibáñez Escofet, promotor del *Migdia*: en los tres casos el MIT dio a entender a las empresas de forma más o menos explícita la inviabilidad de sus proyectos. La denegación encubierta mediante la demora del expediente fue padecida en cambio —gracias al vacío legal dejado al efecto por la LPI— por PRISA y Prensa Catalana, que no lograron acceder al REP hasta 1975, años después de presentar sus solicitudes de inscripción; y no pudieron editar sus diarios hasta el año siguiente a la muerte del dictador.

⁴⁰⁷ Palabras pronunciadas por Alfredo Sánchez Bella ante Andrés Ribera Rovira durante la negociación entre el MIT y Prensa Catalana, S.A. para sacar adelante el proyecto de *Avui*, según el testimonio de Jordi Maluquer relatado en entrevista telefónica mantenida el 6 de septiembre de 2012.

La Administración nunca presentó la preceptiva notificación oficial de denegación de inscripción amparada en el artículo 29 de la Ley de Prensa: tanto la denegación informal como, sobre todo, la demora de la inscripción resultaban sin duda mucho más discretas y menos controvertidas.

5.3.1 La denegación de la inscripción registral

El examen de las solicitudes de inscripción en el REP admitidas durante el tardofranquismo permite constatar la importancia que la proximidad de las empresas periodísticas al poder político y económico del Régimen tenía en la obtención de los plácet administrativos. Casos como los de Prensa Económica, S.A.; Ilustración, S.A.; Tele Exprés, S.A.; DYRSA; Ferrol Ediciones, S.A. o Canaria de Avisos, S.A.; demuestran que la cercanía al aparato de poder franquista constituía un factor decisivo en la obtención de la autorización para editar prensa diaria en España. Así lo confirma también, *a contrarii*, el caso de Manuel Ibáñez Escofet, quien vio denegada su iniciativa de editar el diario en catalán *Migdia* debido, entre otros motivos, a la inoperancia y el desinterés de sus contactos en el Consejo de Ministros. De cualquier modo, aunque crucial, el apoyo político no dejaba de resultar insuficiente en caso de que la Administración detectara alguna clase de inconveniente político en la iniciativa. Tal fue el caso de Prensa Española, S.A., cuyo intento de convertir el semanario *Blanco y Negro* en diario vespertino, se vio paralizado por Fraga aun a pesar del indudable influjo político de la familia Luca de Tena. El veto de la Administración al director y a algunos redactores de *El Alcázar* de PESA que Prensa Española pretendía contratar para el nuevo vespertino, pesó más, en este caso, que la influencia política. Esa misma veda a PESA impidió también la aparición de *El Alcance*, que la sociedad quiso alumbrar en el otoño de 1968 en sustitución de su recién expoliado *El Alcázar*.

Los tres proyectos fueron, en fin, denegados por el MIT por motivos políticos, ya vinculados a la falta de apoyos y a la desconfianza que generaba en la Administración la edición de un diario en catalán por parte de Manuel Ibáñez Escofet, ya ligados a la negativa de Fraga a conceder nuevos diarios al equipo de *El Alcázar* de PESA. Y uno y otro fueron denegados extraoficialmente y *de facto*: sus promotores se vieron obligados a abandonarlos por el fracaso de los contactos y negociaciones con el Ministerio, que no hubo de presentar denegación formal alguna de las solicitudes de inscripción.

El primer proyecto de editar un diario en catalán había sido impulsado por Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. (editora de *El Correo Catalán*), junto a Félix Millet, propietario de la histórica cabecera *El Matí*. Millet, cuyo periódico había sido

suspendido tras la Guerra Civil, sería vetado por el Régimen, de modo que Fomento de la Prensa Tradicionalista⁴⁰⁸ recurrió al subdirector de *El Correo*, Manuel Ibáñez Escofet (Ibáñez, 1992: 267)⁴⁰⁹. Ibáñez recogía así el testigo de la iniciativa a mediados de los sesenta, aprovechando que la apertura controlada de Fraga parecía auspiciar un clima más propicio. Según cuenta el periodista Joan Anton Benach, implicado en el proyecto fundacional de *Migdia*, los contactos con el MIT se iniciaron en torno a 1963, luego de que Fraga diera a entender que estaba dispuesto a autorizar un periódico en catalán, siempre y cuando contaran con algún “garante político” que asegurara su fidelidad al Régimen⁴¹⁰. La actitud de Fraga determinó la estrategia de Ibáñez para la obtención del plácet administrativo: en vez de presentar la solicitud de inscripción en la ventanilla del REP⁴¹¹, el periodista apostó por una negociación previa y directa con el MIT a través de un contacto político clave: el alcalde de Barcelona, Josep María de Porcioles. Aunque en un principio Porcioles prometió ejercer de valedor del proyecto, finalmente rehusó defenderlo ante la Administración, temeroso de jugarse su capital político en la incierta aventura del *Migdia*. Su calculada abulia, unida a la carencia de otros apoyos y a la desconfianza que despertaban en la Administración tanto el proyecto como su promotor, certificaron la muerte antes de nacer del que habría sido el primer diario en catalán impreso tras la Guerra Civil.

Con el fin de facilitar la aceptación administrativa del proyecto, Manuel Ibáñez había llamado a presidir la sociedad editora del *Migdia* a un hombre con contactos en las

⁴⁰⁸ Según relatan Nogué y Barrera, “La empresa de El Correo Catalán, en cuyo seno ya se habían alentado algunos planes anteriores al respecto, apostó entonces [a mediados de los sesenta] por la idea de crear un vespertino que les permitiera amortizar las inversiones realizadas en su nuevo edificio de la calle Consell de Cent” (Nogué & Barrera, 2006: 115). De hecho, según los autores, Ibáñez incluiría en la redacción del nuevo vespertino a dos de los subdirectores de *El Correo Catalán*: Josep Faulí y Joan Antón Benach.

⁴⁰⁹ Manuel Ibáñez Escofet (1917-1990) había trabajado antes de la Guerra Civil en el diario *El Matí*, de Félix Millet. Entre 1955 y 1968 fue subdirector de *El Correo Catalán*. Tras el fracaso del proyectado *Migdia*, Ibáñez asumiría la dirección de *Tele Exprés* hasta 1975. Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE.

Según el testimonio ofrecido en entrevista por Joan Antón Benach, quien había trabajado junto a Ibáñez Escofet en *El Correo Catalán*, éste era el auténtico “hombre fuerte” del diario barcelonés, incluso por encima de su director. Ibáñez se labraría su prestigio profesional en *El Correo*, dentro de una línea catalanista.

⁴¹⁰ Testimonio de Joan Anton Benach (subdirector de *El Correo Catalán* implicado en el proyecto fundacional del diario *Migdia*) en entrevista telefónica mantenida el 3 de septiembre de 2012.

Dado que Ibáñez opta por la negociación directa antes de presentar la solicitud de inscripción, no hay constancia en el Registro de Empresas Periodísticas de expediente alguno referido al diario *Migdia*. Nos hemos basado, pues, para la reconstrucción de este caso, en el testimonio oral de Joan Antón Benach y en las memorias del fallecido Ibáñez Escofet (1992).

⁴¹¹ De hecho, tanto Félix Millet como Domingo Valls Taberner, ambos implicados también en el proyecto, no dejaron de reprochar a Ibáñez Escofet el haber confiado en la negociación con el MIT. Cuenta Ibáñez en sus memorias que ambos habrían preferido seguir una estrategia de hechos consumados basada en la presentación de la solicitud de inscripción en el REP jugando así la baza del escándalo que habría implicado una denegación oficial de la autorización (Ibáñez, 1992: 267).

esferas políticas del Régimen, el accionista de Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A., Oleguer Soldevila Godó⁴¹². Soldevila era amigo del alcalde de Barcelona y procurador en Cortes, Josep María de Porcioles Colomer, hombre clave, como decimos, de la operación, e invitado también por Ibáñez a formar parte del Consejo. Porcioles, sin embargo, acabaría por desentenderse de la iniciativa —por “no mojarse”, en palabras literales de Benach— y por eludir los apremios de Ibáñez con un frecuente “ahora no es oportuno”⁴¹³. Junto a Porcioles, otra conexión política de Soldevila debía de haber favorecido la autorización: el entonces ministro de Gobernación y amigo de Franco, el general Camilo Alonso Vega, para quien Soldevila había trabajado como asistente personal durante la Guerra y con quien mantenía amistad. Como Porcioles, Alonso Vega estaba llamado a ser “la clave que abriese la puerta” (Ibáñez, 1992: 267); pero el ministro también desdeñaría el proyecto: durante una entrevista mantenida entre Soldevila y Alonso Vega en Madrid y ante la solicitud de mediación formulada por el primero, el ministro respondería:

¿No crees que pierdes el tiempo con el catalán? Mejor sería que cada mañana, al afeitarte, hicieras el firme propósito de no decir ni una sola palabra en catalán durante el día. Te acostumbrarías y ya no existiría el problema (Ibáñez, *ibídem*).

Descartado el apoyo de Alonso Vega, Manuel Ibáñez iniciará los contactos directos con Manuel Jiménez Quílez, quien no sólo rechazará sistemáticamente los documentos de inscripción, sino que contestará a los requerimientos de Ibáñez con un dilatorio “Ya llegará, ya llegará” (Ibáñez, *ibídem*). Ante el desdén de la DGP, el promotor recurrirá a su enésima baza: Jaime Miratvilles, con quien Fraga mantenía relación epistolar y que acompañará a Ibáñez en uno de sus viajes a Madrid. Aunque tampoco en este caso tuvo éxito, la cuestión del *Migdia* llegaría hasta el Consejo de Ministro: Franco llegó a preguntar su parecer al ministro catalán Pedro Gual Villalbí, quien, sin embargo, se negaría a opinar escudándose, precisamente, en su condición de catalán. Ni él, ni Porcioles, ni Alonso Vega, ni desde luego Manuel Fraga, parecían estar dispuestos a avalar políticamente la aparición de un diario en catalán comandado por Ibáñez Escofet.

A esta falta de apoyos no era ajena, en efecto, la desconfianza que Manuel Ibáñez Escofet y algunos de sus colaboradores despertaban en la Administración. El promotor llegaría a ser informado de que no era sino él, el principal obstáculo para el *Migdia*, y de

⁴¹² A mediados de los años sesenta, Soldevila era accionista minoritario de Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. con un 8’675% del capital. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Fomento de la Prensa Tradicionalista, Propiedad).

Completaban el CA un grupo de “prohombres burgueses”: Esteve Bassols, J. A. Maragall, Domingo Valls Taberner, Manuel Ortínez Mur, Gabriel Buxó, Pere Duran Farrell, Rossend Riera Sala y José María de Porcioles (Figueres, 2002: 246).

⁴¹³ Testimonio de Joan Antón Benach en entrevista mantenida el 3 de septiembre de 2012.

que había de sacrificarse si quería lograr la autorización. Aunque Ibáñez tratará, en un último intento, de inmolarse y dar paso a un nuevo CA, Oleguer Soldevila se negará a sacar adelante el diario sin él (Ibáñez, *ibídem*). Poco tiempo después de la aprobación de la LPI —que no incluía, por cierto, alusión alguna a la lengua o dialecto en que habrían de editarse los diarios españoles—, Ibáñez renunciaría definitivamente al proyecto. Poco a poco se había hecho evidente que la Administración nunca autorizaría un diario en catalán dirigido por Ibáñez Escofet y en el que tuvieran cabida intelectuales como Joan Fuster y Casimir Martí, y periodistas como Joan Anton Benach, entre otros⁴¹⁴. La operación del *Migdia* no había sido en realidad, a juicio de Benach, sino una “trampa tremenda” tendida por Fraga a Escofet, a quien había obligado a moderar el tono de *El Correo Catalán* con la promesa de la futura autorización del vespertino en catalán.

Con la denegación oficiosa al proyecto del *Migdia* quedaba abortado el segundo intento de editar un diario en catalán tras la Guerra Civil: la falta de apoyos políticos para una aventura políticamente incierta y por tanto arriesgada, así como las reticencias de la Administración a la aparición de un diario en catalán y el veto a su principal promotor, desembocaron en la primera denegación de inscripción de un diario en el tardofranquismo. Una denegación que no era, desde luego, legal ni oficial, en la medida en que no se fundaba en ninguno de los supuestos del art. 29 de la LPI ni generó notificación oficial alguna, lo que la hizo, por ello, tanto más eficaz cuanto menos escandalosa.

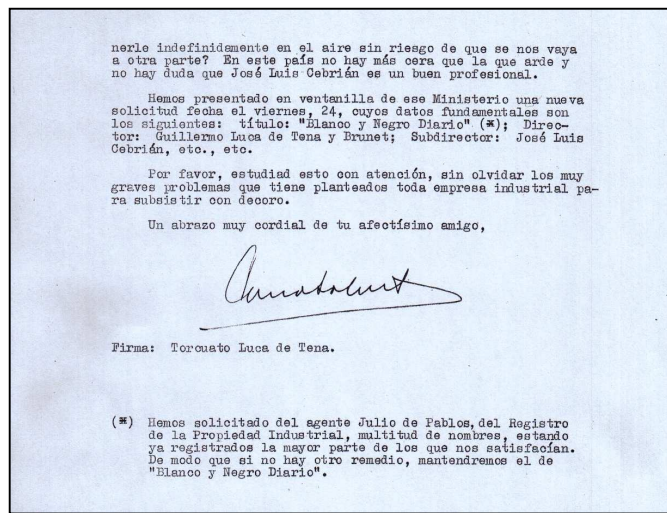
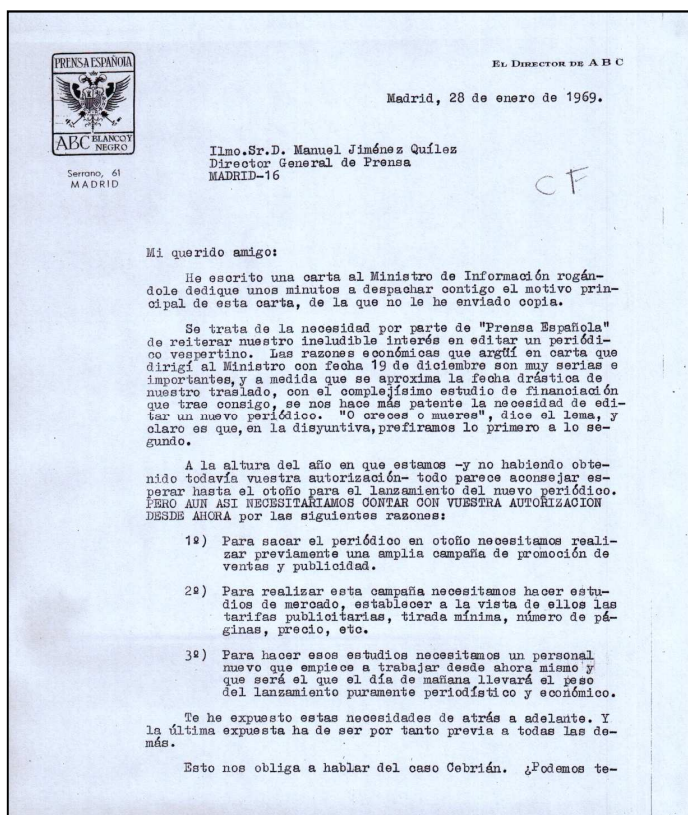
La misma reserva y discreción pretendió mantener la Administración en la otra gran denegación del tardofranquismo, a la que tampoco se le dotaría de carácter oficial, pues ni se fundamentó en los supuestos contemplados en el artículo 29 de la LPI, ni siguió el procedimiento administrativo normalizado para la denegación de inscripciones. En 1968, los Luca de Tena inician los trámites de inscripción de Prensa Española, S.A. —propietaria de *Abc* de Madrid y *Abc* de Sevilla— como editora de un nuevo vespertino: *Blanco y Negro Diario*⁴¹⁵. El 28 de enero de 1969, Torcuato Luca de Tena (presidente a la sazón de Prensa Española) remite dos cartas al ministro de Información y Turismo y al director general de prensa en las que conmina a ambos a despachar la autorización del

⁴¹⁴ Cuenta Joan Antón Benach en entrevista telefónica que tras la aprobación de la Ley de Prensa, Fraga llamó uno a uno a todos los directores de los diarios de Barcelona y Madrid para recordarles las nuevas obligaciones que les imponía la norma. En la llamada al director de *El Correo Catalán*, Roselló Pàmies, le advirtió de que debía dejar de publicar los escritos políticos de Joan Fuster, Casimir Martí y Joan Benach, entre otros. Los tres estaban vinculados al proyecto de *Migdia*, por lo que se hizo evidente a sus promotores que la Administración jamás aceptaría la salida del vespertino en catalán con el equipo propuesto. Benach, en concreto, asegura que se encontraba en una “lista negra” no tanto por sus trabajos en *El Correo Catalán*, cuanto por dirigir la revista de política y sociología *Promos*, suprimida por el MIT poco después de la aprobación de la LPI.

⁴¹⁵ Exp. 842 en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 97

nuevo diario⁴¹⁶. De las misivas se desprende que la solicitud de inscripción de *Blanco y Negro Diario* venía demorándose ya varios meses. Todo indica que la Administración había puesto trabas a una primera solicitud presentada por la empresa en 1968: Fraga se habría mostrado contrario a la contratación, para el nuevo diario, de parte de la redacción de *El Alcázar* recién expoliado a PESA (v. 6.4.2.1), empezando por su director, José Luis Cebrián Boné (Alfárez, 1986: 36). Según recoge Rodríguez Virgili, Fraga se había dirigido así a los Luca de Tena:

No admito que sean directores, ni aun redactores jefe, [José Luis] Cebrián ni otro alguno de sus muchachos [...] Si alguno de éstos entra en los mandos del nuevo diario, no tenemos más que hablar; desde ahora os digo: no autorizo la salida de *Blanco y Negro* (Rodríguez, 2005: 448).



El veto de Fraga a Cebrián y su antiguo equipo de *El Alcázar* llevaría a Prensa Española, S.A. a presentar una segunda solicitud de inscripción en el REP el 24 de enero de 1969, esta vez con Cebrián como subdirector del proyectado

vespertino. En su carta a Jiménez Quiles, Torcuato Luca de Tena abordaba directamente la cuestión con las siguientes palabras:

[...] Esto nos obliga a hablar del caso Cebrián ¿Podemos tenerle indefinidamente en el aire sin riesgo de que se nos vaya a otra parte? En este país no hay más cera que la que arde y no hay duda de que José Luis Cebrián es un buen profesional.

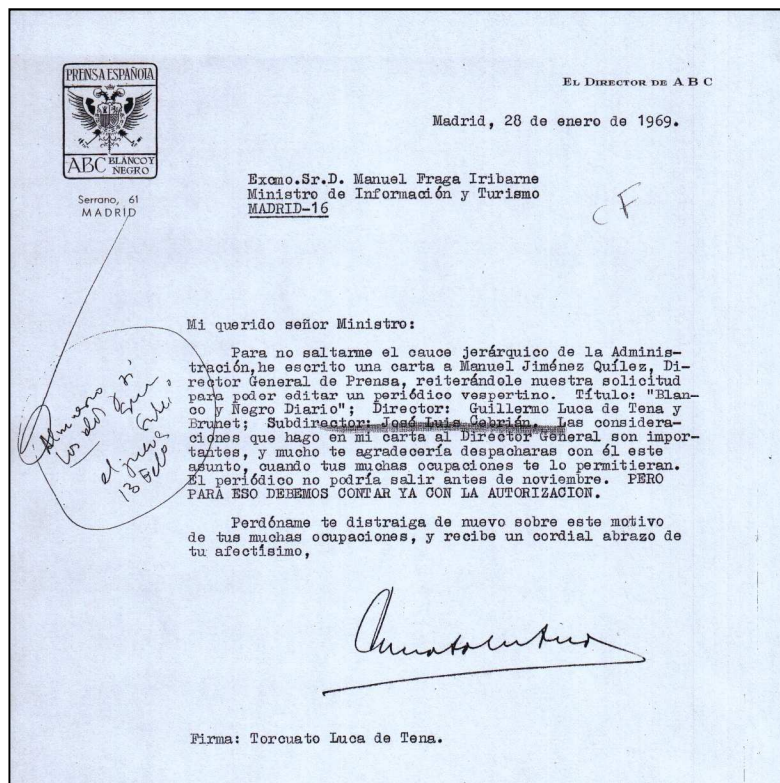
⁴¹⁶ Ambas cartas se encuentran archivadas en el expediente de Prensa Española, S.A. y reproducidas también en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa Española, Documentos e Informes).

Fraga, sin embargo, mantendría su negativa a conceder el plázet a la redacción de *El Alcázar* y a su antiguo director. De poco valdrían en este caso la indudable influencia de Torcuato Luca de Tena —consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes por designación directa de Franco entre 1964 y 1977— o el aval político de una empresa como Prensa Española, S.A. A pesar de que existe un documento de inscripción en el REP firmado por Jiménez Quílez con fecha de 14 de febrero de 1969⁴¹⁷, el diario nunca saldría a la calle: Fraga había marcado en rojo, en la carta remitida por Torcuato Luca de Tena, el nombre de José Luis Cebrián.

Como ocurriera con *Migdia*, la Administración denegaba así, sin notificación oficial alguna amparada en el art. 29 de la LPI, una solicitud

de inscripción. Y lo hacía, una vez más, de forma oficiosa y no por cuestiones técnicas, económicas o legales, sino por motivos políticos, vinculados en este caso a la animadversión de Manuel Fraga hacia la línea opusdeísta y más o menos alineada con el sector tecnócrata, mantenida hasta hacía poco por *El Alcázar* de Cebrián. Tras despojar a PESA de la cabecera, Fraga no parecía estar dispuesto a permitir la reaparición de su línea editorial al calor del influjo político y del prestigio histórico de Prensa Española, S.A.

Menor disposición mostraba aún, como es obvio, a la autorización de un nuevo diario editado por PESA y continuador de *El Alcázar*. El 30 de septiembre de 1968, Prensa y Ediciones, S.A. presentaba ante el Ministerio la solicitud de inscripción del diario *El Alcance*. La solicitud se entregaba apenas tres días después de que estallara el conflicto con la Administración a propósito de *El Alcázar*: el 27 de septiembre, la DGP había comunicado a PESA la suspensión de la publicación, a la que la empresa había respondido, ese mismo día, denunciando a Manuel Jiménez Quílez ante el Juzgado de



⁴¹⁷ Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa Española, Documentos e Informes).

Guardia de Madrid⁴¹⁸. PESA parecía intentar sacar adelante un nuevo diario que sustituyera al recién expoliado *El Alcázar* y mantuviera sus puestos de trabajo; o, cuanto menos, trataba de dotarse de una baza más de cara a una más que probable negociación futura con el Ministerio, que se vería en la obligación de denegar a PESA la autorización de *El Alcance* poco después de haber suspendido *El Alcázar*, haciendo más evidente aún la persecución a la empresa.

Aunque Fraga denegó, en efecto, la autorización de edición de *El Alcance*, no lo hizo mediante una notificación oficial de denegación de la inscripción. Una vez más, como ocurriera en los casos de *Migdia* y *Blanco y Negro Diario*, la denegación fue oficiosa: el MIT siguió la misma estrategia dilatoria que había enunciado Jiménez Quílez con su “ya llegará, ya llegará” y que había motivado los apremios de Torcuato Luca de Tena a Manuel Fraga. Varios documentos archivados en el expediente de Prensa y Ediciones, S.A. evidencian la maniobra administrativa: junto a la solicitud de inscripción de *El Alcance* se encuentran archivadas dos breves notas sin fecha ni firma sobre los plazos máximos que, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, debía observar el Ministerio para tramitar un expediente; así como sobre las implicaciones que tendría la presentación de una oposición formal a la inscripción durante el plazo de información pública.

DATOS PARA LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE INSCRIPCION DEL
DIARIO "EL ALCANCE"

- La solicitud de inscripción, fue presentada en el Registro del Ministerio con fecha 30 de septiembre de 1968.
- El expediente debe quedar resuelto el día 31 de marzo de 1969
- Fecha para solicitar la documentación que falta:
 - a) 30 de noviembre de 1968: Si se quiere evitar la denuncia de mora.
 - b) 15 de febrero de 1969: Si no se tiene en cuenta la denuncia de mora.
- Fecha de envío al Boletín Oficial del Estado: 4 de marzo de 1969
- Fecha límite de resolución del expediente de inscripción: 31 marzo 1969
- Fecha límite de notificación de la resolución de inscripción:
11 de abril de 1969.

CASO DE OPOSICION PRESENTADA DURANTE EL PLAZO DE INFORMACION PUBLICA.

La oposición a la resolución de un expediente significa una petición de denegación de inscripción y, por tanto, deberá estar fundada en cualquiera de los casos estrictamente establecidos en el artículo 29 de la Ley de Prensa e Imprenta.

En este caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88,2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración puede disponer la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas jusgue pertinentes.

⁴¹⁸ PESA denunciaba a Manuel Jiménez Quílez por supuesta infracción del artículo 193 del Código Penal, que prescribe pena de inhabilitación absoluta a aquella autoridad gubernativa que “fuera de los casos permitidos por las leyes estableciese la censura previa de imprenta, recogiese ediciones de libros o periódicos o suspendiese su publicación” (Rodríguez, 2005: 427).

Todo hace pensar que la Administración solicitó dicha información con la intención de saber hasta qué fecha podían agotar los plazos de tramitación previstos en la Ley. Finalmente, el 21 de diciembre de 1968 (rebasado el plazo previsto para la denuncia de mora), Manuel Jiménez Quílez requería a PESA la presentación de hasta seis documentos más para “proseguir la tramitación”: PESA, por supuesto, nunca llegó a editar una nueva publicación, y aun se vio obligada, según hemos ya apuntado y profundizaremos más adelante (v. 6.4.2.1), a renunciar a sus derechos sobre *El Alcázar* y a vender *Nuevo Diario*, antes de solicitar la cancelación definitiva de su inscripción como empresa periodística en mayo de 1971.

La tramitación del expediente de *El Alcance*, así como los de *Migdia* y *Blanco y Negro Diario* evidencian el procedimiento de denegación de

solicitudes de inscripción indeseadas seguido por el Ministerio de Fraga. Las tres empresas editoras hubieron de abandonar sus iniciativas, bien ante la negativa explícita pero oficiosa del MIT, bien cuando se hizo evidente la oposición de la Administración a sus proyectos. Las denegaciones nunca adoptaron, de cualquier modo, carácter oficial, al no dar lugar a una declaración denegatoria formal amparada en los supuestos del artículo 29 de la LPI. En los casos de PESA y de Prensa Española, S.A., Fraga dejó clara su negativa a autorizar diarios en los que estuviera implicado el antiguo equipo de *El Alcázar*; en el de *Migdia*, Ibáñez Escofet fue conminado —tras años de promesas a cambio de una moderación del tono de *El Correo Catalán*— a abandonar su propuesta para que saliera adelante. En todos, la Administración trató de demorar la tramitación de las inscripciones en el REP hasta hacer desistir a sus promotores. Esta estrategia dilatoria se empleará aún, aunque con resultados diferentes, en dos casos más durante el tardofranquismo.

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

COPIA DE RESPUESTA O TRAMITE (1)

Subsecretaría : 1
Dirección General : 2 **P R E N S A .**
4
5
Servicio : 6
División : 7 **Empresas Periodísticas.**
Sección : 8

De: Madrid, a 21 de diciembre de 1968 / Exp. 1201.- EP/ag.

Fecha y ref.:

Se ha recibido en este Centro Directivo su escrito de fecha 30 de septiembre del año en curso, por el que solicita, conjuntamente con D. Emilio Fernández de Caso, la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas de una nueva publicación diaria que habrá de titularse «EL ALCANZAR» y cuya Empresa Periodística será «Prensa y Ediciones, S.A.»

Al objeto de proseguir la tramitación del correspondiente expediente, habrán de aportarse a este Centro Directivo (Sección de Empresas Periodísticas) los siguientes datos y documentos:

- Testimonio fehaciente acreditativo de que D. Emilio Fernández de Caso, se halla legitimado para obrar, conjuntamente con D. José María Molero y Agüero, en nombre y representación de la Empresa «Prensa y Ediciones, S.A.»
- Determinación de los redactores que habrán de integrar la plantilla del diario, cuya inscripción se solicita.
- Declaración expresa sobre el número de ejemplares de tirada.
- Contrato civil de prestación de servicios suscrito entre «Prensa y Ediciones, S.A.» y el Director y Subdirector propuestos para los citados cargos.
- Aceptación, expresa, de los citados Director y Subdirector para desempeñar los cargos mencionados.
- Certificación fehaciente, expedida por el Registro de la Propiedad Industrial acreditativo de que la marca del título «EL ALCANZAR» figura inscrita, en dicho Registro, a nombre de la Empresa Periodística Prensa y Ediciones, S.A.

Dios guarde a Vd. muchos años.
EL DIRECTOR GENERAL DE PRENSA,

A: Sr. D. José María Molero y Agüero, en nombre y representación de «Prensa y Ediciones, S.A.» Llanero Caldeira, S. MADRID.

(1) Válida para respuestas generales de «enterados», «tema de fondo», «cuyo de respuesta» o similares. (Véase dorso.)

5.3.2 La demora de la inscripción registral

La Administración recurrirá a la demora de la tramitación de expedientes de inscripción indeseados en dos casos muy significativos durante los década de los setenta: los de Prensa Catalana, S.A. y Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA). Si bien la tramitación de ambos expedientes desembocará finalmente, a diferencia de las demoras impulsadas por Fraga, en la autorización de las empresas periodísticas, ésta no llegará hasta 1975 y sus diarios no verán la luz hasta después de la muerte de Franco. El aplazamiento de la inscripción en el REP se convertirá, así, en la principal maniobra seguida por la Administración a partir de 1970 para evitar la admisión en el sistema de prensa de empresas periodísticas políticamente inconvenientes. Esta estrategia dilatoria permitió al MIT eludir la concesión de la autorización administrativa previa, evitando, al tiempo, la mayor trascendencia pública y controversia que habría supuesto la presentación de una denegación formal.

Las ventajas de esta maniobra de denegación subrepticia habían sido ya de hecho advertidas en un informe anónimo mecanografiado y archivado junto a la documentación original de la LPI⁴¹⁹. Resulta muy significativo el hecho de que, a pesar de mostrarse muy crítico con el proyecto normativo (al que tacha de demasiado “liberal”), el autor no escatime elogios al REP, al que considera el “instrumento gubernativo” más eficaz de restricción del sistema de prensa:

Me parece [afirma sobre el Registro de Empresas Periodísticas] el instrumento gubernativo de control de las publicaciones más eficaz en la práctica. *Permite el juego político y el poder retrasar indefinidamente la aparición de una publicación sin necesidad de prohibirla.* Precisamente por eso necesita ser manejado con mucha inteligencia y finura (¡todos los tratados de ‘gramática parda’ van a ser necesarios!) [el subrayado es nuestro].

Las causas de denegación que expresamente señala el artículo 29 no bastan a mi juicio para ese difícil manejo. Pero los intrínquilis burocráticos pueden hacer el resto. Aquí van a hacer falta verdaderos artistas en el arte de demorar un expediente de inscripción, cuando sea necesario. Ese arte ya lo descubrió Felipe II⁴²⁰.

La Administración pudo valerse de este “arte”, gracias a la laguna legal dejada al efecto por la LPI. Ni el capítulo IV de la norma referido al REP, ni el Decreto 749/1966 fijaban plazo alguno para la resolución de las inscripciones, lo que abría la puerta al

⁴¹⁹ El hecho de que se encuentre archivado junto a esta documentación original sugiere que el documento fue elaborado por alguna figura influyente o, cuanto menos, escuchada por el legislador.

⁴²⁰ “Notas a la Ley de Prensa e Imprenta”. En AGA, sig. (03)49.21 c. 65137. Véase Anexo VII.

aplazamiento *sine die* de la autorización administrativa⁴²¹. Las empresas periodísticas afectadas habrían podido, bien es cierto, acogerse a las garantías que, con respecto al silencio administrativo, contemplaba la Ley de 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento Administrativo (BOE de 18 de julio). El artículo 61.1 establecía, en este sentido, un plazo máximo de seis meses —a contar desde el día en que se iniciara el procedimiento hasta aquel en que se dictara resolución— para la tramitación de cualquier procedimiento que no revistiera carácter excepcional⁴²². Por otra parte, el artículo 94.1 de la misma norma permitía a los afectados por la dilación plantear denuncia de mora pasados tres meses de la presentación de la petición ante la Administración. De mantenerse el silencio administrativo transcurridos otros tres meses desde la denuncia de mora, el afectado debía entender su solicitud como denegada, lo que abría la puerta a la presentación de los recursos correspondientes. Esta denegación implícita, en cualquier caso, no liberaba a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa (art. 94.2).

Aunque al menos una de las empresas periodísticas barajó esta posibilidad⁴²³, finalmente ninguna presentó denuncia de mora por la dilación administrativa (lo que les impidió, por tanto, recurrir la denegación implícita que habría implicado el silencio administrativo transcurridos los tres meses de la denuncia). Tanto PRISA como Prensa Catalana, S.A. apostaron por perseverar en la negociación con el Ministerio antes que por la confrontación directa que habría supuesto la denuncia. Ésta habría podido desembocar en dos supuestos favorables a las empresas; a saber: en una autorización administrativa dentro de los tres meses posteriores a la denuncia de mora; o en una denegación formal recurrida con éxito ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En ambos casos se habría tratado de una victoria pírrica, en tanto habrían quedado las empresas a merced de la Administración, que no dejaba de contar, como comprobaremos en los capítulos 6 y 7, con mecanismos coercitivos suficientes para impedir el desarrollo normal de la actividad de las empresas que se habían visto empujadas a autorizar. Tal y como señala Javier Salas, la explicación de la ausencia de denuncias de mora

⁴²¹ Así lo advertía también, ya en 1967, Manuel Clavero Arévalo, para quien “la prolongación del tiempo para otorgar estas autorizaciones, que en todo caso han de preceder a la iniciación de la actividad controlada, puede constituir un medio para burlar el derecho de los particulares. Debería haberse establecido una técnica de silencio positivo como va siendo proverbial en materia de autorizaciones” (Clavero, 1967: 273).

⁴²² En caso de mediar “causas excepcionales, debidamente justificadas” que impidan la tramitación del procedimiento en dicho plazo, el Jefe de la Sección correspondiente deberá hacerlas constar en el expediente por medio de diligencia firmada (art. 61.1 de la LPA).

⁴²³ Según Seoane y Sueiro, la Junta de Accionistas de PRISA celebrada el 26 de junio de 1974 plantea la posibilidad de recurrir a un contencioso con la Administración a cuenta de la demora injustificada del expediente de inscripción: Rafael Arias Salgado defenderá la posibilidad de presentar un requerimiento por vía judicial (Seoane y Sueiro, 2004: 47).

[...] quizá quepa hallarla más que en la falta de esperanza en una sentencia favorable, en la creencia de obtenerla demasiado tarde —dada la lentitud del funcionamiento de la jurisdicción contenciosa, especialmente, la del Tribunal Supremo—, y sobre todo, en el temor a posibles consecuencias ‘desagradables’ como la de ser objeto, una vez obtenida la inscripción, de una ‘especial vigilancia’ por parte de la Administración, con la hipotética consecuencia de imposición de sanciones a la menor infracción o, incluso, de cancelación de la inscripción originaria, en cuanto apareciera una mínima base para ello (Salas, 1975: 43).

La coacción que suponía la intervención administrativa en la vida de las empresas periodísticas admitidas venía así a reforzar la potestad de tamización discrecional del sistema de prensa a través del Registro de Empresas Periodísticas. Mediante aquel arte de demorar inscripciones inventado por Felipe II, y los “intrínfulis burocráticos” del REP, pudo la Administración cerrar el paso al sistema a dos empresas políticamente inconvenientes, tras las cuales el Régimen pareció adivinar corrientes políticas inadmisibles para el inmovilismo tardofranquista.

Prensa Catalana, S.A.-Empresa Periodística no logrará inscribirse en el REP como editora de *Avui* hasta un mes después de la muerte de Franco⁴²⁴. Aquel 23 de diciembre de 1975 en que el director general del Régimen Jurídico de la Prensa firmó su autorización, se cumplían ocho años y nueve meses desde que la empresa solicitara por primera vez la inscripción. Prensa Catalana se había constituido el 16 de enero de 1967 con un capital de un millón de pesetas propiedad de Jordi Maluquer Bonet (con un 61’5% de las acciones), Joaquín Maluquer Sostres y María del Carmen Almeda Petipierre (con un 16’5% cada uno), Juan Mumbrú Casademunt (con un 3%) y Francisco Ubach Miravittles (con un 2’5%). El 17 de marzo, la sociedad solicitaba su inscripción en el REP como editora de *Avui*, proyectado inicialmente como un semanario en lengua catalana. La solicitud motivó, el 22 de agosto de 1967, el envío por parte del director general de prensa de un requerimiento de información sobre los promotores al delegado provincial del MIT. La respuesta llegaría el 4 de septiembre: la Delegación remitía a la DGP un informe sobre la actividad profesional, “conducta moral pública y privada”, filiación y actividad política y antecedentes policiales de los accionistas y periodistas implicados en el proyecto. De las seis personas investigadas, cuatro fueron consideradas como de ideas “catalanistas”, una como “regionalista” y otra como “indiferente al Régimen”. Todo apunta a que no fue sino la mayoría “catalanista” detectada en la empresa la que motivó la paralización del expediente de inscripción durante más de dos años.

⁴²⁴ Exp. 824, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 94

COPIA DE RESPUESTA
O TRANSITO (1)

DELEGACIÓN PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO

De: **DELEGADO PROVINCIAL**

Ciudad, fecha y año: **Barcelona, 4 de Septiembre 1967**

ELIMO, SR.:
En contestación a su escrito del pasado 22 de Agosto, adjunto cumplido a V.I. Informe sobre las personas que han constituido la entidad "PRENSA CATALANA, S.A." - "SUPLENTE PERIODISTAS", de carácter de inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas con SÍMBOLO del número "ATU2".

Dios guarde a V.I. muchos años.

EL DELEGADO,
[Firma]

A: **ELIMO, SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA - BARCELONA**

(1) Véase para respuesta general de contenido, tema de fondo, temas de fondo y anexos.

NOTA INFORMATIVA PARA EL ELIMO, SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA

Asunto: Informe sobre las personas que forman la entidad "PRENSA CATALANA, S.A." - "SUPLENTE PERIODISTAS". (Seminario "ATU2").

JOAQUÍN MALUQUER BONET.- Nacido en Barcelona el 11 de Diciembre de 1.930, casado, hijo de Juan y María Mercedes, con domicilio en esta Capital, calle Córcega, 413, 3º 3ª.

De la información practicada resulta que es persona de buena conducta moral, pública y privada.

Políticamente no se le conocen en la actualidad actividades de ninguna clase, ni bien puede considerarse como persona de ideas catalanistas.

En el año 1.951 se le instruyeron diligencias y fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, por ser uno de los fundadores y colaboradores de la revista "FRONTE", de tipo catalano-separatista y claudista.

En colaborador ocasional del diario "El Noticiero Universal", en el que publica artículos de información económica y financiera, que no ofrecen nada destacable que señalar.

FRANCISCO RAMON MIRAVITLES.- Nacido en Avinyó (Barcelona) el 7 de Enero de 1.928, casado, hijo de Ramon y Carmen, con domicilio en esta Ciudad, calle José Antonio, 798, puerta 38.

Según informes obtenidos, observa actualmente buena conducta moral, pública y privada.

Políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase, pero por su forma de ser, las personas con quienes se relaciona y la manera de expresarse (ya que todo lo que escribe lo hace en catalán, incluso cuando va dirigido al "Sun-Times", como son las hojas de empujamiento), puede ser considerado como persona de ideas marcadamente catalanistas.

Ejerce la abogacía estando considerado profesionalmente. Su posición económica es buena.

JOAQUÍN MALUQUER BONET.- Nacido en Barcelona el 15 de Mayo de 1.935, casado, hijo de Manuel y Ana, con domicilio en esta Ciudad, Avda. República Argentina, 162, 6º 2ª.

Es persona que observa buena conducta moral, pública y privada.

Políticamente puede considerarse persona de ideas liberales y un tanto catalanistas y, desde luego, contraria al Régimen, como lo indica su presencia en el año 1.957, por participar en algunas estudiantiles, distinguiéndose notablemente en ellas.

Actualmente y desde que se convirtió en dueño de la Empresa MALUQUER BONET, S.A., dedicada a la fabricación de cremas y productos químicos, con motivo de la muerte de su padre, se ha hecho persona más responsable y se le considera más distinguido de toda clase de actividades políticas, si bien su carácter catalanista, aún perdura en él.

Geza de buen concepto en los medios industriales en que se desenvuelve y de una muy sana posición económica.

MARTA DEL CARMEN ALONSO FETTERIERE.- Nacida en Vich (Barcelona), el 13 de Agosto de 1.936, casada, sus labores, hija de Ramon y Narcia, domiciliada en esta Ciudad, calle Milanesa, 20, 3º 3ª. Es persona que actualmente observa buena conducta moral, pública y privada.

Políticamente, no se le conocen actividades de ninguna clase, pero puede considerarse como persona de ideas catalanistas avanzadas.

Está casada con JOSE ESPART TICO, nacido en Barcelona el 22.12.1927, hijo de Mariano y Mercedes, de filiación catalano-separatista y contrario al Régimen.

Tiene un hermano, llamado JOSE MARIA, de la misma filiación política, y al que se detuvo con motivo de la manifestación por el aniversario de Casanova.

Geza de muy buena posición económica.

JUAN PEDRINI GUARDINI.- Nacido en Barcelona el 1-9-1935, soltero, Artista y Pintor, hijo de Valero y Adela, con domicilio en esta Capital, calle Perrenir, 5, 1º 1ª.

Es persona que observa en la actualidad buena conducta en todos los aspectos, políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase, estando considerado como de ideas ligeramente catalanistas.

Geza de buena concepción entre su vecindario y su situación económica es bastante buena.

FRANCISCO BALVA MIQUEL.- Nacido en Barcelona, el 18.5.1919, soltero, Periodista, hijo de José y María, con domicilio en esta Ciudad, Vía Layetana, 95, 2º, 1ª.

Es persona de buena conducta moral, pública y privada, al que, políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase en la actualidad, si bien está considerado como regionalista moderado.

Antiguamente militaba en la Comandancia Truicista, donde estaba considerado, siendo ex-comitente y ex-captivo.

Posee la Medalla de Plata de la Ciudad de Barcelona y es colaborador de varios periódicos, entre ellos "Solidaridad Nacional" y "Hoja del Lunes".

ANTONIO RAELLA BULFAR.- Nacido en Higuera de Calatrava (Jaén), el 1.10.1.936, soltero, periodista, hijo de Antonio y María Amantia, con domicilio en esta Ciudad, calle Siglo XI, 84, 3º.

Es persona de buena conducta en todos los aspectos.

Políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase, estando considerado como indiferente al Régimen.

Es periodista, inscrito en el Registro Oficial con el número 3.522, siendo autónomo becario de la Diputación Provincial, y del Ministerio de Información y Turismo.

Barcelona, 4 de Septiembre de 1.967

El 6 de junio de 1969, el accionista mayoritario y consejero delegado de Prensa Catalana, Jordi Maluquer Bonet, envía una carta a Manuel Fraga quejándose de la dilación administrativa.

Hasta la fecha (han transcurrido dos años y tres meses) no hemos recibido [se lamenta Maluquer] respuesta alguna a nuestra solicitud y ante gestiones hechas personalmente cerca de varios funcionarios de la Dirección General de Prensa hemos recibido tan sólo evasivas⁴²⁵.

La misiva logró reactivar hasta cierto punto la tramitación del expediente: unos días después, el 17 de junio, Manuel Jiménez Quílez preguntaba al delegado provincial de Información y Turismo en Barcelona —a quien conmina a consultar con el gobernador civil— su opinión sobre la autorización:

A fin de adoptar la resolución que proceda [acaba la carta] que el tiempo transcurrido desde la solicitud hace ya necesaria, le pido que, considerando el aludido informe [se refiere al informe político social de 4 de septiembre de 1967, que Jiménez Quílez remite al delegado] y tras cambiar impresiones con el Gobernador Civil sobre el asunto y conocer su parecer, me indique lo que estime debemos hacer en este caso⁴²⁶.

Aunque no ha quedado constancia en el Registro de la respuesta enviada por la Delegación Provincial, ésta no pudo ser sino contraria a la autorización, toda vez que el

⁴²⁵ Carta de Jorge Maluquer a Manuel Fraga, de 6 de junio de 1969, en exp. 824, en REP, *ibídem*. V. Anexo VIII

⁴²⁶ Carta de Manuel Jiménez Quílez al delegado provincial de Información y Turismo en Barcelona, 17 de junio de 1969, en exp. 824, en REP, *ibídem*. V. Anexo VIII.

expediente volvió a quedar paralizado hasta 1975⁴²⁷. Sin embargo, ni Maluquer Bonet ni el resto de accionistas fueron nunca informados de la situación en que se encontraba el expediente, ni recibieron, desde luego, notificación alguna de denegación. En sus gestiones y entrevistas con la DGP recibieron sólo evasivas y falsas promesas, según afirma el propio Jordi Maluquer, quien pasado un tiempo llegó a la conclusión de que en el proyecto inicial del *Avui* habían “pecado de inocentes”, constituyendo una sociedad formada por “catalanistas, pero de cierta moderación” y sin los contactos políticos suficientes para obtener el permiso⁴²⁸.

Tras varias tentativas infructuosas de hacerse con otros semanarios⁴²⁹, a finales de 1972 Premsa Catalana, S.A. retomaría la tentativa de edición del *Avui*, ideado esta vez como periódico diario. Jordi Maluquer recuerda que la reactivación del proyecto se produjo de forma casual, gracias a un encuentro con Josep Espar Ticó, empresario y promotor cultural ligado al nacionalismo catalán⁴³⁰. Espar Ticó, quien se pondría desde entonces a la cabeza del nuevo *Avui*, era consciente, según él mismo relata, de que la vía habitual de acceso al sistema de prensa estaba cerrada para Premsa Catalana: en sus palabras, de haber tratado de obtener la inscripción “a pecho descubierto” a través de “tres o cuatro prohombres”, el expediente habría quedado abandonado “en algún rincón del Ministerio”⁴³¹. Debían, pues, adoptar una fórmula original que “constriniera” al MIT a resolver la inscripción, y que acabó consistiendo en la captación de decenas de miles de

⁴²⁷ Y ello aun a pesar de que, en 1969, el proyecto se había ganado el aval político del Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, José María Muller de Abascal. Éste había apoyado a Jorge Maluquer y solicitado que se resolviera el expediente en una carta enviada al Subdirector General de Información, Joaquín Benítez Lumberras. Benítez había escrito, a su vez, otra carta a Manuel Jiménez Quílez el 6 de agosto pidiendo a éste que estudiara con sus colaboradores la posibilidad de acceder a la petición de Premsa Catalana, S.A. Nada de ello resultó.

Cartas en exp. 824, en REP, *ibídem*. V. Anexo VIII.

⁴²⁸ Testimonio de Jordi Maluquer Bonet, accionista mayoritario de Premsa Catalana, S.A., en entrevista telefónica mantenida el 6 de septiembre de 2012.

⁴²⁹ Según cuenta Jorge Maluquer en la entrevista mantenida (véase nota anterior), al darse cuenta de la falta de apoyo político de Premsa Catalana, S.A., constituyeron otra sociedad denominada Catalana de Comunicació, en la que incorporaron a importantes industriales catalanes. La empresa solicitaría editar el semanario *El Temps* (cuyo título había sido registrado por Maluquer Bonet años antes); pero Alfredo Sánchez Bella se negaría a concederles el plázet. Cuenta Maluquer que Sánchez Bella había respondido a la solicitud de edición de *El Temps* formulada por el Presidente de la Cámara de Industria Catalana, Andrés Ribera Rovira, con las siguientes palabras: “estamos en un proceso de cambio de régimen y esto es como un quirófano en el que no pueden entrar microbios”. La Administración ofrecerá a Catalana de Comunicació hacerse con la revista *Tele Estel*, pero Maluquer rehusará al darse cuenta de que podía tratarse de una trampa: *Tele Estel* contaba sólo con la autorización verbal del Ministerio, que podía por tanto cerrarlo en cualquier momento. Finalmente, la empresa se ofrece a la editorial *Destino* para sacar adelante el semanario *L'Observador*. El MIT, sin embargo, pone como condición para conceder el plázet una moderación de la línea editorial de la revista *Destino* que ésta se niega a aceptar.

⁴³⁰ José Espar Ticó procedía de una familia acaudalada vinculada al sector peletero. En 1961, Espar Ticó fundaría la discográfica Edigsa, la gran impulsora de la *Nova Cançó* catalana.

⁴³¹ Testimonio de Josep Espar Ticó, promotor de Premsa Catalana, en entrevista telefónica mantenida el 12 de septiembre de 2012.

suscriptores –y entre ellos de centenares de figuras del arte y la cultura– que respaldaran la iniciativa ante la Administración. Espar, Maluquer y otros se embarcarían así en una “inmensa campaña entidad por entidad y pueblo por pueblo” (Espar *dixit*) hasta lograr armar una propuesta lo suficientemente sólida como para convertir su tramitación en un asunto ineludible para el MIT. Con el fin de evitar demoras y rechazos, la empresa optaría por trabajar en la campaña a espaldas de la DGP, que no recibirá la solicitud formal de inscripción hasta junio de 1975. Por supuesto, ello no evitó que la Dirección General siguiera atentamente el devenir del proyecto, del que tenía constancia al menos desde principios de 1973. El tres de enero de ese año, el director general de prensa, Alejandro Fernández Sordo, enviaba una carta al entonces delegado de Información y Turismo en Barcelona, José Luis Herrero Tejedor, en la que le solicitaba información sobre la ideación, descubierta por el MIT, de un diario en catalán. Fernández Sordo finalizaba la carta advirtiendo: “convendría tener alguna noticia sobre la filiación, antecedentes o actividades de dichas personas, a fin de estar prevenidos y tener, cuando menos, una idea aproximada sobre el alcance y fines de dicho proyecto periodístico”⁴³².

Desde entonces y hasta 1975, la DGP y la delegación del MIT en Barcelona intercambiarán abundante correspondencia a cuenta del proyecto *Avui*. El 25 de mayo, el delegado provincial envía a la Dirección General una nota reservada sobre los movimientos de la empresa encaminados a poner en marcha el diario. Tras informar de la emisión de participaciones por valor de 60 millones de pesetas, el delegado promete un nuevo informe “político-social” sobre los promotores. El 16 de julio de 1973, el subdirector general de prensa recibe otro informe elaborado por la Delegación del MIT en Valencia y remitido por los Servicios Informativos de la DGP. Bajo el asunto “Acción separatista”, la delegación valenciana advierte de que “elementos catalanistas y catalanizantes” [*sic*] están recabando en Valencia apoyo “material y moral” para la edición de un diario en catalán, el *Avui*. El informe, con todo, recomienda no adoptar aún medida alguna, más allá del mantenimiento de una “vigilancia cuidadosa” del asunto.

⁴³² En exp. 824, en REP, *ibídem*. V. Anexo VIII.

No

SERVICIOS INFORMATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Fecha 16-7-73 Hora 21.55 (Tp.) Ref. N.º AGP/mc. 2203
 Empresas. Archivo en "AVUI"

NOTA INFORMATIVA

Asuntos: Acción separatista.
 Fuentes: Delegado del M.I.T. en Valencia.

824.

Sin que pueda especificar demasiado ni aún ofrecer su plena confirmación, se han llegado noticias referidas a la actividad desplegada en Valencia por elementos catalanistas y catalanizantes en busca de apoyo material y moral para un supuesto diario en lengua catalana -"Avui"- que, en base a su difusión por toda el área que dichos sectores denominan "gran cataluña", dicen que se pretende publicar en Barcelona.

No poseo demasiados detalles sobre el asunto citado, pero sí los suficientes para poder asegurar una observación y vigilancia cuidadosa por parte de esta Delegación y que se procurará tener debidamente informada a la superioridad.

En principio esta Delegación entiende no procede la adopción de medida alguna salvo la preventiva ya citada.

ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE PRENSA

será, desde luego, el último informe: el 6 de diciembre de 1974, la Delegación del MIT en Lérida advierte a la Subdirección General de Prensa de la existencia de los títulos puestos en circulación por Premsa Catalana por valor de 60 millones de pesetas; además de identificar a algunos de sus suscriptores.

Premsa Catalana, en efecto, había emitido en 1973 participaciones de entre 1.000 y 100.000 pesetas en la consabida campaña de captación de suscriptores. A finales de 1975, se habían suscrito 43.500.000 pesetas (la mayor parte, en pequeñas participaciones individuales), que se completaban con un fondo artístico de obras donadas a modo de reserva patrimonial. El 9 de junio de 1975, con la suscripción de títulos ya avanzada y el apoyo político de Carlos Sentís Anfruns⁴³³, la empresa presentaba en ventanilla la solicitud oficial de inscripción. El MIT, sin embargo, no dejará de tomar nuevas cautelas antes de conceder el plázet. El 5 de septiembre de 1975, el director general del Régimen Jurídico de la Prensa solicita al delegado del MIT en Barcelona -"de acuerdo con las normas emanadas de esta Dirección General", apunta- nuevos informes personales de los accionistas y directivos de la sociedad editora.

⁴³³ Carlos Sentís presidía en 1975 la Asociación de la Prensa de Barcelona. El 17 de junio, ocho días después de la presentación de la solicitud, Sentís enviaría una carta al ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, en la que le solicitaba que acelerara los trámites de la autorización. Carta en exp. 824, en REP, *ibídem*. V. Anexo VIII.

Asimismo [acaba la nota número 824 del subdirector] deberá V.I., enviar su parecer acerca de la procedencia de acceder o no a la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas de la mencionada Sociedad, como editora de la publicación de referencia⁴³⁴.

⁴³⁴ Escrito oficial del director General del Régimen Jurídico de la Prensa al delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo en Barcelona, el 5 de septiembre de 1975. En exp. 824, en REP, *ibídem*. V. Anexo VIII.

RESERVADO N.º 2214


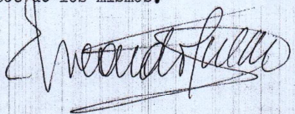
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

De: JEFE DEL GABINETE DE ENLACE

Fecha: 26-9-75 A: ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL REGIMEN JURIDICO DE PRENSA.

ASUNTO:

En contestación a la nota nº 824 de fecha 5 de los corrientes, solicitando datos del Director de la revista "AVUI" y de sus accionistas, se acompañan los correspondientes a JAIME VILALTA GONZALEZ, JOSE Mª PUIG SALELLAS, RAMON FUSTER RABES, JOSE LUIS VIROS GALTIER, JORGE MALUQUER BONET y JOSE ESPAR TICO, significando que el resto carece de los mismos.

Fde: Ricardo Herrera Esteban

IMPORTANTE: Reférase a un solo asunto.

JOSE ESPAR TICO

Nacido el 22-12-27 en Barcelona, h/ Mariano y Mercedes, casado, peletero y con d/ en dicha capital, c/ Milanésado, 20.

Pretende ser Consejero delegado de la entidad en proyecto "Prensa Catalana S.A.". Se trata de persona de antecedentes separatistas y considerado también como demócrata cristiano.

El citado que también debe ser abogado, aparece el 29-3-68, como directivo de la productora discográfica del cantante - JUAN MANUEL SERRAT.

El 31-5-71 fué puesto a disposición judicial como supuesto asistente a la reunión en la que trataban de organizar - la Asamblea de Cataluña.

El citado difundió en mayo de 1.973 una circular en la que se anunciaba el proyecto de financiar un diario en catalán para cuyos fines trataban de conseguir un capital de cuarenta millones de pesetas, por medio de una Emisión de Cuentas, en dos series, blanca y azul, teniendo previsto hacer una tirada diaria de sesenta mil ejemplares. Estos datos son de mayo de 1.973.

Madrid, 24 de Septiembre. 1.975

La contestación, firmada por el jefe del Gabinete de Enlace, Ricardo Herrera Esteban, llega el 26 de septiembre acompañada de los informes "político sociales" reclamados. De los diez accionistas y directivos, seis tienen antecedentes policiales, y de ellos, cuatro son tildados de "catalanistas" o "separatistas"⁴³⁵. Las pesquisas se completan el 11 de

⁴³⁵ Las personas con antecedentes eran Jaime Vilalta González, calificado como "persona de ideas socialistas y catalanistas"; José María Puig Salellas, sobre el que no se indica filiación política, pero en cuya notaría se reunieron los promotores del *Avui* para poner en marcha el proyecto, según se informa; Ramón Fuster Rabes, identificado como firmante de manifiesto contra los malos tratos policiales y "uno de los componentes del órgano rector del Omnium Cultural"; José Luis Viros Galtier, "catalano [sic], separatista y socialista"; Jorge Maluquer Bonet, calificado como "persona de ideas catalanistas [...] totalmente enemigo del Régimen y en contacto con personas desafectas tanto de Barcelona como del extranjero"; y José Espar Tico, "persona de antecedentes separatistas y considerado también como demócrata cristiano". Fichas personales en exp. 824, REP, *ibídem*. V. Anexo VIII.

Sobre el resto de accionistas y directivos no poseen, según se asegura, antecedentes. Son Enrique Cirici Delgado, Juan Amorós Pla, Alberto Conejos Badía y Miguel Esquirol Clavero. Cada uno de ellos poseía, del mismo modo que los otros seis fichados, el 10% de Prensa Catalana, S.A. y un puesto en el Consejo de Administración.

Incluimos aquí, como muestra, el informe de Josep Espar Tico. El resto de informes pueden consultarse en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa Catalana, Documentos e Informes).

noviembre con un nuevo informe reservado del delegado provincial en el que se refieren los antecedentes políticos que, sobre los accionistas, obran en poder de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona (cuyo escrito también adjunta). “A la vista de los antecedentes desfavorables [concluye el delegado del MIT en Barcelona] esta Delegación estima que no debe accederse a lo solicitado”.

COPIA DE RESERVA O TRAMITE (1)

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

De: **SECCION DE PRENSA**

Ciudad, fecha y ref.: **Barcelona 11 de noviembre de 1975**

RESERVADO

TIPO. SR.:

Como continuación a nuestro escrito de fecha 26 de Octubre último, adjunto tengo el honor de remitir a V.I. escrito que nos manda la Jefatura Superior de Policía, de unos informes político-sociales de solicitantes de la publicación "AVUI".

A la vista de los antecedentes desfavorables esta Delegación estima que no debe accederse a lo solicitado.

No obstante V.I. con superior criterio resolverá.

Dios guarde a V.I. muchos años.

EL DELEGADO PROVINCIAL,

L

A: **TIPO. SR.: DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO JURIDICO DE LA PRENSA - MADRID -**

(1) Válido para respuestas generales de contestación, error de redacción, error de fechas o cualquier otro.

JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA

Brigda.Reg.Inv.Social

Núm. **6753**

REGISTRO

En contestación a lo interesado en su escrito nº 20715 de fecha 26 de septiembre pasado, me honro en participar a V.I. que, Ramón FUSTER RABES, nacido el 17-3-16 en Bell-Lloch (Lerida), hijo de Ramón y Josefa, casado, Licenciado en Filosofía y Letras, con domicilio en esta Ciudad, calle Collesserola nº 29, 1ª, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Políticamente está considerado como de ideas catalanistas y desafecto al Régimen, conociéndosele su ideología en esta Brigada a través de diversas notas que indican su asistencia a Asambleas y reuniones de este matiz, destacando entre todas ellas una de 3-4-71, en la que se indica que celebraba reuniones sin autorización gubernativa en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, reuniones que tenían un marcado matiz político.

José Mª CADENA CATALAN, nacido el 6-9-35 en Barcelona, hijo de José Mª y María Luisa, periodista, casado, con domicilio en esta Capital, calle Consejo de Giento nº 174 bis, 1ª, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Políticamente, igual que el anterior, está considerado como de ideas catalanistas en contraposición con el proceder del actual Régimen.

Está considerado como periodista muy competente, aunque sus compañeros le achacan un carácter malhumorado.

José Mª LUIS SALLAS, nacido el 12-2-24 en Gerona, hijo de Ignacio y Concepción, casado, notario, con domicilio en esta Capital, calle Paseo de Bonanova nº 63, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada, políticamente es considerado igual que los anteriores.

José ESPAR TICO, nacido el 20-12-27 en Barcelona, hijo de Mariano y Mercedes, casado, abogado, con domicilio en esta Capital, calle Milanesado nº 20, 3ª, 2ª, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Políticamente está considerado igual que los anteriores.

En los Archivos de esta Jefatura Superior, consta entre otras notas, que el 3-5-71, en diligencias instruidas en esta Brigada, pasó a disposición Judicial como supuesto asistente a una reunión ilegal en la que trataban de organizar una titiada "Asamblea General de Cataluña".

Dios guarde a V.I. muchos años.

Barcelona, 6 de noviembre de 1.975

EL Jefe Superior,

O. SEÑOR, DELEGADO PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO.

CIUDAD

El Ministerio, sin embargo, desoirá al delegado provincial y admitirá la inscripción en el REP de Prensa Catalana, S.A.-Empresa Periodística el 23 de diciembre de 1975, tras las gestiones de Jaume Vilalta y Ramón Fuster en Madrid. Tres circunstancias concurren en el cambio de parecer de la Administración. Primero y como es obvio, la muerte del dictador (pues en vida de Franco, considera Jordi Maluquer, nunca les habría sido concedido el pláacet). Segundo y más importante, el apoyo político de Carlos Sentís Anfruns, cuyo nombramiento al frente de la Dirección General de Coordinación Informativa del MIT era entonces inminente. Sentís, con quien la sociedad había contactado a través del periodista Josep María Cadena, se convertirá, según Maluquer, en un apoyo político decisivo en la obtención de la autorización administrativa. Junto a él, resultaría también crucial, al decir de Josep Espar, el notario Josep María Puig

Salellas, con gran renombre y de “catalanidad abierta e indiscutible” (Espar *dixit*); sin olvidar a una buena parte de la alta y mediana burguesía industrial catalana, también movilizada a favor del proyecto. Con todo, si el apoyo político y empresarial fue decisivo, la clave de la aprobación del diario *Avui* se encontraría, en opinión de Josep Espar Ticó, en el masivo respaldo con que fue presentado el proyecto ante la Administración: para el promotor, fueron los más de treinta mil suscriptores del *Avui* los que lograron hacer del proyecto un asunto insoslayable para el MIT y los que propiciaron, en definitiva, la publicación, el día de San Jordi de 1976, del primer diario en catalán autorizado desde la Guerra Civil.

Del mismo modo que el “catalanismo” del *Avui* motivó la demora de su autorización, la amalgama de liberalismo, monarquismo y reformismo que el Régimen advirtió tras el proyecto de *El País* postergó su admisión en el sistema de prensa hasta 1975. El 2 de junio de 1972, Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) solicitaba su inscripción en el REP para editar el diario *El País*⁴³⁶. No la obtendría hasta el 24 de septiembre de 1975, tres días antes de la ejecución de las últimas cinco sentencias de muerte firmadas por el Régimen, ya agonizante⁴³⁷. Tras una serie de encuentros mantenidos durante el año 1971, el 18 de enero de 1972 José Ortega Spottorno, Carlos Mendo Baos y Darío Valcárcel Lezcano constituían PRISA. Asumía la presidencia de la sociedad Ortega Spottorno, hijo de José Ortega y Gasset y prestigioso editor (en 1963 había refundado la *Revista de Occidente*, en un intento de proseguir la labor cultural emprendida por su padre; y, en 1965 había puesto en marcha Alianza Editorial⁴³⁸). De su mano saldrá, además, la declaración de principios llamada a informar el proyecto de *El País* y que años después se trasladaría al Estatuto de la Redacción:

Entre estos principios [recogen Imbert y Vidal Beneyto] se pedía que *El País* fuera un periódico de ámbito y difusión nacional, con información veraz, independencia política, liberalismo cultural y afán descentralizador. La defensa de la democracia pluralista y el europeísmo sincero serían también dos opciones irrenunciables (Imbert & Vidal Beneyto, 1986: 260).

Carlos Mendo, nombrado consejero delegado y director gerente de la nueva empresa, había sido hasta 1969 director gerente de la Agencia EFE y ocupaba en 1971 la jefatura de información y Relaciones Exteriores de la Standard Electric. Amigo y colaborador de Manuel Fraga, en 1973 acompañaría al ex ministro de Información y Turismo a la

⁴³⁶ Exp. 3917, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 cajas 381 y 382.

⁴³⁷ El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados dos miembros de la banda terrorista ETA (Txiki Paredes y Ángel Otaegui) y tres del FRAP (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) en cumplimiento de las sentencias de muerte dictadas poco antes. Todos fueron fusilados (De Riquer, 2010: 729).

⁴³⁸ Biografía en EFEDATA, Base de Datos de la Agencia EFE.

Embajada española en Londres, en calidad de consejero de Información Diplomática⁴³⁹. Según Darío Valcárcel, Mendo ejerció de “enlace” entre los promotores y el “lado menos condenable de aquella dictadura mediocre y deplorable”⁴⁴⁰. El propio Valcárcel, por su parte, ocupaba la secretaría del Consejo de Administración. Valcárcel era un “monárquico juanista, íntimo amigo de José María de Areilza” (Seoane & Sueiro, 2004: 18), encargado en 1971 de la secretaría de redacción de *Abc*⁴⁴¹. Tres corrientes políticas confluían, pues, en el proyecto original de PRISA: el liberalismo orteguiano e intelectual de Ortega Spottorno, el monarquismo de Valcárcel y el reformismo fraguiano de Mendo⁴⁴²: tres tendencias, en fin, conservadoras, aperturistas e inadmisibles para el inmovilismo tardofranquista. Darío Valcárcel asegura, de hecho, que fueron Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro quienes paralizaron, mientras fueron presidentes del Gobierno, la salida de *El País*. El primero llegó a afirmar, según el periodista y promotor, que “jamás estos enemigos del Régimen [*sic*] tendrán la oportunidad de sacar ese periódico”. Arias, por su parte, tampoco estuvo nunca dispuesto a conceder el plácet, aunque nunca expresara su negativa en los términos de Carrero: quiso, al decir de Valcárcel, “engañar” a los promotores, haciéndoles ver la posibilidad de un pacto que nunca tuvo intención de suscribir⁴⁴³.

Fue, pues, sin duda, el temor del Gobierno a esta amalgama de fuerzas políticas lo que motivó la dilación administrativa del expediente de inscripción. Inmediatamente después de la recepción de la solicitud, la Dirección General de Prensa pedía informes “político-sociales” —preceptivos en estos casos, según hemos visto— sobre los accionistas de la empresa. A finales de junio le fueron enviadas 21 fichas personales con fechas de 27 y 28 de ese mismo mes: la mayor parte de los investigados son identificados en ellas como monárquicos partidarios de Don Juan de Borbón y/u hostiles al Régimen⁴⁴⁴. Una vez identificadas las corrientes políticas que animaban el proyecto, la

⁴³⁹ *Ibidem*.

⁴⁴⁰ Testimonio de Darío Valcárcel en entrevistas personales mantenidas en Madrid el 21 de septiembre y 4 de octubre de 2012.

⁴⁴¹ *Ibidem*. Completaban, por lo demás, el primer CA, los vocales Juan José de Carlos y Ramón Jordán de Urrés, amigos de Ortega Spottorno y Valcárcel, respectivamente.

⁴⁴² Para María Cruz Seoane y Susana Sueiro, “En el proyecto de *El País* vio Fraga un posible órgano de expresión de su reforma. Se trataba de conciliar el cambio político con el máximo de estabilidad social, evitando aventuras, a través de una acción evolutiva, sin violencia ni ruptura. La idea era sacar un periódico que sirviera de plataforma reformista del régimen en esos años finales del franquismo” (Seoane & Sueiro, *op. cit.*: 19).

⁴⁴³ Testimonio de Darío Valcárcel en entrevistas personales mantenidas en Madrid los días 21 de septiembre y 4 de octubre de 2012.

⁴⁴⁴ Los informes personales, recogidos en Anexo IX, —de los que reproducimos sólo un breve extracto— se refieren a Miguel Ortega Spottorno (“vinculado a la causa monárquica de D. Juan de Borbón”); Fernando Chueca Gotilla (identificado como antiguo masón y “considerado elemento contrario al Régimen, habiendo escrito a veces contra el Caudillo”); Manuel Cantarero del Castillo (calificado como falangista disconforme con el Régimen); Gerardo Palacios Blanco;

DGP ponía en marcha sus mecanismos dilatorios, que pasaron, en este caso, por la no publicación en el BOE de la solicitud, por el requerimiento reiterado de nuevos datos a la empresa y por la demanda insistente de informes sobre la viabilidad económica de *El País* al Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad⁴⁴⁵.

El 28 de julio de 1972, la DGP exigía a PRISA un cambio del planteamiento financiero, así como el cumplimiento de nuevos requisitos para tramitar la inscripción⁴⁴⁶. Un año después, la Dirección General solicitaba al Sindicato Nacional de Prensa su parecer sobre la solidez económica de la iniciativa. Aunque el Sindicato respondería de forma favorable a PRISA el 12 de enero de 1974⁴⁴⁷, la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa volvería a reclamar un nuevo informe al Sindicato los días 12 de junio y 3 de julio de 1974, al considerar el primer escrito impreciso y vago⁴⁴⁸. Pocos días antes, el 10 de junio de 1974, la DGRJP había solicitado a PRISA la actualización de

Manuel Halcón y Villalón Daoíz (“Asistente a una reunión anti-Opus Dei en el domicilio del conde de Motrico en el mes de noviembre de 1970[...]”); José Luis García Gallego (sin antecedentes); Manuel Aznar Zubigaray (“asistió a la misma reunión anti-Opus Dei que Halcón”); Joaquín Muñoz Peirats (“considerado como de buena conducta en general y simpatizante con el Régimen”); Darío Valcárcel Lezcano (“Se trata de persona que sustenta ideas monárquico-juanistas y suele estar en este sentido en relación con el juanista D. Luis María Ansón Oliart”); Julián Marías Aguilera (“Considerado como de marcada tendencia izquierdista [...] Conceptuado como desafecto al Régimen en una línea liberal-izquierdista”); Vicente Iranzo Rubio (“conceptuado como persona desafecta al Régimen y muy hábil y capacitado para influir dentro [sic] de los estudiantes”); Paulino Garagorri Herranz (identificado como uno de los firmantes, junto a Julián Marías, de un escrito que se dirigirá a Presidencia del gobierno solicitando un sindicalismo representativo y autónomo); Carlos Mendo Baos (identificado como hombre nombrado por Fraga en la Agencia EFE y asistente a la reunión anti-Opus Dei; “en ocasiones se ha definido como falangista y contrario a los miembros de la familia real española”); Félix Cifuentes González; Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado (sin actividades político-sociales conocidas); Antonio Solera Concha (“de tendencias monárquico-juanistas” y sin antecedentes desfavorables); José Torán Peláez (identificado como ex combatiente del Movimiento); José Ortega Spottorno (“[...] no se le considera tampoco como persona identificada con los principios fundamentales del movimiento Nacional [...] parece conceptuarse como dentro de la línea de los intelectuales izquierdistas”); Pedro Turullons Aguirre; Eduardo Gil de Santibáñez y Baselga (“Elemento tradicionalista destacado desde hace muchos años [...] En 1957 aparece ya como partidario de Don Juan de Borbón, tratando de conseguir la unión de los tradicionalistas con los juanistas [...]”); Pedro Laín Entralgo (antiguo intelectual falangista convertido en “uno de los miembros de los grupos intelectuales izquierdistas hostiles al Régimen”).

En total, pues, cuatro monárquicos juanistas, tres afectos al Régimen por seis hostiles; cuatro personas sin antecedentes y tres asistentes a una reunión anti-Opus Dei.

⁴⁴⁵ El relato cronológico que a continuación ofrecemos de la tramitación de la inscripción se encuentra detallado en un escrito archivado en el expediente de la empresa, el número 3917 guardado en las cajas 381 y 382 del REP.

⁴⁴⁶ PRISA en realidad se había adelantado a esta exigencia de la Administración aprobando una ampliación de capital hasta 150 millones de pesetas en junio de 1972.

⁴⁴⁷ El Sindicato Nacional de Prensa respondería en su informe que “en base a los datos que se aportan y a los obrantes en este Sindicato no parece deducirse racionalmente que la publicación vaya a ser utilizada para producir los resultados que previene el artículo 5º en relación con el 29, de la Ley de Prensa e Imprenta, ni que la empresa vaya a dejar de cumplir sus obligaciones laborales”. Informe citado en cronología de la tramitación del expediente archivada en Exp. 3917, en REP, *ibídem*.

⁴⁴⁸ El Presidente del Sindicato Nacional respondía el 27 de julio remitiendo a la DGRJP al primer informe.

todos los datos aportados hasta entonces al Registro, especialmente los relativos al patrimonio y plan financiero de la sociedad. La empresa contestaría el 28 de junio con los documentos exigidos, precedidos de una carta de José Ortega Spottorno al ministro, en la que le rogaba “la activación del procedimiento de inscripción, incomprensiblemente demorado hasta ahora”. Por supuesto, ni la aportación de datos ni las cartas dieron resultado. Tampoco facilitó las cosas la llegada al Ministerio, en enero de 1974, de Pío Cabanillas Gallas, próximo a Fraga y accionista él mismo de PRISA. Según Seoane y Sueiro,

El ministro [Cabanillas], aperturista y sin duda favorable al proyecto, como lo evidencia el hecho de que había suscrito tres acciones [...] tropezaba con más altas instancias que se oponían a que *El País* viese la luz (*op. cit.*: 47).

Seoane y Sueiro sólo pueden referirse, aunque no lo citen, al propio Franco o, más probablemente (según se desprende del testimonio de Darío Valcárcel) al presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Las gestiones, en todo caso, se intensificaron durante el año 1974, gracias sobre todo al impulso “a la desesperada” (Valcárcel, *dixit*) de Manuel Fraga, quien el 8 de noviembre le hacía llegar al ministro una carta a través de Jiménez Quílez en la que lo conminaba a autorizar *El País* (Seoane & Sueiro, *op. cit.*: 42). Dos meses después, el comité ejecutivo de PRISA era recibido por el presidente del Gobierno en su despacho. Darío Valcárcel recuerda haber salido de la reunión con la convicción, compartida por Ortega y Jesús de Polanco, de que Arias nunca les concedería la autorización, a pesar de sus promesas (algo de lo que ya había sido advertido Valcárcel poco antes por Manuel Blanco Tobío, director general de prensa durante un breve lapso de tiempo entre octubre de 1973 y enero de 1974). Con todo, el 19 de marzo la Administración daba un primer paso hacia la inscripción con la publicación en el BOE — casi tres años después de su presentación en la ventanilla del Registro— de la solicitud; una inscripción que aún habría de esperar otros seis meses, hasta septiembre de 1975, coincidiendo con los estertores del Régimen. La Administración tardofranquista había logrado paralizar una vez más, gracias a la demora de la inscripción en el REP, la aparición de un diario que se adivinaba monárquico-juanista, liberal y reformista y, por tanto, posiblemente peligroso y muy probablemente inconveniente.

5.4 La expulsión del sistema de prensa: la cancelación registral

Naturalmente, la función de tamización del sistema de prensa no se limitaba al control de su acceso o entrada, sino que abarcaba también la potestad administrativa de expulsar de él a las empresas previamente admitidas. Mediante la facultad de anular o

cancelar la inscripción registral —y en virtud de decisiones no menos discrecionales que las que determinaban las admisiones—, la Administración se aseguraba el control de la vía de salida del sistema, al tiempo que reforzaba su capacidad coactiva sobre las empresas autorizadas.

No se trataba, desde luego, de una facultad administrativa nueva⁴⁴⁹; aunque sí renovada por el nuevo marco legal impulsado por Fraga en 1966. En el artículo 29, la LPI establecía, en este sentido, las “causas denegatorias y de cancelación de inscripciones”:

1. No procederá la primera y sucesiva inscripción:

- 1º Cuando en la constitución de la empresa no se haya dado cumplimiento a normas o requisitos legales.
- 2º Cuando no se proporcionen todos los datos que hayan de ser objeto de la inscripción o éstos no sean exactos. A este fin la Administración podrá exigir o practicar las comprobaciones que estime pertinentes.

⁴⁴⁹ A finales de 1936, una Orden de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) declaraba ilícita “la producción, el comercio y la circulación de los libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria, y en general, disolvente” (art. 1). Como es obvio, la definición de una publicación como “disolvente” quedaba al arbitrio de la Administración. Esta norma no es, de todos modos, sino el antecedente —necesario para legalizar una situación que, de hecho, se estaba produciendo durante la Guerra— de lo dispuesto en la Ley de Prensa de 1938; en ella —al contrario de lo que ocurría con la autorización administrativa— sí se alude de forma explícita a la facultad estatal de cerrar publicaciones. El artículo 20 de la Ley, relativo a las sanciones a directores de periódicos y a empresas, prevé —en el apartado “d”, referido a los hechos de mayor gravedad (gravedad que, por supuesto, también es juzgada por la Administración a partir de criterios que no se aclaran)— la “incautación del periódico”. Casi inmediatamente, la Ley concreta que “La incautación, que solamente podrá decidirse ante falta grave contra el régimen y siempre que exista repetición de hechos anteriormente sancionados que demuestre reincidencia en la Empresa, será decidida por el Jefe del Gobierno en decreto motivado e inapelable” (art. 22). Ambos artículos quedarán desarrollados dos años después por otra disposición de igual rango. La Ley de Jefatura del Estado de 1 de marzo de 1940 (BOE de 2 de marzo) determina que “Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes” (art. 3). Esta norma, del mismo modo que la Ley de Prensa de 1938, no excluye, por cierto, la posibilidad de cerrar publicaciones de FET de las JONS. Ello evidencia, una vez más, el fracaso de los falangistas en el Gobierno en su intento porque no se aplicara el supuesto de la incautación a las publicaciones del Partido

El sistema de prensa quedaba así circunscrito a lo que la Administración considerara no fueran “ideas disolventes”; término lo suficientemente ambiguo como para poder ser aplicado a principios tan alejados de la masonería y el comunismo como, por poner sólo un ejemplo, los defendidos por el diario conservador y católico *El Debate*. El periódico de la Editorial Católica, fundado por Herrera Oria y poco sospechoso de comunista, fue sin embargo cerrado tras la entrada de las tropas franquistas en Madrid. La justificación aducida por Serrano Suñer para cancelar la publicación fue, una vez más, la escasez de papel, que impedía que una misma empresa —la Editorial Católica, que ya editaba en Madrid el periódico *Ya*— publicara dos diarios en la misma ciudad. En realidad, el franquismo cerraba *El Debate* por su colaboracionismo con el régimen republicano anterior y compensaba a los propagandistas concediendo el plácet a *Ya*, fundado en 1935 y menos implicado en la política republicana (Barrera, 1995a: 73).

3º Cuando no concurren los requisitos legales de capacidad en la persona titular de la empresa o en cualquiera de las que ejerzan o hayan de ejercer cargos directivos.

4º Cuando, oído el Consejo Nacional de Prensa y el Sindicato Nacional de Prensa, pueda racionalmente deducirse que la publicación será utilizada para producir los resultados que trata de evitar el artículo 5º.

2. Cualquiera de los supuestos expresados determinará la cancelación, de oficio o a instancia de parte, de la inscripción vigente.

De este modo, abría la Administración una “puerta trasera” por la que expulsar publicaciones por motivos políticos encubiertos tras infracciones técnicas: una vía mucho más eficaz, en tanto mucho menos escandalosa, que la prevista en el artículo segundo de la misma norma. No deja de resultar llamativo, por ello, que la Comisión de Información y Turismo de las Cortes no advirtiera o no quisiera reparar en la argucia del legislador, y que aprobara el texto sin demasiadas discusiones. El artículo 29 inspiró apenas cinco enmiendas escritas, de las que sólo la presentada por Emilio Romero, director de *Pueblo*, mereció cierto debate el 20 de enero de 1966⁴⁵⁰. Pasó, pues, inadvertida la aberración jurídica que suponía la adición —fruto precisamente de otra de las enmiendas presentadas— del párrafo segundo, que venía a combinar y confundir las causas de denegación con las causas de cancelación.

El proyecto de ley presentado a Cortes consideraba los cuatro supuestos del artículo 29 como causas de denegación de la inscripción registral y no de cancelación. La confusión de ambas se produjo con la inclusión del párrafo segundo durante la tramitación del texto en Cortes: tras la adición, supuestos como el incumplimiento de la legalidad por parte de las empresas periodísticas en su constitución pasaba a suponer también causa de cancelación, lo que implicaba que la Administración debía de haber admitido previamente en el Registro a una empresa ilegal. Lo mismo ocurría con los otros tres supuestos: de acuerdo con el segundo, la Administración podía cancelar una empresa inscrita aun a pesar de no haber aportado ésta todos los datos necesarios o de haberlos aportado mal. Según el tercero, el MIT estaba facultado a cancelar la inscripción de una empresa admitida, a pesar de contar con titulares y directivos que incumplían los requisitos legales. Por fin, la cuarta causa permitía anular la inscripción de una empresa para cuya inscripción no había sido obstáculo la “deducción racional”

⁴⁵⁰ Romero reclamaba en su enmienda (num. 27) que se sustituyera al Consejo Nacional de Prensa por los “órganos representativos de la prensa” (esto es, el Sindicato Nacional de Prensa, de la Organización Sindical, a la que pertenecía el diario que dirigía, *Pueblo*), en tanto órganos consultivos en los trámites de denegación o cancelación de las inscripciones. Las otras cuatro enmiendas escritas fueron presentadas por Luis Sánchez Agesta (num. 34); Mariano Rioja y Fernández de Mesa (num. 98); Eduardo Villegas Girón (num. 107); y Rafael Díaz Llanos y Lecuona (num. 117). Enmiendas en ACD, leg. 2312, num. 4.

de la Administración de que sus publicaciones iban a utilizarse para deformar la opinión pública e impedir la libre información. Lo cierto es que todas las causas contempladas en el artículo 29 afectaban a la primera inscripción y no podían, por tanto, dar lugar a cancelación, en la medida en que, de incurrir la empresa en alguna de ellas, nunca podía haberseles concedido la inscripción original (v. Menéndez, 1984: 585 y pássim; 1995: 1528-1533; cf. Clavero, 1967: 276; y Salas, 1975: 56 y ss.). Por lo demás y al margen de esta aberración jurídica, no dejaba de resultar grave la consideración del último supuesto como causa de cancelación, toda vez que permitía a la Administración expulsar a una empresa del sistema en base a la mera presunción (no irracional, al menos) de que su publicación iba a deformar la opinión pública o impedir la libre información:

Una medida tan grave como ésta [opina Salas] sólo puede basarse en *hechos*, y en hechos, además, *comprobados*, no simplemente indicios de su existencia, y mucho menos aún, presunciones de que van a producirse determinadas acciones en cierto sentido (Salas, 1975: 59).

El artículo 29 de la LPI otorgaba, en definitiva, un extraordinario margen de discrecionalidad a la Administración, que quedaba facultada para expulsar del sistema de prensa a publicaciones mediante la anulación del Registro de sus empresas editoras. El MIT, desde luego, no desaprovechará el recurso ofrecido por el legislador: entre 1966 y 1975, el Ministerio no dejó de recurrir al artículo 29 para justificar el cierre de empresas periodísticas editoras de publicaciones no diarias como *Aun*⁴⁵¹, *Maresme*, *Jóvenes*, *Familia Nueva*, *Montejurra*⁴⁵², *Márgenes*⁴⁵³ y *Gorg*⁴⁵⁴; sin olvidar la revista *Presencia*⁴⁵⁵ y

⁴⁵¹ Clausura confirmada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 6 de junio de 1968 (Repertorio Cronológico de Jurisprudencia [r.c.j. de aquí en adelante], Aranzadi, 3335/68). El Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la revista por su clausura. *Aun* había dejado de publicarse durante tres meses para reaparecer después impresa en otros talleres, con más páginas y distinta periodicidad. Por ello, la DGP había decretado la cancelación de la autorización, confirmada por el MIT al desestimar el recurso de alzada presentado por la revista.

⁴⁵² El 13 de mayo de 1971, el MIT, tras decretar la caducidad de la autorización administrativa a *Montejurra*, denegaba la solicitud de una nueva inscripción en el REP. La denegación sería confirmada el 17 de septiembre de 1971 por el Consejo de Ministros y el 1 de marzo de 1973 por sentencia del Tribunal Supremo (r.c.j., Aranzadi, 988/73).

⁴⁵³ Clausura ratificada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 14 de marzo de 1975 (r.c.j., Aranzadi, 1264/75). La revista quincenal *Márgenes* había sido clausurada al cancelarse la inscripción de su empresa editora, la sociedad individual “Alberto Echevarría Santamaría” por el MIT el 29 de septiembre de 1973 (la resolución del MIT había sido confirmada por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 1974). El motivo habían sido irregularidades en el contrato firmado con la directora de la publicación quincenal.

⁴⁵⁴ Este último caso resulta muy significativo de la verdadera naturaleza del REP: la revista *Gorg* fue clausurada por no aportar, en términos del Tribunal Supremo, la “base ideológica y política que había de orientar la publicación”; el MIT decretó su cierre al constatar que se trataba de una revista de información general de tendencia regionalista valenciana y no de una revista bibliográfica, como alegaba la propia publicación. La clausura fue confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 15 de marzo de 1975 (r.c.j. Aranzadi, 1297/75) al dictaminar que se había incurrido en la causa de denegación y cancelación del art. 29.1 § 2. Los argumentos de la

el semanario *España Económica*⁴⁵⁶, ambos clausurados en septiembre de 1971. Todas ellas quedan fuera de nuestro objeto de estudio, al tratarse de publicaciones no diarias. No así las empresas Julio García Peri (empresa periodística individual) y Madrid, Diario de la Noche, S.A., editoras de los diarios de información general *Nivel* y *Madrid*, respectivamente, y canceladas por Alfredo Sánchez Bella durante su etapa en el MIT.

Ambas empresas fueron expulsadas del sistema de prensa diaria con el pretexto del incumplimiento de alguno de los supuestos del artículo 29, cuando en realidad se trató de decisiones discrecionales movidas por razones políticas. Julio García Peri fue víctima de una carencia de apoyos políticos que lo dejó inerme ante Alfredo Sánchez Bella, recién llegado al MIT y dispuesto a congraciarse con el sector tecnócrata (que, recién afianzado en el Gobierno, veía desaparecer una probable voz crítica con su gestión) y con la prensa madrileña (que lograba deshacerse de un nuevo competidor). Algo más complejo y mucho más controvertido fue el caso de *Madrid*, perseguido primero por Manuel Fraga y clausurado después por Sánchez Bella dada la línea editorial rupturista auspiciada por Rafael Calvo Serer. En ambos casos, la Administración se valió del REP para deshacerse de dos publicaciones políticamente inconvenientes; para, en palabras de la Dirección General de Prensa, preservar la “higiene y salubridad políticas” (v. *infra*) manteniendo el sistema de prensa libre de aquellos “microbios” a los que se había referido Sánchez Bella.

Julio García Peri, médico y editor de publicaciones dirigidas al sector sanitario⁴⁵⁷, obtuvo sin problema alguno la autorización para publicar su primer diario de

sentencia resultan muy reveladores: el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia considerando la identificación de la línea ideológica como un “importante” dato registral, “cuya omisión o inexactitud es causa de denegación o cancelación [...] [pues] resulta obvio señalar la importancia que tiene conocer el auténtico carácter de las publicaciones” (2º considerando).

⁴⁵⁵ El cierre del semanario *Presencia* fue anulado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de diciembre de 1973 (r.c.j., Aranzadi, 4559/73) al admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa “Presencia, S.A.”. La revista había sido cancelada por el MIT el 13 de julio de 1971 tras una inspección de la revista que había detectado irregularidades en la composición de la redacción y en las retribuciones del personal.

⁴⁵⁶ Clausura confirmada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de junio de 1972 (r.c.j., Aranzadi 2618/72). La revista había sido cancelada por la DGP tras una inspección en la que se habían descubierto irregularidades previstas en el art. 29.1 § 2. Tras la desestimación del recurso de alzada por parte del MIT, el Tribunal Supremo confirmó la cancelación desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

⁴⁵⁷ Así definía Mauro Muñiz, subdirector de *Nivel* el día de su clausura, a Julio García Peri: “Era un personaje pulcro, concentrado, con aire autoritario, que irradiaba energía y audacia empresarial. Doctor en medicina, las labores editoriales hacia ese mundo profesional le habían proporcionado los recursos para montar una empresa editorial potente, eficaz y rentable. Se caracterizaba esta empresa por dos notas: el buen nivel salarial y el duro control de la producción, basada en el mejor estilo capitalista americano” (Muñiz, 2005: 17).

Martín Ferrand, por su parte, define a García Peri, con quien lo unía una estrecha amistad, como un médico culto, generoso, seductor y de un gran talento. Hijo de una estadounidense, García Peri había vivido en Suiza (donde había trabajado como traductor de la Organización Mundial de la Salud). De convicciones demócratas, a su vuelta a España comenzaría a trabajar en la revista *Actas Ginecológicas*, de su padre. Allí descubriría una prometedora fuente de ingresos que lo

información general en el verano de 1969. El proyecto había arrancado en enero de aquel año, cuando, según cuenta el periodista Manuel Martín Ferrand⁴⁵⁸, García Peri logró convencer al ministro Fraga de la necesidad de una prensa más abierta en lo político y avanzada en lo tecnológico. El 30 de junio de ese año, se presentaba en la ventanilla del Ministerio la preceptiva solicitud de inscripción, que resultaría aprobada antes de dos meses, el 18 de agosto⁴⁵⁹. Aunque la aparición del diario estaba inicialmente prevista para el 15 de enero de 1970, *Nivel* saldría a las calles de Madrid por primera y última vez antes de que acabara 1969, a las ocho de la mañana del 31 de diciembre⁴⁶⁰. Sólo estaría disponible un par de horas: a las diez de la mañana, la Dirección General de Prensa ordenaba la retirada de todos los ejemplares y enviaba la siguiente nota a la redacción:

Por la Dirección General de Prensa, y en obligada aplicación de lo establecido en el artículo 29 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, se ha procedido, con fecha 30 de diciembre [de 1969], a la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas de la publicación titulada *Nivel*, perteneciente a la Empresa Periodística Individual Julio García Peri. Dicha cancelación se ha producido como consecuencia de ser incompletos e inexactos los datos que han de ser objeto de la inscripción con arreglo al precepto legal antes señalado. En tal sentido, entre otras, se da la circunstancia de la total disparidad entre la plantilla de redacción declarada por la Empresa en su solicitud de inscripción, incluida la personalidad del director y de su sustituto, con la efectiva, hasta el punto de que absolutamente ninguno de sus componentes, ni siquiera en los puestos directivos, figuran en la declarada en su momento (cit. en Muñiz, 2005: 101).

Esa misma noche, Manuel Martín Ferrand acudiría al domicilio del director general de Prensa, quien, vestido de esmoquin para la cena de nochevieja, le espetaría: “lo que nunca os perdonaré es el día que me habéis hecho pasar hoy”⁴⁶¹. Aquel aciago día,

llevaría a fundar numerosas publicaciones dirigidas a los sectores médico y farmacéutico (Testimonio de Martín Ferrand en entrevista personal).

A finales de los sesenta, algunas de las publicaciones médicas inscritas por el editor eran *Médico Moderno*, *Acta Ginecológica*, *Tendencias del Clima*, *Actos Médicos*, *Prensa Médica*, *Intercon*, *Noticias Médicas*, *Realidades*, *Historias para no dormir*, *Medicina Rural*, *Historia de la Medicina*, *Medicina de Madrid*, *Noticias Farmacéuticas*, *Índice Trimestral de Especialidades Veterinarias*, *Visita Médica*, *Mundo Hospitalario* y *Noticias Veterinarias*.

⁴⁵⁸ Testimonio de Manuel Martín Ferrand, director de *Nivel* hasta finales de diciembre de 1969, en entrevista personal mantenida el día 14 de septiembre de 2012.

⁴⁵⁹ Exp. 273, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno sig. (09)9.1.1 cajas 30 y 31.

⁴⁶⁰ La salida se adelantó al 31 de diciembre para tratar de evitar, precisamente, el cierre administrativo del periódico. García Peri había recibido la confirmación de las intenciones del MIT la madrugada del día 30 a través del Marqués de Villaverde (Muñiz, 2005: 95). El adelanto tenía como objetivo, al decir de Manuel Martín Ferrand, hacer más difícil o cuanto menos más escandaloso el cierre por parte del Ministerio.

⁴⁶¹ Testimonio de Manuel Martín Ferrand, director de *Nivel* hasta finales de diciembre, en entrevista personal mantenida el 14 de septiembre de 2012.

Fernández Sordo había cancelado por vez primera una inscripción registral, amparándose en el artículo 29 de la LPI y con el argumento de que la plantilla de redacción de la publicación no se correspondía con la presentada en los documentos de inscripción. *Nivel* se convertía así en el primer diario de información general expulsado del sistema de prensa durante el tardofranquismo.

Por supuesto, los cambios en la redacción del periódico no eran sino un mero pretexto que, aún de ser cierto, difícilmente podían justificar la aplicación del castigo administrativo más severo contemplado por la legislación española para las empresas periodísticas. Las verdaderas causas de la cancelación registral tenían, como es obvio, poco que ver con los cambios en la redacción y remitían, en realidad, a una decisión discrecional de Alfredo Sánchez Bella —llegado al MIT apenas un par de meses antes— basada en dos motivos políticos: las reticencias a alterar el mapa de la prensa española con una nueva publicación de línea editorial cuanto menos incierta y las presiones ejercidas por parte de la prensa de Madrid para que no se autorizara a un nuevo competidor.

Cuenta en su tesis doctoral el subdirector de *Nivel*, Mauro Muñoz Rodríguez⁴⁶² que el mismo día de la cancelación, el yerno de Franco y X Marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez Bordiú, había hecho saber a Julio García Peri que su diario

No sólo era víctima de una decisión política del Ministro Sánchez Bella, sino de las presiones de otras grandes empresas de la información, que se habían asustado de las proporciones y del talante del proyecto y exigían un pago a los servicios prestados en la cancelación a un competidor tan peligroso (Muñoz, *ibídem*).

Tres de las circunstancias que envolvieron el cierre de *Nivel* apuntan en la dirección señalada por la confidencia del Marqués de Villaverde. Para empezar, resulta llamativo que ningún diario madrileño prestara su apoyo al periódico tras la clausura; y que las pocas publicaciones que dieron cobertura al hecho, lo hicieran sin entrar en el trasfondo político de la operación, en lo que Muñoz considera un pacto de silencio negociado entre la prensa y la DGP (Muñoz, *op. cit.*: 116). Por otra parte, cuenta el director de *Nivel*, Martín Ferrand —a quien, por otra parte, no le consta que se produjeran otras presiones de la prensa madrileña al Ministerio— que el diario padeció un “acto de hostilidad” por parte de la patronal de editores de prensa, presidida por Mariano Rioja. Éste impidió la entrada de *Nivel* en el Grupo Nacional de Diarios (adscrito al Sindicato Nacional de Prensa) con el pretexto de que se imprimía en *offset* y no en huecograbado ni tipografía,

⁴⁶² El diario *Nivel* iba ser dirigido inicialmente por el periodista Manuel Martín Ferrand. Sin embargo, éste dimitió el 27 de diciembre de 1969, por lo que García Peri nombró director en funciones al hasta entonces subdirector, Mauro Muñoz Rodríguez.

como el resto de publicaciones⁴⁶³. Por lo demás, de estar en lo cierto Martínez Bordiú, Alfredo Sánchez Bella habría iniciado su labor al frente del Ministerio congraciándose con la prensa madrileña, que veía desaparecer, en apenas un día, un potencial competidor.

El proyecto de *Nivel*, de hecho, sólo empezó a despertar las suspicacias de la Administración en el invierno de 1969, luego del cambio de Gobierno y bastantes meses después de que el MIT de Fraga le concediera el plácet administrativo. Según Martín Ferrand, el nuevo ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, se escandalizó al conocer la iniciativa de García Peri, por lo que poco después de su llegada encargó a los Servicios Jurídicos del MIT que encontraran el modo de impedir la aparición del diario. La DGP inició de hecho en octubre un seguimiento de la composición de la plantilla de redacción⁴⁶⁴, si bien las pesquisas policiales no se realizaron hasta diciembre. Hacia finales de ese mes, la Dirección General de Prensa recibía un profuso informe sobre Julio García Peri solicitado por el organismo el día 16. El escrito, de once páginas y fechado el día 24 de diciembre —y al que hemos hallado unido, además, un pequeño sobre del Gabinete Central de Identificación, enviado por la Brigada Central de Información, adscrita a la Dirección General de Seguridad, con fotografías de Julio García Peri y algunos allegados y redactores implicados en el proyecto⁴⁶⁵—, daba cuenta de una exhaustiva investigación sobre el editor que había incluido el registro de su domicilio⁴⁶⁶ y de las sedes sociales de sus empresas. Tras informar de la reputación entre sus vecinos y del patrimonio de García Peri, el informe recogía el cuadro de redacción del proyectado diario, y concluía:

Si bien este es el cuadro oficial de redactores y colaboradores que figuran en la petición formulada en el Ministerio de Información y Turismo, de forma confidencial se ha tenido conocimiento, de que es intención de JULIO GARCÍA PERI, el incorporar a dicho diario, a uno o dos periodistas, de los que por el momento se desconoce su identidad, que ejercieron su actividad en Las Palmas de Gran Canaria y que en su día

⁴⁶³ Testimonio de Martín Ferrand en entrevista personal realizada el 14 de septiembre de 2012. La exclusión de la patronal hubiera privado al diario, por cierto, de las compensaciones por consumo de papel prensa que controlaba y distribuía el Sindicato Nacional de Prensa.

⁴⁶⁴ El 29 de octubre de 1969, la Sección de Periodistas de la DGP elaboraba un informe sobre el nombramiento de Ismael López Muñoz como subdirector del diario. La información del nombramiento había aparecido en *La Voz de Asturias* el día 15 de octubre, sin que la DGP recibiera notificación alguna sobre el nombramiento. (Finalmente, será Mauro Muñiz el subdirector de *Nivel* hasta poco antes de su clausura).

⁴⁶⁵ El sobre incluye fotografías de Sebastián Auger Duró, Manuel Juan Woves López, Jesús Torrejimen García, José Joaquín Iriarte Arlabán, Jesús Fraga Amado y José Julián Barriga Bravo.

⁴⁶⁶ “De la discreta información practicada en la casa en la que habita, se desprende que es persona que goza de excelente reputación entre sus vecinos”, dice el informe.

fueron sancionados por el Ministerio, por manifestar ostentosamente sus discrepancias y tendencias contrarias al Régimen⁴⁶⁷.

Este último apunte —unido a unas informaciones erróneas del Ministerio a propósito de la supuesta militancia comunista de Manuel Martín Ferrand (quien dimitiría como director de *Nivel* a finales de diciembre)⁴⁶⁸— remite a la segunda de las causas reales de la cancelación registral: la línea editorial adoptada por el nuevo diario. Según el subdirector Mauro Muñiz, García Peri había querido publicar un diario dirigido a los profesionales españoles, “desideologizado” aunque no “descomprometido” [*sic*]; una publicación, en fin, que se apoyara

[...] en las posibilidades de apertura, de competitividad y de progreso que aquella Ley [de Prensa e Imprenta], en el contexto del régimen autoritario en el que se promulgó, ofrecía a las empresas de periódicos, tanto a las existentes como a las de nueva creación (Muñiz, *op. cit.*: 9).

Además de incluir en la segunda página una crítica a la tecnocracia, el primer y único número publicaba un editorial en el que se prometía ejercer “un periodismo de corte europeo, inconformista pero conviviente, intentando superar y cambiar los condicionamientos sociopolíticos del régimen”⁴⁶⁹. La Administración, naturalmente, no dejó de vigilar y glosar el contenido de este primer número: un parte elaborado el 31 de diciembre por A. Castillo, perteneciente al Servicio de Prensa de la Delegación Provincial de Madrid, subrayaba la existencia de un artículo crítico con el sector tecnócrata del Gobierno; y advertía de la publicación de un resumen de los sucesos más destacados del año, “pero cargando las tintas en el matiz político de cada uno de ellos [...]”. El informe terminaba con estas palabras:

Por no extender la confección de este parte, resumiré diciendo que uno por uno de los sucesos del año que termina, son comentados en este diario, dándoles un claro matiz de crítica hacia las autoridades u organismos oficiales que tenían en el momento vinculación con el suceso en sí. Pero de una crítica netamente destructiva [...]⁴⁷⁰.

⁴⁶⁷ El informe completo se encuentra en Anexo X.

⁴⁶⁸ Cuenta Manuel Martín Ferrand en entrevista personal que, poco antes de la muerte de Sánchez Bella, éste le había preguntado por su militancia comunista en los tiempos de *Nivel*. Martín Ferrand nunca militó en ningún partido comunista, según él mismo asegura. El equívoco del MIT se debía, según Martín Ferrand, a lo siguiente: durante su estancia en Francia al servicio de *Le Monde*, el periodista había entrado en contacto con la revista *Jeune Afrique*, con la que había llegado a un acuerdo para usar sus servicios de información sobre el continente africano. La revista publicó una foto durante la firma del acuerdo en la que, tras Martín Ferrand, aparecía un retrato del Che Guevara.

La dimisión de Martín Ferrand de la dirección de *Nivel* fue otra estrategia pactada entre él mismo y Julio García Peri para tratar de sacar adelante el diario.

⁴⁶⁹ Editorial de *Nivel*, num. 1, 31 de diciembre de 1969.

⁴⁷⁰ Informe en exp. 273, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno sig. (09)9.1.1 cajas 30 y 31.

Que el temor de la Administración a una línea editorial crítica con la tecnocracia, recién fortalecida en el Gobierno, fue una de las causas del cierre de *Nivel*, lo sugieren también las ofertas que, desde la DGP, le hicieron llegar a García Peri en los primeros días de 1970. Tras proponerle la compra del *Diario SP*, de línea falangista y con graves dificultades económicas⁴⁷¹, el director general de prensa, Alejandro Fernández Sordo, planteó a García Peri la posibilidad de rehacer el proyecto con hombres afectos al régimen.

Hay posibilidades [apuntó en su diario Mauro Muñiz tras reunirse con Fernández Sordo el 3 de enero de 1970] de sacar un periódico. *Nivel* mismo, replanteado en otros términos periodísticos. Es decir, dentro del juego. En la línea *Nuevo Diario* sería posible (*ND* es ahora gubernamental) Insiste: Peri necesita clanes, enlaces, relaciones e intereses políticos (Muñiz, *op. cit.*: 114).

Julio García Peri exploraría de hecho esta posibilidad, presentando al MIT el día 8 de enero un replanteamiento de *Nivel*, que incorporaría un consejo asesor formado por diez prohombres del Régimen y un nuevo director escogido por el propio Ministerio⁴⁷². Las negociaciones acabarían por romperse, sin embargo, a finales de enero. Tanto Muñiz como Martín Ferrand afirman que la DGP había presionado a Julio García Peri con la amenaza de intervenir en sus revistas médicas, lo que llevó al editor a rechazar incluso la posibilidad de presentar recurso contencioso administrativo contra el cierre⁴⁷³. Según Martín Ferrand, desde la Administración se le hizo saber al editor que la presentación del recurso —que ya había sido incluso elaborado por el abogado y juez instructor Clemente Auger— sería considerada una “declaración de guerra”. Muñiz, por su parte, explica así la renuencia del promotor a presentar batalla por el diario clausurado:

Peri no quiere. Está integrado. No quiere escándalo político, ni pataleo. Le han acojonado [*sic*] con el argumento de que se cargarían el resto de sus revistas (Es el personaje de pequeño empresario sin vocabulario político ni enlaces, ni protección en la superestructura oficial. Sólo fuerte en su pequeño y tiránico mundo de empleados y publicidad) (Muñiz, *op. cit.*: 112).

⁴⁷¹ El MIT de Manuel Fraga había encargado en 1969 una inspección de la empresa editora del *Diario SP*, Servicio de Publicaciones, S.A., que había llegado a la conclusión de que “tanto la vida económica” como la tirada de la publicación presentaban una “situación bastante delicada”. Informe de 13 de junio de 1969, en Exp. 920, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 104. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Servicio de Publicaciones, S.A., Documentos e Informes).

⁴⁷² Los miembros del consejo asesor propuestos eran, según Muñiz, el economista Juan Velarde; Armesto, de la Agencia EFE; el presidente de Europa Press y miembro del Opus Dei, Armero; el falangista Pablo Hermosilla; los franquistas Carlos Sentís Anfruns y Manuel Aznar; el General Díez Alegría; y el liberal Fabián Estapé además de algún doctor en medicina. La lista de posibles directores presentada al MIT incluía a Jaime Campmany; Assia; J. Ramón Pérez de las Clotas; Blanco Tobío y A. Benito (Muñiz, *op. cit.*: 117).

⁴⁷³ García Peri sí presentó, en cualquier caso, recurso de alzada ante el Consejo de Ministros, que lo desestimó el 24 de abril de 1970.

La falta de apoyos políticos y unos intereses empresariales dependientes del MIT habían hecho, pues, de García Peri una presa fácil para Alfredo Sánchez Bella, que con la operación de cierre de *Nivel* lograba, en una mañana, tres objetivos: se libraba de la presencia de una voz probablemente incómoda para el Gobierno monocolor de mayoría tecnócrata recién formado; al tiempo que inauguraba su gestión en el MIT congraciándose con la influyente prensa madrileña y enviando un mensaje inequívoco al conjunto de la prensa nacional: a la Administración no le iba a temblar el pulso en adelante a la hora de recurrir al artículo 29 para cancelar inscripciones de empresas y publicaciones díscolas. El caso del diario *Madrid* revelaría, al año siguiente, hasta qué punto era cierta la amenaza.

El 25 de noviembre de 1971, Alfredo Sánchez Bella volvía a ordenar la expulsión del sistema de prensa de un diario de información general. Ese día, el MIT emitía una resolución por la que quedaba cancelada la inscripción registral de Madrid, Diario de la Noche, S.A., editora del vespertino *Madrid*⁴⁷⁴. Como ocurriera con *Nivel*, la Administración volvía a ocultar las razones políticas de la operación tras unas irregularidades detectadas en los datos aportados por la empresa al REP. En este caso, sin embargo, el trasfondo de la maniobra resultaba aún más evidente, de modo que el MIT difícilmente pudo disimular el escándalo, que acabaría por convertir a *Madrid* en “realidad y símbolo” de su época (Barrera, 1995b).

El conjunto de los intereses políticos que convivieron con el nuevo *Madrid*, determinaron el cierre de éste. La reforma desde la propia legalidad del régimen, que preconizó el diario, chocó frontalmente con la tendencia básicamente continuista — en cuanto al respecto de los principios fundamentales y a la voluntad de Franco— de los sectores o personalidades más representativas del Gobierno. Un régimen autoritario en su esencia como el franquismo no podía permitir que perdurase una voz que diariamente podía discrepar de puntos fundamentales de la estructura política del país, o simplemente se mostraba frío en su adhesión, pues suponía esto sufrir una continua erosión (Barrera, 1991: 25-26).

Una vez más hay que acudir, pues, para entender en todas sus dimensiones la actuación administrativa, al marco de luchas internas entre grupos de poder tardofranquistas, así como al cuadro general que presentaba a principios de los setenta un Régimen cada vez más consciente de que su tiempo se estaba agotando.

Las circunstancias que desembocaron en la cancelación registral de Madrid, Diario de la Noche, S.A. han sido ya suficientemente estudiadas (Soriano, 1991; Lafuente, 2002; y sobre todo, Barrera, 1991 y 1995b), por lo que no ofreceremos aquí sino un somero repaso de los hechos poniendo el foco, en la medida de lo posible, en la actuación

⁴⁷⁴ Exp. 1015, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 cajas 116 a 122.

administrativa. Madrid, Diario de la Noche, S.A., editora del diario *Madrid* desde 1941⁴⁷⁵, había sido adquirida en 1962 por Fomento de Actividades Culturales, S.A. FACES había sido creada el año anterior como una “sociedad cultural con fines en última instancia políticos” (Barrera, 1995b: 35); para lo que gozaba del sustento financiero del Banco Popular —cuyo vicepresidente Luis Valls Taberner⁴⁷⁶, ocupaba la presidencia y control efectivo de FACES—. Contaba además la sociedad con un accionariado no carente de contactos políticos y económicos⁴⁷⁷, ideológicamente heterogéneo (aunque sin desbordar el abanico político tolerado por el franquismo⁴⁷⁸) y en muchos casos vinculado al Opus Dei. Esta diversidad política acabó por devenir, sin embargo, en disenso. La línea editorial del *Madrid* de los sesenta se convirtió en una fuente de conflicto entre accionistas —que presentaban filiaciones tan diversas como el falangismo y el monarquismo—, lo que no dejó de afectar a la situación financiera de FACES, incapaz de cubrir, cinco años después de su constitución, más de un tercio de su capital social. Es en este contexto de fracaso político, periodístico y empresarial (Barrera, 1995b: 55) en el que hay que encuadrar la operación de compra de acciones que desataría en 1966 la guerra interna en la sociedad y que acabaría facilitando indirectamente la ulterior cancelación administrativa.

⁴⁷⁵ La empresa se había constituido con forma jurídica de Sociedad Limitada el 25 de marzo de 1941 para editar el diario *Madrid*. Hasta 1962, fue propiedad de Juan Pujol Martínez (quien poseía un 70% del capital), Pedro Pujol Martínez (25%) y Carlos Pujol Raes (5%). El 15 de enero de 1962 se convertía en Sociedad Anónima y ese mismo año era adquirida por FACES, constituida el 6 de diciembre de 1961.

⁴⁷⁶ Luis Valls Taberner (1926-2006) había sido, entre 1948 y 1952, profesor adjunto de Economía Política y Finanzas Públicas en la Facultad de Derecho de las Universidades de Madrid y Barcelona. Descendiente de una familia ligada al sector textil, su padre había sido procurador en las Cortes republicanas y profesor de don Juan de Borbón. En 1953, su tío Félix Millet Maristany le introducía en el Banco Popular, cuya vicepresidencia alcanzaría en 1957. En ella se mantendría hasta 1972, cuando pasará a presidir el banco. Valls Taberner, miembro numerario del Opus Dei, formó parte en los años sesenta del consejo privado de don Juan de Borbón.

Biografía en EFEDATA, Base de datos de las Agencia EFE.

⁴⁷⁷ Pues contaba entre sus accionistas con banqueros como Faustino García Moncó (Banco de Bilbao), Fermín Zelada (Banco Exterior), Juan Herrera (Banesto), Ignacio Herrero (Banco Hispano Americano), Javier Benjumea (Banco Urquijo); y hombres ligados al poder político como Florentino Pérez Embid (Procurador en Cortes) o Luis Valero Bermejo (Subsecretario de Hacienda y Procurador en Cortes) (Barrera, *op. cit.*: 35 y 51).

⁴⁷⁸ “El fin pretendido [explica Barrera a cuenta de la diversidad política del accionariado] era precisamente ese: la unión de hombres identificados en los principios generales —y moviéndose por tanto en un marco de legalidad y ortodoxia— aunque discrepases en criterios e ideas para la solución de los problemas. No puede extrañar, por tanto, que entre los 157 accionistas cofundadores se encuentren junto a significados hombres de la Falange como los hermanos Serrats Urquiza (Salvador y José María) o Gerardo Salvador Merino, a monárquicos de raigambre como el Conde de los Gaitanes, el industrial Pedro Moreno Segura o el doctor López Ibor [...] No había hombres, sin embargo, del sector ‘católico’ del régimen, esto es, el vinculado a la ACN de P” (Barrera, 1995b: 34). Aunque sí había —cabría apuntarle a Carlos Barrera— varios miembros del Opus Dei (y entre ellos el propio presidente Luis Valls Taberner), que tampoco dejaba de representar, más allá de disparidades ideológicas tampoco tan acusadas, un grupo de poder en la España de los sesenta de un modo similar a como lo venía representado la ACN de P desde las décadas anteriores.

Las dificultades económicas y la desidia que, ante el proyecto, comenzaban a mostrar los accionistas, determinó que el CA aprobara, el 28 de abril de 1966, la venta del diario. El fracaso de las negociaciones con el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, y con el abogado monárquico Antonio García-Trevijano, impulsaron la entrada en escena de Rafael Calvo Serer⁴⁷⁹. El catedrático de filosofía, escritor y miembro del Opus Dei era accionista minoritario de FACES desde 1965 y había sido aupado por Valls Taberner a la presidencia de Madrid, Diario de la Noche, S.A. en julio de 1966. Con el nombramiento de Calvo, el sector monárquico vinculado al Opus Dei y al Banco Popular se afianzaba en el control del diario y de la empresa, desplazando al grupo falangista, cuyo peso en la estructura accionarial se había reducido desde mayo. El día 20 de ese mes, la Sociedad Anónima de Financiación (SAF), una filial del Banco Popular, había adquirido 9.000 acciones de FACES, repartidas tres días después entre personas vinculadas al Popular. Tras la operación, SAF-Banco Popular controlaba indirectamente 4 millones y medio de los más de 7 millones de capital desembolsado. Quedaba aún por suscribir, en todo caso, casi el 70% de los 24 millones de capital social de la empresa: en total, 16.676.000 pesetas en torno a los cuales se libraría la batalla por el control de FACES.

Según relata Carlos Barrera, el 26 de diciembre de 1966, Rafael Calvo Serer, José María Arana y Luis Valls Taberner llegarían a un acuerdo para hacerse con el control total de la sociedad: Arana facilitaría un crédito a Calvo a través del Banco Europeo de Negocios (vinculado al Popular) para que éste suscribiera a su nombre 32.000 acciones (16 millones de ptas.) del capital, que se repartirían posteriormente entre pequeños accionistas de FACES (de forma preferente) y entre nuevos inversores. Al día siguiente, los falangistas responderían tratando de suscribir, catorce de ellos y a razón de un millón de pesetas por persona, la misma porción del capital. Ante las dos suscripciones, el 11 de enero de 1967 se convoca al Consejo de Administración, en el que Valls Taberner hace valer su mayoría, rechaza la suscripción falangista y declara válida la de Calvo Serer. Tras su derrota en el Consejo, los falangistas tratan de paralizar la operación por

⁴⁷⁹ Rafael Calvo Serer (1916-1988) fue Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, además de consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director de la revista *Arbor*. Miembro del Opus Dei desde 1936, Calvo había obtenido el Premio Nacional de Literatura por su obra *España sin problema*. (Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE; y en AH EFE).

Políticamente, Calvo había evolucionado, según cuenta Carlos Barrera, desde el tradicionalismo hacia posturas democráticas: “Mediados, pues, los años sesenta, la evolución ideológico-política de Rafael Calvo le había llevado de un pensamiento tradicionalista basado en Menéndez Pelayo y enfrentado a las formas demoliberales decimonónicas a la estimación de los logros positivos de las nuevas formas de democracia y libertad surgidas en la posguerra mundial [...]” (Barrera, *op. cit.*: 93).

vía judicial: el 18 de abril de 1967 siete accionistas⁴⁸⁰ presentan una denuncia contra Valls Taberner, Calvo Serer y otros, tratando de anular la suscripción aceptada. La denuncia, paradójicamente, reforzará la situación de Calvo en la sociedad: de forma cautelar⁴⁸¹, el juez decreta la suspensión de los derechos políticos de las acciones suscritas por Calvo, quien se ve así imposibilitado a venderlas, tal y como había pactado con Valls, a otros accionistas minoritarios. Rafael Calvo Serer queda de este modo desde 1967 como accionistas mayoritario de FACES, con el 67'08% del capital.

Por supuesto, la lucha entre falangistas y monárquico-opusdeístas ligados a Valls Taberner por el control empresarial de FACES no era en realidad sino el trasfondo de la verdadera batalla por el control ideológico de *Madrid*. Desde 1966, Calvo Serer había impulsado una línea editorial rayana en el rupturismo (*Cf.* Lafuente, 2002) que había soliviantado tanto a los accionistas falangistas como al MIT de Fraga. La Dirección General de Prensa accedió y guardó copias en el REP de varias cartas dirigidas por accionistas y consejeros de FACES a Luis Valls Taberner lamentándose de la línea editorial contraria al Régimen adoptada por *Madrid*. Ante la negativa de Valls a “neutralizar” el diario (esto es: a destituir a Calvo Serer), los accionistas acabarían por elevar sus quejas al MIT. El 17 de abril de 1967, Manuel Jiménez Quílez envía una misiva a Calvo Serer en la que le informa de una inminente inspección a Madrid, Diario de la Noche, S.A. El motivo que aduce la DGP no es sino la línea editorial adoptada por el diario y denunciada por algunos de los accionistas falangistas de FACES:

Los señores Don Salvador Serrats, Don José Ignacio Escobar y Don Valentín Gutiérrez Durán, a título de Consejeros [...] [de FACES] con fecha 12 de los corrientes han dirigido escrito a este Ministerio en el que exponen, a los efectos administrativos que se estimen procedentes, problemas suscitados en la línea ideológico-política del periódico [...]

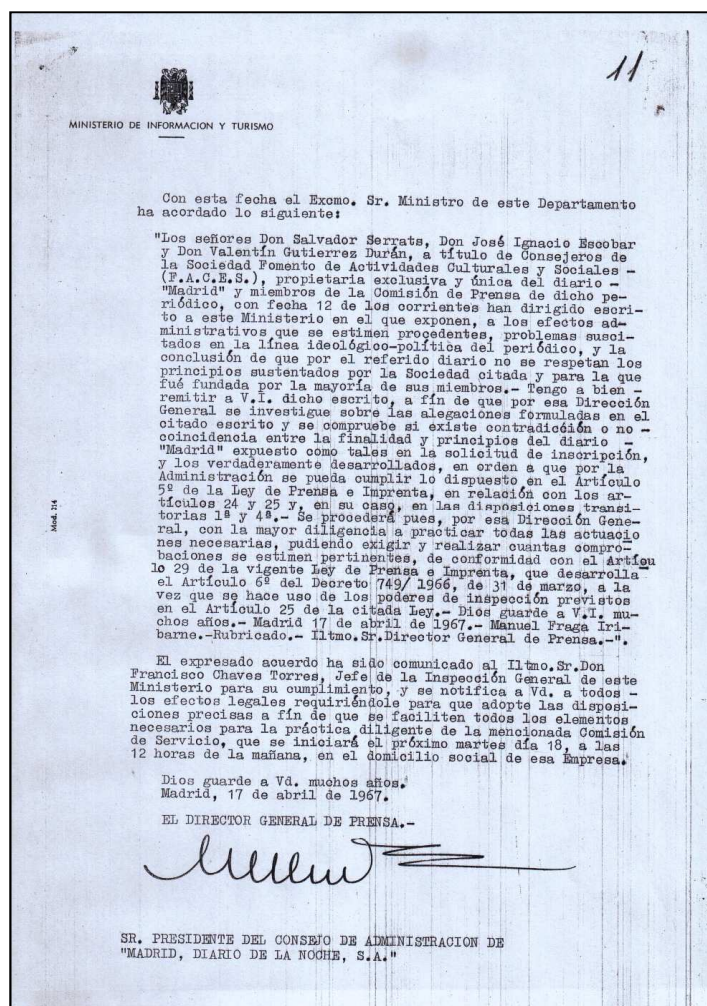
⁴⁸⁰ Presentaron la denuncia los accionistas Agustín Aznar Gerner, Armando Muñoz Calero López, José Ignacio Escobar Kirkpatrick, Salvador Serrats Urquiza, José María Serrats Urquiza, Luis Cerame García y Emilio Jiménez Millás Gutiérrez. Entre los siete controlaban apenas 156 acciones de FACES.

⁴⁸¹ Finalmente, la demanda del sector falangista se resolvería el 18 de agosto de 1972 (varios meses después, por tanto, del cierre del diario), cuando el Juzgado número 15 de Madrid falla declarando válida la suscripción de Calvo Serer. La sentencia sería recurrida aún ante la Audiencia Territorial de Madrid, quien ratificaría el fallo anterior el 8 de octubre de 1973.

Se procederá, pues, por esta Dirección General, con la mayor diligencia a practicar todas las actuaciones necesarias, pudiendo exigir y realizar cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, de conformidad con el Artículo 29 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta [...]

Madrid fue objeto desde entonces de una enconada persecución por parte del MIT, que le impuso hasta 1971 un total de 20 expedientes administrativos — incluidas dos suspensiones temporales consecutivas de dos meses cada una en 1968— y unas 868.500 pesetas en multas, convirtiéndolo en “el diario español más perseguido y sancionado del tardofranquismo” (Barrera, 1995a: 133). Fraga no iba a permitir, en sus palabras, que *Madrid* pusiera en peligro su plan de reforma jugando a la ruptura (Fraga, 1980: 215). El ministro consideraba al diario como uno de los puntales del “doble juego” característico del Opus Dei, que se hacía presente, a finales de los sesenta, en el Gobierno a través del sector tecnócrata de López Rodó, y en la oposición mediante figuras como Calvo Serer, que permitían al Opus tomar posiciones ante un eventual cambio de régimen. Es, pues, en este marco de doble lucha —interna entre el grupo reformista de Fraga y los tecnócratas opusdeístas de López Rodó, y externa contra el rupturismo de parte del Opus Dei—, en el que hay entender la persecución del MIT a *Madrid*, al menos hasta finales de 1969.

El inicio de los conflictos con la Administración coincidiría, desde 1967, con la apertura de un nuevo frente interno en el accionariado. La derrota del sector falangista en la batalla empresarial había dejado a Calvo Serer como accionista mayoritario de FACES, abriendo un segundo frente entre el propio Calvo y Luis Valls Taberner. El 7 de agosto de 1967, Valls enviaba una carta a Calvo en la que lo conminaba a abandonar la presidencia de Madrid, Diario de la Noche, S.A. Calvo respondería tratando de convocar



una Junta extraordinaria de accionistas en la que imponer su mayoría accionarial, que quedaría, sin embargo, suspendida cautelarmente por el juez tras la denuncia de Valls. La disputa estribaba en la naturaleza de la suscripción de 16 millones efectuada el 26 de diciembre del 66 por Calvo: éste aducía que era un mero prestatario del crédito concedido por el Banco Europeo de Negocios (y luego traspasado a SAF, filial del Banco Popular), es decir, del dinero de Valls; mientras que Valls argüía que Calvo no era un mero prestatario, sino un fiduciario que había actuado a sus órdenes y que había por tanto de atenerse a sus indicaciones con respecto a la venta definitiva de las acciones a pequeños inversores⁴⁸². Calvo y Valls se disputaban, en definitiva, la titularidad real de las 32.000 acciones suscritas el 26 de diciembre y, con ella, el control efectivo de FACES. La cuestión fue finalmente sometida a un laudo arbitral, elaborado por el accionista y consejero de FACES, Faustino García Moncó⁴⁸³. De acuerdo con el laudo, dictado el 2 de julio de 1971, Calvo Serer había suscrito el capital por su propia cuenta y sin seguir órdenes de Valls, aunque se había comprometido a ofrecer a los accionistas de FACES, en primer término, y a terceros, después, la compra de sus títulos⁴⁸⁴. El laudo, pues, reconocía la titularidad real de las acciones a Calvo Serer, artífice de la línea rupturista de *Madrid*, aunque abría la posibilidad, a ojos de la Administración, de un control futuro de la empresa por parte de Valls Taberner, mucho más próximo a los intereses del sector tecnócrata del Gobierno⁴⁸⁵. Por lo demás, García Moncó revelaba en su escrito algunas circunstancias de la estructura financiera de FACES que serían aducidas en 1971 por el

⁴⁸² Valls Taberner se escudaba en la existencia de unos vendís en blanco firmados por Calvo Serer que habrían de ser repartidos entre los inversores adquirentes de las 32.000 acciones.

El escrito público de sometimiento a arbitraje de equidad presentado por las partes el 4 de marzo de 1971 establecía que el conflicto radicaba en “si las suscripción de las acciones de la sociedad Fomento de Actividades Culturales Económicas y Sociales, S.A., números 15.599 a 47.598 ambos inclusive, efectuada por D. Rafael Calvo Serer en 26 de diciembre de 1966, fue realizada siguiendo instrucciones de D. Luis Valls y con la obligación de acomodarse en su actuación futura, y en la transmisión definitiva de las acciones, como titular provisional, a las sucesivas indicaciones que el Sr. Calvo Serer fuera recibiendo del Sr. Valls o, por el contrario, D. Rafael Calvo Serer llevó a cabo la expresada suscripción por su propia cuenta, sin la obligación de someterse a indicación alguna en su situación futura en cuanto titular real y de pleno derecho de las acciones, con la sola obligación de devolver el dinero procedente de la Sociedad Anónima de Fomento [...]” Escrito público en Exp. 1015, en REP, AGA, *ibídem*.

⁴⁸³ Faustino García Moncó había dejado el consejo de FACES entre 1965 y 1969 al ser nombrado ministro de Comercio. Según Carlos Barrera, García Moncó era el único miembro del CA neutral en la pugna interna entre Calvo Serer y Valls Taberner. Cada uno de ellos contaba en 1969 con tres consejeros afines: Nicolás Franco, Gabriel Navarro y Pedro Moreno, el primero; y Silvestre Arana, Jesús Silva y Rodolfo Bacharach, el segundo.

⁴⁸⁴ Esto último sería recurrido por Calvo Serer ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que fallaría el 5 de febrero de 1972, declarando la nulidad parcial del laudo arbitral y atribuyendo a Calvo Serer la titularidad real de las acciones de FACES suscritas.

⁴⁸⁵ En un informe fechado el 7 de julio de 1971 y dirigido al ministro Sánchez Bella sobre el laudo de García Moncó, se decía: “En conclusión, estimamos que a efectos futuros, la clave del dominio de la sociedad y del periódico reside en el grupo que encabeza D. LUIS VALLS TABARNER”, Informe en Exp. 1015, en REP, AGA, *ibídem*.

MIT como causas de la cancelación registral. El laudo revelaba, en primer lugar, que FACES se venía financiando desde 1963 con un crédito de 19 millones concedido por SAF, que no había sido comunicado al REP en el apartado referido al plan financiero de la empresa. Pero sobre todo destapaba la existencia de varios accionistas interpuestos o simulados en el capital de la empresa⁴⁸⁶.

En el otoño de 1971, la guerra interna de FACES se había trasladado ya a las páginas de *Madrid*. El 11 de octubre, Calvo Serer firmaba en el periódico, junto a su abogado y hombre de confianza Antonio García Trevijano, un artículo titulado “Lucha de poder en el diario *Madrid*”, en el que identificaba las tres tendencias en litigio: el “grupo independentista”, en el que ellos mismos se encuadraban y que vendría a defender la independencia del diario; el “grupo reaccionario” o de falangistas, encabezado por el ex subsecretario de Hacienda, Luis Valero Bermejo; y el “grupo oportunista” o de tecnócratas, liderado por Luis Valls Taberner. Este escrito desencadenaría, según aseguraba el propio Calvo Serer en otro artículo publicado en *Le Monde* el 11 de noviembre del mismo mes, la actuación del Gobierno presidido por Carrero Blanco contra *Madrid* a partir de octubre.

Es el Almirante Carrero Blanco [diría Calvo en *Le Monde*], con sus tecnócratas, quien ha decidido, consciente y deliberadamente, la muerte de un diario conocido, cuyas posiciones políticas eran calificadas de ‘centristas’ por la prensa europea⁴⁸⁷.

Ambos escritos actuaron, en efecto, como detonante de la cancelación registral dictaminada el 25 de noviembre por el MIT. La Administración no estaba dispuesta a, en palabras del director general de prensa, “tolerar el espectáculo de los contendientes ofreciendo sus vísceras a la opinión pública”⁴⁸⁸. El 22 de octubre —tras varias negociaciones truncadas entre Calvo Serer y Sánchez Bella a cuenta de un cambio en la dirección del vespertino—, el Consejo de Ministros aprobaba una nueva suspensión de *Madrid*. Tres días después, el MIT incoaba el expediente cancelatorio, que quedaría resuelto el 25 de noviembre, un día después de que la Audiencia Territorial de Madrid notificara la anulación de la suspensión de los derechos políticos de las acciones de Calvo

⁴⁸⁶ El número 8 de los Hechos Trascendentales del laudo reza: “SAF suscribió a través de cinco personas interpuestas cuatrocientas cincuenta acciones de FACES, por valor de 225.000 pesetas, el día 15 de septiembre de 1965 [...]” Laudo Arbitral en Exp. 1015, REP, AGA, *ibidem*.

⁴⁸⁷ “El Gobierno español contra las libertades. Yo también acuso”, *Le Monde*, 11 de noviembre de 1971. La traducción del artículo, publicado obviamente en francés, es obra de los Servicios Informativos de la DGP, que archivaron el texto en el expediente de *Madrid*. Ambos artículos se encuentran, pues, en el exp. 1015, en REP, AGA, *ibidem*.

⁴⁸⁸ En el informe enviado por Fernández Sordo al abogado del Estado el 23 de marzo de 1973 (v. *infra*), el director general de prensa decía: “La Administración sabía, sí, de la situación conflictiva interna del diario Madrid y esperaba también que las partes enzarzadas en pleitos llegaran a una solución de avenencia [...] Pero no estaba dispuesta a tolerar el espectáculo de los contendientes ofreciendo sus vísceras a la opinión pública”, p. 16.

Serer, reconociendo así a éste el control legal de FACES⁴⁸⁹. La Administración alegaba en la resolución la existencia de tres causas de cancelación derivadas de tres irregularidades cometidas por el periódico (y que serían desmentidas cinco años después por el Tribunal Supremo⁴⁹⁰):

- (a) La empresa “*Madrid*, Diario de la Noche, S.A.” no ha aportado la información y documentos requeridos por la legislación vigente.
- (b) La existencia de una Escritura Pública número 444, de 31 de enero de 1967 que no se ha aportado al Registro de Empresas Periodísticas⁴⁹¹.
- (c) La existencia de accionistas simulados en la Sociedad FACES, única propietaria de “*Madrid*, Diario de la Noche, S.A.”.
- (d) La intervención y proyección financiera en período posterior a la primera inscripción registral y su vigencia permanente, del banco Popular Español y de la entidad denominada, en anagrama, S.A.F., de ninguna de las cuales aparece referencia alguna en la documentación existente en el Registro de Empresas Periodísticas (Resolución cancelatoria de 25 de noviembre de 1971. Cit. en Barrera, 1995b: 490).

Resulta ciertamente significativo el intento de la Administración de desligar su actuación de cualquier sombra de motivación política. Tras subrayar que el inicio de las investigaciones del MIT que habían servido de base a la cancelación se había sustentado en la “aplicación estricta” del artículo 29 de la LPI, el punto séptimo de la resolución cancelatoria afirmaba:

No cabe confundir tales medidas [se refiere a la inspección decretada] con las que la Ley de Prensa prevé para corregir las posibles infracciones cometidas contra su artículo segundo, y por consecuencia ninguna relación cabe entre aquellas y texto alguno aparecido en el diario *Madrid*⁴⁹².

Tal y como ya hiciera con *Nivel*, el MIT volvía a invocar el artículo 29 de la LPI para ocultar, tras unas supuestas irregularidades técnicas y financieras, una decisión discrecional y política. Así lo reconocería en cierto modo dos años después la Dirección General de Prensa en un informe reservado de 40 folios enviado al abogado del Estado

⁴⁸⁹ Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de noviembre de 1971.

⁴⁹⁰ La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1976 (r.c.j., Aranzadi, 4375/76) declaraba la plena validez de la inscripción de “*Madrid*, Diario de la Noche, S.A.” en el REP. En su considerando, la sentencia rebatía cada una de los cuatro motivos alegados por la Administración para justificar el cierre. El Tribunal Supremo condenaba, pues, a la Administración a resarcir a la empresa por los daños y perjuicios causados por la cancelación, valorados en 1983 por el mismo Tribunal en 518 millones de pesetas. Finalmente, tras la adición de los intereses derivados de la demora en el pago, la Administración hubo de indemnizar a la empresa con algo más de 580 millones de pesetas en 1985 (Barrera, 1995b: 547-552).

⁴⁹¹ Dicha escritura pública “ponía de manifiesto la existencia de 402 acciones de FACES [sociedad propietaria del diario] sin titular alguno” (Barrera, 1995b: 490).

⁴⁹² Punto séptimo de la Resolución cancelatoria de 25 de noviembre de 1971, en exp. 1015, en REP, AGA, *ibídem*.

del Tribunal Supremo a propósito del recurso presentado por Calvo Serer contra la cancelación registral. Entre otras cuestiones, el escrito, fechado el 23 de marzo de 1973, respondía a la acusación de haber dictado la cancelación por motivos políticos, rechazando

por inadmisibles e incoherentes el reproche que se hace a un Departamento ministerial del Estado español de que ha actuado por motivaciones de carácter político.

Si por acción o actuación política [continúa] debe entenderse el gobierno de una comunidad política, ésta es la misión que justamente corresponde a un Departamento ministerial. Consideramos incongruente que desde las páginas del mismo diario cancelado se predique la licitud y legitimidad de la actuación política particular o privada y, en cambio, se considere vituperable la misma actuación por parte del Gobierno.

Desde la perspectiva de la política como acción de gobierno de la sociedad, no hay una sola acción administrativa que no sea política [...] ⁴⁹³.

Como político fue, desde luego, el cierre de *Madrid*, no sólo en tanto resultado de una actuación administrativa, sino en cuanto fruto de una decisión fundada en motivos políticos y tomada de forma discrecional por el ministro de Información y Turismo con la aquiescencia, y muy probablemente el concurso, del Gobierno de Luis Carrero Blanco. Tras el auto de la Audiencia de Madrid, su Gabinete monocolor de mayoría tecnócrata había visto alejarse las posibilidades de que Valls Taberner, cercano a la tecnocracia y mucho más favorable a los intereses del Ejecutivo, arrebatara el control del diario al discolor Rafael Calvo Serer, cuyo aperturismo, excesivo e imprudente para Manuel Fraga, se había tornado inadmisibles —una cuestión de “higiene y salubridad políticas”— para el inmovilismo de Carrero:

La intervención administrativa [acabaría reconociendo de forma reservada la DGP en 1973] se hizo necesaria en interés de la Ley, en garantía de los derechos de los lectores, en defensa de la Autoridad del Estado y en beneficio de elementales razones de higiene y salubridad políticas ⁴⁹⁴

⁴⁹³ “Informe sobre el recurso contencioso-administrativo número 301.086/72, presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la empresa periodística Madrid, Diario de la Noche, S.A.”, remitido por Alejandro Fernández Sordo al abogado del Estado del Tribunal Supremo, D. Eduardo Ortiz de Zúñiga, el 23 de marzo de 1973, pp. 14 y 15. En Exp. 1015, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 cajas 116 a 122.

⁴⁹⁴ “Informe sobre el recurso...” *op. cit.*, p. 16.

6. La regulación de la empresa periodística privada

La Ley Fraga reconoce en su preámbulo a la libertad de empresa como uno de sus “postulados fundamentales”. A ella le dedica el artículo 16, titulado precisamente “Libertad de empresa”:

[...] toda persona natural de nacionalidad española y residente en España que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrá libremente constituir o participar en Empresas que tengan por objeto la edición de impresos periódicos. Iguales derechos tendrán las personas jurídicas de nacionalidad española y con domicilio en España [...].

Según Alfonso Nieto, para que existiera libertad de empresa periodística debían concurrir dos condiciones: que hubiera libertad de creación o constitución de empresa, y libertad de elección de la forma jurídica (1973: 30). Los requisitos de inscripción en el REP —esto es: los trámites de autorización administrativa previa— afectaban como vimos, no a la constitución de empresas, sino al inicio de sus actividades; de lo que se sigue que la obligatoriedad de la autorización administrativa no socavaría la libertad de creación de empresas, sino la libertad de ejercer, a través de ellas, la actividad periodística⁴⁹⁵. En cuanto a la forma jurídica, ni la LPI ni ninguna disposición anterior obligaba a las empresas periodísticas a adoptar una forma societaria determinada (aunque la Ley de S.A. de 1951 sí compelmía en su artículo cuarto a que toda sociedad que tuviera un capital social de más de cinco millones de pesetas adoptara la forma jurídica de Sociedad Anónima⁴⁹⁶). De este modo, si bien la mayor parte de las empresas privadas propietarias de los diarios españoles eran, antes y después de la LPI, Sociedades Anónimas, no era ésta la única forma jurídica existente en el panorama de la prensa española.

TABLA 5: Formas jurídicas de las empresas privadas propietarias de los diarios españoles de información general

Formas jurídicas	1964		1973	
	Diarios	Porcentaje	Diarios	Porcentaje
Sociedades Anónimas	41	66'13%	54	75%
Sociedades de Responsabilidad Limitada	5	8'06%	7	9'72%

⁴⁹⁵ Cf. con la opinión de Nieto (1973: 47-51), quien consideraba que la LPI exigía, para la constitución de empresas periodísticas, no sólo el cumplimiento de los requisitos constitutivos, sino también de los requisitos de funcionamiento; es decir, la inscripción en el REP. De este modo, al considerar que la autorización administrativa era necesaria tanto para la puesta en marcha de la empresa como para su creación misma, quedaría cercenada la libertad de creación de empresas. Esta opinión fue ya rebatida en el capítulo anterior.

⁴⁹⁶ V. Art. 4 de Ley de 17 de julio de 1951 (BOE de 18 de julio), de Sociedades Anónimas.

Sociedades de Responsabilidad Comanditaria	2	3'22%	1	1'39%
Propiedad privada individual	7	11'29%	6	8'33%
Otras ⁴⁹⁷	7	11'29%	4	5'55%
Total	62	99'99%	72	99'99%

Fuente: Instituto de la Opinión Pública (1964) y Nieto (1973)

A pesar de cumplirse, pues, las dos condiciones de Nieto, casi resulta ocioso aclarar cuán lejos se encontraba la prensa española de gozar de libertad de empresa. Aunque la autorización administrativa no afectara a la libertad de constitución de empresas, sí restringía, como ya argumentamos, el desempeño de su actividad fundamental, al menoscabar la libertad de editar prensa diaria (libertad esta última sin la cual, como es obvio, la libertad de constitución se revela del todo inútil, aunque no inexistente). Por lo demás, el que el legislador no prescribiera una forma jurídica particular para las empresas periodísticas no significa que no interviniera en otros aspectos medulares de su vida económica y organizativa; como su propiedad, gobierno corporativo, capacidad de expansión y financiación. Los dos primeros, a los que dedicamos este capítulo⁴⁹⁸, fueron objeto de una regulación específica que configuró el marco normativo básico al que hubieron de atenerse y en el que debieron desenvolverse las empresas periodísticas españolas entre 1966 y 1975.

Tanto Ramón Zallo (1988) como Enrique Bustamante (2003) contemplan una función específica de “regulación” en sus respectivas clasificaciones de los roles asumidos por el Estado en la industria de la comunicación. Partiendo de sus definiciones, aunque adaptadas a nuestro objeto de estudio, entendemos por “regulación” la *función estatal de ajustar el funcionamiento del sistema de prensa diaria, interviniendo sobre él y fijando las condiciones y normas de actuación que han de seguir los agentes sociales que en él participan; en nuestro caso, las empresas periodísticas editoras de diarios de información general*. En el anterior capítulo, examinamos la “tamización” administrativa del sistema: describimos el modo en que el Ministerio de Información circunscribió el mapa de la prensa española a las empresas periodísticas que superaran el filtro administrativo de la inscripción en el Registro. En estas páginas atenderemos, en cambio, al conjunto de normas, condiciones y actuaciones administrativas que afectaron a la propiedad y

⁴⁹⁷ El Instituto de la Opinión Pública, en su estudio de 1964, no especifica qué tipo de sociedades incluye en la categoría de “otras”. Con respecto a 1973, hemos incluido en esta categoría dos empresas pertenecientes a sendas comunidades de propietarios, una Sociedad Regular Colectiva, y una Cooperativa de Producción (Nieto, 1973: 85).

⁴⁹⁸ Sobre la normativa relativa a la integración horizontal nos detuvimos ya en el capítulo cuarto. El análisis de la regulación e intervención administrativa sobre propiedad y gobierno corporativo se completará, más adelante, con el estudio de la intervención sobre la estructura de ingresos y gastos (capítulo 7).

gobierno corporativo de las empresas periodísticas inscritas en el REP y, por tanto, admitidas en el sistema.

Las empresas de prensa españolas fueron objeto, durante el régimen franquista, de una regulación tardía, específica y hondamente influida por el acenepismo. Tardía, en la medida en que ni su ámbito económico ni organizativo fueron regulados por disposición alguna hasta 1951 (y aun la aprobada aquel año afectó exclusivamente a una empresa: la Editorial Católica⁴⁹⁹). Específica, pues cuando el legislador aborde al fin la cuestión, a partir sobre todo de 1966, optará por una regulación singular, en contra de quienes abogaban, desde los años cincuenta, por someter a la empresa periodística a la legislación mercantil común (Nieto, 1967: 49-51; 1973: 30). Tras esta determinación del legislador se encontraba la alargada sobra del propagandismo y, en concreto, de su presidente en los años cuarenta, Fernando Martín-Sánchez Juliá; sin duda el principal defensor de un estatuto legal propio para la empresa de prensa. No será ésta, desde luego, la única cuestión en la que el acenepismo haga valer su influencia: como veremos, prácticamente toda la regulación tardofranquista en materia de propiedad y gobierno corporativo lleva la impronta de la doctrina —y se encuentra condicionada por los intereses empresariales— de la ACN de P.

Tal regulación tuvo una finalidad primordial: *el control administrativo de la empresa periodística*. A ello se orientó una normativa sobre propiedad marcada por la prohibición de capitales extranjeros, la ausencia de límites a la concentración y, sobre todo, la identificación de promotores, socios y propietarios; así como una legislación del gobierno corporativo caracterizada por su nacionalismo, su conservadurismo y, una vez más por encima de todo, por su pretensión de que ningún directivo resultara desconocido para la Administración. Sobre ambos aspectos —propiedad y gobierno— se legisló y actuó, huelga aclararlo, de forma conjunta, como dos facetas indisociables de un mismo modelo de regulación; de modo que si aparecen aquí diferenciados no es sino por razones analíticas.

A esta misma finalidad de control de la empresa, respondió además el conjunto de intervenciones administrativas que, sin estar contempladas en el ordenamiento jurídico, vinieron a complementar y completar la legislación sobre propiedad y gobierno corporativo. La Administración no sólo se sirvió de los instrumentos y atribuciones que le otorgaba la Ley para ejercer su control sobre la empresa periodística; recurrió, además, muy frecuentemente, a una serie de actos materiales o mecanismos extralegales dirigidos a reforzar dicho control legal. Entre 1966 y 1975, el Ministerio sometió a los socios y

⁴⁹⁹ En 1951, la disposición transitoria 12 de la Ley de 17 de julio, de Sociedades Anónimas (BOE de 18 de julio) permitía a Edica mantener su Junta de Gobierno, un organismo encargado de velar por la preservación de la ideología de la cadena.

directivos de las empresas de prensa españolas a una vigilancia ejercida a través del mismo aparato de obtención de información empleado para evaluar las solicitudes de inscripción en el REP. Las informaciones recabadas por departamentos como la Oficina de Enlace, los Servicios de Información de la DGP y, especialmente, las Delegaciones Provinciales, sirvieron de base en no pocos casos para intervenciones administrativas — en las que no faltaron las presiones, amenazas, extorsiones y otras maniobras— dirigidas a interferir en aquellas empresas y operaciones que le resultaran al Ministerio políticamente interesantes o inconvenientes.

Antes, no obstante, de examinar las actuaciones y normativa que componen el modelo tardofranquista de regulación, es preciso detenerse en los principios doctrinales —de paternidad casi exclusivamente acenepista, como ya adelantamos— que lo inspiraron y fundamentaron.

6.1 Fundamentos doctrinales

En ningún aspecto del control tardofranquista de la prensa se hace tan patente la influencia doctrinal y capacidad de presión de un grupo de poder —y aun de uno sólo de sus miembros— como en la regulación de la propiedad y gobierno de la empresa periodística. Nos referimos, por supuesto, a la “familia” acenepista y a su presidente entre 1935 y 1953, Fernando Martín-Sánchez Juliá, cuyos principios inspirarán, más que los de ninguna otra persona o grupo, la legislación y actuación del Régimen en la materia. Desde luego, tampoco resulta ajeno a este influjo, ni puede dejar de tenerse en cuenta, el poder de su cadena de prensa, la Editorial Católica, cuyos intereses empresariales, bien defendidos por los prohombres acenepistas, marcarán en no menor medida que la doctrina, la regulación e intervención administrativa. Por lo demás, los falangistas poco tenían que decir ya, en los años sesenta y setenta, en cuestiones de prensa; y poco o nada se habían ocupado, décadas atrás, de la empresa periodística privada. Cuando, en época de Arias Salgado, comience a atenderse de forma específica a la estructura económica del sistema y el Régimen empiece a centrar el foco en sus agentes primordiales, hacía ya tiempo que el falangismo había dejado atrás sus años de mayor poder e influencia. Tampoco Arias dejará —más allá del veto al capital extranjero, que sí puede serle atribuido—, una impronta propia en la materia, pues si bien es cierto que muchas de las disposiciones y actuaciones llevadas a efecto habían sido recogidas en su doctrina, no lo es menos que dicha doctrina era, en lo que a la regulación de la empresa periodística se refiere, poco menos que un mero trasunto de los postulados de Martín-Sánchez Juliá.

Según ya apuntamos, el acenepismo hará valer su influencia, antes de nada, en la discusión desarrollada desde los cincuenta en torno al tipo de regulación, común al resto de empresas o específica, que había de afectar a la empresa periodística. El legislador optará, como sabemos, por conceder a estas empresas un estatuto propio fundado en su especial naturaleza. El líder de la ACN de P, Alberto Martín Artajo, había identificado la peculiaridad de la empresa periodística con respecto a la empresa mercantil como uno de los pilares de la doctrina propagandista sobre prensa (Artajo en González Páramo, 1972: XIV-XV)⁵⁰⁰. Esta idea había sido ya planteada por Ángel Herrera Oria en los años treinta, aunque será Martín-Sánchez Juliá quien la afine al acuñar el concepto de empresas con finalidad y trascendencia ideológica (v. 3.2.2). En cuanto se trataba de una especie peculiar dentro del género mercantil, la empresa periodística había de contar, al decir de Martín-Sánchez, con una regulación propia. Para ello, proponía la elaboración de un Estatuto de la Empresa Periodística, idea que será recogida por Gabriel Arias-Salgado a finales de los cincuenta⁵⁰¹, y por la LPI en sus capítulos tercero y cuarto. Frente a quienes abogaban, pues, por el sometimiento de la empresa periodística a la legislación mercantil común, se impuso la opción acenepista de regulación específica. Claro que, como señala Fernando Conesa (*op. cit.*: 506) y vamos ya advirtiéndolo, para el Estado franquista, el que la empresa periodística fuera especial y especial fuera su regulación, no significaba sino que había de estar especialmente controlada.

Tal control, ejercido antes de nada sobre quienes poseían y administraban la empresa periodística, encontró fundamentación y legitimación en los principios acenepistas de transparencia, publicidad y continuidad ideológica. Todos ellos fueron

⁵⁰⁰ En el prólogo al libro *Política de prensa. Dialéctica de la Empresa Periodística* (1972), de José Manuel González Páramo, Martín Artajo resume las que, a su juicio, son las líneas básicas de la doctrina católica sobre la prensa. Identifica como tales (a) la peculiaridad de la empresa periodística respecto a la empresa meramente mercantil; (b) la diferenciación entre equipo ideológico y poder económico y la cuidada relación que ha de establecerse entre ambos; (c) la claridad y publicidad en cuanto al origen y procedencia del capital de los periódicos; (d) el uso de la prensa como instrumento de educación y cultura; (e) la concepción del periódico como órgano de opinión, para formarla, orientarla, ilustrarla y representarla; y (f) la consideración de la prensa como institución semipública, en cuanto cauce representativo de la opinión. Cf. con nuestro propio análisis de las bases doctrinales propagandistas del capítulo 3.

⁵⁰¹ Aunque Arias no promulgará finalmente un Estatuto de la Empresa Periodística, abogará por una regulación específica de la empresa informativa en su discurso pronunciado ante el cuarto Consejo Nacional de Prensa el 12 de mayo de 1957: “No cabe duda [proclamará entonces el ministro] de que dentro de la pluriforme y casi ilimitada gama de publicaciones informativas, son las empresas editoras de diarios las que han de ocupar un puesto preferente en nuestras reflexiones, y en la regulación jurídica que las institucionalice, con el grado y precisión que la experiencia aconseja y nuestros tiempos reclamen [...]” (Arias Salgado, 1960: I121, III238). Sobre esta misma intervención, apuntará el entonces director general de prensa, Juan Beneyto, en sus memorias: “a pesar de sus promesas [sobre una nueva ley de prensa] no entró en materia: se limitó a insistir en que los órganos informativos ‘son siempre servidores del bien común’ y siguió la pertinaz propuesta de [Fernando] Martín Sánchez de tipificar la empresa e intervenirla” (Beneyto, 1988: 74).

manejados como eficaces coartadas del control administrativo, al presentarse como fundadores y garantes del plausible derecho de los lectores a conocer quién editaba en España la prensa diaria. Aunque la transparencia y publicidad de la propiedad fueron enunciadas por Fernando Martín-Sánchez en los cincuenta, la obligación de identificar y publicitar a los titulares de la empresa periodística remonta, como decíamos, al pensamiento de Ángel Herrera Oria. En su propuesta de regulación de la prensa de 1933, el cardenal había planteado en su base primera:

Debe constar siempre, de un modo oficial y auténtico, a quién pertenece la propiedad de los periódicos. Cuando el periódico pertenezca a una sociedad anónima, el capital de ésta deberá estar representado por acciones nominativas (Herrera, 2002: 22).

Fernando Martín-Sánchez extenderá años después esta obligación de dar a conocer a los propietarios también a los administradores. Ambos habían de ser identificados, no sólo por el Estado, sino por los lectores de sus publicaciones, pues al decir del propagandista, “ni al Estado ni al pueblo ha de ser indiferente el origen del capital que maneja armas tan incisivas sobre la opinión pública” (Martín-Sánchez, 1955: 69-70; *loc. cit.* 3.2.2). Naturalmente, todo ello quedará recogido, tanto en la propuesta reguladora publicada por Martín-Sánchez en 1957 (bases primera y tercera) (Martín-Sánchez, *op. cit.*: 82), como en el artículo cuarto del *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa* de la ACN de P madrileña⁵⁰²; sin olvidar el nonato ALBI, impulsado por Gabriel Arias Salgado y en cuya base octava encontrará también acomodo⁵⁰³.

El principio de continuidad ideológica, que informará la creación de Juntas de Fundadores en las empresas periodísticas desde 1966, había sido concebido como reacción ante las crecientes necesidades de capital de las empresas; necesidades que, en tanto se solucionaban en la mayor parte de los casos mediante la incorporación de nuevos socios, podían desembocar en alteraciones de la ideología original de la empresa y sus publicaciones. Para evitarlo, había ideado el acenepismo un nuevo órgano de gobierno corporativo exclusivo de las empresas periodísticas, integrado por sus fundadores y encargado de la conservación de la ideología original frente a los órganos controlados por el capital. El nuevo organismo —que en la Editorial Católica adoptaba el nombre de Junta de Gobierno— quedaría bosquejado en la propuesta reguladora de Fernando Martín-Sánchez de 1957, definido en su proposición normativa de 1961⁵⁰⁴, y finalmente trasladado al *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa* elaborado por el círculo acenepista madrileño por aquellas fechas. En su artículo quinto, este *Borrador*

⁵⁰² *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, en Archivo Central de la AC de P. V. Anexo III.

⁵⁰³ Anteproyecto de Ley de Bases de la Información. En AGA, sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁵⁰⁴ Conferencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá recogida en BANCdP, num. 694, 1 de enero de 1961. En AC de la AC de P.

establecía como mandato imperativo la creación de Juntas de Fundadores en todas las empresas periodísticas, lo que finalmente quedará atenuado en la LPI, que confiere a la creación de las Juntas un carácter meramente opcional⁵⁰⁵ (véase apartado 6.3.1)

La prohibición de financiación extranjera en el sistema de prensa es el único aspecto de la regulación empresarial en el que los postulados de Gabriel Arias-Salgado se revelan más influyentes; lo que no excluye, de todos modos, que el propagandismo católico hiciera valer, también en esta materia, sus intereses empresariales. La existencia de un 13% del capital de Edica en manos de hispanoamericanos chocará, de hecho, con el “nacionalismo informativo” de Arias, lo que moverá al legislador a conciliar ambas posturas: por un lado, consagrará en la LPI la prohibición de capital y administradores extranjeros defendida por Arias; por otro, incorporará a la Ley disposiciones *ad hoc* que permitirán a la Editorial Católica mantener a sus accionistas hispanoamericanos.

En su *Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, los propagandistas habían conjugado la prohibición de directivos extranjeros con la permisión de capital foráneo “minoritario” (art. 4); sin duda con el fin de proteger a los accionistas extranjeros de Edica. Gabriel Arias-Salgado, en cambio, había abogado —siguiendo su principio de “soberanía informativa”— por la prohibición taxativa de presencia extranjera tanto en la propiedad de la empresa como en sus órganos de gestión y administración:

En el terreno de la soberanía informativa [afirma Arias en su doctrina de la información], cualquier participación del capital extranjero, bajo la forma o procedimiento que fuere, o influencia directiva, abierta o subterráneamente ejercida por persona no española, habrá de estar automáticamente excluida por imperativo de la Ley (Arias-Salgado, *op. cit.*: I44, III18⁵⁰⁶; *loc. cit.* 3.3).

La influencia de Arias en 1959, cuando aún se encuentra al frente del MIT, probablemente permita explicar el artículo segundo del Decreto 16/59 (BOE de 28 de julio de 1959) por el que se liberalizaban las inversiones extranjeras en la economía española a excepción del sector informativo. Apenas un mes antes de la aprobación del Decreto se había constituido (en virtud de otro Decreto de 18 de junio de 1959) la comisión especial encargada de dar forma a un Anteproyecto de Ley de Bases de la Información en el que el MIT venía trabajando desde hacía tiempo. En él quedaría recogido el principio de “soberanía informativa” y, por tanto, la prohibición de

⁵⁰⁵ Art. 5º § 1: “En el plazo de tres años, las empresas que actualmente editan periódicos de información general, si no estuvieran ya comprendidas en la duodécima base adicional de la vigente ley de Sociedades Anónima, crearán los órganos adecuados para velar por la pureza de los fines ideológicos a que respondió la fundación de la sociedad, aun cuando para ello hubiesen de modificar sus estatutos”. (*Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*, en AC de la AC de P) Mientras que la LPI establece en su artículo 20.2 que “podrá existir” la Junta de Fundadores (*loc. cit.* 6.3.3.2).

⁵⁰⁶ Discurso al cuarto Consejo Nacional de Prensa, en Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1957.

inversiones extranjeras sostenida por Arias en su doctrina. Parece pues evidente que tras la inclusión del sector informativo en el artículo segundo del Decreto 16/59 no se encuentra sino el ministro de Información y su pretensión de evitar que la liberalización de las inversiones extranjeras entre en contradicción con su futura Ley de Bases de la Información. En el anteproyecto de dicha LBI, la base undécima establecía que

El capital de las empresas dedicadas a las actividades objeto de esta Ley habrá de ser exclusivamente nacional. Cuando revista la forma de Sociedad, los títulos acreditativos de las participaciones de capital habrán de ser siempre nominativos e intransferibles a extranjeros [...] No obstante el Gobierno, por razones de bien superior, podrá autorizar la participación de capital extranjero en la cuantía y forma que en cada caso se determine⁵⁰⁷.

Como vemos, a pesar de la prohibición taxativa de capitales extranjeros, el último párrafo abría la posibilidad de concesiones excepcionales del Estado, “por razones de bien superior”; en lo que parece, a todas luces, un guiño a la ACN de P y su Editorial Católica.

Esta misma lógica será, como veremos, la que siga el legislador en la LPI. Por un lado, vedará las inversiones extranjeras con carácter general y la misma vehemencia que el ALBI; mientras que por otro accederá a las presiones católicas introduciendo la Disposición Transitoria Segunda, pensada exclusivamente para que la Editorial Católica pudiera mantener a sus accionistas hispanoamericanos. Si bien, pues, la doctrina católica de permisión “minoritaria” de capital extranjero no se traslada a la Ley, sí logran al menos los acanepistas defender con éxito los intereses de su cadena de prensa; lo que no puede interpretarse sino como una prueba más de su poder en el sector.

La cuestión de la limitación de la concentración de la propiedad no mereció, en cambio, demasiadas reflexiones de la ACN de P ni de Gabriel Arias-Salgado, para quien la preocupación fundamental con respecto a la propiedad de las empresas se encontraba más ligada a la identidad de los propietarios que a su número de acciones; y para quien la concentración de empresas periodísticas probablemente no constituyera, en los años cincuenta, cuando elabora su teoría informativa, un problema acuciante. El propagandismo tampoco aludirá en su doctrina a límite alguno a la propiedad; acaso debido a que dicha concentración y el riesgo consiguiente de control de la empresa por parte de unos pocos propietarios no afectaba a Edica, que contaba con uno de los accionarios más dispersos de toda la prensa española (Nieto, 1973: 79)⁵⁰⁸. Quizás esta

⁵⁰⁷ *Anteproyecto de Ley de Bases de la Información*. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁵⁰⁸ A principios de los años setenta, ninguno de los accionistas de la Editorial Católica, fueran personas físicas o jurídicas, poseían individualmente más del 10% del capital social de la empresa. Clasificando a estos accionistas en grupos, la composición accionarial resulta como sigue: el 19% era propiedad de personas vinculadas a la Iglesia y de 56 instituciones eclesiásticas (entre

falta de atención doctrinal influyera en la inhibición administrativa en la materia, que permaneció desregulada hasta el final del franquismo. Aunque conviene no dejar de tener también presente que una cierta concentración de la propiedad no contravenía precisamente los intereses de la Administración, preocupada casi exclusivamente por conocer y controlar a los titulares y responsables de las empresas periodísticas, como condición necesaria para evitar que eludieran sus responsabilidades o escaparan del radio de acción jurisdiccional del Régimen.

6.2 La regulación de la propiedad

Tres son las notas esenciales que caracterizan la regulación tardofranquista de la propiedad de las empresas periodísticas privadas editoras de prensa diaria. (a) La prohibición de que fueran financiadas por caudales extranjeros; así como la limitación de las participaciones en el capital social de los españoles residentes fuera del país. Este “nacionalismo informativo” será, sin embargo, menos severo en la práctica de lo que aventuraba su enunciación doctrinal, pues acabó trasladándose al ordenamiento jurídico con ciertas salvedades llamadas a garantizar los intereses empresariales de la ACN de P; y fue aplicado con laxitud (o más bien obviado) allí donde chocó con los intereses de la propia Administración. (b) La ausencia de limitaciones cuantitativas a la propiedad; omisión que permitió a algunos empresarios poseer en su totalidad la empresa periodística. Y, sobre todo, (c) la identificación administrativa de los propietarios, accionistas, socios y de, en fin, cuantas personas físicas o jurídicas participasen en la empresa de prensa. Fue sin lugar a dudas este celo pertinaz por conocer la propiedad de los diarios, el rasgo más característico de la regulación y actuación tardofranquista en la materia.

6.2.1 El capital extranjero en la prensa

El rechazo formal del capital extranjero en la prensa española durante el tardofranquismo se funda en dos principios doctrinales desarrollados durante los años

obispos, seminarios, asilos, conventos, fundaciones, etc.); el 15% pertenecía a Cajas de Ahorro (de entre las que la Caja de Ahorros de Madrid poseía el 3'07%); el 13% era propiedad de accionistas hispanoamericanos (de entre los que destacaban los mejicanos Santiago Galas y Fernando Méndez, con un 5'09% y un 2'42% del capital respectivamente); el 26% era propiedad de españoles con participaciones superiores a las 100.000 pesetas cada uno (pero inferiores, como decimos, al 10% del capital social); y el 27% restante estaba también en poder de accionistas españoles individuales con participaciones inferiores a las 100.000 pesetas. (Nieto, *ibídem*). V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editorial Católica, Propiedad).

cincuenta: la consideración acenepista de la empresa periodística como una especie singular dentro del género empresarial; y, sobre todo, la idea nacionalista de “soberanía informativa” defendida por el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado. Será precisamente Arias Salgado, quien en 1959 decreta la prohibición taxativa del capital foráneo en la prensa; coincidiendo, por cierto, con la liberalización generalizada de la inversión extranjera en el resto de la economía nacional. Siete años después, Manuel Fraga ratificará la medida en el artículo 17 de la Ley de Prensa, en virtud del cual, desde entonces y hasta 1975, el patrimonio y capital de las empresas deberán pertenecer a españoles residentes en España. Pío Cabanillas, subsecretario de Información y autor del anteproyecto de LPI, había defendido así, el 20 de enero de 1966, ante la comisión de Cortes encargada de enmendar el texto, la exclusividad del capital nacional en la prensa:

El tratamiento del problema de la participación del capital extranjero, es una constante universal, de modo que se puede decir que no hay legislación en el mundo, ni siquiera la norteamericana [que Cabanillas parece tomar como paradigma de legislación liberal], que admita libremente la participación de capital extranjero en la prensa, por la trascendencia del fenómeno informativo: el fenómeno informativo es algo muy distinto de un simple producto material, concreto y determinado: no se producen bicicletas, se produce la posibilidad de influir en la opinión pública del país (c.t. 97/9 y 97/10 de 20 de enero de 1966. En ACD)⁵⁰⁹.

El legislador hacía suya la noción acenepista del carácter *sui géneris* de la empresa periodística, cuya trascendencia pública justificaba una regulación específica más restrictiva y nacionalista; a pesar de lo cual, ni el nacionalismo resultó tan firme, ni la veda al capital extranjero tan ineludible, como pudiera parecer. Hablábamos antes de un rechazo formal al capital extranjero, en la medida en que, en la práctica, éste fue en realidad tolerado allí donde su prohibición colisionó con intereses más apremiantes del Régimen. De un lado, la misma LPI estableció una salvedad al artículo 17 al permitir, en la disposición transitoria segunda, la permanencia del capital hispanoamericano que financiaba a la Editorial Católica, la cadena privada de diarios más importante del país. De otro, la Administración no dudó en consentir la ilegalidad que suponía la presencia de un estadounidense como promotor encubierto de un diario de información general a principios de los setenta. Ambos casos fueron, en cualquier caso, excepciones vinculadas a los intereses coyunturales del Régimen, que mantuvo, por lo general, el capital de las empresas periodísticas sometido a la disponibilidad de caudales exclusivamente nacionales, bien conocidos y previamente autorizados por la Administración.

⁵⁰⁹ Ambas cuartilla taquigráficas con la intervención de Cabanillas se encuentra en Anexo XI

La prohibición del capital extranjero en la prensa no estuvo vigente durante toda la dictadura. Hasta finales de los cincuenta, la cuestión de la nacionalidad del capital había estado sometida a la legislación común sobre inversiones extranjeras en la economía española; legislación que había comenzado a promulgarse durante la Guerra Civil: en 1937, un Decreto de 5 de julio (BOE de 8 de julio) acaba con la libertad inversora del periodo republicano. El Decreto imponía la necesidad de autorización administrativa para la movilización de los saldos de cuentas corrientes cuyos titulares residieran fuera de España. En dicha solicitud había de constar el destino al que iban a dirigirse tales saldos⁵¹⁰. Estas dificultades para la movilización de capitales extranjeros y para su transferencia al exterior llevaron a un aumento significativo de la reinversión en el país de los beneficios generados por las empresas extranjeras (Tamames, 1985: 667). Con todo, la disposición más importante sobre la materia no llegó hasta el final de la Guerra Civil. La Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional de 24 de noviembre de 1939 (BOE de 15 de diciembre) fijaba, en su artículo quinto, un límite del 25% a las inversiones extranjeras en la economía española⁵¹¹.

El capital social activo [art. 5] será propiedad de españoles en sus tres cuartas partes como mínimo. La cuarta parte restante, como proporción máxima, podrá admitirse como inversión del capital extranjero, y deberá aportarse en divisas cotizables en España o en utillaje que no se obtenga en la producción nacional, valorado a los precios del mercado internacional.

Este límite del 25% no deja de suponer, pues, una restricción moderada a la inversión extranjera en España; inversión que se encontraba, en cualquier caso, sujeta a la discrecionalidad de la Administración. A pesar de que no existen estadísticas oficiales sobre la cuestión hasta 1960, todo parece indicar que —en parte debido a las restricciones, en parte por el contexto interior y exterior— la inversión extranjera en España no alcanzó cotas relevantes hasta los años cincuenta:

Esta ordenación de las inversiones extranjeras presentaba muy escaso aliciente para los empresarios y capitalistas de fuera de nuestras fronteras. Ello, unido a las obvias dificultades de los seis años que duró la Segunda Guerra Mundial y del subsiguiente periodo, hizo que desde 1936 hasta 1951, la inversión de capital extranjero en España fuera muy escasa (Tamames, *op. cit.*: 668).

⁵¹⁰ “A partir de esta fecha [dispone el artículo único del Decreto] queda prohibido disponer libremente de los saldos en pesetas existentes en cuentas a favor de titulares que residan en el extranjero. Para movilizar dichos fondos deberá solicitarse previamente, y en cada caso, autorización del Comité de Moneda Extranjera, a cuyo efecto se consignará en la solicitud el destino que ha de darse a los recursos de referencia”.

⁵¹¹ Este límite del 25% era, de todos modos, ampliable hasta el 45% siempre y cuando lo autorizara el Consejo de Ministros; y aun más allá del 45% en casos excepcionales.

La situación daría un importante giro a partir de 1959. Aquel año —coincidiendo con el inicio de la estabilización y liberalización de la economía española— se acomete la liberalización relativa de la inversión extranjera en España. No fue ajeno a este proceso, por cierto, la experiencia de otros países capitalistas; especialmente de Italia, donde se habían demostrado las ventajas antiinflacionistas de la agregación del capital foráneo al ahorro nacional (Tamames, *ibídem*). El 27 de julio de 1959 se aprueba el Decreto-ley 16/59 sobre inversión de capital extranjero en empresas españolas (BOE de 28 de julio), en cuyo preámbulo se justifica del siguiente modo la liberalización relativa de la materia:

El futuro desarrollo económico de España se halla condicionado en gran medida por las disponibilidades, tanto de ahorro como de medios de pago exteriores. Habiéndose iniciado la liberalización del comercio exterior y garantizado el abastecimiento de materias primas para la producción, resulta evidente la importancia de reforzar nuestras perspectivas de capitalización. Es, pues, sumamente aconsejable aumentar la cuota de ahorro con la aportación de capital extranjero a fin de que pueda mantenerse un ritmo de crecimiento económico lo más elevado posible.

Con este fin, el artículo primero autorizaba la inversión extranjera (tanto de españoles residentes fuera de España, como de personas físicas y jurídicas extranjeras) en igualdad de condiciones con los españoles residentes en el país. Tal inversión podía alcanzar hasta el 50% del capital social de la empresa, porcentaje a partir del cual era necesaria la autorización del Consejo de Ministros⁵¹². Esta liberalización, que sería completada años después con motivo del III Plan de Desarrollo⁵¹³, favoreció un crecimiento constante de la inversión exterior hasta 1973, cuando estalló la “crisis del petróleo”.

⁵¹² Estas autorizaciones no dejaron de fluctuar entre 1960 y 1975, oscilando entre los 134 millones de pesetas de 1960 y los 31.389 millones de 1973. Los montos totales autorizados para cada año se encuentran en Tamames, *op. cit.*: 671.

⁵¹³ La legislación en materia de inversión exterior sería completada por la Ley 22/72 de 10 de mayo de 1972 por la que se aprobaba el III Plan de Desarrollo para el trienio 1972-1975. El texto refundido de la Ley fue aprobado en el Decreto de Presidencia 1541/72 de 15 de junio de 1972 (BOE de 16 de junio). El artículo 53 establecía que “Para lograr la mayor eficacia y oportunidad de las inversiones del capital extranjero, y siguiendo las directrices establecidas en el Plan [en el III Plan de Desarrollo Económico y Social], el Gobierno refundirá y completará las disposiciones vigentes en esta materia, así como coordinará la actuación de los diversos órganos de la Administración que intervienen en su tramitación, con el fin de disponer lo necesario en beneficio de los intereses económicos nacionales”.

Esta refundición y coordinación se acometería dos años después a través de dos decretos. El Decreto del Ministerio de Comercio 3022/74 de 31 de octubre (BOE de 6 de noviembre) refundía las disposiciones sobre inversiones extranjeras con rango reglamentario; mientras que el Decreto del Ministerio de Comercio 3021/74 de 31 de octubre de 1974 (BOE de 6 de noviembre) refundía las normas sobre la materia con rango de Ley. En su artículo primero § 2, afirmaba: “Las personas o Entidades mencionadas [se refiere a “personas extranjeras privadas, físicas o jurídicas, cualquiera que sea su residencia y españoles residentes en el extranjero”] podrán invertir sus capitales en España, ajustándose a los requisitos establecidos por la legislación española en las mismas condiciones que los españoles residentes, salvo las limitaciones establecidas en la presente ley o en las leyes especiales”.

Nada de ello, sin embargo, afectó al sector de la prensa española, cuyas “perspectivas de capitalización” y cuyo potencial crecimiento derivado de la entrada de capital exterior se vio supeditado a consideraciones del todo ajenas a los imperativos económicos. El año 1959 marca, en la cuestión de la inversión extranjera, el inicio del desgajamiento de la legislación específica sobre prensa de la legislación económica general. El mismo Decreto-ley 16/59 que inauguraba el periodo de liberalización relativa de las inversiones extranjeras negaba tal liberalización para “las Empresas cuya actividad esté directamente relacionada con la defensa nacional y la información pública, así como las de prestación de servicios públicos [...]” (art. 2). Es muy probable que, tras la exclusión del sector informativo de la liberalización de 1959, no se encontrara sino la mano de Gabriel Arias Salgado, quien había constituido un mes antes la comisión encargada de elaborar su ALBI, en el que quedaría consagrada la veda al capital extranjero en el sector. Se instauraba, pues, desde entonces, un régimen especial para las empresas periodísticas que quedaría plenamente definido en 1966, al prohibir taxativa e insistentemente la LPI toda aportación de capital extranjero a la prensa española. El tiempo de la liberalización económica que se abría en los sesenta será así, paradójicamente, mucho menos permisivo en lo que a inversión extranjera en prensa se refiere que el periodo autárquico anterior.

Según hemos advertido al inicio del capítulo, el artículo 16 de la LPI consagraba, no tanto el principio general de “libertad de empresa” proclamado en su título, cuanto la libertad de *ciertas* personas para constituir las y participar en ellas. El artículo se limitaba, en fin, a recoger uno de los aspectos de dicha libertad: quiénes podían constituir, financiar y administrar las empresas periodísticas (Nieto, 1967: 61; Conesa, 1978: 511); de modo que la libertad quedaba restringida *legalmente* a las personas naturales de nacionalidad española y residencia en España con plenos derechos civiles y políticos; así como a las personas jurídicas de nacionalidad española y domicilio en España; por más que *realmente* quedara restringida, según vimos en el anterior capítulo y comprobaremos también en éste, a aquellas personas que cumplieran los anteriores requisitos legales, pero sobre todo fueran autorizadas por la Administración. El artículo 16 había experimentado, por lo demás, pocas modificaciones durante el proceso de elaboración y tramitación de la Ley: se mantuvo esencialmente igual al recogido en el anteproyecto elaborado por Cabanillas, y en el que se restringía la libertad de empresa periodística a “toda persona natural o jurídica, con nacionalidad española y residencia en España”. Únicamente el CNP propuso un cambio substancial al plantear en su dictamen la

Esta legislación, pues, venía a completar el Decreto-ley de 1959, pero no a alterar su espíritu liberalizador e impulsor de las inversiones extranjeras en España.

eliminación de la necesidad de residencia en España, abriendo así la posibilidad de participar en las empresas a españoles residentes en el extranjero. La propuesta, sin embargo, fue desoída y no se trasladó al proyecto de ley, que tampoco generó, en este punto, demasiado debate en Cortes⁵¹⁴.

Las restricciones legales del artículo 16 quedaban confirmadas en el artículo 17 de la LPI, titulado “capital español”:

1. El patrimonio y capital de las empresas periodísticas tendrá que pertenecer necesariamente a personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y residentes en España.
2. Sin embargo, será posible la participación de hasta un 20 por 100 a favor de españoles no residentes en España, en los que concurran los restantes requisitos del artículo 16.

Quedaba así prohibida toda participación de capital extranjero en la empresa periodística española; y abrogada la restricción formal del 25% vigente desde 1939⁵¹⁵. Esto incluía, por supuesto, a las empresas constituidas como sociedades anónimas, cuyas acciones, en virtud del artículo 20, eran intransferibles a extranjeros. De 1966 en adelante, el capital de la empresa periodística habría de ser (con las dos excepciones que enseguida explicaremos) exclusivamente español.

La tramitación de esta disposición sobre “capital español” sería mucho menos plácida que la del artículo 16. La controversia que suscitó vino dada sobre todo por su colisión con los intereses empresariales de la Editorial Católica, algunos de cuyos principales directivos integraban la Comisión de Información y Turismo de Cortes encargada de corregir el proyecto de Ley. El anteproyecto elaborado por Cabanillas había establecido únicamente que “El patrimonio y capital de las empresas periodísticas tendrá que pertenecer necesariamente a personas naturales o jurídicas de nacionalidad española” (art. 22). Nada se decía, pues, de la obligatoriedad de residir en España, lo que abría la posibilidad de participación a los españoles residentes en el extranjero; incluidos, como es obvio, a todos los exiliados políticos. Esta posibilidad sería, sin embargo, rechazada en el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros y remitido por el MIT a Cortes el 22 de septiembre de 1965; en él se introducía por primera vez en el

⁵¹⁴ Solamente dos enmiendas escritas se presentaron al artículo 16: la enmienda 54 de Luis Aguilar Sanabria, y la 6 firmada por Jesús López Medel (que poco tenía que ver con la nacionalidad de los participantes en la empresa: plateaba la adición de un párrafo en el que se reconociera la libertad de las empresas para fijar el precio de sus publicaciones). En ACD, leg. 2312, num. 4. Tampoco el artículo fue sometido a demasiado debate en la Comisión de Información y Turismo, que abordó la cuestión a última hora del día 19 de enero, luego de una larga discusión a propósito del artículo 12 de la Ley. (v. c.t. 19 de enero de 1966. En ACD).

⁵¹⁵ El Decreto-ley 16/59 derogaba el artículo quinto de la Ley de 24 de noviembre de 1939; de modo que, a partir de 1959, quedaba suprimido el límite del 25% (ampliable hasta el 45%) de la participación extranjera en empresas españolas.

artículo 17 la condición de la residencia en España para la participación en empresas periodísticas; condición que, por lo demás, sí se había contemplado desde la redacción original del anteproyecto en el artículo 16. Esta última condición sería atenuada, no obstante, por las Cortes: la Comisión de Información y Turismo reconocería finalmente el derecho de los españoles residentes en el extranjero a participar en las empresas periodísticas, aunque con una limitación del 20% del capital social⁵¹⁶; lo que se aprobaría, de todos modos, con algunos votos en contra y luego de un largo debate mantenido el 20 de enero de 1966 (c.t. 90/9 y 90/10 de 20 de enero. En ACD).

La discusión principal versó sobre el primer párrafo del artículo, en virtud del cual quedaba prohibida la participación de capitales extranjeros en la prensa española. La veda suponía un problema para aquellas empresas que, merced al periodo de restricción moderada anterior a 1959, contaban en su patrimonio con capital perteneciente a extranjeros antes de la aprobación de la LPI⁵¹⁷. Éste era el caso de la principal cadena privada de diarios de España, la Editorial Católica, ligada a la ACN de P. Edica contaba con aportaciones de capital extranjero desde antes de 1960 (Fernández Areal, 1973: 253), y en 1973 tenía el 13% de su capital social en poder de accionistas hispanoamericanos (Nieto, *op. cit.*: 79). Para evitar tener que desprenderse de esta importante fracción de su accionariado, los acenepistas pusieron en marcha desde 1964 una doble táctica para modificar la LPI en proceso de elaboración: por un lado, presionaron para introducir una excepción a la prohibición de capital extranjero para hispanoamericanos; mientras que, al tiempo, trataban de incorporar una disposición *ad hoc* que eliminara la retroactividad de la medida y permitiera una “nacionalización” paulatina del accionariado de Edica. La primera táctica fracasó; pero no la segunda.

El primer asalto lo protagonizó Fernando Martín-Sánchez Juliá, quien el 8 de abril de 1964 presentó una enmienda particular al anteproyecto de Ley en la que demandaba que la prohibición del capital extranjero no tuviera efecto para las personas

⁵¹⁶ Como enseguida comprobaremos, de acuerdo con el artículo 18.1, quien fuera titular de un 20% o más de la empresa periodística había necesariamente de participar en su Consejo de Administración. Al fijar el límite de la participación e el 20%, el legislador trataba de evitar contradecir el artículo 18.

⁵¹⁷ El texto anónimo *Notas a la Ley de Prensa e Imprenta*, en el que se analiza el proyecto de ley (texto hallado junto a los informes y borradores de la LPI, en AGA sig. (3) 49.21 c. 65137) planteaba, con su franqueza habitual, la cuestión en los siguientes términos:

“a) ¿Qué va a pasar con las revistas que tienen en la actualidad capital extranjero? (sobre todo las turísticas, económicas, etc.). Posiblemente se buscarán hombres de paja que detenten nominalmente las acciones y estén ligados al verdadero propietario por un contrato privado que el ministerio desconozca.

b) ¿Cómo evitar que los accionistas españoles admitan préstamos de capital extranjero *con la garantía de sus acciones* [subrayado en el original] Con ello de hecho se vulneraría lo liquidado. Habrá que reglamentar esta difícil cuestión”.

pertenecientes a la “Comunidad Iberoamericana”⁵¹⁸. La iniciativa sería secundada por el Consejo Nacional de Prensa, cuya comisión especial encargada del estudio del anteproyecto de Ley (de la que formaban parte propagandistas como Aquilino Morcillo, Mariano Rioja, etc.) propuso también ampliar el derecho de constituir y participar en empresas periodísticas, hasta en un tercio de su capital, a iberoamericanos; pretendía la comisión que el artículo 22 del anteproyecto quedara redactado del siguiente modo:

El patrimonio y el capital de las empresas periodísticas tendrá que pertenecer necesariamente a personas naturales o jurídicas de nacionalidad española o de nacionalidades pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana. Éstas últimas hasta un tercio del capital social y previa autorización del Ministerio de Información y Turismo⁵¹⁹.

La comisión permanente del CNP fue incluso más lejos, al tratar de extender la posibilidad de participación, sin límites porcentuales, a cualquier extranjero: en su informe de junio de 1964 determinaba que “[...] la participación de capital extranjero, que la Comisión especial sólo permite que se extienda al de las nacionalidades pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana, debe ampliarse al de cualquier otro país”⁵²⁰. Esta discrepancia entre las comisiones especial y permanente fue finalmente resuelta por el pleno del CNP a favor de la última: el Consejo Nacional acabó planteando al MIT la posibilidad de permitir la penetración de capital extranjero, fuera cual fuera su origen, aunque con un límite del 33% del capital social de la empresa y siempre que se concediera autorización administrativa previa:

La participación de capital extranjero en las Empresas periodísticas [impone su dictamen elaborado en octubre de 1964 y remitido al MIT] no podrá exceder de un tercio del capital social, y esta participación deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Información y Turismo.

Una vez más, la propuesta del CNP fue rechazada por el legislador, que mantuvo la nacionalidad española del capital en el proyecto de ley y la imposibilidad de participación en la empresa periodística a extranjeros, fueran iberoamericanos o de otras nacionalidades. La cuestión, sin embargo, fue retomada durante la tramitación del proyecto de ley en Cortes: el entonces presidente de Edica, Javier Martín Artajo, presentó una enmienda al artículo 17 (enmienda num. 68) en la que insistía en permitir la participación en las empresas periodísticas a “hispanoamericanos” y filipinos hasta en un

⁵¹⁸ Enmiendas de Fernando Martín Sánchez Juliá al anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta, 8 de abril de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136

⁵¹⁹ *Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta*, Comisión especial para el Estudio de la Ley de Prensa, 11 de junio de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65137.

⁵²⁰ *Ponencia sobre el informe emitido por la Comisión Especial para el Estudio de la Ley de Prensa*, Comisión Permanente del Consejo Nacional de Prensa, 23 de junio de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65137.

10% del capital social cada participación individual⁵²¹, y hasta un 25% el total agregado de este tipo de participaciones:

Es plausible [argumentaba en su enmienda Javier Martín Artajo] el propósito del Proyecto de Ley de defender a las empresas periodísticas españolas de una posible mediatización ejercida por grupos de presión extranjeros [...].

Sin embargo, la exigencia ineludible de la nacionalidad española y de la residencia en España, puede resultar gravemente perjudicial a los intereses que se pretende defender.

Hay muchos españoles que residen en Hispanoamérica y en Filipinas, que tienen la misma condición jurídica y social que cualesquiera otros y que se han distinguido por su patriotismo en momentos difíciles para la Patria. Hay otros que, aún habiendo adoptado una nacionalidad distinta, siguen, sin embargo, fieles a su estirpe hispánica. En ocho naciones hispanoamericanas ha sido aceptado el principio de doble nacionalidad y es de desear que se amplíe a todas ellas.

Tales consideraciones aconsejan dar un distinto trato al capital de titularidad hispánica y por ello, los procuradores firmantes, estiman conveniente que sin poner en riesgo la nacionalidad de la empresa periodística española, puede perfectamente dar cabida en su capital a una participación limitada de tal origen (En ACD, leg. 2312, num. 4).

Dado el fracaso manifiesto de esta táctica, Javier Martín Artajo acabará por retirar la enmienda durante el debate de la Comisión (c.t. 86/4 de 20 de enero de 1966. En ACD). Para entonces, los acenepistas tenían ya avanzada una segunda táctica dirigida a eliminar la retroactividad de la prohibición del capital extranjero. En abril de 1964, Aquilino Morcillo, director de *Ya*, había planteado una enmienda al anteproyecto de Ley por la que se trataba de permitir la presencia de capital extranjero, hasta en un 25% del patrimonio, para aquellas empresas constituidas antes de 1963. “La exigencia [argumentaba Morcillo] de nacionalidad española para la totalidad del capital puede ser defendible con vistas al futuro. No lo es si se le da efecto retroactivo”⁵²². El también propagandista y miembro del CNP Mariano Rioja argüía, por su parte, que

Es excesiva la prohibición absoluta de que el capital extranjero pueda participar en empresas periodísticas. Para el fin pretendido, bastaría con limitar esa participación a lo preciso para que dicho capital no pueda influir en el Gobierno de la empresa, como, por ejemplo, que la referida participación extranjera haya de ser inferior al 10% del capital por persona y al 33% en total⁵²³.

⁵²¹ La propuesta de este porcentaje probablemente respondiera al hecho de que ninguno de los accionistas de la Editorial Católica contaba con más del 10% del capital social de la empresa.

⁵²² Enmiendas particulares al anteproyecto de LPI en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁵²³ *Ibídem*.

Por si fuera poco, Fernando Martín-Sánchez había insistido en esta misma cuestión, proponiendo la inclusión de la siguiente Disposición Transitoria (que, en el anteproyecto de Ley, era la Tercera bis):

Podrán seguir constituidas como lo estaban en primero de enero de 1963 las Empresas Periodísticas que en aquella fecha llevaran más de diez años de funcionamiento, debidamente autorizado, con arreglo a las leyes vigentes, aunque en su patrimonio y capital existan participaciones extranjeras [...]⁵²⁴.

Sostenía Martín-Sánchez que, dado que tales empresas habían sido autorizadas por el Régimen, el “Estado español no puede volverse contra sus propios actos, mucho menos si las empresas entonces legalmente constituidas y autorizadas, no han hecho sino funcionar legalmente desde entonces”⁵²⁵. Esta segunda táctica, al contrario que la basada en la excepcionalidad de los hispanoamericanos, sí tuvo éxito y acabó por trasladarse a una disposición transitoria de la LPI, creada *ad hoc* para preservar el accionariado extranjero de la Editorial Católica:

[...] quedarán subsistentes [rezaba finalmente la Disposición Transitoria Segunda] las proporciones de capital extranjero que, debidamente autorizadas, existieren en las Empresas periodísticas y editoriales con anterioridad al primero de enero de mil novecientos sesenta. La transmisión de los títulos o acciones en que las referidas proporciones consistan sólo podrán [por “podrá”] realizarse a favor de personas en las que concurran, respectivamente, los requisitos exigidos en el artículo dieciséis y en el párrafo primero del artículo cincuenta de esta Ley⁵²⁶.

Los acenepistas lograban así preservar el 13% del capital de Edica en manos de sus accionistas hispanoamericanos.

Sólo en un caso más hemos hallado rastros de participación extranjera en la prensa española durante el tardofranquismo, si bien en él, la presencia de capital foráneo no vino legalizada por una disposición *ad hoc*, sino tolerada de facto por la Administración a pesar de su ilegalidad. Según vimos en el anterior capítulo (v. 5.2.2), en junio de 1968 se había constituido Mediterranean Publishing Company, S.A. para editar el *Iberian*

⁵²⁴ *Ibidem*.

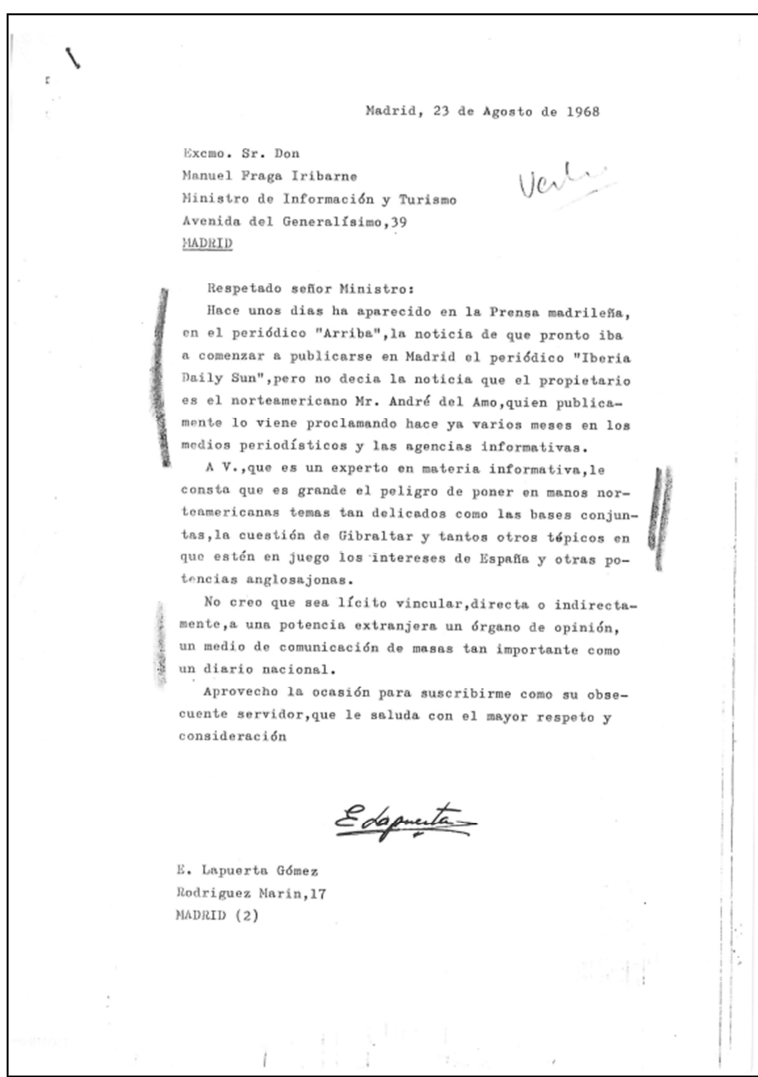
⁵²⁵ *Ibidem*.

⁵²⁶ Con esta última apostilla, por la que las acciones sólo podían ser vendidas a españoles, se garantizaba la “nacionalización” paulatina de estas empresas periodísticas. La cuestión había sido planteada por la enmienda 104 firmada por Emilio Jiménez Millás junto a cuatro católicos propagandistas. En ella, Millás consideraba que “La necesidad de vender su participación a empresas de información pública en un plazo de seis meses, impuesta a los extranjeros, les causará un evidente e injustificado perjuicio económico inherente a toda venta impuesta”. Por lo que proponía “introducir en la Ley una fórmula que, sin ser contraria a su principio de que el capital de las empresas de información pública sea español, sin embargo permita a las empresas con capital extranjero, legalmente constituidas al amparo de la legislación anterior, continuar su actividad transformándose paulatinamente en empresas españolas”. Planteaba, en fin, Millás, la posibilidad de que los extranjeros pudieran conservar su participación, pero no transmitirla *inter vivos* a otros extranjeros (Enmienda 104. En ACD, leg. 2312, num. 4).

Daily Sun. El diario, publicado en lengua inglesa, había sido pensado para los soldados americanos residentes en las bases militares estadounidenses en España. Aunque en la solicitud de inscripción en el REP figuran como fundadores los hermanos José Luis y Miguel Ortiz Cañavate y Puig Mauri, y Ramón Ortiz Fernández Urrutia, todos ellos eran en realidad testaferros del estadounidense André del Amo, verdadero propietario de la empresa.

La Administración había sido advertida de la irregularidad. En el verano de 1968, durante la tramitación del expediente de inscripción de la empresa en el REP, el MIT recibía una carta remitida a Manuel Fraga por E. Lapuerta Gómez —seudónimo tras el que se ocultaba en realidad un denunciante anónimo⁵²⁷— en la que se alertaba de la presencia de un ciudadano extranjero, el estadounidense André del Amo, tras la iniciativa del *Iberian Daily Sun*. “No creo [se dice en la carta] que sea lícito vincular, directa o indirectamente, a una potencia extranjera un órgano de opinión, un medio de comunicación de masas tan importante como un diario nacional”⁵²⁸.

Manuel Fraga responderá personalmente el 3 de septiembre afirmando que las prevenciones legales para asegurar la titularidad española de la prensa son “ineludibles para la aparición de toda publicación periódica”, lo que impedía que pudiera producirse la situación denunciada. A pesar de todo, la DGP realizará, en diciembre de 1968, una inspección a la empresa en la que tratará de esclarecer,



⁵²⁷ Así lo afirma una nota manuscrita junto a la misiva de respuesta de Fraga que había sido devuelta por el cartero.

⁵²⁸ Carta de E. Lapuerta a Manuel Fraga, 23 de agosto de 1968, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 271, exp. 2730. Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Mediterranean Publishing Co., S.A., Documentos e informes).

junto a otras ocho cuestiones concretas relativas a su economía, “si la sociedad mantiene relaciones en cuanto a su financiación, o en algún otro aspecto, con personas o entidades de nacionalidad extranjera”. No han quedado evidencias en el REP de los resultados de la inspección, cuyas conclusiones no impidieron, de cualquier modo, la inscripción de Mediterranean en el Registro. El *Iberian Daily Sun* saldría a la calle en enero de 1969, aun a pesar de que la denuncia anónima era cierta: Mediterranean Publishing Company, S.A. era en realidad propiedad del estadounidense André del Amo, según han confirmado Ramón Ortiz Fernández Urrutia (accionista y vicepresidente de la empresa entre 1968 y 1969), Miguel Fernández Mata (consejero-secretario de la empresa desde finales de 1969) y Pedro Serra Bauzá (propietario a partir de 1970)⁵²⁹. Del Amo, natural de California (donde había emigrado su abuelo Gregorio del Amo a finales del XIX), utilizó como testaferros hasta 1969 a los hermanos Ortiz Cañavate y a Ramón Ortiz Fernández Urrutia (todos ellos abogados del mismo bufete), y entre 1969 y 1972, a Fernando Bañón García⁵³⁰, con el fin de burlar el artículo 17 de la LPI. El *Iberian Daily Sun* —dirigido sobre todo a la población estadounidense residente en las bases españolas— resultó, sin embargo, un fracaso económico, por lo que, según cuentan Pedro Serra Bauzá y Miguel Fernández Mata, el estadounidense acudió en busca de “auxilio” al ministro Alfredo Sánchez Bella, quien recurrió al propio Serra para refloatar la empresa. Pedro Serra comprará, en efecto, el 50% de Mediterranean en 1970 y la totalidad de la empresa en 1972, en una operación impulsada por el Ministerio de Información y Turismo. Aunque Serra no puede asegurar que Manuel Fraga conociera la titularidad real de la empresa, ha afirmado rotundamente que Alfredo Sánchez Bella sí fue consciente y consintió esta ilegalidad; muy probablemente debido al interés que para el sector turístico tenía el diario, según la opinión de Fernández Mata.

Este caso, como el de Edica, evidencia que el nacionalismo informativo del Régimen no resistía ante intereses más tangibles y apremiantes. La prohibición del capital extranjero en la prensa española fue menoscabada allí donde chocó con dichos intereses o con los de influyentes grupos de poder, como la ACN de P. La Administración no dudó, en estos casos, en legislar *ad hoc* para preservar sus intereses, e incluso en consentir y amparar la inobservancia de su propia legalidad.

⁵²⁹ En entrevistas telefónicas mantenidas los días 6 y 7 de septiembre de 2012 (con Pedro Serra Bauzá), 7 de septiembre (con Ramón Ortiz Fernández Urrutia y con su esposa) y 11 de octubre con Miguel Fernández Mata.

⁵³⁰ Fernando Bañón compró la totalidad de las acciones de Mediterranean Publishing Co., S.A. en 1969. Desde entonces y hasta la entrada de Pedro Serra Bauzá será el propietario único de la empresa. Según Fernández Mata, es posible que Del Amo conociera a Bañón durante el tiempo en que éste trabajó para American Express; hecho que, de cualquier modo, no hemos podido confirmar.

6.2.2 Ausencia de límites a la concentración de la propiedad

La segunda nota que caracteriza la regulación tardofranquista de la propiedad de la empresa periodística es la ausencia de cualquier límite cuantitativo a la participación accionarial. Ninguna de las normas específicas sobre empresa periodística anteriores o posteriores a 1966 alude a la cuestión; de modo que ni la disposición transitoria duodécima de la Ley de S.A. de 1951, ni las órdenes relativas al REP de 1958, ni la LPI de 1966 contemplan límite porcentual alguno a la propiedad. Todo ello contribuyó a dibujar un panorama de prensa dominado por unos pocos e influyentes propietarios, que podían controlar, sin cortapisa alguna, hasta el 100% del capital de sus empresas, como comprobamos en el análisis estructural del capítulo cuarto.

La total laxitud de la legislación en esta materia tampoco despertó recelo alguno. Sólo el Consejo Nacional de Prensa aconsejó, a mediados de los sesenta, la imposición de ciertos límites —y no demasiado severos— a la concentración. El informe remitido por la comisión especial del CNP encargada del estudio del anteproyecto de LPI (anteproyecto que, por cierto, tampoco recogía límite alguno) proponía que, en caso de que la empresa periodística constituida como S.A. estuviera participada por otra sociedad por acciones, ésta última no podría estar participada por ninguna otra sociedad en más del 20% de su capital social. Según la propuesta de la comisión especial, el artículo habría quedado redactado del siguiente modo:

Cuando la forma adoptada [por la empresa periodística] sea la de Sociedad Anónima, las acciones serán nominativas [...] Si una sociedad por acciones ostenta la cualidad de socio, sus acciones serán nominativas, y la participación en ella de otras sociedades por acciones no podrá exceder en total del 20 por 100 del capital de dicha Sociedad⁵³¹.

Ningún límite propone el CNP para los accionistas que no sean, a su vez, sociedades por acciones. Parece evidente que el CNP trata de evitar el control de la empresa periodística por una Sociedad Anónima a través de otra sociedad interpuesta. Aunque tanto la comisión permanente como el pleno del CNP aprobaron esta propuesta de la comisión especial y la trasladaron al legislador, éste no la incluyó en el proyecto de Ley remitido a Cortes, donde, por cierto, ni se debatió ni se registró enmienda alguna a la cuestión. A pesar, pues, de todas las cautelas de la Administración dirigidas a obtener un conocimiento exhaustivo de los accionistas de la empresa periodística, la posibilidad advertida por el CNP de control de la empresa periodística a través de una sociedad

⁵³¹ V. Informe de la Comisión especial del Consejo Nacional de Prensa sobre el Anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta, fechado el 11 de junio de 1964. En AGA sig. (3)49.21 c. 65137.

interpuesta quedará sin regular y por tanto abierta. El legislador parecía contentarse con la garantía de que las acciones de la sociedad inversora en la empresa periodística fueran también nominativas, obviando la posibilidad nada remota del uso de representantes o testaferros de capitalistas ocultos.

La ausencia de límites cuantitativos a la propiedad de las empresas periodísticas, fueran éstas S.A. o cualquier otro tipo de sociedad mercantil, constituye, así, una de las omisiones más significativas de la LPI. Resulta obvio que en el ánimo del legislador no se encontraba la intención de limitar la participación empresarial, lo que favoreció de hecho el proceso de concentración de la propiedad en el mapa periodístico español. Ello tampoco puede resultar extraño a tenor de las verdaderas preocupaciones manifestadas por el legislador; a saber: la identificación de los socios y su eventual reclamación de responsabilidades. El propio Pío Cabanillas se encargaría de aclarar la postura del Ministerio sobre la materia en una intervención pronunciada durante la tramitación en Cortes del texto legal:

Lo que se intenta a todo lo largo de la ley [dirá entonces Cabanillas] es que no se pueda camuflar la titularidad del capital. Esa es la *finalidad fundamental*, que haya una publicidad, porque el público tiene derecho a saber quiénes son las personas que le dan la mercancía de contenido ideológico que un periódico significa [...] No se puede camuflar el montaje financiero de los periódicos por la mercancía que expiden. Por esto se ha exigido que las acciones sean nominativas y, evitando caer en el truco de hacer socios a las sociedades, se les exige, cuando este supuesto se produzca, que sus acciones sean nominativas. No hay pues inconveniente en montar esquemas de cadena. Las sociedades que estén dentro de estos requisitos, pueden formar parte de la cadena sin ningún temor (c.t. 96/10 a 96/11 de 20 de enero de 1966. En ACD)⁵³² [el subrayado es nuestro].

Por supuesto y como siempre, allí donde se alude a la publicidad para con el público hay que leer en realidad publicidad para con la Administración. El Régimen, en fin, parecía contentarse con que ninguno de los socios y propietarios pudiera escapar a su control y capacidad punitiva, lo que venía, como es obvio, favorecido y no dificultado por la concentración de la propiedad, sobre la que ya nos detuvimos en el capítulo cuarto. Según constatamos, las consecuencias de la laxitud de los límites a la concentración de la propiedad contribuyó a dibujar un panorama de prensa en el que, al morir el dictador, más la mitad de las empresas (32 de 60) estaban controladas en un 50% o más por una única familia, persona física o jurídica, y en el que cerca de la mitad de los diarios de información general se encontraban concentrados en unas pocas manos (v. 4.2.2 y

⁵³² La intervención completa puede verse en el Anexo XII

cuadros 5 y 6). Naturalmente, resulta más sencillo controlar a treinta y dos grandes propietarios, que a miles de accionistas minoritarios.

6.2.3 Identificación de la propiedad: mecanismos legales

La identificación y control de los empresarios de prensa fue la “finalidad fundamental” —por tomar las palabras de Pío Cabanillas— tanto de la legislación tardofranquista referida a la propiedad de las empresas periodísticas, como de las actuaciones administrativas en la materia. La Administración mostró, entre 1966 y 1975, un extraordinario celo por conocer a propietarios, accionistas, socios y a cuantas personas físicas o jurídicas participaran en las empresas de prensa. Con tal fin empleó los instrumentos legales que le había conferido la Ley de Prensa e Imprenta; entre ellos, la gestión de un registro en el que habían de consignarse cuantos movimientos se produjeran en el sistema y una nada desdeñable facultad de inspección de la situación financiera y estructura de propiedad de las empresas de prensa, cuyos títulos, además, debían ser nominativos y cuyos socios mayoritarios habían de ser obligatoriamente publicitados.

La atención del Ministerio de Información no se dirigió, por tanto, únicamente a quienes aspiraron a editar diarios en España y solicitaron la inscripción de una nueva sociedad o publicación en el REP; sino que se extendió a todas aquellas empresas y empresarios ya autorizados e inscritos. La identificación de la propiedad afectó, en fin, no sólo a los aspirantes, sino también a los integrantes del sistema español de prensa diaria. En el anterior capítulo examinamos el control administrativo de las dos principales vías de entrada al sistema: la constitución e inscripción registral de empresas editoras de publicaciones diarias inéditas, y la compra de cabeceras ya existentes y autorizadas. Junto a ellas, una última posibilidad de acceso —y la más prometedora, por cierto, tras la clausura de la ventanilla del REP ordenada en 1970 por Alfredo Sánchez Bella— se le presentaba a los empresarios: la adquisición de participaciones mayoritarias en empresas de prensa inscritas en el REP y, por tanto, admitidas por la Administración. Naturalmente, el Ministerio tampoco dejó de vigilar esta puerta de entrada trasera, cuyo control pasaba, como es obvio, por el conocimiento preciso de la propiedad de las empresas, así como de cuantos movimientos y transacciones pudieran afectarle.

El marco legislativo aprobado en 1966 confirió al MIT no pocas atribuciones en materia de vigilancia y control de la propiedad de la prensa española. Le otorgó, para empezar, el derecho a inspeccionar la estructura organizativa y financiera de las empresas. El artículo 25 de la norma establecía la potestad administrativa de vigilar los

medios financieros y tiradas (en base a las cuales se obtenían las compensaciones por consumo de papel prensa [v. 7.1.1.1]); mientras que los artículos 29.1.2 de la LPI y 6 del Decreto 749/66 permitían a la DGP exigir o practicar cuantas comprobaciones estimara pertinentes sobre los datos de inscripción aportados al REP⁵³³. La finalidad declarada y aparente de ambas medidas era obtener un conocimiento exacto del modo en que cubrían las empresas sus déficit, así como destapar posibles datos incorrectos o incompletos comunicados al REP. En la práctica, sin embargo, la facultad inspectora fue empleada además para descubrir debilidades e irregularidades que permitieran al Ministerio presionar y coaccionar a las empresas editoras de publicaciones problemáticas.

La LPI impuso a las empresas, por otra parte, tres obligaciones dirigidas a hacer aflorar a sus socios y accionistas. El artículo 18.1 constreñía a los propietarios de más de un 20% del capital a participar en el consejo u organismo administrador, cuya composición había de comunicarse al REP, de acuerdo con los artículos 27.1.c., 27.2 y 28. Esta disposición será examinada en profundidad en el epígrafe referido al gobierno corporativo de la empresa (6.3.2). En las páginas que siguen, centraremos el foco en las otras dos imposiciones: la contemplada en el artículo 24, que compelió a las empresas a publicar en sus periódicos los nombres de aquellos accionistas que poseyeran más de un 10% del capital; y, sobre todo, la prescrita en el artículo 20.1 que establecía, para las sociedades que adoptaran la forma jurídica de S.A., la condición de que sus acciones fueran nominativas. Ambas obligaciones se fundaban en los principios de transparencia y publicidad enunciados por la doctrina acenepista y se presentaron y justificaron como plausibles garantías para los lectores; cuando no eran, en realidad, sino eficaces garantías para la Administración. La publicidad y la nominatividad de las acciones permitió al MIT identificar —siempre que no se recurriera a testaferros, lo que ocurrió en algunos casos— a los titulares y socios y, en definitiva, a todos aquellos a quienes poder dirigir las presiones y maniobras administrativas y exigir, cuando fuera necesario, las responsabilidades preceptivas por lo publicado en sus diarios.

6.2.3.1. La inspección administrativa

La función de policía de la información que, según vimos en el anterior capítulo, asumía la Administración, incluía la facultad de inspección de los datos registrados y de

⁵³³ Esta facultad de inspección no se limitaba, además, a la tramitación de la primera inscripción en el Registro, sino que podía hacerse efectiva siempre que la empresa solicitara una renovación de la inscripción (lo que había de hacerse anualmente) y cuando se produjera una modificación de las circunstancias de inscripción, en virtud del artículo 11 del Decreto 749/66, de 31 de marzo.

la situación financiera de la empresa periodística. Así lo prescribía la LPI, que en el artículo 29.1.2º reservaba a la Administración la potestad de exigir o practicar las comprobaciones que estimara pertinentes en relación a los datos aportados por la empresa al Registro (v. también el artículo 6 del Decreto 749/66). El artículo 25, por si fuera poco, extendía estas atribuciones inspectoras sobre los medios financieros de las empresas:

La Administración [dispone el artículo titulado “Vigilancia de los medios financieros”] tendrá derecho en todo momento a conocer cómo cubren sus déficit, si los tuvieren, las Empresas periodísticas, así como a inspeccionar la contabilidad y las tiradas de sus publicaciones.

A pesar de que el artículo se presumía problemático, no suscitó demasiadas discusiones en Cortes. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley había ya eliminado la posibilidad, contemplada en el anteproyecto, de publicitar en los diarios las pesquisas de la Administración. A ello se habían opuesto el Consejo Nacional de Prensa, la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España e incluso algunos procuradores a título individual⁵³⁴; de modo que el proyecto llegó ya sin la medida a la Cámara, que no pudo evitar, en cambio, la obligación, establecida en el artículo 24, de que las empresas hicieran pública anualmente su situación financiera⁵³⁵ (v. *infra*). En Cortes se presumía una ardua discusión y negociación sobre la facultad inspectora que, sin embargo, nunca llegó a darse. El influyente informe sobre el proyecto de ley sin fecha ni firma hallado junto a los papeles considerados por el legislador pronosticaba:

Es de esperar que en las Cortes se organice un buen debate sobre este artículo. Las empresas pueden decir que sí a todo para concentrar sus tiros sobre este artículo fundamental. Pero es esencial mantener la facultad de inspección e intervención que el

⁵³⁴ Así por ejemplo, los procuradores Juan Ignacio y Torcuato Luca de Tena se quejaron del agravio comparativo que esta publicidad habría comportado para las empresas periodísticas con respecto al resto de empresas: “Extender [argumentaban padre e hijo] en perjuicio sólo de las Empresas periodísticas, el control del Estado sobre los medios financieros de éstas, aparte de que no tiene justificación aparente, supone un trato desfavor para estas empresas —que también son comerciales— en relación con las restantes [...] Aceptamos que la Administración pueda tener derecho a conocer la situación financiera de las empresas, pero no lo tiene para publicarla y ocasionar a las mismas un posible perjuicio”.

Enmienda particular al anteproyecto de presentada por los Luca de Tena, fechada el 4 de abril de 1964. En AGA, sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁵³⁵ Esta imposición también generó numerosas aunque infructuosas quejas de los procuradores. Emilio Romero, por ejemplo, con su claridad habitual, se lamentó de que la publicación de la situación financiera de las empresas iba a dejar a éstas “en cueros” (*sic*); con dos consecuencias (parece que especialmente graves para las empresas estatales, aunque Romero no las mencione): la retracción de la publicidad, y la revelación a los lectores de “cómo financieramente está desguarnecida esa empresa periodística” (c.t. 101/4 a 101/6 de 20 de enero de 1966. En ACD). Los miembros de la Comisión de Cortes, si bien no lograrán evitar la publicación de esta nota informativa sobre la situación financiera, sí conseguirán que no se publique el balance de situación de la empresa, que había prescrito el proyecto de ley.

artículo señala. Quizá fuera oportuno ‘trabajar’ desde ahora al suficiente número de procuradores para que las cosas vayan bien⁵³⁶.

Desde luego, debió de “trabajarse” diligentemente a los procuradores, dado el escaso debate que suscitó la cuestión. Incluso el procurador Juan Francisco Espinera Andrés llegó a proponer cambiar el término “derecho” por el de “obligación” de la Administración de inspeccionar las empresas; una atribución que no dejó de ejercer el MIT allí donde consideró podía servir a sus intereses.

Que esta facultad de inspección no iba a ser manejada solamente para contribuir al saneamiento económico ni a la exactitud contable de las empresas, lo sugería ya el empeño del MIT por mantenerla bajo su control. La labor efectiva de inspección no recayó, como propuso durante la tramitación en Cortes Mariano Rioja⁵³⁷, en el Cuerpo de Inspectores del Ministerio de Hacienda, sino en el Cuerpo de Inspectores del propio Ministerio de Información y Turismo⁵³⁸. En el momento de la aprobación de la LPI, el Cuerpo se hallaba integrado en el Servicio de Inspección General, formado por cinco secciones y dependiente orgánicamente del Subsecretario de Información y Turismo⁵³⁹. Sus funcionarios fueron enviados a aquellas empresas cuya estructura de propiedad deseaba conocer en profundidad la Administración, o cuyas publicaciones pretendía ésta presionar o amedrentar.

No hemos hallado, en cambio, prueba alguna de que los inspectores pisaran las sedes sociales de las empresas que más dificultades económicas padecieron durante el tardofranquismo. Diario de Pontevedra, S.A. presentó expediente de crisis en 1967 sin haber sido sometida previamente, al parecer, a inspección alguna, a pesar de arrastrar un déficit de 11 millones de pesetas (dos más que su capital social)⁵⁴⁰. Ese mismo año, Editorial Compostela, S.A. tuvo que dejar de editar el diario *La Noche* y convertir *El Correo Gallego* en vespertino debido a sus graves pérdidas económicas, sin que haya quedado evidencia en su expediente de inspecciones realizadas por el MIT⁵⁴¹. Ya en los años setenta, la Empresa Periodística Editorial Cartagena, S.A. suspendió la edición de *El Noticiero de Cartagena* por motivos económicos que, aunque conocidos por el

⁵³⁶ En AGA, sig. (3) 49.21 c. 65137.

⁵³⁷ Enmienda 88. En ACD, leg. 2312, num. 4

⁵³⁸ De acuerdo con las órdenes del MIT de 12 de diciembre de 1966 (BOE de 25 de enero de 1967) y de 12 de agosto de 1970 (BOE de 25 de agosto)

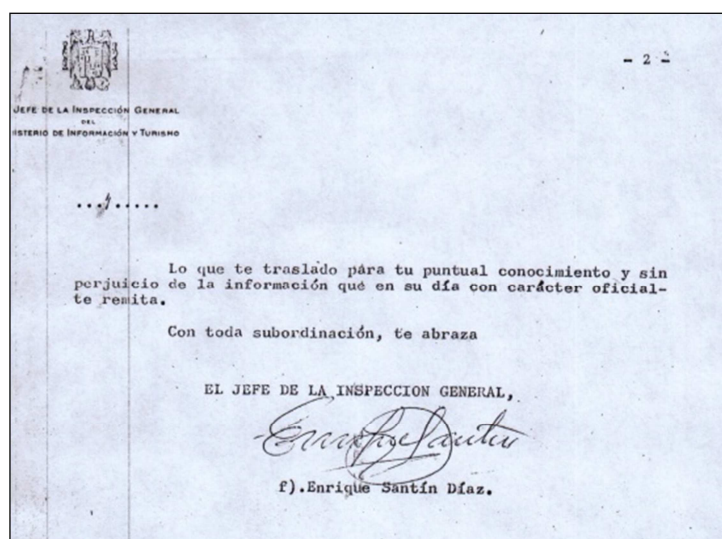
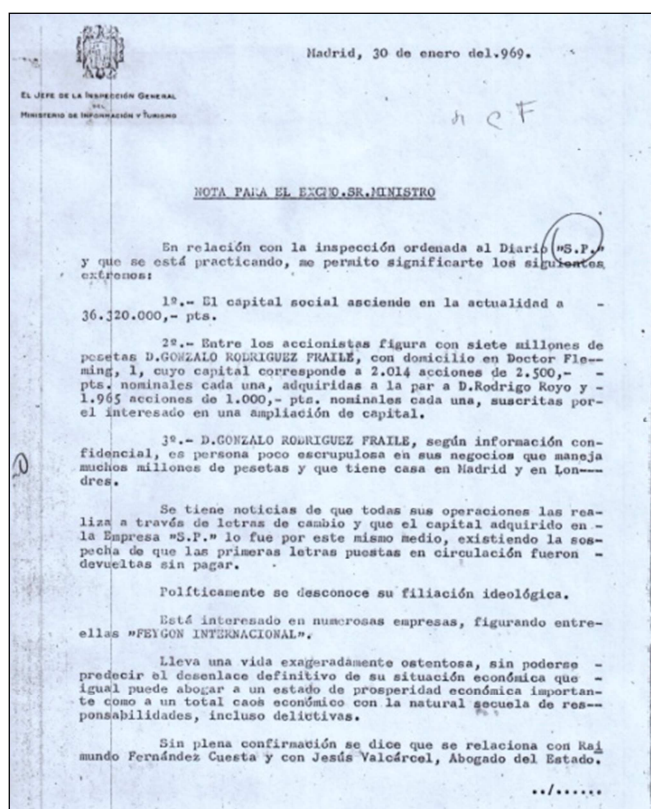
⁵³⁹ V. MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO (1965): *Organigramas*, Madrid: MIT.

Las secciones de la Inspección General se reducirán a tres de acuerdo con el artículo 8.2 del Decreto 64/1968, de 18 de enero, de reorganización del Ministerio de Información y Turismo (BOE de 20 de enero).

⁵⁴⁰ Exp. 1456, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 171.

⁵⁴¹ Exp. 324, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 37

Ministerio desde 1972, no parecieron motivar ninguna inspección⁵⁴². Como tampoco la mereció, según parece, la gravísima crisis que atravesaba Pedro García Munera, cuyos diarios —el albaceteño *La Voz de Albacete* y el alicantino *Primera Página*— fueron embargados y subastados en varias ocasiones durante la primera mitad de los setenta⁵⁴³. El único caso registrado en el que una difícil situación económica movió al MIT a ordenar una inspección amparada en los artículos 25 o 29.1.2, fue el de Servicio de Publicaciones, S.A., editora de *S-P Diario*, de línea falangista y muy alejado por tanto del reformismo de Manuel Fraga. A la inspección ordenada por éste el 14 de enero de 1969, respondió pocos días después Enrique Santín Díaz, jefe la Inspección General del MIT, con una nota sobre el accionista Gonzalo Rodríguez Fraile, de quien se daba cuenta —sin perjuicio del informe oficial que Santín promete remitir al ministro más adelante— de su participación en el capital, pero también de su proceder en los negocios, forma de vida,



relaciones políticas y filiación ideológica⁵⁴⁴. Parece evidente que el cuerpo de inspectores del MIT no limitaba sus pesquisas al modo en que las empresas cubrían sus déficit, ni era la auditoría de cuentas su principal objetivo.

⁵⁴² En el expediente de la empresa (núm. 3184, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. [9]9.1.1 c. 311), hemos hallado numerosos télex enviados desde 1972 a la Dirección General de Prensa por el delegado provincial del MIT, José de Luna Cañizares, y referidos a la situación económica de EPECSA. En 1974, se enviaron además varias cartas en las que se informaba de las gestiones realizadas para la venta de la empresa, seguidas muy de cerca por el delegado provincial.

⁵⁴³ Exp. 761, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 87. Sobre el caso de García Munera, véase el epígrafe (v. 6.4.1.2.1).

⁵⁴⁴ "Nota para el Excmo. Sr. Ministro", firmada por Enrique Santín, jefe de la Inspección General del MIT, datada en Madrid a 30 de enero de 1969. En REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 104, exp. 920.

A pesar de estas evidencias, Enrique Santín niega, no ya que las inspecciones se debieran en algunos casos a motivos ideológicos, sino incluso que su organismo realizara inspecciones de empresas periodísticas⁵⁴⁵; asegura que la Inspección General se limitó a indagar en los servicios internos del Ministerio; mientras que las averiguaciones sobre empresas periodísticas eran competencia de la Dirección General de Prensa⁵⁴⁶. Los documentos hallados confirman, bien al contrario, que durante la jefatura de Santín y posteriormente, la Inspección General del MIT realizó varias inspecciones a empresas sin problemas económicos aparentes, aunque con estructuras de propiedad sospechosas o diarios políticamente problemáticos. Tales fueron los casos de SARPE, PESA, Madrid, Diario de la Noche, S.A. y Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. En todos ellos, las inspecciones marcaron el inicio de la campaña de hostigamiento dirigida por el MIT contra ellas.

Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. (*El Correo Catalán*) fue inspeccionada en 1970, el mismo año en que Jordi Pujol Soley iniciaba su desembarco en la empresa. Las actuaciones que siguieron a la inspección revelan que ésta pudo ser ordenada como medida previa a la activación del aparato administrativo de vigilancia y presión, que trató de impedir a partir de 1973 la entrada del entonces banquero catalanista en el mapa de la prensa española. Unos años antes, SARPE había sido objeto de la primera inspección ordenada por el Ministerio tras la aprobación de la LPI, el 13 de enero de 1967, con el fin de destapar sus conexiones con la tecnocracia (Rodríguez, 2005: 316).

⁵⁴⁵ Testimonio de Enrique Santín Díaz, en entrevista personal mantenida el 8 de octubre de 2012. Santín, quien antes de ocupar la Jefatura de la Inspección General había sido delegado provincial del MIT en Lugo, La Coruña y Asturias, se define a sí mismo como un “hombre de confianza” de Fraga. De hecho, había sido abogado de la familia del ministro y era también próximo a Pío Cabanillas. Santín fue cesado de la jefatura de la Inspección General el 5 de diciembre de 1969, tras la salida de Fraga del MIT. Según su testimonio, Sánchez Bella había “pedido su cabeza”.

⁵⁴⁶ Esto no es del todo cierto. La Orden de 12 de diciembre de 1966 (BOE de 25 de enero de 1967) facultaba a la Inspección General de Servicios del Ministerio a asumir las competencias que le arrogaba el artículo 25 de la LPI; esto es: la inspección, no sólo de los servicios internos del Ministerio, sino también de las actividades que de él dependían (y entre ellas, las empresas periodísticas editoras de prensa diaria). Esto quedó confirmado por el artículo 8.1 del Decreto 64/1968, de 18 de enero, de reorganización del Ministerio de Información y Turismo (BOE de 20 de enero). El artículo creaba una sección específica dedicada a la Inspección de Actividades, integrada dentro de la Inspección General de Servicios del MIT, cuya estructura quedó desarrollada en la Orden ministerial de 25 de enero de 1968.

La diferenciación orgánica de ambos tipos de inspección (interna y de actividades) no se produjo hasta el verano de 1970. De acuerdo con la Orden de 12 de agosto de 1970, la Inspección General del MIT se dividía en una Inspección de Servicios y en una Inspección de Actividades. La primera se ocupaba de la inspección interna, y la segunda de todas aquellas ramas y actividades dependientes del Ministerio, entre ellas las empresas de prensa. Ambas dependían de la Jefatura de la Inspección General. Durante el periodo en que Santín estuvo al frente de la Inspección General (1968-1969), quedaban, pues, dentro de sus competencias, la inspección de las actividades de las empresas periodísticas.

La inspección se inscribía en el contexto de la lucha de poder interna librada entre el reformismo de Fraga y la tecnocracia opusdeísta, a la que el ministro vinculaba, no sin razón, a SARPE y PESA. Esta última sociedad sería también inspeccionada en busca de capital extranjero el 5 de julio de 1968, unos días antes de que *Nuevo Diario* fuera sancionado con 15.000 pesetas por un artículo sobre la suspensión del diario *Madrid* y dos meses antes de que el MIT le arrebatara *El Alcázar*. En el caso de Madrid, Diario de la Noche, S.A., fue la línea editorial de su vespertino lo que justificó, según vimos en el anterior capítulo, la carta del 17 de abril de 1967 de Alejandro Fernández Sordo a Rafael Calvo Serer en la que se le notificaba la inspección de la empresa (v. 5.4).

También bajo el ministerio de Fraga se ordenó la inspección de Editorial Sevillana, S.A., editora de *El Correo de Andalucía*. El diario venía manteniendo desde 1967 una línea editorial inaudita, de orientación progresista y crítica con el Régimen; lo que provocó que en diciembre de 1968 el MIT exigiera la cabeza de su director, Rafael González. El Ministerio acompañó su aviso de que caería “o [Rafael] González o el periódico” (Séaz Alba, 1974: 197) con una notificación de inspección que no parecía dirigida, desde luego, sino a apuntalar la presión sobre la empresa (v. 6.4.1.2.2), sancionada el día siete de ese mismo mes por una infracción del artículo segundo (v. 7.3.2). La misma pretensión de lograr un cambio en la dirección parecía hallarse tras la inspección ordenada en Editorial Navarra, S.A., editora del tradicionalista *El Pensamiento Navarro*. El 4 de marzo de 1969, Enrique Santín enviaba unas “notas informativas” al ministro, en las que identificaba al carlista Luis Arellano Dihinx (procurador en Cortes, vinculado al sector eléctrico y vicepresidente y propietario del 24’17% de la sociedad⁵⁴⁷) como “dueño y señor absoluto” de la empresa. El jefe de inspectores aseguraba en su informe que Arellano Dihinx, antiguo subsecretario de Justicia, guardaba personalmente las 600 acciones nominativas constitutivas del capital social “debidamente endosadas y en blanco, lo que le permite una total movilidad”⁵⁴⁸. La atención de la Administración no parecía dirigirse, tampoco en este caso, a las finanzas de la empresa, sino al “divorcio evidente entre parte del Consejo de Administración y el director del diario [Javier María Pascual], que persiste en no cambiar su línea ideológica”, según las palabras del delegado Provincial del MIT en Navarra, Jesús Joaquín de Arcenegui, en otro informe enviado un año después a la DGP⁵⁴⁹.

⁵⁴⁷ Véase Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editorial Navarra, Propiedad y Gobierno Corporativo).

⁵⁴⁸ “Notas informativas”, Enrique Santín, jefe de la Inspección General del MIT, 4 de marzo de 1969. En REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (09)9.1.1 c. 27, exp. 255.

⁵⁴⁹ Informe del delegado del MIT en Navarra, Jesús Joaquín de Arcenegui, enviado el 8 de mayo de 1970 al director general de prensa. El informe da cuenta de los cambios que se habían producido en el CA en agosto de 1969 y marzo de 1970; de los que señala: “Los cambios

Un caso similar fue el de La Voz de Asturias, S.A. editora del diario homónimo y sometida a inspección en junio de 1971. Las pesquisas del MIT destaparon la existencia de una póliza de crédito de 30 millones de pesetas no declarada al REP y suscrita con el Banco de Bilbao; así como de un crédito hipotecario firmado en 1968 con la Caja de Ahorros de Asturias y tampoco comunicado al Registro⁵⁵⁰. Con todo, los informes enviados a la DGP durante los meses siguientes por el delegado provincial del MIT en Asturias, Francisco Serrano Castilla, sugieren que la atención del cuerpo de inspectores del ministerio no estaba motivada tanto por la situación crediticia de la empresa, cuanto por la conflictividad de la línea editorial de su diario. En dichos informes, fechados los días 25 y 28 de febrero de 1972, Francisco Serrano presenta a Alejandro Fernández Sordo un “plan de actuación” (requerido por la DGP tiempo atrás) en La Voz de Asturias, S.A. El delegado plantea posibles medidas coercitivas destinadas a someter al diario; entre ellas, la degradación de redactores, la incoación de expedientes y la imposición de sanciones⁵⁵¹. En octubre y noviembre de ese año, el diario sería sancionado, en efecto, con dos multas de 50.000 y 100.000 pesetas por infracciones graves del artículo segundo de la LPI.

Otras inspecciones, en cambio, parecían fundarse más en el empeño del Ministerio porque ningún socio o accionistas escapara a su control. Así le ocurrió a Editora Balear, S.A., propietaria del *Diario de Mallorca* e inspeccionada a finales de 1970 a iniciativa del delegado provincial en Baleares, José Luis González Sobral, quien sospechaba de la existencia de accionistas con porcentajes superiores al 20% sin asiento en el CA⁵⁵²; o a Mediterranean Publishing Co., S.A., inspeccionada por la Administración, según vimos, al ser advertida de que era un estadounidense quien ostentaba la titularidad real de la

recogidos reflejan una tendencia más acusada hacia la legalidad política imperante, pero haciéndose notar que existe un divorcio evidente entre parte del Consejo de Administración y el Director del diario, que persiste en no cambiar su línea ideológica”. En REP, AGA, *ibidem*.

En julio de 1970, Javier María Pascual sería destituido como director de *El Pensamiento Navarro*. Ocuparía su lugar provisionalmente Juan Indave Ruin, hasta el nombramiento en diciembre de 1970 de José Javier Echave-Sustaeta del Villar.

Volveremos sobre este caso en el apartado del capítulo referido a la vigilancia administrativa por motivos ideológicos.

⁵⁵⁰ En exp. 1718, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 192.

⁵⁵¹ “Una de las secciones mas conflictivas en cuanto a lo nacional [dice por ejemplo Serrano en el informe de 28 de febrero] es la de Olave [...] Convendría de todos modos que perdiese grados”. O “El posible expediente por lo hospitalario [se refiere a un artículo], puede ser para estos casos [de redactores conflictivos] otro buen toque de atención”.

Informes en exp. 1718, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 192.

⁵⁵² Lo cierto es que entre 1969 y 1972, el accionariado se encontraba muy dividido. El accionista individual con mayor porcentaje era Juan March Servera, con un 8’89% del capital, seguido de sus hijos Juan y José Carlos March Delgado, quienes poseían entre los dos, el 17’03% de la empresa. Ninguno de ellos formaba parte en 1970 del CA, pero ninguno debía hacerlo por imperativo legal.

V. exp. 147, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 15

empresa. La inspección, de todos modos, no debió de llegar a conclusiones desfavorables o siquiera claras o no debieron de ser éstas atendidas por la DGP, toda vez que Mediterranean obtuvo poco después el plácet para editar el *Iberian Daily Sun*, a pesar de ser cierta su titularidad foránea. En el caso de Prensa Castellana, S.A.⁵⁵³, en cambio, la inacción administrativa no se debió a una inspección defectuosa o al rechazo de sus conclusiones, sino a la decisión discrecional de no inspeccionar la empresa aun conociendo el Ministerio (o precisamente por conocer el Ministerio) las irregularidades que allí se daban. Aunque la sociedad, editora de *Informaciones*, llegó a recibir en junio de 1972 la notificación que anunciaba una próxima inspección, ésta nunca llegó a realizarse, dado que, de haberse producido, habría obligado a la Administración a cancelar la inscripción, o bien a admitir las irregularidades existentes en la empresa, bien conocidas por el MIT gracias al aparato de vigilancia de la DGP. En vez de inspeccionar la empresa, el Ministerio optó por urgir a Prensa Castellana a poner en orden su situación “por vía amistosa y personal”⁵⁵⁴, lo que revela la discrecionalidad administrativa en el desempeño de su función inspectora, en unos casos ejercida y en otros descartada (sobre este caso nos extenderemos en el epígrafe 6.4.1.1).

6.2.3.2 Publicidad y nominatividad de las acciones

Junto a la facultad de inspección que la Ley de Prensa concedía a la Administración, hay que considerar dos obligaciones impuestas a las empresas y dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de identificación de los socios y propietarios. Ambas se inspiraban en los principios acenepistas de publicidad y transparencia, implementados en los artículos 24 y 20.1 de la LPI, respectivamente. El primero obligaba a las empresas a publicitar anualmente en sus diarios una relación de sus principales accionistas, así como los cambios significativos acaecidos en la sociedad cuando éstos se produjeran:

1. Con independencia del carácter público del Registro de Empresas Periodísticas, anualmente, para información de los lectores, en las publicaciones periódicas se hará constar en espacio preferente los nombres de las personas que constituyen sus órganos rectores, los de los accionistas que posean una participación superior al 10 por 100 del patrimonio social y una nota informativa de su situación financiera.

⁵⁵³ En exp. 757, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 86.

⁵⁵⁴ Según palabras de un informe sin membrete ni firma de 3 de diciembre de 1973 sobre el proceder administrativo el año anterior con la empresa. En exp. 757, en REP, AGA, *ibídem*.

2. Del mismo modo se hará constar, en el momento en que se realice, cualquiera de las modificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley⁵⁵⁵.

Como era de esperar, el artículo fue muy combatido por los representantes de empresas periodísticas durante la elaboración y tramitación del texto legal. Si bien no prosperó su pretensión de eliminarlo por completo, sí lograron al menos que sólo hubiera que publicitar a los propietarios con más de un 10% del patrimonio social. El anteproyecto de ley no fijaba, en efecto, porcentaje alguno a partir del cual hubiera que hacer público el nombre del titular del paquete accionario, por lo que obligaba a publicar los datos de todos y cada uno de los accionistas de la empresa. El Consejo Nacional de Prensa propuso en sus informes la supresión de toda información referente a los accionistas; propuesta que, sin embargo, no fue recogida por el legislador en el proyecto remitido a Cortes. Fue allí, en la Comisión de Cortes, donde se libraría la principal batalla. Varias enmiendas abundaban en la propuesta del CNP y reclamaban la eliminación de toda información relativa al accionariado; así lo pidieron Eduardo Villegas (enmienda num. 107) y Antonio González (enmienda 76). En ésta última (firmada también por los acenepistas Mariano Rioja, Luis Sánchez Agesta, Javier Ibarra y Alberto Martín Artajo) se argüía:

Entendemos que al público lector del periódico, no le afecta ni le interesa, especialmente, conocer los nombres de los accionistas [...] Le interesa y valora las publicaciones, en relación con el interés que le merecen y con el precio que paga por ellas [...].

La publicación de los nombres de los accionistas, además de violar la intimidad personal de quienes han contribuido a la fundación o sostenimiento de una empresa con finalidad ideológica, se presta a que puedan ejercer sobre ellos presiones que la Ley trata, por otro lado, de evitar (Enmienda 76. En ACD, leg. 2312, num. 4).

Durante la discusión en la Comisión no fueron pocos quienes se sumaron a esta postura, hasta el punto de que puede hablarse de unanimidad entre los procuradores que, el 20 de enero de 1966, hicieron uso de la palabra para exigir la supresión de la publicación de los nombres de los accionistas. Torcuato Luca de Tena, por ejemplo, aludía, para el caso de Prensa Española, a listas interminables y difícilmente publicables de tres o cuatro mil accionistas. Finalmente triunfó, como era habitual, la solución acenepista. La ponencia acabará por reconocer la obligación de publicitar únicamente los nombres de los accionistas con porcentajes significativos de participación patrimonial; porcentajes que

⁵⁵⁵ El artículo 28 se refiere a modificaciones “en la estructura de la empresa, en las transmisiones de propiedad o de acciones, las alteraciones en la composición de los órganos directivos o administradores, el cese o sustitución del Director, los nombramientos o ceses de Redactores y, en general, cuantos actos signifiquen un cambio de alguna de las circunstancias de inscripción [en el REP] [...]”.

quedarán fijados en un mínimo del 10% del capital social a propuesta de Javier Martín Artajo y Mariano Rioja, a la sazón presidente y consejero delegado de Edica, respectivamente (Enmiendas 69 y 88, respectivamente; en ACD, leg. 2312, num. 4). La ACN de P lograba así, una vez más, imponer sus principios doctrinales sin lesionar los intereses empresariales de la Editorial Católica, ninguno de cuyos accionistas alcanzaba individualmente el 10% del capital.

La nominatividad de las acciones quedaba pues, tras las modificaciones propagandistas introducidas en el artículo 24, como la única condición que permitía a la Administración la identificación de la propiedad *íntegra* de la empresa periodística; lo que la convertía en el mecanismo legal más incisivo de todos. No se trataba, en cualquier caso, de una obligación inédita en el ordenamiento jurídico español. Las órdenes de 10 de enero y 4 de octubre de 1958 de creación y funcionamiento del REP (BOE de 13 de febrero y 22 de octubre, respectivamente) establecían ya la comunicación de todos los socios y accionistas con participaciones en la empresa como condición ineludible de la inscripción. El artículo quinto de la primera determinaba la obligatoriedad de depositar en el MIT una copia de los estatutos sociales, además de, “cuando de ello no se deduzca la titularidad o participación de los socios, relaciones en que consten dichos datos [...]”. Se prevén ya, además, condiciones especiales para las sociedades por acciones:

En las constituidas en forma de Sociedades por Acciones [continúa el artículo quinto], éstas habrán de ser *nominativas*, y se completará su documentación además con relaciones de accionistas, especificando la clase y número de acciones que cada uno de ellos posea [...].

Las empresas asumen también la obligación de notificar al MIT, en un plazo no superior a diez días, toda transferencia de acciones; así como los cambios de propiedad, en las empresas individuales; y de titularidad, en el caso del resto de sociedades mercantiles (art. 7). A pesar de todas estas cautelas, la medida pronto se reveló ineficaz: según un informe de 2 de noviembre de 1965 sin firma ni membrete enviado al Servicio de Publicaciones Periódicas de la DGP⁵⁵⁶, no fueron pocas las empresas periodísticas que, al solicitar su inscripción en el REP, aportaron relaciones de accionistas en las que figuraban como tales otras sociedades; lo que obligó al MIT a dictar una nueva Orden el 30 de diciembre de 1958, cuyo artículo segundo establecía:

Si la titularidad o participación de los socios de las Empresas que soliciten su inscripción en el Registro, perteneciera a su vez a otras sociedades, cualquiera que

⁵⁵⁶ El informe se encuentra en el expediente registral de La Voz de Asturias, S.A.: exp. 1718, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 192. V. *infra* y Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (La Voz de Asturias, Documentos e Informes)

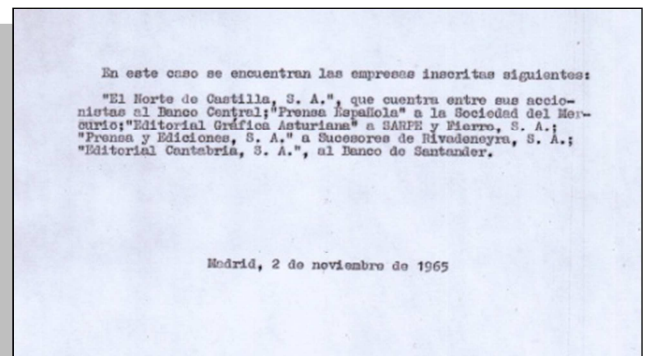
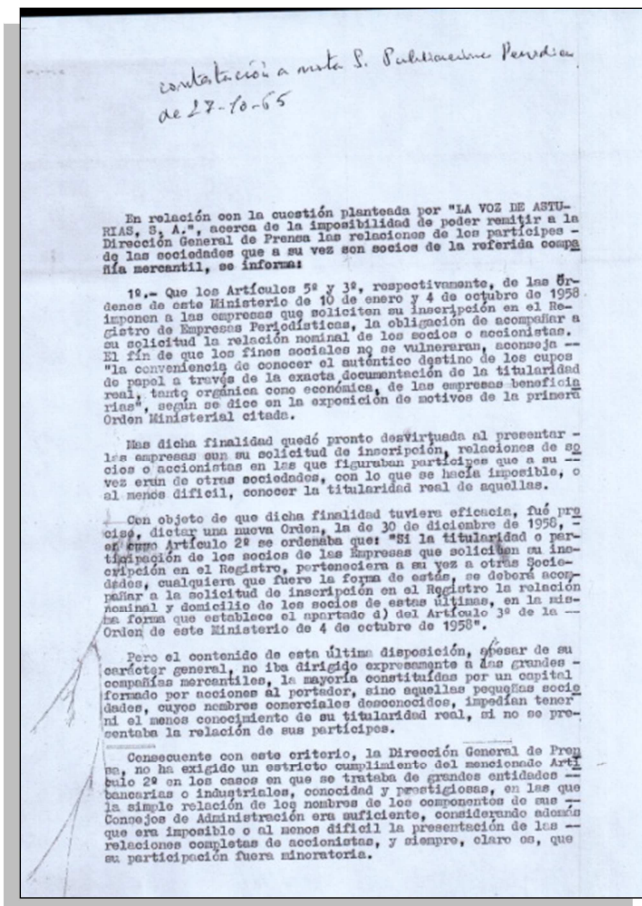
fuere la forma de éstas, se deberá acompañar a la solicitud de inscripción en el Registro la relación nominal y domicilio de los socios de estas últimas [...].

La medida, con todo, fue aplicada con cierta laxitud hasta 1966, como revelan los informes hallados en el expediente registral de La Voz de Asturias, S.A. Constituida en 1963 para editar el diario *La Voz de Asturias*, la empresa se había convertido en Sociedad Anónima el 1 de julio de 1964. Muchos de sus accionistas principales eran entonces entidades financieras y sociedades ligadas a los sectores ferroviario, naval y minero-metalúrgico⁵⁵⁷, cuyos socios y propietarios no habían sido comunicados al REP. La Delegación Provincial del MIT en Oviedo no dejó de informar de la situación al director general de prensa, quien, a su vez, trasladó el caso al Servicio de Publicaciones Periódicas. El 2 de noviembre de 1965, el Servicio recibía el informe al que hacíamos referencia y en el que se explicaba el proceder de la DGP con respecto a la identificación de los socios de grandes sociedades con participaciones en empresas periodísticas. Tras advertir de que el artículo segundo de la Orden de 30 de diciembre de 1958 “no iba dirigido expresamente a las grandes compañías mercantiles” sino a pequeñas sociedades ignotas para la Administración, la nota concluía:

Consecuentemente con este criterio, la Dirección General de Prensa, no ha exigido un estricto cumplimiento del mencionado artículo 2º en los casos en que se trataba de grandes entidades bancarias o industriales, conocidas y prestigiosas, en las que la simple relación de los nombres de los componentes de sus Consejos de Administración era suficiente, considerando además que era imposible o al menos difícil la presentación de las relaciones completas de accionistas, y siempre, claro es, que su participación fuera minoritaria⁵⁵⁸.

⁵⁵⁷ Entre ellas, Faro de Vigo; Sociedad Tudela Veguín; Sociedad Banco Asturiana de Industria y Comercio; Sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico; Sociedad Banco Herrero; Sociedad de Ferrocarriles Vasco Asturiana; Compañía de Navegación Vasco Asturiana; Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias; Sociedad Industrial Santa Bárbara y Sociedad Águila Negra. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (La Voz de Asturias, Documentos e Informes).

⁵⁵⁸ Informe en exp. 1718, en REP, AGA, *ibídem*.



El celo administrativo por conocer a todos los socios de las empresas periodísticas aumentará notablemente con la aprobación de la LPI; especialmente en lo que se refiere a las empresas con forma de Sociedad Anónima. El resto de sociedades mercantiles son únicamente obligadas, para su inscripción en el REP, a identificar a la persona natural o jurídica titular de la empresa y a consignar los estatutos de la sociedad (art. 27). Desaparece, en cambio,

la obligación impuesta en 1958 de completar esta información con los datos de los socios en caso de que estos no puedan ser deducidos de los estatutos. Condiciones diferentes habrán de afrontar las S.A. El artículo 20.1 prescribe una vez más el carácter nominativo de las acciones; obligatorio también para aquellas sociedades que participen en empresas periodísticas:

Quando la forma adoptada [reza el texto] sea la de sociedad anónima, las acciones serán nominativas e intransferibles a extranjeros. Si la cualidad de socio la ostenta una sociedad por acciones, será necesario que sus acciones sean también nominativas e intransferibles a extranjeros, así como que la actividad periodística figure estatutariamente entre las que formen parte de sus fines sociales.

Por si fuera poco, la aplicación del precepto ya no se limitará, como había ocurrido hasta entonces, a aquellas sociedades pequeñas y/o desconocidas y con participaciones minoritarias en la empresa periodística. La adaptación al artículo 20.1 de la LPI conminaba a las sociedades con participaciones en prensa —por insignificantes que éstas fueran— a incluir la actividad periodística entre sus fines sociales y a convertir sus acciones en nominativas, o bien a vender sus títulos. Muchas optaron por esto último, ya

cediéndolos a terceros y abandonando la inversión⁵⁵⁹; ya, como en los casos del Banco Santander o de la Banca Masaveu, vendiéndolos a fiduciarios vinculados a la sociedad y manteniendo así un control indirecto sobre las acciones⁵⁶⁰. Sea como fuere, la cesión de títulos a particulares no contribuyó a una mayor transparencia de la propiedad ante los lectores. Aquel de ellos que, tras la conversión de los títulos en nominativos, se interesara por la relación de accionistas de, digamos, la editora de *Informaciones*, se encontraba, no con el Banco de Santander, sino con fiduciarios de sus títulos, cuya vinculación con la entidad no podía resultar sino desconocida para el lector no avisado. Claro que, de cualquier modo, tampoco iba dirigida al lector de prensa la medida. La finalidad de la nominatividad de las acciones de las empresas periodísticas y de sus sociedades inversoras no estaba destinada a satisfacer el derecho de los lectores a conocer quién editaba sus diarios, sino, una vez más, a garantizar la identificación y control administrativo de todos los socios y accionistas.

A pesar de todas las cautelas adoptadas por la Administración para que ningún socio de la empresa periodística escapara a su control, la LPI había dejado un resquicio legal que permitiría a una entidad financiera mantener sus inversiones en prensa sin necesidad de vender sus acciones ni cambiar sus estatutos. El artículo 20.1 obligaba, como hemos visto, a las sociedades con participaciones en empresas periodísticas a tener acciones nominales y la actividad periodística entre sus fines sociales. Nada decía la Ley, sin embargo, del supuesto de que esta segunda sociedad fuera, a su vez, propiedad de otra sociedad por acciones. La omisión no era menor, toda vez que dejaba un vacío legal

⁵⁵⁹ Esto hará, por ejemplo, el Banco de Santander con sus 20 acciones de Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A. (*El Diario de Ávila*) vendidas a la Caja Central de Ahorros y Préstamos de Ávila el 27 de junio de 1968; así como la Cía. Inmobiliaria Aragón, S.A., propietaria de 32 acciones de Heraldo de Aragón, S.A. (*Heraldo de Aragón*) vendidas en 1967 a las propietarias de la editora, las hermanas Monpeón de Nó. También la Obra Tutelar Agraria y la Compañía General de Tabacos de Filipinas hubieron de deshacerse de sus 15 y 62 acciones, respectivamente, de Barcelonesa de Publicaciones, S.A. (*Diario de Barcelona*) en 1969 a instancias de la DGP y para no tener que modificar sus estatutos societarios.

⁵⁶⁰ Algunas sociedades optaron, en efecto, por ceder sus acciones en la empresa periodística a particulares vinculados con la sociedad, manteniendo así un control indirecto sobre las mismas. Así obró, por ejemplo, el Banco de Santander con sus inversiones en Prensa Castellana, S.A. (*Informaciones*) y Editorial Cantabria, S.A. (*El Diario Montañés*): el banco mantuvo hasta 1974 una importante participación accionarial en Prensa Castellana mediante la distribución de sus acciones entre hombres ligados a la entidad y logró preservar cierto influjo sobre Editorial Cantabria, S.A. al ceder en 1967 sus 27 acciones a José María Jado Canales, presidente de la editora y de Acción Católica, pero también vocal del Santander. Del mismo modo que Ferrería del Urola, S.A., que vendió el 5'55% que poseía del capital de Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. (*El Diario Vasco*) a, entre otros, los hermanos Echevarría Aguirre, vinculados a la empresa. Más evidentes incluso fueron los casos de la Banca Masaveu, que en 1969 vendió su 1'25% de Editorial Gráfica Asturiana, S.A. (*Región*) a Elías Masaveu Alonso del Campo, ligado obviamente al *holding* industrial y financiero de su familia; y de Aragonesa de Fincas y Terrenos, S.A., cuyas 52 acciones de Heraldo de Aragón, S.A. (*Heraldo de Aragón*), pasaron en 1967 a manos de su presidente, José María Escoriaza y Castillón.

que permitía la creación, por parte de las compañías propietarias de empresas periodísticas, de sociedades interpuestas que tuvieran la actividad periodística entre sus fines sociales y que eximieran a la verdadera propietaria de la nominalidad de las acciones. Este subterfugio había sido previsto en cierto modo por el anteproyecto de ley, que imponía, en caso de que la empresa periodística con forma de S.A. se encontrara participada por otra sociedad por acciones, la necesidad de que “los accionistas de esta última sean *personas físicas* y que sus acciones sean también nominativas e intransferibles” [la cursiva es nuestra]. La condición del carácter físico de los accionistas fue eliminada del proyecto de ley, introduciendo así la posibilidad de que los accionistas de la sociedad inversora en la empresa periodística fueran, a su vez, otras personas jurídicas como, por ejemplo, sociedades por acciones. De este modo, una empresa A podía crear una sociedad interpuesta B que invirtiera en una empresa periodística C editora de un diario D. Dado que la Ley sólo exigía acciones nominativas y tener por objeto social la actividad periodística a las empresas C y B, la verdadera propietaria, A, quedaba exenta de tales condiciones y protegida de la vigilancia administrativa.

Esta argucia fue empleada durante el tardofranquismo por la Unión Industrial Bancaria (Bankuni3n), filial del Banco Atl3ntico y vinculada al Opus Dei. A finales de los sesenta y principios de los setenta, Bankuni3n logr3 preservar sus participaciones en cinco empresas periodísticas españolas (editoras de seis diarios de informaci3n general) a trav3s de una red de sociedades interpuestas encabezada por Jos3 Ferrer Bonsoms y desentrañada por la Administraci3n a trav3s del aparato de vigilancia del MIT. Ferrer Bonsoms⁵⁶¹, banquero y supernumerario del Opus Dei, hab3a sido consejero delegado del Banco Atl3ntico desde la compra de la entidad por un grupo de industriales vascos y catalanes, en 1961. En 1968 pasa a ocupar la vicepresidencia del banco y centra sus esfuerzos en Bankuni3n, la banca industrial presidida por 3l mismo y creada por el Atl3ntico en 1963, al calor de la reforma financiera del año anterior ideada por los ministros opusde3stas Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio⁵⁶². Adem3s de obtener concesiones del Gobierno tecn3crata como la construcci3n de la red de autopistas en Cataluña⁵⁶³, Bankuni3n llegar3 a controlar en esos años, de forma indirecta y bajo la

⁵⁶¹ Jos3 Ferrer Bonsoms hab3a estudiado comercio en Barcelona y desarrollado su carrera en la banca bajo la protecci3n de F3lix Millet Maristany. Millet le hab3a introducido en el Banco Popular, en el que trabajar3a entre 1956 y 1961, cuando pasa al Atl3ntico, llamado por Casimiro Molins. Una biograf3a completa del personaje se encuentra en Cabana, 2006.

⁵⁶² En noviembre de 1962, el R3gimen hab3a impulsado la creaci3n de bancas industriales por parte de bancos comerciales con el fin de financiar la emergente industria española. V. Decreto-Ley 53/1962, de 29 de noviembre de 1962. El Decreto ven3a a desarrollar la base 6ª de la Ley 2/1962, de Reforma Bancaria aprobada ese mismo año.

⁵⁶³ Concesiones, por cierto, no exentas de pol3mica, dadas las conexiones entre el Atl3ntico y el Gobierno: el presidente del banco, Casimiro Molins, era cuñado de Laureano L3pez Rod3,

presidencia de Ferrer Bonsoms, una suerte de cadena de prensa regional formada por hasta seis diarios de información general radicados en Madrid y Castilla.

Desde el Banco Atlántico-Bankuni3n se tramará una pequeña maraña societaria, con José Ferrer Bonsoms en la cúspide y la Sociedad An3nima de Peri3dicos y Revistas, S.A. (SARPE) como empresa clave. SARPE había sido fundada el 15 de diciembre de 1951 por Alberto Ullastres Calvo (ministro de Comercio entre 1957 y 1965), los financieros Luis Valls Taberner (vicepresidente del Banco Popular) y José V3ctor de Francisco Gracia, y los profesores Antonio Fontán P3rez y José Vila Selma. Todos ellos pertenec3an al Opus Dei. Adem3s de editar publicaciones como *La Actualidad Espa3ola*, *La Actualidad Econ3mica*, *Telva*, *Mundo Cristiano* o *Tria*, desde 1966 SARPE contaba con participaciones en dos empresas period3sticas editoras de prensa diaria y ostentaba la mayor3a accionarial en otras tres⁵⁶⁴: pose3a el 76'92% de Editorial Cat3lica Abulense P3o XII, S.A. (*Diario de 3vila*); el 58'07% de Diario de Le3n, S.A. (*Diario de Le3n*); el 52'37% de Diario Regional, S.A. (*Diario Regional*); el 10% de Editorial Gr3fica Asturiana, S.A. (*Regi3n*); y el 9'54% de Prensa y Ediciones, S.A. (*El Alc3zar*, *Nuevo Diario*), a los que había que sumar el 11'81% que pose3a directamente el presidente de SARPE⁵⁶⁵.

¿Qu3en estaba detr3s de SARPE? En junio de 1968, completada la 3ltima ampliaci3n de capital aprobada el a3o anterior, la Sociedad ten3a 758 accionistas, la mayor parte de ellos propietarios de peque3as participaciones. Destacaban, sin embargo, en la estructura accionarial, tres entidades: la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag3n y Rioja, con un 10% del capital; y, sobre todo, Promociones Gr3ficas Industriales, S.A. (PROGINSA) y Prensa Unida, S.A. (PUSA), con un 16'95% la primera, y un 14'14%, la segunda. Ni PROGINSA ni PUSA estaban obligadas a tener entre sus fines sociales la actividad period3stica, ni a contar con acciones nominativas, a pesar de que controlaban conjuntamente el 31'09% de SARPE, muy por delante del segundo

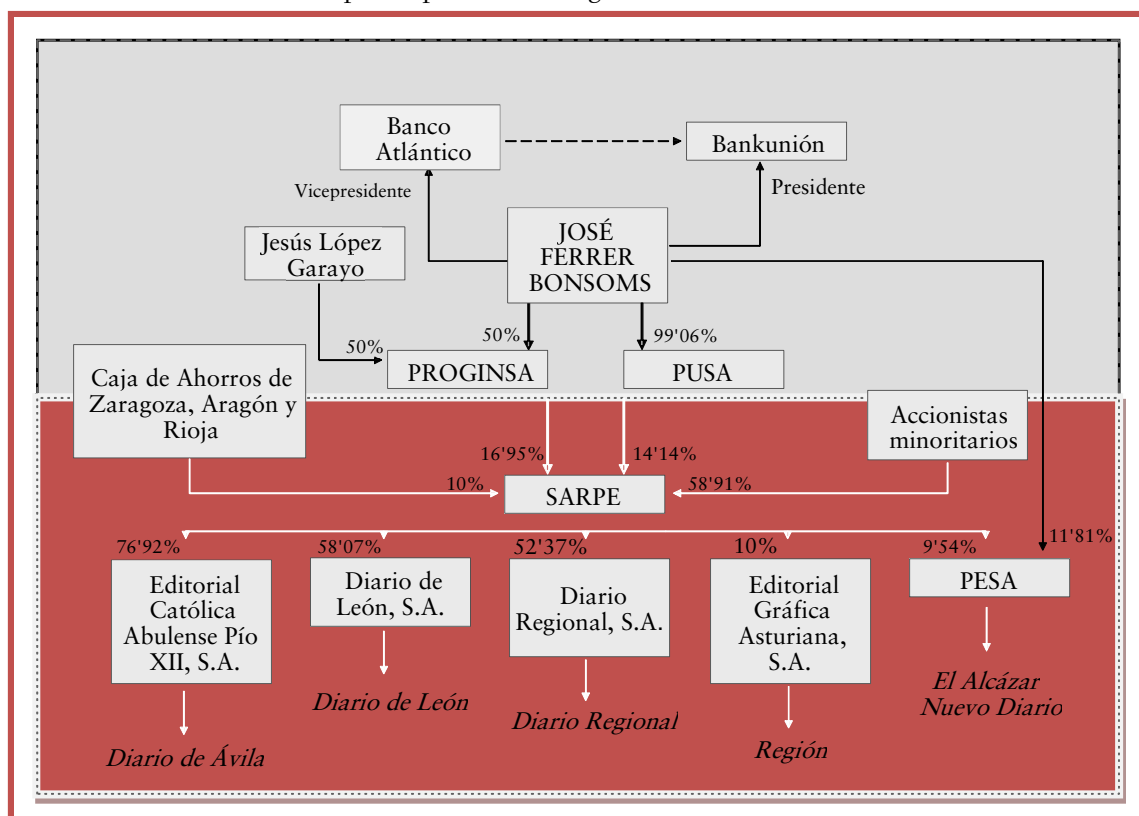
ministro y hombre fuerte del sector tecn3crata; y ambos eran, como Ferrer Bonsoms, miembros del Opus Dei. Las suspicacias se alimentaron del hecho de que la oferta presentada por el grupo liderado por Bankuni3n para construir y gestionar la red de carreteras catalanas era dos mil millones de pesetas m3s caro que el presentado por la otra *joint-venture* que aspiraba a la concesi3n (Cabana, 2006: 614).

⁵⁶⁴ V3ase el apartado de propiedad de cada una de estas empresas period3sticas en Ap3ndice de empresas period3sticas (1966-1975)

⁵⁶⁵ Junto a SARPE, otra empresa dominaba a finales de los sesenta el capital de PESA: la Industrial Gr3fica Fuenfr3a, S.A., que pose3a en 1967 el 43'17%. Esta empresa era, a su vez, propiedad del Banco Atlántico-Bankuni3n, de modo que el banco controlaba de forma mayoritaria, a trav3s de SARPE e IGF, S.A., PESA. A partir de 1967, el capital de PESA en propiedad de Industrial Gr3fica Fuenfr3a se repartir3a entre peque3os accionistas ligados al Atlántico (como Rafael Echaide, José Mar3a Molero, Guillermo Ba3ares, etc.), entre ellos, José Ferrer Bosoms, quien, una vez completada la ampliaci3n aprobada en marzo de 1967, pose3a directamente el 11'81% de PESA, a los que había que sumar el 9'54% en poder de SARPE.

mayor accionista, la Caja de Ahorros. Tras ambas sociedades se encontraba, por supuesto, José Ferrer Bonsoms, quien ocupaba además en 1967 la presidencia de SARPE. El banquero era propietario y presidente de PUSA, además de accionista de referencia (con un 50%) de PROGINSA, que había sido fundada en 1967 por Bankunión. De este modo, el Banco Atlántico-Bankunión, a través de Ferrer Bonsoms, del entramado PROGINSA-PUSA-SARPE y de otros accionistas particulares, dominaba hasta cinco empresas periodísticas y seis diarios de información general sin aparecer en relación alguna de accionistas, ni tener que vender sus acciones o cambiar sus estatutos societarios para convertir sus títulos en nominales e incluir la actividad periodística entre sus fines sociales.

FIGURA 4⁵⁶⁶: Empresas periodísticas ligadas al Banco Atlántico en 1967

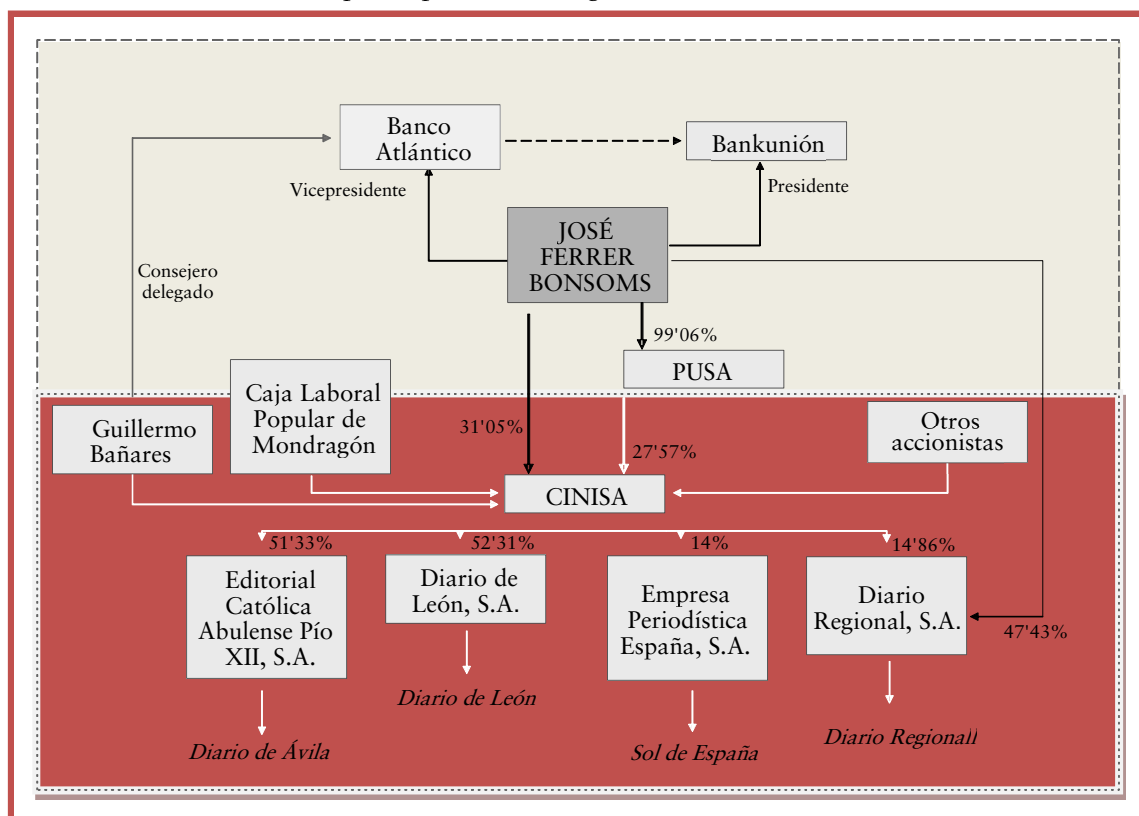


Fuente: elaboración propia

En los años setenta, la estructura de la trama variará sensiblemente, aunque no los protagonistas. En 1970, SARPE vende sus participaciones en las empresas periodísticas a PESA, también controlada como hemos visto por Ferrer Bonsoms-Banco Atlántico-Bankunión. Al año siguiente, PESA cede a la Corporación de Inversiones Industriales, S.A. (CINISA) los paquetes comprados el año anterior a SARPE. El baile de acciones no alteraba, sin embargo, su propiedad real. CINISA, fundada en Zaragoza en 1969,

⁵⁶⁶ Las empresas situadas en el cuadrante superior quedaban fuera del control administrativo previsto en la LPI.

participaba desde 1971 en el accionariado de SARPE y se encontraba también controlada por José Ferrer Bonsoms, quien poseía un 31'05% de la sociedad de forma directa, y un 27'57% de forma indirecta a través de PUSA. El resto de acciones se encontraba en poder de María Gambarte Senosiain (12'65%) y su hijo Javier Rico Gambarte (0'12%), Pascual Saorín (12'53%), la Caja Popular de Mondragón (7'52%), José Ródenas Moreno (6'26%), Guillermo Bañares Martí, consejero delegado del Banco Atlántico (1'25%); y Álvaro de Toro Moreno (0'12%). A pesar de la desaparición de PESA y de la venta de algunas participaciones, CINISA mantendrá durante la primera mitad de los setenta el control de su cadena de empresas periodísticas castellano-leonesas: Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A. (de la que poseía el 51'33% en 1975); Diario Regional, S.A. (que llegaría a controlar en un 99'89% en 1972; porcentaje que se reduciría al 14'86% en 1975, a los que hay que sumar, de todos modos, el 47'43% que poseía directamente José Ferrer Bonsoms); y Diario de León, S.A. (52'31% en 1975). Lejos de replegarse, el último año del franquismo, CINISA suscribiría siete millones de pesetas de la ampliación aprobada en mayo por Empresa Periodística España, S.A., editora de *Sol de España*, lo que le permitirá controlar un 7'78% de su capital.

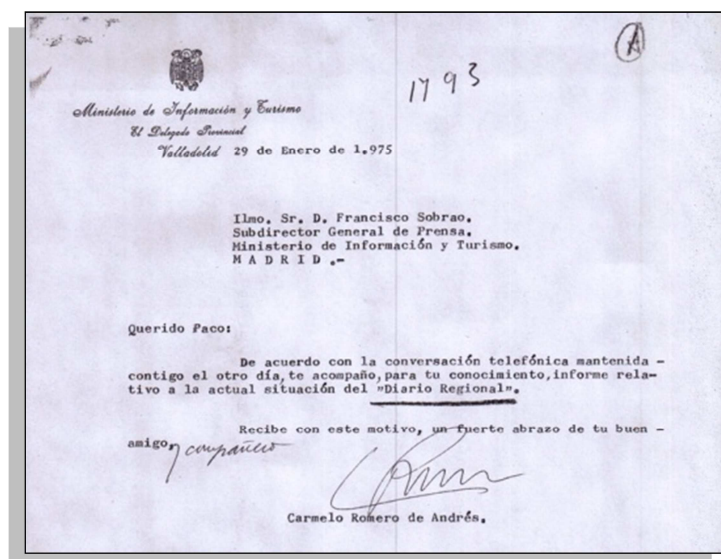
FIGURA 5⁵⁶⁷: Empresas periodísticas ligadas al Banco Atlántico en 1975


Fuente: elaboración propia

El Banco Atlántico y su filial industrial, Bankunión, lograban de este modo —a través de un entramado societario (tampoco demasiado intrincado, por lo demás) y de José Ferrer Bonsoms— burlar las medidas legales dirigidas a mantener la propiedad de la empresa periodística bajo el control administrativo. El vacío legal dejado por el artículo 20.1 de la LPI posibilitó la creación, por parte del Banco Atlántico y de Bankunión, de sociedades interpuestas tras las que mantener la propiedad de sus diarios de información general alejada del foco del MIT, que sólo reclamaba los datos y ponía condiciones a la empresa periodística y a las sociedades con participaciones directas en ella (aquellas incluidas en el cuadrante inferior de los esquemas de propiedad). Esto no implicaba, de todos modos, que la maniobra fuese desconocida para la Administración, que contaba con más recursos que los estrictamente legales para conocer la titularidad de las empresas situadas en el cuadrante superior de los esquemas de propiedad (figuras 4 y 5); esto es: la titularidad real de la prensa diaria.

⁵⁶⁷ Como en el esquema anterior (Figura 4), las empresas del cuadrante superior (en la zona clara) son las que quedan fuera del control legal de la Administración, a excepción de José Ferrer Bonsoms, que sí estaba controlado, aunque sólo como accionista directo de CINISA (de ahí su representación en el cuadrante superior en rojo oscuro).

La Dirección General de Prensa hubo de recurrir a sus servicios de información para desentrañar la maraña societaria pergeñada por los hombres del Atlántico. Tanto en los expedientes registrales de SARPE y PESA, como en los de Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A.; Diario de León, S.A.; y Diario Regional, S.A.⁵⁶⁸ fueron archivados informes sobre el accionariado y gobierno corporativo de las empresas de la trama SARPE, PESA, PROGINSA, PUSA y CINISA, cuyos vínculos con el Banco Atlántico-Bankunión no quedaron, pues, ocultos a los ojos de la Administración.



En los casos de Diario de León, S.A. y Diario Regional, S.A., la DGP completó además sus pesquisas con informes de la Oficina de Enlace del MIT y sus Delegaciones Provinciales. El 30 de noviembre de 1973, el director general de prensa demandaba al jefe de la Oficina de Enlace del MIT, Francisco Castrillo, informes sobre un nuevo director propuesto para el *Diario de León*, Francisco

Javier Olave, y sobre el presidente de la empresa editora, Ángel Panero Flórez. La petición llegaba tras la última ampliación de capital, que había dejado Diario de León, S.A. en poder de CINISA, con un 52'31% del capital⁵⁶⁹. Dos años antes, la Dirección General se había interesado ya por la entrada de la Corporación de Inversiones en Diario Regional, S.A. El 4 de agosto de 1971, el delegado provincial del MIT en Valladolid, Carlos Sánchez Álvarez, escribía al director general de prensa una carta sobre el nuevo presidente de la empresa editora, Emilio Fernández de Caso. Catedrático de Escuela de Comercio y miembro del Opus Dei, Fernández de Caso era señalado como antiguo consejero de SARPE y PESA, y hombre “vinculado al Banco Atlántico a través de

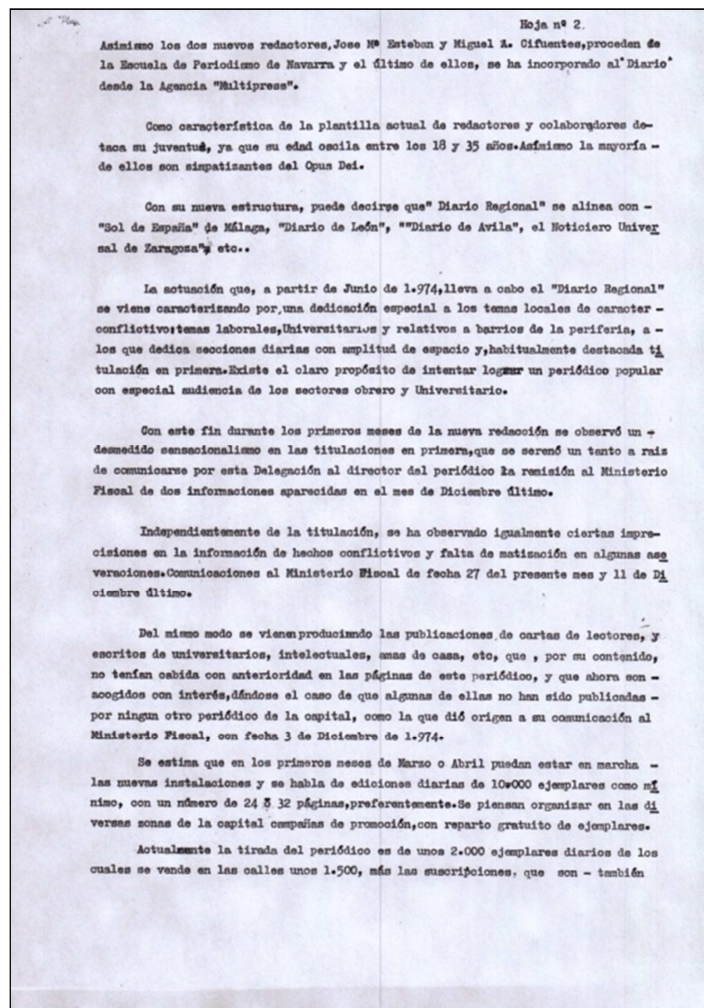
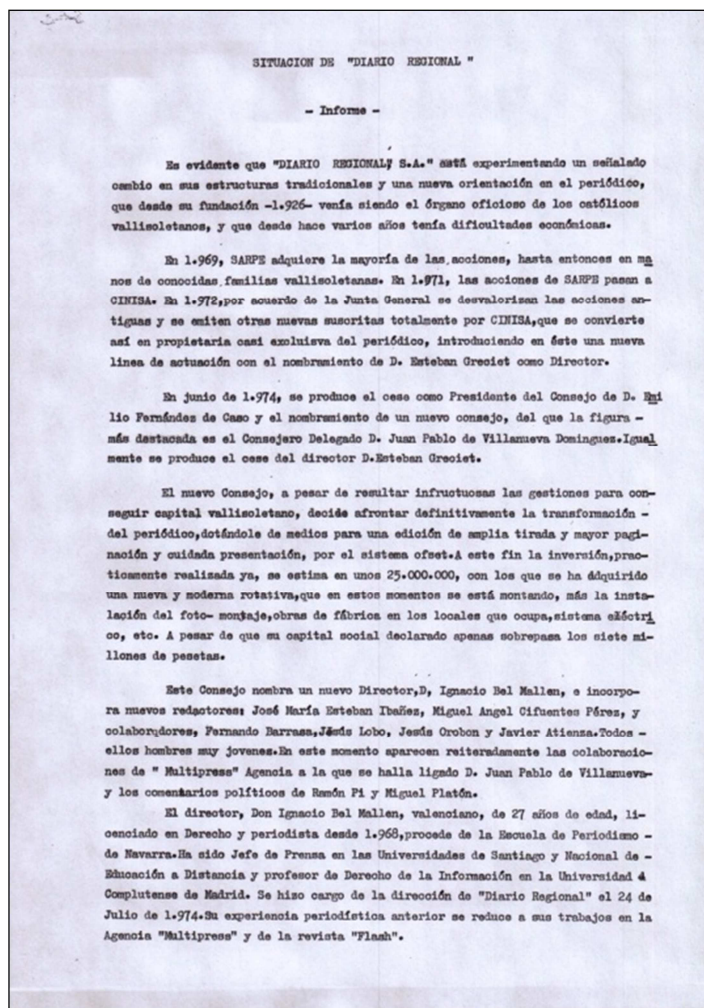
⁵⁶⁸ El expediente de SARPE (número 1173) se encuentra en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1, cajas 141 y 142; y el de PESA (núm. 1201) en REP, AGA, *ibidem*, c. 145. Los de las tres empresas periodísticas castellano-leonesas se encuentran en las cajas 166 (Diario de León, S.A., exp. 1399), 164 (Editorial Católica Abulense Pío XII, S.A., exp. 1374) y 198 (Diario Regional, S.A., exp. 1793).

⁵⁶⁹ La contestación llegaría firmada por Francisco Castrillo Mazeres, jefe de la Oficina de Enlace, el 4 de enero de 1974. En la nota sobre Panero Flórez se le identificaba como “persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Políticamente se le conceptúa persona de orden e identificado con los Principios Fundamentales del Movimiento y sus Instituciones, circunstancias que concurren en sus familiares más allegados”. Cartas en Informes en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 166, exp. 1399. Pueden consultarse en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editorial católica Abulense Pío XII, Documentos e Informes).

Francisco Bofill”. A principios de 1975, la Delegación Provincial vallisoletana volvía a informar a la DGP sobre Diario Regional, S.A. El 29 de enero, el delegado, Carmelo Romero de Andrés, respondía a una demanda telefónica de información sobre la empresa formulada días antes por el subdirector general de prensa, Francisco Sobrao. Tras repasar los últimos cambios acaecidos en la sociedad y alinearla con otras vinculadas al Opus Dei, Romero de Andrés advertía de la línea editorial seguida desde 1974 por el *Diario Regional*, que había “prestado una dedicación especial a los temas locales de carácter conflictivo [...] [con] el claro propósito de intentar lograr un periódico popular con especial audiencia de los sectores obrero y universitario”. En el último párrafo del informe, el delegado provincial proponía aprovechar la delicada situación económica de la empresa —que acababa de afrontar una inversión de 25 millones de pesetas destinada la renovación técnica del diario— para incidir en su línea editorial:

En estas circunstancias y ante el hecho de la dificultad de competir con un periódico de la solera de ‘El Norte de Castilla’ y el deseo de hacer rentable de una u otra forma la inversión realizada, se aventura la posibilidad de incidir más en la nueva orientación que se observa en el periódico⁵⁷⁰.

⁵⁷⁰ Informe “Situación de Diario Regional”, enviado por el delegado provincial en Valladolid al subdirector general de Prensa el 29 de enero de 1975, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 198, exp. 1793. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Diario Regional, Documentos e Informes)



La actuación de la DGP y la Delegación Provincial vallisoletana con respecto a Diario Regional, S.A. ofrece ya algunos indicios del proceder administrativo en materia de vigilancia e intervención extralegal sobre las empresas periodísticas. Antes de atender a los actos materiales de control ejercidos por la Administración entre 1966 y 1975 es preciso detenerse en la regulación de los órganos de gobierno corporativo.

6.3. La regulación de los órganos de gobierno corporativo

Dos rasgos caracterizan la regulación tardofranquista del gobierno corporativo de las empresas de prensa. En primer lugar, el intento —infructuoso, por lo general— de que tal gobierno no dependiera únicamente de los órganos dominados por el capital. Inspirado en una vieja propuesta acenepista, el legislador impulsó a partir de 1966 la creación en las empresas periodísticas de juntas de gobierno integradas por fundadores y encargadas de conservar la ideología original que había animado la creación —y permitido la autorización administrativa— de sus diarios. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno efectivo de las empresas siguió dependiendo, en la mayoría de los casos, de los Consejos de Administración y otros órganos dependientes del capital; de modo que sobre

ellos recayeron las principales medidas legales contempladas por la Ley de Prensa e Imprenta. Todas ellas se dirigieron, ante todo, a identificar y controlar a los directivos de las empresas. Como en el caso de la propiedad, fue este pertinaz celo por su identificación y control, la “finalidad fundamental” y la nota más característica de la regulación tardofranquista de la materia. No en vano, sólo un conocimiento preciso de quienes ejercían el gobierno corporativo de la prensa, garantizaba a la Administración la efectividad de sus presiones y maniobras, así como de la capacidad coercitiva que le confería la facultad legal de imponer sanciones pecuniarias a las empresas, de las que habían de responder los administradores en caso de insolvencia.

6.3.1 El principio de continuidad ideológica: la Junta de Fundadores

La “continuidad ideológica” fue sin duda el principio doctrinal más inequívocamente conservador de los que informaron la regulación tardofranquista de los órganos de gobierno de la empresa periodística. Fundado en el carácter *sui géneris* y en la singular transcendencia de las empresas de prensa, el principio se refería a la conservación de los fundamentos ideológicos que habían animado la constitución de dichas sociedades; así como a la preservación de tales fundamentos frente a las probables perturbaciones que la entrada de nuevos socios pudiera generarles. Aunque se presentaba, por tanto, como una garantía de inmutabilidad ideológica para fundadores y lectores; era en realidad una garantía para ellos tanto como para la Administración, que se aseguraba así de que ninguna modificación en el capital de la empresa pudiera alterar la línea política autorizada a través de la inscripción en el REP (y ya vimos cómo la línea política de los proyectos no tenía poco peso en la concesión o denegación de las solicitudes de inscripción).

La continuidad ideológica no es, como se habrá ya advertido, sino un trasunto evidente del principio de conservación ideológica defendido por Fernando Martín-Sánchez Juliá. El líder acenepista no sólo logró trasladar su idea al ordenamiento jurídico, sino que consiguió que se implementara mediante un organismo abocetado por Herrera Oria y definido por él mismo: la Junta de Fundadores, un consejo exclusivo de las empresas periodísticas y llamado a defender la línea editorial original frente a los embates del capital.

La Junta de Fundadores no era una creación original de la Ley de Prensa e Imprenta, pues venía funcionando ya desde mucho antes en la Editorial Católica, en la

que adoptaba el nombre de Junta de Gobierno⁵⁷¹. En 1951, el organismo había recibido reconocimiento legal en la Ley de Sociedades Anónimas, cuya disposición transitoria duodécima —otra disposición pergeñada, no por casualidad, por Fernando Martín-Sánchez (Conesa, 1978: 531) e introducida *ad hoc* para preservar los intereses empresariales de la ACN de P— había permitido su salvaguarda a pesar de menoscabar el poder decisorio de los accionistas.

Las sociedades anónimas [rezaba la disposición] que, teniendo por objeto exclusivo o predominante, la edición de prensa periódica, tengan establecido en sus Estatutos con un año de antelación, al menos, a la presente Ley, el funcionamiento de un órgano distinto de la Junta General y del Consejo de Administración especialmente encargado de velar por la pureza de los fines ideológicos a que haya respondido la fundación de la sociedad, podrá conservar ese órgano social en la forma prevenida en sus Estatutos, aunque las facultades conferidas al mismo impliquen una merma de las que en la presente Ley se confieren a las Juntas generales y a los administradores.

Fue, en todo caso, la Ley de Prensa de 1966 la que bautizó al organismo con el nombre de Junta de Fundadores y la que estimuló su generalización en el conjunto de las empresas periodísticas españolas; por más que acabara confirmando a su creación un carácter meramente opcional. El artículo 20 de la Ley (§ 2 a 7) regulaba así su constitución y funcionamiento:

En las Sociedades Anónimas [art. 20.2] que tengan como objeto social el previsto en el artículo diecinueve [la “publicación por cuenta propia de impresos periódicos”] podrá existir, como órgano encargado de velar por la permanencia de los fines ideológicos, la Junta de Fundadores.

Debía ésta estar compuesta por un número impar de personas, entre fundadores e integrantes cooptados (art. 20.5.3) —quienes, por cierto, habían de cumplir las condiciones fijadas en el artículo 18 de la LPI y en el 82 de la Ley de S.A. de 1951 (v. el siguiente epígrafe)— y actuar como órgano colegiado (art. 20.3). Entre las facultades y atribuciones que podía conferirle la empresa, se encontraban (art. 20.5): (1) autorizar ampliaciones y reducciones de capital; (2) autorizar la transmisión de acciones; (3) proponer a la Junta General de Accionistas ternas de candidatos para cubrir los puestos vacantes en el Consejo de Administración y en la propia Junta de Fundadores; y (4)

⁵⁷¹ La Junta de Gobierno de la Editorial Católica era, en efecto, un órgano de gobierno corporativo dirigido a mantener los fundamentos ideológicos de Edica ante la eventual incorporación de nuevos accionistas derivada de ampliaciones de capital. Paradójicamente, aunque serán los propagandistas quienes inspiren e impulsen la creación de la Junta de Fundadores, Edica no adoptará este organismo, sino que mantendrá su vieja Junta de Gobierno. Se acogerá, para ello, a la disposición transitoria tercera de la LPI: otra disposición, como la referente al capital extranjero, introducida *ad hoc* para la Editorial Católica, en virtud de la cual, las S.A. que hubieran creado un órgano de gobierno de los contemplados en la disposición duodécima de la Ley de S.A. de 1951, podrían mantenerlo.

aprobar la designación del Director o Directores de las publicaciones que edite la empresa. Estas atribuciones coinciden, punto por punto, con las propuestas por Fernando Martín-Sánchez en su enmienda particular al anteproyecto de Ley de 8 de abril de 1964; anteproyecto en el que no venía recogida la posibilidad de crear la Junta. En su enmienda, Martín-Sánchez justificaba en estos términos la pertinencia del organismo (*loc. cit.* 3.2.2):

La libertad de fundar Empresas Periodísticas que esta Ley proclama [...] ha de llevar consigo la libertad para perpetuar el espíritu fundacional con los medios jurídicos adecuados para mantenerla. Esa es la garantía de los derechos de los fundadores, *que resulta inseparable de la garantía del Estado para que aquella, cuya publicación autorizó, no se transforme en algo distinto por el juego de presiones, medios económicos, etc.*: la Junta de Fundadores debe ser pues institución fundamental de nuevas Empresas Periodísticas⁵⁷² [el subrayado es nuestro].

La propuesta de Martín-Sánchez fue secundada por las comisiones y el pleno del Consejo Nacional de Prensa y asumida finalmente por el legislador en el proyecto de ley. Ya en Cortes, dos procuradores plantearon sendas enmiendas pidiendo la eliminación de la Junta, o al menos la limitación de sus facultades, con el argumento de que venía a alterar el esquema tradicional de las Sociedades Anónimas⁵⁷³. Lejos de refutar este argumento, Cabanillas se apoyará en él para justificar su pertinencia; según el subsecretario, el legislador pretendía, en efecto, alterar el esquema tradicional de las S.A., en tanto las empresas periodísticas no constituían sociedades anónimas al uso, sino entidades con implicaciones ideológicas inevitables:

El artículo 20 [...] es, para mí, uno de los más importantes de la ley [reconocía Cabanillas]. Es precisamente el intento de dar a las empresas periodísticas un nuevo estatus que no sería posible utilizando los esquemas normales de la ley. La especial naturaleza de las empresas periodísticas plantea la necesidad de destruir en parte el esquema tradicional de la ley. Lo que quiere plantearse en el artículo 20 es verdaderamente trascendental, y lo es en el punto y esencia de que las mayores potestades que tiene el capital en una anónima sean perdidas a favor de determinadas personas que pueden no ser ni accionistas siquiera. El gran acontecimiento es conferir prácticamente un derecho de veto, en relación con la fundamentación de sostener un

⁵⁷² Enmienda particular al anteproyecto de LPI, presentada por Fernando Martín-Sánchez el 8 de abril de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁵⁷³ Fueron los procuradores Eduardo Villegas Girón (Enmienda 107) y Manuel Conde Bandrés (Enmienda 110). Más adelante, durante las sesiones de debate en comisión, varios procuradores se adhirieron a los argumentos de Villegas (v. c.t. 97/9 de 20 de enero) y Conde, lo que provocó la respuesta del ponente Martín-Sánchez (quien se defendió con el argumento de que la creación de la Junta era sólo opcional) (c.t. 98/3 de 20 de enero) y la explicación de Pío Cabanillas (v. *infra*). Todo ello se encuentra en el ACD.

contenido ideológico, a hombres que no son titulares del capital (c.t. 96/5-96/6 de 20 de enero de 1966. En ACD. V. Anexo XII).

El legislador tenía, por supuesto, buenas razones para defender de este modo el supuesto derecho de los fundadores a preservar su ideología original frente a los accionistas. Tal y como había apuntado Martín-Sánchez en su enmienda al anteproyecto de ley, la continuidad ideológica era una garantía para los fundadores tanto como para el Estado. Como ya constatamos, la Administración concedía o denegaba las autorizaciones para editar prensa diaria en base a, entre otros motivos, los antecedentes “político-sociales” de sus promotores y propietarios y la ideología de sus publicaciones. La Junta de Fundadores se revelaba, pues, como el órgano llamado a salvaguardar que dicha ideología original, autorizada por la Administración mediante la inscripción en el REP, no se modificara ni subvirtiera “por el juego de presiones, medios económicos, etc.”; esto es: por la llegada a la empresa de nuevos socios capitalistas que quisieran alterar la línea editorial. Por otra parte, tal y como había señalado también Martín-Sánchez en su doctrina, la merma de poder que para los accionistas suponía la existencia de la Junta aventuraba una cierta retracción de la inversión en las empresas periodísticas. Un inversor que pretendiera hacer valer los derechos políticos de sus acciones participando en el gobierno de la empresa con el fin de influir en su ideología, encontraría inevitablemente enfrente el poder de la Junta; lo que restaría, desde luego, atractivo a la inversión. Lejos de ser un efecto indeseado, esta disuasión era, precisamente, una de las finalidades con que había sido ideada la Junta de Fundadores. Recuérdese que el principio de continuidad ideológica pretendía, entre otras cosas, circunscribir la edición de prensa a lo que Martín-Sánchez denominaba las “grandes instituciones nacionales”; es decir: aquellos grupos sociales e instituciones económicamente potentes, capaces de mantener sus ideales esencialmente inmutables; y, huelga decirlo, plenamente integrados en el Régimen. Trasladado a un caso concreto del sector español de prensa, podría decirse que la Junta de Fundadores tenía entre sus objetivos mantener alejado del sistema a, por ejemplo, Jordi Pujol, cuyos intentos de poner *El Correo Catalán* al servicio del catalanismo habrían chocado con una Junta de Fundadores dispuesta a defender la idiosincrasia carlista del diario.

A pesar de todo —y como prueba también, precisamente, el caso de Jordi Pujol y *El Correo Catalán*—, la incidencia en las empresas de la Junta de Fundadores fue muy limitada; y poco efectivos, por tanto, sus objetivos conservador y circunscriptor. Por lo general, las pequeñas empresas familiares no la constituyeron, al tener ya garantizado el control ideológico de sus diarios. Otras muchas, en cambio, sí adoptaron el órgano de conservación ideológica, especialmente si tenían accionariados diversificados o aspiraban

a inscribirse en el REP a partir de 1966⁵⁷⁴. Sea como fuere, el gobierno efectivo de las sociedades se mantuvo, por lo general, en los Consejos de Administración y otros órganos dependientes del capital (Bustamante, 1982: 36). Sólo en la Editorial Católica, en la Editorial Sevillana y en Editora Balear, todas ellas vinculadas a la Iglesia o a sus institutos seculares, tuvieron las Juntas atribuciones significativas. Por otra parte, en la mayoría de los casos integraron las Juntas accionistas y miembros del Consejo de Administración, de modo que acabó siendo el capital el factor decisivo en la delimitación de la orientación ideológica de los diarios. De ahí también que la Administración centrara su vigilancia y control en los consejeros y directivos, más que en los fundadores⁵⁷⁵.

6.3.2 La identificación del gobierno corporativo: mecanismos legales

Como en el caso de la propiedad, la identificación y control de los directivos fue la “finalidad fundamental” de la regulación tardofranquista del gobierno corporativo de las empresas de prensa. Dos eran los objetivos básicos que perseguía con ello la Administración: primero y ante todo, señalar a los verdaderos titulares y responsables de la empresa periodística: a aquellos, en fin, a quienes habían de dirigirse las presiones y maniobras para lograr cambios en las redacciones de los diarios o en sus líneas editoriales; segundo, conocer a quienes cabía exigir las responsabilidades civiles preceptivas por los actos de la empresa y los contenidos de las publicaciones. De acuerdo con el artículo 65.3 de la LPI, eran los administradores quienes debían asumir la responsabilidad civil subsidiaria en caso de insolvencia de las personas jurídicas titulares de los diarios. El conocimiento de dichos administradores resultaba pues imprescindible para garantizar la eficacia de uno de los instrumentos coercitivos más empleados entre 1966 y 1975: las sanciones pecuniarias previstas en el artículo 69 de la LPI (v. 7.3.2).

La Ley de Prensa fijó cuatro condiciones específicas para el ejercicio del gobierno de la empresa periodística; todas ellas dirigidas a facilitar, de un modo u otro, la

⁵⁷⁴ Constituyeron Juntas, por ejemplo, las solicitantes de inscripción Editora Balear, S.A. (*Diario de Mallorca*); Ilustración, S.A. (*Diario Femenino*); PESA (*Nuevo Diario*); DYRSA (*El Alcázar*); Canaria de Avisos, S.A. (*Diario de Avisos*); Prensa Catalana, S.A. (*Avui*); Promotora de Informaciones, S.A. (*El País*).

⁵⁷⁵ De hecho, la Editorial Sevillana fue la única empresa española cuya Junta de Fundadores mereció una investigación específica del Ministerio; o la única, al menos, en la que ha quedado constancia de que tal investigación se realizara. El 18 de octubre de 1971 —en el marco de las pesquisas administrativas realizadas a cuenta de la guerra interna que se estaba librando en la empresa por la entrada de la Editorial Católica— la DGP recibía un informe sobre los integrantes de la Junta de Fundadores de la sociedad (junto a otro informe sobre los integrantes del CA). V. 6.4.1.2.2 y Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editorial Sevillana, Documentos e Informes)

identificación y control de sus integrantes. De acuerdo con el artículo 18, titulado “De los administradores”, si la empresa estaba constituida en forma de sociedad,

(a) debían formar parte de ella, “necesaria pero no exclusivamente”, los socios con más de un 20% del capital. La medida iba evidentemente destinada a hacer aflorar a los titulares de participaciones significativas; aunque no resultó, como enseguida veremos, demasiado eficaz. De su importancia para el legislador dan cuenta tres circunstancias: primero, la defensa que de ella hizo Pío Cabanillas en Cortes el 20 de enero de 1966 como una imposición necesaria para evitar el ocultamiento de los socios capitalistas más importantes de la prensa española (c.t. 93/4 de 20 de enero. En ACD); segundo, el hecho de que fuera ésta la única de las cuatro condiciones incluida ya desde 1964 en el anteproyecto de ley (en su art. 23); y tercero, el que fuera también la única que solventó su tramitación en Cortes sin variaciones substanciales, a pesar de la oposición que encontró en figuras tan influyentes como Fernando Martín-Sánchez Juliá. Para el acenepista, esta condición suponía restringir la libertad de prensa a la “exigua minoría de millonarios”⁵⁷⁶ que pudiera permitirse acaparar ese 20% del capital. Por si fuera poco, el artículo abría la posibilidad de que tres individuos puestos de acuerdo —y que podían ser además representantes de otros individuos o sociedades ocultas— pudieran hacerse con el control de la empresa al acaparar el 60% del capital⁵⁷⁷. Por todo ello, reclamaba la supresión de un artículo que, según consideraba, se regía por un “criterio puramente capitalista” extraño a los “criterios sociales que constituyen la política general del Régimen”. En caso de que el legislador lo mantuviera, reclamaba Martín-Sánchez que se articulara al menos un mecanismo para evitar la existencia de capitalistas ocultos:

Si el artículo cuya supresión solicitamos se mantuviese [proponía], sería preciso exigir a los aportantes del 20 por 100 del capital, una demostración fehaciente de que éste procedía de su propio peculio y que no eran representantes [...] de los auténticos poseedores del capital que aportaban⁵⁷⁸.

La negativa del legislador a suprimir o alterar el artículo motivará una segunda enmienda del líder acenepista, esta vez al proyecto de ley, en la que repetirá los mismos argumentos (c.t. 93/2 de 20 de enero. En ACD) y que también será rechazada por las Cortes.

⁵⁷⁶ Martín-Sánchez cita literalmente la expresión empleada por Franco en su discurso de Valencia de julio de 1962. En él, Franco había proclamado, dentro de una diatriba contra la prensa liberal, que la libertad de prensa en los regímenes liberales no era sino una libertad reservada a una “exigua minoría de millonarios” (*loc. cit.* 3.4.1).

⁵⁷⁷ Precisamente esta circunstancia acabó dándose, como sabemos, en el caso de Mediterranean Publishing Co., S.A. (*Iberian Daily Sun*) entre 1968 y 1969. La empresa estuvo esos años controlada por el estadounidense André del Amo a través de tres testaferros que acaparaban la totalidad del capital y los tres puestos del CA (v.6.2.1).

⁵⁷⁸ Enmienda particular al anteproyecto presentada por Martín-Sánchez, fechada el 8 de abril de 1964. En AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

(b) La segunda condición impuesta por el artículo 18 afectaba solamente a las empresas con forma jurídica de Sociedad Anónima o de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que debían contar, en tales casos, con administración colegiada. El legislador trataba así de evitar la existencia de administradores únicos que, por un lado, pudieran ser testaferros de personas o sociedades ocultas y, por otro, no tuvieran capacidad suficiente para responder patrimonialmente de la responsabilidad civil subsidiaria exigida a los administradores en el art. 65.3⁵⁷⁹.

(c) Las S.A. y S.R.L. debían estar además gobernadas exclusivamente por personas naturales. Esto vedaba la presencia en los Consejos de personas jurídicas, lo que, una vez más, parecía dirigirse a facilitar la identificación administrativa de los responsables de la empresa y a evitar la elusión de responsabilidades⁵⁸⁰.

(d) Por fin, todas las empresas, independientemente de su forma jurídica, debían estar administradas por españoles residentes en España; con lo que se pretendía impedir el control de publicaciones por exiliados políticos, así como el que sus responsables quedaran fuera del radio de acción de la jurisdicción española. La adición de esta cuarta condición al artículo 18 fue fruto de una enmienda al proyecto de ley presentada por Rafael Díaz Llanos y defendida el 20 de enero de 1966⁵⁸¹. Dado que la propuesta de Díaz Llanos se cohonestaba con la pretensión administrativa de tener bajo control (también jurisdiccional, por supuesto) a los responsables de la empresa y con el principio de

⁵⁷⁹ Dicho artículo disponía: “La insolvencia de las personas jurídicas dará lugar a una responsabilidad civil subsidiaria de sus administradores, salvo que éstos hayan manifestado previamente su oposición formal al acto [constitutivo de sanción por parte de la administración]”. Se les exige, pues, a los administradores responsabilidad civil, pero no penal. Este supuesto había sido incluido en 1964 en el anteproyecto de ley: de acuerdo con él, cabía exigir responsabilidad penal a los administradores que “no hubiesen hecho constar con anterioridad, en forma fehaciente, su expresa oposición al hecho o acto perseguido” (Anteproyecto en AGA sig. (3) 49.21 c. 65137). Esta posibilidad sería excluida del proyecto de ley enviado a Cortes y, por tanto, de la LPI, por lo que resulta muy probable que fuera eliminada por las presiones de los Consejos de Ministros a los que se sometió el anteproyecto durante el año 1965.

⁵⁸⁰ Sólo ha quedado constancia archivada de una empresa periodística que tuviera que modificar su CA al estar compuesto formalmente por personas jurídicas antes de 1966. Fue La Voz de Asturias, S.A. (*La Voz de Asturias*) cuyos vocales eran oficialmente, antes de su inscripción en el REP en 1967, las compañías Tudela Veguín, S.A.; Compañía de Navegación Vasco Asturiana, S.A.; Banco Herrero, S.A.; y Faro de Vigo, S.A. (Exp. 1718, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 192).

⁵⁸¹ La propuesta trataba de evitar (1) que hubiera administradores extranjeros, pues el artículo 18 establecía la tenencia del 20% del capital como requisito *necesario, pero no exclusivo* para formar parte del Consejo de Administración; es decir, que podía haber consejeros sin participación accionarial alguna; (2) que hubiera extranjeros entre los fundadores de la S.A., sin participaciones accionariales, pero con títulos nominativos distintos y asiento en la Junta de Fundadores; y (3) que hubiera socios extranjeros a través de las sociedades comanditarias a las que alude el artículo 122 del Código de Comercio (Enmienda 117. En ACD, leg. 2312, num. 4). Durante la discusión en Cortes, Díaz Llanos defendería su enmienda planteando el supuesto de una empresa formada por 10 socios con un 10% de capital cada uno, sin obligación por tanto de formar parte del Consejo de Administración, y con libertad para nombrar cuantos administradores extranjeros sin participación accionarial quisiesen (c.t. 92/4 de 20 de enero. En ACD).

nacionalismo informativo sostenido por el legislador (y que se había traducido ya en la prohibición del capital extranjero en la prensa española), no encontró mayores problemas para ser trasladada al texto legal.

Esta obstinación por tener controlados a los directivos quedó, por si fuera poco, reforzada por la obligación de que fueran identificados ante el Registro de Empresas Periodísticas⁵⁸². El artículo 27.1.c de la LPI compelió a las empresas a incluir en su solicitud de inscripción registral el “Nombre del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración”; así como de comunicar cualquier cambio que se produjera en los órganos de gobierno (art. 28) y de dar a conocer su composición a los lectores (art. 24). Si la empresa estaba constituida en forma de sociedad, debía presentar además en el REP “copia autorizada de la escritura pública de constitución y de los acuerdos sociales relativos a nombramientos de Administradores y Gestores y certificación de los asientos registrales respectivos” (art. 27.2). Ninguna de estas obligaciones fue objeto de enmiendas ni rechazos. Lo que es más: quizás fuese esta obligación de identificación de los administradores —inspirada en el principio acenepista de transparencia (para con la Administración, claro está)— uno de los puntos que más consenso despertó entre quienes participaron en la elaboración y tramitación de la Ley. Tanto la enmienda presentada por el CNP al artículo 26 del anteproyecto⁵⁸³, como las enmiendas presentadas por los procuradores al artículo 24 del proyecto de ley⁵⁸⁴ coincidían en defender la obligación de identificar y publicitar los nombres de los componentes de los órganos rectores de la empresa periodística.

No eran éstas, con todo, las únicas condiciones de obligado cumplimiento para directivos y empresas periodísticas. Aquellas con forma jurídica de S.A. (la mayor parte de las que publicaban prensa diaria en España entre 1966 y 1975) habían de someterse también a las obligaciones impuestas por la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 (BOE de 18 de julio); cuyo artículo 82 establecía:

No podrán ser Administradores los sometidos a la interdicción, los quebrados y concursados no rehabilitados, los menores e incapacitados, los condenados a penas

⁵⁸² Así había sido desde la creación del REP en 1958. El artículo quinto de la Orden de 10 de enero de 1958 (BOE de 13 de febrero), por la que se creaba el Registro, imponía como una de las obligaciones imprescindibles para figurar en él (y por tanto para tener acceso a los cupos de papel prensa), la consignación de todos los datos “relativos a las personas que ocupen cargos de dirección, gestión o administración”. En el caso específico de las S.A., había que identificar a los componentes del Consejo de Administración.

⁵⁸³ *Dictamen del pleno del CNP al anteproyecto de LPI*, octubre de 1964. En AGA sig. (3)49.21 c. 65137.

⁵⁸⁴ Enmienda num. 33 de Ulpiano Jambrina Bonafonte; num. 63 de Fernando Molinero Sánchez; num. 69 de Javier Martín Artajo; num. 76 de Antonio González; num. 88 de Mariano Rioja; num. 107 de Eduardo Villegas Girón; num. 110 de Manuel Conde Bandrés; y num. 117 de Rafael Díaz Llanos. En ACD, leg. 2312, num. 4.

que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, los que hubieran sido condenados por grave incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y aquellos que por su cargo no puedan ejercer el comercio. Tampoco podrán ser Administradores de las Sociedades los funcionarios al servicio de la Administración con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la Sociedad de que se trate.

La Ley aludía, en estas últimas líneas, a la incompatibilidad del gobierno corporativo con la función pública. La cuestión sería regulada en 1955, en el Decreto-ley de 13 de mayo (BOE de 29 de mayo), que impedía a ministros, embajadores en activo, directores generales y “asimilados” ejercer cargos directivos en sociedades mercantiles⁵⁸⁵; lo que obligó a algunos consejeros a suspender su actividad en las empresas periodísticas, pero que no impidió por lo general, como comprobamos en el capítulo cuarto, la integración de la alta política en el sistema empresarial de prensa (v. 4.3.1). Trece años después, otra disposición vino a regular la incompatibilidad entre la administración de sociedades mercantiles y el desempeño de altos cargos directivos en la banca privada. La Ley 31/1968, de 27 de julio (BOE de 29 de julio) limitaba la participación de altos directivos de la banca a cuatro Consejos de Administración de otras tantas sociedades españolas (art. 1); a excepción de aquellas “promovidas, fundadas o reestructuradas” por la banca industrial (art. 3)⁵⁸⁶. Esto afectó a varios directivos de entidades financieras, que hubieron de abandonar sus cargos en los Consejos de Administración de empresas periodísticas (v. 4.3.2.1). Nunca se prohibieron, en cambio, durante el tardofranquismo, las interconexiones entre empresas de prensa mediante administradores compartidos. Ninguna ley de incompatibilidades afectó a los consejeros que tuvieron, al tiempo, asiento en al menos dos Consejos de Administración de empresas periodísticas. Sólo la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 se había referido a la cuestión de modo general y

⁵⁸⁵ El artículo primero del Decreto-ley establecía: “Los cargos de Ministro, Embajador en activo, Subsecretario, Director general y asimilados a ellos en la Administración del Estado, en la del Movimiento y en los Órganos autónomos son incompatibles” [...]

C) “Con el ejercicio activo de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento de toda clase de Compañías, Sociedades mercantiles y civiles y Consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos, ni tengan relaciones contractuales con la Administración del Estado, la Provincia o el Municipio (...)”.

⁵⁸⁶ El artículo primero de la Ley establecía: “Los Presidentes, Vicepresidentes, Consejeros o Administradores, Directores Generales y asimilados a estos últimos de Bancos privados que operen en España, no podrán desempeñar cargos análogos en otros Bancos, ni formar parte de más de Cuatro Consejos de Administración en sociedades anónimas españolas”. Mientras que el artículo tercero rezaba: “No obstante lo dispuesto lo dispuesto en el artículo Primero, serán compatibles los cargos desempeñados en Bancos industriales con los de Administradores o Consejeros de sociedades anónimas promovidas, fundadas o reestructuradas por aquellos Bancos, o en los que éstos tengan una participación importante”.

La Ley 31/1968, fue desarrollada posteriormente por el Decreto 702/1969, de 26 de abril (BOE de 29 de abril) y por la Orden de 28 de abril de 1969.

no para prohibirla, sino para dejarla en manos de los accionistas de las sociedades afectadas:

[...] los Administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo de la Junta General (art. 83).

Esta condición se mantuvo vigente durante todo el tardofranquismo, toda vez que ningún artículo de la LPI ni de disposiciones posteriores en materia de prensa vino a derogarla o modificarla.

Las empresas periodísticas observaron, por lo general, todas estas condiciones legales impuestas a sus directivos. Las contempladas en los párrafos segundo y tercero del artículo 18 se cumplieron sin remisión, de modo que ningún administrador fue, desde 1966, persona jurídica, extranjero o emigrado. Menos éxito tuvo el legislador en su pretensión de hacer emerger a los socios de referencia, propietarios de más de un 20% del capital. Aunque la condición del artículo 18.1 se llevó a efecto en la mayor parte de las empresas, algunos propietarios lograron eludirla y controlar los Consejos de Administración mediante personas interpuestas. Aún así, tampoco de este modo consiguieron permanecer ocultos al escrutinio de la Administración, que no sólo contaba para su identificación y control, como sabemos, con los mecanismos legales previstos en la LPI.

Casi una decena de empresarios, todos ellos relevantes figuras de la industria, la banca y la política, evitaron personarse en los órganos de gobierno de sus empresas. Financieros destacados como José Ferrer Bonsoms, Luis Valls Taberner, Juan March y Jordi Pujol y políticos como José María de Porcioles, entre otros, se sirvieron de tres efugios para eludir su presencia en los Consejos de Administración de sus empresas periodísticas; a saber: el uso de testaferros, de sociedades interpuestas, y la división y reparto de sus participaciones entre familiares.

A través de testaferros dirigieron sus empresas periodísticas el estadounidense André del Amo y el banquero catalanista Jordi Pujol. El primero recurrió para controlar, entre 1968 y 1969, Mediterranean Publishing Co., S.A. (*Iberian Daily Sun*), a los abogados Miguel Ortiz Cañavate y Puig Mauri (como presidente), Ramón Ortiz Fernández Urrutia (como vicepresidente) y a José Luis Ortiz Cañavate y Puig Mauri (como consejero-secretario). Durante unos pocos meses del invierno de 1969, presidió la empresa Fernando Bañón García, también en representación de Del Amo. Ya en los setenta, Jordi Pujol empleará el mismo recurso para gobernar Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. (*El Correo Catalán*): en 1971 accedían a su CA, José Riba Ortíz (como vicepresidente; y presidente desde 1974) y Federico Bayer Ros; a quienes se les

unirían, en 1974, Juan Agut Rico (como consejero-delegado), Francisco Aizcorbe Bausili y José María Vilaseca Marcet, todos ellos testaferros de Pujol⁵⁸⁷. La negativa del legislador a atender la propuesta de Martín-Sánchez de introducir en el artículo 18.1 mecanismos destinados a evitar la presencia de testaferros, posibilitó que estas dos situaciones se produjeran; ninguna de ellas, de todos modos, pasó desapercibida para el Ministerio, que trató de evitar la segunda, pero consintió, al menos hasta 1972, la primera.

Fue otro de los resquicios legales abiertos por la Ley de Prensa lo que permitió a otros tres importantes banqueros eludir su presencia en los Consejos de Administración de sus empresas. El primer párrafo del artículo 18 restringía la obligación de figurar en los órganos de gobierno a las *personas naturales* propietarias de más de un 20% del capital. Nada se decía, por tanto, de las personas jurídicas con un quinto o más de la empresa; vacío que permitió a varios accionistas recurrir a sociedades interpuestas para proteger sus nombres de la publicidad que la presencia en los Consejos comportaba. Quizás el caso más significativo fue el del financiero José Ferrer Bonsoms, vicepresidente del Banco Atlántico y presidente de su filial industrial, Bankunión. Según comprobamos, entre finales de los sesenta y la primera mitad de los setenta, Ferrer Bonsoms logró, a través de un simple entramado societario, controlar las empresas editoras del *Diario de Ávila*, *Diario de León*, *Diario Regional*, *El Alcázar* y *Nuevo Diario* sin aparecer en ninguno de sus Consejos⁵⁸⁸. De un modo muy similar obró Luis Valls Taberner, financiero y hombre fuerte del diario *Madrid* entre 1962 y 1967. En esos años y hasta el inicio del pleito con Calvo Serer, Luis Valls dominó el vespertino a través de FACES y sin pertenecer a los órganos de gobierno de su editora: Madrid, Diario de la Noche, S.A. Tanto Ferrer Bonsoms como Valls Taberner eran conocidos banqueros —vicepresidente del Banco Atlántico, el primero; y del Banco Popular (en el que, por cierto, habían coincidido ambos en los cincuenta⁵⁸⁹), el segundo— y miembros del Opus Dei. Incluso más conocido aún era el también banquero Luis Coronel de Palma, miembro del círculo madrileño de la ACN de P y vinculado también al Opus Dei, según Sáez Alba (1974: 299). Además de consejero de Edica, el entonces presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro fue a finales de los sesenta accionista mayoritario del diario *Informaciones* sin

⁵⁸⁷ Sobre este caso nos extenderemos enseguida, en el apartado 6.4.2.2

⁵⁸⁸ También participó de forma indirecta en esos años en *Región* y en *Sol de España*, aunque con participaciones minoritarias que no le exigían su presencia en los Consejos de Administración.

⁵⁸⁹ Ambos habían entrado, en efecto, en el Banco Popular bajo la protección de Félix Millet Maristany “uno de los grandes prohombres y mecenas de iniciativas de inspiración católicas, culturales y catalanistas” (Cabanas, 2006: 610). Bonsoms había sido fichado por Millet para el Popular en 1956, tres años después de que entrara en el mismo banco Valls Taberner de la mano de su tío Millet Maristany. (EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE).

pertenecer al Consejo de Prensa Castellana, S.A. También en este caso, Coronel de Palma traspasó a una sociedad interpuesta, Industrial Gráfica Fuenfría, S.A., la titularidad nominal de sus participaciones. A través de esta misma sociedad, lograría evitar también su presencia en el CA de Prensa Castellana Arturo Suqué Puig, accionista de referencia de Industrial Gráfica Fuenfría desde principios de los setenta.

Aún se empleó un tercer método para eludir la presencia en los órganos de gobierno impuesta por el artículo 18.1: la división de las participaciones en la empresa en paquetes inferiores a un quinto del capital total y su distribución entre familiares del titular principal. Así lo hizo el alcalde de Barcelona, José María de Porcioles Colomer, accionista mayoritario desde 1971 de Editorial Mencheta, S.A., editora de *El Noticiero Universal*. Porcioles controló el diario con sólo el 10'20% de las acciones a su nombre y sin puesto en el Consejo; utilizando a sus hijos, José María (vicepresidente y titular del 9'85% del capital) y Juan Porcioles Sangenis (titular de otro 9'80% de la empresa), y a su yerno y Director General de Promoción de Turismo del MIT hasta 1973, Esteban Bassols Montserrat (consejero delegado y propietario del 18'86%). El mismo método utilizó el banquero Juan March Servera, propietario a finales de los sesenta de más de una quinta parte de Editora Balear, S.A. (*Diario de Mallorca*) y ausente de su Consejo. El titular del Grupo March había acudido en 1969 a una ampliación de capital de la empresa periodística, en la que se había hecho con el 25'92% del capital, repartido entre sus dos hijos (Juan y José Carlos March Delgado, con un 8'52% cada uno) y él mismo (que se había reservado un 8'89% de las acciones). Los March incluso aumentarían su participación en 1973 (cuando cada uno de los tres March acumularía un 9'81% de la empresa) y en 1975 (cuando se les uniría Carmen Delgado Roses, esposa de March Servera, con un 3'27% del capital y heredera de las acciones de su marido a su muerte). Ninguno de ellos participó nunca directamente en el gobierno de Editora Balear.

A pesar de todo, el fracaso relativo de los mecanismos legales prescritos en el artículo 18 de la LPI no impidió a la Administración conocer, en todos los casos y pesar de los subterfugios empleados, sobre quién recaía a cada momento el gobierno real y efectivo de las empresas de prensa. Disponía para ello el MIT de suficientes instrumentos extralegales con que compensar y complementar sus atribuciones legales. Sólo, de hecho, en el caso de los March y Editora Balear recurrió el Ministerio a la facultad inspectora que le había conferido la LPI⁵⁹⁰. El resto de maniobras —excepción hecha de la efectuada

⁵⁹⁰ Sólo ha quedado constancia en el REP de un caso en el que dicha facultad inspectora fuera empleada para averiguar si se estaba violando el artículo 18 de la LPI. Fue el de Editora Balear, S.A. (propietaria de *Diario de Mallorca*). A finales de 1970, el delegado provincial del MIT en Baleares, José Luis González Sobral, escribió al director general de prensa para informarle de su intención de inspeccionar a la empresa. González Sobral sospechaba que había en su accionariado

por el poderoso alcalde de Barcelona, sólo seguida por los Servicios de Información de la DGP a través de recortes de prensa— fueron descubiertas por el aparato de vigilancia del MIT, en el marco de investigaciones más amplias dirigidas a conocer la titularidad real de las empresas periodísticas.

6.4 El control extralegal de la propiedad y gobierno de la empresa periodística privada

La Administración no se valió sólo de los instrumentos contemplados en la Ley de Prensa de 1966 para conocer y controlar la propiedad y gobierno de las empresas editoras de prensa diaria. Estos mecanismos legales permitían un control efectivo de las empresas, pero no anticiparse a las variaciones que en ella se produjeran y que pudieran suponer, por ejemplo, la entrada de nuevos socios o directivos, acaso inconvenientes. Con el fin de adelantarse a estos movimientos en la propiedad y órganos de gobierno, los mecanismos legales fueron completados por una vigilancia extralegal de empresas, empresarios y directivos, articulada en torno a un aparato orquestado por la Dirección General de Prensa en los años sesenta. Se trataba, como puede imaginarse, del mismo aparato usado para evaluar la conveniencia política de las solicitudes de inscripción en el REP. En el anterior capítulo, descubrimos las pesquisas realizadas por la Oficina de Enlace del ministro y, sobre todo, las Delegaciones Provinciales del MIT; en cuyos informes se basaron en gran medida las autorizaciones y denegaciones de inscripción expedidas por la DGP. En las páginas que siguen comprobaremos cómo sus indagaciones sirvieron también para presionar a empresas y publicaciones problemáticas y para detectar alteraciones en la propiedad y gobierno corporativo que pudieran abrir la puerta a la entrada de nuevos agentes en el panorama nacional de prensa.

El control administrativo, de todos modos, no se basó sólo en el conocimiento, por más exhaustivo que éste fuera, de la propiedad y gobierno de las empresas. En no pocos casos, la información obtenida por el aparato ministerial de vigilancia fue sólo un requisito necesario para la posterior intervención administrativa. En la medida de sus posibilidades, el MIT no dejó de inmiscuirse en la estructura económica y organizativa de las empresas allí donde vislumbró peligros u oportunidades. En unos casos, no dudó en impulsar o favorecer el acceso al sistema de ciertas empresas y organizaciones afines o convenientes o que pudieran servir a sus intereses. Allí donde atisbó, en cambio, riesgos o

personas con más del 20% del capital, pero sin asiento en el Consejo de Administración. El delegado debía de referirse, sin duda, a la familia March, que había suscrito en la ampliación de capital de junio de 1969, más de un quinto del capital, repartido sin embargo entre Juan March Servera y sus hijos en paquetes de menos del 10% cada uno. Carta en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 15, exp. 147.

perjuicios políticos, trató de dificultar o impedir que las operaciones se llevaran a efecto; para lo que no desdeñó, por cierto, las presiones, las amenazas ni el chantaje.

Todas estas actuaciones dibujan un modelo de control de la empresa periodística basado en la vigilancia exhaustiva de sus socios y directivos; vigilancia que fundamentó, en algunos casos, intervenciones dirigidas a alterar dicha propiedad y gobierno en función de los intereses de la Administración. Un modelo que tampoco mantuvo, bien es cierto, un grado constante de intensidad y eficacia durante todo el tardofranquismo. Fraga no rehusó emplearlo a finales de los sesenta contra quienes consideró portavoces o representantes de sus principales adversarios políticos: la facción tecnócrata vinculada al Opus Dei, encabezada por Laureano López Rodó y protegida hasta 1973 por Luis Carrero Blanco. Fue, sin embargo, tras su cese, cuando el control extralegal de la empresa alcanzó su culmen en cuanto a actividad y eficacia. Entre 1970 y 1973, Fernando Liñán y Zofío, pero sobre todo Alfredo Sánchez Bella, vigilaron e intervinieron en varias de las operaciones de cambio de propiedad y gobierno que se dieron en la prensa española. Además de cancelar, como vimos, los diarios *Madrid* y *Nivel*, durante sus dos años en el MIT Sánchez Bella tuvo tiempo de amenazar a los propietarios de PESA para que renunciaran a sus derechos sobre *El Alcázar* y vendieran *Nuevo Diario*; de extorsionar a Sebastián Auger para tratar de arrebatarle el control efectivo de *Diario Femenino*; e incluso de instar a Pedro Serra Bauzá a comprar el *Iberian Daily Sun*; por no mencionar los casos en que recurrió a las Delegaciones Provinciales y, sobre todo, a la Oficina de Enlace para investigar otras operaciones. A partir de 1974, la eficacia del Ministerio disminuyó considerablemente; en parte debido al paso efímero de Pío Cabanillas por el Departamento; en parte por la coyuntura política de un Régimen cada vez más debilitado. Quizás la aparición pública de Jordi Pujol en la prensa española en 1974 marque el declive definitivo de la capacidad coactiva del Ministerio de Información y Turismo, que, a pesar de todo, nunca renunció a intentar controlar y decidir quién podía y quién no podía editar prensa diaria en España.

6.4.1 La vigilancia administrativa de la empresa periodística privada

“Aquí hay un aparato de vigilancia muy bien montado... por Quílez”, había advertido a principios de 1970, como se recordará, el recién nombrado director general de prensa, Alejandro Fernández Sordo (Muñiz, 2005: 115; *loc. cit.* 5.4). En el anterior capítulo, pudimos comprobar el modo en que el MIT se valió de los Servicios de Información de la DGP y, sobre todo, de la Oficina de Enlace y de las Delegaciones Provinciales para obtener información confidencial de los promotores y accionistas de las

empresas periodísticas que quisieron editar prensa diaria en España. En base a los datos recabados —y referidos, en su mayor parte, a antecedentes “político-sociales” y a la orientación ideológica que animaba los proyectos— pudo la Administración autorizar o denegar la inscripción en el REP, e incluso expulsar a dos empresas del sistema de prensa. Pero el Ministerio no orientó los focos de sus órganos de vigilancia únicamente hacia las puertas de entrada y salida del sistema: no limitó sus pesquisas a quienes solicitaron editar prensa diaria y a aquellas voces díscolas de las que quiso deshacerse. Durante el tardofranquismo, la Administración escudriñó también a las empresas periodísticas cuya inscripción había sido aprobada y que habían sido, por tanto, admitidas en el mapa de la prensa diaria. Aquel aparato de vigilancia orquestado por Manuel Jiménez Quílez permitió al MIT conocer anticipadamente cuantos movimientos se produjeron en la prensa española, además de radiografiar la situación financiera de las empresas y conocer y controlar a sus socios y directivos, así como a aquellos que aspiraron a serlo.

Quedaba de este modo cubierta y controlada la última vía de acceso al sistema de prensa: la compra de participaciones en empresas periodísticas inscritas en el REP y que habían ya superado, por tanto, el filtro administrativo. La información suministrada al MIT sobre todas las operaciones de compraventa de acciones que se planearon, negociaron y efectuaron entre 1966 y 1975, permitió identificar a cuantos empresarios quisieron acceder por esta entrada trasera al sistema. Los mecanismos contemplados al efecto por la Ley de Prensa e Imprenta no le bastaron al Ministerio. De acuerdo con el artículo 28.1, todos los movimientos accionariales y directivos debían ser comunicados al REP en el plazo de un mes desde su realización; lo que, como es obvio, sólo garantizaba un conocimiento a posteriori de hechos consumados. El recurso a los órganos de vigilancia extralegal procuró, en cambio, un conocimiento anticipado de las operaciones y permitió al MIT adelantarse a ellas y actuar (o no actuar) en consecuencia; así como autorizar o rechazar aquellas en las que fueron los propios empresarios quienes solicitaron el visto bueno previo de la DGP.

No fue ésta, de todos modos, la única competencia del aparato administrativo de vigilancia. Los artículos 28.2 y 29 de la LPI concedían al Ministerio la facultad de sancionar e incluso expulsar del sistema a la empresa periodística que aportara datos incompletos o incorrectos al Registro de Empresas (una potestad que el MIT no había dudado en ejercer en los casos de *Nivel* y *Madrid*). Ambos artículos concedían en la práctica una formidable capacidad coactiva sobre las empresas de prensa, que podían verse sancionadas o canceladas del Registro ante cualquier deficiencia o irregularidad detectada en su estructura. El pleno ejercicio de tal capacidad requería, no obstante, de un conocimiento profundo y preciso de la situación real de las empresas, pues sólo desde

dicho conocimiento, podía la Administración confrontar los datos comunicados al REP con los datos reales; esto es: sólo una vez averiguadas las debilidades e irregularidades de las empresas, estaba la Administración en condiciones de invocar los artículos 28 y 29 de la Ley para sancionarlas y cancelarlas o, como será más frecuente, presionarlas y lograr modificaciones en sus redacciones y líneas editoriales.

A pesar de los cambios orgánicos que, durante el tardofranquismo, afectaron a la Dirección General de Prensa⁵⁹¹ —en torno a la cual se articulaba el aparato de vigilancia—, la información confidencial no modificó, en lo substancial, su itinerario. Durante todo el periodo, la Administración dispuso de dos cauces básicos de obtención de información sobre empresas periodísticas, empresarios y directivos: la Oficina de Enlace, dependiente directamente del ministro; y las Delegaciones Provinciales, adscritas orgánicamente a la Subsecretaría de Información y Turismo, pero que, en la práctica, fueron contactadas y manejadas sin intermediación alguna por la DGP y sus subdirecciones generales.

La Oficina de Enlace (denominada Gabinete de Enlace desde 1974) había sido creada por Manuel Fraga en noviembre de 1962 con el objetivo de “coordinar aspectos concretos de la información política que tanto este Ministerio [de Información y Turismo] como otros Departamentos de la Administración o Entidades Extranjeras puedan recibir”⁵⁹². Su cometido fundamental era, pues, contactar con otros organismos y analizar y canalizar la información política que éstos pudieran proporcionar al MIT. La Oficina era, en palabras del jefe de la Inspección del Ministerio a finales de los sesenta,

⁵⁹¹ Como ya señalamos en el segundo capítulo, la Dirección General de Prensa fue objeto de tres reorganizaciones importantes que afectaron a su aparato de vigilancia durante el tardofranquismo. Las tres han sido representadas en los organigramas que reproducimos algo más abajo (figuras 6, 7 y 8). La primera modificación se produjo en 1968, de acuerdo con el Decreto 64/1968, de 18 de enero (BOE de 20 de enero), modificado levemente dos años después por el Decreto 836/1970, de 21 de marzo (BOE de 3 de abril). La disposición creaba una nueva Subdirección adscrita a la DGP: la Subdirección General del Régimen Jurídico de la Prensa, en la que quedaba integrada, en adelante, la Sección de Empresas Periodísticas (hasta entonces en la Subdirección General de Prensa), de la que dependía el Registro de Empresas Periodísticas. Cinco años después, el Decreto 2509/1973, de 11 de octubre (BOE de 13 de octubre) implantaba una nueva estructura que sólo estaría en vigor, sin embargo, hasta enero de 1974. Ese mes, el Decreto 28/1974, de 11 de enero (BOE de 12 de enero) aprobaba la última reorganización ministerial de importancia. La DGP se escindía en dos Direcciones Generales: la del Régimen Jurídico de la Prensa (que integraba las funciones desempeñadas hasta entonces por la Subdirección General de Prensa y la Subdirección General del Régimen Jurídico de la Prensa) y la de Coordinación Informativa (heredera de la Subdirección General de Servicios Informativos).

⁵⁹² Orden de 26 de noviembre de 1962 (BOE de 6 de diciembre).

Este objeto no varió durante el tardofranquismo. En 1974, cuando la Oficina cambie su denominación por la de Gabinete de Enlace, mantendrá como función “coordinar, tratar y procesar aspectos de información general y política que, tanto este Ministerio como otros Departamentos de la Administración o Entidades extranjeras puedan recibir o proporcionar” (Decreto 2532/1974, de 9 de agosto [BOE de 13 de agosto]).

Enrique Santín, los “ojos y oídos del ministro”⁵⁹³, gracias, no sólo a su labor de coordinación y procesamiento de información, sino a la capacidad propia de indagación que le procuraba su “departamento de investigación sobre comunismo y otras actividades subversivas”⁵⁹⁴. Según relata Francisco Castrillo Mazeres, jefe de la Oficina durante sus años de mayor actividad, en la primera mitad de los setenta, su funcionamiento cotidiano era el siguiente: cada semana se concertaba una reunión con enlaces de los ministerios que contaban con departamentos específicos de información, esto es, de vigilancia y espionaje interior⁵⁹⁵. Acudían, entre otros, además del enlace del MIT, responsables de los ministerios militares, de Presidencia del Gobierno⁵⁹⁶ y de Gobernación (del que dependía la Dirección General de Seguridad). En las reuniones, se compartía e intercambiaba información sobre “la situación política en España”, que después se resumía y remitía al ministro de Información, del que dependía directamente la Oficina. Castrillo Mazeres insiste en que las averiguaciones se referían a “temas y situaciones generales” y “ambientes”; y asegura no recordar haber realizado informes personales ni “persecuciones” (esto último sin que se le hubiera preguntado aún por ello, por cierto); aunque sí reconoce que toda la información personal se encontraba en poder del Ministerio de Gobernación, una de las fuentes habituales de la Oficina. Los documentos hallados en los expedientes registrales de las empresas periodísticas editoras de diarios demuestran, por el contrario, que el MIT usó la Oficina de Enlace para obtener información personal (relativa sobre todo a antecedentes “político-sociales” e ideología) de empresarios de prensa, directivos y periodistas; especialmente a partir de 1970, tras la llegada de Alfredo Sánchez Bella al MIT y el nombramiento del entonces teniente coronel Francisco Castrillo como jefe de la Oficina⁵⁹⁷.

El segundo cauce de obtención de información fue incluso más transitado. No en vano, eran las Delegaciones Provinciales —dependientes orgánicamente de la Subsecretaría de Información y Turismo— las que mantenían el contacto directo con la prensa diaria española, mayoritariamente provincial o local, como vimos en el capítulo cuarto. Gracias a su red de Delegaciones, pudo obtener el MIT información fidedigna de las empresas periodísticas y de los empresarios y directivos que suscitaron su atención.

⁵⁹³ Testimonio de Enrique Santín Díaz, jefe de la Inspección General del MIT, en entrevista personal realizada el 8 de octubre de 2012.

⁵⁹⁴ Art. 3 de la Orden de 26 de noviembre de 1962.

⁵⁹⁵ Testimonio de Francisco Castrillo Mazeres en entrevista personal realizada el 9 de octubre de 2012.

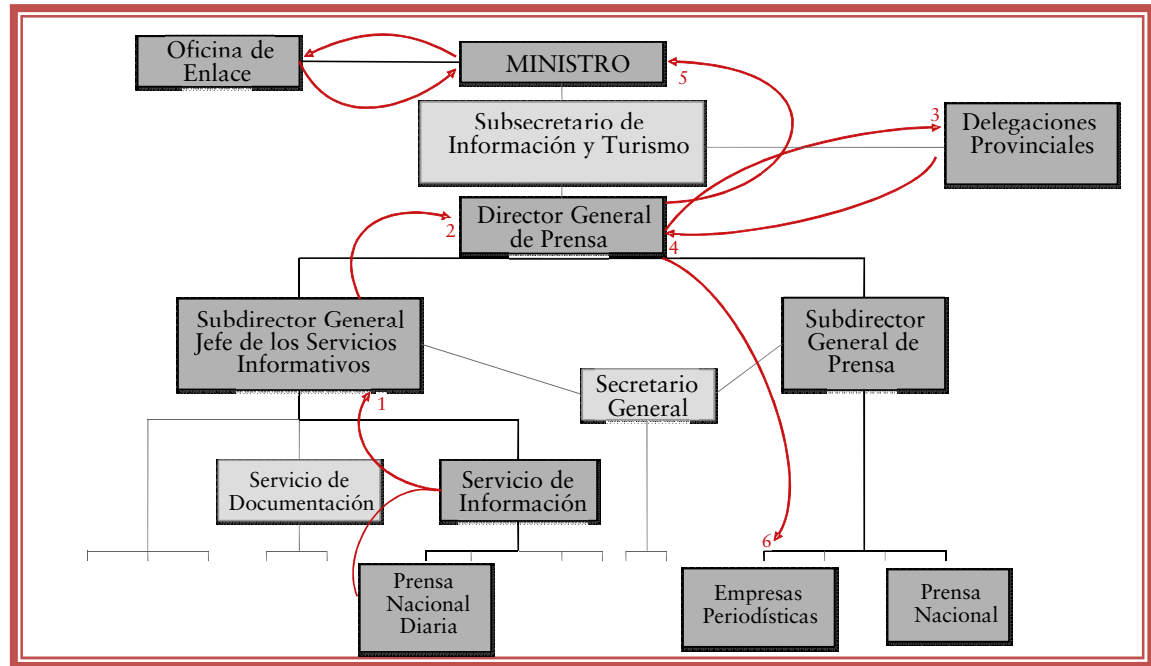
⁵⁹⁶ De la que dependía el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED), (creado por Decreto 511/1972, de 3 de marzo), que venía a aglutinar el trabajo de espionaje realizado hasta entonces por diversos organismos (Zorzo, 2005).

⁵⁹⁷ No deja de resultar significativo que el teniente coronel Castrillo Mazeres viniera a sustituir en la jefatura de la Oficina a un civil, Luis Santiago de Pablos, quien había desempeñado el cargo en los tiempos de Fraga.

De sus informes y parecer dependió la admisión o rechazo de una nueva empresa periodística y/o publicación en el sistema de prensa; así como la intervención o inhibición administrativa en las empresas inscritas y, por tanto, admitidas.

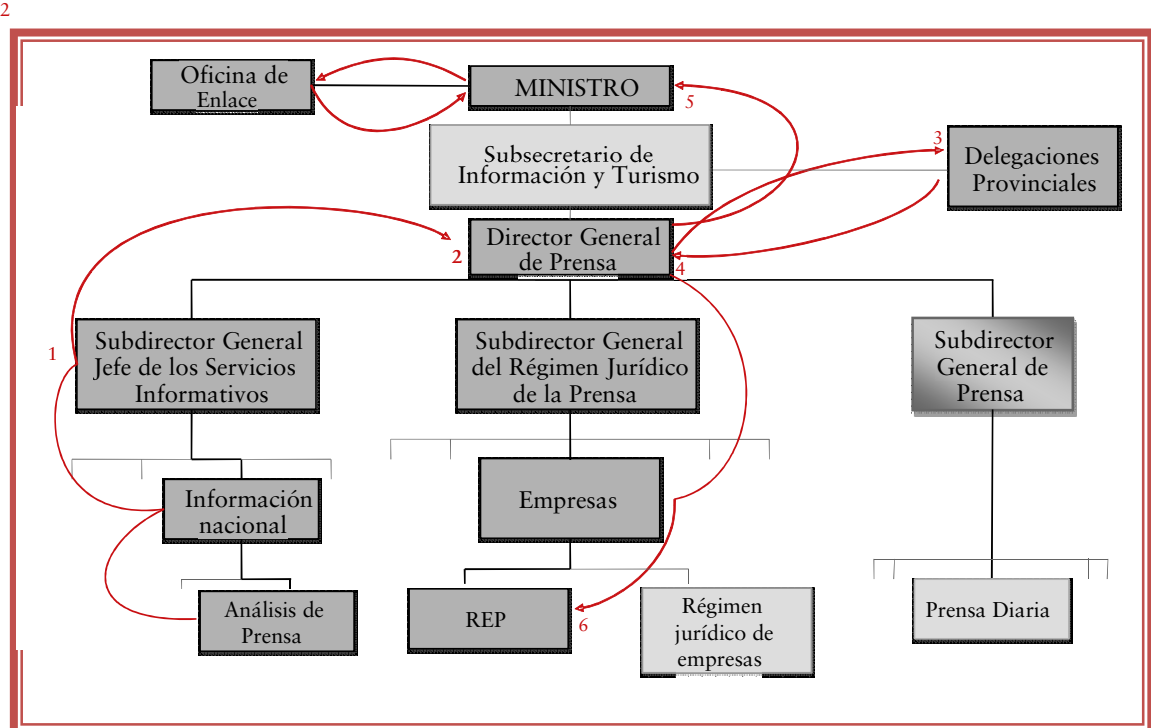
El itinerario de las pesquisas tenía, como puede verse en los organigramas (flechas de las figuras 3, 4 y 5), su origen y final en la Dirección General de Prensa (DGRJP, desde enero de 1974) y, por supuesto, en el propio ministro. Aunque las delegaciones podían elaborar informes *motu proprio*, la iniciativa solía partir, por lo general, de la DGP, cuyo interés por empresas, empresarios y directivos había sido previamente avivado por sus Servicios de Información, por denuncias recibidas (a veces anónimas, a veces enviadas por socios descontentos claramente identificados) o por los intereses políticos coyunturales del Ministerio y el Gobierno. Ya directamente, ya a través de la Subdirección General, la DGP se dirigía entonces a la Delegación ministerial de la provincia en que estuviera radicada la empresa o empresario objeto de su interés. Los informes que se le reclamaban, se elaboraban a partir de las indagaciones y contactos de la propia Delegación, así como, en muchos casos, de archivos e informes de la jefatura de policía, obtenidos a través del gobernador civil de la zona. La mayor parte de las veces, los informes se remitían directamente al director o subdirector general de prensa, aunque en otros casos podían pasar por el filtro de los Servicios de Información de la DGP, que enviaba sus resúmenes al director o subdirector general. Finalmente, la información confidencial —clasificada casi siempre como “reservada”— se enviaba a la Sección de Empresas de la DGP, con el fin de que quedara archivada en el expediente registral de la empresa periodística investigad

FIGURA 6⁵⁹⁸: Organigrama del aparato de vigilancia y control de la empresa periodística en 1966



Fuente: elaboración propia

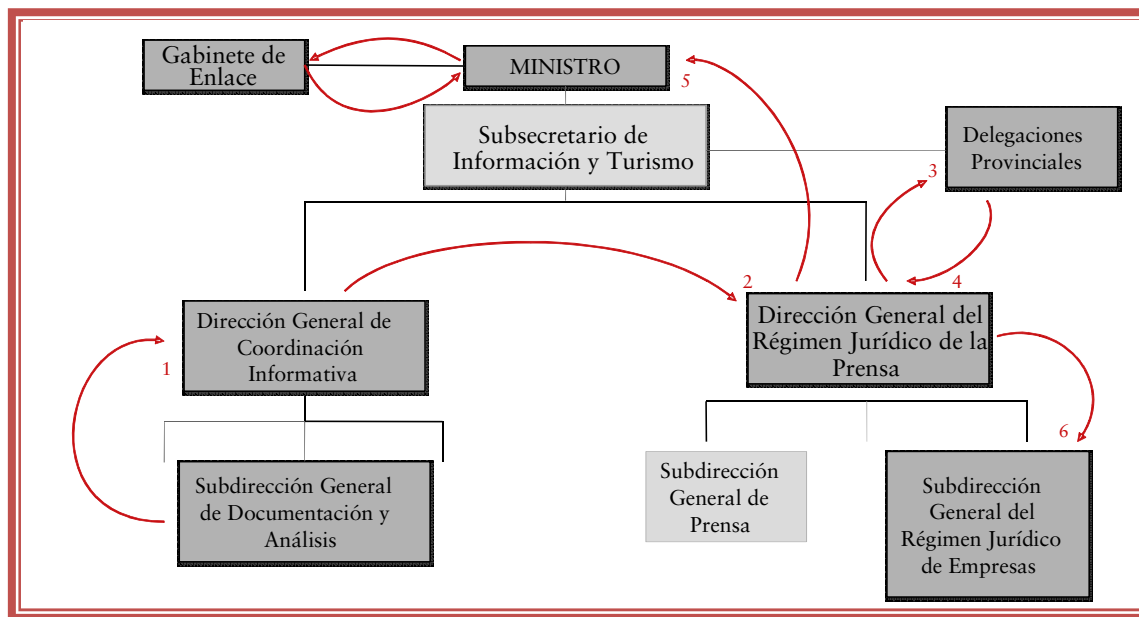
FIGURA 7: Organigrama del aparato de vigilancia y control de la empresa periodística en 1968



Fuente: elaboración propia

⁵⁹⁸ Los números y flechas corresponden a los itinerarios habituales que solían seguir, por lo general, las pesquisas. En gris oscuro, los organismos ministeriales implicados directamente en las investigaciones.

FIGURA 8: Organigrama del aparato de vigilancia y control de la empresa periodística en 1974



Fuente: elaboración propia

En ninguno de los casos examinados en el epígrafe 6.4.1 hemos hallado pruebas de que la Administración fuera más allá de la mera vigilancia de las empresas de prensa. Por supuesto, la falta de pruebas conservadas de intervenciones administrativas no prueba que tales intervenciones no se produjeran (quizás por otros cauces que no dejaran rastros documentales). Ni mucho menos prueba que la Administración no interviniera en operaciones menos favorables a sus intereses, como demuestran los casos de injerencia recogidos en el apartado 6.4.2.

Lo cierto es que todos los casos en los que a las pesquisas de la Administración no le siguieron intervenciones efectivas afectaron a empresas u operaciones poco problemáticas políticamente para el MIT. Lo que es más: la mayor parte de las transferencias de acciones y cambios de propiedad y gobierno corporativo analizados en este apartado fueron políticamente convenientes para la Administración.

Por lo demás, los documentos archivados en el REP evidencian que la Administración realizó, cuanto menos, un seguimiento exhaustivo de prácticamente cada movimiento que se produjo en el sistema. De hecho, sólo cuatro de las operaciones de cambio de propiedad llevadas a efecto entre 1966 y 1975 no fueron vigiladas o merecieron una atención superficial del MIT; y las cuatro supusieron la entrada en el panorama de la prensa tardofranquista de organizaciones y prohombres del Régimen, con asiento en las Cortes y no carentes de contactos e influencia política. En el resto de casos, el Ministerio activó su aparato de vigilancia movido por dos causas fundamentales

y ya apuntadas: la existencia de líneas editoriales inconvenientes y el afán por conocer cuantos movimientos accionariales y directivos se dieron en la prensa española. Del mismo modo que ocurriera, según vimos, con Diario Regional, S.A., la DGP (y la DGRJP desde 1974) se interesó por la propiedad, gobierno y situación económica de otras tres empresas editoras de diarios molestos o problemáticos. En los tres casos, a la investigación administrativa le siguieron cambios significativos, bien en la dirección de los diarios, bien en la propiedad de las empresas vigiladas. Con todo, la mayor parte de las investigaciones estuvieron motivadas por el deseo administrativo de conocer de antemano cada compra significativa de acciones que se negociaba y acordaba en la prensa diaria del país. La Administración mantuvo una vigilancia férrea de las principales operaciones de compraventa de títulos —y aun de otras operaciones menos relevantes—, así como, por supuesto, de los cambios de propiedad y gobierno que se produjeron entre 1966 y 1975.

6.4.1.1 La vigilancia de la empresa por motivos ideológicos

Al menos tres empresas periodísticas fueron investigadas por el Ministerio de Información y Turismo entre 1966 y 1975 debido a las líneas editoriales de sus diarios: Editorial Navarra, S.A. (*El Pensamiento Navarro*); Prensa Castellana, S.A. (*Informaciones*) y Barcelonesa de Publicaciones, S.A. (*Diario de Barcelona*).

La primera había sido sometida en 1969, según vimos, a una inspección, de la que habían resultado unos informes que sugerían ya que el Ministerio no estaba únicamente interesado en conocer cómo cubría su déficit la empresa (si es que tal déficit existía) (v. apartado 6.2.3.1.1). Editorial Navarra, S.A. se había constituido el 5 de enero de 1938 para suceder a Editorial Tradicionalista, S.L. en la edición de *El Pensamiento Navarro*. En 1969, cuando Fraga ordena la inspección, dominaban el capital de la empresa José María Gaytán de Ayala (con un 32'5% de las acciones) y el procurador carlista y vicepresidente del CA, Luis Arellano Dihinx (24'16%)⁵⁹⁹; a quien se señalaba, precisamente, en la “nota informativa” enviada por Santín al ministro como el verdadero titular de la empresa (nota en la que no se mencionaba, por cierto, déficit o problema económico alguno). Las pesquisas no se detuvieron ahí: ese mismo año, varios informes

⁵⁹⁹ Completaban el accionariado y CA, de acuerdo con los datos comunicados al REP, Joaquín Baleztena Azcárate (presidente y propietario del 8'33% del capital) y su hermano Ignacio Baleztena Azcárate (vocal con un 5'83% de la empresa); y los vocales Juan Echandi Inart, Javier Agudo Olaso y Ángel Indurain Camón, cada uno con un 8'33% de las acciones; y Francisco López Sanz (con un 4'16% de la empresa y sin asiento en el consejo); además del vocal Blas Morte Francés, del secretario Joaquín Baleztena Abarrategui y del gerente Ignacio Armendáriz Laquidain. Datos en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 27, exp. 255.

remitidos al Ministerio advertían de un cambio no comunicado al REP en el accionariado, al que se habían incorporado nueve personas más⁶⁰⁰. Al año siguiente, el delegado provincial del MIT en Navarra, Jesús Joaquín de Arcenegui, volvía a informar a la DGP sobre cambios acaecidos en el gobierno de la empresa. Dos circunstancias invitan a pensar que no era sino la línea editorial del carlista *El Pensamiento Navarro* el verdadero motivo de las indagaciones. Por un lado, la reflexión con la que el delegado provincial en Navarra había concluido su informe de 8 de mayo de 1970⁶⁰¹:

Los cambios recogidos [en el Consejo de Administración] reflejan una tendencia más acusada hacia la legalidad política imperante, pero haciéndose notar que existe un divorcio evidente entre parte del Consejo de Administración y el Director del diario, que persiste en no cambiar su línea ideológica.

Pero sobre todo, el hecho de que las investigaciones se detuvieran en el verano de 1970, coincidiendo precisamente con la destitución en julio del director señalado por la DGP, Javier María Pascual.

Las pesquisas motivadas por líneas editoriales inconvenientes no cesaron, ni mucho menos, tras la salida de Manuel Fraga del MIT. Entre 1972 y 1975, Prensa Castellana, S.A. fue también objeto de un estrecho seguimiento por parte del Ministerio⁶⁰². La empresa, editora del diario *Informaciones* desde abril de 1944, había sido comprada en 1967 por “un equipo ambicioso de profesionales más o menos relacionado con el mundo político” encabezado por el ministro acenepista Federico Silva⁶⁰³ (Alfárez, 1986: 105), formado por los hermanos José María y Francisco Sánchez-Ventura y Pascual (propietarios de un 47’02% de la empresa entre los dos), Ignacio de Acha (23’52% del capital) y otros⁶⁰⁴. A principios de 1968, se producía un importante cambio en el accionariado: en febrero se sumaban a la editora cinco de los siete grandes bancos

⁶⁰⁰ Según estos informes, la estructura de propiedad de la empresa había quedado del siguiente modo: Pedro Sánchez Muniain poseía un 9’17% del capital; José María Gaytán de Ayala, Luis Arellano Dihinx, Blas Morte Francés, Ángel Indurain Camón y Joaquín Baleztena Abarrategui poseían un 8’33% cada uno; Luis Arellano Aburto poseía un 6’67%; (porcentaje al que hay que sumar el 8’33% de Arellano Dihinx, su padre, fallecido en mayo de 1969); Joaquín Baleztena Azcárate, Juan Echandi Inart, Javier Agudo Olaso, Ignacio Armendáriz, Blas Inza y Jesús Armendáriz, eran propietarios de un 4’17% cada uno; Victor Eusa tenía un 5’83%; Manuel Abascal Pujadas, un 5%; y Felipe Zalba Moret, un 1’67%. Informes en exp. 255, en RE, AGA, *ibídem*.

⁶⁰¹ Informe en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 27, exp. 255.

⁶⁰² Archivado en el expediente 757, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 86.

⁶⁰³ Federico Silva Muñoz fue ministro de Obras Públicas entre 1967 y 1970, por lo que no podía formar parte de los órganos de la empresa. Según ha relatado Jesús de la Serna en entrevista personal, su vinculación con Prensa Castellana se estableció a través de una agencia de publicidad y de un hombre de confianza.

⁶⁰⁴ Completaban el accionariado Pedro Masaveu Peterson (9’2%), José Mangas Miguel (6’9%), José María Aguirre Gonzalo (4’67%), Bernardo Salazar García Villamil (3’28%) y Jacobo Cano Sánchez (3’28%) además de otros muchos accionistas minoritarios. Sobre los vínculos políticos y económicos de los accionistas principales que participaban en el Consejo puede consultarse Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa Castellana, Gobierno Corporativo).

españoles del momento: el Banco de Santander, el Central, el Vizcaya, y la Banca March, además del Banesto, ya presente desde el año anterior a través de José María Aguirre Gonzalo⁶⁰⁵ y Pedro Masaveu Peterson⁶⁰⁶. El accionariado⁶⁰⁷, poblado ya de testaferros de la banca, pasaba entonces a estar dominado, con un 27'1% del capital, por el director general de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro, el acenepista Luis Coronel de Palma⁶⁰⁸.

Empresarialmente [relata Antonio Alférez] el mecanismo funcionaba gracias a la acción 'lubricante' de los hermanos Víctor y Jesús de la Serna, especialmente el primero, metido de lleno en la dirección de la empresa, primero como Consejero Delegado y después Presidente del Consejo de Administración de Prensa Castellana, S.A. Cada semana se reunía el Consejo de Administración y en él se daban cita un representante de los cinco bancos accionistas; Víctor de la Serna; y el director, Jesús de la Serna, a quien acompañaba sistemáticamente algún miembro de la redacción, por lo general el subdirector, Juan Luis Cebrián. (Alférez, 1986: 108).

⁶⁰⁵ José María Aguirre Gonzalo (1897-1988) era considerado a principios de los ochenta "el patriarca" de la banca española. En 1927 había fundado la que sería la constructora española más importante durante el franquismo: Agromán. Su carrera en el sector financiero comenzaría en los años cuarenta: en enero de 1942 era nombrado consejero del Banco Guipuzcoano, que llegará a presidir en 1956. También en los cuarenta había sido designado consejero de Banesto, entidad que también presidiría entre 1970 y 1983. En el sector de la prensa, tuvo participaciones minoritarias, además de en Prensa Castellana (*Informaciones*), en Sociedad Vascongada de Publicaciones (*El Diario Vasco*), Prensa Económica (*Nuevo Diario*) y en Editorial Católica (*Hoy, Ya, Ideal, El Ideal Gallego y La Verdad*). Autodefinido ideológicamente como "la oposición a la derecha de Franco", Aguirre sería procurador en Cortes entre 1961 y 1977, los últimos trece años por designación directa del dictador (Sánchez, 2005: 104-108) y AH EFE. Sobre sus vínculos con otras empresas y sectores, puede consultarse Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Sociedad Vascongada de Publicaciones, Gobierno Corporativo).

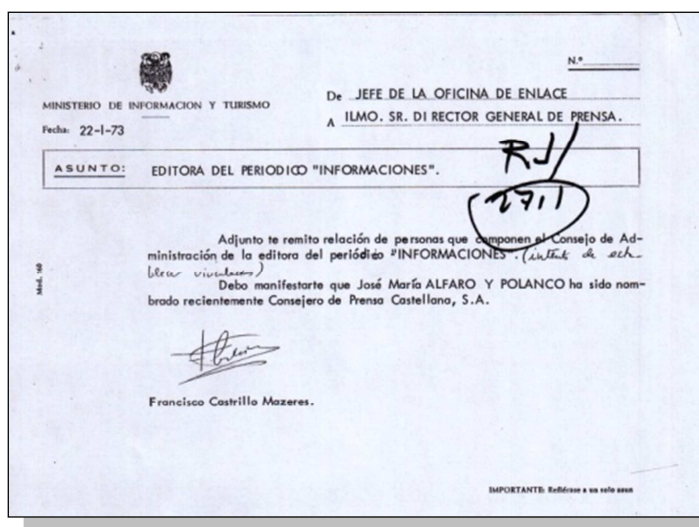
⁶⁰⁶ Pedro Masaveu Peterson (1939-1993) estaba al frente en los años sesenta de un imperio financiero estimado en unos mil millones de dólares del momento. En 1968, coincidiendo con su presencia en el accionariado de Prensa Castellana, Masaveu accedió al CA del Banco Español de Crédito (Banesto) e Hidroeléctrica del Cantábrico (Biografía en EFEDATA, Base de Datos de la Agencia EFE). El grupo Masaveu controlaba además la industria cementera y tenía intereses en otras empresas de prensa como La Voz de Asturias, S.A. y Editorial Gráfica Asturiana, S.A. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975).

⁶⁰⁷ De él formaban parte en febrero de 1968, además de Luis Coronel de Palma, Pedro Masaveu Peterson (9'2%), José Mangas Miguel (6'9%), Jesús Díaz Montero, Bernabé Peris Gimeno, Octavio Pérez Andújar, Eliseo Díaz del Río Montero, Enrique Sainz de Ortueta, José María Navarrete Urieta, Julio Bou Prats y Antonio Rodríguez Robles, con un 6'25% de las acciones cada uno; y José María Aguirre Gonzalo, con un 4'67% del capital; además de otros accionistas minoritarios.

⁶⁰⁸ Luis Coronel de Palma, marqués de Tejada (1925-2000) tenía además intereses, en 1967, en los sectores de la construcción, eléctrico, vidriero y de alimentación. Vinculado a la ACN de P de Madrid, formaba también parte del CA de Edica y era procurador en Cortes por la Organización Sindical. (Véase Apéndice de empresas periodísticas [1966-1975] [Editorial Católica, Gobierno Corporativo]). En 1970, Coronel de Palma sería nombrado gobernador del Banco de España, cargo que compaginaría con el de gobernador por España en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE y AH EFE.

A finales del verano de 1968 un nuevo cambio venía a alterar la propiedad de Prensa Castellana: el 19 de septiembre, Coronel de Palma cedía sus acciones a Inversora del Duero, S.A., de la que él mismo era propietario junto al marqués de Arenas, Manuel Silvela Jiménez. Un mes antes, el 5 de agosto, se había aprobado una ampliación de capital que dejaba a Prensa Castellana en poder de Inversora del Duero, S.A. con el 43'26% del capital; porcentaje que se incrementaría aún más, hasta el 47'56%, después de otra ampliación efectuada en 1972.

El auge de Inversora del Duero como accionista de referencia de la empresa periodística coincide con el inicio del hostigamiento del MIT, que ordena la inspección de Prensa Castellana en junio de 1972. Desde entonces y hasta 1975, se sucederán los informes y las presiones motivadas por la línea editorial de *Informaciones*, definida por su entonces director como “liberal-conservadora, independiente del Gobierno, aperturista y reformista”⁶⁰⁹. Según Jesús de la Serna, las presiones eran de dos tipos: directas y concretas, dirigidas a la dirección del diario; y colaterales, dirigidas a la empresa editora. Fruto de éstas últimas fue, por ejemplo, la incorporación al CA de José María Alfaro Polanco, impuesta por la Administración en diciembre de 1972⁶¹⁰. Aunque las presiones no siempre se trasladaron a la redacción, sí acabaron afectando a los accionistas, quienes ejercieron, en palabras de Pedro Crespo, de “freno para los ímpetus de una redacción muy joven”⁶¹¹. Según Antonio Alférez,



⁶⁰⁹ Testimonio de Jesús de la Serna, director de *Informaciones* desde 1968, en entrevista personal mantenida el 30 de octubre de 2012.

⁶¹⁰ Según Jesús de la Serna, la maniobra de la entrada de Alfaro en Prensa Castellana fue un fracaso para el Ministerio, pues en los setenta, el antiguo falangista estaba “de vuelta de todo” y había dado un importante giro político. De la misma opinión es Pedro Crespo de Lara, gerente de la empresa durante el periodo. Según Crespo, Alfaro estaba llamado a actuar como “comisario político” del MIT, pero su talante liberal reforzó la independencia del diario. Testimonios de De la Serna y Pedro Crespo de Lara en sendas entrevistas personales mantenidas los días 30 de octubre y 26 de noviembre de 2012. En el documento que reproducimos en esta misma página, el jefe de la Oficina de Enlace aprovecha el envío de informes sobre consejeros al director general de prensa para informar del nombramiento de Alfaro Polanco.

⁶¹¹ Testimonio de Pedro Crespo de Lara, secretario general de Prensa Castellana desde finales de los sesenta y hasta poco después del final del franquismo, en entrevista personal mantenida el 26 de noviembre de 2012

[...] comenzaron a sentirse inquietos a medida que aquel modesto medio informativo [*Informaciones*] iba alcanzando prestigio e influencia. A [Laureano] López Rodó, el hombre importante en el Gobierno en esta etapa, le molestaba este órgano conservador pero independiente [...] Las presiones del Gobierno casi nunca se hicieron sentir directamente sobre Jesús de la Serna [director del diario], sino a través de los poderosos —y medrosos— accionistas de Prensa Castellana (Alfárez, *ibídem*).

A tales presiones le antecedió, como es obvio, la identificación de aquellos “poderosos” accionistas, así como de los consejeros y administradores de la empresa: el 22 de enero de 1973, Francisco Castrillo Mazeres, Jefe de la Oficina de Enlace del MIT, enviaba a la DGP un amplio listado de nombres en el que se incluían las “vinculaciones políticas a grupos o tendencias actuales” de los consejeros⁶¹².

A finales de ese mismo año, un nuevo informe indaga en la propiedad de la editora y concluye que, dado el control que sobre ella ejerce Inversora del Duero, S.A., “es obvio que quien tenga el control financiero de la misma, tendrá el de Prensa Castellana, S.A. y, en consecuencia, el del diario *Informaciones*”. Además de instar a descubrir a los accionistas de Inversora del Duero, el informe señalaba al “conocido banquero” Emilio Botín (Banco de Santander) como la otra figura clave de las finanzas de la empresa periodística.

Aunque la finalidad de la investigación no era, según se desprende de este mismo informe, la cancelación registral de la empresa, sí indujo, junto a las presiones consiguientes, los cambios accionariales de 1974 y, especialmente, el abandono de la inversión del Banco de Santander. Las pesquisas de 1973 habían descubierto que Inversora del Duero declaraba la propiedad de unas acciones en Prensa Castellana cuyo valor era superior a su propio capital social (lo que se debía a una ampliación de capital llevada a cabo por Inversora del Duero y no notificada al REP). La irregularidad no llevó, sin embargo, a la imposición de sanciones, ni tan siquiera a una nueva inspección de la empresa, dado que, según se decía en la nota, “ello habría colocado a la Administración en la tesitura de tener que admitir una irregularidad o cerrar el diario”. El MIT urgió en cambio a los interesados “por vía amistosa y personal” y a través de Alfredo Lafita Pardo —accionista de Inversora del Duero y presidente de la Fundación March—, a poner en regla su situación. A finales del año siguiente, Inversora del Duero —controlada entonces por Arturo Suqué Puig (14’54%), Delfino Velasco Velasco (7’88%), Alfredo Lafita Pardo (6’18%), Juan Rafart (6’06%) y otros— quedaba, tras varios traspasos de títulos, con apenas un cuarto de las acciones de Prensa Castellana. Los hermanos De la Serna se hacían con otro 16’69%, mientras que Prensa Española,

⁶¹² Los informes elaborados en dos grandes cuartillas se encuentran en Apéndice de empresas periodísticas (1936-1966) (Prensa Castellana, Documentos e Informes).

S.A. (*Abc*) adquiriría otro cuarto del capital, sustituyendo en el accionariado al Banco de Santander, que había sucumbido a las presiones. Según uno de los responsables, que ha preferido no ser identificado, el presidente del Gobierno se había quejado directamente al Banco de Santander de la línea editorial de *Informaciones*. Preguntado sobre la actitud que había de adoptar el banco, el presidente había respondido, siempre según el responsable entrevistado: “yo me marcharía”. El 13 de noviembre de 1974, un teletipo de la agencia Europa Press informaba de que el Santander había decidido retirarse de la empresa, por lo que habían dimitido del Consejo sus representantes, José María de Cascante y Rafael Echegoyen. Al decir de Pedro Crespo, la marcha del Santander sumió al resto de bancos en “la inquietud y el desconcierto”. Según otro de sus directivos, el banco había tenido que sufrir, durante sus siete años de accionista de Prensa Castellana, una constante “identificación de las posturas de la entidad con las de *Informaciones*” (Alfárez, *op. cit.*: 109).

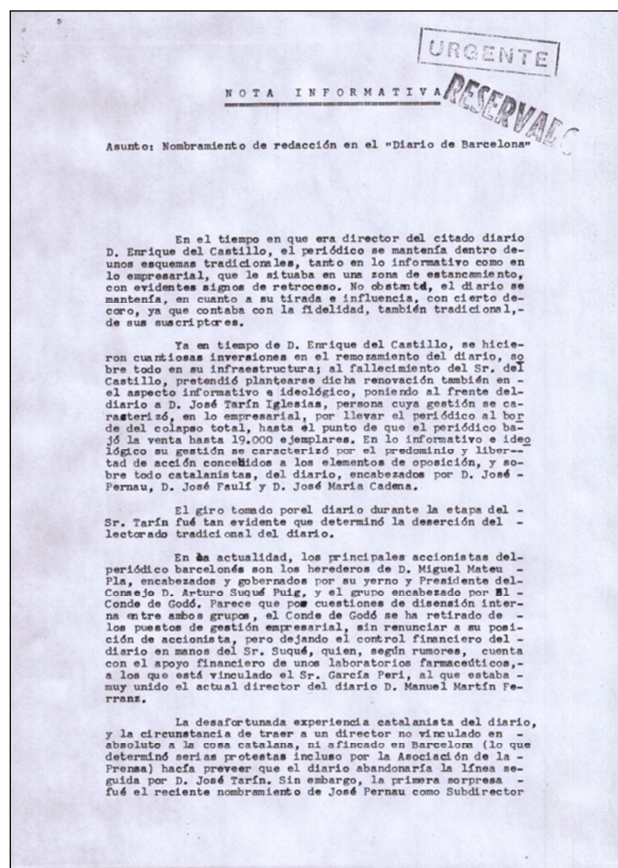
En 1974, el MIT moviliza por última vez a sus órganos de vigilancia para tratar de incidir en la línea editorial de un periódico: la del histórico *Diario de Barcelona*, editado por Barcelonesa de Publicaciones, S.A., en la que también tenía intereses, por cierto, Arturo Suqué Puig. La sociedad, constituida en el año 1943, había estado controlada hasta 1972 por Miguel Mateu Pla⁶¹³ y por el propietario de *La Vanguardia*, Carlos de Godó Valls. En el otoño de ese año, la muerte de Mateu desataba la guerra interna en la empresa. Por su control pugnaron el conde de Godó y Arturo Suqué, yerno de Miguel Mateu y miembro del Círculo de Economía, un grupo de empresarios liberales formado por Carlos Ferrer Salat⁶¹⁴, Carlos Güell de Sentmenat y Joan Mas Cantí, además del propio Suqué. Los llamados “cuatro mosqueteros” (Torres, 2000: 550) irán aumentando su participación en Barcelonesa hasta dejar al conde de Godó en minoría: en 1974, éste acumulaba, junto a su hijo, el 43’22% del capital, frente al 50’05% que controlaba el grupo de Suqué a través de la sociedad Barcelonesa de Inversiones, S.A.⁶¹⁵ El ascenso de

⁶¹³ Miguel Mateu Pla (1898-1972) se había hecho cargo de las empresas de su padre en 1935, cuatro años antes de ser nombrado primer alcalde de Barcelona durante el franquismo. Según el Directorio de Consejeros y Directores (DICODI), en 1967 presidía ocho sociedades (entre ellas, la Agencia EFE), era vicepresidente de otra y se sentaba en el Consejo de Administración de quince más. Políticamente, fue consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes por designación directa de Franco entre 1943 y hasta 1972, cuando fallece. (V. Apéndice de empresas periodísticas [1966-1975] (Barcelonesa de Publicaciones, Gobierno Corporativo). Biografía en EFEDATA, Base de datos de la Agencia EFE y AH EFE.

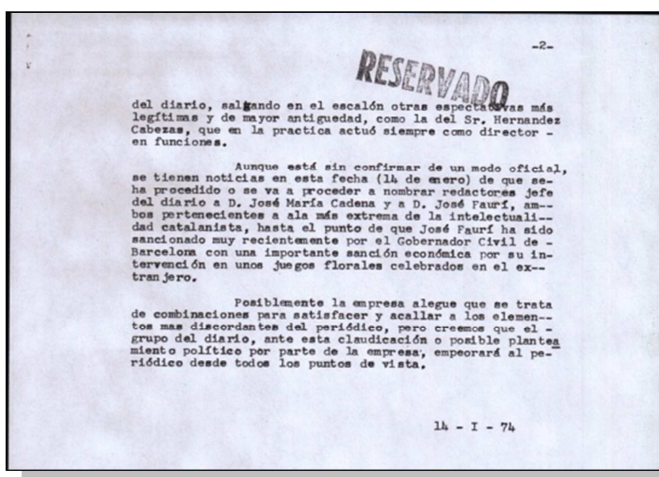
⁶¹⁴ Definido como liberal y europeísta, Carlos Ferrer Salat había sido compañero de promoción de Arturo Suqué en el Instituto Químico de Sarriá. En 1953 había montado un pequeño laboratorio que acabaría transformándose en la sexta empresa del mundo del sector farmacéutico por volumen de ventas (Torres, 2000: 550).

⁶¹⁵ Barcelonesa de Inversiones, S.A. se había constituido el 17 de julio de 1974 para gestionar esta cartera de acciones del grupo de Suqué. Controlaba la sociedad el propio Arturo Suqué, con un 31’25% del capital. Otros accionistas importantes eran Alberto Folch Rusiñol (28’51%), Carmen

los miembros del Círculo de Economía no era políticamente intrascendente: suponía el triunfo de un liberalismo aperturista contrario al continuismo que representaba el conde de Godó (Saura, 1993: 19); lo que, desde luego, no pasó inadvertido para la Administración.



Preocupado por la deriva catalanista del *Diario de Barcelona*⁶¹⁶, El MIT vuelve a activar su aparato de vigilancia y presión en 1974. El 14 de enero, una primera nota informativa urgente y reservada explicaba la situación empresarial de Barcelonesa de Publicaciones, en la que “el Conde de Godó se ha retirado de los puestos de gestión



empresarial⁶¹⁷, sin renunciar a su posición de accionista, pero dejando el control financiero del diario en manos del Sr. Suqué”. Según la nota —muy probablemente obra de la delegación provincial barcelonesa—, el nombramiento de Manuel Martín Ferrand como director del diario no había alterado la línea catalanista inaugurada por su predecesor, José Tarín Iglesias.

Aunque está sin confirmar de un modo oficial [se advertía, por otra parte], se tienen noticias en esta fecha (14 de enero) de que se ha procedido o se va a proceder a

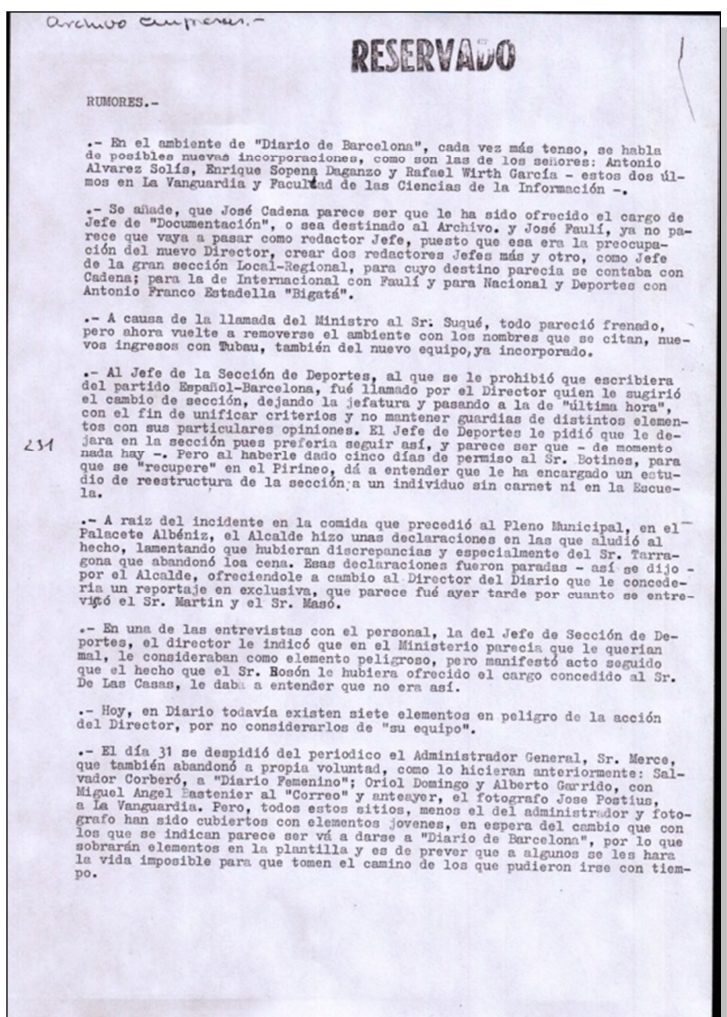
Mateu Quintana (17'94%), Carlos Ferrer Salat (8'78%) y Jorge Estruga Estruga (6'38%). El resto eran minoritarios.

⁶¹⁶ Todos los informes a que hacemos referencia a continuación se encuentran en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 24, exp. 231. Los más relevantes pueden consultarse en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Barcelonesa de Publicaciones, Documentos e Informes).

⁶¹⁷ Carlos de Godó Valls, en efecto, había abandonado la vicepresidencia de Barcelonesa de Publicaciones, aunque había dejado como vocales en el Consejo a sus hombres de confianza, Marcelino Coll Godó, Joaquín Forn Costa, Jaime Arias Zimmerman y Leopoldo Rodés Castañé.

nombrar redactores jefe del diario a D. José María Cadena y a D. José Faurí, ambos pertenecientes al ala más extrema de la intelectualidad catalanista [...]

Ninguno de estos nombramientos llegará a producirse, debido a las presiones ejercidas en tal sentido por el MIT sobre Arturo Suqué. Así lo evidencia otro informe reservado sin fecha ni firma (aunque, como el anterior, casi con toda probabilidad obra de la delegación provincial de Barcelona) y titulado "Rumores", en el que se explica que "a causa de la llamada del Ministro al Sr. Suqué, todo pareció frenado".



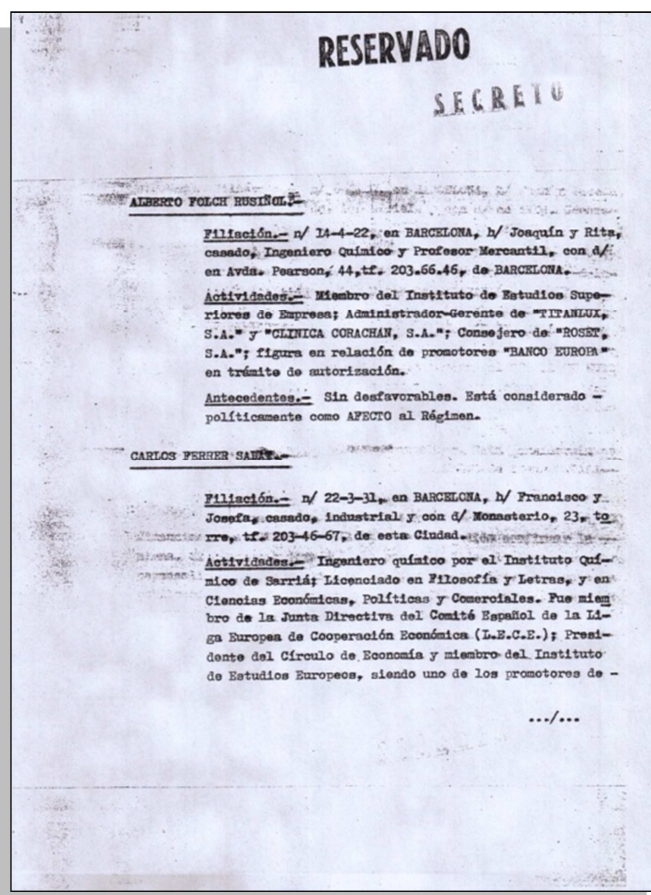
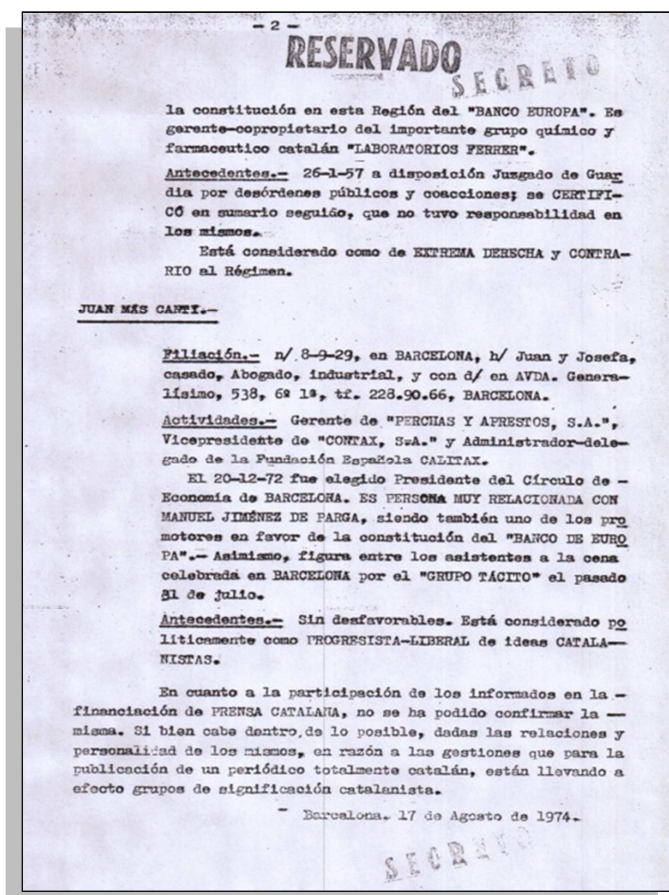
La atención de la Administración pareció desplazarse a partir de entonces de la redacción del diario a su empresa editora. Un nuevo informe, en este caso sin fecha, explicaba la guerra interna librada desde 1972 entre el conde de Godó y Arturo Suqué.

En dicha lucha interna [se explica en la nota], el yerno del Sr. Mateu, D. Arturo Suqué Puig, actual presidente de la empresa, y que ya figuraba como consejero y accionista de la misma, se hizo con el control de toda la participación accionarial perteneciente a la familia Mateu. D. Arturo Suqué Puig, casado con la única hija del Sr. Mateu, es persona muy conocida en los medios económicos y sociales catalanes, habiendo ocupado la presidencia de la Junta del Puerto de Barcelona y del Círculo de Economía.

Luego de interpretar la salida de Godó de los puestos de gestión de Barcelonesa como un intento de que ésta se desplomara económicamente, el informe proponía una posible sanción a la empresa basada en la inexactitud de los datos aportados al REP, dado que no se habían comunicado los cambios derivados de la muerte de Miguel Mateu⁶¹⁸. Por si

⁶¹⁸ El incumplimiento de la obligación de comunicar los nuevos datos al REP era cierto: En 1971, la empresa había informado al registro de una ampliación de capital por la que los hermanos Mateu Pla se habían hecho con un 27'33% de la empresa, frente al 11'15% de Arturo Suqué y el 41'67% de Carlos Godó y su hijo. La siguiente comunicación al REP no llegará hasta el 1 de octubre de 1974, más de dos años después de la muerte de Mateu, cuando se envía la nueva composición del accionariado y del Consejo de Administración.

fuera poco, el 21 de agosto de 1974, el jefe de la Oficina de Enlace del MIT, Teófilo Alonso de la Cal, enviaba a la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa informes personales, clasificados como reservados y secretos, de Carlos Ferrer Salat, Alberto Folch Rusiñol y Juan Mas Cantí. Los dos primeros formaban parte de Barcelonesa de Inversiones, accionista de referencia de Barcelonesa de Publicaciones, S.A., de la que Folch Rusiñol y Mas Cantí eran además consejeros.



Antes de que acabara el año, otra nota fechada el 19 de diciembre y elaborada por el delegado provincial del MIT en Barcelona informaba a la DGRJP de la visita a la Delegación de Javier Godó Muntañola, hijo del conde de Godó. La visita tenía por objeto comunicar al delegado la venta de sus acciones en Barcelonesa de Publicaciones al empresario catalán José María Santacreu, identificado en la nota como "representante de Fraga en Cataluña". Según el delegado, la entrada de Santacreu en *El Diario de Barcelona* era una maniobra de Fraga tras el fracaso político que había supuesto para él la paralización del expediente de inscripción de *El País*⁶¹⁹. José María Santacreu había

⁶¹⁹ Lo cierto es que, aunque la demora de la tramitación de la inscripción de PRISA como editora de *El País* podía interpretarse como un fracaso político para Fraga, la entrada de Santacreu en el

adquirido, en efecto, a finales de 1974, el 44% del capital de Barcelonesa de Publicaciones, S.A., hasta entonces en poder de los Godó, que abandonaban definitivamente su inversión. A partir de entonces, el ascenso de Santacreu en la empresa será irresistible: en septiembre de 1975, compraba 14.012 acciones a Barcelonesa de Inversiones (además de otras 175 a pequeños accionistas) y accedía a la presidencia de Barcelonesa de Publicaciones; y el 1 de diciembre cubría una nueva ampliación de capital de la sociedad hasta hacerse con el 71'48% del capital social, frente al 25'02% de Suqué y sus hombres. Aunque no han quedado archivadas evidencias de que el repliegue del grupo de Suqué se debiera directamente a las presiones de la Administración, los hechos son elocuentes: el grupo fue objeto de una profusa investigación por parte del MIT en el año 1974, debido a una posible deriva catalanista detectada en la línea editorial de su diario. Ese año, el Ministerio presionó a la empresa para evitar la contratación de periodistas considerados catalanistas; y se contempló la posibilidad de sancionarla e incluso de cancelar su inscripción registral por la no comunicación de importantes datos al REP. Al año siguiente, Arturo Suqué y los hombres del Círculo de Economía dejaban el control de Barcelonesa de Publicaciones en poder de José María Santacreu, identificado como el hombre del ex ministro Manuel Fraga en Cataluña, y cuya entrada en otra empresa de prensa catalana había sido impulsada hasta 1974, como enseguida veremos (6.4.2.2), desde el Ministerio.

Los tres casos, por tanto, en los que el Ministerio de Información y Turismo activó su aparato de vigilancia sobre las empresas periodísticas debido a las líneas editoriales de sus diarios, se saldaron con cambios relevantes, bien en la dirección de la publicación (caso de Editorial Navarra), bien en la propiedad y gobierno de las empresas (casos de Prensa Castellana y Barcelonesa de Publicaciones). Todo apunta a que las presiones de la Administración jugaron un papel importante en dichos cambios. El conocimiento exhaustivo de la situación empresarial y la estructura accionarial de las editoras, unido a las potestades coercitivas que arrogaba el artículo 29 de la LPI, habían concedido a la Administración una temible capacidad de presión y coacción sobre las empresas periodísticas editoras de prensa diaria.

6.4.1.2 La vigilancia de operaciones de compraventa de acciones

Aunque la preocupación por la línea editorial de los diarios siempre pareció mantenerse como telón de fondo de las actuaciones administrativas, las más de las veces

accionariado de Barcelonesa de Publicaciones coincide con la ofensiva de Manuel Fraga para que se autorizara la inscripción de PRISA (v. 5.3.2). Manuel Fraga no había renunciado, por tanto, a finales de 1974, a sacar adelante el proyecto de *El País*.

el recurso a la maquinaria de vigilancia estuvo orientada al control de los movimientos accionariales y directivos que se daban en el sistema de prensa. La Administración mostró, entre 1966 y 1975, un celo extraordinario por conocer anticipadamente cuantas operaciones de compraventa de acciones se proyectaron, negociaron y efectuaron en el panorama de la prensa española; así como de los cambios en el gobierno de las empresas que de ellas se derivaron.

La llegada de Alfredo Sánchez Bella al MIT a finales de 1969 había supuesto el cierre del sistema de prensa a las empresas periodísticas que quisieran editar nuevos diarios. Una única posibilidad les quedaba a aquellos empresarios que aspiraran a editar un diario de información general en España: la adquisición de paquetes de acciones en empresas periodísticas ya autorizadas que les permitieran acceder, personalmente o a través de hombres de su confianza, a sus órganos de gobierno. Naturalmente, esta puerta trasera tampoco escapaba al control de la Administración⁶²⁰ que, por si fuera poco, lejos de conformarse con el conocimiento a posteriori de cambios ya consumados, logró adelantarse a cuantos movimientos se produjeron gracias al aparato de vigilancia orquestado por Manuel Jiménez Quílez, empleado en mayor o menor grado, en función del interés que le merecieran a la Administración las operaciones.

Tal fue el celo administrativo que, de todas las negociaciones de compraventa de acciones que se dieron en el sistema español de prensa diaria entre 1966 y 1975, sólo en cuatro casos no han quedado archivados rastros de pesquisas. Ni sobre la compra de títulos de Nueva Rioja, S.A. (*Nueva Rioja*) por la Caja de Ahorros de Logroño y el procurador en Cortes Álvaro Lapuerta Quintero⁶²¹; ni sobre la adquisición por el conde

⁶²⁰ Dado que, como hemos ya señalado, en virtud del artículo 28.1 de la Ley de Prensa, toda alteración “de propiedad o de acciones”, así como de la composición de los “órganos directivos o administradores”, debía ser comunicada al Registro de Empresas Periodísticas, so pena de sanción administrativa (art. 28.2) o incluso de cancelación registral (art. 29.2).

⁶²¹ Nueva Rioja, S.A., editora del diario riojano homónimo, había estado controlada, desde su fundación en 1941, por las familias Martínez Zaporta, Martínez Llorente, Martínez Martínez, Garrido Martínez, y Emperador Martínez. El 2 de agosto de 1969, la empresa comunica al REP que Álvaro Lapuerta Quintero ha comprado un importante paquete de 2.600 acciones, lo que lo sitúa como el accionista individual más importante, con el 26’02% del capital, sólo por detrás de la familia Martínez Zaporta. Durante el año anterior, el diario había sido sancionado en dos ocasiones por infracción del artículo segundo (v. 7.3.2).

A principios de los 70, la Caja de Ahorros Provincial de Logroño aparece en la estructura de propiedad de la empresa con un 10’62% del capital. Desde entonces, la Caja no dejará de comprar títulos hasta alcanzar en 1975 la mayoría accionarial. Ese año, la entidad posee el 26’27% de la empresa, 25 participaciones más que el segundo mayor accionista, el procurador en Cortes y vicepresidente de Banco de Crédito Local, Álvaro Lapuerta Quintero (la relación de accionistas en 1967 y 1975 puede consultarse en Apéndice de empresas periodísticas [1966-1975] [Nueva Rioja, Propiedad]. No hay archivado en el expediente registral de la empresa (num. 994, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. [9]9.1.1 c. 112) ninguna prueba de que el MIT se interesara por el aumento del paquete accionarial de la Caja.

de Godó del 50% de *Tele-Exprés*⁶²²; ni sobre la compra de DYRSA (*El Alcázar*) por la Confederación de Excombatientes de José Antonio Girón de Velasco⁶²³; ni sobre el traspaso de Ferrol Ediciones, S.A. (*Ferrol Diario*) a Enrique Botas Blanco⁶²⁴ existen en el REP indicios de indagaciones efectuadas por el MIT. Tras los cambios de propiedad, ninguna de las empresas volvió a ser sancionada administrativamente por sus contenidos.

Otra operación fue seguida por la Administración a través únicamente de las informaciones publicadas en prensa y recopiladas por los Servicios de Información de la DGP. Fue la compra de Editorial Mencheta, S.A. (*El Noticiero Universal*) por el Banco Condal y el poderoso alcalde de Barcelona, José María de Porcioles Colomer, a quien, precisamente, más había criticado el histórico diario durante su etapa de gobierno municipal (Nogué & Barrera, 2006: 187)⁶²⁵. Aunque la prensa del momento llegó a

⁶²² El 30 de noviembre de 1968, se constituye la empresa Barcelona Press, S.A. para editar el diario *Tele-Exprés*. La nueva sociedad nació fruto del acuerdo entre el banquero Jaume Castell Lastortras, propietario de la antigua editora del diario, la empresa Diario Tele-Exprés, S.A., y Carlos de Godó Valls, editor de *La Vanguardia*. Barcelona Press, S.A. quedaba dividida entre Godó (propietario del 50% del capital y vicepresidente) y Castell Lastortras (presidente y propietario de un 49'5% de las acciones, y de otro 0'5% indirectamente a través de Luis Franquesa Graner). La propiedad se mantendrá así hasta 1975, cuando Talleres de Imprenta, S.A. (propiedad de Carlos de Godó) se haga con la totalidad de la empresa. (V. Apéndice de empresas periodísticas [1966-1975] [Barcelona Press, Propiedad]). Ningún informe referido a estas operaciones ha quedado archivado en el expediente de la sociedad en el REP (num. 48, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. [9]9.1.1 cajas 5 y 283). *Tele-Exprés* había sido sancionado en abril y julio de 1968 por infracción del artículo segundo de la LPI. Desde abril de 1969, poco después del desembarco de Godó en la empresa editora, no volvería a ser sancionada.

⁶²³ En 1975, la Confederación Nacional de Excombatientes se hacía con el capital de DYRSA, editora desde 1969 de *El Alcázar*, tras el expolio administrativo de la cabecera a Prensa y Ediciones, S.A. Sobre este cambio de propiedad nos detendremos en el apartado del capítulo referido a las operaciones impulsadas por la Administración.

⁶²⁴ En 1971, Acción Social Católica, S.A., propietaria hasta entonces de Ferrol Ediciones, S.A. (*Ferrol Diario*), vendió su paquete de acciones a uno de sus socios y fundadores, Enrique Botas Blanco. Desde entonces, Botas Blanco controlaría la mayoría accionarial de la empresa de forma directa (5'47% de las acciones) e indirecta a través de su empresa Botas Blanco, S.A. (50'75% del capital). La operación sólo afectó a las acciones de Acción Social Católica, S.A., de modo que sólo supuso la salida del CA de sus propietarios, Alejandro y José Luis Outeriño Rodríguez y de Amando de Prada Castrillo. El resto de accionistas minoritarios mantuvieron sus participaciones y puestos en el CA, que pasó a estar presidido por Enrique Botas Blanco y vicepresidido por su hijo José Botas Piñón. La Administración no se interesó por la operación, probablemente dada la levedad de la alteración, que no amenazaba con modificar la línea editorial del diario. Exp. 2942, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 289.

⁶²⁵ Entre 1971 y 1972, las familias Sedó Peris y Peris Mencheta vendieron Editorial Mencheta, S.A. al Banco Condal, ligado según la prensa del momento al alcalde de Barcelona, José María de Porcioles Colomer y al presidente de la Diputación, José María Muller de Abadal. La operación no motivó investigación alguna de la DGP, que se limitó a archivar los recortes de prensa recogidos por sus Servicios de Información.

Tampoco indagó la DGP en 1975 en la salida de la empresa periodística del Banco Condal ni en el consiguiente aumento de poder accionarial de José María de Porcioles, retirado ya de la Alcaldía. Según la prensa recopilada por los Servicios de Información de la Dirección General, en 1975, Porcioles se había hecho con el control de la empresa periodística para evitar la entrada en ella de la Organización Sindical, interesada en el paquete accionarial del Banco Condal había mantenido hasta entonces en ella. En 1975, Editorial Mencheta quedará bajo control del ex alcalde, quien junto a sus dos hijos acumulaba el 29'85% del capital, al que había que sumar el 18'86% de su

publicar que la adquisición había sido facilitada por un ministro “con mucho predicamento en el Gobierno de entonces”⁶²⁶, tampoco han quedado rastros en el expediente de la empresa de que tal intervención se produjera⁶²⁷; por más que no deje de ser llamativa la excepcional falta de atención del MIT a la compra. No parece casual, desde luego, que las operaciones de cambio de propiedad que menos interés despertaron en las oficinas del Ministerio fueran protagonizadas por prohombres franquistas como Girón, Lapuerta, Godó o Porcioles, todos ellos procuradores en Cortes y con inmejorables contactos políticos.

El resto de movimientos en la propiedad sí fueron examinados por la Administración a través, no sólo de los Servicios de Información de la DGP, sino también de la Oficina de Enlace del ministro y, sobre todo, de las Delegaciones Provinciales del MIT. A todas ellas nos referiremos en este epígrafe, según fueran (a) entradas de nuevos socios en empresas periodísticas autorizadas; o (b) guerras internas entre accionistas por el control de las empresas y publicaciones.

6.4.1.2.1 Operaciones de cambio de propiedad y gobierno corporativo vigiladas por el MIT

Un estrecho seguimiento administrativo motivó, para empezar, el cambio de propiedad al que parecían abocados *La Voz de Albacete* y *Primera Página*, dados los procesos de embargo a los que se vio sometido su propietario, Pedro García Munera entre 1972 y 1975. En el expediente de inscripción de su empresa periodística individual⁶²⁸ han quedado archivados hasta diez informes de los delegados provinciales de Alicante y Albacete relativos a los embargos y subastas de los dos pequeños periódicos locales, arrebatados a García Munera en 1972, tras perder un juicio contra la Agencia EFE. A pesar de lo exiguo de sus tiradas, la Administración no dejó de preocuparse ante la eventual alteración de la línea editorial que un cambio de propiedad podría haber comportado.

verno, el consejero delegado Esteban Bassols Montserrat. Como en 1971, la DGP se limitó a archivar recortes de prensa, sin que haya evidencias de mayores pesquisas realizadas ni reclamadas por su parte.

⁶²⁶ El 11 de abril de 1975, el diario *Informaciones* publicaba lo siguiente: “Cuando *El Noticiero Universal* fue comprado [en 1971 y 1972] por el Banco Condal se levantó en Barcelona una notable polémica ciudadana, dado que el periódico había mantenido hasta entonces una línea muy crítica de la actuación municipal. Se llegó a publicar incluso que en la operación había intervenido, favorable y directamente, algún ministro con mucho predicamento en el Gobierno de entonces”.

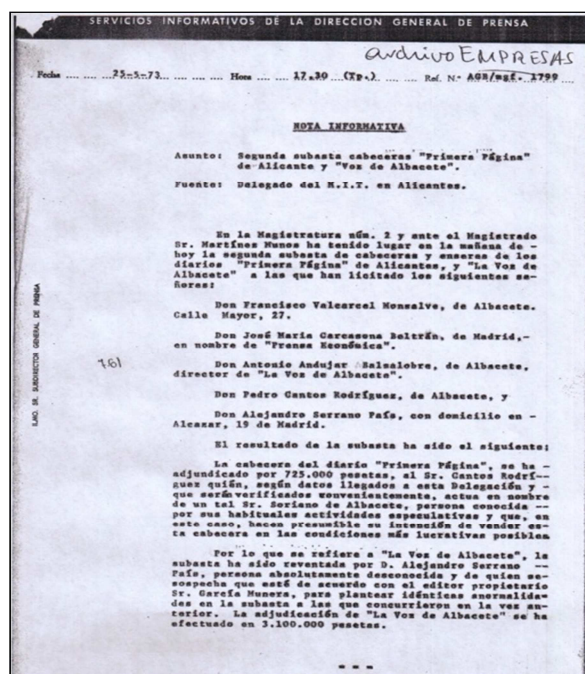
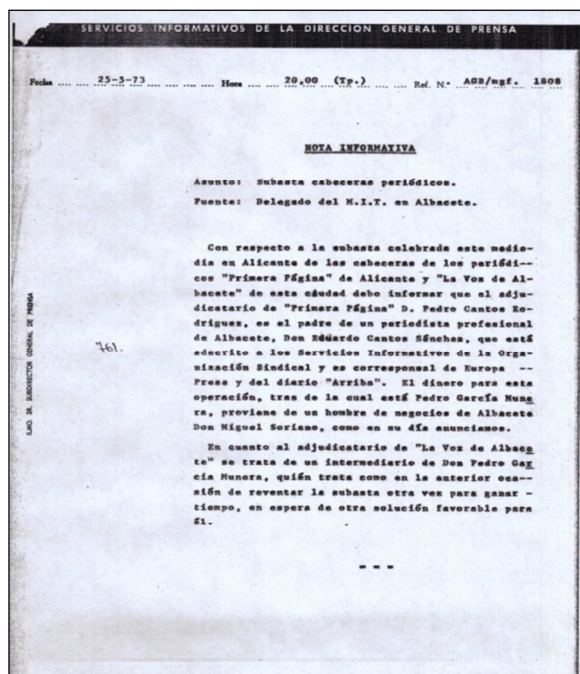
⁶²⁷ Exp. 800, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 91

⁶²⁸ Exp. 761, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 87

El 4 de abril de 1973 se celebraba en la Magistratura de Trabajo de Alicante la primera subasta pública de los diarios, relatada por las delegaciones provinciales albaceteña y alicantina en sendos informes. El delegado del MIT en Albacete resumía así lo ocurrido:

El rematante de ambas cabeceras ha sido Don Antonio Segura Navarro, banderillero, sin solvencia conocida para tal operación, que presumimos representa a [Pedro] García Munera y que no pagará cantidades del remate, perdiendo el depósito previo, pero obteniendo así tiempo hasta la convocatoria de una nueva subasta, para nueva negociación con algún grupo.

La presunción del delegado era correcta: a principios de abril, otros dos informes de las Delegaciones de Albacete y Alicante comunicaban que Segura Navarro no había ingresado la cantidad acordada en la subasta, por lo que ésta había sido declarada quebrada. García Munera repetirá la maniobra en el siguiente remate, fijado para el día 25 de mayo. Dos notas de las Delegaciones enviadas al subdirector general de prensa por los Servicios Informativos de la DGP vuelven a informar de lo allí acontecido: *Primera Página* es comprada por Pedro Cantos Sánchez, en nombre de Miguel Soriano, “persona conocida por sus habituales actividades especulativas”, y tras el cual se encontraba una vez más Pedro García Munera, según el delegado albaceteño; mientras que *La Voz de Albacete* vuelve a ser adjudicada a un intermediario insolvente del propio García Munera.



Una nueva subasta de *La Voz de Albacete* queda fijada para el 14 de febrero de 1974. Unos días antes, la Delegación Provincial albaceteña advertía de la probable intención de García Munera de volver a reventarla; y exponía:

En Albacete por otra parte existe interés en todos los niveles para que el periódico [*La Voz de Albacete*] continúe en la misma línea política actual y sobre todo que no se pierda en el maremagno de una venta por subasta.

Entra ahora en el planteamiento anterior D. Miguel Soriano [...] que no tiene estudios superiores pero está considerado como hombre rico, dedicado a actividades relacionadas con las finanzas [...] Hace vida escasamente social, a nivel de la Provincia, aunque cuenta con amigos relacionados con la política del país (Fueyo, por ejemplo⁶²⁹) [...] [el subrayado es nuestro]

DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

121

761

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
013185 ENE 30 74
REGISTRO CENTRAL

De: DELEGACION PROVINCIAL

Ciudad, fecha y ref.: Albacete, 28 de Enero de 1974/

Ilmo. Sr.:

En relación con "*La Voz de Albacete*", periódico local cuyo propietario gerente Don Pedro García Munera, viene atravesando una grave crisis económica, derivada del desastre financiero en que terminó el diario "*Primera Página*" de Alicante, del que fué propietario y fundador, se redacta el presente informe.

INFORME

1º/ Para el día 14 de febrero próximo en Alicante, Magistratura de Trabajo a las 11 horas, están convocadas dos subastas sobre bienes de dicho periódico albacetense, en cuantía total de 697.800 pts. incluyéndose en la licitación la cabecera del citado periódico.

2º/ Tiene noticias la Dirección General, por los informes remitidos, en ocasiones semejantes anteriores, de que se han celebrado actos parecidos en las precedentes ocasiones, habiendo acudido a todas ellas García Munera a lo que se llama "reventar" la subasta. Las dos subastas actuales son consecuencia de no haber atendido en los plazos a que se comprometió con anterioridad, al pago de la cantidad correspondiente, aunque en alguna parte pequeña cumplió, y a su cumplimiento, además, fueran destinadas las cantidades con que reventó las subastas en las pasadas ocasiones.

3º/ La situación se viabiliza de la manera que se expresa a continuación, como resultado de hechos diversos acaecidos en Albacete estos días.

García Munera no parece tener posibilidades por ahora, que se puedan apreciar, de acudir a la subasta para reventarla con sus propios medios, ni para saldar sus otras deudas, de cuya cuantía se dió noticia también, a ese Centro Directivo, en las ocasiones anteriores.

En Albacete por otra parte existe interés en todos los niveles para que el periódico continúe en la misma línea política actual y sobre todo que no se pierda en el maremagno de una venta por subasta.

Entra ahora en el planteamiento anterior D. Miguel Soriano, de 45 años, casado, con varios hijos, que no tiene estudios superiores pero está considerado hoy como hombre rico, dedicado a actividades relacionadas con las finanzas. De origen humilde metido en su juventud en negocios audaces, su fortuna ha ido aumentando con los años, así como su serenidad. Hace vida escasamente social, a nivel de la -

...

A: []

DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

HOJA N.º 2

.../...

Provincia, aunque cuenta con amigos relacionados con la política general del país, (Fueyo, por ejemplo) a quienes ha invitado a fines de - como en fines de su propiedad. En ocasiones es generoso y leal con los amigos, por más que en definitiva su personalidad siempre se ha - considerado un poco misteriosa en su progreso y desarrollo.

En una de las subastas anteriores ayudó a García Munera. Ahora con su amigo íntimo D. Pedro Cantos, agente de la Propiedad Inmobiliaria, y padre del periodista de Albacete D. Eduardo Cantos Grande, trata de hacerse con la "*Voz de Albacete*" para que este periódico tenga continuidad.

Ha ofrecido a García Munera lo siguiente:

Sufragar toda la deuda, darle dos millones de pesetas, y mantenerlo en la nueva empresa como empleado, donde aparte del periódico - se trataría de dar importancia a la imprenta con una labor editorial más activa que la actualmente desplegada.

4º/ En un principio García Munera ha visto con ese planteamiento una salvación a su difícil problema, pero hace un par de días, cuando debía formalizar la aceptación de lo ofrecido, manifestó a ese grupo que no le interesaba la propuesta y que el acudir a la subasta con posibilidades conseguidas de otros niveles.

5º/ El periódico marcha muy mal. La muerte, el 30 de noviembre - último, del Director Andujar, ha dejado "*La Voz de Albacete*" prácticamente en manos de García Munera que tiene supeditado al Director en funciones D. Luis Parrado, periodista profesional en plantilla del - diario, en la que sólo existe otro - quien ha manifestado a Munera y al Delegado que suscribe sus deseos, de que provea de inmediato la dirección pues no parece con ánimos ni deseos de dirigir el periódico - ya que no se entiende bien con García Munera, quien aparte de como gerente parece inmiscuirse en ocasiones en la labor del Director lo que ha planteado graves situaciones entre ambos.

La solución estimo que nada debe hacerse, únicamente esperar a - que se remueva la subasta, donde es posible que Munera, trate de - "reventarla" otra vez para ganar tiempo, aunque signifique que el plazo de dos meses, con el actual director en funciones, termina con él mes en curso.

7º/ Dadas las posibilidades económicas y los antecedentes políticos sociales del grupo Soris-Cantos, probablemente sería la solución más aceptable, hasta donde pudiese pervenir, para el Diario "*La Voz de Albacete*". Ambos estimo son personas afectas al Movimiento y leales al Gobierno.

Dado a V.I. el 28 de Enero de 1974.

Ilmo. Sr. Director General de Régimen Jurídico de Prensa.
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO, MADRID.-

A pesar de que el delegado estimaba la opción de Soriano como "la más aceptable", en tanto se trataba, a su juicio, de un hombre afecto al Régimen y leal al Gobierno, aconsejaba a la DGRJP no intervenir en la subasta. Así se hará, en efecto: aunque se mantendrá una estrecha vigilancia del caso (que incluirá, durante el año siguiente, algunos informes más de las delegaciones, realizados ya a instancia suya, ya a requerimiento de la DGRJP), la Administración nunca intervendrá en la empresa ni se

⁶²⁹ Parece referirse a Jesús Fueyo Álvarez, consejero nacional del movimiento y procurador en Cortes.

inmiscuirá a favor de uno u otro aspirante a su propiedad, lo que permitirá a García Munera —quien no recuerda, por lo demás, haber recibido presiones del MIT para deshacerse de sus publicaciones⁶³⁰— mantener ambos diarios, a pesar de sus acuciantes deudas e innumerables juicios contra acreedores (y que no parecieron motivar, sin embargo, inspecciones del MIT, de las que no hay rastro en el expediente). Sin olvidar que se trataba de pequeños diarios locales y de baja tirada, la inhibición del Ministerio parece sugerir su preferencia por empresas periodísticas con líneas editoriales convenientes, aunque en quiebra, antes que por empresas solventes pero de orientación política incierta.

También en la adquisición del 51% de Última Hora, S.A. por Pedro Serra Bauzá⁶³¹ se limitará el MIT a vigilar y dejar hacer. El comprador, en este caso, no sólo era conocido por la Administración, sino que, como ya comprobamos, había gozado de su favor en la fundación de Majorca Daily Sun, S.A. (*Majorca Daily Bulletin*) y en la adquisición de Mediterranean Publishing Co., S.A. (*Iberian Daily Sun*). Por si fuera poco, la operación auguraba un cambio de orientación en *Última Hora*, uno de los diarios más sancionados por sus contenidos a finales de los sesenta (v.7.3.2). Nada de ello le evitó a Serra, en todo caso, el preceptivo seguimiento administrativo de la compra de *Última Hora*, su tercer diario balear; operación que llevó al delegado provincial en Baleares, Matías Mut, a enviar hasta tres informes por télex a la DGRJP en junio de 1974⁶³². Lo mismo ocurriría con Empresa Periodística España, S.A. (*Sol de España*) adquirida en 1970 a Luis Zarraluqui por un grupo de empresarios encabezados por Enrique Van Dulquen Muntadas, Miguel Delgado Jiménez y José María Santos Rein⁶³³. Según Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, el MIT de Sánchez Bella no intervino en la venta⁶³⁴. Tres años después, sin embargo, Fernando Liñán recibía, poco después de su llegada al MIT, un informe sin firmar y fechado el día 13 de abril de 1973 en el que se daba cuenta de la vinculación con el Opus Dei de Bartolomé Vargas, Juan Kindelán Jaquotot y su

⁶³⁰ Testimonio de Pedro García Munera en entrevista telefónica mantenida el 31 de agosto de 2012.

⁶³¹ Última Hora, S.A., editora del vespertino homónimo, había estado hasta entonces en poder de los herederos de José Tous Ferrer, esto es, de diversas ramas de la familia Tous. En 1974, Serra Bauzá se hizo con el 51% de la empresa, junto a Andrés Rullán Castañer y Andrés Isern Vidal. El otro 49% se mantuvo en poder de los Tous. José Tous Barberán ocupará, de hecho la presidencia de la empresa, de la que Serra Bauzá será designado consejero delegado, y su esposa, Margarita Magraner, secretaria del consejo. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Última Hora, Propiedad, Gobierno Corporativo).

⁶³² Los tres se encuentran en exp. 278, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 32.

⁶³³ Los nuevos propietarios habían suscrito una ampliación de capital hasta alcanzar los 20 millones de pesetas. Enrique Van Dulquen (presidente) y Miguel Delgado (consejero) poseían un 10% cada uno; y otros siete empresarios se repartían un 5% por cabeza. El resto eran minoritarios.

⁶³⁴ Testimonio de Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga en entrevista mantenida el 28 de agosto de 2012.

presidente y consejero delegado, Claudio Gallardo⁶³⁵. Empresa Periodística España, S.A. había quedado, en efecto, incorporada a la órbita de la prensa opusdeísta a través de sociedades como CINISA (propietaria de un 14% en 1975) y de empresarios como Juan Pablo Villanueva Domínguez.

En 1974, el MIT volvía a interesarse por La Voz de Asturias, S.A., a la que ya había inspeccionado en junio de 1971 debido a la línea editorial de su diario. A diferencia del caso de Editorial Mencheta, esta vez la información publicada en la prensa y recopilada por los Servicios de Información de la DGRJP sí llevó a la Administración a movilizar su aparato de vigilancia a través de la Delegación Provincial. Los días 17 de enero y 1 de febrero de 1974, Francisco Serrano Castilla, delegado del MIT en Asturias, advertía a Madrid en sendas cartas de un inminente cambio de propiedad de *La Voz de Asturias*. La información había sido reclamada poco antes por el subdirector general de prensa, José Luis Fernández García, quien había tenido noticias de la operación por un artículo publicado en *Voluntad*. En su nota del 17 de enero, Serrano Castilla informaba de la salida de la empresa periodística de los bancos Masaveu, Herrero y Bilbao. Se mantenían en ella Elías Masaveu a título personal, Pedro Caicoya y José María Bando, “todos ellos capitalistas adictos”; y entraban José Manuel Alperi Álvarez, Manuel Robledo y Francisco Sitges. Estos tres últimos merecerán la calificación de “adictos” al Régimen en un nuevo informe remitido a la DGRJP el 1 de febrero.

Se trata en resumen [concluía Serrano el 17 de enero] de una entrada de personas adictas: grupo Sitges, en cuanto a lo económico, y algunas personas de Antiguos Miembros [del Frente de Juventudes], sin que esto quiera decir que sea esta última organización como tal, y un abandono del periódico por parte de los Bancos. Se está ultimando todo ello, para darle carácter oficial.

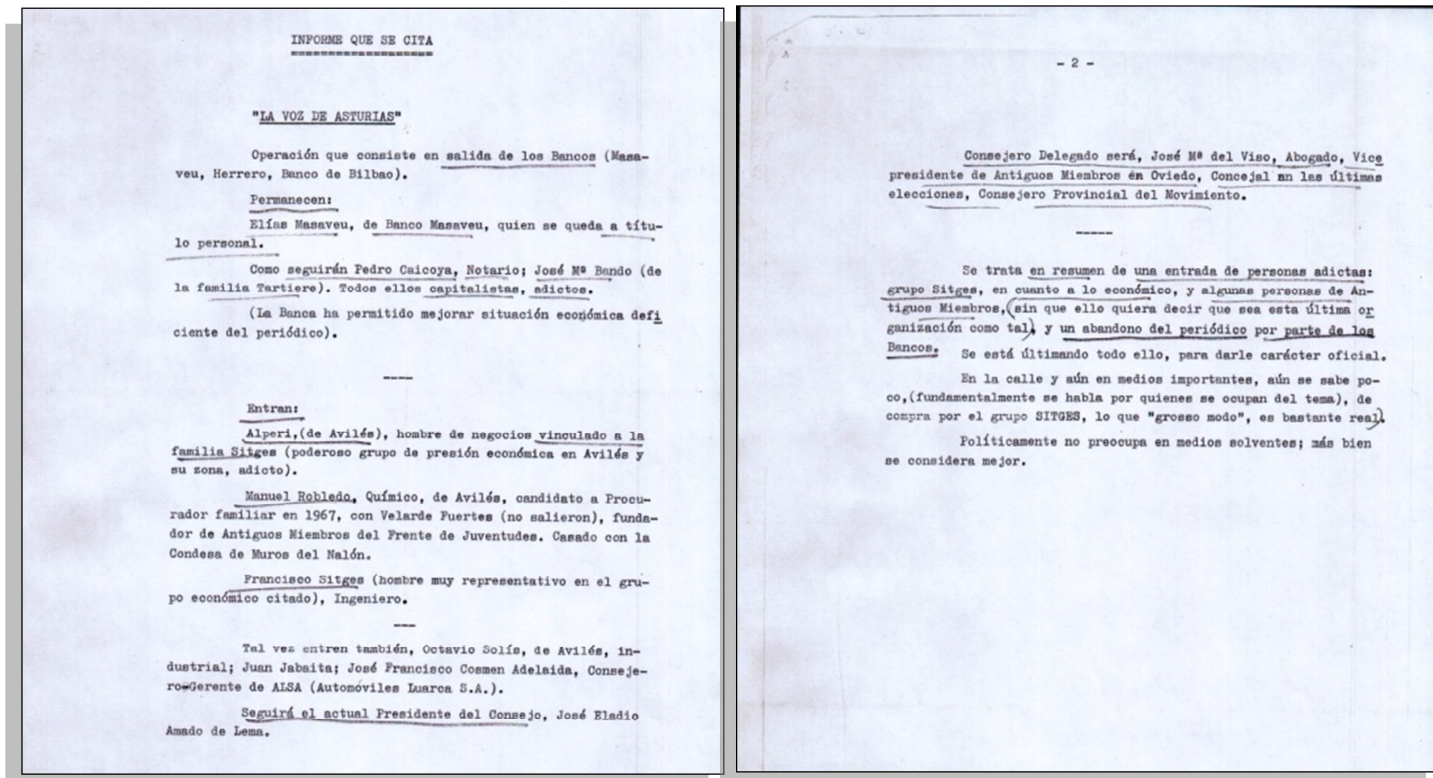
En la calle y aun en medios importantes, aún se sabe poco [...]

*Políticamente no preocupa en medios solventes; más bien se considera mejor [las cursivas son nuestras]*⁶³⁶.

⁶³⁵ Informe en exp. 1049, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 128.

⁶³⁶ Ambos informes se encuentran en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 192, exp. 1718. V. también Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (*La Voz de Asturias*, Documentos e Informes).

Parece evidente que no fue sino la conveniencia política que la entrada de estos socios suponía, la que, como en todos los casos anteriores, motivó la inhibición del MIT, que se limitó a vigilar e investigar las operaciones, sin que haya quedado rastro alguno de que se inmiscuyera en ellas.



6.4.1.2.2 Guerras internas entre accionistas y directivos vigiladas por el MIT

El Ministerio no sólo se interesó por la entrada de nuevos socios en las empresas periodísticas, sino que se mantuvo también al tanto de las luchas de poder internas que se libraron entre accionistas. De ellas dependió el control de diarios como *El Norte de Castilla* y *El Correo de Andalucía*, en cuyas empresas editoras se desataron las dos grandes guerras intestinas de la prensa tardofraquista (a las que habría que añadir, sin duda, la de *Madrid*, ya analizada; y la de *El Correo Catalán*, a la que atenderemos más adelante). Como ocurriera con los casos anteriores, no hemos encontrado en ninguno de los dos expedientes conservados en el REP evidencias de que la Administración interviniera a favor de unos u otros contendientes (lo que, por supuesto, tampoco prueba que tales intervenciones no se produjeran), aunque sí de la estrecha vigilancia a que fueron sometidos ambos litigios.

De las dos disputas accionariales, la más prolongada y cruenta fue, sin lugar a dudas, la librada en Editorial Sevillana, S.A. Tres facciones pugnarón, entre 1967 y 1972, por su control y el de su diario, *El Correo de Andalucía*: la "clerical" (liderada por la

Editorial Católica), la “regional-conservadora” y la “regional-progresista” (los términos son de Sáez, 1974; otros relatos de este caso pueden encontrarse en Chinarro, 1978; y Méndez, 2008). En esos cinco años se sucederán multitud de enfrentamientos y alianzas que, desde luego, no pasaron inadvertidos para la Administración⁶³⁷; y que dividimos, para su mejor comprensión, en tres etapas.

La primera de ellas se inicia en febrero de 1967 con la convocatoria por parte del arzobispo de Sevilla y presidente de la Junta de Fundadores de Editorial Sevillana, José María Bueno Monreal, de una ampliación de capital que invitaba a suscribir a la Editorial Católica⁶³⁸. Contra la posible integración del diario en la cadena acenepista se movilizó entonces un grupo de accionistas dispuestos a defender la independencia y carácter regional de *El Correo de Andalucía*, que, por lo demás, mantenía una orientación católica desde su fundación misma⁶³⁹. El contencioso se cerraría provisionalmente con el siguiente acuerdo: los clericales se comprometían a no suscribir más del 25% de la ampliación y a aceptar una reforma estatutaria que limitara el derecho de voto en las juntas de accionistas al 10% del capital. Tres representantes de Edica se sumarían al sector clerical en el Consejo de Administración, al que accedieron también cuatro regionalistas (dos conservadores y dos progresistas)⁶⁴⁰.

La tregua no duró demasiado: ese mismo año, el grupo progresista quiso completar la ampliación de capital aprobada en febrero y aumentar su participación en la empresa; a lo que trató de oponerse sin éxito una alianza inédita de regionalistas-conservadores y clericales. Tras la maniobra progresista, un grupo de nuevos socios de aquel talante

⁶³⁷ Como reflejan los numerosos informes hallados en el voluminoso expediente de la sociedad en el Registro de Empresas Periodísticas: exp. 1003, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 cajas 113-114.

⁶³⁸ José María Bueno Monreal (1904-1987) era arzobispo de Sevilla desde 1957 y cardenal desde 1959. Sus vínculos con la ACN de P y la Editorial Católica se remontaban a años atrás. Bueno Monreal había sido profesor de ética en la Escuela de Periodismo de *El Debate*. Según cuenta Sáez Alba, el arzobispo había iniciado los acercamientos a la Editorial Católica desde finales de los cincuenta. En 1964, había logrado introducir en el CA de Editorial Sevillana a Manuel Gordillo y Francisco Sánchez-Apellániz, ligados a Acción Católica de Sevilla. De este modo, desde 1965 el grupo clerical encabezado por Bueno gozaba de mayoría en el Consejo (Sáez, 1974: 179-180.)

⁶³⁹ Editorial Sevillana, S.A. había sido fundada el 1 de diciembre de 1919 por el arzobispo de Sevilla y “un grupo de ricos católicos sevillanos” (Sáez, *op. cit.*: 176) liderados por el abogado y diputado Alejandro Rojas Marcos. El arzobispado había controlado *El Correo de Andalucía* desde que éste fuera fundado en 1889 por Marcelo Spínola. Desde 1919, el arzobispo sevillano tenía el cargo de presidente honorario perpetuo, al que añadiría más adelante la presidencia de la Junta de Fundadores y otras atribuciones sobre la empresa.

⁶⁴⁰ Tras el acuerdo y la renovación del 20 de febrero, el CA quedaba compuesto por Francisco María Abaurrea y Álvarez Osorio (presidente), Francisco Sánchez-Apellániz Valderrama, Mariano Pérez de Ayala (consejero delegado), Félix Sánchez Blanco y Parody, Pedro Luis Serrera Contreras, Miguel Maestre Lasso de Vega, José Luis Rojas Gestoso y Carlos Beca Iglesias. Estos tres últimos dimiten el 6 de marzo. El 30 de junio de 1967, se unirá a los anteriores Luis Amores Jiménez; y el 5 de diciembre se incorporan (o reincorporan, según los casos) Antonio García de Pablos, Mariano Rioja y Fernández de Mesa, Miguel Maestre y Lasso de Vega, Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Carlos Beca Iglesias y José Luis de Pablos Romero de la Cámara.

entraba en la empresa, casi al tiempo que se constituía un Consejo editorial (elegido a partes iguales por clericales y progresistas) encargado de la orientación ideológica del diario, que desde ese mismo año dirigía Rafael González. *El Correo de Andalucía* inauguraba desde entonces una línea crítica inaudita, que llevará a la Administración a sancionarla hasta en cuatro ocasiones en 1968 por infracciones del artículos segundo y a exigir, en apenas un año, la cabeza de su director⁶⁴¹. En diciembre de 1968, el Ministerio advertía al Consejo de que había de caer “o [Rafael] González o el periódico” (Sáez, 1974: 197) y acompañaba el aviso con una notificación de inspección de la empresa. La presión del MIT se acabará llevando por delante a Rafael González y, con él, al Consejo de Administración que había aprobado su nombramiento.

A partir de 1970, la atención del Ministerio se desplaza de la dirección de *El Correo* —en la que el defenestrado Rafael González había sido sustituido por el sacerdote José María Javierre, de convicciones muy similares a las de su predecesor— a los órganos directivos de la empresa. En abril de 1970 se había iniciado el segundo episodio de la guerra interna, en el que se producirá el asalto definitivo de Edica al diario sevillano. Ese mes, una nueva ampliación de capital permitía a la Editorial Católica hacerse con cerca del 30% de Editorial Sevillana⁶⁴², dar entrada en el Consejo a dos nuevos vocales y, sobre todo, nombrar consejero delegado a Mariano Rioja, titular del mismo puesto en Edica. Los progresistas, a cambio, nombraban otros dos vocales y conseguían reactivar el Consejo editorial, controlado por sus hombres. En mayo de 1971, comenzaba una larga negociación entre progresistas y clericales para repartirse el Consejo de Administración y la Junta de Fundadores. Todo indica que no fue sino el pacto clerical-progresista alcanzado en septiembre, lo que despertó las suspicacias de la Administración. El 18 de octubre llegaba a la DGP, por vez primera desde el inicio del conflicto, un informe sobre la relación de fuerzas existente en el seno de la empresa (o esa es, al menos, la fecha del primer informe archivado y conservado en el Registro sobre el caso). Tras informar de cada uno de los consejeros, la nota los dividía en cuatro grupos: quienes apoyaban al sacerdote Manuel Trigo; los opusdeístas⁶⁴³; los seguidores de

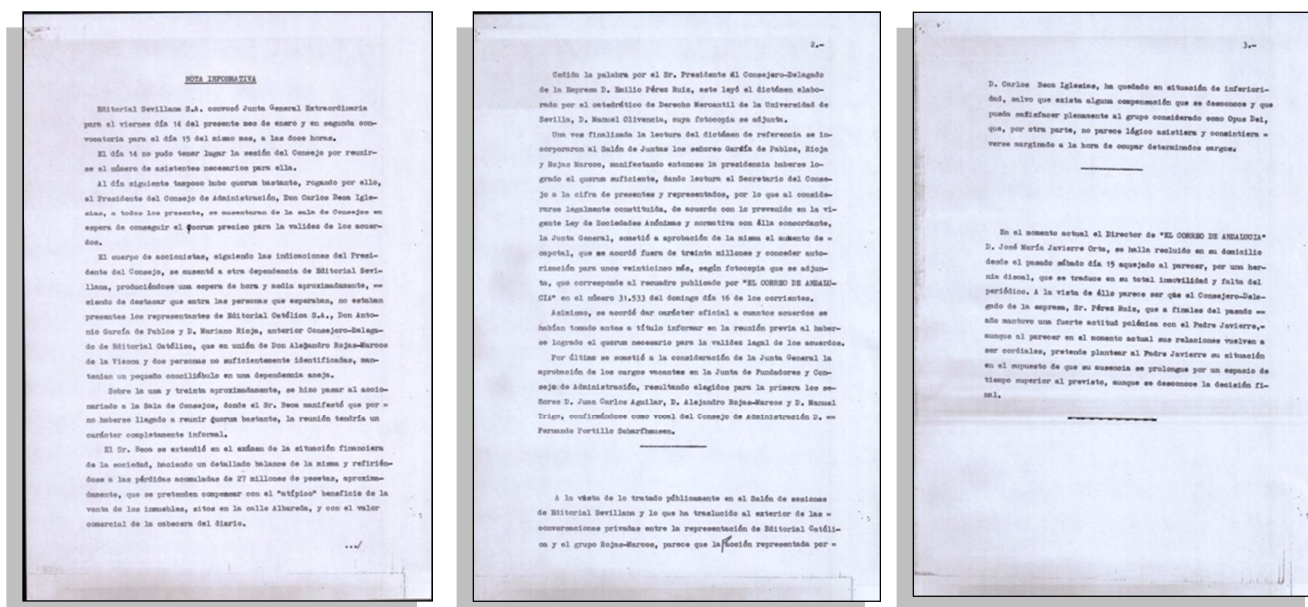
⁶⁴¹ En 1968, Editorial Sevillana, S.A. fue multada cuatro veces por la publicación de los siguientes artículos: “Huelga de pasillos en la Universidad” (13 de enero); “Inspector de enseñanza multado por ejercitar derecho de réplica” (30 de marzo); “Acuerdo de Sindicatos” (25 de abril); y “Agustín García Calvo, cuatro años de ex catedrático” (7 de diciembre). En Terrón, 1981: 226.

⁶⁴² Según Sáez Alba, Edica controlaba el 20% directamente y algo más a través de altos directivos de la Editorial y sus familiares, que suscribieron individualmente paquetes nunca superiores a las 200 acciones (Sáez, *op. cit.*: 204).

⁶⁴³ Según A. Sáez Alba, el Opus Dei había tratado también de entrar en Editorial Sevillana en los años sesenta, lo que había sido utilizado por la ACN de P para presentar a Edica como la única posibilidad del diario de escapar al control opusdeísta (Sáez, *op. cit.*: 179). Aunque el Opus nunca logrará su control, sí conseguirá introducir a varios de sus miembros en el CA, incluido a Carlos Beca Iglesias, presidente de Editorial Sevillana entre 1971 y 1972.

Joaquín Ruiz Jiménez; y quienes “se moverán indistintamente en los grupos anteriores según los casos”. De los miembros de la Junta de Fundadores señalaba en cambio que “existe bastante homogeneidad en sus componentes” y que “apoyarán una línea de acercamiento a la Editorial Católica y al *Ya* de Madrid”. Éste es, por otra parte, el único documento conservado en el Registro del que puede inferirse una actitud favorable de la Administración a la entrada de Editorial Sevillana en la órbita de la Editorial Católica⁶⁴⁴.

El delegado provincial del MIT en Sevilla, Santiago Corredoira Casares, remite a la DGP un nuevo informe el 18 de enero de 1972. En él daba cuenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada tres días antes y en la que se había aprobado una nueva ampliación de capital, así como la incorporación de tres miembros a la Junta de Fundadores y la confirmación de otro en el Consejo de Administración. De todos ellos informaba Corredoira en fichas personales adjuntas a su nota⁶⁴⁵.



La ampliación de capital había sido fruto de otro acuerdo entre clericales y progresistas. Estos últimos cedían el poder económico de Editorial Sevillana a los acenepistas a cambio de parte del poder político de la empresa. El 29 de febrero, sin embargo, último día del plazo para suscribir la ampliación, el arzobispo Bueno Monreal comunicaba que Edica se haría con el control de todos los órganos de gobierno, además de suscribir la ampliación junto a los obispos de Huelva y Córdoba. Otra nota de la

⁶⁴⁴ La nota se encuentra en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editorial Sevillana, Documentos e Informes).

⁶⁴⁵ Se trataba de Carlos Aguilar, de quien se dice que “fue captado por el grupo Rojas-Marcos al pasar una crisis típica en los post-graduados [...] y atribuir las razones de su crisis a la defectuosa organización social española”; el sacerdote Manuel Trigo, “considerado como conservador, si bien con ribetes progresistas”; Fernando Portillo Scharfhausen, “con inquietudes políticas [...] [y] de valía evidente y gran prestigio”. Todos los informes en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Editorial Sevillana, Documentos e Informes).

Delegación informaba, al respecto, que el 1 de marzo, Bueno Monreal había solicitado “le fuera entregado a EDITORIAL CATÓLICA el control ideológico, técnico y económico de EL CORREO DE ANDALUCÍA”. Así ocurrió: tras la maniobra de febrero, Edica promueve un cambio total del Consejo de Administración, la Junta de Fundadores, la dirección de *El Correo de Andalucía* y su línea editorial; todo ello con el beneplácito, según Javier Alba, del MIT, que veía así acallada “una de las escasas voces discrepantes del régimen” (Sáez, *op. cit.*: 269):

Ni que decir tiene [señala Alba en este sentido] que [Mariano] Rioja y [Antonio] Montero [obispo auxiliar de Bueno Monreal y artífice principal de la entrada de Edica] incorporaban entre las ventajas de su plan la bendición del Ministerio de Información y Turismo. *El Correo* llegó a ser tan molesto como el extinto *Madrid*. Era uno de los tres periódicos del país cuya censura se reservaba personalmente Alfredo Sánchez Bella, razón que obligaba su transporte diario de Sevilla a Madrid en el avión que primero aterrizara en el aeropuerto de Barajas; así podía estar en la mesa del ministro a las nueve de la mañana, con el desayuno (Sáez, *op. cit.*: 271).

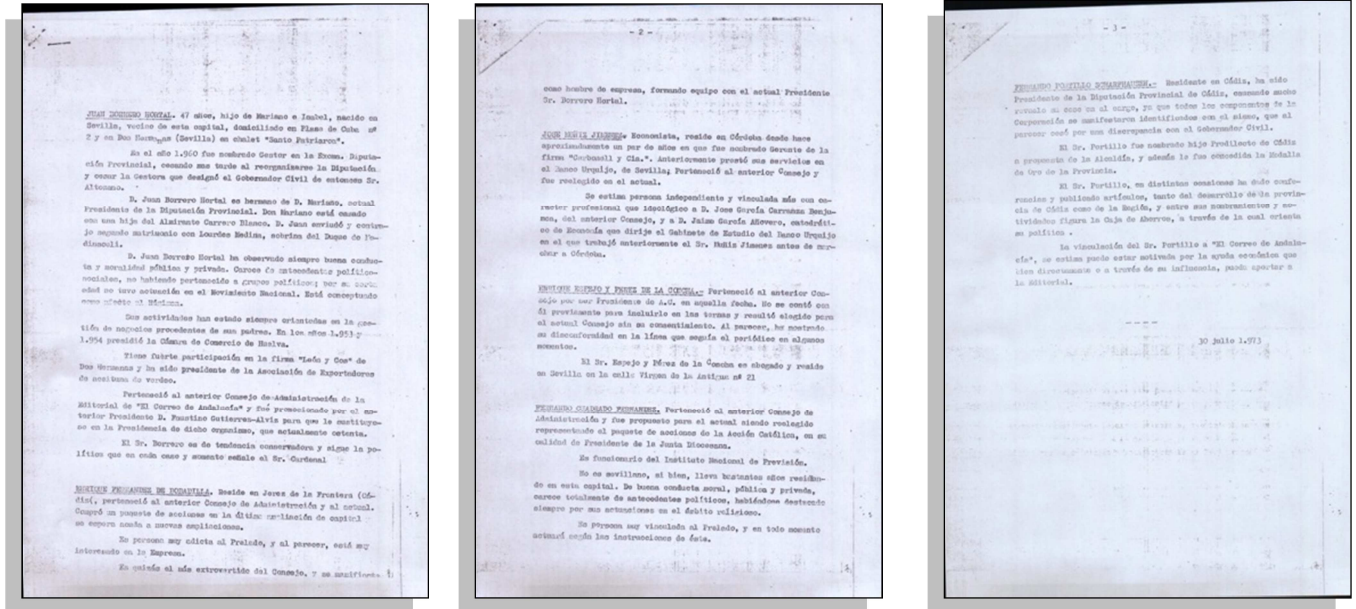
El dominio de la Editorial Católica será, sin embargo, efímero. El 9 de octubre de 1972 se abría la tercera y última etapa de la guerra interna, marcada por el abandono acenepista de su aventura sevillana. Ese día, la redacción de *El Correo* denunciaba ante la Asociación de la Prensa de Sevilla al director impuesto por los propagandistas, Venancio Luis Agudo. El 20 de octubre —el mismo día en que se había fijado el acto de conciliación—, Edica anunciaba el abandono del gobierno corporativo de Editorial Sevillana (aunque no la venta de sus acciones), acuciada, según Alba, por el desprestigio moral y político que le habían supuesto los cinco años de guerra (*op. cit.*: 279).

La salida acenepista no debió ser demasiado bien recibida por la DGP⁶⁴⁶, que intensificó desde entonces su vigilancia sobre Editorial Sevillana. Desde 1972, aumentaron los informes sobre los consejeros y la situación financiera. El primero de ellos fue enviado el 23 de marzo de 1973 por el jefe de la Oficina de Enlace del MIT, Francisco Castrillo Mazeres, al director general de prensa. La nota, reclamada días antes por Alejandro Fernández Sordo, señalaba que el diario mantenía “la misma tónica de progresismo avanzado y contrario al Régimen” y retrataba políticamente a los consejeros Federico Villagrán Bustillo y Antonio Uceda López⁶⁴⁷. Unos meses después, el 3 de mayo de 1973, es la Delegación Provincial sevillana la que envía a Madrid un informe

⁶⁴⁶ Sáez Alba habla también en este caso de “presiones del Ministerio a favor de LEC” en el conflicto. Según el autor, “el entonces director general de Prensa estaba convencido de que todo era un conflicto montado por los ‘rojos’ sevillanos en contra de La Editorial Católica. La versión provenía de su amigo, Mariano Rioja” (*op. cit.*: 279).

⁶⁴⁷ Del primero se dice que “En el aspecto político, se caracteriza por su falta de escrúpulos y variable opinión [...]; de Uceda López se advertía escuetamente: “Es periodista de ideología progresista”.

reservado en el que se advierte de la grave situación financiera de *El Correo de Andalucía*. Antes de que acabara el año, la DGP aún demandaría a la Oficina de Enlace del MIT otros dos informes similares sobre los consejeros de Editorial Sevillana, remitidos por Castrillo Mazeres el 19 de julio y el 5 de septiembre.



Finalmente, un último informe fechado el 1 de marzo de 1974 comunicaba una mejora en la situación económica de la empresa gracias a la ayuda financiera de las Cajas de Ahorro, a las que, según se recordaba en la nota reservada, ya se les había amenazado en otra ocasión en que habían dado facilidades crediticias al discolo diario⁶⁴⁸. La vigilancia del MIT, de todos modos, no pareció afectar a la línea de la cabecera que aún fue sancionada en tres ocasiones más por sus contenidos en 1975 (v. 7.3.2). Interviniera o no el MIT a favor del control de *El Correo de Andalucía* por la Editorial Católica, como sugiere Sáez Alba, los documentos prueban, cuanto menos, que la Administración siguió muy atentamente desde al menos 1971 la guerra interna librada por el control de la empresa. La vigilancia implicó a la Delegación Provincial sevillana y a la Oficina de Enlace del ministro, y se intensificó aún más tras la salida de los acenepistas en octubre de 1972.

⁶⁴⁸ “La situación económica de *El Correo de Andalucía* [se dice en la nota] parece ser en estos momentos más optimista que en etapas anteriores, pero no obstante esta mejor situación, se supone que el matutino sevillano desea reactualizar la idea de emitir obligaciones por un importe aproximado de 50 millones de pesetas, obligaciones que pretendería fueran tomadas en su mayor parte por Instituciones de Ahorro.

A este respecto se recuerda que en una ocasión anterior en que las Cajas de Ahorro e Instituciones bancarias dieron amplias facilidades a la marcha económica de *El Correo de Andalucía* se les advirtió que en caso de persistir en su actitud podrían surgir dificultades a la hora de efectuar las operaciones de redención”.

Aunque menos cruenta, tampoco la guerra desatada por *El Norte de Castilla* a principios de los setenta quedó fuera del foco administrativo. El Norte de Castilla, S.A., propietaria del histórico diario vallisoletano, contaba en 1967 con un capital muy diluido, en el que sobresalían los hermanos Alba Delibes⁶⁴⁹ (con el 16'44% del capital entre César y Jaime; sin contar a los otros cinco miembros de la familia, propietarios de pequeños paquetes de acciones); Fernando Altés Villanueva⁶⁵⁰ (6'24%); Guillermina Payá Navarro, viuda del consejero y accionista Segismundo Royo-Villanova, fallecido dos años antes (6'11%); y Alejandro Fernández de Araoz⁶⁵¹ (5'47%). Esta correlación interna se mantendría hasta la primavera de 1970, cuando al fallecer César Alba Delibes, su hermano Jaime trata de hacerse con la empresa. Aliado con el banquero opusdeísta Luis Valls Taberner (cercano al grupo tecnócrata recién fortalecido en el Gobierno), Jaime Alba pretendió efectuar una compra masiva de acciones por un precio superior a su valor nominal; una suerte de OPA hostil que no pasó desapercibida, claro está, para la Administración.

En el verano de 1970, el delegado provincial del MIT en Valladolid, Carlos Sánchez Álvarez, explicaba a la DGP la compra de títulos por parte de Jaime Alba, que había desatado, en sus palabras, una auténtica “psicosis” de venta entre accionistas minoritarios y ocasionado, en fin, el enfrentamiento en la empresa:

Las transacciones antedichas parecen haber consistido en la adquisición de varios paquetes de acciones por el Banco Popular Español, don Jaime Alba Delibes, el Sr. García Moliner y el Sr. Barco Ortega, por un total de 11.000.000 de pesetas, habiéndose cotizado a 950 enteros acciones por un valor nominal de 550 pesetas. La inversión del Banco Popular parece haber sido de 7.000.000 de pesetas, y de 4.000.000 la del resto de adquirientes.

Según el mismo informe, la operación había escindido el accionariado en tres facciones: (a) la encabezada por Jaime Alba Delibes, propietaria de un 33% del capital, y del que

⁶⁴⁹ César Alba Delibes poseía en 1967 el 6'4% de la empresa y ostentaba su presidencia. También era consejero de la editorial Miñón, S.A., vinculada a El Norte de Castilla, S.A. y de Electra Popular Vallisoletana, S.A. y Metro Goldwin Mayer Ibérica, S.A. Su hermano, el embajador Jaime Alba Delibes (1908-1999), poseía el 10% de El Norte de Castilla, S.A. Como su hermano, tenía intereses en Electra Popular Vallisoletana y en la editorial Miñón. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (El Norte de Castilla, Gobierno Corporativo). Biografías en AH EFE.

⁶⁵⁰ Fernando Altés Villanueva (1909-2004) era en 1967 vocal de la Agencia EFE y consejero de la editorial Miñón; además de gerente de El Norte de Castilla, S.A.

V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (El Norte de Castilla, Gobierno Corporativo).

⁶⁵¹ Alejandro Fernández de Araoz y Maraón (1937-) era a finales de los años sesenta consejero delegado del Banco Internacional de Comercio, cuya presidencia ocuparía desde 1970 hasta 1988. En los sesenta, mantenía también vinculaciones con los sectores de la alimentación y los seguros, entre otros V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (El Norte de Castilla, Gobierno Corporativo).

Biografía también en AH EFE y EFEDATA, Base de Datos de la Agencia EFE.

formaban parte miembros del Opus Dei vinculados a Valls Taberner; (b) un grupo de oposición al anterior, formado por la mayor parte de miembros del Consejo de Administración y que aglutinaba un 36% de las acciones; y (c) un tercer grupo de “accionistas no agrupados y que al parecer se inclinan por el Consejo”, propietario del 31% de la empresa. Unos meses después, otro informe refería la “carrera de compra de acciones” disputada durante el verano de 1970 por las dos principales facciones: la liderada por Jaime Alba⁶⁵², y la de la mayoría del Consejo de Administración⁶⁵³.

Según la versión de Royo-Villanova⁶⁵⁴, en la primavera de 1970 Jaime Alba Delibes había dirigido una carta al CA advirtiéndole de que, tras la muerte de su hermano César, pasaba a controlar sus acciones, heredadas por Santiago Alba Govillar. El embajador acababa la misiva instando al Consejo a que no designara presidente ni hiciera movimiento alguno. Lejos de seguir las indicaciones, el CA —advertido de la posible entrada de los opusdeístas ligados a Valls Taberner— decide presentar batalla: Alejandro Royo-Villanova es elegido presidente con sólo 29 años⁶⁵⁵. Su primer acto en el cargo será, según su testimonio, enviar una declaración de guerra a Alba, a quien conmina por carta a suspender su actividad como consejero de la empresa periodística, de acuerdo con el Decreto-ley de incompatibilidades de cargos públicos de 1955. El embajador en Bruselas decide entonces volver a Valladolid en busca de apoyos. En este contexto se celebra la Junta General de Accionistas a principios de junio de 1970; en la que Alba queda en minoría frente al Consejo. La victoria en la Junta permitía a Alejandro Royo-Villanova abrir otro frente contra Valls Taberner, artífice financiero de la operación de Alba. Según cuenta él mismo, el joven presidente mandó escribir tres artículos sobre el abuso de poder del Opus Dei en España y redactó una carta dirigida a propietarios y directivos de la prensa española denunciando el intento de control opusdeísta de *El Norte de Castilla*. Ambos borradores le fueron mostrados a José Barco Ortega, representante de Valls Taberner en la operación; de modo que la amenaza de publicar los artículos y de enviar la carta llevó al banquero a dar marcha atrás: Valls aseguraría a Royo-Villanova

⁶⁵² Formaban parte de este grupo la familia Alba Delibes, Santiago Alba Govillar, Ramón García Moliner, José Barco Ortega y María Isabel González del Campo.

⁶⁵³ Componían este grupo Fernando Altés, Alejandro Fernández de Araoz Maraón, Emilio Gómez Orbaneja, Alejandro Royo-Villanova Payá, Antonio Rubio Sacristán y José Guillén Álvarez.

⁶⁵⁴ Testimonio de Alejandro Royo-Villanova Payá, en entrevista personal mantenida el 25 de octubre de 2012.

⁶⁵⁵ Según cuenta el propio Royo-Villanova, fue elegido presidente a propuesta de Alejandro Fernández de Araoz y tras la renuncia a ocupar el cargo de Emilio Gómez Orbaneja. Pesaron en su nombramiento su juventud y capacidad para dar la batalla frente al intento de control de Jaime Alba. Testimonio de Alejandro Royo Villanova Payá en entrevista personal mantenida el 25 de octubre de 2012.

haber sido engañado por Jaime Alba, quien le había garantizado un recibimiento favorable en el diario. Al no producirse, ofrecía a Royo-Villanova todas sus acciones; a lo que el presidente de la sociedad respondería reclamando también las de Jaime Alba. En marzo de 1971, el grupo de Jaime Alba se había hecho con cerca del 20% del capital, frente al 30'5% en poder del Consejo. El fracaso de la maniobra movió en los años siguientes a la familia Alba Delibes a deshacerse de sus participaciones en *El Norte de Castilla*, que quedaría en adelante controlado por las familias Royo-Villanova, Altés, y Fernández Araoz.

En ninguna de las dos notas enviadas por la Delegación Provincial vallisoletana se había hecho, sin embargo, referencia alguna a una posible toma de partido (ya recomendada por la Delegación, ya ordenada por la DGP) por uno u otro bando. Según Royo-Villanova, la Administración no intervino “porque no tuvo oportunidad”, dada la celeridad con que se produjo y resolvió el enfrentamiento; sin olvidar el prestigio del diario, que no dejaba de proporcionarle cierta pátina de protección. La inhibición administrativa suscitó, de hecho, las quejas de Jaime Alba. El 10 de marzo de 1971, el embajador escribía una carta a la DGP solicitando una intervención a su favor en aras del interés gubernamental:

No es justa [se lamentaba Alba], ni desde el punto de vista nuestro, ni del resto de la minoría [accionarial], ni siquiera práctico desde el de los intereses del Gobierno, la situación en que hemos quedado todos, Gobierno, minoría y hermanos Alba.

Espero de su amabilidad sus comentarios en la seguridad de que sabrá Vd. ofrecer — dentro de los poderosos medios que pone en su mano la Ley de Prensa— fórmula para que todos, Gobierno y nosotros, recuperemos un cierto control de la situación.

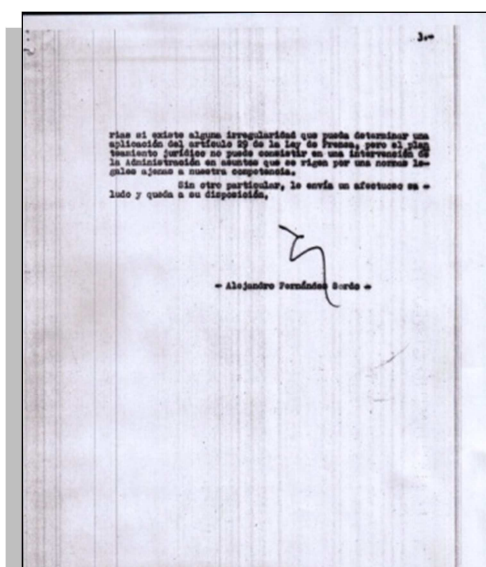
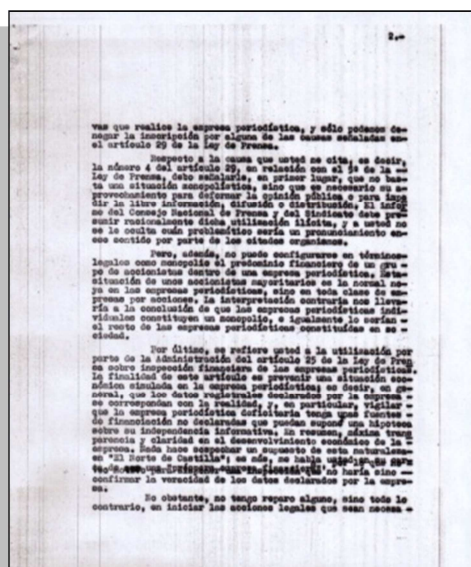
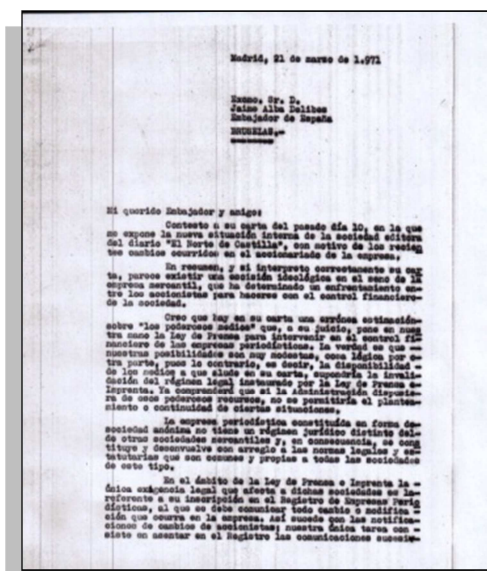
Jaime Alba instaba a la Administración a ejercitar a su favor (y al del Gobierno, cuyos intereses asimilaba a los suyos) los “poderosos medios” que le confería la Ley de Prensa, con el fin de obligar al Consejo a desprenderse de un importante paquete accionarial. El embajador proponía presionar a los consejeros mediante una inspección, e incluso mediante la amenaza de la cancelación registral, en base al artículo 29.4 de la Ley (pues consideraba que la posición de fuerza del CA podía considerarse un control monopólico). De no plegarse la DGP a sus requerimientos, advertía de su intención de ceder sus títulos a un “organismo” con más influencia y que pudiera imponer “una representación adecuada en el Consejo del periódico y en beneficio del Régimen”. El 21 de marzo, el director general de prensa contesta:

Creo que hay en su carta una errónea estimación sobre los ‘poderosos medios’ que, a su juicio, pone en nuestra mano la Ley de Prensa para intervenir en el control financiero de las empresas periodísticas. La verdad es que nuestras posibilidades son muy modestas, cosa lógica por otra parte, pues lo contrario, es decir, la

disponibilidad de los medios a que alude su carta, supondría la invalidación del régimen legal instaurado por la Ley de Prensa e Imprenta. Ya comprenderá que si la Administración dispusiera de esos poderosos recursos, no se permitiría el planteamiento o continuidad de ciertas situaciones.

Fernández Sordo negaba, no sin cinismo, una capacidad de intervención administrativa que la DGP no dudó en emplear en otras circunstancias; a pesar de lo cual, acababa la carta:

No obstante, no tengo reparo alguno, sino todo lo contrario, en iniciar las acciones legales que sean necesarias si existe alguna irregularidad que pueda determinar una aplicación del artículo 29 de la Ley de Prensa.



No han quedado en el expediente de la empresa en el REP trazas de que se realizara inspección o investigación alguna dirigida a descubrir tales irregularidades. Por otra parte, se ha hecho ya evidente que la capacidad de actuación del MIT estaba lejos de ser “muy modesta”, como evidencian también sus intervenciones en otras operaciones políticamente más delicadas para la Administración que la de *El Norte de Castilla*. Si el MIT no intervino, no fue, en éste como en los anteriores casos, por falta de atribuciones legales, ni mucho menos de medios y mecanismos extralegales.

6.4.2 La intervención administrativa en la propiedad y gobierno de empresas periodísticas

Por supuesto, la Administración tardofranquista no se limitó a mantener vigiladas y bajo control las transferencias de acciones, estructuras de propiedad y consejos de

gobierno de las empresas de prensa diaria. El estrecho seguimiento de movimientos accionariales, empresarios y directivos no fue, en muchos casos, sino una condición previa e imprescindible de la posterior intervención administrativa. La información recabada por aquel aparato de vigilancia montado por Manuel Jiménez Quílez, permitió al MIT anticiparse a aquellas operaciones que le resultaran políticamente deseables o inconvenientes. Según fueran de uno u otro tipo, actuó el Ministerio, desplegando una notable capacidad de presión y coacción, alimentada tanto por los instrumentos coercitivos recogidos en la LPI, como por el amplio margen de discrecionalidad del que seguía gozando en sus decisiones y actuaciones.

Las presiones administrativas no gozaron, de cualquier modo, del mismo grado de eficacia durante todo el periodo. La capacidad de intervención del MIT alcanzó su culmen durante el mandato de Alfredo Sánchez Bella, quien impulsó cambios de propiedad en dos cabeceras (*Nuevo Diario* e *Iberian Daily Sun*), dificultó la labor empresarial de Sebastián Auger —a quien no dudó en chantajear— al frente de *Diario Femenino*, y amenazó a los accionistas de PESA con arruinar sus negocios si no renunciaban a sus derechos sobre *El Alcázar*. Tal capacidad, sin embargo, comenzó a declinar tras su cese; y se vio severamente mermada a partir de 1974, tanto por el talante del efímero ministro, Pío Cabanillas, como sobre todo por la inédita (e igualmente efímera) coyuntura política instaurada por el “espíritu del 12 de febrero”⁶⁵⁶. Los tímidos guiños reformistas del Gobierno de Carlos Arias Navarro alejaron, a ojos de los empresarios de prensa, la posibilidad de que el MIT recurriera a su instrumento de coerción más contundente: la expulsión del sistema mediante la cancelación de la empresa en el REP. La nueva situación permitió, por ejemplo, que una persona de la significación política de Jordi Pujol pudiera controlar una empresa periodística española —e incluso desde la primavera de 1974 sin necesidad de testaferros ni fiduciarios—, a pesar de los esfuerzos del MIT por impedirlo.

Con más o menos eficacia, la Administración tardofranquista no dejó de intervenir, en cualquier caso, allí donde los movimientos de propiedad de la prensa afectaron a sus intereses coyunturales y/o generales. Según se vieran éstos favorecidos o perjudicados, actuó el Ministerio facilitando o entorpeciendo las operaciones. En unos casos, impulsó la compra de empresas periodísticas por empresarios de su confianza, como Pedro Serra Bauzá; y favoreció la entrada en el sistema de empresas controladas por socios u organizaciones leales al Régimen, como EPECSA y, sobre todo, DYRSA (propiedad de la

⁶⁵⁶ El 12 de febrero de 1974 había pronunciado Arias su discurso de investidura como Presidente del Gobierno ante las Cortes franquistas. En él había realizado varios guiños a una “moderada apertura reformista” que inauguraba un nuevo tiempo político, truncado poco después por, entre otros hechos, la salida forzada de Pío Cabanillas del MIT (Riquer, 2010: 707).

Hermanidad de combatientes del Alcázar) y Prensa Económica, S.A. (ligada a la tecnocracia opusdeísta de Laureano López Rodó). En otros, por el contrario, trató de impedir o entorpecer ciertas operaciones políticamente inconvenientes. El Registro de Empresas Periodísticas volvió a revelarse, en estos casos, como el organismo clave de la intervención administrativa. El artículo 28.1 de la LPI obligaba, como sabemos, a notificar al REP toda compraventa de acciones y cambio en el gobierno de la empresa periodística. La inscripción de cuantas modificaciones se produjeran en los datos aportados al Registro había de ser solicitada a la DGP (art. 11 del Decreto 749/1966), que podía, en el curso de su tramitación, efectuar las comprobaciones que estimara pertinentes e incluso recurrir al artículo 29 de la Ley para negarse a aceptarlas (arts. 6, 8 y 9 del Decreto 749/1966). Es decir, que el MIT estaba facultado, no sólo para denegar o cancelar inscripciones de empresas, sino para rechazar todo movimiento y modificación que se produjera en ellas; incluidas, naturalmente, las transferencias de acciones y los cambios de propiedad. La Administración, como es obvio, no renunció a esta atribución y manejó la obligación de inscribir las modificaciones, así como su potestad (formalmente reglada, pero realmente discrecional) de rechazarlas, como un instrumento de presión más sobre los accionistas de las empresas. En dos casos —los de Ilustración, S.A. y Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A.— los socios mayoritarios se vieron amenazados por el MIT con la no aceptación de ciertas modificaciones y arrastrados, por tanto, a negociar condiciones que satisficieran los intereses administrativos.

Los traspasos de acciones y cambios de gobierno corporativo políticamente más delicados o interesantes que se negociaron y cerraron entre 1966 y 1975 fueron, pues, no sólo vigilados, sino intervenidos por la Administración. Su selló quedó impreso en todas estas operaciones, bien al ser favorecidas o impulsadas desde el MIT, bien al requerirse su autorización —verbal y previa, en unos casos; además de formal y posterior mediante la inscripción en el REP, en todos— para que se llevaran a efecto.

6.4.2.1 Operaciones impulsadas por la Administración

Entre 1966 y 1975, el Ministerio de Información y Turismo impulsó o favoreció cuatro cambios de propiedad en otros tantos diarios de información general. En 1969, prometió ayuda financiera a un grupo de industriales murcianos para que se hicieran cargo de *El Noticiero de Cartagena*. Al año siguiente, instó a Pedro Serra Bauzá a adquirir el *Iberian Daily Sun*; y culminó su campaña de hostigamiento contra Prensa y Ediciones, S.A. (PESA) empujándola a vender *Nuevo Diario* a Prensa Económica, S.A., vinculada a la tecnocracia. Sólo dos años antes, el MIT había enajenado los derechos de

edición que PESA tenía sobre *El Alcázar*, posibilitando la cesión de la cabecera a Diarios y Revistas, S.A. (DYRSA), controlada por los sectores más inmovilistas del tardofranquismo: la Hermandad de Nuestra Señora de Santa María del Alcázar y, desde 1975, la Confederación Nacional de Excombatientes.

Lastrado por las bajas tiradas⁶⁵⁷, *El Noticiero de Cartagena* arrastraba a finales de los años sesenta una situación económica insostenible. Para evitar su desaparición, un grupo de empresarios murcianos constituía, el 15 de marzo de 1969, la Empresa Periodística Editorial Cartagena, S.A. (EPECSA) y compraba la cabecera a Manuel Carreño López por 1'5 millones de pesetas. Entre los nuevos propietarios se encontraban personalidades locales como Rafael Fernández de Bobadilla, almirante del Alto Estado Mayor de la Defensa; el comisario de policía Álvaro de Lamo Espinosa; o Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, gobernador civil de Cáceres⁶⁵⁸. Según Gonzalo Wandosell Morales, accionista y vicepresidente de EPECSA desde su fundación, la presencia de estos nombres en el accionariado ayudó “muy seguramente” a que la Administración, no sólo no se interpusiera en la compra, sino que la facilitara⁶⁵⁹. El 15 de noviembre de 1969, Trillo-Figueroa enviaba una carta al director general de prensa con una información sobre EPECSA y sus accionistas que Alejandro Fernández Sordo le había solicitado por teléfono días antes. Esta llamada telefónica de Fernández Sordo es la única indagación administrativa registrada sobre el cambio de propiedad del diario.

Los socios de EPECSA habían accedido a salvar y modernizar *El Noticiero de Cartagena* con, en palabras de Wandosell, “la promesa política de que las grandes empresas de Cartagena (Refinerías de Petróleos de Escombreras [REPESA], Explosivos de Río Tinto, Empresa Nacional Bazán, etc.) nos darían trabajos de imprenta para compensar posibles pérdidas”. Desde la Administración se les prometió, además, siempre según Wandosell, un acceso inmediato a las subvenciones por consumo de papel prensa. Por si fuera poco, un informe sin fecha ni firma archivado en el expediente de la empresa en el REP, revela que Manuel Fraga había prometido a la empresa subvencionar el 80% de lo que tuviera que invertir en la modernización del diario⁶⁶⁰. El informe señalaba, de hecho, el incumplimiento por parte del MIT de esta promesa, como una de las causas de

⁶⁵⁷ Según Alfonso Nieto, en 1969, *El Noticiero de Cartagena* tiraba apenas 1000 ejemplares, el número más bajo, ese año, de toda la prensa española (Nieto, 1973: 124).

⁶⁵⁸ Completaban el accionariado inicial José García Carreño (presidente de la empresa), Antonio García Carreño, José Pertuza Cremades (secretario), Gonzalo Wandosell Morales (vicepresidente), Juan Tonel Tordera, Francisco Moya Núñez (vocal), María del Carmen Castillo Blanco, José Pérez Saura, Pedro Mendoza Sánchez, Francisco Moya Núñez, Fidel Manzanares Muñoz, José Luis Botella García (vocal), José Álvarez Sánchez, Aurora Rodríguez Frades y Joaquín García Becker. Cada uno de ellos poseía el 5'88% del capital social.

⁶⁵⁹ Testimonio de Gonzalo Wandosell Morales en entrevista telefónica realizada el 9 de octubre de 2012.

⁶⁶⁰ Informe en exp. 3184, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 311.

la ruina económica del periódico, que acabaría suspendiendo su publicación en 1974. De 5.600.000 ptas. que debía haber aportado el Ministerio, sólo 800.000 ptas. llegaron a EPECSA, por lo que, según el informe, “los presupuestos se desnivelaron totalmente comenzando a fallar todo lo previsto”. A ello hay que unir el cambio, en 1971, del régimen de ayudas por consumo de papel prensa que supuso, al decir de Gonzalo Wandosell, una “puñalada tramera” de Sánchez Bella, que precipitó la crisis e intento de venta del diario en 1974 (venta que también fue objeto, por cierto, de seguimiento por la Delegación Provincial)⁶⁶¹. A pesar del incumplimiento del MIT, probablemente derivado del cambio de ministro, la mera promesa de Fraga de cubrir el 80% de la inversión inicial supuso un notable impulso para la entrada de EPECSA en el panorama de la prensa española de los setenta.

En el caso de Mediterranean Publishing Company, S.A., la Administración fue incluso más lejos: más que favorecer su compra, el MIT de Sánchez Bella instó a Pedro Serra Bauzá a hacerse con la empresa periodística. Como se recordará, Mediterranean había sido fundada en 1968 para editar el *Iberian Daily Sun*, un diario en lengua inglesa dirigido a los estadounidenses residentes en las bases militares de EE.UU. en España. Oficialmente, el capital se encontraba dividido a partes iguales entre los hermanos Miguel y José Luis Ortiz Cañavate y Puig Mauri, y Ramón Ortiz Fernández Urrutia, que componían, además, el cuadro directivo de la empresa. A finales de 1969, los tres vendieron sus títulos a Fernando Bañón García que quedaba, en adelante, como accionista único. Ni él ni los anteriores socios eran, sin embargo, los titulares reales de la empresa, propiedad del ciudadano estadounidense André del Amo, como quedó demostrado en el apartado referido al capital extranjero (6.2.1).

El 16 de diciembre de 1969, Pedro Serra Bauzá —propietario del *Majorca Daily Bulletin* desde 1962— adquirió la mitad de las acciones de Mediterranean y asumía su

⁶⁶¹ Desde 1972, se suceden los télex del delegado provincial del MIT, José de Luna Cañizares, sobre la situación económica del diario. En enero de 1974, la Delegación comienza a realizar un estrecho seguimiento del intento de venta. El 24 de enero, una carta enviada a la DGRJP informa de la situación de la empresa y subraya que “los miembros del Consejo de Administración no constituyen ningún grupo político que pretenda utilizar el periódico como arma de presión, sino que es una vinculación entrañada en su pueblo, durante los 37 años que lleva editándose”.

En abril, un nuevo informe del delegado califica la situación de “precaria”: “Es decir [comenta], que están en situación de asfixia económica augurándoles su extinción si no tienen la suerte de venderlo como están ahora precisamente en gestiones” con personas como Ramiro Bermúdez de Castro o Manuel Martínez Pastor. El seguimiento de la operación por parte de la Delegación queda evidenciado en estas palabras del informe: “Estamos permanentemente en contacto con el Consejo de Administración de la empresa editora siguiendo paso a paso nuestro Delegado en Cartagena las distintas reuniones que se vienen celebrando para formalizar la venta, sin que hasta el momento haya resultado definitivo”.

Finalmente, al no poder cerrar la venta, EPECSA se declarará en crisis y suspenderá la edición del diario en junio de 1974.

Todos los télex se encuentran en exp. 3184, en REP, AGA, *ibídem*.

presidencia. Dos años después, el 27 de octubre de 1972, se hacía con la totalidad de la empresa. Según relata el propio Serra⁶⁶² —y ha confirmado Miguel Fernández Mata, consejero-secretario de Mediterranean en el momento de la operación⁶⁶³—, la iniciativa de la compra no fue suya, sino del ministro Alfredo Sánchez Bella. De acuerdo con ambos testimonios, André del Amo, acuciado por las dificultades económicas que atravesaba el diario, había acudido al MIT a finales de 1969 en busca de auxilio. A la Administración le interesaba, según Fernández Mata, mantener con vida al *Iberian*, considerado como un activo estratégico para el sector turístico español. En vez de dejar caer la empresa, el ministro recurrió a Pedro Serra Bauzá, cuya entrada en Mediterranean permitía, no sólo su saneamiento económico, sino el fin de la ilegalidad —consentida hasta 1972 por Sánchez Bella— que suponía la presencia de un extranjero en el sector español de prensa diaria.

Las otras dos operaciones de cambio de propiedad impulsadas por la Administración durante el tardofranquismo se inscriben en la campaña de hostigamiento mantenida por el MIT contra Prensa y Ediciones, S.A. (PESA), editora de *El Alcázar* (entre 1959 y 1968) y *Nuevo Diario* (entre 1967 y 1970). La intervención administrativa se resolvería en dos actos: en 1968, la DGP despojaba a PESA de sus derechos de edición sobre *El Alcázar*, y posibilitaba su traspaso a Diarios y Revistas, S.A. (DYRSA). Dos años después, la presión administrativa se cobraba la venta de *Nuevo Diario* (cuya publicación había sido autorizada a PESA sólo tres años antes) a Prensa Económica, S.A., vinculada a Laureano López Rodó y al sector tecnócrata, afianzado en el Gobierno desde la defenestración política del grupo reformista de Fraga, en 1969.

Prensa y Ediciones, S.A. se había constituido el 22 de octubre de 1949 para hacerse cargo, en régimen de arrendamiento, de la edición de *El Alcázar*, propiedad de la Hermandad Nuestra Señora de Santa María del Alcázar, formada por los militares franquistas atrincherados durante la Guerra Civil en el Alcázar de Toledo. El año de la aprobación de la LPI, la empresa periodística se encontraba controlada —a través de José Ferrer Bonsoms, propietario del 30'6% del capital— por el Banco Atlántico y su filial industrial, Bankunión, ambas vinculadas al Opus Dei⁶⁶⁴ (v. 6.3.2). En mayo de ese mismo año, los bancos se habían hecho, además, con la presidencia de la sociedad, al

⁶⁶² Testimonio de Pedro Serra Bauzá en entrevistas telefónicas mantenidas los días 6 y 7 de septiembre de 2012.

⁶⁶³ Testimonio de Miguel Fernández Mata en entrevista telefónica mantenida el 11 de octubre de 2012.

⁶⁶⁴ Pues al Opus Dei pertenecían los presidentes de la primera, Casimiro Molins Ribot, y de la segunda, José Ferrer Bonsoms (vicepresidente también del Atlántico). También eran miembros del Opus Dei el presidente de PESA en 1967, Pablo Bofill de Quadras, y el director de *El Alcázar*, José Luis Cebrián Boné.

aupar a ella a Pablo Bofill de Quadras (consejero del Atlántico y consejero delegado de Bankuni3n)⁶⁶⁵, en sustituci3n de Miguel Moscard3, presidente de la Hermandad de combatientes del Alc3zar. El nombramiento de Bofill se revelar3a poco despu3s como un grave error pol3tico, en tanto dejaba a la empresa sin la protecci3n de la Hermandad y a merced de las presiones de la Administraci3n (Rodr3guez, 2005: 276). A finales de los sesenta, PESA se presentaba a los ojos del MIT como una sociedad controlada de forma m3s o menos encubierta por el Banco Atl3ntico y Bankuni3n, vinculada al Opus Dei y pr3xima al sector tecn3crata del Gobierno. Todo ello la convert3a en una v3ctima propicia para el grupo reformista de Fraga y en una codiciada pieza para el montero que el ministro dec3a ser⁶⁶⁶.

⁶⁶⁵ Junto a Bofill, completaban el CA Jos3 Luis Olaizola (consejero delegado de SARPE, otra de las empresas del entramado urdido por el Banco Atl3ntico-Bankuni3n), Salvador Nacer, Carlos Merino Luengo, 3ngel Santos, Carlos Soria, Jos3 Luis Alonso Cillero y los representantes de la Hermandad del Alc3zar, Jos3 Sanz de Diego y Emilio Abel de la Cruz (Rodr3guez, *op. cit.*: 277).

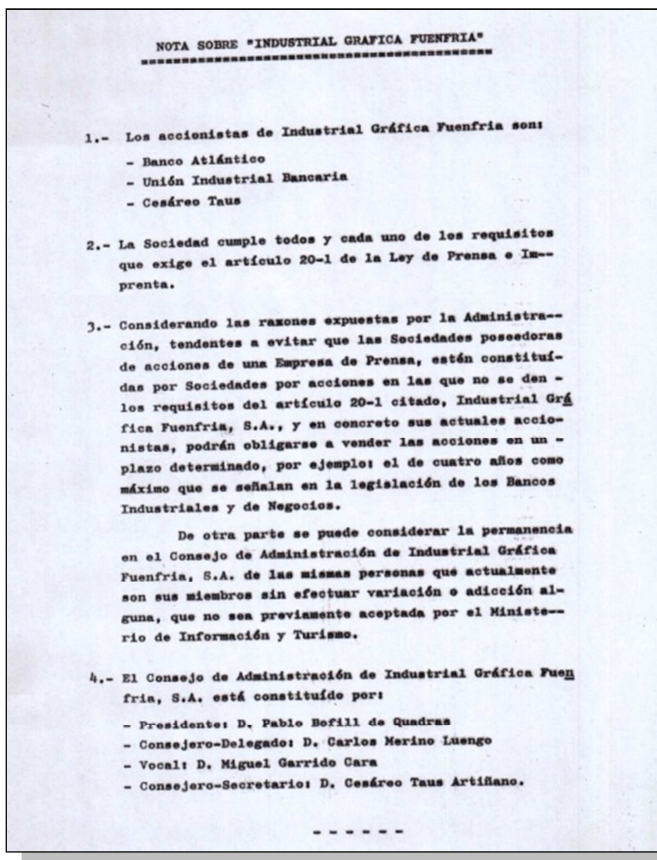
⁶⁶⁶ Cuenta Jos3 Mar3a Pem3n en su libro *M3s almuerzos con gente importante* (1970) que, preguntado Manuel Fraga sobre sus “arremetidas pol3ticas” contra *Madrid* y *El Alc3zar*, le hab3a contestado el ministro: “Para algo soy ‘montero’. Tengo el rifle encarado: y cuando pasen los corzos que yo espero, por el centro de la cruz roja de mi telescopio, cobrar3a pieza. Pero no por capricho: sino en servicio de los planes que creo claros y buenos para Espa3a, que son los que tiene el General3simo” (cit. en Rodr3guez, 2005: 448). Algo similar relata Alejandro Royo-Villanova. Cuenta el presidente de El Norte de Castilla, S.A. que Fraga sol3a acabar las reuniones con 3l espet3ndole: “recuerda que tengo la pistola cargada” (Testimonio de Royo-Villanova en entrevista personal mantenida el 25 de octubre de 2012).

El acoso sobre la presa comenzaría a principios de 1967, con una investigación administrativa sobre el capital de Industrial Gráfica Fuenfría, S.A., una sociedad interpuesta creada en enero de 1967 por el Banco Atlántico y Bankunión para hacerse cargo de las acciones que ambos tenían en PESA. Una nota sin fecha ni firma archivada en el expediente registral de la empresa periodística⁶⁶⁷ se refiere al cumplimiento por parte de Industrial Gráfica Fuenfría del artículo 20.1 de la Ley de Prensa; y plantea dos posibles actuaciones para evitar su control por los bancos: conminarlos a vender sus participaciones en la sociedad interpuesta en un plazo de cuatro años; u obligarlos a mantener el CA de Industrial Gráfica Fuenfría sin alteraciones que no fueran previamente consentidas por el MIT⁶⁶⁸.

La Administración acabó optando por presionar a PESA para hacer desaparecer a Industrial Gráfica Fuenfría de su accionariado. Un escrito de 28 de julio de 1967 imple a la empresa periodística a acreditar fehacientemente que

las personas, naturales o jurídicas, poseedoras de acciones de Industrial Gráfica Fuenfría, S.A. reúnen las condiciones exigidas en el ordenamiento jurídico vigente, en lo que se refiere a nominatividad de sus acciones, intransferibilidad de las mismas a extranjeros y que la actividad periodística figure entre las que forman parte de sus fines sociales.

El 25 de agosto la empresa recibía la primera sanción pecuniaria por la publicación de una fotografía que transgredía el respeto a la moral prescrito por el artículo segundo de la LPI. Antes de que acabara el año, PESA sería multada otras dos veces, por un artículo publicado en *El Alcázar* el 10 de noviembre y por otra fotografía aparecida en *Nuevo Diario* el mismo día (Terrón, 1981: 222). Las presiones del Ministerio sin duda debieron



⁶⁶⁷ Exp. 1201, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 145

⁶⁶⁸ Según el informe, formaban parte del CA de Industrial Gráfica Fuenfría, Pablo Bofill de Quadras (presidente); Carlos Merino Luengo (consejero delegado); Miguel Garrido Cara; y Cesáreo Taus Artiñano.

contribuir a la desaparición de la sociedad del capital de PESA, toda vez que sus títulos fueron traspasados poco después a particulares, una vez se hizo efectiva, en diciembre de 1967, la ampliación de capital acordada en marzo de ese año⁶⁶⁹. No fue la única modificación fruto de la intervención administrativa: en marzo de 1967 había dimitido como consejero delegado José Luis Olaizola debido a las presiones de Manuel Fraga (Rodríguez, *op. cit.*: 317). Todo indica que no fueron sino estos cambios —unidos a una cierta moderación del tono de *El Alcázar*— los que posibilitaron la tregua de la primavera del 67 y la consiguiente autorización de *Nuevo Diario* (v. 5.2.2).

El detonante del asalto definitivo del MIT a *El Alcázar* fue, según Jordi Rodríguez, la retirada en el verano de 1968 —tras la segunda suspensión del diario *Madrid*— de una invitación al ministro para que inaugurara unas instalaciones de PESA. El desaire inspiró una carta de Fraga al consejero delegado, Carlos Merino Luengo, en la que le decía no estar dispuesto a que nadie le marcara el ritmo de la reforma (Rodríguez, *op. cit.*: 411). El 5 de julio, Fraga ordenaba inspeccionar PESA en busca de financiación extranjera, ante el asombro de sus directivos⁶⁷⁰. El día 28, el MIT sancionaba a PESA con 15.000 pesetas por un texto publicado en *Nuevo Diario*, crítico con la suspensión del diario *Madrid*. Al tiempo, otro artículo publicado en *El Alcázar* y en el que se citaba a Franco para atacar la Ley de Prensa, era contestado por Waldo de Mier García Maza (representante de la Hermandad en el CA de PESA) con una carta al director en la que consideraba violada una de las cláusulas del contrato de arrendamiento del vespertino. La cláusula se refería a la obligación de PESA de mantener en *El Alcázar* una línea editorial de estricta fidelidad “al Caudillo de España, es decir, a la política del Gobierno por aquél presidido, a la unidad de la Patria y de Ejército”. El 24 de septiembre, la

⁶⁶⁹ Tras la ampliación, el capital quedó bastante diversificado y en poder, en su mayor parte, de particulares. José Ferrer Bonsoms era propietario del 11'81% de las acciones. El segundo accionista mayoritario era SARPE (también controlada por el Atlántico-Bankunión), con el 9'54% del capital. Otros accionistas ligados a los bancos eran Rafael Echaide (5'06%), José María Molero (5'66%) o Guillermo Bañares Martí (2'73%). V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa y Ediciones, Propiedad).

⁶⁷⁰ De la inspección resultaría una primera carta de Enrique Santín (jefe del Cuerpo de inspectores del MIT) a Fraga en la que le relataba una entrevista con el consejero delegado de PESA, José María Molero. Éste había sustituido a Carlos Merino en septiembre de 1968, tras el recrudecimiento del conflicto con el Ministerio. Según Santín, José María Molero “insistió repetidas veces que la financiación de la Empresa lo es exclusivamente con capital nacional, sin que haya participación alguna extranjera, ni siquiera intentos de ello. Manifestó su sorpresa con relación a este extremo, reiterando su afirmación de que no existe ningún grupo financiero extranjero interesado en PESA [...]”.

El 3 de febrero de 1969, Santín remitía a Fraga otra “Nota” sobre los accionistas de PESA, Miguel Fernández Rivera, Eugenio Galdón Barberán y José Ferrer Bonsoms; así como sobre su presidente, Pablo Bofill de Quadras y el vocal Francisco Nieto Arnáiz.

Todo ello se encuentra en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 145, exp. 1201. Véase también Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Prensa y Ediciones, Documentos e Informes).

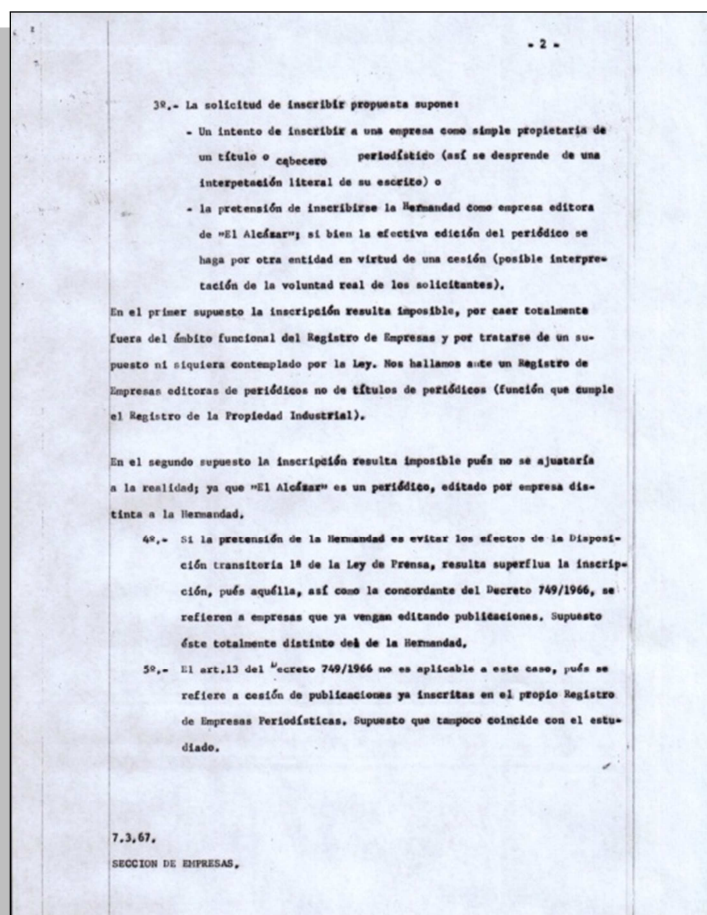
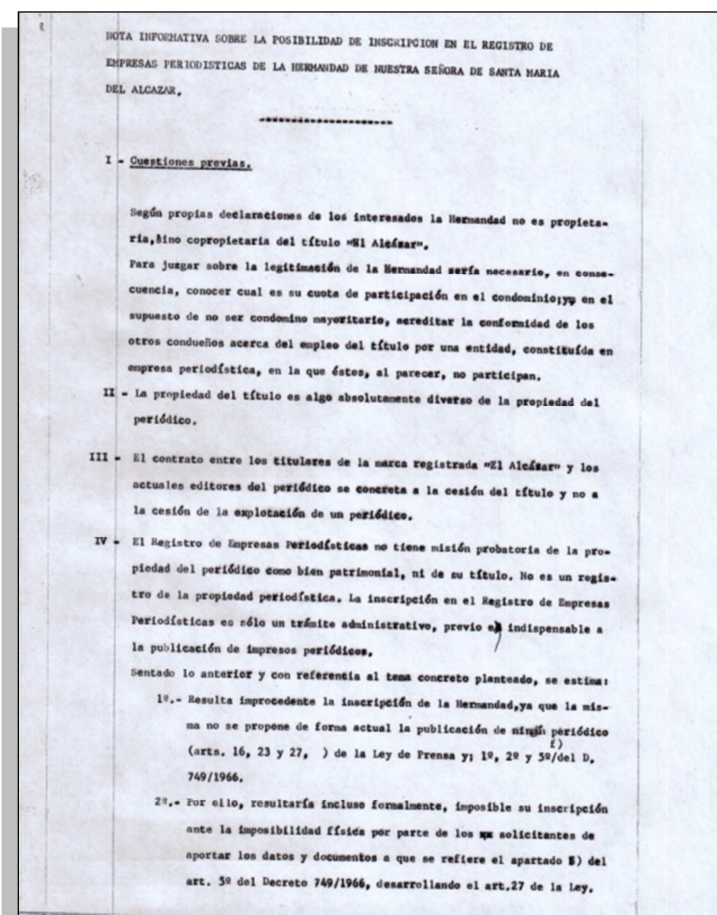
Hermanidad de Nuestra Señora del Alcázar alegaba ante PESA el incumplimiento del contrato, le exigía que dejara de hacer uso de la cabecera y solicitaba notarialmente a la DGP que no admitiera a depósito más ejemplares del vespertino. El conflicto interno entre PESA y la Hermanidad brindaba al fin a Fraga la posibilidad de cobrarse su pieza.

El 27 de septiembre, tras consultar con su Asesoría Jurídica, la DGP accedía a suspender *El Alcázar*, basándose —además de en la denuncia de incumplimiento de contrato presentada por la Hermanidad—, en que era ésta y no PESA la empresa inscrita en el REP como editora del diario. La razón aducida por la DGP no sólo no era estrictamente cierta, sino que revelaba que la maniobra administrativa llevaba ya tiempo fraguándose. En el REP figuraba inscrita, en efecto, la Hermanidad de Nuestra Señora de Santa María del Alcázar como la propietaria de *El Alcázar*⁶⁷¹, pero también PESA como su editora en régimen de arrendamiento⁶⁷². La Hermanidad, además, había sido inscrita el 8 de junio de 1967 (iniciado ya, pues, el contencioso entre el MIT y PESA), aun sin ser una empresa periodística ni editar diario alguno, y a pesar de un informe contrario de la Sección de Empresas, que calificaba la inscripción de “improcedente”⁶⁷³.

⁶⁷¹ Exp. 796, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 90

⁶⁷² Exp. 1201, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 145

⁶⁷³ Todo apunta a que la Hermanidad había solicitado la inscripción en el REP a principios de 1967, lo que había suscitado, a su vez, una consulta de la DGP a la Sección de Empresas sobre la procedencia de acceder a la inscripción. La Sección contestaba con un informe de 7 de marzo de 1967 en el que se consideraba la solicitud como un intento de inscribir una empresa como simple propietaria de un título; o bien de inscribirla como editora de *El Alcázar*, a pesar de que la edición efectiva la realizaba otra empresa. “En el primer supuesto [se establece] la inscripción resulta imposible, por caer totalmente fuera del ámbito de Registro de Empresas y por tratarse de un supuesto ni siquiera contemplado en la Ley [...] En el segundo supuesto la inscripción resulta imposible, ya que *El Alcázar* es un periódico editado por empresa distinta a la Hermanidad”. Informe en exp. 796, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 90.



Parece evidente que la orden de inscripción provino de los despachos superiores del Ministerio, que preparaban así una posible devolución de los derechos de edición de los arrendatarios a los arrendadores y propietarios.

Con todo, PESA no se arredró, al menos inicialmente. El mismo 27 de septiembre, la empresa impugnaba la resolución unilateral del contrato y solicitaba acto de conciliación con la Hermandad. Todo ello a pesar de que,

en PESA existía el convencimiento de que la iniciativa del requerimiento no había partido de la Hermandad, sino de Fraga, que les 'aguijoneaba' desde 1966 apoyándose en los miembros más conservadores e influyentes (Rodríguez, *op. cit.*: 427).

La táctica frente a la Administración se basó en dos actuaciones: por un lado, tres días después del expolio, PESA solicitaba a la DGP su inscripción como editora de una nueva publicación: *El Alcance* (v. 5.3.1). Por otro, presentaba batalla judicial con denuncias y recursos⁶⁷⁴. Todo resultaría inútil hasta la entrada en escena del Tribunal Supremo, que

⁶⁷⁴ El 27 de septiembre, PESA denunciaba al director general de prensa, Manuel Jiménez Quílez, ante el Juzgado de Guardia de Madrid por una supuesta extralimitación en su facultad de suspender una publicación (de acuerdo con el artículo 93 del Código Penal); y preparaba una demanda de responsabilidad civil contra él por los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión. Por otro lado, presentaba un recurso de alzada ante el ministro de Información y Turismo y una demanda de interdicto para mantener en su poder la cabecera. Todo ello fue desestimado y recurrido de forma infructuosa durante la primera mitad de 1969. Según Rodríguez

el 12 de febrero de 1970 fallaba a favor de PESA y obligaba a restablecer el *statu quo* anterior al 27 de septiembre de 1968.

A la altura de 1970, la vuelta a la situación anterior al despojo resultaba del todo inviable. Desde principios de octubre de 1968, *El Alcázar* venía siendo editado por la Hermandad de Nuestra Señora del Alcázar, primero directamente (gracias a su inscripción en el REP en junio de 1967), y más adelante a través de la sociedad Diarios y Revistas, S.A. (DYRSA). Cinco miembros de la Hermandad (incluido su presidente, Miguel Moscardó y Guzmán, conde del Alcázar de Toledo⁶⁷⁵) habían constituido la empresa periodística el 19 de octubre de 1968, el mismo día en que la Hermandad le cedía los derechos de edición del vespertino. DYRSA logró además ser inscrita en el REP con una celeridad inusitada⁶⁷⁶: sólo cuatro meses pasaron desde que la sociedad cursara la solicitud hasta la obtención del plázet administrativo, que no requirió, por otra parte, de investigación alguna; algo insólito, desde luego, teniendo en cuenta el proceder habitual del MIT con las empresas aspirantes a imprimir diarios y la situación de la publicación que se pretendía editar, objeto de un contencioso aún entonces no resuelto por el Tribunal Supremo. Este extraordinario desinterés se mantuvo, de hecho, durante todo el tardofranquismo, lo que permitió a DYRSA permanecer al margen de la vigilancia del MIT, que tampoco indagó en su traspaso a la Confederación Nacional de Excombatientes (dependiente de la Secretaría General del Movimiento) en mayo de 1975.

La restitución de *El Alcázar* a PESA se antojaba, pues, a principios de 1970, poco menos que imposible, toda vez que habría pasado por una enajenación de los derechos de DYRSA similar a la perpetrada dos años antes contra PESA. Ésta, en vez de hacer valer sus derechos, acabó renunciando a ellos sólo unos meses después de que fueran reconocidos por el Supremo. En una carta enviada el 25 de noviembre por Pablo Bofill de Quadras a Alfredo Sánchez Bella, el presidente de PESA anunciaba:

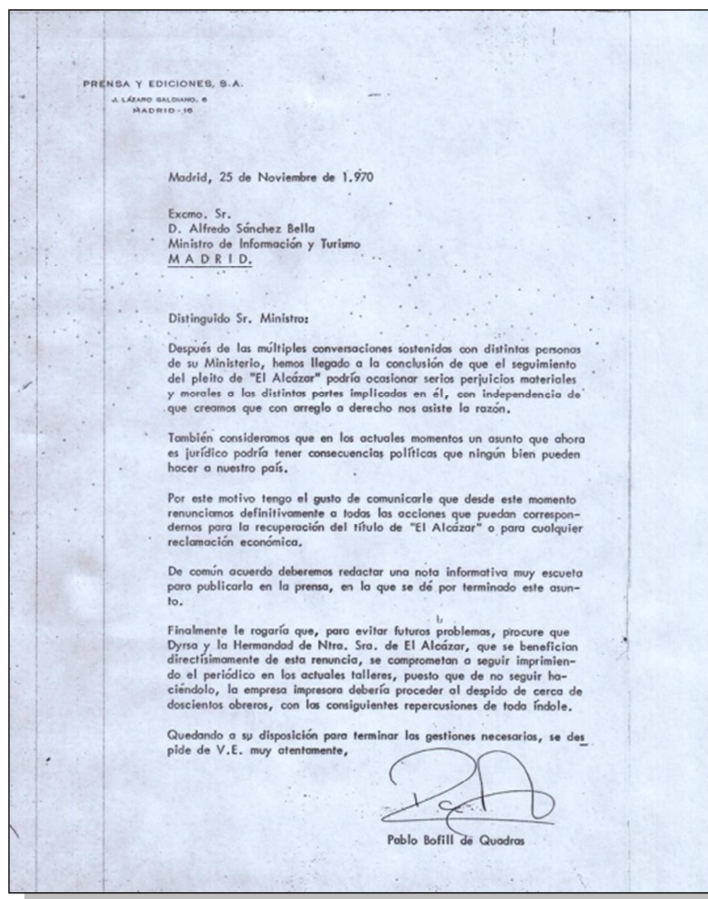
Virgili, en el Consejo de Ministros del 9 de octubre de 1968, López Rodó llegó a solicitar la anulación de la actuación de la DGP contra PESA, a lo que Fraga se negó (Rodríguez, *op. cit.*: 429). Finalmente, tras el rechazo por parte de Fraga del recurso de alzada presentado ante él, PESA recurría, en la vía contencioso-administrativa, ante el Tribunal Supremo, el 24 de febrero de 1969.

⁶⁷⁵ Fundaron la empresa, además de Miguel Moscardó, el teniente-coronel Joaquín Agulla Jiménez-Coronado; Alberto Martín Gamero; Rafael Ferrater Gamoneda y Vicente Toro Ortí. El capital social inicial, de 20 millones de pesetas (aunque con poco más de un cuarto desembolsado) estaba nominalmente en poder de la Hermandad (2'75%), de Dionisio Porres Gil (32'41%); Rafael Ferrater Ramoneda (32'40%) y Vicente Toro Ortí (32'41%).

⁶⁷⁶ Inscripción en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 291, exp. 2966.

Después de las múltiples conversaciones sostenidas con distintas personas de su Ministerio, hemos llegado a la conclusión de que el seguimiento del pleito de “El Alcázar” podría ocasionar serios perjuicios materiales y morales a las distintas personas implicadas en él, con independencia de que creamos que con arreglo a derecho nos asiste la razón [...].

Por este motivo tengo el gusto de comunicarle que desde este momento renunciamos definitivamente a todas las acciones que puedan correspondernos para la recuperación del título de “El Alcázar” o para cualquier reclamación económica.



El Ministerio, obviamente, había presionado a los accionistas de PESA con infligirles los “perjuicios materiales y morales” a los que alude Bofill de Quadras. Según Rafael Calvo Serer, la Administración había amenazado a José Ferrer Bonsoms y al Banco Atlántico-Bankunión con frenar su expansión y acabar con el negocio de construcción de la red de autopistas de Cataluña (cit. en Rodríguez, *op. cit.*: 468-469), cuya concesión había logrado el proyecto liderado por Bankunión aun a pesar de ser más caro que el de su competidor. Por si fuera poco, un mes después, PESA se veía también forzada a vender *Nuevo Diario* a Prensa Económica, S.A., otra empresa ligada al Opus Dei y a la tecnocracia, recién consolidada en el Gobierno tras la crisis ministerial de 1969 (v. 5.2.3). Las presiones y amenazas, unidas al pago de una indemnización por el valor total de la compañía⁶⁷⁷, llevaron así PESA a renunciar a sus dos diarios madrileños.

Despojada de sus publicaciones, Prensa y Ediciones, S.A. acabó solicitando la cancelación de su inscripción en el REP el 4 de mayo de 1971. La Administración no demoró en esta ocasión la solicitud y ordenó la cancelación de la empresa el 15 de junio. Con su maniobra, iniciada por Manuel Fraga y culminada por Alfredo Sánchez Bella, el

⁶⁷⁷ Según Ferrer Bonsoms, la Administración pagó 110 millones de pesetas a PESA para evitar más reclamaciones de sus derechos sobre *El Alcázar* (Rodríguez, *op. cit.*: 470). A ese monto exacto ascendía el capital social de la empresa desde diciembre de 1967 (tras la ampliación de capital aprobada en marzo de aquel año).

Ministerio había logrado arrebatarse a PESA, identificada con la tecnocracia opusdeísta y un tímido aperturismo, sus dos cabeceras: la más importante, *El Alcázar*, pasó a ser editada por los sectores más inmovilistas del Régimen; mientras que *Nuevo Diario* quedaba vinculado a Laureano López Rodó e integrado, por tanto, en el aparato de poder político tardofranquista. Ambas operaciones —así como las de Mediterranean y EPECSA— demuestran que el MIT fue, allí donde le interesó políticamente, mucho más allá de la mera vigilancia extralegal de las empresas periodísticas.

6.4.2.2 Operaciones dificultadas por la Administración

La Administración se valió de su aparato de vigilancia y control de la empresa periodística, no sólo para impulsar o favorecer ciertas operaciones, sino también para dificultar o tratar de impedir otras políticamente inconvenientes. Entre 1966 y 1975, el MIT se opuso u obstaculizó tres cambios de propiedad y gobierno en empresas editoras de prensa diaria: dificultó la gestión empresarial de Sebastián Auger al frente Ilustración, S.A. (*Diario Femenino-Mundo Diario*); intentó impedir la entrada de Jordi Pujol en Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. (*El Correo Catalán*), y maniobró para evitar el traspaso de Ferrol Ediciones, S.A. (*Ferrol Diario*) a una Cooperativa laboral controlada por el sindicato Comisiones Obreras.

Ilustración, S.A. había sido fundada en 1966 por el publicista Víctor Sagi Vallmitjana para editar *Diario Femenino*, una publicación dirigida inicialmente a las mujeres. Tras años de pérdidas económicas, a finales de 1971 Víctor Sagi —cuya amistad con Pío Cabanillas y Manuel Fraga había facilitado su inscripción en el REP (5.2.2)— hubo de vender la empresa. El 25 de noviembre de 1971 (el mismo día, por cierto, que la DGP cancelaba la inscripción de *Madrid*), Ilustración, S.A. comunicaba al REP la venta del 96'6% del capital (porcentaje que ascendería al 99'5% un mes después) a Sebastián Auger Duró, quien asumía, desde entonces, la presidencia de la compañía⁶⁷⁸. Sebastián Auger era, a principios de los setenta, un joven empresario catalán del Opus Dei⁶⁷⁹,

⁶⁷⁸ Tras la compra, el nuevo Consejo de Administración pasó a estar formado por Auger Duró como presidente; Luis Briones Molina (presidente de Dopesa y consejero de otras sociedades de Auger) y Javier de Quintana Justafré (consejero delegado de todas las sociedades de Auger), como consejeros delegados; Jaime Delgado Martín, Fabián Estapé Rodríguez; Juan Gich Bech de Careda, Esteban Negra Valls, Pablo Negre Carrió (quien cesaría más adelante por incompatibilidad bancaria); Ramón de Solanes Piñol; y Ramón Bech Taberner como secretario no consejero.

⁶⁷⁹ Si mencionamos aquí la afiliación de Auger al Opus Dei no es sólo por contribuir a perfilar al personaje, sino porque tuvo, como en muchos otros casos, una influencia indiscutible en el éxito y fracaso de sus negocios periodísticos. Cuenta Enric Sopena, que el Opus había escogido a Auger como su hombre en la prensa de Barcelona, donde, a diferencia de Madrid [con *El Alcázar*, *Nuevo Diario* y *Madrid*], no tenía demasiada presencia (Pàmies, 1993: 15). Auger estuvo ligado, a finales

enriquecido gracias a los negocios inmobiliarios de sus suegros⁶⁸⁰ y no carente de contactos y aspiraciones políticas. Desde 1970, compaginaba la gestión empresarial con el cargo de delegado de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por José María de Porcioles. Sus ambiciones pasaban por la creación de un imperio periodístico que sustentara su ascenso político, y que comenzaría a levantar en 1968 con la compra de la revista mensual *Meridiano*, germen, junto a la editorial Dopesa y un club de debate, del Grupo Mundo. A finales de ese mismo año, Auger había desembarcado en la prensa madrileña, al ser nombrado por los opusdeístas Calvo Serer y Valls Taberner consejero delegado de Madrid, Diario de la Noche, S.A., editora del demolido diario *Madrid*. Ninguno de estos primeros pasos de Auger en la prensa española parecieron despertar demasiadas suspicacias en el MIT, que no comenzó a interesarse por el empresario catalán hasta la compra de *Diario Femenino*.

A principios de la década de los setenta, las aspiraciones periodísticas de Sebastián Auger chocaron con la clausura del REP y, por extensión, del sistema de prensa diaria. La compra de acciones de empresas periodísticas autorizadas se adivinaba como la única posibilidad de acceso al sector; una vía, por lo demás, tampoco exenta del control administrativo, como hemos comprobado. La compra de Ilustración, S.A. por parte de Sebastián Auger requirió, de hecho, de la autorización expresa del ministro Alfredo Sánchez Bella, según se desprende de un informe reservado archivado en el expediente registral de la empresa⁶⁸¹. En él se relata:

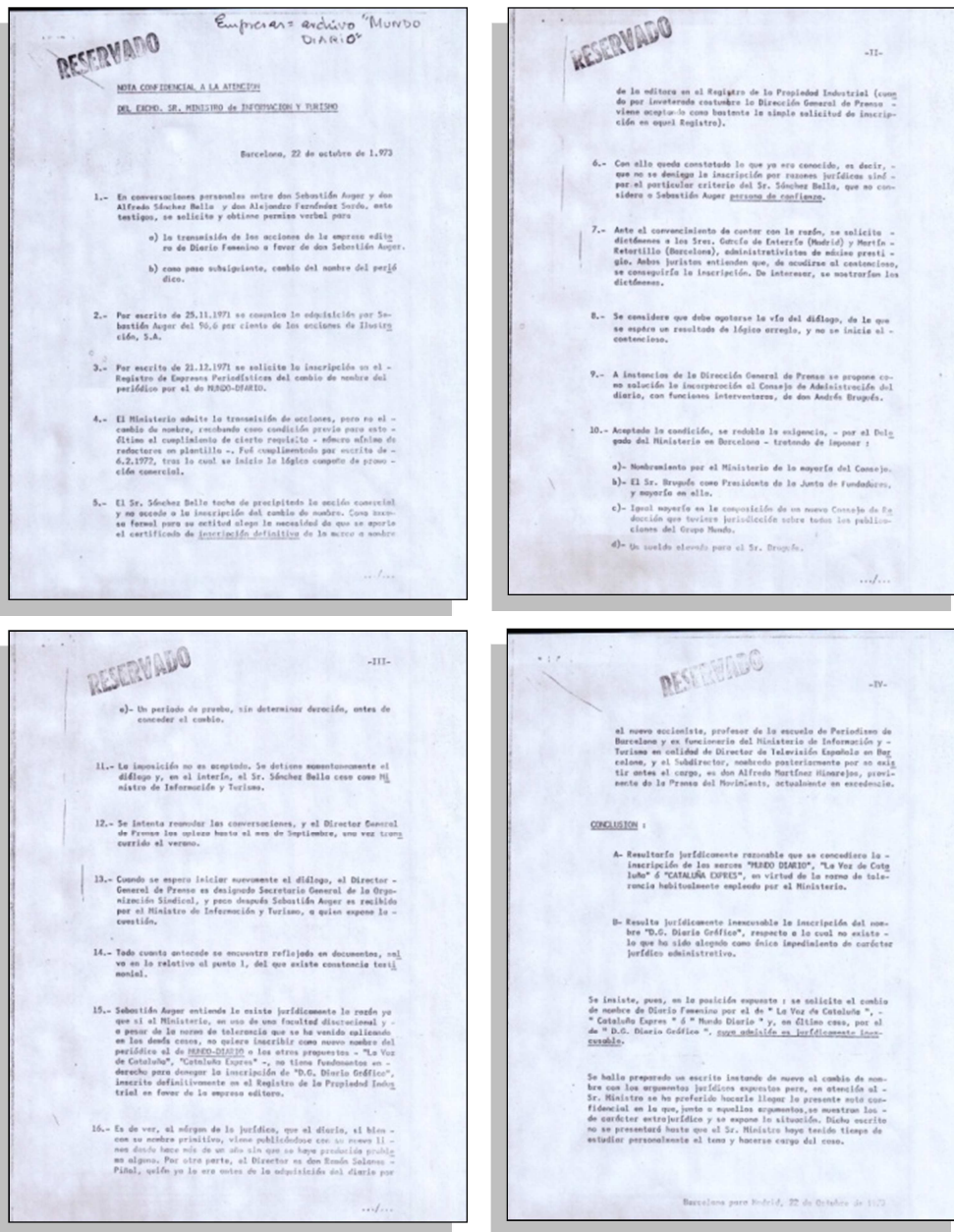
de los sesenta, a algunas de las empresas más importantes vinculadas al Opus Dei. En 1967, era nombrado consejero de la Unión Industrial Bancaria (Bankunió), la filial del Banco Atlántico presidida por José Ferrer Bonsoms y propietaria de las empresas periodísticas del entramado SARPE-PESA (v. *supra*). También en esos años accedía al cargo de consejero delegado de Madrid, Diario de la Noche, S.A. (*Madrid*), propiedad de FACES, controlada por el Banco Popular del opusdeísta Luis Valls Taberner, quien financiará, por otro lado, muchos de los proyectos de Auger hasta 1973. Según Oriol Pàmies, Auger se moverá entre las dos tendencias opusdeístas del momento: la tecnócrata integrada en el aparato de poder franquista y la aperturista de Calvo Serer: con ambas tendrá vinculación y con ambas acabará enfrentado. De hecho, Auger abandonará el Opus en 1973, el mismo año en que se cortará la financiación que hasta entonces había obtenido de Valls Taberner. Preguntado por la coincidencia entre su abandono de la Obra y el inicio de sus problemas financieros, Auger contestaba a *Cambio 16* en 1986: “Podría ser verdad y es una hipótesis de la que usted puede partir perfectamente. Lo curioso es que hay algunas coincidencias, ¿no?” (cit. en Pàmies, *op. cit.*: 16).

⁶⁸⁰ Sebastián Auger era yerno de Joaquín Nebot Montoliu y de Dolores Jorge Parramon, propietarios de varios solares en la periferia de Barcelona, en los que Auger construirá varias urbanizaciones a través de las empresas inmobiliaria Corba, S.A. (denominada Inmobiliaria Chile desde 1972); Torre del Regente, S.A.; y Urbanizaciones Victoria Eugenia, S.A. Además del inmobiliario y periodístico, Auger tuvo también intereses en los sectores informático (a través de Nixdorf Computer), el bancario (fue consejero de Bankunió y presidente del Banco de Toledo), y el cine (a través de la productora Profilmes). Biografía y vinculaciones en Pàmies, 1996 y AH EFE. V. Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Ilustración, Gobierno Corporativo).

⁶⁸¹ Exp. 1329, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 160.

En conversaciones personales entre don Sebastián Auger y don Alfredo Sánchez Bella y don Alejandro Fernández Sordo, ante testigos, se solicita y obtiene permiso verbal para

- la transmisión de las acciones de la empresa editora de Diario Femenino a favor de don Sebastián Auger.
- como paso subsiguiente, cambio del nombre del periódico.



Sánchez Bella no cumpliría su palabra: aunque admitiría la inscripción en el REP del cambio de propiedad, no consentiría el cambio de nombre, tratando de mantener la difusión de la publicación lo más restringida posible. Según el mismo informe,

[...] queda constatado lo que ya era conocido, es decir, que no se deniega la inscripción [de la nueva denominación] por razones jurídicas sino [sic] por el

particular criterio del Sr. Sánchez Bella, que no considera a Sebastián Auger *persona de confianza*.

El informe reservado evidencia que Sánchez Bella manejó el cambio de denominación del diario para obtener contrapartidas que le aseguraran el control de la publicación. Impuso, para empezar, la incorporación al Consejo de Administración, “con funciones interventoras”, de Andrés Brugués; y exigió la designación ministerial de la mayoría de los consejeros, así como de la Junta de Fundadores (que había de estar presidida, además, por Brugués) y del Consejo de Redacción. Auger no se plegó a estas últimas exigencias, lo que impidió el cambio de título de la cabecera durante más de dos años, mientras estuvieron al frente del MIT Alfredo Sánchez Bella y Fernando Liñán y Zofío. La nueva denominación no será autorizada hasta enero de 1974, tras la llegada al Ministerio de Pío Cabanillas (quien sería nombrado poco después, no por casualidad, “español del año 1974” por la revista *Mundo*, de Auger).

Parece evidente que el MIT había visto en la entrada de Sebastián Auger en Ilustración, S.A. una oportunidad de hacerse con el control de su diario y con este fin había autorizado la compra al empresario. La Administración de Sánchez Bella demostraba una vez más su capacidad de intervención discrecional sobre las empresas periodísticas; hasta el punto de llegar a chantajear a aquellos empresarios que no merecieran su confianza, o de los que pudiera obtener réditos políticos.

En otros casos, el MIT se opuso frontalmente a la compra de acciones de empresas periodísticas por parte de empresarios y trabajadores de convicciones antifranquistas; de modo que sus presiones y amenazas se dirigieron más bien a evitar su presencia en el panorama de la prensa española. Así ocurrió a principios de los setenta con la entrada subrepticia de Jordi Pujol en Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A., fundada en 1903 para editar el histórico diario carlista, *El Correo Catalán*. A mediados de los sesenta, la empresa periodística se hallaba controlada por la familia Baygual, vinculada al sector textil catalán: Juan Baygual Bas era entonces el accionista mayoritario, con un 37'57% de Fomento, cuyo Consejo presidía desde 1963 Francisco Baygual Brutau. Junto a ellos, otros “algodoneros” habían ido ganando presencia desde finales de los cincuenta, liderados por Manuel Ortínez (director general de la Industria Textil Algodonera), y Domingo Valls Taberner, uno de los fundadores del Banco Industrial de Cataluña. Fue éste último quien invitó a Jordi Pujol, al parecer, a comprar acciones de la empresa. (Saura, 1998: 85).

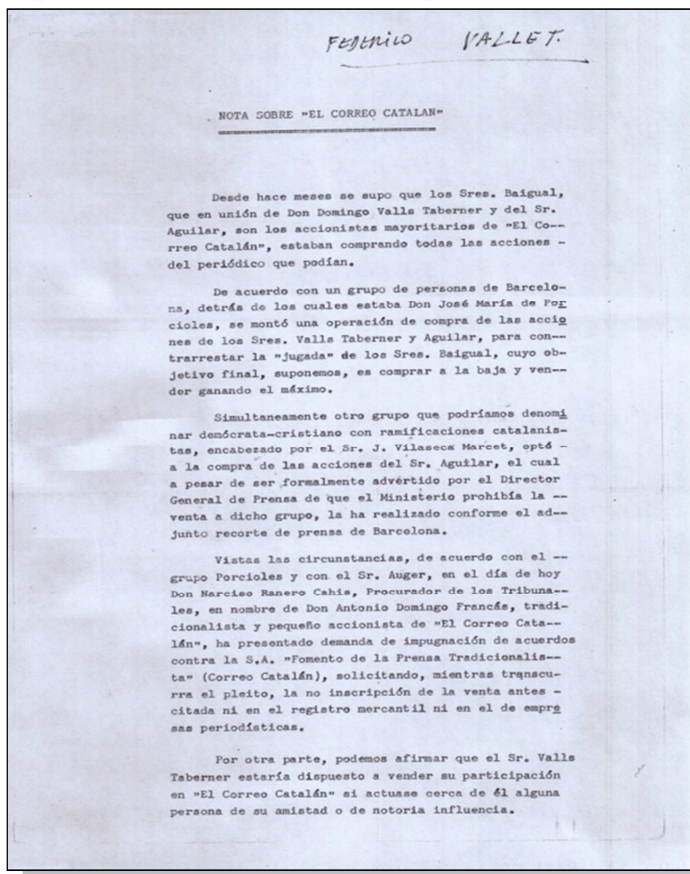
Jordi Pujol Soley era a finales de la década de los sesenta un joven banquero nacionalista catalán. En 1963 había fundado junto a otros socios la Banca Catalana, una entidad financiera que utilizaría para financiar diversos proyectos culturales, sociales y

políticos orientados a la promoción y defensa del catalanismo democrático, lo que entonces se entendía como “hacer país”⁶⁸². *El Correo Catalán* se perfilaba, en este sentido, como una atractiva punta de lanza de su proyecto: el diario se había convertido, en los sesenta, en el más acosado por la censura, dada su fórmula de hacer catalanismo en castellano (Huertas, 1986: 22-23). Según Anna Nogué y Carlos Barrera,

[...] lo que encandilaba a Jordi Pujol era el tinte aperturista de *El Correo Catalán* y la sintonía de la cabecera con lo catalán. La fragmentación de su accionariado hacía viable su abordaje, por lo que el proyecto se convirtió en objetivo prioritario (Nogué & Barrera, 2006: 189).

Pujol iniciaría su desembarco en Fomento de la Prensa Tradicionalista a finales de 1970 a través de varios testaferros. Entre noviembre y diciembre de aquel año, Juan Casablanco Bertrán, Antonio Bacompte Barlabé, José Riba Ortínez, Federico Bayer Ros y José María Vilaseca Marcet compraron acciones de la empresa con dinero de Pujol y de la Banca Catalana⁶⁸³. Años después, el propio Jordi Pujol reconocería:

[...] en el caso de *El Correo Catalán* yo no podía dar la cara directamente y va a



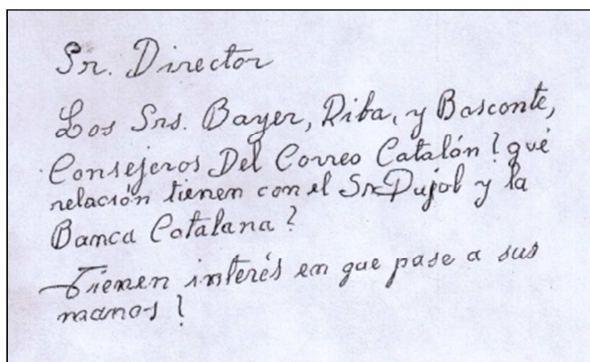
⁶⁸² Jordi Pujol y Soley (1930-), había dado sus primeros pasos en la vida pública durante su estancia en la Universidad, en la que había cursado la carrera de Medicina. Allí había militado en organizaciones políticas y culturales de orientación católica, democrática y catalanista. En 1960, había sido arrestado por protagonizar “Els fets de Palau”, la interrupción de un concierto en el Palau de la Música entonando el “Cant de la Senyera”. Su actividad política desembocaría, en 1972, en la formación de los Grupos de Acción al Servicio de Cataluña, germen de lo que en 1974 sería el partido Convergencia Democrática de Cataluña. Biografía en EFEDATA, Base de Datos de la Agencia EFE.

⁶⁸³ Juan Casablanco Bertrán será nombrado años después, en 1975, consejero de Banca Catalana. Su padre, el empresario textil Ferrán Casablanco había facilitado la absorción del Banco Mercantil de Manresa por la banca de Pujol. José Riba Ortínez estaba ligado al mundo textil catalán a través del Consorcio de Algodoneros. A finales de los sesenta, será también consejero del Banco de Barcelona en representación de la Banca Catalana. Federico Bayer Ros estaba vinculado al movimiento progresista católico y la revista *Cuadernos para el Diálogo*. Por último, José María Vilaseca Marcet era un abogado del Estado y acenepista barcelonés, casado con Teresa Roca (de la familia propietaria de Roca Radiadores, S.A.) y situado ideológicamente a la izquierda de Pujol. Biografías en Saura, 1998: 90-91.

haber que simular durante años que el propietario seguía siendo Baygual; lo que era un handicap grande, pero yo no podía hacer nada más, porque en Madrid habían dicho que si el que compraba las acciones era el señor Jordi Pujol, nada de nada (cit. en Huertas, 1986: 23)⁶⁸⁴.

En 1970, el MIT desconocía aún, sin embargo, que era Jordi Pujol quien estaba detrás de la transferencia de acciones: creía que el grupo de nuevos socios estaba encabezado por José María Vilaseca Marcet, quien, en cualquier caso, también había sido vetado por la Dirección General de Prensa. El 21 de diciembre de 1970, el delegado provincial del MIT en Barcelona, José Luis Herrero Tejedor, enviaba un informe al Ministerio en el que alertaba de la entrada de un grupo “demócrata-cristiano con ramificaciones catalanistas encabezado por el Sr. J. Vilaseca Marcet” [...] “a pesar de ser formalmente advertido por el director general de prensa de que el Ministerio prohibía la venta a dicho grupo”⁶⁸⁵.

A pesar de la inspección a la que fue sometida la empresa en 1970, el Ministerio no conocería la auténtica identidad del nuevo accionista de referencia hasta el año siguiente, gracias a una denuncia anónima enviada a la DGP. En la carta —manuscrita y con sello de 24 de octubre de 1971— se le preguntaba al director general de prensa: “Los Sres.



Sr. Director
Los Srs. Bayer, Riba, y Basconte,
Consejeros Del Correo Catalán ¿qué
relación tienen con el Sr. Pujol y la
Banca Catalana?
¿Tienen interés en que pase a sus
manos?

Bayer, Riba y Basconte, Consejeros Del Correo Catalán ¿qué relación tienen con el Sr. Pujol y la Banca Catalana? Tienen interés en que pase a sus manos?”.

Por aquel entonces, Fomento de la Prensa Tradicionalista se encontraba aún dominada por la familia Baygual,

propietaria de un 42'62% del capital. Domingo Valls Taberner poseía un 29'32%, mientras que los hombres de Pujol acumulaban un 22'14%; porcentaje que aumentará muy notablemente, a pesar de las amenazas y maniobras del MIT, a partir de 1973. A principios de 1972 —según se cuenta en un informe reservado enviado por la Delegación Provincial el 22 de noviembre de 1973— se habían producido una serie de reuniones en la DGP entre el director general de prensa, el delegado provincial en Barcelona, Baygual,

⁶⁸⁴ En catalán en el original: “[...] en el cas d’El Correo Catalán jo no podia donar la cara directament i vam haver de simular durant anys que el propietari continuava sent Baygual, la qual cosa era un handicap molt gros, però jo no podia fer res més, perquè a Madrid havien dit que si el que comprava les accions era el senyor Jordi Pujol, res de res”.

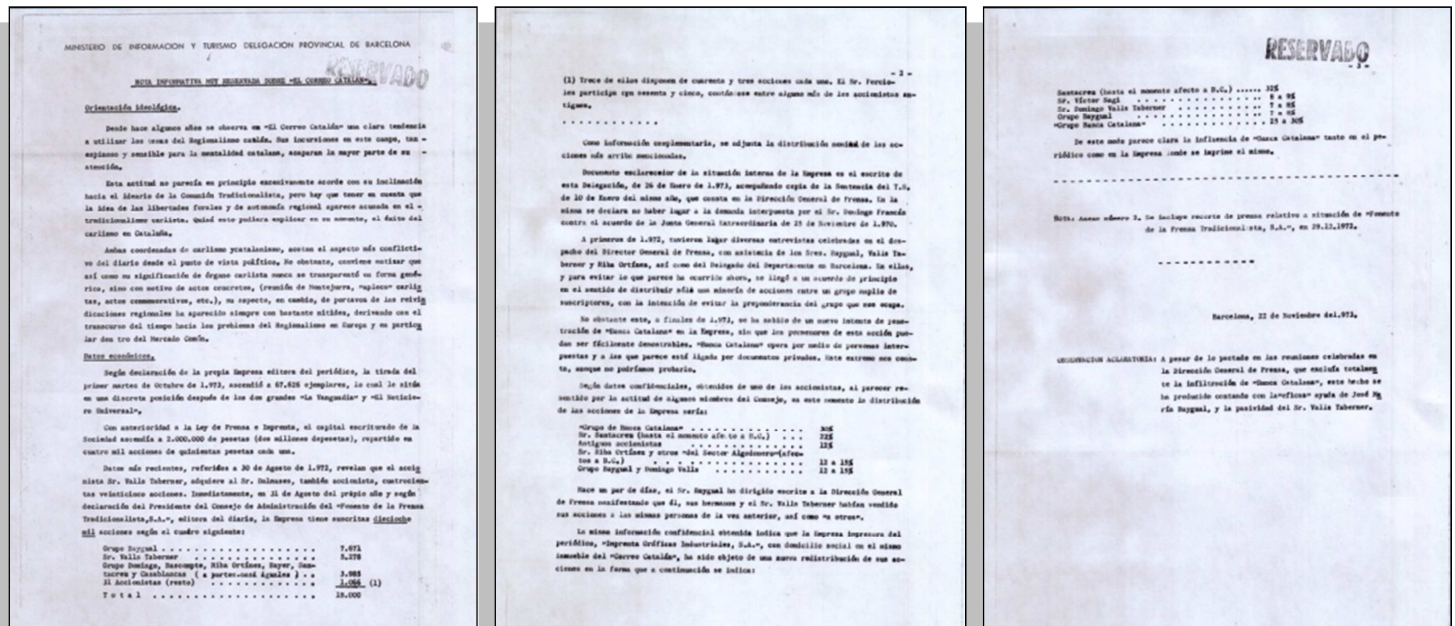
⁶⁸⁵ El informe se encuentra, como todos aquellos a los que aludimos a continuación, en REP, AGA, Presidencia del Gobierno, sig. (9)9.1.1 c. 210, exp. 1950. Aunque aparece sin firma ni membrete, se encuentra archivado junto a una tarjeta personal de Herrero Tejedor. Vilaseca Marcet, identificado por la Delegación Provincial, con Joaquín Ruiz Jiménez, había sufrido ese mismo año la cancelación en el Registro de Editoriales de su editorial Estela.

Valls Taberner y Riba Ortínez. En ellas se había acordado mantener un accionariado diversificado para evitar una penetración aún mayor del grupo de testaferros de Pujol. En diciembre de 1973, sin embargo, los Baygual y Valls Taberner vendían la mayor parte de sus acciones a José María Santacreu Margenet, hombre de Fraga en Cataluña (y que hasta entonces poseía un exiguo 3'45% de la empresa); y, sobre todo, a los hombres de Jordi Pujol, lo que volvía a activar las alarmas del Ministerio⁶⁸⁶.

Desde noviembre de 1973 hasta marzo de 1974, la DGP recibirá hasta siete informes reservados sobre la propiedad de Fomento. El primero de ellos, al que acabamos de aludir, era remitido a la DGP de Manuel Blanco Tobío por la Delegación Provincial barcelonesa el 22 de noviembre de 1973. El informe, basado en datos aportados por un accionista “resentido” advertía de que el control de Banca Catalana alcanzaba ya el 30% de la empresa “por medio de personas interpuestas y a las que parece está ligada por documentos privados”. La observación aclaratoria con que concluía la nota denunciaba:

A pesar de lo pactado en las reuniones celebradas [en 1972] en la Dirección General de Prensa, que excluía totalmente la infiltración de “Banca Catalana”, este hecho se ha producido contando con la “eficaz” ayuda de José María Baygual, y la pasividad del Sr. Valls Taberner.

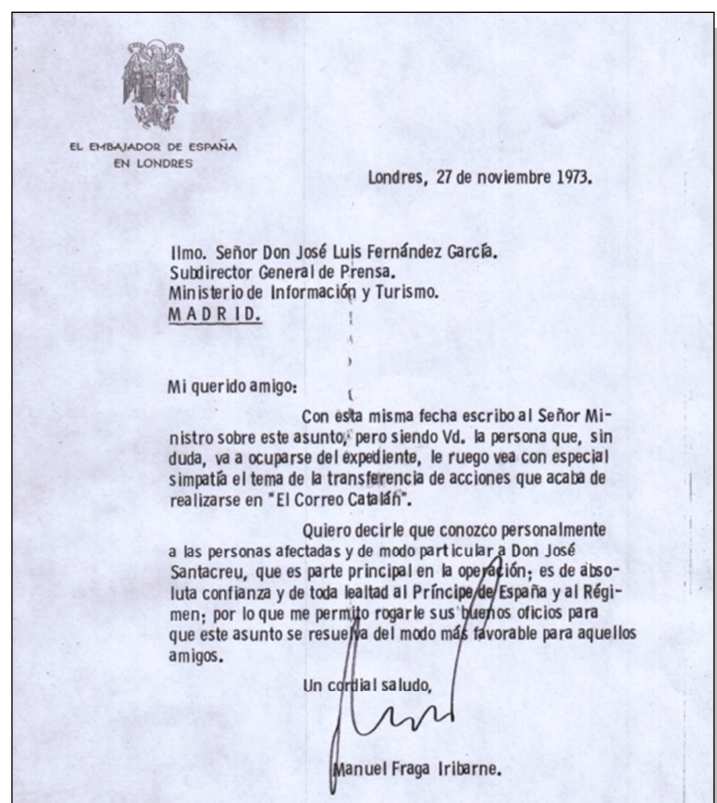
⁶⁸⁶ Tras las transferencias de acciones, los principales accionistas eran en 1973: José María de Santacreu Margenet (20%); seguido de los testaferros de Pujol: Francisco Aizcorbe Bausili (15'06%), Juan Casablanca Bertrán (8'63%), José Riba Ortínez (7'34%), Carlos de Gomar Mangrané (6'78%); José María Vilaseca Marcet junto a su esposa (5'20%); Federico Bayer Ros y su hermana Delfina (5'19% entre ambos); Antonio Bascompte Barlabé (4'44%); y Antonio Domingo Francás (3'4%). El resto tenían participaciones menores.



El mismo informe señalaba a José María de Santacreu como segundo mayor accionista, con un 22% del capital. Su nombre aparecía en la nota junto a la siguiente apostilla entre paréntesis: "hasta el momento afecto a B.C." [Banca Catalana]; a pesar de lo cual, era identificado como accionista individual, ajeno al "Grupo de Banca Catalana". Todo indica que el MIT impulsó a partir de entonces y hasta marzo de 1974 el control de Fomento de la Prensa Tradicionalista por Santacreu, en detrimento de Jordi Pujol.

José María de Santacreu Margenet era considerado por el MIT —según constatamos en el caso de Barcelonesa de Publicaciones— como el "representante de Fraga en Cataluña".

El 27 de noviembre de 1973, Manuel Fraga enviaba desde la embajada de Londres una carta al subdirector general de prensa, José Luis Fernández García, en la que avalaba personal y políticamente a Santacreu, a quien consideraba "de absoluta confianza y de toda lealtad al Príncipe de España y al Régimen". Poco después, la DGP recibía un informe confidencial fechado el primero de diciembre de 1973 sobre el

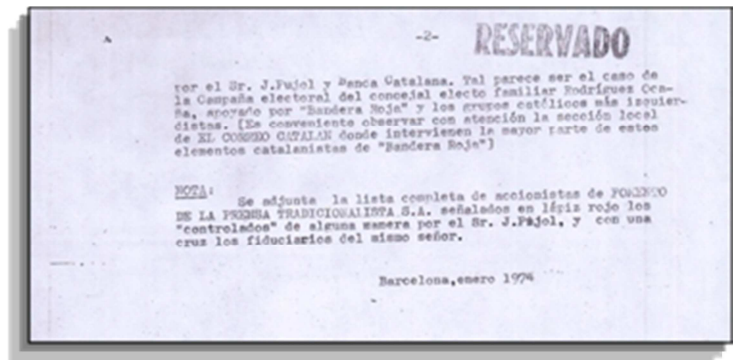
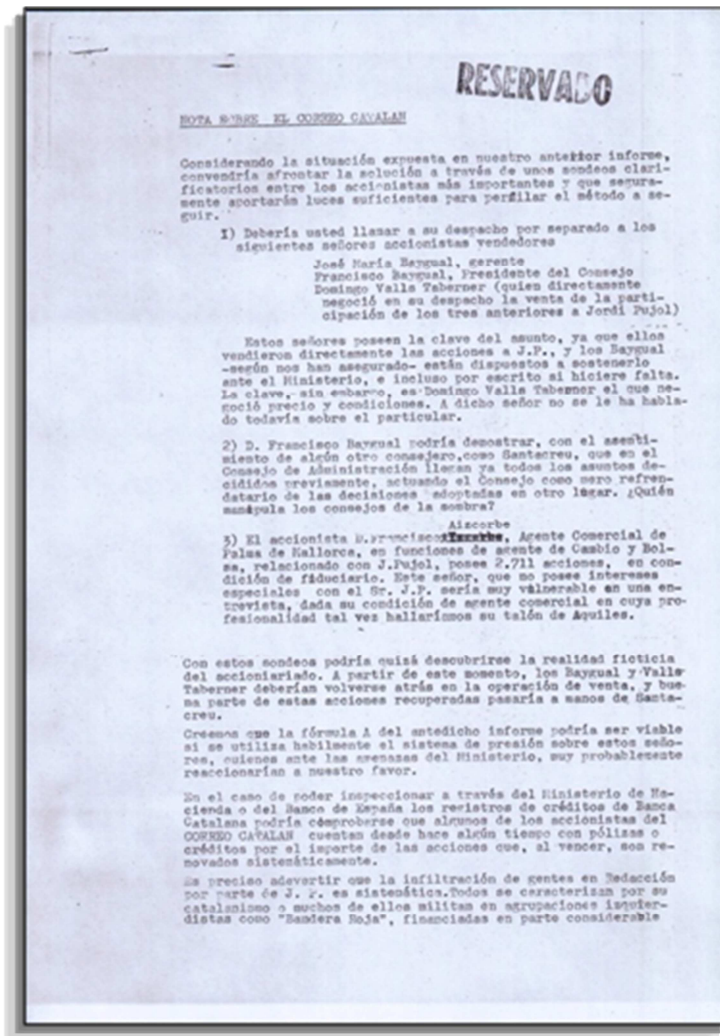


protegido de Fraga, al que se vinculaba con el Banco Condal de Barcelona y el Banco de Huesca. Todos los documentos archivados en el expediente de Fomento de la Prensa Tradicionalista desde entonces sugieren que el MIT trató de utilizar a Santacreu como muro de contención frente al ascenso de los accionistas ligados a Pujol y a la Banca Catalana. El 18 de enero de 1974, un extenso informe reservado daba cuenta a los nuevos responsables del Ministerio de los antecedentes y situación de la empresa, así como del “ideario político” de sus principales accionistas y consejeros⁶⁸⁷. Junto a esta otra, obra seguramente de la Delegación Provincial barcelonesa, hay archivados otros informes elaborados por un accionista o consejero de la empresa (probablemente miembro del Consejo de Redacción) próximo al Régimen, con acceso a información privilegiada y favorable al control de Fomento de la Prensa Tradicionalista por Santacreu⁶⁸⁸.

⁶⁸⁷ El informe iba acompañado de perfiles personales de los siguientes accionistas y consejeros: Francisco Aizcorbe (“de positiva adhesión al Régimen”), Antonio Domingo Francás (“carlista-javierista”), Antonio Bascompte (“con concomitancias con elementos de las comisiones obreras”), Federico Bayer Ros (a quien “políticamente no se le puede conceptuar”), Juan Casablanca (cercano a la familia Franco y “dentro de una línea de identificación total con el actual Régimen”), Carlos de Gomar (al que “no se le conocen actividades políticas”), José Riba Ortínez (“de sentimientos capitalistas y espíritu conservador” y “respetuoso con el Régimen y con sus Instituciones básicas”), Teresa Roca Formosa (relacionada con la Asamblea General de Cataluña) y José María Santacreu Margenet (“Políticamente se le considera amigo del Ex-Ministro Fraga Iribarne y de Joaquín Ruiz Jiménez”. Este informe se encuentra en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975) (Fomento de la Prensa Tradicionalista, Documentos e Informes).

⁶⁸⁸ Quizás fuera la misma fuente que citaba el delegado provincial en su informe de 22 de noviembre de 1973; en el que afirmaba haber obtenido los datos confidenciales de “uno de los accionistas, al parecer resentido por la actitud de algunos miembros del Consejo”. Recuérdese también que la presencia de Pujol en la empresa había sido destapada por una denuncia anónima enviada a la DGP en 1971.

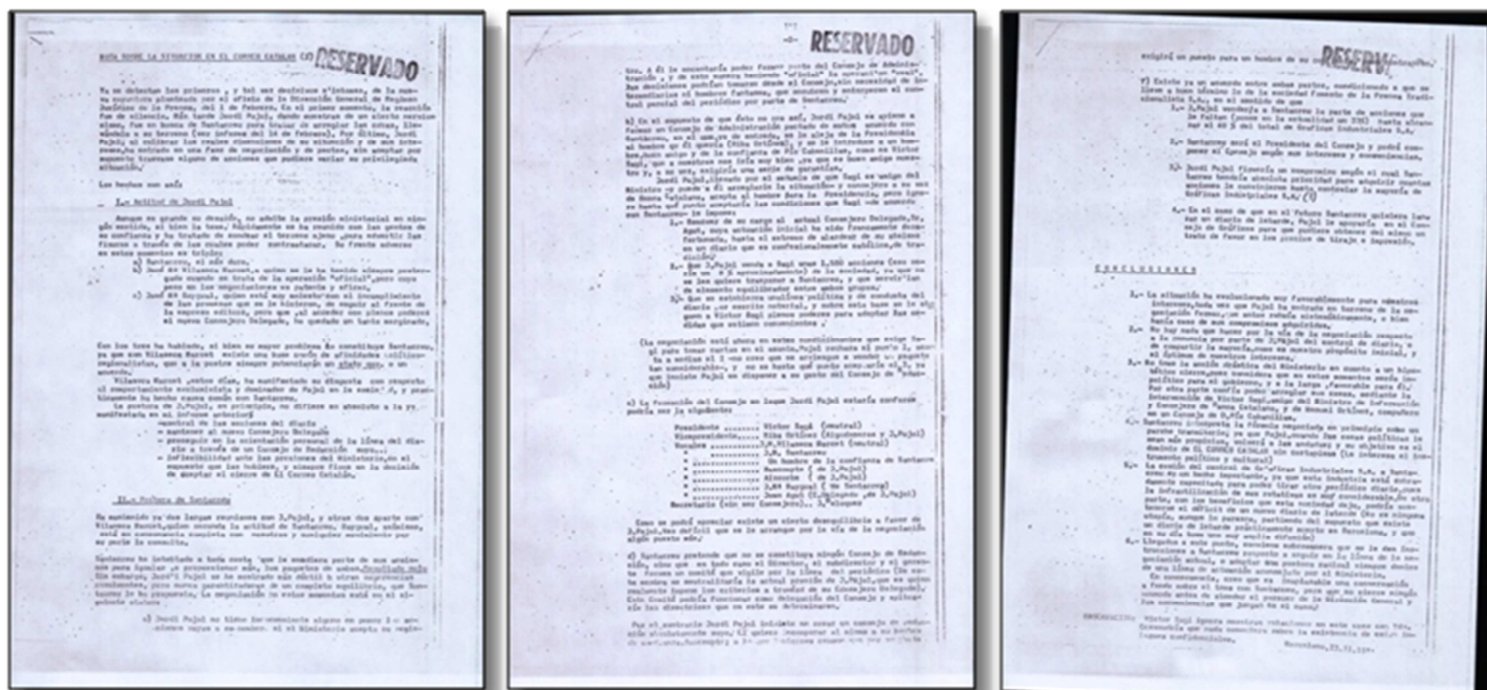
Tanto la tipografía como el tono y estilo de los escritos de este confidente son muy diferentes a los habitualmente empleados por los delegados provinciales en sus informes. Por otra parte, la minuciosidad de los datos aportados restringe su procedencia a alguien presente en los órganos de la empresa y conocedor de todas las posiciones que en ella confluían. En algunos de sus informes, por último, el autor da algunas pistas de su autoría. El 23 de febrero, por ejemplo, acaba su informe con la siguiente observación: “Victor Sagi [de quien decía ser buen amigo unas líneas antes] ignora nuestras relaciones en este caso con Vds. Convendría que nada conociera de estos informes confidenciales”. Y algo más claramente en su siguiente informe: “[...] sin nadie de la confianza de Santacreu (y el miedo principal estimo que lo tienen conmigo) en el Consejo de Redacción se manejarán las cosas a su antojo [...]”. De ahí que podamos colegir que el confidente pertenecía a dicho Consejo.



En su primer escrito, fechado el 23 de enero, el confidente advertía de la lucha interna que se estaba librando en la empresa entre un grupo de gente cercana al Régimen encabezado por José María de Santacreu y otro liderado por Jordi Pujol (de quien se adjunta información personal) a través de testaferros y "cuya filiación y actividades resultan totalmente contrarias y hostiles al Régimen, con clara militancia en la línea del autonomismo y separatismo catalán". Al día siguiente, otra nota clasificada como

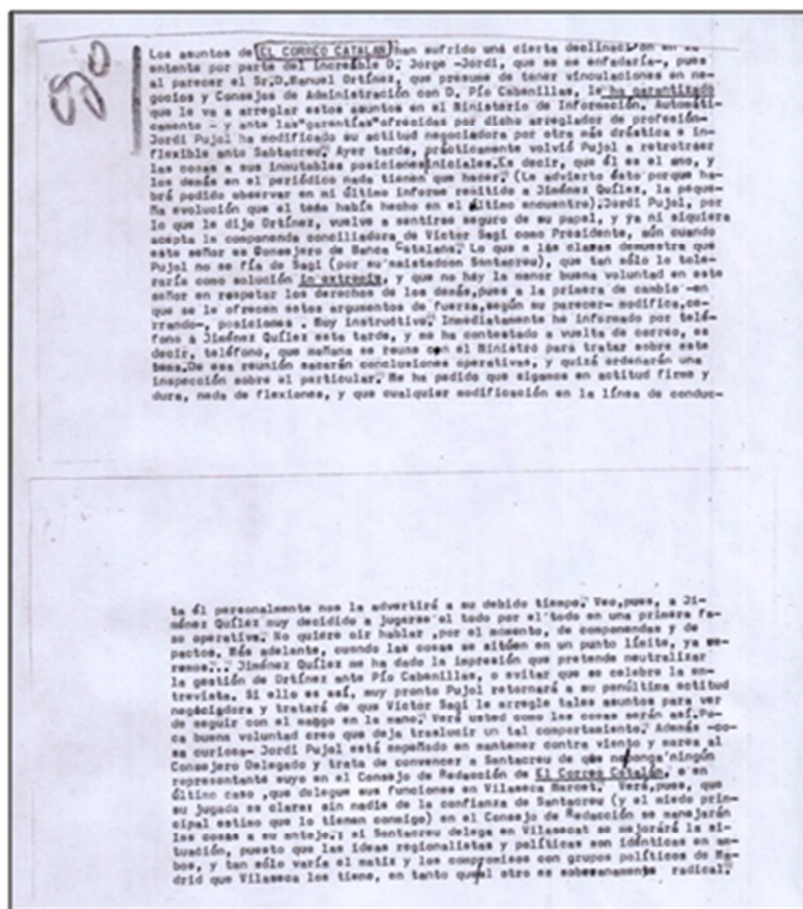
reservada recomendaba un plan de intervención para evitar el control catalanista de *El Correo Catalán*. El plan pasaba por sondear a José María Baygual, Francisco Baygual, y Domingo Valls y presionar a Francisco Aizcorbe para corroborar la presencia de Jordi Pujol en la empresa a través de personas interpuestas y "la realidad ficticia del accionariado". Esto permitiría revocar los traspasos de acciones del otoño de 1973, que habían procurado la mayoría accionarial a los testaferros de Pujol: según el informe, "si se utiliza hábilmente el sistema de presión sobre estos señores" [se refiere a los Baygual y Valls], el MIT podría lograr que invalidaran la venta de sus acciones y que éstas pasaran a manos de José María de Santacreu. La nota adjunta un listado de accionistas de Fomento de la Prensa Tradicionalista con marcas manuscritas sobre los "controlados de alguna manera" por Pujol (señalados con un guión) y sus fiduciarios (señalados con una cruz).

El 1 de febrero de 1974, la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa iniciaba la presión sobre Pujol. Ese día, Fomento de la Prensa Tradicionalista recibía un oficio por el que se le comunicaba la suspensión provisional de la inscripción registral de la compraventa de acciones realizada a finales de 1973. La DGRJP advertía así a la empresa de la investigación de las transacciones, que no serían admitidas en el REP hasta que quedara probada su legalidad. Unos días después, el 9 de febrero, José María Santacreu se reunía en su despacho con Jordi Pujol, al que proponía el control conjunto del diario. Según otro informe de 14 de febrero elaborado por el mismo confidente que los anteriores, Pujol se niega ceder y ni siquiera acepta negociar. El 23 de febrero, otro escrito del mismo autor se felicitaba por el éxito de la maniobra administrativa: “Ya se detectan [afirma] los primeros, y tal vez decisivos síntomas, de la nueva coyuntura planteada por el oficio de la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa, del 1



de febrero”. A Santacreu parecía habersele unido José María Vilaseca Marcet, molesto y cada vez más distanciado de Pujol, quien se habría visto finalmente en la obligación de negociar el control conjunto del diario con José María de Santacreu: “Llegados a este punto [recomendaba el confidente] conviene sobremediano que se le den instrucciones a Santacreu respecto a seguir en la línea de la negociación actual o adoptar una postura radical siempre dentro de una línea de actuación aconsejada por el Ministerio”.

Mientras se contactaba con Santacreu, la DGRJP mantenía la presión sobre Pujol: el 27 de febrero de 1974, el organismo hacía llegar un télex a Fomento de la Prensa Tradicionalista en el que instaba a la empresa a enviar las acreditaciones de las transmisiones de acciones realizadas mediante los vendís intervenidos por los agentes de cambio y bolsa. Sería el último acto administrativo de presión. Entre febrero y marzo de 1974 la situación daría un vuelco a favor del banquero catalanista y en contra de los intereses de la Administración: un nuevo informe elaborado por el confidente y en este caso sin fecha, se lamentaba de que “Los asuntos de el CORREO CATALÁN han sufrido una cierta declinación”: al parecer, Manuel Ortínez, líder algodónero y próximo a Pío Cabanillas, había garantizado a Pujol “arreglar estos asuntos en el Ministerio de Información”. Como consecuencia, en palabras del informe: “volvió Pujol a retrotraer las cosas a sus inmutables posiciones iniciales. Es decir, que él es el amo, y los demás en el periódico nada tienen que hacer”. Pujol rechazaba incluso la solución de compromiso de nombrar presidente de la empresa a Victor Sagi Vallmitjana, publicista amigo de Manuel Fraga y Pío Cabanillas, antiguo



propietario de Ilustración, S.A y consejero de Banca Catalana. Pujol auparía, en cambio, a la presidencia a José Riba Ortínez⁶⁸⁹, quien no dejaría de acudir —según el último informe archivado en el expediente de la empresa en el REP y fechado el 6 de marzo de 1974— a sondear la postura del MIT ante su designación. Desde el Ministerio se le señalaría que “la primera iniciativa que debía tomar la empresa periodística debía ser

⁶⁸⁹ Junto a él, se sentaba en el CA en 1974 como consejero delegado otro hombre de Pujol, Juan Agut Rico. Eran también consejeros Federico Bayer Ros, Francisco Aizcorbe Bausili y José María Vilaseca Marcet, todos ellos testaferros de Jordi Pujol. Además de José María Santacreu y Francisco Baygual Brutau.

clarificar la situación en el seno de la empresa, de tal forma que se transparentasen las auténticas personas que ejercían de hecho el control del periódico [...]”.

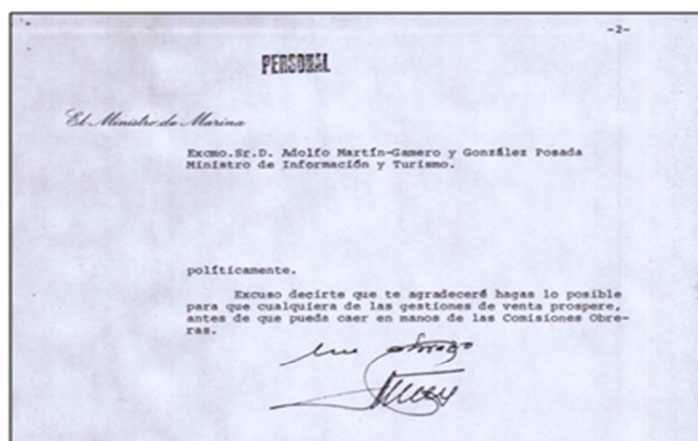
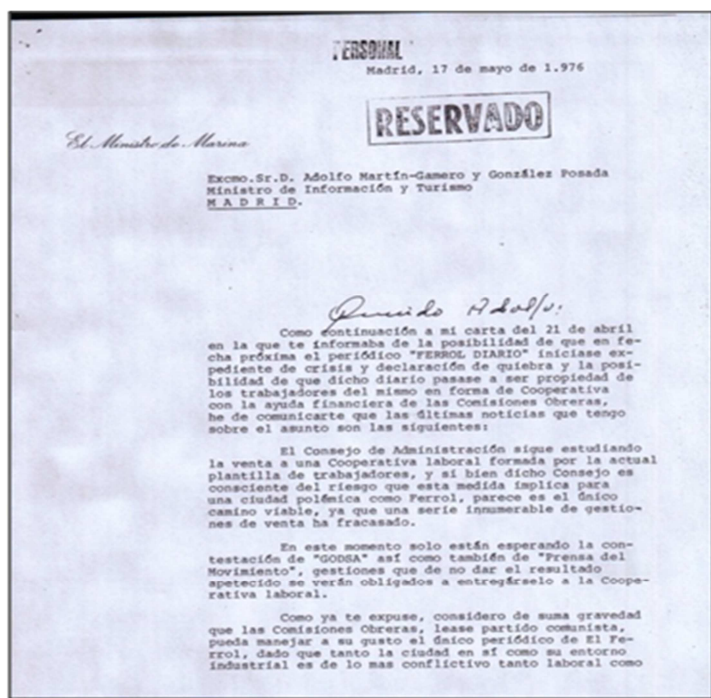
La designación de Riba Ortínez como presidente de Fomento marca la victoria de Jordi Pujol sobre el Ministerio, cuya capacidad de presión había quedado muy mermada por la coyuntura política de los primeros meses de 1974. El instrumento de coacción más temible con que contaba el MIT, la posibilidad de cancelación de la empresa en el REP, quedaba casi descartado a principios de 1974. Pujol parecía ser bien consciente de que una intervención administrativa en este sentido habría desbaratado las esperanzas aperturistas generadas por el nuevo Gobierno de Arias y enunciadas en el llamado “espíritu del 12 de febrero”. Ello, unido a la presencia de Cabanillas al frente del MIT, colocaba al líder catalanista en una posición de fuerza, que le permitió incluso hacerse visible en el accionariado de Fomento en mayo de 1974. Desde entonces y hasta finales de 1975, Pujol aparecería en la relación de accionistas de la empresa periodística como titular de 3.113 acciones, el 17’29% de la empresa; porcentaje al que habría que añadir los títulos que mantuvieron algunos de sus antiguos fiduciarios y testaferros. Por si fuera poco, en enero de 1975, Pujol sustituía a Francisco Baygual en el Consejo de Administración. José María de Santacreu, por su parte, con un 11’67% del capital y relegado a una posición minoritaria, acabaría vendiendo sus participaciones para centrar sus esfuerzos en la asunción del control de Barcelonesa de Publicaciones, S.A., editora del *Diario de Barcelona* y propiedad de unos empresarios más permeables, como vimos, a las presiones del MIT.

A pesar del fracaso de las maniobras y presiones administrativas, el caso de Fomento de la Prensa Tradicionalista evidencia que la Administración no había dejado de preocuparse por la titularidad de las empresas periodísticas españolas en los últimos años del Régimen. Tampoco dejará de hacerlo tras la muerte de Franco, como evidencia su mediación en la operación de venta de *Ferrol Diario*, negociada durante el primer Gobierno de la monarquía y examinada aquí a modo de epílogo.

Ferrol Ediciones, S.A. estaba controlada de forma mayoritaria desde 1971 por el empresario orensano Enrique Botas Blanco, quien presidía el CA y poseía un 5’47% del capital de forma directa y otro 50’75% de forma indirecta a través de su empresa Botas Blanco, S.A. A principios de 1976, la fuerte competencia de *La Voz de Galicia* y la crisis permanente del diario amenazaban con una quiebra inminente, por lo que Ferrol Ediciones se vio abocada a iniciar las negociaciones de venta del diario, que se extenderían hasta 1980. José Botas Piñón, hijo de Enrique Botas y vicepresidente de la empresa, recuerda haberse reunido a finales de los setenta con, entre otras personas, Agustín Rodríguez Sahagún, vinculado a la Unión de Centro Democrático (interesado al

parecer en formar un grupo de prensa afín al incipiente partido) y con Juan Pablo de Villanueva, ligado a las empresas periodísticas propiedad del entramado CINISA-Banco Atlántico-Bankunión⁶⁹⁰. Unos años antes, en 1976, dos sociedades de muy distinta naturaleza se habían interesado por el diario: por un lado, GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, S.A.), una suerte de consultora vinculada a Manuel Fraga y constituida para asesorar a las formaciones políticas que surgieran al calor de la Ley de Asociaciones de Arias Navarro; de otro, una Cooperativa laboral formada por los trabajadores de *Ferrol Diario*.

A pesar de que, según el entonces gerente de Ferrol Ediciones, la Cooperativa nunca llegó a presentar una oferta firme por el diario⁶⁹¹, el Gobierno vio tras esta iniciativa una posible infiltración del sindicato Comisiones Obreras y del Partido Comunista en el panorama de la prensa española. El 17 de mayo de 1976, el ministro de Marina, el ferrolano Gabriel Pita da Veiga⁶⁹², escribía una carta al ministro de Información y Turismo, Adolfo Martín Gamero, en la que le alertaba de tal posibilidad:



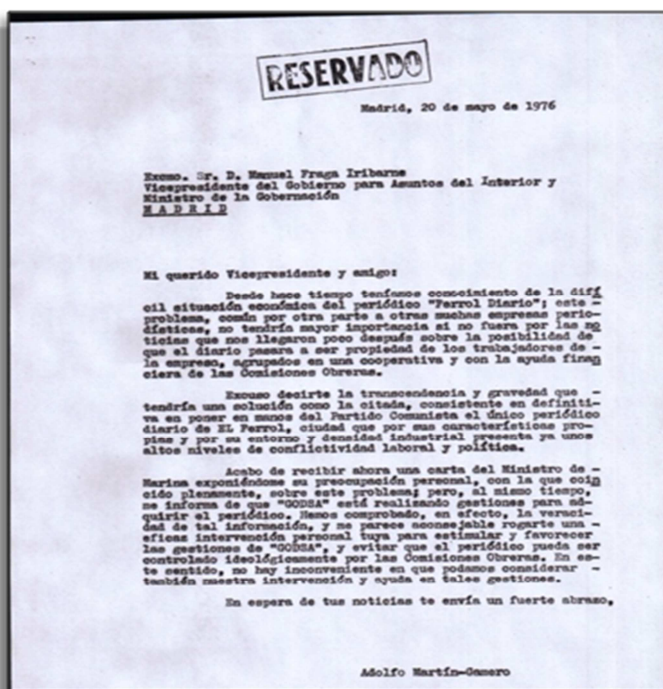
Como ya te expuse [decía en la carta] considero de suma gravedad que las Comisiones Obreras, léase partido comunista, pueda manejar a su gusto el único periódico de Ferrol, dado que la ciudad en sí como su entorno industrial es de lo más conflictivo tanto laboral como políticamente.

⁶⁹⁰ Testimonio de José Botas Piñón, vicepresidente en los años setenta de Ferrol Diario, S.A., en entrevista realizada el 17 de octubre de 2012.

⁶⁹¹ Testimonio de Delfín Fidalgo, gerente de Ferrol Ediciones, S.A. desde la fundación hasta el cierre de la empresa, en entrevista realizada el 17 de octubre de 2012.

⁶⁹² Además de su origen ferrolano, el hecho de que fuera Pita da Veiga quien alertara a Martín Gamero de la operación, pudo deberse a la presencia de tres militares en el accionariado y consejo de Ferrol Ediciones, S.A.: José Agulló Naya, José Mera Quintana y el marino Constantino Lobo Franco.

Adolfo Martín Gamero respondió a la demanda de intervención de Pita da Veiga con dos



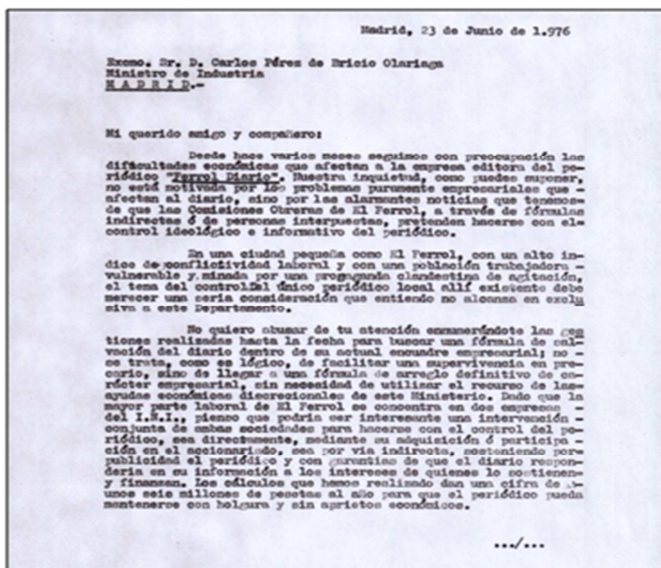
gestiones personales. El 20 de mayo, escribía a Manuel Fraga (entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Gobernación) solicitándole “estimular y favorecer las gestiones de GODSA”. Fraga, sin embargo, contestaría al día siguiente con este escueto mensaje:

Querido Adolfo:

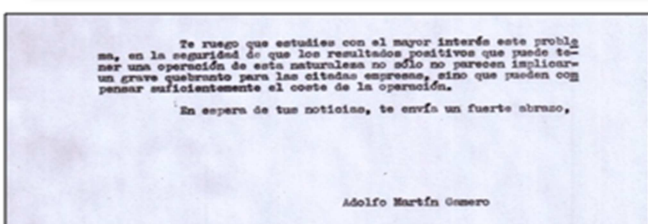
En relación a tu carta de fecha 20, es cierto que mis amigos han mantenido algunos contactos, pero la situación económica del diario es tan mala que todavía hemos avanzado poco. Te tendré informado al respecto.

Ante las malas perspectivas que ofrecía la

solución de GODSA, Martín Gamero acudió al ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio Olariaga. El 23 de junio de 1976, el ministro de Información y Turismo proponía a Pérez de Bricio que fueran las dos empresas de Ferrol participadas por el INI (los



astilleros Astano y Empresa Nacional Bazán) las que sostuvieran el diario, bien comprándolo, bien mediante la inserción de publicidad. Fue ésta última solución de financiación publicitaria la que finalmente pareció adoptarse: José Botas Blanco recuerda haber recibido, en aquellos años, el encargo de realizar varias campañas publicitarias para Empresa Nacional Bazán y, sobre todo, para



el astillero Astano. Ferrol Ediciones, S.A. se mantuvo en poder de sus accionistas tradicionales hasta 1980, cuando fue comprada por varios empresarios encabezados por el

marino Juan José Fernández García, por un grupo de trabajadores del diario, y por personas vinculadas a la UCD ferrolana a través de Miguel Maristany⁶⁹³.

Las gestiones personales realizadas por Martín Gamero para evitar la compra de *Ferrol Diario* por una Cooperativa de trabajadores controlada, a juicio de la Administración, por Comisiones Obreras, demuestran que el MIT no había abandonado sus maniobras de intervención sobre el sistema de prensa tras la desaparición de Franco. Quizás como reminiscencia del pasado, la preocupación administrativa por conocer y controlar la propiedad de las empresas periodísticas españolas se mantuvo, al menos, hasta el primer Gobierno de la monarquía.

⁶⁹³ Según el testimonio de Juan Fernández García, en entrevista realizada el 17 de octubre de 2012.

7. La cofinanciación y sanción de la empresa periodística privada

En las páginas precedentes ha ido dibujándose un modelo de control de las empresas periodísticas privadas basado en la circunscripción de su acceso al sistema de prensa y en la intervención en su propiedad y gobierno corporativo a través de su regulación, vigilancia e injerencia. No fueron éstas, sin embargo, las únicas maniobras pergeñadas por el tardofranquismo para someter a las empresas. Entre 1966 y 1975, el Régimen trató también de domeñarlas condicionando su vida económica; ya aumentando sus ingresos y aliviando sus costes mediante ayudas, desgravaciones y subvenciones; ya agravando sus gastos a través de multas y suspensiones. Todas estas actuaciones orientadas al control de la empresa mediante la intervención en su cuenta de resultados constituyen una última función estatal que viene a completar el modelo tardofranquista de control de la prensa y que, basándonos en Zallo (1988: 8), hemos denominado de “cofinanciación y sanción”.

La Administración tardofranquista intervino en los ingresos de las empresas periodísticas⁶⁹⁴ mediante la regulación de la publicidad comercial y, sobre todo, mediante la concesión de ayudas directas e indirectas. Si aquella tuvo como nota esencial la prohibición de intereses cruzados entre los sectores periodístico y publicitario (prohibición que sería, sin embargo, vulnerada en la práctica con el consentimiento del MIT), la financiación directa e indirecta estuvo marcada por la opacidad y la discrecionalidad. Tanto la falta de transparencia, como la ausencia de criterios distributivos reglados, permitieron que la financiación estatal se supeditara en muchos casos al control administrativo de las empresas beneficiarias, e incluso en algún tipo de ayudas directas, a la publicación de informaciones y al sostenimiento de líneas editoriales favorables al Gobierno. Las pocas ayudas que se repartieron, en cambio, de acuerdo con criterios prefijados y públicos, tendieron por lo general a favorecer a las empresas más importantes e influyentes del sistema.

⁶⁹⁴ Es preciso hacer notar que, debido a la regulación de la empresa periodística establecida en la LPI, los ingresos de explotación de la empresa periodística fueron muy similares a sus ingresos totales (Nieto, 1973: 130). Durante el tardofranquismo, los ingresos de explotación básicos de las empresas fueron dos: las ventas al número y por suscripción; y la publicidad. El artículo 19 de la Ley Fraga impedía a las empresas periodísticas ejercer cualquier actividad que no tuviera relación directa con la informativa. Ello suponía una restricción *de facto* de las posibilidades de diversificación de la empresa, que únicamente podría extender su actividad a otras ramas del sector informativo. De ahí que, en la mayor parte de los casos, la actividad fundamental de las empresas periodísticas que operaban en el sector de la prensa se circunscribiera a la edición de publicaciones periódicas; y de ahí, por tanto, que los ingresos que tal actividad exclusiva generaban correspondieran con pocas variaciones a los ingresos totales de la empresa.

Por otro lado, la Administración condicionó los gastos de explotación y extraordinarios de las empresas⁶⁹⁵ a través de la regulación salarial y, sobre todo, de la imposición de sanciones pecuniarias y de suspensiones temporales, tanto por motivos políticos como por razones económicas y técnicas. Los periodistas se beneficiaron, durante todo el franquismo, de unos salarios mínimos que, aunque bajos, fueron menos exigüos que los fijados para otros sectores; con ellos, el Régimen parecía querer compensar de algún modo el control de la profesión ejercido a través del monopolio de la formación, de tribunales y jurados *ad hoc* y del Registro Oficial de Periodistas. Con todo, fueron las sanciones, la intervención más onerosa que afectó a la vida económica de las empresas de prensa. En 1966, la Ley Fraga otorgó a la Administración unos recursos coercitivos similares a los que venía disponiendo desde el final de la Guerra Civil. El “terrorífico” artículo 69 fijó dos tipos de sanciones en función de la gravedad de la infracción cometida por empresas, periodistas y/o publicaciones: unas multas que podían llegar a las 250.000 pesetas y que gravaron los gastos extraordinarios de las editoras; y unas suspensiones que les privaron temporalmente de sus ingresos de explotación. Por si fuera poco, la indeterminación legal de los supuestos constitutivos de infracción abrió la puerta a la discrecionalidad en la aplicación de las penas, agravando la capacidad coactiva de la Administración y generando a las empresas una inseguridad e indefensión que la posibilidad de recurso contencioso-administrativo sólo alivió en parte.

7.1 La cofinanciación estatal de la empresa periodística privada

Según un informe preparatorio del que habría sido el IV Plan de Desarrollo, durante la década de los sesenta el Estado franquista financió a las empresas periodísticas con los siguientes tipos de ayudas: (a) con tarifas telefónicas, telegráficas y postales especiales; (b) con compensaciones por consumo de papel prensa; (c) con primas a la inversión; (d) con subvenciones directas a fondo perdido; (e) con el abono de espacios para informaciones de interés general pagados según las tarifas publicitarias de cada publicación; y (f) con la concesión de créditos preferentes para la adquisición de maquinaria (Presidencia del Gobierno, 1976: 28). A todos ellos hay que añadir (g) los precios políticos de los despachos de la agencia de noticias estatal y, durante la primera mitad de los setenta, (h)

⁶⁹⁵ Las sanciones pecuniarias se incluyen en la partida de gastos extraordinarios de las cuentas de resultados, por más que la frecuencia con se impusieron en algunos casos las convirtieran en gastos no precisamente extraordinarios. Los gastos de explotación, por su parte, se componían básicamente de inversiones y costes; y estos últimos de gastos de personal; gastos derivados de la obtención de información; gastos de materias primas (especialmente de papel prensa); gastos administrativos; y gastos de distribución.

las desgravaciones fiscales a la importación de papel prensa, e (i) las subvenciones destinadas a la optimización de los sistemas de distribución.

Todas estas ayudas pueden clasificarse en dos categorías básicas: las directas y las indirectas. Entendemos por ayudas directas todas aquellas que el Estado ingresa en las empresas periodísticas y que por tanto repercuten de modo inmediato en su economía; mientras que consideramos como indirectas todas aquellas medidas que pueden favorecer a la empresa periodística, pero que no tienen un efecto inmediato sobre su cuenta de resultados, así como, sobre todo, aquellas sumas que el Estado deja de percibir de las empresas (García Labrado, 1975: 43; Nieto, 1973: 212). Basándonos en la clasificación de García Labrado completada por la aportación de Nieto (*Ibídem*) y las partidas antedichas, podemos establecer los siguientes tipos generales de ayudas directas e indirectas:

Ayudas Directas	Ayudas Indirectas
<ul style="list-style-type: none"> - Compensaciones por consumo de papel prensa - Subvenciones para reducir costes de distribución - Subvenciones para la modernización empresarial - Subvenciones para la difusión de prensa en el extranjero - Créditos diversos - “Publicidad redaccional” y fondos de reptiles - Contratación de servicios técnicos oficiales 	<ul style="list-style-type: none"> - Rebajas del precio del papel prensa - Reducción de tarifas telefónicas, postales y telegráficas - Reducción de tarifas de transportes - Desgravaciones y exenciones fiscales - Desgravación fiscal a las inversiones - Precios políticos de la agencia estatal de noticias - Subvenciones a instituciones corporativas de la prensa - Beneficios económicos para periodistas

Sólo algunas de ellas se harán efectivas, de todos modos, durante el tardofranquismo; y únicamente en 1963 y 1975 se aclararán sus cuantías totales, sin especificar su distribución entre las empresas.

TABLA 6: Ayudas directas e indirectas a la prensa en 1965 y 1973 (en ptas.)

Ayudas	1965	1973
Tarifas telefónicas especiales	17.909.700	49.220.038
Tarifas telegráficas especiales	450.000	2.942.000
Tarifas postales especiales	241.804.600	1.355.152.00
Compensaciones directas a empresas periodísticas	359.870.290	429.609.744
Compensaciones a fabricantes de papel prensa	60.486.880	136.000.000
Ayudas a periodistas y asociaciones profesionales	14.544.472	
Exenciones fiscales		205.500.000
Total	695.065.942	2.178.423.782

Fuente: Presidencia del Gobierno, 1976: 28, 37

La actuación de la Administración se caracterizó, pues, en este ámbito, por la opacidad y la discrecionalidad de los repartos; especialmente en el caso de las ayudas directas, en las

que se incluyeron, desde los años setenta, pagos directos por la publicación de artículos favorables al Gobierno y muy probablemente fondos de reptiles. La distribución de las pocas ayudas cuyo reparto se rigió por criterios preestablecidos, reglados y publicitados, tendió indefectiblemente –con la única aunque notable excepción de las primas directas por la compra de papel prensa– a favorecer a las grandes empresas del sistema.

Las formas de ayuda practicadas [hasta 1975], lejos de apoyar el pluralismo, fomentan la concentración al ser las grandes empresas las más beneficiadas; y la falta de normas objetivas, la discrecionalidad de su reparto final en manos gubernamentales así como la oscuridad sobre su destino final, caracterizan varias fórmulas de esta ayuda como un nuevo y poderoso instrumento de presión política de los Gobiernos sobre las empresas editoras (Bustamante, 1982: 136).

Al menos sobre todas aquellas, huelga decirlo, admitidas en el sistema de prensa a través de la inscripción en el REP; pues, de acuerdo con el artículo 32 de la LPI, sólo tras la inscripción registral podían acceder éstas a las ayudas (v. *infra*). El legislador condicionaba así la solvencia económica de las empresas periodísticas al conocimiento administrativo de sus propietarios, socios, directivos, empleados, etc. De este modo, la instrumentalización política de las ayudas a la prensa no vino dada únicamente por la opacidad y discrecionalidad (y más que probable iniquidad) de su distribución; vino definida, además, por su circunscripción a aquellas empresas autorizadas y controladas a través del REP. También pues en este ámbito, supeditó la Administración la viabilidad del sector a su control.

7.1.1 La cofinanciación indirecta

El artículo 32 de la Ley de Prensa e Imprenta anunciaba la concesión de unos “beneficios” que, en la práctica, las empresas periodísticas sólo percibieron en parte.

Una vez inscrita en el Registro [disponía la Ley] la Empresa periodística participará de los beneficios de carácter tributario, económico, postal, de distribución, comunicación y cuantos otros análogos se otorguen. Siempre que estos tengan finalidad compensatoria, directa o indirecta, la Administración aprobará los precios de venta o prestación de servicios informativos.

Desde la entrada en vigor de la Ley y hasta 1975, las empresas privadas de prensa debieron contentarse con apenas dos tipos de exenciones tributarias: las aplicadas a la importación de papel prensa extranjero (desde 1971) y las destinadas a fomentar la concentración empresarial, de las que prácticamente no hicieron uso (v. 4.2.3). Ningún otro beneficio fiscal les fue aplicado, de modo que, en 1976, Presidencia del Gobierno no podía sino constatar “[...] el hecho de que los beneficios de carácter tributario

proclamados en el artículo 32 de la vigente L.P.I. no se han establecido para las empresas de prensa de propiedad privada” (1976: 29). La alusión expresa a las empresas de “propiedad privada” revela, por lo demás, la diferente situación que vivían las empresas estatales y, en concreto, las integradas en la Cadena de Prensa del Movimiento, que sí venían gozando de un régimen fiscal privilegiado desde 1941⁶⁹⁶; además de recibir un trato de favor de la Administración en cuestiones como el reparto de cupos de papel y, por supuesto, en la censura (Barrera, 1995a: 63).

Privadas de exenciones fiscales, las empresas privadas de prensa fueron financiadas de forma indirecta por la Administración a través de tres mecanismos. (a) Mediante diversos sistemas de ayuda al consumo de papel prensa; desde la fijación de cupos de papel tasado a precios políticos, entre 1936 y 1962; hasta la aplicación de exenciones fiscales a la importación de papel prensa, desde 1971. (b) Mediante la aplicación de tarifas telefónicas, telegráficas y postales rebajadas. Y (c) mediante descuentos en los servicios de la agencia estatal de noticias, que redundaron en un descenso generalizado de las tarifas del resto de agencias y, por tanto, de los costes de obtención de información.

7.1.1.1 Las ayudas al consumo de papel prensa

El papel prensa suponía, para los diarios de información general de los años sesenta y setenta, no sólo la materia prima más gravosa⁶⁹⁷, sino el gasto de explotación más elevado. A principios de los años setenta, suponía en torno al 24’6% del total de gastos de los periódicos españoles; de modo que, según estimaba entonces la Administración, España era uno de los países europeos en los que el coste del papel repercutía de modo

⁶⁹⁶ El 6 de noviembre de 1941 se había aprobado por Ley (BOE de 16 de noviembre) la equiparación tributaria de FET de las JONS y el Estado, justificada a partir del principio falangista de identificación entre Estado y Partido: “Falange Española Tradicionalista y de las JONS [se arguye en el preámbulo] no sólo encierra en sí el cuerpo de doctrina del Movimiento Nacional, sino que constituye el medio por el cual el Estado se vivifica con los principios del mismo. Ello implica la imposibilidad de establecer una diferenciación sustancial entre las actividades del Estado y las del Partido que, en definitiva, aparecen fusionadas en una íntima comunidad de aspiraciones y ambiciones”.

La Ley —que venía precedida de la exención tributaria para el Movimiento acordada por el Consejo de Ministros el 27 de septiembre de 1941— se aprobaba apenas un año después del traspaso de los bienes de prensa e imprenta incautados por el Ministerio del Interior a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Partido (Ley de 13 de julio de 1940 [BOE de 23 de julio]), verdadero acto legal fundacional de la Cadena de Prensa del Movimiento. Al quedar así, en 1941, equiparados a efectos tributarios FET y Estado, las empresas de ambos pasaban a gozar de idénticas exenciones y bonificaciones y, en definitiva, de un régimen fiscal propio y privilegiado con respecto al resto de empresas periodísticas con cabida en el sistema.

⁶⁹⁷ Según las estimaciones realizadas por Alfonso Nieto para principios de los años setenta, el resto de materias primas (tintas, plomos, materiales de fotograbado, fotocomposición y huecograbado, cartones de esterotipia, etc.) suponía en torno al 2% y el 5% para los diarios impresos en tipografía, y en torno al 6% y 12% para los de impresión mixta (huecograbado y tipografía) (Nieto, 1973: 179).

más elevado en los costes productivos totales de los diarios (Presidencia del Gobierno, 1976: 24). Apenas unos años después, en 1975, estos costes se valoraban ya en torno al 35% para los diarios, y el 44% para las revistas (Tallón, 1978: 48).

TABLA 7: Costes de explotación de la prensa española en 1975

Costes	Diarios	Revistas
Papel	35%	44%
Personal	32%	23%
Distribución	3%	4%
Información	3%	2%
Tinta	3%	4%
Impresión y otros	24%	23%

Fuente: Tallón, *ibídem*.

Tanto de su importancia como de su peso en las cuentas de resultados se sirvió la Administración para convertir el papel prensa en un instrumento más de intervención y control de las empresas periodísticas. Durante el tardofranquismo, se articularon dos regímenes de concesión de ayudas al pago de la materia prima. Entre 1962 y 1971 —casi coincidiendo con el periodo ministerial de Manuel Fraga—, se adoptó un sistema de ayudas directas inédito, basado en la distribución de compensaciones o primas a las empresas en función del consumo de papel. En 1971, al tiempo que el poder tecnócrata alcanzaba su esplendor, Alfredo Sánchez Bella instauraba un modelo de financiación indirecta mediante la liberalización de los precios y la concesión de exenciones tributarias a la importación. Se volvía así a la financiación indirecta que había dominado durante casi todo el franquismo, con la única excepción del paréntesis de los sesenta⁶⁹⁸.

Desde finales de los años treinta y hasta 1962, el Régimen había promovido un modelo de ayudas indirectas a partir de la fijación de cupos de papel tasados administrativamente a precios inferiores a los de mercado. Había sido, precisamente, el acceso a dichos cupos de papel protegidos lo que había permitido al MIT en 1958 convertir la aparente opcionalidad de la inscripción en el REP en una obligación ineludible para competir en el sector de la prensa. A este sistema de cupos y precios políticos es preciso atender, antes de nada, no sólo por ser el que más tiempo se mantuvo en vigor, sino por constituir el antecedente directo del modelo tardofranquista de ayudas al consumo de papel prensa.

⁶⁹⁸ Aunque, como vemos, una de las modalidades de ayuda al consumo de papel fue de tipo directa, sólo estuvo vigente durante nueve años, frente a los treinta de régimen de ayudas indirectas. De ahí que hayamos incluido el análisis de las ayudas al papel prensa en el apartado de cofinanciación indirecta.

7.1.1.1.1 Las ayudas al consumo de papel hasta 1962: la fijación de precios políticos

Hasta la llegada de Manuel Fraga al MIT, a principios de los sesenta, la Administración empleó dos métodos de control del acceso de las publicaciones españolas al papel prensa: por un lado, se arrogó la función de determinar las medidas y extensión de las publicaciones; por otro, fijó las cantidades máximas de papel que correspondían a cada publicación, así como los precios que éstas habían de pagar por la materia prima. El reparto de los cupos de papel a precios políticos quedó sujeto a la discrecionalidad de la Administración, lo que —unido a las quejas y demandas de igualdad y no discriminación formuladas por varios procuradores durante el proceso de elaboración y tramitación de la LPI⁶⁹⁹— no invita a pensar precisamente en una distribución equitativa.

Ambas tácticas comenzarían a aplicarse desde 1936. A partir del 12 de septiembre de ese año, el Decreto 107 de la Junta de Defensa Nacional (BOE de 14 de septiembre), determinaba que todos los periódicos que se publicaran en la zona franquista debían reducir el promedio de su superficie en un treinta por ciento como mínimo. La merma, motivada evidentemente por la escasez de papel, se agravaría pocos meses después: el Decreto 94 de 4 de diciembre de 1936 (BOE de 9 de diciembre) establecía que “A partir del día 15 de los corrientes, todos los periódicos y revistas que se publiquen en el territorio reducirán el consumo semanal de papel empleado en los mismos en un cincuenta por ciento” (art. 1)⁷⁰⁰. Ambos decretos serían desarrollados por la Orden de la Junta Técnica del Estado de 13 de enero de 1938 (BOE de 17 de enero) que imponía una restricción aún mayor, de dos tercios de la superficie empleada en los últimos meses de 1937 (art. 1).

Las tres disposiciones venían a reducir la superficie (y por tanto el papel) fijada por los diarios de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. La situación cambiaría con la llegada de Ramón Serrano Suñer y su equipo de falangistas al aparato orgánico de prensa. El 19 de febrero de 1938, un mes después de la formación del primer Gobierno de Franco, una Orden del ministro del Interior determinaba que, en adelante, sería la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa la encargada de autorizar la superficie de los diarios. La medida sería ratificada dos meses después en la Ley de Prensa de 22 de abril, en virtud de la cual correspondía al Estado la fijación de la extensión de las publicaciones

⁶⁹⁹ Las quejas sobre la falta de equidad en el reparto se plasmaron en la enmienda presentada al artículo 32 de la LPI por Luis Coronel de Palma (enmienda num. 92), así como al artículo quinto por Luis Sánchez Agesta (enmienda num. 34). En ACD, leg. 2312, num. 4.

⁷⁰⁰ El Decreto preveía además sanciones de cinco mil pesetas a quienes incumplieran la restricción, e incluso la suspensión indefinida del periódico en caso de reincidencia (art. 3).

periódicas (art. 2). Un año después, otra Orden de 8 de febrero de 1939 (BOE de 14 de febrero) dictaminaba que todos los pedidos de papel para periódicos habían de obtener la conformidad de la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa. La Administración, por tanto, pasaba de restringir las cantidades de papel que cada publicación decidía emplear y la extensión que optaba por publicar, a fijar, de acuerdo con su propio arbitrio, dichas cantidades y extensiones. El cambio suponía un notable aumento de las potestades administrativas y un triunfo indiscutible de los postulados de la “familia” falangista, que en 1937 había defendido la facultad estatal de determinar las medidas de los diarios y su número de páginas⁷⁰¹.

Acabada la Guerra Civil, la escasez del papel permitió al Estado mantener bajo control su distribución entre las publicaciones españolas. La Orden de 25 de octubre de 1939 (BOE de 29 de octubre) señalaba al Ministerio de la Gobernación —y, dentro del mismo, a la Dirección General de Prensa— como el encargado de fijar los cupos de papel que podía consumir cada periódico. El precio que las publicaciones habían de abonar por dichos cupos quedaba, además, sometido a un tope máximo fijado por la Administración⁷⁰². Este panorama no varió substancialmente con la asunción por parte de la ACN de P de las competencias en materia de prensa: los acenepistas, bien es cierto, renunciaron a la distribución directa del papel prensa, que desde 1945 se realizaría por acuerdo entre productores y clientes a través del sindicato vertical (Tusell, 1984: 190-191); sin embargo, no dejaron de utilizar esos cupos como instrumento de castigo político a algunas publicaciones; como ocurrió, por ejemplo, con el diario *Abc*, que en diciembre de 1946 (coincidiendo con la ofensiva pro-monárquica y con la llegada a Estoril de Don Juan de Borbón) padeció una restricción temporal del suministro, lo que le obligó a emplear “papel extra” mucho más caro (Tusell, *op. cit.*: 203); una reprensión similar a la padecida por la revista catalana *Destino*, que fue obligada a reducir su frecuencia de aparición en 1947 como castigo por la publicación de un artículo (Chuliá, 2001: 68).

Más relevantes serían los cambios acaecidos en 1951, con el advenimiento de Gabriel Arias-Salgado al recién creado Ministerio de Información y Turismo. Desde entonces y hasta 1962, el MIT se encargaría de fijar los cupos de papel destinados a la

⁷⁰¹ En los artículos 10 y 11 respectivamente de su *Estatuto de Prensa*. En el preámbulo del Estatuto, estas atribuciones quedaban justificadas en los siguientes términos: “[...] ahora, la razón suprema de la guerra nos trae necesariamente la carestía de materias primas en la elaboración de papel que impone una selección y reducción de los periódicos apoyada, también, en la concepción Nacional Sindicalista del Estado, en el que es uno el pensamiento, uno el trabajo y el esfuerzo para la reconstrucción nacional”. *Estatuto de Prensa de FET de las JONS*, en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁷⁰² Véase, por ejemplo, el Acuerdo sin fecha (BOE de 21 de enero de 1942) de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria por el que se fijan los precios máximos del papel.

prensa española, así como el precio que ésta debía pagar por ellos. La Orden de 3 de octubre de 1951 (BOE de 6 de octubre) imponía un régimen especial para el papel prensa, al tiempo que liberalizaba el precio del resto de tipos de papel. De acuerdo con el artículo 2.d, la Administración fijaba un cupo protegido de 2.000 toneladas mensuales de papel prensa a un precio político de 6 pesetas por kilogramo. Desde entonces y hasta 1958, cuando se hará cargo de la distribución de cupos el Registro de Empresas Periodísticas, tanto las toneladas concedidas como los precios fijados experimentarán pocas variaciones, registrándose únicamente un leve incremento a partir de 1957.

TABLA 8: Cupos mensuales de papel y precios entre 1951 y 1957

Órdenes	Cupo mensual de papel (Toneladas)	Precio (ptas./kg.)
3 de octubre de 1951 (BOE de 6 de octubre)	2000	6
26 de enero de 1953 (BOE de 27 de enero)	2000	5'65
3 de mayo de 1954 (BOE de 5 de mayo)	2.500	5'75
11 de abril de 1957 (BOE de 15 de abril)	2.540 ⁷⁰³	6'33
27 de noviembre de 1957 (BOE de 28 de noviembre)	2.956 ⁷⁰⁴	6'5

Fuente: elaboración propia

En los primeros años sesenta y hasta la supresión de los cupos, los precios se mantuvieron en las 6'5 pesetas fijadas para 1958, aunque aumentó la cantidad de papel protegido:

TABLA 9: Cupos de papel y precios entre 1960 y 1963

Año	Cupo anual de papel (Toneladas)	Precio (ptas./kg.)
1960	35.480	6'5
1961	35.480	6'5
1962	37.500	6'5
1963 (primer semestre)	18.750	6'5

Fuente: Nieto, *op. cit.*: 173.

Este precio se encontraba, obviamente, muy por debajo del precio real de venta de la materia prima, que oscilaba a principios de la década entre las 10 y las 11 pesetas por

⁷⁰³ Este leve incremento de apenas 40 toneladas en el cupo venía impuesto para satisfacer, exclusivamente, las necesidades de papel para la impresión del Boletín Oficial del Estado.

⁷⁰⁴ La Orden de 27 de noviembre de 1957 establecía un cupo anual en vez de mensual de 35.480 toneladas para todo 1958 a un precio de 650 pesetas cada 100 kg.

kilogramo (Nieto, *ibídem*). De ahí que el Estado concediera a los fabricantes de papel un doble mecanismo para paliar las pérdidas que la rebaja pudiera acarrearles: por un lado, otorgaba a los productores beneficios fiscales dirigidos a abaratar la producción de papel⁷⁰⁵. Por otro lado, les autorizaba a compensar las pérdidas mediante un recargo sobre el precio de venta del resto de tipos de papel producidos⁷⁰⁶; recargo que se mantendría vigente hasta 1976, cuando, tras cinco años de reducción paulatina, acabaría por desaparecer⁷⁰⁷.

7.1.1.1.2 Las ayudas al consumo de papel durante el tardofranquismo

Desde 1962 y hasta el final de la dictadura, la Administración tardofranquista sustituyó el modelo de financiación indirecta anterior por dos nuevos tipos de ayuda al consumo de papel prensa: la concesión de primas y compensaciones directas, entre 1962 y 1971; y las exenciones fiscales a la importación, entre 1971 y 1975.

El cambio más relevante en el régimen de cofinanciación acontecía apenas dos meses antes de la llegada de Manuel Fraga al MIT. El 9 de mayo de 1962, una Orden ministerial (BOE de 10 de mayo) eliminaba cupos y precios políticos:

A partir del 1 de abril de 1963 quedan suprimidos los cupos de papel prensa de fabricación nacional y de importación para la prensa y se establece el régimen de libertad de precios para todos los suministros de ambas clases de papel (art. 1).

Los cupos eran sustituidos por primas o compensaciones otorgadas a los diarios en función de su consumo. Hasta su abrogación en 1971, los montos ascendieron a las siguientes cantidades:

⁷⁰⁵ Se establecían, por ejemplo, condiciones fiscales favorables a la importación de las materias primas necesarias para su producción, como el bisulfito blanqueado, o el esparto papelerero (art. 3.b y 3.c de la Orden de 3 de octubre de 1951).

⁷⁰⁶ Así, la Orden de 3 de octubre de 1951 concedía: “Cuando, como sucede en las circunstancias actuales los precios a que resulte el papel-prensa, nacional y de importación, rebasen el precio vigente para la compra del mismo por los periódicos, los industriales productores quedan autorizados para establecer un recargo sobre los precios de todos los tipos de papel y cartón que se lancen al mercado [...]”

Esta tasa había de fijarse a propuesta de los fabricantes al Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, al que correspondía su aprobación. La tasa quedaría fijada en 1960 en el 7'5% sobre el precio de venta en fábrica del resto de tipos de papel (Decreto 625/60 de 31 de marzo de 1960 [BOE de 11 de abril]); porcentaje que se rebajaría al año siguiente: el artículo 36 de la Ley 85/61 de Presupuestos Generales del Estado para el bienio 1962-1963, reducía el impuesto al resto de tipos de papel al 5%, que se mantendría hasta 1971.

⁷⁰⁷ El Decreto de 23 de julio de 1971 (BOE de 18 de septiembre) establecía una “supresión escalonada” del impuesto de compensaciones para los fabricantes de papel: el recargo, que desde 1961 había quedado fijado en el 5% del precio de venta en fábrica, se reducía al 4% para 1972; al 3% para 1973; al 2% para 1974; y al 1% en 1975. Desde 1976, quedaba suprimido el impuesto.

TABLA 10: Papel primado y compensaciones (1964-1968)

Año	Papel consumido primado (kg)	Compensación (Millones de pesetas)
1964	102.364.324	254'237.239
1965	108.726.402	252'107.337
1966	124.738.250	250'524.275
1967	129.942.702	250'503.052
1968	147.102.069	247'803.466

Fuente: Nieto, *op. cit.*: 170⁷⁰⁸.

TABLA 11: Compensaciones por consumo de papel (1969-1971)

Año ⁷⁰⁹	Compensación (Millones de pesetas)
1969	300
1970	317'149.000
1971	370

Fuente: elaboración propia

Manuel Fraga presume en sus memorias de haber cedido la distribución de las primas a las propias empresas periodísticas, que hubieron de efectuarla de acuerdo con criterios objetivos fijados por la Administración (Fraga, 1980: 77). La función recayó, en efecto, sobre el Grupo de Diarios del Sindicato Nacional de Prensa; la sección patronal del sindicato vertical, presidida por el consejero delegado de Edica, Mariano Rioja, y en la que se encontraban agrupadas las empresas de prensa⁷¹⁰. La patronal de diarios se atuvo, en la distribución de las primas, al régimen de proporcionalidad inversa fijado por el MIT, en virtud del cual, a mayor cantidad de papel consumido, menor compensación por kilogramo se percibía. Los primeros 75.000 kilogramos eran primados a razón de 6'928 pesetas por kilo; mientras que a partir de esa cantidad y hasta otros 75.000 kilogramos, la compensación descendía a 5'555 ptas./kg. De ahí en adelante, las primas

⁷⁰⁸ Los datos de la distribución de estas compensaciones entre los 112 diarios de información general hasta 1968, puede verse en Nieto, *ibídem*.

⁷⁰⁹ Las compensaciones quedarían fijadas por las siguientes disposiciones: para 1969, por el artículo 45 de la Ley 5/68 de Presupuestos Generales del Estado para el bienio 1968-1969, de 5 de abril de 1968 (BOE de 6 de abril); para 1970, por la Orden de 6 de mayo de ese mismo año (BOE de 21 de mayo); y para 1971, por la Orden de 21 de junio de 1971 (BOE de 9 de julio).

⁷¹⁰ En el capítulo quinto vimos cómo la admisión a este Grupo de Diarios del Sindicato Nacional de Prensa (y, por tanto, el acceso a las primas que el Grupo controlaba) fue empleado como un instrumento de presión sobre empresas periodísticas indeseadas en el sector. Según el testimonio de Manuel Martín Ferrand en entrevista personal, a finales de los sesenta la patronal de diarios denegó la entrada en la organización al diario *Nivel*, editado por la empresa periodística individual Julio García Peri. El pretexto aducido por Mariano Rioja fue, según Martín Ferrand, que el nuevo diario iba a imprimirse en *offset* y no en tipografía o huecograbado, como el resto de publicaciones.

descendían progresivamente hasta las 1'624 pesetas por kilogramo para la franja de mayor consumo.

TABLA 12: Criterio descendente de compensación del consumo de papel prensa

Franjas de consumo	Compensación
(kg)	(ptas./kg)
75.000	6'928
75.000	5'555
150.000	4'855
700.000	3'104
2.000.000	2'354
8.999.996	1'654

Fuente: Nieto, *op. cit.*: 171

Estas compensaciones fueron modificándose hasta 1971 en función del aumento de consumo de papel. Dicho aumento, unido a la congelación del monto total entregado en torno a los 250 millones hasta 1968 (véase tabla 11), determinó un descenso paulatino de las primas medias entregadas a cada publicación. Al contrario de lo que ocurriría con el resto de ayudas, la aplicación del criterio de proporcionalidad inversa favoreció, evidentemente, a las publicaciones que menos cantidad de papel consumían; y, por tanto, a los periódicos de menor tirada y difusión, y menos peso en el mercado.

Las primas, de todos modos, estaban lejos de ser una concesión graciosa de la Administración: de acuerdo con el artículo 32 de la LPI, su percepción quedaba condicionada a la inscripción en el REP y al acatamiento de los precios políticos de venta de ejemplares, cuando la provisión de beneficios tuviera “finalidad compensatoria” (v. *supra*). El concepto de compensación había sido introducido en enero de 1966, durante la tramitación en Cortes del proyecto de ley, que hablaba en cambio de “subvenciones”. La sustitución vino auspiciada por algunos procuradores ligados a empresas periodísticas, molestos por un término que consideraban humillante. Según Torcuato Luca de Tena y Mariano Rioja, no cabía hablar de “subvenciones” en tanto las empresas, lejos de obtener liquidez con las primas, habían de dedicarlas íntegramente a la compra de un papel prensa cuyo precio se había situado, tras la liberalización de 1962, entre los más caros de Europa⁷¹¹. Las preocupaciones semánticas de los empresarios

⁷¹¹ Por ello, y yendo un paso más allá, Fernando Martín-Sánchez llegaría a proponer el término de “indemnización” para las ayudas directas por consumo de papel prensa (c.t. 110/4 de 20 de enero de 1966. En ACD).

Según Mariano Rioja, las primas directas a las empresas periodísticas para la adquisición de papel prensa constituirían, en realidad, un régimen de financiación doble: constituirían una ayuda

llevaron al legislador a aceptar el término de “compensación” (c.t. 107/3 de enero en ACD), propuesto por el mismo Mariano Rioja que tan crítico se había mostrado pocos años antes con la “prensa limosnera” (v.3.2.3)⁷¹².

Ya fueran subvenciones o compensaciones, las primas directas concedidas a las empresas periodísticas por consumo de papel prensa se eliminarían en 1971. El 25 de marzo de aquel año, Sánchez Bella acababa por Decreto (492/71) con el régimen de financiación directa; en una maniobra que uno de los empresarios consultados ha llegado a calificar de “puñalada trapería”⁷¹³. La eliminación de las ayudas directas vino a agravar el que, en adelante, sería uno de los más acuciantes problemas del sector: el desequilibrio entre el incontenible incremento de los costes del papel (dada la liberalización de precios decretada en 1962) y el estancamiento de los ingresos, derivado del mantenimiento de los precios políticos de venta, fijados en 4 pesetas por ejemplar hasta agosto de 1971.

TABLA 13: Precio del papel prensa

Periodo	Precio papel prensa (ptas./kg.)
De 1954 a 30 de junio de 1956	5'75
1 de julio de 1956 a 31 de diciembre de 1956	6
1 de enero de 1957 a 30 de noviembre de 1957	6'336
1 de diciembre de 1957 a 31 de marzo de 1963	6'5

directa a las empresas periodísticas al tiempo que una ayuda indirecta del Estado a los fabricantes de papel, en quienes revertiría, en último término, las sumas otorgadas por el Estado a las publicaciones periódicas. Este sistema no había sido inventado, desde luego, por la dictadura franquista. Desde 1914 se había implantado en España un régimen similar de “anticipo reintegrable”. El sistema consistía en unos créditos concedidos por el Estado a las empresas para la compra de papel, de modo que las publicaciones pudieran adquirir la materia prima al precio de julio de 1914, momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, con el consiguiente encarecimiento del papel. La diferencia entre el precio de julio de 1914 y el precio real del papel venía cubierta por los créditos del Estado, de modo que las publicaciones desembolsaban el precio de 1914, pero los fabricantes percibían un pago por el precio real. Las empresas periodísticas se comprometían a reembolsar al Estado estos créditos a razón de 5 céntimos por kilo de papel adquirido y hasta que se reintegrara todo el adelanto. Sin embargo, en la práctica, según ha constatado José Tallón, una parte importante del anticipo estatal no le fue reembolsado nunca al tesoro público (Tallón, 1978: 25).

⁷¹² El 20 de enero de 1966, Rioja había proclamado en la Comisión de Información y Turismo de Cortes: “El precio del papel prensa en España, deducida la compensación media —digo media, porque no todos los periódicos reciben la misma—, resulta un precio neto superior al precio normal del papel prensa en Europa. Si esto es así, es evidente que los periódicos ni directa ni indirectamente están recibiendo una subvención. En realidad, están siendo el cauce para que la producción nacional reciba esa subvención legítima y para que la fabricación nacional de papel prensa sea posible. Por tanto, al no poder hablarse de subvención, pido que se sustituya esta palabra (c.t. 107/14 de 20 de enero. En ACD).

⁷¹³ Así se expresaba en entrevista telefónica mantenida el 9 de octubre de 2012 Gonzalo Wandosell Morales, vicepresidente de Empresa Periodística Editorial Cartagena, S.A. (*El Noticiero de Cartagena*). Como ya vimos, la supresión en 1971 de las primas directas por consumo de papel sumieron a la empresa en una crisis que desembocaría en 1974 en la suspensión del diario.

1 de abril de 1963 a 30 de abril de 1970	11'3
1 de mayo de 1970 a 31 de diciembre de 1972	14'17
1 de enero de 1973 a 15 de marzo de 1974	14'98
16 de marzo de 1974 a 30 de junio de 1974	19'5
1 de julio de 1974 a 31 de diciembre de 1974	23'142
1 de enero de 1975 a 31 de diciembre de 1975	25'277

Fuente: Tallón, *op. cit.*: 52

TABLA 14: Precio de venta de los periódicos españoles y jornal mínimo

Periodo	Precio de venta (ptas.)	Años	Jornal mínimo		Jornal mínimo real	Parte del jornal mínimo dedicado a prensa	Parte del jornal mínimo real dedicado a prensa
			Ptas.	Deflactor			
1 de junio de 1935 a 1 de septiembre de 1941	0'15	1963 ⁷¹⁴	60	1	60	2'5% 3'33%	2'5% 3'33%
2 de septiembre de 1941 a 28 de agosto de 1945	0'25	1964	60	0'93	55'80	3'33%	3'58%
29 de agosto de 1945 a 2 de agosto de 1947	0'40	1965	60	0'83	49'80	3'33%	4'01%
3 de agosto de 1947 a 10 de septiembre de 1950	0'50	1966	84	0'78	65'52	2'38%	3'05%
11 de septiembre de 1950 a 5 de julio de 1954	0'70	1967 ⁷¹⁵	84	0'73	61'32	2'38% 3'57%	3'26% 4'89%
6 de julio de 1954 a 1 de mayo de 1957	1	1968	96	0'70	67'20	3'12%	4'46%
2 de mayo de 1957 a 17 de febrero de 1963	1'5	1969	102	0'68	69'36	2'94%	4'32%
18 de febrero de 1963 a 5 de julio de 1967	2	1970 ⁷¹⁶	120	0'64	76'80	2'5% 3'33%	3'91% 5'20%
6 de julio de 1967 a 11 de mayo de 1970	3	1971 ⁷¹⁷	136	0'60	81'60	2'94% 3'68%	4'90% 6'12%
12 de mayo de 1970 a 23 de agosto de 1971	4	1972 ⁷¹⁸	156	0'53	82'68	3'20% 3'85%	6'05% 7'26%
24 de agosto de 1971 a 24 de octubre de 1972	5	1973	186	0'49	91'14	3'22%	6'58%
25 de octubre de 1972	6	1974 ⁷¹⁹	225	0'43	96'75	2'66%	6'20%

⁷¹⁴ El 18 de febrero 1963, el precio de los diarios sube de 1'5 a 2 pesetas.

⁷¹⁵ El 6 de julio de 1967, el precio de los diarios sube de 2 a 3 pesetas.

⁷¹⁶ El 12 de mayo de 1970, el precio de los diarios sube de 3 a 4 pesetas.

⁷¹⁷ El 24 de agosto de 1971, el precio de los diarios sube de 4 a 5 pesetas.

⁷¹⁸ El 25 de octubre de 1972, el precio de los diarios sube de 5 a 6 pesetas.

⁷¹⁹ El 20 de marzo de 1974, el precio de los diarios sube de 6 a 7 pesetas; y el 13 de junio, a 8 pesetas.

a 19 de marzo de 1974					3'11%	7'23%
					3'55%	8'27%
20 de marzo de 1974 a 12 de junio de 1974	7	1975	280	0'36	100'80	2'86%
13 de junio de 1974	8					7'94%

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia del Gobierno, 1976 y Tamames, *op. cit.*: 640

Como puede apreciarse en la tabla 14, la liberalización del 1 de abril de 1963 (Orden de 9 de mayo de 1962) hizo que el precio del papel prensa casi llegara a duplicarse: de las 6'5 ptas. por kilogramo se pasó a 11'3; mientras que el precio de venta de los diarios se mantenía en las dos pesetas por ejemplar hasta 1967. Espoleado por el aumento de la demanda, el precio del papel prensa no dejaría de aumentar en la década siguiente:

TABLA 15: Consumo de papel prensa en España (1961-1975)

Años	Toneladas	Índice de variación
1961	76.662	100
1962	85.000	110'9
1963	97.375	127
1964	97.498	127'2
1965	126.300	164'7
1966	155.400	202'7
1967	146.800	191'5
1968	172.100	224'5
1969	193.718	252'7
1970	193.741	252'7
1971	162.555	212
1972	173.835	226'8
1973	207.631	270'8
1974	243.742	317'9
1975	204.900	267'3

Fuente: Tallón, *op. cit.*: 92

A finales de los sesenta, la inflación del papel se revelaba ya como uno de los problemas más graves que afectaban a la prensa española. En 1967, el III Plan de Desarrollo identificaba el “desequilibrio” entre el precio de venta de los diarios y el coste del papel como uno de los factores que impedían “el incremento deseado de la difusión de la prensa española, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior”

(Presidencia del Gobierno, 1967: 22). La Administración trató de atajar el problema con dos actuaciones. (a) Como puede apreciarse en la tabla 15, elevó los precios de venta de los diarios en los años 1970, 1971, 1972 y 1974, de modo que éste pasó de las 3 pesetas por ejemplar al inicio de la década a las 8 pesetas del final de la dictadura. Y sobre todo, (b) aplicó un régimen de exenciones fiscales a la importación dirigido a contener el coste del papel y a rebajar su precio en el mercado.

Durante la segunda mitad de los sesenta, el papel que se importaba para cubrir la demanda nacional estaba gravado por los siguientes impuestos: (1) un 5% de “canon de precios de papel prensa”, que también afectaba al papel de fabricación nacional. A sufragar este impuesto las empresas periodísticas debían destinar, por cierto, cerca del 30% de las primas directas que percibían, hasta 1971, de la Administración. (2) Un 17% de gravámenes interiores; porcentaje que no había dejado de aumentar durante la década. Y (3) un 9% de aranceles. En su penúltimo año en el MIT, Alfredo Sánchez Bella eliminaba el impuesto de “canon de compensación de precios de papel prensa” (Decreto 492/71 de 25 de marzo) y los derechos arancelarios que gravaban la importación de papel (Decreto 3082/71, de 17 de diciembre). Como resultado de la nueva política fiscal, que se mantuvo hasta después del final de la dictadura, la hacienda pública dejaría de ingresar, sólo en 1973, unos 205 millones de pesetas (Presidencia del Gobierno, 1976: 36); que no lograron, a pesar de todo, contener la inflación. Al año siguiente de la aplicación de las medidas, el III Plan de Desarrollo volvía a señalar el desequilibrio entre el precio del papel y el precio de venta de ejemplares como uno de los factores que impedían el “perfeccionamiento” de las empresas periodísticas y el crecimiento de la difusión de los diarios; y se planteaba una vez más la disminución del coste de la materia prima como uno de sus objetivos primordiales (Presidencia del Gobierno, 1972: 137). Su fracaso se haría evidente en los años siguientes: como puede verse en la tabla 14, el precio del papel prensa nacional no dejó de aumentar, llegando a principios de 1974 al filo de las 20 pesetas por kilogramo (frente a las 16 pesetas que se pagaban de media ese mismo año en el resto de Europa), mientras el importado se pagaba a 33’5 ptas./kg. de media. El aumento incontenible del precio obligaría al documento preparatorio del IV Plan de Desarrollo a considerar una “prioridad absoluta” la reducción del coste de papel (Presidencia del Gobierno, 1976: 44-45); para lo que se impulsó, en 1974, la adquisición del 35% de la papelería canadiense McMillan⁷²⁰ e incluso se llegó a plantear la posibilidad de volver a fijar un tope máximo al precio del papel.

⁷²⁰ En el verano de 1974, el Instituto Nacional de Industria (INI) adquiriría, en efecto, por 17 millones de dólares el 35% de la papelería canadiense McMillan Rothesay Limited. En virtud del acuerdo, el Estado se hacía con el 35% de la producción de papel de la compañía (García Labrado, 1975: 47).

7.1.1.2 Reducción de tarifas telefónicas, telegráficas y postales

La aplicación de tarifas telefónicas, telegráficas y postales especiales constituyó una de las partidas fundamentales de la cofinanciación estatal indirecta de las empresas de prensa durante el tardofranquismo. Apenas un año después de la entrada en vigor de la LPI, la hacienda pública dejaba de recaudar más de 260 millones de pesetas por la rebaja de estas tarifas; lo que suponía más de un tercio del total de ayudas a la prensa (Presidencia del Gobierno, 1976: 28).

Como es obvio, las rebajas tendieron a favorecer en mayor medida a las grandes empresas de prensa, en tanto fueron aplicadas en función del volumen del tráfico postal, telegráfico y telefónico. Incidieron fundamentalmente en dos partidas básicas de costes: los gastos de explotación derivados de la obtención de información, y los gastos de distribución de los diarios. En lo que a estos últimos se refiere, las ayudas de la Administración se concentraron, no obstante, en la distribución por el territorio nacional; mientras la exportación careció por lo general de apoyos⁷²¹. Los elevados costes de la distribución internacional venían causados en gran parte por la imposición de unas tasas al franqueo aéreo que lastraron también la creación de una prensa de verdadero alcance nacional y contribuyeron a preservar el carácter regional o local de las cabeceras.

La reducción de las tarifas telegráficas fue una de las partidas de cofinanciación indirecta menos cuantiosas para las empresas periodísticas. Dos tendencias marcaron su aplicación: primero, su temprana concesión (desde 1938) y larga pervivencia (hasta 1975)⁷²²; y segundo, su aumento progresivo con respecto al resto de telegramas, hasta

⁷²¹ “En nuestro país [advertía Presidencia del Gobierno en 1967] no existe régimen alguno de apoyo a la difusión de la prensa en el exterior y el coste del envío y de la distribución es totalmente prohibitivo” (1967: 22). La situación mejoraría algo con la concesión de subvenciones al diario *La Región*, que en diciembre de 1966 había inaugurado una edición aérea destinada a los españoles residentes en Europa.

⁷²² La primera fijación de tarifas telegráficas establecida por el régimen franquista data de 1938 (Art. 46 de la Ley de 13 de octubre de 1938 [BOE de 26 de octubre], de Sello y Timbre). La Ley aumenta la rebaja en las tarifas para las empresas periodísticas, que desde 1932 venían pagando un 50% menos que el resto de emisores. En 1948, la Ley de 4 de mayo (BOE de 5 de mayo) modifica el artículo 46 de la Ley de Sello y Timbre fijando una tarifa de 10 céntimos por palabra (con un mínimo de percepción de una peseta, frente a los 50 céntimos de 1938) para los telegramas dirigidos a periódicos y agencias y destinados a publicarse.

Unos años después se aprueba una nueva modificación tarifaria con el Decreto de 25 de junio de 1954 (BOE de 4 de julio), que desarrolla la Ley de 22 de diciembre de 1953 (BOE de 27 de diciembre). El Decreto, además de actualizar las tarifas, ofrece descuentos de entre el 50% y el 75% a las empresas periodísticas por el arriendo de circuitos telegráficos privados (art. 7.11.b).

Apenas cinco años después, vuelven a incrementarse las rebajas a las empresas periodísticas: el Decreto de 29 de abril de 1959 mantiene las tarifas para éstas, elevando, en cambio, las tarifas telegráficas ordinarias, por lo que la prensa obtiene una bonificación del 75%. En 1966, dicha bonificación aumentará aún más en virtud del Decreto 1667/66 de 16 de junio (BOE de 15 de

alcanzar las empresas de prensa un rebaja del 85% con respecto a las tarifas para otros emisores.

TABLA 16: Evolución de las tarifas telegráficas durante el franquismo

Año	Telegramas	Importe (ptas./palabra)		Rebaja prensa
		prensa	privados	
1938	Ordinarios	0'05	0'15	66'66%
	Urgentes	0'15	0'45	66'66%
1948	Ordinarios	0'10	0'25	60%
	Urgentes	0'30	0'75	60%
1954	Ordinarios	0'15	0'42	64'28%
	Urgentes	0'45	1'20	55%
1959	Ordinarios	0'15	0'60	75%
	Urgentes	0'30	1'20	75%
1966	Ordinarios	0'15	0'80	81'25%
	Urgentes	0'30	1'60	81'25%
1970	Ordinarios	0'15	1	85%
	Urgentes	0'30	2	85%

Fuente: elaboración propia y Presidencia del Gobierno, 1976: 31

Menos cuantiosas fueron, en cambio, las ayudas indirectas mediante descuentos de las tarifas telefónicas y postales. Con respecto a las primeras, ya en julio de 1957 se decretaba una subida de las tarifas de las conferencias interurbanas de la que quedaba excluida la prensa, que, dos años después (mediante Decreto del Ministerio de Hacienda de 1 de agosto de 1959), quedaría además exenta del pago de sobretasas. Por otra parte, las empresas periodísticas se beneficiaron de unos cargos sobre las líneas de teletipo un 59% menores que los aplicados al resto de compañías (García Labrado, 1968: 98). Si a mediados de los años sesenta estas rebajas suponían para las empresas cerca de 18 millones de pesetas, en 1973 la cantidad casi se había triplicado: de los algo más de 49 millones de bonificaciones por rebajas de tarifas telefónicas, 1.660.001 correspondían a conferencias manuales; 23.267.597, a informaciones radiadas; y 15.092.322, a comunicaciones por teletipos (el resto correspondía a rebajas a la Agencia EFE por teletipos intercontinentales y telefotografía) (Presidencia del Gobierno, 1976: 30).

junio), que fija el descuento a las tarifas telegráficas interiores en el 81'25% con respecto a los telegramas enviados por otros emisores. Por fin, el 30 de mayo de 1970, las rebajas a las empresas periodísticas quedan fijadas en el 85%.

Como en el caso de las tarifas telegráficas, también las rebajas de las tarifas postales se caracterizaron por una aplicación temprana y prolongada⁷²³.

TABLA 17: Tarifas postales para prensa durante el franquismo

Año	Franqueo postal de prensa (ptas./gr.)	
	Tarifas interiores	Tarifas exteriores
1938	0'01pta./ 140 gramos o fracción	
1954	0'05 pta./ 100 gramos o fracción	
1966	0'1 pta./ 200 gramos o fracción	1 pta./ 50 gramos o fracción
1970	0'1 pta./ 200 gramos o fracción	2 pta./50 gramos o fracción
1974	0'1 pta./200 gramos o fracción	

Fuente: elaboración propia

Además de estos descuentos, las empresas de prensa gozaron de conciertos anuales para el pago de franqueos⁷²⁴ y de condiciones especiales para la distribución de diarios entre sus suscriptores⁷²⁵. No así para la distribución aérea, que hubo de soportar tasas

⁷²³ La financiación indirecta mediante la reducción de las tarifas postales se inicia en 1938, con la Ley de 13 de octubre (BOE de 26 de octubre), cuyo artículo primero modifica el artículo 42 de la Ley del Timbre de 1932, hasta entonces vigente. En 1954, un Decreto de 25 de junio (BOE de 4 de julio) desarrolla la Ley de 22 de diciembre de 1953 (BOE de 27 de diciembre) e impone una tarifa de 50 céntimos por kilogramo o fracción enviado directamente por las empresas periodísticas (mientras que la correspondencia privada se paga a razón de 80 céntimos por cada 20 gramos). Ya en 1966, dos decretos regulan los envíos postales interiores (Decreto 1665/66 de 16 de junio [BOE de 15 de julio]) e internacionales (Decreto 1666/66 de 16 de junio [BOE de 15 de julio]). Por fin, el Decreto 1489/70 de 30 de mayo mantiene las tarifas interiores y eleva el precio del franqueo exterior hasta las 2 pesetas por cada 50 gramos o fracción.

⁷²⁴ El marco básico de regulación de los conciertos de franqueo para las empresas periodísticas quedó fijado a mediados de los años cincuenta. En 1955, la Orden de 18 de enero (BOE de 3 de febrero) ampliaba los conciertos de franqueo a una periodicidad anual (La Ley de 13 de octubre de 1938 había ofrecido conciertos de pago de franqueo “anuales, trimestrales o mensuales”). Este régimen de conciertos anuales será recogido en el artículo 7.2 del Decreto de 20 de mayo de 1955 (BOE de 29 de mayo), y desarrollado por las Circulares de 10 de agosto de 1955 (BOE de 31 de agosto) y 9 de noviembre del mismo año (BOE de 30 de noviembre); circulares que quedarán refundidas en la Orden de 8 de febrero de 1956 (BOE de 29 de febrero).

⁷²⁵ La regulación del servicio de suscripciones a periódicos se implanta en 1956, mediante el Decreto del Ministerio de Gobernación de 14 de mayo (BOE de 27 de mayo) y mediante la Orden que lo desarrolla, de 27 de junio (BOE de 1 de agosto). De acuerdo con el artículo primero de la Orden, “El servicio postal de suscripciones a periódicos se propone fomentar la difusión de la prensa, especialmente en las zonas rurales, sirviendo de intermediario entre el público y las Empresas periodísticas para la petición y pago de suscripciones y el envío y distribución de ejemplares respectivos”. Este servicio estatal quedará más adelante regulado por el Convenio Postal Universal firmado en Ottawa por plenipotenciarios españoles el 3 de octubre de 1957 y ratificado por el Instrumento de 11 de junio de 1959 (BOE de 8 de enero de 1960). Por fin, el Decreto 1113/60 de mayo de 1960 (BOE de 15 de junio) aprueba la ordenanza postal y dedica el artículo 24.1 al servicio de suscripciones a periódicos, a través del cual la administración “facilitará al público la petición y pago de suscripciones a diarios, revistas y publicaciones [...]”. La administración, por supuesto, vuelve a reservarse el derecho a fijar las condiciones de admisión en el servicio (art. 24.2), por lo que la inclusión de las empresas vuelve a someterse a su arbitrio.

crecientes que sin duda dificultaron, como ha quedado apuntado, tanto la constitución de una prensa de alcance nacional como la exportación y expansión internacional de periódicos y revistas⁷²⁶. Este es, por lo demás, el mecanismo estatal de financiación indirecta en el que más claramente se constata un criterio de concesión favorable a las grandes empresas, en tanto las bonificaciones se concedían en función del peso del correo y, por tanto, de la magnitud de las tiradas.

7.1.1.3 El precio político de los despachos de la Agencia EFE

El tercer mecanismo de cofinanciación indirecta aplicado por la Administración tardofranquista fue la fijación de precios políticos a los despachos de la agencia estatal de noticias. La tasación de estos servicios por debajo del valor de mercado empujó a la baja las tarifas del resto de agencias, contribuyendo así a aliviar los costes de obtención de información de las empresas de prensa; especialmente de las de menor peso en el sector.

La Agencia EFE –constituida como una empresa privada con forma de S.A., pero con participación mayoritaria del Estado⁷²⁷– acabó convirtiéndose, gracias a la relación privilegiada con el Régimen, en la más importante de las agencias de noticias españolas (Paz, 1989; 1990)⁷²⁸. A mediados de los años sesenta, ofrecía sus servicios de información internacional al 74% de los diarios nacionales; mientras que sus despachos de información nacional (ofrecidos por su filial Cifra, poseedora de la exclusividad de la

⁷²⁶ El Decreto de 25 de junio de 1954 (BOE de 4 de julio) fija un sobreporte de 25 céntimos por cada 40 gramos o fracción para el envío aéreo de prensa a cualquier localidad española o a Tánger, Marruecos y África Occidental (art. 11). En 1966, el Decreto 1665 de 16 de junio elevará este recargo hasta los 25 céntimos por cada 25 gramos o fracción, para el franqueo aéreo nacional; mientras que el Decreto 1666, también de 16 de junio, fijará las sobretasas aéreas internacionales en 50 céntimos por cada 25 gramos o fracción, para Marruecos, Portugal, Gibraltar y cualquier país con acuerdos especiales. Para el resto de Europa, había de pagarse 1 peseta por cada 25 gramos; que se elevaban a 5 pesetas para América, África, Oriente Medio, India, etc.; y a 6 pesetas para Asia y Oceanía.

⁷²⁷ El hecho de que EFE fuera formalmente de titularidad privada ha llevado a algunos a calificarla como “agencia paraestatal” (Bustamante, *op. cit.*: 222). Lo cierto es que la empresa no sólo estuvo íntimamente ligada desde sus orígenes al Estado franquista, sino que desde 1963, éste controlará hasta dos tercios del accionariado de la compañía (un tercio propiedad del Estado, y otro tercio a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones [ENTEL]) y, consecuentemente, su Consejo de Administración.

⁷²⁸ Según asegura José Antonio Jiménez Arnau en sus memorias, había sido él, junto a José Lorente Sanz, el fundador de la Agencia EFE (Arnau, 1978: 98). Ésta había comenzado a funcionar en Burgos en noviembre de 1938, impulsada por Serrano Suñer, dirigida por Vicente Gállego y financiada por un grupo de banqueros encabezados por Juan March. El 27 de noviembre de ese mismo año, Torre Hoyos y Amato integran en la nueva sociedad su agencia Fabra (cuyo valor fundamental residía en los derechos reconocidos por el resto de agencias internacionales). De este modo, EFE se constituye legalmente como S.A. el 3 de enero de 1939, con un capital inicial de 10 millones de pesetas y, ya desde sus inicios, con una relación privilegiada con el nuevo Régimen. Sobre el origen y devenir de la Agencia, consúltese Paz, 1989; 1990.

difusión de informaciones oficiales) llegaban al 61% de los diarios (Instituto de la Opinión Pública, 1964: 23-24). Su dominio del mercado quedaría reforzado con la concesión, el primero de septiembre de 1966 (Orden del MIT [BOE de 20 de septiembre]), de la exclusividad de la difusión de informaciones extranjeras, en cumplimiento del artículo 49 de la LPI.

Tanto EFE como sus filiales pudieron mantener, merced a las ayudas directas del Estado, unos precios políticos asequibles para las empresas periodísticas abonadas a sus servicios. Ello, unido a un dominio del mercado favorecido por las concesiones estatales, obligó al resto de agencias informativas privadas⁷²⁹ a rebajar también sus servicios; lo que acabó redundando en un descenso generalizado de las tarifas de abono a las agencias informativas y, por tanto, en el descenso de los gastos de obtención de información para las empresas periodísticas. En parte debido a ello, estos gastos —que oscilaban entre el 7-8% del total de gastos de los diarios con unos 50.000 ejemplares de difusión; y el 10-15% para los diarios de menor difusión (Nieto, 1973: 166)— suponían una de las partidas menos onerosas para las empresas, lo que no dejaba de tener consecuencias en el mercado, permitiendo la subsistencia de publicaciones de poca difusión y que difícilmente podrían afrontar un aumento de los gastos de obtención de información (Nieto, *op. cit.*: 167).

7.1.2 La cofinanciación directa

Si la mayor parte de los mecanismos de cofinanciación indirecta se mantuvieron durante los cuarenta años de dictadura, la cofinanciación directa de las empresas periodísticas fue un fenómeno exclusivo del tardofranquismo. Su regulación y aplicación se caracterizó por tres rasgos distintivos: una aparición tardía, una distribución opaca y discrecional, y un fracaso generalizado en el cumplimiento de sus objetivos. Dos fueron los mecanismos básicos de cofinanciación directa articulados por la Administración tardofranquista: la apertura de dos líneas de crédito oficial destinadas a financiar la modernización de las empresas y la optimización de la distribución; y unos pagos inicuos por la inserción de publicidad estatal y la elaboración de informaciones consideradas “de interés general” y en realidad favorables a los intereses del Gobierno. Los pobres resultados de los créditos oficiales acabaron agravando la obsolescencia endémica que

⁷²⁹ En 1964 existían en España unas 47 agencias de prensa, entre agencias informativas (6), de información gráfica (7) y de colaboraciones literarias y gráficas (34). De las seis agencias de información, una (Pyresa) pertenecía a la Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, mientras que tres eran empresas privadas con forma de S.A. (EFE, con participación del Estado; Europa Press, controlada por el Opus Dei; y Logos, de la Editorial Católica) y dos propiedad de particulares (Mencheta y Fiel) (Instituto de la Opinión Pública, 1964: 23).

afectaba a la maquinaria, estructuras y sistemas de distribución del sector; de modo que, en los años setenta, sólo las empresas periodísticas con superávit o sustentadas por grandes capitales pudieron acometer con solvencia un proceso de renovación y modernización que venía resultando imprescindible desde la década anterior.

Fueron, precisamente, esta acuciante necesidad de renovación, unida a la pretensión de la Administración de dotarse de un nuevo mecanismo de financiación de publicaciones afines, las razones que impulsaron, a principios de los setenta, la puesta en marcha del nuevo marco de ayudas directas a las empresas de prensa. Tres factores marcaron su creación y aplicación: (a) la eliminación en 1971 –con Alfredo Sánchez Bella en el MIT y Luis Carrero Blanco en la vicepresidencia del Gobierno– de las primas por consumo de papel prensa, la única ayuda directa otorgada por la Administración hasta aquel momento; (b) la implementación del II Plan de Desarrollo Económico y Social; y, sobre todo (c) la colisión, cada vez más evidente e insoslayable, de las necesidades de modernización de la prensa española con las dificultades de financiación que padecía el sector.

El choque entre las necesidades de renovación técnica y organizativa de la prensa española y las restricciones de acceso al capital imprescindible para satisfacerlas venía fraguándose desde muchos años antes, aunque se exacerbó durante el tardofranquismo. Las empresas periodísticas nunca llegaron a gozar durante la dictadura de las medidas de fomento de la industria que sí habían beneficiado, desde 1939, a otros sectores. Ya en los primeros años del Régimen, habían quedado excluidas de las categorías de “industrias de interés nacional” (favorecidas por las Leyes de 24 de octubre de 1939 [BOE de 25 de octubre] y 24 de noviembre de ese mismo año [BOE de 15 de diciembre]), y de “sector de interés preferente” (recogida en la Ley 152/63 de 2 de diciembre de 1963 [BOE de 5 de diciembre])⁷³⁰; lo que impidió que se aprovecharan, entre otras cosas, de ciertas

⁷³⁰ Estas tres disposiciones conforman la normativa básica de fomento de la industria puesta en marcha por el Régimen desde el final de la Guerra Civil.

La Ley de Jefatura del Estado de 24 de octubre de 1939 (BOE de 25 de octubre), de Protección y Fomento de la Industria Nacional, pretendía estimular la implantación de industrias incluidas dentro de esta categoría. Para ello, se les concedían durante los quince años siguientes varios beneficios, entre los que se encontraban la expropiación de los terrenos necesarios para su instalación, la reducción hasta en un 50% de sus impuestos, la rebaja de derechos de aduanas para la importación de maquinaria y utillajes e incluso la garantía estatal de un rendimiento mínimo anual del 4% (hasta un tope de mil millones de pesetas) (art. 2). A cambio, el Estado ejercía el control sobre la empresa a través de un interventor y un consejero delegado (art. 3).

Un mes después, se aprobaba la Ley de Jefatura del Estado de 24 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional; en ella quedaba mejor definida la categoría de “industria de interés nacional” como aquella que “como instrumento de la producción, se considera parte integrante del Patrimonio Nacional y subordinada al interés supremo de la Nación [...]” (art. 1). Dentro de esta categoría quedaban incluidas (art. 3) las industrias de Defensa (así como todas las auxiliares); y las “básicas para la economía nacional”, como las destinadas a servicios públicos, las que “produzcan artículos necesarios para la

facilidades para la importación de maquinarias de imprenta y utillajes de fabricación extranjera.

Hasta 1960 [aseguraba Gonzalo Dueñas] la mayor parte del utillaje periodístico databa de principios de siglo y a parte de las dificultades económicas a la hora de su renovación existía una negativa oficial casi automática a toda solicitud de permiso de importación (Dueñas, 1969: 19).

Pero las dificultades de modernización de la prensa española no se debían sólo al rechazo sistemático de la importación de utillajes. Otras circunstancias derivadas de las actuaciones y omisiones administrativas contribuyeron a colocar a la maquinaria de prensa “al límite de su aprovechamiento”, según un diagnóstico de Presidencia del Gobierno de finales de los sesenta (1967: 20). Como vimos en los capítulos precedentes, el Régimen dificultó o restringió el acceso al capital de las empresas periodísticas de varios modos: impidió la penetración de capitales extranjeros en el sector (a pesar de la liberalización de las inversiones foráneas que se acometió desde 1959 en el resto de la economía española); limitó la participación de españoles residentes fuera del país al 20% del capital social; circunscribió la diversificación de las empresas periodísticas al ámbito estrictamente informativo y editorial; impuso condiciones a las sociedades que quisieran invertir en las empresas periodísticas; e incluso trató de generalizar un órgano de gobierno ideológico que limitara el poder decisorio de accionistas y directivos, con el fin de restar atractivo a las inversiones.

Por otra parte, las dificultades de financiación no fueron tampoco ajenas a la baja rentabilidad del sector, causada en buena medida, como acabamos de ver, por el acusado desequilibrio entre los altos costes del papel prensa y los bajos precios políticos de venta de ejemplares. Esta baja rentabilidad hizo casi imposible la autofinanciación y abocó a las empresas a recurrir, para la obtención de nuevos recursos, a continuas ampliaciones de capital.

subsistencia, vestido y sanidad”, las de transporte y exportación de productos manufacturados, y, en definitiva, todas las que la Administración considerara como tales.

Estas dos leyes regularon la industria española durante todo el periodo autárquico, y hasta la ley 152/63 de 2 de diciembre de 1963 (BOE de 5 de diciembre), de Industrias de Interés Preferente. Desde entonces, el régimen de privilegios que se venía aplicando desde 1939 a empresas individuales pasaba a concederse a sectores y a zonas geográficas. La categoría de “interés nacional” se sustituía por la de “interés preferente”, para la que se contemplaban beneficios como la expropiación de los terrenos necesarios para la instalación y ampliación de las empresas, y la reducción de hasta el 95% de varios impuestos (y entre ellos, de las tasas arancelarias para la importación de bienes de equipo y utillaje que no se fabricaran en España) (art. 3).

7.1.2.1 *Los créditos oficiales*

Todos estos factores hicieron que en 1967, en el marco del II Plan de Desarrollo, el Gobierno estimara “de apremiante necesidad el establecimiento de un régimen de crédito oficial ágil, con bajo interés y amortización a largo plazo”. Presidencia del Gobierno venía a reconocer la urgencia de un plan de financiación directa mediante créditos como “consecuencia obligada de las restricciones que por razones políticas han de tener las empresas periodísticas para su financiación por otros medios” (1976: 23). El plan, desarrollado a principios de los setenta, se basó en la creación de dos nuevas vías de financiación: la apertura de una línea de crédito blando para la reestructuración y modernización de la maquinaria de las empresas periodísticas; y la concesión de préstamos para la optimización de los sistemas de distribución. Ambas ayudas se concedieron preferentemente a las empresas de prensa diaria, en detrimento de editoras de publicaciones de distinta periodicidad⁷³¹.

El 8 de junio de 1971, una Orden del MIT (BOE de 15 de julio) abría una línea de crédito oficial del Banco de Crédito Industrial dotada con 300 millones de pesetas y dirigida a la modernización y reestructuración de las empresas periodísticas⁷³². La concesión del crédito, que no podría exceder del 70% de las inversiones, quedaba supeditado una vez más a la inscripción en el REP; y, por tanto, al control administrativo de la empresa. Al año siguiente, otra Orden (de 19 de agosto de 1972, BOE de 28 de agosto) ampliaba la posibilidad de destinar estos créditos a la compra de bienes de equipo fabricados en el extranjero (que, en el caso de la maquinaria de prensa e imprenta, eran en realidad la mayoría):

Por el Banco de Crédito Industrial [establecía la disposición] podrán financiarse [...] los bienes de equipo de procedencia extranjera destinados a la reestructuración y modernización de las Empresas periodísticas a que se refiere la Orden de 8 de junio de 1971 previo informe favorable del MIT sobre la conveniencia de tal inversión y del

⁷³¹ Las publicaciones no diarias se vieron marginadas, según reconocía la propia Presidencia del Gobierno en un informe de 1976 (*op. cit.*: 39); quizás por el mayor aperturismo y audacia política que, por lo general, caracterizaron sus líneas editoriales. Tal y como relata Enrique Bustamante, “en la práctica, las revistas no recibieron ninguna ayuda importante fuera de las que con carácter secreto y políticamente discriminatorio puedan haberse dado en los ‘fondos de reptiles’ o en la ‘publicidad redaccional’ [...] Y la explicación de esta ostensible discriminación no parece alejarse, al menos en los años finales del régimen franquista, del papel político jugado por algunas revistas a favor de la democracia, así como a las mayores dificultades existentes para su control gubernamental” (Bustamante, 1982: 137-138).

⁷³² El crédito tenía su antecedente en unas compensaciones directas concedidas a la prensa desde 1964 (aunque congeladas en 1966) por alteraciones de su estructura y organización. Para el bienio 1968-1969, por ejemplo, los fondos destinados a estas ayudas ascendieron a 80 millones de pesetas (art. 45 de la Ley 5/68 de 5 de abril de 1968 [BOE de 6 de abril], de Presupuestos Generales del Estado).

Ministerio de Industria sobre la inexistencia de producción nacional en condiciones análogas a los mencionados bienes.

El acceso al préstamo quedaba pues sometido a la aprobación ulterior del Ministerio, de modo que éste se reservaba un amplio margen de discrecionalidad en su concesión o denegación. La discrecionalidad favoreció, desde luego, la opacidad –y muy probablemente la iniquidad– en los destinos y criterios de reparto de las ayudas. Éstas, por lo demás, tendieron a beneficiar a las sociedades más saneadas, hasta el punto de que Bustamante las interpreta como “una prima a las empresas con superávits” (1982: 136), las únicas que podían hacer frente al 30% de la inversión que, como mínimo, no quedaba cubierto por el préstamo oficial.

Fuera como fuese su distribución y favoreciese a unos u otros, lo cierto es que este primer mecanismo de ayuda directa a las empresas fue un fracaso. Así lo reconocería años después Presidencia del Gobierno, según la cual, la línea de crédito oficial para la modernización de las empresas de prensa había sido, entre 1971 y 1975, “prácticamente inoperante”, dada su falta de flexibilidad (1976: 29).

El segundo tipo de préstamo no fue más eficaz. También a principios de los setenta, la Administración puso en marcha una segunda línea de crédito para financiar estudios que contribuyeran a optimizar la organización de la distribución de la prensa. Con estos fondos se trató de constituir un Servicio Técnico Comercial que nunca llegó a funcionar. Las grandes empresas periodísticas rechazaron la creación de una distribuidora estatal arguyendo que ello concedería al Estado un nuevo instrumento de control sobre el sistema. Según Bustamante, los recelos de los empresarios no eran, sin embargo, tan plausibles: tras ellos se ocultaba el rechazo a la reforma de un sistema que tendía a favorecer a las grandes empresas con circuitos de distribución propios y que no tenían que recurrir, por tanto, a distribuidores ajenos (Bustamante, 1982: 105).

7.1.2.2 Publicidad estatal, “publicidad redaccional” y fondos de reptiles

Según el informe preparatorio del nonato IV Plan de Desarrollo, durante 1973 el Estado había dedicado a “campañas de publicidad de interés general y social” casi 216 millones de pesetas (Presidencia del Gobierno, 1976: 35). A pesar de que el documento no especifica deslinde alguno, dentro de esta cifra quedaban incluidas al menos tres partidas: la publicidad estatal, la llamada “publicidad redaccional” y un tercer grupo de “otras ayudas acordadas por la Administración a favor de las empresas periodísticas”, cuya indeterminación parece sugerir la existencia de un fondo de reptiles destinado a financiar publicaciones afines.


Como ocurriera con otros aspectos de la financiación estatal, también en el caso de la publicidad, fuera oficial o redaccional, la actuación de la Administración se caracterizó por la falta de transparencia y la discrecionalidad. El de 1973 es, de hecho, de los pocos datos oficiales que han trascendido sobre la publicidad estatal tardofranquista. Todo hace pensar que esta opacidad, unida a la ausencia de regulación de los criterios de distribución, permitió a la Administración emplear estas partidas como un instrumento más de premio o castigo a las empresas de prensa en función de la línea editorial de sus diarios. En 1975, un informe sobre política informativa elaborado por el MIT proponía varias medidas para coordinar la distribución de la publicidad estatal en función de la orientación de los medios. Como señala Bustamante, el hecho de que se pretendieran “coordinar” las inserciones demuestra que esta financiación discriminatoria se venía practicando desde hacía años. Por si fuera poco, en la página trece, el escrito aclaraba la verdadera finalidad de la publicidad estatal:

[...] todas estas medidas de carácter económico y empresarial actuarían como *estimulantes* a favor de aquellos medios de comunicación social que más adecuadamente lleven a cabo su tarea informativa y como *desalentadores* para evitar que determinados diarios y revistas adopten unas excesivas posturas contestatarias fuera del más estricto carácter objetivo de la información (cit. en Bustamante, 1982: 81-82).

Una de las formas más escandalosas de esta partida de cofinanciación directa fue sin duda la llamada “publicidad redaccional”, implantada, al parecer, por el almirante Luis Carrero Blanco y empleada con asiduidad en la primera mitad de los setenta por los ministros de Información y Turismo; especialmente por Alfredo Sánchez Bella (Bustamante, *op. cit.*: 80). La publicidad redaccional consistía en el pago a las empresas periodísticas, de acuerdo con las tarifas publicitarias de sus publicaciones, por la elaboración y publicación de informaciones y reportajes propagandísticos encargados por el Gobierno o bien propuestos por las propias publicaciones y calificados por la Administración de “interés general o social”.

Las primeras evidencias halladas sobre el uso de este tipo de publicidad datan de la primavera de 1970: en marzo, la patronal de diarios del Sindicato Nacional de Prensa hace llegar a las empresas las primeras circulares con instrucciones para la percepción de la nueva partida, cuyo 75% podían solicitar por adelantado. Pocos meses después, los diarios comienzan a remitir a la DGP sus propuestas de artículos y reportajes susceptibles de ser calificados de “interés general”; a los que acompañan sus tarifas publicitarias y cálculos de los perjuicios económicos que les venían ocasionando la congelación de las

primas por consumo de papel y el aumento del precio de la materia prima⁷³³. El que la Administración instara a las empresas a remitir en sus solicitudes un cálculo de estos perjuicios económicos presagia lo que se hará evidente al año siguiente: que la publicidad redaccional había sido concebida, no para complementar las compensaciones directas por la compra de papel prensa, sino para reemplazarlas.



526.555

ILMO. SR.

Complaciendo sus deseos, adjuntamos la información que nos solicita, así como una relación de los temas que superiores podría cubrir los espacios publicitarios y las tarifas actualmente en vigor.

Esperamos de V.I. las observaciones que juzgue oportunas sobre el plan que exponemos, así como, el momento de su iniciación.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 29 de Julio de 1970

MADRID, Dpto. de la Prensa y el Comercio

Wasquer

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE Prensa
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO - MADRID

RELACION DE TEMAS QUE CUBRIERAN LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS

Serial sobre:

"España ante la invasión turquesca".

- 1.- Sus ciudades
- 2.- Sus costas
- 3.- Autos turquescos
- 4.- Hoteles y alberques
- 5.- Fiestas folclóricas
- 6.- Gastronomía española

Serial sobre:

"En España se vacan".

- 1.- Balance de un slogan famoso: "mantenga limpia España"
- 2.- Los bañeros y su conservación
- 3.- Españoles al sol: playas, socorristas, etc.
- 4.- Turismo social: ciudades residenciales, Educación y Descanso, etc.
- 5.- Cursos de verano en las Universidades españolas
- 6.- Seguridad del tráfico.

Serial sobre:

"España exporta calidad".

Seis capítulos analizando en profundidad la exportación española, hoy.

Serial sobre:

"Los deportes: una actividad en alza".

Seis capítulos en torno a: Atletismo, Tenis, Fútbol, Boxeo, Baloncesto: otras especialidades: motorismo, esquí acuático, montañismo, etc.

Serial de seis capítulos sobre:

"La artesanía española".

Serial de seis capítulos sobre:

"El cinturón industrial de Madrid".

Serial de seis capítulos sobre:

"La España de los españoles" garbanos de Arévalo, judías del barco, castañas de Valencia, naranjas de Valencia, etc. Varios reportajes sobre los productos que consumen los propios españoles.

NOTA: Los citados temas ocuparán una superficie total de unas 31 páginas, que a base de 36.000,00 Ptas. de precio por página de reportaje, dan un total de 1.116.000,00 Ptas.

RESULTADOS EXPLORACIONES

CIRCULACION (ingresos en unidades monetarias)

Junio 1969	3.734.345,49
Junio 1970	4.213.227,54
Incremento de ingresos por venta	478.879,05

CONSUMO DE PAPEL -

Junio 1969:	218.588 Kgs. nacional a 11,30 ¢	54.666 Kgs. extranjero a 13,00 ¢	Coste papel Junio 1969	3.180.442,20
Junio 1970:	196.348 Kgs. nacional a 14,16 ¢	49.588 extranjero a 13,85 ¢	Coste papel Junio 1970	3.496.889,12
Incremento de costes de papel	162.472,33			

COMPENSACION -

En 1969 percibimos 4.266.784,00 por este concepto. Esta suma correspondía a OCHO MESES de consumo de papel en 1968. Por consiguiente una mensualidad de compensación cubre en 1969 fue de ... 533.915,67

Incremento de ingresos por Circulación - Incremento de costes de papel = Pérdida de compensación = 478.879,05 - 162.432,33 = 333.915,67

Resultados deficitarios Junio = 370.915,67

Resultados deficitarios de tres meses = 1.112.747,01

NOTA AGRAVATIVA - Unicamente se estudian las incidencias producidas en los resultados por la variación de los tipos en el régimen del papel prensa, y por consiguiente no se han tenido en cuenta los aumentos de costes que se producirán con el nuevo Convenio Colectivo que tenemos iniciado.

En 1971, la sustitución de las primas directas por la publicidad redaccional permitió al MIT recuperar el control de la distribución de las ayudas y, sobre todo, modificar su criterio de concesión. Como hemos visto, las compensaciones por la compra de papel prensa venían siendo distribuidas, desde 1962, por los propios diarios a través del Sindicato Vertical, de acuerdo con un criterio objetivo de proporcionalidad inversa basado en el consumo (en el que, a mayor consumo de papel, menor ayuda se recibía por kilogramo). La publicidad redaccional, en cambio, será repartida discrecionalmente por la Administración en función de dos variables: la orientación ideológica de las publicaciones y la conveniencia política de las informaciones encargadas o propuestas, cuyo "interés general" no obedecía a menudo sino al interés gubernamental. Durante la primera mitad de los setenta, la calificación de "interés general o social" permitió financiar informaciones de toda índole, desde campañas como "el menú del día" o de rememoración de la batalla de Lepanto, hasta series de reportajes como "Realizaciones

⁷³³ Tanto las propuestas de los diarios como las contestaciones del MIT pueden verse en AGA, sig. (3)49.21 c. 65.035 V. Anexo XIII

del Gobierno”, cuyo título deja pocas dudas sobre su contenido⁷³⁴. Por otro lado, algunos informes realizados por las delegaciones del MIT relativos a la concesión de estas ayudas centraban sus argumentos en la orientación política de las empresas solicitantes, antes que en cualquier otra consideración. El 15 de diciembre de 1970, por poner sólo un ejemplo, el delegado provincial del MIT en Extremadura solicitaba el pago de publicidad redaccional al diario *Extremadura* por el siguiente motivo:

[...] el diario *Extremadura* tiene un arraigo en esta provincia de indudable importancia, a tono con el carácter conservador del pueblo cacereño [...]

Se trata de la única publicación diaria de la provincia cuya existencia se considera conveniente mantener, dada su probada trayectoria de incondicional adhesión al Régimen y acatamiento a cuantas indicaciones le han sido formuladas por esta Delegación Provincial, ya que su posible vacío, de producirse, podría ser cubierto por otra publicación de insospechadas características⁷³⁵.

⁷³⁴ Sirvan como ejemplo, los artículos propuestos por Editorial Compostela, S.A. (*El Correo Gallego*) entre 1970 y 1973. En 1970 propone que se le pague un extra de 100 páginas publicado el 27 de noviembre y titulado “En esta hora de Galicia”, sobre el desarrollo agrario e industrial de la región. En 1971 presenta 51 temas susceptibles de ser abonados por la Administración; entre ellos, “Promoción del libro español”; “Formación cívica”; “Prevención de incendios forestales”; “El III Plan de Desarrollo Económico y Social”; “Plan Asistencial del Ministerio de Trabajo”; “Labor social del Ministerio de la Vivienda”; “Política española de desarrollo económico y progreso social”; “Promoción del menú del día”; “La Ley General de Educación”; “Consejos Económicos Sindicales”; “Labor de la Sección Femenina”, etc. Al año siguiente, los temas propuestos son 19, muchos de ellos publicados bajo el recuadro “Realizaciones del Gobierno”. Algunos de sus títulos dejan pocas dudas sobre sus contenidos: “Realizaciones del Ministerio de Información y Turismo en Galicia”; “Realizaciones del Ministerio de Educación y Ciencia en Galicia”; “Realizaciones del Ministerio de la Vivienda en Galicia”; “Incidencia del III Plan de Desarrollo en Galicia”; “Realizaciones del Ministerio de Obras Públicas en Galicia”; “La Ley General de Educación y su incidencia en Galicia”; “Constitución de la Sociedad para el Desarrollo Industrial en Galicia”; “Realizaciones del Ministerio de Agricultura en Galicia”; “La Seguridad Social Agraria”; “El Cooperativismo y su repercusión benéfico-social”; “Actividades del P.P.O. y realizaciones del Ministerio de Trabajo”; “Lucha contra la contaminación del medio ambiente”; “Formación cívica erradicación de accidentes laborales”; “Información especial sobre actividades ministeriales en Galicia”, etc. Finalmente, en 1973 presenta al MIT un extra de 104 páginas titulado “Obras públicas para Galicia”. V. AGA, sig. (3)49.21 leg. 65.554.

⁷³⁵ Informe en AGA, sig. (3) 49.21 c. 65132.

DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
174270 DIC 21-70
REGISTRO GENERAL
ENTRADA
P R E N S A

De:

Ciudad, fecha y ref.: Cáceres, 15 de Diciembre de 1970, E/M

7/7 de

Ilmo. Señor:

Para la resolución que proceda adjunto tengo el honor de elevar a V.I. instancia suscrita por Don JUAN FERNANDEZ DEL RIO, en calidad de Administrador, de la EDITORIAL EXTREMADURA, S.A., editora ésta del diario "EXTREMADURA", por la que solicita se conceda al diario mencionado la publicidad de interés social que por V.I. se estime conveniente a partir de Octubre último, acompañándose al propio tiempo anexo relativo a la pérdida que le ha supuesto la supresión de la compensación en el precio del papel-prensa, -- tarifas de publicidad que viene aplicando el diario que nos ocupa, así como dos cuadernillos conteniendo recortes de prensa, relativo a las últimas Elecciones uno, y otro a trabajos o sueltos publicados durante los meses de Agosto y Septiembre últimos y para los cuales solicita la publicidad de interés social, permitiéndome manifestarle, sobre la materia que nos ocupa, lo que sigue:

El diario "Extremadura", con una tirada que oscila entre 4.500 y 5.000 ejemplares ha resultado -- siempre deficitario, ya que el único capítulo que hubiera podido compensarle, el de la publicidad, es en caso como corresponde a una provincia cuya economía descansa principalmente en el sector primario, descapitalizado y con medios de explotación anticuados. -- Ello unido a la supresión de la compensación del papel prensa le ha creado una situación difícil de salvar con medios propios.

Por otra parte, el diario "Extremadura" tiene -- un arraigo en esta provincia de indudable importancia, a tono con el carácter conservador del pueblo -- cacereño sobre el que, desde luego, viene ejerciendo una acción formativa o de ambientación e informativa dentro de los recursos de que dispone.

Se trata de la única publicación diaria de la -- provincia cuya existencia se considera conveniente --

A:

2ª hoja.-

DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

De:

Ciudad, fecha y ref.: , de de /

.../...

mantener, dada su probada trayectoria de incondicional adhesión al Régimen y acatamiento a cuantas indicaciones le han sido formuladas por esta Delegación Provincial, ya que su posible vacación, de producirse, podría ser cubierto por otra publicación de insospechadas características.

Por todo lo anteriormente expuesto el Delegado informante se pronuncia por la favorable aprobación de la solicitud que nos ocupa, a partir de la fecha que ese Centro Directivo considere oportuno

No obstante V.I. con su Superior criterio resolverá.

Dios guarde a V.I. muchos años
EL DELEGADO PROVINCIAL,
Felipe Munuera
- Felipe Munuera -

A: Ilmo. Sr. Director General de Prensa,
Servicio de Ordenación.- MADRID

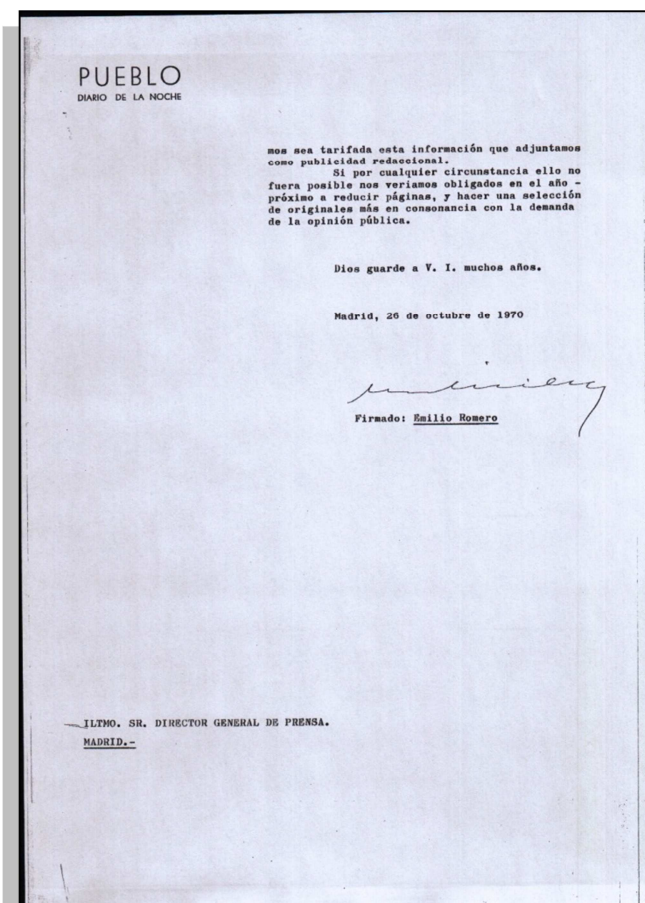
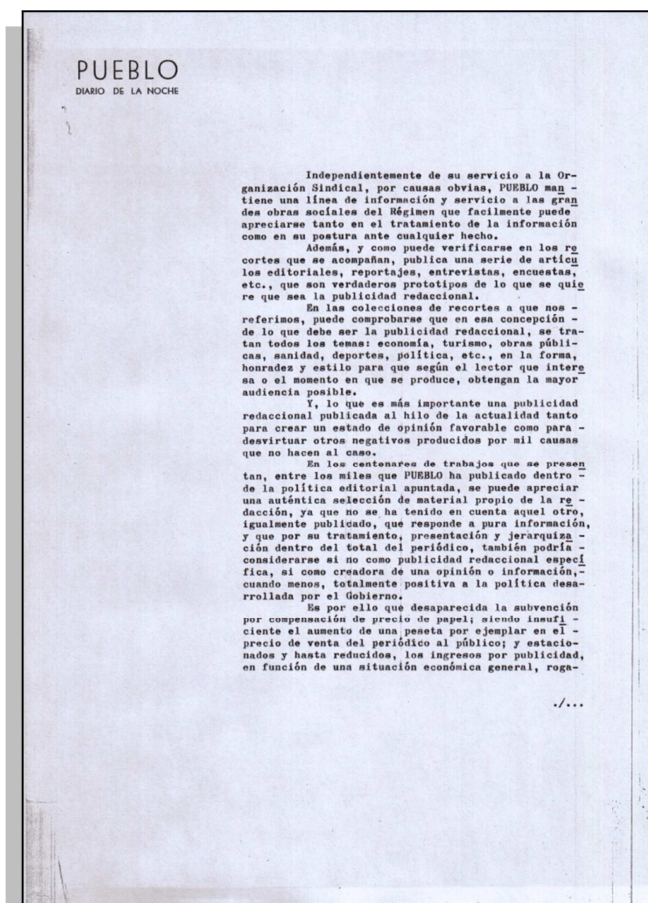
El criterio objetivo del consumo de papel dejaba así paso a un criterio subjetivo eminentemente político y sometido al arbitrio de la Administración, que ni siquiera justificaba en sus notificaciones las normas seguidas para la concesión de los montos, inferiores en muchos casos a los requeridos por las empresas.

En este sentido, aunque el MIT se cuidó de hacer llegar las ayudas a cuantos diarios las solicitaron⁷³⁶, las cantidades otorgadas no dejaron de ser desiguales. Así por ejemplo, aunque las dos empresas más perseguidas y sancionados del tardofranquismo, Madrid Diario de la Noche y Editorial Sevillana, fueron también financiadas mediante la publicidad redaccional, sólo percibieron en 1970 una parte de lo reclamado: el 47'32% la primera y el 29'42% la segunda⁷³⁷. Otras sociedades menos problemáticas fueron financiadas, en cambio, con más generosidad: Prensa Española y La Editorial Católica,

⁷³⁶ Sólo 14 diarios no solicitaron este tipo de ayudas en 1970. Fueron *El Correo Español*, *Diario de Cádiz*, *Diario de Las Palmas*, *Diario de Pontevedra*, *Diario Vasco*, *El Día de Tenerife*, *Extremadura*, *Faro de Ceuta*, *La Provincia*, *La Tarde*, *La Vanguardia Española*, *La Voz de Avilés*, *La Voz de Galicia* y *Región*.

⁷³⁷ El diario *Madrid* recibió en 1970, 526.555 ptas. de 1.112.747'01 ptas. solicitadas; mientras que *El Correo de Andalucía* obtuvo ese año 82.967 ptas. de las 278.637 pedidas. V. AGA, sig. (3)49.21 c. 65.035.

por poner como ejemplos las dos con más lectores, recibieron ese mismo año el 100% y el 98% de lo solicitado respectivamente⁷³⁸. Que estas diferencias obedecían a razones políticas lo evidencian, además de los documentos mostrados, muchas de las cartas enviadas por los diarios a la DGP reclamando los pagos por publicidad redaccional. En una de ellas, fechada el 26 de octubre de 1970 y acompañada de un dossier de artículos favorables al Gobierno, el director de *Pueblo*, Emilio Romero, aludía con su descaro habitual al verdadero sentido de las ayudas:



Independientemente de su servicio a la Organización Sindical, por causas obvias, PUEBLO mantiene una línea de información y servicio a las grandes obras sociales del Régimen que fácilmente puede apreciarse tanto en el tratamiento de la información como en su postura ante cualquier hecho.

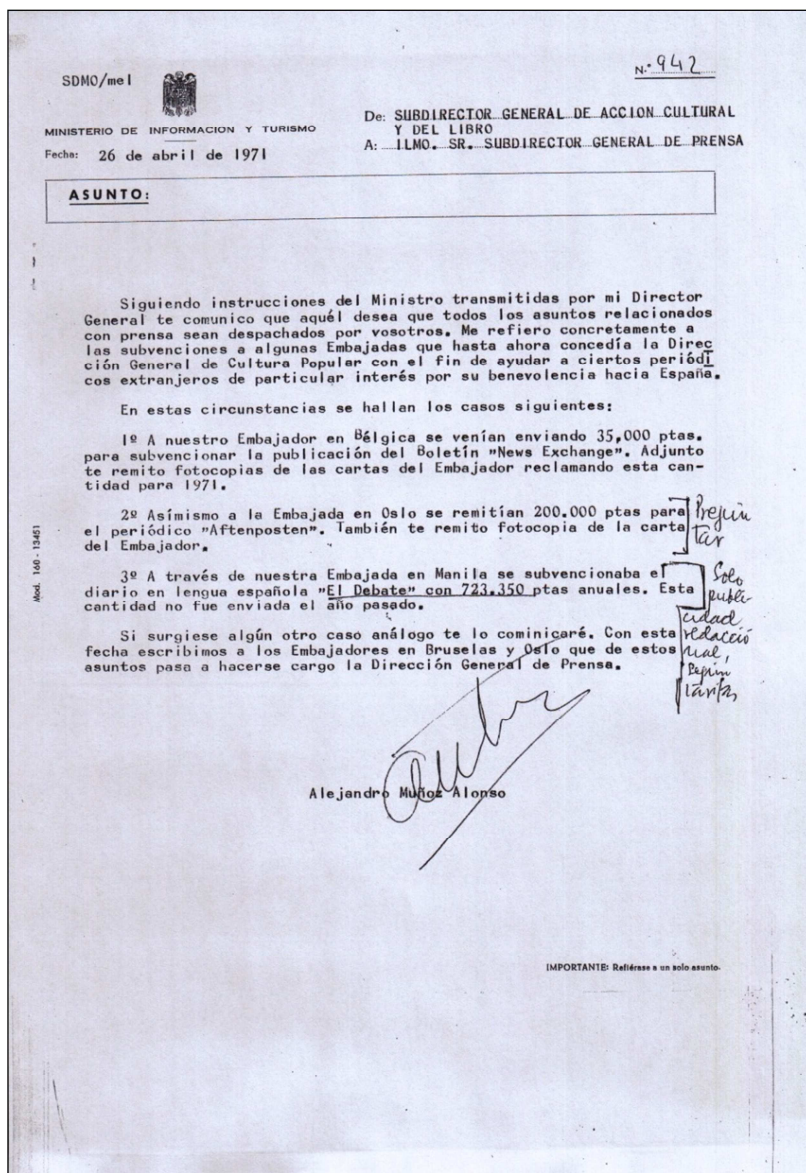
Además, y como puede verificarse en los recortes que se acompañan, publica una serie de artículos editoriales, reportajes, entrevistas, encuestas, etc., que son verdaderos prototipos de lo que se quiere que sea la publicidad redaccional [...]

En los centenares de trabajos que se presentan, entre los miles que PUEBLO ha publicado dentro de la política editorial apuntada se puede apreciar una auténtica selección de material propio de la redacción, ya que no se ha tenido en cuenta aquel

⁷³⁸ Prensa Española, S.A. recibió los 7.091.012 pesetas que pidió al Ministerio; y Edica, 4.039.996 de los 5.038.472 solicitados. En AGA, *ibídem*.

otro [...] que también podría considerarse si no como publicidad redaccional específica, si como creadora de una opinión o información cuando menos, totalmente positiva a la política desarrollada por el Gobierno.

Por último, al pago por la elaboración de propaganda política hay que añadir la más que probable existencia de fondos de reptiles. Aunque, como es obvio, ningún dato ni documento oficial hace alusión explícita a su existencia, dos hechos parecen apuntar en esta dirección. En primer lugar, la existencia comprobada de fondos de reptiles destinados a la financiación de empresas de prensa extranjeras especialmente “benévolas” con el Régimen. El 26 de abril de 1971, el subdirector General de Acción Cultural y del Libro (adscrito a la Dirección General de Cultura Popular), Alejandro Muñoz Alonso, escribía al subdirector General de Prensa para comunicarle que, de acuerdo con las instrucciones del ministro, sería la DGP la que se ocuparía, en adelante, de las partidas presupuestarias destinadas a “ayudar a ciertos periódicos extranjeros de particular interés por su benevolencia hacia España”⁷³⁹. Según la nota, el MIT venía destinando un modesto fondo de reptiles exterior a tres medios: al boletín belga *News Exchange*; al periódico sueco *Aftenposten*; y al diario



⁷³⁹ Tanto esta nota como las cartas a las que a continuación nos referimos se encuentran en AGA sig. (3) 49.21 c. 65.036. V. Anexo XIV.

filipino *El Debate*⁷⁴⁰. Acompañaban la petición dos cartas dirigidas al MIT de los embajadores en Bruselas, Jaime Alba (al que ya descubrimos en el verano de 1970 tratando de hacerse con el control de *El Norte de Castilla*) y en Suecia, Juan de las Bárcenas. En la primera, Alba aseguraba haber utilizado el *News Exchange* para difundir “informaciones de gran peso específico” recogidas por rotativos importantes, así como para cursar ciertas informaciones “a personas y ámbitos ante los que no conviene dar la cara”. Juan de Bárcenas, por su parte, iniciaba su carta afirmando “El dinero al que se refiere mi carta [...] constituye en su mayor parte un fondo de reptiles”, destinado a un editorialista del *Aftenposten* “que con frecuencia satisfactoria presenta temas españoles en forma aceptable para nosotros y para este público”.

Por otra parte, sugieren la existencia de un fondo de reptiles dirigido a las publicaciones diarias nacionales dos anotaciones del informe preparatorio del frustrado IV Plan de Desarrollo elaborado por Presidencia del Gobierno en 1976. En la página 27, el informe indica, entre las ayudas ofrecidas a la prensa española durante la década de los sesenta, la existencia de unas “subvenciones directas a fondo perdido” sobre las que afirmaba carecer de “datos concretos” (1976: 27). Más adelante, en la enumeración de las ayudas directas establecidas durante 1973, incluye una partida denominada “otras ayudas acordadas por la Administración en favor de las empresas periodísticas” (1976: 35). La vaguedad e indeterminación de ambas anotaciones apunta a la existencia de fondos de reptiles, de los que no hemos hallado, en todo caso, referencias a cuantías ni beneficiarios; y cuyo ulterior esclarecimiento supone una interesante vía de investigación para el futuro.

7.2 La regulación publicitaria y salarial

Publicidad y salarios constituyeron, durante el tardofranquismo, dos de las partidas de ingresos y gastos más cuantiosas para las empresas periodísticas. Sobre ambas intervino también el Régimen; si bien con diferentes objetivos. La regulación de la publicidad comercial en la prensa se orientó, ante todo, a evitar que se publicaran como tal contenidos vetados en los espacios informativos de los diarios. Tanto el Estatuto de la Publicidad de 1964 como la Ley de Prensa de 1966 restringieron además unas alianzas y vinculaciones entre los sectores publicitario y periodístico que, sin embargo, acabaron siendo consentidas en la práctica. En lo que a la regulación salarial se refiere, la

⁷⁴⁰ En la nota aparecen dos anotaciones manuscritas junto a los párrafos referidos al diario sueco y al filipino: sobre el primero aparece escrito “preguntar”; mientras que sobre el segundo se señala “Sólo publicidad redaccional, según tarifas”, lo que sugiere que, en adelante, *El Debate* sólo recibiría este tipo de financiación.

Administración fijó unas condiciones más o menos benévolas con los periodistas en comparación con las que padecieron otros profesionales. Los salarios mínimos –bajos, pero superiores a los de otros sectores, e incrementados con cada cambio de titularidad en el MIT– han de ser entendidos, de todos modos, como una realidad tras la que se escondía el control de la profesión a través de la Escuela Oficial, el Sindicato Vertical y el Registro Oficial de Periodistas.

7.2.1 La Publicidad comercial

El 2 de febrero de 1966, durante el debate de la comisión de Información y Turismo de Cortes a propósito del proyecto de LPI, Torcuato Luca de Tena explicaba de este modo la estructura económica de las empresas periodísticas españolas:

La economía de un periódico en España [...] está montada sobre la base de que existe pérdida de dinero en la venta de un ejemplar. Es decir, que el papel en blanco de un ejemplar de periódico cuesta más que el precio que se obtiene por su venta al público. De modo que el déficit en la venta, la amortización de maquinaria —que excede por lo general de centenares de millones de pesetas— y el pago de las nóminas de personal se hace nada más que con cargo al capítulo de la publicidad (c.t. 228/8 a 228/9 de 2 de febrero de 1966. En ACD).

Por más que Luca de Tena pudiera estar exagerando su peso dentro de la cuenta de resultados⁷⁴¹, lo cierto es que la publicidad comercial no dejaba de constituir, a mediados de los años sesenta, la partida de ingresos de explotación más cuantiosa e importante para las empresas periodísticas. El porcentaje que representaba con respecto al total de ingresos venía incrementándose desde la década anterior, cuando el desarrollo económico español había comenzado a animar la inversión publicitaria. Como resultado, durante la década de los sesenta los ingresos procedentes de la publicidad pasarían de suponer el 61'35% al 71'28% de los ingresos totales de *Abc*, el principal diario nacional (Nieto, 1973: 157); de forma que los anunciantes se habían convertido, en mucha mayor medida que los lectores, en los principales clientes de las publicaciones (Bustamante, 1982: 155).

⁷⁴¹ Según Nieto (*op. cit.*: 157), la publicidad comercial había supuesto para *Abc* durante el año anterior, 1965, el 73'26% de sus ingresos totales, y alcanzaría el 76'42% durante 1966. Por lo demás, Luca de Tena realiza esta intervención en el marco del debate de los artículos del proyecto de LPI relativos a las sanciones, para ilustrar los perjuicios económicos que la suspensión temporal de una publicación acarrearía para su empresa editora. Según el propietario de prensa Española, “no habría que pensar que la suspensión o la supresión de la publicidad [derivada de la suspensión de la publicación] ocasionaría una disminución de lucro sino la desaparición del único ingreso para la amortización de la maquinaria y el pago de la nómina del personal, que asciende en algunos casos a más del millón de pesetas” (c.t. 228/9 a 228/10 de 2 de febrero de 1966. En ACD).

Durante estos años, la publicidad comercial constituirá el principal soporte económico de la prensa española, mientras que ésta seguirá siendo el principal soporte de difusión publicitaria, acaparando una media de en torno al 37% de la inversión en medios. Y ello a pesar de la creciente competencia de otros medios de comunicación (y especialmente de la televisión), que conllevará un descenso generalizado de las tarifas de inserción publicitaria en los diarios, con el consiguiente descenso de su rentabilidad, dado que todo nuevo espacio dedicado a la publicidad implicaba un aumento de los ya de por sí elevados costes de papel.

TABLA 18: Inversión publicitaria en medios de comunicación en España (en millones de pesetas)

	Años	Prensa diaria	Revistas	Televisión	Radio	Exterior	Cine	Varios	Total
1965	Inversión	5.490	1.305	3.094	1.890	807	609	1.805	15.000
	Porcentaje	36'60	8'70	20'63	12'60	5'38	4'06	12'03	
1966	Inversión	5.432	1.536	3.771'4	1.534	1.273'6	441'6	2.011'4	16.000
	Porcentaje	33'95	9'60	23'57	9'59	7'96	2'76	12'57	
1967	Inversión	6.236'38	1.395'28	3.255'110	1.348'01	1.845'16	461'29	1.758'77	16.300
	Porcentaje	38'26	8'56	19'97	8'27	11'32	2'83	10'79	
1968	Inversión	6.650'4	1.756'4	3.456'6	1.489'4	1.995'3	407'3	1.244'6	17.000
	Porcentaje	39'12	10'33	20'33	8'76	11'74	2'40	7'32	
1969	Inversión	6.943	2.238	3.926	1.535	2.442	351	1.065	18.500
	Porcentaje	37'52	12'10	21'22	8'30	13'20	1'90	5'76	
1970	Inversión	7.239	2.386'4	3.961'5	1.561'8	2.593'5	334'4	923'4	19.000
	Porcentaje	38'10	12'56	20'85	8'22	13'65	1'76	4'86	

Fuente: Presidencia del Gobierno, 1972: 173

A pesar de su importancia, la publicidad comercial fue objeto durante el tardofranquismo de una regulación menos severa –de la que el Estatuto de la Publicidad fue, sin duda, su principal hito–, al menos en comparación con la que afectó a la prensa. Así por ejemplo, el capital extranjero que había sido vetado para aquella, sí tuvo cabida en el sector publicitario. Las compañías multinacionales de publicidad que habían iniciado su desembarco en los años veinte se mantuvieron en España durante el franquismo; y aun reforzaron su presencia a partir de 1959, con el Plan de Estabilización y las medidas de liberalización de la inversión extranjera; de modo que, “en los años sesenta, la mayoría de las grandes agencias multinacionales de la publicidad estaban sólidamente instaladas en nuestro país” (Bustamante, *op. cit.*: 63). Más allá de esta cuestión, la regulación de la materia vino caracterizada por tres notas esenciales.

(a) En primer lugar, el Régimen trató de impedir que la publicidad se convirtiera en una vía alternativa de difusión de contenidos vedados para los espacios informativos de las publicaciones periódicas. Así, el artículo 7 del Estatuto de la Publicidad (aprobado por Ley 61/64 de 11 de junio de 1964 [BOE de 15 de junio]) establecía claramente que

No será lícita la publicidad que por su fin, por su objeto o por su forma, ofenda a las instituciones fundamentales de la Nación, lesione los derechos de la personalidad, atente al buen gusto o al decoro social o sea contrario a las Leyes, a la moral o a las buenas costumbres.

Principios lo suficientemente ambiguos como para permitir un amplio margen de discrecionalidad a la Administración para la denuncia, persecución y sanción de estos contenidos. Con el fin de identificar a quienes pudieran incurrir en estas ilicitudes, la LPI obligaba a que, en caso de que la publicidad expresara “opiniones sobre asuntos de interés público”, la publicación incluyera el nombre y la dirección del anunciante (art. 38.2). Por otra parte, no dejaba de ser plausible la obligatoriedad de distinguir claramente los contenidos publicitarios de los informativos, para lo que las publicaciones habían de consignar en el REP —luego de informar sobre si iban a admitir o no publicidad— la forma específica de identificación y deslinde de ambos (art. 4 de Decreto 749/66 de 31 de marzo de 1966 [BOE de 4 de abril]). Esta Administración tan preocupada por la separación de publicidad e información era sin embargo la misma que financiaba por otra parte la publicidad redaccional; artículos propagandísticos calificados de “interés general” y publicados como informaciones periodísticas.

(b) Destaca, en segundo lugar, la inhibición del Estado en la regulación de las implicaciones de la publicidad comercial sobre la prensa en tanto partida fundamental de ingresos, pues ningún límite se impuso al espacio que cada publicación podía dedicar a la publicidad. Únicamente una disposición aprobada con carácter temporal se había referido a la cuestión en 1939: se trata de una Orden del Ministerio de Gobernación (entonces con las competencias de prensa) de 25 de octubre (BOE de 29 de octubre de 1939), por la que se fijaban los cupos de papel para cada periódico. La carencia de la materia prima motivaba que la Dirección General de Prensa restringiera el espacio publicitario a un tercio de la publicación: “El espacio que se destina a publicidad [ordena el artículo tercero] mientras duren las actuales circunstancias de restricción [del papel prensa] no podrá exceder de un tercio de la superficie total del periódico”.

Tampoco intervino demasiado la Administración en las tarifas de inserción publicitaria cobradas a los anunciantes por cada publicación; al menos en relación con el celo que manifestó por controlar otras tarifas, como las del papel, las telefónicas, telegráficas y postales, así como los precios de la prensa. Únicamente a finales de los años

sesenta actuó sobre la materia, congelando los precios de las inserciones (Orden del MIT de 13 de diciembre de 1967 (BOE de 18 de diciembre), que volverían a liberalizarse a principios de los setenta (Boletín Oficial de las Cortes, 27 de febrero de 1971, p. 27747; Cf. Nieto, *op. cit.*: 155).

(c) Sin duda la cuestión que más atención mereció de la Administración fue la posibilidad de interconexiones e intereses cruzados entre los sectores informativo y publicitario. El Régimen impidió la eventual diversificación del sector de la prensa hacia el sector publicitario (y viceversa) y prohibió formalmente (aunque permitió en la práctica) alianzas o conexiones entre ambos. Tales restricciones afectaban, por supuesto, a las empresas periodísticas, pero también a las agencias de noticias y aun a los periodistas. Así, en lo que a estos últimos se refiere, ya en 1942, una Orden circular del delegado Nacional de Prensa fechada el 3 de marzo impedía a los periodistas “concertar reportajes publicitarios o cosa análoga, [...] [y] mercantilizar sus informaciones, ya que el ejercicio de la profesión es un servicio de interés nacional, en cuanto contribuye a la misión educativa de la prensa” (art. 1)⁷⁴². El mismo principio sería reafirmado años después —si bien con un tono desde luego más sobrio— en el Estatuto de la Profesión Periodística (Decreto 744/67 de 13 de abril de 1967 [BOE de 15 de abril]), cuyo artículo 10 prescribía:

El ejercicio activo de la profesión periodística es incompatible con la actividad de agente o gestor de publicidad, y con cualquier otra que, directa o indirectamente, entrañe intereses que impidan la objetividad y el servicio del interés general en los trabajos informativos.

Las agencias de noticias, por su parte, tenían prohibido el desempeño de cualquier actividad publicitaria en virtud del artículo 46 de la LPI; mientras que a las empresas periodísticas les había sido vedada la entrada en el sector publicitario por el artículo 12 del Estatuto de la Publicidad (Ley 61/64 de 11 de junio [BOE de 15 de junio]), que rezaba: “Los medios [de difusión] no podrán constituir Agencias de Publicidad ni poseer intereses económicos en las mismas. Recíprocamente, las Agencias no podrán constituir medios ni poseer intereses en ellos”.

Como había ocurrido ya con otras disposiciones, la aplicación de esta medida no fue tan estricta como cabía esperar. Entre 1966 y 1975, cinco empresas de prensa diaria

⁷⁴² “La misión de educación [se había justificado previamente en el preámbulo] popular encomendada al ejercicio de la profesión de periodistas da a estos la dignidad y rango de apóstol, de modo que su misión instructora, inspirada en la verdad y dirigida al bien, debe aparecer siempre desligada de todo móvil interesado que pudiera bastardear [*sic*] el propósito de sus enseñanzas y debilitar el contenido suasorio de su doctrina, por lo que es necesario que el periodista, como tal, se mantenga en el límite preciso de su quehacer educador e informativo [...]”.

estuvieron ligadas de forma directa, a través de sus directivos, a agencias y empresas del sector publicitario⁷⁴³. La Voz de Galicia, S.A. tuvo como consejero durante todo el periodo a Manuel Sánchez Marín, vocal también de Publicidad-2000, S.A. A Antonio Gómez Rubio, propietario del pequeño diario *Área*, le fue denegada en 1974 la solicitud de inscripción en el Registro de Agencias Publicitarias de su empresa Publintel que, sin embargo, venía gestionando desde hacía años. Su doble condición de propietario de prensa y agente de publicidad no había impedido, como se recordará, su inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas en 1967. Más llamativa fue aún, si cabe, la laxitud aplicada en los casos de Prensa Castellana, S.A. y de Ilustración, S.A. La primera estuvo vinculada a finales de los sesenta a la agencia Publidis, S.A. a través de Ignacio de Acha y Sánchez Arjona (consejero delegado de ambas sociedades entre 1967 y 1968) y de Francisco Sánchez-Ventura y Pascual (consejero también de ambas empresas esos mismos años; además de sentarse en el CA de Editorial Noticiero, S.A. durante los setenta, al tiempo que ocupaba la vicepresidencia de Publidis). Con todo, sin duda el caso más significativo fue el de Ilustración, S.A., creada y presidida hasta 1971 por el conocido publicista Victor Sagi Vallmitjana, propietario de Distribuidora Española de Publicidad, S.A. Como vimos en el capítulo quinto, Victor Sagi llegó incluso a tener un importante papel en la redacción del Estatuto de la Publicidad que prohibiría su presencia en ambos sectores; una prohibición que ni Sagi ni su amigo Manuel Fraga dudarían en vulnerar, al pedir uno y conceder el otro la autorización para editar *Diario Femenino*. Sagi incluso llegó a incluir en el CA de Ilustración, S.A. a su también amigo y competidor Julio García Ibáñez, director técnico y administrador general de Publicidad Cid, S.A. En éste como en el resto de casos, la Administración tardofranquista conoció y consintió los intereses cruzados entre los sectores de prensa y publicitario y, con ellos, la inobservancia de su propia legalidad.

7.2.2 La regulación salarial

El régimen franquista no renunció tampoco, desde los años de la Guerra Civil, a intervenir sobre un ámbito tan crucial para las empresas periodísticas como los salarios de los periodistas. Recuérdese, en este sentido, que los costes de personal suponían para aquellas una de las partidas de gastos más cuantiosas, sólo superada por los costes del papel (tabla 8). Ya mediante órdenes ministeriales, ya mediante, sobre todo, reglamentos del trabajo en prensa, ninguno de los dirigentes que asumieron las competencias sobre la

⁷⁴³ Todas las conexiones que referimos a continuación se basan en la información suministrada por el *Directorio de Consejeros y Directores* (DICODI) y por el *Anuario Financiero y de S.A. de España*; y se encuentran reflejados en Apéndice de empresas periodísticas (1966-1975).

prensa dejaron de fijar unos salarios mínimos para periodistas; salarios que fueron, por lo general, bastante elevados en comparación con los salarios mínimos e incluso medios percibidos por el resto de profesionales españoles (Bordería, 2000: 31-32). A ello hay que añadir todo un conjunto de pluses salariales, premios, rebajas en determinados servicios e instituciones asistenciales, como la Institución San Isidoro para huérfanos⁷⁴⁴. Tanto estas ventajas económicas y sociales, como la fijación de sueldos superiores a la media nacional, han de contemplarse, de cualquier modo, como el haz en cuyo envés se escondía el control de la profesión a través del monopolio formativo, la depuración y sanciones, el registro y la sindicación forzosa. Durante toda la dictadura, el Régimen trató —con no demasiado éxito, por cierto, dada la politización de los profesionales, sobre todo en el tardofranquismo (Chuliá, *op. cit.*: 190-191)— de completar la circunscripción del oficio a aquellos periodistas que manifestaran su adhesión, mediante la garantía de su lealtad, “comprada” con unas condiciones favorables y unos intereses creados, ligados al orden franquista y al sistema de prensa constituido.

La regulación de los sueldos de los periodistas se inscribe en el contexto de una política intervencionista que alcanzaba a todo el mercado laboral español. Sus bases habían quedado establecidas en el Fuero del Trabajo de 1938 y completadas en octubre de 1942 por la Reglamentación del Trabajo; y se mantendrían al menos hasta 1958, cuando, en pleno proceso de pre-estabilización, quedaron legalizados los convenios colectivos. Tal y como puede constatarse en la tabla 21, fueron años marcados por un alza de precios (debido en buena medida al auge del mercado negro) y por un incremento del coste de la vida que no hacía sino rebajar los salarios reales y el poder adquisitivo de los trabajadores españoles:

Las elevaciones nominales de salarios [ha observado Ramón Tamames para este primer periodo intervencionista del franquismo] quedaban neutralizadas en su mayor

⁷⁴⁴ El “Instituto de San Isidoro, Escuela-Hogar de Huérfanos de Periodistas” se crea con forma de fundación el 13 de junio de 1940 (BOE de 14 de junio), con el objetivo de acoger a los huérfanos de periodistas (V. también las Órdenes de 13 de julio de 1940 [BOE de 24 de agosto] y 10 de noviembre de 1941 por las que se modifica su patronato).

En 1952, el artículo 14 del Decreto orgánico del MIT de 15 de febrero (desarrollado poco después por Orden de 10 de julio de 1952 [BOE de 24 de julio]) integra la institución en la Dirección General de Prensa. Diez años después, otra Orden ministerial (de 24 de octubre [BOE de 27 de octubre de 1962]) revisará una vez más su estructura y órganos de administración y gestión. En 1965, pasará a denominarse “Colegio Para Huérfanos de Periodistas” (Orden de 31 de marzo de 1965 [BOE de 13 de abril]).

Constituida con un capital inicial de cinco millones de pesetas aportados por Gobernación, la Institución San Isidoro será financiada con cargo a las publicaciones periódicas, que habían de aportar 0'05 pesetas por cada ejemplar vendido el primer martes de cada mes, y 0'04 pesetas por cada kilogramo de papel consumido y primado (caso especial es el de las *Hojas de los Lunes*, que habían de aportar un 2% sobre el producto neto obtenido de la publicidad) (Véanse art. 10 de Orden de 13 de marzo de 1952; art. 8.2.a.b de Orden de 10 de julio de 1952; art. 1 de Decreto 1525/59 de 18 de agosto de 1959 [BOE de 1 de septiembre]; Ley 176/65 de 21 de diciembre [BOE de 23 de diciembre]).

parte por las alzas de precios, y por consiguiente los salarios reales se mantenían a niveles muy bajos (Tamames, 1985: 639).

Y ello al menos hasta 1958, cuando la legalización de los convenios colectivos permitió la firma de cláusulas que contemplaban aumentos salariales anuales en función del incremento del coste de la vida.

La regulación de los sueldos mínimos de los periodistas fue, de cualquier modo, utilizada por el Régimen como un instrumento político más de intervención y control del sistema; como evidencia el hecho de que las mayores subidas salariales coincidieran con los años de cambios y traspasos en las competencias administrativas en materia de prensa.

7.2.2.1 La regulación salarial hasta los años sesenta

La primera disposición referida a las retribuciones mínimas que habían de percibir los periodistas fue firmada por Ramón Serrano Suñer el 19 de agosto de 1938 (BOE de 20 de agosto). La norma fijaba unos salarios “como contrapartida de las obligaciones que en aras del interés nacional les impone la Ley [de Prensa de 1938]” divididos en función de dos variables: la categoría profesional (para la que distinguía entre directores, redactores-jefe y redactores) y el ámbito geográfico (que quedaba dividido entre las poblaciones con más de veinte mil habitantes y poblaciones menos pobladas). La conjunción de ambos criterios se mantendrá, con leves modificaciones, hasta principios de los años setenta. Por otro lado, la Orden especificaba los cargos mínimos que habían de estar presentes en todas las redacciones; cargos entre los que se encontraba un “redactor político” (procedente del Ayuntamiento, Gobierno Civil, Diputación, Movimiento, etc.)⁷⁴⁵. La Orden de Serrano, auspiciada por el falangismo, se dirigía, según Javier Terrón, contra las publicaciones de la Iglesia que no podían mantener el número de cargos establecido por la norma y que habrían de prescindir en lo sucesivo de cuantos colaboradores firmaban en sus páginas desinteresadamente y sin poseer el título de periodista (Terrón, 1981: 60). La Orden de 19 de agosto sería completada, por último, por otra norma de igual rango aprobada por Gobernación el 17 de enero de 1940 (BOE de 18 de febrero): la disposición fijaba, poco antes del traspaso de las competencias de prensa a la Secretaría General del Movimiento, las plantillas y sueldos mínimos (que se elevaban hasta el 87'5% para los redactores jefes y hasta el 50% para los redactores con más de un año de antigüedad en la plantilla) para las publicaciones

⁷⁴⁵ Esto último quedaría atenuado, no obstante, por otra Orden de 30 de septiembre por la que se deja la organización de la redacción a la discreción del director.

radicadas en Madrid y Barcelona, poblaciones bajo gobierno republicano en agosto de 1938. Para el resto de la prensa seguiría en vigor la Orden de agosto de 1938.

La siguiente disposición llegaría también poco antes del siguiente cambio en las competencias: el Reglamento Nacional de Trabajo en Prensa quedaba aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo⁷⁴⁶ de 22 de diciembre de 1944, apenas unos meses antes del traspaso de la materia del Partido a Educación, feudo del acenepismo. Será ésta, pues, una de las últimas medidas sobre prensa acometidas por el falangismo. En ella se introducen varias novedades: (a) desaparecen de la regulación los directores de publicaciones, a quienes se les reservaría desde entonces un estatus laboral especial, al quedar vinculados a la empresa (que, según hemos visto, no lo había nombrado, o al menos no sin la interferencia administrativa) mediante un contrato civil de prestación de servicios; (b) se establece una nueva división geográfica con tres zonas que se mantendrá hasta principios de los años setenta: una zona especial que comprende Madrid y Barcelona; una zona 1ª, que incluye Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza; y una zona 2ª con el resto de poblaciones; y (c) introduce un incremento salarial de casi el 92% para los redactores de primera categoría (editorialistas y jefes de sección)⁷⁴⁷, además de un plus en función de la carga familiar de cada trabajador.

La Reglamentación Nacional del Trabajo llamada a sustituir a ésta no se aprobaría hasta poco antes del abandono por parte de los católicos propagandistas de sus competencias sobre la prensa: la Orden del Ministerio de Trabajo de 14 de julio de 1950 (BOE de 2 de agosto), un año antes del traslado de las competencias al MIT, establecía las nuevas condiciones laborales y, entre ellas, notables aumentos en las retribuciones mínimas: los redactores jefes veían incrementado su salario en un 76'5%, algo superior al 65'2% de incremento para los redactores de primera categoría y al 50% para los auxiliares de redacción. Por otro lado, el Reglamento introducía otras formas de retribución, como la participación en los beneficios que generara la empresa (art. 54)⁷⁴⁸, un plus de eventualidad del 15% sobre el salario base; y dos pagas extraordinarias (en Navidad y el 18 de julio). Durante la estancia de Gabriel Arias-Salgado al frente del MIT aún se concederían dos aumentos moderados más en 1954 (Orden de 27 de febrero [BOE de 4 de marzo]) y en 1956 (Orden de 26 de octubre [BOE de 30 de octubre]).

⁷⁴⁶ En 1944, de la misma forma que la prensa, Trabajo se encontraba también bajo el ministerio de un falangista, José Antonio Girón de Velasco.

⁷⁴⁷ La norma diferenciaba entre dos categorías de redactores: los redactores de primera categoría eran editorialistas y jefes de sección; mientras que la “segunda categoría” la componían el resto de redactores “de mesa” y “de calle”. Esta distinción, que viene a sustituir a la de la Orden de 1940 (que distinguía en dos categorías en función de la antigüedad), se mantendrá hasta 1962, y se recuperará en 1968.

⁷⁴⁸ Derecho laboral reconocido en el artículo 26 del Fuero de los Trabajadores.

7.2.2.2 La regulación salarial durante el tardofranquismo

El siguiente aumento relevante no llegaría, una vez más, hasta el cambio ministerial: la Orden de Trabajo⁷⁴⁹ de 9 de noviembre de 1962 (BOE de 12 de noviembre), aprobada cinco meses después de la llegada de Fraga al MIT, introducía dos novedades en los criterios de gradación salarial: (a) en primer lugar, un cambio en la división geográfica favorable a los periodistas de las provincias comprendidas en la zona 1ª, que quedaban unidos a los de la zona especial (con el consiguiente incremento salarial mínimo); y (b) en segundo lugar, la regulación del salario mínimo para los subdirectores, además de un cambio en las categorías profesionales, en las que ya no se diferencia entre redactores y auxiliares de primera y segunda categoría (lo que obviamente favorecía, pues incrementaban aún más sus salarios mínimos, a los de segunda categoría). Por lo demás, redactores jefes, auxiliares y redactores verían incrementada su percepción mínima en torno a un 56%. Esta tabla salarial mínima se mantendría hasta el último año del ministerio de Fraga: el 24 de septiembre de 1968 (BOE de 3 de octubre), un año antes de su salida del MIT, otra Orden de Trabajo concede el incremento salarial más cuantioso de la dictadura: los redactores jefes y auxiliares ven aumentada su retribución mínima en un 85%, frente al 122% de incremento para los redactores.

Ya con Alfredo Sánchez Bella en el Ministerio, un nuevo Reglamento Nacional de Prensa aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo⁷⁵⁰ de 23 de marzo de 1971 (BOE de 14 y 15 de abril) establecerá una subida moderada para todas las categorías (sobre todo en comparación con la anterior) del 30% hasta el 31 de diciembre de 1971, y de casi el 8% para el año siguiente. Finalmente, en 1974 otro Reglamento Nacional de Prensa incrementará las percepciones mínimas de todas las categorías en un 15%.

TABLA 19: Salario mínimo de periodistas (ptas./mes)

Año y Lugar	Categoría profesional					
	Director y Subdirector ⁷⁵¹	Redactor Jefe	Redactor		Auxiliar de redacción	
			Primera categoría	Segunda categoría	Primera categoría	Segunda categoría
1938 > 20.000 hab.	1000	800	400			

⁷⁴⁹ El Ministerio de Trabajo había dejado de estar, por otra parte, en poder de los falangistas, para pasar a un ministro con carnet del Partido, pero perteneciente al Opus Dei, Jesús Romero Gorría (1962-1969).

⁷⁵⁰ Ministerio que había vuelto a pasar a manos de un falangista: Licinio de la Fuente.

⁷⁵¹ Los sueldos de los años 1938 y 1940 corresponden a los directores de las publicaciones; los de 1962, 1971 y 1972, a los subdirectores.

	< 20.000 hab.	800	600	300		
1940	Madrid y Barcelona	2000	1500	600	500	
1944	Zona especial		1700	1150	900	700
	Zona 1		1350	1000	800	650
	Zona 2		1100	900	750	500
1950	Zona especial		3000	1900	1700	1050 850
	Zona 1		2400	1700	1500	960 720
	Zona 2		1900	1550	1400	850 600
1954	Zona especial		3.300	2.090	1.870	1.155 935
	Zona 1		2.640	1.870	1.650	1.056 792
	Zona 2		2.090	1.265	1.540	935 660
1956	Zona especial		3.960	2.915	2.650	1.795 1.530
	Zona 1		3.335	2.640	2.375	1.665 1.345
	Zona 2		2.885	2.420	2.225	1.500 1.170
1962	Zona especial	7000 (s)	6150	4550		2800
	Zona general	6375 (s)	5600	4125		2550
1968	Zona especial	12.950 (s)	11.370	10.100	8.417	5.180
	Zona general	11.655 (s)	10.233	9.090	7.575'3	4.662
1971		16.835 (s)	14.790	13.130	10.942	6.734
1972		18.132 (s)	15.928	14.140	11.784	7.252
1974		20.852 (s)	18.317	16.261	13.552	8.340

Fuente: elaboración propia

TABLA 20: Incrementos salariales en zona especial en relación con precios y coste de la vida

Año	Redactores jefe	Redactores de 1ª	Auxiliares de 1ª	Precios	Coste de la
-----	-----------------	------------------	------------------	---------	-------------

	Increment o	Índice de variación 1938=100	Increment o	Índice de variación 1938=100	Increment o	Índice de variación 1944=100	(1931=100)	vida (1936=100) ⁷⁵²
1938		100		100				
1940	87'5%	187'5	50%	150				
1944	13'3%	212'5	91'7%	287'5		100	274'7	256'9
1950	76'5%	375	65'2%	475	50%	150	580'3	529'3
1954	10%	412'5	10%	522'5	10%	165	809'1	584'0
1956	20%	495	39'5%	728'7	55'4%	256'4	916'2	643'1
1962	55'3%	768'7	56%	1137'5	55'9%	400	1.321'4	117'4
1968	84'9%	1421'2	122%	2525	85%	740	1.610'5	176'0
1971	30%	1848'7	30%	3282'5	30%	962	1.715'7	108'0
1972	7'7%	1991	7'7%	3535	7'7%	1036	1.813'6	116'9
1974	15%	2289'6	15%	4065'2	15%	1191'42	2.522'0	163'2

Fuente: elaboración propia y Tamames, 1988: 208

7.3 Las sanciones administrativas

La Administración tardofranquista tampoco renunció a incidir en la vida económica de las empresas de prensa a través de los recursos coercitivos de los que venía disponiendo desde el final de la Guerra Civil y que ratificó la Ley Fraga. Entre 1966 y 1975, el Ministerio de Información se reservó la potestad de sancionar a las empresas periodísticas por la comisión de infracciones⁷⁵³ no necesariamente constitutivas de delito, y al margen de cualquier sentencia judicial de culpabilidad. En función de su gravedad, se impusieron dos tipos de sanciones administrativas: multas y suspensiones temporales de publicaciones. Ambas tuvieron graves repercusiones sobre las cuentas de resultados de las empresas; que, en unos casos, vieron gravados sus gastos extraordinarios; y, en otros, mermadas sus fuentes de ingresos de explotación.

Las consecuencias para las empresas editoras de diarios fueron en muchos casos críticas, e incluso en algunos, funestas. Los perjuicios que acarrearón multas y suspensiones reforzaron, sin duda, la capacidad coactiva del Ministerio, especialmente sobre unas empresas ya debilitadas económicamente por el alza del precio del papel, la

⁷⁵² En los años 1958 y 1968 se produjeron sendos cambios de base para el conjunto nacional, por lo que el coste de la vida en aquellos años vuelve a equivaler a 100 (ambos cambios han sido señalados en la tabla mediante dos dobles líneas de separación).

⁷⁵³ La infracción administrativa difiere esencialmente de la falta administrativa. La primera se da en el marco de relaciones especiales de sujeción entre un grupo organizado, privado o público, y el sujeto de derecho. Éste, en virtud de dicha relación especial, asume ciertos deberes para con aquél; deberes cuya infracción acarrea sanción. Por el contrario, la falta administrativa se deriva de la sujeción jurídica de todos los administrados con respecto a la Administración a través de reglamentos de policía general (Molinero, 1971: 313).

supresión de las primas por su consumo y el estancamiento del precio de venta de ejemplares. A ello contribuyó también el hecho de que su aplicación dependiera de la arbitrariedad administrativa en el enjuiciamiento de los actos; lo que vino posibilitado por la fijación en el marco legal de unos supuestos constitutivos de infracción más que difusos, y en los que, en la práctica, cabía incluir cualquier actividad o contenido molesto para el Régimen.

La indefensión del sector ante la capacidad coercitiva y coactiva de la Administración se vio, no obstante, atenuada en cierto modo por la aceptación en 1966 del recurso contencioso-administrativo. La inclusión en la LPI de la posibilidad del recurso constituye una de las novedades más celebradas de la Ley, además de uno de los pocos mecanismos contemplados por el legislador contra la indefensión de empresas y publicaciones. No en vano, su exclusión hasta 1966 de los procedimientos que afectaban a la prensa había conferido al Régimen “un ilimitado poder administrativo para controlar el ejercicio de las libertades individuales” (Molinero, 1971: 333).

El artículo 71.2 de la Ley Fraga establecía que “contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. Tal posibilidad no se encontraba, sin embargo, en el proyecto original del legislador, pues no hay referencia alguna al recurso en el anteproyecto de ley⁷⁵⁴. El artículo referente a la posibilidad de recurso contencioso-administrativo quedaría incorporado al proyecto de ley a propuesta de la comisión especial del Consejo Nacional de Prensa (cuya iniciativa fue aceptada tanto por la comisión permanente como por el pleno del CNP, que la elevó al MIT), que en este caso sí fue escuchada por el legislador. Con el artículo —además de por la disposición derogatoria única—, quedaba revocado el artículo 40.b de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956 (BOE de 28 de diciembre); según el cual, no se admitía recurso contencioso-administrativo para “los actos dictados en ejercicio de la función de policía sobre la prensa, radio, cinematografía y teatro”. La norma legal vigente remontaba, pues, a la Ley de Prensa de 1938, por la que la prensa podía recurrir únicamente, en caso de ser sancionada administrativamente, ante el Jefe del Gobierno, quien resolvía “sin ulterior recurso” (art. 21).

La introducción de la posibilidad de recurso contencioso-administrativo en 1966 acotó, pues, el “poder ilimitado” al que se refería César Molinero; aunque de ningún

⁷⁵⁴ De hecho, según relata Juan Beneyto, al recibir en la primavera de 1965 el anteproyecto de manos de Pío Cabanillas, éste no dejó de advertirle lo siguiente: “Por ser obra mía puedo deciros que sólo hay dos puntos [del anteproyecto] intocables: las limitaciones al principio de libertad y la excepción del recurso contencioso” (Beneyto, 1986: 222). A pesar de la advertencia de Cabanillas, uno y otro punto serían objeto de discusión y modificación durante el proceso de tramitación de la norma.

modo supuso una merma de poder inaceptable para la Administración. Ésta contaba, como vimos en el caso del diario *Nivel* entre otros, con suficientes mecanismos legales y extralegales como para hacer desistir a ciertos sancionados de buscar amparo en el Tribunal Supremo, cuya lentitud decisoria, por otra parte, tampoco jugaba a favor de empresas y periodistas.

7.3.1 Supuestos de infracción administrativa

La ambigüedad de los supuestos constitutivos de infracción fijados por el legislador en 1966 garantizó a la Administración un margen de discrecionalidad más que amplio en la aplicación de sanciones. En la regulación de las infracciones merecedoras de sanción, la Ley de Prensa de 1966 no fue menos vaga e imprecisa que la Ley de 1938⁷⁵⁵; por lo que la indefensión e inseguridad jurídica que padecieron las empresas de prensa durante el tardofranquismo no fue mucho menor —a pesar de la posibilidad de recurso contencioso-administrativo— que la sufrida en las décadas anteriores.

El artículo 66 de la LPI prescribía la pervivencia de una jurisdicción administrativa paralela a la jurisdicción penal⁷⁵⁶: “La infracción de los preceptos legales y reglamentarios en materia de Prensa e Imprenta será sancionada en vía administrativa,

⁷⁵⁵ La Ley de Prensa de abril de 1938 incluía en el artículo decimoctavo como hechos merecedores de sanción cuestiones tan vagas como la merma del prestigio de la Nación y el Régimen, el entorpecimiento de la labor gubernativa y la difusión de “ideas perniciosas”: “Independientemente de aquellos hechos constitutivos de delitos o faltas que se recogen en la legislación penal, el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa tendrá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles”. Por si fuera poco, la Ley invitaba a todo aquel que se sintiera agraviado —fueran autoridades, personas naturales, o representantes de personas jurídicas públicas o privadas— por cualquier escrito publicado en la prensa, a denunciarlo ante la Administración, sin contemplar en cambio garantía alguna para las empresas y publicaciones (art. 18 § 2). Y completaba el cuadro de hechos merecedores de sanción con el artículo decimonoveno, por el cual, “También serán sancionadas las faltas de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, las de desvío a las normas dictadas por los servicios competentes en materia de prensa”. Quedaban pues establecidos en 1938, unos hechos constitutivos de sanción de carácter evidentemente político y que, en la práctica, podían abarcar cualquier actuación o contenido que determinara la Administración.

⁷⁵⁶ El artículo 64.1 de la LPI afirmaba que “La responsabilidad criminal será exigida ante los Tribunales de Justicia, de conformidad con lo establecido en la legislación penal y por los trámites que establecen las leyes de procedimiento”.

El 4 de abril de 1966, la circular 34.314 dirigida a las Delegaciones Provinciales del MIT (encargadas de ordenar los secuestros administrativos) informaba de la legislación penal y procesal española en materias de prensa e imprenta. La misma información había sido remitida unos días antes en otra circular (3/66 de 25 de marzo) por el fiscal general del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, a los fiscales de las Audiencias territoriales y provinciales del Tribunal de Orden Público. (Ambas circulares se encuentran en AGA sig. (3)49.21 c. 65136. Los documentos archivados también incluyen la relación de artículos del Código Penal en que quedan tipificados los delitos por medio de prensa e imprenta).

independientemente de que sea o no constitutiva de delito”. Ningún artículo de la Ley fijaba, por otra parte, plazo alguno para la prescripción de dichas infracciones, como tampoco habían sido fijados plazos para la acción administrativa en la Ley de Procedimiento Administrativo ni en la Orden del MIT de 22 de octubre de 1952, en la que se establecía el procedimiento sancionador⁷⁵⁷. Habrá que esperar, de hecho, hasta el último año de la dictadura, para que la Administración fije el plazo de prescripción en los dos meses posteriores a su conocimiento de los hechos (Decreto 799 de 20 de marzo de 1975 [BOE de 18 de abril]). La pervivencia de esta doble jurisdicción, penal y administrativa, no dejaría de motivar las quejas de algunos procuradores que, como en el caso de Alberto Martín Artajo⁷⁵⁸, consideraban que podía violar el principio *non bis in idem*. A pesar de ello, el legislador no sólo mantendrá la doble jurisdicción, sino que abrirá, dentro de las responsabilidades administrativas, una doble vía de sanción. La Ley de Prensa de 1938 contemplaba únicamente la posibilidad de castigo administrativo por infracciones cometidas a través de los textos publicados. La Ley de 1966, en cambio, establecía dos tipos diferentes de infracciones y, por tanto, dos motivos diferentes de sanción: por un lado, del mismo modo que la Ley de 1938, aludía a responsabilidades derivadas de los contenidos de las publicaciones; pero, por otro, consideraba también otras infracciones derivadas del incumplimiento del requisito de informar a la Administración, mediante la comunicación al REP, de los datos de su estructura jurídica y económica. Es decir: las empresas de prensa hubieron de afrontar durante el tardofranquismo dos tipos de responsabilidades cuyo incumplimiento acarrearía sanción: unas dimanadas de sus contenidos, y otras derivadas de la estructura económica y jurídica adoptada, así como de su obligación de comunicarla a la Administración.

⁷⁵⁷ Dos sentencias de 1969 del Tribunal Supremo, de 27 de enero y de 27 de septiembre, sientan jurisprudencia sobre tal plazo, que ha de contar desde el momento en que sea conocida por la Administración la comisión de la infracción. Según Molinero, dicho momento se produce al quedar depositados en el Ministerio los ejemplares antes de su publicación (de conformidad con el artículo 12 de la LPI): “A mi juicio [opina Molinero] la Administración, en el momento de la admisión de los diez ejemplares del depósito previo, efectúa un acto jurídico de conocimiento en su aspecto formal y de procedimiento, como manifestación de voluntad determinante en el nacimiento de un acto administrativo [...]” (Molinero, 1971: 317). Ello en el caso de las infracciones por contenidos de la prensa, como es obvio. En el caso de infracciones ligadas a la estructura económica u organizativa de la empresa la cuestión no está tan clara, dado que el conocimiento de la Administración no podría computarse a partir de la comunicación al Registro de unos datos erróneos, sino más bien del descubrimiento legal (a través de la inspección) o extralegal (a través del aparato de vigilancia administrativo) de las irregularidades.

⁷⁵⁸ Martín Artajo manifestaría sus reservas ante la duplicación de jurisdicciones el primero de febrero de 1966, durante el debate en Cortes del proyecto de ley. Tanto su intervención, como la réplica de Pío Cabanillas se encuentra en c.t. 212/5 y ss., en ACD.

Este último tipo de responsabilidades quedaba recogido en el artículo 28.2 de la LPI⁷⁵⁹, que concedía el plazo de un mes a las empresas periodísticas para informar al REP de cualquier cambio en su plantilla, gobierno corporativo y estructura económica. Transcurrido ese tiempo, cualquier modificación no notificada de la estructura de la empresa, su accionariado, sus órganos directivos y administradores, los directores y redactores de sus publicaciones y “en general, cuantos actos signifiquen un cambio de alguna de las circunstancias de inscripción [en el REP]”, sería motivo de sanción. Esta vía inédita de castigo por el incumplimiento de los requisitos formales y de la obligación de transparencia de las empresas se reveló sumamente eficaz, pues permitió al Ministerio encubrir sanciones políticas tras motivos técnicos. Fue ésta precisamente, según vimos, unas de las razones del celo mostrado por la Administración en la vigilancia de la estructura de las empresas de prensa: como apuntamos en el anterior capítulo, únicamente el conocimiento exhaustivo de su propiedad, gobierno y situación económica permitía al MIT descubrir irregularidades técnicas que aducir en sus persecuciones y castigos políticos. Así había ocurrido, como se recordará, con *Madrid* y *Nivel*, por poner los dos casos más extremos. En estos y en otros en los que la sanción no llegó a la expulsión del sistema, la nueva vía abierta por el artículo 28.2 permitía a la Administración castigar, sin necesidad de intervención judicial, contenidos políticamente inconvenientes sin el escándalo público que acarreaban las sanciones por motivos estrictamente políticos.

A pesar de todo, la posibilidad de justificar la aplicación de sanciones por motivos técnicos no acabó con los castigos administrativos derivados de los contenidos de las publicaciones. Este segundo tipo de infracciones se trasladó a la LPI en los artículos 68.1.a, 67.c y, sobre todo, 67.a, que el MIT no dudó en invocar, sin mayores disimulos,

⁷⁵⁹ También el artículo 67.b de la Ley aludía a estas responsabilidades al considerar infracción administrativa muy grave la difusión de prensa extranjera que no cumpliera los requisitos formales necesarios para su circulación legal. Estos requisitos habían quedado establecidos en el artículo 55, así como en el Decreto posterior 747/66 de 31 de marzo (BOE de 4 de abril). El artículo 55 de la LPI establecía que

§ 1. “Las Empresas importadoras de publicaciones editadas en el extranjero habrán de inscribirse, antes de dar comienzo al ejercicio de sus actividades, en un Registro público que se llevará en el Ministerio de Información y Turismo, con la denominación de ‘Registro de Empresas Importadoras de Publicaciones Extranjeras’. A estas Empresas les será de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las Empresas editoriales”.

§ 2. “La difusión en territorio nacional de los impresos editados en el extranjero, de cualquier clase y en cualquier lengua en que estén redactados, se ajustará a lo que, en armonía con lo preceptuado en esta Ley, se disponga en las normas reglamentarias correspondientes, en las que se determinarán los requisitos necesarios para proceder a la difusión de dichos impresos, así como los relativos a la identificación de los importadores responsables”.

Posteriormente, el Decreto 747 confirmaba la necesidad de inscripción en registro público y la autorización administrativa de la Dirección General de Prensa como requisito previo a la circulación de las publicaciones importadas.

entre 1966 y 1975. El artículo 68.1.a consideraba como infracción grave la no inserción en prensa de las notas o comunicados remitidos por la Administración de acuerdo con el artículo sexto de la Ley⁷⁶⁰; mientras que el artículo 67.c prescribía como infracción muy

⁷⁶⁰ La inserción de notas oficiales quedaba regulada en el artículo 6 de la LPI, desarrollado posteriormente por el Decreto 750/66 de 31 de marzo (BOE de 4 de abril). Ambas disposiciones obligaban a las empresas de prensa a publicar todas aquellas notas, comunicaciones o noticias que la Administración les remitiera y considerara oportuno difundir: “Las publicaciones periódicas deberán insertar y las agencias informativas distribuir, con indicación de su procedencia, las notas, comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las Entidades Públicas consideren necesario divulgar y sean enviadas a través de la Dirección General de Prensa, que las cursará cuando las estime procedentes para su inserción con la extensión adecuada”. Tales informaciones serán remitidas sin discriminación entre publicaciones análogas, sujetándose a las normas que reglamentariamente se determinen.

La discrecionalidad que permitía el artículo en la calificación del “interés general” de las notas, así como en la consideración de la pertinencia de su divulgación, no dejó de generar cierta alarma entre los procuradores en Cortes que tramitaron el proyecto de ley y que vieron tras ellas una vuelta a las consignas, suprimidas oficiosamente en 1962: “Yo quiero manifestar [proclamará en la sesión de la comisión de Cortes del 18 de enero de 1966 Torcuato Luca de Tena] que reconozco el derecho del Gobierno y la obligación de los periódicos a publicar las notas gubernamentales, pero [...] estamos ante un clarísimo caso de posibles abusos de la libertad de prensa, que se trata de defender por medio de estas inserciones, que, al ser indiscriminadas recuerdan en cierto modo las humillantes inserciones de carácter obligatorio, felizmente suprimidas, de tan mal recuerdo, de todo un cuerpo profesional (c.t. 51/9. En ACD). Este recelo ante el “mal uso” que pudiera hacer la Administración de su derecho de difusión de informaciones de verdadero interés general había sido ya manifestado durante las fases previas de elaboración de la Ley. Tres fueron, en concreto, las preocupaciones más fundadas expuestas durante el proceso: (a) que quedaran indeterminados y por tanto sujetos al arbitrio administrativo –como así fue– los criterios de calificación de “interés general” de una nota o comunicado. En este sentido se manifestó Emilio Romero en su enmienda 23 al proyecto (En ACD, leg. 2312, num. 4) en la que reclamaba la remisión a un reglamento en el que quedaran fijados tales criterios. La propuesta fue desestimada, y tampoco el Decreto 750/66 recogerá definición alguna del “interés general”. (b) También se evidenció cierta preocupación ante el hecho de que la inserción de las notas pudiera dar lugar a discriminaciones entre publicaciones. Ello motivó una nota en el informe del Instituto de Estudios Políticos al anteproyecto de ley (En ACD, *ibídem*), así como la enmienda número 42 al proyecto, firmada por Lucio del Álamo Urrutia. La demanda fue escuchada por el legislador y trasladada a un segundo párrafo incorporado al artículo, que hacía explícita la condición de que las notas fueran remitidas entre publicaciones análogas “sin discriminación” (v. *supra*). (c) La mayor preocupación de quienes intervinieron en la elaboración y tramitación de la ley se refería, no obstante, a los perjuicios económicos que la publicación de las notas pudiera acarrear para la prensa. Así lo expresaba Emilio Romero durante el debate en Cortes: “La empresa periodística está comprometida por razón de un precio político que es seguramente el más bajo de Europa [...] Prácticamente, los periódicos viven de la publicidad. Entonces, si restamos a un periódico de gran circulación extensas superficies, le mermaremos fuertemente sus posibilidades. No podemos dejar, por tanto, este tipo de comunicaciones, por la importancia que pueden tener, al arbitrio de la Administración. Mi propuesta consiste en que de alguna manera tiene que figurar en este artículo una invitación a la concisión de estas publicaciones, para que la empresa periodística pueda vivir con holgura” (c.t. 50/4 de 18 de enero de 1966. En ACD).

La cuestión había sido introducida antes por el Consejo Nacional de Prensa y por el Instituto de Estudios Políticos en sus informes al anteproyecto, y sería recogida por el propio Emilio Romero (enmienda 23), Luis Sánchez Agesta (enmienda 34) y Mariano Rioja (enmienda 85). Finalmente, la Ley no fijará una limitación específica del espacio que podían ocupar las notas; aunque sí añadiría, en cambio, una referencia a la “inserción adecuada” que habrían de guardar, aunque tal adecuación quedara también al arbitrio administrativo. Poco después, el artículo 3.b del Decreto 750/66 de 31 de marzo de 1966 (BOE de 4 de abril) establecería que tal extensión “responderá a un criterio periodístico de máxima concisión, siempre que los diversos aspectos de su contenido queden suficiente y precisamente expuestos”. Tampoco se recogió en la Ley la obligatoriedad de

grave la publicación de “disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan el carácter de reservados conforme al artículo 7⁶¹”. Sin embargo, el tipo de responsabilidad más controlada y exigida fue sin duda la contemplada en el artículo 67.a, de acuerdo con el cual constituía infracción administrativa muy grave el incumplimiento de los límites a la libertad de prensa establecidos en el artículo segundo de la LPI. De los 360 expedientes administrativos incoados a empresas editoras de diarios entre 1967 y 1975, 274 (el 76’11%; v. tabla 22) lo fueron por supuestas transgresiones de las limitaciones a la libertad de prensa recogidas en dicho artículo.

Quizás porque los procuradores advirtieron pronto su importancia, el artículo segundo de la LPI fue el más discutido de todo el texto legal⁷⁶². Hasta 18 enmiendas escritas se registraron en las Cortes a propósito de la disposición, cuyo debate en la Comisión de Información y Turismo —acometido, según su presidente, “concepto por

pagar por dichas inserciones, tal y como había sido reclamado por Emilio Romero (enmienda 23) y Nieto García (c.t. 55/4 de 18 de enero. En ACD).

⁷⁶¹ Se refiere, concretamente, al segundo párrafo del artículo séptimo, que reza: “La actividad de los expresados órganos [el Gobierno, la Administración y las Entidades Públicas] y de la Administración de Justicia será reservada cuando por precepto de la Ley o por su propia naturaleza, sus actuaciones, disposiciones o acuerdos no sean públicos o cuando los documentos o actos en que se formalicen sean declarados reservados”.

Un año después se aprobaba la Ley 9/68 de 5 de abril (BOE de 6 de abril de 1968), sobre Secretos Oficiales (Desarrollada por Decreto 242/69 de Presidencia del Gobierno, de 20 de febrero [BOE de 24 de febrero de 1969]). La Ley endurecía la LPI de 1966, al restringir aún más la libertad de expresión por medio de impresos proclamada en su artículo primero. El propio Manuel Fraga reconocerá en sus memorias que la Ley de Secretos Oficiales no había sido sino “una inevitable concesión, para salvar la Ley de Prensa” (Fraga, 1980: 218). El artículo 13 de la Ley de Secretos Oficiales establecía: “Las actividades reservadas por declaración de ley y las ‘materias clasificadas’ no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido, fuera de los límites establecidos por esta Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado conforme a las Leyes penales, si procediere; por vía disciplinaria, en su caso, y mediante aplicación de las sanciones administrativas que corresponda. En los dos últimos casos la infracción será considerada como falta muy grave”. La consideración de una materia como “clasificada” quedaba al arbitrio de (art. 3.1): el Consejo de Ministros y sus miembros, los jefes de misiones diplomáticas en el extranjero y el jefe del Alto Estado Mayor. Con carácter de urgencia y de modo provisional, podían también tomar esta decisión los directores generales de Seguridad y de la Guardia Civil, los jefes del Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos, el jefe de la Defensa Aérea, los capitanes generales de las Regiones Militares, departamentos Marítimos y Regiones Aéreas, y los gobernadores Civiles. Eran susceptibles, por último, de dicha clasificación “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o comprometa los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional” (art. 2).

⁷⁶² También ha sido, por otra parte, el artículo que más atención ha suscitado entre juristas, historiadores y cuantos se han ocupado del estudio de la legislación franquista sobre prensa; hasta tal punto, que su aplicación ha llegado incluso a inspirar obras monográficas (Crespo, 1975; 1988), por lo que no nos detendremos en él más allá de lo imprescindible.

concepto y en no pocos momentos palabra por palabra”⁷⁶³ — ocupó todo el día 17 de enero además de la mañana del día 18. Tras la discusión, el artículo quedó como sigue:

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones reconocidos en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.

Tres fueron las modificaciones más relevantes que experimentó el texto con respecto a la formulación original contenida en el anteproyecto de ley⁷⁶⁴:

(a) *Sobre el concepto de “respeto a la verdad y a la moral”*. Pío Cabanillas llegó a reconocer, durante el debate mantenido por la comisión de Cortes, que esta primera limitación había sido copiada del Decreto del Concilio Vaticano II, que exigía que “la información sea siempre verdadera y que respete debidamente las leyes morales del hombre” (c.t. 26/2 a 26/3 de 17 de enero. En ACD). En la enunciación original del anteproyecto aparecían los términos en orden inverso: primero se imponía el respeto a la moral y después a la verdad. El cambio vino auspiciado por monseñor Asís Garrote, obispo de León (c.t.12/3 de 17 de enero).

Más debate suscitó —y menos éxito obtuvo— la propuesta de adjetivación de la moral como “católica”. La propuesta había sido formulada por el acenepista Fernando Martín-Sánchez Juliá en abril de 1964 y recogida por la comisión especial y el pleno del

⁷⁶³ Discurso de Francisco Abella ante el Pleno de las Cortes, 15 de marzo de 1966. En *Prensa e Imprenta*. Colección Textos Legales, Gabinete Jurídico Administrativo del Boletín Oficial del Estado, Madrid (España), 1974 (edic. orig. 1966).

⁷⁶⁴ Así rezaba el anteproyecto: “La libertad de expresión reconocida en el artículo 1º no tendrá más límites que los impuestos, por el respeto a la moral y a la verdad; el acatamiento del orden público vigente; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento de la paz pública interior y exterior; la reserva debida a la acción del Gobierno, de las Cortes y de la Administración; la independencia de los tribunales en la aplicación de las Leyes, y la salvaguardia de la intimidad y honor privados”. En AGA, sig. (3) 49.21 c. 65137. Otras modificaciones no tan relevantes afectaron al límite de la “independencia de los Tribunales” y a “la salvaguardia de la intimidad y el honor privados”. También se desechará la propuesta de Torcuato y Juan Ignacio Luca de Tena de extender estos límites del anteproyecto a todos los medios de comunicación de masas. Considera Juan Ignacio Luca de Tena, vocal del CNP, que “Sería injusto que para los periódicos y las revistas que por la Radio y la Televisión se puedan dar noticias o comentar temas que aquéllos no pueden publicar de acuerdo con las normas de la Ley de Prensa”; por lo que propone que “hasta tanto no se promulgue una Ley que específicamente regula la expresión de las ideas a través de la radio y de la Televisión, se declaren de aplicación a estos medios de difusión por lo menos las limitaciones de la libertad de expresión establecidas en esta ley”.

CNP⁷⁶⁵. Durante el debate en Cortes, no fueron pocos los procuradores que defendieron la propuesta⁷⁶⁶, que acabaría incluso siendo aceptada por Pío Cabanillas. Aunque finalmente no se incluyera en Ley, este punto del artículo segundo se aprobó con diez votos en contra (la mayor discrepancia manifestada en la tramitación del proyecto en Cortes) y una salvedad, redactada por el ponente Fernando Martín-Sánchez e incluida en las actas, en la que todos los procuradores afirmaban entender por única moral la católica⁷⁶⁷. La transgresión del respeto a la verdad y a la moral acabó siendo la segunda infracción más sancionada durante el tardofranquismo, sólo por detrás de la crítica “irrespetuosa” de la acción política y administrativa (v. *infra*, apartado 7.3.2).

(b) *Sobre el respeto a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales*. Esta parte del artículo no aparecía en el anteproyecto de ley: fue incorporada al proyecto por la Comisión de Cortes en sustitución del respeto al “orden constitucional vigente”. La cuestión había suscitado cuatro enmiendas escritas⁷⁶⁸, todas ellas desoídas por la ponencia. Lejos de cuestionar la inmunidad de la estructura legal del Régimen, las enmiendas trataban de proponer fórmulas alternativas que preservaran tal estructura de cualquier ataque o cuestionamiento. El cambio de los términos se produjo durante el debate en comisión, con el voto en contra de Emilio Romero, para quien, con la fórmula, se cerraba la posibilidad de crítica a las leyes “constitucionales”. En efecto, el obligado respeto a los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Régimen blindaba de cualquier crítica o ataque a los pilares legales sobre los que se erigía el orden franquista.

(c) *Sobre la crítica de la acción política y administrativa*. Este fue uno de los puntos más controvertidos del artículo, en tanto implicaba la posibilidad o imposibilidad de incluir en la prensa críticas políticas a la acción del Gobierno. La eliminación del límite de la “reserva debida a la acción del Gobierno” incluido en el anteproyecto había sido ya

⁷⁶⁵ En su enmienda particular, Martín-Sánchez argumentaba: “El Consejero que suscribe, al igual que monseñor Cunill, Representante de la Jerarquía Eclesiástica en este Consejo Nacional de Prensa, cree conveniente añadir la palabra CATÓLICA [*sic*], para señalar una moral determinada sin ningún género de anfibologías, ni posibilidad de interpretaciones o confusión con otras ‘morales’ distintas”. La enmienda particular de Martín-Sánchez se encuentra en AGA sig. (3)49.21 c. 65136, mientras que los documentos emitidos por el CNP pueden consultarse en AGA sig. (3)49.21 c. 65137.

⁷⁶⁶ Bien es cierto que otros procuradores se manifestarán en contra, como el ponente Antonio Pedrosa Latas, Torcuato Luca de Tena y Emilio Romero, quien con su habitual claridad advertirá que no adjetivando la “moral”, evitaba el legislador español ser “más papista que el Papa”.

⁷⁶⁷ “Todos los procuradores presentes [aclaró la salvedad] estamos unánimes en que, sea cualquiera la fórmula que salga triunfante, creemos que la moral, con calificativo o sin él, en la cual todos comulgamos, es la moral entendida como la entiende la Iglesia Católica. Por lo tanto, en punto dogmático o religioso no hay discrepancia alguna” (c.t. 29/2 de 17 de enero).

⁷⁶⁸ Enmiendas número 6, de Jesús López Medel; 106, de Eugenio López y López; 107, de Eduardo Villegas Girón; y 110, de Manuel Conde Bandrés.

propuesta por el Instituto de Estudios Políticos⁷⁶⁹; así como, posteriormente, por seis enmiendas al proyecto presentadas en Cortes por los procuradores Rivas Guadilla⁷⁷⁰ (enmienda número 5), Espinera (núm. 7), Fagoaga (36), Conde Bandrés (110), Chozas (111) y Luca de Tena (109), quien argumentaba que la obligación de “reserva” a la acción gubernativa

cercena lo que constituye una de las funciones fundamentales de los periódicos: velar por los intereses de la sociedad y de los ciudadanos [...] Y es que una cosa es el orden constitucional, y otra, muy distinta, la acción del Gobierno. El primero debe ser inatacable, pero no la segunda (En ACD, leg 2312).

La ponencia acabará por proponer la sustitución de la obligación de “reserva” por la de “respeto” a la acción del Gobierno, lo que tampoco satisfará a los procuradores, pues, como Luca de Tena se encargará de recordar, el respeto se le debe a las personas, no a sus acciones, que pueden perfectamente no ser respetables. De ahí la fórmula final contenida en la Ley, que consagraba el “respeto debido a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa”; es decir, se aceptaba, al menos formalmente, la posibilidad de crítica política, limitando su destinatario y modo de ejercerla a lo que la Administración considerara fueran términos respetuosos⁷⁷¹. Para tener una idea aproximada de lo que la Administración consideraba era una crítica respetuosa, baste señalar que, como enseguida comprobaremos, la transgresión de este supuesto fue la infracción que más sanciones ocasionó a los diarios durante el tardofranquismo.

⁷⁶⁹ En ACD, leg. 2312, num. 4.

⁷⁷⁰ Rivas Guadilla argumenta que “Tanto la acción política del Gobierno, como la administrativa, deberán estar sujetas a examen y crítica, dentro de las normas y responsabilidades que la propia Ley establece, y el derecho a ejercer uno y otra nos parece de orden natural y su ejercicio de la mayor eficacia”.

⁷⁷¹ Ello quedaría refrendado años después por el Tribunal Supremo en varias sentencias: véanse, por ejemplo, cons. 2º de s. de 21 de junio de 1972, r.c.j. Aranzadi 3240/72; y cons. 6º de s. de 5 de febrero de 1970, Aranzadi 560/70. En otra sentencia de 23 de marzo de 1974 (considerando 1º) se aseguraba: “Si bien el respeto a la autoridad no impide el ejercicio de una crítica responsable, puesto que frente a los derechos del Estado que como representante del bien común tiene que tener los atributos necesarios para hacer posible la defensa y garantía de los derechos de todos los nacionales y la de sus propios derechos naturales [...] por lo que es incuestionable que el Estado o poder público tiene que ser siempre firme y robusto para poder cumplir con su deber; pero esto no lleva consigo ni impide el derecho que debe reconocerse a los ciudadanos a manifestar su parecer sobre la actividad de los poderes públicos y opinar o criticar libremente sobre las obligaciones o incluso sacrificios que se les impongan, *derecho de crítica que la Ley de Prensa no prohíbe, pues sólo considera punible la falta del respeto debido a las instituciones y a las personas, no la crítica a la labor del Gobierno, con tal que se respete debidamente la autoridad legítima y se dejen a salvo, en todo caso, a las personas que desarrollan una labor de Gobierno y las exigencias de la justicia y la verdad* [...] pues sólo será legítima aquella [crítica] que sin exponer al menosprecio público o a la persona englobada en la alusión crítica permita comprobar o corregir, si existen, deficiencias en las funciones públicas [el subrayado es nuestro]”.

La vaguedad de los límites a la libertad de prensa contenidos en el artículo segundo mantenía pues intacto el margen de acción abierto en 1938 para la imposición de sanciones administrativas. Conceptos tan genéricos como el respeto a la moral y a la verdad concedían, en la práctica, poco menos que una carta blanca para la Administración; que quedaba, de 1966 en adelante, encargada de dictaminar qué había de entenderse por “moralidad”, “verdad”, “orden público” y cuantos conceptos difusos había consagrado la Ley. Según reconocía la DGP en una Resolución de 7 de noviembre de 1967, “La Ley de Prensa, al no tipificar las posibles faltas de respeto a la moral [...] otorga a las autoridades administrativas competentes la facultad de decidir dichos límites [...]” (Cit. en Molinero, 1971: 178; v. también Resolución de la DGP de 26 de julio de 1968, cit. en Molinero, *op. cit.*: 180). Tal facultad quedaría limitada, no obstante, por la intervención del Tribunal Supremo, que había llegado incluso a defender la inconcreción del artículo⁷⁷² y comenzaría a fijar doctrina sobre la materia desde 1969⁷⁷³. No en vano, dos años antes la reforma del Código Penal (Ley 3/67 de 8 de abril [BOE de 11 de abril de 1967]) había tipificado como delito la transgresión de los límites del artículo segundo, endureciendo aún más las condiciones para empresas y periodistas⁷⁷⁴. Así,

⁷⁷² En el segundo considerando de la sentencia de 29 de mayo de 1969 (r.c.j. Aranzadi 3256/69), puede leerse: “[...] las limitaciones fijadas en el artículo 2º, por referirse a conceptos abstractos, tienen que ser necesariamente inconcretas [...]” (cit. En Crespo, 1988: 20).

⁷⁷³ El artículo segundo fue, junto al derecho de réplica, uno de los que más sentencias originó del Tribunal Supremo durante los últimos años del franquismo. Pedro Crespo de Lara ha contado hasta 104 sentencias del Supremo por infracciones de los límites a la libertad de prensa entre 1966 y 1975. Buena parte de ellas pueden encontrarse, además de en los repertorios cronológicos de jurisprudencia de Aranzadi referenciados, en Crespo, 1975 y 1988.

De acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Supremo, la “verdad”, “no es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente del que se expresa, sino con el concepto objetivo general [...]” (cons. 3º de s. de 17 de marzo de 1969, r.c.j. Aranzadi 1547/69); es decir, “la concordancia existente entre el hecho acaecido y su narración” (cons. 2º de s. de 22 de enero de 1979, r.c.j. Aranzadi 208/70). Mientras que la “moral social o pública” (y no la moral individual o ética) queda, por su parte, identificada con la “moral cristiana”, de acuerdo con el sentido que, según comprobamos, otorgaban al concepto los procuradores franquistas: “La conciencia moral [dictamina el Tribunal Supremo en el considerando 2º de la sentencia de 22 de enero de 1972], por ser [...] [un concepto] abstracto, relativo, variable, puede ser diverso en los distintos países, ha de concretarse y modularse en cada Estado con arreglo a sus Leyes Fundamentales, y en consecuencia, por lo que España se refiere, tanto las Leyes de Principios del Movimiento Nacional y de Sucesión en la Jefatura del Estado, como el Fuero de los Españoles, consagran la confesionalidad católica del Estado, la conciencia nacional ha de formarse, conforme a los principios de la moral católica, estatales [...]” (r.c.j. Aranzadi 130/72).

⁷⁷⁴ La Ley 3/67 de 8 de abril de 1967 (BOE de 11 de abril) de modificación del Código Penal endurecería aún más la LPI al convertir las infracciones del artículo segundo en delitos. En el capítulo segundo, se incorporaba un apartado bis b) al artículo 165, por el cual “Serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas los que infringieren por medio de impresos las limitaciones impuestas por las leyes a la libertad de expresión y al derecho de difusión de información mediante la publicación de noticias falsas o informaciones peligrosas para la moral o las buenas costumbres; contrarias a las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior, o que ataquen a los Principios del Movimiento Nacional o a las Leyes Fundamentales, falten el respeto debido a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política o administrativa, o

La genialidad de transcribir íntegro al Código Penal el artículo más vago e impreciso y más sujeto a abusos e interpretaciones personales de toda la ley de prensa, ha creado una situación absurda, que además es original en el mundo. Porque lo que ha hecho es encargar a los tribunales de justicia la tarea de crear la base ideológica que ahora falta y que es causa de claro desconcierto general (Dueñas, 1969).

A pesar de las concreciones ofrecidas por el Supremo en su jurisprudencia, la Administración se reservaba, gracias a los “vaporosos linderos” demarcados a la libertad de prensa (Crespo, 1975: 14), unas facultades coercitivas extraordinarias; que se traducían, naturalmente, en una no menos extraordinaria capacidad de coacción. Según llegó a reconocer Manuel Jiménez Quílez, la incoación de un expediente administrativo tenía, de hecho, las más de las veces, la finalidad de amedrentar o avisar a la publicación, más que de sancionarla (Chuliá, 2001: 207). La afirmación del director general de prensa queda corroborada por el número de expedientes que acabaron en sanción administrativa entre 1966 y 1975: apenas un tercio del total de procedimientos incoados.

TABLA 21: Expedientes incoados y sancionados entre 1966 y 1975⁷⁷⁵

Año	Chuliá (2001)			Terrón (1981)		
	Incoados	Sancionados	% de sancionados	Incoados	Sancionados	% de sancionados
1966	101	24	23'8%	93	23	24'7%
1967	166	73	43'9%	149	72	48'3%
1968	228	97	42'5%	210	91	43'4%
1969	127	24	18'9%	127	24	18'9%
1970	108	51	47'2%	102	51	50%
1971	112	39	34'8%	109	39	35'8%
1972	152	49	32'2%	144	49	34%
1973	145	16	11%	141	16	11'3%
1974	118	14	11'9%	110	15	13'6%
1975	93	26	27'9%	85	25	29'4%
Total	1350	413	30'6%	1270	405	31'9%

Fuente: Chuliá, *op. cit.*: 208; Terrón, *op. cit.*: 201

atenten contra la independencia de los Tribunales. Cuando los hechos revistieren a juicio del Tribunal gravedad manifiesta la pena aplicable será la de prisión menor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas”.

⁷⁷⁵ La diferencia en las cifras aportadas por ambos autores estriba en el diferente método de análisis seguido por cada uno de ellos. Terrón obtiene sus datos de los expedientes archivados, mientras que Chuliá ha atendido al número de registro de cada expediente. De ahí que las cifras de Chuliá sean algo más elevadas, pues existen expedientes que fueron incoados pero no archivados (o que se perdieron o fueron destruidos o desplazados con posterioridad a su archivo). El problema del método seguido por Chuliá (aparentemente más fiable, pues permite contabilizar los expedientes no archivados) es que a través del número de registro es imposible conocer el tipo de expediente, de modo que aparecen incluidos algunos (no demasiados, bien es cierto) impuestos a agencias informativas e incluso puestos de venta de ejemplares. Cf. Chuliá, *op. cit.*: 207.

Javier Terrón (1981) y Elisa Chuliá (2001) han estudiado en profundidad las sanciones administrativas impuestas por infracciones del artículo segundo de la LPI. A pesar de que éstas no se corresponden con el total de sanciones por motivos políticos⁷⁷⁶, sus análisis confirman el incremento de la represión durante los ministerios de Manuel Fraga y de Alfredo Sánchez Bella.

TABLA 22: Expedientes incoados y sancionados por cada ministro de Información y Turismo

Ministro	Incoados	Sancionados	% Sancionados	Incoados/Mes
Fraga Iribarne	619	217	35%	14'4
Sánchez Bella	449	153	34%	10'3
Liñán y Zofío	71	3	4'2%	10'9
Cabanillas Gallas	105	12	11'4%	10'5
Herrera Esteban	106	28	26'4%	7'5
Total	1350	413	30'6%	

Fuente: Chuliá, *op. cit.*: 209

De los 1270 expedientes que contabiliza Terrón para todo el periodo, 360 les fueron incoados a empresas editoras de diarios. Esto supone una media de unos 40 procedimientos al año (casi uno cada nueve días); de los que aproximadamente tres cuartos (el 76'11%) vinieron motivados por supuestas infracciones del artículo segundo de la LPI.

TABLA 23: Expedientes incoados y sancionados a editoras de diarios entre 1967 y 1975

Año	Totales		En aplicación del artículo 2		
	Diarios	Diarios/Publicaciones	Incoados	Sancionados	Incoados/Sancionados
1967	29	19'46%	22	15	68'18%
1968	88	41'90%	63	31	49'21%
1969	30	23'62%	22	6	27'27%
1970	34	33'33%	28	15	53'57%
1971	29	26'60%	27	8	29'63%
1972	53	36'80%	39	8	20'51%
1973	39	27'66%	27	-	0%
1974	27	24'54%	19	2	10'52%
1975	31	36'47%	27	5	18'52%
Total	360	30'59%	274	90	32'85%

Elaboración propia a partir de Terrón, *op. cit.*: 207-216

⁷⁷⁶ Debido a que, como explicábamos antes, muchas sanciones por motivos técnicos encubrían sanciones por motivos políticos.

Dos factores explican que los diarios recibieran, entre 1966 y 1975, poco más de un cuarto del total de expedientes iniciados contra empresas periodísticas: primero y como es obvio, el hecho de que hubiera muchos menos diarios que publicaciones de distinta periodicidad. Según las estimaciones de Nieto, los diarios (de información general y de otras temáticas) suponían, a principios de los setenta, el 4% del total de publicaciones periódicas (Nieto, 1973: 62). No menos importante fue, sin embargo, la mayor “combatividad” de las revistas, que se mostraron por lo general, en los últimos años del franquismo, mucho menos complacientes con el Régimen que los diarios⁷⁷⁷.

Las variaciones en el número de expedientes incoados, así como el descenso constante de los que acabaron en sanción, no pueden entenderse sin atender al contexto general del país y a la coyuntura política particular del Régimen. La mayor actividad represiva de los primeros años se encuentra vinculada a un panorama sociopolítico marcado por el auge de la oposición interior y exterior, la disyunción cada vez más acusada entre la sociedad española y la dictadura y, sobre todo, por el ascenso irrefrenable (hasta 1973) del almirante Luis Carrero Blanco junto a la facción inmovilista. Esta situación, unida a las presiones políticas del Gobierno, obligó a los sucesores de Fraga, pero sobre todo al propio Fraga, a tratar de salvaguardar la Ley de Prensa mediante una aplicación severa de los instrumentos represivos recogidos en su articulado. De ahí que fuera 1968 el año que más expedientes se incoaron a los diarios, coincidiendo con la “amenaza” exterior que suponía el Mayo del 68 francés⁷⁷⁸ y con el auge de la oposición obrera, estudiantil y nacionalista⁷⁷⁹. La tensión acabaría

⁷⁷⁷ La mayor “combatividad” de las revistas con respecto a los diarios pudo deberse a varios factores. Ante todo, la fundación y mantenimiento de una revista conllevaba unos costes mucho menores que los de una publicación diaria. De ahí que éstas fueran editadas por empresas periodísticas y/o empresarios particulares que, bien hacían de la edición del diario su principal actividad y medio de vida, bien tenían otros intereses en la economía española; lo que les hacía, en cualquiera de los casos, poco proclives a “meterse en líos”, por usar la expresión de Gonzalo Dueñas (1969: 39). Según explica Javier Terrón, “Así mientras que una empresa editora de diario tiene en gran parte de los casos una finalidad eminentemente económica, el propósito ideológico o político prima sobre cualquier otra consideración cuando se trata de una publicación con periodicidad diferente” (Terrón, *op. cit.*: 203). Por lo demás, no se puede tampoco olvidar que, como hemos demostrado, el Régimen trató de asegurarse, a través del REP y de su aparato de vigilancia, la circunscripción del panorama de la prensa diaria a aquellas empresas y empresarios menos molestos. La vigilancia y control de las revistas debió ser, a la vista de los resultados, menos estrecho o menos eficaz que el ejercido sobre los diarios.

⁷⁷⁸ Un apunte de Manuel Fraga en sus memorias (1980: 223) sugiere que el Gobierno español tenía bien presentes los sucesos de mayo en Francia y temía que pudieran extenderse a España; máxime teniendo en cuenta el auge de la protesta estudiantil de aquel año.

⁷⁷⁹ El año 1968 se había iniciado con el cierre de las facultades de Económicas y Filosofía de Madrid, tras unas revueltas que se agravarían en mayo. El 7 de junio ETA asesinaba a un Guardia Civil; y el 2 de agosto acababa con la vida del comisario de policía Melitón Manzanas, lo que acabaría desembocando en la declaración del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa en agosto. El inicio de 1969 no sería menos convulso. El 17 de enero se clausura la Universidad de

desembocando en la declaración del estado de excepción para todo el territorio nacional el 24 de enero de 1969, cuatro días después del asesinato del estudiante Enrique Ruano. Con el estado de excepción, volvía a implantarse en España la censura previa, lo que sin duda explica el descenso de expedientes incoados y sancionados aquel año.

Durante los dos primeros años de Alfredo Sánchez Bella en el Ministerio, los expedientes se mantuvieron cerca de la treintena, aunque volvieron a repuntar en 1972, cuando se alcanzó el segundo máximo relativo del periodo, con 53 procedimientos. Desde entonces —y a pesar de la escalada de la conflictividad y al aumento y unión de la oposición política—, los procedimientos volverán a disminuir hasta situarse en la treintena durante los dos últimos años de la dictadura; alcanzando incluso el mínimo histórico en 1974, durante el mandato de Pío Cabanillas. A pesar de la campaña de 1975 de León Herrera contra algunas revistas, las sanciones a diarios nunca volvieron a los niveles de finales de los sesenta y principios de los setenta. Sin duda el inminente colapso del franquismo debió de atenuar la actividad represiva del Ministerio, cuyos últimos titulares estaban lejos, por lo demás, del talante y proceder de sus antecesores.

7.3.2 *Las multas*

En 1966, la Ley de Prensa venía a instaurar un sistema inédito de cuantificación de las sanciones administrativas en función de dos variables: la gravedad de la infracción y el sujeto sancionado. Hasta entonces, el monto máximo que alcanzaban las multas era de 50.000 ptas., que podía imponer el ministro de Información de acuerdo con su arbitrio e independientemente de que afectaran a empresarios, directores o periodistas⁷⁸⁰. A

Barcelona tras el asalto a su rectorado. Tres días después, el 20 de enero, era asesinado el estudiante Enrique Ruano y estallaban los disturbios en Madrid.

⁷⁸⁰ La imposición de sanciones administrativas había sido ya contemplada en 1938, en la Ley de Prensa de Serrano Suñer. Las multas constituían entonces el primer tipo de sanción —reservada a las infracciones menos graves— del artículo 20. De acuerdo con la norma, su imposición quedaba reservada al ministro con competencias en la materia, quien casi con toda probabilidad decidía o aprobaba su cuantía, pues ni la Ley fija monto alguno, ni remite a ningún decreto o reglamento posterior que lo establezca. De hecho, las Órdenes de 15 de octubre de 1938 y 29 de abril de 1939 tampoco especifican montantes. La primera disposición que fija una cuantía máxima para las sanciones pecuniarias es la Orden de 24 de noviembre de 1941 (BOE de 29 de noviembre): al tiempo que reconoce a la Vicesecretaría de Educación Popular la facultad de sancionar a empresas y directores, fija el máximo imponible en 10.000 pesetas. Sólo un año después, sin embargo, la suma se elevará a la cifra —entonces “astronómica”, según el calificativo de Justino Sinova (1989a: 71)— de 50.000 pesetas (Orden de 2 de marzo de 1942 [BOE de 11 de marzo]), que se mantendrá como *máximum* hasta 1966.

La facultad de imponer estas sanciones y de determinar su cuantía fue compartida hasta 1952, a pesar de lo establecido en la Ley de Prensa, por las autoridades civiles (Decreto-ley de 16 de febrero de 1937, declarado subsistente por Ley de 7 de octubre de 1939) y por el “Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa” (art. 18 de la Ley de Prensa de 1938). El empleo de

mediados de los sesenta, el artículo 69 de la LPI establecía el siguiente cuadro de sanciones:

CUADRO 10: Sanciones previstas por la LPI

a) Cuando la responsabilidad afecte al autor o director	b) Cuando afecte a los empresarios o empresas
a.1 “En las infracciones leves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales hasta quince días o ⁷⁸¹ multa de mil a veinticinco mil pesetas”.	b.1 “En las infracciones leves: multa de mil a cincuenta mil pesetas”.
a.2 “En las graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de quince días a un mes o multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesetas”.	b.2 “En las graves: multa de cincuenta mil a cien mil pesetas”.
a.3 “En las muy graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de un mes a seis meses o multa de cincuenta mil a doscientas cincuenta mil pesetas”.	b.3 “En las muy graves, suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los diarios [...]”.

La introducción de ambas variables –gravedad y destinatario– se produjo durante el debate en Cortes del proyecto de ley, a propuesta del conde de Godó (c.t. 218/17 de 1 de febrero). El anteproyecto no recogía tal grado de concreción; se limitaba a fijar, en el artículo 70, cuatro tipos de sanciones: *(a)* multas de entre cien mil y un millón de pesetas; *(b)* suspensión de publicaciones de hasta seis meses; *(c)* inhabilitación de la empresa; y *(d)* inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Todos los informes emitidos sobre el anteproyecto coincidieron en demandar una rebaja de estas sanciones; así, el Consejo Nacional de Prensa (a iniciativa de la comisión especial) y la Federación Nacional de

esta fórmula tuvo como consecuencia un vaivén de la facultad punitiva, paralelo al experimentado por las competencias en la materia, trasladadas de Gobernación (antes Interior) a la Secretaría General del Movimiento; de ella a Educación; y, por fin, al MIT.

El año 1952 se revela, en este sentido, como el punto de inflexión para la estabilización de las competencias sancionadoras. Coincidiendo con el proceso de estabilización institucional de las competencias en prensa iniciado un año antes con la creación del MIT, en 1952 se centraliza en el nuevo Ministerio la facultad sancionadora. El Decreto de 4 de agosto de 1952 (BOE de 10 de septiembre) acaba con la confusión en la materia, pues, independientemente de la cuantía de la sanción (art. 2), por el artículo primero, “se autoriza al Ministerio de Información y Turismo para refundir los preceptos sancionadores en materias de Prensa, Publicaciones, Actos Públicos, Radiodifusión, Cinematografía, Teatro, Espectáculos similares y Turismo”. Unos meses después, la Orden de 22 de octubre de 1952, confirma el monto máximo de las multas en 50.000 pesetas (art. 1) fijadas en 1942, y delega en el director general de prensa la imposición de sanciones de hasta 10.000 pesetas; y en los delegados provinciales las de hasta 5.000 pesetas (art. 7). La disposición no incluye, por lo demás, plazo de prescripción alguno para las infracciones administrativas. Estas cantidades serán modificadas diez años después por el Decreto 16/62 de 18 de enero (BOE de 26 de enero de 1962), por el que se dividen las competencias en función de la cuantía del siguiente modo: las multas superiores a 25.000 pesetas quedan bajo responsabilidad del MIT, mientras que las sanciones de entre 10.001 y 25.000 pesetas quedan a cargo del subsecretario de prensa (art. 1); entre 5.001 pesetas y 10.000 pesetas, corresponden al director general de prensa, y las inferiores a 5.000 pesetas a los delegados provinciales (art. 2).

⁷⁸¹ A pesar del uso de la conjunción disyuntiva “o”, el § 2 del artículo aclaraba que, para todos los casos, “la sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra”.

Asociaciones de la Prensa de España (FNAPE) propusieron limitar la cuantía a cien mil pesetas⁷⁸²; mientras que el Instituto de Estudios Políticos pedía que se eliminara el mínimo establecido y que las cuantías fueran proporcionales a las tiradas de las publicaciones⁷⁸³. Pocas de estas propuestas fueron atendidas por el legislador para la redacción del proyecto de ley, en el que sí se introdujo, sin embargo, una primera gradación de las sanciones en función de la gravedad: así, (a') las infracciones leves quedaban sancionadas por la suspensión del ejercicio de la profesión hasta un mes y/o multa de mil a cincuenta mil pesetas; (b') las graves, con una suspensión al autor de uno a tres meses, además de una suspensión de la publicación de hasta un mes y/o multa de mil a cien mil pesetas; y (c') para las infracciones muy graves, la suspensión del profesional de tres a seis meses, junto con la suspensión de la empresa hasta tres meses y/o multa de cien mil a un millón de pesetas.

Estas cuantías serían objeto de una rebaja substancial durante el proceso de tramitación en Cortes del proyecto de ley. Tanto las enmiendas escritas como las objeciones proclamadas *viva voce* durante el debate de la comisión, coincidirán (con la única excepción del procurador Pemartín Sanjuan [c.t. 221/5]) en reclamar la rebaja de los montos. Ello se debe en buena medida a que la mayor parte de quienes intervinieron en la discusión eran directores y empresarios y, por tanto, posibles sujetos de sanción. La discusión del artículo se abrirá, de hecho, con el siguiente desafío del ínclito Emilio Romero:

Vamos a ver si la Administración, tan brillantemente representada por el señor Cabanillas, se muestra tan benévola como en el artículo anterior y muestra alguna generosidad en este terrorífico artículo 69 (c.t. 217/11 de 1 de febrero. En ACD).

El subsecretario de Información recogerá el guante accediendo al deslinde de las sanciones a los profesionales y a las empresas; y, sobre todo, aceptando un monto máximo de 500.000 pesetas (la mitad del millón previsto en el proyecto), igual al tope fijado en la Ley de Orden Público.

Desde entonces y hasta el final del franquismo, la Administración impuso, sólo por infracciones del artículo segundo, casi un centenar de sanciones pecuniarias a empresas, directores y periodistas, que, como es obvio, asumieron las sociedades editoras.

⁷⁸² La FNAPE abría la posibilidad de que se dieran sanciones superiores; pero éstas debían ser acordadas por el Consejo de Ministros. También propusieron esta limitación a las cien mil pesetas, Antonio Martínez Tomás y Laureano Muñoz Viñarás, en sendas enmiendas particulares al anteproyecto fechadas el 13 de marzo y el 6 de abril de 1964, respectivamente. Tanto las enmiendas presentadas por la FNAPE (en documento fechado el 3 de abril de 1964), como las enmiendas particulares, se encuentran en AGA sig. (3) 49.21 c. 65136.

⁷⁸³ Informe del Instituto de Estudios Políticos en ACD, leg. 2312, num. 4.

TABLA 24: Multas a editoras de diarios en aplicación del artículo 2 de la LPI entre 1967 y 1975

Año	Empresa	Fecha de la infracción	Sanción (ptas.)
1967	Editorial Prensa Canaria, S.A. (<i>La Provincia</i>)	22 de enero	2.500
	La Voz de Galicia, S.A. (<i>La Voz de Galicia</i>)	16 de marzo	2.500
	Editorial Prensa Canaria, S.A. (<i>La Provincia</i>)	7 de abril	50.000
	<i>Ibíd.</i>	25 de mayo	30.000
	Última Hora, S.A. (<i>Última Hora</i>)	7 de junio	10.000
	Editorial Prensa Canaria, S.A. (<i>La Provincia</i>)	2 de junio	10.000
	<i>Ibíd.</i> (<i>Diario de Las Palmas</i>)	20 de junio	30.000
	Última Hora, S.A. (<i>Última Hora</i>)	3 de julio	30.000
	La Voz de Galicia, S.A. (<i>La Voz de Galicia</i>)	26 de julio	50.000
	Prensa y Ediciones, S.A. (<i>Nuevo Diario</i>)	25 de agosto	12.500
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	26 de octubre	50.000
	Prensa y Ediciones, S.A. (<i>El Alcázar</i>)	10 de noviembre	25.000
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	3 de noviembre	50.000
	Prensa y Ediciones, S.A. (<i>Nuevo Diario</i>)	10 de noviembre	7.500
	ECASA (<i>Norte Exprés</i>)	9 de diciembre	5.000
1968	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	13 de enero	15.000
	La Voz de Galicia, S.A. (<i>La Voz de Galicia</i>)	17 de enero	12.500
	<i>Ibíd.</i>	27 de enero	10.000
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	30 de enero	50.000
	<i>Ibíd.</i>	15 de febrero	250.000
	Última Hora, S.A. (<i>Última Hora</i>)	19 de febrero	10.000
	La Voz de Galicia, S.A. (<i>La Voz de Galicia</i>)	9 de marzo	12.500
	La Voz de Galicia, S.A. (<i>La Voz de Galicia</i>)	12 de marzo	10.000
	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	30 de marzo	15.000
	Última Hora, S.A. (<i>Última Hora</i>)	22 de marzo	12.000
	Acción Social Católica, S.A. (<i>La Región</i>)	24 de marzo	10.000
	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	25 de abril	25.000
	Acción Social Católica, S.A. (<i>La Región</i>)	14 de abril	15.000
	Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. (<i>Diario Vasco</i>)	26 de abril	5.000
	Tele-Exprés, S.A. (<i>Tele-Exprés</i>)	24 de abril	5.000
	Heraldo de Aragón, S.A. (<i>Heraldo de Aragón</i>)	21 de abril	5.000
	Faro de Vigo, S.A. (<i>Faro de Vigo</i>)	20 de abril	5.000
	La Voz de Asturias, S.A. (<i>La Voz de Asturias</i>)	23 de abril	5.000
	El Norte de Castilla, S.A. (<i>El Norte de Castilla</i>)	21 de abril	5.000
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	2 de mayo	7.500
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	30 de mayo	250.000
	Servicio de Publicaciones, S.A. (<i>S-P Diario</i>)	1 de junio	5.000
	Tele-Exprés, S.A. (<i>Tele-Exprés</i>)	6 de julio	2.500
	Prensa y Ediciones, S.A. (<i>Nuevo Diario</i>)	28 de julio	15.000
	El Norte de Castilla, S.A. (<i>El Norte de Castilla</i>)	25 de agosto	25.000
	Nueva Rioja, S.A. (<i>Nueva Rioja</i>)	7 de septiembre	1.000
	Herederos de Leoncio Rodríguez (<i>El Día</i>)	12 de octubre	15.000
	<i>Ibíd.</i>	16 de octubre	10.000
	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	7 de diciembre	
	Nueva Rioja, S.A. (<i>Nueva Rioja</i>)	5 de diciembre	7.500
1969	Ilustración, S.A. (<i>Diario Femenino</i>)	—	2.500
	Tele-Exprés, S.A. (<i>Tele-Exprés</i>)	5 de abril	2.500
	Editorial Católica, S.A. (<i>El Ideal Gallego</i>)	6 de mayo	10.000
	Servicio de Publicaciones, S.A. (<i>S-P- Diario</i>)	23 de mayo	7.500
	Pedro García Munera (<i>Primera Página</i>)	6 de junio	5.000
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	7 de febrero	5.000
	<i>Ibíd.</i>	12 de febrero	1.000

	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	24 abril	10.000
	El Norte de Castilla, S.A. (<i>El Norte de Castilla</i>)	29 de abril	20.000
	Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra (<i>Diario de Pontevedra</i>)		15.000
	<i>Ibíd.</i>	19 de mayo	10.000
1970	Herederos de Leoncio Rodríguez (<i>El Día</i>)	25 de junio	1.000
	Editora Balear, S.A. (<i>Diario de Mallorca</i>)	5 de agosto	10.000
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	26 de octubre	50.000
	Herederos de Leoncio Rodríguez (<i>El Día</i>)	5 de noviembre	100.000
	<i>Ibíd.</i>	13 de noviembre	20.000
	M. Real y Cía, S.L. (<i>La Tarde</i>)	4 y 5 de noviembre	5.000
	Hijos de Francisco Núñez, S.R.C. (<i>El Adelanto</i>)	27 de noviembre	50.000
	Editorial Católica (<i>El Ideal Gallego</i>)	22 de noviembre	30.000
	Editorial Católica (<i>Hoy</i>)	25 de noviembre	50.000
	Ilustración, S.A. (<i>Diario Femenino</i>)	10 de enero	25.000
	Madrid, Diario de la Noche, S.A. (<i>Madrid</i>)	8 de febrero	250.000
	Editorial Menorca, S.L. (<i>Menorca</i>)	2 de marzo	10.000
1971	Herederos de Leoncio Rodríguez (<i>El Día</i>)	19 de marzo	10.000
	Editora Balear, S.A. (<i>Diario de Mallorca</i>)	31 de marzo	25.000
	Editorial Menorca, S.L. (<i>Menorca</i>)	5 de abril	50.000
	La Voz de Asturias, S.A. (<i>La Voz de Asturias</i>)	21 de octubre/13 de noviembre	50.000/100.000
	Pedro García Munera (<i>Primera Página</i>)	13 y 14 de enero	250.000
	<i>Ibíd.</i>	2 de febrero	25.000
1972	Editorial Menorca, S.L. (<i>Menorca</i>)	26 de abril	25.000
	Prensa Aragonesa, S.A. (<i>Aragón Exprés</i>)	30 de mayo	10.000
	Mediterranean Pub. Co., S.A. (<i>Iberian Daily Sun</i>)	27 de mayo	15.000
	Prensa Aragonesa, S.A. (<i>Aragón Exprés</i>)	14 de octubre	100.000
1973	—	—	—
1974	Acción Social Católica, S.A. (<i>La Región</i>)	15 de enero	25.000
	Empresa Periodística España, S.A. (<i>Sol de España</i>)	11 de julio	50.000
	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	25 de febrero	50.000
1975	Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra (<i>Diario de Pontevedra</i>)	19 de junio	40.000/75.000
	M. Real y Cía, S.L. (<i>La Tarde</i>)	19 de junio	100.000
	Editorial Sevillana, S.A. (<i>El Correo de Andalucía</i>)	3 de julio	25.000/50.000
	Heraldo de Aragón, S.A. (<i>Heraldo de Aragón</i>)	27 de julio	50.000/100.000

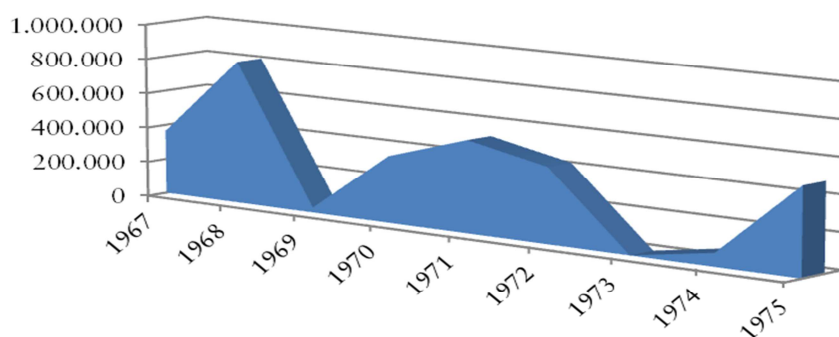
Fuente: Terrón, *op. cit.*: 222-251

Como puede apreciarse en la tabla, las sanciones más frecuentes por infracciones del artículo segundo fueron las de 50.000 y 10.000 ptas. (ambas impuestas en 14 ocasiones), seguidas de las de 5.000 ptas. (11 multas). En función de la gravedad de la infracción, las multas leves fueron las más habituales (50 sanciones), seguidas de las graves (28) y las muy graves (9). Si atendemos a los montos exigidos cada año, 1968 vuelve a revelarse como el peor para las empresas de prensa, que hubieron de pagar 815.500 pesetas en multas, sólo por transgresiones del artículo segundo. 1971 fue el segundo año en cuantía, con 520.000 ptas.; seguido de 1975, con 490.000; 1972, con

425.000; 1970, con 377.000; y 1967, con 365.000 pesetas. Los años que menos multas se impusieron fueron 1974, con 75.000 ptas.; 1969, con 27.500; y, sobre todo, 1973, cuando las editoras de diarios no hubieron de pagar cantidad alguna a la Administración por infracciones del artículo segundo.

Todo ello dibuja una tendencia en sierra, con picos en los años 1968, 1971 y 1975 y valles en 1969 y 1973; que encuentra su explicación, una vez más, en la titularidad ministerial, en el hostigamiento administrativo a ciertas publicaciones y en la coyuntura política del país.

GRAFICO 4: Montos pagados por las empresas de prensa diaria por infracciones del art. 2 entre 1966 y 1975



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Terrón, *op. cit.*: 222-251

Las sanciones por infracciones del artículo segundo alcanzan su culmen en 1968, coincidiendo con los sucesos de mayo en Francia, con el aumento de la conflictividad en España y con las presiones del Consejo de Ministros a Manuel Fraga, quien se vio obligado, según su propio testimonio, a aplicar con severidad la LPI con el fin de salvarla (1980: 190; 223). Tres empresas fueron las más sancionadas ese año: La Voz de Galicia, S.A. (*La Voz de Galicia*) y Editorial Sevillana, S.A. (*El Correo de Andalucía*), ambas con cuatro multas, aunque de cuantías menores; y, sobre todo, Madrid, Diario de la Noche, S.A. (*Madrid*), también sancionado en cuatro ocasiones, si bien en dos de ellas, con las penas más gravosas: 250.000 ptas. y dos meses de suspensión. Es, de hecho, la enconada persecución del MIT a *Madrid* –que debió pagar, sólo ese año, 557.500 ptas.– lo que explica el elevado monto de las sanciones pecuniarias en 1968.

El siguiente pico se alcanza en 1971, con Alfredo Sánchez Bella en el Ministerio y en pleno apogeo del poder tecnócrata y del vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. También en este caso son las multas impuestas a *Madrid* las que marcan la diferencia con respecto a otros años: antes de su cierre definitivo, el vespertino tendría

que pagar otras 250.000 ptas. en multas. Junto a él, también La Voz de Asturias, S.A. (*La Voz de Asturias*) hubo de afrontar aquel año dos onerosas sanciones, de 50.000 y 100.000 ptas. cada una. Al año siguiente, otras dos empresas debieron afrontar sanciones elevadas: Pedro García Munera (*Primera Página*; *La Voz de Albacete*) tuvo que pagar 275.000 ptas. entre enero y febrero, y Prensa Aragonesa, S.A. (*Aragón Exprés*) otras 100.000 pesetas en octubre.

La salida de Sánchez Bella del MIT inaugura el mejor bienio de todo el tardofranquismo en cuanto a sanciones para las empresas de prensa diaria: en 1973, Fernando Liñán y Zofío no aplicó ninguna por infracciones del artículo segundo; y en 1974, Pío Cabanillas impuso apenas 75.000 ptas., el monto más reducido desde 1969, cuando la restauración de la censura previa había hecho descender bruscamente el número de expedientes y sanciones. En 1975 se produce un nuevo repunte de las multas coincidiendo con la llegada de León Herrera Esteban al Ministerio y el inminente colapso del Régimen. Aunque sólo se impusieron ocho sanciones por infracciones del artículo segundo, la mayor parte fueron consideradas graves o muy graves y punidas, por tanto, con elevadas cuantías. Editorial Sevillana, S.A. (*El Correo de Andalucía*) vuelve a ser de las más castigadas, con 125.000 ptas., sólo superadas por las 150.000 que hubo de pagar Heraldo de Aragón, S.A. por publicar en el *Heraldo de Aragón* el artículo “El triste oficio de censor”.

Durante todo el periodo, siete empresas de prensa fueron castigadas por la Administración con un monto total superior a las 100.000 ptas. por los contenidos de sus publicaciones. En primer lugar, y a mucha distancia del resto, se encuentra Madrid, Diario de la Noche, S.A., editora del vespertino *Madrid*, que hubo de pagar 963.500 pesetas entre 1967 y 1971. La segunda empresa más gravada fue la de Pedro García Munera (280.000 ptas.), poco sancionado, pero muy penalizado por la publicación a principios de 1972 de un artículo sobre la homosexualidad en *Primera Página*. En tercer lugar aparece la Editorial Sevillana, S.A., propietaria de *El Correo de Andalucía*, y sancionada con más de 180.000 pesetas en multas⁷⁸⁴. Con cuantías similares se encuentran Herederos de Leoncio Rodríguez (*El Día*), con 156.000 ptas.; La Voz de Asturias, S.A. (*La Voz de Asturias*) y Heraldo de Aragón, S.A. (*Heraldo de Aragón*), con 155.000 pesetas cada una. Por último, Prensa Aragonesa, S.A. (*Aragón Exprés*) hubo de abonar 110.000 pesetas por sólo dos sanciones en 1972.

Si elocuente es la presencia en este *ranking* de algunos de los diarios menos complacientes con el Régimen (como *Madrid*, *El Correo de Andalucía* y *La Voz de*

⁷⁸⁴ Decimos “al menos”, pues en una de las sanciones, no aparece especificado el monto de la multa: se trata de la que se le impuso en diciembre de 1968 por el artículo “Agustín García Calvo, cuatro años de ex catedrático”.

Asturias), no lo es menos la ausencia de algunos de los más importantes y leídos del país. Ninguno de los cuatro diarios de información general que superaron los 100.000 ejemplares de tirada durante el tardofranquismo —*La Vanguardia Española*, *Pueblo*, *Abc* y *Ya*—, fueron sancionados por transgresiones del artículo segundo. No parece casual, desde luego, que los cuatro estuviesen editados o dirigidos por prohombres del Régimen, con asiento en las Cortes y suficientes contactos políticos como para garantizar resoluciones de expedientes satisfactorias para la empresa.

7.3.3 *Las suspensiones temporales de publicaciones*

La suspensión de publicaciones había quedado también tipificada en el “terrorífico” artículo 69 de la LPI. En su apartado 69.1.b.3, relativo a las sanciones a empresarios o empresas, se imponía, por la comisión de hechos considerados muy graves, la “suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los diarios; hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales y hasta seis meses en las de menor frecuencia”. Si bien los cierres se planteaban con carácter temporal, las extensiones fijadas por la Ley parecen sugerir la pretensión del legislador de establecer cierres permanentes encubiertos. Y es que pocas publicaciones de mediados de los años sesenta podían soportar los perjuicios económicos que un cierre de varios meses acarrearba⁷⁸⁵ (y ello aun a pesar de que, en uno de los casos, las suspensiones acabaron reportando un aumento de las ventas⁷⁸⁶). Así lo exponía el consejero delegado de Edica, Mariano Rioja, durante el debate celebrado por la comisión de Cortes el 2 de febrero de 1966:

Creo poder asegurar —y por primera vez levanto la voz como representante de algunas empresas periodísticas— que esta sanción [recogida en el art. 69.1.b.3] equivale, en el 90% de los casos a la muerte del periódico. [...] una suspensión de dos meses (continuando, naturalmente, pagándose todas las retribuciones del personal), determinaría tal peso sobre la economía del periódico, tal quebranto, que todas las empresas que tuviesen su publicación suspendida (me refiero a los periódicos diarios)

⁷⁸⁵ Algunos de los lectores de las publicaciones sancionadas trataron, no obstante, de mantenerlas vivas pagando sus suscripciones y ejemplares aun sin recibirlos. Los lectores de *Madrid*, por ejemplo, pagaron un “abono ficticio”, lo que no impidió que el diario perdiera 20 millones de pesetas por las sucesivas suspensiones previas a su cierre definitivo; mientras que en *Destino*, no sólo no hubo bajas en las suscripciones, sino que los lectores incluso acudieron, en 1967, durante los meses de suspensión de la publicación, a la redacción a pagar sus ejemplares (Chuliá, *op. cit.*: 200).

⁷⁸⁶ Así le ocurrió, por ejemplo, al diario *Sol de España* tras su suspensión por quince días en 1974. La expectación que generó su reaparición en agosto, permitió al diario tirar 50.000 ejemplares y agotar su edición en Málaga y los pueblos principales de la provincia. Testimonio de Rafael de Loma enviado por escrito el 17 de noviembre de 2012.

se encontrarían en una situación de suspensión de pagos, probablemente de quiebra (c.t. 226/1 a 226/4. En ACD, leg. 2312, num. 4).

Con todo, el artículo 69.1.3.b resultaba mucho menos severo de lo que el anteproyecto y el proyecto de Ley auguraban. En ellos, además del cierre de publicaciones, se contemplaba también la posibilidad de suspender temporalmente a la empresa periodística responsable de las mismas. El anteproyecto de ley proponía, en el artículo 70, la posibilidad de “inhabilitación para el ejercicio de la actividad de la empresa, de un mes a tres meses”. Tanto el Consejo Nacional de Prensa como el Instituto de Estudios Políticos rechazaron el rigor de la medida. Consideraba el primero (a propuesta de la comisión especial encargada del estudio del anteproyecto, cuyo dictamen en este punto aceptarán la comisión permanente y el pleno del organismo) que las sanciones sólo debían llegar a la suspensión de uno a tres números de la publicación. El Instituto de Estudios Políticos, por su parte, sólo contemplaba sanciones económicas proporcionales a la tirada de la publicación.

El proyecto de ley remitido a Cortes no recogió ninguna de las propuestas de estos dos organismos; planteó, en cambio, para los casos muy graves, la suspensión de la publicación de tres a seis meses y la suspensión de hasta tres meses a la empresa periodística responsable (además de las correspondientes sanciones pecuniarias). La cuestión suscitó un animado debate en la Comisión de Información y Turismo de Cortes, en la que muchos procuradores pidieron la abrogación de la suspensión de la empresa periodística. El acenepista Luis Sánchez Agesta argumentaba, por ejemplo, que dicha suspensión sería tanto más perjudicial cuanto mayor fuera el tamaño de la empresa, dado que, cuantas más publicaciones poseyera, más se verían arrastradas al cierre (c.t. 219/7 de 1 de febrero). Recuérdese, en este sentido, que la ACN de P (propietaria de la Editorial Católica, la mayor cadena de prensa privada española en aquel momento) había rechazado expresamente la suspensión de la empresa periodística en el artículo 28 de su proyecto regulador (v. 3.2.3). Finalmente, será Pío Cabanillas quien acepte suprimir la suspensión de la empresa como sanción; pues su “drasticidad [sic], podía plantear serios problemas” (c.t. 226/8 de 1 de febrero. En ACD).

De acuerdo con el análisis realizado por Javier Terrón (1981), entre 1966 y 1975 diez publicaciones fueron suspendidas temporalmente por la infracción del artículo dos⁷⁸⁷. Las cifras evidencian, una vez más, el especial ensañamiento de la Administración

⁷⁸⁷ Es preciso insistir en que las suspensiones administrativas motivadas por alguna infracción del artículo segundo no se corresponden con el total real de infracciones impuestas por motivos políticos ni por el contenido de las publicaciones. Muchas de estas sanciones fueron encubiertas tras infracciones técnicas o de incumplimiento de alguno de los requisitos formales de la LPI; dado que, según relata Barrera, “La vía del cierre empresarial se mostró mucho más eficaz y expeditiva,

con las publicaciones no diarias, castigadas —del mismo modo que en el caso de las ayudas directas a la prensa, de las que las publicaciones no diarias se vieron, por lo general, excluidas— según todo parece indicar, debido a su mayor aperturismo político. De hecho, de las diez publicaciones suspendidas durante el periodo, sólo dos fueron diarios de información general: *Madrid* (suspendido en dos ocasiones consecutivas antes de su cierre definitivo) y *Sol de España*. A pesar de que las suspensiones temporales no fueron, pues, demasiado usadas contra los diarios, su mera existencia no dejaba de implicar cierta coacción sobre empresas editoras y empresarios. Las consecuencias económicas y políticas que, para los accionistas, implicaba la participación en publicaciones suspendidas o clausuradas (o ni siquiera suspendidas o clausuradas, pero cuya suspensión y clausura se aventuraba probable por su contenido) bien pudo empujar a algunos empresarios e inversores a abandonarlas o a renunciar a arriesgarse a financiarlas⁷⁸⁸.

CUADRO 11: Publicaciones suspendidas temporalmente en aplicación del artículo segundo de la LPI (1967-1975)

	Fecha	Publicación	Suspensión
1967	28 de octubre	<i>Destino</i>	Dos meses
1968	15 de febrero	<i>Madrid</i>	Dos meses
	30 de mayo	<i>Madrid</i>	Dos meses
1970	4 de abril	<i>Sábado Gráfico</i>	Cuatro meses
	28 de noviembre	<i>Garbo</i>	Doce meses
1974	11 de julio	<i>Sol de España</i>	Quince días
	Abril-mayo-junio	<i>Por favor</i>	Cuatro meses
	3 de enero	<i>El Papus</i>	Cuatro meses
1975	13-14 de enero	<i>Cambio 16</i>	Tres semanas
	18 de enero de 1975	<i>El Papus</i>	Cuatro meses
		<i>El Papus</i>	Cuatro meses
	6 de abril de 1975	<i>La Codorniz</i>	Tres meses
	26 de abril de 1975	<i>Triunfo</i>	Cuatro meses
	19 de julio de 1975	<i>Mundo</i>	Cuatro meses

Fuente: elaboración propia a partir de Terrón, *op. cit.*: 201 y ss.

como acoso a medios críticos molestos, que la del artículo 2 que permitía sancionarles con base a sus contenidos” (Barrera, 1997).

⁷⁸⁸ Así pareció ocurrir en algunos de los casos ya estudiados de venta de participaciones en empresas periodísticas motivadas por las presiones administrativas. Véase, por poner sólo un ejemplo, el caso del Banco de Santander en Prensa Castellana, S.A. (*Informaciones*). O, fuera de nuestro objeto de estudio, el caso del Conde de Godó, quien se deshizo de su participación en la revista *Destino* tras la suspensión por dos meses del semanario en 1967.

El 31 de mayo de 1968, Manuel Fraga ordenaba la primera suspensión temporal de un diario tras la aprobación de la LPI: el vespertino *Madrid*, que había sido ya objeto, en los meses anteriores, de tres sanciones administrativas por la publicación de otros tantos artículos⁷⁸⁹. Naturalmente, la maniobra ha de inscribirse en el contexto de hostigamiento al que estaba siendo sometido el vespertino por Manuel Fraga y que desembocaría, como vimos en el capítulo quinto, en su cierre definitivo en 1971. Unos meses antes de la suspensión, en diciembre de 1967, el ministro había enumerado en un almuerzo a los responsables de *Madrid* –Luis Valls, Antonio Fontán y Rafael Calvo Serer– los asuntos que el Ministerio consideraba intocables; a saber: partidos políticos, “18 de julio”, mercado común y orden público (Barrera, 1995b: 239). “Preferiré aplicar la Ley antes de que salte”, les había espetado Fraga en el encuentro, según su propio testimonio (Fraga, 1980: 203). El ministro no tardaría en cumplir sus amenazas. El 30 de mayo, Calvo Serer



publicaba en la tercera página de *Madrid* el célebre artículo “Retirarse a tiempo. No al general De Gaulle”. El texto, elaborado a propósito de las revueltas de Mayo del 68, comenzaba con la siguiente afirmación:

Si estamos o no en los comienzos de una nueva Revolución francesa, el tiempo lo dirá. Pero lo que ha quedado claro es la incompatibilidad del gobierno personal o autoritario con las estructuras de la sociedad industrial y con la mentalidad democrática de nuestra época en el contexto del mundo libre.

Y proseguía con una crítica al franquismo velada tras el análisis de los problemas que aquejaban al general De

Gaulle y al régimen francés. En los últimos párrafos del artículo, Calvo dejaba de lado las sutilezas y aclaraba el fondo del texto:

⁷⁸⁹ El 26 de octubre de 1967, la DGP había impuesto a Antonio Fontán, director de *Madrid*, una primera multa de 50.000 pesetas por el artículo “El país no está para arbitristas”. Poco después, el 3 de noviembre de 1967, llegaba la segunda sanción por una carta al director crítica con la sentencia de un consejo de guerra y castigada con 5.000 pesetas. Al año siguiente, el 30 de enero, se le volvía a multar con 50.000 pesetas por el artículo “La Ley del Silencio”, sobre la Ley de Secretos Oficiales.

Todos los artículos de *Madrid* expedientados y sancionados se encuentran digitalizados en la página web de la Fundación Diario Madrid [<http://www.diariomadrid.net>].

España mantiene una semejanza de situaciones sociales y políticas con el vecino país. Si a Francia se le presenta el problema de la sucesión de De Gaulle y del Régimen de la V República, también con especiales características está planteado en España.

El artículo, interpretado obviamente como una invitación a la sucesión en la Jefatura del Estado español, motivó el secuestro inmediato de la edición. En la entrada del 30 de mayo, Fraga escribiría en sus memorias:

Secuestro del diario *Madrid*. Sé que esta decisión y la subsiguiente sanción al periódico son una de las más discutidas de mi gestión. Sigo creyendo que fue necesaria y oportuna. Ya no cabían más ruegos; no sabíamos cómo iba a terminar lo de Francia [se refiere a Mayo del 68], y mejor que perder la Ley de Prensa, era aplicarla, con todas las consecuencias (Fraga, 1980: 223).

Al día siguiente, en efecto, el Consejo de Ministros decretaba la suspensión temporal por dos meses del vespertino, que habría de hacer frente además a una multa de 250.000 pesetas. El motivo de la sanción no era, no obstante, el artículo del día anterior de Calvo, sino una información publicada el 15 de febrero sobre la reapertura y cierre de la Facultad de Económicas de Madrid. Sólo una vez cumplida esta primera suspensión decidió el Consejo de Ministros, el 12 de julio, aplicar la sanción por el artículo de

[illegible]

Calvo, castigada con otros dos meses de cierre y 250.000 pesetas más de multa. Ni las negociaciones ni los recursos surtieron efecto: la maniobra de la Administración lograba así agravar el daño económico a *Madrid*, que encadenaba dos suspensiones consecutivas de dos meses cada una y había de hacer frente a una multa total de medio millón de pesetas.

Desde entonces y hasta el final de la dictadura sólo se ordenaría otra suspensión temporal contra un diario de información general. En el verano de 1974, el Consejo de Ministros decretaba el cierre durante quince días del diario malagueño *Sol de España*. Según cuenta su entonces subdirector, Rafael de Loma⁷⁹⁰, desde principios de julio

⁷⁹⁰ Testimonio de Rafael de Loma, subdirector de *Sol de España* en 1974, enviado por escrito el día 17 de noviembre de 2012. La explicación que ofrecemos a continuación está basada en el relato enviado por De Loma, quien se encontraba, cuando contactamos con él, preparando un libro sobre sus años en el diario. Según nos aseguró, en uno de los capítulos se ocuparía precisamente del episodio de la suspensión temporal acaecido en 1974. De Loma ya se había

circulaban en Málaga rumores de un posible arresto domiciliario del falangista José Antonio Girón de Velasco, antiguo ministro de Vivienda y conspicuo representante del “búnker” franquista. En una reunión celebrada en la redacción de *Sol de España* entre el director, Nicolás de Laurentis, el subdirector, Rafael de Loma y el redactor jefe, Juan de Dios Mellado, deciden investigar el rumor. Tras llamar a la casa de Girón y hablar con su esposa, la redactora Juana Basabe descubre que todo responde a un montaje interesado, por lo que los responsables del diario acuerdan publicar en primera página el siguiente mentís titulado “Girón, en Madrid, prepara el discurso del día 15”:

Ante los insistentes rumores difundidos ayer en Fuengirola acerca de un posible arresto domiciliario de don José Antonio Girón de Velasco nos pusimos en contacto con medios allegados a la casa del ex ministro, donde se nos manifestó que el Señor Girón se encuentra en Madrid preparando el discurso que el próximo día 15 pronunciará en la Casa Sindical de la capital de España. En su domicilio de Fuengirola reina la más absoluta normalidad, dándose la circunstancia de que, cuando hablamos con la señora de Girón, ésta estaba a punto de dirigirse a Sotogrande en compañía de una amigas.

Aunque *Sol de España* se había limitado a desmentir un rumor, las amenazas arreciaron desde el día siguiente. Según De Loma, fueron las presiones de su competidor, el diario *Sur* (de la Cadena de Prensa del Movimiento y cuyo director era amigo de Girón), las que empujaron a Pío Cabanillas a llevar al Consejo de Ministros una propuesta de suspensión por dos meses y 250.000 pesetas de multa. La sanción se acabaría suavizando gracias a las gestiones del consejero delegado de la empresa editora, Juan Pablo de Villanueva, y sobre todo a la intervención del monárquico Luis María Ansón, entonces subdirector de *Abc*. Ansón logró convencer a Cabanillas y a otros ministros del grave perjuicio que una sanción más grave implicaría para el príncipe don Juan Carlos, Jefe del Estado en funciones por la flebitis que aquejaba a Franco desde julio. Finalmente, en agosto de 1974, don Juan Carlos firmaba una sanción de 15 días de suspensión (que el diario podía acatar cuando decidiese y que finalmente cumplió durante la segunda quincena de agosto) y 50.000 pesetas de multa, que los lectores sufragaron mediante una suscripción popular. Tres años después, el 17 de octubre de 1977, el Tribunal Supremo daría la razón a la editora del diario, Empresa Periodística España, S.A., en su recurso contra el cierre (sentencia 779; r.c.j. Aranzadi 3946/77).

referido brevemente al suceso en 1994 en su libro *Las manchas del leopardo*, Madrid: R&J Pronomedia.

8. Conclusiones

El Régimen franquista aplicó, entre 1966 y 1975, una política informativa referida a la empresa periodística privada editora de diarios de información general orientada a la vigilancia y control de su propiedad, de su dirección y de su realidad económica.

Los documentos hallados y los testimonios recabados confirman la hipótesis planteada al inicio de la investigación y prueban la existencia de un modelo de control específico de la empresa periodística privada inscrito en la política informativa general aplicada por el Régimen sobre la prensa. Tal modelo vino a consolidar la potestad de intervención de la dictadura sobre el sistema de prensa en tres sentidos: *(a)* garantizó a la Administración –mediante un sistema de autorización previa discrecional articulado a través de un registro administrativo de naturaleza policial– el control del acceso y salida del sistema y, con él, la facultad decisoria sobre quién podía y quién no podía editar prensa diaria en España; *(b)* afianzó su conocimiento y capacidad de injerencia sobre todas las operaciones accionariales y cambios de propiedad que se dieron en el sistema durante el tardofranquismo y que, por lo general, pudieron llevarse a efecto, al menos hasta 1974, sólo tras obtener el plácet administrativo; y *(c)* fortaleció su capacidad coercitiva y coactiva sobre las empresas de prensa admitidas en el sistema, que padecieron una gravísima inseguridad jurídica e indefensión ante las actuaciones y maniobras, no siempre sujetas a su propia legalidad, del Ministerio de Información y de la Dirección General de Prensa.

Las iniciativas legislativas y actuaciones administrativas referidas a las empresas periodísticas privadas se inscriben en el marco general de la política informativa diseñada y ejecutada por el Régimen en su última década de vida y de la que, hasta ahora, habían sido estudiados dos aspectos fundamentales: el control de los contenidos publicados y de la profesión periodística. Esta investigación ha puesto en evidencia la necesidad de considerar, junto a ellos, el control de la empresa periodística, imprescindible para entender en toda su extensión y complejidad la política informativa tardofranquista. Ésta pareció estar inspirada, durante los casi cuarenta años de dictadura, por el miedo que el Régimen nunca dejó de manifestar hacia la prensa y que se vio avivado por el peligro que se atisbaba tras su titularidad privada.

Los recelos impusieron la adopción de unas “cautelas” que el resto de medios de comunicación no requerían y que fueron variando al compás de la evolución política de la dictadura. En los años sesenta, la llegada de Manuel Fraga al MIT y la posterior aprobación de la LPI supusieron un punto de inflexión en la política informativa, que se tradujo en un declive del control estatal de la profesión periodística y en un cambio del

paradigma de control de contenidos. En este último ámbito se pasó de un modelo preventivo a otro eminentemente represivo, basado en la capacidad coercitiva (y por tanto coactiva) que confería a la Administración la potestad sancionadora prevista en la Ley de Prensa.

En lo que al control empresarial se refiere, la investigación permite inferir que

- I.* el Régimen conjugó durante el tardofranquismo mecanismos preventivos y represivos y tanto legales como extralegales
- II.* dirigidos a tamizar el sistema de prensa en función del criterio discrecional de la Administración, a conocer y controlar la propiedad y gobierno de las empresas privadas autorizadas a editar diarios y a garantizarse la capacidad de intervención sobre sus cuentas.
- III.* El modelo impactó y se vió condicionado por un sistema caracterizado estructuralmente por la abundancia de empresas, por la exigua difusión de las cabeceras, por la concentración geográfica y de propiedad y por la estrecha vinculación de sus consejeros y directivos con los centros de poder político y empresarial del Régimen.
- IV.* La política aplicada fue de inspiración eminentemente acenepista y
- V.* su implementación varió durante el periodo en función del talante, proyecto político y grupo de adscripción del titular del Ministerio de Información y del contexto general que atravesó la dictadura en aquellos años; de modo que cabe distinguir tres etapas de aplicación: un primer trienio, entre 1966 y 1969, marcado por el empeño de Manuel Fraga de salvaguardar la recién aprobada LPI; un segundo trienio, entre 1970 y 1973, caracterizado por el cierre del sistema de prensa y el endurecimiento generalizado del control de las empresas privadas; y un último bienio de declive inexorable de la capacidad de control del Régimen.

I

Durante el tardofranquismo, las empresas de prensa fueron objeto de una legislación específica –en tanto diferenciada del cuerpo general del derecho mercantil español–, y hondamente influida por la doctrina de la ACN de P, que defendía la naturaleza *sui generis* que confería a la empresa su finalidad y trascendencia ideológica. Tanto los artículos de la Ley de Prensa de 1966 referidos a las empresas privadas de prensa como las disposiciones llamadas a desarrollarlos, fueron promulgados con una

finalidad primordial: garantizar a la Administración el conocimiento y control de cuantos aspiraron y fueron autorizados a editar diarios en España.

Para ello se pergeñó una normativa sustentada en la regulación de la propiedad, de los órganos de gobierno corporativo, de las fuentes de financiación de las empresas y de los procesos de integración horizontal que pudieran darse en el sistema.

Dos organismos se encargaron de asegurar su cumplimiento: la Oficina de Inspección del Ministerio y, sobre todo, el Registro de Empresas Periodísticas.

En el marco del ejercicio de la función de policía de la información, la LPI preveía en su articulado una facultad inspectora sobre los datos registrales y la situación financiera de las empresas. Lejos de ejercerla únicamente para fiscalizar datos y cuentas, el Ministerio de Información instrumentalizó esta potestad para identificar y presionar a la propiedad y dirección de las empresas de prensa menos afines a la ortodoxia del Régimen. A pesar de que, en la entrevista mantenida, el jefe de la inspección del MIT, Enrique Santín, haya negado haber actuado en este sentido, no hemos hallado documento alguno que acredite la presencia de los inspectores del Ministerio en las empresas que presentaron expedientes de crisis o padecieron dificultades económicas entre 1966 y 1975. Sí acudieron, en cambio, a las sedes de sociedades sin, en cambio, de sedes de sociedades sin problemas económicos aparentes, pero con estructuras de propiedad sospechosas y/o diarios con líneas editoriales poco complacientes, como, entre otras, SARPE; Editorial Sevillana; PESA; Madrid, Diario de la Noche; y Fomento de la Prensa Tradicionalista. Todas ellas fueron objeto, como constatamos en el sexto capítulo, de inspecciones a las que siguieron campañas de hostigamiento por parte del Ministerio.

El Registro de Empresas Periodísticas fue el principal instrumento político de circunscripción y control administrativo del sistema privado de prensa.

Inspirado en el Registro de Propietarios de Periódicos ideado por la ACN de P y trasladado por Gabriel Arias Salgado al organigrama del MIT en 1958, el REP se consolidó en 1966 como un registro administrativo dirigido a posibilitar el control policiaco de la empresa periodística privada. En virtud de la LPI, la inscripción en el Registro era *condictio sine qua non* para el ejercicio de la actividad periodística. Ello convirtió al REP en la puerta de acceso y salida al sistema de prensa y a la inscripción registral en un auténtico mecanismo de autorización previa, basado, por si fuera poco, en criterios formalmente reglados, pero realmente discrecionales. El capítulo IV de la LPI, en

el que quedaba tipificado el procedimiento de tramitación de la inscripción registral, no acabó con la discrecionalidad administrativa en la concesión, denegación y cancelación de autorizaciones. La cantidad ingente de documentos que se exigía a los solicitantes y, sobre todo, la ambigüedad de algunos de los supuestos de denegación y cancelación de la inscripción, mantuvieron el acceso y salida del sistema sometidos al arbitrio administrativo. Las tramitaciones estudiadas en el capítulo quinto han puesto en evidencia que la autorización para editar prensa en España dependió exclusivamente de la conveniencia o inconveniencia política que, para la Administración tardofranquista, revestía la presencia de la empresa en el sistema.

El Régimen no sólo se valió, para el control de la empresa de prensa, de las potestades que le concedía su propia legalidad. Recurrió, antes bien, a una serie de mecanismos y actuaciones extralegales que vinieron a complementar las atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico sobre la materia. A principios de los años sesenta, la Dirección General de Prensa de Manuel Jiménez Quílez organizó un eficaz aparato de vigilancia y control que proveyó al MIT de información reservada sobre empresas, empresarios y directivos hasta el final de la dictadura.

El aparato, especialmente activo entre 1969 y 1973, permitió a la Administración indagar en los antecedentes políticos de quienes solicitaban editar diarios de información general y quienes pretendían adquirir acciones de empresas admitidas en el sistema, conocer los datos reales relativos a la propiedad, gobierno y situación económica de las empresas autorizadas y adelantarse a cuantos movimientos accionariales estaban por producirse en el sistema.

La información recabada sirvió de base a la actuación posterior del Ministerio, que intervino o se inhibió en función de sus intereses coyunturales y de las consecuencias que, para la estabilidad del Régimen, podían acarrear las operaciones.

Tres departamentos del Ministerio de Información intervinieron en su funcionamiento: los Servicios de Información de la DGP, la Oficina de Enlace y las Delegaciones Provinciales del MIT. Por lo general, las indagaciones se iniciaban a partir de los informes de los Servicios de Información (basados en muchos casos en recortes de prensa), de los delegados provinciales o incluso de denuncias anónimas remitidas al Ministerio. Una vez despertado el interés administrativo, las pesquisas podían seguir dos cauces: bien se contactaba la Delegación de la provincia en que se ubicaba la empresa o

empresario objeto de interés, bien se recurría a la Oficina de Enlace, dependiente directamente del ministro.

Las Delegaciones Provinciales funcionaron durante los años sesenta y setenta como verdaderas extensiones del Ministerio sobre el territorio. Sus informes se basaban, por lo general, en los contactos que mantenían en las empresas y en el conocimiento que les procuraba su asentamiento en la provincia; aunque tampoco fue infrecuente que recurriera a los informes policiales a los que accedía a través del gobernador civil de la zona.

La Oficina de Enlace, por su parte, había sido creada en 1962 por Manuel Fraga con el fin de canalizar la información política manejada por los Ministerios con servicios de espionaje interior y que pudiera ser de utilidad al MIT. A pesar de que su responsable durante la mayor parte del periodo, el entonces teniente coronel Francisco Castrillo Mazeres, haya negado haber realizado actividades de persecución y espionaje, los documentos reservados hallados en los expedientes registrales de las empresas demuestran lo contrario. La Oficina de Enlace fue utilizada por el MIT, especialmente entre 1970 y 1973, para obtener información personal (por lo general referida a antecedentes “político-sociales”, ideología y actividades) de periodistas, empresarios y directivos de prensa.

II

Tanto las potestades legales como los mecanismos extralegales que conformaron la política tardofranquista sobre la empresa periodística privada sirvieron a tres objetivos fundamentales: a la circunscripción del sistema a aquellas empresas y empresarios juzgados convenientes por la Administración; al conocimiento y control de la propiedad y gobierno de las empresas autorizadas a editar diarios de información general; y a garantizar el control e influencia sobre su economía.

Gracias al margen de discrecionalidad que le otorgaba la Ley y a la información que le procuró el aparato de vigilancia y control de la DGP, pudo la Administración circunscribir el sistema de prensa a aquellas empresas y empresarios que juzgó favorables a sus intereses y/o inocuos para la estabilidad del Régimen.

Dos fueron los mecanismos de tamización de los que se valió: la inscripción en el REP, que funcionó durante el tardofranquismo como un auténtico plácet u *octroi* para el ejercicio de la actividad periodística; y la potestad administrativa de cancelación de la

inscripción registral, que suponía, en la práctica, la expulsión del panorama de la prensa española.

Durante todo el periodo, el MIT siguió un criterio eminentemente político en la concesión y denegación de las autorizaciones para editar nuevos diarios o comprar cabeceras ya existentes. Según vimos en el quinto capítulo, cuatro fueron los factores decisivos para la obtención del plácat:

(a) El interés estratégico que comportaba para el Régimen la edición de un diario en territorios conflictivos, como Gibraltar y Marruecos, o turísticos, como Baleares. Tal y como nos han relatado varios protagonistas, los intereses del Régimen fueron determinantes en la concesión, durante la década de los sesenta, de las autorizaciones a Empresa Periodística España (*Sol de España*), a Antonio Gómez Rubio (*Área*), a Pedro Serra Bauzá (*Majorca Daily Bulletin*) y a Mediterranean Publishing Company (*Iberian Daily Sun*).

(b) La proximidad de los promotores al poder político del Régimen. Todo hace pensar que la importancia de este factor llevó a la mayor parte de las empresas que solicitaban la inscripción en el REP para editar un nuevo diario o para adquirir una cabecera, a incluir en sus consejos a representantes de la política local, municipal e incluso nacional. Si bien el aval de la política tardofranquista no garantizó la inscripción, sí facilitó en muchos casos los trámites, y resultó decisiva en al menos seis casos: los de Diario Tele-Exprés (*Tele-Exprés*), Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra (*Diario de Pontevedra*), Ilustración (*Diario Femenino-Mundo Diario*), Prensa Económica (*Nuevo Diario*), DYRSA (*El Alcázar*) y Ferrol Ediciones (*Ferrol Diario*).

(c) La inexistencia de antecedentes políticos desfavorables en los archivos policiales de los promotores, accionistas y directivos. Los documentos hallados en el REP demuestran que la DGP solicitó informes policiales sobre los antecedentes (que, además de notas “político-sociales”, incluían consideraciones sobre la “conducta moral pública y privada”, la “situación económica”, la “consideración social” y los “antecedentes familiares”) de accionistas y directivos antes de aprobar las solicitudes de inscripción de al menos cuatro empresas: Publicaciones Católicas Ilerdenses (*Diario de Lérida*), Editora Balear (*Diario de Mallorca*), Prensa Aragonesa (*Aragón Exprés*) y Canaria de Avisos (*Diario de Avisos*). Los informes policiales fueron también decisivos para la denegación de la inscripción que padecieron cinco empresas, al ser identificados los proyectos con la oposición al Régimen (PRISA, Prensa Catalana y Migdia) o con un grupo de poder —el Opus Dei— enfrentado al ministro de Información (PESA y Prensa Española).

(d) El parecer favorable de la Delegación Provincial. La documentación del REP revela que las Delegaciones Provinciales fueron consultadas en no pocos casos por la

DGP sobre la pertinencia de la inscripción registral. Todo apunta a que la aprobación de las Delegaciones fue determinante en las autorizaciones concedidas a, cuanto menos, las empresas de las que se solicitaron informes policiales.

Por si fuera poco, en al menos dos casos la Administración no se limitó a indagar en los antecedentes políticos y a solicitar el parecer de las Delegaciones Provinciales, sino que obligó a las empresas solicitantes a acometer importantes modificaciones para obtener la inscripción. Editora Balear –cuyos accionistas tampoco se libraron de la investigación policial– sólo obtuvo el plácet para publicar el *Diario de Mallorca* tras conceder en sus estatutos amplios poderes al Obispo de Mallorca. Mientras que PESA no logró la autorización para editar *Nuevo Diario* en tanto no hubo cambiado a su consejero delegado y rebajado el tono crítico de *El Alcázar*. Ambos casos demuestran que la inscripción en el REP fue manejada por el MIT como arma de chantaje político a las empresas, cuya autorización dependía de la adecuación a las condiciones impuestas por la Administración.

Todas las empresas que fueron autorizadas a editar nuevos diarios de información general durante el tardofranquismo lo fueron entre 1966 y 1969, coincidiendo con la etapa ministerial de Manuel Fraga. A partir de 1970, el sistema de prensa quedó cerrado a nuevas iniciativas y sólo dos nuevas sociedades –Prensa Económica y Canaria de Avisos, ambas con accionistas y directivos cercanos al Régimen– fueron autorizadas a tomar el testigo de la edición de diarios ya presentes en el panorama nacional: *Nuevo Diario* y *Diario de Avisos*, respectivamente. Así pues, desde la llegada de Alfredo Sánchez Bella al MIT y hasta poco antes de la muerte de Franco, ninguna empresa fue autorizada a editar un nuevo diario en España.

Por supuesto, tanto la “apertura controlada” de Fraga como el “cierre” posterior no pueden desvincularse ni de los proyectos políticos y talantes de los titulares del MIT ni del contexto que atravesó el Régimen en aquellos años. Los setenta estuvieron marcados políticamente por la crisis de la dictadura y el auge del inmovilismo, encarnado hasta 1973 en el almirante Luis Carrero Blanco. Hechuras suyas fueron los ministros de Información Fernando Liñán y Zofío y Alfredo Sánchez Bella, quien llegó a justificar el cierre del sistema de prensa con las siguientes palabras: “Estamos en un cambio de régimen y esto es como un quirófano en el que no pueden entrar microbios”. (*loc. cit.* 5.3).

Sin duda fue esta obsesión por la profilaxis política la que motivó las denegaciones y cancelaciones registrales que se dieron durante el periodo. Por más que fueran justificadas por causas técnicas, unas y otras respondieron, del mismo modo que las

autorizaciones, a motivos políticos estrictamente ligados a los intereses coyunturales de la Administración y a la estabilidad general del Régimen.

Cinco empresas no obtuvieron la autorización administrativa para editar diarios de información general durante el tardofranquismo. En ninguno de los cinco casos recurrió el MIT a denegaciones formales de la inscripción fundadas en los supuestos del artículo 29 de la LPI. En todos optó por mecanismos más discretos y menos sujetos a escándalos y controversias, como el rechazo comunicado por vía informal a los Luca de Tena (Prensa Española), a Ibáñez Escofet (Migdia) y a los promotores de PESA o la demora injustificada de la tramitación de la inscripción de PRISA y Prensa Catalana.

Las solicitudes de Prensa Española (para convertir la revista *Blanco y Negro* en un vespertino) y PESA (para sustituir el expoliado *El Alcázar* por *El Alcance*) chocaron a finales de los sesenta con los intereses del MIT, poco dispuesto a conceder el plácet a proyectos identificados con la tecnocracia opusdeísta. Las solicitudes de PRISA (para alumbrar *El País*), Manuel Ibáñez Escofet (para editar *Migdia*) y Prensa Catalana (para publicar *Avui*) fueron consideradas, en cambio, peligrosas para la estabilidad misma del franquismo. Las tres propuestas fueron ubicadas por la Administración extramuros de la oposición tolerada, al considerarlas —a partir de los informes policiales preceptivos— próximas al liberalismo y monarquismo donjuanista, la primera, y al nacionalismo catalán, las dos últimas.

La cancelación registral prevista en la Ley Fraga otorgaba a la Administración la potestad de expulsar del sistema de prensa a las empresas menos convenientes políticamente y de ejercer, consecuentemente, una notable capacidad coactiva sobre todas las sociedades autorizadas. Tal potestad fue empleada en dos ocasiones durante el tardofranquismo para acabar con los diarios *Nivel* y *Madrid*, ambos clausurados con Alfredo Sánchez Bella en el despacho ministerial.

El amplio margen de discrecionalidad que permitía el artículo 29 de la LPI permitió al MIT encubrir tras motivos técnicos dos cierres de naturaleza política. Los documentos hallados y los testimonios consultados demuestran que político fue el cierre de *Nivel*, motivado por la oportunidad de Sánchez Bella de congraciarse con la influyente prensa madrileña al deshacerse de un competidor por lo demás crítico con la tecnocracia (recién fortalecida en el Gobierno) y huérfano de avales políticos. Como política fue, desde luego, la defenestración del díscolo diario *Madrid*, resultado de una maniobra administrativa muy estudiada y que el entonces director general de prensa, Alejandro Fernández Sordo, reconocería años después ejecutada “en defensa de la autoridad del Estado” y “en beneficio de elementales razones de higiene y salubridad políticas” (*loc. cit.* 5.4)

Los mecanismos legales y extralegales de vigilancia y control no fueron aplicados únicamente sobre quienes solicitaron la inscripción en el REP. Afectaron también a las empresas que lograron pasar el filtro administrativo y fueron autorizadas a editar prensa diaria en España.

El Ministerio de Información y Turismo sometió a accionistas y directivos a un estrecho control; lo que le permitió identificar a las personas a quienes dirigir las presiones y sanciones administrativas y detectar anticipadamente e intervenir en cuantos movimientos y alteraciones se dieran en el sistema de prensa.

La legislación sobre propiedad se caracterizó por tres notas esenciales: la prohibición de financiar empresas de prensa con capital extranjero, la ausencia de límites legales a la acumulación de capital y la obligación de identificación de socios y accionistas. Las restricciones impuestas a la participación accionarial de extranjeros y españoles residentes fuera del país fue aplicada de forma laxa allí donde colisionó con los intereses de la ACN de P y de la propia Administración. Ya en el propio articulado de la LPI, el legislador no había dudado en incorporar una disposición *ad hoc* dirigida a preservar el capital hispanoamericano de Edica, la cadena acenepista. Por si fuera poco, el MIT vulneró durante varios años su propia legalidad al consentir la propiedad estadounidense del *Iberian Daily Sun*. Con todo, a pesar de estas excepciones ligadas a intereses coyunturales y específicos, la Administración mantuvo, por lo general, el capital de las empresas de prensa en manos de españoles y, por tanto, dentro del radio de vigilancia y acción jurisdiccional del Estado.

La ausencia de límites legales a la participación accionarial supuso una de las omisiones más significativas de la normativa tradofranquista en materia de prensa. El vacío legal favoreció el proceso de concentración de la propiedad, lo que sin duda facilitó el control administrativo de propietarios y accionistas.

A mantenerlos identificados se dirigieron varios artículos de la LPI y disposiciones posteriores. Además de reconocer al MIT la capacidad de inspección ya explicada y de conminar a las empresas a comunicar al REP cuantos movimientos se produjeran en sus accionariados, el ordenamiento sancionó la obligatoriedad de convertir los títulos de propiedad en nominativos y de publicitar los nombres de quienes superaran el 10% del capital.

La legislación referida al gobierno de las empresas se orientó a la consecución de dos objetivos primordiales: la identificación de los directivos de prensa y la promoción de órganos ajenos a los vaivenes del capital que contribuyeran a preservar la línea editorial

autorizada por el REP. En 1966, el legislador trató de impulsar la creación de consejos integrados por fundadores y encargados de conservar la ideología original del diario frente a los cambios que la llegada de nuevos socios pudiera generar. Inspirada en la Junta de Gobierno de la Editorial Católica, las llamadas Juntas de Fundadores se presentaron como una salvaguarda de la línea editorial fundacional; cuando eran, en realidad, una garantía para el lector tanto como para la Administración. Con ellas, el MIT pretendía asegurarse de que ningún nuevo accionista pudiera, tras hacerse con el control del Consejo de Administración, modificar la línea política autorizada por la inscripción en el REP. Los nuevos órganos habrían actuado, además, como barrera disuasoria frente a nuevos e ignotos inversores que trataran de hacerse con órganos de expresión mediante el control de los consejos. En la práctica, sólo en algunas sociedades vinculadas a la Iglesia tuvieron las Juntas un poder relevante, de modo que el gobierno de las empresas siguió en manos de los órganos controlados por el capital.

La legislación dirigida a identificar a los directivos de prensa permitió a la Administración señalar a las personas a quienes presionar para obtener cambios en las líneas editoriales de los diarios y a quienes exigir las responsabilidades civiles subsidiarias previstas en la LPI.

Con el fin de hacer aflorar a los responsables con poder decisorio, la Ley obligó a que participaran en los órganos de gobierno cuantos accionistas contaran con más de un 20% del capital y a que estos fueran, exclusivamente, españoles residentes en el país. Además, las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada debían contar con administración colegiada, de la que sólo podían formar parte personas naturales.

A pesar de todos los esfuerzos y precauciones, la normativa no careció de lagunas. Como comprobamos en el capítulo sexto, no pocos empresarios trataron de escapar al control administrativo mediante el uso de testaferros, la creación de sociedades interpuestas y el reparto de acciones entre familiares. Al primer subterfugio recurrieron el estadounidense André del Amo (con el fin de ocultar la propiedad de Mediterranean Publishing Company) y el banquero Jordi Pujol (para encubrir su presencia en Fomento de la Prensa Tradicionalista). De sociedades interpuestas se valieron varios banqueros ligados al Opus Dei. José Ferrer Bonsoms, vicepresidente del Banco Atlántico y presidente de Bankunión, eludió la presencia en los consejos de hasta cinco empresas de prensa mediante un sencillo entramado empresarial. Tampoco Luis Valls Taberner, hombre fuerte del Banco Popular, participó en el CA de la sociedad editora del diario *Madrid*, controlada indirectamente durante los sesenta a través de FACES. Del mismo

modo, ni Luis Coronel de Palma, presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro, ni Arturo Suqué Puig hubieron de personarse en el CA de Prensa Castellana gracias a la sociedad interpuesta Industrial Gráfica Fuenfría. Por fin, al menos dos personas evitaron la publicidad que comportaba la presencia en los órganos de gobierno mediante el reparto de acciones entre familiares: José María de Porcioles Colomer, alcalde de Barcelona y accionista mayoritario, desde 1971, de Editorial Mencheta; y el célebre Juan March Servera, titular de la banca homónima y propietario a finales de los sesenta de Editora Balear.

Ninguna de estas maniobras pasó, desde luego, desapercibida para la Administración, que contaba, como ha quedado demostrado, con los mecanismos extralegales necesarios para solventar los resquicios que pudiera haber dejado la Ley. La información recabada sobre accionistas y directivos por el aparato de vigilancia de la DGP sirvió a dos objetivos fundamentales: permitió a la Administración conocer y anticiparse a cuantos movimientos fueran a producirse en el sistema de prensa y confrontar los datos aportados por las empresas al REP con los datos reales de propiedad y gobierno de las editoras.

Las sanciones y la cancelación registral que la Ley de Prensa preveía para las empresas que aportaran datos incompletos o erróneos al REP se tradujeron en una formidable capacidad de coacción en poder de la Administración. Naturalmente, la identificación de las posibles irregularidades requería de la confrontación de los datos aportados por las empresas al Registro con su situación real, cuyo esclarecimiento se encomendó al aparato de vigilancia de la DGP.

La documentación hallada indica que al menos tres empresas fueron investigadas con el fin de forzar cambios en su propiedad y gobierno, en las redacciones de sus diarios y en sus líneas editoriales. Editorial Navarra no se libró de las inspecciones del MIT y de las pesquisas de la Delegación Provincial –cuyos informes son elocuentes sobre el verdadero motivo de la investigación– en tanto no hubo destituido a José María Pascual como director de *El Pensamiento Navarro*. La línea editorial del diario *Informaciones* también pareció estar detrás de la campaña de investigación y presiones desatada por el MIT sobre los accionistas de su empresa editora, Prensa Castellana. El hostigamiento se acabó saldando, en 1974, con la salida del accionariado del Banco de Santander, al que el entonces presidente del Gobierno “aconsejó”, según uno de los testimonios consultados, abandonar la inversión (v. 6.4.1.1). Ese mismo año, el Ministerio movilizó por última vez su aparato para obtener información de una empresa problemática: Barcelonesa de Publicaciones, editora del *Diario de Barcelona*, cuya deriva catalanista había suscitado la alarma del Ministerio. En este caso, todo indica que la información y

las presiones no sólo frenaron la incorporación de periodistas inadmisibles para el MIT, sino que acabaron forzando la salida de la editora del liberal Arturo Suqué Puig (y de sus compañeros del Círculo de Economía) y la llegada en su lugar de José María de Santacreu, considerado el hombre de confianza de Manuel Fraga en Cataluña.

Gracias a las pesquisas de las Delegaciones Provinciales y de la Oficina de Enlace, la DGP pudo también adelantarse a los cambios que se vislumbraban en el mapa de la prensa española y conocer a cuantos pretendieron acceder al sistema mediante la compra de acciones de empresas autorizadas. Ésta era, por lo demás, la única puerta de entrada al sistema que quedaba tras el “cierre” de la ventanilla del REP a nuevas iniciativas –o “microbios”, en los términos de Sánchez Bella– decretada en 1970.

De la casi veintena de operaciones relevantes de compraventa de acciones que se dieron entre 1966 y 1975, sólo en cuatro casos no han quedado rastros de la vigilancia e intervención administrativa. En todos ellos, el perfil de los nuevos socios –prohombres franquistas con asiento en Cortes en su mayor parte– hace pensar que contaban con el beneplácito del Régimen.

Sí activó en cambio el Ministerio su aparato para seguir el cambio de propiedad al que parecían abocados los quebrados *La Voz de Albacete* y *Primera Página*, de Pedro García Munera. Como también investigó la adquisición de Última Hora (*Última Hora*) por Pedro Serra Bauzá, la entrada de Empresa Periodística España (*Sol de España*) en la órbita opusdeísta del Banco Atlántico y la llegada de nuevos accionistas a La Voz de Asturias (*La Voz de Asturias*).

Tampoco dejó de interesarse la Administración por las tres grandes guerras internas que se libraron durante el tardofranquismo por el control de El Norte de Castilla (*El Norte de Castilla*), de Editorial Sevillana (*El Correo de Andalucía*) y de Fomento de la Prensa Tradicionalista (*El Correo Catalán*). En los dos primeros casos, por más que puedan intuirse las presiones y favores ministeriales, no han quedado evidencias documentales de que la actuación del MIT fuera más allá del seguimiento de las operaciones. Los documentos hallados en el expediente de Fomento de la Prensa Tradicionalista evidencian, en cambio, que la Administración no siempre se limitó a la mera vigilancia.

Allí donde se vieron afectados sus intereses coyunturales y/o generales, el Ministerio no dudó en intervenir, bien impulsando la entrada en el sistema de empresas y empresarios leales al Régimen, bien dificultando o tratando de impedir operaciones políticamente inconvenientes. Entre los movimientos favorecidos de un modo u otro por el Ministerio se cuentan la compra por parte de Pedro Serra Bauzá de Mediterranean Publishing Company (*Iberian Daily Sun*); el “rescate” de *El Noticiero de Cartagena* por

un grupo de empresarios extremeños; el traspaso de *Nuevo Diario* de PESA a Prensa Económica, vinculada a la tecnocracia de López Rodó; y de *El Alcázar*, también editado inicialmente por PESA, a DYRSA, controlada por las facciones más inmovilistas del Régimen. Por otra parte, la facultad prevista en la LPI de rechazar movimientos y modificaciones en las inscripciones registrales de las empresas permitió al MIT dificultar la llegada de accionistas indeseados, como Sebastián Auger a Ilustración (*Diario Femenino-Mundo Diario*), Jordi Pujol a Fomento de la Prensa Tradicionalista (*El Correo Catalán*) y de una Cooperativa laboral ligada a Comisiones Obreras a Ferrol Ediciones (*Ferrol Diario*). Especialmente en los dos primeros casos, no dudó el MIT en recurrir a chantajes y presiones, que obligaron a Auger y Pujol a pactar las condiciones de su desembarco en la prensa española, inevitable finalmente a pesar de las maniobras del Ministerio.

Junto a la tamización del sistema y a la vigilancia y control de empresarios y directivos, la influencia e intervención administrativa sobre la vida económica de las editoras fue el tercer pilar de la política informativa aplicada sobre la empresa periodística privada.

Las medidas dirigidas a influir sobre las cuentas de las empresas, ya aliviando o agravando sus gastos, fueron instrumentalizadas por el MIT para afianzar su capacidad de coacción y control sobre las editoras.

Durante el tardofranquismo, el Estado sostuvo a la prensa como la trampilla del cadalso a quien va a ser ahorcado. Tres fueron los mecanismos de los que se valió el MIT para influir sobre las cuentas de las empresas de prensa: la cofinanciación directa e indirecta mediante subvenciones, primas, desgravaciones y otras medidas; la regulación de partidas fundamentales de gastos e ingresos de explotación como la publicidad y los salarios; y las sanciones y suspensiones, que gravaron los gastos extraordinarios de las empresas, pero que fueron para muchas de ellas todo menos extraordinarias.

La cofinanciación de las empresas de prensa se vio lastrada durante el periodo por una distribución inicua, opaca, discrecional y discriminatoria. Su reparto estuvo, por lo general, supeditado al control administrativo de las beneficiarias y al mantenimiento de líneas editoriales favorables o, cuanto menos, inofensivas para al Régimen. En los pocos casos en los que la distribución se hizo de acuerdo con criterios reglados y públicos, tendió a favorecer a las grandes empresas. La subordinación de la financiación al control administrativo abocó a la prensa a una crisis endémica desde los años sesenta. Las necesidades de modernización del sector colisionaron con las restricciones impuestas

a la entrada de capitales externos y con las dificultades de financiación derivadas de la baja rentabilidad del sector (a la que no era ajena la fijación de precios políticos de venta de ejemplares); lo que obligó a muchas empresas a recurrir a constantes ampliaciones de capital para poder financiarse.

Entre 1966 y 1975, la Administración aplicó cinco mecanismos de cofinanciación (v. 7.1): (1) La concesión de subvenciones al consumo de papel prensa, que constituía, junto a los salarios, el coste más gravoso para las empresas. Entre 1962 y 1971 el MIT estableció un régimen de compensaciones por cantidad de papel consumido condicionado a la inscripción de la empresa en el REP (y, por tanto, al control administrativo) y al acatamiento de los precios políticos de venta. En 1971, Alfredo Sánchez Bella sustituyó las compensaciones por una política de desgravaciones a la importación de papel que no hizo sino ahondar el desequilibrio entre el coste de la materia prima (liberalizado en 1962) y los ingresos por venta de ejemplares (que siguieron condicionados por el precio político fijado por el Estado). (2) La reducción de las tarifas telefónicas, telegráficas y postales, que, en tanto fijadas en función del volumen del tráfico telefónico, telegráfico y postal, tendieron a favorecer a las mayores empresas. (3) La fijación de precios políticos a los despachos de la Agencia EFE, que empujaron a la baja los precios del resto de agencias privadas y rebajaron en parte los costes de obtención de información. (4) La apertura de líneas de crédito destinadas a financiar la modernización de las empresas. Concedidos por el Banco Industrial, los créditos fueron distribuidos de acuerdo con el criterio discrecional de la Administración y acabaron favoreciendo a las pocas empresas con superávit o acceso a grandes capitales, las únicas que podían permitirse financiar el 30% de las reformas que no cubrían los créditos. El fracaso de la medida agravó aún más la obsolescencia de la maquinaria, utillajes y estructuras de las editoras, incapaces de invertir en su propio desarrollo. (5) La publicidad estatal, la publicidad redaccional y la probable existencia de “fondos de reptiles”. El reparto de estos montos fue una vez más, como en los anteriores casos, opaco, discrecional e inicuo, al concederse en función de la adhesión al Régimen de los diarios y de la publicación de artículos laudatorios con el Gobierno.

Durante el tardofranquismo, la Administración atesoró una temible capacidad coercitiva, reforzada por la ambigüedad e indefinición de los supuestos constitutivos de infracción, que dejaron un amplio margen de discrecionalidad a la Administración en su enjuiciamiento y sanción. La coacción que –fruto de esta jurisdicción administrativa paralela a la penal– padecieron las empresas, se vio agravada además por una

indefensión jurídica que la posibilidad de recurso contencioso-administrativo (reconocido a partir 1966) alivió sólo en parte.

Las empresas hubieron de hacer frente a dos tipos de infracciones: unas motivadas por los contenidos publicados por sus diarios y otras derivadas de la detección de irregularidades en los datos societarios comunicados al REP. Esta última vía de sanción permitió al Ministerio encubrir sanciones políticas tras motivaciones técnicas, sin el escándalo y la controversia que suscitaba el recurso al célebre artículo 2 de la LPI. Ello no acabó, de todos modos, con las sanciones derivadas de la publicación de contenidos políticamente inconvenientes, que motivaron hasta tres cuartos del total de expedientes incoados a editoras privadas de diarios durante el periodo. Por lo demás, los datos referidos en el apartado 7.3.2 apuntan a que la incoación tuvo la finalidad de amedrentar y coaccionar a las empresas más que de sancionarlas, dado que sólo un tercio de los expedientes abiertos acabaron en multa o suspensión.

Estas fueron las dos modalidades de sanción aplicadas en función de la gravedad de las infracciones. Aunque atenuadas durante la tramitación de la Ley en Cortes, ambas tuvieron consecuencias funestas para las empresas, ya debilitadas en muchos casos por el aumento de los costes del papel y por las dificultades de financiación antedichas. Entre 1966 y 1975 la Administración impuso, sólo por infracciones del artículo segundo, un centenar de multas a empresas editoras de diarios. Especialmente castigadas fueron la editora del diario *Madrid*, con casi un millón de pesetas en cuatro años; Pedro García Munera y Editorial Sevillana, todas ellas objeto, como hemos visto, de indagaciones policiales. Las suspensiones temporales afectaron, en cambio, sólo a dos empresas de prensa diaria: a (una vez más) Madrid, Diario de la Noche; y a Empresa Periodística España; por lo que tuvo más incidencia en términos de coacción que de represión efectiva.

III

La política descrita impactó y se vio condicionada por un sistema de prensa privada caracterizado por los siguientes rasgos estructurales: un abundante número de empresas y diarios con una difusión exigua y de influencia local o regional, ubicados en las zonas política y económicamente más importantes, con un capital concentrado en pocas manos y una propiedad y gobierno corporativo estrechamente vinculados a los centros de poder político y económico del Régimen.

Setenta empresas de prensa editaron diarios de información general durante el tardofranquismo, de los que sólo cuatro cabeceras privadas de Madrid y Barcelona tuvieron una difusión cercana a los 100.000 ejemplares y una influencia interregional. El resto de diarios adoleció de una difusión escasa y de una influencia limitada a su localidad o región de origen. Las deficiencias del sistema de distribución, los pobres índices de lectura de la sociedad española, las altas tasas de analfabetismo y la evidente falta de libertad y pluralismo contribuyen a entender la escasa difusión de la prensa española.

La aparición y desaparición de las editoras estuvo determinada por la coyuntura económica del periodo y, sobre todo, por la actuación política del Régimen. El periodo de expansión económica de los sesenta animó la constitución de empresas de prensa y la llegada de nuevos empresarios al sector. En los setenta, por el contrario, la regresión económica (que se trastocaría en crisis desde 1973) contribuyó a la quiebra de cuatro empresas. Con todo, fue la actuación política el factor decisivo en la variación de la población de empresas y diarios. Hasta 1969, el nuevo marco legal y la “apertura controlada” de Fraga atrajeron a nuevas empresas y empresarios al sector. Desde 1970, coincidiendo con el inicio de la crisis y de la agonía política del Régimen, el sistema de prensa quedó cerrado a nuevas iniciativas: ninguna empresa fue autorizada a editar un nuevo diario de información general y dos de ellas fueron expulsadas del sistema por motivos políticos.

La ausencia de límites legales y la inhibición administrativa favorecieron la concentración de la propiedad de las empresas privadas de prensa. El capital de la mitad de ellas (y de todas las que superaban los 100.000 ejemplares de difusión diaria) estuvo controlado durante el tardofranquismo por una única persona, sociedad o familia, de modo que treinta grandes empresarios y familias poseyeron las cabeceras más influyentes; y tres de ellos, los Luca de Tena, los Godó y los Ybarra editaron la mayor parte de los ejemplares que se leían diariamente en España. En el Apéndice de Empresas Periódicas (1966-1975) pueden consultarse los porcentajes de propiedad superiores al 2% del capital de cuantos poseyeron acciones, en 1967 y en 1975, de las empresas periódicas privadas objeto de estudio.

Junto a la coyuntura económica, también la política y la actuación administrativa influyeron en la ausencia de procesos de integración horizontal entre empresas privadas. La mayor parte de las empresas privadas editaban un único diario de información general y sólo dos sociedades pueden ser consideradas como cadenas de prensa: Edica, ligada a la ACN de P; y el entramado SARPE-CINISA, vinculado a los banqueros opusdeístas del Banco Atlántico y Bankuni3n. A pesar de la legislación permisiva con la

concentración empresarial, la integración horizontal se vio frenada por dos factores: por la importancia política que se le atribuía a la posesión de una cabecera, valorada más en términos de influencia social que de rentabilidad económica; y por la plusvalía que la inscripción en el REP acabó generando, especialmente tras el cierre del sistema, a las empresas autorizadas.

Empresarios y directivos de prensa participaron de la trama de relaciones de poder que rigió el país durante el tardofranquismo. El estudio de las vinculaciones entre los directivos de prensa y la élite política y empresarial del Régimen ha revelado el notable grado de integración entre la prensa privada española y los aparatos de poder político y económico tardofranquistas.

La mitad de los diarios (y todos los que distribuían más de 100.000 diarios) contaron durante el periodo con al menos un procurador en Cortes como consejero o vocal de sus editoras. En unos casos, la conexión política vino impuesta por el Ministerio o fue resultado de la cooptación por parte del Régimen de grandes empresarios de prensa; aunque todo apunta a que, en la mayor parte de los casos, fueran las propias empresas las que buscaron el favor político mediante la nominación de procuradores en sus consejos.

Muy similar fue el grado de conexión con las finanzas y el resto de sectores de la economía española. Con el sector financiero, especialmente la banca privada, mantuvieron vínculos a través de sus directivos la mitad de los diarios de información general del tardofranquismo. Con el resto de sectores estuvo vinculado el 60% de los diarios (y, una vez más, todos los más leídos), al compartir uno o más consejeros con otras sociedades dedicadas a diversas ramas de actividad; especialmente con la producción de maquinaria y materiales, la actividad químico-farmacéutica, la energía y la construcción (v. 4.3.2.2).

Los vínculos no impidieron ni mermaron el celo administrativo en la vigilancia y control de empresarios y directivos. Ni la presencia de procuradores en Cortes ni mucho menos de grandes empresarios en los Consejos de Administración de las empresas de prensa frenaron las indagaciones del MIT. Sin embargo, tal y como ha quedado demostrado, la vinculación con el poder tardofranquista se reveló crucial para la obtención del plácet administrativo para acceder al sistema de prensa y debió de facilitar, sin duda, los contactos y negociaciones diarias entre Ministerio y empresas.

IV

El modelo de control de la empresa periodística privada aplicado durante el tardofranquismo fue en muchos aspectos de paternidad y en casi todos de inspiración acenepista.

Acenepistas fueron buena parte los principios doctrinales que lo informaron y fundamentaron (v. 3.2); acenepista, uno de los instrumentos fundamentales mediante los cuales vino implementado, el REP; y acenepistas, en fin, fueron la mayoría de los dirigentes que, desde los despachos del Ministerio de Información y la Dirección General de Prensa, lo aplicaron.

La influencia del resto de “familias” y dirigentes con competencias en la materia antes de 1960 fue mucho más limitada. El falangismo —que, al igual que el resto de “familias”, tampoco puede considerarse como un bloque homogéneo— había ejercido, entre 1938 y hasta mediados de los años cuarenta, una influencia crucial sobre el modelo de constitución y control estatal de la prensa. Desde entonces, su influencia se fue apagando al ritmo en que lo hacía su poder en el Régimen. Suya había sido, ante todo, la concepción primigenia de la prensa como “institución nacional al servicio del Estado”; y suyos los modelos de control de los contenidos y la profesión vigentes hasta los años sesenta. El Partido se vio, sin embargo, excluido de todo lo referente a la regulación de la estructura económica y la empresa periodística: poco o nada había dicho sobre ello antes de 1950, cuando había comenzado a regularse la cuestión, y poco o nada podrá ya decir entonces, cuando hacía tiempo que habían quedado atrás sus años de apogeo.

Con todo, el falangismo gozó de más influencia que Gabriel Arias-Salgado, quien, paradójicamente, más años estuvo al frente del MIT y quien más empeño puso en elaborar una doctrina sobre la materia. Ni su definición de la prensa como “institución al servicio del bien común”, ni su peculiar régimen de “prensa orientada” por el Estado, tuvieron cabida en la política informativa española del tardofranquismo. Ello se debió en buena medida al fracaso de su ambicioso proyecto regulador, la Ley de Bases de la Información, que, aunque muerta antes de nacer, constituye el antecedente inmediato de la Ley Fraga.

Los postulados de Gabriel Arias-Salgado que encontraron acomodo en la política tardofranquista de prensa fueron poco menos que un trasunto de las iniciativas del acenepismo y, en particular, de Fernando Martín-Sánchez Juliá, presidente de la Asociación entre 1935 y 1953. De él tomará sobre todo Arias la idea del Registro de Propietarios de Periódicos, germen del Registro de Empresas Periodísticas creado en

1958, bajo su ministerio, e instrumentalizado a partir de 1966 como el principal instrumento de tamización y control de la empresa periodística privada.

Enunciada por Ángel Herrera Oria y, sobre todo, por Fernando Martín Sánchez Juliá y plasmada en la propuesta normativa presentada por el capítulo madrileño de la Asociación a principios de los sesenta, la doctrina acenepista sobre prensa fundamentó, por tanto, más que la de cualquier otra familia, dirigente o grupo de poder, la política informativa tardofranquista referida a la empresa periodística. Sus principios de transparencia, publicidad y continuidad ideológica fueron asumidos por el legislador en 1966 e instrumentalizados en los años siguientes por la Administración para reforzar su control sobre empresas, empresarios y directivos. La influencia de la ACN de P alcanzó tal magnitud que logró imponer a todo el sector el modelo de gobierno corporativo de Edica, que dispuso incluso de disposiciones *ad hoc* en la Ley de Prensa para proteger la inversión de sus accionistas extranjeros.

La influencia de la Asociación no resulta extraña si se considera que acenepistas fueron el redactor del proyecto de LPI, muchos de los procuradores que intervinieron en su tramitación y la mayor parte de dirigentes con competencias en el aparato administrativo de prensa durante el tardofranquismo. De los cinco ministros que ocuparon la cartera de Información y Turismo entre 1966 y 1975, al menos tres estuvieron vinculados en uno u otro momento a la ACN de P; a cuyo círculo madrileño pertenecieron también Manuel Jiménez Quílez y Alejandro Fernández Sordo, directores generales de prensa durante prácticamente todo el periodo y responsables directos del aparato administrativo de vigilancia y control manejado por el MIT hasta 1975.

V

El modelo de vigilancia y control de empresas, empresarios y directivos que conformó la política referida a la empresa periodística no fue aplicado del mismo modo ni con la misma intensidad durante todo el periodo. Cabe distinguir, en este sentido, tres etapas marcadas por los talantes y grupos de adscripción de los titulares del MIT y por el contexto general que fue atravesando el Régimen en aquellos años.

La primera etapa transcurre entre 1966 y 1969, los tres años inmediatamente posteriores a la aprobación de la LPI. A pesar de llegar a presentar su dimisión a Franco, Manuel Fraga se mantendrá al frente del MIT, con el acenepista Manuel Jiménez Quílez en la DGP. La actuación de ambos estará marcada por el empeño de salvaguardar la Ley recién aprobada frente a los embates del inmovilismo, liderado por un Luis Carrero

Blanco en franco ascenso. Ello se traducirá en una severa aplicación de la norma, especialmente en lo referente a la incoación de expedientes y a la imposición de sanciones. Los expedientes y multas por infracciones del artículo 2 (esto es: por la publicación de contenidos juzgados políticamente peligrosos) no dejarán de aumentar durante los años 1966 y 1967 hasta alcanzar el máximo histórico de todo el tardofranquismo en 1968, coincidiendo con el periodo más combativo del diario *Madrid*, con los sucesos de Mayo del 68 francés, y con un aumento de la oposición interior que acabará desembocando en la declaración del estado de excepción en 1969.

Fraga tampoco dudó en recurrir al aparato de vigilancia y control de la DGP cuya implantación, conviene no olvidarlo, había impulsado él mismo a principios de los sesenta. La información obtenida fue empleada, sobre todo, contra quienes fueron considerados portavoces y representantes de los principales adversarios políticos del reformismo de Fraga, la tecnocracia opusdeísta, cercana a la figura de Laureano López Rodó y protegida hasta 1973 por Carrero Blanco. Asimismo, los proyectos de edición de diarios que la Administración juzgó próximos a la tecnocracia (así como otra iniciativa considerada inadmisibles para la estabilidad del Régimen) fueron los únicos que no lograron ser admitidos en el sistema en aquellos años; a pesar de lo cual, fue éste el último trienio en que la ventanilla del REP estuvo abierta a nuevas iniciativas empresariales.

La destitución de Fraga a finales de 1969 da inicio a una segunda etapa, que alcanzará hasta 1973. Ocuparán el despacho ministerial durante estos años Alfredo Sánchez Bella y Fernando Liñán y Zofío, ambos identificados con el almirante Carrero Blanco, en el apogeo de su poder. En 1969, tras el escándalo Matesa y la salida del Ejecutivo de reformistas y opusdeístas, Carrero había formado el llamado Gobierno monocolor, con él y (en menor medida) López Rodó como figuras claves. La actuación del Gobierno se caracterizará por un aumento significativo de la represión, única respuesta de la dictadura ante el crecimiento de la oposición interior, el aumento de la presión internacional y los primeros signos de su inexorable agotamiento. En el ámbito informativo, los cambios se traducirán en un endurecimiento indiscutible del control sobre empresas y empresarios, que verán acabar el año 1969 con el cierre del neonato diario *Nivel*, toda una advertencia al sector y un símbolo de los durísimos años que estaban por venir.

En 1970 y 1971, la incoación de expedientes por la publicación de contenidos se mantuvo estable en la treintena, para volver a repuntar y alcanzar el segundo máximo relativo del periodo en 1972. La ofensiva contra la economía de las empresas menos complacientes llevó también a la sustitución de las compensaciones por consumo de

papel por desgravaciones fiscales, por la concesión de créditos y por la distribución de montos en base a la publicación de contenidos favorables al Gobierno. Tras unos años en que el reparto de la principal partida de cofinanciación (las primas por consumo de papel) había estado controlada por las propias empresas, Sánchez Bella restituyó a la Administración la distribución de las ayudas, que siguió desde entonces un criterio inicuo, favorable siempre a las empresas más dóciles y afectas.

Fueron estos, además, los años en que con más intensidad hizo uso el MIT del aparato de vigilancia orquestado en la década anterior por Jiménez Quílez. A través de las Delegaciones Provinciales, los Servicios de Información y la Oficina de Enlace, la DGP de Alejandro Fernández Sordo mantuvo una estrecha vigilancia de prácticamente todos los movimientos que se dieron en el sistema de prensa e intervino en no pocos de ellos. En apenas tres años, los dos ministros tuvieron tiempo de obligar a PESA a renunciar a sus derechos sobre *El Alcázar* y a ceder *Nuevo Diario* a un proyecto auspiciado por López Rodó; de chantajear a Sebastián Auger para tratar de evitar su entrada en el sector; de instar a Pedro Serra a hacerse con el *Iberian Daily Sun* y de iniciar la persecución contra Jordi Pujol que trataba de hacerse con *El Correo Catalán*. Todo ello sin olvidar, por supuesto, el cierre del sistema a nuevos actores que pudieran infectar un Régimen que se sabía en el quirófano y, sobre todo, las escandalosas clausuras de los diarios *Nível* y *Madrid*, castigados por mantener una línea editorial poco complaciente.

Una vez más, el cambio en la cartera de Información marca la transición a la última etapa de aplicación de la política informativa sobre la empresa periodística, durante el último bienio de la dictadura. En 1974, el aperturista Pío Cabanillas llegaba al Ministerio en el contexto del “espíritu del 12 de febrero” proclamado por el nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Las esperanzas puestas en una apertura siquiera leve durarían lo que Cabanillas en el Ministerio: nueve meses. Su destitución y la llegada al MIT de León Herrera en octubre de 1974 simbolizan el último fracaso de las posibilidades de reforma del Régimen, inmerso desde diciembre de 1973 en su crisis terminal.

La política informativa aplicada sobre empresas y empresarios no dejó de verse afectada por el irresistible debilitamiento del Régimen. En 1974, el paso de Cabanillas por el MIT hizo desplomarse la incoación de expedientes al mínimo histórico de todo el periodo. Aunque con Herrera Esteban en el MIT y Franco agonizante volvieron a repuntar, ya nunca alcanzaron los niveles del septenio anterior.

Si bien no dejó de emplearse el aparato de vigilancia para seguir diversas operaciones e indagar en varios empresarios y directivos, la capacidad de coacción del

MIT había quedado severamente mermada y, con ella, sus posibilidades de intervención en el sistema. Tres hechos marcan el fracaso del Régimen en el control de la prensa durante el último bienio: la llegada pública de Jordi Pujol, ya sin testaferros ni ocultamientos, al accionariado y Consejo de Fomento de la Prensa Tradicionalista (*El Correo Catalán*), a pesar de todos los esfuerzos de la DGP por impedirlo; y las autorizaciones, aprobadas a finales de 1975 tras varios años de demora y silencio administrativo, de los proyectos de PRISA y Premsa Catalana, juzgados pocos años antes inadmisibles. La aparición en los quioscos de *Avui* y de *El País* simboliza el fracaso definitivo de la dictadura en su intento por impedir la llegada del nuevo tiempo que, tras la muerte del dictador, se abría para España.

Bibliografía

- ABELLA, FRANCISCO (1974): “Discurso ante el Pleno de las Cortes, 15 de marzo de 1966”. En *Prensa e Imprenta*. Madrid: Colección Textos Legales, Gabinete Jurídico Administrativo del Boletín Oficial del Estado.
- ABELLÁN, M.L. (1979): “Análisis cuantitativo de la censura bajo el franquismo (1955-1976)”, *Sistema. Revista de Ciencias Sociales* (28), pp. 75-89
- ALFÉREZ, ANTONIO (1986): *Cuarto Poder en España: la Prensa desde la Ley Fraga 1966*, Barcelona: Plaza & Janés.
- ALMIRÓN, NURIA (2006): *Poder financiero y poder mediático: banca y grupos de comunicación. Los casos del SCH y PRISA (1976-2004)*. Tesis doctoral (Dir. Marcial Murciano), Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- ÁLVAREZ DE VIGNIER, RAMÓN (1966): *Infracciones de prensa e imprenta en la legislación y la jurisprudencia*, Madrid: Editorial Reus
- ARIAS-SALGADO, GABRIEL (1960): *Textos de Doctrina y Política española de la Información. Vol. 1 Discursos y Declaraciones; Vol. II. Correspondencia Y Diálogo; Vol. III Antología Ordenada*, Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio de Información y Turismo.
- BALSEBRE, ARMAND (2011): *Victor Sagi, historia de la publicidad*, Barcelona: Ediciones Invisibles
- BARCIELA, CARLOS *et. al.* (2001): *La España de Franco (1939-1975). Economía*, Madrid: Síntesis
- BARRERA, CARLOS (1991a): *El Diario Madrid (1966-1971): realidad y símbolo de una época*. Tesis doctoral (Dir. José Javier Sánchez Aranda), Pamplona: Universidad de Navarra.
- _____ (1991b): “Claves políticas del cierre del diario ‘Madrid’”, *Historia 16* (187), pp. 12-28
- _____ (1993): “Políticas de Información y propaganda durante el franquismo”. En Javier Tusell *et. al.*: *El régimen de Franco (1936-1975). Política y Relaciones Exteriores*, Vol. 2., Madrid: UNED.
- _____ (1995a): *Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura*, Barcelona: EIUNSA.
- _____ (1995b): *El Diario Madrid: Realidad y símbolo de una época*. Pamplona: Eunsas.
- _____ (1997): “Poder político, empresa periodística y profesionales de los medios en la transición española a la democracia”. En *Comunicación y Sociedad*, vol. X (2), pp. 7-46.

- ____ (1999): “Del gacetero al profesional del periodismo. Evolución histórica de los actores humanos del cuarto poder”, *Comunicación y sociedad: revista de la Facultad de Ciencias de la Información*, dic-mayo (XII), pp. 159-161
- ____ (2000): “Estrategias periodísticas de apertura y resistencia en un espacio público autoritario: los casos de Madrid (España) y La Opinión (Argentina), *Comunicación y sociedad*, 13 (2), pp. 53-86
- BASTIDA FREIJEDO, FRANCISCO JAVIER (1986): *Jueces y franquismo: el pensamiento político del Tribunal Supremo en la dictadura*, Barcelona: Ariel
- BENEYTO, JUAN (1944): *Planteamiento del régimen jurídico de Prensa y Propaganda*, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, enero-marzo.
- ____ (1986): “Los consejos de prensa bajo el franquismo”. En *Revista de Estudios Político* (52), julio-agosto.
- ____ (1988): “Sobre la información y la política de prensa durante el franquismo”. En *Periodistas*, (9), enero.
- BORDERÍA, ENRIQUE (2000): *La prensa durante el franquismo: represión, censura y negocio en Valencia (1939-1975)*, Valencia: Fundaciàon Universitaria San Pablo CEU
- BUSTAMANTE, ENRIQUE (1982): *Los amos de la información en España*, Madrid: Akal.
- ____ (2003): “Las industrias culturales, entre dos siglos”. En Enrique Bustamante (coord.): *Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital*, Barcelona: Gedisa.
- CABANA, FRANCESC (2006): *Cien empresarios catalanes*, Madrid: LID
- CAL, ROSA (1999): “Prensa y franquismo “Nuevo Diario”: un ejemplo de la escasa apertura de la Ley Fraga”, *Revista Latina de comunicación social* (20)
- CAMACHO DE CIRIA, MANUEL (1968): “Las competencias político-administrativas en materia de prensa antes y después de la ley de 18 de marzo de 1966”. En *Estudios de Información* (5), enero-marzo.
- CAMPO VIDAL, MANUEL (2003): *Concentración de poder en el mapa mediático español. El factor político, determinante en el siglo XX*. Tesis doctoral (Dir. Juan Muñoz García), Madrid: Universidad Complutense de Madrid
- CANTAVELLA, JUAN Y SERRANO, JOSÉ FRANCISCO (2010): *Los periódicos de la Editorial Católica: la cadena de Edica*, Madrid: Edibesa
- CASTELLS, MANUEL (2009): *Comunicación y poder*, Madrid: Alianza.
- CASTRO SANZ, CARLES (2002): *La reconversión tecnológica y empresarial en un periódico consolidado: el caso de “La Vanguardia”*. Tesis doctoral (Drs. Margarita Ledo Andión y José Luis Riva Amella), Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

- CHINARRO, EDUARDO (1978): *Libertad de impresión. El Correo de Andalucía visto desde la trinchera*, Sevilla: Eduardo Chinarro
- CHULIÁ, ELISA (1993): “La Legislación de prensa del primer franquismo: la adaptación española de un modelo importado”. En Javier Tusell *et. al.*: *El Régimen de Franco (1936-1975) Política y Relaciones Exteriores*, Madrid: UNED.
- _____ (1997): *La evolución silenciosa de las dictaduras: el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo*. Tesis doctoral (Dir. Víctor Pérez Díaz), Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
- _____ (1999): “La Ley de Prensa de 1966: la explicación de un cambio institucional arriesgado y de sus efectos virtuosos”, *Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales* (2), 197-220
- _____ (2001): *El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo*, Madrid: Biblioteca Nueva.
- CLAVERO ARÉVALO (1967): “Prensa y jurisdicción contencioso-administrativa”. En *Homenaje al profesor Giménez Fernández*, Sevilla, I, pp. 273 y ss.
- CONESA, FERNANDO (1978): *La libertad de la empresa periodística*, Pamplona: Universidad de Navarra.
- CRESPO DE LARA, PEDRO (1975): *El artículo Dos. La prensa ante el Tribunal Supremo*, Madrid: Prensa Española.
- _____ (1988): *La prensa en el banquillo 1966-1977*, s.l.: AEDE
- _____ (1995): *La empresa periodística en vivo. Del autoritarismo a la democracia*, Barcelona: Ariel.
- CURRAN, JAMES (2005): *Medios de comunicación y poder* (v.o. 2002), Barcelona: Hacer
- CURRY, RICHARD (2006): *En torno a la censura franquista*, Madrid: Editorial Pliegos
- DE MIGUEL, AMANDO (1975): *Sociología del franquismo*, Barcelona: Euros
- DÍAZ GUELL, CARLOS (1996): *La distribución de la prensa en España*. Tesis doctoral (Dir. Fernando Pinado y Miguel), Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- DUEÑAS, GONZALO (1969): *La Ley de Prensa de Manuel Fraga*, París: Ruedo Ibérico.
- EQUIPO MUNDO (1970): *Los noventa ministros de Franco*, Barcelona: Dopesa
- ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO (2009): *Callar al mensajero: la represión franquista: entre la libertad de información y el derecho al honor*, Barcelona: Ediciones Península
- FERNÁNDEZ ALONSO, ISABEL (1998): *La política informativa de la U.C.D. durante la Transición española (1977-1982): los procesos de privatización del espacio audiovisual*. Tesis doctoral (Dir. Rosa Cal), Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

- FERNÁNDEZ AREAL, MANUEL (1971): *La Libertad de prensa en España (1938-1971)*, Madrid: Edicusa.
- _____ (1972): *La Ley de prensa a debate*, Barcelona: Plaza & Janés
- _____ (1973): *El control de la prensa en España*, Madrid: Guadiana de Publicaciones.
- _____ (1979): *Supuestos políticos y principios ideológicos de la legislación de prensa en España*, Bellaterra, Barcelona: Universidad Autónoma, Servicio de Publicaciones.
- _____ (1993): *La prensa durante el franquismo y la transición*, Las Palmas de Gran Canaria: Centro de Estudios de Humanidades.
- _____ (2002): “Significado y alcance de la Ley Fraga”. En Celso Almuiña y Eduardo Sotillos (coords.): *Del periódico a la sociedad de la información*, Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.
- FERNÁNDEZ ALONSO, MARÍA ISABEL Y FERNANDA SANTANA (2000): *Estado y medios de comunicación en la España democrática*, Madrid: Alianza.
- FIGUERES, JOSEP M. (2002): *Prensa i nacionalisme: el periodisme en la reconstrucción de la identitat catalana*, Barcelona: Pontic
- FONTANA, JOSEP (1986): “Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo”. En Josep Fontana (ed.): *España bajo el franquismo*, Barcelona: Crítica
- FRAGA IRIBARNE, MANUEL (1974): “Discurso ante el Pleno de las Cortes, 15 de marzo de 1966”. En *Prensa e Imprenta*. Madrid: Colección Textos Legales, Gabinete Jurídico Administrativo del Boletín Oficial del Estado.
- _____ (1980): *Memoria breve de una vida pública*, Barcelona: Planeta.
- FRANCO SALGADO-ARAUJO, FRANCISCO (1977): *Mis conversaciones privadas con Franco*, Barcelona: Planeta
- FUSI, JUAN PABLO (1985): *Franco. Autoritarismo y poder personal*, Madrid: Suma de Letras
- GARCÍA DELGADO, JOSÉ LUIS & JIMÉNEZ, JUAN CARLOS (2003): “La Economía”. En Santos Juliá et. al.: *La España del siglo XX*, Madrid: Marcial Pons Historia.
- GARCÍA ESCUDERO, JOSÉ MARÍA (1984): *Ya: medio siglo de historia: 1935-1984*, Madrid: Editorial Católica
- GARCÍA JIMÉNEZ, JESÚS (1980): *Radiotelevisión y política cultural en el franquismo*, Madrid: CSIC.
- GARCÍA LABRADO, FRANCISCO (1968): *Criterios de Independencia en la Prensa*, Madrid: Escuela Oficial de Periodismo.
- _____ (1975): *La ayuda económica del Estado a la Prensa*, Pamplona: Universidad de Navarra.

- GAY FUENTES, CELESTE (1991): “La Regulación del ejercicio de la profesión periodística”, *Revista de Administración Pública* (126), pp. 385-408.
- GAYÁN FÉLEZ, XAVIER Y LLUISA RODRÍGUEZ MUÑOZ (2000): “Censura de prensa y justicia penal en el régimen franquista”. En *El franquismo: el régimen y la oposición. Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos*, pp. 503-513.
- GIDDENS, ANTHONY (2002): *Sociología* (v.o. 1989). Madrid: Alianza.
- GIMÉNEZ-ARNAU, JOSÉ ANTONIO (1978): *Memorias de memoria. Descifre vuestro pasado personalmente*, Barcelona: Destino
- GÓMEZ-REINO, ENRIQUE (1972): “Las infracciones al artículo 2º de la Ley de Prensa”, *Revista de Administración Pública* (69), pp. 131-176
- ____ (1976): *Legislación de prensa, información y publicidad*, Madrid: Civitas Ediciones
- ____ (1977): *Aproximación histórica al Derecho de la Imprenta y de la Prensa en España (1480-1966)*. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos.
- ____ (2007): “La Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta: un modelo de autocensura”, *Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela*, 16 (1), pp. 209-219
- ____ (2009): “La prensa bajo el franquismo: las leyes de Serrano Súñer y Fraga Iribarne”. En María Paz García Rubio (coord.): *Estudios jurídicos en memoria del profesor José Manuel Lete del Río*, Cizur Menor (Navarra): Civitas-Thompson Reuters.
- GONZÁLEZ PÁRAMO, JOSÉ MANUEL (1972): *Política de prensa. Dialéctica de la empresa periodística*, Barcelona: Grijalbo.
- HELLER, HERMAN (1974): *Teoría del Estado* (v.o. 1934). México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- HERAS PEDROSA, CARLOS DE LAS (2000): *El papel de la publicidad en la empresa periodística*, Málaga: Universidad de Málaga
- HERRERA ORIA, ÁNGEL (2002): “La ordenación jurídica de la prensa”. En *Obras Completas. II Estudios, Prólogos, Artículos, Declaraciones, Memorias*, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- HUERTAS, CLAVERÍA (1986): “La mirada oculta del régimen”, *Annals del Periodisme Català*, (8-9), pp. 20-33.
- HUMANES, MARÍA LUISA (1998): “La profesión periodística en España”, *Zer. Revista de Estudios de Comunicación* (4), pp. 265-278
- IBÁÑEZ ESCOFET, MANUEL (1992): *La memòria és un gran cementeri*, Barcelona: Edicions 62

- IGLESIAS, FRANCISCO (1979): *Prensa Española, S.A. Editora de ABC y Blanco y Negro (1891-1978)*. Tesis doctoral (Dir. Alfonso Nieto Tamargo), Universidad de Navarra.
- ____ (1980): *Historia de una empresa periodística: Prensa Española, editora de “ABC” y “Blanco y Negro”: 1891-1978*, Madrid: Prensa Española
- IMBERT, GÉRARD & VIDAL BENEYTO, JOSÉ (1986): *El País o la referencia dominante*, Barcelona: Mitre
- INSTITUTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA (1964): *Estudio sobre medios de comunicación de masas en España*, Madrid: Instituto de la Opinión Pública.
- JESSOP, BOB (1982): *The Capitalist State*, Oxford: Martin Robetson.
- ____ (2007): *State Power. A Strategic-Relational Approach*, Cambridge: Polity Press.
- JULIÁ, SANTOS (2003): “Política y Sociedad”. En Santos Juliá *et. al.*: *La España del siglo XX*, Madrid: Marcial Pons Historia.
- KATZ, CHAIM S. *et. al.* (1980): *Diccionario básico de comunicación*, México: Nueva Imagen.
- LAFUENTE SOLER, MYRIAM (2001): *El conflicto ideológico del diario Madrid (1966-1971)*. Tesis doctoral (Dir. Gonzalo Redondo Gálvez), Madrid: Universidad Complutense de Madrid
- ____ (2002): *La ideología del Diario “Madrid”: historia del cierre de un periódico durante el franquismo*, Murcia: UCAM.
- LEZCANO, ARTURO (1993): *Ferrol Diario, El Norte de Galicia*, Santiago de Compostela: Lea.
- LINZ, JUAN JOSÉ (2009): *Obras Escogidas. Vol. 3: Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- ____ (1974): “Una teoría del régimen autoritario. El caso de España”. En Manuel Fraga, Juan Velarde & Salustiano del Campo (dirs.): *La España de los años setenta. III El Estado y la Política*, Madrid: Editorial Moneda y Crédito.
- LLORENS, CARLES (2003): “La concentración de medios”, en *Quaderns del CAC* (16), pp. 43-52
- MARTÍN DE LA GUARDIA, RICARDO M. (1993): “Sobre los orígenes ideológicos de la ley de prensa de 1938. El pensamiento conservador en los teóricos falangistas”. En Javier Tusell, Julio Gil Pecharromán & Feliciano Montero (eds.): *Estudios sobre la Derecha Española Contemporánea*, Madrid: UNED.
- MARTÍNEZ ALIER, JUAN (1978): “Notas sobre el franquismo”. En *Papers: Revista de Sociología*, num. 8
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, JUAN JOSÉ (1993): “Economía de guerra después de la guerra (sobre la configuración de la política económica autárquica en el primer

- franquismo)". En Javier Tusell *et. al.*: *El Régimen de Franco (1936-1975) Política y Relaciones Exteriores*, Madrid: UNED
- MARTIN-SANCHEZ JULIÁ, FERNANDO (1955): *La Prensa en el Estado Moderno*, Madrid: Euramerica,
- MCCHESNEY, ROBERT W. (2007): *Communication Revolution. Critical Junctures and the Future of Media*, Nueva York: The New Press.
- MCQUAIL, DENIS (1999): *Introducción a la teoría de la comunicación de masas* (v.o. 1983), Barcelona: Paidós.
- MÉNDEZ MUROS, SANDRA (2008): *Tratamiento periodístico del tardofranquismo y de la Transición democrática en la prensa sevillana (ABC y El Correo de Andalucía: 1964-1978)*. Tesis doctoral (Dir. José Manuel Gómez y Méndez), Sevilla: Universidad de Sevilla.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, JOSÉ (1984): "La extinción registral de las empresas periodísticas", *Revista General de legislación y jurisprudencia*, 88 (6), pp. 585-614
- MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ (1995): "El registro de empresas periodísticas". En Juan Luis Jimeno y Gómez Lafuente (coord.): *Homenaje a José María Chico Ortiz*, Madrid: Marcial Pons, pp. 1495-1552.
- MILLS, WRIGHT C. (1978): *La élite del poder* (v.o. 1956) México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- MOLINA, VIS (2005): *Los Godó: los últimos 125 años de Barcelona*, Madrid: Ediciones Martínez Roca
- MOLINERO, CESAR (1971): *La intervención del Estado en la prensa*, Barcelona: Dopesa.
- MONTABES PEREIRA, JUAN (1989): *La prensa del Estado durante la transición política española*, Madrid: CSIC.
- MONTERO DÍAZ, MERCEDES (1991): *La Asociación Católica Nacional de Propagandistas a través de su boletín (1936-1945)*. Tesis doctoral, Pamplona: Universidad de Navarra.
- _____ (1993): "La elaboración del programa de Martín Artajo en los círculos de estudio de la ACN de P (1943-1945)". En Javier Tusell, Julio Gil Pecharromán & Feliciano Montero (eds.): *Estudios sobre la Derecha Española Contemporánea*, Madrid: UNED.
- MORADIELLOS, ENRIQUE (2000): *La España de Franco (1939-1975). Política y Sociedad*, Madrid: Síntesis.
- MOSCO, VINCENT (2006): "La Economía Política de la Comunicación: una actualización diez años después". En *Cuadernos de Información y Comunicación (CIC)* (11), pp. 57-79.
- _____ (2009): *La economía política de la comunicación: reformulación y renovación*, (v.o. 1996). Barcelona: Bosch.

- MUÑIZ, MAURO (1995): *El diario Nivel, umbral de la prensa democrática española*. Tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid
- MUÑOZ, JUAN (1969): *El poder de la banca en España*, Algorta: Zero
- MURDOCK, GRAHAM (2006): “Los agujeros negros del marxismo occidental: respuesta a Dallas Smythe” (v.o. 1978). En *Cuadernos de Información y Comunicación (CIC)* (11), pp. 11-22.
- NIETO TAMARGO, ALFONSO (1967): *El Concepto de empresa periodística*, Pamplona: Universidad de Navarra.
- ____ (1973): *La Empresa Periodística en España*, Pamplona: Universidad de Navarra.
- NIETO TAMARGO, ALFONSO & JUAN MIGUEL MORA (1989): *Concentración informativa en España: prensa diaria*, Pamplona: Universidad de Navarra
- NIXON, RAYMOND B. (1972): *Concentración de empresas periodísticas: comparación entre 32 países*, Madrid: Servicio Informativo Documental Español
- NOGUÉ, ANNA & CARLOS BARRERA (2006): *La Vanguardia, del franquismo a la democracia*, Madrid: Fragua.
- NUÑEZ NICKEL, MANUEL & MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ CALDERÓN (1996): “Análisis de supervivencia empresarial en la población de diarios españoles (1966-1993)”, *Estadística Española*, 38 (141), pp. 115-137
- OLTRA, BENJAMÍN & DE MIGUEL, AMANDO (1978): “Bonapartismo y catolicismo. Una hipótesis sobre los orígenes ideológicos del franquismo”. En *Papers: Revista de Sociología* (8).
- PÀMIES, ORIOL (1993): *El Grup Mundo. Pecats i penitències d'una premsa de transició*, Barcelona: Diputació de Barcelona/Col·legi de Periodistes de Catalunya
- PAYNE, STANLEY G. (1987): *El régimen de Franco 1936-1975*, Madrid: Alianza.
- PAZ, MARÍA ANTONIA (1989): “El predominio matizado de EFE”. En Timoteo Álvarez Jesús, et. al.: *Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona: Ariel.
- ____ (1990): “La creación de la Agencia EFE: medios técnicos y objetivos”. En Manuel Tuñón de Lara (Dir.): *Comunicación, Cultura y Política durante la II República y la Guerra Civil. Tomo II España 1931-939*, Bilbao: Universidad del País Vasco.
- PÉREZ GÓMEZ, ALBERTO (2002): *El control de las concentraciones de medios de comunicación. Derecho español y comparado*, Madrid: Dykinson.
- PÉREZ LEDESMA, MANUEL (1994): “Una dictadura ‘por la gracia de Dios’”. En *Historia Social* (20), pp. 173-193.
- PÉREZ LÓPEZ, PABLO (1994): *Católicos, política e información: Diario Regional de Valladolid, 1931-1980*, Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones

- PÉREZ MATEOS, JUAN ANTONIO (2002): *ABC, Serrano, 61: historia íntima del diario: cien años de "un vicio nacional"*, Madrid: Libro-Hobby-Club
- PINILLOS Y SUÁRES, PEDRO J. (1975): *La Empresa Informativa. Prensa, radio, cine y televisión*, Madrid: Ediciones del castillo.
- PIZARROSO QUINTERO, ALEJANDRO (1989): "Política informativa: información y propaganda" (1936-1966). En Jesús Timoteo Álvarez, *et. al.: Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona: Ariel
- FERNÁNDEZ POMBO, ALEJANDRO (1996): "Herrera Oria, La Editorial Católica y la AC de P", *XX Siglos*, 7 (28), pp. 68-78
- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (1967): *II Plan de Desarrollo Económico y Social. Turismo e Información y Actividades Culturales*, Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social.
- _____ (1972): *III Plan de Desarrollo Económico y Social. Turismo e Información y Actividades Culturales*, Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social.
- _____ (1976): *IV Plan de Desarrollo Económico y Social. Turismo e Información y Actividades Culturales*, Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social.
- PRESTON, PAUL (1997): *La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*, Barcelona: Península.
- RAMOS FERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO (1997): *La profesión periodística en España: regulación jurídica y consecuencias éticas*. Tesis doctoral (Dir. Manuel Fernández Areal), Vigo: Universidad Complutense de Madrid.
- REIG, RAMÓN (1998): *Medios de comunicación y poder en España. Prensa, radio, televisión y mundo editorial*, Barcelona: Paidós.
- RIQUER, BORJA DE (2010): *La dictadura de Franco*. En Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.): *Historia de España*, vol. 9, Barcelona: Crítica/Marcial Pons
- RODRÍGUEZ VIRGILI, JORGE (2002): *"El Alcázar", "Nuevo Diario" y PESA. Del asedio al expolio (1936-1970)*. Tesis doctoral (Dir. Carlos Barrera del Barrio), Pamplona: Universidad de Navarra.
- _____ (2005): *"El Alcázar" y "Nuevo Diario": del asedio al expolio*, Madrid: CIE Dossat
- SÁEZ ALBA (1974): *la otra 'cosa nostra': La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de El Correo de Andalucía*, París: Ruedo Ibérico
- SALAS, JAVIER (1975): *Registro de empresas periodísticas y editoriales. Régimen jurídico de inscripciones y cancelaciones*, Sevilla: Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla.
- SÁNCHEZ SOLER, MARIANO (2005): *Los banqueros de Franco*, Madrid: Oberón

- SÁNCHEZ TABERNERO, ALFONSO (1989): *El Correo Español-El Pueblo vasco y su entorno informativo (1910-1985)*. Tesis doctoral (Dir. Francisco Iglesias González), Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
- ____ (2005): “Vocento: De un pequeño diario de Bilbao al primer grupo de prensa de España”, *Bidebarrieta: Revista de humanidades y ciencias sociales de Bilbao* (16), pp. 307-329
- SANTAELLA LÓPEZ, MANUEL (2008): *La editorial católica: notas sobre la prensa y los periodistas católicos de hace cincuenta años*, Madrid: Universidad San Pablo CEU
- SAURA, VÍCTOR (1998): *Carlins, capellans, cotoners y convergents: historia d’El Correo Catalán (1876-1985)*, Barcelona: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
- SAZ, ISMAEL (1993): “El franquismo, ¿Régimen autoritario o dictadura fascista?”. En Javier Tusell *et. al.*: *El Régimen de Franco (1936-1975) Política y Relaciones Exteriores*, Madrid: UNED.
- ____ (2008): “Fascismo, fascistización y desarrollismo en la dictadura franquista”. En Mónica Burguera & Christopher Schmidt-Novara (eds.): *Historias de España Contemporánea. Cambio social y giro cultural*, Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
- SCHILLER, DAN (2006): “El legado de Robert A. Brady: Orígenes antifascistas de la Economía Política de la Comunicación” (v.o. 1999). En *Cuadernos de Información y Comunicación (CIC)* (11), pp. 81-93.
- SCHULTE, HENRY F. (1968): *The Spanish Press 1470-1966. Print, Power and Politics*, Urbana: University of Illinois Press.
- SEGOVIA, ANA I. (2001): *La Estructura de los Medios de comunicación en Estados Unidos: Análisis crítico del proceso de concentración multimedia*. Tesis doctoral (Dir.: Fernando Quirós Fernández), Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- SEGOVIA, ANA I. & QUIRÓS, FERNANDO (2006): “Plutocracia y corporaciones de medios en los Estados Unidos”, En *Cuadernos de Información y Comunicación (CIC)* (11), pp. 179-205.
- SEOANE, MARÍA CRUZ & SUEIRO, SUSANA (2004): *Una historia de El País y del Grupo Prisa*, Barcelona: Plaza y Janés
- SERRANO SUÑER, RAMÓN (1947): *Entre Hendaya y Gibraltar*, Madrid: Ediciones y Publicaciones Españolas.
- ____ (1977): *Entre el silencio y la propaganda: la Historia como fue: Memorias*, Barcelona: Planeta.
- SEVILLA GUZMÁN, EDUARDO; PÉREZ YRUELA, MANUEL & GINER, SALVADOR (1978): “Despotismo moderno y dominación de clase. Para una sociología del régimen franquista”. En *Papers: Revista de Sociología* (8).

- SEVILLANO CALERO, FRANCISCO (1997): “La Estructura de la prensa diaria en España durante el franquismo”, *Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea* (17), pp. 315-340
- ____ (2003): *Propaganda y Medios de comunicación en el franquismo (1936-1951)*, Murcia: Publicaciones Universidad de Alicante.
- SIEBERT, FREDERICK S., THEODORE PETERSON & WILBUR SCHRAMM (1963): *Four Theories of the Press*, (v.o. 1956) Urbana: University of Illinois Press.
- SINOVA, JUSTINO (1989a): *La censura de prensa durante el franquismo*, Madrid: Espasa-Calpe.
- SINOVA, JUSTINO (1989b): “La difícil evolución de la prensa no estatal”. En Timoteo Álvarez Jesús, *et. al.: Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona: Ariel.
- SORIANO LÓPEZ, ILDEFONSO (1991): *Historia y realidad del diario Madrid*, tesis dir. Teodoro González Ballesteros, Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Complutense
- TALLÓN, JOSÉ (1978): *Papel y Empresa Periodística*, Pamplona: Universidad de Navarra.
- TAMAMES, RAMÓN (1985): *Estructura económica de España*, Madrid: Alianza Editorial.
- ____ (1988): *La República. La era de Franco*. En Miguel Artola (dir.): *Historia de España*, Vol. 7, Madrid: Alianza Editorial.
- TERRÓN MONTERO, JAVIER (1981): *La Prensa en España durante el Régimen de Franco. Un intento de análisis político*, Madrid: CSIC.
- TEZANOS, JOSÉ FÉLIX (1978): “Notas para una interpretación sociológica del franquismo”. En *Sistema: revista de Ciencias Sociales* (8).
- TIMOTEO ÁLVAREZ, JESÚS (1989): “La Información en la era de Franco: hipótesis interpretativa”. En Jesús Timoteo Álvarez, *et. al.: Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona: Ariel.
- TORRES, EUGENIO (2000): *Los cien empresarios españoles del siglo XX*, Madrid: Lid-Círculo de Empresarios
- TUÑÓN DE LARA, M. (1977): “Algunas propuestas para el análisis del franquismo”. En Manuel Tuñón de Lara. *et. al.: VII Coloquio de Pau. De la Crisis del Antiguo Régimen al Franquismo. Ideología y Sociedad en la España Contemporánea. Por un análisis del franquismo*, Madrid: Edicusa.
- TUSELL, JAVIER (1984): *Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957*, Madrid: Alianza.
- ____ (1996): *La dictadura de Franco*, Barcelona: Altaya.
- VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL (2000): *Historia y comunicación social*, Barcelona: Mondadori. (edic. orig. 1980).

VIDELA RODRÍGUEZ, JOSÉ JUAN (2002): *La formación de los periodistas en España. Perspectiva histórica y propuesta de futuro*. Tesis doctoral (Dir. Ignacio Bel Mallén), Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

——— (2005): *La formación de los periodistas en España: perspectiva histórica y propuestas de futuro*, Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid

VILAR, SERGIO (1977): *La naturaleza del franquismo*, Barcelona: Península

YBARRA, ENRIQUE (1985): *El Correo Español-El Pueblo vasco, un periódico institución (1910-1985)*; y (1985): *El Correo Español-El Pueblo vasco: 75 años informando*, Bilbao: El Correo Español-El Pueblo Vasco

ZALBIDEA BENGOA, BEGOÑA 1989): “Prensa del Movimiento: Los pasos contados hacia el aperturismo”. En Timoteo Álvarez Jesús, *et. al.*: *Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona: Ariel

ZALLO, RAMÓN (1988): *Economía de la comunicación y la cultura*, Madrid: Akal.

ZORZO FERRER, FRANCISCO JAVIER (2005): “Historia de los Servicios Secretos de Inteligencia: el periodo pedemocrático”, *Arbor* (709), pp. 75-98

Entrevistas

- BENACH, JOAN ANTON (subdirector de *El Correo Catalán* [Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A.]; implicado en el proyecto fundacional de *Migdia*)
- BOTAS PIÑÓN, JOSÉ (vicepresidente de Ferrol Ediciones, S.A.)
- CASTRILLO MAZERES, FRANCISCO* (jefe de la Oficina de Enlace durante el ministerio de Sánchez Bella)
- CRESPO DE LARA, PEDRO* (gerente de Prensa Castellana, S.A.)
- DE LA SERNA, JESÚS* (director de *Informaciones* [Prensa Castellana, S.A.])
- DE LOMA, RAFAEL (subdirector de *Sol de España* [Empresa Periodística España, S.A.] en 1974)
- ESPAR TICÓ, JOSEP (promotor de Premsa Catalana, S.A.)
- FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN (propietario de Ferrol Ediciones, S.A. en 1980)
- FERNÁNDEZ MATA, MIGUEL (consejero de Mediterranean Publishing Co., S.A.)
- FIDALGO, DELFÍN (gerente de Ferrol Ediciones, S.A.)
- FUEMBUENA FERRÁNDEZ, EDUARDO (accionista y secretario del Consejo de Administración de Prensa Aragonesa, S.A.)
- GARCÍA MUNERA, PEDRO (propietario de *La Voz de Albacete*, *Primera Página*)
- GÓMEZ AMADO, JOSÉ ANTONIO (hijo de Antonio Gómez Rubio, promotor de *Área*)
- GONZÁLEZ DE HAZ VIZCAÍNO, EUGENIO (Diario de Pontevedra, S.A.)
- GONZALO WANDOSELL MORALES (vicepresidente de Empresa Periodística Editorial Cartagena, S.A.)
- MALUQUER I BONET, JORDI (promotor y accionista de Premsa Catalana, S.A.)
- MARTÍN FERRAND, MANUEL* (director de *Nivel* [Julio García Peri])
- ORTIZ FERNÁNDEZ URRUTIA, RAMÓN (vicepresidente de Mediterranean Publishing Co., S.A. hasta 1970)
- RIVAS FONTELA, PEDRO ANTONIO (presidente de la Cooperativa de Producción Diario de Pontevedra)
- ROYO-VILLANOVA PAYÁ, ALEJANDRO* (presidente de El Norte de Castilla, S.A.)

* Entrevistas personales.

- SAGI MONTPLET, VICTOR (accionista de Ilustración, S.A. e hijo de Victor Sagi)
- SANTÍN DÍAZ, ENRIQUE* (jefe de la Inspección del MIT a finales de los sesenta)
- SERRA BAUZÁ, PEDRO (propietario de Majorca Daily Sun, S.A.; Mediterranean Publishing Co., S.A.; Ultima Hora, S.A.)
- VALCÁRCEL, DARÍO* (promotor de PRISA)
- ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, LUIS (accionista de Empresa Periodística España, S.A.; hijo del promotor Luis Zarraluqui Villalba)

* Entrevistas personales.

Apéndice de Empresas Periodísticas (1966-1975)

<http://vps27969.ovh.net>

Usuario: luis

Contraseña: damm2013



Anexos

ANEXO I: Ley de Prensa de 1938

EXCELENTISIMO SEÑOR;

SE SOMETE A LA FIRMA DE SU EXCELENCIA LA
LEY DE PRENSA.

=====EXPOSICION;=====

=====Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter más urgentemente a revisión, era el de la Prensa. Cuando en los campos de batalla se luchaba contra unos principios que habían llevado la Patria a un trance de agonía, no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese "cuarto poder" del que se quería hacer una premisa indiscutible.=====

=====Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno, siendo la Prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado.=====

=====Testigos quienes hoy se afanan en la empresa de devolver a España su rango de Nación unida, grande y libre, de los daños que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una masa de lectores diariamente envenenada por una Prensa sectaria y antinacional (afirmación que no desconoce aquel sector que actuó en línea rigurosa de lealtad a la Patria), comprenden la conveniencia de dar unas normas al amparo de las cuales el periódico viva en servicio permanente del interés nacional, y que levante frente al convencional y anacrónico concepto del periodismo otro más actual y exacto basado exclusivamente en la verdad y en la responsabilidad. Esa noble idea, de la que ha de estar impregnada la actividad de toda la Prensa, hará imposible el fácil mercado de la noticia y de la fama que ayer pudo desviar la opinión pública con campañas promovidas por motivos inconfesables.=====

=====Tan urgente como derribar los principios que pretendían presentar a la Prensa como poder intangible -poseedora de todos los derechos y carente de todos los deberes- es el acometer la reforma de un estado de cosas que hacía vivir en la dificultad, cuando no en la penuria, todo el material humano agrupado en torno del periodismo, olvidado de antiguo por quienes, preocupados en garantizar el libertinaje de los periódicos, negaron su atención a los hombres que vivían de una profesión

a la que había de ser devuelta su dignidad y su prestigio, antes por un grupo de periódicos tan reducido como ejemplar.=====

====No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva por lo que inicialmente deberá limitarse la acción de gobierno a dar unos primeros pasos que luego se continúen, firmes y decididos, hacia esa meta propuesta de despertar en la Prensa la idea del servicio al Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la dignidad material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos, constituyéndose en apóstol del pensamiento y de la fé de la Nación recobrada a sus destinos.=====

====Que estos primeros pasos que fijan la responsabilidad de la empresa y del director, que crean un servicio de Prensa que mantenga fácilmente unidos los periódicos más lejanos, que dan carácter de profesionalidad al periodismo, desde hoy encuadrado oficialmente en su Registro (primera etapa hacia la futura selección en centros especiales), que determinan las sanciones con que serían reprimidos los entorpecimientos a la acción de gobierno, sean solo el adelanto de una resuelta voluntad de llenar la obra propuesta, convirtiendo a la Prensa en una institución nacional y haciendo del periodista un digno trabajador al servicio de España.=====

====Así, redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de la Prensa. Libertad integrada por derechos y deberes que ya nunca podrá desembocar en aquel libertinaje democrático por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al Estado, atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, a la insidia y a la difamación como sistema metódico de destrucción de España decidido por el rencor de poderes ocultos.=====

====En su virtud, y a propuesta del Ministro del Interior, DISPONGO:===

====Artículo primero.- Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica. En este sentido compete al Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa, la facultad ordenadora de la misma.=====

=====Artículo segundo.- En el ejercicio de la función expresada corresponde al Estado: Primero. La regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas.= Segundo. La intervención en la designación del personal directivo.= Tercero. La reglamentación de la profesión de periodista.= Cuarto. La vigilancia de la actividad de la prensa.= Quinto.- La censura mientras no se disponga su supresión.= Sexto. Cuantas facultades se deduzcan del precepto contenido en el artículo primero de esta Ley.=====

=====Artículo tercero.- Si en el ejercicio de la facultad primera de las enunciadas en el artículo anterior se produjese lesión patrimonial, sin provocación anterior por parte del lesionado, el Estado atenderá a su justa reparación en la forma que se determine.=====

=====Artículo cuarto.- Las funciones antedichas se ejercerán a través de órganos centrales y provinciales. Serán órganos centrales el Ministerio correspondiente y el Servicio Nacional de Prensa.=====

=====En cada provincia se crea el Servicio de Prensa dependiente del Servicio Nacional del mismo nombre, y afecto al respectivo Gobierno civil.=====

=====Artículo quinto.- Corresponde a los órganos centrales el ejercicio superior y directivo de la función. En el Servicio Nacional radicará el Registro Oficial de periodistas.=====

=====Artículo sexto.- Corresponde al Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia: a). Ejercer la Censura, mientras ésta subsista, de acuerdo con las orientaciones que se le dicten por el Servicio Nacional de Prensa, o, en su caso, por el Gobernador Civil de la provincia, cuando éstas se refieran a materia local o provincial; en materia de censura de guerra, el ejercicio de esta censura quedará sometida a la autoridad militar.= b). Llevar el duplicado del Registro Oficial de Periodistas en la forma que la presente Ley determina.= c). Servir de enlace entre el Servicio Nacional de Prensa y los directores de los periódicos de la provincia.= d). Servir de enlace entre el Gobierno Civil de la provincia y los directores de los periódicos de la misma.= e). Informar al Servicio Nacional de Prensa de la marcha

de los periódicos de la provincia, poniendo en su conocimiento los delitos o infracciones que pudiesen producirse.- f). Llevar un archivo de las publicaciones diarias y periódicas.=====

====Artículo séptimo.- El nombramiento del Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia será hecho directamente por el Ministro.===

====Artículo octavo.- De todo periódico es responsable el director que deberá necesariamente estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas que se llevará en el Servicio Nacional de Prensa, y ser aprobado para este cargo por el Ministro.=====

====Artículo noveno.- La empresa tiene responsabilidad solidaria de la actuación, por comisión u omisión, del director.=====

====Artículo décimo.- En los artículos firmados, la responsabilidad del firmante no exime en modo alguno de la que pueda recaer sobre el director del periódico por la publicación del artículo.=====

====Los artículos, informaciones o notas no firmados, o firmados con seudónimo, deberán haberlo sido en el original con nombre y apellidos del autor y conservados durante seis meses por el periódico.==

====Artículo décimo primero.- Dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta Ley, las personas físicas o jurídicas, propietarias de los periódicos, deberán presentar una instancia al Ministro, a través del Servicio de Prensa de su provincia respectiva, solicitando la aprobación para el cargo de director del periodista de que se trate.=====

====En dicha instancia deberán figurar además del nombre, edad, estado y domicilio de la persona propuesta, la declaración de la persona o empresa propietaria del periódico del conocimiento de la responsabilidad solidaria con la actuación del director, por el hecho de su propuesta.=====

====En el caso de que la empresa no fuese propietaria de la maquinaria con la que se edite el periódico, la responsabilidad se extenderá, con carácter de subsidiaria, al particular o entidad dueño de aquélla.=====

====En la instancia deberá figurar también el nombre del redactor

que provisionalmente se encargaría de la dirección del periódico en el caso de ser el director destituido.=====

====En los periódicos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., la propuesta se hará por el Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de dicho Movimiento.=====

====El Jefe del Servicio de Prensa de la provincia en que radique el periódico cursará al Servicio Nacional de Prensa dichas instancias acompañadas de un informe sobre las personas propuestas, siempre que éste sea posible.=====

====Artículo décimo segundo.- El fallo del Ministro, rechazando la propuesta, es apelable ante el Jefe del Gobierno en el plazo de quince días.=====

====Contra la resolución del Jefe del Gobierno no cabe recurso alguno.

====Artículo décimo tercero.- Cuando por hechos del director, el Ministro estime que su permanencia al frente del periódico es nociva para la conveniencia del Estado, podrá removerlo.=====

====Contra esta resolución se da idéntico recurso en el plazo de quince días ante el Jefe del Gobierno, recurso que no produce efectos suspensivos.=====

====Inmediatamente que sea notificada la destitución el director dejará su puesto a cargo del redactor que hubiese figurado en la propuesta y al que se refiere el párrafo cuarto del artículo décimo primero de esta Ley.=====

====Artículo décimo cuarto.- Vacante la dirección del periódico se proveerá en idéntica forma a la preceptuada en el artículo décimo primero.=====

====Artículo décimo quinto.- Se crea el Registro Oficial de Periodistas, que será llevado por el Servicio Nacional de Prensa. En cada Servicio Provincial de Prensa se conservará un duplicado de las fichas correspondientes a la respectiva demarcación.=====

====Artículo décimo sexto.- Nombrados los Jefes del Servicio de Prensa de cada provincia, cuidarán de organizar rápidamente la inclusión de los periodistas de la misma en el Registro Oficial.=====

====Figurarán en él los que en la actualidad y habitualmente se dedican a la confección literaria del periódico desde hace más de un año, mediante retribución. También tendrán derecho a ser inscritos en el Registro Oficial de Periodistas los que hallándose en la actualidad sin empleo, se dedicasen en la fecha de la iniciación del Movimiento a los trabajos periodísticos en las condiciones señaladas.=====

====No figurarán en el Registro Oficial de Periodistas los que sean meramente colaboradores.=====

====Para la concepción de periodistas de los corresponsales, se tendrá en cuenta la naturaleza y el lugar en que ejerciten la corresponsalía y la del periódico en que ésta se ejerza, no pudiendo ser inscritos, como periodistas los corresponsales de ciudad no capital de provincia o los de periódicos que no radiquen en ellas.=====

====Los que en el momento de crearse el Registro no fueran periodistas, no podrán entrar a formar parte de él, en tanto sea regulada la organización académica del periodismo, si no trae la permanencia de dos años en un trabajo periodístico.=====

====Mientras no se regule de modo definitivo la organización académica del periodismo, el Ministro no podrá autorizar la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas de personas en las que no concurren las circunstancias expuestas en los párrafos segundo y quinto del presente artículo.=====

====Artículo décimo séptimo.- Los periodistas inscritos en el Registro obtendrán su carnet oficial, firmado por el Jefe del Servicio Nacional de Prensa.=====

====Los Jefes del Servicio de Prensa de cada provincia, enviarán copia de cada ficha de periodistas que figura en su Registro al Servicio Nacional de Prensa donde existirá el Registro Oficial de periodistas.=====

====Artículo décimo octavo.- Independientemente de aquellos hechos constitutivos de delitos o faltas, que se recogen en la legislación penal, el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa, ten-

drá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado, o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles.=====

====Sin perjuicio de la sanción penal que proceda, las autoridades, las personas naturales y los representantes de personas jurídicas, públicas o privadas, agraviadas por actuaciones periodísticas ofensivas, insidiosas o simplemente contrarias a la verdad, podrán recurrir gubernativamente ante la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa para que decida sobre la rectificación procedente y proponga en su caso al Ministro la sanción que estime oportuna.=====

====Artículo décimo noveno.- También serán sancionadas las faltas de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, las de desvío a las normas dictadas por los servicios competentes en materia de Prensa.==

====Artículo vigésimo.- Las sanciones a directores y empresas que el Ministro del Interior podrá decretar, oscilarán, según la gravedad del hecho, entre las siguientes: a). Multa.= b). Destitución del director.= c). Destitución del director acompañada de la cancelación de su nombre en el Registro de Periodistas.= d). Incautación del periódico.=====

====Artículo vigésimo primero.- Las medidas citadas en el artículo anterior, con excepción de la última serán acordadas por el Ministro.==

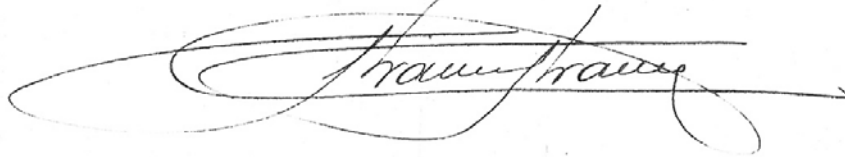
====Las prevenidas en los apartados b) y c) del mismo artículo habrán de ser precedidas de la audiencia del interesado.=====

====Contra todas ellas podrá interponerse alzada en término de quince días ante el Jefe del Gobierno que resolverá sin ulterior recurso.==

====Artículo vigésimo segundo.- La incautación, que solamente podrá decidirse ante falta grave contra el régimen y siempre que exista repetición de hechos anteriormente sancionados que demuestre reincidencia en la empresa, será decidida por el Jefe del Gobierno, en Decreto motivado e inapelable.=====

====Artículo vigésimo tercero.- Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a las contenidas en esta Ley.=====

====Disposición transitoria.- Los periodistas pertenecientes a periódicos de poblaciones de la zona roja, solicitarán directamente del Servicio Nacional de Prensa su inscripción en el Registro Oficial de Periodistas.=====

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Franco Franco', is written over a horizontal line. The signature is stylized with large, sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ANEXO II: Estatuto de Prensa de FET de las JONS

DELEGACION NACIONAL DE PRENSA Y PROPAGANDA
DE FALANGE ESPA OIA TRADICIONALISTA Y DE
LAS J.O.N.S.

—
Camarada Director de

Estimado Camarada:

Os incluyo copia del Estatuto de Prensa que nuestro Delegado Nacional entregó hace tiempo a nuestro Caudillo y Jefe Nacional Generalísimo Franco.

Os agradeceré hagais una meditada lectura del mismo y me enviéis cuanto antes el juicio que os ha merecido, así como cuantas sugerencias y rectificaciones creais que a vuestra libre facultad de criterio se puedan introducir, por tratarse de una cuestión tan importante y eficaz para el nuevo resurgir de España y espíritu que anima nuestra Revolución Nacional sindicalista.

Os saluda brazo en alto

EL SECRETARIO NACIONAL

Celestino Minguela

Pamplona 31 de Enero de 1938
II Año Triunfal

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

DELEGACION NACIONAL DE PRENSA Y PROPAGANDA
DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE
LAS J.O.N.S.

D E C R E T O

El dolor y la gloria de esta Cruzada, que levantó, con heroísmo, al auténtico pueblo español, ha revelado ante el mundo, con la evidencia de la victoria y el testimonio de los que cayeron que era el ídolo, ímpetu invencible y bandera nobilísima de nuestros Ejércitos.

Guerra de ideas, en trance de agonía la Civilización Cristiana de Europa, cuando la España eterna y genuina es vocada, de nuevo a la Misión irresistible de salvar la Historia.

Nuestra victoria es la derrota definitiva del Comunismo y del Marxismo y la extirpación en su misma mala raíz de la concepción liberal de la vida en que se apoyan.

El sistema liberal-social, político y filosófico- para hacer fecundo y extenso su dominio y tiranía en el pueblo español emponzoñó las fuentes claras del espíritu. Disgregó primero la unidad de la Cultura estatal separando la Universidad de los naturales organismos decendientes del pueblo: la Prensa, el Teatro, el Cine, la Radio. La prensa sobre todo, encastillada en aquella necia ufanía de la "libertad de pensamiento" rigió a su capricho, como un cuarto poder, los destinos de la Patria, a las órdenes, con frecuencia, de los intereses particulares, políticos e internacionales, destruyendo la unidad española de la Fé, de la Cultura, del Hombre, de los hombres y de las tierras.

Es urgente, pues, en estas horas de reconstrucción Nacional, proclamar la unidad espiritual y física de España sobre el tesoro de la Tradición, sobre el recuerdo permanente de los Muertos y sobre el heroísmo de esta Juventud española que lucha por la Patria, Una, Grande y Libre.

Vuelve la Prensa a su función noble y exacta de adoctrinar al pueblo en los nobles ideales que transforman la humana naturaleza en un venero precioso de hermandad y sacrificio: de propagar la verdad de la vida y de nuestra Historia que es patrimonio y señorío de imperios: de guiar a las masas populares hacia la paz, la felicidad y el bien con el criterio sano de la Moral y de la Justicia, porque el mal y el error no pueden tener libertad ni derechos sobre los derechos inviolables de la libertad y de la conciencia humanas.

La Doctrina Programática del nuevo Estado señala en la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. la única disciplina por la que el pueblo, unido y en orden, asciende al Estado y el Estado infunde al pueblo las virtudes de servicio y de jerarquía en una razonada y egregia totalidad.

Así pues la Prensa, órgano precioso de Cultura, no puede quedar ausente o disgregada de esta unánime concepción nueva de la Patria. Para colaborar en las ta-

reas del Estado a través de la Doctrina y Organismos del Movimiento: por ello, enfrente de las independencias y libertinages de sabor liberal se erige a sí misma en un organismo ejemplar de servicio a España, bajo la Jerarquía rectora del Estado.

Reconocemos con orgullo, que el desarrollo técnico de la Prensa Española alcanzó, en calidad y extensión puesto preeminente internacional.

Pero, ahora la razón suprema de la guerra nos trae necesariamente la carestía de materias primas en la elaboración de papel que impone una selección y reducción de los periódicos apoyada, también, en la concepción Nacional Sindicalista del Estado, en el que es uno el pensamiento, uno el trabajo y el esfuerzo para la reconstrucción nacional.

Juzgamos que las restricciones de papel en los periódicos pueden ser enemigas de la calidad que fué siempre presea de nuestra Prensa, al par que una justa y serena reducción garantiza el engrandecimiento y decoro en la vida técnica y económica de nuestros periódicos.

Por todo lo cual

D I S P O N G O

Artículo Primero.

Queda promulgado el siguiente ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA.

ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA

CAPITULO I

Normas generales.

Artículo 1º

Se entiende por periódicos en ~~am~~ presente ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA, toda clase de impresos, con ilustraciones o sin ellas, que se publiquen con un título constante:

- A) una o varias veces en el día
- B) en lapsos de tiempo regulares o irregulares que no excedan de un año.

Se considera publicado un periódico, para todos los efectos ante la Ley desde el momento en que se hayan extraído del establecimiento donde se haga la tirada, más de seis ejemplares.

Artículo 2º

Toda la Prensa Española se constituye en un organismo al servicio augusto de la Patria, como vehículo propulsor de su engrandecimiento imperial por la exaltación diaria de las virtudes ejemplares de la España Tradicional y Eterna.

Artículo 3º.

Es, pues, cometido de la Prensa Española:

A) Profesor entrañablemente la Fé Católica, fundamento de nuestro rango en la Historia, con la sujeción al Dogma y Moral de la Santa Madre Iglesia, y alentando, entre todos los españoles, un recio espíritu de fé y estricta conducta Moral en el individuo, en la Familia, en el Sindicato, en la Milicia y en el Estado.

B) Defender y propagar la unidad espiritual y física de la Patria: su inviolabilidad sagrada y su permanencia por el respeto y el servicio a sus Instituciones seculares.

C) Propagar la Doctrina Programática del Estado Español contenida en los Veintiseis Puntos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., por la fidelidad a todos los organismos de su Movimiento revolucionario Nacional Sindicalista, para la consecución de la España Una, Grande y Libre.

D) Estimular entre todos los españoles los caudales inextinguibles de nuestra ciencia y cultura, patrimonio excelso de la Historia Patria, que nos dió el Imperio y el gobierno del pensamiento en el mundo.

E) Llevar hasta el pueblo español la doctrina sana y verdadera de la Justicia Social, de la Caridad Cristiana, de la verdad de la vida y de los nobles ideales que transforman la humana naturaleza en venero precioso de hermandad, de sacrificio y de heroísmo.

F) Informar del espíritu de Milicia, que es austeridad en la vida y cumplimiento del Deber en todo el pueblo español, para la vigilancia continua y la defensa ardorosa de la Patria.

Artículo 4º

Corresponde al Estado, por medio de su Ministerio de Prensa y Propaganda las funciones rectoras y orientación y control, de toda la Prensa Española. Se entienden de exclusiva dirección del Ministerio de Prensa y Propaganda las materias siguientes:

- A) Organización total del Estado.
- B) Política nacional.
- C) Política internacional.
- D) Estructura del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Artículo 5º

La Prensa Española participará en la noble tarea de la reconstrucción de la Patria, por el Estado, a través del SINDICATO NACIONAL DE PRENSA.

Artículo 6º

La Ley Divina del Descanso Dominical será observada por toda la Prensa Española rigurosamente, quedando prohibido todo trabajo desde las 9 horas del Domingo hasta las 9 horas del Lunes.

CAPITULO II

De la fundación de los periódicos.

Artículo 7º

Desde la promulgación del presente ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA, solamente podrá fundar, por derecho nuevos periódicos, a tenor del artículo primero de las normas generales, la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., por medio de sus organismos propios.

Queda excluida de esta norma la Iglesia Católica, que podrá, con plena libertad, por medio de su Jerarquía legítima, editar aquellas publicaciones que atiendan, exclusivamente, al estudio y propagación de la Fé, de la Moral, de la Ciencia y Disciplinas eclesásticas.

Artículo 8º

Para reanudar la publicación de periódicos que existían con anterioridad a la promulgación del presente Estatuto, las empresas que acrediten su propiedad legítima deberán solicitarla del Ministerio de Prensa y Propaganda, quien resolverá, en cada caso, oído el informe de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.; quedando sujetos dichos periódicos a todo lo preceptuado en el ESTATUTO DE PRENSA ESPAÑOLA.

CAPITULO III

De la publicación y características de los periódicos

Artículo Noveno.

En la publicación y confección de los periódicos se observarán las normas siguientes:

A) Máxima sencillez tipográfica, unida a una severa y serena elegancia.

B) Evitarán todo sensacionalismo; los relatos de crímenes y sucesos extraños, la propaganda de falsos rumores; las provocaciones y las polémicas de todo orden.

C) Los artículos, fotografías, dibujos y caricaturas, así como la publicidad, responderán a las normas de la Moral y el Dogma católicos y a los dictados del más elevado patriotismo.

D) No olvidarán nunca que la misión del periodismo, a tenor del artículo tercero del presente Estatuto, es levantar el Imperio, obedecer al Caudillo, guardar el espíritu de la Guerra y de la Revolución Nacional-sindicalista, y educar el gusto y la inteligencia del pueblo español.

Artículo 10º.

Se establece, para toda la Prensa Española el siguiente canon "tipo" de medidas:

A) Tamaño máximo:

B) Tamaño mínimo:

También se admiten medidas intermedias, dentro de estos tamaños.

Artículo 11º.

El número de páginas a publicar en el ciclo de treinta días es el siguiente:

Diarios del grupo A), ocho páginas durante doce veces en el mes: seis páginas en el resto del mes.

Diarios del grupo B), dieciséis páginas durante doce veces en el mes y doce páginas en el resto del mes. El Ministerio de Prensa y Propaganda concederá, en ocasiones extraordinarias, la licencia oportuna para editar un número mayor de páginas que las asignadas en el presente artículo.

Artículo 12º.

En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación del presente Estatuto, el Ministerio de Prensa y Propaganda someterá a revisión y ordenación las cabeceras, subcabeceras, emblemas y símbolos de todos los periódicos, viniendo estos obligados a cumplir estrictamente lo que se ordene.

Artículo 13º.

Para el cumplimiento del artículo sexto de las Normas Generales se dispone lo siguiente.

1º) En aquellas localidades donde se publique uno o varios periódicos de la tarde, estos mismos pueden adelantar su salida el lunes, a las 15 horas, con una edición extraordinaria, y respetando su edición ordinaria.

2º) En aquellas localidades donde no se publiquen periódicos de la tarde se autoriza al periódico o periódicos de la mañana a publicar una edición extraordinaria del lunes, cuya salida puede oscilar entre las 15 y las 17 horas de dicho día.

3º) El beneficio líquido de estas ediciones extraordinarias, en venta y publicidad y que será liquidado trimestralmente queda en favor del SINDICATO NACIONAL DE PRENSA. Por esta razón, serán gratuitos los trabajos de Dirección y Redacción de estas ediciones extraordinarias, retribuyéndose solamente como jornada ordinaria al personal de Administración y Talleres.

4º) El tamaño de estas ediciones extraordinarias con arreglo al artículo 10º será el siguiente: Los diarios del grupo A) publicarán cuatro páginas. Los diarios del grupo B) publicarán ocho páginas.

CAPITULO IV

De la distribución de la Prensa Española

Artículo 14º.

La distribución de la Prensa en España, como límite máximo en la publicación de periódicos, se sujetará a las siguientes cláusulas:

A) En las capitales de provincia que no excedan de cincuenta mil habitantes de derecho sólo puede publicarse un diario, con la edición de mañana o de tarde.

B) En las capitales de provincia que oscilen entre cincuenta mil y ciento cincuenta mil habitantes de derecho puede publicarse un diario de mañana y otro de tarde.

C) En las capitales de provincia que oscilen entre ciento cincuenta mil y quinientos mil habitantes de derecho pueden publicarse dos diarios de mañana y uno de tarde.

D) En las capitales de provincia superiores a quinientos mil habitantes de derecho pueden publicarse cuatro diarios de mañana y tres de tarde.

E) En aquellas ciudades cuya población de derecho sea igual o exceda al censo de la Capital de provincia a que pertenezcan puede publicarse un solo diario con edición de mañana o de tarde.

F) La distribución de periódicos comprendidos en el grupo B) del artículo primero del ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA, será ordenada en cada caso por el Ministerio de Prensa y Propaganda.

Artículo 15º

En aquellos casos en que se imponga la reducción de prensa, según el artículo anterior, se atiende que tienen derecho preferente a permanecer en su publicación los órganos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. que acrediten esta calidad según certificado de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Movimiento.

Artículo 16º

Si hecha la reducción de prensa a tenor de las normas precedentes existieran localidades donde no se publique un periódico de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. pasará automáticamente a ser órgano oficial del Movimiento uno por lo menos de los que permanezcan.

CAPITULO V

De las personas.

Artículo 17º.

Toda publicación periódica tendrá un Director responsable ante la Ley y con la máxima jerarquía dentro del periódico sobre todo el personal de Redacción, Administración y Talleres a quien podrá nombrar y destituir libremente.

Artículo 18º

Así mismo todos los periódicos tendrán un Redactor Jefe que en los casos de suspensión enfermedad o ausencia del Director tomará ante la Ley la misma responsabilidad e idénticas prerrogativas jerárquicas que el mismo Director.

Artículo 19º

El nombramiento o destitución de Director y Redactor Jefe, para todos los periódicos, corresponde exclusivamente al Ministro de Prensa y Propaganda, oídas, según el caso, los informes o propuestas de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Artículo 20º.

Será requisito indispensable para ocupar los cargos de Director, Redactor Jefe y Redactores de todos los periódicos, a partir de la promulgación del presente Estatuto, poseer el título correspondiente que expedirá la UNIVERSIDAD NACIONAL SINDICALISTA DE PRENSA.

Artículo 21º.

El Director, Redactor Jefe y todo el personal de Redacción, prestarán, por Dios, juramento de fidelidad a la Patria y al Caudillo.

CAPITULO VI

De la Administración de los Periódicos.

Artículo 22º.

Todos los periódicos dependerán en su gestión administrativa, a los efectos de inspección y control del Ministerio de Prensa y Propaganda, quien dictará las oportunas normas sobre presentación de balances y austeridad económica de los mismos.

Artículo 23º. La gestión administrativa de los periódicos será orientada y dirigida por la ADMINISTRACION GENERAL DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S. para aquellos periódicos que sean patrimonio y propiedad del Movimiento y por sus Empresas propietarias los periódicos que tengan tal carácter, bien entendido que estas Empresas se limitarán a sus funciones exclusivamente administrativas sin rozar por ningún caso funciones rectoras de orientación.

Artículo 24º.

El Ministerio de Prensa y Propaganda podrá imponer a toda la Prensa Española un cupo contributivo sobre el beneficio líquido anual de sus balances.

CAPITULO VII

De las Instituciones nacionales de la Prensa.

Artículo 25º.

Para el mejor servicio de la Prensa Española, dignidad y auxilio de los periodistas y realización del Estado Nacional-sindicalista, crea el presente Estatuto las siguientes instituciones:

- A) Sindicato Nacional de Prensa.
- B) Universidad Nacional-sindicalista de Prensa
- C) Agencias Nacionales de Información, Colaboración y Publicidad.

Artículo 26º.

Al Sindicato Nacional de Prensa pertenecerá obligatoriamente todo el personal de Dirección, Redacción, Administración y Talleres de todos los periódicos de España. La organización de este Sindicato será objeto de un Estatuto especial.

Artículo 27º.

La Universidad Nacional-sindicalista de Prensa es la única entidad del Estado que puede extender títulos oficiales a tenor del artículo 20º del presente Estatuto.

La organización y plan de estudios de esta Universidad serán objeto de un Estatuto especial.

Artículo 28º.

Las Agencias de Información, Colaboración y Publicidad tendrán carácter oficial y exclusivo en todo el territorio español. La actividad de las Agencias internacionales y de empresa privada, será controlada por estas Agencias Nacionales y su funcionamiento se realizará a través de las mismas, según normas que se dictarán oportunamente.

CAPITULO VIII

De los Inspectores de Prensa.

Artículo 29º.

Se crea en cada provincia un Inspector Provincial de Prensa, dependiente del Ministerio de Prensa y Propaganda con las si-

guientes atribuciones:

- A) Hacer cumplir las disposiciones del ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA.
- B) Vigilar la pureza doctrinal, administrativa y tipográfica de los periódicos de su jurisdicción.
- C) Ejercer la censura, en los tiempos en que esta se implanta por disposición gubernativa.
- D) Asumir los derechos y atribuciones que en la Ley de Imprenta del 26 de Julio de 1893 se conceden a los Gobernadores Civiles.
- E) Aplicar aquellos castigos que por incumplimiento del ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA sean impuestos por el Ministerio de Prensa y Propaganda, sin perjuicio de la penalidad criminal que pueda existir en cada caso.

CAPITULO IX

Disposiciones finales

Artículo 302

Quedan abolidas, desde la promulgación del presente ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA, todas las Leyes, Reglamentos, Disposiciones y Organismos que se opongan a su fiel cumplimiento.

Artículo 312.

La interpretación auténtica del ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA pertenecerá exclusivamente al Ministerio de Prensa y Propaganda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Para el cumplimiento del artículo catorce del ESTATUTO DE LA PRENSA ESPAÑOLA se establecen las siguientes normas:

- 1ª) En el plazo de tres meses, desde la publicación del presente Estatuto, el Ministerio de Prensa y Propaganda formará la lista de los periódicos que deben permanecer en su publicación y de los que cesan en ella.
- 2ª) A partir de esta fecha los periódicos que deben cesar en su publicación serán estrictamente informativos, estándoles prohibida toda actividad rectora de orientación.
- 3ª) El Ministerio de Prensa y Propaganda dispondrá la fecha y el orden de localidades en que debe iniciarse y quedar completa la reducción de Prensa.
- 4ª) El mismo Ministerio de Prensa y Propaganda procederá en cada localidad donde haya de efectuarse esta reducción, a formar un Censo con todo el personal de Dirección, Redacción, Administración y Talleres que quedare sin destino, para proceder a su empleo inmediato.
- 5ª) Paralelamente a este Censo se redactará un inventario y tasación para adquirir todo el material de los periódicos que cesen en su publicación por el Estado Español.
- 6ª) Se excitará a las Empresas particulares a que cedan en beneficio del patrimonio de la Patria en la medida de sus posibilidades los derechos de propiedad de estos periódicos como un tributo a la reconstrucción nacional.
- 7ª) El Ministerio de Prensa y Propaganda dictará las oportunas normas para que estas adquisiciones de material se verifiquen, si llegare el caso, dentro de los más estrictos dictados de la Justicia.

Segunda.

Para el cumplimiento del artículo 27º y hasta la fundación de la Universidad Nacional sindicalista de Prensa, serán válidos y obligatorios los títulos que expidan los Seminarios Nacional-sindicalistas de Prensa que se celebrarán con carácter intensivo, en ciclos de tres meses.

ANEXO III: Borrador de Proyecto de Estatuto de Prensa de la ACN de P

BORRADOR DE UN PROYECTO DE ESTATUTO DE PRENSA

Redactado por una ponencia de propagandistas madrileños

Recoge en gran parte las ideas vertidas en el Círculo de Estudios durante el ciclo del primer trimestre

En la última sesión del primer ciclo del Círculo de Estudios de Madrid, y como remate de las ponencias desarrolladas a lo largo del trimestre y de los debates habidos sobre el tema "Regulación jurídica de la prensa, a la luz del pensamiento católico", se dió lectura a un borrador de anteproyecto de ley, o bien de "proposición" de ley acerca de la prensa, que se inspira en las ideas vertidas a lo largo del ciclo. Iniciado el debate, faltó el tiempo para desenvolver la discusión con la amplitud requerida y se acordó nombrar una ponencia que recogiera las enmiendas suscitadas y redactase un nuevo texto. Este, si bien, por lo que queda expuesto, no se puede decir con rigor que sea obra del Centro de Madrid, y mucho menos de la A. C. N. de P., ha parecido de interés darlo a conocer privadamente a algunos propagandistas que se interesan en la cuestión:

La prensa tiene una misión decisiva en la educación de la opinión pública, no para dirigirla, sino para servirla, y esto, principalmente, de tres maneras: informándola, orientándola y reflejándola en sus columnas.

Es, pues, la prensa un instrumento de la sociedad y no del Estado, pero éste tiene sobre ella sus derechos no sólo para defender los fueros de la autoridad, sino también para salvaguardar la propia independencia de la prensa, que si a veces puede sentirse amenazada por los abusos de la autoridad, también lo está por las confabulaciones financieras en torno a la propiedad de los periódicos o por la coacción violenta o sinuosa de grupos de presión que los priva de su libertad interna.

La regulación jurídica de la prensa, por lo tanto, debe abarcar diferentes capítulos: las normas generales que rigen esta institución, el sistema de propiedad de las empresas periodísticas, las facultades reservadas a la autoridad en defensa de sus legítimos derechos, las condiciones de independencia de los periódicos para informar con objetividad y veracidad, las responsabilidades de sus directores y, en fin, el sis-

tema de garantías jurisdiccionales que es complemento necesario de toda acción gubernativa.

El presente anteproyecto (o anteproposición) de ley, inspirado en la legislación de prensa comparada de diversos países y en la experiencia de muchos años de los diversos regímenes de la prensa nacional, establece, a título experimental, esto es, con carácter de re-

visable y perfectible, un sistema en que se da tratamiento jurídico a todos esos problemas.

Las principales características del sistema son las siguientes: concebir la prensa como institución social al servicio de la opinión pública; transformar el sistema de propiedad de los periódicos de modo que en todo momento pueda así el público, como la autoridad, conocer a quién pertenecen; dar a la redacción de los diarios garantías de independencia contra cualquier intento de presión, venga de fuera o de dentro de la propia empresa; salvaguardar los fueros de la autoridad, no sólo en los casos extraordinarios en que puede imponerse la censura gubernativa por decreto, sino también estableciendo un sistema normal de previa censura para aquellas materias que en la propia ley se determinan; y, en fin, establecer un nuevo sistema de exacción de responsabilidades por vía judicial.

CAPITULO I

Del régimen de Prensa

Artículo primero. Se reconoce que es misión de la prensa:

- Servir a la opinión pública mediante una doble función informativa y orientadora.
- Actuar de portavoz de los intereses generales de la sociedad y como órgano de comunicación entre ésta y los Poderes públicos.
- Estimular la acción del Poder público en orden al bien común y ejercer una función fiscalizadora de

la obra de gobierno y de administración.

Art. 2.º En el desempeño de su misión, la prensa gozará de libertad dentro de los términos que se señalan en la presente ley.

Art. 3.º El Estado ejercerá las facultades que le corresponden en materia de prensa por medio del ministerio de Información y Turismo y de los Tribunales de Justicia.

CAPITULO II

De las empresas

Art. 4.º La persona individual o jurídica que desee fundar un periódico de información general, presentará en el ministerio de Información una solicitud para que se autorice y se publique en el "Boletín Oficial del Estado" su proyecto fundacional.

En el proyecto fundacional figurarán, necesariamente, el nombre del fundador o fundadores, los de las personas que formen el primer Consejo de Administración y el de Redacción, el ideario de la futura publicación, los estatutos de la nueva entidad periodística y la fianza que depositará, proporcional al importe del capital.

El personal directivo de las empresas y de los periódicos será de nacionalidad española. La participación de capital extranjero será minoritaria. Cuando se trate de sociedades, las acciones serán nominativas.

Si fuese denegada la petición, lo será en resolución razonada. Si en el plazo de un mes no se hubiera resuelto se entenderá que queda autorizada.

Contra la resolución denegatoria cabrán los recursos de reposición y de alzada ante el Consejo de Ministros, y contra la resolución de éste, el recurso ante los Tribunales.

Art. 5.º En el plazo de tres años, las empresas que actualmente editan periódicos de información general, si no estuvieran ya comprendidas en la duodécima base adicional de la vigente ley de Sociedades Anónimas, crearán los órganos adecuados para velar por la pureza de los fines ideológicos a que respondió la fundación de la sociedad, aun cuando para ello hubiesen de modificar sus estatutos.

Para dicha modificación de estatutos habrán de optar las empresas por alguna de las dos fórmulas siguientes:

A. Constituir un Consejo de Fundadores, integrado por accionistas, redactores y empleados en activo o jubilados que mejor encarnen el espíritu fundacional y por personalidades que lo garanticen.

El Consejo de Fundadores resolverá sobre todas las ampliaciones de capital, la transmisión de acciones, la admisión de nuevos accionistas, etc. Además, en un plazo de tres años como mínimo y seis como máximo procederá a nombrar o confirmar por mitades a los miembros que constituyan el Consejo de Administración y el Consejo de Redacción.

B. El Consejo de Administración autorizará las ampliaciones de capital, las transmisiones de acciones, etc.

El Consejo de Redacción cubrirá sus

propias vacantes, y su voto en la Junta general, sin derechos económicos, valdrá por un tercio de la totalidad de votos de dicha Junta. El Consejo de Administración podrá vetar los nuevos nombramientos del Consejo de Redacción. En caso de desacuerdo, resolverá la Junta general.

Art. 6.º En el Registro Nacional de Propietarios de Periódicos constarán los nombres de las personas que ocupen todos los cargos citados en los anteriores artículos. Las variaciones en estos nombramientos, así como las de accionistas, serán comunicadas al Registro al cabo de cada año, o antes, por lo que a los accionistas se refiere, si aquéllas supusieran más del 10 por 100 del capital social.

Art. 7.º Los periódicos publicarán anualmente en su primera plana de información los nombres de las per-

sonas que componen los órganos rectores de la empresa, incluido entre éstos el Consejo de Redacción, y los del director y las personas naturales o jurídicas cuya participación en el capital sea superior a un 10 por 100.

Cada vez que la transmisión de la propiedad alcance o sobrepase un 10 por 100 del capital social o éste sea aumentado, los órganos de prensa de la empresa lo publicarán en sus columnas, después de formalizada la operación, en un plazo de cinco días, si se trata de diarios, o en cualquiera de los dos primeros números siguientes a la fecha de transmisión cuando la publicación no sea diaria.

La misma obligación se establece para el caso de arrendamiento o, en general, cuando la modificación de la propiedad afecte al gobierno de los órganos de prensa de la empresa.

Art. 9.º El ministerio de Información tendrá en todo momento derecho a conocer cómo cubre una empresa de prensa sus déficit, si los tuviera. Las inspecciones que para ello realice estarán sujetas al secreto profesional.

CAPITULO III

De la información

Art. 10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Fuero de los Españoles, las informaciones de prensa no podrán atentar contra:

los principios fundamentales declarados en la ley de 17 de mayo de 1958;

la Jefatura del Estado y la persona que la encarna;

la Iglesia católica, sus dogmas y su moral, y la persona de Su Santidad el Papa y los Obispos;

el Consejo del Reino, las Cortes, el Gobierno, el Ejército, la Administración de Justicia y la fuerza pública. Queda siempre a salvo la discusión serena de los actos u omisiones de estas instituciones de forma que no implique excitación a la desobediencia, sino estímulo para acrecentar la eficacia de sus funciones.

Art. 11. Quedan prohibidos a la prensa:

1.º La apología de hechos delictivos y la de instituciones o doctrinas que estén prohibidas por las leyes.

2.º La descripción de hechos inmorales o de carácter criminal en forma que pueda causar efectos perniciosos en la conciencia pública.

3.º El ataque a las personas que ejercen autoridad. En el caso en que las imputaciones se estimen difama-

torias y se derive de ellas acción judicial, el periódico quedará exento de responsabilidad probando su veracidad. Cuando se trate de actos de la conducta privada de personas constituidas en autoridad o de hechos que sólo afecten a particulares, el periódico estará también exento de responsabilidad si probase en la vía judicial que los hechos denunciados fueran ciertos y de ellos se pudiera seguir una acción penal pública. La discusión concreta de los actos u omisiones de las autoridades en el ejercicio de un cargo público será libre dentro de los términos establecidos en el artículo anterior.

La publicación de buena fe de los discursos pronunciados en las sesiones de los organismos públicos deliberantes, en las vistas judiciales públicas y en los actos de la misma naturaleza eximirá de responsabilidad al periódico.

Art. 12. El Gobierno, por medio de decreto-ley, según establece el Fuero de los Españoles, podrá implantar la previa censura con carácter extraordinario, esto es, en tiempo de guerra, epidemia o de grave y manifiesta alteración de orden público y en toda la

nación o en una región, provincia o ciudad determinadas. El decreto-ley especificará las materias sometidas a censura, la duración de ésta y las instrucciones para su aplicación, así como las autoridades que deben ejercerla.

Cuando el carácter secreto de la materia, por razones de alto interés nacional, no permita la publicación del decreto-ley estableciendo la previa censura, el Gobierno comunicará directamente a los órganos informativos el texto de dicha disposición.

Art. 13. Con carácter ordinario, el ministro de Información ejercerá la previa censura sobre los originales que pudieran estar comprendidos en las disposiciones de los artículos 10 y 11.

A requerimiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales correspondientes, tramitado por conducto del ministro de Justicia, el ministro de Información podrá prohibir la publicación de informaciones sobre pesquisas, interrogatorios, detenciones y, en general, cuanto pueda dificultar gravemente la acción de la Policía o de la justicia en la instrucción de procesos sobre delitos de especial importancia.

Art. 14. En el ministerio de Información funcionará, como órgano colegiado permanente, un Gabinete encargado de examinar con carácter previo los originales sujetos a la censura ordinaria a que se refiere el artículo 13. Para ser funcionario de ese Gabinete se necesitará poseer título universitario o similar o haber desempeñado la dirección de un diario durante cinco años como menos.

Ese Gabinete actuará en provincias a través del delegado provincial de Información.

Art. 15. Los periódicos estarán obligados a enviar al Gabinete de que se habla en el artículo anterior, con el margen de tiempo razonablemente necesario, tan sólo las galeradas correspondientes a las materias que sean objeto de censura. El Gabinete las intervendrá con la rapidez que imponen las exigencias de la confección de los periódicos, sin que entre la entrada de un original y su devolución pueda mediar más de una hora.

Sólo en casos excepcionales, el Gabinete podrá retener algún original para su revisión por una autoridad superior. La devolución, en todo caso, no podrá tardar más de veinticuatro horas, transcurridas las cuales el original se entenderá automáticamente autorizado.

Todas las cuestiones que se plan-

teen entre los periódicos y el Gabinete de censura serán resueltas por los tribunales.

Art. 16. Los Departamentos ministeriales podrán remitir a los periódicos notas informativas sobre asuntos de su competencia que sean de interés general. También tienen derecho a dar a conocer su punto de vista sobre dichos temas en relación con las informaciones que los periódicos hayan insertado o que maliciosamente hayan sido omitidas. En ningún caso los comunicados excederán del doble de la superficie de la información replicada ni todos ellos del tres por ciento de la superficie total de cada número. Se exceptúan los discursos del Jefe del Estado.

Los comunicados oficiales, para ser de inserción obligatoria, habrán de ser cursados por conducto del ministerio de Información y se publicarán en un plazo máximo de dos días, indicando su origen. El periódico puede negarse a su publicación cuando no los juzgue de interés público o supongan un ataque a su ideología fundamental. El ministro de Información podrá someter el caso a los tribunales, que sancionarán al periódico si aprecian temeridad y mala fe en su proceder.

Art. 17. La publicidad que inserten los periódicos deberá llevar las señales distintivas que cada uno establezca con carácter permanente. Dichas señales deberán constar por escrito en el ministerio de Información.

Art. 18. Las revistas y publicaciones infantiles y juveniles se registrarán por disposiciones especiales, que cuidarán de que aquéllas no perjudiquen la formación moral, religiosa y patriótica de sus destinatarios.

Art. 19. Los anuncios publicitarios de medicamentos, drogas, productos alimenticios y cosméticos y, en general, de cuantos afecten a la salud pública, deberán estar previamente autorizados por la Dirección General de Sanidad, a la que se encomienda la vigilancia sobre los mismos al objeto de garantizar la veracidad esencial de lo publicado. Podrá imponer por ello las sanciones a los anunciantes y las prohibiciones y rectificaciones públicas pertinentes cuando se trate de publicidad o propaganda falsas o perjudiciales. Las diferencias que con este motivo surgieren entre la Dirección General de Sanidad, los periódicos y las personas o entidades interesadas en la publicidad serán resueltas por los tribunales.

CAPITULO IV

De los directores

Art. 20. Los directores de las publicaciones serán nombrados por acuerdo entre los Consejos de Administración y Redacción de la empresa y su nombramiento será notificado al ministerio de Información.

Las empresas propietarias de los periódicos deberán dirigirse al ministro de Información a través del delegado provincial correspondiente o del director general de Prensa, en Madrid, mediante instancia en que manifiesten nombre, edad, estado y domicilio del director nombrado por la empresa y del redactor que haya de encargarse provisionalmente de la dirección del periódico, en caso de cese del director. Ambos deberán figurar en el Registro Oficial de Periodistas.

Art. 21. El ministro de Información sólo podrá negar su aprobación al nombrado mediante escrito motivado que se funde en la falta de idoneidad del candidato a causa de su ideología no conforme con los principios enunciados en la ley fundamental de

17 de mayo de 1958 o de su conducta privada o pública. Contra la decisión del ministro, la empresa o el interesado podrán recurrir a los tribunales.

Art. 22. El director representa legalmente al periódico y es responsable del mismo solidariamente con la empresa.

A este efecto, en la instancia en que la empresa notifique al ministro de Información el nombramiento de director, deberá declararse la aceptación de esta responsabilidad solidaria.

En el caso en que la empresa no fuese propietaria de la maquinaria con que se imprime el periódico, la responsabilidad se extenderá, con carácter de subsidiaria, al dueño de aquélla.

Art. 23. Los artículos, informaciones y notas que no estén firmados o que lo sean con seudónimos deberán ser suscritos, en el original, con el nombre y los apellidos del autor. El periódico conservará estos originales durante seis meses.

CAPITULO V

De las sanciones

Art. 24. Las infracciones de esta ley cometidas por los periódicos podrá sancionarias el ministro de Información con multas de hasta diez mil pesetas. También podrá el ministro poner los hechos en conocimiento de los tribunales, ante los cuales se concede recurso a la empresa en todo caso.

Art. 25. El ministro de Información podrá amonestar a los periódicos que realicen campañas en defensa de intereses privados, sean individuales o de grupo, contrarios manifiestamente al bien común. Si no cesan en ellas, el ministro, previo acuerdo del Consejo de Ministros, podrá pasar el conocimiento del asunto a los tribunales.

De análogas facultades podrá usar contra los grupos de presión que, aisladamente o por medio de confabulaciones, pretendan obligar a los periódicos a actitudes, positivas o negativas, contrarias al bien común, y para reprimir la sujeción de las secciones críticas a intereses económicos que impidan su absoluta objetividad e independencia de juicio. Las empresas periodísticas coaccionadas por los representantes de intereses particulares podrán también poner los hechos en conocimiento de los tribunales, a cuya jurisdicción quedan aquéllos también sometidos.

Art. 26. El ministro de Información, en Madrid, y sus delegados en provincias, podrán disponer la recogida de números de un periódico: cuando excite directa o indirectamente a la comisión de hechos prohibidos por las leyes y cuando falte gravemente a las normas de la previa censura.

Contra el acuerdo de recogida de ejemplares, el periódico podrá recu-

rrir a los tribunales. Si éstos declarasen ilegal la medida, el Estado responderá civilmente de los daños y perjuicios.

Art. 27. Las sanciones que los tribunales podrán imponer a los directores de periódicos son:

- a) Amonestación por faltas leves.
- b) Multa de hasta 50.000 pesetas por faltas menos graves.
- c) Destitución por violaciones graves de esta ley.
- d) Destitución y cancelación de su nombre en el Registro Oficial de Periodistas por graves infracciones en materia de ética profesional o por llevar una conducta indigna de la profesión.

Los tribunales, en este último caso, actuarán por propia iniciativa o a instancia del ministro de Información o de diez compañeros del interesado y siempre previa audiencia del interesado. La jurisdicción que este artículo le confiere sustituye a la propia de los tribunales de honor.

Art. 28. Las sanciones que los tribunales podrán imponer a las empresas de prensa serán de multa en cuantía proporcionada a la gravedad de la infracción y a la potencia económica de las empresas. En ningún caso se podrán suspender las actividades de las empresas a título de sanción ni imponerse su incautación o expropiación.

Art. 29. Las sanciones establecidas en la presente ley tienen el carácter de disciplinarias y se aplican con independencia de la responsabilidad penal que en su caso pudiera deducirse.

CAPITULO VI

De los tribunales competentes en materia de prensa

Art. 30. Se crean sendas salas especiales para materias de prensa en las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona, entre las que se dividirá la competencia. Estarán constituidas por magistrados que se hallen adscritos a las mismas, en número de tres en cada una.

La Sala estará asistida por asesores sin derecho a voto, designados parigualmente por la Organización Gremial de Periódicos y por las Asociaciones de la Prensa.

Art. 31. La competencia de las salas especiales de prensa se extiende a conocer las cuestiones que les atribuyen los artículos anteriores, a través de los procedimientos ordinario

de urgencia. Sus componentes podrán ser recusados por las causas recogidas en las leyes y, además, por enemistad ideológica con las partes.

Art. 32. Contra las decisiones de las salas especiales de prensa de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona, cabrán recursos de casación y de revisión en vía ordinaria ante el Tribunal Supremo.

Art. 33. En sus resoluciones procederán los tribunales con arreglo a las normas genéricas legales, si bien considerando especialmente la trascendencia que para el bien público tienen los hechos enjuiciados.

ANEXO IV: Ley 14/66, de Prensa e Imprenta

a) Para disponer los planes de fabricación, acuñación y puesta en circulación de la moneda objeto de la presente Ley.
b) Para dictar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

LEY 13/1966, de 18 de marzo, por la que se modifica la redacción del artículo 43 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.

El artículo cuarenta y tres de la Ley de Ordenación Bancaria de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis atribuye al Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario, la facultad de señalar el tipo máximo de interés abonable a las cuentas corrientes, imposiciones y demás operaciones similares y fijar asimismo los de interés y comisiones mínimos en las operaciones activas y las condiciones de su aplicación; con ello se pretende sobre todo regular la competencia entre los distintos Bancos, estableciendo unas normas dentro de las cuales aquélla debe ocurrir. Sin embargo, conviene utilizar la fijación de los tipos de interés no sólo en este sentido limitado, como regulador de una sana concurrencia, sino al servicio de la política monetaria, en la que la delimitación de dichos tipos constituye una pieza fundamental. Para ello es preciso que se puedan determinar no sólo en su cuantía mínima, sino también en la máxima, los intereses y comisiones de las operaciones activas, de modo que sin menoscabo de su agilidad y dentro de los límites fijados sirva el sistema bancario en su conjunto a las finalidades que la política monetaria en cada momento exija.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

Artículo único.—El artículo cuarenta y tres de la Ley de Ordenación Bancaria de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis quedará sustituido por el siguiente:

«Artículo cuarenta y tres.—Corresponderá al Ministro de Hacienda, previo informe del Banco de España y del Consejo Superior Bancario:

A) Señalar el tipo máximo de interés abonable a las cuentas corrientes, imposiciones y demás operaciones similares.

B) Fijar los tipos de interés y comisiones máximos y mínimos en las operaciones activas y las condiciones de su aplicación. Deberá en todo caso establecerse la diferencia entre ambos tipos de interés en función del coste del dinero. No obstante, podrán autorizarse variaciones en los tipos y condiciones en determinadas plazas o para ciertos sectores o actividades de la economía nacional cuando así lo aconsejen circunstancias especiales.

Se requerirá previo informe de la Organización Sindical y del Consejo de Economía Nacional para los asuntos a que se refieren los apartados A) y B) antes mencionados.

C) Disponer la forma en que deben establecerse y publicarse los balances y los extractos de las cuentas de pérdidas y ganancias de los Bancos y Banqueros operantes en España.

D) Dictar normas generales de carácter obligatorio sobre reparto de dividendos activos bancarios.

E) Disponer la creación de Cámaras de Compensación.»

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

LEY 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta.

Los Cuerpos legales donde en la actualidad se encuentra contenido, en nuestra Patria, el ordenamiento jurídico de la Prensa y la Imprenta están constituidos fundamentalmente por la Ley de veintiséis de junio de mil ochocientos ochenta y tres y la de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho. La mención de estas fechas pone de relieve la necesidad de adecuar aquellas normas jurídicas a las actuales aspiraciones de la comunidad española y a la situación de los tiempos presentes.

Justifican tal necesidad el profundo y sustancial cambio que ha experimentado, en todos sus aspectos, la vida nacional, como consecuencia de un cuarto de siglo de paz fecunda; las grandes transformaciones de todo tipo que se han ido produciendo en el ámbito internacional; las numerosas innovaciones de carácter técnico surgidas en la difusión impresa del pensamiento; la importancia, cada vez mayor, de los medios informativos poseen en relación con la formación de la opinión pública, y, finalmente, la conveniencia indudable de proporcionar a dicha opinión cauces idóneos a través de los cuales sea posible canalizar debidamente las aspiraciones de todos los grupos sociales, alrededor de los cuales gira la convivencia nacional.

Al emprender decididamente esta tarea, el Gobierno ha cumplido escrupulosamente su papel de fiel intérprete del sentir y del pensar del país, con el rigor y el estudio que deben ineludiblemente preceder a la redacción de todo texto legislativo que quiera nacer con una pretensión no sólo de viabilidad, sino también de firmeza y de permanencia. Por ello, la estructura básica y los muros maestros del sistema jurídico que con la presente Ley se trata de instaurar no han sido configurados sino después de ponderar, en la forma más equilibrada posible, los diversos factores y las diversas fuerzas e intereses que en la realidad social regulada entran en juego. De esta manera bien se puede decir que el principio inspirador de esta Ley lo constituye la idea de lograr el máximo desarrollo y el máximo despliegue posible de la libertad de la persona para la expresión de su pensamiento, consagrada en el artículo doce del Fuero de los Españoles, conjugando adecuadamente el ejercicio de aquella libertad con las exigencias inexcusables del bien común, de la paz social y de un recto orden de convivencia para todos los españoles. En tal sentido, libertad de expresión, libertad de Empresa y libre designación de Director son postulados fundamentales de esta Ley, que coordina el reconocimiento de las facultades que tales principios confieren con una clara fijación de la responsabilidad que el uso de las mismas lleva consigo, exigible, como cauce jurídico adecuado, ante los Tribunales de Justicia.

Al poner en vigor la presente Ley no se ha hecho otra cosa —y es justo proclamarlo así— que cumplir los postulados y las directrices del Movimiento Nacional tan como han plasmado no sólo en el ya citado Fuero de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, sino también en la Ley Fundamental de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho y, además, tratar de dar un nuevo paso en la labor constante y cotidiana de acometer la edificación del orden que reclama la progresiva y perdurable convivencia de los españoles dentro de un marco de sentido universal y cristiano, tradicional en la historia patria.

En su virtud y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

De la libertad de prensa e imprenta

Artículo primero.—*Libertad de expresión por medio de impresos.*—Uno. El derecho a la libertad de expresión de las ideas reconocido a los españoles en el artículo doce de su Fuero se ejercitará cuando aquéllas se difundan a través de impresos, conforme a lo dispuesto en dicho Fuero y en la presente Ley.

Dos. Asimismo se ajustará a lo establecido en esta Ley el ejercicio del derecho a la difusión de cualesquiera informaciones por medio de impresos.

Artículo segundo.—*Extensión del derecho.*—La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidos en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.

Artículo tercero.—*De la censura.*—La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes.

Artículo cuarto.—*Consulta voluntaria.*—Uno. La Administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de impresos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La respuesta aprobatoria o el silencio de la

Admisión

la difusión

Dos.

ban trans

los requi

a consul

Artículo

garantiza

lan en es

tes e in

aquéllos

medios in

informac

Artículo

publicació

mativas e

comunica

ción y lo

sean envi

las cursa

con la ex

Dos.

entre pub

lamentar

Artículo

Uno. El

deberán f

publicacio

legal o re

Dos. L

nistración

la Ley o p

o acuerdos

que se for

Artículo

al Minister

funciones

Artículo

tos de esta

da destinar

Artículo

clasificarán

Las primer

carteles y c

semanarios

quiera perio

Dos. Re

mules que c

minaciones.

se caracteri

sola vez en

un conteni

caciones po

mismo titul

contenido in

y con propó

Artículo c

normas espe

año de su in

presor. Se ex

de relación:

Dos. En

más, el día y

micillo y ras

de sus oficin

Tres. En

tor, se hará

en el primer

Artículo d

nido en el au

de proceder

impresión, det

anticipación q

Dos. En e

ejemplares de

ducciones de

su difusión, fi

éste de la que.

de ejemplares

Administración eximirán de responsabilidad ante la misma por la difusión del impreso sometido a consulta.

Dos. Reglamentariamente se determinarán los plazos que deban transcurrir para aplicar el silencio administrativo, así como los requisitos que hayan de cumplirse para presentar el impreso a consulta.

Artículo quinto.—*Garantía de libertad.*—La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos que se regulan en esta Ley, persiguiendo a través de los Organos competentes e incluso por vía judicial, cualquier actividad contraria a aquéllas y, en especial las que a través de monopolios u otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución.

Artículo sexto.—*Información de interés general.*—Uno. Las publicaciones periódicas deberán insertar y las agencias informativas distribuir, con indicación de su procedencia, las notas, comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las Entidades públicas consideren necesario divulgar y sean enviadas a través de la Dirección General de Prensa, que las curará cuando las estime procedentes para su inserción con la extensión adecuada.

Dos. Tales informaciones serán remitidas sin discriminación entre publicaciones análogas sujetándose a las normas que reglamentariamente se determinen.

Artículo séptimo.—*Derecho a obtener información oficial.*—Uno. El Gobierno, la Administración y las Entidades públicas deberán facilitar información sobre sus actos a todas las publicaciones periódicas y agencias informativas en la forma que legal o reglamentariamente se determine.

Dos. La actividad de los expresados órganos y de la Administración de Justicia será reservada cuando por precepto de la Ley o por su propia naturaleza sus actuaciones, disposiciones o acuerdos no sean públicos o cuando los documentos o actos en que se formalicen sean declarados reservados.

Artículo octavo.—*Competencia administrativa.*—Corresponde al Ministerio de Información y Turismo el ejercicio de todas las funciones administrativas contenidas en esta Ley.

CAPÍTULO II

De los impresos o publicaciones

Artículo noveno.—*Impreso.*—Se entenderá por impreso, a efectos de esta Ley, toda reproducción gráfica destinada, o que pueda destinarse, a ser difundida.

Artículo décimo.—*Clases de impresos.*—Uno. Los impresos se clasificarán en publicaciones unitarias y publicaciones periódicas. Las primeras comprenderán los libros, folletos, hojas sueltas, carteles y otros impresos análogos y las segundas, los diarios, semanarios y aquellas otras que, en general, aparecen en cualesquiera períodos de tiempo determinados.

Dos. Reglamentariamente se determinarán los requisitos formales que deban reunir los impresos para alcanzar tales denominaciones, teniendo en cuenta que las publicaciones unitarias se caracterizan por ser obras editadas en su totalidad de una sola vez en uno o varios volúmenes, fascículos o entregas, y con un contenido normalmente homogéneo, mientras que las publicaciones periódicas son impresos en serie continua, bajo un mismo título, para períodos de tiempo determinados, con un contenido informativo o de opinión, normalmente heterogéneo, y con propósito de duración indefinida.

Artículo once.—*Pie de imprenta.*—Uno. Sin perjuicio de las normas especiales, en todo impreso se hará constar el lugar y el año de su impresión, así como el nombre y el domicilio del impresor. Se exceptúan aquellos impresos que se utilicen en la vida de relación social.

Dos. En las publicaciones periódicas se hará constar, además, el día y el mes, el nombre y apellidos del Director, el domicilio y razón social de la Empresa periodística y la dirección de sus oficinas, redacción y talleres.

Tres. En las publicaciones unitarias, si hubiera editor o autor, se hará constar, además de lo exigido para todo impreso en el primer párrafo de este artículo, el nombre y domicilio del primero y el nombre o pseudónimo del segundo.

Artículo doce.—*Depósito.*—Uno. A los efectos de lo prevenido en el artículo sesenta y cuatro de la presente Ley, antes de proceder a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta, deberán depositarse seis ejemplares del mismo con la anotación que reglamentariamente se determine, que nunca podrá exceder de un día por cada cincuenta páginas o fracción.

Dos. En el caso de diarios o semanarios se depositarán diez ejemplares de la publicación o bien el mismo número de reproducciones de su contenido, media hora antes, como mínimo, de su difusión, firmados por el Director o por la persona en quien éste delegue. En las demás publicaciones periódicas el número de ejemplares será el mismo y el plazo de seis horas.

Tres. El depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo que reglamentariamente se determinen.

Artículo trece.—*Impresos clandestinos.*—Se reputarán clandestino todo impreso en el que no figuren o sean inexactas las menciones exigidas en el artículo 11, o que haya sido difundido incumpliendo lo dispuesto en el artículo doce.

Artículo catorce.—*De la difusión.*—Se presume que existe difusión de un impreso cuando no se encuentre, ya sea en poder del autor, del editor o del impresor, la totalidad de los ejemplares, salvo los de depósito a que se refiere el artículo doce.

Artículo quince.—*Publicaciones infantiles.*—Un Estatuto especial regulará la impresión, edición y difusión de publicaciones que, por su carácter, objeto o presentación, aparezcan como principalmente destinadas a los niños y adolescentes.

CAPÍTULO III

De las Empresas periodísticas

Artículo dieciséis.—*Libertad de Empresa.*—Conforme a lo dispuesto en esta Ley, toda persona natural de nacionalidad española y residente en España que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrá libremente constituir o participar en Empresas que tengan por objeto la edición de impresos periódicos. Igualmente tendrán las personas jurídicas de nacionalidad española y con domicilio en España. Dichas Empresas se denominarán «Empresas periodísticas».

Artículo diecisiete.—*Capital español.*—Uno. El patrimonio y el capital de las Empresas periodísticas tendrá que pertenecer necesariamente a personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y residentes en España.

Dos. Sin embargo, será posible la participación de hasta un veinte por ciento en favor de españoles no residentes en España, en los que concurran los restantes requisitos del artículo dieciséis.

Artículo dieciocho.—*De los administradores.*—Uno. En las Empresas periodísticas constituidas en forma de sociedad, será miembro del consejo u organismo administrador, necesaria pero no exclusivamente la persona natural que posea por sí sola una participación de más del veinte por ciento del capital o patrimonio social.

Dos. Las Empresas periodísticas constituidas en forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada deberán tener administración colegiada. Sólo las personas naturales podrán ser administradores de Empresas periodísticas constituidas en forma de sociedad.

Tres. En todo caso, los promotores, fundadores y administradores habrán de tener nacionalidad española y residencia en España.

Artículo diecinueve.—*Objeto social específico.*—Cuando la forma jurídica que pretenda adoptar la Empresa periodística sea la de cualquier tipo social que limite la responsabilidad de los socios, la sociedad deberá tener como objeto social expreso la publicación por cuenta propia de impresos periódicos, y no podrá dedicarse a otras actividades que no tengan relación directa con las de carácter informativo o editorial.

Artículo veinte.—*Sociedades Anónimas.*—Uno. Cuando la forma adoptada sea la de Sociedad Anónima, las acciones serán nominativas e intransferibles a extranjeros. Si la cualidad de socio la ostenta una Sociedad por acciones, será necesario que sus acciones sean también nominativas e intransferibles a extranjeros, así como que la actividad periodística figure estatutariamente entre las que formen parte de sus fines sociales.

Dos. En las Sociedades Anónimas que tengan como objeto social el previsto en el artículo diecinueve podrá existir, como órgano encargado de velar por la permanencia de los fines ideológicos, la Junta de Fundadores.

Tres. La Junta de Fundadores estará compuesta por un número impar de personas y actuará como órgano colegiado sujeto a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo setenta y ocho de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuatro. La composición y atribuciones de la Junta deberán establecerse en la escritura pública de constitución de la Sociedad, y figurarán en sus Estatutos sociales.

Cinco. Podrán conferirse a la Junta las siguientes facultades:

Primera.—Autorizar los acuerdos sociales de aumento o reducción del capital social.

Segunda.—Autorizar la transmisión de acciones.

Tercera.—Proponer a la Junta general, para cubrir los puestos vacantes del Consejo de Administración y de la propia Junta, nombres de personas en número triple al de los puestos a cubrir; y

Cuarta.—Aprobar la designación del Director o Directores de las publicaciones periódicas que edita la Empresa.

Seis. Fuera de estos casos, las atribuciones de la Junta no podrán mermar las competencias ordinarias del Consejo de Administración y de la Junta general de accionistas.

Siete. Los miembros de la Junta de Fundadores quedan sujetos a las obligaciones que resulten impuestas a los Administradores en la presente Ley y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo veintinueve.—*Publicaciones de contenido especial.*—Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los artículos dieciocho, diecinueve, veinte y veinticuatro, salvo en lo que éste último prescribe respecto a los órganos rectores, las personas jurídicas que, de acuerdo con sus finalidades institucionales o asociativas, pretendan publicar revistas que reglamentariamente se definan como de carácter técnico, científico o profesional. La excepción no comprende, en ningún caso, las publicaciones periódicas de información general.

Artículo treinta.—*Responsabilidad en caso de varias publicaciones.*—Si las Empresas periodísticas publican varios periódicos, las responsabilidades económicas en razón de esta Ley, derivadas de cualquiera de ellos, podrán hacerse efectivas sobre la totalidad del patrimonio. El pacto limitativo de esta responsabilidad será nulo.

Artículo treinta y uno.—*Transmisión de títulos de publicaciones.*—Cuando las Empresas periodísticas cedan, con arreglo a derecho, a otra persona los títulos de las publicaciones periódicas debidamente inscritas para las que estuvieren facultadas, el adquirente no podrá proceder a la edición de dichas publicaciones si no cumple las normas que regulan la inscripción de las de nueva aparición.

Artículo treinta y dos.—*Derecho del público.*—Uno. Con independencia del carácter público del Registro de Empresas periodísticas, anualmente, para información de los lectores, en las publicaciones periódicas se harán constar en espacio preferente los nombres de las personas que constituyen sus órganos rectores, los de los accionistas que posean una participación superior al diez por ciento del patrimonio social y una nota informativa de su situación financiera.

Dos. Del mismo modo se hará constar, en el momento en que se realice, cualquiera de las modificaciones a que se refiere el artículo veintiocho de esta Ley.

Artículo treinta y tres.—*Vigilancia de los medios financieros.*—La Administración tendrá derecho en todo momento a conocer cómo cubren sus déficit, si los tuvieran, las Empresas periodísticas, así como a inspeccionar la contabilidad y las tiradas de sus publicaciones.

CAPITULO IV

Del registro de Empresas periodísticas

Artículo treinta y cuatro.—*Inscripción.*—Las Empresas periodísticas habrán de inscribirse, antes de dar comienzo al ejercicio de sus actividades, en un registro de carácter público, que se llevará en el Ministerio de Información y Turismo, y que se denominará «Registro de Empresas Periodísticas».

Artículo treinta y cinco.—*Solicitud de inscripción.*—Uno. La inscripción se practicará, previa instrucción de un expediente, que se iniciará con la solicitud del interesado, en la que se hará constar, para que figure en el Registro, los siguientes datos:

- Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio de la persona, natural o jurídica, titular de la Empresa.
- Estatutos de la Sociedad y Reglamento, si lo hubiere.
- Nombre del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración.
- Descripción del patrimonio de la Empresa y, en su caso, capital social suscrito y desembolsado.
- Líneas generales del plan financiero y medios para su realización.
- Descripción de la finalidad de las publicaciones y principios que las inspiren.
- Publicación o publicaciones que pretende editar, con mención expresa respecto a cada una de las mismas de:

- El título, objeto y periodicidad.
- El lugar y fecha de aparición.
- Las características de formato, las técnicas de impresión y número previsto de páginas.
- Indicación de si va a aceptar o no publicidad y, en caso afirmativo, reseña de la forma de identificación de la misma, para su destino con la función informativa.
- El precio previsto de venta por ejemplar, que figurará en la publicación.
- El número aproximado de tirada, cuya comprobación se ajustará al régimen establecido por el Estatuto de la Publicidad.
- La imprenta en que vaya a efectuarse la impresión, espe-

cificando el nombre y domicilio de la misma, y el nombre del Director o del Gerente en el momento de la solicitud.

b) El nombre y circunstancias personales del Director y del Subdirector o sustituto interino, en su caso, haciendo constar su conformidad expresa con la designación.

i) La plantilla de Redactores fijos.

Dos. Cuando la forma jurídica adoptada sea la de Sociedad se presentará además copia autorizada de la escritura pública de constitución y de los acuerdos sociales relativos a nombramientos de Administradores y Gestores y certificación de los asientos registrales respectivos.

Tres. El Ministerio de Información y Turismo dispondrá que el expediente de inscripción se publique previamente en el «Boletín Oficial del Estado», abriendo un plazo de información pública que no excederá de dos meses.

Artículo treinta y seis.—*Inscripciones sucesivas.*—Uno. Las modificaciones en la estructura de la Empresa, las transmisiones de propiedad o de acciones, las alteraciones en la composición de los órganos directivos o administradores, el cese o sustitución del Director, los nombramientos o ceses de Redactores y, en general, cuantos actos signifiquen un cambio de alguna de las circunstancias de inscripción, deberán hacerse constar en el Registro en un plazo de un mes.

Dos. Cuando transcurrido un mes del hecho que debe dar origen a la nueva inscripción, ésta no se hubiera solicitado, la Empresa será sancionada administrativamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.

Tres. Si no se hubiese realizado ninguna variación inscribible, las Empresas, al fin de cada semestre natural, contado desde la inscripción, deberán hacerlo constar así en el Registro.

Artículo treinta y siete.—*Causas denegatorias y de cancelación de las inscripciones.*—Uno. No procederá la primera y sucesiva inscripción:

Primero.—Cuando en la constitución de la Empresa no se haya dado cumplimiento a normas o requisitos legales.

Segundo.—Cuando no se proporcionen todos los datos que hayan de ser objeto de la inscripción o éstos no sean exactos. A este fin la Administración podrá exigir o practicar las comprobaciones que estime pertinentes.

Tercero.—Cuando no concurren los requisitos legales de capacidad en la persona titular de la Empresa o en cualquiera de las que ejerzan o hayan de ejercer cargos directivos.

Cuarto.—Cuando, oído el Consejo Nacional de Prensa y el Sindicato Nacional de Prensa, pueda racionalmente deducirse que la publicación será utilizada para producir los resultados que trata de evitar el artículo quinto.

Dos. Cualquiera de los supuestos expresados determinará la cancelación, de oficio o a instancia de parte, de la inscripción vigente.

Artículo treinta y ocho.—*Recurso en caso de denegación o cancelación.*—Contra la resolución ministerial que deniegue o cancele cualquier inscripción en el Registro de Publicaciones Periódicas podrá interponerse recurso ante el Consejo de Ministros, y el ulterior recurso contencioso-administrativo.

Artículo treinta y nueve.—*Nuevas publicaciones.*—Cuando una Empresa periodística ya inscrita desee iniciar una nueva publicación periódica deberá también hacerla objeto de inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo treinta y diez.—*Beneficios.*—Una vez inscrita en el Registro la Empresa periodística participará de los beneficios de carácter tributario, económico, postal, de distribución, comunicación y cuantos otros análogos se otorguen. Siempre que éstos tengan finalidad compensatoria, directa o indirecta, la Administración aprobará los precios de venta o de prestación de servicios informativos.

CAPITULO V

De la profesión periodística y de los Directores de publicaciones periódicas

Artículo treinta y tres.—*Profesión periodística y título profesional.*—Un Estatuto de la profesión periodística, aprobado por Decreto, regulará los requisitos para el ejercicio de tal actividad, determinando los principios generales a que debe subordinarse y, entre ellos, el de profesionalidad, previa inscripción en el Registro Oficial, con fijación de los derechos y deberes del periodista y especialmente del Director de todo medio informativo; el de colegiación, integrada en la Organización Sindical, que participará en la formulación, redacción y aplicación del mencionado Estatuto, y el de atribución a un Jurado de ética profesional de la vigilancia de sus principios morales.

A
blica
de i
orien
así
en la
As
el ca
nacio
derec
dico
título
De
estab
tura
Ar
Direc
Pr
salvo
consta
perce
Se
fracci
Ter
por el
nec
Cus
veces
de un
Dos
mero
definid
de los
Art
recho
períodi
bilidad
inscri
Art
public
un imp
gen. Si
habría
Dos
inter
anuncia
Art
tor es
del mes
respons
sobre el
Dos
tenderá
simple
sentar y
de las
las resp
dica de
io dispu
Art
signado
sonas q
Dos
prestaci
el Estat
las Empr
Art
de ausen
sustituido
director
designado
caerán, e
ponsabili
Dos
queda su
para el I
Art
rector o
quier cas
libertad c
los térmi
título bre

Artículo treinta y cuatro.—*Director*.—Al frente de toda publicación periódica o agencia informativa, en cuanto medio de información, habrá un Director, al que corresponderá la orientación y la determinación del contenido de las mismas, así como la representación ante las autoridades y tribunales en las materias de su competencia.

Artículo treinta y cinco.—*Requisitos*.—Uno. Para desempeñar el cargo de director serán requisitos imprescindibles: tener la nacionalidad española, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, residir en el lugar donde el periódico se publica o donde la agencia tiene su sede y poseer el título de Periodista inscrito en el Registro Oficial.

Dos. El Estatuto a que se refiere el artículo treinta y tres establecerá las posibles excepciones que resulten de la naturaleza oficial o especializada de la publicación.

Artículo treinta y seis.—*Prohibiciones*.—Uno. No podrán ser Directores:

Primero.—Los condenados por delito doloso, no rehabilitados, salvo que se hubiese apreciado como muy calificada la circunstancia de preterintencionalidad en los delitos contra las personas.

Segundo.—Los condenados judicialmente por tres o más infracciones en materia de Prensa.

Tercero.—Los que hayan sido sancionados tres o más veces por el Jurado de Ética profesional en grado superior al de amonestación pública.

Cuarto.—Los sancionados administrativamente tres o más veces por infracción grave, según la presente Ley, en el plazo de un año.

Dos. No se entenderán comprendidos en el apartado primero de la anterior enumeración los condenados por delitos definidos en la Ley de 24 de diciembre de 1962, con excepción de los previstos en sus artículos séptimo, octavo y décimo.

Artículo treinta y siete.—*Derechos*.—El Director tiene el derecho de veto sobre el contenido de todos los originales del periódico, tanto de redacción como de administración y publicidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo sexto sobre inserción necesaria.

Artículo treinta y ocho.—*Origen de la información y de la publicidad*.—Uno. En toda información o noticia contenida en un impreso periódico deberá hacerse constar su fuente de origen. Si ésta no constase, se entenderá que el Director declara haberla obtenido a través de fuentes propias.

Dos. La publicidad que exprese opiniones sobre asuntos de interés público deberá contener el nombre y la dirección del anunciante.

Artículo treinta y nueve.—*Responsabilidad*.—Uno. El Director es responsable de cuantas infracciones se cometan a través del medio informativo a su cargo, con independencia de las responsabilidades de orden penal o civil que puedan recaer sobre otras personas, de acuerdo con la legislación vigente.

Dos. Sin perjuicio de su responsabilidad personal, se entenderá tácitamente concedido en favor del Director, por el simple hecho de su designación, un poder típico para representar y obligar al empresario en todo lo relativo al ejercicio de las funciones a su cargo y, especialmente, en cuanto a las responsabilidades que se deriven de la publicación periódica de que se trate. Cualquier estipulación en contrario de lo dispuesto anteriormente será nula.

Artículo cuarenta.—*Designación*.—Uno. El Director será designado libremente por la Empresa periodística entre las personas que reúnan los requisitos exigidos en esta Ley.

Dos. Sus relaciones se formalizarán en un contrato civil de prestación de servicios, cuyas condiciones mínimas, fijadas por el Estatuto a que se refiere el artículo 33, se aplicarán a todas las Empresas periodísticas.

Artículo cuarenta y uno.—*Subdirectores*.—Uno. En los casos de ausencia, enfermedad, suspensión o cese del Director será sustituido interinamente en las funciones directivas por el Subdirector o, a falta de éste, por la persona que se determine, designados en la misma forma que el Director, en quienes recaerán, durante el período de suplencia, las atribuciones y responsabilidades señaladas en la presente Ley para los Directores.

Dos. La designación del Subdirector o sustituto interino queda sujeta a los mismos requisitos de inscripción que rigen para el Director.

Artículo cuarenta y dos.—*Incompatibilidad*.—El cargo de Director o Subdirector es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público o actividad privada que pueda coartar la libertad o independencia en el desempeño de sus funciones en los términos que determine el Estatuto a que se refiere el artículo treinta y tres.

CAPÍTULO VI

De las agencias informativas

Artículo cuarenta y tres.—*Agencias informativas*.—Uno. Se consideran agencias informativas las Empresas que se dediquen en forma habitual a proporcionar noticias, colaboraciones, fotografías y cualesquiera otros elementos informativos.

Dos. Las agencias informativas se clasificarán en agencias de información general, de información gráfica, agencias de colaboraciones y agencias mixtas.

Artículo cuarenta y cuatro.—*Libertad de creación de agencias*.—Será libre la creación de agencias informativas, siempre que se cumplan los mismos requisitos previstos en esta Ley para las publicaciones y Empresas periodísticas. Existirá en el Ministerio de Información y Turismo un «Registro público de agencias informativas».

Artículo cuarenta y cinco.—*Inscripción*.—Uno. Para la práctica de la inscripción de una agencia informativa, además de las menciones que sean aplicables de las contenidas en el artículo veintisiete, se harán constar: las líneas generales de su plan de actuación, con expresión del número, nombre y residencia de los corresponsales; el tipo de información a que haya de dedicarse; el plan técnico de transmisiones, así como todos los contratos o convenios celebrados con otras agencias u organizaciones informativas en relación con servicios de carácter estable o duradero.

Dos. En cuanto a las modificaciones sucesivas que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el artículo veintiocho.

Artículo cuarenta y seis.—*Prohibición de publicidad*.—Las agencias informativas no podrán dedicarse a ninguna actividad publicitaria.

Artículo cuarenta y siete.—*Identificación de agencias*.—Uno. En todo el material distribuido por las agencias de información deberá figurar la indicación o sigla que las identifique.

Dos. Esta indicación se hará constar asimismo en las publicaciones.

Artículo cuarenta y ocho.—*Responsabilidad*.—La responsabilidad de las agencias de información y de sus Directores se regirá por las mismas normas que las de las Empresas periodísticas y la de los Directores de publicaciones periódicas, y en ningún caso se excluirán entre sí.

Artículo cuarenta y nueve.—*De la información extranjera*.—Podrá ser concedida a una agencia nacional con representación de las Entidades públicas y de los medios informativos, o en régimen cooperativo de estos últimos la distribución en exclusiva y sin discriminación alguna de las noticias procedentes de agencias extranjeras.

CAPÍTULO VII

De las Empresas editoriales

Artículo cincuenta.—*Libertad de empresa editorial*.—Uno. Toda persona, natural o jurídica, de nacionalidad española y con residencia en España, que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrá constituir o participar en Empresas que tengan por objeto principal la realización, por cuenta propia, de las publicaciones unitarias referidas en el artículo diez de esta Ley. Dichas Empresas se denominarán «Empresas editoriales».

Dos. Podrán participar en ellas hasta un cincuenta por ciento de su patrimonio social o capital, los españoles no residentes en España, en quienes concurren los restantes requisitos anteriormente señalados y las personas naturales pertenecientes a los países de las áreas idiomáticas española y portuguesa.

Tres. Si la publicación unitaria fuera editada por cuenta de su autor y sin ple editorial, dicho autor asumirá la responsabilidad y deberes de la Empresa editorial, siendo subsidiariamente responsable el impresor.

Artículo cincuenta y uno.—*Inscripción*.—Uno. Las empresas editoriales habrán de inscribirse antes de dar comienzo al ejercicio de sus actividades en un Registro público que se llevará en el Ministerio de Información y Turismo y se denominará «Registro de Empresas Editoriales».

Dos. Contra el acuerdo que deniegue la inscripción o la cancele, en su caso, podrán interponerse los mismos recursos que establece el artículo treinta.

Artículo cincuenta y dos.—*Solicitud de inscripción*.—Uno. La inscripción se practicará previa instrucción de un expediente, en el que se hará constar, para que figure en el Registro:

Primero.—Nombre y razón social, nacionalidad y domicilio de la persona natural o jurídica titular de la Empresa.

Segundo.—Reglamento de la Empresa o Estatuto de la Sociedad.

Tercero.—Nombre del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomiende la gestión y administración.

Cuarto.—Descripción del patrimonio de la Empresa y, en su caso, capital social suscrito y desembolsado.

Quinto.—Líneas generales del plan editorial y financiero y medios para su realización.

Dos. Cuando la forma jurídica adoptada sea la de una Sociedad, se presentará, además, copia autorizada de la escritura pública de constitución y de los acuerdos sociales relativos a nombramientos de administradores y gestores, así como certificación de los asientos correspondientes del Registro Mercantil.

Artículo cincuenta y tres.—*Derecho a la inscripción.*—La inscripción se practicará cuando se hayan aportado al expediente los datos exigidos en el artículo anterior. La Administración podrá solicitar cuantos datos complementarios sean necesarios para la debida identificación de las Empresas editoriales, e igualmente, requerir a las mismas para que le comuniquen las modificaciones que se hayan producido con posterioridad a la inscripción. En todo caso, las Empresas editoriales comunicarán al Registro, semestralmente, las modificaciones habidas en relación con los hechos que fueran objeto de inscripción.

Artículo cincuenta y cuatro.—*Beneficios.*—Una vez inscrita en el Registro la Empresa editorial, participará de los beneficios de carácter tributario, económico, postal, de distribución, comunicación y cuantos otros análogos se otorguen.

CAPITULO VIII

De las Empresas importadoras de publicaciones, de las agencias extranjeras y de los corresponsales informativos extranjeros

Artículo cincuenta y cinco.—*Impresos extranjeros.*—Uno. Las Empresas importadoras de publicaciones editadas en el extranjero habrán de inscribirse, antes de dar comienzo al ejercicio de sus actividades, en un Registro público que se llevará en el Ministerio de Información y Turismo, con la denominación de «Registro de Empresas Importadoras de Publicaciones Extranjeras». A estas Empresas les será de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las Empresas editoriales.

Dos. La difusión en territorio nacional de los impresos editados en el extranjero, de cualquier clase y en cualquier lengua en que estén redactados, se ajustará a lo que, en armonía con lo preceptuado en esta Ley, se disponga en las normas reglamentarias correspondientes en las que se determinarán los requisitos necesarios para proceder a la difusión de dichos impresos, así como los relativos a la identificación de los importadores responsables.

Artículo cincuenta y seis.—*Agencias informativas extranjeras.* Las agencias informativas extranjeras que actúen en España para suministrar material informativo al exterior estarán obligadas a acreditar a sus corresponsales ante el Ministerio de Información y Turismo.

Artículo cincuenta y siete.—*Corresponsales informativos del extranjero.*—Uno. Los corresponsales informativos de cualquier medio de difusión extranjero deberán acreditarse ante el Ministerio de Información y Turismo donde se llevará un Registro de los mismos.

Dos. Cuando los corresponsales tengan nacionalidad española, deberán reunir los requisitos exigidos en España para el ejercicio de la profesión periodística.

Tres. El Ministerio de Información y Turismo podrá cancelar la inscripción de aquellos corresponsales cuyas informaciones sean falsas o resultaran tendenciosas.

CAPITULO IX

De los derechos de réplica y rectificación

Artículo cincuenta y ocho.—*Derecho de réplica.*—Uno. Toda persona natural o jurídica que se considere injustamente perjudicada por cualquier información escrita o gráfica que la mencione o aluda, inserta en una publicación periódica, podrá hacer uso del derecho de réplica, en los plazos y en la forma que reglamentariamente se determinen.

Dos. Podrán también ejercitar este derecho los representantes legales del perjudicado, así como sus herederos si hubiere fallecido.

Artículo cincuenta y nueve.—*Deber de inserción.*—El Director de la publicación de que se trate tiene el deber de insertar el escrito de réplica en uno de los tres números siguientes al día de su entrega, si se trata de publicación diaria, y en uno de los dos primeros números siguientes, si se trata de publicación semanal o de periodicidad más dilatada.

Artículo sesenta.—*Forma de inserción.*—El escrito de réplica deberá en todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración o

rectificación y su inserción habrá de realizarse en la misma plana y columna y con los mismos caracteres tipográficos con que se publicó la información, y será gratuita cuando no exceda del doble del número de líneas de texto o espacio gráfico al que se replica. La publicación de que se trate no podrá incluir en el mismo número comentarios o apostillas a la réplica.

Artículo sesenta y uno.—*Inserción obligatoria.*—Contra la negativa del Director de la publicación podrá el interesado acudir en queja al Ministerio de Información y Turismo, el cual, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda, y oído el Director del periódico, podrá ordenar la inserción solicitada u otra equivalente. Contra la resolución del Ministro cabrá recurso contencioso-administrativo.

Artículo sesenta y dos.—*Derecho de rectificación.*—Los Directores de las publicaciones periódicas están obligados a insertar gratuitamente en el número siguiente a su recepción, y en las condiciones del artículo sesenta, cuantas notas o comunicados les remitan la Administración o autoridades, a través de la Dirección General de Prensa o de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Información y Turismo, rectificando o aclarando información publicada en aquella sobre actos propios de su competencia o función.

CAPITULO X

De la responsabilidad y de las sanciones

Artículo sesenta y tres.—*Clases de responsabilidad.*—La infracción de las normas que regulan el régimen jurídico de Prensa e Imprenta dará origen a la responsabilidad penal, civil o administrativa que proceda.

Artículo sesenta y cuatro.—*De la responsabilidad penal y de de las medidas previas y gubernativas.*—Uno. La responsabilidad criminal será exigida ante los Tribunales de Justicia, de conformidad con lo establecido en la legislación penal y por los trámites que establecen las leyes de procedimiento.

Dos. Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de la Prensa o Imprenta y sin perjuicio de la obligación de la denuncia en el acto a las autoridades competentes, dando cuenta simultáneamente al Ministerio Fiscal, podrá, con carácter previo a las medidas judiciales que establece el título V del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial, del impreso o publicación delictivos donde quiera que éstos se hallaren, así como de sus moldes para evitar la difusión. La autoridad judicial, tan pronto como reciba la denuncia, adoptará la resolución que proceda respecto del secuestro del impreso o publicación, y sus moldes.

Artículo sesenta y cinco.—*De la responsabilidad civil en materia de Prensa e Imprenta y de la patrimonial del Estado.*—Uno. La responsabilidad civil derivada de delito, cuando no pueda hacerse efectiva en los autores que menciona el artículo 15 del Código Penal, recaerá con carácter subsidiario en la Empresa periodística, editora, impresora e importadora o distribuidora de impresos extranjeros.

Dos. La responsabilidad civil por actos u omisiones ilícitos, no punibles, será exigible a los autores, directores, editores, impresores e importadores o distribuidores de impresos extranjeros, con carácter solidario.

Tres. La insolvencia de las personas jurídicas dará lugar a una responsabilidad civil subsidiaria de sus administradores, salvo que éstos hayan manifestado previamente su oposición formal al acto.

Cuatro. La responsabilidad patrimonial del Estado y la de las autoridades y funcionarios en relación con los actos que regula la Ley de Prensa e Imprenta se regirá por lo dispuesto en el título IV de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Artículo sesenta y seis.—*De la responsabilidad administrativa.* La infracción de los preceptos legales y reglamentarios en materia de Prensa e Imprenta será sancionable en vía administrativa, independientemente de que sea o no constitutiva de delito.

Artículo sesenta y siete.—*Infracciones muy graves.*—Son infracciones administrativas muy graves:

a) Las actividades que sean graves y manifestamente contrarias a las libertades y derechos declarados en esta Ley y a las limitaciones establecidas en su artículo segundo.

b) La difusión, circulación o reproducción en España de impresos editados en el extranjero cuando no se hubieran cumplido los requisitos necesarios.

c) La publicación de disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan el carácter de reservados conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo.

Artículo sesenta y ocho.—*Infracciones graves y leves.*—Uno. Constituyen infracciones graves:

a) F
fusión c
Ley, sei
b) C
reglame
opinión
turbación

Dos.
ción de
compre
y siete o
Artíci
las infra
imponers

a) C

Prima
de las a
mil a ve
Segun
actividad
veinticin
Tercer
actividad
cincuenta

b) A

Primer
mil peset
Segun
pesetas.

Tercer
periódica
los seman
en las d
Empresas
tres meses

Dos. L
con cualq

Tres. I
Registros
Artículo
gir las inf

Uno. A
su caso, la
Dos. A
grave.

Tres. A

Artículo
dos que im
nistrativa, :

a) El A
por la Dire

b) El C
tro de Infor

c) El n
acordado.

Dos. Co
trativa pod
nistrativa.

Artículo
juicio de la
cinco del C
trativas que
publicación
diatamente :

Primera.
ción y publi
el futuro po
cional y la C
en las dispos
cumpliment
Ley y en las
de la misma

a) El incumplimiento de las obligaciones de inserción o difusión contenidas en los artículos sexto y sesenta y dos de esta Ley, siempre que exista requerimiento expreso al efecto.

b) Cualquier otra infracción de las disposiciones legales o reglamentarias cuando haya intención manifiesta de deformar la opinión pública, se produzca con reiteración o cause una perturbación grave y actual.

Dos. Se considera como infracción leve, cualquier infracción de las disposiciones legales o reglamentarias que no esté comprendida como infracción muy grave en el artículo sesenta y siete o como grave en el párrafo anterior de este artículo.

Artículo sesenta y nueve.—*Sanciones.*—Uno. Por razón de las infracciones a que se refieren los artículos anteriores, podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Cuando la responsabilidad afecte al autor o director.

Primero.—En las infracciones leves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales hasta quince días o multa de mil a veinticinco mil pesetas.

Segundo.—En las graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de quince días a un mes o multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesetas.

Tercero.—En las muy graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de un mes a seis meses o multa de cincuenta mil a doscientas cincuenta mil pesetas.

b) A los empresarios o Empresas:

Primero.—En las infracciones leves: multa de mil a cincuenta mil pesetas.

Segundo.—En las graves, multa de cincuenta mil a cien mil pesetas.

Tercero.—En las muy graves, suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los diarios; hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales y hasta seis meses en las de menor frecuencia. Suspensión de las actividades de las Empresas editoriales definidas en el artículo cincuenta hasta tres meses o multa de cien mil a quinientas mil pesetas.

Dos. La sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra.

Tres. Las resoluciones sobre sanciones serán anotadas en los Registros correspondientes.

Artículo setenta.—*Competencia.*—La competencia para corregir las infracciones expresadas corresponde:

Uno. Al Director general de Prensa o al de Información, en su caso, las de carácter leve.

Dos. Al Ministro de Información y Turismo, las de carácter grave.

Tres. Al Consejo de Ministros, las de carácter muy grave.

Artículo setenta y uno.—*Recursos.*—Uno. Contra los acuerdos que impongan las sanciones podrá recurrirse, en vía administrativa, ante:

a) El Ministro de Información y Turismo, de los adoptados por la Dirección General de Prensa o de Información, en su caso.

b) El Consejo de Ministros, de los adoptados por el Ministro de Información y Turismo.

c) El mismo Consejo, en súplica, por los que éste hubiera acordado.

Dos. Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo setenta y dos.—*Publicación de sentencias.*—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cuatrocientos sesenta y cinco del Código Penal, las sentencias o resoluciones administrativas que impongan sanciones deberán insertarse en la misma publicación a que se refieran, en uno de los tres números inmediatamente posteriores a su notificación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El régimen de las Empresas, Agencias de Información y publicaciones constituidas o que puedan constituirse en el futuro por el Estado o Entidades públicas, el Movimiento Nacional y la Organización Sindical, quedará sujeto a lo establecido en las disposiciones creadoras de aquéllas, sin perjuicio de dar cumplimiento a los requisitos formales exigidos en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias dictadas en aplicación de la misma.

Segunda.—Para resolver las cuestiones que pueda suscitar la aplicación de la presente Ley a las publicaciones de la Iglesia católica, dependientes de su Jerarquía, el Gobierno y la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social adoptarán los acuerdos procedentes.

Tercera.—Queda facultado el Gobierno para dictar cuantas normas reglamentarias sean convenientes para el mejor desarrollo y aplicación de esta Ley.

Cuarta.—Estarán exentos de toda clase de impuestos los actos que deban realizarse para acomodar la estructura de las Empresas existentes a los preceptos de esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las Empresas periodísticas, Empresas editoriales, agencias de información y publicaciones a que la misma afecta, se acomodarán a lo que en ella se dispone, procediendo a inscribirse en los respectivos registros.

Segunda.—Con independencia de lo establecido en la disposición anterior, quedarán subsistentes las proporciones de capital extranjero que, debidamente autorizadas, existieren en las Empresas periodísticas y editoriales con anterioridad al primero de enero de mil novecientos sesenta. La transmisión de los títulos o acciones en que las referidas proporciones consistan sólo podrá realizarse a favor de personas en las que concurren, respectivamente, los requisitos exigidos en el artículo dieciséis y en el párrafo primero del artículo cincuenta de esta Ley.

Tercera.—Continuarán subsistentes en su forma actual las Empresas periodísticas que hayan hecho uso del derecho reconocido en la disposición transitoria decimosegunda de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de inscripción en el Registro que resulten de lo dispuesto en esta Ley.

Cuarta.—En el plazo señalado en la disposición primera, las Sociedades Anónimas existentes con anterioridad a la publicación de esta Ley, que tengan como objeto social el determinado en el artículo diecinueve, podrán constituir la Junta de Fundadores, acomodándose a lo dispuesto en el artículo veinte, previo acuerdo unánime de sus accionistas, adoptado en Junta general.

Quinta.—En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberá ser promulgado, por Decreto, el texto refundido del Estatuto de la Profesión Periodística.

DISPOSICION DEROGATORIA

Única. Quedan derogadas las Leyes de Imprenta de veintiséis de junio de mil ochocientos ochenta y tres, la de Prensa de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho, el apartado b) del artículo cuarenta de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, en lo que se refiere al ejercicio de la función de policía sobre la Prensa, el Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno sobre autorización para la publicación de obras, el Decreto de trece de marzo de mil novecientos cincuenta y tres y la Orden de veinticinco de mayo del mismo año sobre derecho de rectificación en prensa periódica, el Decreto de once de julio de mil novecientos cincuenta y siete por el que se regula el requisito de pie de Imprenta en las publicaciones, la Orden de veintinueve de abril de mil novecientos treinta y ocho referente a los trámites previos a la publicación de libros, la Orden de veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y dos sobre publicación de revistas, la Orden de veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis sobre censura previa, las Ordenes de veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y dos y trece de agosto de mil novecientos sesenta y dos sobre nombramiento y sustitución de Directores, la Orden de treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y siete sobre publicación de información general, la Orden de veintuno de julio de mil novecientos cincuenta y nueve por la que se establece el número de orden del Registro de Publicaciones para los libros editados en España o importados del exterior, la Orden de cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho sobre registro de Empresas periodísticas y la Orden de siete de febrero de mil novecientos sesenta y tres sobre acreditación de Informadores extranjeros, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

ANEXO V: Infome de la DGP de 10 de enero de 1964

NOTA-INFORME SOBRE EL REGISTRO DE EMPRESAS PERIODISTICAS

ANTECEDENTES:

- 1.- Por Orden, acordada en Consejo de Ministros, de 10 de enero de 1.958, se establecían los requisitos para la concesión de cupos de papel a las empresas periodísticas.
 - En sus artículos 4º y 5º se creaba el Registro de Empresas Periodísticas y se fijaban los requisitos de inscripción en él.
 - La disposición transitoria señalaba que lo dispuesto en tal Orden no era de aplicación a las Empresas que publiquen un número no inferior a cinco periódicos diarios, para las cuales se establecerían normas específicas. (Normas que no han sido dictadas).
- 2.- Otras disposiciones (Orden de 4 de octubre de 1958; Orden comunicada de 30 de diciembre de 1958 y Resolución de 6 de diciembre de 1958) no tienen carácter sustantivo y se refieren tan sólo al funcionamiento del Registro y fijación de plazos para inscripciones.
- 3.- Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de mayo de 1962, se suprimen, a partir de 1º de abril de 1962, los cupos de papel y se establece el régimen de libertad de precios para todos los suministradores de papel. La protección se articula a base de un régimen de compensación, con prima fija por kilo consumido hasta un máximo de toneladas primadas que al efecto se determina.
- 4.- Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963 (corregida en B.O.E. de 6 de abril) se deroga, entre otras disposiciones, la Orden antes citada de 10 de enero de 1958, salvo los artículos 4º y 5º referentes al Registro de Empresas Periodísticas.

OBSERVACIONES

- a) Como la Orden de 10 de enero de 1958, estableció el Registro de Empresas para las que desearan acogerse a los beneficios de "cupos de papel", al desaparecer éstos por Orden de 15 de marzo de 1963, debe acomodarse dicho precepto a la nueva situación de "compensaciones".- Es un problema puramente formal.
- b) Sobre ámbito y obligatoriedad de inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas.
 1. Según la Orden de 10 de enero de 1958 sólo alcanza tal obligación a las Empresas de periódicos "que deseen obtener los beneficios de las compensaciones por papel prensa" y que editen menos de cinco periódicos diarios.
 2. Al derogarse la expresada disposición, por Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963, y subsistir vigentes únicamente los artículos 4º y 5º, debe entenderse que ha desaparecido también la excepción que afectaba a las Empresas con 5 ó más periódicos y que, por tanto, todas las empresas periodísticas que deseen percibir compensaciones por

.../...

.../...

papel prensa deben cubrir los requisitos del Registro.

3. No obstante, sería conveniente clarificar la situación al - propio tiempo que se atiende a lo señalado en el anterior - apartado a), mediante una disposición adecuada y refundido-
ra.
- c) Sobre posibilidad de ampliar el Registro a todas las Empresas - Periodísticas -no solo de diarios- y a las Agencias informativas
 1. Se trata de una ampliación con carácter de obligatoriedad en la inscripción.
 2. Ha de tenerse en cuenta que hoy la inscripción no es obliga-
toria por esencia ni para las Empresas de diarios, si pres-
cinden del beneficio de la "compensación".
 3. Teóricamente, pues, el Registro no es una medida restrictiva
ni imperativa, aunque en la práctica, por razones económicas,
se consigue que lo sea.
 4. Por tanto, si a través de la compensación tiene vigencia el -
Registro ¿cómo lograr que éste tenga virtualidad para las em-
presas que no reciben compensación, (revistas, Agencias infor-
mativas, etc., etc.)?
 5. La situación planteada aboca a dos vías de solución:
 - a) Conceder compensación a las restantes Empresas, --
siempre que se inscriban en el Registro.
Siempre quedarían al margen aquellas que prescin-
diesen de la ayuda económica que la compensación supone.
 - b) Desligar la obligatoriedad de inscripción en el Re-
gistro del derecho a recibir compensación y ampliar aquella
a todas las Empresas. Aparece más evidente que en el caso an-
terior el alcance político de la medida, que exige meditación
y decisión de la Superioridad ponderando los inconvenientes.
En cualquier caso, se trataría de una medida res-
trictiva de la libertad que aconsejaría, por razón de la mate-
ria y por su importancia y alcance una disposición de rango -
de Ley o Decreto.
Lo más indicado y oportuno sería, posiblemente, a--
bordar el tema en su conjunto y con toda su problemática en -
la próxima Ley de Información.

Madrid, 10 de enero 1.964.

- - - - -

ANEXO VI: Circular 53707 de 12 de mayo de 1967



MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
DELEGACIÓN GENERAL DE PRENSA

Nº 53.707

Ilmo. Sr.:

Con escrito circular de fecha 6 de los corrientes, se remitió a esa Delegación Provincial la relación de publicaciones periódicas impresas en esa Provincia, cuyas empresas editoras han solicitado la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas.

La presente instrucción se propone establecer normas que permitan asegurar una aplicación uniforme del Derecho transitorio establecido en las disposiciones vigentes, en especial, por cuanto se refiere a los efectos de caducidad legalmente establecidos y su repercusión en la vida de gran número de publicaciones periódicas.

RESERVADO

PARA EXCLUSIVA
DE USO DE LA DE-
LEGACION.

La estricta aplicación con carácter universal de la anterior norma supondría la inmediata suspensión de gran número de publicaciones hasta tanto, concluida la tramitación de los oportunos expedientes, necesariamente dilatada, se pudiese a verificar la definitiva inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas, con la inevitable secuela de perjuicios de toda índole a Empresas y público.

En evitación de estos perjuicios en la aplicación del aludido derecho transitorio, deben seguirse las siguientes indicaciones:

I.- PUBLICACIONES CUYA EMPRESA SE HALLA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO.

Debe admitirse el consiguiente depósito y suscribirse en todo a lo dispuesto en la Ley de Prensa e Imprenta y demás normas de desarrollo.

II.- PUBLICACIONES AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA, CUYA EMPRESA NO SE HALLA TODAVÍA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PERIODÍSTICAS, SI BIEN SE HA PRESENTADO LA OPORTUNA SOLICITUD PARA ELLO.

Si bien es evidente que en la Ley de Prensa y en la disposición transitoria del Decreto 749/66, de 31 de marzo, se habla de inscripción en el plazo de un año -lo que parece excluir la "solicitud de inscripción"- se entiende debe considerarse un doble supuesto:

a) Publicaciones ya autorizadas y cuya inscripción ha sido solicitada por el mismo titular a quien establecieron las.

Deben ser admitidas a trámite normal. La aplicación de este criterio produciría graves perturbaciones de toda índole, por lo que puede admitirse la posibilidad de que la inscripción se produzca en el plazo exacto de un año, por el titular de la publicación a la Administración.



MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

- 2 -

b) Publicaciones ya autorizadas, cuya inscripción se solicite por titular distinto.

Aquí se entiende que se trata plenamente de nueva inscripción y entra en juego lo previsto en el apartado 3), si el primitivo titular no ha solicitado en tiempo la oportuna autorización de modificación de la propiedad.

III.- PUBLICACIONES NO AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA AUN CUANDO SU EMPRESA TENGA EN TRAMITE EL OPORTUNO EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

Las publicaciones que se encuentren en tal situación no pueden aparecer, en tanto no se produzca la aludida inscripción. La infracción de las normas vigentes al respecto debe llevar aparejadas las consecuencias que en las mismas se previenen, tras la consulta que también debe formularse a este Organismo.

IV.- PUBLICACIONES SIN AUTORIZACIÓN ANTERIOR A LA LEY DE PRENSA Y CUYAS EMPRESAS NO HAN INICIADO SIQUERA EL EXPEDIENTE PARA LA REPETIDA INSCRIPCIÓN.

A este supuesto son de aplicar estrictamente los mismos criterios del apartado precedente, agravados dadas las circunstancias concurrentes.

V.- PUBLICACIONES DE LA IGLESIA.

A excepción de las aludidas en el artículo 1º del Decreto 2.246/66, de 23 de julio, y respecto de las cuales se ha hecho expresa declaración nominal a tenor de comunicaciones que obran en la respectiva Delegación, todas las demás publicaciones de la Iglesia requieren la previa inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas aun cuando en la tramitación del expediente se tengan en cuenta, en su caso, las exenciones que puedan concederse a la vista del informe-propuesta de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.

Por ello, resulta de aplicación paralela cuanto ha quedado expuesto en los epígrafes que anteceden.

No obstante la distinta casuística que se plantee sobre estas publicaciones de la Iglesia debe resolverse con especial prudencia y ser objeto de consulta las decisiones que al respecto deban adoptarse.

Las dudas que presente la interpretación de estas instrucciones en su aplicación en supuestos concretos, serán planteadas.



MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

- 3 -

das para su resolución, a esta Dirección General por el medio más rápido -incluso telex o teléfono- de que se disponga.

Lo que para su conocimiento y debido cumplimiento, comunico a V.I. interesándole acuse recibo de esta Circular.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, a 12 de mayo de 1.967.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRENSA,

ILMO.SR. DELEGADO PROVINCIAL DE ESTE DEPARTAMENTO EN

ANEXO VII: Notas a la Ley de Prensa e Imprenta

NOTAS A LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA

ARTICULO 2º.- LIMITACIONES DE DERECHO

El artículo va más allá de todo lo presumible en libertad de expresión. Analicemos las limitaciones.

a) El respeto a la moral y a la verdad. Esta claro que esta limitación puede encontrarse en cualquier sistema - por liberal que sea. Por otra parte su enunciación abstracta lo hace difícilmente utilizable. Los casos de falsedad manifiesta o comprobada caen evidentemente dentro de la limitación, pero el falseamiento parcial o la "verdad modificada" darán problemas que para el poder judicial serán siempre difíciles de calificar.

En cuanto al respeto a la moral parece entenderse en el sentido de una "moral natural", también difícil de precisar. También se echa de menos alguna concreción como "moral católica" o "moral cristiana".

En cualquier forma esta limitación será siempre - más proclamadora de un principio que utilizable para una acción coercitiva positiva.

b) El acatamiento del orden constitucional vigente

Tampoco puede ^{sorprender} ~~responder~~ esta limitación que sirve de base a todas las constituciones políticas del mundo cualquiera que sea su signo.

Téngase en cuenta que el acatamiento al orden constitucional no presupone la ausencia de crítica de este orden y la petición de su reforma por las vías legales. Mucho menos la crítica a la gestión política que acompaña a todo ordenamiento constitucional. El ser la constitución política -

española abierta por contener dentro de sí las posibilidades de su reforma, la limitación de libertad de expresión que se estableció es plenamente liberal y no supone en modo alguno una prohibición de crítica del Régimen ni siquiera en sus bases más fundamentales.

c) Las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior.

Se trata de una garantía de la sociedad a la que nadie puede poner un pero. En primer lugar abunda en las constituciones más liberales. Es evidente la limitación más utilizable desde un punto de vista político para una acción coercitiva. De todas maneras su utilización tampoco queda al arbitrio gubernamental. En primer lugar porque es el poder judicial -según la Ley- el que en definitiva ha de decidir si se ha transgredido la limitación. En segundo lugar, porque las instituciones que ampara no quedan en la absoluta impunidad frente a la opinión.

¿El artículo de F. Arenal violaba una exigencia de la defensa nacional? Es seguro que un juez -que no tiene por qué ser un político- diría que no. Hay que esperar pues, críticas y aún ataques al Ejército, a la Policía y a otras instituciones. Esta limitación, que es la que habrá de ser más empleada, también dará el mayor número de problemas.

d) La reserva debida a la acción del Gobierno

Como toda reserva impone una expectativa, por lo que es sólo una limitación temporal. Se entiende que la acción del Gobierno puede ser criticada una vez hecha pública de modo expreso o evidente. Impone una pasajera discreción, pero no limita realmente el derecho a la libertad de

- 3 -

expresión.

e) La independencia de los Tribunales en la aplicación de las Leyes y

f) La salvaguarda de la intimidad y el honor privado.

Nada que señalar en cuanto a estas limitaciones - de carácter ético y no político.

- - - - -

ARTICULO 3º.- PROHIBICION DE CENSURA

Se entiende que en materia de Prensa o Imprenta aunque el texto no lo dice y tal vez debiera precisarlo. En una declaración de tal importancia toda precisión es poca.

La declaración es tan tajante y concreta que no es fácil encontrar superación en la legislación extranjera. No es un mero enunciado del principio de la libertad, sino una expresa y concreta prohibición a la Administración de que lo coarte sin una causa excepcional proclamada por la Ley.

Creo que ni las Cortes de Cadiz han ido tan lejos.

- - - - -

ARTICULO 4º.- CONSULTA VOLUNTARIA

Atención a que la Administración podrá ser voluntariamente consultada ... "tanto por el autor" como por la persona responsable de la difusión.

Seguramente se ha pensado en los libros, pero en los periódicos las perspectivas que abre la frase son insospechadas.

La relación directa del autor de un artículo con la Consulta, sin intervención práctica del director de la publicación es una novedad que no deja de presentar algún inconveniente:

En primer lugar la proliferación de consultantes que, sin pasar por el filtro normal de la Dirección del periódico, pueden volcarse sobre la Dirección General de Prensa.

En segundo lugar no creo que a los Directores les agrade que la Administración conozca la obra de sus colaboradores antes que ellos. Y tendrán razón.

Además algún director puede verse tentado a desviar a la Administración a los "lectores espontáneos", con lo que la Consulta Voluntaria se desvirtuaría.

¿Va a aparecer en el mercado periodístico el artículo "ya aprobado por la censura".

Pero más grave aún es el hecho de que esta relación directa obliga a la Administración a enfrentarse, para donde gar, con personas que al no tener la condición de directores, ni aún de periodistas, están libres de toda responsabilidad.

- 2 -

¿Se ha pensado en el arma que se pone en las manos de un personaje de la oposición al responderle no a cierto número de ~~textos~~ de modo directo y expreso?.

Creo que hay que estar alerta ante esta cuestión.

- - - - -

ARTICULO 5º.- PROTECCION A LA LIBERTAD

Naturalmente la Administración se compromete --- aquí a tutelar y proteger las libertades que la Ley pro--- clama. No podrá ser de otra manera.

Pero piénsese, por favor, en las reacciones ante una crítica de gobernadores, alcaldes, capitanes generales, arzobispos y ministros, que también son, por cierto, parte de la Administración.

Esta sí que es la batalla dura que el Director General de Prensa y el Ministro de Información y Turismo se va a ver obligados a librar. Claro está que por muy dura que sea la batalla no hay por qué perderla.

ARTICULO 7º.- DERECHO A LA INFORMACION PUBLICA

La proclamación del deber de informar por parte de la Administración y las Corporaciones públicas es importante. La del deber de hacerlo sin discriminación a todas las publicaciones lo es aún más. De todas maneras es cuestión a reglamentar, como la Ley señala, ya que lógicamente es exigible en reciprocidad una cierta responsabilidad por parte de las publicaciones.

¡OJO! A unos de los que alcanza el deber de no discriminar es a nosotros. Esto replantea nuestras relaciones con E.F.E.

- - - - -

ARTICULO 12.- DEPOSITO

Nos hallamos aquí ante el sistema previsto de control gubernativo de la prensa. Hay que considerar este artículo conjuntamente con el 64, que establece el procedimiento de secuestro en caso de presunción de delito.

Hay dificultades de aplicación que saltan rápidamente a la vista.

El conocimiento de una presunción de delito es consecuencia del depósito de los ejemplares que habrán de ser revisados por un funcionario de la Administración.

En el caso de un diario, el depósito se hará como mínimo una hora antes de su difusión. Es dudoso que pueda hacerse con un plazo más amplio, porque no estará tirado. (En un diario de la mañana la hora del depósito será lo más pronto a las cinco de la mañana)

En una hora el funcionario deberá leer todo el periódico decidir si hay motivo de secuestro y secuestrar. Si no es tan rápido el periódico estará ya en la calle, -- con lo que, sin duda, el secuestro ganará en espectacularidad, pero políticamente será un desastre.

En caso de que el secuestro se lleve a cabo en la Imprenta, el Juez --a esas horas será sin duda el Juez de guardia-- deberá decidir si en definitiva el diario sale o no sale ese día.

¿Es viable todo este procedimiento?.

Este control gubernativo puede quedar reducido a la nada por dificultades prácticas de aplicación.

- 2 -

Y este es el único control gubernativo que la Ley establece, todos los demás, sobre la difusión de los periódicos, lo son a través de los Tribunales de Justicia.

ARTICULO 17.- CAPITAL ESPAÑOL

a) ¿Que va a pasar con las revistas que tienen en la actualidad capital extranjero? (sobre todo las turísticas, económicas, etc.)

Posiblemente se buscarán hombres de paja que detenten nominalmente las acciones y estén ligados al verdadero propietario por un contrato privado que el ministerio desconozca.

b) ¿Como evitar que los accionistas españoles admitan préstamos de capital extranjero con la garantía de sus acciones? Con ello de hecho se vulneraría lo liquidado.

Habría que reglamentar esta difícil cuestión.

ARTICULO 25.- VIGILANCIA DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Es de esperar que en las Cortes se organice un buen debate sobre este artículo.

Las empresas pueden decir que sí a todo para concentrar sus tiros sobre este artículo fundamental. Pero es esencial mantener la facultad de inspección e intervención que el artículo señala.

Quizá fuera oportuno "trabajar" desde ahora al suficiente número de procuradores para que las cosas vayan bien.

ARTICULOS 26, 27 y 28.- INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS

Me parece el instrumento gubernativo de control de las publicaciones mas eficaz en la práctica. Permite el juego político y el poder retrasar indefinidamente la aparición de una publicación sin necesidad de prohibirla. Precisamente por eso necesita ser manejado con mucha inteligencia y finura -- (!todos los tratados de "gramática parda" van a ser necesarios!).

Las causas de denegación que expresamente señala el artículo 29 no bastan a mi juicio para ese difícil manejo. Pero los intríngulis burocráticos pueden hacer el resto. Aquí van a hacer falta verdaderos artistas en el arte de demorar un expediente de inscripción, cuando sea necesario. Este arte ya lo descubrió Felipe II.

ARTICULO 33 .- PROFESION PERIODISTICA Y TITULO PROFESIONAL.

Tal como está redactado el texto parece indicar que ha de promulgarse un nuevo Estatuto de la Profesión periodística ("Las normas relativas a la profesión... se-rán establecidas por Decreto etc.).

El inconveniente se salvaría sin mas que cambiar el serán (futuro, sin genero de duda que supone una obligación posterior a la Ley) por han de ser, forma más elástica e indefinida que permite recoger como válido un acto ya pretérito.

Lo mismo vale para el establecerá del artículo 35, párrafo segundo, sobre las obligaciones del Director. Debía decir ha de establecer.

ARTICULO 40.- DESIGNACION (DIRECTORES)

Atención. El Estatuto autoriza en algunos casos la designación de directores no periodistas en publicaciones que allí se especifican. La Ley no hace excepción. Hay una contradicción jurídica que es preciso estudiar.

CAPITULO VI.- AGENCIAS INFORMATIVAS

Atención . No se proclama en ningún sitio la obligación de las Agencias a difundir la Información Pública. El artículo 6 habla sólo de "publicaciones periódicas".

¿Significa esto que la Dirección General de Prensa ha de remitir sus notas oficiales directamente a los 104 diarios y otras tantas revistas de información general, con el consiguiente retraso de difusión?

Es una omisión a estudiar. La vaga alusión a "la misma responsabilidad" que las empresas periodísticas, que proclama el artículo 48, puede no interpretarse como las mismas obligaciones.

ANEXO VIII: Informes sobre Premsa Catalana, S.A

DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO



MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO
126400 SEP -667
REGISTRO GENERAL
ENTRADA

4 SEP. 1967

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
DELEGACION PROVINCIAL BARCELONA
SALIDA N.º 6733
Día ____ Mes ____ Año 19__

De: DELEGADO PROVINCIAL

Ciudad,
fecha
y ref.º

Barcelona, 04 de Septiembre de 1967 /

ILMO. SR.:

En contestación a su escrito del pasado 22 de Agosto, adjunto acompaño a V.I. informe sobre las personas - que han constituido la entidad "PRENSA CATALANA, S.A., - EMPRESA PERIODISTICA", en trámite de inscripción en el - Registro de Empresas Periodísticas como Editora del semanario "AVUI".

Dios guarde a V.I. muchos años.

EL DELEGADO, *pa*



misfander

A:

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA - MADRID

824-



DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

COPIA
DE RESPUESTA
O TRAMITE (1)

De: **DELEGADO PROVINCIAL**

Ciudad,
fecha
y ref.ª

Barcelona, a 4 de **Septiembre** de **1967** /

ILMO. SR.:

En contestación a su escrito del pasado 22 de Agosto, adjunto acompaño a V.I. informe sobre las personas que han constituido la entidad "PRENSA CATALANA, S.A., EMPRESA PERIODISTICA", en trámite de inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas como Editora del semanario "AVUI".

Dios guarde a V.I. muchos años.

EL DELEGADO, *pe*



A: **ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA - MADRID**

(1) Válida para respuestas generales de «enterados», «toma de razón», «acuse de recibo» o similares.

(Véase dorso.)

NOTA INFORMATIVA PARA EL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA

Asunto: Informe sobre las personas que forman la entidad "PREMSA CATALANA, S.A., EMPRESA PERIODISTICA". (Semanario "AVUI").

✓ JOAQUIN MALUQUER SOSTRES. - Nacido en Barcelona el 11 de Diciembre de 1.930, casado, Abogado, hijo de Juan y María Mercedes, con domicilio en esta Capital, -- calle Córcega, 413, 2º, 2ª.

[De la información practicada resulta que es persona de buena conducta moral, pública y privada.

[Políticamente no se le conocen en la actualidad actividades de ninguna clase, si bien puede considerársele como persona de ideas catalanistas.

[En el año 1.951 se le instruyeron diligencias y fué puesto a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, por ser uno de los fundadores y colaboradores de la revista "FORUM", de tipo catalano-separatista y clandestina.

[Es colaborador ocasional del diario "El Noticiero Universal", en el que publica artículos de información económica y financiera, que no ofrecen nada destacado que señalar.

✓ FRANCISCO UBACH MIRAVITLLES. - Nacido en Avinió (Barcelona) el 7 de Enero de 1.928, casado, Abogado, hijo de Amadeo y Carmen, con domicilio en esta Ciudad, - Avda. José Antonio, 798, puerta 38.

[Según informes obtenidos, observa actualmente buena conducta moral, pública y privada.

[Políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase, pero por su forma de ser, las personas con quién se relaciona y la manera de expresarse (ya que todo lo que escribe lo hace en catalán, incluso cuando va dirigido al Ayuntamiento, como son las hojas de empadronamiento), puede ser considerado como persona de ideas marcadamente catalanistas.

[Ejerce la Abogacía estando considerado profesionalmente. Su posición económica es buena.

✓ JORGE MALUQUER BONET. - Nacido en Barcelona el 15 de Mayo de 1.935, casado, Industrial, hijo de Manuel y Ana, con domicilio en esta Ciudad, Avda. República Argentina, 162, 6º 2ª.

[Es persona que observa buena conducta moral, pública y privada.

[Políticamente puede considerársele persona de ideas liberales y un tanto catalanistas y, desde luego, contrario al Régimen, como lo indica su procesamiento en el año 1.957, por participar en algaradas estudiantiles, distinguiéndose notablemente en ellas.

[Actualmente y desde que se convirtió en dueño de la Empresa "MALUQUER BONET, S.A.", dedicada a la fabricación de esencias y productos químicos, con motivo de la muerte de su padre, se ha hecho persona más responsable y se le considera más distanciado de toda clase de actividades políticas, si bien su carácter catalanista, aún perdura en él.

Goza de buen concepto en los medios industriales en que se desenvuelve y de una muy saneada posición económica.

X MARIA DEL CARMEN ALMEDA PETITPIERRE. - Nacida en Vich (Barcelona), el 13 - de Agosto de 1.936, casada, sus labores, hija de Ramón y Narcisa, domiciliada - en esta Ciudad, calle Milanésado, 20, 3º3ª, es persona que actualmente observa buena conducta moral, pública y privada.

Políticamente, no se le conocen actividades de ninguna clase, pero puede considerársela como persona de ideas catalanistas avanzadas.

Está casada con JOSE ESPART TICO, nacido en Barcelona el 22.12.1927, hijo de Mariano y Mercedes, de filiación catalano-separatista y contrario al Régimen.

Tiene un hermano, llamado JOSE MARTA, de la misma filiación política, y al que se detuvo con motivo de la manifestación por el aniversario de Casanovas.

Goza de muy buena posición económica.

Y JUAN MUNDURU CASADIZUNT. - Nacido en Barcelona el 1-9-1935, soltero, Artista y Pintor, hijo de Emilio y Adela, con domicilio en esta Capital, calle Porvenir, 5, pral. 2ª.

Es persona que observa en la actualidad buena conducta en todos los aspectos. Políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase, estando considerado como de ideas ligeramente catalanistas.

Goza de buena conceptualización entre su vecindario y su situación económica es bastante buena.

Y FRANCISCO SALVA MIQUEL. - Nacido en Barcelona, el 18.5.1919, soltero, Periodista, hijo de José y María, con domicilio en esta Ciudad, Vía Layetana, 95, 2º, 1ª.

Es persona de buena conducta moral, pública y privada, al que, política - mente no se le conocen actividades de ninguna clase en la actualidad, si bien - está considerado como regionalista moderado.

Antiguamente militaba en la Comunión Tradicionalista, donde estaba considerado, siendo ex-combatiente y ex-cautivo.

Posee la Medalla de Plata de la Ciudad de Barcelona y es colaborador de - varios periódicos, entre ellos "Solidaridad Nacional" y "Hoja del Lunes".

X ANTONIO PADILLA BOLIVAR. - Nacido en Higuera de Calatrava (Jaén), el 1.10. 1.936, soltero, periodista, hijo de Antonio y María Anastasia, con domicilio en esta Ciudad, calle Siglo XX, 84, 3º.

Es persona de buena conducta en todos los aspectos.

Políticamente no se le conocen actividades de ninguna clase, estando considerado como indiferente al Régimen.

Es periodista, inscrito en el Registro Oficial con el número 3.522, siendo asimismo becario de la Diputación Provincial, y del Ministerio de Información y Turismo.

Barcelona, 4 de Septiembre de 1.967

Madrid, 17 de junio de 1.969

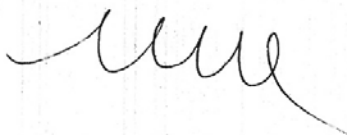
Ilmo. Sr. Don Manuel Ortiz Sánchez
Delegado Provincial de Información y Turismo en
B A R C E L O N A

Mi querido amigo:

Le remito fotocopia de la carta que ha dirigido a nuestro Ministro Don Jorge Maluquer, en relación con la inscripción de la Empresa periodística "Prensa Catalana, S.A." para la edición del semanario "Avui", sobre la que esa Delegación nos remitió en su día un informe confidencial de las personas que forman dicha entidad, del que también le acompaño fotocopia.

A fin de adoptar la resolución que proceda, que el tiempo transcurrido desde la solicitud hace ya necesaria, le pido que, considerando el aludido informe y tras cambiar impresiones con el Gobernador Civil sobre el asunto y conocer su parecer, me indique lo que estime debemos hacer en este caso.

Un abrazo de su buen amigo,



Manuel Jiménez Quílez.

MALUQUER

6-6-69

Avda. República Argentina, 162
BARCELONA - 6

EXCMO. SR. D. MANUEL FRAGA IRIBARNE

MINISTRO DE INFORMACION Y TURISMO.

MADRID.

Excelentísimo Señor:

Siendo Consejero Delegado de "Prensa Catalana S.A", me permito la libertad de dirigirme directamente a Ud. por los siguientes motivos:

El 17 de Marzo de 1.967 solicitamos el registro de empresa periodística para "Prensa Catalana, Empresa Periodística, Sociedad Anónima", constituida en 16 de Enero de 1.967, para la publicación del semanario de información "Avui".

Hasta la fecha (han transcurrido dos años y casi tres meses) no hemos recibido respuesta alguna a nuestra solicitud y ante gestiones hechas personalmente cerca de varios funcionarios de la Dirección General de Prensa hemos recibido tan solo evasivas.

Es por ello que me atrevo a solicitar de Ud. una decisión clara a n. solicitud de registro pues si bien sé el mucho trabajo y lo engorroso de los trámites en el departamento citado, sé que Ud. en su manera de proceder es claro y tajante y a Ud. acudo para despejar de una vez estos dos años largos de incertidumbre.

En el impreso de solicitud quizás nos vimos obligados a ser algo escuetos a la hora de describir motivos y enumerar propósitos, por ello no dejo de ofrecerme para las entrevistas personales que hagan falta en la firme convicción que habrían de servir para una decisión favorable en caso de que Ud. o la Dirección General de Prensa abrigasen alguna duda.

Quisiera que comprendiese que es algo doloroso para un grupo de amigos formados en la postguerra, con las mejores ansias constructivas de colaborar a una España mejor, sin que por ello hayan de abdicar - como creemos es el criterio de Ud. varias veces públicamente manifestado - ni de su lengua ni de sus tradiciones, se vean relegados en sus iniciativas por razones que no comprenden. No creemos que éste sea el pago de haber confiado en la Ley de Prensa que Ud. valientemente alentó. Confiado, repetimos, ante tantos escépticos a quienes nos dolería dar, a la postre, la razón.

Nuestras ilusiones - aparte de una lógica finalidad comercial - son ante la mediocridad y localismo de gran parte de n. prensa actual en lengua catalana, hacer un semanario informativo de mentalidad abierta interesado por toda la actualidad mundial, por toda la amplia gama de interés periodístico que ofrecen

MALUQUER

Avda. República Argentina, 162
BARCELONA - 6

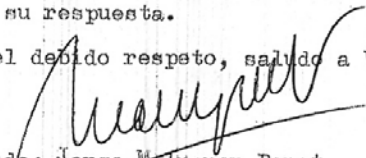
los hechos, las artes, el deporte, la divulgación científica, sin ningún interés en hacer tremendismo, forzar una sanción administrativa para aumentar la venta o tocar temas que no resulte adecuado tratar en un momento dado y por el interés general del país.

Hemos padecido y padecemos aún, la necesidad de que nuestra lengua materna se deslocalice y a la vez se despolitice. Que su uso normal haga que informaciones y comentarios puedan tener valor en sí mismos, no por el hecho de que estén o no escritos en catalán.

La trayectoria de las personas que formamos la sociedad aunque corta está llena de hechos constructivos. Personalmente Consejero Delegado y accionista mayoritario, no creo dar lugar a ninguna suspicacia por haber buscado siempre entendimiento entre todos los hombres de España. Desde 1956 pertenezco al Instituto de Estudios Hispánicos, he colaborado - cuando mi trabajo de empresario de una industria química me lo ha permitido - indistintamente en publicaciones en lengua castellana y catalana.

Créame que deseáramos que la autorización de "Avui" nos llegara de sus manos. Antes de Ud. el panorama general periodístico era desolador. Ud. ha abierto en los que nos sentimos jóvenes la esperanza que todo puede mejorar paso a paso, sin brusquedades. Por eso hemos confiado y hemos recurrido a Ud. Le agradecemos de antemano la atención que pueda prestar a este escrito y nos permitimos esperar su respuesta.

Con el debido respeto, saludo a V.E.


firmado: Jorge Maluquer Bonet
Consejero Delegado de
"Premsa Catalana, Empresa Periodística, Sociedad Anónima".

SERVICIOS INFORMATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Fecha 16-7-73 Hora 21,55 (Tp.) Ref. N.º AGE/mef. 2203

Empresas. Archivo en "AVUI"

NOTA INFORMATIVA

Asunto: Acción separatista.

Fuente: Delegado del M.I.T. en Valencia.

824. Sin que pueda especificar demasiado ni aún ofrecer su plena confirmación, me han llegado noticias referidas a la actividad desplegada en Valencia por elementos catalanistas y catalanizantes en busca de apoyo material y moral para un supuesto diario en lengua catalana -"Avui"- que, en base a su difusión por toda el área que dichos sectores denominan "... gran cataluña...", dicen que se pretende publicar en Barcelona.

No poseo demasiados detalles sobre el asunto citado, pero sí los suficientes para poder asegurar una observación y vigilancia cuidadosa por parte de esta Delegación y que se procurará tener debidamente informada a la superioridad.

En principio esta Delegación entiende no proceder la adopción de medida alguna salvo la preventiva ya citada.



MINISTERIO
DE
INFORMACION Y TURISMO

COPIA
DE
ARCHIVO

De:

Subsecretaría :

Dirección General :

Sección :

Negociado :

1 REGIMEN JURIDICO DE LA PRENSA.

2

3

4 EMPRESAS.

5

6

7

Fecha
y
ref.ª

15 Septiembre 1975. Ex.- 824.

Madrid a de de

MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO

059213 SEP 1975

REGISTRO GENERAL
SALIDA

Ilmo. Señor.:

Don Ramón Fuster Rabés, ha presentado directamente en este Centro Directivo, solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas, en nombre y representación de la Compañía Mercantil PRENSA CATALANA, S.A. EMPRESA PERIODISTICA, para la edición de la publicación periódica diaria titulada "AVUI".

De acuerdo con las normas emanadas de esta Dirección General, se interesa de V.I. remita informe acerca de las personas que componen dicha Sociedad, así como del Director de la publicación, para lo cual, adjunto se remite fotocopia del correspondiente expediente de solicitud de inscripción. Asimismo, deberá V.I. enviar su parecer acerca de la procedencia de acceder o no a la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas de la mencionada Sociedad, como editora de la publicación de referencia.

La fotocopia de la documentación que se adjunta puede quedar archivada como antecedente en esa Delegación Provincial.

Lo que se comunica a V.I. para su conocimiento y debido cumplimiento.

Dios guarde a V.I. muchos años.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN JURIDICO DE LA PRENSA,



A: Ilmo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo en BARCELONA.



MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

Fecha: 26-9-75

RESERVADO

N. 2217

De JEFE DEL GABINETE DE ENLACE

A ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL REGIMEN JURIDICO DE PRENSA.

ASUNTO:

En contestación a la nota nº 824 de fecha 5 de los corrientes, solicitando datos del Director de la revista "AVUI" y de sus accionistas, se acompañan los correspondientes a JAIME VILALTA GONZALEZ, JOSE MA PUIG SALELLAS, RAMON FUSTER RABES, JOSE LUIS VIROS GALTIER, JORGE MALLOQUER BONET y JOSE ESPAR TICO, significando que el resto carece de los mismos.



Fdº: Ricardo Herrera Esteban

IMPORTANTE: Reférase a un solo asunto.



DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO



De:

SECCION DE PRENSA

COPIA
DE RESPUESTA
O TRAMITE (1)

Ciudad,
fecha
y ref.º

Barcelona a 11 de noviembre de 1975

RESERVADO

ILMO. SR.:

Como continuación a nuestro escrito de fecha 26 de octubre último, adjunto tengo el honor de remitir a V.I. escrito que nos manda la Jefatura Superior de Policía, de unos informes Político-sociales de solicitantes de la publicación "AVUI".

A la vista de los antecedentes desfavorables esta Delegación estima que no debe accederse a lo solicitado.

No obstante V.I. con superior criterio resolverá.

Dios guarde a V.I. muchos años.

EL DELEGADO PROVINCIAL,

A:

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO JURIDICO DE LA PRENSA.- MADRID.-

(1) Válida para respuestas generales de «enterado», «toma de razón», «acuse de recibo» o similares.

(Véase dorso.)

JAIME VILALTA GONZALEZ

Los únicos datos existentes en esta Jefatura le señalan al epigrafiado como persona de ideas socialistas y catalanistas.

Madrid, 24 de Sepbre. de 1.975

JOSE MARIA PUIG SALELLAS

El día 4-11-73 y en la notaría del Sr. PUIG SALELLAS, sita en Barcelona, Avda. del Generalísimo Franco 463 bis, se celebró una reunión a la que se cree asistieron los directivos de la entidad editorialista "Prensa Catalana S.A." en la que se explico el proyecto de petición de un diario en catalán que tratan se titule "AVUI".

Madrid, 24 de Sepbre. 1.975

RAMON FUSTER RABES

Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Cataluña y Baleares.

En octubre de 1.973 figuraba entre los firmantes de un escrito dirigido al Ministro de Información y Turismo sobre supuestos malos tratos de la Policía a los detenidos con motivo de las huelgas de Asturias.

En diciembre de 1.969 aparece como uno de los componentes del órgano rector del Omnium Cultural.

Madrid, 24 de Sepbre. de 1.975

JOSE LUIS VIROS GALTIER

Abogado, h/ José y Sofia, n/ de Barcelona, y con d/
en Pº. San Gervasio, 26.

En febrero de 1.969 figuraba como ayudante de la Facultad de Derecho, habiendo sido sancionado con separación durante dos años, de la función docente por indisciplina académica.

Está considerado como catalano, separatista y socialista.

Madrid, 24 de Sepbre. 1.975

JORGE MALUQUER BONET

Nació en Barcelona el 15-5-35, casado del comercio, h/ Manuel y Ana y con d/ en Avda. República Argentina, 62, 6º. 2º. Barcelona.

Inició su actividad política en la Facultad de Derecho, distinguiéndose en noviembre de 1.956 en la revuelta - estudiantil con la redacción, confección y reparto de hojas clandestinas, asistiendo a todas las reuniones que se celebraron y culminando en los sucesos de febrero de 1.957 en - que fué detenido con ocasión de la huelga de usuarios de - tranvías. Pagó una multa de cinco mil pesetas decretada por el Gobernador Civil y otra de dos mil por la Autoridad judicial.

Persona de ideas catalanistas ya fué sancionado por la Autoridad académica cuando cursaba quinto de Derecho con la expulsión del distrito universitario durante el curso 57-58.

Está considerado totalmente enemigo del Régimen y en contacto con personas desafectas tanto de Barcelona como del extranjero.

.../...

El 22-1-56 fué detenido por escándalo en el teatro Comedia de Barcelona.

Se sabe que confecciono hojas clandestinas en multicopista de las escuelas Virtelia. También confeccionó otras denominadas "Libertad" y en su época de estudiante desarrolló bastante actividad política relacionandose con la mayoría de los activistas universitarios.

Madrid, 24 de Sepbre. 1.975

JOSE ESPAR TICO

Nacido el 22-12-27 en Barcelona, h/ Mariano y Mercedes, casado, peletero y con d/ en dicha capital, c/ Milanésado, 20.

Pretende ser Consejero delegado de la entidad en proyecto "Prensa Catalana S.A.". Se trata de persona de antecedentes se paratistas y considerado también como demócrata cristiano.

El citado que también debe ser abogado, aparece el 29-3-68, como directivo de la productora discográfica del cantante - JUAN MANUEL SERRAT.

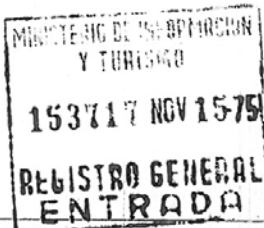
El 31-5-71 fué puesto a disposición judicial como supuesto asistente a la reunión en la que trataban de organizar - la Asamblea de Cataluña.

El citado difundió en mayo de 1.973 una circular en la que se anunciaba el proyecto de financiar un diario en catalán para cuyo fines trataban de conseguir un capital de cuarenta millones de pesetas, por medio de una Emisión de Cuentas, en dos series, blanca y azul, teniendo previsto hacer una tirada diaria de sesenta mil ejemplares. Estos datos son de mayo de 1.973.

Madrid, 24 de Sepbre. 1.975



DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO



De: SECCION DE PRENSA

Ciudad, fecha y ref.º Barcelona, a 11 de noviembre de 1975

RESERVADO

ILMO. SR.:

Como continuación a nuestro escrito de fecha 26 de octubre último, adjunto tengo el honor de remitir a V.I. escrito que nos manda la Jefatura Superior de Policía, de unos informes Político-sociales de solicitantes de la publicación "AVUI".

A la vista de los antecedentes desfavorables esta Delegación estima que no debe accederse a lo solicitado.

No obstante V.I. con superior criterio resolverá.

Dios guarde a V.I. muchos años.



DELEGADO PROVINCIAL,

[Firma manuscrita]

A:

ILMO. SR.: DIRECTOR GENERAL DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRENSA.- MADRID.-



JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA
DE BARCELONA

Brigda.Reg.Inv.Social

Núm. 6453

REGISTRO
Paseo 574
Sección Rec. Cultural
Trámite

MINISTERIO
REGISTRO
DELEGA
20477

ILMO. SEÑOR.

En contestación a lo interesado en su escrito nº 20715 de fecha 26 de septiembre pasado, me honro en participar a V.I. que, Ramón FUSTLER RABES, nacido el 17-3-16 en Bell-Lloch (Lerida), hijo de Ramón y Josefa, casado, Licenciado en Filosofía y Letras, con domicilio en esta Ciudad, calle Collicerola nº 39, 1º, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Politicamente está considerado como de ideas catalanistas y desafecto al Régimen, conociendosele su ideología en esta Brigada a través de diversas notas que indican su asistencia a Asambleas y reuniones de este matiz, destacando entre todas ellas una de 3-4-71, en la que se indica que celebraba reuniones sin autorización gubernativa en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, reuniones que tenían un marcado matiz político.

José Mª CADENA CATALAN, nacido el 6-9-35 en Barcelona, hijo de José Mª y María Luisa, periodista, casado, con domicilio en esta Capital, calle Consejo de Ciento nº 474 bis, 5º, D, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Politicamente, igual que el anterior, está considerado como de ideas catalanistas en contraposición con el proceder del actual Régimen.

Está considerado como periodista muy competente, aunque sus compañeros le achacan un carácter malhumorado.

José Mª LUIG SALLILLAS, nacido el 12-2-24 en Gerona, hijo de Ignacio y Concepción, casado, notario, con domicilio en esta Capital, calle Paseo de Bonanova nº 63, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada, politicamente está considerado lo mismo que los anteriores.

José ESPAR TICO, nacido el 20-12-27 en Barcelona, hijo de Mariano y Mercedes, casado, abogado, con domicilio en esta Capital, calle Milanesado nº 20, 3º, 2ª, es persona que observa buena conducta moral, pública y privada. Politicamente está considerado igual que los anteriores.

En los Archivos de esta Jefatura Superior, consta entre otras notas, que el 3-5-71, en diligencias instruidas en esta Brigada, pasó a disposición Judicial como supuesto asistente a una reunión ilegal en la que trataban de organizar una titulada "Asamblea General de Cataluña".

Dios guarde a V.I. muchos años.
Barcelona, 6 de noviembre de 1.975

EL JEFE SUPERIOR.

ILMO. SEÑOR. DELEGADO PROVINCIAL DE INFORMACION Y TURISMO.



CIUDAD



MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
DIRECCION GENERAL DE ~~REGIMEN~~ REGIMEN JURIDICO DE LA PRENSA,

Sección de Empresas
Expte. núm. 824.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PERIODISTICAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.º del artículo 27 de la Ley 14/1966, de Prensa e Imprenta, de 18 de marzo y en el Decreto 749/1966, de 31 de marzo, por los que se regula la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas, se hace pública la solicitud de inscripción en dicho Registro de la Empresa PRENSA CATALANA, S.A., EMPRESA PERIODISTICA.

a fin de que los que se consideren interesados puedan examinar en las oficinas del Registro de la Dirección General de Prensa, Avda. del Generalísimo, 39, planta 7.ª, durante el plazo de 15 días hábiles, a contar de la publicación de este anuncio, cuantos datos y documentos del expediente estimen conveniente conocer.

EMPRESA CUYA INSCRIPCION SE SOLICITA: PRENSA CATALANA, S.A., EM
PRESA PERIODISTICA.

DOMICILIO: Avda. República Argentina núm. 162.- BARCELONA.

Consejo de Administración: Presidente: Don Ramón Fuster Rabés.- Vicepresidente: Don Enrique Cirizi Delgado.- Consejeros: Don Juan Amorós Plá.- Don Alberto Conejos Badia.- Don Jorge Maluquer Bonet.- Don Miguel Esquirol y Clavero.- Don Jaime Vialta Gonsálies.- Don José Luis Virós Galdier.- Secretario: Don José María Puig Salellas.- Consejero-Delegado: Don José Epar Tico.

Capital Social: 1.000.000 de pesetas. Cuentas de participación emitidas: 60.000.000 de pesetas. Desembolsadas: 43.500.000 pesetas.

Título de la publicación: "AVUI".

Lugar de aparición: Barcelona.

Periodicidad: Diaria.

Formato: 33 x 47 cms.

Número de páginas: De 32 a 40.

Precio: 8 y 10 pesetas.

Ejemplares de tirada: 40.000.

Objeto, finalidad y principios que inspiran la publicación:

Publicar un diario de información general en lengua catalana, para facilitar su lectura a las personas que la hablan habitualmente y posibilitar la adaptación del lenguaje a las exigencias de la época actual, basándose en los principios de amor a la verdad, que implica objetividad en la información y amor a la lengua catalana como parte del acervo cultural común. Comprenderá los temas de: Información General.

Director: Don José María Cadena Catalán.- R.O.P. número 3.238.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN JURIDICO DE LA PRENSA,

Madrid, 23 de diciembre de 1975

ANEXO IX: Informes sobre PRISA

EMPRESA: PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA)

PUBLICACION: DIARIO "EL PAIS"

2 de Junio de 1972.— La sociedad PROMOTORA DE INFORMACIONES, S. A., (PRISA), solicita su inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas, para la edición de un diario titulado "EL PAIS".

La sociedad PRISA se constituyó mediante escritura pública de fecha 18 de enero de 1.972, con un capital inicial de 500.000 ptas; en mayo de 1.972 se amplió a 15.000.000 ptas. y, por último, en enero de 1.973 se realizó una nueva ampliación de capital con lo cual en la actualidad se cifra en 150.000.000 ptas. dividido en 1.500 acciones de un valor nominal de 100.000 ptas. cada una, totalmente suscrito y desembolsado.

Figuran como fundadores de la sociedad: D. José Ortega Spottorno, D. Carlos Mendo Baos, D. Juan José de Carlos Aparicio, D. Román Jordán de Urríes y Martínez de Galinsonga y D. Darío Valcárcel Lezcano.

Los principios ideológicos que inspiran la publicación periódica "EL PAIS" son los siguientes: "La norma jurídica y las ideas de justicia y equidad serán directrices fundamentales que presidan la actuación informativa basada en los postulados de veracidad y profundidad, respeto a la libertad y dignidad humanas, fomento de la convivencia entre todos los españoles, defensa de la plena integración de España y Europa, exaltación de las virtudes patrias, de los valores cívicos y de la cultura y oposición a todo extremismo excluyente".

Redacción: Director: D. Carlos Mendo Baos; Subdirector: D. Darío Valcárcel Lezcano; la plantilla de redactores estará compuesta por 26 personas, distribuidas de la siguiente forma: un redactor-jefe, 3 redactores de información internacional, 4 redactores de información nacional, 4 redactores de información general, 2 editorialistas, 2 redactores de informaciones económicas, 2 redactores de deportes, 3 confeccionadores, 1 redactor de colaboraciones, 2 documentalistas y 2 redactores gráficos.

28 de Julio de 1972.— La Dirección General de Prensa, por oficio de esa misma fecha, interesa la cumplimentación de determinados requisitos para poder seguir la tramitación del expediente.

4 de mayo de 1973.— La empresa PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., da cumplimiento al escrito de la Dirección General de Prensa de fecha 28 de julio de 1972, cumplimentando los requisitos y datos que se le habían solicitado, entre los que se encuentran los siguientes: cambio de domicilio a la calle Núñez de Balboa nº 45;

documentación relativa al título o cabecera; certificación relativa a "Financiera del Eume, S.A.", accionista de la empresa; precisión sobre los fundadores de la sociedad y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración; manifestación sobre el momento en que se facilitarán al Ministerio los nombres y apellidos de la plantilla fija del diario.

23 de agosto de 1973.— La empresa comunica a la Dirección General de Prensa la modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que el Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de 3 Consejeros y un máximo de 21, comunicando asimismo el nombramiento de 16 miembros del Consejo de Administración.

23 de octubre de 1973.— PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., comunica la dimisión presentada por el hasta entonces Consejero Delegado D. Carlos Mendo Baos y la sustitución del cargo de Consejero-delegado por un Comité Ejecutivo, compuesto por D. José Ortega Spotorno, D. Jesús de Polanco Gutiérrez y D. Darío Valcárcel Lezcano; asimismo comunica el nombramiento de Director General a favor de D. José Ortega Spotorno.

7 de julio de 1973.— La Dirección General de Prensa solicita del Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad su autorizado parecer sobre si la cifra desembolsada por los accionistas de "PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., (alrededor de 40.000.000 ptas.) resulta suficiente en relación con el proyecto empresarial que dicha sociedad mercantil se propone llevar a cabo.

12 de enero de 1974.— El citado Sindicato Nacional remite informe en el que considera que "en base a los datos que se aportan y a los obrantes en este Sindicato no parece deducirse racionalmente que la publicación vaya a ser utilizada para producir los resultados que previene el artículo 5º en relación con el 29, de la Ley de Prensa e Imprenta, ni que la empresa vaya a dejar de cumplir sus obligaciones laborales.

25 de febrero de 1974.— PROMOTORA DE INFORMACIONES S. A., comunica diversas transmisiones de acciones entre sus accionistas.

10 de junio de 1974.— La Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, mediante oficio de esta fecha, interesa de PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A., que, por razones de ordenación administrativa y de actualización del expediente de inscripción, "conocer los cambios o modificaciones experimentados por esa sociedad mercantil en relación con los datos y documentos aportados hasta la fecha al Registro de Empresas Periodísticas, y en particular en lo que se refiere a los elementos patrimoniales y al plan financiero".

12 de junio de 1974.— La Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, a la vista de la, a su juicio, imprecisión y vaguedad de la respuesta emitida por el Sindicato Nacional reitera, mediante oficio de esta fecha, informe

más preciso por parte de dicho Sindicato, acerca de las mínimas condiciones económicas y de financiación que debe presentar una empresa periodística constituida como Sociedad Anónima, para evitar en capitales como Madrid y Barcelona un diario de información nacional con terreno, edificio y talleres propios.

27 de junio de 1974.— Por don José Ortega Spottorno, Presidente del Consejo de Administración de PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A., se dirige escrito al Ministro del Departamento de Accionistas, "de rogarle respetuosamente la activación del procedimiento de inscripción, incomprensiblemente demorado hasta ahora".

28 de junio de 1974.— Por PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A., se da contestación al escrito de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa de 10 de junio de 1974, comunicando que se ha realizado el desembolso del segundo dividendo pasivo correspondiente a la última ampliación de capital, así como que el plan financiero no ha sufrido variación y que, por lo que respecta a los elementos patrimoniales, se ha adquirido y pagado una rotativa por un valor de 21.700.019 ptas. y pagado parte de la obra de estructura del edificio, por un total de 6.667.895 ptas.

3 de julio de 1974.— La Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, reitera del Sindicato Nacional de la Información su autorizado parecer sobre la viabilidad de la empresa periodística PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A., y su suficiencia financiera en relación con el proyecto editorial de la citada entidad.

27 de julio de 1974.— El Presidente del Sindicato Nacional de la Información, manifiesta que no existe discrepancia alguna entre lo solicitado por la Dirección General y el informe emitido, en su día, por dicho Sindicato, por lo cual, y a título de definitiva respuesta, da por reproducido su referido escrito de 12 de enero del mismo año.

31 de diciembre de 1974.— PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. comunica diversas transmisiones de acciones entre sus accionistas.

21 de enero de 1975.— PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. comunica que se ha acordado el desembolso del tercer y último dividendo pasivo, en virtud del cual el capital suscrito y desembolsado de la sociedad se eleva a 150.000.000 ptas.

28 de enero de 1975.— PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. comunica el nombramiento, con carácter provisional, de D. Antonio Menchaca Careaga como Consejero de la sociedad.

11 de febrero de 1975.— PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. comunica la reelección y aceptación de cargos del Consejo de Administración de dicha sociedad y la prórroga del plazo de desembolso de dividendos pasivos.

6 de marzo de 1975..- De acuerdo con lo exigido por la vigente Ley de Prensa e Imprenta, ya la vista de la documentación aportada por la empresa solicitante, el expediente de inscripción se encuentra ultimado y pendiente de su envío al Boletín Oficial del Estado para cumplimentar el trámite de información pública por un plazo de 15 días hábiles.

Se adjunta:

- Consejo de Administración
- Accionistas mayoritarios
- Relación de accionistas
- Junta de Fundadores
- Comité ejecutivo.

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
=====

DIARIO "EL PAIS"
=====

CONSEJO DE ADMINISTRACION:

Presidente:

D. José Ortega Spottorno

Vocales:

D. Carlos Mendo Baos
D. Ramón Jordán de Urries y Martínez de
Galinsoga.
D. Juan José de Carlos Aparicio.
D. Joaquín Muñoz Peirats.
D. Fernando Pérez Minguez
D. Manuel Milián Mestre.
D. Miguel Ortega Spottorno
D. José Vergara Doncel.
D. Arturo Carpintero López
D. Alvaro Noguera Jiménez.
D. Javier de Lorenzo Martínez
D. Francisco Giménez Torres.
D. Julián Marias Aguilera
D. Ramón Tamames Gómez
D. Alfonso de Ossio Corral.
D. Antonio de Senillosa Cros.
D. Jesús de Polanco Utiérrez.
D. Sebastián Carpi Vilar.
D. Antonio Menchaca Careaga.

Secretario:

D. Darío Valcárcel Lezcano.

COMITE EJECUTIVO:

D. José Ortega Spottorno.
D. Jesús de Polanco Utiérrez.
D. Darío Valcárcel Lezcano.

EMPRESA: "PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.(PRISA)"
 =====

Diario "EL PAIS"

1.500 acciones de 100.000 Ptas valor nominal de cada una

ACCIONISTAS MAYORITARIOS

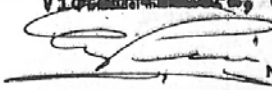
ORTEGA SPOTTORNO, JOSE	79 acciones
MENDO BAOS, CARLOS	39 "
JORDAN DE URRIOS Y MTNEZ DE GALINSOGA . .	43 "
VALCARCEL LEZCANO, D.	62 "
MILIAN MESTRE, M.	60 "
ARECES RODRIGUEZ, R.	50 "
RAMIREZ GUEDES, J.	50 "
SANCHEZ LUIS, L.	49 "
BRAVO NIEVES, M.	38 "
HIDALGO SCHNUR, D.	30 "
NOGUERA JIMENEZ, A.	30 "
RIBES SANTOS, F.	30 "

oooooooooooooooo

ANEXO X: Informes sobre Diario Nivel

D. N. I. n° 2166156
 Expedido en MADRID
 provincia de el día 201-11
 Categoría 20 MAY. VABON
 Reg. 162-16 MAY. VABON
 Impresión digital




Garofa	Apellido 1.º
Peri	Apellido 2.º
Julio	
Nació el 23 de octubre de 1935	
en Valladolid	
id.	
prov. de Olimpia	
hijo de Julia	
y de Médico	E. civil
profesión	
Madrid	
domicilio	
Vietnam, 63	
	N.º 34

ds/

Asunto: JULIO GARCIA PERI

Las gestiones realizadas, sobre el epigrafiado, a fin de dar cumplimiento a lo interesado en el dispositivo procedente de la Jefatura del Servicio, de fecha -- 16-12-69, han permitido conocer lo siguiente:

Que se trata de JULIO GARCIA PERI, nacido el 23-10-1935 en Valladolid, casado, médico, hijo de Olimpio y - Julia, domiciliado en esta Capital calle de Victor Pradera nº 63-3º, Tel.2.48.65.42.

Está en posesión de D.N.I. nº 2.161.156, expedido en Madrid el 26-5-1966, y de pasaporte nº 78676, expedido por la Dirección General de Seguridad en Madrid, figurando como última renovación de dicho documento, la - de fecha 2-11-68.

El epigrafiado, reside en el domicilio que se indica de Victor Pradera 63-3º, desde hace unos ocho ó nueve años, en compañía de su esposa y de una hija habida del matrimonio.

De la discreta información practicada en la casa en que habita, se desprende que es persona que goza de excelente reputación entre sus convecinos.

Tiene establecida en su propio domicilio consulta como Médico Ginecólogo, los lunes, miercoles y viernes.

En el transcurso de las gestiones realizadas, se ha podido comprobar que el epigrafiado, es persona que goza de una posición económica desahogada, como lo demuestran los siguientes datos referidos a su patrimonio:

9-12-1966.....	Instalación Administrativa en Oficinas de la c/ Mayor 32.....	
.....	200.000
Fondo Editorial.....	280.000
42% de Acciones en Empresa Artes--		
Gráficas F.M.S.A.....	8.000.000
		<u>8.480.000 Pts</u>

Patrimonio en 24 de mayo 1969.

83,995% de acciones de Artes Gráficas F.M.S.A.....	62.759.000
Saldo Acreedor Banco de Vizcaya.....	1.668.525,23
Saldo Acreedor Banco Español de Crédito.....	773.259,87
Saldo Acreedor Banco Hispano Americano.....	152.908,32
	<u>65.353.693,42 Pts</u>

Consultados los Archivos del Registro de la Propiedad Mercantil, se ha podido comprobar que en los mismos, figura inscrita con la denominación de "ARTES GRAFICAS F.M.S.A. ésta entidad, la cual, fué escriturada el 18-2-1967 y constituida por JULIO GARCIA PERI, ADOLFO ALVAREZ CASADO, BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ y GUSTAVO ALVAREZ EGUIZABAL.

-3-

Su capital social es de 20.000.000 pts representado por 20.000 acciones de mil pesetas nominales cada una, - de las cuales el Sr Alvarez Casado, suscribió 3.199 acciones; Garcia Peri, 16.799 y Hernández Rodríguez y Alvarez de Eguizabal una cada uno.

El consejo de Administración de ésta sociedad es el siguiente:

Presidente. JULIO GARCIA PERI

Vice-Presidente. ADOLFO ALVAREZ CASADO

Secretario. BENITO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Tesorero. GUSTAVO ALVAREZ EGUIZABAL

Figura asimismo como Consejero Delegado de la Sociedad JULIO GARCIA PERI.

Es de hacer constar, que todos los datos que hacen referencia a "ARTES GRAFICAS F.M.S.A." son reflejo de -- los que de tal entidad existen en el Registro de la Propiedad Mercantil de Madrid; ampliadas gestiones en la -- Sección de Estadística Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, se ha podido comprobar, que el último Padrón, que hace referencia al año 1965, figura un local dedicado a Imprenta, con el nombre de "FICHEROS MEDICOS. S.A." ocupando ésta sociedad dicho local en concepto de alquiler desde el año 1964, figurando como Gerente de ésta Sociedad JULIO GARCIA PERI, todo ello referido a la calle de Sánchez Pacheco 83.

Como quiera que en el anuario telefónico y en la calle de Sánchez Pacheco 83, figura "EDITORIAL GREDOS", con números 415-7408 y 4156836 y asimismo figura reseñado --

GARCIA PERI J. con número 4155858 y por si pudiera existir algún punto de contacto entre el citado Garcia Peri y Editorial Gredos, se han realizado gestiones en este sentido, descartandose ésta posibilidad, ya que al menos en el Registro de la Propiedad Mercantil, no figura Oficialmente que Garcia Peri, sea miembro de la misma.

Por lo que respecta al domicilio de la calle Mayor, 32, y por gestiones realizadas igualmente en la Sección de Estadística del Ayuntamiento, se ha podido comprobar que en dicho edificio, existe un local dedicado a Clínica Médica, con la denominación de "CLINICA MAYOR. SERVICIOS MEDICOS PERMANENTES. URGENCIA CENTRAL SANITARIA. - S.A. "CENSA".

En el transcurso de las gestiones realizadas para la practica de la presente información, se ha tenido conocimiento, de que a nombre de JULIO GARCIA PERI y por él solicitadas, figuran inscritas en el Registro Oficial correspondiente del Ministerio de Información y Turismo, varias publicaciones periódicas, teniendo pendiente de aprobación por éste Organismo, e igualmente por él solicitada, una nueva publicación cuyas características son las siguientes:

TITULO: "NIVEL"

Objeto y finalidad: Información General objetiva, - inspirada en los principios de un servicio permanente a la verdad y a los intereses Nacionales.

-5-

Temas que comprende: Información general.

Periodicidad: Diaria.

Lugar de aparición: Madrid.

Fecha en que se pondrá a la venta: Todos los días -
excepto los lunes.

Formato: Ventisiete por treinta y dos centímetros.

Número de páginas: De veinticuatro a cuarenta y ocho.

Tipo de impresión: Tipografía. Aceptará publicidad.

Precio de venta de cada ejemplar: Tres pesetas y cua-
tro los domingos.

Ejemplares de tirada: Setenta mil.

Imprenta: Artes Gráficas F.M.S.A. Sánchez Pacheco 83.

Nombre del Director de la Imprenta: JULIO GARCIA PE-
RI.

Director de la publicación: MANUEL MARTIN FERRAND, -
inscrito en el Registro Oficial de Periodista con el nº -
5.586, persona sobradamente conocida en los medios perio-
dísticos y por sus colaboraciones en Televisión Española,
siendo su sustituto en la Dirección del citado Diario ---
D^a ROSALIA GONZALEZ DE HARO, inscrita en el Registro Ofi-
cial de Periodistas con el nº 3646.

El cuadro de redacción del periodico "NIVEL", es el
siguiente:

JOSE JOAQUIN IRIARTE ARLABAN.- R.O.P. 4447.

JESÚS FRAGA AMADO.- R.O.P. 1848

BASILIO ROGADO ADALIA.- R.O.P. 3616

JUAN HERNANDEZ SAMPELAYO.- R.O.P. 4454

JOSE JULIAN BARRIGA BRAVO.-ROP 4454

Figurando como colaboradores:

MANUEL WOVES LOPEZ.

RAMIRO GAVILANES GRANJA.

JOSE GONZALE Z FRENCOS.

JESUS TORREJIMENO GARCIA.

Si bien éste es el cuadro oficial de redactores y colaboradores que figuran en la petición formulada en el Ministerio de Información y Turismo, de forma confidencial se ha tenido conocimiento, de que es intención de JULIO GARCIA PERI, el incorporar a dicho diario, a uno o dos periodistas, de los que por el momento se desconoce su identidad, que ejercieron su actividad profesional en Las Palmas de Gran Canaria y que en su día fueron sancionados por el Ministerio, por manifestar ostentosamente sus discrepancias y tendencias contrarias al Régimen.

Igualmente se ha tenido conocimiento, de que JULIO GARCIA PERI, tiene relación y contactos con CLEMENTE AUGER, Juez de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial, del que no existen datos ni referencia alguna en los archivos consultados y tiene al parecer, también relación con el Profesor JIMENEZ DE PARGA.

Continuando gestiones, se ha podido comprobar, que, - SEBASTIAN AUGER DURO, nacido en Barcelona el 4-XI-1937, casado, hijo de Sebastián y María Dolores, Abogado y Teniente de Complemento de Infantería de Marina, del que igualmente se carece de referencias, al parecer hermano del anterior, la tra-

-7-

mitación de sus asuntos profesionales en Madrid, los realiza en el Bufete sito en la calle de Bárbara de Braganza nº 4, despacho de GREGORIO PECES-BARBA, persona de sobra conocida por sus tendencias y actividades.

A-simismo, a SEBASTIAN AUGER DURO, se le señala, como perteneciente al Consejo de A-dministración de la Revista - "MUNDO NUEVO DE BARCELONA", la que ha sido sancionada en varias ocasiones por el Ministerio de Información y Turismo, por infracciones de la vigente Ley de Prensa.

Se continúan las gestiones de las que se dará cuenta - oportunamente.

Madrid, 24 de Diciembre de 1969

ANEXO XI: Intervención de Pío Cabanillas en Comisión de Información de Cortes del 20 de enero de 1966 sobre capital extranjero en prensa

~~97/9~~

EL SEÑOR CABANILLAS: Voy a referirme al término de ardorosa ingenuidad que ha utilizado el señor Villegas en su intervención.

Estamos en presencia de un esquema de sociedad anónima. ^{Se} ~~De~~

¹⁴
artículo aprobado y el que se va a aprobar, son una ardorosa ingenuidad sobre el pretendido intento de ^{definir} ~~delimitar~~ lo que puede llamarse una tradición legislativa, que es el esquema de la ^{revisión} ~~Sociedad~~ sociedad anónima.

El esquema está en eso, en que la empresa per i odística, desgraciadamente, tiene que estar encuadrada como sociedad anónima, pero no se parece en absoluto al esquema de una sociedad anónima.

~~87/5~~

Creo que no se puede presumir tanta ingenuidad en los re-
dactores del proyecto de ley.

El tratamiento del problema de la participación de capital

18

extranjero es una constante universal, de modo que se puede decir
que no hay ~~ninguna~~ legislación en el mundo, ni siquiera la norteamer-
ricana, que admita libremente la participación de capital extranjero
en la prensa, por la trascendencia del fenómeno informativo: ~~es decir~~

El fenómeno informativo es algo muy distinto de un simple producto
material, concreto y determinado: No se ~~trata de producir~~ ^{producen} bicicletas,
se ~~trata~~ produce la posibilidad de influir en la opinión pública del

ANEXO XII: Intervención de Pío Cabanillas en Comisión de Información de Cortes del 20
de enero de 1966 sobre artículo 20 LPI

116

~~se re~~

Lo que se intenta a todo lo largo de la ley es que no se pueda camuflar la titularidad del capital. Esa es la finalidad fundamental, que haya una publicidad, porque el público tiene derecho a saber quiénes son las personas que le dan la mercancía de contenido ideológico que un periódico significa. Es un derecho que acaba de reconocer la Constitución italiana y que adquiere aceptación universal. No se puede camuflar el montaje financiero de los periódicos por la mercancía que expiden. Por esto se ha exigido que las acciones sean nominativas y, evitando caer en el truco de hacer socios a las sociedades, se les exige, cuando este supuesto se produzca, que sus acciones sean ~~nominativas~~ nominativas. No hay,

117

~~96-11~~

pues, inconveniente, en montar esquemas en cadena. Las sociedades que estén dentro de esos requisitos, pueden formar parte de la cadena sin el menor temor.

EL SR. MARTIN ARTAJO (D. Javier): Es que se exige que sean personas físicas y dentro de una empresa periódística puede haber personas no físicas que tengan acciones nominativas.

EL SR. CABANILLAS: Si se trata de una sociedad que tiene acciones nominativas como socios y que quiere unirse a una sociedad ~~perio-~~ periódística, es perfectamente posible.

EL SR. MARTIN ARTAJO: Para poder ser socio una sociedad tiene que

ANEXO XIII: Documentos Publicidad redaccional



DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO

174270 DIC 21-70

REGISTRO GENERAL
ENTRADA

De:

P R E N S A

Ciudad,
fecha
y ref.º

C á c e r e s , a 15 de Diciembre de 1970, E/M

715 de

Ilmo. Señor:

Para la resolución que proceda adjunto tengo el honor de elevar a V.I. instancia suscrita por Don -- JUAN FERNANDEZ DEL RIO, en calidad de Administrador, de la EDITORIAL EXTREMADURA, S.A., editora ésta del diario "EXTREMADURA", por la que solicita se conceda al diario mencionado la publicidad de interés social que por V.I. se estime conveniente a partir de Octubre último, acompañándose al propio tiempo anexo relativo a la pérdida que le ha supuesto la supresión de la compensación en el precio del papel-prensa, -- tarifas de publicidad que viene aplicando el diario que nos ocupa, así como dos cuadernillos conteniendo recortes de prensa, relativo a las últimas Elecciones uno, y otro a trabajos o sueltos publicados durante los meses de Agosto y Septiembre últimos y para los cuales solicita la publicidad de interés go--cál, permitiéndome manifestarle, sobre la meteria -- que nos ocupa, lo que sigue:

El diario "Extremadura", con una tirada que oscila entre 4.500 y 5.000 ejemplares ha resultado --- siempre deficitario, ya que el único capítulo que hubiera podido compensarle, el de la publicidad, es es caso como corresponde a una provincia cuya economía descansa principalmente en el sector primario, descapitalizado y con medios de explotación anticuados. -- Ello unido a la supresión de la compensación del papel prensa le ha creado una situación difícil de salvar con medios propios.

Por otra parte, el diario "Extremadura" tiene -- un arraigo en esta provincia de indudable importan--cia, a tono con el carácter conservador del pueblo -- cacereño sobre el que, desde luego, viene ejerciendo una acción formativa o de ambientación e informativa dentro de los recursos de que dispone.

Se trata de la única publicación diaria de la -- provincia cuya existencia se considera conveniente --

.../...

A:



DELEGACION PROVINCIAL
DEL
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

2ª hoja.-

De:

Ciudad,
fecha
y ref.ª

, a de de /

.../...

mantener, dada su probada trayectoria de incondicional adhesión al Régimen y acatamiento a cuantas indicaciones le han sido formuladas por esta Delegación Provincial, ya que su posible vacación, de producirse, podría ser cubierto por otra publicación de insospechadas características.

Por todo lo anteriormente expuesto el Delegado informante se pronuncia por la favorable aprobación de la solicitud que nos ocupa, a partir de la fecha que ese Centro Directivo considere oportuno

No obstante V.I. con su Superior criterio resolverá.

Dios guarde a V.I. muchos años
EL DELEGADO PROVINCIAL,



Felipe Munuera

- Felipe Munuera -

A:

Ilmo. Sr. Director General de Prensa.
Servicio de Ordenación.-

M A D R I D

PUEBLO

DIARIO DE LA NOCHE

Independientemente de su servicio a la Organización Sindical, por causas obvias, PUEBLO mantiene una línea de información y servicio a las grandes obras sociales del Régimen que fácilmente puede apreciarse tanto en el tratamiento de la información como en su postura ante cualquier hecho.

Además, y como puede verificarse en los recortes que se acompañan, publica una serie de artículos editoriales, reportajes, entrevistas, encuestas, etc., que son verdaderos prototipos de lo que se quiere que sea la publicidad redaccional.

En las colecciones de recortes a que nos referimos, puede comprobarse que en esa concepción de lo que debe ser la publicidad redaccional, se tratan todos los temas: economía, turismo, obras públicas, sanidad, deportes, política, etc., en la forma, honradez y estilo para que según el lector que interesa o el momento en que se produce, obtengan la mayor audiencia posible.

Y, lo que es más importante una publicidad redaccional publicada al hilo de la actualidad tanto para crear un estado de opinión favorable como para desvirtuar otros negativos producidos por mil causas que no hacen al caso.

En los centenares de trabajos que se presentan, entre los miles que PUEBLO ha publicado dentro de la política editorial apuntada, se puede apreciar una auténtica selección de material propio de la redacción, ya que no se ha tenido en cuenta aquel otro, igualmente publicado, que responde a pura información, y que por su tratamiento, presentación y jerarquización dentro del total del periódico, también podría considerarse si no como publicidad redaccional específica, si como creadora de una opinión o información, cuando menos, totalmente positiva a la política desarrollada por el Gobierno.

Es por ello que desaparecida la subvención por compensación de precio de papel; siendo insuficiente el aumento de una peseta por ejemplar en el precio de venta del periódico al público; y estacionados y hasta reducidos, los ingresos por publicidad, en función de una situación económica general, roga-

./...

PUEBLO

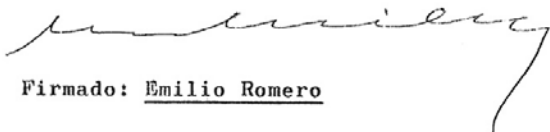
DIARIO DE LA NOCHE

mos sea tarifada esta información que adjuntamos como publicidad redaccional.

Si por cualquier circunstancia ello no fuera posible nos veríamos obligados en el año - próximo a reducir páginas, y hacer una selección de originales más en consonancia con la demanda de la opinión pública.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 26 de octubre de 1970



Firmado: Emilio Romero

ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA.

MADRID.-

VALORACION DE LA PUBLICIDAD REDACCIONAL
PUBLICADA DURANTE LOS MESES TRANSCURRI-
DOS DEL PRESENTE AÑO.

La tarifa aplicada al material que se acompaña
ha sido la vigente en el momento de insertarse la --
misma, de acuerdo con el epigrafe "informaciones y -
reportajes", y cuyo detalle de valoración, por meses,
es el siguiente:

<u>M E S E S</u>	<u>P E S E T A S</u>
Enero	3.433.738,80
Febrero	1.439.524,80
Marzo	3.038.380,--
Abril	2.729.969,--
Mayo	3.615.096,--
Junio	3.177.290,--
Julio	2.236.605,--
Agosto	2.758.280,--
Septiembre	1.893.150,--
Octubre (hasta el día 22)	2.021.105,--

T O T A L	26.343.138,60

=====

AREA

La Línea de la Concepción
DIRECTOR-GERENTE.

TELFS. Dirección 76 14 78
Administración 76 14 76
Redacción 76 14 77

Diario del Campo de Gibraltar
14 de Octubre de 1.970.-

Ilmo. Sr. DON ALEJANDRO FERNANDEZ SORDO.-
Director General de Prensa.-
Ministerio de Información y Turismo.-
MADRID.-

Luis F. Fernandez

A

Mi distinguido y respetado Director General:

~~Dentro de unos días quedará instalado en nuestros talleres un sistema de composición IBM, que teníamos comprometido con dicha firma desde hace algún tiempo.~~

Este sistema de composición como Vd. sabe no precisa mano de obra especializada cada vez más difícil de encontrar y por otro lado damos cabida a la abundante mano de obra local.

Me permito acompañarle una fotocopia de la factura Proforma a cuyo importe tendremos que hacerle frente, esperando encontrar el apoyo económico de esa Dirección General para que AREA pueda realizar su desarrollo y contar con medios técnicos para la edición de esta publicación.

Desde hace varios meses estamos haciendo frente y abonamos el importe de la factura de la Agencia Efe, S.A., pues caso contrario suprimían dicho servicio por no haber recibido la mencionada Agencia instrucciones de continuar suministrandome el mismo por cuenta de ese Ministerio.

Quiero poner en su conocimiento que hace unos años, el entonces General Gobernador Militar del Campo de Gibraltar don Emilio de la Guardia Ruiz, solicito mi conformidad para contar con AREA como órgano oficioso del Gobierno, como tal se ha contado y se sigue contando.

Siempre esta publicación ha sacrificado todo cuanto ha hecho falta en beneficio de los intereses de España y siempre hemos visto antes la repercusión que una noticia pueda tener incluso dentro del Peñon, que como Vd. sabe lee AREA. Recientemente con bastante antelación conocíamos la visita del Ministro de Trabajo al Campo de Gibraltar, como quiera que los problemas laborales de extrabajadores de Gibraltar no han quedado resueltos, decidí no dar la noticia con el fin de que algunos grupos no pudieran planificar cualquier tipo de protesta que le quitara brillantez a la visita. AREA publicó la noticia de la visita del Sr. Ministro con posterioridad al haber sido publicada en toda la Prensa Nacional.

Quiero reiterarle que me tiene a su entera disposición y aprovecho esta oportunidad para saludarle muy atentamente con todo respeto.

Antonio Gomez Rubio

ANTONIO GOMEZ RUBIO.

Dirección, Redacción, Administración y Talleres: GIBRALTAR. 27 - 31 • APARTADO. 15



ILMO. SR.

526-555

Complaciendo sus deseos, adjuntamos la información que nos solicitan, así como una relación de los temas que sugerimos podrían cubrir los espacios publicitarios y las tarifas actualmente en vigor.

Esperamos de V.I. las observaciones que juzgue oportunas sobre el plan que exponemos, así como, el momento de su iniciación.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 29 de Julio de 1.970

MADRID, Diario de la Noche, S. A.
GERENTE

Wasquer

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRENSA
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO- M A D R I D

RELACION DE TEMAS QUE CUBRIRAN LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS

Serial sobre:

"España ante la invasión turística".

- 1.- Sus ciudades
- 2.- Sus costas
- 3.- Rutas turísticas
- 4.- Hoteles y albergues
- 5.- Fiestas típicas
- 6.- Gastronomía española

Serial sobre:

"En España es verano".

- 1.- Balance de un slogan famoso: "mantenga limpia España"
- 2.- Los bosques y su conservación
- 3.- Españoles al sol: playas, socorrismo, etc.
- 4.- Turismo social: ciudades residenciales, Educación y Descanso, etc.
- 5.- Cursos de verano en las Universidades españolas
- 6.- Seguridad del tráfico.

Serial sobre:

"España exporta calidad".

Seis capítulos analizando en profundidad la exportación española, hoy.

Serial sobre:

"Los deportes: una actividad en alza".

Seis capítulos en torno a: Atletismo, Tenis, Fútbol, Boxeo, Baloncesto: otras especialidades: motorismo, esquí acuático, montañismo, etc.

Serial de seis capítulos sobre:

"La artesanía española".

Serial de seis capítulos sobre:

"El cinturón industrial de Madrid".

Serial de seis capítulos sobre:

"La España de los españoles": garbanzos de Arévalo, judías del Barco, mantas de Palencia, naranjas de Valencia, etc. Varios reportajes sobre los productos que consumen los propios españoles.

NOTA.- Los citados temas ocuparán una superficie total de unas 31 páginas, que a base de 36.000,00 Ptas. de precio por página de reportaje, dan un total de 1.116.000,00 Ptas.

RESULTADOS EXPLOTACIONCIRCULACION(ingresos en unidades monetarias)

Junio 1969 3.734.348,49

Junio 1970 4.213.227,54

Incremento de ingresos por venta 478.879,05

CONSUMO DE PAPEL.-

Junio 1969; 218.588 Kgs. nacional a 11,30 ¢

54.646 Kgs. extranjero a 13,00.

Coste papel Junio 1969 3.180.442,20

Junio 1970: 198.348 Kgs. nacional a 14,16 ¢

49.588 extranjero a 13,88

Coste papel Junio 1970 3.496.889,12

Incremento de costes de papel 162.432,33

COMPENSACION.-

En 1969 percibimos 4.266.784,00 por este concepto.

Esta suma correspondía a OCHO MESES de consumo de

papel en 1968. Por consiguiente una mensualidad

de compensación cobrada en 1969 fue de ... 533.915,67

Incremento de ingresos por Circulación - Incremento de costes
de papel - Pérdida de compensación = 478.879,05 - 162.432,33 -
533.915,67.

Resultados deficitarios Junio = 370.915,67

Resultados deficitarios de tres meses = 1.112.747,01

NOTA ACLARATORIA.- Unicamente se estudian las incidencias producidas en los resultados por la variaciones habidas en el regimen del papel prensa, y por consiguiente no se han tenido en cuenta los aumentos - de de costes que se producirán con el nuevo Convenio Colectivo que - tenemos iniciado.



MINISTERIO
DE
INFORMACION Y TURISMO

De:

COPIA
DE
ARCHIVO

Fecha
y
ref.º

Subsecretaría	: 1	
Dirección General	: 2	P R E N S A
	: 3	
	: 4	
Servicio	: 5	
División	: 6	
Sección	: 7	
	: 8	

Madrid, a 6 de agosto de 1970 JLF/IS 473

Le comunico que ha sido aceptada la solicitud de esa Empresa periodística para la realización de una publicidad sobre temas de interés general, en el diario "MADRID", por un importe total de 526.555,- (QUINIENTAS VEINTI SEIS MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO) ptas.

Dicha cantidad se facturará de acuerdo con la tarifa oficial de la mencionada publicación periódica.

Asimismo, le notifico que esa empresa periodística puede, si lo desea, solicitar de inmediato a esta Dirección General un anticipo a cuenta del 75 % del importe total de la cantidad citada.

Una vez finalizada la campaña publicitaria, esa Empresa deberá presentar justificantes y facturas por el total de la cantidad concedida, solicitando al mismo tiempo el abono del 25 % restante.

No hay inconveniente alguno en ampliar a la Cruz Roja española el temario propuesto inicialmente.

Dios guarde a Vd. muchos años.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRENSA,

Sr. Gerente de "Madrid, diario de la noche, S.A."
General Pardiñas, 92

M A D R I D

A:

Mod. 704

ANEXO XIV: Documentos Fondos de reptiles

SDMO/mel



MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

Fecha: 26 de abril de 1971

N.º 942

De: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION CULTURAL
Y DEL LIBRO

A: ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE PRENSA

ASUNTO:

Siguiendo instrucciones del Ministro transmitidas por mi Director General te comunico que aquél desea que todos los asuntos relacionados con prensa sean despachados por vosotros. Me refiero concretamente a las subvenciones a algunas Embajadas que hasta ahora concedía la Dirección General de Cultura Popular con el fin de ayudar a ciertos periódicos extranjeros de particular interés por su benevolencia hacia España.

En estas circunstancias se hallan los casos siguientes:

1º A nuestro Embajador en Bélgica se venían enviando 35,000 ptas. para subvencionar la publicación del Boletín "News Exchange". Adjunto te remito fotocopias de las cartas del Embajador reclamando esta cantidad para 1971.

2º Asimismo a la Embajada en Oslo se remitían 200,000 ptas para el periódico "Aftenposten". También te remito fotocopia de la carta del Embajador.

3º A través de nuestra Embajada en Manila se subvencionaba el diario en lengua española "El Debate" con 723,350 ptas anuales. Esta cantidad no fue enviada el año pasado.

Si surgiese algún otro caso análogo te lo comunicaré. Con esta fecha escribimos a los Embajadores en Bruselas y Oslo que de estos asuntos pasa a hacerse cargo la Dirección General de Prensa.

Alejandro Muñoz Alonso

IMPORTANTE: Refiérase a un solo asunto.

Bruselas, 26 de marzo de 1971.

El Embajador de España

Ilmo. Señor.
Don Enrique Thomas de Carranza
Director General de Cultura Popular
y Espectáculos
Ministerio de Información y Turismo
M a d r i d

Miguel Ángel Carranza

Con fecha de hoy, escribo al señor Ministro de Información y Turismo trasladándole una carta personal que le dirige el Caballero L. de Kniazolucki, editor del Boletín "News Exchange" y dándole mi opinión personal sobre este asunto como me lo pides en tu carta del 25 de febrero. Adjunto te remito fotocopia de esta carta mía al señor Ministro. Como verás, ni se trata del todo de un acto informado por criterio benéficos, ni la Oficina de Información Diplomática deja de participar en este gasto. A la luz de los argumentos que someto a la consideración del señor Ministro, espero te será posible hacer el esfuerzo consistente en arbitrar esta cantidad de 35.000 pesetas por un año más.

Muy agradecido de antemano, te envía un fuerte abrazo

*tu amigo y compañero en
afecto*

Jaime ALBA

Jaime



Bruselas, 26 de marzo de 1971.

347/11

El Embajador de España

Excmo. Señor.
Don Alfredo Sanchez Bella
Ministro de Información y Turismo
M a d r i d . -

Mi querido Ministro y amigos!

Igual que el año pasado, se nos plantea este año el problema de la ayuda económica que el Ministerio de Información y Turismo viene concediendo a nuestro viejo amigo el Caballero L. de Kniazolucki, editor del Boletín "News Exchange", cuyas características conoces.

Te acompaño a este respecto la carta personal que éste te dirige con fecha 15 de marzo y que me ha rogado te trasladara apoyando su petición.

Lo hago con todo cariño, convencido de que el seguir ayudando con una cantidad relativamente modesta (puesto que, al fin y al cabo, sólo se trata de 35.000 pesetas anuales) a una persona que tantas pruebas ha dado de su incondicional afecto y de su eficacia en el terreno en el que se le utiliza, se merece este pequeño testimonio de agradecimiento que, además, le permite hacer frente a óbvias dificultades financieras derivadas en gran parte de la claridad y firmeza de sus posturas y también de su edad muy avanzada.

Thomas de Carranza, a cuyo presupuesto iba cargada esta ayuda en años anteriores, me pregunta si este gasto no corresponde en realidad a la Oficina de Información Diplomática. A este respecto, cabe recordar que precisa-

.../...

- 2 -



El Embajador de España

mente estas 35.000 pesetas constituyen un suplemento destinado a completar la ayuda que la O.I.D. le viene concediendo al Caballero de Kniazolucki y que fué rebajada hace unos años, por lo cual el Ministerio de Información y Turismo consintió a intervenir para compensarle en parte, esta pérdida. Como comprenderás, el que este dinero salga de "Cultura Popular" o de otra Dirección General es un problema cuya solución puede encontrarse según tu mejor criterio.

En cuanto a la utilidad para nosotros, de los servicios que nos sigue prestando el Caballero de Kniazolucki, me parece indiscutible y todas las explicaciones que te da en su carta reflejan, a mi juicio una perfecta verdad. A través de su Boletín, hemos difundido últimamente varias informaciones de gran peso específico, que a su vez han sido recogidas por alguno que otro rotativo importante. Además, esta manera de proceder nos permite en determinados casos cursar bajo la responsabilidad periodística del Caballero de Kniazolucki este tipo de informaciones a definidas personas y ámbitos ante los cuales no conviene dar la cara oficialmente.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que estamos ya a fines de marzo, te quedaría a mi vez muy agradecido si te fuera posible renovar para 1971 el crédito de 35.000 pesetas, en atención a los méritos pasados y presentes de este señor que, de antiguo, te tiene profundo afecto y gran admiración que, como sabes, comparto.

Manda

Jaime Alba

Jaime ALBA

M/Alba

1353/41

0-24-2

Oslo, 18 de Febrero de 1971.

Embajada de España

PERSONAL Y RESERVADO

Excmo. Señor

Don Enrique Thomas de Carranza
Director General de Cultura Popular
y Espectáculos
Ministerio de Información y Turismo
M a d r i d

Querido Enrique:

El dinero a que se refiere mi carta del 29 de Enero ppdo, y la tuya de 9 de este mes constituye en su mayor parte un fondo de reptiles. 120.000 pesetas (12.000 coronas) van a un editorialista del periódico menos contrario a nosotros y de más tirada del país, el "Aftenposten", que con una frecuencia satisfactoria presenta temas españoles en forma aceptable para nosotros y para este público. El resto se va en gratificaciones a la traductora de prensa (6.000 coronas) y a quién la sustituye en sus ausencias (1.020 coronas).

Las 1.000 coronas mensuales ya eran insuficientes si se tiene en cuenta que hace unos siete años cobraba 1.500 y la vida aquí ha subido según el índice oficial de 100 en el '68 a 120 en la actualidad. Un 20% de aumento en la subvención estaría plenamente justificada, sobre todo en este país en que los sueldos van automáticamente fijados a este índice y se revisan cada tres meses, salvo en estos días, pues en Noviembre se ordenó una congelación por seis meses para tratar de frenar la inflación.



Embajada de España

- 2 -

Tu verás lo que se puede hacer, pero
creo es de justicia y este hombre nos hace un buen
servicio y hay que procurar que no esté descontento
pues en la moral (i) está todo el valor de su
servicio.

Un abrazo,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan de las Bárcenas'.

Juan de las Bárcenas

*Executive Summary**Subject of Study*

The research object of *La política informativa tardofranquista. El modelo de control de la empresa periodística privada (1966-1975)* (*The Press Policy of late Francoism. The private press company control model*) is the press policy applied by Franco's Regime to private press companies publishing daily newspapers in Spain between 1966 and 1975. The thesis explores the legislative initiatives and administrative actions implemented by Franco's Regime during its last life decade, which were oriented to intervene in the company access to the press system, as well as its ownership, corporative governance and economic life.

Such formal object of investigation is inscribed in the most ample material object of the informational policy applied by Franco's Regime on the press. Policy which, up to this moment, has had its journalism censure mechanisms, regulation issuing and control extensively investigated so far. Nonetheless the published literature research reveals a certain gap over the general dictatorship actuation model in relation to private press companies. Most of the works that have dealt with this topic have done it partially, through the study of specific intervention cases on certain press companies. The state of the art shows, therefore, the adequacy of a research to deal systematically with the Regime's general intervention model for the private press companies.

By "press policy" the research means the set of legislative initiatives and administrative acts implemented by the State or any other entity in a certain period. The term "press company" is defined in accordance with the conception established during the late Francoism; that is, as "the organized set of editing and technical work, economical and material resources and commercial relations for the diffusion of information and ideas through newspaper edition" (Nieto, 1967: 41; 1973: 14).

The limitation of the object to private press companies publishing daily newspapers allows the empirical corpus to be reduced to seventy two companies. These privately owned newspapers were the only information sources not directly controlled by the State entities available for the Spanish citizens to be daily informed about national public issues.

Besides, the impossibility of covering the whole dictatorship years with the appropriate depth has determined the restriction of the period of study to the late Francoism, whose beginning is considered the moment of approval of the 1966 Press Law (Ley de Prensa de 1966), finalizing after the dictator's death, at the end of 1975. The choice of this period is based not only on the easier access to documentation and direct testimonies available, but also on the importance this decade has throughout the dictatorship and the subsequent phase of transition to democracy.

Hypothesis and Research Objectives

According to the central hypothesis, the Francoism would have designed and implemented, between 1966 and 1975, a specific control model for private press companies publishing daily newspapers, inscribed in the more general policy applied to Spanish press.

Such hypothesis arises from the conjunction of three premises:

- a. Contemporary dictatorships have tended to assume press control as a fundamental axis of their political program given their lack of legitimacy in relation to its origin and implementation.
- b. Franco dictatorship kept, during its four-decade life, a pertinacious mistrust towards the written press, founded on the belief of the destabilizing role it had played in Spain's history, the acknowledgement of its powerful influence on the public opinion and the discerned risk associated to its private ownership characteristic.
- c. The research of the press policy applied by the Francoism cannot be confined to the analysis of censorship, orders, sanctions and control of journalism activity, but must also unavoidably take care of the Regime's actuation towards private press companies, as they are an essential agent of the system.

The investigation has thus been accomplished with the main goal of defining the policy applied by the late Francoism to private press companies publishing daily newspapers; definition from which emerge the specific objectives that follow:

- i. clarification of the doctrinal statements that such policy is based on;
- ii. discovery of its *raison d'être* and purpose;
- iii. identification and analysis of the mechanisms and tools used for its execution;
- iv. investigation of the economic organisms and leaders on which its implementation depended;
- v. its insertion into the social and economic context designed and applied internally and externally and;
- vi. observation of its impact on the structure of the daily press system

Methodology

The achievement of these objectives has determined the adoption of an interdisciplinary methodology on which the historic, legal and structural analysis are combined and reconciled. The assumption of this perspective of study arises from a premise: the interdisciplinary methodology

choice is the most adequate for the study of such a heterogeneous field as the mass media and, in particular, the press policies appointed to regulate it.

The research is based, in this regard, on the press systems intelligence as a result of the agents and power networks that shape the society. This conception is consistent with the one supported by the political economy of communication, a realistic, inclusive, constitutive and critical discipline oriented to the study of “social relations, particularly power relations, that mutually constitute the production, distribution and consumption of resources” (Mosco, 2009: 48), mainly the communication resources.

The late Francoism press and information companies’ legislation study has been approached by means of legal analysis; the investigation has tackled not only the approved corpus but also the previous discussions and their doctrine-oriented process; besides the effective application, of course. Yet in this first phase, the analysis has been complemented with the historical study of the circumstances that surrounded the legislation statement, processing and approval. This historical approach shows itself as essential to explain the sense and orientation that the legal corpus implementation had during this period as well as for the analysis of all the administrative proceedings that complemented the legislative initiatives for the configuration of the late Francoism press policy.

The investigation has included also an analysis of the late Francoism private press structure, interpreted as the particular configuration of the whole system dynamics during that period. The relevance of the structural analysis is based on the consideration of the structure as a conditioning factor as well as consistent with the information policy applied by the Regime. Among the set of elements constituting the structure, the thesis has drawn attention to three basic aspects: the different companies and newspapers with their circulation; the concentration of the system understood in terms of property accumulation, of the horizontal integration of companies and newspapers, and of geographical concentration; and the level of cooption of the Spanish private press owners and editors by the Regime’s political and business elite (cooption estimated based on the links detected between private press companies governing bodies and the ones from the rest of Spanish firms as well as Francoism Parliament).

Naturally, given the object and period of study, legal as well as structural analysis eminently falls within an historical perspective, aimed at explaining the information policy applied by the Regime and its consequences on the press system structure in the political, economic and social context (internally as much as externally) that marked the dictatorship progression during its last decade.

Bibliography and Information sources

The investigation has made use of the primary and secondary sources that follow:

- i. For the study of the institutional basis and leaders in charge of the late Francoism informative press design and application biographies, EFE's Agency Historical Archive (AH EFE, in Spanish) and database (EFEData) have been handled. The corpus of the organizational arrangements that regularized the creation and functioning of the diverse administrative institutions in charge of press government has also been studied.
- ii. Concerning the study of the doctrinal foundations that influence the information policy of this period, the research is based on the "*Estatuto de Prensa de FET de las JONS*", the press-related work published by Cardinal Herrera Oria and Fernando Martín Sánchez Juliá, *Ecclesia* magazine editions, *ACN de P* bulletins that covered some conference cycles organized by the Association —with the aim of defining *ACN de P*'s opinion and doctrine, the *ACN de P*'s "*Borrador de un Proyecto de Estatuto de Prensa*", as well as the "*Anteproyecto de Ley de Bases de la Información*" that is filed at the Administration General Archive (AGA, in Spanish), and the three volumes of the literary work "*Textos de Doctrina de la Información*" published by the Minister Gabriel Arias Salgado.
- iii. Regarding the study of the structure of the private press system, the investigation sources are the circulation figures provided by the OJD and Alfonso Nieto —in his reference work "*La empresa periodística en España*" (1973), the property and corporate governance information sent by press companies to the Press Companies Register (REP, in Spanish) and filed at the AGA, as well as the hundreds of individual files about entrepreneurs written by the Register itself and kept also at the Administration General Archive, the Members of Parliament Archive Historical Index, the bibliographies and press clippings taken from AH EFE and EFEData database, and the following directories: Directors and CEO's Directory (DICODI, in Spanish) and Financial and Limited Companies Annual Directory (AFISAE, in Spanish).
- iv. The whole late Francoism rule of law in terms of press and press companies has been analyzed by means of legislation and Westlaw and Aranzadi jurisprudence repertoires. The elaboration process and reference legal framework processing, the Press Law of 1966, has been studied using the preliminary drafts and bills filed at the AGA and the Members of Parliament Archive as well as the reports about such drafts made up by the National Press Council, the Federation of Spanish Press Associations and the Institute of Political Studies. The processing phase at the Parliament has been studied through the analysis of the written amendments placed at the Parliament by the Information Commission members in charge of their modification and through the thousands of shorthand sheets that describe the discussions the Commission held before the approval of the law. Both sources of information can be found in the Members of Parliament Archive.

- v. The mechanisms and administrative actions carried out on press companies, have been analyzed based on the internal correspondence interchanged between the Press General Department and the Ministry of Information and Tourism's Provincial Delegations, and specially the documentation filed within the sixty individual records edited by press companies publishing daily newspapers that are part of the Press Companies Register, guarded by the Administration General Archive Presidency Section. Moreover, these references has been tested with the testimonies gathered through personal interviews with twenty five actors of the period, such as journalists, entrepreneurs, and administrative apparatus leaders of Francoism press governance.

Naturally, all this has been completed with the abundance of existent bibliography related with Francoism; Francoism press legislation; censorship, orders, sanctions and profession control; Francoism leaders as well as distinguished entrepreneurs and bankers; and, specially, about specific cases in which the dictatorship intervened directly on certain press companies.

Conclusions

The investigation has allowed it to confirm the initial hypotheses determining that the Regime applied, between 1966 and 1975, an information policy oriented to the propriety vigilance and control, management and economic situation of private press companies publishing daily newspapers.

It has been proved that the control model helped to reinforce the dictatorship's power to intervene on the system in three ways:

- a. guaranteeing the access and exit control of the system to the Administration, which also meant the right to decide who could and who couldn't publish daily newspapers in Spain during the period;
- b. consolidating its knowledge and intervention power on any of the shareholding transactions and changes of ownership produced in the system during the years of study;
- c. strengthening the coercion power over the companies whose actions and accounts where always at the mercy of the dictatorship's close examination and interference.

All this makes possible to conclude that during the late Francoism, the Regime combined a series of mechanisms as well as preventive and repressive actions, both regulated and not regulated, oriented to shape the press system based on the discretionary criteria of the Administration, to be informed about and control the ownership and governance of private press companies authorized to publish daily newspapers and to warranty the power of intervention on their accounts.

Such model, mainly inspired by the ACN de P, had an impact and was conditioned by a system structurally characterized for the large number of companies, exiguous Press circulation, geographical and ownership concentration and the close relationship between their CEO's and directors and the Regime's political and entrepreneurial power center.

Although the existence of a coherent press policy during the complete period can be inferred, the sense of its implementation experimented changes all along the decade based on factors such as the disposition, political program and membership group the titular of the Ministry of Information had, as well as, above all, the general context the dictatorship passed through in those years. Therefore, three different stages can be distinguished: a first triennium between 1966 and 1969, marked by Manuel Fraga's determination of safeguarding the recently approved Press Law; a second triennium between 1970 and 1973, characterized by the narrowing of the press system and generalized hardening of private companies control; and a last biennium of inexorable decline of the Regime's power of control.